

Informe Anual Circunstanciado

Tomo I

Situación de los derechos humanos en Guatemala

Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procurador de los Derechos Humanos



DIRECTORIO

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos

Licda. María Eugenia de Sierra
Procuradora Adjunta I

Licda. Dunia Tobar de Leal
Procuradora Adjunta II

Lic. Pedro Edmundo Asencio
Secretario General

12.02.01.14

G918 Guatemala. Procurador de los Derechos Humanos
Informe Anual Circunstanciado al Congreso de la República.
TOMO I. Situación de los derechos humanos en Guatemala
durante el 2009 / Procurador de los Derechos Humanos. --
Guatemala : PDH, 2009
310 p. ; 28 cm.

1. HISTORIA 2. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS 3. GUATEMALA 4. INFORME ANUAL I.t.

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

12 avenida 12-72, zona 1, Guatemala, Centro América
PBX: (502) 2424-1717
Denuncias 1555
www.pdh.org.gt

Impreso en los talleres de reproducción de materiales
de la institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
Tiraje de 1,000 ejemplares

INDICE

Presentación	7
Introducción	9
CAPÍTULO I	
Violaciones al derecho a la vida y la integridad física	27
1.1. La normativa y el fortalecimiento institucional	30
1.2. La violencia	31
1.2.1. Espiral creciente	38
1.2.2. Adolescencia, juventud y pandillas	45
1.2.3. Pilotos, ayudantes y pasajeros en el transporte público	48
1.2.4. Muerte violenta de adultos mayores	57
1.2.5. Muerte violenta de mujeres	61
1.2.5.1. Aplicación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer	70
1.2.6. Niñez y adolescencia víctima de violencia criminal	71
1.3. Violencia intrafamiliar	75
1.4. Menores víctimas de violencia sexual	80
1.5. Secuestros de niños y adolescentes	85
1.6. La tortura	89
1.6.1. La tortura en la muerte violenta	90
1.6.2. Sujetos responsables	92
1.7. Linchamientos	92
1.7.1. Juntas Locales de Seguridad (JLS)	98
1.8. La trata de personas en Guatemala	102
1.8.1. País de origen, tránsito y destino	103
1.9. Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia	106
CAPÍTULO II	
Los derechos económicos sociales y culturales	109
2.1. La pobreza y el contexto económico	111
2.2. La crisis económica y financiera internacional	112
2.3. Desempeño de la economía nacional	114
2.4. Ejecución presupuestaria, gasto social y derechos humanos	122
2.4.1. La complejidad de la recaudación tributaria	122
2.4.2. El gasto social de ministerios y secretarías	123
2.5. Derechos laborales: el derecho al trabajo	131
2.6. Derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional	135
2.7. Derecho a la educación	141
2.8. Derecho a la salud	151
2.9. Derecho a la seguridad y asistencia social	158
2.10. Derecho a una vivienda adecuada	164
2.11. Conflictividad agraria	175
2.12. Derecho a un ambiente sano	180
2.13. Derechos de los pueblos indígenas	196
2.14. Derecho a la cultura	199
2.15. Acceso a la información y derecho de expresión	204

CAPÍTULO III	
Sectores de población especialmente vulnerados en sus derechos	211
3.1. Derechos de la mujer	213
3.2. Derechos de la niñez y la adolescencia	216
3.3. Derechos de las personas con discapacidad y retos especiales	221
3.4. Derechos de las personas adultas mayores	227
3.5. Derechos vulnerados de la población que vive con VIH-SIDA	231
3.6. Derechos de las minorías sexuales	232
3.7. Derechos de la población detenida o reclusa	235
3.8. Derechos de la población migrante y desarraigada	237
3.8.1. Migrantes en tránsito por Guatemala	239
3.8.2. Migrantes guatemaltecos en Estados Unidos	241
CAPÍTULO IV	
La situación social y defensa de los derechos humanos	243
4.1. Situación de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia	246
4.1.1. Ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos	246
4.1.2. Periodistas	255
4.1.3. Operadores de justicia	258
4.2. La situación de los derechos humanos a través de su protección internacional	262
4.3. La justicia transicional y el derecho a la verdad	265
RECOMENDACIONES	271
ANEXOS	275
Anexo I: Estadísticas de la institución del Procurador de los Derechos Humanos	277
Anexo II: Estadísticas (enero a diciembre 2009)	278
Homicidios por municipio y por cada 100,000 habitantes	

Informe Anual Circunstanciado

Tomo I

Situación de los derechos humanos en Guatemala



presentado por el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procurador de los Derechos Humanos

Presentación

Cuando los Constituyentes de 1985 decidieron crear la figura del Procurador de los Derechos Humanos tuvieron en mente que éste debiese reunir entre sus cualidades sustantivas la capacidad de apreciar con objetividad la situación del país, desde una perspectiva de derechos humanos, y de convertirse en la conciencia crítica de la nación para decir, con responsabilidad pero sin limitaciones, su diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de las garantías individuales y colectivas definidas por la Constitución Política de la República de Guatemala.

Al desarrollar los postulados constitucionales relativos a la institución del Procurador de los Derechos Humanos en la ley específica, el Congreso de la República especificó que el Magistrado de Conciencia debería también informar circunstanciadamente sobre el trabajo desplegado frente a aquella situación diagnosticada.

En efecto, el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos señala que “el Procurador deberá presentar al Congreso de la República durante la segunda quincena del mes de enero de cada año, por conducto de la Comisión respectiva, informe circunstanciado de sus actividades y de la situación de los derechos humanos, durante el año anterior”.

De este modo, el informe anual que el Procurador de los Derechos Humanos debe rendir al Congreso de la República, y a través de él a la nación entera, se desdobra en dos informes referidos a dos aspectos de una misma realidad: la situación actual de los derechos humanos y los trabajos realizados para modificar positivamente esa situación.

El informe anual del Procurador de los Derechos Humanos se presenta, pues, en dos volúmenes: uno de ellos es el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala y el otro es el Informe circunstanciado de labores institucional.

Se trata, como ya se dijo, de documentos complementarios entre sí, cuya lectura cruzada puede resultar fructífera para quien tenga interés en hacer un ejercicio de comprensión integral de los asuntos relativos a los derechos humanos en Guatemala.

Téngase en cuenta que la acción del Procurador, ya sea como protector o promotor, es consustancial a la situación de los derechos humanos, si bien la responsabilidad en los avances o retrocesos en esta materia recae en el conjunto de la institucionalidad estatal.

No es casual, por ello, que el texto del informe de situación tenga como referencia (no exclusiva) las intervenciones institucionales y los casos conocidos directamente a través de las denuncias recibidas y expedientes iniciados por la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Dicho de otra manera, el conocimiento que el Procurador tiene de la situación de los derechos humanos es, de inicio, resultado de su contacto diario con la sociedad guatemalteca, con los problemas de las y los habitantes, quienes buscan a la institución para encontrar respuestas a un entorno marcado por el irrespeto a las garantías constitucionales, el abuso, la arbitrariedad, la injusticia, la desigualdad y la discriminación.

Es, pues, un conocimiento nacido de la práctica de la defensa y la promoción de los derechos humanos, que se sobrepone al riesgo del empirismo con el adecuado, oportuno y sistemático estudio de la realidad nacional, a cargo tanto de unidades especializadas, como de las y los funcionarios responsables de la atención a las personas que cotidianamente acuden a la institución en busca de apoyo.

El conocimiento de la situación de los derechos humanos nace también del contacto directo con los actores de los procesos sociales.

Nos referimos, fundamentalmente, a las y los ciudadanos, ya sea que actúen individual o colectivamente, espontánea u organizadamente; personas con sueños y aspiraciones legítimas, deseosas de vivir con tranquilidad y en las mejores condiciones posibles. Pero también hablamos de las y los funcionarios del Estado, quienes usualmente ocupan el lugar de los sindicatos de incurrir en violaciones a las garantías constitucionales.

Tampoco quedan excluidos, en la formación de este conocimiento, los actores internacionales, tanto aquellos radicados dentro del país, como quienes desde el extranjero realizan una observación permanente de la evolución de los acontecimientos nacionales y el grado de respeto de los derechos humanos en Guatemala.

A trece años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el informe anual del Procurador de los Derechos Humanos hace especial mención del papel de todos aquellos protagonistas de la vida social, política, económica y cultural comprometidos con la búsqueda de la paz y la reconciliación

La cultura de paz se constituye como eje primordial y transversal dentro del presente informe, con el cual el Procurador de los Derechos Humanos desea dejar constancia de su reconocimiento a quienes, muchas veces en el anonimato del trabajo diario, en especial en instituciones como la nuestra, hacen un aporte sustancial al esfuerzo por superar las secuelas, todavía muy fuertes, de la intolerancia, la violencia y la impunidad.

La finalidad es que el informe, a la vez que signifique reconocimiento a las iniciativas, acciones y actitudes loables y respetuosas de los derechos humanos, también sirva como oportunidad para la realización de un balance de lo hecho y de lo omitido, de los problemas que deben ser resueltos, de los logros y avances, para construir planes, propósitos y objetivos principalmente de reparación en cuanto a aquellos daños que hubieren sido causados y las garantías de no repetición.

El Procurador de los Derechos Humanos rinde ante el Congreso de la República este informe, pero también ante las y los habitantes del país, para que sirva como instrumento para la construcción de un mejor país, sin violencia e impunidad, un país en el que se pueda consolidar una cultura de paz, entendida ésta como un proceso de aprendizaje, lento y a veces doloroso pero insoslayable.

Con ese propósito está comprometida nuestra institución, que se reconoce protagonista en la edificación de una realidad nacional distinta. De eso da cuenta el informe anual, en cuyas líneas podrá apreciarse a una institución fuerte, formada por mujeres y hombres que llevan con orgullo el honroso título de defensoras y defensores de los derechos humanos. Ésa es la institución que mira de frente al futuro, dispuesta a encarar con hidalguía los desafíos con que llega la nueva década.

Al entregar al juicio crítico de las y los guatemaltecos los dos volúmenes que forman el informe anual del Procurador, confiamos en que su lectura atenta contagie a muchos de este espíritu de adhesión al sueño de una vida mejor, marcada por el signo de la fraternidad y la convivencia respetuosa de todas y todos, en un país forjado en la riqueza de su diversidad humana.

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos

Introducción



**Informe Anual Circunstanciado al honorable Congreso de la República de Guatemala,
presentado por el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procurado de los Derechos Humanos**

Informe de situación de los Derechos Humanos en Guatemala

Introducción

El informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala pretende abarcar y abordar de una manera objetiva y condensada, pero al mismo tiempo exhaustiva, los hechos relacionados con cada uno de los derechos humanos, tanto los económicos, sociales y culturales como los civiles y políticos y los derechos de tercera generación, teniendo siempre presente su interrelación e integralidad.

El orden en que se incluyen los capítulos y sus componentes no implica importancia jerárquica, sino pretende sencillamente ofrecer una presentación que ayude al lector a comprender la situación descrita, con muestras de la relación entre causas y efectos, aunque no de manera absoluta.

Se presenta, en el primer capítulo, la situación de las violaciones del derecho a la vida, a la dignidad y la integridad física, como abordaje de las violencias que en 2009 han hecho sufrir a tantos habitantes del país, sin distinción de sexo ni edad. El segundo capítulo, se refiere a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la crisis económica. El tercer capítulo aborda los sectores de población especialmente vulnerados en sus derechos. El cuarto capítulo se ocupa de la situación social y la defensa de los derechos humanos, y el quinto capítulo ofrece algunas recomendaciones.

Entre las violaciones del derecho a la vida y la integridad física, el informe de situación agrupa los indicadores para medir el avance o rezago en torno a la normativa y el fortalecimiento institucional, el contexto de la violencia, adolescencia, juventud y pandillas, y la violencia dirigida especialmente a grupos por su condición de edad, género y trabajo, tales como la muerte violenta de mujeres, adultos mayores, adolescentes y menores víctimas de secuestro y violencia sexual. Esta situación se agravó durante el año por hechos como tortura, linchamientos y trata de personas.

El deterioro, la debilidad institucional y la falta de capacidad del Estado para asegurar las condiciones que ofrezcan la construcción y consolidación democráticas han sido las características predominantes y sistemáticas en las violaciones del derecho a la vida.

Durante 2009 la inseguridad y la violencia adquirieron diversos matices. Unos en materia de avance institucional, como la aprobación de leyes, esfuerzos democráticos institucionales, y otros que por omisión o aquiescencia del Estado han fomentado y tolerado la impunidad, permitiendo la progresión, reagrupación y readecuación del crimen organizado y los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.

El Estado —sus acciones, políticas e iniciativas— en el continuo de los años avanza lentamente; el peso de la impunidad, el crimen organizado nacional y transnacional y el afianzamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad se asientan en pequeños feudos desde donde declaran el dominio y poder sobre la propia institucionalidad, justicia, prevención y punibilidad en las acciones criminales.

Los avances son más bien limitados y aislados, sin pasos decisivos en asuntos fundamentales como la reforma policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, de un eficaz y depurado ente de investigación criminal, en la definición de una política criminal del Estado, sin que la prioridad atribuida a la seguridad y la justicia se reflejen en las correspondientes asignaciones presupuestarias, y sin una coherente estrategia de comunicación y participación social para la difusión e impulso del acuerdo, entre otras deficiencias constatadas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos insiste en la necesidad de impulsar con decisión y visión estratégica los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional, sin lo cual será muy difícil superar la crítica situación de seguridad que afecta a la sociedad guatemalteca.

La violencia mantiene una espiral creciente. En menos de diez años se duplicó la tasa de violencia en el país. Las cifras podrían alcanzar 49 muertes por cada 100,000 habitantes en el ámbito nacional. En los últimos cinco años, 16 municipios que albergan 27% de la población, pertenecientes a ocho departamentos concentran el 50.44% de los homicidios del país.

Durante los últimos tres años (2007 a 2009) han muerto de manera violenta 18,571 personas. El promedio de muertes ha aumentado en un deceso diario. En 2007 la cifra era de 16 muertes, para 2008, de 17 y, finalmente, a octubre de 2009 es de 18; de enero a diciembre se registraron, en total, 6,498, es decir, 717 muertes más que 2007 y 206 más en comparación con 2008.¹

Se señala también en el informe que la violencia tiende a manifestarse con mayor ímpetu en las zonas urbanas de cada uno de los municipios. Para 2009, los homicidios y la violencia se concentran predominantemente en siete departamentos del país, siendo el más violento el de Guatemala, con el 41.06% de homicidios de toda la República. Para octubre se contabilizaron 1,061 muertes, la mayor parte en cuatro zonas (18, 6, 7 y 12) que concentran el 53.54% de muertes violentas.

La causa de muerte violenta continúa siendo, en mayor medida, por arma de fuego. El dato más sobresaliente sobre las diferencias de homicidios se encuentra en el fenómeno del linchamiento, de enero a diciembre 2009 se reportaron 106 casos en áreas urbanas y rurales.

A través del creciente número de homicidios, señales de tortura e incremento de femicidios, la violencia y el terror se han constituido en las expresiones más inequívocas de muerte violenta y de mayor impacto en la sociedad. Se han convertido en indicadores que ejemplifican la condición de violencia estructural en que se encuentra el país. En el caso de muerte violenta de mujeres, de 2003 a 2008 las cifras incrementaron un 179%. Para noviembre de 2009, se registraban 657 mujeres asesinadas y 899 heridas, a diciembre la cifra ascendió a 720, elevando el promedio de mujeres muertas violentamente a 60 por mes y 2 por día.

Así, 2009 se convierte en el año más violento en función del número y proporción de homicidios en general y de muerte violenta de mujeres. La violencia se manifiesta de forma indiscriminada y sin importar la edad de la mujer. Al examinar las cifras de muertes por edades, no hay un patrón etario específico: la violencia contra la mujer es una práctica generalizada que no distingue edades. La cifra más alta se ubica en el rango de edad de 23 a 27 años, con 101 decesos. Cerca de la mitad de mujeres asesinadas está en la etapa de mayor reproductividad.

La proporción de actos de tortura cometidos en contra de hombres y mujeres registra que las mujeres son víctimas de una violencia de mayor magnitud que sus pares hombres, sin que se dé prioridad al esclarecimiento de los asesinatos cometidos en su contra. En el imaginario social se manifiesta la misoginia como una categoría que evidencia el odio, desprecio o subestimación por su condición de género.

El crimen organizado refleja un comportamiento y constante evolución en los niveles de violencia y ha impedido el fortalecimiento de la institucionalidad, sirviéndose de ésta para fomentar la impunidad, el poder político y ampliar la zona de influencia en la esfera delictiva; se encuentra interconectado y es capaz de influir en las decisiones políticas. Adicionalmente ha desarrollado un control territorial y cuenta con la capacidad y logística para alterar la gobernabilidad a través de la utilización de la violencia, el miedo y el terror. Cuenta con una flexibilidad reactiva capaz de reconducir su ámbito de acción frente a las acciones que realiza el Estado.

¹ En el informe se analizan datos hasta el 31 de octubre, la situación y tendencia observada no varió en absoluto hasta finalizar el año; en algunos pasajes se encontrarán cifras actualizadas y, en el mejor de los casos, el Anexo II incluye las tablas completas con datos registrados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009.

La fuerza del crimen organizado ha erosionado a través de la violencia simbólica el ámbito comunitario y organizado redes de relaciones sociopolíticas, económicas e institucionales. Ha incrementado la toma de territorios, convirtiendo a la adolescencia y juventud en sujetos de criminalidad, siendo las pandillas un apéndice constitutivo. Existe un continuo crecimiento de estos grupos, de los cuales los menores de edad y adolescentes son herramientas que perpetúan y extienden el dominio y redes del crimen organizado.

Los adolescentes y jóvenes son reclutados y utilizados por su posición de indefensión, situación económica y falta de oportunidades. Gran cantidad de adolescentes y jóvenes son reclutados por las pandillas en zonas de la capital. La zona 18 y el municipio de Mixco ejemplifican la pérdida territorial y la capacidad de influencia y despliegue policial.

El caso de los adultos mayores no ha sido ajeno a la problemática de inseguridad y de violaciones sistemáticas del derecho a la vida. Durante 2009 el Estado no cumplió con garantizar la seguridad pública y tampoco pudo contener la ola de criminalidad común que cobró la vida de 204 hombres y mujeres de la tercera edad, cantidad mayor a la que se reportó durante 2008, que ascendió a 193 víctimas. Las estadísticas demuestran que los ataques en contra de las personas adultas mayores, lejos de disminuir, registran un aumento y no hay signos de que esta situación cambie.

Además de las condiciones estructurales del país, la falta de políticas públicas específicas, la no aplicación de la ley, la impunidad y condiciones de violencia propician un entorno de abusos y atropellos que afecta, a los adultos mayores, los margina y les impide mantener un contexto de vida digna, segura y de calidad.

En lo referente a los derechos de la niñez y adolescencia víctima de la problemática de la violencia criminal, el informe de situación ha recabado hechos que comprometen la vigencia de derechos y libertades elementales, así como la eficiencia del Estado para garantizar la vida y su seguridad como seres humanos.

Aunque existen la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, es poco o nada lo que se implementa para proteger a la niñez del país de los abusos y violencia a la que es sometida.

En el ámbito internacional, pese a que el Estado de Guatemala es uno de los primeros países en ratificar la Convención internacional sobre los derechos de la niñez, los ataques mortales y las agresiones violentas en contra de la población infantil continúan ocurriendo en menoscabo del derecho de la niñez a una vida libre de abusos y de violencia. En estos casos, el Estado de Guatemala es responsable de violar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y de favorecer la impunidad, evitando el castigo y la sanción penal a los perpetradores.

La vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes los expone a riesgos mayores, tal el caso de los delitos sexuales cometidos en su contra. De enero a octubre de 2009, se registraron 306 ataques sexuales (abusos deshonestos y violaciones), según informes de la Policía Nacional Civil (PNC). La mayoría de los ataques (95%) ocurrió en contra de víctimas del género femenino.

La situación en cuanto a violencia intrafamiliar presenta problemáticas diversas. Por un lado, no hay estadísticas fiables que permitan dar dimensionalidad al fenómeno; sólo hay una serie de subregistros sobre casos que sin duda reside en el mismo carácter de la agresión, la situación de indefensión y falta de información para las víctimas.

De esa forma persisten hogares donde la violencia no se denuncia, viviéndose la agresión como actitudes o formas *normales* de convivencia en el hogar. El miedo, necesidad, dependencia económica y afectiva, el mantenimiento del estatus ante la sociedad, dogmas, creencias y prejuicios, entre otros, hacen de la violencia intrafamiliar un flagelo cotidiano y normativo de las relaciones sociales. Además, en muchos casos las víctimas no denuncian al agresor por temor a represalias o por la falta de aplicación de la justicia.

En cuanto a la acción criminal manifestada en el secuestro de menores de edad de ambos sexos, durante 2009 esta dolorosa realidad conmovió a varias familias guatemaltecas, dejando secuelas y daños colaterales psicológicos, físicos y morales en las pequeñas víctimas y su entorno familiar. La situación es más grave cuando la víctima es ejecutada o fallece durante el operativo de rescate realizado por las fuerzas de seguridad. Pese a la vigencia de un marco legal que persigue y castiga estos delitos, son escasos los logros y resultados en los que supuestos responsables han sido identificados, capturados y sometidos a juicio.

Denuncias y percepciones descritas en el informe muestran un escenario social violento y brutal, manifestado por el recurrente uso de métodos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que deja al descubierto la debilidad del Estado que, por acción u omisión, ha sido inepto para prevenir y erradicar la conducta de quienes mediante el uso de métodos brutales, desprecian e irrespetan la vida y dignidad de otros seres humanos.

Finalmente dos fenómenos que se vuelven a registrar con mayor contundencia y que presentan señales de recrudecimiento son los linchamientos y la tortura. La escasa institucionalidad o presencia del Estado se pone de manifiesto en la desprotección de la población frente a los elevados índices de delitos, corrupción y abusos de funcionarios públicos, o la lentitud e insatisfacción sobre determinados procesos judiciales. En perspectiva, la existencia de estos fenómenos se refiere a la ineficacia del Estado para dotar de los mínimos de seguridad que se deben gozar.

Las características generales de los linchamientos describen la falta de castigo, prevención de los delitos o situaciones de violencia. Aunado a ello, los escenarios de impunidad creciente, indefensión, lentitud y corrupción en los procesos judiciales presionan los niveles de tolerancia de la población, haciendo que ésta tome en sus manos la incapacidad punitiva del Estado.

El fenómeno, como se hace evidente entre 2008 y 2009, tiende a agravarse cuando involucra a autoridades estatales, como alcaldes o miembros de autoridades comunitarias, implicados directa o indirectamente, ya sea para estimular o como sujetos acusados en las acciones u omisiones del linchamiento.

Considerado como una forma contemporánea de esclavitud y uno de los ultrajes más graves contra la esencia de los derechos humanos, la integridad, la dignidad y la vida de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres víctimas, la trata de personas es un fenómeno que ha despertado preocupación por la magnitud en que se acrecienta, situación que tiende a agravarse por la ubicación geográfica que presenta Guatemala, ya que es un país de origen, tránsito y destino.

El Estado asumió compromisos internacionales y ha dado pasos encaminados a trabajar por combatir este delito, pero los avances deben fortalecerse y mantenerse. Debe existir una planificación adecuada en la atención, prevención, sanción y erradicación del fenómeno, así como la implementación de la política pública y el plan nacional para el combate de la trata de personas a través de un presupuesto adecuado. Además, debe existir una inclusión permanente, constante, dinámica y de consenso de los diversos actores sociales que están comprometidos con la erradicación del fenómeno.

Institucionalmente debe fortalecerse como ente responsable a la Secretaría de la Violencia Sexual y Trata de Personas. El Estado debe asumir un compromiso que permita la funcionalidad u operatividad del recurso humano y técnico. En la vía de contar con información fiable y actualizada, a las instancias encargadas del monitoreo y seguimiento de casos les corresponde la recopilación de datos estadísticos desagregados y generar variables que den resultados apegados a la realidad.

El Estado debe trabajar coordinadamente con otras instituciones que tienen a su cargo la puesta en marcha de políticas específicas de poblaciones vulnerables, como la Política de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 2002-2015; la Política de Equidad y Oportunidad de las Mujeres Guatemaltecas y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI) en armonía con el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (PLANONI 2004-2014).

Durante 2009 la situación de los derechos humanos ha estado profundamente marcada por elementos exógenos de particular relevancia, como la crisis del petróleo, la crisis económica y financiera de Estados Unidos y la consecuente deportación de los y las connacionales.

Entre los aspectos endógenos figuran la crisis alimentaria, los conflictos derivados de la producción de agrocombustibles, el escaso nivel de lluvias de algunas regiones que causó sequía y pérdida de cosechas de alimentos y granos básicos, la caída del envío de remesas de guatemaltecos radicados en el exterior, la inseguridad y el fortalecimiento de las diversas redes del crimen organizado y narcotráfico.

Estas causas y factores han incidido en el deterioro en la calidad de vida; la falta de acceso a servicios básicos, la persistencia y aumento de las desigualdades sociales, situaciones de desempleo o empleo por debajo de las condiciones legales mínimas, el contexto de permanente inseguridad e impunidad y las cada vez más frecuentes extorsiones se suman a los casos de migraciones forzadas o bajo engaños de víctimas de trata.

A los elementos históricos y estructurales, tales como la desigualdad económica y la concentración de la tierra, vienen a reforzar y trazar nuevas formas de conflictividad las nuevas dinámicas económicas y el acaparamiento de tierras por parte de los narcotraficantes.

La parte relativa a los derechos económicos sociales y culturales incluye un exhaustivo análisis de la pobreza, el contexto económico y la crisis financiera internacional como elementos determinantes que intervienen en el desarrollo, cumplimiento y avances de estos derechos. Se incluyen dentro de este apartado, la ejecución presupuestaria, gasto social y derechos humanos, los derechos laborales, el derecho a la alimentación, educación, cultura, salud, seguridad y asistencia social, el derecho a una vivienda adecuada, a un ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas. Además, se hace un análisis del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como ejes transversales que complementan el fortalecimiento de todos estos derechos.

El sector real de la economía se vio afectado, sobre todo en el primer semestre, por la contracción de algunos sectores en la producción agrícola, industrial y de servicios; conjuntamente con la reducción de las exportaciones, el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa y otras variables económicas. El panorama económico, social y político de Guatemala de este año fue inestable, con acontecimientos que agravaron aún más la situación socioeconómica de sus habitantes.

Éste no fue un año positivo para avanzar en la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población guatemalteca. La situación y realidad se vuelven más complejos y las carencias en la satisfacción y posibilidad de hacer efectivos los derechos se hacen más notorias. La capacidad del Estado, por ende, se vuelve mucho más frágil y con menores posibilidades de cumplir con las funciones básicas de bienestar y calidad de vida.

La baja recaudación obligó a recortes presupuestarios por falta de financiamiento. Ante las difíciles condiciones para el impulso de la modernización fiscal, distintas instituciones de gobierno y municipalidades sufrieron mermas en sus ingresos. Los municipios con mayor índice de pobreza han sido los más afectados por los recortes presupuestarios. En definitiva, la reducción de la recaudación fiscal durante 2009 implica la disminución del gasto social (salud, educación, entre otros), lo que a su vez significa condiciones adversas para la reducción de la pobreza y pobreza extrema.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, gasto social y los derechos humanos, los acontecimientos relevantes durante los primeros once meses de 2009 que se relacionan con el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, se vinculan con el gasto público ante la insuficiencia de recursos provocada por una abrupta caída de la recaudación tributaria, la no aprobación de la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año Fiscal 2010, las controversias suscitadas por la iniciativa que dispone aprobar disposiciones de apoyo financiero a gobiernos municipales, educación, salud, desarrollo rural y seguridad ciudadana.

El Presupuesto General de la Nación registró una ejecución promedio, a noviembre, del 81%. Los ministerios que presentan menor ejecución fueron el de Cultura y Deportes; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Economía; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Ambiente y Recursos Naturales, y Gobernación, así como las Secretarías y la Presidencia. El sector público se caracterizó, durante el último semestre, por la reducción del gasto público, producto de la abrupta caída en la recaudación, mermando la acción gubernamental y el cumplimiento de los derechos humanos de la población.

Los indicadores del gasto social muestran con mayor certeza y claridad el nivel de protección y cumplimiento de los derechos humanos. Ante esta perspectiva, los más vulnerados y que registran menores avances por la falta de eficacia y eficiencia estatal para la ejecución presupuestaria son el derecho a la vida, a la salud y asistencia social, a la seguridad, la alimentación, la cultura y un ambiente sano. Además, presentan un desarrollo bajo e inadecuado, el derecho a un trabajo digno, a la vivienda adecuada y a la educación.

Durante 2009 se creó una serie de fondos que conforman los programas de Cohesión Social; y desaparecieron el Fondo de Inversión Social y el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. Si bien los programas de Cohesión Social tienen como finalidad reducir la brecha entre los sectores más vulnerables, así como la pobreza y extrema pobreza, son susceptibles de mejoras que deben suscitarse a partir de la institucionalización e integración de la legislación nacional para alcanzar una mayor sostenibilidad.

La inversión social realizada por el total de los fondos, en comparación con 2008, tuvo una reducción de 16%. El Fondo de Tierras y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano redujeron drásticamente la inversión social en 2009, en 83% y 25%, respectivamente, en comparación con 2008. Similar situación se dio con la reducción de la inversión social realizada por el Fondo Nacional para la Paz, el Fondo Nacional para la Modernización y Reactivación de la Actividad Agropecuaria, el Fondo Guatemalteco para la Vivienda y el Fondo de Desarrollo Indígena.

Desde la perspectiva de los derechos a la seguridad alimentaria y nutricional y las responsabilidades que corresponden al Estado, se observó que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) no han cumplido con el mandato constitucional ni legal para el que han sido creadas. Las debilidades se han manifestado en la atención inmediata y urgente para responder con efectividad y darle solución a la crisis alimentaria y nutricional ocurrida en el país, en particular a los casos de niños y niñas de los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa.

El incremento de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en el llamado Corredor Seco, y en todo el país, originó que el Procurador de los Derechos Humanos, juntamente con autoridades de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala establecieran un “Frente Contra el Hambre”, para considerar y establecer acciones que faciliten la atención de la niñez con este padecimiento.

Se logró incidencia ante autoridades locales, gubernamentales y la sociedad civil, y diversos apoyos para la organización del censo nutricional, la elaboración de instrumentos consolidados e informes sobre el trabajo de campo realizado. Se establecieron los casos, número de niños y niñas afectadas por departamento, comunidad y edades entre 0 y 5 años. Finalmente, fueron remitidos 556 casos de niños con desnutrición aguda para su atención en hospitales nacionales y centros de recuperación nutricional.

En lo referente al derecho al trabajo, no se ejecutaron políticas eficaces para generar mayores fuentes de empleo; ni tampoco para disminuir el daño causado al empleo por la crisis económica que atraviesa el país. Los resultados recopilados por el Informe de Situación indican no sólo el mantenimiento, sino el aumento de la pobreza. La reducción del empleo significa menos ingresos para las familias, se restringe el consumo y disminuye la demanda interna. Ésta es una de las mayores amenazas que se cierne sobre la economía nacional a partir de la crisis económica que golpea el ámbito mundial.

No existe un número de empresas o fuentes de empleo que satisfaga la gran demanda laboral, situación que obliga a miles de personas a emigrar a la ciudad capital o a países del norte como los Estados Unidos. Algunos

indicadores muestran un alza de la informalidad en el trabajo, debilitamiento del empleo con protección social y una contracción del empleo de jornada completa.

A pesar de que la legislación laboral prohíbe la discriminación en el empleo, las mujeres que trabajan en las empresas maquiladoras son frecuentemente discriminadas e irrespetadas en sus derechos laborales. Además, en un país como Guatemala, donde el 30% de la población la conforman personas entre 15 y 30 años, decenas de miles de jóvenes, algunos que han concluido su carrera de diversificado, no cuentan con un empleo directo ni con esperanzas de que en un futuro cercano esa realidad cambie.

La situación del derecho a la alimentación se agravó durante 2009. Los indicadores sociales sobre la inseguridad alimentaria y nutricional mostraron que la misma afecta no sólo a los departamentos ubicados en el Corredor Seco del oriente, sino a la totalidad del país.

En el derecho a la educación aún existen deficiencias del Estado con respecto al cumplimiento del mandato constitucional para garantizar la educación gratuita de todos los niños y niñas en edad escolar. Persisten las brechas de exclusión para lograr el desarrollo pleno del derecho a la educación, especialmente en las mujeres, pueblos indígenas y discapacitados.

El gasto público en educación es insuficiente, se ha estancado en menos del 1.5% del PIB, cifra que se encuentra muy debajo del promedio latinoamericano. Los recursos no garantizan la existencia de escuelas y programas de enseñanza en cantidad suficiente y a disposición de todos los niños y niñas, así como de la infraestructura adecuada y disposición de docentes.

Hay deficiencias para facilitar el acceso de la población discapacitada en edad escolar a la educación. Aún no se reconoce la necesidad de que niños y niñas con deficiencias auditivas puedan tener acceso a la educación con maestros capacitados para trasladar el conocimiento por medio del lenguaje de señas, además los maestros no cuentan con el equipo ni la instrucción adecuada para que las personas con discapacidades puedan alcanzar el mismo nivel de educación que las demás.

El Estado, con respecto al cumplimiento del mandato constitucional para garantizar la educación gratuita de todos los niños y niñas en edad escolar, sigue presentando deficiencias. Los recursos no garantizan la existencia de escuelas y programas de enseñanza en cantidad suficiente y para todos los niños y niñas, así tampoco, la infraestructura adecuada y disposición de docentes.

Dentro de la legislación interna, el derecho a la cultura en Guatemala se ha establecido como garantía constitucional y, a pesar de la variedad de leyes, políticas e instituciones creadas para garantizar este derecho, su implementación en los planes y políticas públicas, así como en los programas y proyectos, no responde a la prioridad requerida.

La escasez de información estadística a nivel geográfico, especialmente en el área rural, limita el análisis de la situación del acceso a la cultura, la cual para las comunidades lejanas es restringida y lo es en mayor medida en las poblaciones pobres e indígenas. Para la realización del derecho a la cultura y la cultura de paz se invoca la reconstrucción y valorización entre individuos, la edificación de valores, comportamientos, actitudes y modos de relacionarse que favorezca la no violencia y el respeto a los derechos humanos en sus múltiples manifestaciones e interdependencias.

Es necesario que el Estado adopte una política pública integral, especializada y permanente. Debe implantar una estrategia que promueva y genere una conciencia entre la población y fomente la participación ciudadana en actividades relacionadas con la preservación y valorización de nuestro patrimonio cultural.

Dentro del derecho a la salud y seguridad social, resaltan los recortes presupuestarios de varios programas. Los más afectados fueron los del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Al finalizar marzo, las partidas con mayores modificaciones presupuestarias fueron las de Apoyo a la Promoción, Prevención y

Atención a la Salud Reproductiva y Emergencia de Hospitalización y subprogramas como la Construcción, Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Hospitales.

Al término del primer semestre el MSPAS enfrentaba un recorte de Q375 millones. Hay que tomar en cuenta que eran meses críticos en el tema de salud, al presentarse la pandemia de la fiebre A H1N1 y los primeros casos de dengue hemorrágico en el interior del país. A finales de noviembre se contabilizaban 18 víctimas mortales y 1,092 casos confirmados en el país.

A pesar de contarse con una estructura legal, política e institucional, ésta no responde ni garantiza el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda adecuada, que continuamente se ve afectado por el aumento de la pobreza y el desenvolvimiento demográfico. Se evidencia primordialmente en la macrocefalia urbana y el incremento de asentamientos humanos, y pone en alto riesgo a sus residentes a desastres naturales.

La garantía y disfrute de este derecho son constantemente vulnerados debido a la falta de aplicación por parte del Estado de una política agraria integral para equilibrar la propiedad de la tierra, y que garantice la seguridad jurídica, acceso a la tierra, protección contra los desalojos, así como la eficiente ejecución de los recursos gubernamentales destinados a subvencionar espacios habitacionales.

Con respecto al derecho a un ambiente sano, se viene asistiendo a un proceso de deterioro acelerado de los recursos ambientales del país, agudizado no sólo por la presión sobre la tierra, sino también por los efectos del cambio climático.

La violación de los derechos ambientales está íntimamente vinculada a otros. Se han registrado problemas en cuanto a la deforestación acelerada, contaminación y falta de potabilización del agua, uso excesivo del agua para cultivos de exportación, incendios forestales, depredación de áreas protegidas, efectos ambientales negativos producidos por la explotación minera y petrolera, manejo inadecuado de desechos sólidos y proliferación de basureros clandestinos.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos realizó una supervisión administrativa sobre la potabilidad del agua en el país con hallazgos negativos para la salud y el derecho a un ambiente sano de sus habitantes.

Hay que destacar que las áreas protegidas son prácticamente la única cubierta boscosa que queda en el país. Sin embargo, los recursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) son insuficientes para garantizar su conservación y las amenazas que enfrentan son múltiples. Además, en Izabal se ha dado la tala inmoderada de las áreas boscosas que son utilizadas para la ganadería y cultivos de grandes extensiones.

La mayoría de ríos y lagos del país están contaminados, tanto por la falta de plantas de tratamiento como por la disposición inadecuada de los desechos sólidos y el uso de fertilizantes químicos. Uno de los casos más graves y emblemáticos ocurridos durante el año fue la contaminación y presencia de la cianobacteria en el lago de Atitlán, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas concretas para revertir el proceso.

Los fenómenos naturales no son necesariamente equivalentes a desastres, ya que en éstos interviene también la vulnerabilidad de una región o país. Guatemala, por su posición geográfica y topografía, está expuesta a terremotos, deslizamientos de tierra, huracanes, inundaciones y sequías. Por otra parte, el incremento de la frecuencia de los desastres y daños colaterales forma parte de una tendencia mundial ocasionada por los efectos del cambio climático.

En Guatemala no se han aplicado políticas que reflejen una comprensión de la vulnerabilidad y que contengan medidas para corregirla. El ordenamiento territorial y los códigos de construcción en general siguen siendo inadecuados o no se aplican estrictamente en la mayoría de las áreas expuestas a amenazas naturales. El paradigma predominante para hacer frente a los desastres ha estado orientado hacia la elaboración de planes de reacción a situaciones de emergencia que inevitablemente se dirigen a los efectos de los fenómenos y no a

sus causas. Asimismo, durante la tarea de reconstrucción, en muchos casos no se han tomado medidas para reducir el riesgo.

La crisis alimentaria en el Corredor Seco fue uno de los mayores desastres de origen natural del país en 2009. En otras partes del territorio se produjeron inundaciones y derrumbes generados por fuertes lluvias y condiciones generadas por el deterioro ambiental. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reportó 108 personas fallecidas durante el año debido a desastres naturales; sin embargo, el número de personas en riesgo excede los 100,000, de los cuales 80% por razones de inseguridad alimentaria.

En lo que se refiere a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de los diferentes indicadores sociales, Guatemala se está alejando de las Metas del Milenio. Para alcanzarlas se requiere la implementación de políticas públicas en diferentes rubros y encaminarlas a lograr el crecimiento económico, así como la redistribución del ingreso. Si se mantiene una tasa de crecimiento de la economía menor al 3%, junto con la ausencia de medidas de redistribución del ingreso, las reducciones en el gasto social y la ineficacia en la ejecución del presupuesto del Estado, la brecha tenderá a profundizarse en los próximos años.

Finalmente, con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de que varios se encuentran establecidos como garantías constitucionales, se registran derechos vulnerados, como en salud y educación; en la desprotección del patrimonio cultural tangible e intangible, y en una deficiente aplicación de las políticas lingüísticas, tanto en el sector judicial como en el uso de prácticas sensibles a la diversidad cultural en el sistema de administración de justicia.

Existen contradicciones y falta de flexibilidad en la Ley Electoral para garantizar la participación de las comunidades indígenas, tanto en el acceso a puestos de participación e incidencia como en la falta de efectos judiciales de las consultas populares, especialmente en las relativas a la minería a cielo abierto.

En 2009, los pueblos indígenas enfrentaron diferentes situaciones que exponen su vulnerabilidad en varios aspectos, profundizando la exclusión social.

En Guatemala, la estructura de la tenencia de la tierra se ha caracterizado históricamente por un alto grado de concentración. A esta desigualdad se han ido agregado recientemente otros procesos y situaciones que incrementan las contradicciones y conflictividad agrarias, el riesgo de aumento de la pobreza y retroceso en los indicadores de los derechos económicos y sociales de la población.

La política agraria asumida en Guatemala ha sido guiada por un sistema de dotación de tierras regulado por el mercado. La solución no ha traído consecuencias del todo positivas en el acceso a tierras, sino que han aflorado nuevos problemas, como el endeudamiento de las economías campesinas, la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, la reconcentración de la gran propiedad agraria.

La institucionalidad agraria ha sido rebasada por la magnitud y complejidad de la problemática a resolver. Aunado a la falta de políticas consistentes y eficaces de parte del Estado para promover el desarrollo rural integral, se agregan los efectos del cambio climático.

En este contexto, durante 2009 las organizaciones campesinas protagonizaron marchas y tomas de tramos carreteros, acompañadas de comunicados y planteamientos con demandas específicas. Se produjeron desalojos violentos y asesinatos de líderes campesinos. Las organizaciones han denunciado a cuerpos armados privados como principales responsables de estos hechos.

Como resultado hubo varias reuniones de alto nivel entre representantes campesinos y del Ejecutivo, y un proceso de diálogo que culminó con la formulación de una Política de Desarrollo Rural Integral, promulgada por dicho Organismo. Sin embargo, el proceso de aprobación de la ley correspondiente quedó pendiente en el Congreso de la República, con objeciones de todas las bancadas, principalmente en torno a la interpretación del tema agrario de la Ley.

Como una de las partes sobresalientes del estado de situación de los derechos humanos, se encuentran los pasos dados en torno al acceso a la información pública, no sólo como datos relevantes de la administración, manejo y transparencia de fondos, sino en los hechos que han trascendido y configurado nuestra realidad en la historia reciente del país. La imperiosa necesidad de conocer la verdad y acabar con la impunidad ha dado resultados de carácter histórico.

En primera instancia, durante 2009 se implementó la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual representa un avance en lo referente al acceso y difusión del progreso científico, la ciencia y la cultura, ya que el objetivo de la misma es garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la ley.

Lamentablemente no se ha cumplido con una parte fundamental de la ley, y es la que indica acerca de la partida específica adicional en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones establecidas. La institución ha hecho grandes esfuerzos para reorientar recursos que sustenten financieramente las actividades de las unidades encargadas de cumplir con el mandato que la ley le asigna como entidad reguladora.

Al realizar un primer balance y evaluación del comportamiento de los sujetos obligados, se constató un limitado cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Existe una debilidad institucional que no les permite que a ocho meses de vigencia de la ley, los sujetos obligados puedan cumplir con el mandato legal.

Se observó un cumplimiento formal a la ley: la mayoría de los sujetos evaluados hizo efectivo lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, al haber designado al servidor público, empleado u órgano interno que funge como Unidad de Información Pública. Sin embargo, algunas municipalidades aún no la tienen en funciones; en éstas no hay divulgación de la información pública a través de los portales electrónicos de oficio y hay una notoria ausencia de Unidades de Información que atiendan y orienten a los interesados. Las municipalidades se constituyen en las instituciones a las que en un futuro hay que darles mayor prioridad, seguimiento y capacitación.

Dentro de los sectores de población especialmente vulnerados en sus derechos, el estado de situación comprende los derechos de la mujer, de la niñez y la adolescencia, de las personas con discapacidad y retos especiales, del adulto mayor, derechos vulnerados de la población que vive con VIH-SIDA, de las minorías sexuales, de la población detenida o reclusa y derechos de la población migrante y desarraigada.

La situación de las mujeres guatemaltecas en materia de derechos humanos abarca grandes carencias y debilidades estructurales e históricas del país. Si bien las instituciones y las luchas de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han logrado avances importantes, así como también los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en el ámbito normativo de los estándares internacionales, la situación de la mujer, lejos de mejorar se ha visto inmersa en espirales de violencia.

Según los datos recabados de 2003 a 2008, han perdido la vida 3,139 mujeres. En este contexto se lanzó la campaña latinoamericana de poner fin a la violencia contra las mujeres, inaugurada en Guatemala el 25 de noviembre de 2009 y que se hará extensiva hasta 2015, en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Milenio, para erradicar un flagelo que impide el adelanto de las mujeres en las sociedades.

El derecho de las mujeres a gozar de los servicios de salud debe valorarse y darse desde los criterios de calidad, calidez e integralidad. En muchos casos no se atiende de acuerdo con las especificidades y situaciones de las mujeres, que conllevan el respeto a la condición de vulnerabilidad y creencias étnicas culturales en un contexto multicultural; atención en sus idiomas; a la información sobre prevención, atención, enfermedades propias de su condición biológica de reproducción e información particular de su salud sexual y reproductiva.

El derecho a la educación de las mujeres no se limita a la educación primaria y secundaria. Debe estar enfocado a los cambios de paradigmas de la sociedad en su conjunto, tanto en el acceso como en la disponibilidad y gratuidad de la educación diversificada y universitaria, para propiciar condiciones de igualdad.

Las mujeres deben gozar de la misma oportunidad para acceder a puestos de trabajo que los hombres. Debe permitírseles una vida digna y en condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, sociales, culturales, educativas, emocionales y espirituales.

En la ejecución de su mandato, el Procurador de los Derechos Humanos registra avances en materia del derecho a elegir, así como de la conciencia desarrollada en el sector femenino sobre la necesidad de ejercer el derecho al sufragio y desempeñar un rol de progreso en la organización y participación de la vida nacional. Sin embargo, necesariamente reconoce la lentitud o ausencia de avances en cuanto a ocupar puestos de elección popular o de nombramiento en las esferas gubernamentales.

El presente año finalizó en medio de la crisis económica, con el incremento de la violencia generalizada, inseguridad constante, elevados índices de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, explotación, tráfico y trata de menores, aumento del narcotráfico y mayor despliegue del crimen organizado.

En ese contexto la juventud se convierte en objeto vulnerable y en un actor débil en la conflictiva aglomeración social. En este período se ha acrecentado la inserción y utilización de niños, niñas y adolescentes en pandillas o grupos denominados “maras”; encontrando alguna respuesta a sus necesidades afectivas, de poder, económicas, de aceptación y revalorización de ser sujetos de atención y comprensión.

En materia de derechos de la población infantil se pueden mencionar los avances registrados en torno a la gratuidad de la educación y la disminución de la mortalidad infantil. En materia jurídica, se hizo efectiva la vigencia del Convenio de la Haya relativo a niñez y cooperación en materia de adopciones y la entrada en vigencia de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Sin embargo, en muchas ocasiones la vida de niños y niñas se ve expuesta a situaciones prevenibles vinculadas al acceso de servicios sanitarios y de seguridad alimentaria.

La mortalidad infantil continúa cobrando vidas. La muerte de menores de cinco años conlleva la falta de atención y de prevención que recibe la madre del neonato y el niño, incidiendo en su calidad de vida. En algunas ocasiones los menores pierden la vida por falta de condiciones mínimas, como agua entubada, techo de lámina, piso de cemento y los requerimientos básicos de una ingesta de proteínas, vitaminas y calorías que permita a la madre amamantarlo en su primer año de vida.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de supervisiones administrativas realizadas en 2009, verificó la necesidad de una nueva política educativa tendiente a superar la mala infraestructura de los centros de enseñanza en el ámbito nacional, la falta de equipo y mobiliario adecuado. A las deficiencias en infraestructura y equipo se suman las carencia de docentes, el permanente atraso en el desembolso del Ministerio de Educación para la refacción escolar, los utensilios de limpieza, la entrega tardía de la bolsa de útiles, la falta de previsión ante el incremento y sobrepoblación estudiantil, los abusos, el maltrato y actos de discriminación por parte de personal de algunos centros educativos.

Con respecto a la situación de los derechos de las personas con discapacidad y retos especiales, la realidad verificada en 2009 no ha supuesto un cambio sustancial y significativo en los últimos años. A pesar de que Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales y existe un marco normativo amplio para garantizar la protección de los derechos humanos, el Estado no ha sido congruente con implementar una estrategia que permita a la población con discapacidad ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones frente al resto de ciudadanos.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos ha constatado que se registran frecuentes despidos cuando una persona, desempeñando algún trabajo, adquiere alguna discapacidad (por enfermedad o por accidente). También son comunes los malos tratos de parte de empleadores, responsables de recursos humanos e incluso de los propios compañeros de trabajo que los discriminan por su condición, les asignan tareas inadecuadas para su condición física y sobrecarga laboral con jornadas de trabajo más largas.

La situación de los adultos mayores es igual de preocupante a los demás grupos vulnerables. Durante 2009 se han dado múltiples formas de maltrato físico, psicológico y social, y es recurrente su descuido y abandono. También se verifican carencias institucionales puestas en evidencia por políticas, planes y programas que privilegian el asistencialismo sobre el respeto a los derechos, y la ausencia de aseguramiento de recursos primordiales para una vida digna, tales como educación, salud, seguridad social, trabajo, protección, cultura y recreación.

Según la descripción de las denuncias recibidas por esta institución, se infiere que los sujetos violadores por acción u omisión son el Estado y sus entidades gubernamentales y los actores sociales, que en muchos casos figuran como miembros de la propia familia. La poca capacidad para generar ingresos propios, la insuficiente cobertura de los programas de seguridad social, los bajos montos de las pensiones de jubilación y otras limitaciones, contribuyen a mantener las condiciones desfavorables de vida que ahora enfrenta la mayor parte de adultos mayores.

En el caso de las personas que viven con VIH/SIDA, a pesar de los esfuerzos interinstitucionales por promover la defensa de los derechos humanos, se continúan dando una serie de atropellos que van en contra de su dignidad y que violentan los derechos laborales, educativos y de acceso a los servicios de salud y de seguridad social.

Muchas violaciones no son denunciadas por los afectados debido a que continúan dentro del anonimato. Seguir con el proceso legal que les permita la reparación del daño causado, obliga en un momento dado a revelar que son portadores. La secretividad da paso a la intolerancia, haciéndolos vulnerables y objeto de una mayor discriminación por el estigma que sufren en la sociedad.

La discriminación es una práctica presente en temas étnicos, económicos, de salud y de preferencia sexual entre otros. Las acciones del Procurador de los Derechos Humanos han estado enfocadas a propiciar y mantener periódica y constantemente, el acceso y abastecimiento de las pruebas de carga viral plasmática y recuento de linfocitos CD4, así como del medicamento y tratamiento para enfermedades derivadas del VIH y SIDA, en todas las clínicas y hospitales de atención integral que forman parte de la Comisión Multisectorial. A su vez, se han implementado acciones de monitoreo para prevenir y evitar el desabastecimiento de medicamentos en todas las clínicas y hospitales de atención integral de personas que viven con VIH y SIDA.

También las personas que pertenecen a minorías sexuales enfrentan estas prácticas discriminatorias: son objeto de violencia, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios. Surgen como consecuencias, entre otras, la pérdida del sentido de pertenencia a su comunidad y el ocultamiento por temor o como mecanismo de protección de su identidad. En muchos casos se ven forzadas a vivir en la invisibilidad. Esta situación implica la limitación del acceso a la salud y el disfrute del derecho a la salud primaria y sexual, a la educación e incluso a mejores oportunidades de trabajo.

En relación con las acciones por parte del Estado concernientes al debido proceso, existen esfuerzos encaminados a su mejoramiento en las instancias encargadas de la administración de justicia. El funcionamiento de los juzgados de turno ha permitido que las personas sean consignadas en los plazos constitucionales y los recursos puedan ser evaluados en la temporalidad correspondiente, dando pie a las transformaciones necesarias que garanticen el pleno derecho de defensa y debido proceso.

A la fecha se han abierto cinco juzgados de turno ubicados en la capital, Villa Nueva, Escuintla, Mixco y, recientemente, en Sacatepéquez. Existe el proyecto de ampliar su cobertura a otros departamentos con altos índices de violencia. Asimismo, y primordialmente en la ciudad capital, se ha implementado un mayor número de tribunales y centros de justicia en departamentos con altos índices de criminalidad, y juzgados móviles.

Otro avance lo constituye la creación de los tribunales de alto impacto con competencia ampliada, que conocerán delitos graves tales como masacres, asesinatos y plagios. El problema que se enfrenta en la actualidad se refiere a la falta de infraestructura, instalaciones, seguridad para los juzgadores, vehículos, personal de apoyo y de un seguro de vida.

Asimismo, dentro del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia se incluyeron temas relativos a la infraestructura carcelaria, diseño e implementación de centros, el reglamento de la ley del régimen, realización del censo penitenciario, la inspectoría de cárceles, el impulso de un proceso de depuración del personal, implementación de salas o recintos ubicados en los centros penales para evitar gastos, extorsiones y posibles fugas, además de la colocación de antenas bloqueadoras de señales telefónicas.

Entre los casos conocidos por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, los derechos violados con más frecuencia son los relativos a la igualdad, particularmente en el caso de las personas de escasos recursos, cuya defensa se encuentra a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal, entidad que debe hacer frente a un gran volumen de trabajo que, en la mayoría de ocasiones, supera sus recursos disponibles. También ha sido vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, pues se realizan traslados de personas procesadas a sitios o centros de cumplimiento, poniendo en riesgo su integridad.

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos, también presta especial atención a los derechos de la población migrante en puntos fronterizos, enfocándose en los derechos humanos vinculados al fenómeno migratorio desde tres planos: el ámbito local, con respecto a los derechos de los migrantes en tránsito; el ámbito internacional, atendiendo la situación de migrantes guatemaltecos en el extranjero; y con respecto a la situación de las personas migrantes guatemaltecas que retornan luego de ser deportadas.

Es tarea prioritaria para el Procurador de los Derechos Humanos, dentro del marco del respeto de los derechos humanos y la agilización de la gestión administrativa, la vigilancia de las acciones y omisiones en que incurren el Estado de Guatemala y los funcionarios públicos. En sucesivos informes al honorable Congreso de la República, el Procurador ha expresado su preocupación por el grave deterioro en la seguridad pública, el derecho humano a la vida y la manera significativa en que interfiere en el ejercicio de los otros derechos fundamentales de la población.

El último capítulo detalla información referente a la situación social y defensa de los derechos humanos. Se incluyen las variables sobre situación y ataques cometidos en contra de operadores de justicia, defensoras y defensores de derechos humanos, ejemplificados por algunos casos ilustrativos, y la situación de los derechos humanos ante mecanismos internacionales de monitoreo y supervisión. Finalmente se incluye la justicia transicional que ocupa el derecho a conocer la verdad en Guatemala.

Durante 2009 la sociedad guatemalteca enfrentó una gran diversidad de conflictos prácticamente en todas las zonas del país, generados por situaciones que no han sido abordadas de forma adecuada y para las cuales la intervención de las autoridades responsables ha sido insuficiente. Aunque en algunos espacios se ha desarrollado un diálogo entre los actores sociales y el gobierno y las partes involucradas, la lista de conflictos es numerosa y con una tendencia a la agudización.

Al no atacar las causas y raíces de la conflictividad social, se crean condiciones propicias para la confrontación y se reduce la ya precaria gobernabilidad del país. La debilidad de la política de seguridad ciudadana aumenta la intensidad de la conflictividad, con un incremento en las tasas de homicidio y de delitos contra la integridad de la persona, como se pone de manifiesto en este informe.

Con respecto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, inclusive periodistas y operadores de justicia, este año se caracterizó por ataques, una aguda violencia por el ejercicio y defensa de sus labores, inseguridad e impunidad.

Las agresiones traslucen una situación que muestra un deterioro constante. La investigación criminal de los ataques a cargo del Ministerio Público no ha dado resultados alentadores; y la ausencia de castigo a los autores de los ataques y hostigamientos se trasluce y permanece constante. Esta situación se mantiene inmutable desde años anteriores; tal como fue constatado e informado por el Procurador de los Derechos Humanos en el informe de situación de 2008.

El 2009 terminó con 24 tipos de acciones mediante las cuales se agraden a defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en 13 temáticas. Las acciones identificadas se concentran en amenazas de muerte en persona, mensajes de texto a teléfonos móviles, con papeles escritos, llamadas telefónicas o correos electrónicos. El control, seguimiento e intimidación se expresa en la puesta en marcha de las amenazas.

También se han identificado amenazas o presiones por parte de funcionarios públicos, así como mediante acciones legales que en algunos casos pueden convertirse en una criminalización de la defensa de los derechos humanos. Hubo casos de desalojos violentos, difamación, agresiones físicas y verbales, robos, extorsiones, allanamientos de sede o de vivienda y, en los casos más graves, ataques con arma de fuego y asesinatos. En otros casos, las amenazas también se hicieron extensivas a la familia de la defensora o defensor.

Con las denuncias registradas en la institución del Procurador de los Derechos Humanos, según información del Área de Recepción y Calificación de Denuncias de la Dirección de Procuración en la sede central, se iniciaron expedientes de investigación en 81 casos por ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

La incidencia de los órganos internacionales del sistema regional interamericano o del sistema universal de las Naciones Unidas en la situación de los derechos humanos en Guatemala durante 2009 ha sido relevante, no sólo por parte de casos de los mecanismos de supervisión y control que tienen su sede al interno de las Naciones Unidas, Nueva York o Ginebra, sino también en otros casos a partir de la acción *in situ* de organismos que desempeñan su mandato en el país.

Es el caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se ha constituido en una nueva experiencia global en la forma de cooperación entre los Estados y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El acuerdo de creación estableció un mandato por dos años, plazo que fue prorrogado por el Congreso de la República a partir del 4 de septiembre de 2009.

El cumplimiento del mandato de la CICIG abordó la problemática de justicia en el país, reforzando a las entidades nacionales encargadas de la seguridad, persecución penal y aplicación de justicia, en temas como la implementación de mecanismos legales para la investigación penal, las escuchas telefónicas con autorización judicial, la posibilidad de declaraciones por medio de videoconferencias y la mejora del programa de protección de testigos y promoción de la acción legislativa.

Dos de los tratados que el Estado ratificó en 2009 —uno en el tema de la discapacidad y el otro para la prevención de la tortura— contemplan la creación de mecanismos nacionales de prevención de violaciones de los derechos humanos.

En lo que atañe a los mecanismos nacionales contenidos en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el gobierno designó al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADI). El Estado se encuentra pendiente de designar el mecanismo que funcionará como marco independiente para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. En relación con el mecanismo nacional de prevención de la tortura, se inició un proceso interinstitucional en 2008 que continuó en 2009, con el resultado de la propuesta del proyecto de Ley para el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para ser presentado ante el honorable Congreso de la República en 2010.

Por su parte la justicia transicional ha dado pasos importantes en la consolidación de la justicia en Guatemala. El 2009 se caracteriza como un año de avances en varios casos históricos dentro del contexto de la justicia y procesos en tribunales que sentarán precedentes normativos e históricos en la aplicación de justicia, en particular aquellos con carácter vinculante por medidas emanadas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Las condenas y fallos históricos sobre desaparición forzada ocurridas en la aldea Choatulum, municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango y la aldea El Jute, Chiquimula, son sentencias paradigmáticas en los casos de violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado.

Los fallos realizados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la investigación del crimen contra el periodista y político Jorge Carpio Nicolle y sus acompañantes, así como los casos conocidos por los nombres “niños de la calle (Villagrán Morales y otros)” y el de la “Panel Blanca” representan hechos inéditos en la historia reciente del país, porque se reconoce que Guatemala forma parte del sistema interamericano de derechos humanos y la jurisdicción que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano de justicia. Con esto, el sistema de justicia allana el camino para el cumplimiento de las sentencias emanadas por dicho órgano del sistema interamericano, y fortalece el Estado de Derecho en Guatemala.

Los avances y las conclusiones que se desprenden del informe se presentan en el último capítulo de manera sucinta pero con intención integral y armónica.

Por razones metodológicas y cronológicas, muchas de las estadísticas utilizadas fueron objeto del análisis tomando en cuenta 10 o en algunos casos 11 meses del año, particularmente aquellas en referencia al derecho a la vida. Sin existir motivo de hacer variaciones en el análisis, para una mejor comprensión de la situación descrita, se agregan datos actualizados en las secciones oportunas del capítulo pertinente, o en su defecto se agregan las tablas respectivas del año completo en el anexo estadístico.

CAPÍTULO I

Violaciones al derecho a la vida y la integridad física



- 1.1. La normativa y el fortalecimiento institucional
- 1.2. La violencia
 - 1.2.1. Espiral creciente
 - 1.2.2. Adolescencia, juventud y pandillas
 - 1.2.3. Pilotos, ayudantes y pasajeros en el transporte público
 - 1.2.4. Muerte violenta de adultos mayores
 - 1.2.5. Muerte violenta de mujeres
 - 1.2.5.1. Aplicación de la ley contra el femicidio (22-2008)
 - 1.2.6. Niñez y adolescencia víctima de violencia criminal
- 1.3. Violencia intrafamiliar
- 1.4. Menores víctimas de violencia sexual
- 1.5. Secuestros de niños y adolescentes
- 1.6. La tortura
 - 1.6.1. La tortura en la muerte violenta
 - 1.6.2. Sujetos responsables
- 1.7. Linchamientos
 - 1.7.1. Juntas Locales de Seguridad (JLS)
- 1.8. La trata de personas en Guatemala
 - 1.8.1. País de origen, tránsito y destino
- 1.9. El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia

CAPÍTULO I

Violaciones al derecho a la vida y la integridad física

Entre los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentran el derecho a la vida y a la seguridad de la persona. Los tres primeros artículos del texto constitucional hacen explícita la prioridad y defensa de ambos derechos guardando una relación indisoluble: proteger a la persona y a la familia, la vida y seguridad, la libertad, justicia, paz y desarrollo integral, como obligaciones indeclinables del Estado.

En el ámbito de la realización de los derechos humanos el Estado se constituye en garante esencial de la vida y la seguridad de la sociedad, sin cuya plena observancia es incompleto el ejercicio del conjunto de derechos reconocidos por la Constitución.

En el marco del respeto de los derechos humanos y la agilización de la gestión administrativa, la vigilancia de las acciones y omisiones en que incurren el Estado de Guatemala y los funcionarios públicos es tarea prioritaria para el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), quien, en sucesivos informes al honorable Congreso de la República, ha expresado su preocupación por el grave deterioro en la seguridad pública, el derecho humano a la vida y la manera significativa en que interfiere en el ejercicio de los otros derechos fundamentales de la población.

En este capítulo se ofrece un panorama de la situación observada en materia del derecho a la vida, a la integridad y seguridad de las personas a lo largo de 2009. Utilizando como indicadores las estadísticas oficiales, principalmente de las bases de datos de la PNC, se concluye que hay un incremento de la violencia y el crimen organizado con respecto a 2008 y que, en algunas esferas específicas se produjo un deterioro preocupante.

La impunidad sigue siendo un referente de la violencia y homicidios. Se han reabierto viejos fenómenos como el linchamiento, que presentaban una curva descendente en cuanto a su frecuencia en años anteriores. Este tipo de acciones punitivas surgen frente a la desconfianza, falta de respuesta institucional y ausencia de programas de prevención que involucren a las comunidades con las autoridades.

Además, el conjunto de hechos delictivos, desestabilizadores y una serie de registros de muerte violenta con móviles comunes y conexos, planificados y en serie, los sicarios y el narcotráfico, demuestran el afianzamiento de los grupos criminales, que adquieren nuevas dimensiones y territorialidad. Las investigaciones y actuaciones judiciales de la CICIG, enumeran una serie de casos que involucran a

“cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad conformados por actuales y antiguos agentes del Estado con acceso a armas, municiones y explosivos, estructuras que han mudado su forma de operación al control de actividades delictivas organizadas y que no han sido controlados por las instituciones de seguridad del Estado, ni mucho menos sometidos al sistema de justicia, logrando impunidad para sus acciones y miembros”.¹

Durante 2009 la inseguridad y violencia han adquirido diversos matices. Unos en materia de avance institucional, producto de esfuerzos democráticos, como la discusión y acuerdo entre grupos de instituciones del G-4, integrado por el Procurador de los Derechos Humanos, que convocó al Arzobispo Metropolitano, al rector de la Universidad de San Carlos (USAC) y al representante de la Alianza de Iglesias Evangélicas (AIE) y al Gobierno, la aprobación de leyes, políticas públicas, el cumplimiento de recomendaciones emanadas de órganos de protección de derechos humanos y la extensión de servicios judiciales; y otros que por omisión o aquiescencia del Estado en la tolerancia y fomento de la impunidad, han permitido la progresión, reagrupación y readecuación del crimen organizado y los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

¹ Comisión Internacional Contra la Impunidad. CICIG. “Informe de actividades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, pág. 4, Guatemala: 2009.

1.1 La normativa y el fortalecimiento institucional

Los avances en materia de institucionalidad democrática son aquellos esfuerzos dirigidos al fortalecimiento en materia de seguridad y justicia. El énfasis especial está en la discusión y aprobación por parte del Congreso de la República de algunas leyes vinculadas a la seguridad y justicia, así como a acciones provenientes del Organismo Judicial y del Poder Ejecutivo.

Durante 2009 hubo una serie de avances e impulsos a través de leyes que favorecen las condiciones y acciones específicas en contra de la impunidad, ayudando al fortalecimiento de la administración de justicia y el Estado de Derecho en el país: la aprobación de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (9-2009), la Ley de armas y municiones (15-2009), Ley del fortalecimiento de la persecución penal (17-2009), Ley de Comisiones de Postulación (19-2009), Ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo (21-2009) y la Reforma Contra la Delincuencia Organizada (23-2009).

La falta de estabilidad en la gestión de la seguridad pública constituye un rasgo preocupante de la realidad institucional, que dificulta la continuidad de los planes y programas anunciados en cada gestión. Entre 2008 y 2009 cuatro Ministros de Gobernación e igual número de directores de la PNC han integrado el equipo de seguridad del Ejecutivo, a lo que se suman los cambios producidos en los distintos viceministerios en esa cartera.

A pesar de los cambios, las cifras de muertes violentas e inseguridad no disminuyen. Las violaciones al derecho a la vida parecen trasladarse de un sector a otro. Los ataques del crimen organizado se dirigen en contra de la población o el sistema de transporte y el sistema penitenciario. Las situaciones de violencia lejos de ser aisladas, tal y como muestra la estadística de muertes violentas, obedecen a ciertos patrones de planificación y mayor fortaleza del crimen organizado.

Otros factores preocupantes para el Magistrado de Conciencia han sido el deterioro institucional del sistema penitenciario y la lentitud e insuficiencia en las acciones dirigidas a la depuración y profesionalización de la PNC. La situación penitenciaria lejos de mejorar, se ha encontrado con agravantes en una serie de ataques en serie cometidos contra guardias penitenciarios. Especial preocupación tiene, para el Procurador, constatar que continúa siendo precario e insuficiente el control sobre las cárceles. Las requisas efectuadas siguen verificando el poder y privilegios de los reos. Las fugas registradas, el involucramiento y destitución de autoridades junto al ingreso de teléfonos portátiles, evidencian que la planificación criminal desde los presidios continúa.

El fortalecimiento y vigilancia de las cárceles requiere de un cuerpo profesional de guardias penitenciarios con incentivos salariales adecuados y condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones.

Además, el aumento de la criminalidad, especialmente en la esfera de muerte violenta no ha podido ser contenida por la PNC, cuyos resultados tanto en la prevención del delito como en la investigación criminal dan cuenta de limitaciones profundas en sus capacidades.

En las conclusiones sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Relator Especial de las Naciones Unidas señala que:

“existe un clima de impunidad generalizado en Guatemala, con notorias deficiencias del sistema de justicia, provenientes principalmente de factores estructurales y de la presión ejercida sobre los operadores de justicia.

[En la] investigación criminal, el Relator ha constatado que adolece de varias deficiencias, derivadas principalmente de la falta de personal y de instrumentos adecuados, tanto dentro del Ministerio Público, como dentro de la Policía Nacional Civil, [...] pudo constatar que aún existen graves obstáculos en el acceso a la justicia, en especial de los sectores pobres de la población y de las comunidades indígenas.

A ello se suman otros indicadores sumamente inquietantes: de cada 100 homicidios, sólo 2 son juzgados y de cada 100 delitos, sólo 4 son juzgados. Además, la amenaza de la penetración del narcotráfico y el crimen organizado puede plantear una situación irremediable.”²

Como ha dicho en varias oportunidades el Procurador de los Derechos Humanos, la PNC se convirtió en parte del problema y no de la solución al ambiente de inseguridad e impunidad existente en el país. Por esa misma razón ha insistido en la necesidad de hacer una depuración profunda de la institución policial.

El Acuerdo Nacional sobre Seguridad y Justicia (ANASJ) contenía una serie de medidas encaminadas a generar una profunda reforma en la PNC, propuesta que hasta la fecha no encontró eco en las autoridades de la época.

A mediados de 2007, por iniciativa del Ministerio de Gobernación se inició un proceso de revisión del modelo policial que, no obstante el interés y los aportes realizados por los actores, no logró traducir este esfuerzo en cambios sustantivos y de renovación en la institucionalidad policial.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos constata que el mejoramiento en los niveles de seguridad de la sociedad guatemalteca pasa necesariamente por una reforma integral de la PNC que permita dotarla de confiabilidad y eficiencia. Por ejemplo, las investigaciones que ha realizado revelan que existe una gran proporción de casos en los que no se han logrado establecer los móviles. La base de datos a octubre de 2009 denota desconocimiento sobre las circunstancias y motivos de homicidios de 2,315 personas (47.46%).

Este proceso debe contar con el aporte del conjunto de los actores nacionales y traducirse en una agenda de transformaciones sustantivas cuya oferta responda a las necesidades de seguridad de la población; el liderazgo de las máximas autoridades del país resulta fundamental para dotarlo de acciones vinculantes y obligatorias.

1.2 La violencia

El país se desenvuelve en una constante espiral de violencia que rebasa las acciones implementadas por el Estado a través de las fuerzas de seguridad, de investigación, condena y castigo del delito. La violación del derecho a la vida es particularmente notoria y presenta un aumento en la frecuencia de la vulneración de los derechos particulares de ciertos grupos poblacionales, como el caso de niños, niñas y adolescentes, así como de ciertas categorías ocupacionales, como los trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros.

Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Los efectos y comportamiento del crimen inciden de forma directa e indirecta el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal, a la propiedad privada, el derecho al trabajo y a la salud.

En reiteradas oportunidades, el Procurador de los Derechos Humanos ha dicho que, en materia del derecho a la vida y a la seguridad, el Estado es el principal violador, ya sea por omisión o por acción. La participación de agentes del Estado, y especialmente de los cuerpos de seguridad, en hechos delictivos y abusos contra la población ha sido frecuente.

Las violaciones por omisión al derecho a la vida y a la seguridad en las que incurre el Estado son el resultado de la grave crisis que afecta a las instituciones del sector de seguridad y justicia.

A partir del deterioro, debilidad institucional y la falta de capacidad del Estado para asegurar las condiciones que ofrezcan la construcción y consolidación democráticas; las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante 2009, a través de la violencia y el terror en sus manifestaciones más inequívocas, cómo el creciente número de homicidios, señales de tortura e incremento de la muerte violenta de mujeres, asesinatos

² Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pág. 2-3. Guatemala: 2009.

en el transporte público y linchamientos, son indicadores que ejemplifican la condición de violencia estructural en que se encuentra el país.

La violencia ha dejado de ser un parangón a los años anteriores. Las cifras de 2009 en cuanto a violaciones al derecho a la vida reflejan la descomposición e incapacidad institucional para afrontar el flagelo de la violencia en sus diversas manifestaciones.

El carácter estructural de la violencia se visualiza en su incorporación como fenómeno de expresión social y refleja viejos patrones de terror en la historia nacional en nuevos mecanismos de expresión. No se circunscribe como un complejo de individualizaciones, sino se convierte en la suma de mecanismos que combinan enfrentamientos, repliegue, desplazamiento y afianzamiento de grupos de poder y crimen organizado que se enfrentan, mimetizan y reproducen la violencia como un fenómeno con características sociales.

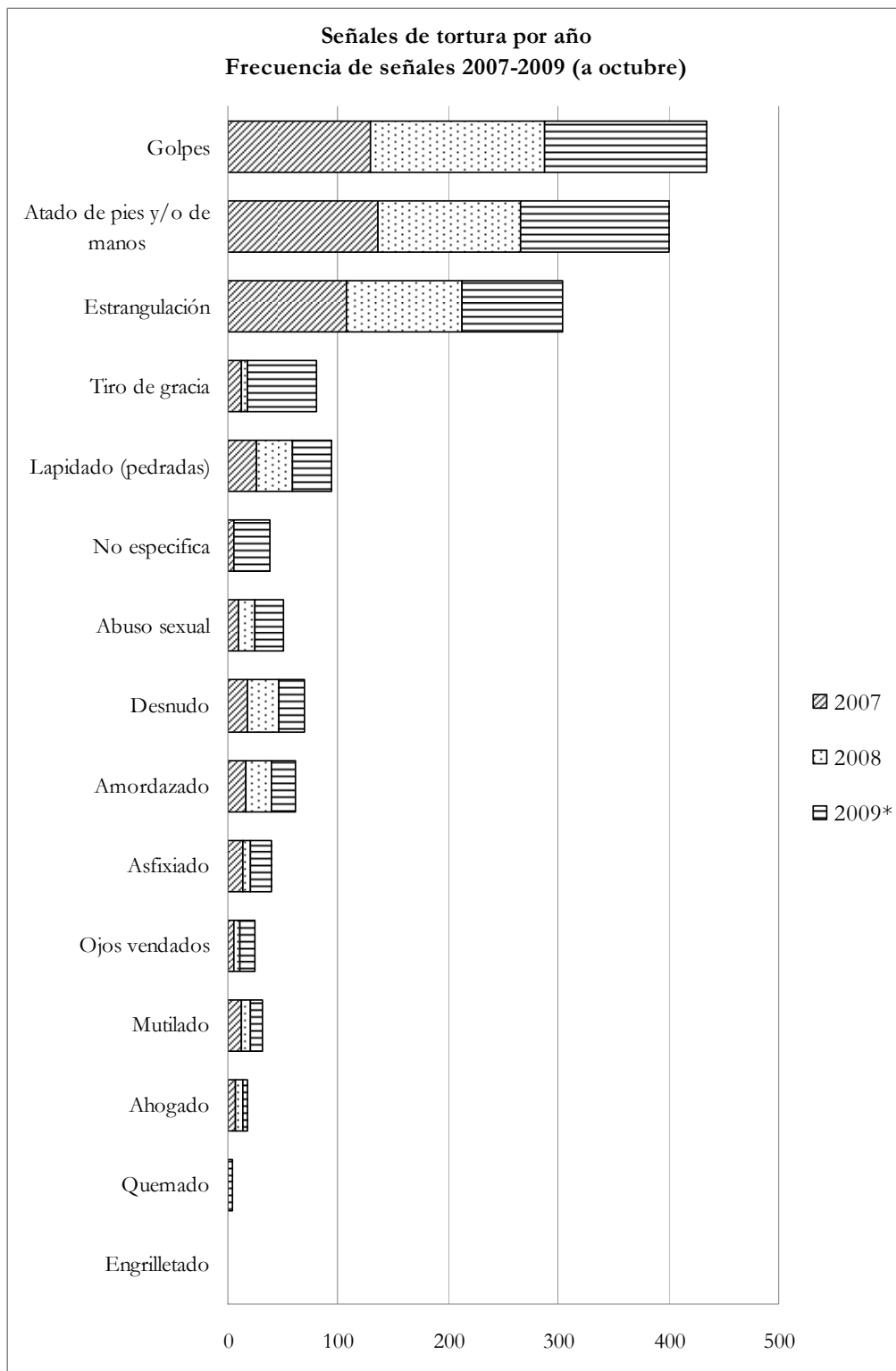
Indicadores sobre muertes violentas como las señales de tortura, describen el incremento y el terror que se generan especialmente a través de su reproducción, manifestación y secuelas sociales. El objetivo individual de dar muerte ha sido superado por el de reflejar y perpetuar las señales de tortura en la sociedad. El terror adquiere manifestaciones más simbólicas y personalizadas de ejercer poder o dominio de la delincuencia organizada.

Las gráficas sobre la proporción y señales de tortura observadas en los cadáveres evidencian el encono de la violencia social y simbólica. Los actos describen señales inequívocas de tortura y como los homicidios se cometen no sólo con el objetivo de quitar la vida, sino de transmitir mensajes al conjunto de personas.

Para 2009 los casos de señales de tortura han aumentado en una proporción de 100. El indicador que tiene el mayor número de señales es el relativo al de “atado de pies y manos” (134), le siguen los golpes (148) y estrangulación (91). En comparación con años anteriores, la categoría con mayor incremento es “tiro de gracia” (62). Es importante destacar el crecimiento de las categorías de asfixiado, ojos vendados, amordazado y engrilletado, que registran incrementos y son categorías funcionales de terror que se añaden a los mecanismos de tortura utilizados en años anteriores por los homicidas ((gráfica 2)).

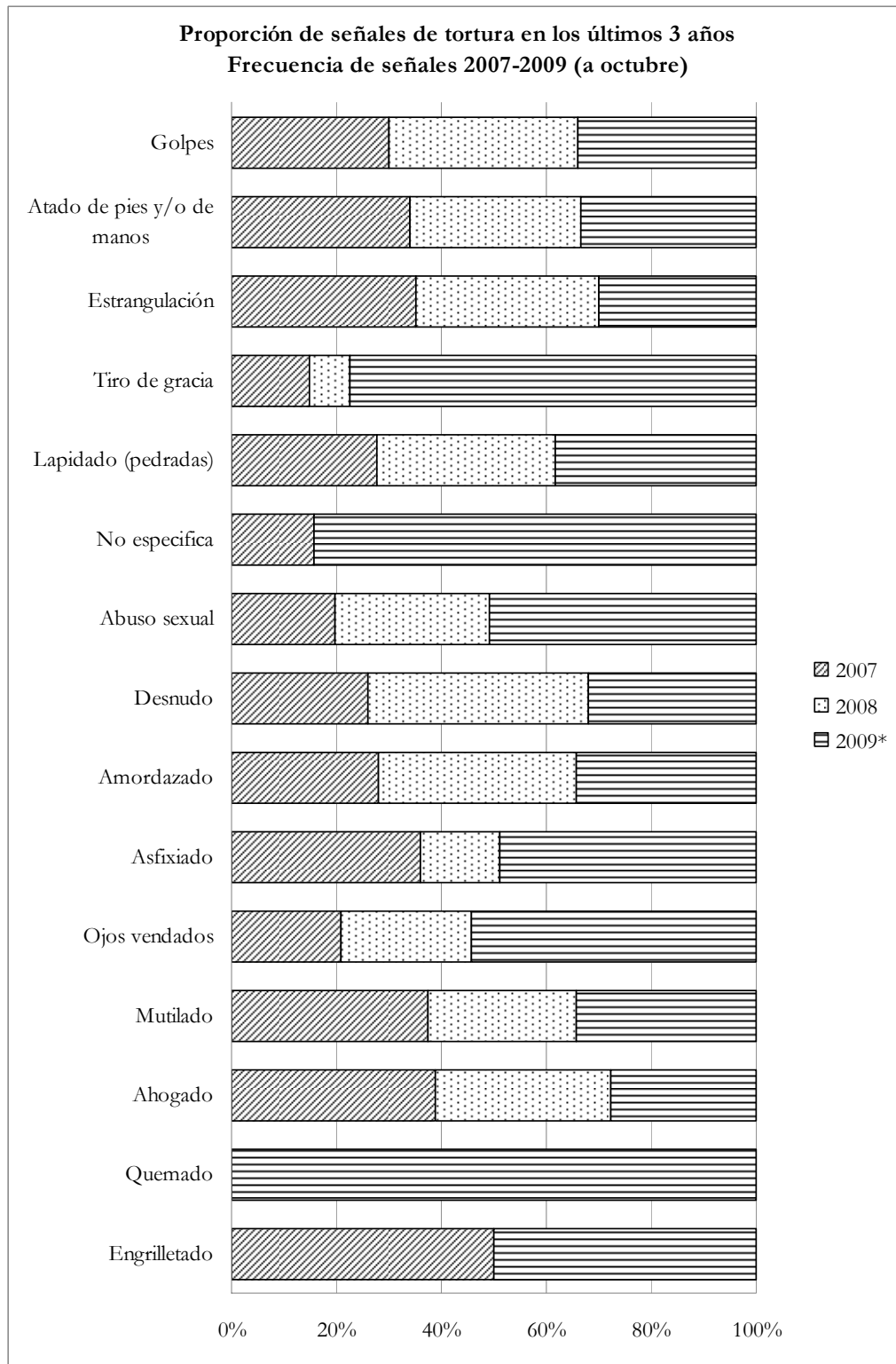
La brutalidad de los crímenes cometidos en muchos casos muestra como se pretende lograr el máximo efecto psicológico en la sociedad. En algunas muertes violentas se evidencia como los cuerpos con señales de tortura, aún después de la muerte, fueron mutilados, de ahí que se deduzca sobre el doble objetivo que cumple la eliminación física.

Gráfica 1



Fuente: elaboración propia con datos hemerográficos a octubre de 2009.

Gráfica 2



Fuente: elaboración propia con datos hemerográficos a octubre de 2009.

La violencia sistemática, a través de las expresiones colectivas y de terror, se convierte en instrumentos de comunicación y dominación que hacen posible la “complicidad y el silencio”. Las redes del crimen se fortalecen con la débil aplicación de la justicia y la recurrencia de la impunidad; se incrementan las violaciones a los derechos humanos y se inhibe el ejercicio de los derechos básicos de los ciudadanos.

El 2009 refleja ciertas características y comportamientos del crimen organizado que vale la pena diferenciar y existen indicios para sostener que la violencia se incrementa en los momentos en que dichos grupos se perciben amenazados en su capacidad de acción y control. Las medidas tomadas en los centros penitenciarios y los ataques en contra de sus miembros son un ejemplo de su capacidad en contra del aparato institucional.

El análisis semanal³ de homicidios de personas relacionadas con el transporte público, PNC y sistema penitenciario (tabla 1) permite establecer que existen algunos patrones de conexión entre los hechos. Durante estos periodos la violencia lejos de ser aislada, mantiene correlaciones importantes que describen estrategias particulares que fomentan la impunidad e ingobernabilidad.

Para presentar un análisis de los hechos, a continuación se engloban tres temporalidades divididas de acuerdo con la curva de violencia. Dos de estas se componen por dos bloques de análisis de doce semanas cada uno, y la última tiene un rango de 17 semanas. La división se realiza en coherencia con las cifras que presenta la muerte violenta.

Las primeras doce semanas del año se mantienen con una media de 129 homicidios, es decir, 18.43 muertes diarias. Sólo cuatro semanas (3, 6 y 8) se mantienen con números más bajos, y la semana 13 presenta la primera baja, con 106 víctimas. En la siguiente semana hay un repunte que acrecienta la cifra a 142 muertes.

La semana 12 (del 19 al 25 de marzo) presenta el corolario de muerte violenta del primer periodo; los incidentes registrados describen la patología del crimen organizado en el país. Durante la coyuntura se encontraba en discusión el ANASJ, la aprobación por artículos de la Ley de armas y municiones, la presentación del informe realizado por el Procurador de los Derechos Humanos sobre los documentos encontrados en el archivo histórico de la antigua Policía Nacional (PN) y la discusión de iniciativas a modificaciones y reformas legislativas planteadas por la CICIG.

En un solo día una serie de escenarios creó caos e ingobernabilidad. Se registraron hechos planificados en sitios y horas determinados para generar miedo en la ciudad. Los días 23 y 24 de marzo se cometieron atentados en contra de pilotos de rutas que cubren las zonas 6, 7 y 12 que dejaron un saldo de tres muertos y seis heridos, incluidos dos pilotos, además de un ataque a una autopatrulla de la PNC en la zona 11. Los hechos fueron perpetrados uno tras otro, los atentados en contra de pilotos se dieron en un lapso de tiempo de 30 minutos.

La segunda temporalidad se encuentra ubicada en la baja de cifras de muerte violenta. Se hace patente de la semana 15 a la 26, con un promedio diario de 16.50 homicidios, que representa una disminución de 1.93 personas frente a las cifras del periodo anterior. La media se ubicaba en 115 muertes, es decir, una reducción de 15 muertes semanales en comparación con las primeras 12 semanas. En este periodo entraron en vigencia medidas institucionales, implementadas durante el mes de abril, tendientes a reducir el poder del crimen organizado.

³ El análisis semanal está determinado de acuerdo a la primera semana del año que inicia el día jueves 1 de enero. Esto permite estructurar la unidad de tiempo y ubicar el mismo rango de días.

Tabla 1
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público, PNC y sistema penitenciario
 Por semana y categoría 2009*

Inicio y final de semana	Mes comprendido	Semana	Homicidios							
			Todos los homicidios	Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto delincuente	PNC	Sistema Penitenciario
1 a 7 de enero	Ene.	1 SMN 2009	133	1	0	4	0	0	0	0
8 a 14 de enero	Ene.	2 SMN 2009	132	5	3	0	0	0	1	0
15 a 21 de enero	Ene.	3 SMN 2009	117	1	1	1	0	0	0	0
22 a 28 de enero	Ene.	4 SMN 2009	132	1	1	0	0	0	0	0
29 de enero a 4 de febrero	Ene. - Feb.	5 SMN 2009	134	6	0	0	0	0	0	0
5 a 11 de febrero	Feb.	6 SMN 2009	122	1	0	0	0	1	0	1
12 a 18 de febrero	Feb.	7 SMN 2009	133	3	0	1	0	0	0	0
19 a 25 de febrero	Feb.	8 SMN 2009	119	5	1	2	0	1	1	0
26 de febrero a 4 de marzo	Feb. - Mar.	9 SMN 2009	136	4	2	1	0	1	2	1
5 a 11 de marzo	Mar.	10 SMN 2009	131	6	2	1	0	0	4	0
12 a 18 de marzo	Mar.	11 SMN 2009	132	3	1	2	0	3	0	0
19 a 25 de marzo	Mar.	12 SMN 2009	137	7	1	4	0	0	1	0
26 de marzo a 1 de abril	Mar. - Abr.	13 SMN 2009	106	3	1	1	0	1	1	0
2 a 8 de abril	Abr.	14 SMN 2009	142	4	0	2	0	0	0	0
9 al 15 de abril	Abr.	15 SMN 2009	105	1	0	1	0	0	0	0
16 al 22 de abril	Abr.	16 SMN 2009	110	1	0	0	0	0	1	0
23 a 29 de abril	Abr.	17 SMN 2009	113	7	2	1	0	0	8	1
30 de abril a 6 de mayo	Abr. - May.	18 SMN 2009	98	3	1	0	0	0	0	0
7 a 13 de mayo	May.	19 SMN 2009	115	7	0	3	0	0	0	0
14 a 20 de mayo	May.	20 SMN 2009	105	4	1	0	0	0	1	0
21 a 27 de mayo	May.	21 SMN 2009	119	1	0	1	0	1	0	0
28 de mayo al 3 de junio	May. - Jun.	22 SMN 2009	127	4	0	6	0	3	1	0
4 a 10 de junio	Jun.	23 SMN 2009	130	3	0	0	0	0	0	0
11 a 17 de junio	Jun.	24 SMN 2009	113	1	0	0	0	1	0	0
18 a 24 de junio	Jun.	25 SMN 2009	127	0	0	2	0	0	1	0
25 de junio al 1 de julio	Jun. - Jul.	26 SMN 2009	124	4	1	0	0	0	0	0
2 al 8 de julio	Jul.	27 SMN 2009	142	7	0	0	0	0	1	0
9 al 15 de julio	Jul.	28 SMN 2009	106	2	1	0	0	0	0	0
16 al 22 de julio	Jul.	29 SMN 2009	111	4	3	1	0	0	1	0
23 al 29 de julio	Jul.	30 SMN 2009	132	5	1	1	0	0	0	1
30 de julio a 5 de agosto	Jul. - Ago.	31 SMN 2009	124	1	0	0	0	1	0	0
6 a 12 de agosto	Ago.	32 SMN 2009	133	7	0	1	0	0	1	0
13 a 19 de agosto	Ago.	33 SMN 2009	155	4	0	0	0	0	1	0
20 al 26 de agosto	Ago.	34 SMN 2009	133	5	1	0	0	1	0	0
27 de agosto al 2 de septiembre	Ago. - Sep.	35 SMN 2009	142	6	3	2	0	0	0	0
3 al 9 de septiembre	Sep.	36 SMN 2009	113	5	0	0	0	0	1	4
10 a 16 de septiembre	Sep.	37 SMN 2009	152	3	1	2	0	0	2	0
17 a 23 de septiembre	Sep.	38 SMN 2009	119	2	0	1	0	0	0	0
24 a 30 de septiembre	Sep.	39 SMN 2009	124	5	2	0	0	0	1	0
1 al 7 de octubre	Oct.	40 SMN 2009	142	2	2	0	0	0	0	1
8 al 14 de octubre	Oct.	41 SMN 2009	97	2	2	1	0	3	3	0
15 al 21 de octubre	Oct.	42 SMN 2009	118	6	3	0	0	0	2	0
22 a 28 de octubre	Oct.	43 SMN 2009	149	7	3	0	0	0	0	0
29 de octubre a 4 de noviembre	Oct. - Nov.	44 SMN 2009	**	3	1	3	0	1	2	3
5 al 11 de noviembre	Nov.	45 SMN 2009	**	6	0	2	1	1	2	0
12 al 18 de noviembre	Nov.	46 SMN 2009	**	10	2	0	0	0	1	0
19 a 25 de noviembre	Nov.	47 SMN 2009	**	4	1	0	0	0	0	0
1 de Enero a 25 de Noviembre		SMN 1 - 47	5384	182	44	47	1	19	40	12

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC y archivo hemerográfico.

* El total de homicidios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, según la base de datos de la PNC, es de 6498.

** Datos hasta el mes de octubre.

La primera, de carácter estructural se refiere a la entrada en vigencia de la Ley de armas y municiones y otras con tintes más coyunturales, como la reforma al reglamento de tránsito, que limita la cantidad de personas a transportarse en motocicleta y obliga al uso de un casco y chaleco reflector, el los cuales el número de placa debe ser legible. Además, en el sistema penitenciario se implementaron portales de seguridad y bloqueadores de señal telefónica.

Varias investigaciones realizadas por la PNC establecen que desde los centros penitenciarios existen grupos y líderes con el poder para planear y dirigir actividades delictivas como las extorsiones a pilotos, comercios y

negocios. Además, algunos de sus miembros son encargados de articular actividades delictivas ligadas al sicariato, tráfico de drogas y robo de vehículos.

Entrada la semana número 27 (del 2 al 8 de julio), las muertes violentas vuelven a incrementarse. La media de muertes durante el número de semanas al 28 de octubre (semana 43) es de 129 muertes. Además en ese periodo se encuentran las 3 semanas más violentas del año.

La semana con la cifra más alta es la que comprende los días del 13 al 19 de agosto, con 155 muertes. Le sigue la semana 37 (del 10 al 16 de septiembre) con 152 muertes y, finalmente, la semana del 22 al 28 de octubre, con 149 muertes. Una explicación sencilla podría resumir a primera vista que las dos primeras fechas comprenden días de asueto, el 15 de agosto y el 20 de octubre.

El poder del crimen organizado se evidencia en su capacidad organizativa y reactiva. Como respuesta a las iniciativas en su contra, encuentra alternativas para readecuarse a las condiciones. Las políticas públicas de seguridad implementadas no afrontan las causas, sino los efectos. Ante el bloqueo celular, los reclusos adquirieron y utilizaron dentro de los centros preventivos aparatos satelitales que permiten comunicarse a cualquier área.

Además, varios crímenes siguieron cometiéndose en motocicleta. La clave se encuentra en la incapacidad o tolerancia a las acciones delictivas por parte de las autoridades, tanto en el privilegio sostenido en las cárceles, como de manera particular en la falta de investigación e identificación de los ejecutores de este tipo de crímenes.

En el mes de agosto se sustituye nuevamente al director del Sistema Penitenciario y durante los meses de septiembre y octubre, el Ministerio de Gobernación realiza una serie de traslados de varios reos de alta peligrosidad que forman parte de casos de alto impacto. El primer traslado fue de 15 reos, ejecutado el día 28 de septiembre; en octubre se realizaron cuatro traslados con fecha 8 (18 reos), 21 (siete reos), 22 (seis reos) y 27 (cinco reos). A noviembre sólo se ha registrado uno.

En la primera semana de septiembre se realizó una requisa en la cárcel de máxima seguridad de El Boquerón. Se descubrió el involucramiento y complicidad de los directores y de 37 trabajadores de la cárcel en el ingreso de droga, armamento y aparatos eléctricos.

Mientras se realizaba la requisa en presidios, se da inicio a una serie de ataques en contra del sistema penitenciario como producto del cese de privilegios en las cárceles y los traslados de reos. Reportes de los medios de comunicación dan cuenta del primer ataque con armas de fuego a la sede del Sistema Penitenciario en la zona 1 capitalina en la primera semana de septiembre.

El nivel de la acción planificada llegó al punto de perpetrar dos ataques más en un lapso de 48 horas. El primero se registró en contra de un vehículo de presidios mientras transportaba un reo de la cárcel de Villa Nueva hacia la de la zona 18; el segundo, casi simultáneo, se dio a inmediaciones del Hospital San Juan de Dios, con saldo de la muerte del alcaide de la cárcel de El Progreso.

Es importante señalar que, en esa coyuntura, el Ministerio Público investiga a 27 miembros de la policía involucrados en el robo de 119 kilos de cocaína y, acto seguido, se destituye a la cúpula de la PNC. Además, se establece el nexo entre autoridades y guardias del sistema penitenciario en la fuga de dos reclusos de la cárcel Los Jocotes, en Zacapa.

Las acciones del crimen organizado se ven contenidas en las cifras de las semanas 40 y 41, con curvas de muerte violenta fuera de lo común. En la primera ocurrieron 142 muertes, cuatro de ellas relacionadas con el transporte público y una con el sistema penitenciario.

En la segunda se registran 97 homicidios, siendo la semana menos violenta durante el año, sin embargo debe señalarse que tiene la mayor cantidad de policías heridos (12), y registra el fallecimiento de cinco personas vinculadas al transporte público y tres policías.

La ocurrencia del fenómeno de muerte violenta se manifiesta de forma irregular en la población en general pero se enfoca y traslada a otra esfera, haciendo que la violencia sea recurrente en impacto social y que las cifras permanezcan constantes.

Finalmente, las temporalidades de mayor estabilidad en cuanto a reducción de muerte violenta también presentan variaciones en los asesinatos de pilotos. Las semanas 17, 18 y 19 tienen rasgos distintos. Mientras las cifras disminuyen a 113, 96 y 115 muertes respectivamente, en esas tres semanas son asesinados 17 pilotos.

Del análisis de los hechos acontecidos a lo largo del año, tal y como se establece en el análisis semanal, existen por lo menos tres espacios diferenciados y conectados entre sí, que relacionan las dimensiones de impacto, constitución y esferas del crimen organizado.

En primera instancia, su comportamiento tiene como ámbito por excelencia la estructura organizativa constituida alrededor del Estado, que le redundan en beneficios operativos y económicos. Ha desarrollado un control territorial con incidencia en poderes locales y cuenta con la capacidad y logística de alterar la gobernabilidad a través de la utilización de la violencia. Cuenta con una flexibilidad reactiva capaz de reconducirle frente a las acciones que realiza el Estado.

El segundo espacio característico del crimen organizado se refiere a las redes de relaciones sociopolíticas y económicas con las que opera. Éstas comprenden la implicación de autoridades y la institucionalidad operativa que proporciona protección, patrocinio y connivencia o complicidad. De ello han dado evidencias las investigaciones policiales efectuadas en el segundo semestre del año sobre la presunta complicidad de altos mandos policiales en el robo de 300 mil dólares en un vehículo detenido en Chimaltenango, y la desaparición de 98 kilos de cocaína en el bulevar Las Buganvillas, zona 18. Incluso, se consigna la complicidad de 23 policías más en el lugar donde fue descubierto el cargamento. Además, en el caso Rosenberg han sido detenidos y acusados de ser autores materiales del asesinato del abogado, un ex militar, ex oficiales y cinco policías en activo.

La tercera y última en la que opera y desarrolla sus actividades el crimen organizado se da a partir de una lógica de provisión, adquisición de bienes y prestación de servicios ilegales. Esta esfera comprende los hechos delictivos cometidos por sicarios o bien, la riqueza obtenida por medio del narcotráfico y la extorsión. Es significativo el dato sobre las distintas facetas de la violencia durante el año en los casos de muerte violenta. Del total de víctimas, en las cifras tipificadas como “venganza personal” se presentan 311 casos (19.62%). A estos datos se añaden los relativos a “ajustes de cuentas” con 53 personas (4.45%). Estos dos elementos aportan insumos sobre un comportamiento del crimen organizado que abona y ejecuta operaciones específicas para eliminar a personas vía el sicariato.

1.2.1 Espiral creciente

De acuerdo con el *Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano*, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes durante 2000 era de 28 personas, aumentando de “manera sostenida durante siete años consecutivos hasta completar el mayor incremento acumulado de toda la región [centroamericana]: veinte homicidios anuales más, por cada 100.000 habitantes”⁴, es decir, 48 homicidios.

La violencia mantiene una espiral creciente, y, en el país, en menos de 10 años se duplicó su tasa. Según las proyecciones de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, la cifra podría alcanzar 49 muertes

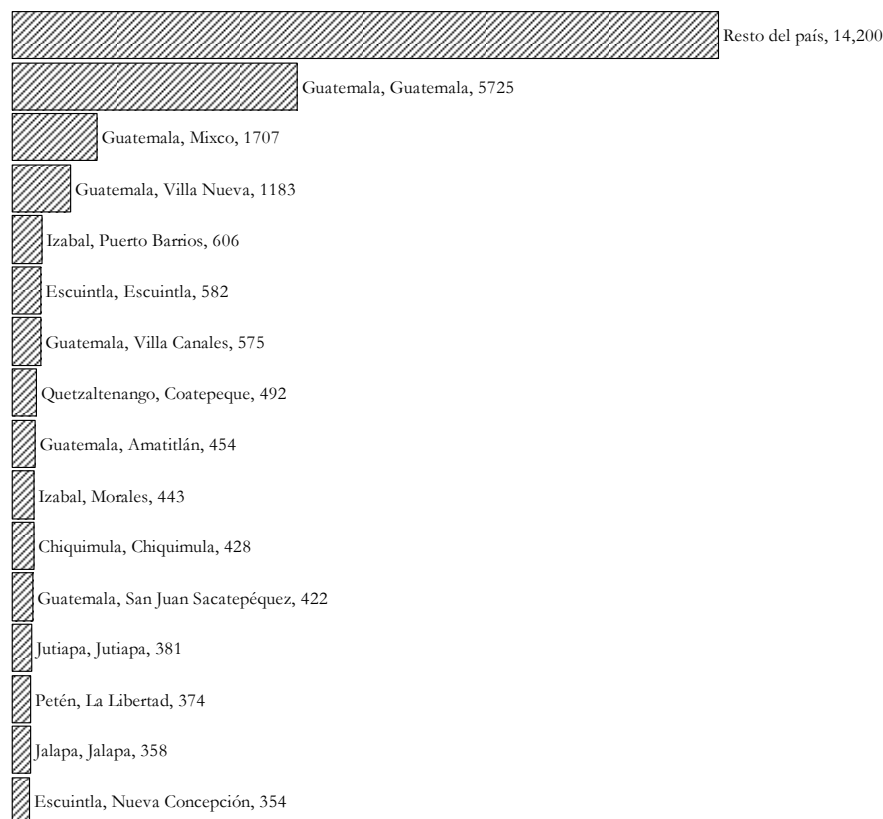
⁴ PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano*, pág. 69, octubre de 2009.

por cada 100,000 habitantes a nivel nacional para el año 2009. Incluso, a partir de las estadísticas de la PNC, hay una suma total de 14,200 homicidios en los últimos cinco años.

En esta temporalidad, 16 municipios, pertenecientes a 8 departamentos, que albergan al 27% de la población nacional, concentran el 50.44% de los homicidios del país, siendo éstos Guatemala (5,725), Mixco (1,707), Villanueva (1,183), Villa Canales (575), Amatitlán (454), San Juan Sacatepéquez, Puerto Barrios, Morales (443), Coatepeque (492), Escuintla (582), Nueva Concepción (354), Chiquimula (428), Jutiapa (381), La Libertad (374) y Jalapa (358).

Gráfica 3

Concentración de los homicidios en los últimos 5 años



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC y el Instituto N INE

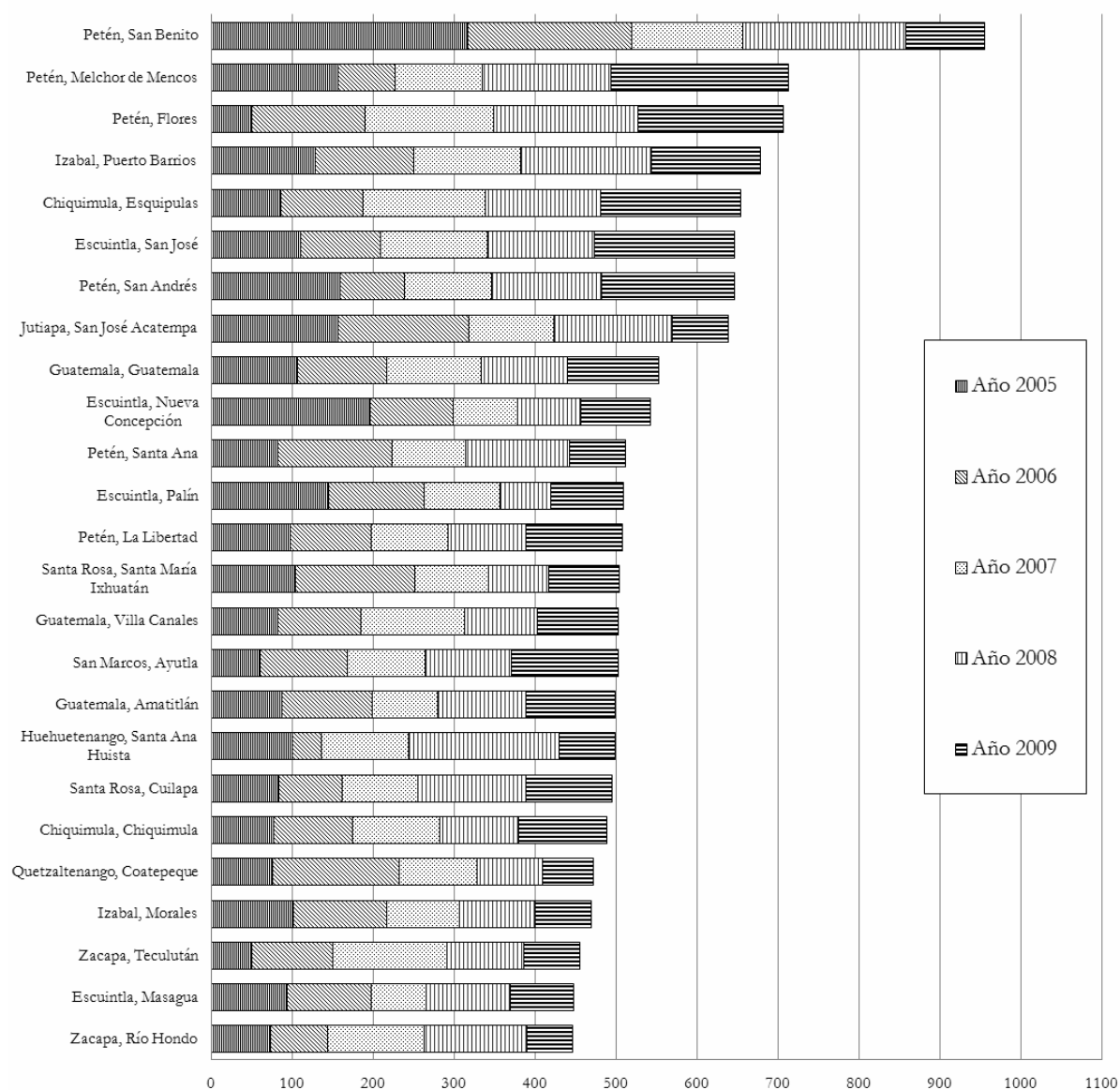
Geográficamente, el 2005 refleja una mayor concentración de homicidios en los departamentos de Petén y Escuintla. Por cada 100,000 habitantes, el primero muestra los casos de Melchor de Mencos (156), San Andrés (159) y San Benito (317), y el segundo, los de Escuintla (119.41), Nueva Concepción (196.94) y Palín (145.75). Para el 2006, preferentemente por cada 100,000 habitantes se ubica de nuevo Petén, pero se agregan los municipios de Flores (139), San Benito (201), San José (150) y Santa Ana (141).

En 2007 la violencia se refleja con mayor intensidad en tres departamentos por cada 100,000 habitantes. Junto a Petén, aparecen Guatemala y Zacapa. Se mantienen los municipios de Flores (159), San Benito (138) y San José (122). En el caso de Guatemala, la ciudad de Guatemala (115), San José del Golfo (119) y Villa Canales (127). Por su parte, en Zacapa resaltan los municipios de Río Hondo (119) y Zacapa (140).

Los años 2008 y 2009 adquieren nuevas y distintas características. La violencia se muestra menos uniforme en cuanto a lugares geográficos y tiene un matiz más fronterizo que los años anteriores. El fenómeno aparece de

forma más dispersa y se agrupa particularmente en siete departamentos: Petén, Santa Rosa, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa y Zacapa.

Gráfica 4
Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes
Por Departamento y Municipio, acumulado de 2005 a 2009 Oct.



Fuente: Elaboración propia con datos de PNC e INE.

El municipio con la mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes durante los últimos cinco años fue San Benito Petén (año 2005) con 317 personas muertas violentamente. El departamento con mayor tasa proporcional de violencia es Petén, y la frecuencia con la que, en los últimos cinco años, aparece a la cabeza de los diez sitios más violentos es muy alta. Casos como el del municipio de Flores presentan un crecimiento sostenido desde 2006, comenzando con 139 homicidios hasta llegar a 177 por cada 100,000 habitantes.

Casos relevantes son los de Puerto Barrios, Izabal y el de Cobán, Alta Verapaz. A partir de 2005, en Puerto Barrios las cifras se mantienen en aumento, en ese año la tasa de homicidios fue de 128 muertos, creciendo

para 2009 en 32 muertos por cada 100,000 habitantes. Aunque durante los últimos cinco años el municipio de Cobán no aparece entre los municipios más violentos (en proporción con la población), en este período ha crecido de 7 a 41 homicidios.

Comparativamente, un análisis de los últimos tres años permite ver que las cifras de muerte violenta continúan en aumento. Los tres años suman en total 15,311 muertes. El promedio de muertes aumenta en la proporción de un muerto cada día. En 2007 la cifra era de 16 muertes, para 2008 de 17 y a octubre de 2009 de 18. Durante 2007 el número de víctimas de homicidio fue de 4,766 y en 2008 la cifra había aumentado en 347 personas. En 2009, el número de muertes a octubre era de 5,432, es decir, 666 muertes más que en 2007 y 319 en comparación con 2008.

A partir de las estadísticas se puede inferir que en siete departamentos se concentra el 70% de los homicidios cometidos en el país. Geográficamente, el departamento de Guatemala es el más violento que, para los tres años de análisis, agrupa el 40.06% de muertes de todo el país.

Le sigue Escuintla (7.64%), Petén (6.45%) e Izabal (5.10%); en Chiquimula y Jutiapa, el 4.98% y 4.06%, respectivamente, conjuntamente suman un 32%. Seguido se encuentra una serie de municipios que se ubican con el rango del 2%, entre los están Quetzaltenango (2.99%), San Marcos (2.99%), Suchitepéquez (2.72%), Jalapa (2.66%), Zacapa (2.57%), Huehuetenango (2.49%) y Alta Verapaz (2.28%).

Las muertes violentas entre 2006 y 2007 en los departamentos de Escuintla (0.83%), Petén (0.70%) y Alta Verapaz (0.58%) fueron las que más aumentaron. Paradójicamente, el departamento que tiene un registro porcentual negativo es el de Guatemala (-1.32%).

La situación se revierte comparativamente entre 2007 y 2008. Guatemala (2.17%) registra el mayor crecimiento porcentual, le siguen San Marcos (0.81%) y Huehuetenango (0.71%).

Tabla 2
Muerte violenta por departamento, 2007-2009
Frecuencias y porcentajes

Departamento	2007	2008	2009	TOTAL 2007-2009	
	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct		
	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	%
Guatemala	1,916	1,988	2,230	6,134	40.06
Escuintla	338	405	426	1,169	7.64
Petén	291	348	348	987	6.45
Izabal	249	290	242	781	5.10
Chiquimula	249	243	271	763	4.98
Jutiapa	221	213	187	621	4.06
Santa Rosa	184	194	197	575	3.76
Quetzaltenango	153	167	138	458	2.99
San Marcos	121	142	195	458	2.99
Suchitepéquez	117	139	160	416	2.72
Jalapa	112	132	163	407	2.66
Zacapa	147	122	125	394	2.57
Huehuetenango	103	116	162	381	2.49
Alta Verapaz	89	125	135	349	2.28
Chimaltenango	101	87	89	277	1.81
Sacatepéquez	92	101	57	250	1.63

Retalhuleu	74	81	68	223	1.46
Quiche	65	68	64	197	1.29
El Progreso	50	61	64	175	1.14
Baja Verapaz	37	34	59	130	0.85
Sololá	40	36	39	115	0.75
Totonicapán	17	21	13	51	0.33
Total	4,766	5,113	5,432	15,311	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC a octubre de 2009.

Comparativamente entre 2008 y 2009 los departamentos que han registrado un número menor de víctimas han sido Izabal (-48), Sacatepéquez (-44), San Marcos (-29), Jutiapa (-26), Retalhuleu (-13), Quiche (-4) y Totonicapán (-8). De forma inversa, aquellos cuyas cifras aumentaron fueron Guatemala (242), Quetzaltenango (53), Zacapa (46), Huehuetenango (31), Chiquimula (28) y Baja Verapaz (25).

Tabla 3
Muerte violenta por departamento 2008-2009

Departamento	2008	2009	2008-2009	
	Ene-Oct	Ene-Oct	Variación	%
	No. de casos	No. de casos		
Guatemala	1,988	2,230	242	12.17
Escuintla	405	426	21	1.06
Petén	348	348	0	0.00
Izabal	290	242	-48	-2.41
Chiquimula	243	271	28	1.41
Jutiapa	213	187	-26	-1.31
Santa Rosa	194	197	3	0.15
San Marcos	167	138	-29	-1.46
Quetzaltenango	142	195	53	2.67
Suchitepéquez	139	160	21	1.06
Huehuetenango	132	163	31	1.56
Jalapa	122	125	3	0.15
Zacapa	116	162	46	2.31
Alta Verapaz	125	135	10	0.50
Chimaltenango	87	89	2	0.10
Sacatepéquez	101	57	-44	-2.21
Retalhuleu	81	68	-13	-0.65
Quiche	68	64	-4	-0.20
El Progreso	61	64	3	0.15
Baja Verapaz	34	59	25	1.26
Sololá	36	39	3	0.15
Totonicapán	21	13	-8	-0.40
Total	5,113	5,432	319	16.05

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC a octubre de 2009.

Al comparar las diferencias entre homicidios cometidos en el área urbana y rural, las estadísticas de la PNC arrojan datos significativos sobre el fenómeno. Para 2007, las diferencias registradas eran de 2,128 muertes para el área rural y 2,638 en área urbana. Porcentualmente existe una diferencia de 10.70% que, de manera paulatina, aumenta hasta llegar a 22.20% y finalizar en 22.42% en 2009.

La violencia pasó, en los últimos tres años, de ser un fenómeno generalizado a concentrarse en un 61.21% en el área urbana: tiende a manifestarse con mayor ímpetu en las zonas urbanas de cada uno de los municipios.

Tabla 4
Muerte violenta 2007-2009 por áreas
Diferencias urbano/rural

Área	2007		2008		2009		Total	
	Ene-Oct		Ene-Oct		Ene-Oct		2007-2009	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rural	2,128	44.65	1,989	38.90	1,799	33.12	6,790	38.79
Urbano	2,638	55.35	3,124	61.10	3,633	66.88	10,715	61.21
Total	4,766	100.00	5,113	100.00	5,432	100	17,505	100

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC a octubre de 2009.

La muerte violenta sigue produciéndose en mayor medida a través de arma de fuego. Durante 2007 el número de muertes fue de 3,936 personas; en 2008, la diferencia aumentó en 331 personas, con un total de 4,267 muertes y, en 2009, en la misma cantidad de meses ha tenido una ocurrencia de muertes de 5,432 personas.

Existe una diferencia de 270 muertes entre el año 2,009 y 2,008. A pesar que el fenómeno de homicidios ha crecido en 319 casos, las muertes por arma de fuego en el mismo periodo fueron de 49 muertes menos.

En relación con los totales producidos por año también existe una mínima diferencia. Mientras que para 2007 las muertes por arma de fuego tenían el 82.58%, para 2008 eran de 83.45%, finalmente, en 2009 hay una ligera disminución, ubicándose en 83.52%.

Tabla 5
Muertes violentas según medio utilizado
2007-2009⁵

Medio utilizado	2007	2008	2009	TOTAL 2007-2009	
	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct		
	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	%
Arma de fuego	3,936	4,267	4,537	12,740	83.21
Arma blanca	474	499	492	1,465	9.57
Objeto contundente	155	172	187	514	3.36
Estrangulamiento	187	168	172	527	3.44
Linchamiento	13	6	34	53	0.35
Explosión	1	1	10	12	0.08
Total	4,766	5,113	5,432	15,311	100

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC a octubre de 2009.

⁵ De enero a diciembre de 2009, el total de homicidios según la base de datos de la PNC es de 6498.

Gráfica 5
Homicidios en el departamento de Guatemala y zonas de la ciudad capital, 2009*

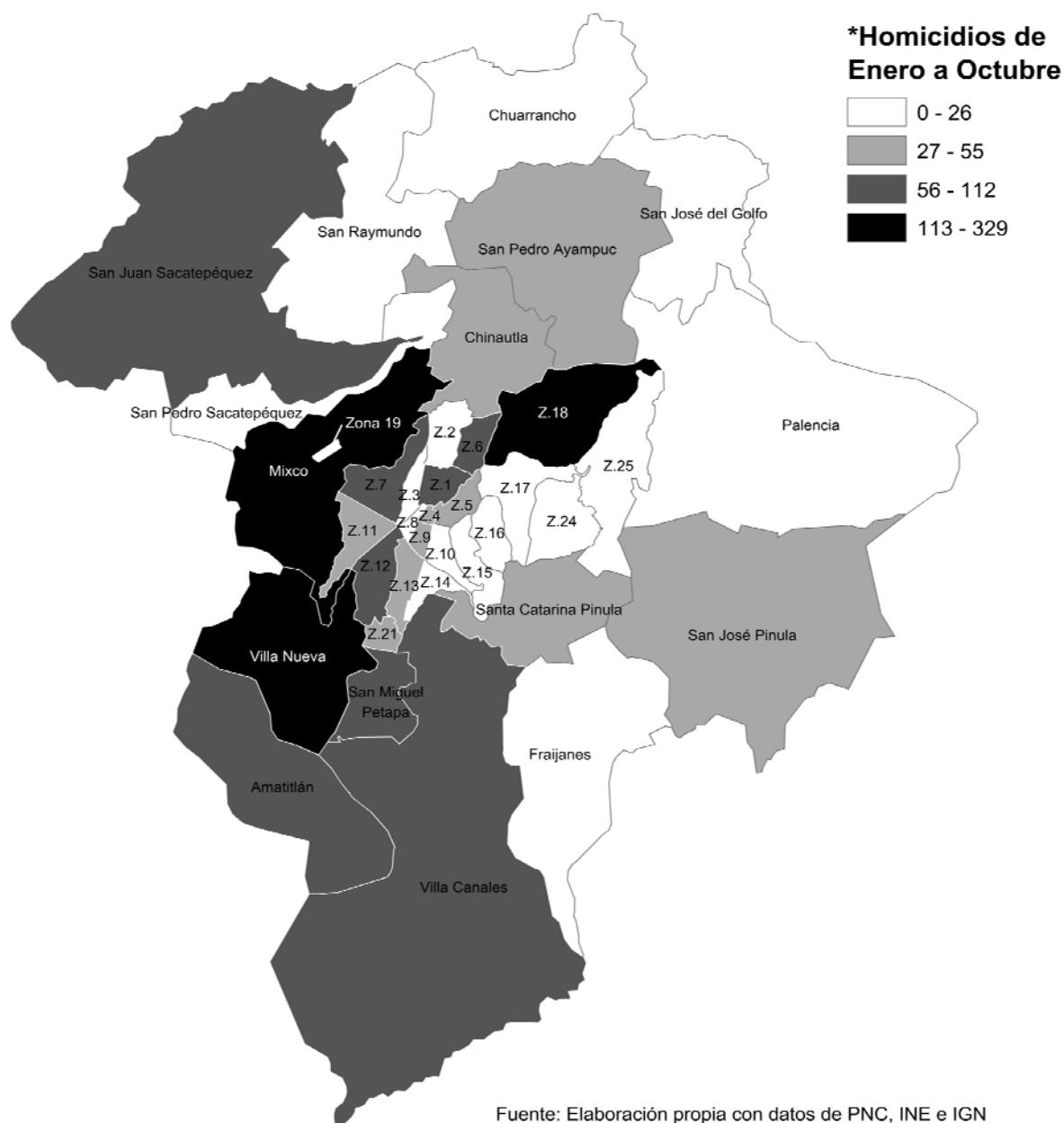


Tabla 6
Homicidios según zona de la ciudad capital

Zonas de la ciudad de Guatemala	Homicidios	
	F.	%
Z.18	271	25.54
Z.6	112	10.56
Z.7	101	9.52
Z.12	84	7.92
Z.1	78	7.35
Z.5	55	5.18
Z.11	55	5.18
Z.21	53	5.00
Z.4	34	3.20
Z.13	32	3.02
Z.9	29	2.73
Z.19	26	2.45
Z.8	25	2.36
Z.10	22	2.07
Z.3	20	1.89
Z.17	13	1.23
Z.24	11	1.04
Z.2	10	0.94
Z.15	8	0.75
Z.25	8	0.75
Z.14	7	0.66
Z.16	7	0.66
Total	1,061	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC a octubre de 2009.

El dato más sobresaliente sobre las diferencias de homicidios se encuentra en el fenómeno del linchamiento. Mientras que para 2007 se registraron 13 casos, al siguiente fueron seis, pero a octubre de 2009 presentaba ya una frecuencia de 34 casos, es decir, 28 casos más.

Otro dato importante de mencionar es la baja que se registra en muertes producidas por arma blanca. En 2007 se registran 474, para el siguiente año el crecimiento fue de 25 muertes, mientras que para 2009 la cifra disminuyó en siete, con un total de 492.

1.2.2 Adolescencia, juventud y pandillas

El departamento de Guatemala, para 2009, tiene el 41.06% de homicidios de todo el país: al mes de octubre se registraban 1,061 muertes en la ciudad capital. La mayor parte de los homicidios se comenten en cuatro zonas que concentran el 53.54% de muertes violentas.

La zona 18 tiene la frecuencia más alta con 271 casos, le siguen las zonas 6, 7 y 12 con 112, 101 y 84 personas asesinadas durante el año, respectivamente. En los registros de muertes de mujeres, la zona 18 aparece con el mayor número. Por municipios, Mixco tiene la mayor frecuencia después de la ciudad capital. A octubre de 2009 se registraron 329 muertes, 29 corresponden a homicidios de pilotos y personas relacionadas con el transporte público. El municipio que ocupa el segundo lugar en homicidios es Villa Nueva con 272 muertes.

Según registros de la PNC, de los miembros detenidos identificados como pandilleros, hay 12 grupos. Entre ellos destacan dos en particular que reúnen la mayor cantidad de miembros: “Mara 18” y “Mara Salvatrucha”.

De la pandilla denominada Mara 18 se han identificado 17 células ubicadas en los municipios de Mixco (zonas 5, 6, 7 y 10), Villa Nueva, Chinautla, San José Pinula, Santa Catarina Pinula y Villa Canales. Se estima que un grueso de sus miembros maniobra en las zonas 18 y 5 de la ciudad capital. Los integrantes que se encuentran presos en su mayoría están en la cárcel de Chimaltenango. Las estadísticas revelan que durante 2009 han sido detenidos 129 miembros involucrados en diversos delitos.

La pandilla identificada como la “Mara Salvatrucha” se localiza territorialmente en las zonas 6 y 10 de Mixco, zonas 6, 13 y 25 de la capital, zonas 1 y 6 de Palencia y zona 7 de Villa Nueva. Los líderes se encuentran presos en la cárcel de El Boquerón, Santa Rosa. A octubre de 2009, se ha arrestado a 55 miembros.

Tabla 7
Pandilleros detenidos

Pandilla a la que pertenece menor o mayor	Mayor		Menor		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Banda Los Quichelenses	1	0.13	0	0.00	1	0.12
Banda Los Ratones	5	0.66	1	1.47	6	0.72
Breick	1	0.13	0	0.00	1	0.12
El Gordo	1	0.13	0	0.00	1	0.12
No Especifica	579	76.08	34	50.00	613	73.94
Los Cholos	2	0.26	0	0.00	2	0.24
Los Metales	1	0.13	1	1.47	2	0.24
Los Zorros	0	0.00	1	1.47	1	0.12
M 13	3	0.39	3	4.41	6	0.72
M 18	108	14.19	21	30.88	129	15.56
Mara Batos Locos	1	0.13	0	0.00	1	0.12
Mara Salvatrucha	51	6.70	4	5.88	55	6.63
Withfence	8	1.05	3	4.41	11	1.33
Total	761	100.00	68	100.00	829	100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de PNC a octubre de 2,009.

Existe una frecuencia inusual de mutilaciones y casos presentados en la zona 18 y Mixco. Son ubicaciones geográficas que centran las acciones delictivas y criminales de las pandillas. Mientras la zona 18 es un lugar de habitación y reclutamiento de las pandillas, el municipio de Mixco comienza a convertirse en una zona de operaciones, tanto para el control territorial como para la extorsión y afianzamiento de poder y rivalidad entre las pandillas.

Tabla 8
Pandilleros detenidos por municipio y zona

Municipio / zona	Pandilleros detenidos general					
	M 18		MS		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Villa Nueva	2	4.44	8	36.36	10	14.93
Mixco	20	44.44	9	40.91	29	43.28
Zona 18	23	51.11	5	22.73	28	41.79
Total	45	100.00	22	100.00	67	100.00

Tabla 9

Edad	Detenidos por homicidio 2009*
11	1
12	0
13	2
14	5
15	11
16	4
17	16
18	29
19	15
20	21
21	26
22	23
23	20
24	20
25	18
26	13
27	13
28	20
29	11
30	8
31	13
32	8
33	11
34	8
35	4
36	8
37	4
38	7
39	5
40	2
41	4
42	3
43	1
44	1
45	4
46	0
47	4
48	2
49	1
50	0
51	1
52	3
53	0
54	2
55	0
56	1
57	2
58	3
59	1
IGN	5
Total	384

La tabla 8 revela que la Mara 18 es la que registra mayor número de aprehendidos (45); en la zona 18 se detuvo a 23 miembros, en Mixco a 20 y en Villa Nueva a 2. La Mara Salvatrucha parece tener mayor presencia en Mixco, con nueve arrestos, le sigue Villa Nueva con ocho y, finalmente, la zona 18 con cinco. En total fueron consignados 22 integrantes.

Los adolescentes, mujeres y pilotos aparecen como los grupos más vulnerable en los casos de muertes violentas y de mayor impacto. Gran cantidad de adolescentes y jóvenes son reclutados por las pandillas en zonas de la capital donde el Estado ha perdido su capacidad de influencia y despliegue policial. La zona 18 y el municipio de Mixco ejemplifican esta situación.

Las políticas públicas implementadas para la reinserción efectiva de los integrantes de las pandillas no han tenido un impacto significativo. Además, muchos de estos grupos de pandillas han dejado de ser una expresión sociocultural propiamente para ligarse al crimen organizado y al narcomenudeo. En el transcurso de los años se han convertido en una forma particular y estructura de poder criminal. No todo grupo o pandilla necesariamente pertenece al crimen organizado, pero sí hay un grueso poblacional identificado con los grupos anteriores, inmersos en la pugnas por territorios, violencia y narcoactividad.

Durante la detención del joven adulto Áxel Danilo Ramírez Espinosa alias “Smiley” jefe de uno de los grupos de la Mara 18 manifestaba: *“A mí me gusta matar mujeres shutes [entrometidas] y preguntonas”*. Junto a otras tres mujeres fue apresado en la zona 10 de Mixco. Según reportes de prensa, durante 2005 ingresó a la correccional de menores por asesinar a una menor. Ha guardado prisión en Pavoncito y en la cárcel de Chimaltenango. Se le acusa de haber matado a varias personas, incluyendo ciudadanos extranjeros y pilotos de autobús.

Otro caso que describe la toma territorial, propensión y vulnerabilidad de los y las menores de edad, particularmente las mujeres, son los casos de dos mujeres con edades de 17 y 15 años secuestradas, torturadas y mutiladas. Las dos menores fueron secuestradas en la zona 1 de Mixco y sus cuerpos aparecieron mutilados en varias colonias de la zona 18. Los delitos ocurrieron durante el mes de agosto.

La más grande, aprovechando que el instituto donde estudiaban permanecía cerrado, fue a visitar a una de sus amigas. Según las declaraciones de los familiares, ambas salieron y regresarían durante el almuerzo. Los padres hicieron la denuncia de la desaparición ante la comisaría 16 a las ocho de la noche. Tres horas después, vecinos encontraron restos de sus cuerpos en las colonias Las Ilusiones y Canaán, zona 18. Habían sido mutiladas.

En horas de la madrugada del día siguiente se encontraron los brazos, piernas y las cabezas en la entrada a la colonia Pinares del Norte. Estaban amordazadas, metidas entre costales y registraban múltiples heridas de bala.

Las declaraciones vertidas por las autoridades señalan como culpables a cuatro pandilleros que participaron en el doble asesinato. Se desconoce a la fecha si fueron aprehendidos por las autoridades.

En las estadísticas que maneja la PNC se estima que la proporción de muertes a causa de rivalidad entre pandillas oscila en 212 personas.

Como apéndice del crimen organizado hay un continuo crecimiento de las pandillas, en las cuales los menores de edad y adolescentes se han constituido en herramientas que perpetúan y extienden el dominio de la delincuencia organizada. Se ha extendido, incluso, a adolescentes y jóvenes que son reclutados y utilizados por su posición de indefensión, situación económica y falta de oportunidades.

En el caso de los menores de edad resalta el factor legal sobre “la inimputabilidad” en cuanto a jóvenes en conflicto con la ley penal. Por ley, en caso de probarse su culpabilidad o que representen una grave amenaza obtienen sanciones privativas de libertad.⁶

La tabla sobre detenidos por homicidio a octubre de 2009 revela como las cifras se concentran en los años de adolescencia y juventud. La curva asciende a partir de los 15 años y se mantiene en el transcurso de las edades hasta llegar a los 33 años, sumando 300 detenidos por homicidio, que representan el 46%.

Los menores de edad detenidos por homicidios suman 68. La primera edad que registra el primer homicidio es 11 años; los 15 y 17 años tienen números mayores, con 11 y 16 homicidios, respectivamente.

La constante sobre las cifras de detenidos a partir de los 18 a los 25 años se mantiene en números arriba de los 20 homicidios, salvo las edades de 19 y 25 años, que tienen cifras menores (15 y 18). Así, las edades entre los 18 y 25 suman 240 víctimas. El siguiente grupo entre los 26 y 33 años tienen en conjunto 97 homicidios. La edad con mayor número (20) es 28 años.

Los detenidos de 18 años de edad son el grupo más grande. La mayoría de edad significa para muchos jóvenes una etapa de suma vulnerabilidad en la cual el crimen organizado ofrece “oportunidades y beneficios”, aprovechando y utilizándolos para cometer una gran cantidad y variedad de delitos.

1.2.3 Pilotos, ayudantes y pasajeros en el transporte público

La problemática de la seguridad durante el presente año ha mantenido la característica de la precariedad usual. El énfasis de las muertes violentas se ha centrado en el asesinato sistemático y persistente de pilotos del transporte público.

Continúa siendo un fenómeno de impacto generalizado en todo el país pero que se ha expresado con mucha más frecuencia en ciertas zonas y municipios del departamento de Guatemala. Los homicidios de personas relacionadas con el transporte público reflejan un nuevo patrón en el incremento y los altos niveles de violencia que se viven en el país.

El alto impacto de estos hechos se registra constantemente y denota un incremento en el ambiente de violencia, dada la característica de las víctimas vinculadas a un servicio público de carácter masivo como lo son pilotos y ayudantes de transporte público, autobuses, taxis, bicitaxis, moto taxis, y otros.

El ataque contra pilotos se ha convertido en una forma específica de actos criminales. La violencia permanente ha puesto de manifiesto el papel de las fuerzas policiales (incluso las fuerzas combinadas) y la falta de capacidad y despliegue para darle protección al transporte público. Los ataques, lejos de ser aislados, se producen constantemente en puntos distintos, ya sea comercial, residencial y de estación. La falta de

⁶ “Artículo 238. Sanciones Socioeducativas: Tipos de sanciones. e) Sanciones privativas de libertad: 1. Privación de libertad domiciliaria. 2. Privación de libertad durante el tiempo libre. 3. Privación de libertad en centros especializados durante fines de semana, comprendido desde el sábado, de las ocho horas, hasta el domingo a las dieciocho horas. 4. Privación de libertad en centros especializados de cumplimiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado.” Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, Decreto No. 27-2003.

coordinación entre el Ministerio Público (MP) y la PNC en la investigación, móviles, ubicaciones y autores, tanto materiales como intelectuales, se ha reflejado en los escasos resultados aportados para esclarecer los hechos. La mayoría de muertes de pilotos permanece en la impunidad.

En noviembre de 2008 un grupo de fiscales del MP fue designado para investigar los asesinatos de pilotos, tres meses después, y con escasos resultados fue disuelto por la sección de Delitos contra la Vida. Para marzo de 2009, la PNC integró un grupo especial de 50 agentes destinados a realizar patrullajes a partir de investigaciones realizadas por la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI). Los resultados fueron algunas detenciones e hipótesis sobre los hechos, pero el fenómeno lejos de disminuir continuó en ascenso y se extendió a otras esferas productivas (tiendas, talleres, locales comerciales, etc.).

Los pilotos se han convertido en un blanco frecuente y, en los últimos tres años la muerte violenta de éstos ha sido desmesurada. El fenómeno tiende a agravarse a partir de los años 2006-2007, cuando se empiezan a observar características, connotaciones y mayores grados de implicación, organización y participación. Se perciben estructuras criminales más cohesionadas y con territorios específicos de operaciones.

De acuerdo con la tabla 10, el número de muertes violentas de pilotos aumentó de 68 en 2007 a 131 en 2008, incremento del 49%. El impacto en la sociedad fue todavía mayor en 2009. En comparación al 2008 ha crecido en 53 casos y con 2007, en 116. La cifra mensual ha variado de 5.67 a 16.73 muertes en tres años.

La proporción de muertes de pilotos mantiene una correlación con la de ayudantes. En 2007, por cada 2.51 muertes de pilotos se registraba la de un ayudante. El caso es similar en 2008 que fue de 2.97 pilotos por ayudante. La cifra varía de forma distinta en 2009, por cada 4 pilotos, un ayudante.

Tabla 10
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
Mensual/categoría

Homicidios	Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto atacante
Total de casos 2007	68	27	27	1	10
Total de casos 2008	131	44	31	0	10
Total de casos 2009*	184	46	48	1	22
Promedio mensual 2007	5.67	2.25	2.25	0.08	0.83
Promedio mensual 2008	10.92	3.67	2.58	0.00	0.83
Promedio mensual 2009*	16.73	4.18	4.36	0.09	2.00

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

*Datos a noviembre.

Un primer acercamiento al fenómeno indica que los ataques se dirigen específicamente en contra del piloto, no así del ayudante (las estadísticas muestran que tiene menos frecuencia de morir en el acto). Esto puede deberse a las horas en las que el piloto es atacado, tanto al inicio como al final de la ruta. Las cifras sobre muerte violenta de pasajeros muestran un crecimiento menor que la de pilotos. La violencia se dirige preferentemente hacia ellos, por lo cual, el móvil del asalto puede suceder con menos frecuencia, induciendo a establecer hipótesis encaminadas a la extorsión y vinculación criminal organizada.

Tabla 11
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
 Mes/categoría

Homicidios		Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto atacante
Año	Mes	F.	F.	F.	F.	F.
2007	Enero	1	3	0	0	3
	Febrero	3	2	1	0	1
	Marzo	5	1	0	0	0
	Abril	13	2	2	0	0
	Mayo	7	3	3	0	0
	Junio	5	3	2	1	3
	Julio	4	3	3	0	1
	Agosto	7	3	3	0	0
	Septiembre	3	2	2	0	1
	Octubre	9	1	3	0	0
	Noviembre	5	2	5	0	0
	Diciembre	6	2	3	0	1
	Subtotal	68	27	27	1	10
2008	Enero	7	4	6	0	0
	Febrero	10	4	0	0	0
	Marzo	17	3	1	0	2
	Abril	7	4	1	0	0
	Mayo	9	3	2	0	1
	Junio	15	7	5	0	1
	Julio	9	5	0	0	0
	Agosto	11	0	6	0	0
	Septiembre	8	6	0	0	0
	Octubre	14	4	3	0	1
	Noviembre	10	2	2	0	0
	Diciembre	14	2	5	0	5
	Subtotal	131	44	31	0	10
2009	Enero	11	5	5	0	0
	Febrero	16	2	4	0	2
	Marzo	19	6	7	0	5
	Abril	14	2	5	0	0
	Mayo	17	2	9	0	2
	Junio	10	1	3	0	3
	Julio	18	5	2	0	0
	Agosto	19	3	2	0	2
	Septiembre	19	4	4	0	0
	Octubre	18	11	2	0	3
	Noviembre*	23	5	5	1	5
	Diciembre	----	----	----	----	----
	Subtotal	184	46	48	1	22
Total		383	117	106	2	42

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Durante los últimos tres años han sido asesinados 383 pilotos, 117 ayudantes, 106 pasajeros, dos guardias de seguridad y 42 presuntos atacantes o delincuentes. En el análisis mensual, los meses con mayor número de muertes violentas de personas relacionadas con el transporte público registran son marzo y abril, que posiblemente se relacionan la con la Semana Santa. Abril es el mes con mayor cantidad homicidios de pilotos en el 2007 (13 muertes); en marzo de 2008 se registraron 17, y para 2009, se presenta como una excepción con 19 registros. Le sobrepasan en cantidad todos los meses a partir de julio.

Las muertes de pilotos probablemente están más relacionadas con la coyuntura política y criminal suscitada con la ingobernabilidad de marzo, las operaciones puestas en marcha en el sistema penitenciario y las planificaciones en serie vinculadas a otras estructuras del crimen organizado. El mes con mayor cantidad de muertes de pilotos en los últimos tres años es noviembre de 2009 (23 casos).

El análisis técnico de los hechos ocurridos permite afirmar, al menos hipotéticamente, que los pilotos han sido escogidos por los victimarios en función de su vulnerabilidad, en tanto que están expuestos en los puntos de inicio y término de la ruta.

La tabla 12 indica que la mayor frecuencia de los hechos se da en las horas comprendidas entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana (inicio de labores), entre las 10:00 a 12 p.m. y entre las 6:00 a 8:00 p.m. (cierre de jornada). Las horas que concentran el mayor número de muertes son las 6:00 a.m., con 15 homicidios, y las 7:00 p.m., con 16.

El inicio de la jornada puede ser el momento de la amenaza y extorsión, y el final del trayecto o jornada el momento estipulado para ejercer la lesión o herida. Los victimarios pueden darles un margen de maniobra para la recolección del impuesto ilegal. Económicamente, en esa dinámica pueden ser abordados y atacados con toda facilidad ya que siempre tendrán que llegar a iniciar o terminar la ruta. Los victimarios conocen con facilidad los puntos donde tendrán que hacer escalas más largas.

En cualquiera de estos momentos llevarán dinero y los extorsionistas podrán cumplir con la amenaza, de lo contrario, procederán a ejecutar el asesinato. Más allá de las formas, la muerte violenta de pilotos describe un esquema en el cual, por los menos, hay implicados grupos capaces de planificar, movilizar e infiltrar personal, extorsionar, coordinar y asesinar.

Tabla 12
Muerte de pilotos según hora
Día/frecuencia

Hora homicidio	Lun	Mar	Mie	Jue	Vier	Sab	Dom	Total
	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.
Ignorada	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00:00 a.m.	1	0	0	0	1	0	0	2
05:00:00 a.m.	1	1	2	0	0	2	1	7
06:00:00 a.m.	1	0	7	4	1	0	2	15
07:00:00 a.m.	1	1	5	0	0	2	1	10
08:00:00 a.m.	0	2	0	2	0	0	0	4
09:00:00 a.m.	0	1	0	0	1	1	0	3
10:00:00 a.m.	0	2	0	6	0	0	3	11
11:00:00 a.m.	0	1	0	4	1	0	0	6
12:00:00 p.m.	4	2	0	0	2	1	0	9
01:00:00 p.m.	1	4	1	1	0	0	0	7
02:00:00 p.m.	2	1	0	1	1	1	0	6
03:00:00 p.m.	1	1	1	2	2	1	2	10
04:00:00 p.m.	1	3	0	1	2	1	1	9
05:00:00 p.m.	2	0	2	1	0	1	1	7

06:00:00 p.m.	2	3	1	1	0	1	2	10
07:00:00 p.m.	0	6	3	1	2	2	2	16
08:00:00 p.m.	1	0	3	3	2	0	0	9
09:00:00 p.m.	1	0	0	0	3	0	0	4
10:00:00 p.m.	0	0	0	0	1	0	0	1
11:00:00 p.m.	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	19	28	25	27	20	13	15	147

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Las horas de las lesiones son más marcadas y específicas: se ubican entre los rangos de las 6:00 y 7:00 a.m., la 1:00 p.m. y las 7:00 a 8:00 p.m. Los horarios están concentrados entre las 6:00 a.m. (12 personas) y las 7:00 p.m. (19 heridos).

Tanto las horas de homicidios como las de lesiones indican que son horarios que marcan el principio, horarios de comidas y el final de la jornada laboral. Incluso, si se observa la lógica entre las temporalidades (dos horas dividen a cada una) se puede inferir que el piloto es atacado al inicio y al final de cada recorrido.

Las paradas más largas u horas de descanso son horarios de mayor presencia y abordaje. Los extorsionistas o cómplices los abordan para solicitarles el impuesto delincuencia, ya sea de forma personal o impersonal (a través del teléfono celular, notas, etc.). Además, las horas intermedias pueden indicar acontecimientos más complejos y planificados en serie para propiciar intimidación, psicosis social y pertenencia territorial.

Tabla 13
Lesión de pilotos según hora
Día/frecuencia

Hora lesión	Lun	Mar	Mie.	Jue	Vier	Sab	Dom	Total
	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.
Ignorada	0	0	0	0	0	1	0	1
04:00:00 a.m.	1	0	0	0	0	0	0	1
05:00:00 a.m.	0	0	1	0	1	0	0	2
06:00:00 a.m.	0	4	2	1	2	3	0	12
07:00:00 a.m.	3	1	3	0	1	0	0	8
08:00:00 a.m.	0	1	0	2	1	0	0	4
09:00:00 a.m.	3	0	3	0	0	0	0	6
10:00:00 a.m.	2	0	2	0	1	1	0	6
11:00:00 a.m.	0	0	0	0	3	0	0	3
12:00:00 p.m.	0	0	0	0	2	1	0	3
01:00:00 p.m.	0	1	0	1	1	4	2	9
02:00:00 p.m.	0	0	0	2	0	3	0	5
03:00:00 p.m.	1	1	1	0	2	0	2	7
04:00:00 p.m.	2	0	0	0	1	2	1	6
05:00:00 p.m.	2	2	0	0	1	0	0	5
06:00:00 p.m.	2	0	0	1	0	1	2	6
07:00:00 p.m.	2	5	3	3	2	3	1	19
08:00:00 p.m.	0	2	2	0	2	1	1	8
09:00:00 p.m.	0	1	0	1	1	1	0	4
10:00:00 p.m.	1	1	1	0	1	0	0	4
11:00:00 p.m.	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	20	19	18	11	22	21	9	120

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Los actos dirigidos en contra de los trabajadores del transporte público también provocan víctimas mortales entre transeúntes y usuarios de las unidades de transporte. En el círculo de violencia y homicidios en la sociedad, no sólo se vulneran el derecho a la libertad, a la seguridad y la integridad personal, sino que se está violentando el derecho a la vida.

Los ataques han provocado daños colaterales a personas que no trabajan en el sector. La relación muerto/herido indica la efectividad o mortalidad de un ataque. En el caso de pilotos es de 2.39 muertos por cada piloto herido (184 muertes vs. 77 heridos) y para los ayudantes es de 1.48 muertos por cada herido y para los pasajeros es de 0.44 por cada herido.

El asesinato en el transporte público ha convertido al piloto en el eslabón más débil de la cadena de extorsión entre el empresario, usuario y delincuente; además, el carácter masivo del evento sirve para generar miedo e ingobernabilidad, restringir el derecho a la circulación y el ejercicio de las actividades cotidianas, económicas y laborales.

La extorsión se extiende hacia el usuario como víctima indirecta. Como producto del chantaje económico, muchos autobuses han implementado la tarifa extra para cubrir los montos exigidos por los delincuentes. La conflictividad en el transporte público ha provocado que a lo largo del año se hayan desarrollado diferentes paros del transporte urbano y extraurbano como protesta por los ataques y por la ausencia de acciones concretas para evitarlos.

Tabla 14
Personas heridas relacionadas con el transporte público
Frecuencia

Heridos por agresión a	Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto atacante
Mes	F.	F.	F.	F.	F.
Enero	1	2	4	0	0
Febrero	7	5	8	1	2
Marzo	11	5	8	1	2
Abril	7	1	11	2	1
Mayo	6	3	4	0	0
Junio	11	2	12	0	0
Julio	6	0	13	0	0
Agosto	4	1	8	0	0
Septiembre	5	3	10	0	0
Octubre	4	5	18	2	1
Noviembre	15	4	13	0	1
Diciembre	----	----	----	----	----
Total	77	31	109	6	7

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Las presiones de la extorsión son personales e ineludibles, y los pilotos son las víctimas potenciales más alcanzables. También los propietarios de los vehículos son susceptibles a la extorsión, su parte débil está, no sólo en amenazas contra su propia vida o de sus familiares, sino también en la amenaza de ejecución de los pilotos de sus unidades, lo que implicaría detener la circulación de su (s) unidad (es) y, consecuentemente, perder dinero y competitividad.

Hipótesis sobre el asesinato de pilotos. Los autores intelectuales no identificados claramente, son grupos que dirigen, contratan o se coordinan con los asesinos. En la vinculación de los hechos pueden distinguirse la masificación de los eventos, el afianzamiento y disputa territorial, el miedo y la violencia como recursos de poder.

Examinando las probables causas, tanto las expresadas por la PNC, el MP, el gobierno, como los datos estadísticos que involucran los hechos, existen tres posibles variables aproximativas y causales del fenómeno.

La primera, de carácter explicativo institucional proporcionada por el MP y la PNC, relaciona la competencia económica desleal que involucra a empresarios, pilotos y ayudantes; la segunda se relaciona con la lucha de poder, extorsión y extensión territorial entre las pandillas; otra vincula estrechamente los intentos de desestabilización e ingobernabilidad, ambas ligadas al crimen organizado en sus distintas vertientes.

Las hipótesis del MP y la PNC implican a víctimas y victimarios en un mismo escenario. Ambas instituciones dirigen sus investigaciones hacia los propios transportistas, a quienes consideran inmersos en una competencia desleal por el servicio.

La reducción de rutas puede tener explicación en la incorporación del servicio municipal a través del Transmetro, que ha supuesto la reubicación de algunas rutas y la circulación de un número no determinado de buses.

Con fecha 3 de febrero de 2007 se inaugura el servicio de Transmetro Sur, implementado por la Municipalidad de Guatemala, que beneficia a los usuarios de colonias y municipios como El Mezquital, Amatitlán y Villa Nueva, así como a los que circulan por la Calzada Aguilar Batres o la Avenida Bolívar. A partir de ello, los autobuses urbanos o extraurbanos no pueden circular sobre esas arterias. Los únicos buses autorizados a prestar servicio para las colonias Castañás, Joya, Villalobos I y II, El Mezquital y El Búcaro, son las unidades de la Empresa Municipal de Transporte que, de acuerdo a la municipalidad, son gratuitos.

La incorporación del Transmetro eliminó las rutas T-1400 Villalobos-Bolívar-centro, T-1400 Villalobos-La Terminal, T-1401 Castañás-Bolívar-centro, T-1400 Mezquital-Bolívar-centro-El Zapote, T-1401 Mezquital-La Terminal-centro-El Zapote y T-1402 Búcaro-Bolívar-centro-El Zapote.

La reducción de rutas, la incorporación de unidades no registradas y el despliegue de autobuses en otras zonas son las razones que podrían darle sustento a la hipótesis del MP y la PNC.

En el caso de las pandillas, en la concentración territorial de asesinatos de pilotos en los municipios de Mixco, Villanueva, las zonas 6, 7 y 18, puede visualizarse el control y despliegue y cómo el transporte público se ha convertido en un epicentro de los hechos de violencia.

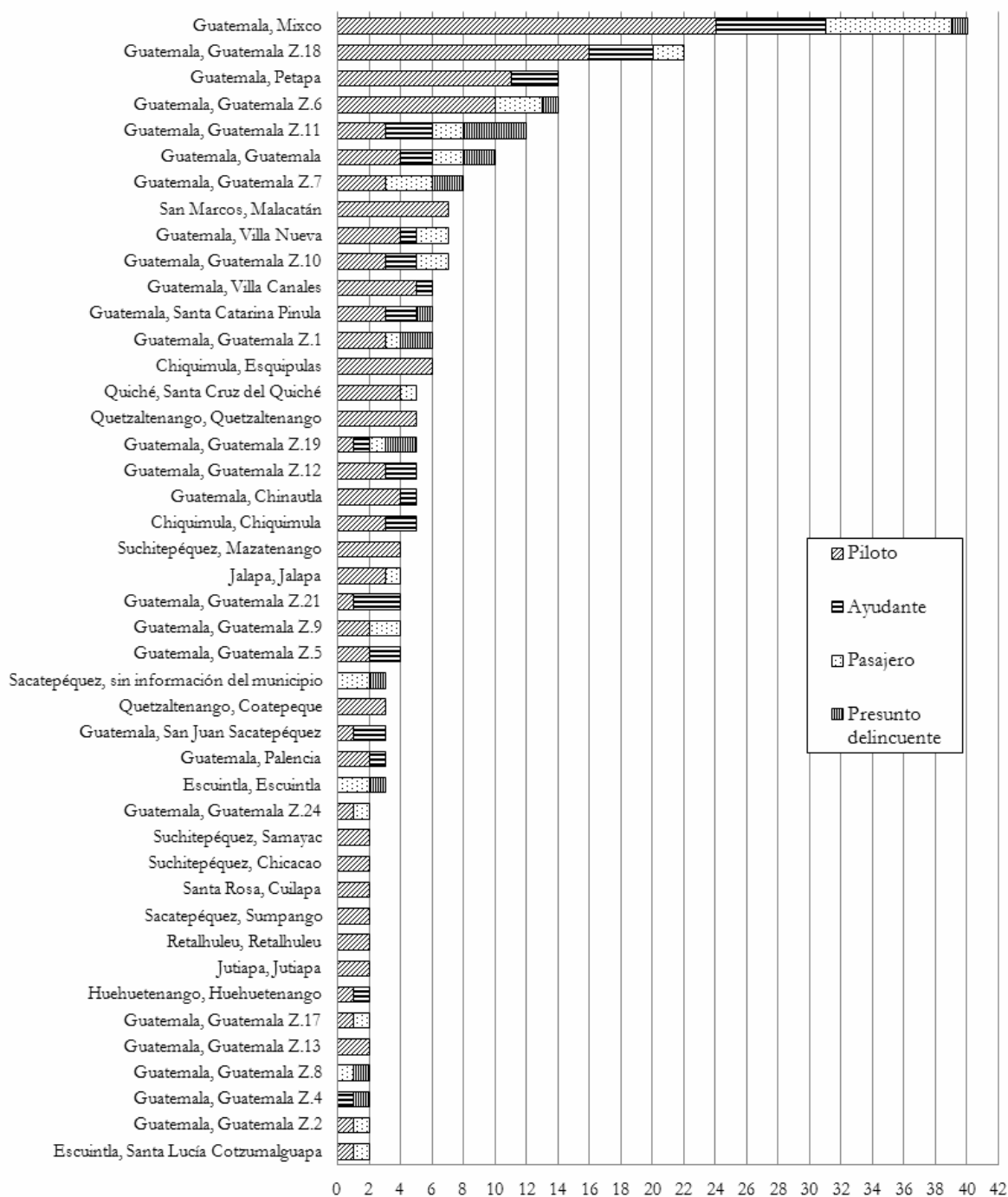
El terreno fértil que les proporciona la impunidad y la magnificación que adquiere el asesinato de pilotos, posibilitan no sólo crecer logísticamente, sino también convertirse y reproducirse en grupos criminales.

Pilotos o propietarios de autobuses son víctimas de extorsión de grupos organizados que les cobran una determinada cantidad de dinero por permitirles ejercer su actividad económica y mantener su vida e integridad física.

La extorsión se convierte en el vehículo eficaz para complementar dos vías de cohecho: una para agenciarse de fondos de manera ilegal y la otra para cometer actos criminales. Como apéndice del crimen organizado, en su capacidad y despliegue territorial, las pandillas pueden convertirse en instrumentos y estrategia perfecta para cometer ilícitos de forma coordinada y planificada.

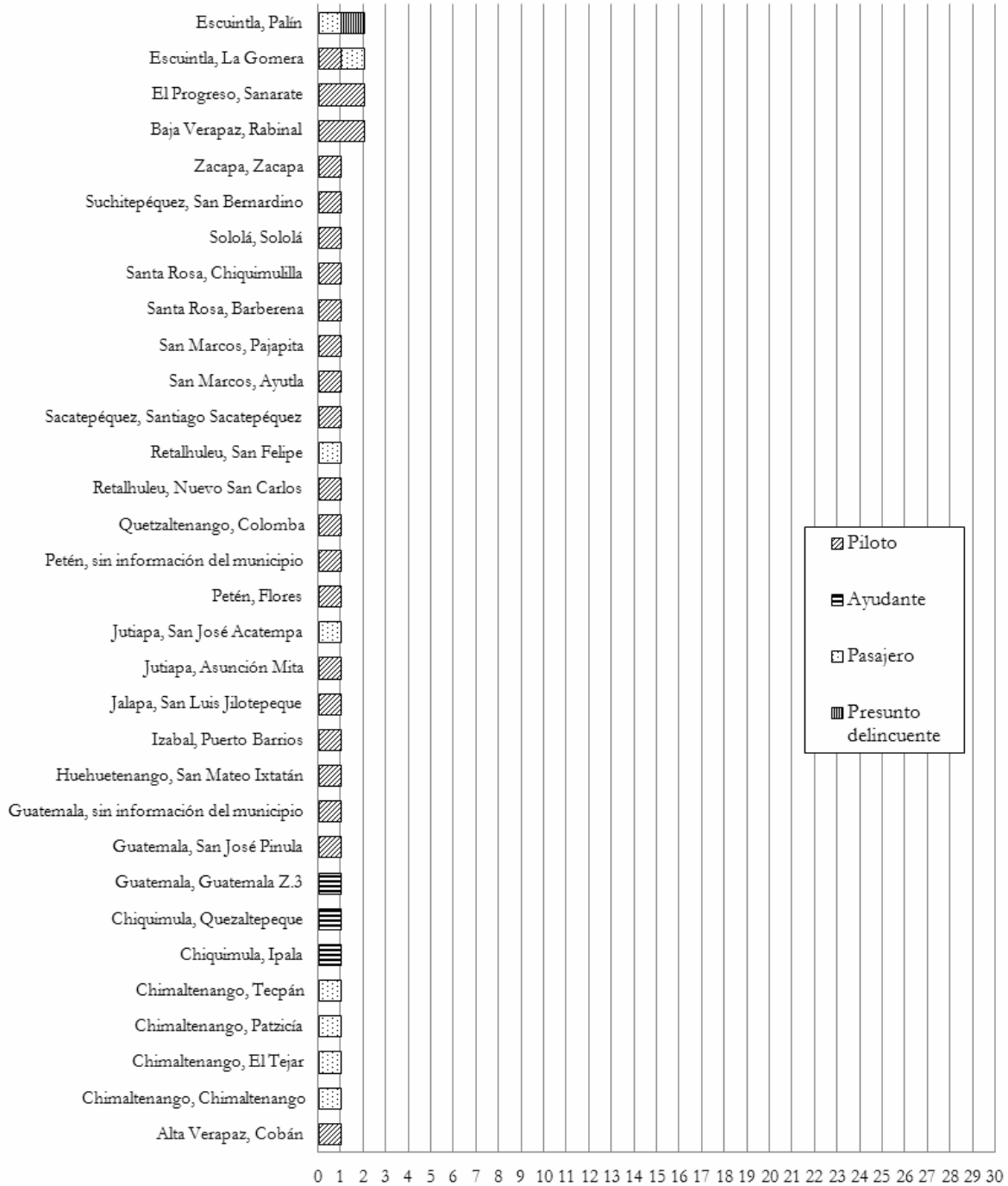
Del carácter masivo y en serie que han tenido ciertos eventos en la coyuntura de 2009, se puede inferir que el asesinato de pilotos requiere de un nivel de planificación y estrategia muy alto. Zonas y puntos neurálgicos de la ciudad, capaces de generar miedo y zozobra, requieren un análisis que permita establecer puntos medulares para causar un impacto masivo.

Gráfica 6
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
Año 2009 (hasta 30 de noviembre)
Por municipios (y zonas de la ciudad capital)



Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Gráfica 7
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
Año 2009 (hasta 30 de noviembre)
Por municipio (y zonas de la ciudad capital)



Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

La inseguridad, intranquilidad y zozobra que se define genera para ese gran conjunto de víctimas reales o posibles, puede considerarse objetivo de acciones por la existencia de un Estado que no logra reconocer los mecanismos adecuados para enfrentar la situación.

Al atentar en contra de los pilotos, se incorpora al círculo de terror a los pasajeros e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que protegen los buses o las terminales. También alcanza a los transeúntes peatones y motorizados que son potenciales víctimas de buses sin control.

La toma de territorios puede explicar mejor las hipótesis. Según las gráficas sobre municipios del país y zonas de la capital, territorialmente el departamento de Guatemala concentra el 58% homicidios de personas relacionadas con el transporte público.

De los homicidios de personas relacionadas con el transporte público, el municipio de Mixco tiene la cifra más alta con 40 personas, le siguen la zona 18 (22), zona 6 (14), San Miguel Petapa (14), zona 11 (12) y zona 7 (8). En conjunto reúnen el 37%. El otro 21% está integrado por las zonas 10 (7), 1 (6), 12 (5) y 19 (5), los municipios de Villa Nueva (7), Santa Catarina Pinula (6), Villa Canales (6) y Chinautla (5).

Fuera del departamento de Guatemala, se ubican los municipios de Malacatán en San Marcos (7), los municipios de Esquipulas (6), Chiquimula (5), y el municipio de Quetzaltenango (5). Los primeros tres cercanos a líneas fronterizas.

Las dinámicas descritas explican el fenómeno en dos formas distintas que pueden confluir en determinados escenarios de coyuntura política, o en la implementación de políticas de seguridad que puedan coartar el poder y escenario de las distintas esferas del crimen organizado. En la primera, las pandillas se desenvuelven en la microesfera social que relaciona específicamente el territorio de acción, la segunda, que requiere de escenarios y una planificación más compleja, una organización e involucramiento de otras esferas del crimen organizado.

1.2.4 Muerte violenta de adultos mayores

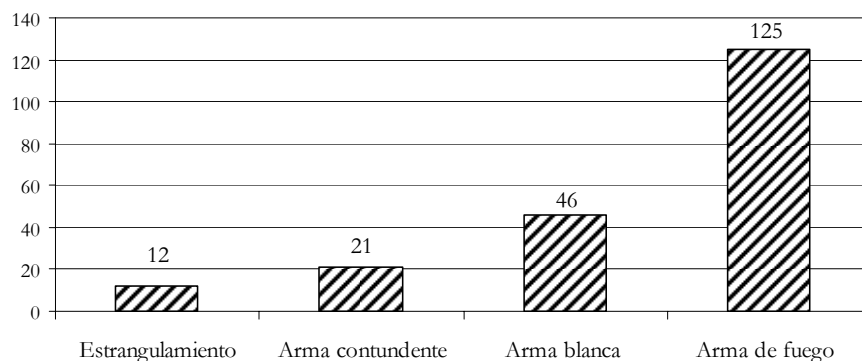
En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2009, según fuentes policiales, se registraron 204 muertes violentas de adultos mayores, lo que representa un promedio mensual de 20.4 homicidios y asesinatos. En comparación con 2008 —que registró 193 hechos— en 2009 hubo un ligero aumento (11 casos) en el mismo período.⁷

Formas de muerte. Las formas más frecuentes son heridas y lesiones mortales provocadas por arma de fuego, arma blanca, objetos contundentes y/o por estrangulamiento. El irrespeto a la vida de personas mayores de 60 años es un fenómeno social que se suma a la violación de los derechos a la seguridad social, alimentación, agua potable, vivienda, vestido y atención de salud adecuada de este sector social marginado.

La principal causa de muerte son los ataques perpetrados con arma de fuego. De conformidad con la información registrada, este tipo de ataques suma 125, equivalente al 61.27%.

⁷ PDH. *Informe anual circunstanciado*. Guatemala: 2008.

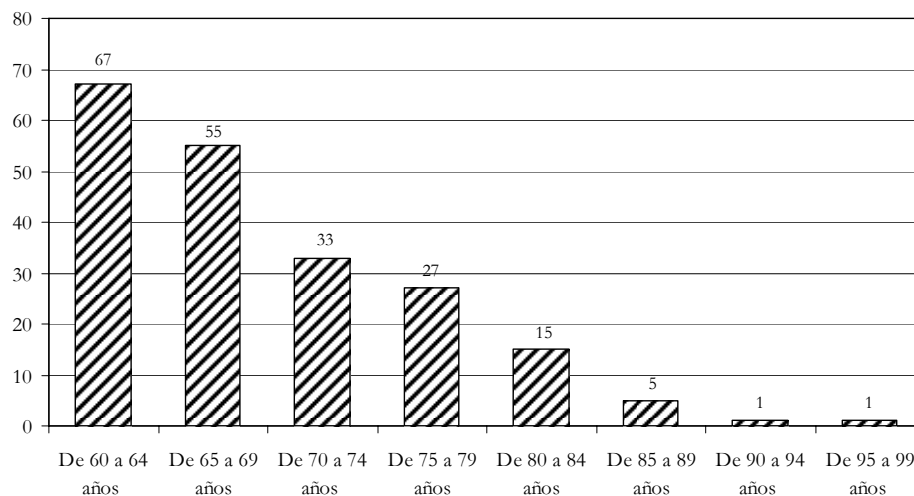
Gráfica 8
Homicidios de adulto mayor por medio utilizado
Enero a octubre 2009



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Este sector de población mantiene un alto grado en sus condiciones de vulnerabilidad, tanto en el seno del grupo familiar como en el entorno social.

Gráfica 9
Homicidios de personas adultas mayores
Rango de edad 60 a 99 años
Enero a octubre 2009



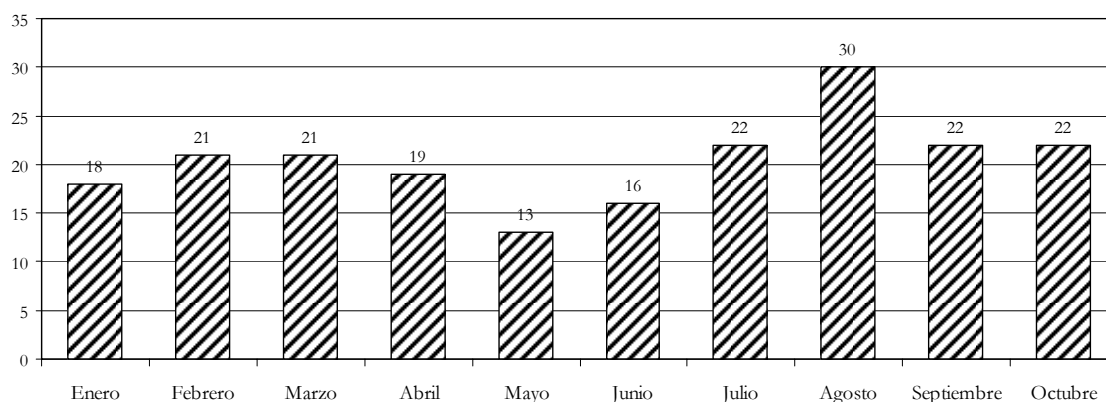
Fuente: elaboración propia con datos de la PNC

Según las cifras, el grupo más afectado es el de 60 a 64 años (67 homicidios), en segundo lugar, el de 65 a 69 años (55) y, en tercer lugar, el rango de 70 a 74 años (33). La suma de estos tres primeros rangos es de 155 casos, equivalentes al 76%; lo cual significa que la mayor cantidad de ataques mortales fueron cometidos contra personas cuyas edades oscilaban entre los 60 y 74 años.

En la estadística mensual y porcentual de los 204 ataques registrados, los meses más violentos fueron agosto, con 30 casos (14.71%); julio, septiembre y octubre con 22 casos cada uno (10.78% por mes). Siguen en orden descendente febrero y marzo, que suman 21 casos cada mes, que corresponden al 10.29%; luego abril, con 19

hechos (9.31%). Los que reportan menos hechos violentos son mayo y junio con 13 y 16 casos, respectivamente.

Gráfica 10
Homicidios de adultos mayores, por mes
Enero a octubre 2009

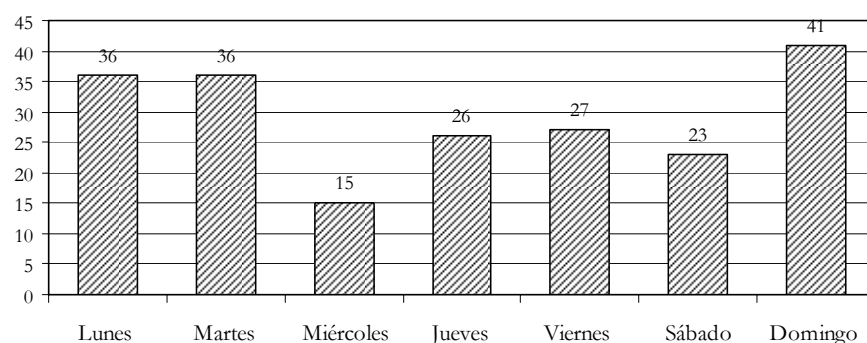


Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

La totalidad de casos anotados en las primeras dos posiciones ocupadas por los meses citados es 96, equivalente al 47.05%, lo que significa que la sumatoria de los cuatro meses que acumulan más ataques, es semejante a casi la mitad del universo de muertes violentas de adultos mayores. Otro aspecto preocupante es que la frecuencia mensual de hechos, lejos de disminuir, mantiene una tendencia al incremento.

Al cruzar la información mensual con la frecuencia diaria de hechos se comprueba que el domingo fue el día más violento (41 casos), correspondiente al 20.10% y le siguen lunes y martes (36 casos cada uno) equivalente al 17.65%. Otros días de la semana registran hechos violentos, pero en cantidades menores. Durante 2009 el día menos violento para las personas adultas mayores fue el miércoles.

Gráfica 11
Homicidios de adultos mayores, según día de la semana
Enero a octubre 2009



Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

En el período examinado, la muerte violenta de adultos mayores de género masculino sobresale con 167 casos, equivalentes al 82% y en el caso de las mujeres la cifra es 37 (18.14%).

Tabla 15
Homicidios de adultos mayores por género
Enero a octubre 2009

Género	F.	%
Femenino	37	18.14
Masculino	167	81.86
Total	204	100.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la PNC.

Según departamento de ocurrencia, los tres primeros con mayor acumulación de hechos son: Guatemala, que reporta 44 muertes violentas (21.57%), de las cuales 33 son víctimas de género masculino y 11 son víctimas femeninas. En segundo término, se consigna el departamento de Santa Rosa (19 casos equivalentes al 9.31%), luego Escuintla (17 casos, 8.33%). Los demás departamentos del territorio consignan cantidades menores.

Tabla 16
Homicidios de adultos mayores, Por género, según departamento
Enero a octubre 2009

Departamento	Femenino	Masculino	Total	%
Guatemala	11	33	44	21.57
Santa Rosa	4	15	19	9.31
Escuintla	1	16	17	8.33
Chiquimula	4	10	14	6.86
Jalapa	2	11	13	6.37
Petén	0	13	13	6.37
Jutiapa	2	8	10	4.90
Zacapa	1	8	9	4.41
Suchitepéquez	1	8	9	4.41
San Marcos	2	5	7	3.43
Huehuetenango	1	6	7	3.43
Baja Verapaz	2	5	7	3.43
Izabal	0	6	6	2.94
Retalhuleu	2	3	5	2.45
Quetzaltenango	1	4	5	2.45
Alta Verapaz	0	4	4	1.96
El Progreso	1	2	3	1.47
Quiché	0	3	3	1.47
Sololá	1	2	3	1.47
Sacatepéquez	1	2	3	1.47
Totonicapán	0	2	2	0.98
Chimaltenango	0	1	1	0.49
Total	37	167	204	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

El registro de casos ocurridos revela la concentración de hechos en trece departamentos con la mayor incidencia respecto al número de homicidios y asesinatos de adultos mayores.

Tabla 17
Homicidios de adultos mayores, por área
Enero a octubre 2009

Área	F.	%
Rural	88	43.14
Urbana	116	56.86
Total	204	100.00

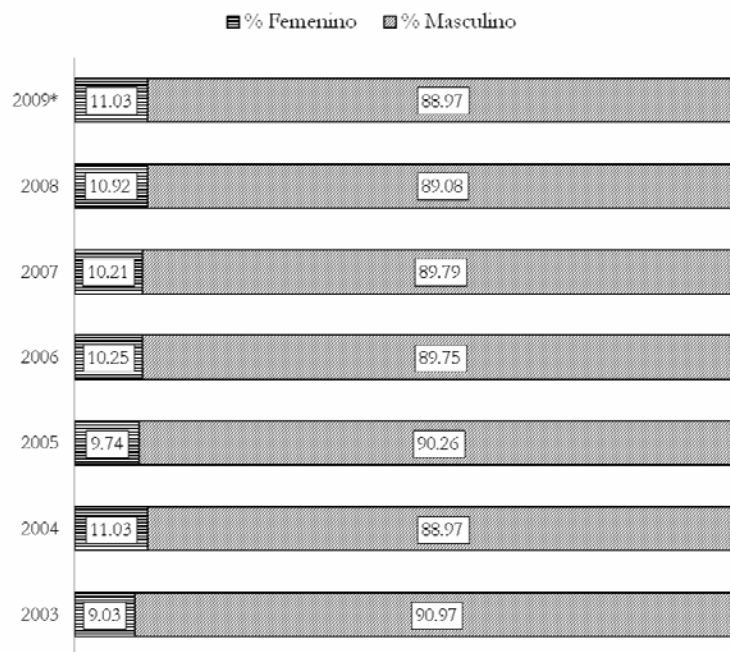
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la PNC.

Respecto a la acumulación de casos por área, los datos disponibles según los registros de la PNC indican que los hechos se concentran en el área urbana, donde se cometieron 116 ataques mortales, equivalentes al 57%; mientras el área rural acumula 88 casos, el 43%. La tendencia coincide con otros actos de violencia, cuyo accionar también se concentra en áreas urbanas.

1.2.5 Muerte violenta de mujeres

La situación de la mujer presenta una serie de cifras preocupantes durante los últimos siete años. Según estadísticas de la PNC, durante 2003 fueron asesinadas 383 mujeres; en 2004, 497; en 2005, 517; en 2006, 603; en 2007, 590, y en 2008, 687. Durante estos seis años las cifras se han incrementado en un 179%. Para noviembre de 2009, la PNC tenía registros de 657 mujeres asesinadas y 899 heridas, existiendo una proporción de 0.66 muertes por cada mujer herida.

Gráfica 12
Proporción de muertes violentas por sexo
Años 2003 a 2009 (*Noviembre)



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Salvo en el caso de 2003 y 2005, las muertes violentas de mujeres han sobrepasado el 10% con respecto a los hombres. Las cifras más altas se reportaron en 2009 y 2004 (11.03%), le sigue 2008 (10.92%) y 2007 (10.21%). Los datos hasta octubre hacían posible una proyección para 2009 de 59.72 muertes mensuales y un total de 717 mujeres asesinadas. De acuerdo con las cifras de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el 2009 se convertiría en el año más violento con respecto al número y proporción de homicidios de mujeres.

En la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) se establece que la violencia de género es una manifestación en la esfera social para perpetuar la posición de subordinación frente al hombre.

En las recomendaciones derivadas de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial se recomienda al Estado reconocer en términos de “equidad e igualdad” para eliminar la discriminación y garantizar la paridad entre hombres y mujeres. Se insta a establecer estrategias eficaces tendientes a reformar debidamente los Códigos Civil, Penal y Procesal Penal, para que delitos como el de la muerte de mujeres, por su condición de género, sean debidamente investigados.

En abril de 2008, el Congreso de la República aprobó la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto No. 22-2008). Tanto las estadísticas de 2008 como las de 2009, a un año de vigencia de la ley, no parecen reflejar todavía un impacto visible que disminuya las muertes violentas de mujeres.

Tabla 18
Muerte violenta de mujeres
Mes/casos

Mes	Casos	%
Enero	58	9.63
Febrero	62	10.30
Marzo	56	9.30
Abril	49	8.14
Mayo	64	10.63
Junio	62	10.30
Julio	57	9.47
Agosto	81	13.46
Septiembre	58	9.63
Octubre	55	9.14
Total	602	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

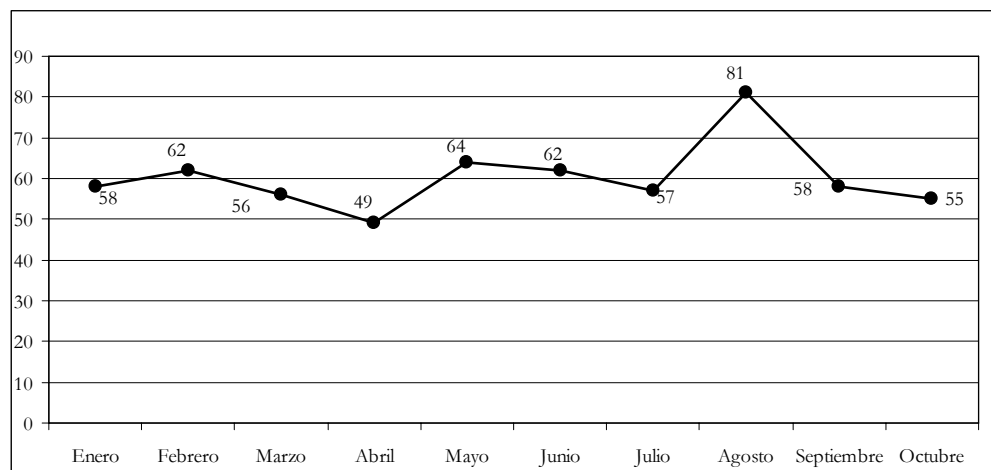
Durante 2009 las cifras de violencia lejos de disminuir, indican una espiral ascendente. A lo largo del año la violencia en contra de los hombres se mantuvo entre el 9.25% (más bajo) y el 10.54% (más alto). Para las mujeres estas diferencias varían. Mientras el porcentaje se mantuvo entre el 9.14%, en el mes más violento (agosto) las cifras alcanzaron un 13.36% de muertes.

En agosto se registraron 609 homicidios, de los cuales 81 fueron en contra de las mujeres. Incluso proporcionalmente, el mes tuvo connotaciones particulares en su contra ya que tuvieron una proporción mayor en comparación a los datos de los hombres.

La muerte de mujeres manifestó repuntes en seis meses, haciendo que la media se mantenga en 60 muertes mensuales. Conforme a esta cifra los meses de enero (58), marzo (56), abril (49), julio (57), septiembre (58) y

octubre tienen datos menores. Cuando las cifras se presentan a la baja tienen un repunte mayor que las mantiene constantes en el tiempo. Los meses que sirven para ejemplificar son los de abril (49) y julio (57).

Gráfica 13
Muerte violenta de mujeres, 2009



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

El siguiente análisis lo detalla más a profundidad: La muerte violenta de mujeres paradójicamente viene de ascender en el mes de febrero (62), en los meses de marzo (56) y abril (49) descende y súbitamente se incrementa en mayo (64). Como puede notarse, se presenta una ruptura en la continuidad y la cifra se dispara de 49 a 64. Igualmente sucede con el mes de julio (57) cuando ocurre otra disminución, variación que inicia en el mes de junio (62), pero en agosto sufre el repunte más alto del año, con 81 muertes.

El asesinato de mujeres cada vez que disminuye aumenta de forma más violenta: la baja es paulatina y el aumento es abrupto, de ahí la constante del fenómeno. Los hechos llaman a la necesidad de abordar las investigaciones de manera profunda y con métodos criminológicos con enfoque de género que sustenten los procesos legales y se reduzca la impunidad en el caso de muertes de mujeres.

Geográficamente, el departamento de Guatemala es el más violento con 291 casos registrados (48.34%). Le siguen Escuintla (32) y Jalapa (28). Existen departamentos con un gran número de víctimas ubicados en zonas fronterizas, tales como San Marcos (27), Jutiapa (23), Petén (21), Chiquimula (21), Huehuetenango (20) e Izabal (18).

Tabla 19
Muerte violenta de mujeres a octubre 2009

Departamento	Sexo femenino	
	Casos	%
Guatemala	291	48.34
Escuintla	32	5.32
Jalapa	28	4.65
San Marcos	27	4.49
Jutiapa	23	3.82
Petén	21	3.49
Chiquimula	21	3.49
Santa Rosa	20	3.32

Huehuetenango	20	3.32
Izabal	18	2.99
Quetzaltenango	14	2.33
Suchitepéquez	14	2.33
Zacapa	14	2.33
Chimaltenango	10	1.66
Alta Verapaz	10	1.66
Sacatepéquez	9	1.50
Retalhuleu	8	1.33
Quiché	6	1.00
Baja Verapaz	5	0.83
El Progreso	4	0.66
Sololá	4	0.66
Totonicapán	3	0.50
Total	602	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

La violencia se manifiesta de forma indiscriminada y sin importar la edad de la mujer. Al examinar las cifras de muertes por edades no se observa un patrón etario específico, la violencia en contra de la mujer no distingue edades. La cifra más alta se ubica en el rango de mujeres que tienen entre 23 y 27 años con 101 muertes, le siguen las edades comprendidas entre 18 y 22 años (84) y de 28 a 32 (72).

Esos datos revelan que cerca de la mitad de las mujeres son asesinadas en la etapa de mayor capacidad reproductiva.⁸ Los homicidios describen que son víctimas a partir de sus cambios biológicos, de identidad y pertenencia de grupo, tanto en el plano social y cultural, como en el comunitario y educativo. Además, es la edad en que muchas mujeres salen de la esfera doméstica a la actividad económica remunerada, tanto informal como formal.

Tabla 20
Muerte violenta de mujeres a octubre 2009

Rango de edades	Casos	%
De 00 a 12 años	19	3.16%
De 13 a 17 años	69	11.46%
De 18 a 22 años	84	13.95%
De 23 a 27 años	101	16.78%
De 28 a 32 años	72	11.96%
De 33 a 37 años	65	10.80%
De 38 a 42 años	46	7.64%
De 43 a 47 años	32	5.32%
De 48 a 52 años	30	4.98%
De 60 a 99 años	37	6.15%
De 53 a 59 años	33	5.48%
No específica edad	14	2.33%
Total	602	100.00%

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

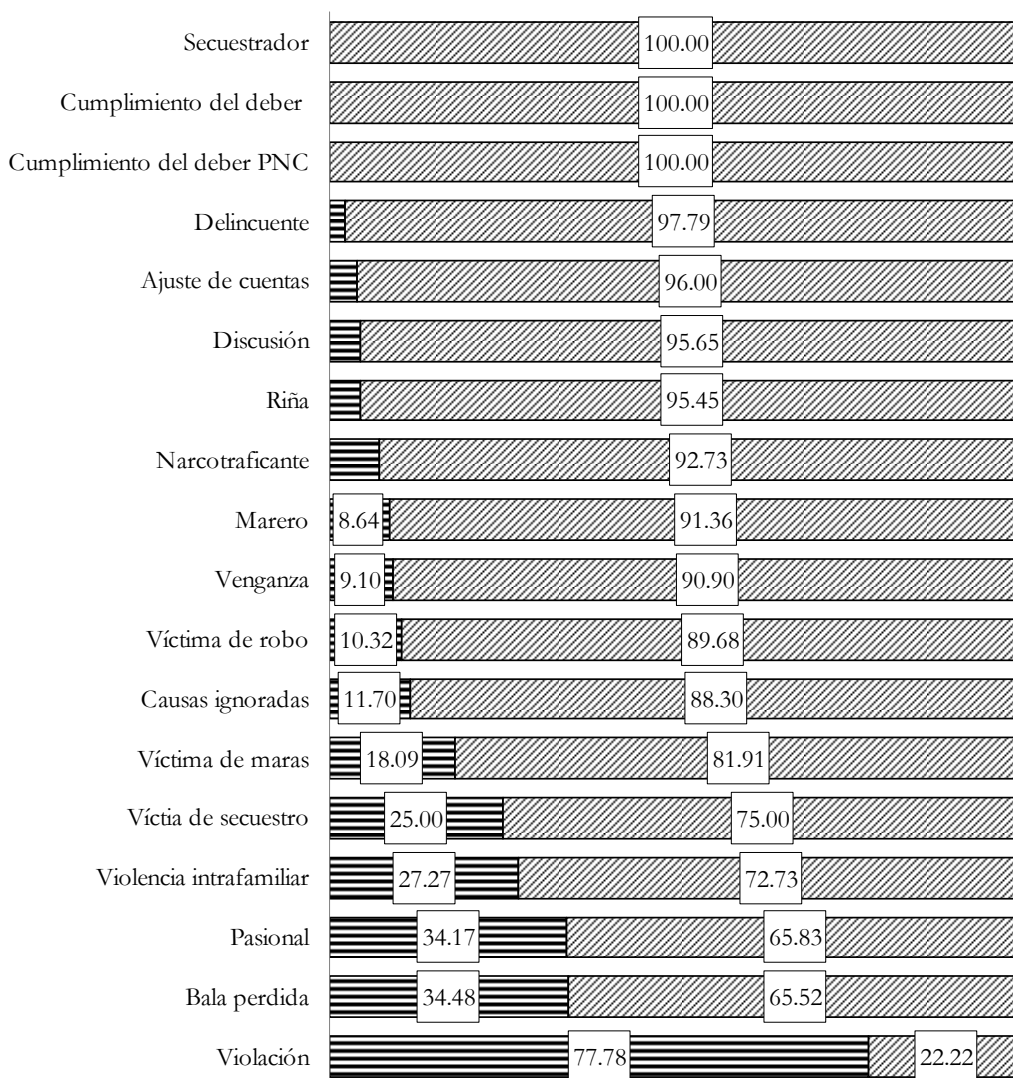
⁸ Según el informe preeliminar de la V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil del MSPAS 2009, la etapa de mayor capacidad reproductiva de las mujeres comprende el rango de edad entre los 15 a 34 años.

Al recopilar los datos cuantitativos en torno a las violaciones del derecho a la vida de las mujeres, las estadísticas se mantienen constantes, no sólo en el fenómeno en sí, sino también de acuerdo con el móvil y en los casos de tortura, siendo éstas características de las formas de violencia mortal en contra de las mujeres.

De las 5,432 muertes violentas ocurridas hasta octubre de 2009, las de mujeres representan el 11.03%. En esa medida, el análisis de las cifras registradas conforme al móvil y los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de las personas y la proporción de actos de tortura cometidos en contra de hombres y mujeres, revela que las mujeres son víctimas de violencia en mayor magnitud que sus pares hombres.

Entre los porcentajes de móviles superiores a la media de muertes violentas de mujeres, o sea, que la sufren o son víctimas en mayor medida que los hombres (cifra mayor a 11.03%) se encuentran las causas ignoradas (11.70%), víctima de maras (18.09%), víctima de secuestro (25.00%), violencia intrafamiliar (27.27%), crimen pasional (34.17%), bala perdida (34.48%) y violación (77.78%).

Gráfica 14
Proporción de muertes violentas
Por móvil y género



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

El desconocimiento de las causas (11.7%) revela la escasa prioridad que tiene el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres. El 8 de octubre de 2009, la institución del Procurador de los Derechos Humanos efectuó la supervisión al sistema de justicia sobre “Femicidio, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar”, con el objetivo de evaluar el avance de aplicación de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto No. 22-2008), la Ley de violencia intrafamiliar (Decreto No. 97-1996) y el Plan nacional de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres (PLANOVI 2004-2014).

La supervisión identificó denuncias por parte de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que explican sobre muchas falencias del sistema. El Estado no asume la investigación y a la organización que realiza el acompañamiento, asesoría y representación, se le ha trasladado la responsabilidad de aportar elementos que coadyuven en esclarecimiento y en un debido proceso.

Además, se señala la falta de coordinación y protección en la escena del crimen; se sostiene que hay contaminación y que los fiscales no aplican los procedimientos, como mover los cadáveres sin haber realizado la investigación, con lo cual no hay correspondencia entre las fotografías y la narración de los hechos.

En los casos de femicidio hay una falta de sensibilización, se tratan como casos sin perspectiva de género, por lo cual en la investigación, juicio y condena a los presuntos responsables, se dificulta la aplicación del delito de femicidio. Las mismas organizaciones señalan que los operadores no están especializados o tienen poco conocimiento acerca de los derechos de la mujer, con lo que fácilmente se tiende a invisibilizar, permitir y recrear la misoginia como forma violenta y cotidiana en contra de la mujer.

La responsabilidad que tienen los entes investigadores es la de aplicar la ley, coordinar entre instituciones, guardar la escena y la cadena de custodia e investigar el círculo de la víctima. Esta cadena de procesos se rompe ante la falta del tratamiento diferenciado, las mujeres reciben un trato descalificador y culpabilizador. Los operadores de justicia deben desarrollar un papel que fomente la igualdad y equidad frente a las condiciones, circunstancias y expresiones que facultan, determinan y fomentan la violencia en contra de las mujeres.

Bajo otra perspectiva en cuanto al móvil del asesinato de la mujer, se encuentra la categoría de víctima de maras. A lo largo del año muchos asesinatos revelan el sentido de propiedad o bien adquirido que se tiene de la mujer, según el cual la vida está a merced de la pareja o la pandilla en este caso particular. El caso de una víctima de mutilación aparecida en dos colonias de la zona 18 revela la violencia misógina y el irrespeto de la figura de la mujer en la sociedad.

La víctima no sólo fue asesinada, torturada y mutilada, sino que el hecho fue utilizado también como una advertencia y extorsión. El mensaje dejado en los restos de la mujer señalaba: *“a toda empresa o negocio o escuela pagarán el impuesto si no así aparecerán la mara atentamente salvatrucha”*. Otra de las bolsas donde aparecieron los restos de la mujer contenía la siguiente amenaza: *“Queremos la renta de los buses de San Rafael MS [Mara Salvatrucha]”*.

Según declaraciones de las autoridades del MP y la PNC, se sospechaba, por los mensajes encontrados en la escena del crimen, que se trataba de una venganza entre pandilleros por el cobro de extorsiones, aunque no se descartaba el posible móvil de ajuste de cuentas contra un transportista.

La escasa protección de la escena del crimen se puso en evidencia en este caso; tras el primer hallazgo los peritos no procedieron a movilizarse y encontrar las siguientes partes, fue un trabajador de limpieza municipal el que accidentalmente encontraría el resto del cadáver en otra colonia.

A partir de las entrevistas realizadas a oficiales de la división especial de investigaciones criminales (DEIC-PNC), como parte de la supervisión administrativa de la institución del Procurador de los Derechos Humanos sobre femicidio antes referida, se estima que el número de investigadores no es el adecuado, ya que no sobrepasan las 15 personas.

Los grupos de investigación se dividen en dos, uno realiza trabajo administrativo y el otro de investigación. El trabajo es voluntario, no son escogidos por su conocimiento y experiencia, sino que la selección se hace a través de un proceso que no involucra necesariamente el conocimiento y perspectiva de género. Los únicos requisitos para ser asignados son haberse desempeñado como policías, cumplir tres meses de investigación, pasar las pruebas.

Según la opinión de los oficiales, el trabajo de investigador no es recomendable, es agotador, poco reconocido y mal remunerado (ganan alrededor de Q 3,500.00 mensuales), por lo que muchos oficiales optan por pedir traslados a otros puestos.

Por los altos índices de violencia, cada investigador tiene un promedio de 40 casos, de los cuales prioriza en función de los niveles de información y tipo de hecho. En muchos casos, indican, se enfrentan al problema que las víctimas o familiares no colaboran porque prefieren evitar posibles consecuencias e implicaciones, tales como venganza, extorsión, chantaje y otros, por lo cual prefieren resignarse. Tampoco los testigos presenciales quieren colaborar, en particular por temor a represalias.

Cuando se requirió información sobre el funcionamiento del programa a testigos a las organizaciones de derechos humanos de protección a la mujer, muchas personas manifestaron que los propios jueces coinciden en que se es deficiente, no es confiable, pone en desprotección a las personas y, por lo mismo, éstas prefieren retractarse, ya que también son víctimas de amenazas.

Las condiciones para realizar el trabajo también son deficientes. A los oficiales del interior de la República no se les proporciona un alojamiento adecuado para el descanso y cubrir las necesidades mínimas. Además, el equipo es insuficiente, no tienen cámara de video, grabadora, vehículos y el papel para realizar informes es insuficiente, sólo les dan cinco hojas. Sólo acuden a la escena del crimen y engavetan los casos ante la dificultad de profundizar en ellos, dado el escaso recurso material y logístico. Hay muchos casos atrasados, además por cada caso a veces hay de tres a cuatro víctimas.

Según uno de los oficiales entrevistados, a octubre se registraban 296 casos divididos entre 15 investigadores. Hay una proporción de 19.73 casos a cada uno, más los de procesos anteriormente asignados. Estas cifras revelan el escaso conocimiento sobre la problemática, ya que a octubre se registraban, según la misma fuente, 586 fallecidas.

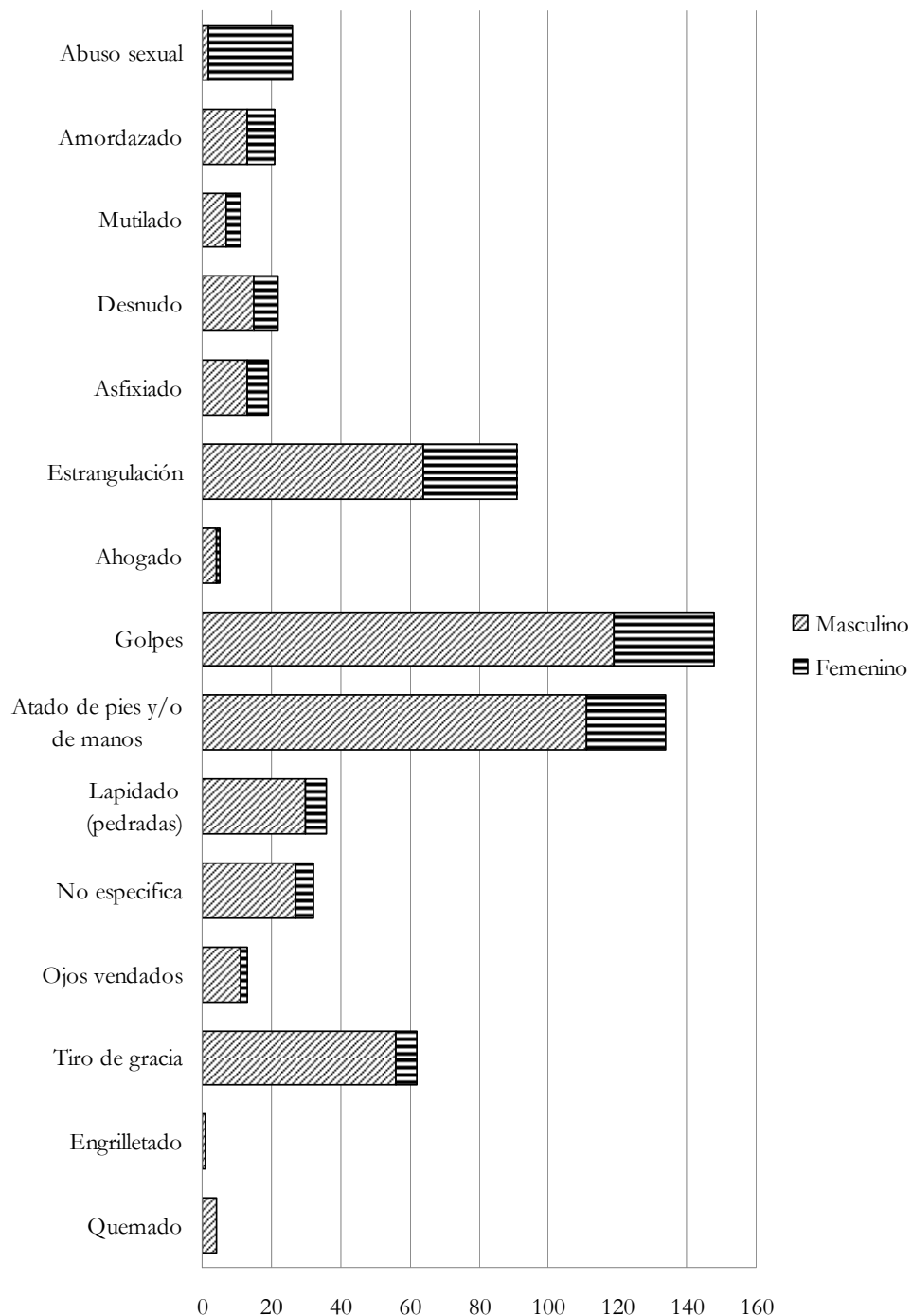
Ante la falta de personal, equipo logístico y de investigación, debe sumarse la escasa o nula preparación de los investigadores, tanto del MP como de la PNC para determinar factores causales determinados por el género, de ahí que en la mayor parte de casos terminen por involucrar la categoría “crimen pasional” y se estigmatice a las mujeres y se victimice al agresor.

Este tipo de aseveraciones sobre móviles pasionales abundan en la jerga policial para establecer móviles de asesinatos de mujeres y de violencia contra ellas. En el plano social terminan por reforzar, mantener y perpetuar los roles, las relaciones de poder y la formas de violencia.

Los imaginarios sociales asignados tradicionalmente a las mujeres fomentan las asimetrías en las relaciones de poder y la violencia que sufren, en la mayor parte de casos desde niñas, convirtiéndose en un “*continuum de violencia*”. En la mayor parte de los casos de asesinatos en contra de mujeres existe violación (77.78%).

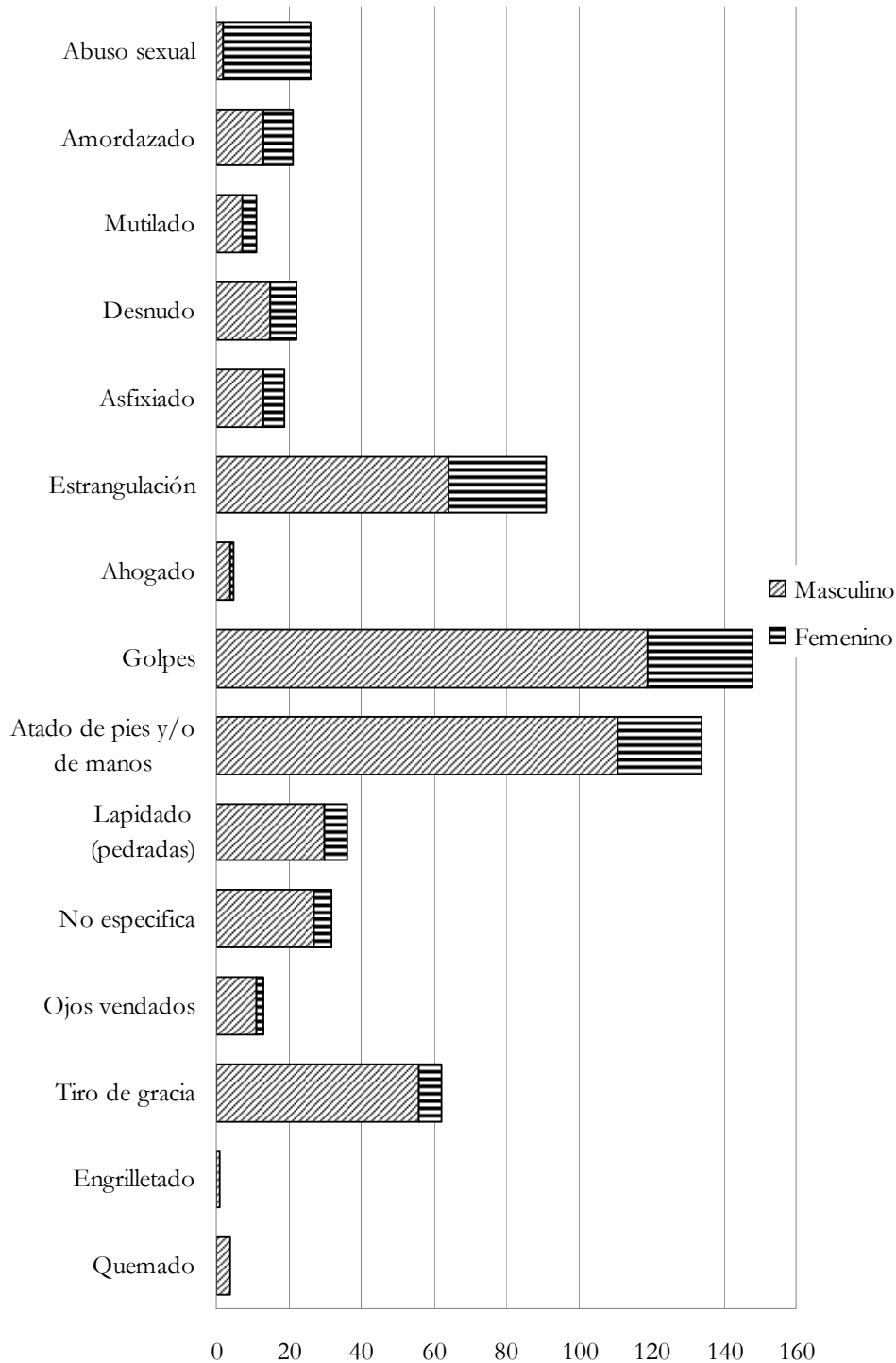
Otro indicador se refiere a los cadáveres con señales de tortura que reflejan cómo las mujeres reciben mayores torturas que los hombres. Dichas señales evidencian que ser mujer y representarla en esta sociedad son condicionantes para ser víctimas de una violencia más cruel y deshumanizante.

Gráfica 15
Señales de tortura por sexo
Frecuencia, 2009 (a octubre)



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Gráfica 16
Proporción de señales de tortura por sexo
2009 (a octubre)



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Las señales de tortura son constantes en los cadáveres. Además, los datos revelan la saña con que se cometen los ataques: los indicadores sobre abuso sexual (90.48%), asfixiado (46.15%), mutilado (40.00%), estrangulación (32.20%), lapidación (19.35%), desnudo (22.22%), amordazado (26.67%), rebasan con creces los niveles de tortura hacia el hombre.

Mientras un hombre tiene una señal de tortura, una mujer puede presentar entre 2 y 7. La mujer adquiere un valor material y simbólico de pertenencia. De ahí que se hable de “misoginia” como una categoría que evidencia el “odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo”, como lo tipifica el Decreto 22-2008 del Congreso de la República.

Es de tal magnitud el problema, reconocido nacional e internacionalmente, que en febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó la campaña global: “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, que hace un llamado a los gobiernos, medios de comunicación, sector privado, sociedad civil y población en general para trabajar en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

El capítulo regional de la campaña se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala durante el mes de noviembre de 2009, por la situación de vulnerabilidad y riesgo que las mujeres enfrentan en el país, la creciente espiral de violencia a la que se enfrentan cotidianamente y para visibilizar, apoyar e impulsar esfuerzos que conlleven a su erradicación como práctica cotidiana.

1.2.5.1 Aplicación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer

En abril de 2008 el Congreso de la República aprobó la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto No. 22-2008. En las estadísticas del año, la aplicación de la ley tiene un impacto limitado en las muertes violentas de mujeres.

Las dificultades para la aplicación de la ley encuentran gran parte de las justificaciones en la interpretación y diferencias entre los tipos de violencia cometidos en contra de la mujer, el nivel de intencionalidad y los ámbitos privados y públicos en que se cometen, aspectos que se relacionan estrechamente con la perspectiva de género, métodos de investigación, tratamiento de pruebas e interpretación judicial por parte de los operadores de justicia.

En la aplicación de la ley priva la interrelación y la complementariedad entre los distintos instrumentos, convenciones y tratados internacionales que previenen y dan sustento a la normativa nacional, permitiendo aplicar las distintas leyes en beneficio de la parte más vulnerable, la víctima, en este caso la mujer.

Guatemala no sólo es un país donde se viola el derecho a la vida, sino que existe una responsabilidad del Estado por acción u omisión ante las muertes violentas de mujeres. Hasta el momento, el Estado no está cumpliendo con el objetivo y fin de la ley aprobada por el Poder Legislativo:

“(…) garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien arremete, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos.

El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificado por Guatemala” (Decreto 22-2008, artículo 1).

El artículo 6 de la ley, particularmente en los incisos c) e) y f), establece que se comete femicidio:

“c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.

e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.

f) Por misoginia.”

Además, no hay un protocolo específico que ayude a determinar factores causales que permitan aplicar la ley. El protocolo de femicidio se refiere al conjunto de pasos definidos que deben llevarse a cabo para determinar, orientar y dirigir el proceso de investigación desde el primer momento en que ocurre el deceso de una mujer.

El protocolo procura facilitar el trabajo del personal dotando paso a paso de metodologías precisas para la reconstrucción de la escena del crimen y la revisión de áreas específicas que servirán para hilar la investigación y establecer la hipótesis y determinar la tipificación del delito. En este caso, permiten identificar si la muerte de una mujer obedece a lo que se encuentra definido en la ley como “femicidio”.

Según las estadísticas del Organismo Judicial, a junio de 2009 había 45 procesos por delito de femicidio, fecha para la cual ya se registraban 351 mujeres víctimas de muerte violenta. Las cifras describen las limitaciones en la investigación, aporte de pruebas y el retardo en el sistema para esclarecer los asesinatos.

Incluso, a un año de la aprobación y vigencia de la ley no se cuenta con los tribunales especializados, tal y como lo indica el artículo 15 del Decreto No. 22-2008. Muchos de los jueces aún desconocen las concepciones y utilidades de la misma ley. Se sigue sosteniendo la perspectiva de homicidio y no se da pie a la diferenciación por género.

Al indagar sobre la existencia de un protocolo para el examen de cadáveres por muerte violenta de mujeres, del resultado obtenido en la supervisión administrativa de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) durante abril se concluye que una parte del personal médico y de peritaje de la institución desconoce la existencia de un protocolo específico para examinar los cadáveres de mujeres a fin de determinar si se trata de casos de femicidio.

La inobservancia e incumplimiento de dichos protocolos sugiere que en algunos casos no se sigue con rigor el procedimiento indicado. Esta deficiencia conlleva consecuencias para la aplicación de la justicia pronta y cumplida. En el caso del femicidio queda impune la tipificación del delito como tal. Ante la insuficiencia de un protocolo de femicidio, es necesario que se encamine la tarea sobre el protocolo de la escena del crimen, para determinar el proceso criminológico más propicio o por lo menos pasos estandarizados para el manejo de la escena.

La existencia de un protocolo de femicidio permite establecer y tipificar la muerte violenta de mujeres por el ente investigador y avalar de una mejor forma la acusación en el sistema judicial. El juicio sumario puede establecer una mayor precisión, emitir condena y hacer funcional el sistema de justicia en cuanto a muerte de mujeres.

En muchos casos los juzgados prefieren no tipificar el delito de femicidio porque se requiere mayor rigor investigativo (lo cual en muchos casos no existe) y carga laboral que asumir.

La falta de seguimiento por parte de los interesados es también una grave implicación para el Estado, pero sobre todo, acentúa aún más la discriminación y la violencia contra las mujeres. Aún es recurrente la idea de que la aplicación de ley contra el femicidio tiende a facilitar la desintegración del núcleo familiar, dadas las condiciones económicas que hacen del hombre el sustento de la casa, y es de suponer que las mujeres que presentan las denuncias no quieren que se recluya en la cárcel porque sus hijos se quedan sin el sustento diario. Se hace necesario conocer las conclusiones a las que se han llegado en las distintas conferencias de la mujer, las resoluciones que aclaran que ninguna medida tendiente a favorecer a la mujer, en aras de la igualdad, puede tipificarse como discriminación, sino como una acción afirmativa en aras de propiciar una verdadera equidad y paridad entre géneros.

1.2.6 Niñez y adolescencia víctima de violencia criminal

El clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país, no distingue rangos de edad o sexo de las víctimas, tampoco excluye al segmento social infantil y juvenil. En las niñas, niños y jóvenes como población

social vulnerable, se focaliza también la violencia social, intrafamiliar, comunitaria, escolar y/o criminal. Por lo general, las tendencias sociales que criminalizan el comportamiento juvenil o que lo estigmatizan para justificar la violencia contra los jóvenes, vulneran los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal de la niñez y adolescencia.

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2009 se reportaron 436 ataques mortales contra el derecho a la vida de niñas, niños y adolescentes; esto significa que en promedio murieron 43.6 por mes. En tres días promedio han fallecido cuatro niños. La mayoría de hechos registrados son el resultado de acciones provocadas por criminales comunes, quienes actúan con alevosía, en solitario o en grupo. También hay casos en los que, por acción u omisión, podría haber responsabilidad de agentes del Estado, quienes abusando del poder que les proporciona su calidad de agentes de la fuerza pública, participan o refrendan actos ilícitos de esta naturaleza.

Tabla 21
Homicidios de menores de edad, según género
Enero a octubre 2009

Género	No. de casos	%
Femenino	88	20.18
Masculino	348	79.82
Total	436	100.00

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PNC.

En la tabla anterior se aprecia que el número más elevado de ataques ocurren en contra de menores de edad del género masculino, que acumuló 348 muertes, equivalentes al 80%. Las víctimas mortales pertenecientes al género femenino suman 88, que corresponden al 20%.

Tabla 22
Homicidios de menores
Por edad y mes
Enero a octubre 2009

Edad	2009										Total	
	Enc.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		
	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	F.	%
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0.46
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.23
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4	0.92
4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0.92
5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.46
6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0.69
7	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4	0.92
8	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4	0.92
9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0.46
10	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7	1.61
11	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0.92
12	0	0	2	0	2	0	1	0	0	2	7	1.61
13	3	0	1	0	1	1	2	2	2	0	12	2.75
14	5	3	2	4	5	2	2	2	4	5	34	7.80
15	3	9	11	7	5	9	4	9	8	4	69	15.83
16	12	4	8	7	17	14	7	7	9	11	96	22.02
17	24	19	24	18	18	16	19	19	14	10	181	41.51
TOTAL	52	37	51	40	53	42	39	44	43	35	436	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Los meses más violentos fueron: mayo con acumulación de 53 casos, enero con 52 víctimas y marzo con un acumulado de 51 casos. La suma de las tres cantidades equivale al 35.78% del total de casos ocurridos en el país, o sea que más de la tercera parte de los ataques mortales se concentró en los meses mencionados.

El grupo etario más susceptible a los ataques, es el de las personas jóvenes cuyas edades oscilan entre los rangos de 13 a 17 años. Aunque en menor escala, también se reportan ataques a niñas y niños de menor edad. Cabe matizar la muerte de 2 infantes menores de 1 año por heridas de arma de fuego, sufridas durante ataques dirigidos a personas mayores.

La distribución geográfica de los ataques se concentra en 15 municipios, en los cuales la frecuencia de homicidios fue más alta. Estos municipios pertenecen a cuatro departamentos: Guatemala, Petén, Huehuetenango y Chiquimula.

Tabla 23
Homicidios de menores de edad (por cada 100,000 habitantes)
15 municipios más violentos
Enero a octubre 2009

Lugar	Departamento, municipio	Homicidios de menores (por cada 100,000 habitantes)
1	Petén, San Andrés	37.18
2	Guatemala, Guatemala	36.57
3	Guatemala, San José Pinula	35.47
4	Petén, Santa Ana	28.71
5	Huehuetenango, Santa Bárbara	27.36
6	Petén, Melchor de Mencos	26.65
7	Guatemala, Petapa	26.50
8	Chiquimula, Esquipulas	26.11
9	Petén, San Benito	25.21
10	Guatemala, Santa Catarina Pinula	24.98
11	Guatemala, Chuarancho	24.90
12	Petén, Flores	24.42
13	Guatemala, Villa Canales	24.23
14	Guatemala, Mixco	24.09
15	Petén, San José	23.38

Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC.

Entre los 15 municipios más violentos, destacan los tres primeros, San Andrés, Petén con 37.18 homicidios por cada 100,000 habitantes, la ciudad de Guatemala con 36.57 y San José Pinula, Guatemala, con promedio de 35.47 homicidios.

Los dos departamentos más afectados por los ataques violentos en contra de niñas, niños y adolescentes son Guatemala y Petén. Según la información cuantitativa, el departamento de Guatemala registra el mayor número de casos, pero la tendencia indica que estos hechos suceden con más regularidad en regiones del área rural, por tanto, se reproducen en menor escala en la urbana.

Del registro mensual de los hechos se infiere que el mes más violento fue mayo, con 53 casos (12.16%) de éstos 42 víctimas de sexo masculino y 11 de sexo femenino. En orden descendente le sigue enero, con 52 casos (11.93%) y, también en este campo, fueron más las víctimas masculinas (42) que las femeninas (10).

Tabla 24
Homicidios de menores de edad, según mes y género
Enero a octubre 2009

Mes	Masculino		Femenino		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Enero	42	12.07	10	11.36	52	11.93
Febrero	31	8.91	6	6.82	37	8.49
Marzo	42	12.07	9	10.23	51	11.70
Abril	34	9.77	6	6.82	40	9.17
Mayo	42	12.07	11	12.50	53	12.16
Junio	34	9.77	8	9.09	42	9.63
Julio	33	9.48	6	6.82	39	8.94
Agosto	30	8.62	14	15.91	44	10.09
Septiembre	34	9.77	9	10.23	43	9.86
Octubre	26	7.47	9	10.23	35	8.03
Total	348	100.00	88	100.00	436	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Durante el período también se registran casos de muertes con señales de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y abuso sexual, según se desprende de los datos detallados a continuación.

Tabla 25
Menores de edad con señales de tortura, por sexo
Enero a octubre 2009

Señales de tortura en menores de edad	Masculino	Femenino
	F.	F.
Casos	19	14

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

De los hechos denunciados y conocidos, las víctimas masculinas torturadas son la mayor cantidad, sumando 19 casos (57.58%); las víctimas femeninas fueron 14 (42.42%).

Tabla 26
Señales de tortura en menores de edad, por sexo
Enero a octubre 2009

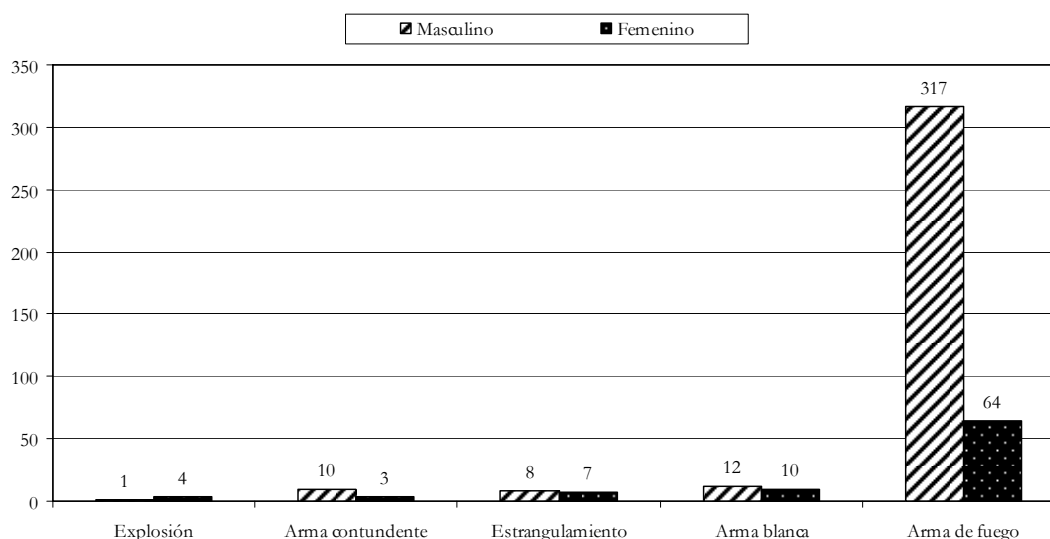
Señales de tortura en menores de edad	Masculino	Femenino
	F.	F.
Atado de pies y/o de manos	9	1
Estrangulación	6	4
Abuso sexual	0	7
Tiro de gracia	5	0
Golpes	1	3
Amordazado	1	2
Mutilado	1	2
Desnudo	0	2
Asfixiado	0	1
Lapidado (pedradas)	1	0
No específica	1	0

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Los cadáveres de ambos sexos presentaban claras señales de tortura y también, en el caso de las mujeres, abuso sexual. Entre las modalidades más recurrentes empleadas por los victimarios están: atadura de pies y manos, estrangulación, abuso sexual, tiro de gracia y golpes. Nótese que todos los casos de abuso sexual se cometieron en contra de víctimas femeninas. En nueve casos se verificó atadura de pies y/o manos, lo cual indica seguramente un tipo de detención previo a la muerte, es decir premeditación o planificación del hecho.

Entre las causas de muerte de niñas, niños y adolescentes figuran: ataques con arma de fuego, que ocupan el primer lugar, al acumular la mayor cantidad, o sea, 381 víctimas de ambos sexos, que significa el 87.39%. Conforme la tendencia en los casos de tortura, las 317 víctimas hombres superan en cantidad a las de 64 mujeres.

Gráfica 17
Homicidios de menores de edad
Causa según género
Enero a octubre 2009



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC

En una escala mucho menor, hubo ataques con arma blanca, estrangulamiento, golpes contundentes y con explosivos. La mayor cantidad de víctimas son hombres jóvenes.

1.3 Violencia intrafamiliar

En Guatemala la violencia intrafamiliar es un fenómeno social grave. Durante 2009, las diferentes unidades de la Procuraduría de los Derechos Humanos recibieron 438 denuncias de casos de violencia intrafamiliar, dando lugar, a través de acompañamiento y asesoría a los núcleos familiares afectados, a acciones tendientes a protegerlos, y así, resguardar la vida, libertad, integridad y el interés superior de la niñez.

A pesar de la insuficiencia de información, los datos numéricos según denuncias hechas públicas son indicadores que permiten identificar acciones y atender los problemas sociales.

Por regla general, esa violencia sucede en el seno del hogar, por esa razón pasa desapercibida, se hace invisible. Ha sido común en la opinión pública, incluso para funcionarios públicos, considerar que esta situación no debe trascender más allá de la intimidad familiar por tratarse de un asunto supuestamente privado.

Sin embargo, la ley en la materia⁹ persigue y sanciona este delito y los resultados de su aplicación, o al menos de su sola existencia, se encuentran a la vista al analizar los datos elocuentes de la denuncia.

La existencia de subregistros sobre casos de violencia intrafamiliar es un hecho inherente al mismo carácter de la agresión, a la situación de indefensión y falta de información para las víctimas. De esa forma persisten hogares donde la violencia no se denuncia, viviéndose la agresión como actitudes o formas *normales* de convivencia en el hogar; evidenciándose miedo, necesidad, dependencia económica y afectiva, mantenimiento del *status* ante la sociedad, dogmas, creencias y prejuicios, entre otros.

Además, en muchos casos las víctimas no denuncian al agresor por temor a represalias, por la dominación existente. Esas y otras circunstancias invisibilizan el fenómeno y no se logra delimitar exactamente la magnitud que tiene este problema social. Por ello, la estadística judicial adquiere suma importancia por la posibilidad que ofrece de evaluar y determinar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Los datos registrados por el Área de documentación y estadísticas judiciales del Organismo Judicial indican sólo para el primer semestre, enero a junio 2009, 46,302 casos por violencia intrafamiliar, ingresados en los Juzgados de Paz, Paz Penal, Paz Móvil y Primera Instancia del Ramo de Familia.¹⁰ Estas denuncias, registradas por el CENADOJ, incluyen aquellas recibidas por la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, Bufetes Populares, la Procuraduría General de la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos.

La cifra citada equivale a un promedio mensual de 7,717 casos y al promedio diario de 26 hechos, lo cual confirma la gravedad de la situación que afecta a toda la familia, sobre todo a niñas, niños y mujeres.

Según esos datos para el primer semestre, la fuente judicial estima que la tasa de incidencia de la violencia intrafamiliar por cada 1,000 habitantes es de 3.30.¹¹ De acuerdo con dicha fuente, los departamentos que ocupan los primeros lugares, respecto a sumar la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar conocidos en las instancias judiciales, son Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla. Los tres departamentos acumulan el 47.92% de los casos registrados en toda la República.

Tabla 27
Departamentos con mayor incidencia de la violencia intrafamiliar
Por género, casos y víctimas*
Enero a junio 2009

Departamento	Casos ingresados	Mujeres	Niñas	Hombres	Niños
Guatemala	15,658	13,680	579	1,985	606
Quetzaltenango	3,273	3,058	231	189	189
Escuintla	3,257	3,257	29	244	29

Fuente: elaboración propia con base en datos del CENADOJ.

* Un caso puede incluir a más de una víctima.

El departamento de Guatemala acumula más casos, registra 15,658, equivalente al 33.82%, de los cuales 13,680 corresponden a víctimas mujeres, y de éstas 579 son niñas.

Las víctimas hombres suman 1,985 y las de niños contabilizan 606. La cifra de casos de mujeres víctimas es mucho mayor que la de hombres, aunque entre niñas y niños es ligeramente superior la cifra de estos últimos como víctimas de ataques.

⁹ Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Decreto No. 97-96 del Congreso de la República. Guatemala, 1996.

¹⁰ Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ). Organismo Judicial. Guatemala, 2009.

¹¹ *Ibid.*

Por otra parte, Quetzaltenango suma 3,273 casos, equivalente al 7.07%. En este departamento las víctimas femeninas fueron 3,058, de las cuales 231 niñas. Por parte de las víctimas del género masculino, se reportan 189 adultos y también 189 niños.

Escuintla figura con 3,257 casos, equivalente al 7.03%, siendo las víctimas femeninas un total de 3,010 mujeres y 29 niñas. Las personas agredidas del género masculino ascienden a 244 hombres adultos y 29 niños.

El análisis de los datos registrados por la PNC, los cuales comparados con los datos de la estadística judicial podrían parecer parciales, ofrecen evidencias de un aumento no sólo de los casos sino también del acto de la denuncia por una violencia sufrida en el seno del hogar, lo cual es muy importante más allá del dato numérico en sí. De enero a octubre para el 2008 y el 2009, los registros policiales muestran un aumento en la denuncia por casos de violencia intrafamiliar; de 1,680 casos en el 2008, pasa a ser en el 2009 un registro de 1,852 casos.¹² Es decir, estadísticamente hubo un aumento de 172 casos con respecto al año anterior.

Tabla 28
Violencia intrafamiliar, por mes
Enero a octubre 2009

MES	Femenino	Masculino	Total	
	No. casos	No. casos	No. casos	%
Enero	168	30	198	10.69
Febrero	124	15	139	7.51
Marzo	175	24	199	10.75
Abril	192	22	214	11.56
Mayo	181	30	211	11.39
Junio	178	30	208	11.23
Julio	151	19	170	9.18
Agosto	167	19	186	10.04
Septiembre	148	21	169	9.13
Octubre	142	16	158	8.53
Total	1,626	226	1,852	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

La mayoría de personas agredidas son del género femenino, constituyendo 1,626 víctimas, equivalente al 87.80%. Las víctimas de género masculino son 226, correspondiente al 12.20%.

La información referida expone que, según los registros de la PNC de enero a octubre se produjeron 152 agresiones en contra de menores de edad, la mayoría pertenecientes al género femenino. En efecto, 104 personas correspondientes al 68.42%, son niñas víctimas, es decir, más de la mitad. En cuanto a los niños, se reportan 48 casos equivalentes al 31.58%.

¹² Denuncias recibidas y registradas por la PNC, enero a octubre. Guatemala, 2009.

Tabla 29
Violencia intrafamiliar contra menores de edad
Por mes y rango de 0 a 17 años
Enero a octubre 2009

MES	Menores de edad de 00 a 17 años			
	Femenino	Masculino	Total	
	No. de casos	No. de casos	No. de casos	%
Enero	12	5	17	11.18
Febrero	5	3	8	5.26
Marzo	8	4	12	7.89
Abril	11	2	13	8.55
Mayo	16	11	27	17.76
Junio	13	7	20	13.16
Julio	7	4	11	7.24
Agosto	7	5	12	7.89
Septiembre	9	3	12	7.89
Octubre	16	4	20	13.16
Total	104	48	152	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

También se evidencia que los meses con mayor acumulación de hechos fueron: mayo con 27 sucesos, junio y octubre reportan 20 hechos de VIF cada uno. Los meses restantes registran números menores.

Tabla 30
Violencia Intrafamiliar
Rango de 18 a 99 años, por tipo de agresión y género
Enero a octubre 2009

Tipo de agresión	Casos por género y porcentaje					
	Mayores de edad				Total mayores	
	Femenino		Masculino			
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Estrangulamiento	1	0.07	0	0.00	1	0.06
Psicológica	4	0.26	0	0.00	4	0.24
Arma de fuego	3	0.20	1	0.56	4	0.24
Objeto contundente	4	0.26	2	1.12	6	0.35
Verbal	8	0.53	6	3.37	14	0.82
Amenaza de muerte	25	1.64	6	3.37	31	1.82
Arma blanca	27	1.77	7	3.93	34	2.00
Física (bofetadas y puntapiés)	1,450	95.27	156	87.64	1,606	94.47
Total	1,522	100.00	178	100.00	1,700	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC

Tipo de agresión. Respecto al tipo de agresión dirigido a personas adultas y en relación con los medios utilizados por los agresores, las mujeres agredidas suman 1,522, de las cuales el 95.27% fueron víctimas de agresión física (golpes, bofetadas, patadas). Las víctimas de género masculino reportan 178 casos, de los cuales el 87.64% también por agresión física.

Otras modalidades de agresión anotan cifras menores, tales como el empleo de arma blanca, que reporta 27 agresiones en contra de mujeres, equivalente al 1.77% y en el caso de los hombres, ascienden a 7 víctimas, que equivale al 3.93%.

También las amenazas de muerte ocupan una posición notoria. 25 mujeres (1.64%) recibieron amenazas en contra de su vida, seguridad e integridad personal. El mismo tipo de amenaza la recibieron 6 víctimas hombres (3.37%).

Las agresiones verbales y psicológicas, golpes con objetos contundentes, ataques con arma de fuego y por estrangulamiento, son otras modalidades empleadas por los agresores, pero que ocurren en menor escala que las anteriores.

Agresiones contra menores de edad. El tipo de agresión cometida contra menores de edad, en primer lugar, es físicas (golpes, bofetadas, patadas) dirigida contra la integridad física de niñas y niños. Las niñas agredidas fueron 100, correspondiente al 96.15 %; respecto a los niños, se registran 45 casos, equivalentes al 93.75%.

Tabla 31
Violencia intrafamiliar
Menores de edad de 00 a 17 años, por tipo de agresión y género
Enero a octubre 2009

Tipo de agresión	Por género					
	Menores de edad				Total menores	
	Femenino		Masculino			
	No. casos	%	No. casos	%	No. casos	%
Estrangulamiento	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Psicológica	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Arma de fuego	1	0.96	0	0.00	1	0.66
Objeto contundente	1	0.96	0	0.00	1	0.66
Verbal	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Amenaza de muerte	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Arma blanca	2	1.92	3	6.25	5	3.29
Física (bofetadas y puntapiés)	100	96.15	45	93.75	145	95.39
Total	104	100.00	48	100.00	152	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Otras modalidades de agresión suman cantidades bastante menores, por ejemplo, los ataques con arma blanca. Tres se dieron en contra de la integridad física de niños, equivalente al 6.25%. Con relación a niñas víctimas, éstas recibieron dos ataques, correspondiente al 1.92%.

Género más afectado. Las fuentes de información citadas, del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), del Organismo Judicial, y del Departamento de Estadísticas de la PNC, confirman que las víctimas de violencia intrafamiliar son mayormente mujeres y niñas. Ambas instancias registran que las personas del género femenino son la mayor cantidad de víctimas de ese tipo de violencia. Las mujeres y las niñas sufren con mayor intensidad los ataques de sus agresores.

También se reconoce a los niños y hombres como víctimas de violencia intrafamiliar, aunque en cifras menores, comparadas con las víctimas del género femenino.

Cultura de paz y no violencia intrafamiliar. Las estadísticas judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar muestran un elevado número de casos conocidos en los tribunales del país, lo cual destaca la importancia que reviste la denuncia respectiva ante las autoridades competentes para hacer valer los derechos, ampararse en la ley, obtener protección y reparación.

Es imperativo que el Estado continúe apoyando con recursos a las entidades encargadas de proteger a la población víctima de la violencia intrafamiliar; fortalecer los planes y programas que existen para el abordaje de la violencia intrafamiliar; trabajando en acciones conjuntas el Estado y sociedad civil para encontrar maneras de resolver los conflictos sin llegar a los niveles de violencia que se experimentan en la actualidad y se viven desde el seno del hogar, la escuela, la comunidad y en la cotidianidad de las personas.

En el Estado, particularmente los tribunales de justicia, los operadores de justicia, jueces, fiscales y abogados tienen el deber y la oportunidad de crear mecanismos viables de diálogo, cultura de paz, armonía y bienestar con la imparcial aplicación de la ley y la erradicación del mensaje según el cual *“la violencia dentro del hogar es una forma de dirimir los conflictos...”*.

1.4 Menores víctimas de violencia sexual

La vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes los expone a riesgos mayores, tal el caso de los delitos sexuales cometidos en su contra. De enero a octubre 2009, se registraron 306 ataques sexuales (abusos deshonestos y violaciones) en contra de niñas, niños y adolescentes, según informes de la PNC. La mayoría de los ataques (95%) ocurrieron en contra de víctimas del género femenino.

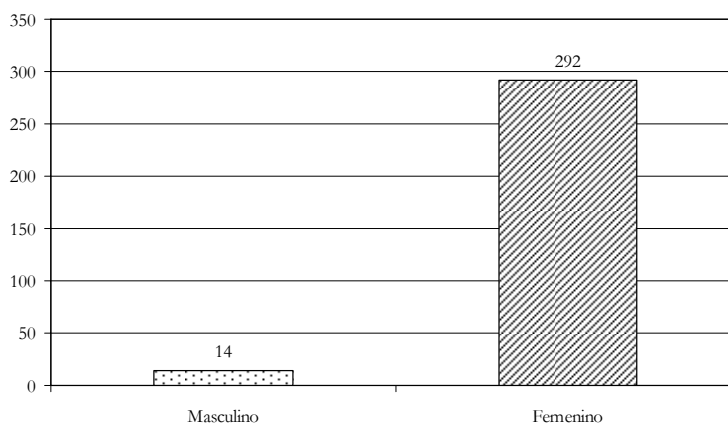
Tabla 32
Delitos sexuales de menores de edad, según género
Enero a octubre 2009

Tipo de delito	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Abuso deshonesto	14	100.00	0	0.00	14	4.58
Violación	0	0.00	292	100.00	292	95.42
Total	14	100.00	292	100.00	306	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Se registraron 292 violaciones sexuales de niñas y adolescentes mujeres, equivalente al 95.42% y 14 abusos deshonestos (sin especificar) correspondiente al 4.58 % en contra de menores de edad de sexo masculino.

Gráfica 18
Delitos sexuales contra menores de edad, según género
Enero a octubre 2009



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Las cifras anotadas, sobre todo las que dan cuenta de los ataques en contra de niñas y mujeres adolescentes, confirman con precisión que referente a delitos de orden sexual, el sector social más afectado son las féminas.

En los registros anotados en la base de datos de la PNC, sólo hay información de dos delitos consignados: abusos deshonestos como tipificación utilizada para los hechos en contra de menores varones y la violación sexual en contra de menores mujeres.

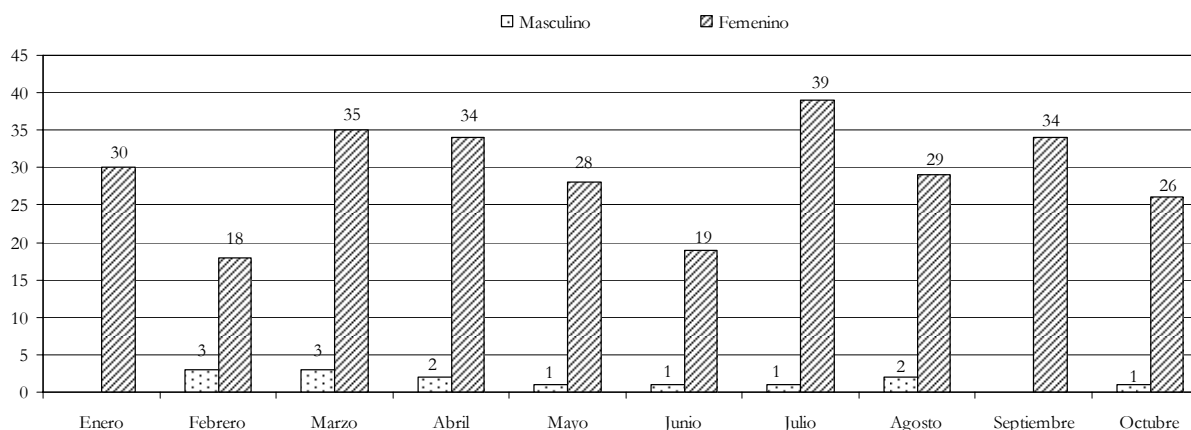
Tabla 33
Delitos sexuales contra menores de edad, según mes y género
Enero a octubre 2009

Mes	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Enero	0	0.00	30	10.27	30	9.80
Febrero	3	21.43	18	6.16	21	6.86
Marzo	3	21.43	35	11.99	38	12.42
Abril	2	14.29	34	11.64	36	11.76
Mayo	1	7.14	28	9.59	29	9.48
Junio	1	7.14	19	6.51	20	6.54
Julio	1	7.14	39	13.36	40	13.07
Agosto	2	14.29	29	9.93	31	10.13
Septiembre	0	0.00	34	11.64	34	11.11
Octubre	1	7.14	26	8.90	27	8.82
Total	14	100.00	292	100.00	306	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Hubo meses en que los ataques fueron más frecuentes, por ejemplo, en julio las violaciones sexuales en contra de niñas y adolescentes mujeres fueron 39 (13.36%); en marzo, 35 casos (11.99%) y, en tercer lugar, abril con 36 casos (11.64%).

Gráfica 19
Delitos sexuales contra menores de edad, según mes y género
Enero a octubre 2009



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Los abusos sexuales en contra de menores de edad del género masculino fueron menos, se reportaron 3 casos por mes en febrero y marzo, correspondientes al 21.43%; abril y agosto, con 2 casos cada mes, equivalen al 14.29%, las cantidades del resto de meses reflejan una disminución considerable.

Es notorio que la totalidad de casos de violación sexual corresponde a víctimas niñas y adolescentes mujeres, aunque parezca lógico, no es la regla, pues también puede haberla contra niños o adolescentes varones.

La gráfica muestra la cadena de hechos ocurridos; se aprecian los casos registrados en todos los meses; los números más altos expresan los ataques dirigidos contra niñas y adolescentes mujeres. Como ya se indicó, en julio hubo más ataques acumuló.

Tabla 34
Delitos sexuales contra menores de edad
Uso de arma para intimidar
Enero a octubre 2009

Uso de arma para intimidar	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Arma blanca	0	0.00	16	5.48	16	5.23
Arma de fuego	0	0.00	26	8.90	26	8.50
n/a	14	100.00	250	85.62	264	86.27
Total	14	100.00	292	100.00	306	100.00

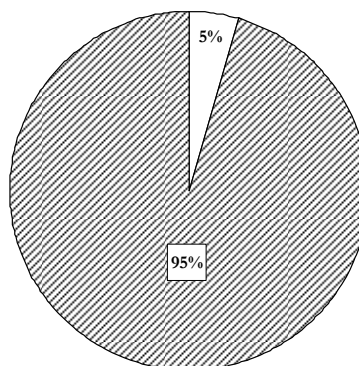
Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

La mayoría de abusos y ataques sexuales ocurren con frecuencia en el seno del hogar, el grupo de amistades, las relaciones de noviazgo o en ambientes laborales. Por lo general, estos delitos son cometidos contra menores por personas mayores o adultos, quienes amenazan o engañan a la víctima para someterla.

En algunos casos el victimario arremete y amenaza con agredir a la víctima; como muestran los datos registrados, de los 292 ataques mencionados en contra de menores femeninas, en 42 casos se registra ataque y utilización de arma para intimidar y doblegar a la víctima. De éstos, en 16 casos (5.48%) el agresor utilizó arma blanca y en 26, arma de fuego (8.90%). En la mayor cantidad de casos registrados, o sea 250, equivalentes al 85.62% del total de los delitos sexuales en contra de menores femeninas, no se especifica la utilización arma.

Gráfica 20
Delitos sexuales de menores de edad, según género
Enero a octubre 2009

Género	No. de casos
Femenino	292
Masculino	14
Total	306



Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC.

En 2009, los ataques sexuales en contra de niñas y adolescentes mujeres fueron abrumadoramente más altos (95%) en comparación con los cometidos en contra de niños y adolescentes hombres (5%), situación reflejada en la gráfica anterior.

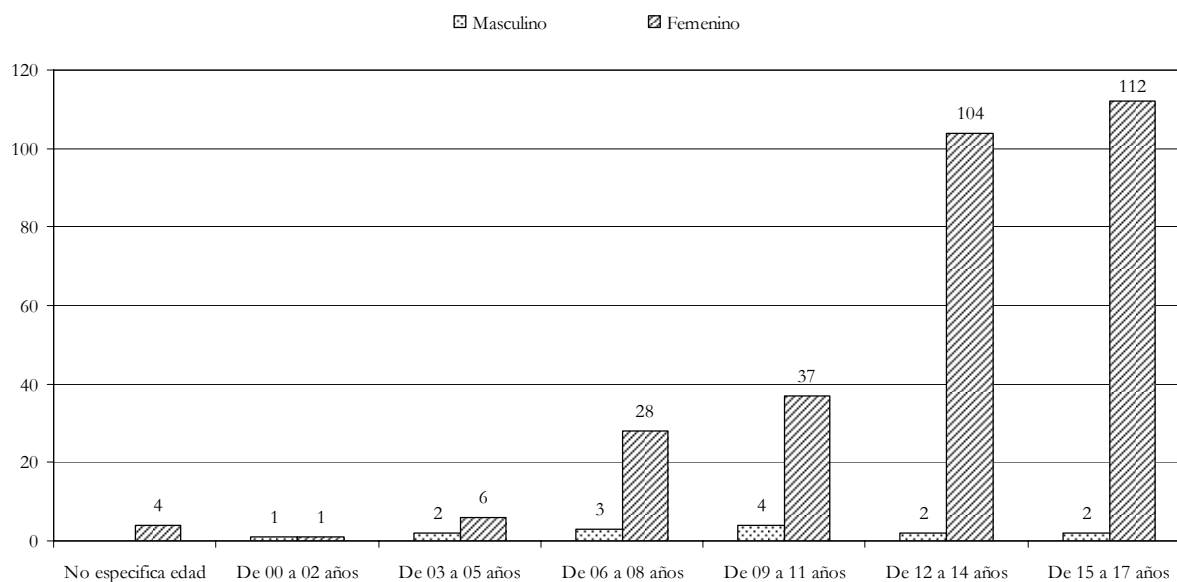
Tabla 35
Delitos sexuales contra menores de edad
Rango de 0 a 17 años según género
Enero a octubre 2009

Rango de edad	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
No especifica edad	0	0.00	4	1.37	4	1.31
De 00 a 02 años	1	7.14	1	0.34	2	0.65
De 03 a 05 años	2	14.29	6	2.05	8	2.61
De 06 a 08 años	3	21.43	28	9.59	31	10.13
De 09 a 11 años	4	28.57	37	12.67	41	13.40
De 12 a 14 años	2	14.29	104	35.62	106	34.64
De 15 a 17 años	2	14.29	112	38.36	114	37.25
Total	14	100.00	292	100.00	306	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Respecto a los grupos etarios más afectados que muestran una concentración alta de ataques, llama la atención el rango de 15 a 17 años, que suma 112 víctimas femeninas (38.36%) y 2 de sexo masculino (14.29%). También destaca el rango de 12 a 14 años, con 104 hechos (35.62%) en contra de la dignidad, la salud e integridad física de niñas y adolescentes mujeres, y 2 víctimas del género masculino (14.29%). Otros grupos etarios de menor edad también registran cifras menores, comparadas con los dos grupos de edad ya mencionados que acumularon la mayor cantidad de hechos cometidos en su contra.

Gráfica 21
Rango de 0 a 17 años según género
Enero a octubre 2009



Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

Respecto a los diferentes grupos etarios afectados, ocupan el primer lugar las víctimas niñas y adolescentes mujeres, la mayoría de hechos ocurre en contra de personas del género femenino (niñas y adolescentes).

Tabla 36
Delitos sexuales contra menores de edad
Por departamento según género
Enero a octubre 2009

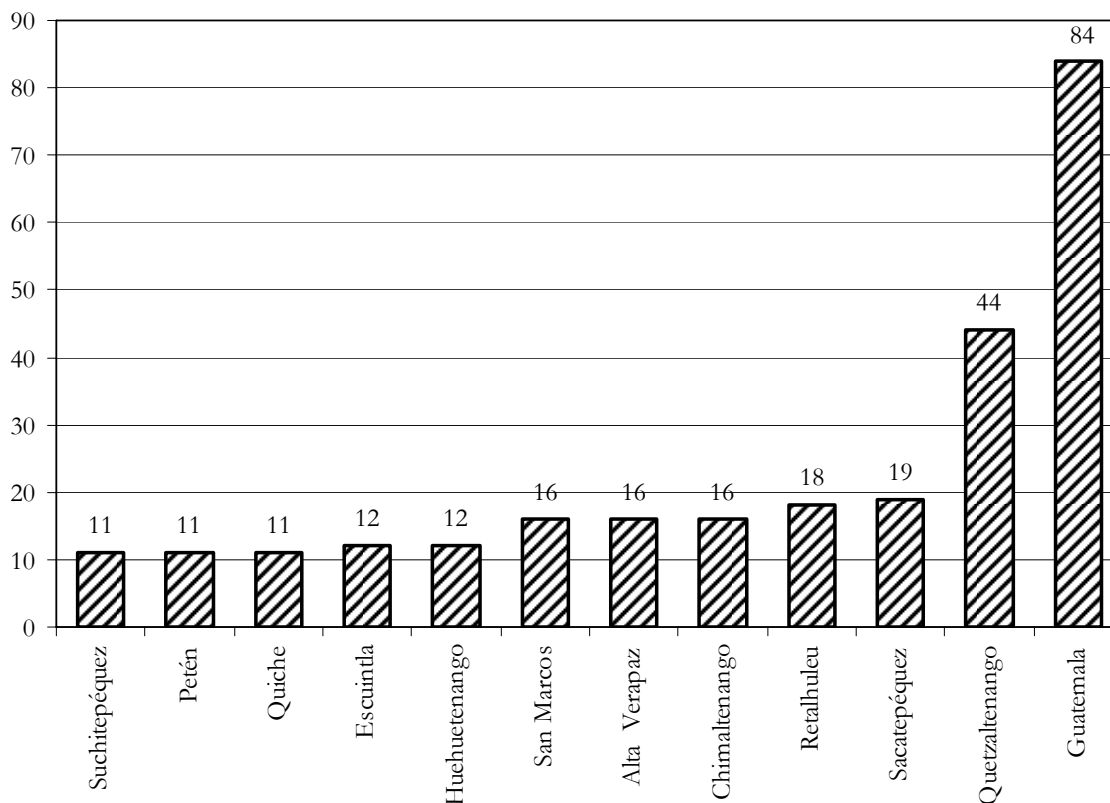
Departamento	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Guatemala	5	35.71	79	27.05	84	27.45
Quetzaltenango	0	0.00	44	15.07	44	14.38
Sacatepéquez	2	14.29	17	5.82	19	6.21
Retalhuleu	1	7.14	17	5.82	18	5.88
San Marcos	1	7.14	15	5.14	16	5.23
Alta Verapaz	1	7.14	15	5.14	16	5.23
Chimaltenango	0	0.00	16	5.48	16	5.23
Escuintla	0	0.00	12	4.11	12	3.92
Huehuetenango	1	7.14	11	3.77	12	3.92
Suchitepéquez	0	0.00	11	3.77	11	3.59
Petén	1	7.14	10	3.42	11	3.59
Quiché	0	0.00	11	3.77	11	3.59
Totonicapán	0	0.00	6	2.05	6	1.96
Sololá	0	0.00	6	2.05	6	1.96
El Progreso	0	0.00	5	1.71	5	1.63
Santa Rosa	0	0.00	4	1.37	4	1.31
Izabal	0	0.00	4	1.37	4	1.31
Jalapa	1	7.14	2	0.68	3	0.98
Zacapa	1	7.14	2	0.68	3	0.98
Baja Verapaz	0	0.00	3	1.03	3	0.98
Jutiapa	0	0.00	1	0.34	1	0.33
Chiquimula	0	0.00	1	0.34	1	0.33
Total	14	100.00	292	100.00	306	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC

En el ámbito nacional, los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango juntos, equivalen al 41.83% de todos los casos, es decir, son los lugares con mayor incidencia de ataques sexuales en contra de menores. En Guatemala se registraron 84 casos (27.45%).

En Quetzaltenango se contabilizaron 44 casos (14.38%). Todos los hechos registrados fueron cometidos en contra de niñas y adolescentes de género femenino. Aunque en el resto de departamentos las cifras son menores, preocupa que los ataques de esta naturaleza sigan ocurriendo, porque violan y perjudican los derechos y libertades de la niñez y adolescencia del país.

Gráfica 22
Delitos sexuales contra menores de edad
Mayor incidencia por departamento y género
Enero a octubre 2009



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Los 12 departamentos con mayor incidencia de delitos sexuales en contra de menores de edad aparecen en la gráfica anterior; la clasificación es de los 84 casos en Guatemala y los 11 en Petén, Quiché y Suchitepéquez.

La mayor acumulación de hechos se presenta en los dos principales departamentos del país, que concentran a más habitantes: Guatemala y Quetzaltenango, cuya cabecera departamental es la segunda ciudad más importante del país.

1.5 Secuestros de niños y adolescentes

La actividad del crimen común y organizado incluyó el secuestro de menores de edad, unas veces con fines de extorsión o intereses económicos, otras por venganzas personales. En el período de enero a octubre 2009 se reporta el secuestro, en toda la República, de 48 niñas, niños y adolescentes. De esa suma, 30 víctimas (62%) pertenecen al sexo masculino y 18 (38%) son de sexo femenino. En 2009 el promedio de secuestros de infantes y adolescentes fue de 4.8 víctimas por mes.

Al analizar la situación debe tomarse en cuenta el subregistro, ya que en muchos casos los hechos no son denunciados a la PNC y, por ende, no aparecen en las estadísticas, y la cantidad real de los casos ocurridos sería mayor a la consignada.

Con respecto a la autoría de los secuestros cometidos, presuntos responsables han sido capturados y presentados ante los tribunales de justicia para que respondan por sus actos, algunos otros fueron muertos en los operativos de rescate y hay quienes ganaron impunidad al permanecer libres sin ser identificados.

Tabla 37
Secuestros de menores de edad
Por sexo y según mes
Enero a octubre 2009

Mes	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Enero	5	16.67	3	16.67	8	16.67
Febrero	2	6.67	2	11.11	4	8.33
Marzo	4	13.33	1	5.56	5	10.42
Abril	8	26.67	2	11.11	10	20.83
Mayo	3	10.00	2	11.11	5	10.42
Junio	2	6.67	0	0.00	2	4.17
Julio	2	6.67	5	27.78	7	14.58
Agosto	1	3.33	2	11.11	3	6.25
Septiembre	1	3.33	0	0.00	1	2.08
Octubre	2	6.67	1	5.56	3	6.25
Total	30	100.00	18	100.00	48	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Los meses más violentos por el mayor número de víctimas, son abril, que reporta 10 casos (8 hombres y 2 mujeres); le sigue enero, con 8 (5 hombres y 3 mujeres) y en la tercera posición está julio, con 7 casos (2 hombres y 5 mujeres); este último, en contraste con otros, es caso excepcional por contabilizar mayor número de ataques en contra del género femenino.

Tabla 38
Secuestros de menores de edad
Según género y rangos de edad de 00 a 17 años
Enero a octubre 2009

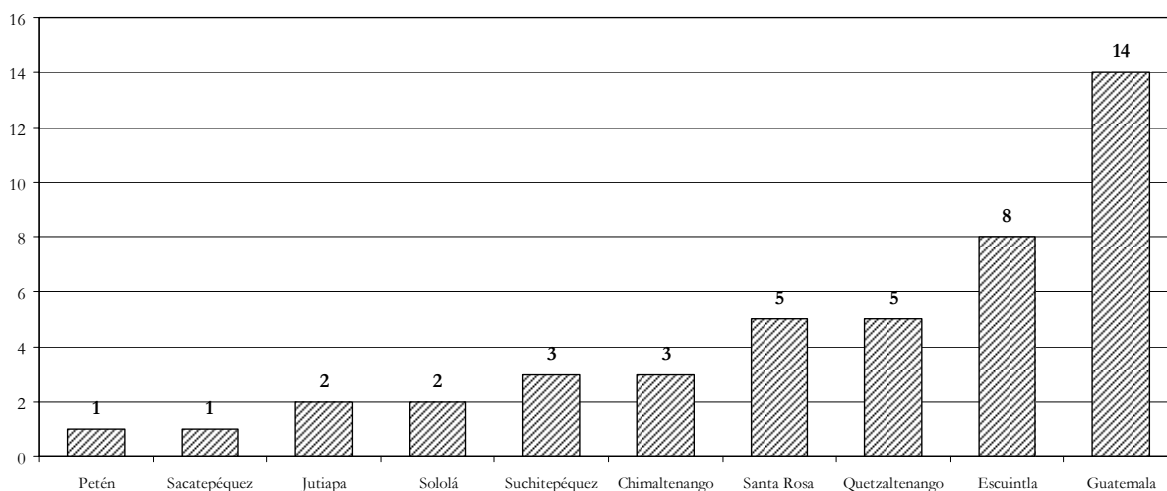
Rango de edad	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
De 00 a 02 años	2	6.67	0	0.00	2	4.17
De 03 a 05 años	4	13.33	3	16.67	7	14.58
De 06 a 08 años	1	3.33	0	0.00	1	2.08
De 09 a 11 años	4	13.33	2	11.11	6	12.50
De 12 a 14 años	5	16.67	5	27.78	10	20.83
De 15 a 17 años	14	46.67	8	44.44	22	45.83
Total	30	100.00	18	100.00	48	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Referente a la concentración de los ataques por rango de edad, los registros indican que éstos se producen con mayor frecuencia entre los rangos de 15 a 17 años, con 22 casos (45.83 %), y de 12 a 14 años, con 10 casos (20.83%). La mayoría de las víctimas de secuestro han sido jóvenes adolescentes varones. En contraste y en sentido descendente, personas de menor edad y ambos sexos también fueron víctimas de estos hechos.

Tabla 39
Secuestros de menores de edad
Según departamento y por género
Enero a octubre 2009

Departamento	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
San Marcos	0	0.00	1	5.56	1	2.08
Huehuetenango	0	0.00	1	5.56	1	2.08
Totonicapán	1	3.33	0	0.00	1	2.08
Baja Verapaz	1	3.33	0	0.00	1	2.08
Petén	0	0.00	1	5.56	1	2.08
Sacatepéquez	1	3.33	0	0.00	1	2.08
Jutiapa	2	6.67	0	0.00	2	4.17
Sololá	2	6.67	0	0.00	2	4.17
Suchitepéquez	1	3.33	2	11.11	3	6.25
Chimaltenango	3	10.00	0	0.00	3	6.25
Santa Rosa	5	16.67	0	0.00	5	10.42
Quetzaltenango	1	3.33	4	22.22	5	10.42
Escuintla	4	13.33	4	22.22	8	16.67
Guatemala	9	30.00	5	27.78	14	29.17
Total	30	100.00	18	100.00	48	100.00



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

En cuanto a los ilícitos por área geográfica, la tabla anterior muestra la concentración ocurrida en cada lugar. Los departamentos que acumulan más secuestros son: Guatemala, que suma 14 casos (29.87%); Escuintla, con 8 casos (6.67%) y, en tercer lugar, Quetzaltenango y Santa Rosa, con 5 casos cada uno, correspondiente al 10.42%, respectivamente. Otros departamentos también han sido afectados por este tipo de hechos, pero en ellos el número de secuestros es bastante menor, en comparación con los primeros departamentos ya citados.

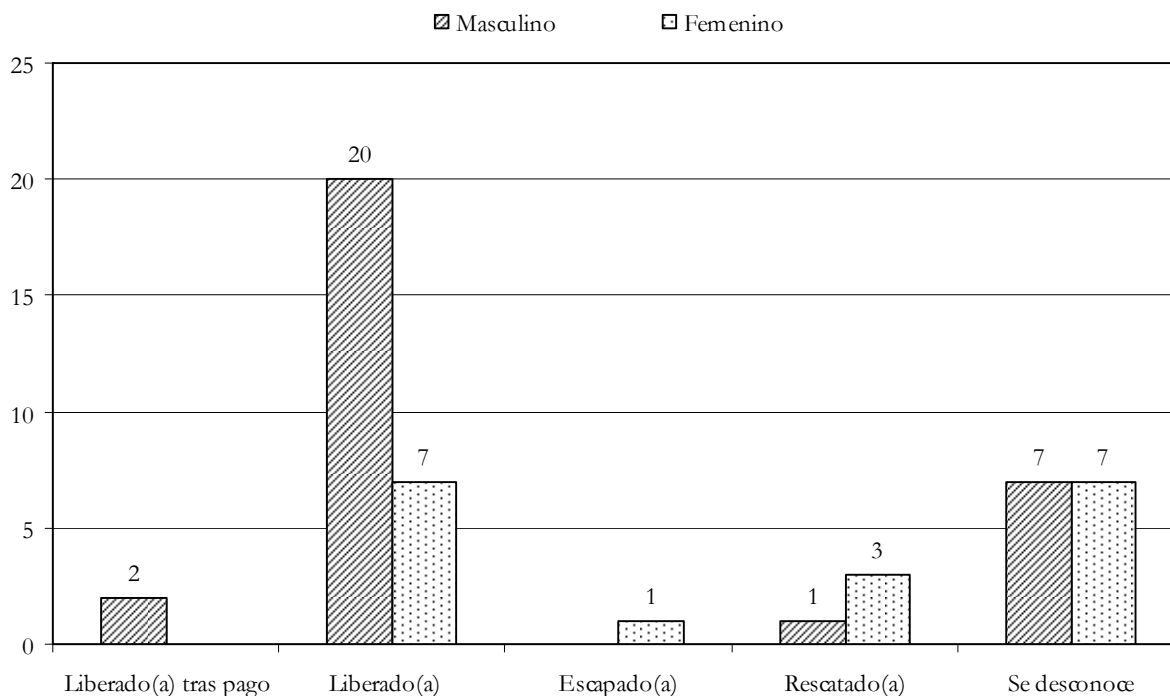
Tabla 40
Secuestro de menores de edad
Según género y desenlace del caso
Enero a octubre 2009

Caso	Masculino		Femenino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Liberado(a) tras pago	2	6.67	0	0.00	2	4.17
Liberado(a)	20	66.67	7	38.89	27	56.25
Fugado(a)	0	0.00	1	5.56	1	2.08
Rescatado(a)	1	3.33	3	16.67	4	8.33
Se desconoce	7	23.33	7	38.89	14	29.17
Total	30	100.00	18	100.00	48	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Respecto a la suerte de las víctimas, los datos recabados permiten clasificar las variables según el desenlace en cada situación. En 27 casos (56.25%) las personas secuestradas fueron liberadas de manos de sus captores. En otros 4 casos (8.33%) pudieron ser rescatadas por los operativos policiales. El resto de variables, como la liberación mediante pago de rescate o la fuga de la persona secuestrada, suman menos casos. En resumen, la mayoría de secuestros de menores de edad registrados, concluyeron con la liberación de las víctimas.

Gráfica 23
Secuestros de menores de edad
Según género y desenlace del caso
Enero a octubre 2009



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

La gráfica ilustra la posición cuantitativa correspondiente al desenlace del secuestro; en todos los campos establecidos se observa que las víctimas del género masculino ocupan los primeros lugares, excepción hecha con la variable de quienes se fugaron o escaparon de manos de sus captores, que corresponde a una víctima femenina.

El secuestro de menores de edad de ambos sexos fue una constante que, durante 2009, afectó a varias familias y dejó daños psicológicos, físicos y morales en las pequeñas víctimas.

Las estadísticas no reflejan los casos mortales, pero también hay víctimas que son ejecutadas durante su cautiverio, sea porque los secuestradores quedaron inconformes con la negociación, no alcanzaron el rescate que pretendían o porque los victimarios asumen que corren riesgo de ser reconocidos. Las razones pueden variar, lo concreto es que varias víctimas de secuestro fueron ejecutadas por sus captores, incluso en algunos casos, pese a que la familia, accedió a pagar rescate, a veces cancelado en más de una ocasión.

Como sucede con muchos actos violentos con desenlace dramático y mortal para las víctimas, la mayoría permanecen impunes.

Algunos casos paradigmáticos. En San Lucas Sacatepéquez, secuestro, ultraje sexual y asesinato por degollamiento de tres hermanas de 7, 8 y 12 años, ocurrido en el caserío Chicamán, San Lucas Sacatepéquez. Por el hecho fueron capturados tres adultos, sindicados de presunta responsabilidad (expediente PDH. ORD. GUA 3494-09). En Escuintla, el secuestro de un niño de 12 años, hijo del Vicealcalde de Palín, Escuintla. La pequeña víctima estuvo retenida varios días, luego fue asesinado por sus captores, quienes habían cobrado el pago del rescate, aún así, el niño fue ejecutado (Caso No.19995, archivo hemerográfico DEAI-PDH). Ambos casos, considerados de impacto social, conmovieron la conciencia nacional por las circunstancias que rodearon cada hecho.

1.6 La tortura

La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes utilizados contra las personas son una práctica humillante que degrada a los seres humanos, por eso los instrumentos convencionales internacionales y las leyes nacionales la prohíben, persiguen y castigan. Esos tratos están calificados como crímenes de lesa humanidad, delitos imprescriptibles.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.¹³

La Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, es otro instrumento que contribuye a prevenir esta práctica inhumana y a construir sociedades respetuosas de la vida de las personas. Esta Convención define la tortura así:¹⁴

“Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”

En Guatemala la Constitución Política de la República establece:

“Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.”¹⁵

¹³ Artículo 3, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

¹⁴ Artículo 2, Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, 9 de diciembre de 1985.

¹⁵ Artículo 3, Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala, 1985

La tortura también es considerada un delito contra la libertad individual y la seguridad de la persona, el artículo 201 Bis del Código Penal sanciona con prisión de 25 a 30 años, a quien resulte responsable de ese delito. Conforme esta normativa, el delito de tortura lo cometen los agentes del Estado y los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo.

En términos de las recomendaciones de los órganos de tratados al Estado de Guatemala, el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas entre 1994 y 2007 ha hecho al Estado siete recomendaciones precisas, sin embargo, hasta 2009 ninguna ha sido cumplida a satisfacción, por lo que el Estado de Guatemala tiene deudas pendientes en ese sentido.¹⁶

Entre dichas recomendaciones se encuentra la de adecuar el artículo 201-A del Código Penal a la tipificación de la tortura contenida en el artículo 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, reformar lo pertinente del Código Penal, en especial los artículos 201 bis y 425, para adecuar la tipificación del delito de la tortura y su castigo a lo que disponen los artículos 1 y 4 de la Convención.

El 9 de junio de 2009 se cumplió un año de la ratificación que hizo el país del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura, por medio del cual Guatemala se comprometió a crear en el plazo de un año el mecanismo nacional de prevención de la tortura.

El Procurador de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil interesadas en la prevención y combate a la tortura, con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la facilitación del Ejecutivo a través de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), aportaron insumos necesarios para la elaboración de la propuesta de ley de creación del mecanismo nacional de prevención, que deberá ser sometida al Congreso de la República para su aprobación y consiguiente creación del mencionado mecanismo, para prevenir la tortura en la forma prevista por el Protocolo Facultativo.

Las modalidades de la tortura encuentran diferencias según los fines perseguidos y sus perpetradores. El Protocolo Facultativo de la Convención busca prevenir la tortura practicada en los lugares de detención, que incluye como víctimas a menores, ancianos, migrantes o discapacitados mentales recluidos, y en general la población reclusa en las prisiones que se encuentra en riesgo de sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura practicada en lugares de detención tiene como autores o responsables directos, generalmente, a autoridades públicas. La tortura practicada en la muerte violenta también puede tener como perpetradores o responsables directos indistintamente a particulares.

1.6.1 La tortura en la muerte violenta

Muchas de las muertes violentas reportadas hasta el 31 de octubre de 2009 dan cuenta de que durante ese período, han aparecido 625 cadáveres de ambos sexos, con señales de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pese al marco legal y punitivo, la tortura se practica en el país tanto por agentes del Estado como por actores sociales no estatales.

Cuerpos mutilados, cadáveres con golpes contundentes, manos atadas, quemaduras y múltiples heridas, evidencian los castigos y sufrimientos crueles a que las víctimas son sometidas antes o durante su ejecución.¹⁷

De 625 víctimas aparecidas con señales de tortura, 477 son de sexo masculino, correspondiente al 76.32%, mientras que 148 pertenecían al sexo opuesto, o sea 23.68% son mujeres torturadas.

¹⁶ Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. *Las recomendaciones de los órganos de tratados a Guatemala*. Guatemala, mayo 2008.

¹⁷ Archivo hemerográfico, DEAI-PDH. Guatemala, octubre de 2009.

En la mayoría de casos reportados, el estado del cadáver y el daño físico infligido a la víctima indican los sentimientos de odio y rencor que los victimarios aplican contra la vida de las personas sacrificadas.

Según la información registrada, las principales señales de tortura en los cadáveres de las víctimas de ambos sexos, son golpes, ataduras de pies y manos y estrangulación. En menor escala figuran otros signos comunes que revelan tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que se sometió a la víctima. Cabe destacar que 26 de los cadáveres, además de los signos crueles visibles, muestran señales de abuso sexual, cometido con mayor frecuencia en contra de mujeres (24 casos), es decir, del total de 148 muertes femeninas, 16.22% sufrió abusos sexuales previos o durante la ejecución. En oposición, los cadáveres de hombres con signos de abuso sexual son 2, cifra que equivale al 0.42% de un total de 477.

Tabla 41
Cadáveres con señales de tortura, según sexo
Enero a octubre 2009

Señales de tortura	2009			
	M	F	%M	%F
Golpes	119	29	24.95	19.59
Atado de pies y/o de manos	111	23	23.27	15.54
Estrangulación	64	27	13.42	18.24
Tiro de gracia	56	6	11.74	4.05
Lapidado (pedradas)	30	6	6.29	4.05
No específica	27	5	5.66	3.38
Abuso sexual	2	24	0.42	16.22
Desnudo	15	7	3.14	4.73
Amordazado	13	8	2.73	5.41
Asfixiado	13	6	2.73	4.05
Ojos vendados	11	2	2.31	1.35
Mutilado	7	4	1.47	2.70
Ahogado	4	1	0.84	0.68
Quemado	4	0	0.84	0.00
Engrillado	1	0	0.21	0.00
Total	477	148	100.00	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Otro signo común en varios cadáveres es el tiro de gracia, aplicado por igual a hombres y mujeres, aunque la tendencia es mayor en cuanto a hombres se refiere, de 477 víctimas registradas, 56 casos (11.74%) aparecen con esta característica. Con el mismo signo mortal pero en menor escala, se cuentan 6 cadáveres de mujeres, que corresponde al 4.05% del total de las 148 víctimas femeninas registradas. Esto significa que 62 cadáveres de ambos sexos, que equivale al 9.92% de 625, además de las evidencias de tortura, presentaban el tiro de gracia.

También sobresalen los casos de cadáveres lapidados (muerte a pedradas) con saldo de 30 personas así ejecutadas, equivalentes al 6.29% del total de víctimas hombres. Asimismo, 11 cadáveres del mismo sexo, que corresponden al 2.31%, cuyos cuerpos fueron mutilados y quemados. Es decir, 8.60% de cadáveres masculinos presentaba golpes y heridas contusas causadas con piedras u objetos similares, otros cortados en pedazos y/o quemados.

Las mujeres tampoco escapan a la crueldad de las muertes por lapidación y la mutilación de sus cuerpos; 6 cadáveres de ellas (4.05%), presentaban signos de lapidación. Los cuerpos de 4 más (2.70%) fueron degollados y descuartizados.

Cabe matizar lo correspondiente a víctimas menores de edad, es decir, los hechos brutales y muertes violentas cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, quienes como población vulnerable no están excluidos de estos actos crueles e inhumanos. De conformidad con reportes de medios de prensa, al 15 de septiembre de 2009, 391 menores de edad de ambos sexos murieron por ataques con armas de fuego o arma blanca, esa cifra incluye la muerte violenta de 69 niñas y adolescentes mujeres.¹⁸

Una variable de la tortura son los linchamientos, que unas veces son instigados por particulares o actores comunitarios y en ocasiones incluso por autoridades civiles.¹⁹ En estos actos intervienen multitudes que implicados se hacen cómplices del delito; el linchamiento fue un procedimiento recurrente en 2009, siendo poco o nada lo que pudo hacer la autoridad para prevenir y evitarlos.

1.6.2 Sujetos responsables

En términos genéricos y penales, los sujetos responsables de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes pueden ser agentes del Estado, sea por acción u omisión, paramilitares, integrantes de las juntas locales de seguridad o miembros de grupos al servicio del crimen organizado.

Para la observación internacional los hechos no pasan desapercibidos; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala ha señalado que el Estado sigue sin implementar un mecanismo institucional que erradique ese flagelo; miembros de la PNC serían responsables de aplicar métodos de tortura en contra de las personas privadas de libertad y del abuso de mujeres capturadas.²⁰

Los hechos, denuncias y percepciones descritas muestran un escenario social violento y brutal, manifestado por el uso de métodos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que deja al descubierto la debilidad del Estado, el cual es incapaz de prevenir y erradicar la conducta de quienes mediante el uso de métodos brutales desprecian e irrespetan la vida y dignidad de otros seres humanos.

1.7 Linchamientos

Los enfoques teóricos sobre linchamientos delimitan dos perspectivas de análisis causales o recurrentes. El primero relaciona indicadores de índole económica o sociocultural y el otro vincula los niveles de presencia e institucionalidad del Estado. Este último es el factor explicativo preponderante de los linchamientos en Guatemala. La ausencia o presencia del Estado se manifiestan por los despliegues o controles institucionales territoriales, o bien por el grado de legitimidad con el que cuentan las autoridades de justicia, investigación y seguridad entre la población. A esto se suman las reminiscencias de estrategias contrainsurgentes o de control de la población usualmente aplicadas durante conflictos armados como el acaecido en la historia reciente de Guatemala.

La escasa institucionalidad o presencia del Estado se pone de manifiesto en la desprotección en que se encuentra la población ante los elevados índices de delitos, corrupción y abusos de funcionarios públicos o la lentitud e insatisfacción sobre determinados procesos judiciales. En perspectiva se refiere a la ineficacia del Estado para dotar de los mínimos de seguridad que se deben gozar.

Las características generales de los linchamientos describen la falta de castigo, prevención de los delitos o situaciones de violencia. Aunado, se presentan escenarios de impunidad creciente, indefensión, lentitud y corrupción en los procesos judiciales que presionan los niveles de tolerancia de la población, tomando en sus manos la incapacidad punitiva del Estado.

¹⁸ Defensoría de la Niñez y Adolescencia y archivo hemerográfico, PDH. Guatemala, 2009.

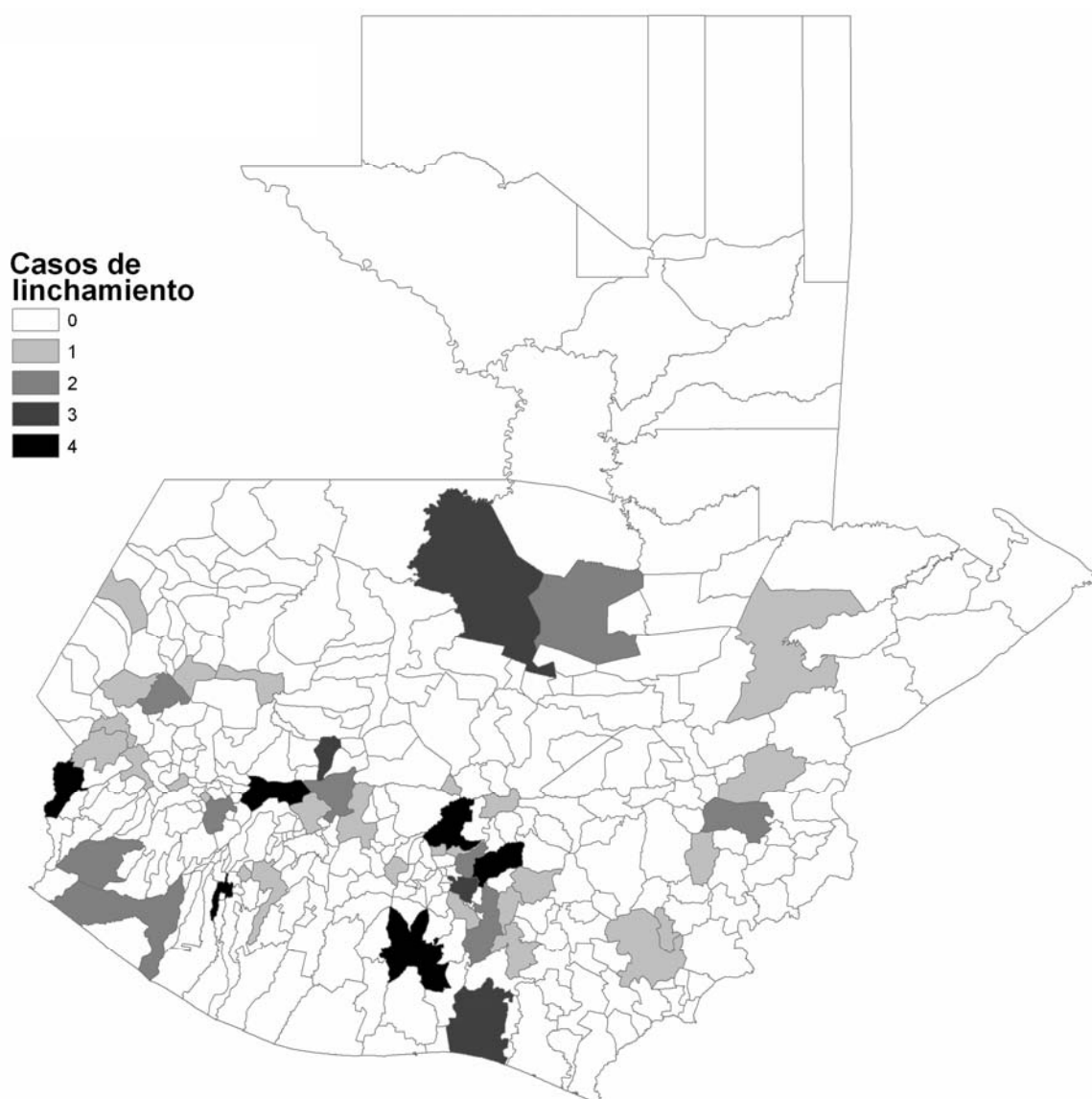
¹⁹ Un caso paradigmático es el ocurrido el 1 de noviembre de 2009 en el municipio de San Juan Cotzal, Quiché, donde el alcalde local José Pérez, es acusado junto a sus guardaespaldas, de torturar, linchar y dar muerte al agente de la PNC Pedro Rodrigo Toma.

²⁰ *Prensa Libre*, Guatemala, 25 de junio de 2009. Declaraciones de Amerigo Incalcatera, director de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACDH).

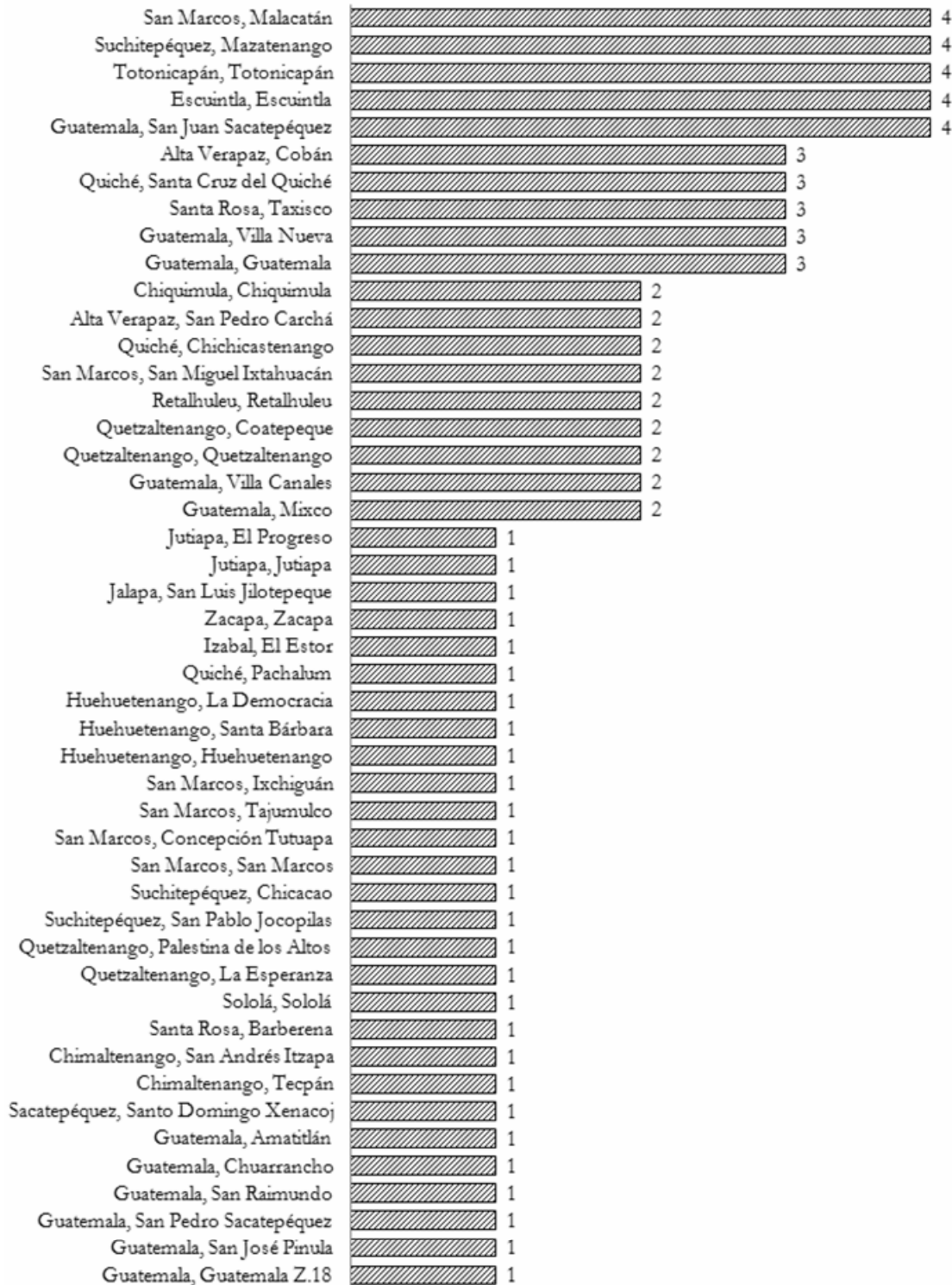
El fenómeno, como se hace evidente en el transcurso de 2008 a 2009, tiende a agravarse cuando presenta el involucramiento de autoridades estatales como alcaldes o miembros de autoridades comunitarias, implicados directa o indirectamente, ya sea para estimular o como sujetos acusados en las acciones u omisiones del linchamiento.

Para el año que abarca este informe, la gráfica siguiente, detalla la frecuencia del linchamiento de manera tan dispersa como heterogénea. Desde este punto de vista no se establecen patrones particulares sobre la ocurrencia y recurrencia del fenómeno en un lugar en particular. Los casos presentados no conformaron un continuo que permita enfocarlos sobre factores culturales, socioeconómicos o urbanos y rurales.

Gráfica 24
Distribución geográfica de los linchamientos
Octubre de 2009



Gráfica 25
Casos de linchamientos
Por departamento y municipio
Año 2009 al 31 de octubre



Fuente: elaboración propia con datos de base hemerográfica. 2009 (casos al 31 de octubre)

Durante 2009 el linchamiento se presenta de una manera diversa en departamentos urbanos como Guatemala y/o rurales, como San Marcos. Ambos son los departamentos que tienen mayores números de linchamientos con, 20 y 10 casos respectivamente. También han acontecido en lugares como Suchitepéquez (6), El Quiché (6), Quetzaltenango (6) y Alta Verapaz (5). Además, la distribución geográfica permite establecer que los linchamientos tampoco presentan características étnicas propias. Departamentos como Totonicapán, Escuintla o Santa Rosa tienen una frecuencia de 4 linchamientos durante el año.

Las cifras de linchamientos son preocupantes si se toma como punto de referencia la curva ascendente y la recurrencia del fenómeno como práctica colectiva o de multitudes ampliamente difundida. A partir de 2004, los linchamientos se presentan al alza. Paulatinamente han ido en aumento, acumulando durante ese año una cifra de 25. En 2005 tiene un incremento de 7 casos y, finalmente, en 2006, adquiere la frecuencia más alta, con 81.

Los siguientes dos años tienen cifras menores. Durante 2007 se da en 72 oportunidades y en 2008, 61 veces. En 2009 tiene un alza de 20 casos, siendo la cifra de 81 (al 31 de octubre) la más alta de los últimos cinco años. Durante este periodo de tiempo se ha sufrido un aumento de 56 casos y si el promedio de 8.1 para 2009 se mantiene hasta fin de año, el aumento habrá sido de 72 casos.

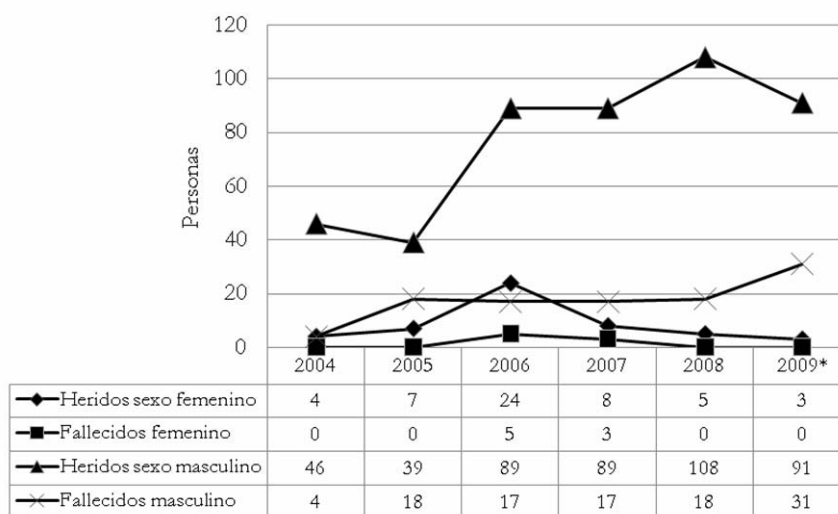
Tabla 42
Casos de linchamiento
Número de casos por año

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Número de casos	25	32	81	72	61	106

Fuente: elaboración propia con datos de base hemerográfica. 2009.

Otra característica observada en los crímenes por linchamiento es que se aplica preferentemente hacia personas del sexo masculino. Además, las mujeres linchadas fallecen en menor medida en comparación con los hombres. Los precedentes son similares en los casos de análisis. Durante 2004 en los 25 casos de linchamiento existió una diferencia de 46 hombres frente a 4 mujeres. En 2005 fueron 7 mujeres víctimas y 57 hombres. En 2006 (81 linchamientos) es el año que presenta mayores frecuencias para las mujeres, con 24 víctimas, en comparación con los hombres, que sumaron 106.

Gráfica 26
Personas afectadas en linchamientos
Clasificados en heridos, fallecidos y por género



Fuente: elaboración propia con datos de base hemerográfica. (*) Datos al 31 de octubre de 2009.

Los únicos años que presentan muertes de mujeres a causa de linchamientos son 2006 (5) y 2007 (3). El 2009 se perfila como el año con mayor cantidad de muertes de hombres, con 31.

El 2009 ha sido un año particularmente violento durante el cual las personas heridas y fallecidas a causa del linchamiento demuestran frecuencias paradójicas que reconducen el fenómeno hacia otras aristas. Si bien el año 2008 no es el que presenta la mayor frecuencia de linchamientos, se caracteriza por tener el mayor número de heridos por este hecho. Durante ese año hubo 108 heridos, a diferencia de 2009, con 31 muertes a causa del linchamiento.

Son recurrentes los casos de linchamientos donde la presencia institucional del Estado es deficitaria. La vigilancia y aplicación de justicia recae en las autoridades comunitarias, pues no hay estaciones policiales y Juzgados de Paz. Ante la ausencia y responsabilidad Estatal de brindar seguridad y justicia, las Juntas Locales de Seguridad (JLS) han tomado la primacía y legitimidad en las tareas propias del Estado.

En algunos sitios la PNC fue literalmente expulsada, en otros casos, sus miembros fueron objeto de linchamiento, ocasionándoles la muerte. El 11 de febrero de 2009 en la Esperanza, departamento de Quetzaltenango, la policía se negó a entregar a un presunto delincuente reclamado por pobladores para lincharlo. Las autoridades ediles y policíacas tuvieron que mediar para que no lincharan a los policías y decidieron retirar a la PNC del municipio. Tres días después la población pidió el retorno de la PNC por los abusos de las JLS.

La Auxiliatura de la PDH con sede en Quiché, para 2009, ubicó como municipios en los que se aplica el linchamiento como modalidad de castigo y complicidad de las autoridades locales, a Chichicastenango, Zacualpa, Joyabaj y Santa Cruz del Quiché. Se tienen registradas denuncias en contra de autoridades comunitarias (alcaldes auxiliares, Consejo Comunitario de Desarrollo, alguaciles, JLS) por la forma arbitraria en que aplican la justicia en la comunidad. Han realizado acciones que resultan mortales o con daños irreparables a través de castigos crueles, inhumanos y degradantes.

Las cifras para 2009 revelan que los casos de grupos de linchados han ido en disminución, indicando que cada vez se menor la cantidad de personas por linchamiento, pasando de ser aplicado de manera colectiva a uno de ajusticiamiento individual. Mientras que en 2004 eran 2.16, para 2009, la estadística figura con 1.54 personas por caso.

Tabla 43
Personas linchadas por cada caso presentado
Número de personas

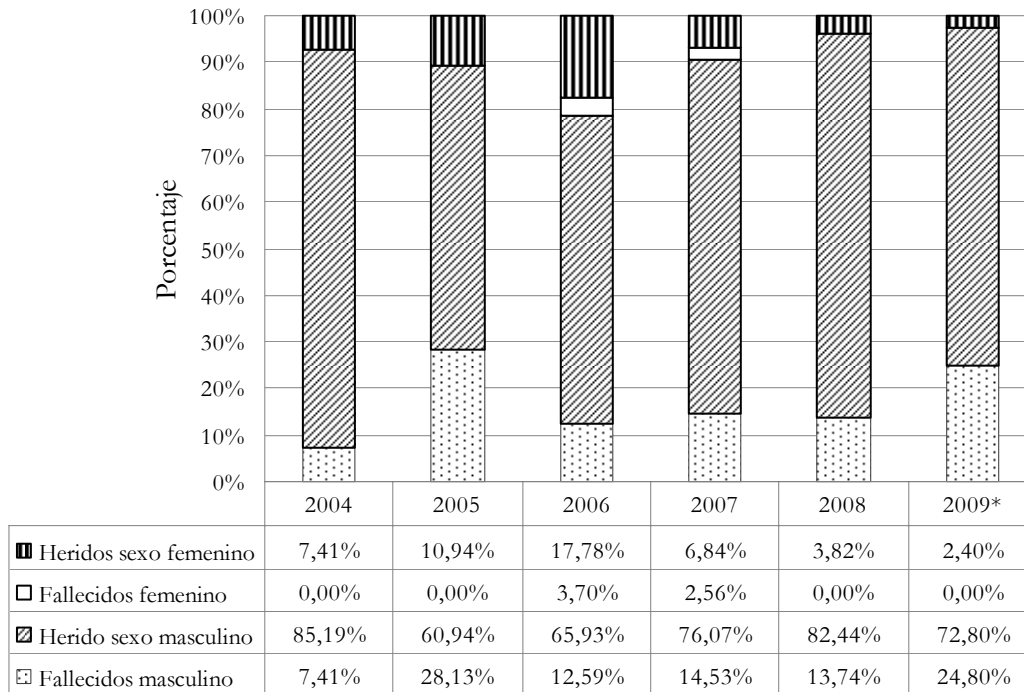
Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Número de personas	2.16	2.00	1.67	1.63	2.15	1.54

Fuente: elaboración propia con datos de base hemerográfica. 2009* casos al 31 de octubre.

Entonces, la primera conclusión es la personalización del fenómeno. El número de víctimas por cada linchamiento ha ido en descenso. En 2009 hubo mayor cantidad de linchamientos y mayor número de personas fallecidas; es decir, son menos personas por acto, individualizando el linchamiento y causando la muerte en la mayoría de los casos.

Ha pasado de ser un mecanismo de disuasión o de conducta ejemplarizadora hasta convertirse en una forma de “limpieza social”. Mientras en 2004 fueron 4 fallecidos y 50 heridos, en 2009 hubo 94 heridos frente a 31 personas fallecidas. En términos porcentuales, la muerte a causa de linchamiento representó, para 2004, el 7.41%, frente al 24.80% que implica para octubre de 2009.

Gráfica 27
Proporción porcentual de linchamientos
Clasificados en heridos, fallecidos y por género



Fuente: elaboración propia con datos de base hemerográfica. (*) Datos al 31 de octubre de 2009.

Las JLS se han constituido en un poder paralelo en los ámbitos comunitarios o zonas urbanas, de donde sus integrantes están armados, incurren en abusos de poder y hacen justicia extrajudicial por iniciativa propia. El espíritu de las JSL va trastocándose hasta convertirse en grupos armados ilegales. En algunas puede existir evidencia de involucramiento del crimen organizado y liderazgos paramilitares con reminiscencia de políticas contrainsurgentes, como las puestas en práctica por los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil.

De acuerdo con las estadísticas construidas por parte de la institución del Procurador, el linchamiento tiene características de mortalidad mucho mayores que en años anteriores. En 2009, falleció 1 persona por cada 3 que presentan heridas, en años anteriores la relación entre fallecidos y heridos es más distante: de 0.08 heridos en 2004 a 0.33 en 2009.

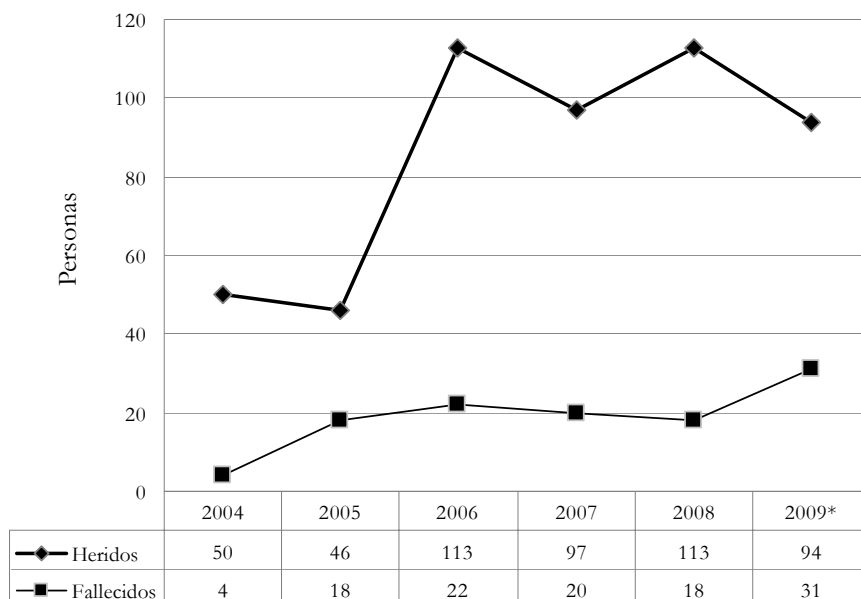
Tabla 44
Personas fallecidas por cada herido
Relación por año

Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Relación (F/H)	0.08	0.39	0.19	0.21	0.16	0.33

Fuente: elaboración propia con datos de base hemerográfica. 2009* casos al 31 de octubre.

La siguiente gráfica demuestra cómo la correlación entre muertos y heridos se acerca paralelamente hasta formar un indicador que determina el linchamiento como fenómeno con características de ajusticiamiento mortales.

Gráfica 28
Personas afectadas en linchamientos
Heridos y fallecidos por año



Fuente: elaboración propia con datos de base hemerográfica. (*) Datos al 31 de octubre de 2009.

1.7.1 Juntas Locales de Seguridad (JLS)

La precariedad y aquiescencia del Estado ante los actos delictivos y la carencia de elementos que garanticen la seguridad pública ha llevado, a través del Ministerio de Gobernación, a organizar a la población civil en Juntas Locales de Seguridad con el objeto de controlar los actos de violencia.

Las JLS surgieron a partir del 14 de julio de 1999 de acuerdo con la Orden General No. 11-99 del Boletín Oficial de la PNC. Se conciben como órganos de participación, cooperación y acercamiento con la ciudadanía para brindar un servicio eficiente y eficaz. Las JLS son

“un conglomerado de vecinos de una población en que existe Policía Nacional Civil con el objeto de prestar su colaboración para mejorar la seguridad ciudadana (...) tiene como misión proporcionar apoyo, formación y acercamiento entre la Policía Nacional Civil y los habitantes de la República, con el objetivo de brindar seguridad ciudadana.”²¹

La conformación está determinada por la copresidencia entre el alcalde municipal, un representante o vecino honorable de la población o vecindad y el jefe de la estación o subestación de la PNC. A partir de la constitución de las JLS, la población puede coadyuvar a:

“(...) velar por la vida, seguridad y bienes de las personas, garantizar la seguridad pública.

Tomar decisiones, con el objeto de posibilitar el cumplimiento y elevar los superiores jerárquicos de la PNC la problemática policial que por cualquier razón no sea solucionada en el ámbito de la correspondiente Estación o Subestación.

Dejar constancia escrita de las denuncias, sugerencias y observaciones que se produzcan en cada reunión que se lleve a cabo como Junta Local de Seguridad.

Promover el acercamiento entre la comunidad y los elementos de la Policía Nacional Civil, con el objeto de informar a la ciudadanía y a las autoridades los logros alcanzados en lo relativo a la seguridad pública, informar

²¹ PNC. *Boletín Oficial PNC No. 10-1 de Octubre de 1999*, artículo 1 y 2. Guatemala, 2009.

sobre el auxilio prestado a población y posibles soluciones a la problemática que preocupa a la comunidad en materia de orden y seguridad.”²²

La orden general de creación no señala ningún tipo de limitantes o prohibiciones a las JLS. Además, en sitios donde la PNC tiene escasa credibilidad y/o presencia, la seguridad queda a cargo enteramente de las autoridades locales. La estructura orgánica permite a las autoridades locales poder cooptar los distintos espacios, tanto a nivel secretarial, vocal cómo de invitados. Los mecanismos de elección de los cargos subalternos no establecen tiempos de permanencia o mecanismos de elección. Se circunscriben a la participación “voluntaria” de la ciudadanía en general.

El primer inciso refiere a la necesidad de cooperar con la PNC en la seguridad pública, sin embargo no señala claramente los mecanismos y acciones a través de las cuales la población puede hacer uso de las JLS. El siguiente inciso es aún más preocupante porque la jerarquía de la PNC en el ámbito municipal queda en entredicho. Las JLS pueden tomar “decisiones” que rebasen el nivel de la Estación o Subestación. Incluso quedan a discrecionalidad aquellos problemas que puedan rebasar el ámbito comunitario.

La ambigüedad de las JLS queda resaltada desde la constitución de las mismas. El caso de la junta de Salcajá ejemplifica el ámbito por demás variado que tiene por funciones y objetivos. Se extienden desde el ámbito de los valores culturales y sociales hasta la vigilancia, supervisión y evaluación de las actividades públicas. “*El plan de acción, por la seguridad y convivencia en paz de la villa de Salcajá del departamento de Quetzaltenango*” cita entre los objetivos específicos:

“Mantener la Seguridad Ciudadana, en el orden moral y de urbanidad, evitando acciones que dañen y deterioren la imagen de las tradiciones y costumbres que se realizan en el marco social, educativo, cultural, deportivo y religioso de nuestro pueblo (...) de manera conjunta, basados en la verdad, transparencia y solvencia moral.

Mantener, para la Seguridad Ciudadana, el control de personas desconocidas y que sean de otra nacionalidad y que vivan en el interior de la población.”²³

Según la experiencia de las distintas auxiliaturas de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, existen diferentes formas de involucramiento de las JLS en los casos de linchamiento. En algunos casos las JLS son actores de mediación y en otros de investigación. La similitud que pueda darse en ambos casos se explica a partir de la falta de presencia institucional del Estado, su denominador común. Los entes legales de justicia, investigación y seguridad son escasos y tienen poca credibilidad.

Según la Auxiliatura de Alta Verapaz, en los municipios de Cobán y San Pedro Carchá se ha conformado una multisectorial para mantener la vigilancia y paz en lugares expendedores de licores y centros nocturnos, debido a las muertes ocurridas como producto de sus actividades. A través del Centro de Administración de Justicia han organizado diferentes procesos de capacitación, el fortalecimiento de las instituciones y el apoyo a la prevención del delito para brindar más seguridad y confianza a los vecinos.

Por su parte, la Auxiliatura Móvil de Huehuetenango, con fecha 3 de febrero de 2009, conoció sobre un linchamiento frustrado y el papel de la JLS. Según los hechos que constan en el expediente Prev.Aux.Móv.SanIld.Ixta.Hue.04-2009/DCP, un grupo de vecinos no identificados de la comunidad de Chanchiquía, ubicada en San Ildefonso Ixtahuacán, acusaron y retuvieron a dos jóvenes de la localidad en las cercanías de la Iglesia Católica como responsables de robar objetos religiosos. Los vecinos llamaron al resto de la comunidad para decidir sobre el tipo de castigo que les impondrían; los dos jóvenes fueron agredidos físicamente con el propósito de lincharlos.

La institución del Procurador coordinó con las JLS del municipio de Chanchiquía y Chejoj para sensibilizar a la comunidad sobre el delito de detención ilegal y arbitraria. Conjuntamente se orientó a los líderes y se

²² *Ibid.*, artículo 4.

²³ Junta Local de Seguridad Ciudadana. *El plan de acción, por la seguridad y convivencia en paz de la villa de Salcajá del departamento de Quetzaltenango*. Guatemala, sin año.

dialogó con los vecinos para dejar libres a los jóvenes. Con las coordinaciones que se realizaron entre líderes, vecinos y los integrantes de las JLS, los jóvenes firmaron un acta donde se comprometieron a respetar y no causar problemas en esta comunidad, dejándolos en libertad horas después del hecho.

Las JLS, ya sea por la autoridad, fuerza, temor o liderazgo, se han posicionado ante la población como “garantes” de seguridad, convirtiéndose en algunos lugares, con el paso del tiempo, en grupos armados involucrados en hechos ilegales y violaciones de los derechos humanos.

Existen casos como los acontecidos en el mercado de La Terminal, zona 4 de la ciudad de Guatemala, a través del grupo denominado “Los Ángeles Justicieros” y los de San Martín Jilotepeque en Chimaltenango y San Juan Cotzal, Quiché, donde miembros de las JLS lincharon y dieron muerte a un policía en cada uno de dichos municipios.

En el primer caso, la información hemerográfica consultada detalla que el 16 de septiembre, un supuesto integrante de “Los Ángeles Justicieros”, grupo armado financiado por comerciantes para vigilar y asesinar presuntos delincuentes en La Terminal, fue muerto a tiros. La víctima llevaba un chaleco y portaba una funda para pistola. A su lado quedó tirada una tolva con cartuchos calibre 9 milímetros. De acuerdo con los informes de prensa, de las versiones proporcionadas por los testigos se infiere que dos sujetos sin mediar palabra le dispararon a la cabeza en dos ocasiones. Otros testimonios aducen que fue producto de una discusión con uno de sus compañeros. Cualquiera de las dos versiones permite observar los niveles de impunidad e ilegalidad con la que pueden operar estos grupos. A pesar de los delitos en los que incurren, la eficacia de sus acciones les ha valido para posicionarse entre la población, no importando los medios ni mecanismos. La misma PNC reconoce que estos grupos se han salido del control institucional.

En el caso de Chimaltenango, el informe de situación sobre derechos humanos reporta que durante 2009 han existido 6 denuncias en contra de las JLS por arbitrariedades e irregularidades cometidas por sus miembros. Existen dos denuncias en San Martín Jilotepeque y las demás, repartidas en los municipios de Patzún, Patzicía, Santa Cruz Balanyá y San Andrés Itzapa.

El municipio de San Martín Jilotepeque es un caso especial porque relata la existencia y conformación de dos grupos y clases de juntas. Una, coordinada con la subestación de la PNC que dejó finalmente de funcionar y la otra coordinada enteramente por vecinos de la localidad la cual permaneció vigente y actuante. Durante 2008 se recibió en la auxiliatura departamental de la institución la primera denuncia en contra de la junta por su participación en el linchamiento y muerte de tres personas sospechosas de presuntos robos de vehículos.

Las JLS ha adquirido enorme presencia y poder dentro del municipio. Patrullan con pasamontañas, usan armas de grueso calibre y detienen ilegalmente cuestionando a las personas que transitan por la calle. Se tiene conocimiento de abusos de autoridad y violaciones de los derechos humanos en términos de libertad personal, libertad de tránsito, ofensas a la dignidad personal y derechos de la mujer.

Según consta en el expediente ORD.CHIM.009-2009/DCP con título “la integridad y muerte violenta”, el 15 de noviembre, el auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en Chimaltenango recibió una llamada del comisario de distrito, indicando que la población había linchado y dado muerte a un agente de la Comisaría 73 en el municipio de San Martín Jilotepeque.

Según consta en el expediente, a las nueve de la noche, el policía Miguel Ángel Curruchich Gon fue apresado y golpeado por una turba de vecinos dirigidos por la JLS, quienes lo acusaban de extorsionar a un ciudadano. La gente se encontraba armada y enardecida sin que las autoridades pudieran ingresar al municipio.

El comisario encargado del Distrito, José Alfonso Cruz Valdés, jefe de la Estación ubicada en Sacatepéquez, Antigua Guatemala, tuvo que negociar con la población para tomar el cadáver y evitar que reprimieran al resto del personal de la PNC que se refugiaba en diversas casas de la localidad.

El auxiliar de la Procuraduría pudo constatar el fuerte contingente policial empleado para lograr restablecer el orden. Había 10 radiopatrullas, 5 motos y 30 miembros de las Fuerzas Especiales. En conjunto, sumaban unos 80 agentes. Se contaba además con la presencia del gobernador y numerosos medios de comunicación periodísticos. Los agentes fueron trasladados a la cabecera municipal y, por órdenes del ministro de Gobernación, tuvieron que retirar a los otros 12 agentes de la subestación del municipio, que corrían el riesgo de ser linchados.

Caso paradigmático del linchamiento al policía nacional civil, Pedro Rodríguez Toma. En San Juan Costal, municipio que se ubica en la zona denominada Triángulo Ixil, la cual se caracteriza por su extrema pobreza, fuerte concentración de la tierra y un tradicional abandono institucional, el papel y organización de la JLS se hizo más protagónico en el municipio.

Tabla 45
Homicidios San Juan Cotzal
Relación por año

Año	Homicidios por cada 100,000 habitantes
2005	27.64
2006	26.96
2007	39.46
2008	64.21
2009	10.04

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

El caso de San Juan Cotzal no dista mucho de los descritos anteriormente en cuanto a la participación y complicidad de las JLS en los linchamientos. Además, existen denuncias sobre el control e involucramiento directo del alcalde. Según data en el expediente “PREVENCIÓN.NEB.30-2009/DCP”, el día 1 de noviembre de 2009, a las 9:00 horas, miembros de la JLS detuvieron de forma ilegal a un menor de edad.

Según los testimonios recabados, el menor fue trasladado al primer nivel de las antiguas instalaciones de la Municipalidad. La declaración de la madre detalla que al momento de ir a recogerlo, en presencia del alcalde municipal, José Pérez Chen, sus guardaespaldas y miembros de la junta le cortaban el pelo y lo acusaban de ser miembro de una de las maras. Fue indignante la manera agresiva y prepotente con la que el alcalde se dirigió a la señora, y ante diez personas más, al decirle que su hijo “*es un marero*”, mientras se reían y se burlaban de ella.

Cuando todo esto acontecía en la Municipalidad, se hizo presente el padre del menor, agente de la PNC, Pedro Rodríguez Toma, procedente del municipio de San Gaspar Chajul, Quiché, donde se encontraba en servicio.

Testigos presenciales relatan que la seguridad particular del alcalde y los miembros de la JLS gritaron “*¡amárrenlo!, ¡amárrenlo!*”. El policía comenzó a discutir con el “comandante” de la JLS de nombre Diego Rodríguez. Al fragor de la discusión, el oficial, en defensa propia, disparó contra él, hiriéndolo en la pierna derecha. El alcalde, los guardaespaldas y miembros de la JLS corrieron y lo desarmaron; lo capturaron y comenzaron a golpear y torturar. El policía pedía ayuda con clamor, pero el alcalde y sus compañeros no permitieron la intervención de otros agentes de la PNC. Literalmente les manifestaron: “*la justicia la hacemos nosotros*”, mientras el alcalde replicaba: “*eso se hace, que bueno... eso quiere*”. La esposa, que se opuso a la tortura de su esposo, fue golpeada por los agresores y ayudada por otras personas para ser tratada en el centro de salud.

Con el oficial amarrado, herido y torturado en las afueras de la Municipalidad, el alcalde hizo circular por las calles de la población vehículos con altoparlantes. Les solicitaba la presencia y asistencia a los vecinos al parque central para tomar una decisión sobre qué hacer con la captura de un delincuente. Aproximadamente a las 16:30, acudieron los jefes policíacos de la Comisaría departamental para rescatar al agente, pero fue

infructuoso. Dos horas después, uno de los policías municipales de tránsito empujó al señor Pedro y comenzó a arder en llamas. Al parecer cuando el policía fue presentado al público, ya estaba muerto y había sido rociado con gasolina en la Municipalidad.

La viuda de la víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Nebaj, identificada con el número MP 238/2009/2344 agencia 1. Los delitos imputados van desde la detención ilegal, ofensas a la dignidad personal y atropello a la libertad individual. Se suman los delitos de abuso de autoridad, tratos degradantes, lesiones y omisión de denuncia, y los de ejecución extrajudicial, privación de libertad, tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra del alcalde municipal, el equipo de seguridad y los integrantes de la JLS.

La Auxiliatura del Procurador de los Derechos Humanos solicitó medidas de seguridad personal a favor de la viuda, siendo protegida a través del Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público, en la ciudad de Guatemala. A noviembre de 2009, en el MP el caso aún se encontraba en la fase de investigación.

1.8 La trata de personas en Guatemala

La trata de personas es un fenómeno social que ha despertado preocupación en el mundo debido a su magnitud. Es considerado como una forma contemporánea de esclavitud y uno de los ultrajes más graves contra la esencia de los derechos humanos, la integridad, la dignidad y la vida de sus víctimas: niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención contra la delincuencia organizada (Protocolo de Palermo), establece que la trata de personas es:

“La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.”

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción de órganos con fines comerciales, la esclavitud o las prácticas análogas a la misma.

El referido Protocolo contempla que cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados, no se tendrá en cuenta el consentimiento dado por la víctima de la trata a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar. Asimismo, la captación, transporte, traslado acogida o recepción de un niño con fines de explotación se considera “trata de personas”, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios antes referidos.

A nivel global se estima en 4 millones las víctimas de este delito, de las cuales “*el 80% son mujeres y niñas, y el 50% de la totalidad lo constituyen niños, niñas y adolescentes*”.²⁴

Existe una amplia gama de cifras estimadas sobre el alcance y la magnitud de esta forma de esclavitud, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) calcula que hay por lo menos 12,3 millones de adultos y niños en condiciones de trabajo forzoso y servidumbre sexual con fines comerciales. Y estima que por lo menos 1,39 millones de esas personas son víctimas de explotación sexual con fines comerciales, en el ámbito transnacional y dentro de los países. Según la OIT, el 56% de todas las víctimas de trabajo forzado son mujeres y niñas.

“En todo el mundo, la delincuencia organizada transnacional compra y vende cada vez mayor cantidad de niñas y adolescentes, habiéndose convertido en uno de los negocios más lucrativos para estos grupos. Una serie de

²⁴ Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).

factores derivados de la exclusión económica y social y de la falta de protección a niños, niñas y adolescentes determinan su indefensión ante la trata”²⁵

Estas redes realizan la trata de personas como un negocio muy lucrativo, tanto que se compara con el tráfico de armas y de drogas, razón que se le coloca en el tercer lugar de “*rentabilidad-inversión criminal del mundo*”.²⁶

Lamentablemente la trata, al igual que otras expresiones de delincuencia organizada, se beneficia de la corrupción e impunidad que impera en nuestro país,

“en esta práctica delictiva no solo participan redes criminales que captan y reclutan a sus víctimas en los países vecinos y las transportan a Guatemala como país de destino o de tránsito, sino también algunas autoridades públicas que alteran o elaboran falsos documentos de identidad, profesionales que legitiman dichos documentos y funcionarios que hacen caso omiso de este ilícito y/o participan directamente en el mismo.”²⁷

El informe anual sobre trata de personas de 2009, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, refiere que en informes creíbles de organizaciones internacionales e instituciones no gubernamentales se indica que los funcionarios públicos corruptos continúan impidiendo el cumplimiento de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, y que, a la vez, facilitan la actividad de la trata por medio de la aceptación de sobornos y la filtración de información sobre próximas incursiones de la PNC a los tratantes sospechosos, entre otros.

Causas hipotéticas que confluyen en la trata. Las principales causas que se han reconocido en el país como origen y razones de la trata de personas son endógenas y exógenas: las primeras comprenden factores económicos como la pobreza, el desempleo y el endeudamiento; sociales y culturales, como la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, discriminación por motivos de género en la familia, la cultura patriarcal y adulto-céntrica; la débil legislación, la frágil y deteriorada capacidad investigativa en este problema, la carencia de la aplicación de sanciones punitivas más severas. Las exógenas son la feminización de la migración laboral, por un lado, y el endurecimiento de las políticas de inmigración de los países receptores, por el otro.

También intervienen factores que provienen de la exclusión económica y social, expresada en bajos niveles de educación, falta de oportunidades, escasa oferta de trabajo para las personas adultas, lo cual influye directamente en que niñas, niños y adolescentes se inserten en actividades que les produzcan un ingreso económico, para contribuir al sostenimiento de sus hogares.

Otro aspecto determinante es la insatisfacción de las necesidades básicas familiares y personales, la historia de abusos sexuales, malos tratos, trabajo infantil no remunerado, lo cual pone a niñas, niños y adolescentes frente a la alternativa de salir de sus comunidades hacia otras regiones del país o a otros países, en busca de oportunidades laborales, sin tener idea de los riesgos que ello implica, o aceptar ofertas laborales engañosas desde el tratante desconociendo las implicaciones de esos trabajos, donde pueden incluso llegar a perder la vida.

Ligado a la problemática de la trata está el tráfico de personas, fenómeno que en sí mismo puede aumentar el riesgo de trata.

1.8.1 País de origen, tránsito y destino

Guatemala, por su ubicación geográfica, es considerado un país de origen, tránsito y destino de presuntas víctimas de trata y tráfico internacional de personas. Es un país de destino para víctimas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que son tratadas para explotación sexual comercial. Las áreas fronterizas con México y Belice siguen siendo de mayor preocupación debido al flujo creciente de migrantes indocumentados, muchos de los cuales son víctimas potenciales de los tratantes.

²⁵ Asociación para la Eliminación de la prostitución, pornografía, turismo, tráfico sexual de niñas, niños y adolescentes (ECPAT). *Trata de mujeres, niños y adolescentes en Guatemala*. Guatemala, julio de 2007, pag. 22.

²⁶ ONUDOC, 2002.

²⁷ ECPAT. *Trata de mujeres, niños y adolescentes en Guatemala*. Guatemala, julio de 2007, pag. 37.

Como se afirma en párrafos anteriores, el problema de la trata de personas es de gran magnitud. En América Latina, la trata se realiza principalmente mediante el traslado de víctimas hacia los países con mayores estándares de vida. Las redes en Asia, Estados Unidos y Europa tienen sus puntos de operación y reclutamiento principalmente en Brasil y Colombia; los corredores de la trata se extienden desde Nicaragua a Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras.²⁸

En el territorio nacional las mujeres, adolescentes y niñas son trasladadas de comunidades rurales a ciudades urbanas o de una región a otra del país con fines de explotación sexual comercial.

Es pertinente destacar que la inexistencia de registros estadísticos y, a la vez, la falta de denuncias, no permiten determinar con exactitud las dimensiones que ha alcanzado la trata de personas en el país.

Según algunos registros de casos atendidos por el sistema de justicia en 2009, llegaron 18 casos de trata de personas de los cuales diez se consignaron con la ley anterior según lo tipificaba el artículo 194, del Código Penal, 8 con la nueva ley, Decreto No. 9-2009, de los cuales se emitió una sentencia absolutoria dentro de la vigencia de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.²⁹

Respecto de la percepción del problema por parte del departamento de Estado de los Estados Unidos, resaltan las recomendaciones hechas en el informe anual 2009 ya citado, en el cual se sitúa a Guatemala en el nivel 2 con vigilancia, como uno de los países donde aumenta el número de víctimas. En cuanto a la persecución de dicho delito, se indica que durante 2008 sólo se iniciaron procesos contra 55 sospechosos de trata de personas, siete de los cuales fueron por explotación sexual de menores. Esa cifra, según el Departamento de Estado, es menor que la de 2007, cuando se instruyeron ocho procesos por ese delito.

Organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales han denunciado actividades de turismo sexual infantil en áreas turísticas, tales como Antigua Guatemala y la ciudad de Guatemala; cabe mencionar que tanto niñas como jóvenes guatemaltecas también son víctimas de trabajos forzados dentro del país, mediante el servicio doméstico.³⁰

Los hombres, las mujeres y los niños guatemaltecos son tratados dentro del país, y llevados hacia México y los Estados Unidos para realizar trabajos forzados, sobre todo como mano de obra en la agricultura, en particular en las plantaciones de café. En las áreas fronterizas con México, los niños guatemaltecos son explotados, obligándoles a vender en las calles y a realizar trabajos forzados en basureros municipales.³¹

Compromisos del Estado en esta materia

“(…) la trata sexual se tolera al invisibilizar a la red de explotadores (tratantes, traficantes, proxenetas, clientes) y responsabilizar y estigmatizar a las víctimas de la explotación que sufre.”³²

Ante la situación descrita sobre la trata de personas en el país, se hacen evidentes, en primer lugar, los compromisos incumplidos por el Estado, sobre todo los que derivan de recomendaciones provenientes de los órganos de tratados del sistema universal de protección de los derechos humanos y las emitidas unilateralmente por algunos Estados, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica.

Según las recomendaciones de los órganos de tratados, en el caso de Guatemala destacan los temas de niñez y los escasos avances en materia de tráfico de niños, trabajo infantil, medidas de protección a menores, explotación sexual, pornografía infantil y turismo sexual.

²⁸ Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *¿Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe*. Octubre de 2007, pág. 49.

²⁹ Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial/Estadísticas Judiciales. Casos ingresados por delitos varios en los órganos jurisdiccionales del ramo penal de la República de Guatemala. Octubre de 2009.

³⁰ *Informe anual sobre la trata de personas 2009*. Departamento de Estado, Estados Unidos de Norteamérica, sección Guatemala. 16 de junio de 2009.

³¹ *Ibid.*

³² ECPAT. *Trata de mujeres, niños y adolescentes en Guatemala*. Guatemala, julio de 2007, pág. 10.

En los contextos favorables para la trata, resaltan las estructuras débiles del Estado, las concepciones y los juicios que se tienen sobre el papel de las mujeres, que contribuyen de manera directa en mantener el *status quo* de las mismas a un sistema que las vulnera desde la niñez y en su adultez, violentándolas continuamente y haciéndolas vulnerables.

Aunado a la falta de denuncias relativas al delito de trata de personas, las instancias gubernamentales encargadas de operar la justicia no cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para la atención integral a la víctima, la protección por parte del sistema, la defensa y el resarcimiento correspondiente; lo cual implica también limitaciones en el acceso de las víctimas a la justicia.

En el caso de las personas inmigrantes, éstas suelen ser estigmatizadas y revictimizadas por parte de los operadores de justicia, incluso, en algunos casos las víctimas son más bien consideradas como responsables.

Avances en materia de protección, sanción y erradicación de la trata de personas. En el plano de la cooperación internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha celebrado diversos memorandos de entendimiento con gobiernos amigos para la protección de mujeres y personas menores de edad víctimas de trata. Uno de los esfuerzos relevantes lo constituye la elaboración, en 2006, del Protocolo para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata, instrumento que establece el proceso para la repatriación de las personas menores de edad guatemaltecas hacia Guatemala y también el proceso para la repatriación de extranjero y extranjeras hacia su país de origen o residencia permanente, al tiempo que determina las responsabilidades de las instituciones competentes.

A través del viceministro de derechos humanos y migrantes, el Ministerio ha impulsado iniciativas para proteger a la población guatemalteca vulnerable víctima de la trata de personas. Los esfuerzos del Estado tienen su mayor respaldo en la Comisión Interinstitucional de combate a la trata de personas y sus delitos conexos.³³

Resalta la aprobación del Decreto No. 9-2009, Ley contra la violencia sexual y la trata de personas, que constituye un avance en materia jurídica y, tomando en consideración su correcta interpretación y aplicación, es un avance en el combate y castigo de los delitos sexuales y la trata de personas.

Dicho cuerpo legal creó la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, adscrita a la Vicepresidencia de la República. Cabe mencionar que esta Secretaría no contó con presupuesto para su funcionamiento durante 2009, por lo que se limitó a crear una organización mínima y formar un ente coordinador de acciones entre las instituciones del Estado relacionadas con el tema, así como con organizaciones especializadas pertenecientes a la sociedad civil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Interinstitucional para el Combate de la Trata de Personas, en 2007, elaboraron un proyecto de política pública contra la trata y de protección integral a las víctimas y el plan de Acción Estratégico 2007-2017, sin embargo, es hasta 2009 cuando a través de la Vicepresidencia de la República se realiza la presentación pública de la política, y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas la adopta para sí e inicia su implementación.

La política pública en la materia debiera incluir, entre otros, la capacitación de los operadores de justicia, personal de los entes migratorios y fronterizos sobre la interpretación y aplicación de la normativa nacional e internacional. De igual forma, como parte de una estrategia de optimización de recursos, debieran efectuarse acciones conjuntas para evitar duplicidad y combatir la práctica de la trata de personas de manera integral.

En ese marco, se hace necesario el trabajo de coordinación entre instituciones que tienen a su cargo la puesta en marcha de políticas específicas de poblaciones vulnerables, como la Política de protección integral de la niñez y adolescencia 2002-2015; la Política de equidad y oportunidad de las mujeres guatemaltecas y la

³³ Denominada hasta junio de 2007 como “Grupo Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas”.

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI) en armonía con el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres – PLANOMI 2004-2014.

1.9 Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia

Los tres primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala hacen explícita la prioridad que se asigna a la defensa del derecho a la vida y a la seguridad de la persona. La relación es indisoluble, desde la integralidad de los derechos humanos, indivisibles e interdependientes: proteger a la persona y a la familia, la vida y la seguridad, junto con la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral, constituye una obligación indeclinable del Estado.

El Estado se constituye en garante esencial de la vida y la seguridad de las personas, sin cuya plena observancia se hace incompleto el ejercicio del conjunto de derechos reconocidos por el texto constitucional.

En sucesivos informes al honorable Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el grave deterioro de la seguridad pública, situación que afecta de manera significativa el ejercicio de los derechos fundamentales de la población.

En materia del derecho a la vida y a la seguridad, el Estado es el principal violador, más por omisión que por acción. No obstante, la participación en hechos delictivos y abusos contra la población por parte de agentes del Estado, especialmente de los cuerpos de seguridad, es numerosa.

La falta de una política criminal de Estado que oriente los esfuerzos y el fortalecimiento de las instituciones responsables de accionar contra la delincuencia y que permita coherencia en la actuación, es un componente de la situación de la seguridad y la justicia también en el año que ha concluido y que se describe en las páginas de este informe.

En efecto, las instituciones públicas son incapaces de hacer frente a esta realidad, siendo la impunidad la consecuencia de la falta de determinación de las autoridades en la adopción de medidas integrales y de fondo que permitan elevar las capacidades institucionales para hacer frente a esta delicada situación.

Los esfuerzos por fortalecer la supervisión y los controles internos en la PNC resultan insuficientes y no se ve una clara voluntad por combatir la corrupción y la ineficacia. Las capacidades de la Inspectoría General y de la Oficina de Responsabilidad Profesional no sólo resultan insuficientes, sino que terminan siendo debilitadas, como lo demuestra el reciente traslado de estas unidades a instalaciones inadecuadas, en una zona inapropiada para desempeñar sus funciones.

El 24 de noviembre se graduó la 24ª promoción de policías formados en la Academia de la PNC, integrada por 2,161 nuevos elementos. Con ellos, la entidad policial llegó a 23,287 agentes, sin que paralelamente haya un proceso de formación e incorporación de cuadros de mando. Falta aún la decisión de las autoridades del Ministerio de Gobernación de crear una escuela para la formación de oficiales que permita renovar y fortalecer una desgastada estructura de mando, que no ha recibido la formación profesional que se requiere para enfrentar el complejo escenario de la seguridad pública.

Hace falta un aparato profesional en materia de investigación criminal. La impunidad en caso de homicidios se sitúa en niveles alarmantes, lo que demanda de las autoridades la creación de un ente investigativo profesional que cuente con los recursos adecuados. Se debe garantizar una actuación integrada entre el Ministerio Público, la PNC y el INACIF, sin lo cual resultará difícil la tarea de revertir la situación.

También se pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con una política de atención a las víctimas, incluyendo una entidad especializada que las atienda de manera integral. Las estadísticas de hechos criminales son la fría e inexpressiva cara del drama que afecta a miles de familias guatemaltecas, donde un número

significativo de ellas queda condenada a la miseria, sin que operen mecanismos eficaces de reparación que desde el Estado ayuden al menos a paliar la ausencia de quien proveía el sustento familiar.

Como se indica arriba, según los registros de la PNC, más del 80% de los homicidios se ha cometido con armas de fuego; se pone de manifiesto la necesidad de implementar planes de desarme y ejercer un estricto control de la portación de armas, por parte de la PNC. Es positiva e importante la aprobación de una nueva Ley de armas y municiones, en abril de 2009, sin embargo, esa legislación aún no ha tenido el impacto positivo esperado, especialmente en cuanto a la reducción de la violencia armada.

Motivo de especial preocupación es que continúa siendo precario el control sobre las cárceles. Las requisas efectuadas siguen verificando el ingreso de teléfonos portátiles, lo que evidencia que la actividad criminal desde las cárceles continúa y que los mecanismos de control son insuficientes.

El mejoramiento en los niveles de seguridad de la sociedad guatemalteca podrá conllevar propuestas y acciones integrales, involucrando diversos ámbitos de la vida nacional y las políticas públicas, aquellas debidas al campo de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos, pero pasa, necesariamente con toda certeza, por una reforma integral de la PNC que permita establecer una institucionalidad eficiente y confiable.

Dicho proceso debe contar con el aporte del conjunto de los actores nacionales y traducirse en una agenda de transformaciones sustantivas cuya oferta responda a las necesidades de seguridad de la población. El liderazgo de las máximas autoridades del país resulta fundamental para que ello produzca los resultados que la población espera.

Con el propósito de aportar constructivamente en la búsqueda de soluciones a la grave crisis de la seguridad y la justicia, el Procurador de los Derechos Humanos, en conjunto con el Arzobispo Metropolitano de Guatemala, el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, hicieron pública, el 23 de enero de 2009, una propuesta básica al Gobierno de la República para la elaboración de un Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia.

Teniendo como base esa propuesta, y luego de un complejo proceso de consultas, en las cuales cuatro instituciones jugaron un papel activo, el 15 de abril de 2009 se suscribió por parte del Presidente de la República, del Presidente del Congreso de la República, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia.

El Acuerdo Nacional consta de 101 compromisos, organizados en diez ejes temáticos, que en conjunto constituyen una extensa agenda de procesos y acciones que la institucionalidad del Estado debería desarrollar con eficiencia y eficacia para atender de manera integral los problemas de la seguridad y la justicia, con vistas a superar el ambiente de criminalidad e impunidad imperante en el país.

El Acuerdo Nacional apunta hacia una seguridad y una justicia democráticas, respetuosas de los derechos humanos, que sólo pueden alcanzarse mediante la creación, reforma o consolidación de la institucionalidad estatal directamente responsable de hacer efectiva la vigencia del artículo segundo de la Constitución Política de la República, el cual define como deber del Estado garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas.

Los compromisos suscritos alrededor del Acuerdo Nacional constituyen una trascendental oportunidad para reencauzar la institucionalidad, y emprender el camino hacia la devolución al país de la seguridad y la justicia perdidas.

Si bien el Acuerdo Nacional tiene un carácter políticamente vinculante, permite identificar con claridad a qué instituciones del Estado corresponde tomar cuáles medidas y cuáles acciones. No se diluyen, sino se precisan

las responsabilidades y se identifican aquellas áreas en las que debe haber coordinación y complementariedad en el quehacer de las respectivas instituciones.

A las cuatro instituciones (Alianza Evangélica, Arzobispado Metropolitano, Universidad de San Carlos y Procuraduría de los Derechos Humanos) se les encomendó, en el Acuerdo Nacional, actuar como Grupo Garante dentro de la Comisión de Verificación, tarea que fue asumida con entera responsabilidad y sin condescendencia para con las autoridades firmantes.

En efecto, las cuatro instituciones Garantes del Acuerdo hicieron, en 2009, un exhaustivo seguimiento del cumplimiento del Acuerdo, el que se inició con una serie de observaciones a la Hoja de Ruta presentada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que en diversas materias fue considerada insuficiente para orientar un cumplimiento acorde a las exigencias de cada compromiso.

Asimismo, el Grupo Garante ha desempeñado un papel activo y constructivo en el funcionamiento de la Unidad de Seguimiento, en cuyo seno ha hecho señalamientos sobre los rezagos, omisiones y otras debilidades patentes en el proceso de cumplimiento del Acuerdo.

Sin embargo, transcurridos más de ocho meses desde la suscripción de los compromisos, el balance de resultados no es el mejor y no resulta coherente con la grave situación de seguridad que afecta a la población.

Los avances son más bien limitados y aislados, sin pasos decisivos en asuntos fundamentales como la reforma policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, de un eficaz y depurado ente de investigación criminal, en la definición de una Política Criminal del Estado, sin que la prioridad atribuida a la seguridad y la justicia se reflejen en las correspondientes asignaciones presupuestarias, y sin una coherente estrategia de comunicación y participación social para la difusión e impulso del acuerdo, entre otras deficiencias constatadas.

Existe la necesidad de impulsar con decisión y visión estratégica los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional, sin lo cual, será muy difícil superar la crítica situación de seguridad que afecta a la sociedad guatemalteca.

CAPÍTULO II

Los derechos económicos, sociales y culturales



- 2.1. La pobreza y el contexto económico
- 2.2. La crisis económica y financiera internacional
- 2.3. Desempeño de la economía nacional
- 2.4. Ejecución presupuestaria, gasto social y derechos humanos
 - 2.4.1. La complejidad de la recaudación tributaria
 - 2.4.2. El gasto social de ministerios y secretarías
- 2.5. Derechos laborales: el derecho al trabajo
- 2.6. Derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional
- 2.7. Derecho a la educación
- 2.8. Derecho a la salud
- 2.9. Derecho a la seguridad y asistencia social
- 2.10. Derecho a una vivienda adecuada
- 2.11. Conflictividad agraria
- 2.12. Derecho a un ambiente sano
- 2.13. Derechos de los pueblos indígenas
- 2.14. Derecho a la cultura
- 2.15. Acceso a la información y derecho de expresión

CAPÍTULO II

Los derechos económicos, sociales y culturales

2.1 La pobreza y el contexto económico

La pobreza en Guatemala tiene múltiples explicaciones asociadas a la concentración de la riqueza y las desigualdades originadas en la sociedad. Factores históricos y económicos, aunados a la discriminación y exclusión étnica, de género, etaria y las precarias condiciones de vida de la mayoría de las personas, han provocado en las últimas décadas grandes carencias en salud, nutrición, educación, vivienda y otros servicios básicos, que merman la garantía de libertades fundamentales y, actualmente, hasta la seguridad pública.¹

Diagnósticos similares se encuentran en los informes y pronunciamientos de mecanismos internacionales de monitoreo o supervisión, tal es el caso del informe de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación en sus visitas a Guatemala.²

La mayor parte de la población tiene ingresos bajos y una pequeña minoría, altos ingresos. El coeficiente de Gini para el consumo y el ingreso es de 55.1%, ubica a Guatemala como uno de los países de mayor desigualdad en el mundo. El 10% más pobre apenas recibe el 0.9% del ingreso nacional, el 20% más pobre recibe el 2.9%, mientras el 20% más rico o de mayores ingresos recibe el 59.5% y el 10% más rico el 43.4%.³

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Guatemala ocupa el lugar No. 118 en el listado mundial de países con desarrollo humano medio⁴ y ocupa el lugar número 54 en relación al Índice de Pobreza Humana (IPH-1). Entre los países clasificados como “países en desarrollo”, ocupa el último lugar en Centro América y sólo es superado por Haití en América Latina (lugar 74).⁵

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2006, se determinó que 51% de la población (6 millones 625 mil 892 personas) vive en condiciones de pobreza y cerca del 15.2% de la población (alrededor de 1 millón 976 mil 604 personas), en condiciones de extrema pobreza. La pobreza se caracteriza por ser predominantemente rural y afecta en mayor proporción a la población indígena.⁶ Un problema prioritario que se deriva de esta situación de pobreza y extrema pobreza es el alto nivel de desnutrición crónica que afecta, en toda la República, al 49.3% de los niños menores de 5 años.⁷

A la crítica situación de pobreza y extrema pobreza, desigualdad y exclusión, deben agregarse los factores exógenos de particular relevancia ocurridos a partir de los últimos años, como la crisis del petróleo, la crisis económica y financiera de Estados Unidos y la consecuente deportación de connacionales. Y también deben sumarse factores endógenos, como la crisis alimentaria, los conflictos derivados de la producción de agrocombustibles, el escaso nivel de lluvias de algunas regiones que han causado sequía y pérdida de cosechas de alimentos y granos básicos, la caída del envío de remesas de guatemaltecos radicados en el exterior, la inseguridad y el fortalecimiento de las diversas redes del crimen organizado y narcotráfico.

¹ Informe Guatemala, documento E/CN.4/2006/44/Add.1 de Jean Ziegler presentado ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

² Véase al respecto los informes de Jean Ziegler del 26 de enero al 4 de febrero de 2005 y de Olivier de Schutter del 3 al 5 de septiembre 2009.

³ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. *Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido*. New Cork, EEUU, Grupo Mundi Prensa, 2007, pág. 240-242 y 283-286.

⁴ Indicador compuesto por tres componentes: índice de esperanza de vida, índice de educación e índice del Producto Interno Bruto (PIB).

⁵ Indica la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años, la tasa de analfabetismo de adultos, el porcentaje de la población que no utiliza una fuente de agua potable y el porcentaje de niños con peso insuficiente para su edad.

⁶ Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2006), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

⁷ Dato de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2002.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que en el país más de 800,000 personas caerían en la pobreza durante 2009 debido a la reducción en el envío de remesas. El informe señala que 849,300 guatemaltecos pueden pasar el umbral de la pobreza; otros 733,500 se encuentran en riesgo de pasar a engrosar la lista de los que sufren extrema pobreza, teniendo que vivir con menos de un dólar diario, o sea, ocho quetzales con veintisiete centavos diarios.

Los indicadores sociales de la inseguridad alimentaria y nutricional, muy relacionada con la pobreza y extrema pobreza, mostraron que la problemática afecta no sólo a los departamentos ubicados en el Corredor Seco del oriente, sino también a departamentos de las regiones sur y noroccidente (Quiché, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos, entre otros), de la región central, como Chimaltenango, y del norte del país. La crisis ha dejado de ser propiamente un problema regional, convirtiéndose en uno de carácter nacional.

El Gobierno ha respondido a través del Programa de Cohesión Social con entrega de alimentos y medidas de recuperación nutricional y asistencia humanitaria en los últimos meses del año. No obstante, los cambios de fondo para evitar que se sigan deteriorando los indicadores de pobreza y de extrema pobreza aún son muy vagos. Organizaciones sociales han planteado medidas tendientes a incorporar al campesino y al habitante del área rural como actor clave en el desarrollo rural y la defensa de la soberanía alimentaria.

En septiembre, durante su visita, el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, señor Olivier de Schutter, destacó la importancia de aprobar la Política de Desarrollo Rural Integral, señalando también que la concentración de la tierra es excesiva y que hay que destinar más tierras para la producción de alimentos y menos para agrocombustibles generados de la caña de azúcar y la palma africana.

Consideró inaceptables las cifras de pobreza y extrema pobreza en que vive la población guatemalteca, que en algunas zonas rurales alcanza 75%, la desnutrición crónica y severa o aguda, la insuficiencia presupuestaria y el bajo nivel de tributación, uno de los más bajos de América Latina, señalando la responsabilidad del Congreso en esa problemática.

El Relator Especial elogió los diferentes esfuerzos que realiza el Gobierno, la sociedad civil y el Procurador de los Derechos Humanos en la defensa del derecho a la alimentación y del marco legal ya creado. El llamado general es para fortalecer la implementación de acuerdos o pactos nacionales (incluida la problemática fiscal) que le permitan al país dar soluciones integrales a la desnutrición crónica y aguda, la pobreza y extrema pobreza.

2.2 La crisis económica y financiera internacional

La acción gubernamental es vital para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), la cual ha sido proporcional a la debilidad del Estado, agregándose para 2009, los efectos de la crisis económica y financiera mundial que tuvo su epicentro en Estados Unidos.

Los efectos de la crisis se mantuvieron en la situación económica y financiera internacional, propagándose en mayor o menor medida en gran número de países del mundo.

Salvo países como China e India, con un comportamiento económico de crecimiento sostenido, la situación en otras regiones apuntó a la recesión, con su punto máximo en marzo de 2009. Se estima que hasta principios de 2010 la economía norteamericana y mundial empezará un nuevo ciclo de crecimiento.

Mientras tanto, los niveles de desempleo crecieron como nunca antes en Estados Unidos, lo que obligó a incrementar la inversión pública con el fin de reactivar la economía y salir de la depresión.

Según instituciones de peso en el tablero de la economía mundial, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento económico se mantendrá lento y el desempleo continuará alto por tiempo indefinido. La incertidumbre también se mantiene en Europa, independientemente de las sorpresas positivas mostradas por Alemania y Francia en el tercer trimestre de 2009. El premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, estimó que la recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos podría ser inestable, con recuperaciones y caídas durante tres años o más.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) evaluó para Latinoamérica una recuperación lenta, gradual y dispar, debido a la débil demanda global, a las elevadas tasas de desempleo y a los problemas financieros persistentes. En lo inmediato consideró, para 2009, un decrecimiento del 13% en el comercio.⁸

En América Central, la Secretaría del Sistema de Integración Centro Americana (SICA) para 2009 previó que los efectos negativos de varios sectores se mantendrían. Las luces de recuperación para el Istmo están centradas en 2010.⁹ La comparación entre los períodos enero-julio de 2008 y 2009 señala que algunos indicadores regionales se estabilizaron a partir de julio, sin embargo, no manifestaron mayores señales de recuperación:

- Durante el primer semestre las remesas tenían una merma de 12%, a julio tenían una leve mejoría, situándose en 9.7%.
- La región recibió 6,373.3 millones de US\$ en remesas en el período enero-julio, mientras en 2008 se percibieron 7,064.2 millones de US\$.
- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) permaneció estable.
- La recaudación en los países centroamericanos se mantuvo en un 12%, debajo de sus metas, afectando principalmente al sector de la construcción.
- En el intercambio interregional se observó un descenso de 22% de enero a julio, con una leve mejoría en agosto y septiembre.

El informe de 2009 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo¹⁰ (UNCTAD por sus siglas en inglés), contiene un análisis de las inversiones en 2008 y proyecciones para 2009 a nivel mundial, indicando que:

“Para América Latina en 2008, los flujos de Inversiones Extranjeras Directas, IED, crecieron cerca del 13% en 2008 alcanzando un nivel record de US\$ 144 mil millones. Este crecimiento no fue distribuido por igual en las subregiones, pues mientras Sud América tuvo un crecimiento del 29%, la región de México, Centroamérica y el Caribe sufrieron una baja del 6%.”¹¹

En Centroamérica y el Caribe hubo incrementos dispares en 2008: en República Dominicana de 83%; en Costa Rica de 7%, equivalente a US\$ 2 mil millones; y en Honduras, Guatemala y Nicaragua con un incremento menor.

Las IED para 2009 son pesimistas para los países en desarrollo. Se espera una reducción de US\$ 500 mil millones aproximadamente (de US\$ 1 billón 700 mil millones a US\$ 1 billón 200 mil millones).

El informe recomienda la promoción de las IED para la agricultura, por lo tanto, deben establecerse políticas que reflejen los intereses de los sectores vinculados y se atiendan preocupaciones sociales y ambientales. También apunta que los pequeños agricultores locales deben participar de manera activa en la definición de políticas sobre inversión de empresas transnacionales ligadas a la agricultura.

⁸ CEPAL, informe dado a conocer el 25 de agosto de 2009.

⁹ “Indicadores del área se estabilizan”, *Prensa Libre*, Guatemala, 12 de octubre de 2009, pág. 22.

¹⁰ *Ibid*, pág. 24.

¹¹ *Ibid*.

La IED es visualizada por el informe en su relación con la producción agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional en los países de América Latina y el Caribe, donde el hambre y la desnutrición castigan a casi el 10% de la población. Enfatiza la generación de políticas de atracción de las IED en la agricultura para mejorar el nivel de inversión en el sector, la producción alimentaria, los ingresos, el empleo y el desarrollo.

2.3 Desempeño de la economía nacional

Diversos actores económicos han aplicado, en el transcurso del año, diferentes proyecciones de crecimiento económico. A mediados de julio de 2009, la CEPAL reanudó el debate sobre las expectativas al anunciar que Guatemala entraría en un proceso de recesión durante 2009, con un decrecimiento de -1%.¹² Otras instituciones mundiales habían pronosticado un crecimiento: el FMI, de 1%, el Banco Mundial (BM) de 0.6, las instancias calificadoras de riesgos como Moody, de 0.5%, Standard & Poors (S&P) de 0 a -0.5% y Fitch Rathings de 1%.

La presidenta del Banco de Guatemala (BANGUAT) negó una recesión e informó que la nueva estimación situaba el crecimiento de la economía guatemalteca entre 0.4% y 1.2%, descartando la estimación de la CEPAL, que no incluía detalles y cifras por actividad económica. En diciembre, ante el Congreso de la República, aseguró que el país cerraría en 0.4% el 2009,¹³ valuando un crecimiento económico en 2010 de entre 1.2 y 2.1%.¹⁴ La CEPAL, por su parte, situó las cifras de 1% en la contracción de la economía en 2009, previendo un crecimiento de 2% para 2010.

El sector real de la economía se vio afectado, sobre todo en el primer semestre, por la contracción de algunos sectores en la producción agrícola, industrial y de servicios, luego de la reducción de las exportaciones, el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa y otras variables económicas.¹⁵

Los sectores más afectados o con reducciones fueron la explotación de minas y canteras (-2.60%), electricidad y agua (-1.70%), construcción (-9.10%), comercio (-1.50%); mientras que aquellos que mostraron crecimiento fueron agricultura (2.40%), industrias manufactureras (1.30%), transporte y comunicaciones (3.50%), intermediación financiera (6.60%), alquiler de vivienda (3.40%) y servicios privados (2.90%).¹⁶

Los resultados de la XLII Encuesta Empresarial que realiza la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), efectuada a más de 900 empresas en julio, indican que siete de cada diez han reducido su producción; entre julio de 2008 y julio de 2009 se registraba la pérdida de 29,000 empleos formales, la caída del consumo y el alza del tipo de cambio como principales causas de la reducción de la demanda.

Sin embargo, a pesar de las condiciones adversas, 46% de los empresarios evalúa que la recuperación se dará en la medida en que lo haga la economía estadounidense. Este optimismo fue compartido por el FMI, que visitó Guatemala entre el 2 y el 12 de noviembre, dando visos buenos sobre la recuperación económica.¹⁷

Algunos sectores específicos muestran optimismo en cuanto a los resultados. Tanto el azúcar como la producción cafetalera estiman un incremento, producto del alza de los precios en los mercados internacionales.

Según cifras oficiales, el IMAE —que incluye las exportaciones e importaciones, ventas y producción de siete sectores productivos—, la economía se comenzó a estabilizar en el primer trimestre 2009 y tuvo un comportamiento ascendente a partir del segundo trimestre, presentando a partir de julio un incremento sostenido.

¹² “La CEPAL anuncia recesión para Guatemala en 2009”, *Prensa Libre*, Guatemala, 16 de julio de 2009, pág. 21.

¹³ Medios de comunicación y Diario de Centroamérica, Guatemala, 17 de diciembre de 2009, pág. 7.

¹⁴ *Prensa Libre*, Guatemala, 19 de noviembre de 2009.

¹⁵ Banco de Guatemala. “Desempeño Macroeconómico y Perspectivas 2009-2010”, presentación en PDF.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fondo Monetario Internacional. “Declaración de la Misión del FMI en Guatemala”. Washington, 12 de noviembre de 2009.

Si se mantiene la tendencia de crecimiento hacia el futuro, puede estabilizarse y mejorar el empleo, los ingresos y el consumo de la población, lo que generaría mejores condiciones para la realización de los DESC.¹⁸

Tabla 46
Índice Mensual de Actividad Económica
Período 2008 a octubre 2009

Mes	Tendencia del ciclo 2008	%	Tendencia del ciclo 2009	%
Enero	126.32	3.80	127.71	1.10
Febrero	126.39	3.35	127.79	1.11
Marzo	126.48	2.91	127.91	1.13
Abril	126.59	2.51	128.06	1.16
Mayo	126.74	2.17	128.26	1.20
Junio	126.91	1.89	128.52	1.27
Julio	127.08	1.65	128.82	1.37
Agosto	127.23	1.46	129.16	1.51
Septiembre	127.37	1.31	129.50	1.67
Octubre	127.48	1.20	129.57	1.58
Noviembre	127.57	1.13	---	
Diciembre	127.64	1.10	---	

Fuente: elaboración propia con datos del BANGUAT.

Los primeros meses de 2009 fueron críticos y por debajo de las expectativas del BANGUAT. La economía nacional se redujo sustancialmente. Aunque exista una recuperación entre los sectores productivos más afectados al final del año, se puede considerar que 2009 no fue positivo para avanzar en la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población guatemalteca.

Sector financiero. Las expectativas pesimistas de sectores económicos, manifestadas desde el segundo semestre de 2008 y extendidas al primer semestre de 2009 por la crisis financiera mundial, han sido mitigadas por el BANGUAT a través del manejo del ajuste cambiario.

El crédito, pese a las medidas de las autoridades monetarias para dotar de liquidez a los bancos, se ha encarecido desde los últimos meses de 2008 y durante 2009, cuando se registraron alzas en las tasas de interés activas. En diciembre de 2008, se situaba en 8.46%, elevándose, a noviembre, a 13.72%. La tasa de interés pasiva promedio de los bancos se situó, el 12 de noviembre, en 5.64%, (una tasa promedio mayor que la inflación), favoreciendo el ahorro.

El efecto observado a través de estas disposiciones financieras, especialmente por el aumento desmedido de la tasa activa, consiste en que la diferencia entre la tasa activa y pasiva (*spread* o margen de beneficio para los bancos) beneficia al sector empresarial financiero.

A pesar de esas condiciones y a la reducción de la demanda general, el crédito al sector privado presentó un crecimiento moderado en sus indicadores. Al 31 de diciembre de 2008 totalizaba 87,209.4 millones de quetzales, mientras que al 5 de noviembre de 2009 se elevaba a 87,810.9 millones. Este indicador señala que, pese a la crisis, las familias y las empresas están dispuestas a contraer deudas para consumo e inversión. Teóricamente se puede inferir que la demanda de bienes y servicios puede mantenerse o elevarse a través de la inversión de las empresas o de particulares.

¹⁸ Índice Mensual de la Actividad Económica 2003-2009, Ministerio de Finanzas Públicas con datos del Banco de Guatemala. Datos hasta julio de 2009.

La supervisión a los bancos ha mejorado la fortaleza del sistema, sin embargo, la aprobación en el Congreso de la República de las reformas a la Ley de Bancos contribuiría a reducir los riesgos de las operaciones *offshore* que en el pasado han dado lugar a actos de corrupción, quiebras y manejos especulativos en operaciones financieras.

También los depósitos de ahorro y a plazo fijo en moneda nacional registraron, desde diciembre de 2008 a julio de 2009, un incremento de 44 mil millones de quetzales, lo que representa un 6.2%, aunque los depósitos monetarios cayeron un 1%.

La inflación de enero a noviembre de 2009 tuvo un registro de variación porcentual mensual acumulado de 0.05,¹⁹ una variación porcentual acumulada de -0.23²⁰ y una variación porcentual interanual de noviembre 2008 a noviembre 2009 de -0.61%.²¹ La desaceleración se asocia con la disminución de la demanda interna y la marcada caída de precios internacionales que se reflejan en los llamados *commodities*. Especialmente la caída de los precios del petróleo implicó, para finales de año, la desaceleración de la inflación.

Tabla 47
Inflación acumulada en porcentajes
Período enero de 2008 a noviembre de 2009

Mes/Año	2008	2009
Enero	0.99	-0.42
Febrero	1.69	-1.01
Marzo	2.88	-1.26
Abril	4.32	-1.19
Mayo	5.82	-1.05
Junio	7.54	-1.09
Julio	8.89	-0.77
Agosto	9.43	-0.71
Septiembre	9.26	-0.09
Octubre	9.81	-0.28
Noviembre	9.82	-0.23
Diciembre	9.40	

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

El precio de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) era, en enero de 2009, de Q 1,989.11. A finales de noviembre se registraba una baja de Q 71.77, equivalente al -3.6%, valorándose en Q 1,917.34. En el transcurso del año, como producto de la disminución de la inflación, la desaceleración económica, el descenso del empleo, de los ingresos y del consumo, la Canasta Básica Vital (CBV), en enero, tenía un costo de Q 3,629.75 y a finales de noviembre se valoraba en Q. 3,498.79, teniendo una disminución del Q 130.96 (-3.61%).

¹⁹ Variación con relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

²⁰ Variación con relación al IPC de diciembre del año anterior.

²¹ Variación con relación al mismo mes del año anterior.

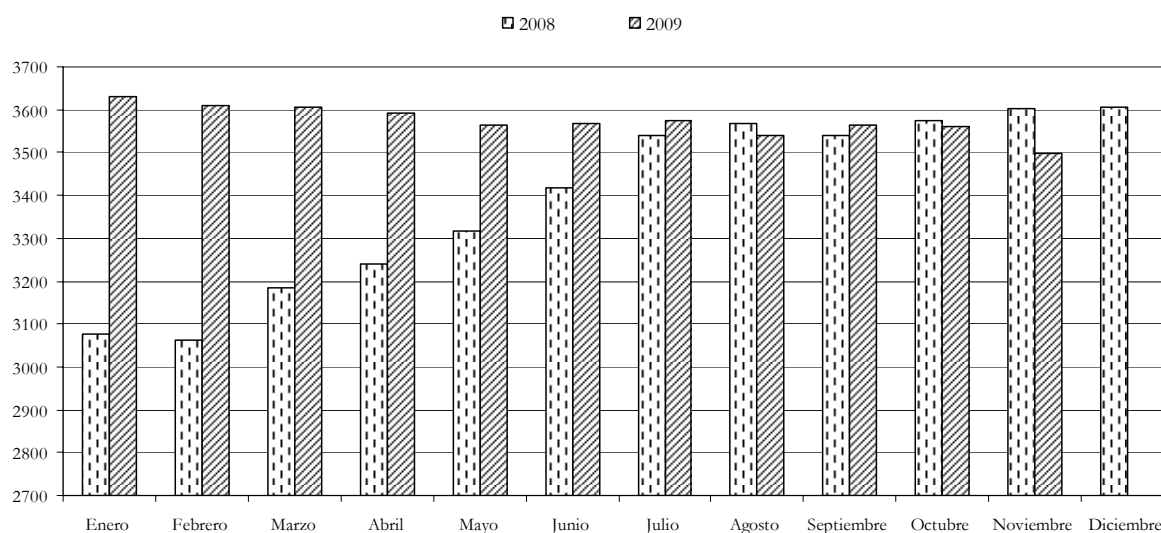
Tabla 48
Costo de la Canasta Básica de Alimentos
Período enero a noviembre 2009

Mes/año	2008	2009	Variación interanual
Enero	Q1,684.97	Q1,989.11	Q304.14
Febrero	Q1,677.10	Q1,978.10	Q300.86
Marzo	Q1,745.25	Q1,976.78	Q231.53
Abril	Q1,776.01	Q1,968.06	Q192.05
Mayo	Q1,817.03	Q1,952.53	Q135.50
Junio	Q1,872.84	Q1,955.24	Q82.40
Julio	Q1,939.05	Q1,958.04	Q18.99
Agosto	Q1,954.66	Q1,940.27	-Q14.39
Septiembre	Q1,939.21	Q1,952.26	Q13.05
Octubre	Q1,958.08	Q1,951.81	-Q6.27
Noviembre	Q1,974.71	Q1,917.34	-57.37
Diciembre	Q1,976.10		

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

La CBV se mantuvo en un costo alto, es decir, similar al registrado en el segundo semestre del año anterior.

Gráfica 29
Costo de la Canasta Básica Vital
2008-2009



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística INE.

El BANGUAT estima que la inflación cerrará en 2009 entre el 0.53% y el 1.33%, mientras tanto, las previsiones de 2010 se ubican entre 2.56 y 5.18%.²²

Mantener una política de incentivar tasas de interés líder, tasas activas bajas para crear un mejor entorno del ahorro y crédito, en momentos que la economía se ha desacelerado, puede favorecer la inversión, dinamizaría la economía e incentivaría la producción agrícola e industrial. Por otra parte, privilegiar el endeudamiento externo, con tasas de interés más favorables que las del mercado interno, abarata el endeudamiento y podría presionar a la baja las tasas de interés activas.

Sector Gobierno. El comportamiento de la economía afectó la recaudación fiscal. El indicador de ingresos tributarios de 2009 podría ubicarse en 10.3%, debajo del 11.3% respecto del PIB, previsto por las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). El déficit consolidado del sector público podría rebasar el 2%.

Un informe preliminar de la SAT establece que los primeros nueve meses del año se recaudaron Q 22,365.4 millones, 7.0% menos con respecto al mismo período de 2008 (Q 24,149.7 millones), al mes de julio, la baja era de 7.8%.

El impacto mayor fue en el rubro de impuestos indirecto. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudado por importaciones entre enero y agosto fue de Q 6 mil 175.5 millones, 19.97% menos con respecto al período del año anterior (-1 mil 540.8 millones). El IVA doméstico, por el contrario aumentó 3.88%; los derechos arancelarios bajaron con respecto a 2008 en 13.54% (Q 1 mil 367.5 que representan Q 214.2 millones menos); también en el mismo lapso bajó el Impuesto sobre Distribución de Bebidas y el Impuesto sobre Distribución de Cemento (-2.46 y -7.40%, respectivamente).

En cuanto a los impuestos directos, el Impuesto sobre la Renta (ISR), con ingresos de Q 5 ,060.9 millones, se redujo en -4.93%, pese a las medidas implementadas por la SAT de mejorar los controles de recaudación, fiscalización y combate a la evasión. El impuesto al tabaco se recuperó y recaudó Q 249.6 millones, 9.72% más que en el mismo período del año anterior.²³ Un aspecto relevante en las condiciones de 2009, ha sido la problemática planteada por la defraudación y el contrabando, pues el Estado deja de percibir por la primera Q 2,800 millones y por el otro, Q3,200 millones.²⁴

La deuda pública interna al 1 de octubre era de Q 27,737.5 y la deuda pública externa, de US\$ 4,747.10 millones. Según proyecciones del MINFIN, el saldo de la deuda pública externa para 2009 podría llegar a \$4,858.3 millones, un 10.9% mayor al que se alcanzó en 2008. A esta cifra se añade la emisión de 3,000 millones en Bonos del Tesoro, decisión que reposa en el Congreso de la República.

Según los últimos escenarios previstos por el MINFIN, podrían dejar de percibirse, al cierre de 2009, Q 6,454 millones por debajo de lo previsto en el presupuesto del año.²⁵

El Congreso de la República no aprobó el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2010, quedando vigente el de 2009, con posibilidad de transferencias. El proyecto tenía un monto total de 47,867.40 millones y estipulaba un ligero aumento para educación, salud y seguridad alimentaria. Era menor al 2009, que tenía un monto total de Q49,723.10 millones.

En el transcurso del año, la baja recaudación obligó a recortes presupuestarios por falta de financiamiento. Ante las difíciles condiciones en el impulso de la modernización fiscal, distintas instituciones de gobierno y municipalidades sufrieron mermas en sus ingresos. Los municipios con mayor índice de pobreza han sido los más afectados con los recortes presupuestarios. En definitiva, la reducción de la recaudación fiscal durante

²² Presentación del Vicepresidente del Banco de Guatemala, noviembre 2009 a la prensa nacional.

²³ Prensa Libre, 14 de septiembre de 2009.

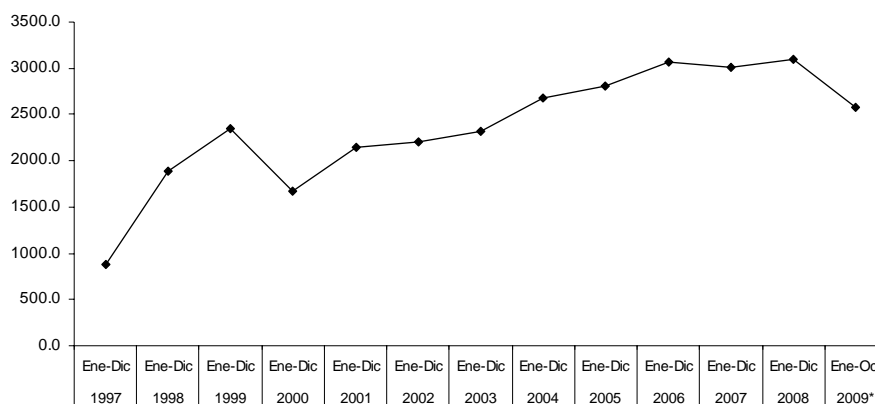
²⁴ Prensa Libre, 8 de noviembre de 2009.

²⁵ La Hora, 16 de diciembre de 2009, Pp. 3.

2009 implicó la disminución del gasto social (salud, educación, entre otros), lo cual significa condiciones adversas en la reducción de la pobreza y pobreza extrema.

Fondos sociales. La particularidad de realizar inversión social a través de fondos sociales ha permanecido constante. El período incluido en la gráfica parte de 1997, año posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, hasta octubre de 2009. Según se puede apreciar, desde esa fecha, la inversión se incrementó considerablemente; ya en 2000 presentó variaciones y una abrupta disminución. Seguidamente, de 2001 a la fecha, sólo el 2007 presenta un leve descenso y al 2009 presenta una curva descendente más pronunciada.

Gráfica 30
Fondos Sociales
Enero 1997 a octubre 2009



Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Finanzas Públicas.

Durante el transcurso del primer semestre de 2009 se crearon dos fondos sociales: el Fondo Social de Solidaridad y el Fondo Social Mi Familia Progres; otros desaparecieron, como el PRONADE y el FIS.

Es importante subrayar que en la información proporcionada por el MINFIN no se incorpora la inversión realizada por el Fondo de Tierras, que es poco significativa.

El Fondo de Inversión Social (FIS) fue liquidado en 2008 y trasladó sus proyectos a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). La liquidación de dicho fondo trajo consigo ciertas complicaciones. Según la Contraloría General de Cuentas (CGC), hay Q. 139.5 millones en demanda en contra de constructoras que dejaron abandonados proyectos de infraestructura, Q. 15.6 millones en anticipos a 44 contratistas que no terminaron la obra a su cargo y Q 20.1 millones pendientes de cobro por 19 fianzas de anticipo.²⁶

Por aparte, el Ministerio de Educación (MINEDUC) en 2009 absorbió a 14,698 maestros y otros recursos del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE),²⁷ dejándolo sin efecto, a pesar de las protestas presentadas, a inicios del año escolar, de algunos profesores que fundamentaban la falta de algunos contratos en el renglón 0-21 para optar a una plaza del renglón 0-11.²⁸

²⁶ Prensa Libre. Proyectos del FIS dejan perdidas millonarias. Guatemala, 13 julio de 2009.

²⁷ Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Políticas Educativas 2008-2012. Guatemala 2009.

²⁸ La Hora. Nacionales. Maestros de Pronade siguen en el limbo. Guatemala, 3 de enero de 2009.

Tabla 49
Ejecución de fondos sociales, 2009*

Fondo social	2008	2009*	Variación
	Ene-Dic	Ene-Oct	%
Fondo Nacional para la Paz	723.3	554.6	-23%
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural	1,286.90	968.70	-25%
Fondo de Inversión Social	46.5	0	-100%
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco	15.3	13.9	-9%
Fondo Nacional de Desarrollo	115.1	290.6	152%
Fondo Nacional para la Modernización y Reactivación de la Actividad Agropecuaria	35.6	15.7	-56%
Fondo de Tierras	172.6	0	-100%
Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo	567.5	0	-100%
Fondo Social Mi Familia Progresas**	0	642.4	0%
Fondo Social de Solidaridad	0	0	0%
Fondo Guatemalteco para la Vivienda	137.8	95.3	-31%
Total	3100.6	2581.2	-17%

Fuente: elaboración propia con datos de MINFIN.

* Datos al 31 de octubre.

** Incluye la ejecución realizada por la SCEP, entidad ejecutora hasta marzo de 2009; a partir de entonces, la entidad responsable de su ejecución es el Ministerio de Educación.

La inversión realizada por el total de los fondos sociales en 2009, en comparación con el año anterior, tuvo una reducción de 17%. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tuvo una disminución del 25%. Similar situación sucedió con la inversión social en el caso del Fondo Nacional para la Paz, con una baja del 23%.

El Fondo Guatemalteco para la Vivienda se contrajo un 31% y el Fondo Indígena en 9%. El Fondo Nacional para la Modernización y Reactivación de la Actividad Agropecuaria tuvo cifras aún menores, ubicadas en torno al 56%.

El único fondo que tiene un incremento es el Fondo Nacional de Desarrollo en 152%. El Fondo Mi Familia Progresas registra una inversión inicial de 642.4 millones.

El MINFIN no presentó datos sobre los gastos realizados por el Fondo de Tierras durante 2009. Tampoco presenta información precisa de ejecución; sólo reporta en su página Web que de 1998 a noviembre de 2009 había entregado Q 406 millones 726 mil 554 con 80 centavos en subsidios del Programa de Acceso a la Tierra.

Asimismo del Programa de Arrendamiento de Tierras había entregado de enero de 2004 a noviembre de 2009 un monto total de Q 424 millones 39 mil 500, incluyendo créditos aprobados y subsidios otorgados.

Sector externo. Las exportaciones del 1 de enero al 31 de octubre de 2009 totalizaron US\$ 6 mil 118.2 millones, mientras las exportaciones en el mismo período del año anterior, US\$ 6 mil 681.8 millones, teniendo una reducción del 8.43%. Los principales productos de exportación fueron el café, banano, azúcar, cardamomo y petróleo. La reducción se debió a la baja en las exportaciones a Centroamérica (US\$ 301.6 millones) y al resto del mundo (US\$ 331.5 millones).

Las importaciones representaron US\$ 9,459.5 millones, presentando una reducción de 24.9% en comparación con el mismo período de 2008, cuando las importaciones alcanzaron US\$ 12,603.4 millones. Esta situación generó un déficit en la balanza comercial de US\$ 3,341.3 millones.²⁹

Analizando los datos de octubre de 2009, los productos de exportación más afectados fueron el petróleo (-54.4%), café (-13.2%) y los clasificados en otros productos (-12.7%).

Los rubros más afectados en cuanto a las importaciones son los combustibles y derivados del petróleo (-31.1%), materias primas y productos intermedios (29.7%) y materiales de construcción (-27.1%).

El 1 de enero de 2009, el saldo de las Reservas Monetarias Internacionales totalizaba US\$ 4 mil 658 millones, 824 mil, 285.20 mientras que al 18 de noviembre de 2009 tenían un saldo de US\$ 5 mil 076 millones, 376 mil 001.42, reflejando un crecimiento de 8.96%.³⁰

El BANGUAT reportaba, al 1 de octubre de 2009, que el ingreso de capitales privados ascendió a US\$ 8,524 millones y un egreso de US\$ 8,396 millones, para un saldo positivo de US\$ 128 millones, cifra aunque mínima, favorable para la economía guatemalteca.³¹

Las remesas provenientes de migrantes guatemaltecos, del 1 de enero al 31 de octubre, totalizaron US\$ 3 mil 299 millones 833 mil, teniendo una caída de 9.93%. Las proyecciones de donaciones establecidas hasta el 31 de octubre totalizan US\$ 332 millones.³²

Estadísticas al 17 de octubre de 2009 reportaban un total de 44,910 deportados desde México y Estados Unidos: desde México 22,956 migrantes y desde Estados Unidos, vía aérea, a 21,954.³³ La cifra de deportados de Estados Unidos, al 17 de diciembre, ascendió a 26,478 indocumentados.³⁴

Los indicadores referidos tuvieron un efecto negativo para la economía guatemalteca y para más de un millón de familias guatemaltecas. La presentación, en diciembre, de una iniciativa de ley en Estados Unidos para realizar una reforma migratoria integral es un signo positivo que podría mejorar la economía nacional y la situación de los derechos humanos de este sector y de la población guatemalteca en general.

El precio internacional promedio del barril de petróleo se mantuvo con altibajos: en el período enero-noviembre con un precio inicial de US\$ 41.92 el barril, mientras que a mediados de noviembre el precio era de US\$ 77.61, lo que representa un aumento de US\$ 36.00 y relativo de 85.87% en los once meses, generando un incremento a la inflación.³⁵

A inicios del año el tipo de cambio oscilaba en Q 7.78159, a noviembre alcanzaba una devaluación de 6.89%. La mayor depreciación fue la suscitada en el primer trimestre, sufrió una menor entre los meses de abril y junio, repuntando con fuerza a partir de mediados de julio hasta el 20 de noviembre situándose a un precio de Q 8.31818.

Las expectativas de mejorar la posición del sector externo para 2010 pasan por la recuperación de la crisis del mercado estadounidense y mundial, pues sólo esto puede mejorar el nivel de exportaciones, importaciones, remesas familiares, tipo de cambio, balanza comercial y de pagos y otros indicadores del sector.

²⁹ Datos del BANGUAT.

³⁰ *Prensa Libre*, 12 de noviembre de 2009, y Banco de Guatemala.

³¹ BANGUAT.

³² *Idem*.

³³ Datos de la Dirección General de Migración (DGM) citadas en *Prensa Libre*, Guatemala, 18 de octubre de 2009.

³⁴ *Prensa Libre*, Guatemala, 18 de diciembre de 2009.

³⁵ Datos del Ministerio de Energía y Minas.

2.4 Ejecución presupuestaria, gasto social y derechos humanos

Los indicadores del gasto social se relacionan con mayor certeza y claridad con los derechos humanos. De la misma forma como la situación se vuelve más compleja y las carencias en la satisfacción de los derechos se hacen más notorias, las posibilidades de hacer efectivos esos derechos y su vinculación con el bienestar también se hacen más visibles y evidentes. Hay más riqueza en la actualidad, más acceso a la información y medios más rápidos y eficaces de obtener información. Por lo anterior, el problema de los ingresos del Estado o las políticas fiscales, el análisis y examen del presupuesto nacional y su ejecución son cada vez más un asunto de interés directo en la opinión pública y merecen la mayor atención, seguimiento e involucramiento por parte de la ciudadanía. Es importante considerar que un informe de situación de los derechos humanos no debe obviar el examen del gasto social en el marco de las obligaciones estatales.

2.4.1 La complejidad de la recaudación tributaria

Guatemala, en 2009, enfrentó un panorama económico, social y político inestable, con acontecimientos que agravaron aún más la situación socioeconómica de sus habitantes. La crisis alimentaria y nutricional que afectó durante el año al Corredor Seco y otros departamentos del país, influyó para declarar, en septiembre, Estado de Calamidad Pública según Decreto Gubernativo No. 10-2009. La situación empeoró a raíz del invariable aumento e índice de violencia y las violaciones del derecho a la vida.

Una de las críticas a los países en vías de desarrollo por parte de reconocidos especialistas en materia de crecimiento y desarrollo social, es la existencia de un sistema impositivo tributario regresivo, la redistribución inequitativa y la poca inversión en educación y salud, características latentes de nuestro país.

El sector público, a finales de junio, se caracterizó por el recorte en el gasto público y la insuficiencia de recursos provocada por una abrupta caída de la recaudación tributaria.³⁶ A su vez, se retiraba la propuesta de ley de modernización fiscal presentada en septiembre de 2008,³⁷ dejándose de percibir, según estimaciones de la SAT, Q22,134.8 millones, a causa de las exenciones y exoneraciones fiscales otorgadas a varios sectores productivos. Se calcula que para 2010 la cifra ascienda a Q23,491.3 millones, equivalente al 49.1% del gasto que se propone para el siguiente ejercicio.³⁸ En términos del ISR, se aseguraba que en 2009 se podría dejar de percibir unos Q16,921.3 millones, cifra que se incrementaría a Q18,035.9 millones en el próximo período fiscal.³⁹

Hacia finales de año, el Congreso de la República no aprobó la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2010, generándose un agujero fiscal de Q 7 mil millones, en relación a los Q 42 mil millones del gasto público previstos para ese año.⁴⁰

El poder Ejecutivo, con la iniciativa de modernización fiscal sólo había contemplado reformas administrativas. Eliminó la revisión de las tasas del impuesto de circulación de vehículos y el Impuesto de Primera Matrícula (IPRIMA), además de no incluir exenciones o privilegios. No tomó en cuenta que dejaría

“de percibir [para el] próximo año unos Q1 mil 200 millones que estaban contemplados en su propuesta original, equivalente al 86% de los fondos que se proyectaba recaudar”.⁴¹

El MINFIN y la SAT estimaban que se dejaría de recaudar entre Q 150 y Q200 millones en un año completo.⁴² Ante el problema del agujero financiero, la no aprobación del anteproyecto de presupuesto y la posible baja recaudación que pueda presentarse en 2010, el 23 de noviembre de 2009 se presentó una nueva

³⁶ Observatorio del Gasto Social. *Finanzas Públicas en Crisis. Monitoreo del presupuesto 2009* (1er semestre). pág. 11.

³⁷ “UNE se da por vencida y retira reforma fiscal”, *Prensa Libre*, Guatemala, 27 de agosto de 2009.

³⁸ “Finanzas. Exenciones equivaldrían a 49.1% del gasto en 2010. Guatemala”, *Siglo XXI*, Guatemala, 16 de septiembre de 2009.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ “Anticipan problemas financieros por vigencia de presupuesto abultado”, *La Hora*, Guatemala, 1 de diciembre de 2009.

⁴¹ “En la mira. Gobierno prevé no recibir 86% de su reforma fiscal”, *Siglo XXI*, Guatemala, 27 de agosto de 2009.

⁴² *Ibid.*

propuesta de reforma fiscal, conocida en el Pleno del Congreso como iniciativa para aprobar disposiciones de apoyo financiero a gobiernos municipales, educación, salud, desarrollo rural y seguridad ciudadana.⁴³

La iniciativa contempló la modificación legal correspondiente a tres impuestos: Impuesto de Solidaridad (ISO), el ISR, el Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo y la creación del Impuesto a la Telefonía Móvil.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo contiene el aumento del 1 al 2% del ISO, del 5 al 6% del ISR, de la tarifa de los Timbres Fiscales del 3 al 6%, y que la tarifa especial del impuesto al Papel Sellado Especial para protocolo sea de Q 10.00. Asimismo, gravar por cada minuto que dure el tráfico telefónico Q 0.15, operado por los sujetos pasivos. Su aprobación en el Congreso de la República, hasta el final del año, no se había concretado.

Los recursos recaudados se destinarían a la educación y a la seguridad ciudadana, fortalecimiento los programas de salud, tanto en cobertura de servicio, como en atención primaria, recuperación y rehabilitación de la salud. Asimismo, para dar respuestas a la problemática agraria y el desarrollo rural, se estipulaban programas de inversión productiva, asistencia alimentaria y apoyo a la economía campesina y el fortalecimiento a los gobiernos municipales.

La iniciativa enfrentó negativas y oposición por parte del sector empresarial y algunas bancadas del Congreso; en el lado opuesto, hubo manifestaciones en apoyo a la iniciativa por parte de organizaciones campesinas y magisteriales, y en el hemiciclo, por parte de los alcaldes municipales.

2.4.2 El gasto social de ministerios y secretarías

A noviembre de 2009, el Presupuesto General de la Nación registraba una ejecución promedio de 81%. Los ministerios que presentaron menor ejecución fueron Cultura y Deportes; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Economía; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Ambiente y Recursos Naturales, y Gobernación, así como las Secretarías y la Presidencia; entre los de mayor cumplimiento presupuestario, estaban los de Educación, Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional, Salud Pública y Asistencia Social, Relaciones Exteriores, Energía y Minas y Finanzas Públicas, además de la Deuda Pública, Obligaciones del Estado y la Procuraduría General de la Nación.

A pesar del nivel de ejecución ministerial del promedio general, lo realizado en términos presupuestarios ha sido insuficiente y poco eficiente. En algunos ministerios y otras dependencias se presentó una brecha de 10%. Ello se agrava si se desagregan algunos ministerios que tienen una brecha de más del 25%, sin alcanzar la óptima ejecución.

Los ministerios que fueron afectados por modificación y transferencia durante casi todo el año fueron los de Gobernación; Salud Pública y Asistencia Social; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Cultura y Deportes, y Ambiente y Recursos Naturales y, a finales de noviembre, el de Defensa Nacional y el de Economía. Los beneficiados por las modificaciones presupuestarias fueron los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Educación, Trabajo, Relaciones Exteriores y Finanzas Públicas. La entidad a la que se trasladaron en mayor medida los recursos del presupuesto fueron las Secretarías, Obligaciones del Estado y Presidencia.

Desde el análisis de los derechos humanos, los derechos más vulnerados por la falta de eficacia y eficiencia estatal para la ejecución presupuestaria son el derecho a la salud y asistencia social, a la seguridad, a la alimentación, a la cultura y a un ambiente sano. Siempre tomando en cuenta que otros derechos, como al trabajo digno, a la vivienda adecuada y a la educación y el derecho a la vida, presentan un desarrollo poco progresivo e inadecuado.

⁴³ Iniciativa de Ley presentado por el Organismo Ejecutivo, No. 4145. Guatemala, 23 de noviembre de 2009.

Derecho a la alimentación. En marzo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) fue uno de los ministerios con mayores cambios en su dirigencia de máximo nivel, por supuestas deficiencias y debilidades durante su gestión. Durante los primeros seis meses, con 1.7%, era uno de los ministerios con mayor presupuesto del total asignado en 2009.

Al finalizar marzo, los programas que presentaron ineficiencia en su ejecución fueron los de sostenibilidad de los recursos ambientales, desarrollo agrícola y asistencia alimentaria.

En los programas del MAGA no se hizo visible la importancia de la sostenibilidad ambiental como derecho humano y, en particular, los contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,⁴⁴ principalmente los dirigidos a la Sostenibilidad de los Recursos Naturales, de manera específica en la actividad sobre los Fideicomisos, Bosques y Agua para la Concordia que a mediados de año presentaron bajos niveles de ejecución.

Como producto de los recortes internos del Programa de Desarrollo Agrícola y Asistencia Alimentaria, la crisis alimentaria tiene sus inicios en los recortes presupuestarios dirigidos a las Actividades Centrales y Agricultura Competitiva Ampliada. Se puede afirmar que la crisis que la acompañó en 2009 pudo ser prevenida por acciones coordinadas por el CONASAN y la ejecución de algunos programas vinculados a mitigarla.

El MAGA, en el programa Desarrollo Agrícola y Asistencia Alimentaria, dirigido a realizar actividades de cumplimiento del derecho a la alimentación, presentó una ejecución mínima durante el transcurso del año. El subprograma enfocado en la Seguridad Alimentaria presenta una ejecución similar a la de actividades como Asistencia Alimentaria para la Población Campesina.

En la crisis provocada por la desnutrición, manifiesta con mayor intensidad en los meses septiembre, octubre y noviembre, la actividad de Apoyo a la Producción de Alimentos tuvo una ejecución de 99%, cuya principal motivación pudo ser la gravedad presentada en el Corredor Seco y el resto del país.

A finales de noviembre, el MAGA presentaba una ejecución de 71.9%, nivel que debió alcanzar a finales de septiembre. En este caso el programa con menor ejecución nuevamente es el dirigido al Desarrollo Agrícola y Asistencia Alimentaria, con una ejecución de 57.6%.

Derecho a la Salud y Asistencia Social. Los programas más afectados en el MSPAS, al finalizar marzo, por las modificaciones presupuestarias fueron Apoyo a la Promoción, Prevención y Atención a la Salud Reproductiva y Emergencia de Hospitalización y subprogramas como la Construcción, Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Hospitales.

Al término del primer semestre, el MSPAS presentaba un recorte de Q 375 millones. Hay que tomar en cuenta que éstos fueron meses críticos en el tema de salud, por la pandemia de la fiebre A H1N1 y los primeros casos de dengue hemorrágico en el interior del país (a finales de noviembre, se contabilizaban 18 víctimas mortales y 1,092 casos confirmados en el país⁴⁵).

En noviembre, el MSPAS reportó una ejecución del 85.2%; sin embargo, ésta sería menor si se reportaran los recortes presupuestarios. A finales de noviembre presentó un recorte de Q 417 millones 782 mil, reduciendo su presupuesto de inicios de año casi en 1%.

El recorte presupuestario afectó seriamente a programas relacionados con Atención Primaria en Salud, Recuperación y Rehabilitación de la Salud e incluye proyectos de infraestructura física relacionados con el Equipamiento de Hospitales, Centros y Puestos de Salud.

⁴⁴ Artículo 11, inciso a).

⁴⁵ “Se registran 1,092 casos de gripe A”, *Prensa Libre*, Guatemala, 4 de diciembre de 2009.

Seguridad y defensa nacional. En 2009, frente a los altos índices de violencia, el tema de la inseguridad ha sido uno de los que más preocupa a la ciudadanía en general. El Ministerio de Gobernación (MINGOB), institución encargada de la seguridad ciudadana, a finales de marzo presentaba una ejecución relativamente baja, primordialmente en los programas de Servicio de Inteligencia Civil y Servicio de Seguridad Ciudadana, así como Servicios de Investigación Criminal, Servicios de Prevención del Delito y las actividades enfocadas a los Servicios de Análisis e Investigación Antinarcoótica.

A mediados de año hubo fuertes críticas por la escasez de combustibles para las patrullas, incidiendo en que, a finales de septiembre, el MINGOB presentara una baja ejecución y modificación de Q 366 millones 500 mil.

Para finales de noviembre, el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) de las entidades centralizadas reportaba los siguientes porcentajes de ejecución:

- Actividades Centrales, 63.9%
- Servicios de Inteligencia Civil, 64.6%.
- Control Migratorio, 71.8%.
- Custodia Privados de Libertad, 77.1%.
- Servicio de Seguridad Ciudadana, 77.3%.
- Servicio de Gobierno Departamental, 78.7%.
- Acciones de Prevención Comunitaria, 80.2%.
- Registro de Personas Jurídicas, 86.1%.
- Divulgación Oficial, 87.5%.
- Partidas No Asignables a Programa, 99.6%.

A finales de noviembre se observó un leve aumento de ejecución de los programas dirigidos al Servicio de Seguridad Ciudadana (77.3%) y Servicio de Gobierno Departamental (78.7%). En el primero de los casos se debió al recorte presupuestario sobre el 76% programado, equivalente a Q 424 millones 938 mil 537.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) a finales de septiembre, reportó una cómoda ejecución y un incremento presupuestario de 0.1% (Q 32 millones 502 mil 753). Durante los primeros tres trimestres el Gobierno realizó modificaciones presupuestarias en detrimento de ministerios con programas sociales, como el acceso a la salud, alimentación y seguridad ciudadana. Dentro del presupuesto inicial representaban 7.5%, 1.7%, 6.6% y se redujo a 6.4%, 1.4% y 5.9%, respectivamente. Se priorizó al ministerio rector de las políticas de cumplimiento del régimen jurídico relativo a la Defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio, aumentando su presupuesto de 2.6% a 2.7%. Sin embargo fue hasta noviembre, cuando el MDN presentó un recorte de Q 92 millones 255 mil 983 y una ejecución de 86.8%.

Derecho a un ambiente sano. La ciudadanía tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y contar con servicios públicos básicos, siendo obligación del Estado guatemalteco promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

A finales de marzo, el MARN presentaba retrasos en su ejecución, principalmente en los programas de Gestión Ambiental y las actividades relacionadas con Desechos Sólidos y Peligrosos, Proyectos Ambientales, Desconcentración y Descentralización Ambiental (PREMACA, Programa al Medio Ambiente en Centro América, de la agencia de cooperación Danida), asimismo los programas de Educación y Promoción Ambiental, y las orientadas al Género y Pueblos Indígenas.

Similar situación aconteció a finales de marzo en el rubro de Gestión para la Conservación de los Recursos Naturales y sus actividades encargadas de la Supervisión de Convenios, Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) y el programa de Desarrollo Ambiental de Petén.

A finales de septiembre los sectores con menor ejecución eran los relacionados con la Educación y Promoción Ambiental y, en cierta medida, el de Partidas No Asignables a Programas. La partida dedicada a la Educación y

Promoción Ambiental, que contempla actividades como la participación ciudadana, género y pueblos indígenas, presenta la misma situación que a inicios de año. Además, se presentó baja ejecución en las actividades del programa de Gestión Ambiental, dirigidos a Proyectos Ambientales y Desconcentración y Descentralización Ambiental (PREMACA), y algunos avances en la ejecución de la actividad dirigida a los Desechos Sólidos y Peligrosos.

A finales de noviembre, el MARN había ejecutado un 75.9% y una modificación presupuestaria de Q 13 millones 616 mil 313 con 95 centavos. Los programas con menor gasto fueron los de Educación y Promoción Ambiental (71.2%), Desarrollo Ambiental del Peten (61.0%) y Gestión para la Conservación de los Recursos Naturales (70.2%).

Las actividades relacionadas con el género y pueblos indígenas sufrieron transferencias presupuestarias hasta dejarlo sin recursos, inhibiendo acciones encaminadas a la capacitación de la población sobre su derecho al ambiente sano.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó, a finales de noviembre, una ejecución de 80.3% y una modificación a su favor de Q 3 millones 100 mil. Por programa presentó los siguientes niveles presupuestarios:

- Partidas No Asignables a Programas, 0.0%.
- Exploración y Explotación Petrolera, 69.2%.
- Actividades Centrales, 80.60%.
- Actividad Común a los Programas, 11 y 12, 82.9%.
- Exploración y Explotación Minera, 88.4%
- Fiscalización de las Fuentes Energéticas, 88.7%

Las prioridades del Ejecutivo se centraron en los recursos no renovables, lo cual se expresa en el traspaso de mayores recursos (Q 3 millones 453 mil 785) a programas relacionados con Exploración y Explotación Petrolera, y la eficiente ejecución del programa sobre Exploración y Explotación Minera. En contraste, con la menor importancia resalta el apoderamiento y manejo de información de la población indígena.

Derecho a la cultura. La crisis económica y los índices de violencia en 2009 deben dar paso a repensar el papel de la cultura y su valor e incidencia en el desarrollo del país como opción para construir soluciones y una sociedad democrática e incluyente. Se debe asumir que la cultura y el deporte son categorías que buscan la construcción de la paz.

El derecho a la cultura establece la participación en la vida cultural y artística de la comunidad, el acceso al progreso científico y protección de los derechos de particulares, así como su difusión y su promoción en todos los ámbitos de la vida. Es el Estado, a través del Ministerio de Cultural y Deportes (MICUDE), el obligado a reconocer y proporcionar a sus habitantes el goce de sus derechos culturales sin discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El MICUDE, durante el año, presentó una ejecución ineficiente, principalmente en los programas dirigidos al Deporte no Federado y la Recreación, así como a la Gestión del Desarrollo Cultural y Formación, Fomento y Difusión de las Artes. Además tiene constantes modificaciones presupuestarias.

El MICUDE es una de las nueve entidades de las entidades centralizadas que tienen un porcentaje menor (a noviembre de 2009 con 0.7%) sobre el presupuesto total. Los programas más afectados por los recortes fueron el de Formación, Fomento y Difusión de las Artes; Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural; Fomento al Deporte no Federado y la Recreación, programa que tiene asignado

aproximadamente el 60% del presupuesto total del ministerio, sobre todo en los rubros de infraestructura física.⁴⁶

A pesar de presentar recortes de Q 81 millones 800 mil, a noviembre de 2009, la ejecución del MICUDE fue de 64.9% era la más baja de todas las entidades centralizadas. Los programas con baja ejecución fueron el de Gestión del Desarrollo Cultural, con el 35.8% y Fomento al Deporte no Federado y la Recreación de 61.2%; mientras Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural, y Formación, Fomento y Difusión del Arte presentaron una ejecución de 73.6% y 76.2% respectivamente.

Derecho a la vivienda. En el primer semestre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) tuvo una ineficiente ejecución; situación similar al programa de Subsidio para la Vivienda Popular que, para noviembre, presentaba un 68.9%, casi igual al programa dirigido al Subsidio para la Vivienda Popular (64.3%).

Con la disminución de la participación del sector privado en la construcción de viviendas, las acciones contempladas por el Estado para reducir el déficit habitacional han sido deficientes, principalmente en las regiones con mayor déficit, como la región metropolitana y suroccidente y noroccidente.

El Ejecutivo anunció la puesta en marcha de proyectos público-privados de vivienda. En la primera fase se planteó la construcción de edificios con cinco mil apartamentos en Bárcenas, Villa Nueva y otra de diez mil viviendas populares en San José del Golfo,⁴⁷ además de las tres mil viviendas iniciadas por el Programa Nacional Resarcimiento (PNR) con la ejecución a cargo del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ).

Otras acciones fueron contempladas en el Plan Nacional de Emergencia y Recuperación Económica con la creación del Fondo para el Financiamiento de la Vivienda (FOVI), además de la creación de un Fondo de Garantías (FOGA) para proveer líneas de crédito en el financiamiento de vivienda a contratos de crédito pactados con tasa fija, plazos adecuados y en moneda nacional. Sin embargo, más del 50% del sector dedicado a este tipo de construcción consideró la iniciativa poco factible.⁴⁸

Derechos del consumidor. El Ministerio de Economía (MINECO) en el inicio de la gestión tuvo una ejecución considerable, sin embargo, la ejecución del programa de Inversión y Competencia y del proyecto proveniente de donación, Formación de Capacidades para la Población Indígena y ONG Locales en el Altiplano Occidental (Donación BIRF-TF055809) fue deficiente; al igual que el programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en proyectos como Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del sector agronegocios para Amatitlán a Mercados bajo el DR-CAFTA y el Programa Nacional de la Microempresa (Fondos en Fideicomiso).

El tema de la asistencia técnica a las PYME del sector agronegocios para acceder al DR-CAFTA es, sin duda, uno de los programas que refleja la importancia de los pequeños y medianos empresarios de los agronegocios dentro del tratado comercial y en el presupuesto del MINECO. Según algunos analistas, luego de tres años de vigencia del tratado, los resultados muestran que la apertura comercial no es necesariamente la ruta para salir de la actual crisis. Las razones están en las condiciones desfavorables de la balanza comercial entre Guatemala y los Estados Unidos, el exceso de ganancias de los monopolios importadores con efectos directos en los consumidores y otros fenómenos como la crisis económica-financiera y la crisis alimentaria.

Desde inicio de año hasta noviembre de 2009, el MINECO presentó una ejecución de 71.4%, con una modificación que desfavorece a su presupuesto de Q 28 millones 24 mil 815. Los programas de Inversión y Competencia y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fueron los más desfavorecidos con dicha modificación.

⁴⁶ “Ministerio de Cultura en búsqueda de un mejor presupuesto”, Sección Vida, *Siglo XXI*, Guatemala, 7 de julio de 2009.

⁴⁷ “Gobierno anuncia proyectos público-privados de vivienda”, *elPeriódico*, Guatemala, 28 de agosto de 2009.

⁴⁸ Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). VII Encuesta al sector construcción. Al mes de enero de 2009. Guatemala, marzo de 2009.

Los programas con menor ejecución fueron Inversión y Competencia y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Por aparte, el Programa de Asistencia al Consumidor tuvo una ejecución del 84.8% y un recorte interno de Q 339 mil 450, lo que redujo su presupuesto inicial en 4%.

Derecho al trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) fue de los pocos ministerios con una ejecución presupuestaria eficiente. Sin embargo, tiene algunos rezagos en el programa sobre Vigilancia y Aplicación de las Normas de Trabajo, específicamente en los rubros sobre Resolución Alterna de Conflictos Laborales y la Procuraduría de Defensa al Trabajador.

Asimismo, a finales de marzo presentaron una ejecución mínima las actividades dirigidas a la Asistencia de los Pueblos Indígenas, Promoción de la Participación de la Mujer y la Asistencia al Menor Trabajador.

A finales de noviembre, el MTPS registraba una ejecución de 87.9%, además de una transferencia a favor de Q 147 millones; mas el programa de previsión social a los trabajadores presentó una ejecución de 39.4%, y las actividades dirigidas a la juventud y niñez oscilaban con un gasto aún menor, y ligera mejoría en actividades relacionadas con mujeres.

El presupuesto no refleja como prioridad dentro la estructura presupuestal, un enfoque de género o etnia como principio transversal de los derechos humanos en relación con los derechos laborales, principalmente cuando se observa dentro del presupuesto del MTPS la importancia en su ejecución, así como el porcentaje (1%) que representa el rubro de Previsión Social de los Trabajadores dirigido a los grupos vulnerables.

Derecho a la educación. A pesar de presentar un retraso en su implementación, a inicios del año escolar se puso en marcha el Acuerdo Ministerial No. 1492-2008. El Ministerio de Educación (MINEDUC) tenía asignada al término del mes de marzo la cantidad de Q 7 mil 588 millones 227 mil 232.

El programa de Administración Central siguió su marcha con algunos cambios. Los Q 523 millones presupuestados fueron aumentados en Q 11 millones (2.2%). Tuvieron modificaciones los programas de Docencia en Educación Especial, Prevención del Sida y la Drogadicción, Docencia de Educación Física, además de modificaciones negativas en los programas de Servicios de Apoyo a la Educación y Apoyo a la docencia bilingüe.

Al mes de junio, el MINEDUC contaba con un aumento presupuestario y una ejecución de 32.9%; tuvieron un aumento considerable los programas de Educación Preprimaria y Educación Básica. Por aparte el programa Mi Familia Progres, después de no registrar cifra alguna, tuvo un aumento de Q 582 millones 652 mil 175 con 83 centavos.

A noviembre presentó una ejecución de 91.3%, y un aumento presupuestario de Q 255 millones 865 mil 259 con 62 centavos. El programa Fondo Social Mi Familia Progres recibió un aumento de Q 753 millones 973 mil 885 con 62 centavos, después de no contar con presupuesto alguno, el cual representa el 10% sobre el presupuesto del MINEDUC. Mi Familia Progres es uno de los programas con mayor ejecución (79.3%).

Derechos del migrante. La ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) a inicios de la gestión de 2009, fue aceptable; sin embargo, los rubros dirigidos a la actividad de Servicios Migratorios fueron deficientes.

A finales de noviembre presentaba el 82.8% de gastos sobre el presupuesto. El programa de Servicios Consulares, que acoge la actividad de Atención Migratoria, tenía un 79.3% y la actividad específica un 41.3%. El Ministerio, de su estructura presupuestaria y en sus programas, no destina gran porcentaje a la inversión social.

Gasto de Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. Las Secretarías y otras dependencias, como la Presidencia, presentaron menor ejecución de presupuesto hasta el mes de noviembre, según reportes del SICOIN, seguido de las Obligaciones del Estado, la Procuraduría General de la Nación y los Servicios de la Deuda.

La ejecución del primer semestre de las Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo fue aceptable. Sin embargo, los programas dirigidos a la preservación del entorno natural, como la Restauración, Protección, Conservación y Manejo de Áreas Protegidas, Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Amatitlán y principalmente el relacionado con el Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán, reflejaron, de enero a noviembre, una ejecución ineficiente, cuyo promedio se situó en el 53.7%.

A finales de noviembre, presentaron un bajo cumplimiento presupuestario las partidas asignadas al Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los programas dirigidos a la Promoción del Desarrollo Integral de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena.

Los programas dirigidos a la seguridad alimentaria y nutricional presentaron un 68.7% de gasto en sus partidas asignadas. El programa del Fondo Nacional de Desarrollo tuvo una mejora: a septiembre reportaba una ejecución del 15.0% y a noviembre, del 80.7%. El programa que engloba los proyectos generados por Cohesión Social, y contenidos en Actividades Centrales de Bienestar Social, presentó, a noviembre, el 76.1% de gastos en el presupuesto. Mientras que el programa Mi Familia Progres, a la misma fecha, registraba 99.9% de sus recursos definidos.

Con respecto a las Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, ascendió a 70.2% de inversión y gastos, con un incremento en el presupuesto de Q 377 millones 22 mil 435 y 34 centavos. Las modificaciones fueron dirigidas al programa del Fondo Nacional de Desarrollo, que registró un incremento de Q 372 millones 578 mil 614 con 91 centavos. Los diez programas con menor ejecución, según el SICOIN, fueron hasta noviembre:

- Acciones de Inteligencia Estratégica del Estado, con 0.0%.
- Resolución de Conflictos, con 15.6%.
- Apoyo a Comunidades, 34.2%.
- Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, 45.1%.
- Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán, con 48.5%.
- Fondo Nacional para la Paz, 61.8%.
- Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, 64.6%.
- Restauración, Protección, conservación de Áreas Protegidas, con 67.5%.
- Defensoría de la Mujer Indígena, 68.7%.
- Actividades Centrales de Bienestar Social, 76.1%.

Y entre los diez programas con mayor ejecución figuraron:

- Fondo Nacional de Desarrollo, con 80.7%.
- Educación para Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción, 83.2%.
- Administración de Recursos Humanos Administración Pública, 84.8%.
- Información y Divulgación Gubernamental con 86.3%.
- Organización y Formación de la Juventud, 86.7%.
- Política Agraria, 87.1%.
- Organización Comunitaria, 87.3%.
- Fortalecimiento y Apoyo Familiar y Comunitario, 93.5%.
- Asentamientos Humanos y Vivienda, con 98.2%.
- Mi Familia Progres, 99.9%.

Procuraduría General de la Nación. La ejecución de la Procuraduría General de la Nación (PGN), a finales de marzo, sobrepasó el promedio de las entidades centralizadas. Sin embargo, la actividad dirigida a la Modernización y Fortalecimiento Institucional con un presupuesto inicial de Q 691 mil 558, no presenta ningún avance en su ejecución.

La ejecución de la PGN, durante el tercer trimestre, fue de 63.9%, alrededor de la media general de ejecución y, al igual que en el primer semestre, la actividad dirigida a la Modernización y Fortalecimiento Institucional con un presupuesto de Q 691 mil 558, no presentó ningún avance en su ejecución. A finales de noviembre la misma alcanzó 79.2%, sin mostrar ningún avance en el tema de Modernización y Fortalecimiento Institucional, cuyo programa quedó con una realización nula.

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, de enero a marzo, tenían un cumplimiento del 37.1%. El subprograma dirigido a la protección del Medio Ambiente, que inició el año con un presupuesto de Q 121 millones 120 mil 951, no presentó ninguna variación.

En el mismo período, otro subprograma relacionado con la sanidad ambiental y de bajo cumplimiento presupuestario, fue el de Agua y Saneamiento. Tuvo un monto inicial de Q 178 millones 10 mil 666, y una variación insignificante. Asimismo el subprograma relacionado con el tema Agrícola no presentó ninguna relevancia en sus partidas asignadas.

Los subprogramas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, con un monto de Q 1 mil 557 millones 959 mil 333, y el subprograma Aporte Extraordinario Consejos de Desarrollo, con un monto de Q 320 millones, tuvieron 21.87% y 18.37% de gastos efectuados. Mientras que el subprograma sobre Registro de Información Catastral (RIC) tuvo un bajo desempeño (19.65%).

Luego, a finales de noviembre, la ejecución de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registraban un 79.9% en sus gastos y un aumento presupuestario de Q 86 millones 474 mil 635 con 91 centavos.

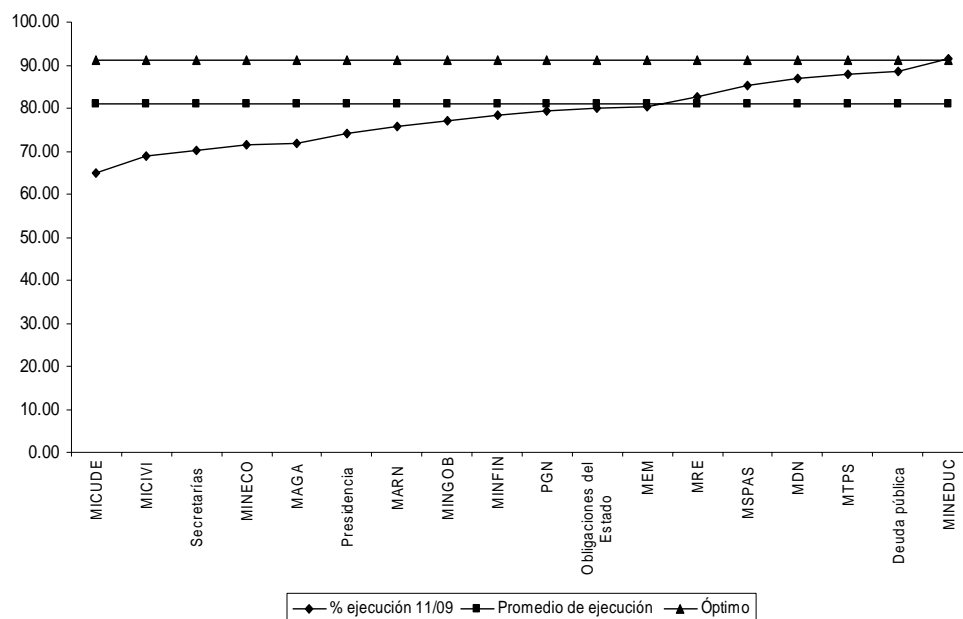
Dentro de los programas que presentaron menor desempeño presupuestario a noviembre y que tienen relaciones con la inversión social, figuran los relativos al tema Agrícola, Medio Ambiente, Agua y Saneamiento, que no mostraron durante el transcurso del año mejoras en su ejecución, al igual que los subprogramas dirigidos a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el de Aporte Extraordinario a Consejos de Desarrollo.

Los subprogramas con un ejercicio considerable a noviembre fueron los de Seguridad Interna, Educación, Trabajo y Previsión Social, Transporte y Cultura y Deportes.

El comportamiento de algunos subprogramas, como el Judicial (83.5%), Salud y Asistencia Social (86.9%), Desarrollo Urbano y Rural (87.3%), Relaciones Exteriores (87.9%), Administración Fiscal (92.9) y el Legislativo (98.7), tuvieron un desempeño eficiente. Las actividades relacionadas al tema de los derechos humanos (Actividades Legislativas y el Programa para Mejorar la Eficiencia de dicha institución –Don. BID 9107) alcanzaron una ejecución promedio de 84.5%.

Deuda pública. La ejecución de la Deuda Pública a finales de septiembre presentaba el 71.6%, a finales de noviembre tenía un aumento en su ejecución que la situaba en un 88.6%.

Gráfica 31
Ejecución presupuestaria
Por porcentaje de ejecución según ministerios
Ejecución por ministerio, promedio general y ejecución esperada
Enero a noviembre 2009



Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN.

2.5 Derechos laborales: el derecho al trabajo

El derecho al trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica y constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador e irrenunciables para éste. Dichas garantías mínimas se desarrollan a través de la legislación ordinaria, la contratación individual y colectiva, y los pactos de trabajo.

En la Constitución Política de la República, el artículo 101 establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, debiéndose organizar el régimen laboral del país conforme a principios de justicia social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo, a su libre elección, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias así como la protección contra el desempleo. Este derecho se establece también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y otros instrumentos de la OIT, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala.

Durante los últimos años se ha incrementado la Población Económicamente Activa (PEA), principalmente en el sector informal que presenta mayor participación de las mujeres, la niñez, la juventud y las personas de la tercera edad. Para 2006 la PEA se integraba con más de 5 millones de personas, compuesta por hombres en un 65% y las mujeres con el 35%.⁴⁹ Del total, el 75.4% pertenecía al sector informal, que incluyen los

⁴⁹ Estimaciones del Ministerio de Trabajo (MINTRAB) según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) del INE.

empleados domésticos, los jornaleros o peones, los trabajadores no remunerados, los empleados que laboran en establecimientos privados con menos de seis trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. El 93.2%, menores de 18 años, trabajaba en el sector informal, así como el 88.7% de los mayores de 60 años.

Para 2009 la situación del trabajo estuvo sacudida por una serie de factores críticos en la economía nacional e internacional que provocaron desempleo y el incremento de la vulnerabilidad de los derechos humanos. No se implementó una política eficaz para generar mayores fuentes de empleo. El daño causado por la crisis económica que atravesó el país en el año implicó violaciones de otros derechos humanos, así como el mantenimiento y aumento de la pobreza.

En ese sentido, la reducción del empleo significó menos ingresos para las familias, que restringe su consumo, disminuyendo la demanda interna, con implicaciones en el derecho a la alimentación, el derecho a vivienda, salud, educación, entre otros.

Ésta es una de las mayores amenazas que se cierne sobre la economía nacional a partir de la crisis económica que golpea el ámbito mundial. No existe un número de empresas o fuentes de empleo que satisfaga la gran demanda laboral, situación que obliga a miles de personas a emigrar a la capital o a países del norte como los Estados Unidos.

La situación se agravó aún más en 2009, pese a las acciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, se estimó el aumento del desempleo del 5.3% en 2008 al 5.9% durante 2009.⁵⁰

El escenario del desempleo es más alarmante al comparar la demanda laboral existente en el mercado de trabajo con la oferta del sector privado. En el cuarto festival del empleo, efectuado el 13 y 14 de agosto de 2009, se estableció que la demanda de trabajo durante dicha actividad fue de 500 empleos solicitados en los ámbitos gerenciales, administrativos u operativos, y 2,700 más de centros de llamadas (*call centers*).

Al evento asistieron 35 empresas como Capgemini, Banco Industrial, Elektra, Transactel, Tabacalera Centroamericana, Banco de Antigua, GNC, Castrol y Sigma Alimentos, entre otras.

Según datos del Ministerio de Trabajo, de los solicitantes de empleo en el festival (2,649 personas) 40% eran mujeres, cuyo mayor porcentaje representaba a jóvenes comprendidos entre los 18 y 30 años (64%); el resto tenía más de 31 años.

En cuanto al nivel educativo, 31% era universitario, 53% de diversificado y 8% tenía licenciatura.

Para el caso de las violaciones denunciadas en la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el derecho al trabajo fue el que reportó mayor cantidad de expedientes de investigación y acciones específicas en las Auxiliaturas departamentales, cuyo porcentaje representa el 28.6% sobre el total de los relacionados con todos los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las principales denuncias y violaciones a los derechos laborales dentro de 1,448 expedientes de investigación y acciones específicas de la institución del Procurador de los Derechos Humanos sobresalen la falta de cumplimiento de condiciones de trabajo y del pago de las prestaciones laborales, la persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones, el despido ilegal o injusto, la falta de negociación, la omisión de políticas de Estado en materia laboral.

En relación con la falta de cumplimiento del pago de las prestaciones laborales, se presentaron casos en la Dirección de Mediación, Resolución de Conflictos e Incidencia en Políticas Públicas (DIMERCIPP).⁵¹ De

⁵⁰ "Ministerio del Trabajo: Sube 0.6 puntos de desempleo", *Siglo XXI*, Guatemala, 28 de julio de 2009.

⁵¹ De 44 casos de violaciones del derecho al trabajo que se presentaron a septiembre en la DIMERCIPP, en ocho no se obtuvo ningún resultado y tres se encuentran en procesos.

igual forma, la denuncia realizada por un trabajador del MSPAS, a quien se le negó el pago de sus prestaciones. La resolución del conflicto se realizó a través de medidas administrativas a favor del trabajador.

Por último se registró el caso de alto impacto de la compañía Panamerican Airlines, donde empleados quedaron sin percibir sus pasivos laborales al declararse la empresa en quiebra. La investigación realizada permitió determinar que dicha compañía cuenta con una suma de dinero en las Arcas de la Dirección General de Rentas Internas, ahora SAT, y que con dicho dinero, más los intereses percibidos, se podría cancelar el pasivo a los ex empleados. Se estableció el compromiso con las autoridades de Finanzas Públicas para crear un cronograma de pagos después de la sentencia dictada por el Tribunal y se defina el monto a pagar a la fecha.

En cuanto a los despidos ilegales o injustificados sobresale el caso de un agente de la Municipalidad de Guatemala, quien contaba con la certificación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sobre su padecimiento de asma y aun así fue despedido. Se le reubicó en la Municipalidad de Mixco.

Otro caso es el de una trabajadora que inicio relación laboral por contrato con el Hospital San Juan de Dios, sin embargo, en agosto de 2009 fue despedida sin justificación alguna. El Hospital manifestó su disposición al diálogo hacia el fin del año, sin embargo, se encontraba pendiente de establecer acuerdos.

Por último, el caso de un trabajador que durante 18 años laboró en la Municipalidad de Mixco y fue despedido sin motivo alguno, sin el pago de sus prestaciones labores en el tiempo señalado. Con los buenos oficios del Procurador de los Derechos Humanos, se estableció una mesa de diálogo, logrando la comuna cancelar el total de las prestaciones.

Asimismo, en algunas de las Auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos se registraron diversas denuncias relacionadas con violaciones al derecho al trabajo. Por ejemplo, la Auxiliatura de El Progreso recibió 41 denuncias dentro de los expedientes de investigación y acciones específicas, de éstas, las más frecuentes fueron por falta de pago de prestaciones laborales, persecución al trabajador, así como el abuso de autoridad en el caso de delegados o directores de algunas instituciones departamentales del sector público. Otras auxiliaturas que presentaron gran cantidad de denuncias entre expedientes y acciones específicas fueron: Escuintla (5.7%), Quetzaltenango (5.5%) y Alta Verapaz (4.9%), además de las Auxiliaturas que se encuentran en el departamento de Guatemala (38.1%).

Según las denuncias presentadas al Procurador de los Derechos Humanos y datos proporcionados por la Subdirección de la Inspección General de Trabajo, citadas en el informe de la investigación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre los Ombudsman y el acceso a la Justicia Laboral,⁵² a julio de 2009, de 4,502 casos registrados en 45 tipos de derechos violados en materia laboral, los 15 tipos más relevantes y que representaron el 5% de los casos fueron: violación al pacto colectivo de condiciones de trabajo, ausencia de contrato de trabajo escrito, violación a la libertad sindical y discriminación, incumplimiento de pago de comisiones, negativa a extender constancia de trabajo, situación laboral por cierre de empresa, responsabilidad patronal en el pago de subsidio por pre y post natal, verificar si labora personal extranjero, incumplimiento de pago de salario por vacaciones, falta de pago de prestaciones laborales por renuncia de menores de edad, verificación de trabajo de personal extranjero sin autorización, verificación de jornadas extraordinarias establecidas en ley, verificar denuncia sobre pruebas como polígrafo, despido existiendo suspensión de médico particular y suspensión de contratos individuales de trabajo.

El informe del Instituto Interamericano resalta que entre las principales violaciones de los derechos humanos en Guatemala, se encuentra el derecho al trabajo, que ocupa la segunda categoría más importante, alcanzando casi las 500 violaciones en el periodo 2005-2008.

⁵² Hegel Girón, Arturo. *Las Instituciones Ombudsman y la Eliminación de las Barreras en el Acceso a la Justicia Laboral en los Países Signatarios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR)*, informe final. Guatemala, 2009.

Por aparte, la Unidad de Maquila de la Inspección General de Trabajo señala en su informe 2009 que se registraron 1,340 despidos, principalmente de mujeres (753), la mayoría debidos al cierre de la empresa maquiladora en la industria del vestuario y textil.

Por su parte, el MINTRAB recibió 606 denuncias de trabajadores de las empresas maquiladoras, de enero a agosto de 2009, por amenazas, malos tratos, explotación, no pago de bonos o aguinaldos.

Como se mencionó en párrafos anteriores, a la violación de los derechos laborales también corresponde la negación del pago del salario mínimo. El salario mínimo es la remuneración del trabajo que permite asegurar al empleado y a su familia la alimentación, vivienda adecuada, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria y transporte o movilidad.

Después de las discusiones entabladas para su aumento por la Comisión Nacional del Salario, conformado por representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empresarios, el aumento quedó en manos del poder Ejecutivo, que el 29 de diciembre, hizo pública su decisión de aumentar Q 4.00 diarios el salario mínimo, elevándolo a Q56.00 para las actividades agrícolas y no agrícolas y a Q 51.75 para el sector de maquila. Esto representa un salario mensual de Q 1,680 y Q 1,552.50 que, unido a la bonificación, representa Q 64.33 diarios para los salarios agrícolas y no agrícolas y de Q59.33 diarios para la maquila. El salario mínimo mensual se establecería en Q 1,930 y Q 1,780 que nivelarían, en el caso de los primeros, el costo de la canasta básica de alimentos (CCBA) que en noviembre de 2009 era de Q 1,917.34. El salario mínimo del sector maquila todavía no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.

En cuanto al derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, la normativa establece que los trabajadores deben sujetarse a los estatutos de la organización, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales.⁵³ La Constitución Política de la República, en el artículo 34, hace referencia al derecho de asociación que enuncia: “*Se reconoce el derecho de libre asociación...*”; el Código de Trabajo regula la actividad sindical de los trabajadores desde el artículo 206 al 238, refiriéndose a la clasificación de los sindicatos, los requisitos para su conformación, trabajadores sindicalizados, calidades para los dirigentes sindicales, órganos de los sindicatos, sus atribuciones y funciones, personalidad jurídica y representación de los sindicatos, estatutos, disolución de sindicatos, federaciones y confederaciones.

Asimismo, Guatemala ratificó, el 13 de febrero de 1952, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, reconociendo el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, observando los estatutos de la misma.

En ese marco, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social autorizó en 2009 la creación de 68 sindicatos de 95 solicitudes presentadas. Mientras que durante 2008, el total fue de 53 de 123 solicitudes, lo que representa un aumento del 22%. El sector independiente (campesinos y economía informal) es el que más sindicatos registra (42) en cuanto al número de organizaciones autorizadas, seguido por el sector de empleados públicos (13) y de entidades gremiales (8). De los 68 sindicatos, más del 30% son rurales, es decir, conformados por campesinos que se organizan en sus comunidades en diferentes ámbitos laborales. Mientras en el sector de la maquila no se presentaron avances en la organización sindical.

Sin embargo, pese al aumento indicado, la organización sindical, el libre funcionamiento de los sindicatos durante 2009 presentó obstáculos y limitaciones, lo que afectó directamente a sus dirigentes, reduciendo la protección al derecho y las libertades fundamentales.

En el año, de los casos de ataques contra defensores de los derechos humanos, registrados en la Procuraduría de los Derechos Humanos, el sector sindical fue afectado con 84 acciones en 42 casos, lo que representa un 34.3% del total de acciones y un 35.6% del total de casos registrados en contra de organizaciones que abordan el tema laboral.

⁵³ Artículo 8, inciso a). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los derechos sindicales, como el derecho a huelga, son fundamentales para que los trabajadores puedan ejercer libremente sus derechos laborales. Entre las denuncias presentadas por algunos sindicatos, como la realizada por el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Vicente, quienes señalaron deficiencias administrativas y violaciones al derecho del trabajo, la Procuraduría ha logrado algunos avances sustanciales en la mesa de diálogo de negociación.

Otro señalamiento de irrespeto a los derechos laborales fue presentado por el Sindicato de Trabajadores Camineros de la República de Guatemala. En este caso, la Dirección General de Caminos pretendió que los trabajadores del renglón 031 firmaran contratos a plazo fijo sin tomar en cuenta el artículo 26 del Código de Trabajo. Se logró un acuerdo de no aplicar la medida.

Se encuentra también la denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Facultad de Agronomía de la USAC, quienes señalaron que las autoridades obligaban a los trabajadores del sindicato a utilizar reloj electrónico para marcar su ingreso, no así a los docentes. La Procuraduría realizó la mediación correspondiente con la decanatura; se acordó solución del mecanismo de control de asistencia.

Por último, en la Procuraduría de los Derechos Humanos se presentaron varias denuncias (10) de intentos de desalojo a grupos de trabajadores individuales: Entre las más relevantes se encuentra la presentada por el Frente Nacional de Vendedores quienes vieron vulnerados sus derechos laborales por la Municipalidad capitalina en un intento por desalojarlos de sus lugares de venta. La Procuraduría estableció una reunión de diálogo entre los involucrados, teniendo como resultado la aceptación de los vendedores para ser trasladados a otro predio.

Otro caso de denuncia de desalojo fue el realizado por los vendedores de economía informal por orden del juez municipal de Chimaltenango. Los vendedores desalojados no estaban de acuerdo con la reubicación establecida por la municipalidad. La Procuraduría estableció una mesa de negociación para mediar con el Concejo Municipal de Chimaltenango y los vendedores; en la cual lamentablemente no se lograron acuerdos.

2.6 Derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional

Se entiende como Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN):

“el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”.⁵⁴

La Cumbre Mundial de la Alimentación 1996 la define como:

“La situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”⁵⁵.

El marco legal del derecho a la alimentación adecuada en Guatemala parte de la Constitución Política de la República, en los artículos 51, Protección a menores y ancianos; 96, Control de calidad de productos, y 99, Alimentación y nutrición. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue creada mediante el Decreto 32-2005, el 6 de abril de 2005, y es un cuerpo normativo que permite facilitar y mejorar las condiciones para reducir la inseguridad en estos rubros fundamentales.

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN) tiene como fin proporcionar un marco de orientaciones y articular y coordinar los esfuerzos del sector público, sociedad civil y organismos internacionales a fin de garantizar a la población guatemalteca la seguridad alimentaria y nutricional.

⁵⁴ Artículo 1, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005.

⁵⁵ FAO. Declaración sobre seguridad alimentaria. Roma, 1996.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el artículo 11:

“Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”

Las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación, aprobadas por el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), están dirigidas a todos los Estados, hayan o no ratificado los tratados de derechos humanos. El carácter obligatorio del derecho a la alimentación se deriva del derecho internacional y de las constituciones y legislaciones nacionales, no de las directrices.

Las directrices ayudan a dar coherencia en diversos ámbitos y sirven para crear un marco normativo donde los países puedan coordinar y supervisar su acción para alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial sobre Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para establecer un marco institucional estratégico de organización en este tema, fue creado en Guatemala el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN). Se encuentra conformado por tres niveles de acción: 1) Nivel de dirección y decisión política, constituido por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN). 2) Nivel de coordinación y planificación técnica, constituido por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN). 3) Nivel de ejecución, conformado por las instituciones o entes responsables de la ejecución directa de las acciones en SAN en todos los niveles.

Según el Decreto 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, artículo 15, inciso j, el CONASAN, entre sus atribuciones, deberá

“(...) conocer, analizar y proponer correctivos a las políticas y estrategias en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), sobre la base de las recomendaciones que anualmente emitirá el Procurador de los Derechos Humanos con relación al respeto, protección y realización progresiva del derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.”

A pesar de tener una estructura, responsabilidades y funciones definidas, el SINASAN y sus órganos más importantes muestran un deficiente funcionamiento para garantizar y hacer posible la realización progresiva del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional.

El CONASAN todavía no desempeña a cabalidad su papel como ente rector del sistema, no genera mecanismos y procedimientos que faciliten la relación intersectorial y desconoce sus funciones y atribuciones.

Por su parte, la SESAN presenta una débil estructura técnica-administrativa, cuenta con poco presupuesto y la función de las delegaciones departamentales carece de suficiente respaldo político para la coordinación intersectorial en los departamentos y municipios.

Las instancias de consulta y de apoyo del sistema no garantizan plenamente la participación ciudadana y el avance de la integración e incidencia de la Sociedad Civil, como parte del CONASAN. La Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS), integrada por representantes de diferentes sectores (campesino, pueblos indígenas, empresarial, religioso, universitario, de investigación, sindical, organizaciones no gubernamentales, profesional, mujeres, etc.), que debería de brindar aportes técnicos e identificar acciones en temas relacionados con la SAN, no ha sido capaz de realizar una labor a la altura de las circunstancias y no cuenta con mecanismos apropiados de diálogo interno.

El Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA), que integra las instituciones de Gobierno que no pertenecen al CONASAN y los organismos de Cooperación Internacional, no está constituido oficialmente.

En marzo de 2009, en el *Segundo Informe de Seguimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional* del Procurador de los Derechos Humanos, presentado al CONASAN, se constató que durante 2008 se hizo poco por consolidar el marco legal e institucional establecido en la ley y el reglamento, existiendo una

duplicidad jurídica y de funciones entre la Comisión Interinstitucional de Cohesión Social y el CONASAN, así como poca comunicación de la SESAN con los ministerios y secretarías para fortalecer el sistema. Además, es recurrente la escasa participación de funcionarios —con rango de ministro o viceministro que la ley especifica— en las reuniones ordinarias y extraordinarias del CONASAN.

La alta tasa de desnutrición crónica en Guatemala y los índices de riesgo de Inseguridad Alimentaria y Nutricional, específicamente en los municipios priorizados, demandan una acción inmediata a corto, mediano y largo plazos.

Los problemas de desnutrición son más agudos en la población del área rural del país. La población indígena, los niños y niñas, las mujeres embarazadas y los lactantes constituyen los sectores más vulnerables.

La desnutrición crónica es el principal problema nutricional de Guatemala, ubicando al país en el cuarto lugar a nivel mundial, con una tasa de 49.3% en los niños menores de 5 años (ENSMI 2002), principalmente del área occidental. Sin embargo, actualmente se ha visto un incremento de casos de desnutrición aguda, especialmente en el Corredor Seco.

El informe de UNICEF *Estado Global de los niños 2007* destaca que Guatemala posee el porcentaje más alto de niños con desnutrición crónica en América Latina, con una incidencia mayor al 80% entre la población indígena. Según la FAO, más de 2 de los 13 millones (15% de la población) de guatemaltecos están en situación de riesgo de inseguridad alimentaria.

De acuerdo con un análisis del PNUD, en Guatemala más de 800 mil personas caerían en la pobreza durante el año debido a la disminución en el envío de remesas. Además, otros 733,500 se encuentran en riesgo de pasar a engrosar la lista de quienes sufren extrema pobreza, lo que implica vivir con menos de un dólar diario.⁵⁶

El escaso poder adquisitivo de la población afecta a uno de los pilares básicos de la SAN, como lo es el acceso a los alimentos. Los ingresos de los trabajadores del país son insuficientes, ya que el costo de la canasta básica de alimentos era, en octubre, de Q 1,917.34, mientras que el costo de la canasta básica vital era de Q 3,498.79.⁵⁷

El salario mínimo en 2009 para los trabajadores y trabajadoras agrícolas y no agrícolas fue, hasta el 30 de diciembre, de Q 52.00 diarios, cifra que corresponde a Q 1,560 mensuales, y el de los trabajadores de empresas textiles, de Q 47.75 diarios, equivalentes a Q 1,432.50 mensuales, por lo que hay una brecha importante entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica de alimentos, y mayor aún con el de la canasta vital. El aumento en el salario mínimo, decretado a fin de año elevaría el salario de los trabajadores agrícolas a Q 1,963.33 y a Q 1,824.06 el de los trabajadores de maquila.

Las condiciones climáticas afectaron seriamente la disponibilidad de alimentos en Guatemala durante el año. En mayo inició la época lluviosa con irregularidades durante junio, para julio se prolongó una canícula que se atribuyó al Fenómeno del Niño, finalmente, en desde agosto hasta noviembre se mantuvo la falta de lluvia en algunas regiones.

Estudios realizados por la FAO, del 15 al 17 de junio, indicaron que el rendimiento promedio del invierno normal fue afectado por la situación climática. Anunciaron que la segunda cosecha estará condicionada por la irregularidad y déficit de lluvias como lo fue la primera, ocurrida en el Corredor Seco y el altiplano, aumentando las enfermedades como bronconeumonías, neumonías, diarreas y otras que agudizan la desnutrición.

⁵⁶ Ocho quetzales con treinta y tres centavos diarios en diciembre de 2009.

⁵⁷ Fuente: INE.

Respecto de la condición y situación de las víctimas de las violaciones del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria, estas tienen derecho a una reparación adecuada, que puede adoptar la forma de restitución, indemnización, compensación o garantías de no repetición. La Observación General Número 12, párrafo 32 y siguientes, establece que toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a la alimentación adecuada, debe de tener acceso a los recursos judiciales apropiados o a otros recursos nacionales e internacionales. Las Cortes, los Defensores Nacionales del Pueblo y las comisiones de Derechos Humanos deben ocuparse de las violaciones del derecho a la alimentación. Los tribunales deben estar en condiciones de juzgar las violaciones del derecho a la alimentación refiriéndose de modo directo a las obligaciones del Estado en virtud del Pacto y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Acciones del Procurador de los Derechos Humanos: Entre las acciones del Procurador de los Derechos Humanos en relación con la gravedad de la situación del derecho a la seguridad alimentaria, destacan la creación, junto a otras entidades de prestigio del país, del Frente contra el Hambre, las resoluciones sobre expedientes acumulados de violaciones al derecho a la alimentación y la solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, así como los informes de Seguimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala.

Al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, durante su visita a Guatemala en la primera semana de septiembre, el Procurador de los Derechos Humanos entregó un informe sobre la situación de la crisis alimentaria que atraviesa el país.

Desde 2005, sobre la base de la recomendación del Relator Especial, el Procurador estableció un Grupo de Trabajo para dar seguimiento al derecho a la alimentación.

Informes al CONABAN. En cumplimiento de la ley,⁵⁸ en agosto de 2008 el Procurador de los Derechos Humanos presentó ante el CONASAN, presidido por el Vicepresidente de la República, el *Primer Informe sobre la Evaluación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala*, con sus debidas recomendaciones.

El Procurador de los Derechos Humanos, Con la conciencia clara respecto de la gravedad de la situación, y luego de haber declarado que el hambre “amenaza a cientos de comunidades en diversos lugares del país y la desnutrición crónica aqueja a nuestras niñas y niños. Vemos un deterioro ambiental, que hace vulnerables sobre todo a los habitantes más pobres”,⁵⁹ presentó su segundo informe, el 26 de marzo de 2009. En éste se reiteran algunas de las recomendaciones del primer informe, se hace énfasis en la debilidad institucional del Sistema y se recomienda su fortalecimiento, así como la aplicación y ejecución de la POLSAN y el cumplimiento de la Ley y el Reglamento correspondientes.

Resolución sobre los expedientes acumulados de violaciones al Derecho a la Alimentación y a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. La institución del Procurador acumuló expedientes que dieron motivo, el 20 de marzo de 2009, a la Resolución ACUMULADOS AL EXP. EIO. GUA. 208-2007/DESC. En ella se declara la violación del derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca por el Gobierno de Guatemala, al no garantizar el acceso económico a los productos de la canasta básica y no dar seguimiento a la reglamentación relativa al uso de sustancias adicionadas a productos alimenticios que puedan perjudicar la salud.

El Procurador de los Derechos Humanos recomendó en su resolución al Secretario de la SESAN, Juan Rodolfo Aguilar de León, velar porque los miembros del CONASAN cumplan con las atribuciones que les confiere la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional; coordinar la implementación de planes de seguridad alimentaria y nutricional que benefician a la población en general; informar periódicamente a la población guatemalteca, a la institución del Procurador de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos

⁵⁸ Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, artículo 15, inciso j.

⁵⁹ Procurador de los Derechos Humanos. *Informe Anual Circunstanciado – Situación de los derechos humanos en Guatemala*. Guatemala, 2008.

Humanos del Congreso de la República sobre los avances y resultados de las recomendaciones contenidas en la resolución.

Al Ministro de Economía, Rubén Estuardo Morales Monroy, recomendó realizar un control más estricto en relación con la especulación en los precios de los productos de la canasta básica por parte de los comerciantes; promover la aprobación de la legislación que otorgue a ese Ministerio la facultad de intervenir en el comercio por motivos sociales o de interés nacional y que gire sus instrucciones para que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) realice constantes supervisiones de los precios y de la calidad de los productos alimenticios.

Al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social se recomendó velar por la creación de un protocolo para la atención de los casos de desnutrición y garantizar el efectivo seguimiento de los casos que se registren; crear centros nacionales de recuperación nutricional a efecto de que el Estado se responsabilice del seguimiento de los casos de desnutrición registrados; verificar que el Laboratorio Nacional de Salud realice las pruebas pertinentes para establecer si la cantidad de bromato de potasio agregada a la harina de trigo corresponde a lo autorizado por el Reglamento Técnico Centroamericano.

A la Ministra de Educación se recomendó girar instrucciones para implementar programas acordes a las necesidades actuales de nutrición para el bienestar de niñas, niños y adolescentes que constituyen la población estudiantil del sistema educativo público; dar seguimiento a la resolución del Procurador y enviar copia de la resolución a la oficina de antecedentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Solicitud de Amparo presentada por el Procurador de los Derechos Humanos ante la Corte de Constitucionalidad y resolución de Amparo Provisional. El 19 de agosto de 2009, el Procurador promovió Acción Constitucional de Amparo contra el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Desde la perspectiva de los derechos a la seguridad alimentaria y nutricional y las responsabilidades que corresponden al Estado, se estableció que la SESAN y el CONASAN no han cumplido con el mandato constitucional ni legal para el que han sido creadas, violando la Constitución Política de la República de Guatemala, en sus artículos 2, 3, 44, 46, 93, 95, 99, 175, 152, 153, 154, 155 y 204; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 25; la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1, 3, 5, 8, 9, 11, 24, 25; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículos 2, 3, 5, 10, 11 y 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 3, 5, 6, 9, 14, 23, 24 y 26; y la Convención de los Derechos del Niño, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36, 38 y 39.

En el contexto dado, las entidades estatales impugnadas también ignoraron la Observación General 12 del Comité DESC, sobre el derecho a una alimentación adecuada; y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, su Reglamento, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Procurador de los Derechos Humanos, en la Acción Constitucional de Amparo contra el CONASAN y la SESAN, atribuye:

Falta de atención inmediata y urgente de las autoridades impugnadas en responder con efectividad a darle solución a la crisis alimentaria y nutricional ocurrida en el país, en particular, lo que sucede con los niños y niñas de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa.

La falta de cumplimiento de las atribuciones conferidas por el Decreto 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la falta del cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La amenaza cierta y determinada de violación de los derechos a la vida, la salud, alimentación, nutrición y a la seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores de los municipios afectados por la crisis alimentaria y nutricional, imputable a las autoridades impugnadas, por ser a quienes legalmente corresponde impulsar las acciones respectivas de seguridad alimentaria y nutricional.

El Procurador de los Derechos Humanos, en la Acción Constitucional de Amparo, instó ante el tribunal:

Ordenar que el Ministro de Salud y Asistencia Social, quien forma parte del Consejo impugnado, dote de personal médico y paramédico a todos los hospitales del país, en particular a los que corresponden al llamado Corredor Seco y Baja Verapaz, así como proporcionar medicinas y tratamientos adecuados para atender a todos los pacientes, especialmente a los niños y niñas afectados por la desnutrición.

Ordenar al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación que también forma parte del Consejo para que, por su medio, se hagan llegar los insumos de la canasta básica a todos los pobladores del llamado Corredor Seco y Baja Verapaz en forma permanente e indefinida.

Se ordene el cese inmediato de la amenaza cierta y determinada de violación a los derechos a la vida, la salud, alimentación, nutrición, seguridad alimentaria y nutricional de los departamentos enunciados y gravemente afectados por la falta de acción y cumplimiento de las obligaciones de las autoridades impugnadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

Con fecha 24 de agosto de 2009, el Organismo Judicial, a través del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, dictó la resolución que decreta el Amparo Provisional identificado con el número 1041-2009-3070 Of. 1º, ordenando a las autoridades impugnadas cumplir las peticiones y solicitudes del Procurador de los Derechos Humanos. El oficio es dirigido por el tribunal al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República y al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, Fernando Alejandro Montalvo Reina, al dictar resolución consideró que se han violado los derechos a la vida, salud, a la alimentación, seguridad alimentaria y nutricional, la paz y el desarrollo integral de las personas, el principio de legalidad, preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno en materia de derechos humanos y principio de sujeción a la ley por parte de las autoridades impugnadas.

Las autoridades impugnadas, al incumplir con sus atribuciones, tampoco tomaron en cuenta en su totalidad las recomendaciones del Procurador de los Derechos Humanos, contenidas en los dos informes de Seguimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala, en relación con proponer correctivos a las políticas y estrategias en la materia de su competencia para la protección, respeto y realización progresiva del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional. De igual forma, no fueron tomadas en cuenta las recomendaciones contenidas en la resolución de fecha 20 de marzo de 2009, emitida por el Procurador de los Derechos Humanos, dentro del expediente acumulado EIO. GUA. 208-2007/DESC, en el cual se declara la violación del derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca.

Frente Contra el Hambre. Éste inició, el 28 de agosto de este año, como un movimiento organizado por el Procurador de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, la Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS), la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y diversas organizaciones sociales, cívicas y gremiales, instituciones del Estado, empresas, iglesias de distintas denominaciones, consejos de desarrollo y otras entidades dispuestas a unir esfuerzos para dar respuesta conjunta a la situación de emergencia que atraviesa el país.

El Frente, desde la sociedad civil guatemalteca propone soluciones ante la actual crisis alimentaria y nutricional. Pretende establecer un proceso sostenible e institucional, en el marco del ordenamiento jurídico nacional, que lleve a la transformación de Guatemala en un país libre del hambre y la desnutrición. Se ha constituido como un accionar ciudadano con el fin de apuntalar los esfuerzos que actualmente se realizan a través de diversas organizaciones e instituciones para enfrentar y erradicar ambos flagelos.

Como parte de las actividades del Frente contra el Hambre a corto plazo, a través de la coordinación de la Auxiliatura del Procurador de los Derechos Humanos en Jalapa, se organizó, en todos los departamentos, la red de atención a la crisis como plataforma cívico social e institucional con todas las instancias integradas al Frente. La finalidad era identificar los casos de desnutrición aguda y garantizar su inmediata atención; monitorear el abastecimiento del sistema de salud en torno al perfil epidemiológico del lugar y promover estrategia de abastecimiento de alimentos con valor nutricional a las zonas y familias más afectadas y en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional de manera pertinente.

Estas acciones se desarrollaron con carácter inicial en el Corredor Seco, pero se pretende establecer en cada Auxiliatura departamental una mesa de crisis, integrada por las instituciones y organizaciones del Frente contra el Hambre para contar con una cobertura nacional. Resultado de estas acciones fue la identificación de 557 niños con desnutrición aguda o severa que fueron trasladados entre septiembre y diciembre, tanto a los centros de recuperación nutricional creados para el efecto como a centros hospitalarios ya existentes para iniciar su recuperación.

A su vez, se inició un proceso de instalación técnica de un Sistema de Notificación de Emergencias, así como el establecimiento de una red de informantes que se vinculen de manera electrónica con las organizaciones participantes del Frente por medio del “centro de llamadas” de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para la recepción de denuncias relacionadas con la SAN.

Finalmente, se instituyó el levantamiento de información, con fuentes secundarias y primarias a nivel nacional, para identificar la situación en el lugar de la mortalidad y morbilidad por causas directas y adyacentes a la desnutrición.

2.7 Derecho a la educación

El derecho a la educación se ha consagrado en el marco jurídico interno e internacional. En la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra implícito en el artículo 2, y posteriormente se regula en la sección cuarta del Título 2, desde el artículo 71 al 81, y la educación universitaria se ubica en la sección quinta, desde el artículo 82 hasta el 90.

En la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 26, se establece que:

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos”.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁶⁰ y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁶¹ (Protocolo de San Salvador) se refieren al derecho a la educación, y este último establece, en su artículo 13, la obligatoriedad del Estado de proporcionar la enseñanza primaria asequible y gratuita y sobre la asequibilidad en cuanto a la enseñanza secundaria y superior, sugiriendo la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

⁶⁰ Suscrito el 19 de diciembre de 1966, ratificado mediante Decreto Legislativo No. 69-87 del 30 de septiembre de 1987, está vigente en Guatemala desde el 19 de agosto de 1988.

⁶¹ Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

Para hacer operativo el derecho a la educación y la obligación del Estado de proporcionarla a sus habitantes, fue aprobada la Ley de Educación Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 12-91.⁶²

Otras leyes importantes que regulan el acto educativo son el Reglamento de la Ley de Educación, el Estatuto Docente (Decreto No. 1485), la Regulación de la Educación Privada y la Ley de Institutos por Cooperativa.

Avances y situación general. En cuanto a disposiciones legales referidas a la educación, en Guatemala se han dado pasos importantes a partir de 2008. Se han tomado disposiciones que mejoran las condiciones de trabajo de los maestros y promueven la gratuidad de la enseñanza y retención estudiantil a través de las transferencias condicionadas y la refacción escolar.

La cobertura educativa, especialmente en el nivel primario, ha alcanzado casi el 100% en los últimos años. En 2009 se han dado pasos importantes en el avance fundamental de ese derecho. La educación primaria es lo mínimo que puede tener una persona en cuanto al derecho a la educación. La creación de plazas de maestros y el mantenimiento de programas de apoyo son otros logros alcanzados. También se ha mantenido una inversión en el presupuesto del MINEDUC de manera sostenida, aunque aún es insuficiente para la magnitud de los rezagos acumulados en el país.

Por ejemplo, la cobertura en los niveles de preprimaria todavía no alcanza el 50% y es grave la falta de cobertura educativa en el nivel medio, impidiendo a los adolescentes y jóvenes tener mejores oportunidades de trabajo y superación. El nivel de alfabetismo, entre los 15 y 24 años, es de 87.8%, significando un avance.

Por otra parte, la calidad educativa no ha sido mejorada, aunque la implementación del Viceministerio de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa y algunos diagnósticos e indicadores de calidad ya elaborados constituyen pasos iniciales en esta dirección.

El actual presupuesto de educación, no obstante haber crecido y mantener el principio de progresividad, es insuficiente para atender los grandes retos en materia de educación. El presupuesto puede ser un indicador de la velocidad con que pueden implementarse las medidas para mejorar sustancialmente los indicadores de educación.

Derecho a la educación y el enfoque en derechos humanos. Con respecto al enfoque de derechos humanos y puntualmente del derecho a la educación, se considera que para lograr su efectiva realización, se requiere superar desafíos para lograr condiciones o criterios básicos que a su vez puedan reflejarse bajo un enfoque de derechos a:

- la disponibilidad de la enseñanza;
- al acceso a la enseñanza;
- a la permanencia en el sistema educativo; y
- a una educación aceptable.

Analfabetismo: Aunque aumentó la proporción de personas alfabetizadas, entre 1989 y 2006, de 74.8% a 87.8%, todavía existe una diferencia importante entre hombres y mujeres. El porcentaje de analfabetos para 2007 era de 23.35% entre las mujeres y de 18.16% entre los hombres, según el registro de participantes en los procesos de alfabetización de ese año.

Educación preprimaria: La información que dispone oficialmente el MINEDUC adolece de retrasos en su publicación. Las fuentes más asequibles sólo llegan hasta 2008. El sector educativo de preprimaria todavía no alcanza niveles importantes de cobertura en el sistema nacional: según datos disponibles, la cantidad de establecimientos de este nivel para 2008 fue de 7993.

⁶² Entró en vigencia el 12 de enero de 1991.

Tabla 50
Establecimientos públicos de educación preprimaria
Período 2003-2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	5,966	6,652	6,975	7,083	7,413	7,993

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio de Educación.

La cantidad de maestros en el período 2003-2008 incrementó en 3,605, lo que representa un aumento del 41.66%, porcentaje importante, aunque aún insuficiente para cubrir la demanda de este nivel.

La población que demanda este servicio, con edades entre los 5 y 6 años de edad, en el período estudiado ha aumentado de forma tal que para 2003 alcanzó 838,835 y para 2009, 847,173 niños y niñas. El período 2007-2009 presenta las mayores cantidades.

Tabla 51
Población entre 5 y 6 años
Período 2003-2009

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total	838,835	840,225	841,615	843,004	844,394	845,784	847,173
5 años	423,500	424,058	424,615	425,172	425,730	426,287	426,845
6 años	415,335	416,167	417,000	417,832	418,664	419,496	420,329

Fuente: elaboración propia con información del INE.

La cantidad de población atendida por el sector público en el período, tanto en la República como en cada uno de los departamentos se observa el crecimiento sostenido y con un registro mucho mayor durante 2008, con 310,818 personas.

Tabla 52
Inscripción inicial sector público preprimaria
Período 2003-2008

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	240,693	266,339	274,874	283,181	288,754	310,818

Fuente: elaboración propia con información del MINEDUC.

A esto se agrega la cantidad de alumnos que atiende el sector privado, que en 2008 fue de 88,985, lo que hace un total de 399,803. De manera que en el nivel preprimario se atiende sólo al 47.27% de la población comprendida en el rango de 5 y 6 años.

Preprimaria bilingüe. El sector de preprimaria bilingüe del sistema público está dando todavía los primeros pasos. La cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes que hacen uso del servicio todavía es escasa. Aspecto significativo es la reducción de inscripciones entre 2003 y 2009, donde existe una diferencia de 3,007 en desventaja para el último año referido. El siguiente cuadro y datos que se proporcionan a continuación dan una perspectiva de la situación:

Tabla 53
Inscripción inicial sector público preprimaria bilingüe
Período 2003-2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	79,926	79,358	77,246	78,692	76,495	76,919

Fuente: elaboración propia con información del MINEDUC.

Los alumnos fueron atendidos en 2,763 establecimientos públicos y 55 privados, por 3,180 maestros y maestras del sector público y apenas 63 en el sector privado. Esto indica que en el nivel preprimario sólo había 2,818 establecimientos con 3,243 maestros.

En 2008 se atendieron en el sector público 76,919 personas y en el sector privado 1,198 para un total de 78,117 niños y niñas, cifra que muestra el escaso sector de población indígena atendido.

La población indígena es vulnerable en su derecho a la educación porque, en un país donde se hablan 21 diferentes idiomas mayas, prevalece la educación en castellano; sufre las desventajas de no poder hacer un enlace entre su hogar y la escuela. Los libros, además de ser muy caros, son muy pocos los que se encuentran escritos en idiomas indígenas. La manera en que se enseña a leer y redactar dificulta su aprendizaje y los mismos maestros carecen, pese a la existencia de indicadores para la educación bilingüe intercultural,⁶³ de una preparación en educación bilingüe.

Educación primaria. Este nivel es el que tiene carácter de obligatoriedad para el Estado. Las estadísticas muestran la disponibilidad en materia de escuelas en todo el país a partir de 2003 en el sector público. Respecto a la cantidad de establecimientos han crecido de manera irregular en los últimos años, a excepción de 2006, cuando se mantuvo casi igual al año anterior.

Tabla 54
Establecimientos públicos, nivel primario de niños y niñas
Período 2003-2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	14,274	14,662	14,824	14,811	15,209	15,394

Fuente: elaboración propia con información del MINEDUC.

Esta cantidad de establecimientos públicos se complementa con la atención que brinda el sector privado. Durante el año 2,008 alcanzó 2 mil 693 establecimientos que representan el 17.5% de la cantidad con que cuenta el sector público.

Tabla 55
Primaria: niños, establecimientos privados
Período 2003-2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total	2,335	2,345	2,451	2,688	2,630	2,693

Fuente: elaboración propia con información del MINEDUC.

⁶³ Instituto Americano para la Investigación, Justo Mactzul Coyote, Sistema de Monitoreo de Indicadores en el Aula para la Educación Bilingüe Intercultural en Guatemala.

Si se suma la cantidad de establecimientos del sector público y privado con que cuenta el sistema educativo del nivel primario de niños y niñas en 2008, existen 18,087 establecimientos educativos. Esto representa una cobertura aproximada del 95%, aunque hay variación en las diferentes estimaciones.

Tabla 56
Primaria inscripción inicial sector público
Período 2003-2008

Total	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	1,896,336	2,014,037	2,078,078	2,131,146	2,170,643	2,218,062

Fuente: elaboración propia con información del MINEDUC.

De acuerdo con el cruce de información de datos de proyecciones del INE y los de inscripciones iniciales del MINEDUC, se estaría recuperando la población estudiantil que en años anteriores no habían sido atendidos por el sistema educativo.

Tabla 57
Inscripción inicial sector público y privado, primaria de niños
Período 2003-2008

Total	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	2,160,464	2,276,239	2,345,301	2,405,041	2,448,976	2,500,575

Fuente: elaboración propia con información del MINEDUC.

El logro de alcanzar la cobertura del 100% estaría próximo si se mantiene el esfuerzo realizado en los últimos años. Es importante también darle sostenibilidad, a través de apuntar a nuevas metas en cuanto a cobertura del sistema y calidad de la enseñanza del nivel primario.

Primaria de adultos. Este nivel educativo es relativamente pequeño y pretende resolver la problemática acumulada de la población adulta que no pudo continuar sus estudios de educación primaria en su niñez, adolescencia y parte de su juventud. La siguiente tabla muestra la cantidad de estudiantes inscritos en los establecimientos públicos:

Tabla 58
Inscripción inicial en primaria de adultos en el sector público
Período 2003-2008

Total	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	13,216	13,661	13,944	13,505	13,283	12,592

Fuente: elaboración propia, con información del MINEDUC.

Nivel Medio. El nivel medio o educación básica es poco atendido por el Estado en Guatemala, particularmente en el área rural. Las inscripciones en este nivel en los últimos años en establecimientos públicos se muestran a continuación.

Tabla 59
Inscripción inicial de Educación Básica en el Sector Público
Período 2003-2008

Total	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	124,089	132,771	145,297	159,436	171,155	180,565

Fuente: elaboración propia, con información del MINEDUC.

La inscripción de educación básica ha aumentado en cinco años a 56,476 personas. Además de la atención del sector público, hay un sector privado que en 2008 atendió a 279,456 estudiantes de este nivel en toda la República y 153,743 atendidos por institutos por cooperativa, lo que representa que el sistema educativo en general atendió a 613,764 estudiantes. El sector privado atiende al 46% de esta población, entre los 13 y 15 años.

Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones se tiene que la atención a este sector de población es todavía muy bajo, con una cobertura total del 57.03% de la población estimada en estas edades (1 millón 076 mil 183).

Ciclo diversificado: En este ciclo también juegan un papel importante el sector privado y por cooperativa para subsanar, en parte, la deficiencia del Estado guatemalteco en materia educativa.

En 2008 las estadísticas de inscripción inicial muestran que el sector público atendió a 53,110 estudiantes, el privado a 224,873 y los institutos por cooperativa, a 11,049. Esto hace un total de 289,032 estudiantes atendidos en este nivel por el sistema educativo en general.

El sistema en general atendió en 2008 solo el 29.51% (289,032) de la población que demandó este servicio entre las edades de 16 a 18 años (979,180), representando una grave deficiencia del sistema educativo.

Algunos aspectos relevantes de 2009: Según datos proporcionados por la ex ministra de Educación, licenciada Ana Francisca Ordóñez de Molina,⁶⁴ las inscripciones iniciales en 2009 crecieron en el nivel de preprimaria en un 27.26% en toda la República (contra 7.3% en 2008) y 38.08% en los 89 municipios priorizados por el Gobierno. En el nivel primario el crecimiento fue de 7.69% en toda Guatemala (contra 2.1% en 2008), mientras que en los 89 municipios priorizados habría aumentado hasta 11.87%.

En cuanto al nivel básico y diversificado, informó que en 2009 se había dado un crecimiento de 43.7% en básico y 32.2% en diversificado, mucho mayor que el reportado en básico durante 2008 (3.5%) y diversificado en ese año (-0.2%).

La ex ministra añadió que para el 2009 se crearon 25 Coordinadoras Departamentales de Educación Especial con 68 asesores pedagógicos en todo el país, proyectando una atención de 9 mil estudiantes con capacidades especiales, entregándose este año 1,528 becas. Según publicaciones del Gobierno en diciembre, en 2009 se crearon 263 establecimientos educativos en el nivel diversificado y 1,114 en el nivel básico.⁶⁵ Sin embargo, al ser consultado el SICOIN del Ministerio de Finanzas Públicas, no se encontraron evidencias de esa inversión en el presupuesto del Ministerio de Educación.

Recursos financieros destinados a educación: En los últimos años resalta el hecho de que se ha venido cumpliendo con aumentar, de manera progresiva, el presupuesto del MINEDUC. Sin embargo, en 2010 se mantendrá vigente el del año anterior al no ser aprobada la propuesta del Ejecutivo en la fecha límite que marca la Ley. Puede considerarse positivo el grado de ejecución del presupuesto en 2009, que alcanzó el 93.46% al 15 de diciembre.

El presupuesto destinado al MINEDUC mantiene la misma tendencia cercana al 1.5% del PIB en el período 2006-2010 del presupuesto de Educación, representando menos del 13% del presupuesto nacional.

Acceso a la enseñanza: El Estado debe garantizar que las instituciones y los programas de enseñanza disponibles sean accesibles a todos los niños y niñas sin ningún tipo de discriminación. La accesibilidad consta de tres dimensiones, la no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica. En las tres hay indicadores que muestran la necesidad de avanzar a través de modificaciones o reformas.

⁶⁴ Presentación: "Metas presidenciales, rendición de cuentas política educativa 2008-2012".

⁶⁵ *El Periódico*. 21/12/2009. pp. 11.

Respecto a la no discriminación, podría decirse que la educación no ha llegado a todos los rincones del país. Especialmente es notorio que los indicadores de cobertura no han alcanzado a las comunidades de mayor precariedad en el área rural. Puede calificarse de discriminación la ausencia de cobertura en las regiones donde predominan los idiomas indígenas.

También está restringido el acceso al derecho a la educación de los niños y niñas con capacidades especiales. El 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela debido principalmente a la falta de infraestructura idónea a sus necesidades.

Se mantienen como muy grandes y profundas las brechas de exclusión para lograr el desarrollo pleno del derecho a la educación, especialmente en la población rural, pueblos indígenas y discapacitados. Más de la mitad de los niños que tienen entre 5 y 6 años de edad (52.73%) no están cursando la preprimaria; un 42.97% no cursan el ciclo básico y el 70.9% no alcanzan el nivel diversificado.

En el caso de los estudiantes indígenas, su cantidad es baja en relación al total. Es especialmente notorio que la población indígena no tiene acceso a la educación, pues en todos los niveles manifiesta un porcentaje menor al 41% que reconoce el censo de población de 2002. En preprimaria es de casi 29% del total, en primaria 36.66%, en primaria de adultos 21.82%, en nivel medio de 22% y en ciclo diversificado, 13.15%.

Acceso económico: Las familias guatemaltecas destinaban alrededor del 6.3% del gasto total a la educación en años anteriores, proporción que varía significativamente entre los pobres (2%) y no pobres (7%).

Asistir a la escuela primaria ha representado tradicionalmente una carga de gastos a los hogares por cada estudiante desde hace muchos años, ya que incluía pagos de contribuciones, vestuario, transporte y materiales. La escuela secundaria ha sido mucho más onerosa.

Los efectos de las disposiciones del Organismo Ejecutivo sobre la gratuidad de la enseñanza, que debieron tener efecto a partir de enero de 2009, todavía no han podido ser cuantificados. La supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos efectuada ese mes no solo constató que todavía existen grandes rezagos en materia de facilidades para maestros y estudiantes para realizar el acto educativo, sino que las autoridades del Ministerio y del Ejecutivo no estaban preparadas para aplicar medidas de este tipo en tan corto tiempo.

Los programas de textos escolares se han retomado, aunque de manera insuficiente, y deben ser considerados como un soporte que permite mejorar la calidad de la educación y un apoyo al acceso de la misma.

Incentivos para retener a los alumnos en la escuela: En la Supervisión Administrativa a las escuelas primarias realizada en enero de 2009 por la Procuraduría de los Derechos Humanos para verificar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 226-2008, de fecha 12 de septiembre de 2008, referente a la Gratuidad Escolar, se constató la carencia de materiales y servicios esenciales (luz, agua, teléfono) y el deterioro de muebles e inmuebles en el nivel educativo de primaria.

En lo que respecta a la situación de la infraestructura de los establecimientos educativos, se observó que existen aulas muy pequeñas, con escasa ventilación, poca claridad o iluminación, y otras en las cuales se evidencia el hacinamiento de alumnos, además de tener una construcción considerablemente antigua que requiere de un remozamiento inmediato.

Se constató que algunas escuelas reciben el apoyo de entidades, empresas, instituciones y organizaciones, inclusive de algunas embajadas de países acreditados en Guatemala. La ayuda que brindan, aunque no en cantidades relevantes, se orienta a mejoras en la infraestructura, mobiliario, útiles y material didáctico.

Algunas autoridades y docentes entrevistados en esa Supervisión, manifestaron que la medida adoptada por el Gobierno, en relación con el Acuerdo Ministerial mencionado, del que emana la prohibición del cobro de

diferentes cuotas y rubros adicionales, es positiva para los padres de familia, aunque no midió el tiempo para preparar mejor las condiciones. Entre las cuotas y cobros prohibidos por el Acuerdo se registraron las relacionadas con inscripción, reparación de muebles e inmuebles, dotación de útiles escolares, valija didáctica, compra de materiales de limpieza, refacción escolar, financiamiento de los servicios de agua, luz y teléfono.

El Ministerio de Educación informó de un crecimiento inusitado de inscripción escolar en el sector oficial que llegó a la cifra de 4 millones 242 mil 824 alumnos, lo que representaría un crecimiento interanual de 47%, difícil de atender debido a la insuficiencia de ingresos del sector público. Esto no permitió implementar todos los programas de gratuidad que se proponía el Ministerio y el Ejecutivo.

Los incentivos para retener o hacer accesible la educación para los niños pobres aún son insuficientes, aunque se han incrementado. En los últimos años ha habido poco interés en financiar el programa de becas escolares. Su presupuesto permaneció estancado desde 2002, con un monto aproximado de Q42 millones, sin cambios en el presupuesto 2008 y con un pobre nivel de ejecución. En 2008 y extendiéndose a 2009, se inició la implementación del programa de transferencias condicionadas en educación, sustituyendo el programa de becas escolares.

En el primer semestre de 2009 se creó el fondo social Mi Familia Progresiva, para impulsar ese proyecto. A nivel general, tiene como objetivo mejorar la educación y desarrollo integral de la niñez y la juventud del país y velar por la salud y nutrición de las familias con hijos e hijas de 0 a 6 años de edad, elevar los niveles de asistencia escolar de edades de 6 a 15 años y velar por la salud y nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes⁶⁶. La ejecución del proyecto hasta octubre 2009 representaba el 25% del total del presupuesto de los fondos sociales. Este tipo de programas no existe para el nivel medio y diversificado; solamente para el preprimario y primario.

Tabla 60
Ejecución de programas de estímulo a la retención de los alumnos en escuela preprimaria
Ciclo escolar 2009

Programas	Vigente	Devengado	% ejecución
Construcción infraestructura educativa	0.00	0.00	0.00
Financiamiento útiles escolares	19,552,801.10	19,551,364.31	99.99
Provisión de textos escolares	19,981,575.00	0.00	0.00
Remozamiento escolar	0.00	0.00	0.00
Financiamiento alimentación escolar	86,248,925.00	85,817,360.25	99.50
Financiamiento de valija didáctica	3,288,591.35	3,288,560.25	100.00

Fuente: elaboración propia, con datos del SICOIN al 21 de diciembre de 2009.

Debido a la crisis económica y financiera, a la reducción en la recaudación y aprobación del presupuesto, solo se mantuvieron los programas de útiles escolares y alimentación escolar, mientras fueron abandonados los de construcción y remozamiento de infraestructura y textos escolares.

Los programas más importantes considerados por el Ejecutivo en el nivel primario fueron los de alimentación escolar, financiamiento de útiles escolares y la provisión de textos; los primeros fueron financiados y el último, sólo parcialmente.

Indicadores de eficiencia interna y rendimiento escolar: Todavía persisten problemas que obstaculizan el avance del sistema educativo, tales como el retraso en la matrícula inicial, repetición de grados y demora en el avance.

⁶⁶ *Diario de Centro América*. Acuerdo Gubernativo No. 100-2009. Guatemala, 06 de abril de 2009.

Tabla 61
Primaria de niños, tasa anual de aumento de estudiantes promovidos
Sector público
Periodo 2004-2008

Total	2004	2005	2006	2007	2008
	5.34%	5.39%	1.86%	2.21%	5.33%

Fuente: elaboración propia, con datos del Ministerio de Educación

Aspectos como el enfoque, los contenidos, la modalidad empleada para su implementación y el carácter de la reforma educativa son aspectos que han enfrentado a las autoridades de turno con el magisterio nacional. En la actualidad todavía se mantiene la discusión sobre el carácter de la reforma educativa que se debe implementar, tema fundamental aún no resuelto.

Los estudios de calidad de la educación recién empezaron a producirse, por lo que no es posible hacer comparaciones. Según los estudios de evaluación en el ámbito nacional que realizó el Programa Nacional de Evaluación del Rendimiento Escolar (PRONERE), el 50% de los estudiantes no indígenas en primer grado aprobó las pruebas de lecto-escritura y el 43% de indígenas logró aprobarlas; mientras que en matemáticas, en el mismo grado los porcentajes de aprobación fueron 28% y 26% entre no indígenas e indígenas, respectivamente⁶⁷. Estos porcentajes reflejan la insuficiente calidad de la educación impartida en este grado fundamental.

Denuncias por el derecho a la educación, presentadas ante el Procurador de los Derechos Humanos:

Algunos casos que ilustran violaciones del derecho a la educación están constituidos por denuncias interpuestas ante el Procurador de los Derechos Humanos, por parte de padres de familia en contra de las dependencias gubernamentales responsables de la materia.

Las denuncias se han referido, entre otros aspectos, a señalamientos sobre actos de corrupción, salarios, trabajo, cobros indebidos y actos de maltrato infantil, violencia psicológica y física ejercida contra niños y niñas en establecimientos educativos, tanto públicos como privados. La institución del PDH ha intervenido en los centros educativos para resolver problemas entre personal docente, padres de familia y estudiantes de diferentes jornadas, coordinando con los supervisores departamentales de Educación del área o dando continuidad al expediente con el trámite respectivo.

También ha prestado buenos oficios de mediación entre padres de familia y autoridades de los colegios por cobros de cuotas atrasadas. Asimismo, se ha tenido conocimiento de denuncias ante la falta de nombramiento de personal en escuelas e institutos o de pagos a los docentes.

En cuanto a la problemática mencionada, se conocieron varios casos, entre ellos:

Expediente ORD.JUT.055 – 2009 / DCP iniciado el 15 de mayo de 2009, mediante el cual se denuncia al Ministerio de Educación por no haber hecho efectivos los salarios de una persona desde el 01 de junio de 2008. La Auxiliatura de Jutiapa realizó la investigación y corroboró que la situación de retraso se debía a algunos errores en el acta de toma de posesión de la maestra, por lo cual estaban estancadas las gestiones. Realizados los trámites, las autoridades correspondientes le acreditaron los salarios atrasados.

La Auxiliatura de Huehuetenango realizó gestiones y logró que el Coordinador Técnico Administrativo No. 13-06-15, de San Pedro Necta, emitiera la resolución número 14-2009, de fecha 16 de abril de 2009, mediante la cual temporalmente asigna personal docente al Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria del cantón Las Piedras, municipio de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, debido a la cantidad de población estudiantil. Resuelve, en su artículo 1, asignar temporalmente durante el ciclo escolar 2009 a dos profesores, para que presten servicios educativos en el INEB, telesecundaria, jornada matutina, cantón Las

⁶⁷ PNUD. “Informe de Desarrollo Humano... Op. Cit. Pág. 162.

Piedras, Santiago Chimaltenango, a partir del 22 de abril de 2009, resolviendo el problema de falta de nombramientos de los maestros.

Un caso colectivo que se presentó mediante denuncia y el Expediente Ordinario Reu No. 27-2009 de fecha 17 de septiembre de 2009, según el cual operadores del Ministerio de Educación de la ciudad de Retalhuleu manifestaron que el Director Departamental de Educación no ha resuelto su situación laboral, ya que durante varios meses el Ministerio de Educación no acreditó los salarios correspondientes a los servicios prestados. Dentro de la investigación realizada por la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de ese departamento, se requirieron los informes a las autoridades administrativas, a la Ministra de Educación y al mismo Director Departamental de Educación, para conocer la situación de los extremos denunciados. Así mismo, el Departamento de Investigación de la Auxiliatura realizó entrevistas directas tanto con el denunciado como con los denunciantes. Al cierre de 2009 el proceso de investigación no había concluido.

Según el Expediente EIO.TOT.02-2009/DCP iniciado el 27 de julio de 2009, se acusa a uno de los profesores del Instituto Técnico en Computación de Totonicapán de exigir dinero a los alumnos y favores sexuales a las alumnas, a cambio de ganar los cursos. Realizadas las solicitudes de informes circunstanciados, entrevistas a alumnos y alumnas, el caso ha sido conocido por el Ministerio Público de Totonicapán, tramitado por los delitos de abuso de autoridad y violencia en contra de la mujer.

En el expediente EIO-IZA. 07-2009/DESC con fecha 30 de abril del 2009, una persona denunció a los miembros del Jurado Nacional de Oposición del Ministerio de Educación, por no ser favorecida en el concurso de oposición en el cual participó y su expediente fue calificado con la nota más alta, para optar a una plaza bilingüe en la comunidad Tablitas, de El Estor. Fue informada la denunciante en la oficina del Jurado Nacional de Oposición del Ministerio de Educación que su papelería había sido rechazada por no acreditar la constancia del idioma Q'eqchi', requisito para optar a la plaza. Sin embargo, al entrevistar a la denunciante, se estableció que según el diploma de Educación Media extendido por el propio Ministerio de Educación, ella es Maestra de Educación Infantil Bilingüe Intercultural (Español-Q'eqchi'). Los integrantes del Jurado Nacional de Oposición del Ministerio de Educación, al no darle ningún valor probatorio a este título, violaron su derecho humano al trabajo.

Se abrió el Expediente EIO Hue 10-2009/DESC a partir del 11 de junio de 2009, de oficio contra el Ministerio de Educación, pues la escuela oficial El Quequeste, La Labor, del municipio de Chiantla, Huehuetenango, está construida con madera y techo de lámina, contando con una sola aula, donde 50 niños de diferentes grados reciben clases juntos; no se cuenta con escritorios, por lo que gran parte de los alumnos reciben clases en el piso, sentados sobre tablas y troncos de madera; no existen servicios sanitarios, solamente fosas sépticas.

En el momento en que la Institución del Procurador inició la investigación, la Dirección Departamental de Educación inició gestiones de ayuda hacia la Escuela y a la fecha sigue su trámite correspondiente. Se le da seguimiento.

Expediente: EIO.CHIM.007-2009/DE. Con fecha 29 de julio 2009, por publicación en diario nacional de esa fecha, en la que aparece denuncia de padres de familia y maestros por la falta de recursos para la refacción escolar. El director de la Escuela Rural Mixta de la Aldea Santa Isabel, de Chimaltenango, manifestó que desde marzo de 2009 dejó de recibir los recursos de refacción para los 325 estudiantes de la escuela. Por otra parte, los maestros y padres de familia de la escuela Centro América, también de Chimaltenango, adoptaron un plan de racionamiento para enfrentar la falta de recursos.

Expediente. Ord. Esc. 031-2009 DESC. Del 31 de marzo de 2009 por denuncia anónima contra la Directora de la Escuela Oficial Quintas San Marcos, del municipio de Masagua, Escuintla, en el que se le acusa de impartir castigo degradante a un alumno y a su progenitora, razón por la que el menor decidió no acudir más a la escuela, vulnerando su derecho a la educación. Se realizó entrevista a los alumnos y maestros de la escuela; se solicitó informe circunstanciado a la Dirección departamental de Educación de Escuintla y se entrevistó al

menor y a sus familiares en relación con la denuncia. Se determinó que el menor de edad abandonó sus estudios a consecuencia del maltrato recibido.

Según consta en el expediente ORD.GUA.521-2007/DESC, los alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil presentaron denuncia por haber sido dados de baja del proceso de formación en la Academia. Los motivos, según indicaron, fueron por la presencia de tatuajes y/o cicatrices, resultantes de la operación en el intento por borrarlos. A los estudiantes se les exigía el reembolso o al menos una parte del beneficio de la beca obtenida. El Procurador de los Derechos Humanos inició la investigación en seguimiento a las denuncias presentadas por violación del derecho humano a la educación.

A raíz de la investigación realizada, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación informó que todos los aspirantes a agentes de la PNC en condición de becados para el proceso de formación, son informados de los requisitos e impedimentos, así como de los compromisos que asumen al momento de su ingreso.

Por lo tanto, el Procurador de los Derechos Humanos en 2009 resolvió recomendar a las autoridades de la Academia de la PNC girar sus instrucciones a efecto de que el personal encargado de la selección de los aspirantes realice los procedimientos adecuados de verificación de los requisitos que deben cumplir los aspirantes, sin vulnerar sus derechos humanos, con el fin de evitar y prevenir casos como los presentados.

En respuesta, la institución del Procurador de los Derechos Humanos recibió notificación del Viceministro de Apoyo al Sector Justicia del Ministerio de Gobernación, comunicando que en atención a la recomendación del Procurador, se solicitó al Director de la Academia de la PNC, atender lo resuelto y girar instrucciones al personal encargado de los procesos de selección de personas que ingresan al Curso de Formación Básica para Agentes de la Policía Nacional Civil, en apego a los instrumentos del Régimen Interior de la Academia de la PNC.

2.8 Derecho a la salud

Para la OMS y OPS la salud se refiere al “completo bienestar físico, psíquico, social y espiritual de la persona y no solo la ausencia de la enfermedad”. Este derecho se encuentra garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el artículo 12 y en el Protocolo de San Salvador.

Regionalmente, el marco jurídico del derecho a la salud parte de la Carta de la OEA, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención Inter-Americana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Inter-Americana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra las mujeres.

En el marco jurídico interno, la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere al tema en distintas partes, así como la Ley especial, el Código de Salud, en su Artículo 2, que la define como:

“(...) un producto social resultante de la interacción entre el nivel de desarrollo del país, las condiciones de vida de las poblaciones y la participación social, a nivel individual y colectivo, a fin de procurar a los habitantes del país el más completo bienestar físico, mental y social”.

En el Artículo 94, la Constitución menciona que el “Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social”. En el siguiente artículo declara que “la salud de los habitantes de la Nación es un bien público”. Otros artículos también se refieren a la salud, la calidad de productos, el medio ambiente y equilibrio ecológico, la participación de las comunidades en programas de salud en cuanto a las etapas de planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud y sobre la alimentación y nutrición.

Dentro del marco institucional, el sector salud juega un papel importante en la búsqueda de la equidad. A través del potencial de dar cobertura universal, el quehacer debe enfocarse en garantizar su disponibilidad y accesibilidad.

La institucionalidad nacional de salud o sector salud en Guatemala está coordinada por el MSPAS.⁶⁸ El sector salud se compone por el conjunto de organismos e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, cuya competencia u objeto es la administración de acciones de salud, incluyendo los que se dedican a la investigación, la educación, la formación y capacitación del recurso humano en materia de salud y la educación en salud a nivel de la comunidad.⁶⁹

De todas las instituciones que velan por la salud, el MSPAS y el IGSS son las que cuentan con mayor capacidad instalada, recursos humanos y financieros. Por ello, en el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria se estableció la necesidad de interrelación específica, con el fin de crear el sistema nacional coordinado de salud.

Para cumplir con las funciones asignadas en el Código de Salud, el MSPAS se ha organizado a partir del Despacho Ministerial, que realiza sus acciones desde la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud, la Dirección General de Recursos Humanos en Salud y la Gerencia General Administrativo Financiera.

Además, se tiene como misión “garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las y los habitantes del país, ejerciendo la rectoría del sector salud a través de la conducción, coordinación y regulación de la prestación de servicios de salud, y control del financiamiento y administración de los recursos, orientados al trato humano para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de las personas, con calidad, pertinencia cultural y en condiciones de equidad”.

Los 42 hospitales nacionales existentes realizan actividades de atención y recuperación de la salud de los pacientes, en actividades de consulta externa, emergencias y hospitalización. Para su funcionamiento necesitan disponer de gastos para la gestión administrativa y servicios de apoyo. También existen los centros y puestos de salud en municipios y comunidades del país.

En general, puede decirse que existe un marco legal e institucional y un marco de derecho a la salud que obliga al Estado a velar por el derecho ante una población cada vez más consciente de exigir resultados y esperar una respuesta a sus necesidades.

Situación actual. El contenido básico del derecho a la salud, incluida la salud preventiva, debiera de ser aquel que contenga los siguientes aspectos:

- *Disponibilidad*, número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos y de personal capacitado para atenderlos, así como los medicamentos esenciales definidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- *Accesibilidad*, físicamente y sin discriminación (a pueblos indígenas, mujeres, personas VIH/SIDA, personas con discapacidades); asequibles económicamente; acceso a la información, sin menoscabo a que datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad (personas VIH/SIDA).

⁶⁸ Código de Salud, artículo 4.

⁶⁹ *Ibid.*, artículo 8.

- *Aceptabilidad*, respeto, ética médica y culturalmente apropiada, sensible al género y al ciclo de vida.
- *Calidad*, servicios apropiados desde el punto de vista científico y médico.
- *Situación de la disponibilidad*: La demanda de salud está compuesta por toda la población guatemalteca, que según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística es, para 2009, de 14 millones 017 mil 057.

Esta demanda se divide entre los diferentes sectores que atienden la salud. El 73% de la población asiste al servicio público del MSPAS, a la medicina tradicional o paga directamente de su bolsillo la atención. El 17% está protegido por el IGSS y el otro 10% por mecanismos de aseguramiento del Ejército, PNC y seguros privados.

En Guatemala la mayoría de médicos que atienden en clínicas particulares residen en centros urbanos y no están dispuestos a desplazarse para atender a la población del área rural. Hay un pronunciado interés en la población que tiene recursos económicos para pagar los servicios y proporcionar un mejor nivel de vida de los profesionales, marginando a la población pobre y rural de sus servicios. Esto genera un problema de equidad en cuanto a la atención a la salud de la población.

El sector de población atendido por el MSPAS cuenta con distintos hospitales generales y especializados, centros y puestos de salud en toda la República, con personal y recursos médicos que, en la medida de lo posible, cuenten también con medicina gratuita para quienes hagan uso de los servicios de consulta.

Hay avances que se consideran importantes como los de cobertura de inmunización infantil (90%). La mortalidad infantil (30 por cada mil nacidos vivos) y mortalidad materna han disminuido, no obstante ser todavía de las más altas en América.

Accesibilidad a la salud: Existe una brecha profunda entre la consecución de los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes y la realidad de la sociedad.

Los problemas de acceso a la salud parten de los indicadores de pobreza y de extrema pobreza, de desnutrición crónica infantil, evidenciando que gran parte de la población no tiene los recursos necesarios para una alimentación y salud adecuada. Los ingresos de la población son escasos y no alcanzan para cubrir los costos de la canasta básica de alimentos, mucho menos el de la canasta básica vital, pese a que en 2009 se redujeron, aunque mínimamente.

La pobreza y desigualdad señalada, especialmente en el área rural, es objeto de preocupación e impide el goce de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Carta fundamental de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la salud.

Datos mencionados por una encuesta de OPS/OMS entre la población que no ha recibido nunca atención de salud en Guatemala, destacan que un 66.6% de la población no la tiene por falta de recursos económicos, 13.9% porque no conoce la existencia o no hay servicios de atención, 12.3% por falta de motivación personal o apoyo familiar y 7.2% por otras causas. Este dato permite asegurar que entre las causas fundamentales de la falta de acceso a la salud están la pobreza, extrema pobreza, la lejanía de los centros de salud de las comunidades rurales⁷⁰ y la incapacidad de las entidades públicas para ofrecer este servicio con la calidad necesaria.

En Guatemala se presentó en 2009 un panorama económico, social y político inestable. El Ejecutivo tuvo dificultades para manejar los recursos del Estado; hizo pública su voluntad de recortar el gasto ante la

⁷⁰ Derecho Humano a la Salud. Dr. Pier Paolo Balladelli, representante para Guatemala de OPS/OMS. 09/12/2009.

insuficiencia de recursos provocada por la caída de la recaudación tributaria, recurriéndose a préstamos para solventar el déficit de la recaudación tributaria.

En cuanto a las epidemias que afectaron a la población guatemalteca en 2009, la más importante fue la pandemia de fiebre A H1N1. Como resultado de la poca atención que se brindó a la gripe, al 28 de diciembre se habían contabilizado 720 casos confirmados en todo el país, siendo los departamentos más afectados Guatemala (402), Escuintla (51), Quetzaltenango (38) y Alta Verapaz (35). El saldo de víctimas mortales era de 13 en septiembre.

Por otra parte, al 25 de diciembre se habían registrado en todo el territorio 10, 692 casos de dengue clásico confirmados por pruebas de laboratorio. A finales de noviembre se contabilizaban 18 víctimas mortales del dengue hemorrágico y 1,092 casos de dengue clásico confirmados en el país,⁷¹ la mayoría de los cuales fueron localizados en Izabal.

Se informó que se habían detectado 20,488 casos de VIH/SIDA. Los departamentos con mayores tasas alrededor de la República son Retalhuleu, Izabal, Escuintla, Suchitepéquez, Guatemala, Petén, San Marcos y Quetzaltenango.⁷²

También se pudo percibir mayor voluntad política de los partidos políticos y del Congreso por mejorar el gasto social en salud y una comunidad internacional dispuesta a apoyar. Sin embargo, persiste la enfermedad y muerte por enfermedades infecciosas y nutricionales, especialmente entre la gente pobre, indígena y rural, agravados por las altas tasas y prevalencia de violencia social e intrafamiliar. También las inequidades en el acceso a los servicios de salud, pues hay un 20% de población sin acceso regular, 51.2% tienen acceso al parto institucional y la población con acceso regular a los servicios tiene serios problemas de disponibilidad.

Aceptabilidad: El enfoque intercultural de las políticas públicas de salud no se ha difundido y practicado de manera suficiente. La prevalencia de enfermedades prevenibles en el área rural y la población indígena (malaria, peste, infecciones respiratorias, oncocercosis, desnutrición, tuberculosis, etcétera) son evidentes. Tampoco ha habido una armonización de los sistemas de salud convencional e indígenas en cuanto a conocimientos, terapias y prácticas médicas.

La sensibilidad hacia la problemática de salud de las mujeres, a pesar de los avances que ha habido, es aún insuficiente. Guatemala ocupa el lugar. 103 en Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) IDH 2009. Esta situación se manifiesta sobre todo en el área rural, donde los indicadores de salud materno infantil son alarmantes. Todavía hay altas tasas globales de fecundidad, aunque se han reducido de 1999 a 2008/2009, especialmente en el área urbana para mujeres comprendidas entre los 15 y 49 años de edad.

También los indicadores sobre el uso de los métodos anticonceptivos señalan un aumento. Las estadísticas de embarazadas por categoría de pobreza indican que las mujeres pobres y sin ninguna instrucción son mayoritarias.⁷³

Se debe tomar en cuenta que la atención prenatal, del parto y postnatal todavía no tienen una cobertura total y que en el período 2004-2008 no ha variado. En el área urbana la atención prenatal fue del 95.8% y en el área rural de 91.4%. La atención al parto se dio casi en la mitad de los casos, ya sea en la casa de la embarazada o de la comadrona (48.3%).

⁷¹ *Prensa libre*. Se registran 1,092 casos de gripe A. Guatemala, 4 de diciembre de 2009.

⁷² Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

⁷³ Representan el 43% contra el 9.1% de no pobres, las que tienen instrucción primaria que son pobres representan el 51.6% contra el 41.8% no pobres. Las mujeres pobres con educación básica, diversificada y superior son escasas, mientras las no pobres representan el 20.8% en básicos, 22.4% en diversificado y 6.0% de educación superior.

Las mujeres indígenas presentan menores porcentajes de atención institucional. Las que tienen menos educación acuden en mayor número a la atención institucional para ser atendidas durante el parto. Solo una cuarta parte de los nacimientos reciben atención post parto, y el porcentaje es aún menor en el área rural. La falta de atención a los jóvenes y adolescentes en materia de salud hace que la mortalidad materna en el país tenga un 16.5% entre las menores de 19 años.

La incidencia del VIH entre los adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años es mayor del 30% y el acceso a la prueba de VIH entre la población adolescente solo se realiza con la autorización de los padres o tutores por disposiciones legales (Decreto 27-2000), poniendo barreras al proceso.⁷⁴

La atención a la población de la tercera edad tampoco ha sido la mejor, puesto que las instituciones especializadas en salud de las personas de la tercera edad son insuficientes, como se manifiesta en algunos casos conocidos por la institución del PDH.

La prevalencia de discapacidad en mayores de 6 años es elevada, pues en el ámbito nacional representa el 37.4%. Asimismo, pese a que el 27% de la población guatemalteca padece o ha padecido algún tipo de trastorno mental en su vida, según la Encuesta Nacional de Salud Mental realizado por la Universidad de San Carlos, solo el 1% del presupuesto del MSPAS se asigna a Salud Mental.

Estos indicadores deben atraer la atención para mejorar la cobertura a estos sectores discriminados por el sistema de salud; pero también para buscar métodos aceptables en la sociedad guatemalteca para aplicar los métodos científicos, alternativos y tradicionales a la realidad nacional.

Calidad: Se pretende referir a los servicios apropiados desde el punto de vista científico y médico.

Los servicios de infraestructura básicos todavía no alcanzan el nivel apropiado. Las viviendas conectadas a una red de drenaje en 2000 eran del 38.2%, mientras en 2006 habían aumentado a 45.6%. Este aspecto tiene importancia para brindar las condiciones de salubridad, especialmente de la salud infantil.

Los servicios médicos institucionales aún no llegan a todas las regiones del país y se encuentran centralizados en el área urbana, particularmente los servicios que necesitan personal capacitado y utilizan tecnología avanzada.

Los hospitales públicos de especialidades se encuentran principalmente en la capital. De ahí que una mayor cantidad de partos son atendidos en casa de la embarazada y de comadronas en el área rural, se den las muertes infantiles y en general por enfermedades prevenibles. También explica por qué la mortalidad infantil nacional es mayor en el área rural (33 por cada mil nacidos vivos) que en el área urbana (25 por cada mil), entre otros eventos.

Casos frecuentes de violación del derecho a la salud presentados en la PDH: La recepción de denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos es permanente. Las acusaciones se producen por la falta de atención adecuada o ignorada en el sistema nacional de salud. En diversas circunstancias ha sido necesario plantear acciones de amparo ante los tribunales y otras acciones para preservar el derecho a la salud de las personas.

Entre las denuncias recibidas, sobresale el caso contra el personal médico del Centro de Salud del municipio de Livingston, descrito con el expediente ordinario IZA. 12-2009/DESC y con fecha 3 de junio del 2009. La queja fue presentada por representantes de las comunidades del municipio de Livingston, quienes sufrieron mala atención de parte del personal.

⁷⁴ Datos proporcionados por el doctor Pier Paolo Balladelli, de OPS/OMS. 09/12/2009.

El descontento se agudizó por el fallecimiento de dos niños. Se estableció que en el Centro de Salud de Livingston se prestó una atención deficiente de los servicios públicos de salud por parte del personal a un niño de 3 meses de edad y a una niña de 5 años, violándose el derecho humano a la salud y a la vida.

En tanto que por maltrato se presentaron quejas en contra del Hospital General San Juan de Dios, Comité Pro Ciegos y Sordos, Centro de Educación Especial Alida España y Hogar de recuperación Jehová Jireh. También se registraron denuncias contra el Hospital Nacional de Salud Mental y el Ministerio de la Defensa por denegación de cobertura a ex soldados del Ejército. Además, se dio trámite a casos de falta de medicamento en los centros de detención, asistencia médica a reos y por condiciones precarias de habitabilidad.

En abril fue comprobada la escasez de medicamentos en los municipios de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna, Sololá. En el expediente EIO.MOV.SOL.02-2009/DESC consta la investigación y determinación realizada sobre el atraso en recibir los medicamentos en el Área de Salud de Sololá. Producto del seguimiento de la investigación, se verificó la entrega posterior de medicamentos, sin embargo, ante la demanda de pacientes, fueron insuficientes y no fue posible cubrir los tratamientos requeridos.

Similar situación se dio en la Auxiliatura Departamental de Zacapa, donde se levantó de oficio el expediente EIO ZAC- 29-2009/DESC y se realizó la investigación pertinente para determinar la falta de medicamentos básicos en el Centro de Salud del municipio de Huité.

En la Auxiliatura Departamental de Escuintla se abrió el expediente Ord. Esc. 027-2009 DESC. La Dirección del Área de Salud de Escuintla estaba desabastecida de medicamentos, afectando a toda la población del departamento. Se determinó responsabilidad de parte de la Dirección del Área de Salud de Escuintla por mal procedimiento en trámite de requisición de medicamentos, pero fundamentalmente el problema fue ocasionado por recorte presupuestario al MSPAS.

También se levantó de oficio el expediente de mediación Esc. 054-2009 DE, el 24 de julio de 2009 contra las autoridades de salud en Escuintla. Los miembros de sindicatos de trabajadores de Salud de la Región 05 realizaron una manifestación pacífica por recorte presupuestario de Q375 millones al MSPAS. Se procuró una mesa de diálogo en el departamento, que posteriormente se trasladó al Congreso de la República de Guatemala, donde se estableció apoyo para el sector salud, lográndose la atención de parte del Congreso para la reasignación presupuestaria.

Respecto a la población portadora de VIH-SIDA, se dio trámite a varias denuncias por denegación del acceso a la salud. Tomando en consideración que el Virus de Inmunodeficiencia Humana ha tomado dimensiones alarmantes de urgencia nacional, se ha dado la importancia del caso para garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas portadoras.

En la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los expedientes gestionados más frecuentemente tienen que ver con los derechos vulnerados relacionados con la salud, siendo los hospitales nacionales y el IGSS los más denunciados por no prestar la adecuada atención médica, negligencia, falta de medicamentos e insumos y maltrato por parte del personal.

También se conoció el caso en que los jubilados de la PNC denunciaron ante la Procuraduría el probable cierre del Hospital de la Policía Nacional Civil. Las autoridades de Gobernación sopesaban el cierre por falta de recursos financieros. Pudo establecerse en el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de la PNC que se hacían las gestiones para reubicar y conseguir los fondos para su funcionamiento.

Se recibió una denuncia en contra del MSPAS presentada por el Colegio de Médicos, Asociación Pediátrica y Asociación de Infectología, por el desabastecimiento de medicamentos. Durante más de 25 años se ha adquirido los medicamentos biológicos a la OPS garantizando la calidad y el bajo costo. El Ministerio pretendía adquirirlos en otra instancia sin sopesar los costos y calidad. La Procuraduría ejerció un papel de mediador y de verificación entre el Colegio y Asociaciones y las autoridades del Ministerio, representadas por

el Viceministro de Salud, quien finalmente, a nombre del MSPAS, aceptó continuar realizando las compras de biológicos a la OPS para el programa de Inmunizaciones en 2009.

En otro caso, la Junta Directiva de trabajadores de la Liga Nacional Contra el Cáncer planteó denuncia sobre el recorte presupuestario, motivando preocupación y amenazas en la atención de pacientes, o inclusive el cierre de operaciones. Se propuso establecer una mesa de diálogo con autoridades del Ministerio de Salud.

Con respecto a enfermedades de características epidémicas y pandémicas, como el dengue y la gripe tipo A H1N1, luego de diversas visitas a los centros asistenciales de varios departamentos, se pudo informar con prontitud y celeridad a la población sobre las características de las enfermedades. En el caso del dengue, reportes de Auxiliaturas Departamentales indican que se dieron casos de propagación por cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud, negligencia médica, falta de atención y asistencia médica.

A este respecto, un caso muy importante dio origen al expediente EIO.IZA. 11-2009/D.E por hechos que constaron al personal de la institución contra MSPAS, la Dirección de Área de Salud de Izabal y específicamente el Hospital Infantil Elisa Martínez. La denuncia tuvo origen por la falta de información ante la población y medios de comunicación en relación con los casos de dengue hemorrágico y clásico atendidos en el hospital. Un número considerable de niños y niñas fueron afectados. El MSPAS en lugar de comunicar y poner en alerta a la población, guardó silencio y ocultó datos.

En las investigaciones realizadas, se confirmó que la epidemia brotó a finales de junio de 2009, pero fue hasta agosto que la Dirección de Área de Salud hizo entrega de las bombas nuevas para la fumigación en el Centro de Salud de Puerto Barrios, a pesar de existir consecuencias fatales con la muerte de diez niños y niñas.

En los casos de salubridad, la PDH también efectuó intervenciones en los rastros municipales de distintos lugares del país. En Sacatepéquez se realizó un informe especial, determinándose que en tres municipios tienen instalaciones en mal estado, no existe veterinario, ni delegado del MARN; únicamente el Área de Salud envía personal a recabar información.

Según una revisión de las denuncias y consultas más frecuentes planteadas ante la institución del Procurador, el segmento poblacional de las personas con discapacidad más rechazado es el de quienes padecen trastornos mentales. Son frecuentes las solicitudes de apoyo, tanto de familiares como de vecinos y amigos, para encontrar una institución que se comprometa a proporcionar albergue y manutención a estas personas que en un alto porcentaje están abandonadas.

El estado en que se encuentra el Hospital Nacional de Salud Mental confirma las denuncias recibidas. Es el único que atiende a las personas con discapacidad mental dentro del sistema hospitalario nacional. Recibe la menor asignación presupuestaria, es insuficiente para abordar las múltiples necesidades que tiene de recursos humanos, médicos y físicos.

La institución del Procurador ha constatado hallazgos y aperturado expedientes de competencia. Se consigna la inexistencia de salas de aislamiento para algunos pacientes calificados como “agresivos”. Se realizaron varios monitoreos y una supervisión administrativa para profundizar en las investigaciones y acusaciones vertidas.

Entre las conclusiones del informe de supervisión, se establece que el hospital presenta escasez de camas, medicamentos, espacio físico, médicos y otro personal sanitario, equipo y mobiliario y falta de mantenimiento en instalaciones físicas y ambientales. Además, es común la práctica del aislamiento. Al respecto, la OMS recomienda tratamientos menos restrictivos que los empleados en el hospital, igualmente proteger a los pacientes sobre posibles daños, malos tratos u otros actos que causen ansiedad mental o molestias físicas.⁷⁵

⁷⁵ Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, A.G. res. 46/119, 46 U.N. GAOR Supp. (No. 49). p. 189. ONU Doc. A/46/49 (1991). Principios 8 y 9.

Por deficientes prácticas profesionales se levantaron varios expedientes: En la Auxiliatura de Jutiapa se inició el expediente ORD. JUT. 025-2009/DCP por denuncia hecha por una persona a título individual contra el personal del Hospital de Jutiapa. El denunciante ingresó a su esposa el 4 de febrero de 2009 en estado de gravidez y le practicaron cesárea. A raíz de la operación ha quedado inmóvil de sus piernas y con mucho dolor en la columna.

La Auxiliatura corroboró la situación atribuyéndolo a mala práctica profesional del anestesista. El Ministerio Público convocó a una audiencia conciliatoria entre las partes para proporcionarle la atención médica que se necesitaba para la esposa del denunciante, mientras se deducen responsabilidades de acuerdo con los dictámenes del médico forense.

Hubo también casos de negligencia en el cumplimiento de funciones y deberes, como el que originó el expediente EIO.QUI.07-2009/DESC contra el Alcalde Municipal de San Bartolomé Jocotenango, de Sacatepéquez. El Alcalde no ha tomado las medidas pertinentes para potabilizar el agua, aduciendo que a los vecinos no les gusta el cloro en el vital líquido.

Frente contra el Hambre. El incremento de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en el llamado Corredor Seco originó que el Procurador de los Derechos Humanos, juntamente con autoridades de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establecieran un Frente contra el Hambre, para considerar y establecer acciones que faciliten la atención a niños y niñas con desnutrición.

Se logró incidencia ante autoridades locales y la sociedad civil, se pudo coordinar con autoridades del Gobierno y lograr diversos apoyos en la organización del censo nutricional, la elaboración de instrumentos consolidados e informes sobre el trabajo de campo realizado. Se establecieron los casos, número de niños y niñas afectadas por departamento, comunidad y edades entre 0 y 5 años. Finalmente, fueron remitidos 556 casos de niños con desnutrición aguda para su atención en hospitales nacionales y centros de recuperación nutricional.

2.9 Derecho a la seguridad y asistencia social

La Seguridad Social en Guatemala forma parte del sistema nacional de salud. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene el mandato de participar con las instituciones de salud en forma coordinada.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió la seguridad social como "La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos."⁷⁶

En el tema de seguridad Social también es importante el concepto de accesibilidad, el cual se refiere a la facilidad con la que algo puede ser usado, visitado, otorgado o concedido en general por todas las personas, incluidas las que padecen de alguna discapacidad.

Sobre el régimen de seguridad social, la Constitución Política de la República de Guatemala menciona, en el artículo 100, que se establece para beneficio de los habitantes de la Nación y que su régimen

"se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria (...) que el Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado por el artículo 88 de esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo (...) que la aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,

⁷⁶ OIT, Administración de la Seguridad Social.

*que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias; goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. ((...)) el Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del Instituto”.*⁷⁷

El IGSS se define como una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias; goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse.

El Decreto 295 del Congreso de la República, conocido también como Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, rige todo lo referente al Instituto y define las disposiciones a las que deben ajustarse las autoridades correspondientes en materia de las decisiones que se tomen respecto a la aplicación y realización del derecho a la seguridad social, de acuerdo con el ordenamiento legal existente.

Esta normativa se apega a los convenios que en materia de derechos humanos, de trabajo, seguridad social y derecho internacional se han expresado en reuniones, conferencias, convenios, protocolos y acuerdos firmados, reconocidos y ratificados por Guatemala.⁷⁸

El 29 de diciembre de 1996 se suscribió por parte del gobierno del presidente Álvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y ante el testimonio de la Organización de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y la población guatemalteca, el Acuerdo Definitivo de Paz Firme y Duradera.

Uno de los Acuerdos de Paz, el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, en el tratamiento del tema II, Desarrollo Social, establece en el inciso c. Seguridad Social, el reconocimiento de que el régimen de seguridad social corresponde al IGSS como entidad autónoma y acuerda que “deben tomarse medidas correspondientes a efecto de ampliar su cobertura, mejorar sus prestaciones y la amplitud de sus servicios con calidad y eficiencia”.

Algunas de las disposiciones que no pueden pasarse por alto respecto de la seguridad social y que establece la Ley Orgánica, se refieren a la responsabilidad de garantizar la gestión autónoma del IGSS y la coordinación de las instituciones de salud en el marco del Sistema Nacional Coordinado de Salud.⁷⁹ También establecer y fortalecer los programas de asistencia médica y prestaciones relacionadas con enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivencia, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, empleo y familiares; fortalecer y garantizar la eficiencia, universalidad, unidad y obligatoriedad en el funcionamiento del Instituto; fortalecer la solvencia financiera mediante el control tripartito de contribuciones, promover nuevas formas de gestión del IGSS con la participación de sus sectores constitutivos, hacer efectiva la inserción del IGSS en el sistema coordinado de salud y crear condiciones para la incorporación plena de todos los trabajadores a la seguridad social.

Cumplimiento de aspectos básicos de la Ley Orgánica del IGSS: Los principales programas que el IGSS presta son el de Accidentes, Enfermedad, Maternidad (AEM), Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) y el Plan que cubre beneficios para los trabajadores del IGSS. Recientemente se aprobó el Programa Especial de Protección a Empleadas de Casa Particular (PRECAPI).⁸⁰

⁷⁷ Se relaciona con la deuda que tiene el Estado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que a finales del año 2008 se elevó a 14 mil 263 millones, 510 mil 219 quetzales (Q 14,263,510,219).

⁷⁸ Guatemala ha ratificado muchos convenios de la OIT en materia laboral, no así el Convenio 102 sobre la Seguridad Social (norma mínima).

⁷⁹ Establecido en el Código de Salud y que debiera fortalecerse con base en el Acuerdo sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria.

⁸⁰ El Precapi es apoyado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), que paga una cuota mensual de Q40 por cada trabajadora doméstica; el resto del aporte es pagado mensualmente por el patrono (Q40) y por la empleada (Q20). El 12 de julio de 2009 fue firmado el convenio entre el IGSS y la SOSEP. Durante su fase inicial beneficiaría a un aproximado de 10 mil empleadas domésticas del departamento de Guatemala.

El propósito manifestado desde su creación de alcanzar la cobertura de todos los trabajadores que componen la Población Económicamente Activa (PEA) no se ha logrado.

La información disponible (actualizada hasta 2007) sostiene que la cobertura de los programas de Accidentes, Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Sobrevivencia llega a todos los departamentos del país, a excepción de Petén, El Progreso y Santa Rosa, en donde solo funcionan los programas de accidentes e Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.

Algunas características de la población afiliada: En los últimos años la población afiliada ha crecido y está compuesta mayoritariamente por empleados del sector formal que trabajan en empresas privadas y con el Estado, aunque no al ritmo de crecimiento de la PEA, que ha sido en los últimos 14 años de 4%, mientras los afiliados han aumentado a un ritmo de apenas 1.91%.

Al igual que las empresas y patronos, los afiliados se encuentran ubicados principalmente en 5 de los 22 departamentos (Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Izabal y Suchitepéquez) y más del 60% labora en la capital.

Igualmente, más del 60% de empresas inscritas se concentra en el departamento de Guatemala y el 82% en seis departamentos, incluido el de Guatemala. Los patronos activos de las actividades económicas Servicios, Comercio e Industria concentran casi las tres cuartas partes de las empresas, mientras la agricultura, la actividad que utiliza una mayor proporción de la PEA, apenas tiene registrado el 14.09%, con tendencia a decrecer.

La población protegida, entre la que se contemplan los afiliados, esposas y compañeros, hijos menores de 5 años, pensionados del programa IVS, jubilados del Estado y no afiliados, asciende según los últimos informes del IGSS de 2007, a 2 millones 384 mil 643.

Es conocida la cobertura todavía insuficiente del sistema de seguridad social en Guatemala. La demanda de trabajo de las empresas es menor a la oferta de trabajo, lo que hace que el trabajador, por la necesidad de obtener ingresos para su manutención y el de su familia, y ante la incapacidad del sistema o mercado laboral de brindar empleos formales, se obliga a formar parte del empleo informal. El porcentaje de cobertura ha disminuido, pues en 1994 era de 33.52% y en 2007 fue 25.94% de la PEA.

También el acceso a la seguridad social se ha visto con muchas limitaciones por las políticas del Estado y de empresas particulares, especialmente del área rural, que dificultan la cobertura del IGSS en la actividad agrícola, ya sea cobrando la cuota laboral de IGSS y no trasladándola a éste, o simplemente al no incorporar a sus empresas como tales ante el Instituto para evitar pagar los salarios mínimos o al asumir una posición a ultranza contra las instituciones públicas.

En relación con los enunciados que se refieren a que “todo régimen de Seguridad Social obligatorio se desenvuelva a base de un delicado mecanismo financiero (...)” y que “los egresos deben estar estrictamente proporcionados a los ingresos y que no se pueden ofrecer demagógicamente beneficios... (...) sin antes precisar sus costos y (...)si los recursos que al efecto se hayan presupuestado van a ser efectivamente percibidos(...)”, lo que se puede decir al respecto es que de 1956 al 2007 el Estado, como empleador, sumó una deuda total por 12 mil 095 millones, 157 mil 614 con 75 centavos (Q12,095.157,614.75) al IGSS. En 2008 esa deuda se elevó a 14 mil 263 millones, 510 mil 219 quetzales (Q 14,263,510,219).

El Estado también, desde hace varios años ha implementado programas para evadir sus obligaciones con la seguridad social, especialmente a partir de la contratación de servicios laborales por medio del renglón 029, por lo cual se evaden las prestaciones de los trabajadores, entre ellos el pago del seguro social, que es un factor importante que ha incidido en los problemas financieros del IGSS. Aunque el Ejecutivo integró al magisterio el Programa Nacional de Autogestión Educativa (PRONADE) al sistema oficial de trabajadores que se rigen por el Decreto 1485, Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, conocido también como Ley de Escalafón del Magisterio Nacional,

dando con ello un paso importante en el marco de la ampliación de la cobertura y, así, garantizar este derecho. A ello se agrega la deuda que el sector privado y las municipalidades han acumulado al IGSS.

El Instituto también tiene contribuciones por cobrar con la Municipalidad de Guatemala y el MSPAS, las cuales se iniciaron desde 1979.⁸¹

Tabla 62
IGSS: cuentas por cobrar a corto plazo
Al 31 de diciembre 2006 y al 30 de abril 2007
En quetzales

	31 de diciembre de 2006	30 de abril de 2007
Deudores internos	12.301.735,34	42.325.276,00
Deudores externos	185.884.716,98	159.488.195,49
Canadian Imperial Bank of Commerce	25.541.205,99	25.541.205,99
Merril Lynch Bank	111.326.500,00	111.326.500,00
Banco Metropolitano	378.646,57	378.646,57
Banco Empresarial	1.401.168,76	1.401.168,76
Crédito Hipotecario Nacional	708.498,34	708.498,34
Banco Promotor	121.986,30	121.986,30
Fideicomiso Agroindustrias Asociadas	4.800.000,00	4.800.000,00
Financiera Agro Comercial S.A.	3.900.098,29	3.900.098,29
Deudores varios	37.706.612,73	11.310.091,24

Fuente: elaboración propia, con base a informes del IGSS

El IGSS ha sido víctima de operaciones fraudulentas relacionadas con la debilidad del sistema financiero y con políticas especulativas. No ha recuperado la inversión por el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social (FIPRODES), el cual al 31 de diciembre de 2007 ascendía a Q242 millones 643 mil 448.27, por lo cual se encuentra como querellante adhesivo en un juicio que involucra a 21 personas.

Otro factor que drena las posibilidades de ingresos para el Instituto son las políticas laborales de las empresas maquiladoras y las que se han instalado en las zonas de libre comercio. A todo ello se agrega, además, el crecimiento de la economía informal.

Hasta el momento, el hecho que más atenta contra las finanzas del IGSS lo constituye la onerosa deuda que mantiene el Estado hacia el Instituto, tema que fue motivo de controversia en el pasado proceso electoral de 2007, y que se mantiene sin solución favorable para esa institución y su función de hacer realidad progresiva el derecho a la seguridad social.

Una medida innovadora es la creación del Plan Piloto del Programa Especial de Protección a Empleadas de Casa Particular (PRECAPI); el primer programa creado por el IGSS en 32 años.⁸²

Para paliar la situación financiera general, desde hace varios años se ha acudido a la inversión financiera de los fondos del Instituto⁸³ en distintas instituciones y bancos del sistema (Ministerio de Finanzas Públicas, Banco de Guatemala, y bancos privados), lo cual ha resuelto, en parte, la situación financiera del IGSS. Las

⁸¹ Se trata de derechos por cobrar a favor del IGSS en concepto de cuotas pendientes de pagar por la Municipalidad de Guatemala y el MSPAS por cuentas morosas.

⁸² “Sólo 45 trabajadoras domésticas hay inscritas en el PRECAPI”, *La Hora*, Guatemala, 23 de octubre de 2009.

⁸³ Al 31 de diciembre de 2007 el IGSS tenía invertidos fondos por Q 180 millones 672 mil 366.16, lo que representó una variación positiva de Q 4 millones 348 mil respecto al año anterior.

inversiones obtuvieron, al 31 de diciembre de 2007, el 8.66% de interés, por lo que percibió Q 164 millones 986 mil 291.00 de intereses.⁸⁴

En sus informaciones, el IGSS asegura que ha mejorado la inversión en infraestructura, atención al público y afiliados, ampliación de cobertura y el clima laboral con los trabajadores a través de la firma del Primer Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.⁸⁵

Algunas acciones del Procurador de los Derechos Humanos. En la institución del Procurador de los Derechos Humanos se aperturaron 164 expedientes de investigación y se realizaron 171 acciones específicas, para un total de 335 acciones sobre violaciones al derecho a la seguridad social.

Estos expedientes y acciones se debieron a la negación de pensiones por Invalidez, Vejez y Sobrevivencia de afiliados, las cuales representaron la cuarta parte de las acciones realizadas por el IGSS (25.67%).

Otros casos que figuraron en la Procuraduría de los Derechos Humanos fueron los relacionados con insuficiente cobertura social a los beneficiarios (23.58%) y la discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social (20.60%).

En algunos casos, el Procurador consideró necesario plantear acciones de amparo ante los tribunales contra el Gerente y la Junta Directiva del IGSS para preservar la salud de las personas, los cuales se derivan de disposiciones legales o normativas que atentan contra el derecho a la seguridad social.

En 2009 el Magistrado de Conciencia interpuso 110 acciones de amparo, de las cuales 45, que representan el 41%, fueron planteados en contra de la Junta Directiva del IGSS, por negarse a proporcionar medicamentos y atención a las personas afiliadas que lo necesitaban urgentemente y una acción planteada contra del gerente del IGSS por la emisión del Acuerdo 09/2009.

Las acciones más importantes en relación al derecho a la seguridad social fueron el amparo interpuesto a favor de los pacientes que padecen de insuficiencia renal y trasplante renal, en contra de la Junta Directiva del IGSS, por violación del derecho a la salud, a la vida y la integridad física de dichos pacientes.

Asimismo, el amparo promovido a favor de los pacientes que padecen o han sido diagnosticados con enfermedades catastróficas, crónicas y degenerativas, tales como cáncer, padecimientos renales crónicos, esclerosis múltiples, artritis reumatoidea refractaria, Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), metástasis de pulmón, adenocarcinoma de colon, en contra del Gerente del IGSS por la emisión del Acuerdo 09/2009 de fecha 24 de marzo de 2009 y que entró en vigencia el 1 de abril del citado año.

El acuerdo contiene el Normativo para el Manejo y Control de Recetas del IGSS, donde se encuentran violaciones relacionadas con la seguridad jurídica, la seguridad social, supremacía constitucional y principio de legalidad, libertad de acción, la salud, bienestar físico y psicológico y la igualdad y dignidad de las personas. En este caso se otorgó amparo provisional a favor de las personas afectadas por dicho Acuerdo.

En 2009, en el marco de las supervisiones administrativas, en una de éstas a los Centros de Atención Médico Integral para Pensionados (CAMIP), en el de Pamplona zona 13, la Procuraduría de los Derechos Humanos verificó la mala atención hacia la población adulta mayor beneficiaria, por parte del personal administrativo y secretarial, falta de medicamentos y citas médicas facilitadas hasta con nueve meses de tiempo previo.

En el CAMIP Barranquilla zona 5 se pudo establecer que la atención llega a 5,500 pacientes; cuentan con citas escalonadas cada dos meses y los pacientes llegan 40 minutos o media hora antes de la misma, cuentan con 6 clínicas de enfermedad común y 9 de subespecialidades.

⁸⁴ IGSS. *Informe de Labores*. Guatemala, 2007.

⁸⁵ Información IGSS. Guatemala, 5 de enero de 2010.

En cuanto a las personas con discapacidad, nuevamente se tuvo como principal ente denunciado al IGSS, a través del Departamento del IVS, por denegación de coberturas por invalidez y por negar atención y medicamentos a pacientes con enfermedades terminales. Por maltrato se registraron varias denuncias en contra de unidades periféricas del seguro social.

Respecto al Programa de IVS, ante la posibilidad de que en 2013 los gastos rebasen los ingresos que se perciben para financiarlo y con ello hacer inviable la continuidad del Programa, la creación de una figura mixta de jubilación o el establecimiento de una cuenta individual que funcione como un fondo de pensiones fueron dos propuestas que entidades particulares, no gubernamentales y el IGSS presentaron como posibles reformas.⁸⁶

Las medidas que se propusieron sólo aplazarían el punto de equilibrio hasta 2025. La implementación de estas propuestas fue adversada por el Procurador de los Derechos Humanos, quien manifestó que accionaría legalmente contra las disposiciones que modifiquen las condiciones de las que gozan actualmente los pensionados del IVS, pues serían medidas inconstitucionales.⁸⁷

También se registraron denuncias contra del IGSS por manejo inadecuado de los procesos de parto, así como por no pagar a una afiliada prestaciones en dinero, luego de haber dado a luz. Entre los expedientes de 2009 relacionados con estos casos, se encuentran:

Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez, con apertura del Expediente Ord.Such.No.153-2008/DESC el 22 de enero de 2009, por denuncia de afiliado al seguro social, en contra del IGSS. La esposa del denunciante dio a luz a un niño en esa institución y al momento de tratar de inscribirlo en el Registro Nacional de Personas (RENAP), le exigieron presentar el certificado médico de nacimiento, pero en el IGSS no se lo quisieron extender, pues lo condicionaron a llevar a un donador de sangre. De lo investigado se estableció que se le había exigido tal requisito para abastecer el banco de sangre, de tal manera al afiliado se le violaban sus derechos, toda vez que la norma señala que para obtener los servicios del seguro social la única forma de acreditar derechos es estar cotizando. Se logró interceder a favor del denunciante ante la junta directiva del IGSS y se corrigió tal procedimiento.

Se abrió el expediente ORD.48-2009/DESC por denuncia contra el IGSS, ya que los denunciantes manifestaron que el personal que labora en el dicho instituto no le proporcionaron atención inmediata a su hijo de un año, quien presentaba problemas bronquiales. Ningún médico atendió al menor; los medicamentos no le fueron suministrados en el horario establecido, sino hasta tres días después, lo que generó que el niño no reaccionara por lo que fue trasladado al Hospital de la zona 6 de la ciudad de Guatemala, donde también se dieron varios inconvenientes.

En camino a las instituciones hospitalarias tuvieron que regresar por otros pacientes; asimismo, la ambulancia que trasladó al niño lo hizo por gestión de los propios familiares, quienes solicitaron el apoyo al IGSS de Salamá, Baja Verapaz. La ambulancia no llevaba suficiente oxígeno para los pacientes. Finalmente el menor falleció.

Se abrió el expediente ORD.SM.07-2009/DESC contra el IGSS. El denunciante refirió que en abril de 2007 sufrió un accidente laboral por el cual perdió dedos de la mano derecha mientras trabajaba para el departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad de San José El Rodeo, de San Marcos. A raíz del accidente inició los trámites en las oficinas del IGSS del municipio de Malacatán para lograr el pago de prestaciones correspondientes. Pese a reiteradas presentaciones ante la unidad respectiva del IGSS para preguntar sobre los resultados de la gestión, el trámite no había concluido debido a que la tesorera del municipio de San José el Rodeo no había enviado a tiempo las nóminas respectivas.

⁸⁶ “Fondo de pensiones podría rescatar IVS”, *Siglo Veintiuno*, Guatemala, 20 de julio de 2009.

⁸⁷ *Ibid.*

Las investigaciones establecieron que la municipalidad de San José el Rodeo finalizó la relación laboral con el denunciante y sí cumplió con el pago de prestaciones por término de relación laboral (al momento de los hechos se mantenía la relación laboral). Otro aspecto que se conoció es que la Municipalidad de San José el Rodeo tiene una deuda con el IGSS de Q733,809, correspondientes al periodo de octubre de 2004 a octubre de 2008 y que por ese motivo no se ha hecho efectivo el pago. Sin embargo, existe un reconocimiento de deuda por parte de la Municipalidad por lo que se solicitó la reconsideración del caso para hacer efectivo el pago de prestaciones al denunciante.

La Auxiliatura Departamental de Escuintla abrió el expediente Ord.Esc.016-2009/DESC por denuncia contra el Departamento del IVS del IGSS de Escuintla, programa al cual la denunciante solicitó ser acogida. Luego de la investigación correspondiente, se conoció que la unidad de prestaciones pecuniarias del IGSS resolvió, luego de la revisión solicitada por la Procuraduría a través de la Auxiliatura de Escuintla, el beneficio con Q 600.84 de pensión para la denunciante a partir del 8 de mayo de 2009, tras determinar que la afiliada llenaba los requisitos legales del IGSS para ello.

Se inició el expediente ORD.IZA.12-2009/DESC por denuncia contra el IGSS. El denunciante manifestó que el 18 de febrero de 2009 su hija fue trasladada del hospital del IGSS a un hospital privado, para que fuera intervenida quirúrgicamente por parto. Se expresó que el hospital del Seguro Social no tiene equipo adecuado para la atención de los partos que presentan complicaciones, por lo que fue intervenida en el centro privado. A través de la cesárea practicada, la señora dio a luz a un niño, pero la intervención se complicó en dicho hospital, razón por la que decidieron trasladar a su hija al hospital de la zona 6 del IGSS. La investigación confirmó el traslado de la paciente al hospital privado y, según el informe remitido por el director ejecutivo de dicho hospital, éste fue por presentar embarazo a término con sufrimiento fetal agudo para CSTP, y que después de la intervención quirúrgica presentó atonía uterina. Con ello se verificó insuficiencia del IGSS en cuanto a cobertura por atención de riesgos hacia sus pacientes y afiliados.

En la Auxiliatura Departamental de San Marcos se abrió el expediente ORD.SM.01-2009/DESC por denuncia contra el IGSS. La denunciante indicó que por orden de un médico en el Instituto, le debían practicar un USG-Obstétrico, pero al presentarse a la respectiva Unidad del IGSS de Malacatán le indicaron que no contaban con ese servicio y que debía acudir a la ciudad de Quetzaltenango, situación grave puesto que su embarazo era de alto riesgo. Con la investigación y los informes circunstanciados se constató que la empresa que prestaba dicho servicio había presentado su renuncia al IGSS por lo que se había suspendido dichos servicios. Con la gestión iniciada, en cuestión de días el mismo fue restablecido.

2.10 Derecho a una vivienda adecuada

El marco legal guatemalteco contiene y regula la vivienda en los artículos constitucionales 23, Inviolabilidad de la vivienda; 67, Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas y 105, Viviendas de los trabajadores.

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, el Estado se obliga, a través de entidades específicas, a apoyar la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, y crear los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender diferentes programas para que los trabajadores tengan la opción a viviendas adecuadas y que llenen los requisitos de salubridad.⁸⁸

Se encuentra vigente el Decreto 126-96, Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos y sus reformas por Decreto 74-97, el cual establece las bases institucionales, técnicas y financieras, que debieran permitir a las familias acceder a una solución integral digna y adecuada al derecho a la vivienda. Sin embargo, diferentes sectores se han pronunciado a favor de reformas a dicha ley ya que se cuestiona su actualidad y eficacia, con ese propósito se encuentra en el Congreso de la República la iniciativa de Ley para la Vivienda 3869 y otra propuesta de reformas del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, con lo que

⁸⁸ Constitución Política de la República, artículo 105.

se pretende sustituir la actual Ley de vivienda y crear un ministerio que aborde con mayor actualidad la problemática.

La normativa internacional que incluye el derecho a la vivienda es amplia; el Estado de Guatemala ha aceptado y ratificado convenios en la materia. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, el derecho a una vivienda adecuada se sumó a la legislación universal aplicable como parte primordial de los derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo valida plenamente, pues reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, donde la vivienda juega un papel preponderante para mejorar las condiciones de vida. Dicho pacto tomó vigencia el 9 de agosto de 1988, por medio del Decreto del Congreso de la República No. 69-87, de fecha 30 de septiembre de 1987.⁸⁹

El aumento anual de la población hace que cada año se integren 90,912 nuevas familias⁹⁰ que demandan vivienda recién construida, acrecentando de esa manera el déficit cuantitativo de hogares.⁹¹

Si se toma en cuenta que la vida útil de una vivienda es de 50 años, se concluye que anualmente debería reponerse 2% de las viviendas propias y adecuadas, lo que aumentaría el déficit en 23,580 unidades. Con ello, el déficit habitacional total crecería en 114,492 unidades anualmente.⁹² Esto implica que en el período 2003-2009 tuvo que construirse más de 800 mil viviendas para mantener el déficit habitacional existente en 2002. Por otro lado, de no haberse construido esa cantidad, el déficit habitacional se estimaría, en 2009, en casi 2 millones de viviendas.

Sin embargo según datos del Viceministerio de Vivienda del MICIVI, el déficit habitacional se mantiene para 2009 en 1 millón 200 mil viviendas, e informa que se necesita anualmente, para cubrir dicho déficit, la cantidad de Q 600 millones.

A nivel departamental, Guatemala presentaba en 2002 mayor número de habitantes (2 millones 641 mil 473), incrementándose en 2009 a más de 3 millones. El déficit de vivienda para el departamento ese año era de 252 mil 211; en tal sentido para 2009 el déficit habitacional sería aún mayor.

Un estudio realizado en el departamento de Guatemala en 2008 por la Asociación Nacional de Cooperativas de Vivienda (ANACOV), señala que la demanda de vivienda responde en gran medida a la disponibilidad de los ingresos para adquirirla.

Dicho estudio informa que uno de cada diez ciudadanos capitalinos busca una vivienda y que existe una demanda de 59,504 viviendas ante la cual coexiste una oferta menor (11,127 viviendas construidas) que genera una demanda insatisfecha de 48,377.

El estudio separa a los demandantes por niveles de ingreso, con una mayor demanda en la población con ingresos entre Q 3 mil y Q 8 mil, seguida de la población con ingresos dentro del rango de Q 0 a Q 3 mil y, por último, la población de Q 8 mil a Q 60 mil.

En ese sentido, las personas más afectadas por el déficit de vivienda son las de menores ingresos, ya que tienen pocas opciones que les permitan adquirir una casa con las condiciones mínimas que contribuyan a tener una vida segura y digna.

⁸⁹ Morán Mérida, Amanda e Ivonne Solórzano. *Incidencia de la sociedad en el fortalecimiento de la institucionalidad y presupuesto del sector para la atención a la problemática de vivienda 2004-2006. Estudio de las Soluciones Habitacionales de los Programas del FOGUAVI*. Fundación Guillermo Toriello. pág. 7.

⁹⁰ Se mantiene el criterio de que el tamaño promedio del hogar o núcleo familiar es de cinco personas. También es importante mencionar que para medir el déficit habitacional, tanto el sector público como privado manejan distintos datos estadísticos.

⁹¹ Según el XI Censo de Población y VI de Habitación, en 2002 Guatemala contaba con 11 millones 791 mil habitantes y, según estimaciones, del INE para 2009 se incrementaría en 3 millones. En 2002 el déficit habitacional, reflejado en toda la República, era de 1 millón 21 mil 592 hogares.

⁹² Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. *Análisis del Déficit Habitacional*. Guatemala, julio de 2004.

Características de la vivienda adecuada. El derecho a la vivienda debe ser observado como el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en un lugar determinado. La vivienda adecuada debe entenderse como la disposición de un lugar donde poder aislarse, si se desea, con espacio y seguridad adecuada, iluminación y ventilación apropiada, infraestructura básica y situación conveniente, con acceso y disponibilidad de trabajo, servicios básicos y a un costo razonable.⁹³

Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida apropiada para sí y su familia, y la vivienda adecuada es un derecho universal que tiende a mejorar las condiciones de vida y de existencia.⁹⁴

El derecho a una vivienda adecuada está íntimamente relacionado al goce de otros derechos, como al trabajo, al salario suficiente, a las prestaciones sociales y al derecho a la sindicalización. También está relacionado con el acceso y tenencia de la tierra, derechos culturales y ambientales que conllevan a tener una vivienda ubicada en un ambiente sano y acorde a la identidad cultural.

El concepto de adecuación subraya una serie de factores generales como seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, vivienda habitable, vivienda asequible, lugar y adecuación cultural y ambiental.

La seguridad jurídica de la tenencia adopta varias formas; cualquiera fuese el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de un grado de seguridad de tenencia que garantice la protección legal contra el desalojo, hostigamiento y amenaza.

En Guatemala, en el artículo 23 de la Constitución Política de la República se contempla la inviolabilidad de la vivienda, y en el artículo 67, de la protección a las tierras y sobre la protección de la vivienda popular, se garantiza su posesión y desarrollo con el fin de asegurar una mejor calidad de vida.

La creciente formación de asentamientos informales presenta una problemática caracterizada por la inseguridad de la tenencia y títulos de propiedad, las construcciones precarias, el déficit de servicios básicos e infraestructura y los riesgos ambiental y sanitario.

En lo que respecta a la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, la vivienda debe contener los servicios esenciales para la salud, seguridad y alimentación y, primordialmente, los recursos y servicios permanentes como el agua potable, energía para la cocina, la calefacción, ventilación y alumbrado, instalaciones sanitarias y salubres, de almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenajes y servicios de emergencia.

De la supervisión a las distintas instituciones responsables de la potabilidad del agua, realizada por la institución del Procurador de los Derechos Humanos en 2009, se concluye que el porcentaje de hogares que cuenta con agua potable en el área urbana —en 31 municipios—, es de 87.3%, mientras que para el área rural es de 63.6%.

Asimismo, durante una cuarta parte del día, los hogares no cuentan con el servicio, por lo tanto, la cantidad es insuficiente y el servicio deficiente. La situación presenta mayor vulnerabilidad en el área rural ya que sólo tienen agua la mitad del día. En ese sentido, el derecho humano al agua se encuentra gravemente vulnerado para la mayoría de la población guatemalteca, situación que afecta el derecho a una vivienda adecuada.

Los datos anteriores reflejan la insuficiencia del servicio de agua potable en las viviendas. Sin embargo, en el área rural y urbana las viviendas improvisadas carecen, además del agua, de servicios como drenaje y luz, entre otros, exponiendo a quienes las habitan a enfermedades. Los materiales utilizados en la construcción de las

⁹³ Observación General No. 4 del Comité DESC. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1, del artículo 11 del Pacto).

⁹⁴ Artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

viviendas improvisadas son: cartón, lámina, piedras, bajareque, piezas de madera, que no los protegen de los fenómenos y desastres naturales.

En Guatemala, cientos de asentamientos humanos ubicados en áreas de riesgo y sin condiciones de habitabilidad,⁹⁵ se encuentran en situaciones que los hacen vulnerables al clima, fenómenos telúricos y otros desastres que atentan contra la vida de sus ocupantes. Debe tomarse en cuenta que las viviendas inadecuadas están relacionadas con tasas de mortalidad elevadas.

La ciudad de Guatemala ha presentado durante las últimas décadas, un grado de concentración o macrocefalia urbana aguda. Este fenómeno fue provocado por la migración desde el área rural a partir de la década de 1950, la falta de planes y programas de descentralización económica y política del Estado y la instalación, en la ciudad capital y los municipios aledaños, de los principales centros de operaciones productivas del país.

Debido a ello, el crecimiento demográfico en la capital ha sido de 4% anual, superior al porcentaje de 2.9% a nivel nacional. Una de sus consecuencias es la actual presencia de asentamientos humanos en áreas marginales de la región metropolitana.

La situación de los asentamientos humanos, ubicados en una de las áreas más propensas a desastres naturales del país y en espacios como barrancos y laderas, aumenta el nivel de vulnerabilidad en que viven los pobladores de estos lugares.

Ante, el problema del crecimiento y ordenamiento urbano en la ciudad capital, desde 2004 la Municipalidad capitalina ha contemplado el Plan de Desarrollo Metropolitano, con proyecciones al 2010, denominado “Metrópolis 2010”. En él se incluye, por primera vez, el tema de medio ambiente y los desastres naturales y se pretende definir las áreas vulnerables a desastres, tomando en cuenta la vulnerabilidad física y social.

Sin embargo la cantidad de asentamientos ubicados en la región Metropolitana sigue en ascenso: existen alrededor de 200 asentamientos precarios, donde viven más de 230 mil personas, que forman parte de aproximadamente 400 asentamientos ubicados en la región.⁹⁶

Tabla 63
Asentamientos precarios por zona, 2003

Zona	Asentamientos	Familias
1	4	497
2	2	112
3	9	3,663
5	3	1,232
6	23	4,121
7	32	8,647
12	15	6,992
13	4	404
16	3	1,447
17	7	3,111
18	63	11,614
19	1	157
21	9	5,651
Total	175	47,648

Fuente: ASIES. *Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala*.

⁹⁵ Por habitabilidad se entiende la capacidad que tiene el hogar de proteger a sus ocupantes de los fenómenos naturales y amenazas a la salud, de riesgos estructurales y vectores de enfermedad, aparte de ofrecer un espacio adecuado.

⁹⁶ ASIES. *Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala*. Guatemala, 2003.

En el informe *Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala*, realizado por ASIES, se indica que para 2003 la ciudad capital poseía más de 175 asentamientos, con más de 47,648 familias; en las zonas 18, 7, 12, 6 y 21 la mayor cantidad.

Según el género y la etnia también puede sufrirse de discriminación en el acceso a la vivienda. Las limitaciones que las mujeres enfrentan para adquirir una vivienda adecuada son múltiples y van desde la deficiente producción social de vivienda, escasos anteproyectos de ley relacionadas con la vivienda propuestos por la sociedad civil con enfoque de género, las dificultades de acceso a la tierra, a la propiedad, al crédito y al subsidio, obstáculos e inasistencia legal, paradigmas culturales y religiosos —relacionados con el goce del derecho a la vivienda en todos sus componentes—, marginalización y exclusión —por la triple discriminación de ser pobre, mujer e indígena—, desplazamientos forzosos, expropiaciones, violaciones de los derechos relacionados a la vivienda —con especial énfasis en el derecho al agua, al trabajo y a la salud—, violaciones relacionadas con la privatización de los servicios públicos, entre otros temas.

El INE y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) en el informe sobre indicadores de género de 2007 refiere que, de los habitantes que tienen la tierra con régimen de propiedad de vivienda, sólo 16.91% son mujeres, en comparación con 81.83% de hombres que gozan de ese derecho. Esta situación afecta aún más a las mujeres en el área rural, ya que únicamente el 15.45% vive dentro del régimen de propiedad de vivienda.

La vivienda de la población indígena de Guatemala está condicionada a factores ambientales, culturales y económicos, tanto en el acceso a los recursos naturales como a ingresos monetarios; y se caracteriza por el hacinamiento, ya que un solo cuarto sirve de cocina, comedor, dormitorio, bodega y hasta cobertizo para algunos animales domésticos. Esta realidad manifiesta el problema de la promiscuidad habitacional (grupos de personas-adultos, adolescentes y niños que comparten todos juntos una misma habitación, sin tener privacidad) originada por la pobreza y el excesivo número de hijos.

En la gran mayoría de las viviendas indígenas, las paredes se construyen con materiales como bahareque, adobe, cañas, madera, y los techos de palma, paja, hojas, teja de barro y lámina; el piso es la tierra misma; además, carecen de instalaciones de agua potable, drenajes, letrinas y baño, energía eléctrica, etc., es decir, condiciones higiénicas mínimas que no son atendidas como exige el derecho a la vivienda digna.

Por otra parte, la seguridad de las viviendas como la de sus ocupantes, se ha visto vulnerada por los altos índices de violencia registrados durante los últimos años. En cuanto a los delitos contra el patrimonio registrados por la PNC, el robo a residencias es el que mayor porcentaje representó (45%) a octubre de 2009.

En el ámbito nacional se registraron 779 robos a residencias; en muchos de los casos, la violencia, las extorsiones y los robos a éstas y sus habitantes los obliga a desplazarse a zonas con menores probabilidades de robo o a evitar vivir, como es común, en una situación de inseguridad y temor.

En ese sentido, según estadísticas de la PNC, los departamentos con más robos de vivienda a octubre de 2009 fueron: Guatemala (565), Sacatepéquez (65), Suchitepéquez (16) y Escuintla (14); los municipios capitalinos que reportan altas cantidades de robos a viviendas fueron la ciudad capital (277), Villa Nueva (82), Mixco (60) y Fraijanes (33), y las zonas 1, 2, 7, 11 y 12 capitalinas.

La adecuación cultural y ambiental de la vivienda, es la manera de construir la vivienda, los materiales utilizados. Los fundamentos de las políticas deben, al mismo tiempo de proporcionar un ambiente sano a sus habitantes, permitir la expresión de la identidad y la diversidad cultural en la vivienda.

Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales y ambientales que aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.

El gasto personal o del hogar para el acceso a una vivienda. Durante décadas el crecimiento de la producción de bienes y servicios medido por el crecimiento del PIB debió incrementar el ingreso de los hogares.⁹⁷ Sin embargo, los efectos de la crisis económica de 2009, se reflejaron en la disminución del empleo, del ingreso, de las remesas provenientes del extranjero, del consumo familiar y, en cierta medida, el cambio en las prioridades de gastos dentro del hogar.

Los ingresos mínimos, dependiendo del sector productivo a que se pertenezca, en comparación con los gastos del hogar, siguen siendo insignificantes. Con el bajo ingreso que actualmente obtiene un trabajador debe alimentar, vestir, curar y educar a toda su familia. La vivienda debe de incluirse en este ingreso, lo que hace imposible que una familia sobreviva, en condiciones dignas, con ese salario y que pueda ahorrar un porcentaje del mismo para el enganche y las mensualidades de una vivienda.

El ingreso de los hogares no tiene como único origen el empleo, puede provenir de otras fuentes, las cuales pueden ser laborales o no laborales, como las jubilaciones, pensiones, becas, remesas familiares del exterior o las transferencias condicionadas del actual Gobierno entre otros. En el caso de las remesas familiares provenientes del extranjero, durante 2009 reportaron una baja considerable.

La crisis económica de 2009 presentó el problema del desempleo y, con ello, los bajos ingresos laborales y no laborales, y, a su vez, la consiguiente falta de capacidad para optar a una vivienda en algunos casos y la disminución de los gastos necesarios para el hogar. En Guatemala, el MINTRAB, con datos del INE, estimó que el desempleo se incrementó de un 5.3% en 2008 a 5.9% durante 2009.⁹⁸

Responsabilidad del Estado en el acceso a la vivienda. El Estado debe reconocer el derecho humano a la vivienda y asegurar que no se adopten medidas de ninguna clase con la intención jurídica de su menoscabo. Las medidas legislativas y la implementación de políticas progresivas del derecho a la vivienda forman parte del reconocimiento, debiéndose revocar toda ley o política en vigor que sea contraria.

Es obligación del Estado garantizar el acceso a la vivienda adecuada y dar prioridad a la adquisición de vivienda a los grupos sociales que se encuentran en condiciones desfavorables. Debe tomar, como requerimiento invariable, una estrategia nacional de vivienda que refleje una consulta con todas las personas afectadas y sus representantes, incluidas las que no tienen hogar y las alojadas inadecuadamente.

De esta forma, debe adoptar medidas para asegurar la coordinación entre los ministerios, autoridades departamentales, municipales y comunitarias con el objeto de conciliar e impulsar las políticas vinculadas al derecho a la vivienda.

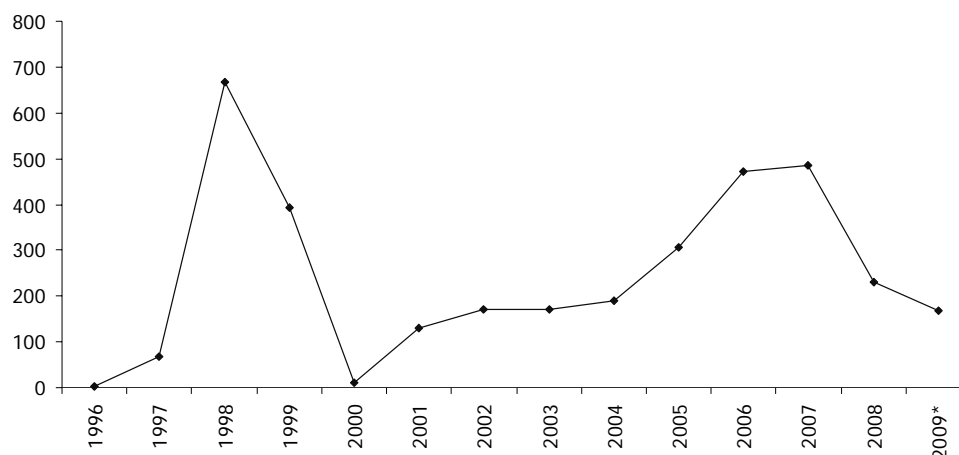
En los Acuerdos de Paz, y específicamente en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, se aborda el tema de la vivienda y se establece la obligación del Estado de aportar no menos del 1.5% de presupuesto nacional de ingresos tributarios a partir de 1997, porcentaje que no ha variado dentro de 0.2% a 1.1%.⁹⁹

⁹⁷ PNUD. *Guatemala: una economía al servicio del desarrollo humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008*. Guatemala, 2008.

⁹⁸ "Mintrab: sube 0.6 puntos de desempleo", *Siglo XXI*, Guatemala, 28 de julio de 2009.

⁹⁹ PNUD. *Guatemala: una economía...* *Op. cit.*, pág. 454.

Gráfica 32
Gasto público de la administración central destinado al sector vivienda
Cumplimiento de metas según los Acuerdos de Paz
Período 1996-2009*
En millones de quetzales



Fuente: elaboración propia con datos del MINFIN.

* Datos a octubre de 2009.

En el caso del Gasto Público de la Administración Central en el Sector Vivienda, para el cumplimiento de metas según los Acuerdos de Paz en el decenio 1996-2006, el gasto destinado al sector presentó fluctuaciones.

El gasto del sector público destinado a la construcción de vivienda, acorde al cumplimiento de las metas de los Acuerdos de Paz, ha tenido un comportamiento irregular, y en los últimos dos años una reducción considerable comparado con el gasto en 2007, con una disminución de 65% durante 2007-2009. En 2005 presentó un gasto de Q 131.3 millones, en 2006 un monto de Q 472.2 millones y en 2007 a Q 484.1 millones, para que en años postreros se redujera drásticamente a Q 231.8 millones en 2008 y en octubre de 2009, Q 168.6 millones.

Como institución gubernamental encargada de garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada, se encuentra el MICIVI, por medio del FOGUAVI a través del programa de subsidio a la vivienda. El fondo otorga los subsidios directamente y facilita el acceso al crédito a las familias que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, así como carencia de una solución habitacional adecuada.

También el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) y el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) juegan un papel importante para garantizar el derecho a la vivienda digna. El FHA facilita la adquisición de vivienda a las familias al asegurar la inversión en financiamiento a largo plazo que otorgan las entidades financieras.

Por aparte se planteó crear para 2009 el Ministerio de la Vivienda, que absorbería al FOGUAVI y otras entidades destinadas al mismo propósito.¹⁰⁰

La participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para proporcionar vivienda y resolver la problemática ha sido importante. Dentro de las principales que han tenido esa participación se encuentran el Fondo de Desarrollo Habitacional Popular (FODHAP), la Asociación Nacional de Construcción de Vivienda (ANACOVİ) y la Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda (FENACOVİ, R. L.).

¹⁰⁰ “Invertirán \$ 200 millones en casas”, Pulso, *Siglo XXI*. Guatemala, 28 de agosto de 2009.

La ANACOVÍ es una entidad que organiza y representa a los constructores de viviendas, con miras al desarrollo y crecimiento sostenido de la industria de la construcción y desarrollo de proyectos de vivienda. Por su parte, la FENACOVÍ tiene como objetivo fomentar el desarrollo del cooperativismo de vivienda, a través de proyectos habitacionales de forma asociativa, para personas que la eligen como una posible solución al problema habitacional.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, en agosto de 2008, trasladaron una propuesta de ley de vivienda al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual se presentó en 2009 como anteproyecto de Ley de Vivienda (iniciativa No. 3869), así como otra propuesta de reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, a través de la Mesa Intersectorial para la Vivienda Popular de Guatemala. Ésta la integran el Movimiento Guatemalteco de Pobladores (MGP), Plataforma Urbana (PU), Federación de Asociaciones y Organizaciones para el Desarrollo de Hábitat Popular (FODHAP) y la Mesa de Cooperativas Autogestionarias de Vivienda. El objetivo de dicha iniciativa y reformas es reemplazar la actual Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos (Decreto 120-96), cuyo contenido establece una institucionalidad muy débil al incluirla como parte de una más de las múltiples atribuciones que tiene el MICIVI, con un cuarto Viceministerio encargado de la vivienda y una entidad financiera de segundo piso, el FOGUAVI, como entidad responsable de enfrentar el problema. Al proponer reformas a la ley del Organismo Ejecutivo se está proponiendo la creación de un Ministerio de la Vivienda.¹⁰¹

La presencia de ONG responde a lo limitado de los programas gubernamentales de vivienda que tradicionalmente no apuntan con seriedad en la dirección de resolver el déficit habitacional que en la actualidad existe en el país.

Por otro lado, la vivienda que promueve el sector privado sólo favorece a las empresas que buscan ocupar los nichos que hay entre sectores de población media y alta.

En ese aspecto, el crédito para vivienda destinado al sector privado ha sido limitado en años anteriores, aunque durante 2009 presentó un alza favorable (el monto de créditos hipotecarios se elevó a 12.9%), con lo cual se dio un salto de Q 7,489.4 millones a Q 8,461.7 millones en el período agosto de 2008 al mismo mes en el 2009. Sin embargo, como se indicó en el párrafo anterior, el incremento no ha favorecido proyectos de construcción de vivienda para población de bajos ingresos.

En este sentido, el FHA reflejó, durante el período 2004-2008, una disminución considerable de las hipotecas liquidadas en 2005 en comparación con 2004; sin embargo, desde 2006 a 2008 las liquidaciones muestran un leve aumento, situación que favorece la propiedad sobre la vivienda.

Tabla 64
Informe de liquidaciones pagadas del FHA
Período 2004-2008

Año	Cantidad	Monto
2004	211	Q38,809,097.64
2005	102	Q23,297,664.81
2006	161	Q31,459,130.90
2007	163	Q33,136,329.26
2008	186	Q37,369,125.75

Fuente: elaboración propia con datos del FHA.

¹⁰¹ Mesa Intersectorial para la Vivienda Popular de Guatemala. *Una ciudad incluyente y segura: Un derecho de las y los humanos*. Guatemala, 2008.

Durante 2009 la cantidad de resguardos de asegurabilidad, o documentos que emite el FHA comprometiéndose a formalizar el Seguro de Hipoteca, sumó 834, con un monto mayor a Q 291 millones, lo que refleja un aumento de la demanda de vivienda de la población al FHA.

Tabla 65
Emisión de seguros pagados del FHA, 2009

Trimestre	No.	Monto
Primer	274	Q 97,838,200.00
Segundo	235	Q 77,387,754.00
Tercer	325	Q 115,929,700.00
Total	834	Q 291,155,654.00

Fuente: elaboración propia con datos del FHA.

Sin embargo, entre agosto de 2008 y 2009 los préstamos y descuentos cuyo destino son bienes inmuebles para la vivienda garantizados por hipotecas han bajado, reportándose una disminución de 1.35%, mientras que los seguros hipotecarios, que protegen de riesgos a las entidades financieras e inversionistas en caso de incumplimiento por parte del deudor hipotecario, sumaron 942 al final del tercer trimestre, con un monto mayor a Q 292 millones.

Tabla 66
Seguros emitidos por entidad aprobada, 2009

Trimestre	No.	Monto
Primer	367	Q 107,726,300.00
Segundo	325	Q 102,017,600.00
Tercer	250	Q 83,117,900.00
Total	942	Q 292,861,800.00

Fuente: elaboración propia con datos del FHA.

En la actualidad, muchas veces es el sector privado el que invierte en proyectos habitacionales. Sin embargo, el Gobierno, por ser garante del derecho y Ejecutivo de los poderes del Estado, es el llamado a promocionar y proporcionar vivienda a familias de escaso recursos por medio del subsidio en viviendas de bajo costo, sin intereses y cuotas mínimas. Durante 2009, el sector privado tuvo una reducción en las construcciones habitacionales, lo que adjudica a deficiencias en el presupuesto y a la existencia de una ley inadecuada.¹⁰²

El Ejecutivo debe tomar en cuenta lo complejo de la situación del derecho a la vivienda, pues es un derecho humano inalienable; debe implementar opciones para que las familias puedan adquirir un terreno con vivienda, con todos sus servicios a bajo costo, y de esa manera elevar el nivel de vida de la población.¹⁰³

El acceso a tierra para vivienda. La tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, tanto individual como colectivamente, con respecto a la tierra. La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas de Guatemala.

La tierra, durante años, ha jugado un papel vital en el desarrollo económico, político y social del país. Característica de esa historia es que la propiedad y el acceso han estado concentrados en pocas manos, manteniendo invariable la alta concentración de la tierra.

¹⁰² “Ven descenso en Plan Habitacional”, *Prensa Libre*, Guatemala, 4 de noviembre de 2009.

¹⁰³ Gutiérrez Ramírez, Brenda. *La vivienda en Guatemala: un problema que urge resolver*. Guatemala, 2006.

El *Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008*, desde la perspectiva étnica, indica que la situación de la tenencia de la tierra a nivel nacional no presenta modificaciones en los últimos años y, en términos geográficos la alta concentración de la tenencia se mantiene inalterada.

Esta situación de escaso acceso a la tierra está íntimamente asociada al derecho a la vivienda, y más aún en Guatemala, donde el 19%, de un total de 2.2 millones de hogares, no tenía propiedad en 2002.¹⁰⁴ La seguridad de su tenencia es aspecto central del derecho a la vivienda pues, sin la misma, este derecho se encuentra vulnerable por los desalojos y los desplazamientos forzados.

La práctica de desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada.¹⁰⁵ En el país, las principales causas de los desalojos están relacionadas con la concentración y especulación del recurso en pocos propietarios, así como la ausencia de reformas apropiadas a la realidad socioeconómica y cultural de la población.

La Organización de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define los desalojos como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.

El Centro por el Derecho a la Vivienda y contra el Desalojo (COHRE), indica que Guatemala es el cuarto país con mayor cantidad de personas desalojadas en Latinoamérica y probablemente el primero en Centro América. En el periodo de mayo 2004 a 2006, se reportaron 4,726 desalojos de los 146,995 ocurridos en Latinoamérica,¹⁰⁶ lo que significa que, para dicho periodo, la desprotección ante el desalojo fue de 36 personas por cada 100,000 habitantes.

Los expedientes de investigación de 2009 de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre violaciones al derecho a la vivienda, específicamente los relacionados con la inseguridad jurídica de la tierra, íntimamente vinculada a los desalojos, asciende a 30, mientras que las acciones específicas más frecuentes registradas en el derecho a la vivienda son tenencia jurídica (503), vivienda inadecuada (50), falta de servicios de infraestructura (33), y otros con indicadores menores y de los cuales se informa en tablas del anexo.

Como posibles soluciones al problema de la distribución de la tierra, en Guatemala se han planteado algunos sistemas formales para adquirir la propiedad:

- Acceso consuetudinario. Procedimientos de los líderes tradicionales que asignan derechos de uso de la tierra a los miembros de la comunidad. Lo que da acceso al derecho es el criterio de desbroce original de la tierra y la colonización por parte de antepasados.
- Compra.
- Prescripción/usucapión.¹⁰⁷ En algunos países, éste puede ser el único método que permite a los pequeños agricultores obtener acceso formal a tierras vacantes o abandonadas y dedicarla a usos productivos.
- Arrendamiento. El método consiste en conseguir acceso a la tierra pagando un alquiler al propietario.
- Titulación del Estado. Entrega de tierra de forma sistemática mediante intervenciones de reforma agraria por iniciativa gubernamental.

¹⁰⁴ INE. XI Censo de Población y VI de Habitación. Guatemala, 2002.

¹⁰⁵ Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos, párrafo 1.

¹⁰⁶ Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE). *Desalojos en América Latina*. 2006.

¹⁰⁷ Adquisición de derechos mediante la posesión durante un periodo de tiempo determinado.

Algunas propuestas de solución en la distribución de la tierra puestas en agenda son:

- Mejorar el funcionamiento de los mercados de tierras y de las instituciones de administración de tierras, promoviendo reformas en el ámbito agrario y promoviendo el acceso seguro a la propiedad de la tierra por parte de los indígenas y las mujeres (BM, 2002).
- Distribuir la renta sobre la tierra.
- Política de desarrollo rural, por ejemplo, la promovida por organizaciones indígenas y campesinas en Guatemala, o la certeza sobre información de tenencia de tierra, regulación del mercado de tierras a través de medidas fiscales, redistribución de tierras o derechos e identidad indígena para manejo de territorios.

En cuanto al acceso a la tierra por programas del Fondo de Tierras (FONTIERRAS), con datos hasta octubre de 2009, éste ha beneficiado a 158 familias de Alta Verapaz y Huehuetenango, en los municipios de San Cristóbal Verapaz, Cobán, Senahú y Nentón, proporcionándoles cinco fincas de una extensión de 92,028 Has., cuyo monto crediticio fue de Q 5 millones 359 mil 238.67 y un subsidio de Q 6 millones 408 mil 480.

En el informe *Impacto social de las comunidades que han accedido a créditos para la compra de tierras vía el Fondo de Tierras*, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CROC), se indica que más del 90.0% de las familias a quienes se les otorgó alguna finca no tenían ningún tipo de vivienda cuando tomaron posesión de la misma; además, que 90% de las familias que se trasladan a las fincas compradas por medio del FONTIERRAS no cuentan con los servicios de agua y luz.

Esto implica que de 158 familias beneficiadas en 2009 con fincas del FONTIERRAS, casi 143 familias no tienen vivienda y no cuentan con los servicios básicos, situación que puede presentarse también en el caso de los arrendamientos. En ese sentido, es importante que el Fondo sea vinculante con FOGUAVI, para asegurar la construcción de módulos de vivienda, además de tener presente una coordinación interinstitucional para resolver otros problemas, como los de servicios de educación, salud, infraestructura, agua, luz, comida, entre otros desde un principio, ya que el desarrollo integral no lo va a lograr sólo el FONTIERRAS tal como está concebido actualmente.

En el caso de las familias que no cuentan con las condiciones para hacer frente al alto costo de una habitación adecuada, el Estado establece un sistema de subsidios de vivienda considerando las formas y niveles de financiamiento.

En Guatemala, el FOGUAVI es el ente encargado de otorgar subsidios directos y facilitar el acceso al crédito a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Por medio de él se pretende apoyar y fortalecer las acciones del Estado en la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamiento adecuados, con el fin de que el mayor número de familias en situación de pobreza y pobreza extrema la disfruten en propiedad.¹⁰⁸

Durante el periodo de gobierno 2008-2011, el FOGUAVI pretende, a corto plazo, entregar una cantidad mayor a 56 mil viviendas anuales y, a mediano plazo, 200 mil soluciones habitacionales.

El inventario de vivienda se ha visto incrementado durante el periodo 2007-2009 ya que, en 2007, el FOGUAVI sólo entregó 5,046 viviendas; en 2008, 10,484; y en 2009, 13,195. Se estima que en 2010 alcance la cifra de 25 mil.

Sin embargo, se observa con preocupación una reducción de la inversión pública en la vivienda durante 2007, que fue de Q 300.92 millones; en 2008, de Q 209.6 millones y en 2009 de Q 201.68 millones. Entre 2007 y 2008, la reducción en la venta de viviendas por parte del sector privado fue de casi 20 mil soluciones habitacionales.¹⁰⁹

¹⁰⁸ FOGUAVI, en <http://www.foguavi.gob.gt>.

¹⁰⁹ “Descenso en Plan Habitacional”, *Prensa Libre*, Guatemala, 4 de noviembre de 2009.

La mayor cantidad de proyectos ejecutados en el ámbito nacional por el FOGUAVI se ha ejecutado principalmente en Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos y Chimaltenango, mientras que en Jalapa, Chiquimula, Izabal y Totonicapán los proyectos han sido reducidos.

Aparte del mencionado fondo, también existen otras instituciones gubernamentales que dentro de sus programas incluyeron atender el problema de vivienda, como el PNR, que inició la construcción de tres mil viviendas para víctimas del conflicto armado interno, con la ejecución a cargo del FONAPAZ y un monto de inversión de Q 112 millones. Los departamentos beneficiados serán: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, Quiché, Suchitepéquez, Sololá, San Marcos, Peten y Zacapa.¹¹⁰

Así también, el Viceministerio de Vivienda anunció la ejecución de un proyecto habitacional en San José del Golfo, y otro en Barcenas, Villa Nueva, este último con un monto de US\$ 200 millones, del cual US\$ 20 millones son aportados por el gobierno. Según la información, el 80% del proyecto se destinaría a los trabajadores del Estado con un ingreso mensual promedio de Q3 mil.

2.11 Conflictividad agraria

Guatemala se caracteriza por tener un alto grado de concentración de la tierra; el coeficiente de Gini, el indicador que mide la desigualdad del acceso a este recurso, es uno de los más altos del mundo, y probablemente el más alto de la región centroamericana.

En 1979, el coeficiente Gini para Guatemala era de 0.88, mientras que en países con una distribución relativamente igualitaria de la tierra, este valor fluctuaba entre 0.2 y 0.4. La fuerte expansión de la frontera agrícola durante las dos últimas décadas hizo crecer el área agropecuaria un 32% aproximadamente, pero no se tradujo en una reducción del nivel de desigualdad del acceso a la tierra.

Algunos datos estadísticos pueden ilustrar la naturaleza y magnitud de esta diferencia. El 60% de los guatemaltecos vive en el área rural, lo que demuestra que Guatemala es un país con potencial agrario. Según el MAGA, el 0.15% de los productores posee el 70% de la tierra agrícola (productores comerciales); el 10% tiene el 3.85% (productores excedentarios); el 59% de propietarios, 17% (productores de subsistencia) y, al extremo, el 37% ocupa un 3% del total de la tierra (productores en un nivel de infrasubsistencia).

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala tiene la peor situación de América Latina respecto a desigualdad en la tenencia de la tierra. El 54% del total de fincas (menores de 1.4 hectáreas) ocupa sólo el 4% de la superficie total de tierras agrícolas, mientras que el 2.6% de las fincas más grandes (en promedio con 195 o más hectáreas) ocupa casi dos tercios de la superficie total.¹¹¹

A la desigualdad estructural, de origen histórico, en la propiedad de la tierra y a la concentración de factores de producción, se agregan otros procesos que incrementan las contradicciones agrarias, generando mayor pobreza en el campo y retroceso o estancamiento en los indicadores de los derechos económicos y sociales de esta población, a pesar de los actuales programas gubernamentales. Estas dinámicas o situaciones son de carácter interno y externo, con una interrelación estrecha entre ambos.

En el ámbito interno tenemos los siguientes procesos:

- El pobre resultado del modelo vigente de acceso a la tierra a través del FONTIERRAS, creado por los Acuerdos de Paz. A ese modelo se le señala, entre otras fallas, la lentitud para satisfacer la demanda de tierra, el incremento de la deuda de los grupos campesinos “beneficiados” y la falta de fondos para la compra de nuevas fincas. Durante diez años de funcionamiento (1999-2008), entregó 238 fincas en todo el

¹¹⁰ “Viviendas para los familiares de víctimas”, *elPeriódico*, Guatemala, 4 de noviembre de 2009.

¹¹¹ Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Las organizaciones campesinas y las acciones para el acceso a la tierra. FAO, 2008.

país, pero el 30% de las familias adjudicadas ha abandonado las propiedades adquiridas por la incapacidad de pagar la deuda contraída, que asciende en total a Q 440 millones. Organizaciones campesinas como el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) han denunciado que se otorgaron tierras sobrevaloradas o de escasa productividad, además de que el FONTIERRAS brindó escasa asistencia técnica. Sin embargo, otros actores también adjudican responsabilidad a los grupos campesinos por el fracaso del modelo.

- El acelerado deterioro ambiental del país que se manifiesta y concreta en deforestación acelerada, contaminación de ríos, lagos y fuentes de agua, falta de manejo de desechos sólidos, extensión de cultivo de agrocombustibles y palma africana, deterioro de áreas protegidas, falta de conservación de suelos. Procesos descritos en el apartado sobre derechos ambientales.
- La falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, resultado de varias causas, entre ellas la ausencia de un catastro nacional, la carencia de legislación agraria y los vicios existentes en el Registro de la Propiedad.
- La reconcentración de la propiedad agraria, como la que ocurre principalmente en el Valle del Polochic, para cultivo de palma africana y la expansión azucarera.
- Una institucionalidad agraria que resulta rebasada por la magnitud y naturaleza de los problemas que tiene que enfrentar y la concepción con la que fue creada. Esta institucionalidad, fruto de los Acuerdos de Paz, está integrada por varias entidades: el FONTIERRAS, instituido para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural; el RIC, que tiene como objetivo la creación del catastro nacional; la Secretaría de Asuntos Agrarios, que impulsa a través de las subsecretarías los componentes sobre política agraria y la solución conciliatoria de los conflictos sobre la tierra.
- Débil presencia del Estado y ausencia de políticas públicas –hasta ahora– que promuevan eficazmente el desarrollo rural integral. Aunque durante el último tiempo se logró consensuar una política de desarrollo rural integral entre el Ejecutivo y las organizaciones campesinas, indígenas y sociales, la aprobación de la ley respectiva se encuentra pendiente en el Congreso.

Entre los procesos de origen externo que inciden en la problemática agraria, se encuentra el cambio climático, que repercute en la ampliación del llamado Corredor Seco, la disminución de caudales y de la productividad agrícola, el desplazamiento de plagas y enfermedades, y el aumento de fenómenos extremos como las sequías e inundaciones.

Las acciones y medidas de presión del movimiento campesino durante 2009 se concentraron en los meses de enero, junio, julio y octubre. La lista de demandas es extensa, pero éstas se concretan alrededor de los puntos medulares de la problemática del agro guatemalteco antes descrita: acceso a la tierra, necesidad de una auténtica política de desarrollo rural, seguridad alimentaria, rechazo a la minería y megaproyectos, condonación o renegociación de deudas agrarias, dotación de créditos e insumos para proyectos productivos, cese de persecución a líderes campesinos y criminalización de sus líderes, interrupción de desalojos con métodos violentos, lucha por el territorio y sus recursos, respeto a la cosmovisión indígena, etc.

Tabla 67
Principales acciones reivindicativas del movimiento campesino, 2009

Fecha	Organizaciones	Hechos	Principales demandas
10-13 de enero	Frente Nacional de Lucha	Protesta por suspensión de energía eléctrica en varios municipios San Marcos	Protesta por suspensión de energía eléctrica en varios municipios de San Marcos
13 de enero	Plataforma Agraria	Bloqueos en interior del país	Que el tema agrario sea parte de la agenda del actual Gobierno. Suspensión de otorgamiento de licencias mineras y megaproyectos; cese de persecución a campesinos, condonación de deuda agraria en oriente del país.
14 de enero	Diferentes organizaciones campesinas	Manifestaciones frente al Congreso	Protesta contra la política de desarrollo rural del Gobierno, centrada en PRORURAL.
11 de mayo	Plataforma Agraria	Presentó una carta a la Comisión Presidencial de Diálogo Permanente	Hace un llamado a la Comisión a responder con seriedad a las propuestas planteadas en el diálogo.
5 de junio	Consejo de Desarrollo Campesino (CODECA)	Bloqueo de siete nudos del sistema vial en diferentes lugares del país.	Subsidio de Q 3,000 para cada familia, para arrendamiento de tierras, más herramientas y asesoría técnica.
5 de junio		Reunión de alto nivel de CODECA con Gobierno	
16 de junio	CODECA	Segunda jornada de diálogo para abordar problemática agraria.	Agilización de la resolución de más de 1500 conflictos que mantiene sin resolver la Secretaría de Asuntos Agrarios. Entrega de subsidios
7 de julio	Plataforma Agraria	Bloqueo en varias rutas en Cuilapa, Santa Rosa y Ayutla, San Marcos.	Demanda al Gobierno y al Congreso poner fin al neoliberalismo asistencialista y clientelista en el campo. Plantea una serie de demandas relacionadas con arrendamiento de tierras, inversión en empresas campesinas, renegociación de deuda, arrendamiento solidario etc. Demanda elevar la iniciativa de Ley el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.
13 de julio	Plataforma Agraria	Emitió comunicado	

Fuente: elaboración propia en base a datos de archivo hemerográfico.

Como puede observarse, durante el año las marchas y acciones concluyeron generalmente en reuniones con comisiones de alto nivel del Gobierno y acuerdos, los cuales requirieron de un seguimiento de las partes para establecer el grado de cumplimiento. Entre los acuerdos cabe mencionar el del 15 de julio con Plataforma Agraria y el del 15 de octubre con la coordinadora Waquib Kej.

Después de un largo proceso para alcanzar el consenso con organizaciones sociales y campesinas, y respondiendo a una de las demandas planteadas en las marchas, el Ejecutivo puso en vigor, a partir del 13 de julio, la Política Nacional de Desarrollo Rural, a través del Acuerdo Gubernativo No. 196-2009.

Tabla 68
Principales acciones reivindicativas del movimiento campesino, 2009

Fecha	Organizaciones	Hechos	Principales demandas
13 de Julio	Pobladores de San Juan Sacatepéquez y otras organizaciones como CENOC y CUC	Marcha desde San Juan Sacatepéquez y otros puntos del país.	Oposición a la cementera en San Juan Sacatepéquez y a megaproyectos.
20,21 y 22 de julio	Plataforma Agraria	Bloqueo de ruta en El Boquerón, Santa Rosa y Ayutla, San Marcos. Toma de aduana de Tecún Umán	Reactivación de la economía campesina; rechazo a la minería de cielo abierto.
		Reuniones entre Gobierno y Plataforma Agraria.	
24 de julio	CODECA	Toma de 16 puntos carreteros en el país	Subsidios / arrendamiento de tierras; herramientas y asesoría técnica; recursos productivos y resolución de los conflictos agrarios.
30 de julio	Gobierno - Plataforma Agraria	Firman carta de entendimiento que recoge acuerdos de reuniones del 20, 21 y 22 de julio	Arrendamiento solidario, inversión productiva en 20 empresas campesinas, discusión de deuda con FONTIERRAS.
12 de octubre	Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waquib Kej	Jornada de 13 horas de marchas hacia la capital y tomas de puntos clave en carreteras del país	Reforma agraria; suspender licencias explotación minera; esclarecimiento de asesinatos de líderes comunitarios; investigación de grupos de guardias privados que participan en desalojos; retiro de fuerzas combinadas de San Juan Sacatepéquez.
12 de octubre	Waquib Kej	Reunión con representantes de Gobierno. Toma de sala previa a despacho presidencial	
15 de octubre	Waquib Kej	Reunión en FONTIERRAS con Álvaro Colom y Comisión de Diálogo, según acuerdo del 12 de octubre.	
27 de octubre	CODECA y Frente Nacional de Lucha (FNL) que agrupa a 179 organizaciones	Bloqueos y manifestaciones en 20 puntos de la República, Incluyendo capital. Toma de sede de FONTIERRAS.	Demandas ambientales, fin de desalojos, acceso a la tierra y recursos productivos.

Fuente: elaboración propia en base a datos de archivo hemerográfico.

El Acuerdo incluye las líneas generales en las que debe basarse el desarrollo rural integral del país. Los ejes de la política se basan en la estructuración de un presupuesto propio para 2011, la creación de un ministerio y un gabinete para el Desarrollo Rural Integral y la ejecución de programas enfocados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas que no tienen tierra. Las especificidades de esta política, así como su presupuesto, reglamentación y metodología de implementación, deben establecerse en la Ley Nacional de Desarrollo Rural Integral.

La propuesta de ley define la implementación de varias políticas, entre ellas:

- La política agraria, “(...) *que reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su concentración mediante la dotación y otros mecanismos de acceso a la tierra, e incentivando el área destinada a la producción de alimentos*” (artículo 10).
- La política agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, que tendría como finalidad implementar modelos de producción sostenibles y culturalmente pertinentes en estas áreas.
- La política económica, para la promoción de políticas macroeconómicas y comerciales que favorezcan a la economía rural.
- La política social, encaminada a erradicar el racismo, la exclusión y marginación de todo tipo.
- La política laboral, que tendría como finalidad garantizar, verificar y evaluar el pleno goce de los derechos laborales, el fomento del empleo y la formación de capacidades.
- La política de participación social y desarrollo político, para promover la participación de la población rural en los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles.
- La política de reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo, con la finalidad de modificar las condiciones de vulnerabilidad de todo tipo para la población del área rural.
- La política de seguridad alimentaria y nutricional con promoción de un abordaje integral.
- La política cultural, para proveer las bases de reconocimiento y respeto al patrimonio cultural de las comunidades indígenas y campesinas.
- La política socio-ambiental, que garantiza el carácter público de todos los bienes naturales y servicios ambientales, así como el derecho de las comunidades indígenas y campesinas a participar en su administración, aprovechamiento, uso y manejo.

El artículo 20 de la ley crea el Sistema Nacional de Desarrollo Integral, integrado por el Gabinete de Desarrollo Rural Integral, el Ministerio de Desarrollo Rural Integral y el Consejo de Participación y Auditoría Social.

Aunque el Ejecutivo llegó a un consenso con el movimiento social y campesino para formular esta política, la aprobación de la ley respectiva en el Congreso se enfrenta de nuevo al obstáculo del tema agrario, contradicción fundamental en la historia del país.

El 11 de agosto de 2009, el Pleno del Congreso conoció la Iniciativa de Ley que dispone aprobar el Sistema Nacional del Desarrollo Rural, presentada por 21 diputados de diferentes bancadas. El 21 de Octubre de 2009, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República emitió un dictamen favorable a la iniciativa de Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral, reconociendo como válidos todos los hechos que la sustentan sobre la situación agraria y social del país.

El 12 de noviembre, el Pleno del Congreso conoció en primer debate la iniciativa de ley, sin embargo, su discusión por artículos fue aplazada dos días después debido a la existencia de discrepancias entre algunas bancadas, que solicitaron más tiempo para discutirla.

El 17 de noviembre las bancadas mayoritarias pidieron que se detuviera el proceso de aprobación, debido al temor de que pudiera abrir una puerta a la expropiación de la tierra, particularmente por el contenido del artículo 10, que trata de la política agraria; todos los bloques coincidieron en que la iniciativa no es acertada, interponiendo un elevado número de enmiendas. También se manifestó la oposición de la Cámara del Agro.

La problemática agraria no se ha manifestado sólo a través de las movilizaciones y los acuerdos con el Ejecutivo, sino también ha habido denuncias realizadas por el movimiento campesino sobre hechos violatorios de los derechos humanos sufridos por sus miembros y dirigentes, así como desalojos violentos de tierras ocupadas. Según el CENOC, actualmente hay más de 100 órdenes de desalojo y en los últimos meses fueron asesinados 16 líderes campesinos por grupos paralelos.

La convergencia maya Waqib Kej denunció la existencia, en el interior del país, de grupos clandestinos como los causantes de muchos de los asesinatos de los líderes indígenas, y que las fuerzas de seguridad pública han sido incapaces de desarmarlos.

Entre los crímenes que solicitan sean investigados, sobresale el asesinato del maestro Adolfo Ich Chamán, ocurrido en la comunidad Las Nubes, Izabal, el pasado 27 de septiembre.

Asimismo, el asesinato de la pareja de esposos, Isabel Vásquez y Obilio Gabriel Jiménez, fallecidos el pasado 17 de agosto en Huehuetenango, y el crimen del líder indígena Julio Aguilar Iriarte, en Morales, Izabal.

El 17 de octubre, en San Juan Comalapa, fue asesinado el abogado maya Fausto Oztín Poyón, quien llevaba casos en defensa de los pueblos indígenas.¹¹²

Agentes de la PNC desalojaron, el 14 de julio, a varias familias de campesinos de la Asociación Maya Mam de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) que ocupaban un sector de la finca Los Cafetales, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu. Ante esa acción, los campesinos regresaron al municipio de Cajolá, Quetzaltenango, de donde son originarios.

En algunos conflictos relacionados con la tierra ha intervenido la institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la DIMERCIPP, como la participación, a partir del 14 de julio, en las rondas de negociación entre las comunidades de Petén instaladas en áreas consideradas protegidas y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), para encontrar una solución a la disputa que mantienen por terrenos.

Por su parte, de acuerdo con las versiones de los campesinos, las áreas estaban ocupadas antes de que se declararan áreas protegidas. También su participación en la Mesa de Diálogo de Livingston, Izabal, y la Mesa de Diálogo CONIC-Secretaría de Asuntos Agrarios, entre otros. Varias comunidades (Sierra de Lacandón Centro Uno, Laguna del Tigre, Tujte, Santa Rosa Uno, Dos y Tres, Usumacinta) acudieron a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, solicitando su intermediación de buenos oficios para enfrentar la problemática de asentamiento y tierras que padecen en esas áreas.

2.12 Derecho a un ambiente sano

La situación del medio ambiente se agrava y deteriora constantemente. Guatemala no es la excepción ante un fenómeno con visos de convertirse en un problema insoslayable en la agenda mundial. El derecho a un ambiente sano en el país se ve afectado por un proceso de deterioro acelerado de los recursos ambientales. A pesar de los tratados internacionales en la materia que conforman cuerpos normativos relacionados con la protección ambiental, y de los que Guatemala forma parte, la depredación de estos recursos avanza aceleradamente.

Según versión preliminar del *Segundo informe sobre la situación ambiental en el país*, la totalidad de indicadores analizados sigue mostrando una trayectoria de agotamiento, deterioro y contaminación en todos los componentes ambientales, lo que permite predecir un panorama crítico en el futuro próximo.¹¹³ Cabe mencionar que en los últimos años, a pesar de existir cierto desarrollo en la creación y consolidación del sistema de instituciones que atienden las cuestiones ambientales y del consumidor, a nivel nacional existe una falta de organismos con la capacidad de manejar responsablemente los temas del agua, suelo y subsuelo.¹¹⁴

La violación de los derechos ambientales en Guatemala abarca los siguientes problemas y la interrelación resultante entre ellos: deforestación, contaminación del agua y falta de potabilización, uso excesivo del agua para cultivos de exportación, incendios forestales, depredación de áreas protegidas, efectos ambientales

¹¹² *La Hora*, Guatemala, 23 de octubre de 2009.

¹¹³ Instituto de Agricultura y Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA/URL) y MARN. *Segundo informe sobre la situación ambiental en el país*.

¹¹⁴ Defensoría de Derechos Ambientales, institución del Procurador de los Derechos Humanos. Guatemala, 2009.

negativos producidos por la explotación minera y petrolera y la construcción de hidroeléctricas, manejo inadecuado de desechos sólidos y proliferación de basureros clandestinos.

En el país existe una disponibilidad de 95 mil millones de metros cúbicos de agua. El 70% es empleado para las actividades agrícolas, un 28% en la industria manufacturera y apenas un 2% se destina para el consumo en los hogares.¹¹⁵ Sin embargo, el INFOM reporta que hay al menos 7.5 millones de guatemaltecos sin acceso al agua, ni al saneamiento, la mayoría residente en el área rural. Además, añade que se necesitan Q 500 millones anuales durante cinco años sólo para reducir en 50% ese déficit.¹¹⁶

La contaminación es uno de los mayores problemas, ya que pese a la gran cantidad de recursos hídricos, las personas no pueden usar el agua de las fuentes naturales. El problema es cada vez más grave, debido a que los centros urbanos descargan sus desechos líquidos a los ríos y lagos sin ningún tratamiento y existe riesgo que colapsen las plantas de tratamiento de agua de los cascos urbanos en la mayoría de los municipios del país.

Un caso que ilustra el deterioro de los recursos hídricos en el país, es el de Residenciales Valle de la Mariposa, en Amatitlán. Un estudio de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), en septiembre de 2008, mostró que el agua en esa colonia no era apta para consumo humano, ya que contenía arsénico, plomo y coliformes fecales, además de un olor fétido y aspecto turbio. Entre las causas de esta contaminación se señalaba a los pozos que se alimentan del –contaminado– río Michatoya, y a los centros de acopio de basura de la colonia, situados a pocos metros del mismo.¹¹⁷

Otro caso es el de los ríos Cahabón y Polochic, que se han convertido en los principales contaminantes del lago de Izabal, puesto que llevan las aguas servidas de los municipios de Alta Verapaz. Ambos ríos trasladan a diario desperdicios de cerca de 350 mil pobladores de este departamento, lo que ha causado que el agua del lago no sea apta para consumo humano, percibiéndose en algunos lugares del mismo olores desagradables.

Por otra parte, en Santa Lucía Cotzumalguapa, 300 pobladores del caserío El Rosario Uno denunciaron que la municipalidad dirigió hacia sus terrenos el drenaje central de aguas servidas. El líquido que extrae de los pozos saca espuma al agitarla y tiene mal olor, proliferando varias enfermedades entre los habitantes.

En Quetzaltenango, la tala inmoderada y los incendios forestales están impidiendo la recarga hídrica y originan que los ríos bajen su caudal entre 10% y 20%. El departamento de Sololá pierde al año 2.6% de sus bosques y, de continuar a ese ritmo, para 2022 se habrá agotado la fuente subterránea.

En Totonicapán, se pierden cada año 400 hectáreas de bosque, lo que impacta en las fuentes de agua. En Huehuetenango hay 15 conflictos derivados del agua por derecho de paso, propiedad de nacimientos y disputas de caudales. La Laguna de Lemoa, en Santa Cruz del Quiché, podría convertirse en un pantano dentro de diez años por su mal uso, ya que la falta de agua entubada obliga a las personas a utilizar la laguna. En la aldea Río Blanco, Sacapulas, existe una pugna entre los miembros de una asociación y los del Consejo Comunitario de Desarrollo por los derechos sobre un manantial.

Los nacimientos de agua en Chimaltenango se contaminan por la basura que lanzan los vecinos a los afluentes. El año pasado, el Consejo de Comunidades Mayas conoció alrededor de 25 casos de aldeas en conflicto por disputa de los derechos de algún nacimiento de agua. Éstos degeneraron en violencia, como ocurrió con vecinos de la aldea Bola de Oro, de la cabecera de Chimaltenango, y pobladores de Patzún.

En Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, la tala sin control en la finca municipal Las Ilusiones amenaza con secar los manantiales que abastecen a varias comunidades. La Asociación Campesina Ch'orti' informa que el 80% de las fuentes que abastecen a Chiquimula están contaminadas con heces fecales, y el río San José, el más importante de ese departamento, es perjudicado con desechos hospitalarios y del rastro.

¹¹⁵ Juventino Gálvez, director del IARNA/URL, citado por Ligia Flores, *La Hora*, Guatemala, 12 de agosto de 2009.

¹¹⁶ *La Hora*, Guatemala, 20 de marzo de 2009.

¹¹⁷ *elPeriódico*, Guatemala, 5 de marzo 2009.

El caudal del río Tunico, en El Estor, Izabal, ha disminuido un 90% debido a la intensa tala en la sierra de Santa Cruz. En San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, la deforestación ha secado nacimientos de agua. Los ríos, lagos y lagunas de Santa Ana y Flores, Petén, tienden a secarse debido a la deforestación masiva y al tipo de formación geológica del suelo del área, que no permite el paso de agua subterránea.¹¹⁸

La institución del Procurador de los Derechos Humanos realizó en 2009 una supervisión en las entidades encargadas de la distribución, abastecimiento, autorización y control de la potabilidad del agua.¹¹⁹ A partir de los operativos de verificación de la calidad de los servicios de agua, se estableció que en Guatemala sólo el 30% de las 333 municipalidades clora el agua y sólo 15 comunas cuentan con sistemas de tratamiento de aguas servidas, no obstante que el 70% del agua de consumo se transforma en aguas negras y grises. De los 223 centros urbanos de más de dos mil habitantes con sistemas de drenajes, sólo 24 aplican alguna clase de tratamiento a sus aguas residuales; el resto (199 centros urbanos) la descarga directamente a los ríos.

El mismo informe de supervisión da cuenta de una serie de denuncias recibidas en la institución, concernientes a la contaminación tanto de aguas superficiales, como de aguas subterráneas, vertientes y manantiales. Una de éstas es la registrada en el lago de Atitlán por la Auxiliatura Móvil de Sololá, en el expediente EIO.MOV.SOL.01-2009/DESC, en el cual los vecinos de San Pedro la Laguna hacen constar que en el lago apareció un material amarillento que puede ser grasa de desechos sólidos o de otro tipo, indicador de la contaminación del lago, según los vecinos, quienes además indicaron que el agua de este lago es utilizada por los pobladores de Santiago Atitlán y San Pedro La Laguna, entre otros, para consumo humano.

Sobre la distribución y potabilidad del agua, vecinos del parcelamiento Retaltecos, municipio de La Libertad, Petén, manifestaron que el Consejo de Desarrollo perforó un pozo para abastecer de agua a la comunidad, sin embargo, de acuerdo con los análisis del MARN, el agua no era apta para el consumo humano por presentar altos índices de hierro, cobre, calcio, magnesio y nitratos.

En la Auxiliatura Regional de Coatepeque se recibió la denuncia sobre las características del agua que se distribuye a los vecinos de la aldea El Manantial, municipio de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, la cual no es potable, sino únicamente entubada.

La supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos se fijó como objetivos específicos, investigar las acciones del MSPAS para velar por la calidad del agua en el país, determinar el tipo de mantenimiento, purificación y potabilización del agua que distribuyen las municipalidades y establecer la cobertura del servicio de agua a nivel urbano y rural. Estos objetivos se refieren a diferentes procesos, como son potabilización, saneamiento, distribución y cobertura.

El agua natural debe someterse a un proceso de potabilización para considerarse apta para el consumo humano. Según la investigación realizada, sólo 74.19% de las municipalidades utiliza laboratorio para analizar el agua, un 19% no los utiliza laboratorios y otro 6.45% desconoce los instrumentos requeridos en la potabilidad del agua.

El derecho al agua está relacionado también con el saneamiento, ya que éste es necesario para evitar la contaminación por heces fecales, la que tiene incidencia en los índices de morbilidad, principalmente de la población infantil.

Según la supervisión realizada por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, alrededor del 23.39% de los contaminantes del agua están vinculados a la falta de saneamiento. Los centros de salud

¹¹⁸ Todos los casos citados han sido reportados por *Prensa Libre*, en sus ediciones del 17, 18 y 21 de marzo de 2009.

¹¹⁹ PDH. “Supervisión institucional a las distintas instituciones responsables de la potabilidad del agua”. Guatemala, 2009.

reafirman estas estadísticas: las enfermedades de tipo gastrointestinal tienen la frecuencia más alta, con un 54.84% y las de la piel representan el 16.13%, ambas relacionadas con la falta de saneamiento.

A esta problemática hay que agregarle la frecuencia con que el agua llega a los usuarios. Si de cada 10 hogares en el área urbana, 8 cuentan con el vital líquido, la frecuencia con que llega es del 77.42%. La situación presenta mayor vulnerabilidad en el área rural, donde el 58.06% del tiempo los usuarios no tienen agua.

Dos fenómenos inciden en forma drástica en la calidad y disponibilidad del agua, el primero relacionado con la gestión del MARN, el INAB y las Municipalidades, y el otro vinculado a la falta de plantas de tratamiento en el país y la depredación de la cobertura forestal.

Según el MARN, el 90% de las 38 cuencas hidrográficas que existen en el país está contaminado; las más afectadas se ubican en departamentos del occidente, como San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá. En toda la República apenas existen 18 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales sólo funcionan cinco, por lo que el sistema de drenajes se vierte directamente a los ríos.

La construcción de hidroeléctricas es otra actividad por la que numerosas comunidades han expresado su inconformidad debido a que perciben que éstas producen un impacto ambiental negativo aunque, por otra parte, se sabe que representan una forma limpia de generación de energía eléctrica.

Varios casos se presentaron durante el año, entre los que destacan el de los representantes de 31 comunidades de Camotán y Jocotán que se oponen a la construcción de tres proyectos hidroeléctricos privados; en el mes de julio presentaron sus objeciones en el MARN y en la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Al entubar el río Grande se prevé que habrá riesgo de escasez de agua para las comunidades, afectando programas de miniriego, pesca y uso doméstico, según los comunitarios. De acuerdo con el Colectivo Madre Selva, con estos proyectos se pone en riesgo la seguridad alimentaria de más de 6,000 familias, tomando en cuenta la aridez de la zona en la que se asientan.¹²⁰

El proyecto hidroeléctrico El Sisimite promovido por la empresa privada Generadora Nacional S. A. (GENASA) pretende construir una represa de 36 metros de altura con lo cual se desviaría el cauce del río Motagua en un tramo de 9.78 kilómetros, alterando la producción y la diversidad cultural de los municipios de Chuarrancho, Salamá y El Chol. Aunque del proyecto privado no existía aún ninguna construcción, el Colectivo Madre Selva y la comunidad de San Buenaventura, Chuarrancho, presentaron en julio un recurso legal ante el Ministerio de Energía y Minas.¹²¹

Con relación a actividades industriales como la extracción minera, numerosas comunidades y organizaciones ambientalistas han manifestado una opinión negativa al respecto, por el efecto que tendrían en la sostenibilidad ambiental, oposición expresada en las más de 33 consultas realizadas en comunidades indígenas.

La explotación de recursos en los territorios y comunidades de los pueblos indígenas se ha mantenido en la agenda de la economía nacional, sin tener presente la obligación estatal de informar y de consultar a los interesados, según los estándares de derechos humanos regulados en los pactos y convenios ratificados por Guatemala, y de manera particular el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, como lo indica el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, en su informe, que incluye el análisis del deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas sobre cuestiones que los afectan.¹²²

Las actividades industriales, de infraestructura, extractivas o energéticas solicitadas, planificadas o construidas sin prever el impacto ambiental y cultural y sin la oferta de la información sustantiva y la consulta debida,

¹²⁰ *Prensa Libre*, Guatemala, 3 de julio de 2009.

¹²¹ *Prensa Libre*, ediciones del 20 de marzo y 7 de julio de 2009.

¹²² A/HRC/12/34, del 15 de julio de 2009.

entendida ésta como proceso de información, negociación y acuerdos, han provocado también en el transcurso de 2009 situaciones de movilización, protesta y rechazo por parte de las comunidades interesadas o afectadas en ese contexto. Medios de comunicación social han dado cuenta de los hechos acaecidos en el transcurso del año, como algunos que se citan a continuación:

En Jalapa, campesinos originarios de Xalapán marcharon el 29 de julio en la ciudad capital desde el parque Jocotenango hacia la Casa Presidencial y el Congreso para exigir la cancelación de 15 licencias de exploración y explotación de minería metálica en ese departamento, debido principalmente al efecto negativo en el equilibrio ecológico que dichas actividades generan y a la contraposición de las mismas con la cosmogonía maya.¹²³

Según Javier de León, líder del poblado de San Miguel Ixtahuacán donde explota oro la Mina Marlin de la firma Montana, subsidiaria de la empresa canadiense Gold Corp, los manantiales que abastecen a las comunidades han sido afectados por la utilización de 250 mil litros de agua por hora que hace la compañía.¹²⁴

La principal conclusión de la Conferencia Internacional de Minería, realizada en Guatemala del 3 al 5 de agosto, es que la actividad minera ha sido contraria al desarrollo de las comunidades en varios países, debido a que los gobiernos no cumplen con la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas. Por otra parte, las mineras dañan la salud de los habitantes y deterioran el medio ambiente, sin tributar de acuerdo con las ganancias obtenidas en el mercado internacional.¹²⁵

La extracción de arena, otro tipo de actividad relacionada con la minería, ha generado conflictos con los defensores del ambiente y las comunidades afectadas; tal el caso de la ladrillera El Carmen, en Villa Nueva, Guatemala.

En 2000, el Ministerio de la Defensa cedió en usufructo de diez años los terrenos de las fincas La Embaulada y La Selva a una asociación de vecinos conformada por 700 ex especialistas del ejército, con el objetivo de edificar un proyecto de vivienda. El 15 de abril de 2003, la asociación de vecinos entregó las tierras a la empresa arenera El Carmen por un período de diez años, a cambio de que ésta construyera accesos al área y la urbanizara. No obstante, estas obras nunca se realizaron. En lugar de cumplir los convenios, la empresa inició en esta área boscosa la explotación de arena en un área de un kilómetro cuadrado. Luego, la arenera se extendió ilegalmente a un área de cuatro kilómetros cuadrados, sin contar con estudios de impacto ambiental y donde, según el MARN, no estaban autorizados para operar. En esta área se localiza parte del acueducto nacional Xayá-Pixcayá. El 25 de noviembre de 2008, autoridades de Empagua advirtieron en un documento técnico que

“el acueducto nacional Xayá-Pixcayá ubicado en Villa Nueva, podría colapsar por el movimiento de tierra, debido a la extracción de arena. Hoy las causas que le dieron origen y las condiciones de vulnerabilidad del acueducto continúan vigentes, dado que continúa el movimiento de tierras en este y otros sectores a lo largo del acueducto”.¹²⁶

De acuerdo con el informe “Contaminación Ambiental Producida por Areneras El Carmen e Indaco, S.A. en Bárcenas, Villa Nueva”, de la Unidad de Seguimiento del Procurador de Derechos Humanos, los expedientes EIO.GUA.1268-2009/DCP y EIO.GUA.1969-2009/DCP fueron abiertos a instancia de los vecinos de la colonia Veinte de Octubre, en Bárcenas, Villa Nueva. Los habitantes denunciaron violación del derecho humano al medio ambiente sano, por deforestación, contaminación visual y autorización de actividades industriales y comerciales ambientalmente peligrosas, así como por la destrucción del área boscosa que se ubica en jurisdicción del municipio de Villa Nueva; ocasionando la destrucción de la flora y fauna del lugar, así como daños severos en la cuenca del Lago de Amatitlán. Los vecinos señalaron al Estado de Guatemala por la licencia de extracción de arena y otros minerales otorgada a las empresas El Carmen e INDACO, S. A.

¹²³ *Prensa Libre*, Guatemala, 30 de julio de 2009.

¹²⁴ *La Hora*, Guatemala, 1 de agosto de 2009.

¹²⁵ *Prensa Libre*, Guatemala, 7 de agosto de 2009.

¹²⁶ *El Periódico*, Guatemala, 12 de octubre de 2009.

El Procurador de los Derechos Humanos estableció que las empresas areneras El Carmen e INDACO, S. A., ubicadas en el kilómetro 26.5 de la carretera que conduce de Bárcenas a Santa Lucía Milpas Altas y la aldea El Calvario, zona ocho, ambas del municipio de Villa Nueva, fueron autorizadas para realizar trabajos de extracción de arena pómez y otros materiales utilizados como material para construcción; dicha actividad implicó movimiento de tierra, deforestación y contaminación ambiental.¹²⁷

En resolución del 28 de mayo de 2009 declaró la violación del derecho humano al medio ambiente sano, por deforestación, contaminación visual y autorización de actividades industriales y comerciales peligrosas al ambiente, así como por la destrucción del área boscosa en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, agregando que existen indicios racionales que responsabilizan de dicha violación al Ministerio de Energía y Minas y al MARN.

La resolución del Procurador de los Derechos Humanos emitió recomendaciones específicas al Ministerio de Energía y Minas, al MARN, al MSPAS, a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), al alcalde del municipio de Amatitlán y a las Autoridades para el Manejo sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, al Congreso de la República y al Fiscal General. Dichas recomendaciones están encaminadas a realizar acciones relacionadas con el mandato de cada entidad para eliminar o reducir el daño causado al ambiente y a los habitantes de las áreas aledañas a las areneras.

Con la resolución final dictada por el Procurador de los Derechos Humanos, el MARN emitió la resolución No. 729-2009/DGCL/ABTdeP/efjp, en la que resuelve clausurar las actividades de extracción de arena amarilla y pómez dentro de la ampliación del proyecto denominado Arenera El Carmen. Por su parte, la Asociación Centro de Atención Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), usando como base la resolución del Procurador de los Derechos Humanos, presentó denuncia al Ministerio Público en contra de los ministros de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, por el delito de responsabilidad de funcionario.¹²⁸

Si bien las empresas extractoras de arena ya no operan en la zona, subsiste el daño ambiental causado, pues durante varios años se derribaron bosques para extraer el material, quedando las consecuencias a simple vista. Los pobladores que viven en las partes bajas de la zona de explotación temen que una lluvia pueda causar una catástrofe, pues los terrenos no están consolidados.

Otra investigación debido a daños en el ambiente con riesgos para las personas fue abierta por el Procurador de los Derechos Humanos, por la violación del derecho humano a la salud y a la seguridad de la que son víctimas los vecinos residentes en los alrededores de la Planta Carbo Generadora Servicio de Ingeniería y Montaje, S.A,

“quienes han visto seriamente afectada su salud debido a que la planta en referencia expelle humo negro, partículas de carbón y además produce ruido excesivo”.¹²⁹

Diversas denuncias en contra de la empresa se realizaron por parte de diferentes colonias de la zona, a partir de julio de 2008. En el mes de noviembre de 2008, un informe técnico elaborado por la Dirección General de Gestión Ambiental del MARN estableció el incumplimiento por parte de la empresa en rubros que afectaban la salud de los habitantes y la calidad del medio ambiente.

Como resultado de los elementos mencionados y varias diligencias realizadas, el Procurador de los Derechos Humanos declaró violación del derecho humano a la salud, a la seguridad y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado de los vecinos residentes en los alrededores de la Compañía Eléctrica La Libertad,

¹²⁷ Procurador de los Derechos Humanos, Resolución Final de fecha 18 de junio de 2009, dictada dentro de los expedientes EIO.GUA.1268-2009/DCP y EIO.GUA. 1969-2009/DCP

¹²⁸ Informe ejecutivo de seguimiento “Contaminación ambiental producida por Areneras El Carmen e Indaco, S.A. en Bárcenas, Villa Nueva”, Unidad de Seguimiento del Procurador de Derechos Humanos, según expedientes EIO.GUA.1268-2009/DCP y EIO.GUA.1969-2009/DCP.

¹²⁹ EXP.ORD.029/DE, Auxiliatura de Villa Nueva, y EXP.PREV.ORD.GUA. 2566-2009/US

Sociedad Anónima, y comprobó que la entidad no ha cumplido con los compromisos ambientales adquiridos a través de la resolución número 2361-2006/ECM/CM, del MARN.

El Procurador declaró un comportamiento administrativo lesivo a los intereses de los vecinos residentes en las colonias aledañas a la Compañía Eléctrica La Libertad, S.A., señalando como responsable de dicho comportamiento al MARN, por no ejercer un control administrativo eficaz ni haber ordenado que se implementen las medidas correctivas necesarias para mitigar los efectos contaminantes de la compañía, ni sancionado a la misma y a la Municipalidad de Villa Nueva, por no asumir la representación del municipio ante la amenaza de contaminación en el ambiente.

Otro problema que está ocasionando graves daños a la salud y a los derechos ambientales de los guatemaltecos, es el de la disposición de los desechos sólidos. La mayoría de basureros en el país se encuentra a cielo abierto, a una distancia promedio de 7.6 kilómetros de los diferentes poblados y el promedio de basura oscila alrededor de 7,000 toneladas por día.

Existe un incremento en la cantidad de desechos, ocasionado por la migración del campo a la ciudad y de desechos no biodegradables (bolsas, envases, recipientes, etc.) generados por el cambio en patrones de consumo. La proliferación de botaderos ilegales en caminos, barrancos y cauces de ríos, incrementa la dimensión del problema.¹³⁰

La falta de un manejo y disposición adecuados de los desechos sólidos afecta los derechos ambientales de la población, generando acciones en contra de las autoridades responsables. En marzo, unos cien pobladores bloquearon la entrada del relleno sanitario municipal en la finca Guayacán, Baja Verapaz, por la contaminación y las enfermedades que ha causado, especialmente en los niños.

De los 333 municipios de Guatemala, sólo nueve tienen algún sistema de procesamiento de desechos sólidos, lo que tiene como consecuencia la proliferación de vertederos ilegales que contaminan el ambiente y los recursos hídricos del país. Como ejemplo, se puede citar el caso de Punta de Manabique, donde miles de toneladas de desechos sólidos que viajan por el río Motagua han contaminado las playas y el agua. En Chimaltenango existen 13 basureros, donde diariamente se depositan más de 600 toneladas de basura.

En Jutiapa se contabilizan 43 vertederos clandestinos, y diez comunidades asentadas en las cercanías del basurero del valle del Palajunoj, Quetzaltenango, corren riesgos de salud debido a la contaminación que éste genera, ya que los residuos son incinerados. Escuintla es otra de las ciudades con mayor contaminación por desechos sólidos: 20 toneladas diarias de desperdicios son lanzadas en el vertedero de la finca La Estrellita, sin ningún tratamiento.

Según la oficina del MARN en Sololá, un estudio efectuado en diez municipios de esa región estableció que pocas municipalidades manejan adecuadamente los desechos sólidos. Los municipios en los que los desechos van a parar a 34 botaderos no autorizados son: Santa María Visitación, Santa Clara La laguna, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, Santa Lucía Utatlán, San Pedro La Laguna, Concepción, Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Se han programado reuniones con los alcaldes de los 19 municipios de Sololá para realizar inventarios de campo y ejecutar acciones concretas, con el apoyo de: la Comisión Nacional para el Manejo de Desechos sólidos, el INFOM y la Autoridad para el Manejo Sostenible del Lago de Atitlán y su Entorno¹³¹.

Huehuetenango ha enfrentado una crisis por la falta de un vertedero municipal, por lo menos hasta julio. Al acumularse la basura en las calles se generaron epidemias de diarrea y fiebre tifoidea, así como proliferación de plagas de vectores, roedores y perros callejeros.

¹³⁰ Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. "Política de desechos sólidos". Guatemala.

¹³¹ *Prensa Libre*, Guatemala, 13 de julio de 2009.

Por otra parte, al igual que en otros países del continente, en Guatemala la expansión de los agrocombustibles tiene los siguientes efectos negativos en el ambiente: deforestación, desplazamiento forzoso de comunidades, amenazas, detenciones ilegales y asesinatos, según denuncias de diferentes organizaciones ambientalistas.

En el país, desde hace una década se encuentra en expansión el área de cultivo de la palma africana para la producción de aceite, principalmente para cubrir el consumo nacional, lo que ha reemplazado las importaciones de aceite comestible, pero con un costo ambiental y social elevado.

Un estudio de la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia señala que Guatemala perdió, en los últimos 50 años, más de dos terceras partes de sus bosques originales y la biodiversidad que albergaban. Uno de los cultivos que más ha impactado en el ambiente es la caña de azúcar. Las plantaciones de este cultivo ocupan 216 mil hectáreas y uno de los problemas que representa es el uso excesivo de agua, que afecta a las comunidades. El cultivo a gran escala de la palma africana, que antes se concentraba en la costa sur, se trasladó al norte del país. Las áreas más afectadas están cerca del refugio de vida silvestre Bocas del Polochic, Izabal, la Franja Transversal de Norte y el Sur de Petén.¹³²

Cada año se pierde 1.5% de los bosques y se han identificado cinco frentes de deforestación: tres en Petén, uno en Punta de Manabique, Izabal y otro en Los Cuchumatanes.

Según defensores de los derechos ambientales, los últimos bosques que quedan en territorio guatemalteco son los que están en las áreas protegidas y los que han sido conservados por las comunidades, como los de Totonicapán. Los productos agrícolas a los que se dedica cada vez más tierra son importantes, pero también hay que destacar la importancia de las áreas que producen agua, regulando y amortiguando factores climáticos. Las principales amenazas a las áreas protegidas son: falta de voluntad política para defenderlas, apertura de carreteras, extracción petrolera, expansión de la frontera agrícola y ganadera, y falta de tierras.¹³³

Todo parece indicar que la ocupación de áreas protegidas es un problema que ya rebasó la capacidad de control del CONAP. Según sus funcionarios, la institución cuenta con 460 guardarrrecursos para todo el país, a los cuales se agregan alrededor de 300 miembros de organizaciones sociales, comunidades y municipalidades que participan en la protección de la biodiversidad. El Parque Nacional Laguna del Tigre tiene 70 guardianes para 270,000 hectáreas. Para proteger la Reserva de la Biosfera Maya se necesitarían alrededor de 300 guardarrrecursos, lo que excede las posibilidades actuales.

Punta de Manabique, Izabal, una de las reservas naturales más grandes del país, declarada área protegida en 2005, se está convirtiendo en tierra de nadie; el proceso de apropiación de grandes extensiones de terreno que luego son sometidas a la deforestación y a la ganadería ha ocasionado la pérdida de casi 40% de su área boscosa.

En esta área protegida han surgido “aparentes” ganaderos que talan el bosque para crianza de ganado, los cuales gozan de total impunidad y amenazan a los miembros de organizaciones ambientalistas. Los supuestos propietarios de fincas han abierto cientos de kilómetros de caminos de terracería donde circulan únicamente vehículos de doble tracción con hombres armados. Para ingresar hay que atravesar portones y cualquier automotor ajeno es detectado rápidamente. Investigadores del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) detallan que del lado del Atlántico los narcotraficantes llegan a Izabal por Punta de Manabique, donde descargan, y de igual forma suben hacia el Golfo de México hasta llegar a Miami.

Según el CONAP, la riqueza biológica de Guatemala es amenazada por la degradación de suelos, la variabilidad climática y el desconocimiento. Proteger la biodiversidad del país es cuestión de seguridad nacional y el presupuesto de CONAP, de Q 82 millones en 2009, es insuficiente.¹³⁴

¹³² *Prensa Libre*, Guatemala, 6 de junio de 2009.

¹³³ Magalí Rey Rosa, *Prensa Libre*, Guatemala, 13 de marzo de 2009.

¹³⁴ *Prensa Libre*, Guatemala, 18 de octubre de 2009.

Desde 1959 se han deforestado 740 kilómetros cuadrados de bosque, el equivalente al 80% de la montaña del Granadillo, en Zacapa. El Instituto Nacional de Bosques (INAB) concede licencias para tala de árboles de 73.30 hectáreas, a pesar de la inconformidad de los vecinos afectados. En esta área boscosa nace el único recurso hídrico que abastece a Jocotán, Camotán y la Unión. El 12 de octubre, alrededor de 1,200 personas manifestaron en Zacapa, oponiéndose a esta destrucción.¹³⁵

En abril del presente año se realizó una celebración litúrgica al pie de la montaña de El Granadillo, convocada por los pastores luteranos de la zona y la participación de diez comités comunitarios para la defensa de los recursos naturales. La Iglesia Luterana Guatemalteca, la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala y la Organización Madre Selva acompañaron la celebración, con la presencia de catequistas católicos, pastores evangélicos y guías espirituales mayas.¹³⁶

El 2 de junio de 2009 fueron asaltadas y violentadas las instalaciones de la Casa Campesina de la Iglesia Luterana (ILUGUA), en la aldea La Trementina, Zacapa, sede de la Asociación para la Defensa de la Montaña de El Granadillo en Zacapa. El Colectivo Madre Selva denunció el hecho y se solidarizó con la Asociación, señalando que ha habido varios actos de intimidación contra la misma, en lo que sería otra expresión de campañas de presión contra defensores del ambiente.

Más de 340 hectáreas de bosques han sido dañadas por los 18 incendios forestales de esta temporada, informó el Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales (SIPECIF). Los bosques más afectados son los de San Pedro Pinula. También ha habido problemas en la cabecera departamental, Monjas y San Carlos Alzatate.

Entre 40 y 50 siniestros consumen bosques en Petén y El Progreso, al menos 4 mil hectáreas han sido consumidas. El departamento de Petén es escenario de una serie de incendios forestales que han consumido 4 mil hectáreas (4 kilómetros cuadrados) de su territorio. En abril de 2009 se encontraban activos 12 incendios fuertes, más 30 de mediana intensidad en ese departamento, afectando principalmente las áreas protegidas. Aunque se desconocen las causas, las estadísticas del SIPECIF señalan que un 44% de los incendios son intencionados y un 20% se debe a quemas agrícolas que se salen de control.¹³⁷

Según el INAB, en el departamento de Huehuetenango el 74% del área boscosa ha desaparecido. El 90% de productos como leña, madera y muebles provienen de la tala ilegal, por lo que anualmente se pierde en ese departamento 3091 hectáreas de bosques. Dentro de las principales causas de la deforestación se encuentran la falta de control de las municipalidades y la falta de recursos de instituciones como el INAB, el CONAP y la División de Protección de la Naturaleza (DIPRONA) de la PNC, para combatir dicha tala ilegal.

En octubre, un estudio de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, de la Universidad de California, determinó en el lago de Atitlán una proliferación arriba de lo normal de una especie de alga conocida como cianobacteria, la cual crece de forma natural y a ritmo acelerado. Las cianobacterias pueden producir cianotoxinas, que afectan a peces, crustáceos, zooplancton y seres humanos.

La aparición de cianobacterias en sistemas acuáticos se debe al incremento de los niveles de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, químicos que se encuentran en residuos domésticos o industriales no tratados, como los que llegan al lago. El cambio climático y el calentamiento del agua del lago, podrían influir en la proliferación del microorganismo.

Según la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago Atitlán y su Entorno (AMSCLAE), el lago recibe 33 mil 717.35 metros cúbicos al día de agua residual, de los cuales sólo 18.83% son tratados. Los desechos sólidos suman más de 179 toneladas métricas. Esto trae como resultado que los niveles de coliformes y *Escherichia coli* en el agua sean superiores a los permitidos.

¹³⁵ Oscar Palma Ayala, *Prensa Libre*, Guatemala, 24 de octubre de 2009.

¹³⁶ Antonio Otzoy, Servicio de Noticias ALC.

¹³⁷ *elPeriódico*, Guatemala 18 de abril de 2009.

Los lagos y lagunas del país están en riesgo de correr la misma suerte que el lago de Atitlán, ya que los pobladores los usan como depósitos de aguas servidas y desechos sólidos, confirmó un estudio del MARN-USAC. Después de Atitlán y Amatitlán, el lago más contaminado es Izabal.

Otro manto en peligro de extinción es el de Petén Itzá, debido a la deforestación y proliferación de actividades agrícolas y ganaderas. El lago de Guija en Jutiapa es afectado por descargas de residuos sólidos y líquidos y la deforestación. La laguna del Comendador en Pasaco, Jutiapa, ya está cubierta de ninfa en un 20%. La laguna de Ayarza es afectada por los desperdicios y agua sucia del caserío La Laguna, Santa Rosa.¹³⁸

Desastres asociados a riesgos de la naturaleza. Los fenómenos naturales no son necesariamente equivalentes a desastres, ya que en éstos interviene también la vulnerabilidad de una región o país, la cual, a su vez, es función de condiciones socioeconómicas adversas, deterioro ambiental y falta de preparación u organización para enfrentar los fenómenos de la naturaleza. En países como Guatemala, la pobreza favorece la conversión de fenómenos naturales en desastres y los sectores de más escasos recursos son siempre los más afectados.

Guatemala, por su posición geográfica y topografía, está expuesta a terremotos, deslizamientos de tierra, huracanes, inundaciones y sequías. Por otro lado, el incremento de la frecuencia de los desastres y daños colaterales forma parte de una tendencia mundial ocasionada por los efectos del cambio climático.

Ante la ausencia de políticas públicas adecuadas y la falta de recursos económicos, los más pobres se instalan en áreas propensas a fenómenos naturales que se transforman en desastres, como laderas de alta pendiente y llanuras susceptibles a la inundación. Además, estos asentamientos precarios utilizan construcciones que no son resistentes a las amenazas naturales y que no cuentan con medidas básicas de mitigación. Debido al diseño deficiente y la mala calidad de la edificación, aun eventos naturales de pequeña magnitud pueden ocasionar graves daños en estas comunidades.

En las áreas rurales, por otra parte, se conjugan la pobreza, la degradación del ambiente y la vulnerabilidad creciente. Con la erosión del suelo y la pérdida de cubierta vegetal en las áreas montañosas, la capacidad para absorber las fuertes lluvias disminuye y aumenta la probabilidad de que ocurran deslizamientos e inundaciones.

El riesgo también es alto en las zonas urbanas, debido al porcentaje de la población que vive en asentamientos irregulares, en barrancos y laderas, expuestos a deslizamiento por erosión.

Para anticiparse a los desastres en el país y reducir los efectos, se requiere de un enfoque que integre tanto la reducción de los riesgos, con el desarrollo de las obras de ingeniería necesarias, como la recuperación posterior, en un marco de políticas e instituciones eficaces.

En Guatemala no se han aplicado políticas que reflejen una comprensión de su vulnerabilidad y que contengan medidas para corregirla. El ordenamiento territorial y los códigos de construcción en general siguen siendo inadecuados o no se aplican estrictamente en la mayoría de las áreas expuestas a amenazas naturales.

El paradigma predominante para hacer frente a los desastres ha estado orientado a la elaboración de planes de reacción a situaciones de emergencia, que inevitablemente se dirigen a los efectos de los fenómenos y no a sus causas. Asimismo, durante la tarea de reconstrucción, en muchos casos no se han tomado medidas para reducir el riesgo.

Por otra parte, las actividades humanas generadoras de gases de efecto invernadero (producción energética, transporte, agricultura, deforestación, industria) han elevado las concentraciones de dichos gases en la atmósfera de la Tierra, aumentando la retención de radiación terrestre.

¹³⁸ CEUR/USAC. *Deterioro y desaparición de lagos y lagunas de Guatemala.*

El sistema climático se está ajustando con variaciones en los parámetros del clima: elevación de la temperatura media global, cambio en la circulación atmosférica y oceánica, incremento del nivel medio del mar, aumento de la frecuencia de huracanes y del evento El Niño. Estas variaciones provocan efectos adversos en las poblaciones humanas, las actividades socioeconómicas y los ecosistemas naturales, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los mismos.

El cambio climático podría incrementar la frecuencia, la intensidad, duración y patrón de desarrollo de El Niño. Aunque éste ha sido registrado desde 1880, en las últimas décadas los eventos cálidos han predominado sobre los fríos (La Niña), aumentando la frecuencia e intensidad. El fenómeno de El Niño es un sistema de interacciones entre el océano Pacífico ecuatorial y la atmósfera, que trastorna los patrones de precipitación tropical y circulación atmosférica y se presenta en períodos de tres a siete años. Como resultado, ciertas regiones del planeta reciben una precipitación pluvial superior al promedio y otras sufren déficit.

Si en la atmósfera continúan acumulándose los gases de efecto invernadero que producen los sectores energético, industrial, automotriz y agrícola, la temperatura de la Tierra podría aumentar 0.2 grados centígrados por década, lo que se traduciría en un incremento de temperatura de hasta cuatro grados para finales de este siglo. A ello hay que agregar que los bosques, que desempeñan un importante papel en la fijación de carbono, protección de cuencas, paisaje y conservación de la biodiversidad han sido talados en Guatemala, desde 1950, a razón de 65 mil hectáreas por año.

Según un informe de las Naciones Unidas,¹³⁹ distribuido antes de la cumbre de Copenhague, el 9 de octubre, Guatemala está entre los diez países del mundo de más alto riesgo frente al cambio climático. Estos efectos ya se observan en el país: períodos desequilibrados de lluvia y sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas, inundaciones, epidemias por vectores como el mosquito y desabastecimiento de agua potable. El documento señala que el país está clasificado como de baja competitividad, lo cual aumenta el riesgo de incremento de la pobreza y la intensidad de los efectos del cambio climático global.

Hasta hace diez años se empezaron a sentir con mayor intensidad los impactos más fuertes del cambio climático en Guatemala: el huracán Mitch, en 1998; la sequía de 2001, que provocó una crisis alimentaria en la región chortí de Chiquimula y la tormenta Stan, en 2005.

Por efecto de El Niño, desde junio de 2009 se registró un déficit en las lluvias sobre casi todo el país, causando sequías y daños a los cultivos de subsistencia en el Corredor Seco y el litoral Pacífico. Según estimaciones iniciales del MAGA, en el Corredor Seco los daños a cultivos durante 2009 alcanzaron hasta el 60% y 80% en ciertas áreas. En noviembre, el cultivo de la segunda cosecha estuvo también por debajo del promedio, especialmente en el Corredor Seco, al este y centro del país; esta situación es grave, tomando en cuenta que aproximadamente 40% del trigo y 60% de los frijoles se cultivan en segunda cosecha.

La actual crisis de inseguridad alimentaria afectó a un total de 410,000 familias. El Gobierno de Guatemala declaró un Estado de Calamidad Pública el 8 de septiembre por causa de la misma y el agotamiento de reservas de alimentos a nivel de hogares, principalmente granos básicos. En julio de 2009, un total de 48,500 familias ya se encontraban en situación de inseguridad alimentaria en Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.¹⁴⁰

Según el Mecanismo Mundial para el Combate de la Desnutrición de las Naciones Unidas en Guatemala, como resultado de la sequía 60 mil familias fueron afectadas por carestía de alimentos y se registró un descenso del caudal de agua del 70% en los ríos Motagua, Achiguate, Samalá y Cuilco. Asociado a la crisis alimentaria, hubo un incremento de diarrea, de neumonía y bronconeumonía.

¹³⁹ *Evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres*. Naciones Unidas, 2009.

¹⁴⁰ “Evaluación de Seguimiento de la Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional en las Zonas Afectadas por la Depresión Tropical No. 16 y Disminución de Remesas” realizado por el PMA, PNUD, MFEWS y SESAN. Programa Mundial de alimentos, Boletín Informativo, noviembre de 2009.

La pérdida de cosechas permite, además, predecir un serio problema de falta de alimento para 2010 en Jutiapa y otros municipios del Corredor Seco. Por ejemplo, en el municipio de San Pedro Pinula se perdieron todos los cultivos; en San Manuel Chaparrón, la primera cosecha de maíz, y se está perdiendo la segunda por la plaga de oruga provocada por el calor del suelo.¹⁴¹

La segunda quincena de octubre, un estudio de la Red Humanitaria de las Naciones Unidas estableció que el 11% de los niños y el 13.4% de las mujeres que residen en 64 municipios del Corredor Seco (oriente, Quiché e Izabal) sufrían de desnutrición aguda. Este nivel es considerado alto por la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, el estudio reveló que el 77.5% de los hogares de los 64 municipios se encontró sin reservas de alimentos.

La investigación estableció que el 54.4% de los hogares han recibido apoyo en alimentos para hacer frente a la emergencia; el 80% de la misma provino del Gobierno. El 30% manifestó que ha recibido transferencias monetarias condicionadas, sin embargo sólo el 3.17% ha recibido insumos, semillas y fertilizantes, y el 0.87%, asistencia para crianza de animales.¹⁴²

Aunque extensas áreas del país se vieron azotadas por la sequía, otras sufrieron fuertes precipitaciones pluviales que ocasionaron un gran número de desastres por inundaciones y deslaves. Éstos fueron atendidos por la CONRED y pusieron de manifiesto la vulnerabilidad general del territorio y la posibilidad de consecuencias aún más graves si no se establecen las medidas preventivas necesarias.

Al desprenderse parte de un cerro en la aldea Los Chorros, el 4 de enero, en el kilómetro 205 de la carretera entre San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, y Chicamán, Quiché, se produjo un deslizamiento de unas 10 mil toneladas de tierra y roca. De acuerdo con la CONRED, la posible causa del deslizamiento, de 200 metros de ancho por un kilómetro de largo, fue la humedad del suelo y la existencia de una falla tectónica en la zona. Según esta misma fuente, 33 personas fallecieron, 30 desaparecieron y 5 resultaron heridas.¹⁴³

Las fuertes lluvias de la primera semana de mayo causaron daños que perjudicaron a 2,300 personas y dañaron 404 viviendas en Chisec, Alta Verapaz, y a 1,550 personas y 288 viviendas en Dolores, Petén.¹⁴⁴ La primera semana de junio, las lluvias provocaron inundaciones en el departamento de Escuintla que afectaron el casco urbano de la cabecera departamental, el municipio de Masagua y una comunidad del Puerto San José. En total, estas lluvias afectaron a 10,818 personas. Las viviendas dañadas fueron 424 con daños leves, 194 moderados y 68 con daños severos. Se habilitaron cuatro albergues y se movilizaron los recursos necesarios consistentes en agua pura, esponjas, frazadas y raciones familiares.¹⁴⁵ El 26 de junio, la fuerte lluvia en el municipio de San Pedro Ayampuc provocó el desbordamiento del río Vías, lo cual ocasionó daños en distintas comunidades de este sector, entre otros, a unas 40 viviendas.¹⁴⁶

En San Miguel Chicaj, más de dos caballerías de maíz y frijol de tres comunidades fueron destruidas por la lluvia en la aldea San Francisco. La misma causa destruyó varias casas y dejó aisladas a 400 familias en Santa Cruz del Quiché.¹⁴⁷ Debido a las fuertes lluvias del 2 de julio, cinco colonias del casco urbano del municipio de San Lucas Tolimán, Sololá resultaron afectadas, con un saldo de 130 viviendas con daños leves y 650 personas afectadas por la inundación. Para asistir a las personas evacuadas fue necesario habilitar tres albergues en el casco urbano de la localidad.¹⁴⁸

¹⁴¹ *Prensa Libre*, Guatemala, 26 de junio de 2009.

¹⁴² Encuesta “Valoración de inseguridad alimentaria y nutricional en los departamentos del corredor seco del oriente de Guatemala, Quiché e Izabal”. Red Humanitaria de las Naciones Unidas.

¹⁴³ World Food Programme, *Situation Report* No. 12. 5 de enero de 2009.

¹⁴⁴ *Prensa Libre*, Guatemala, 11 de mayo de 2009.

¹⁴⁵ CONRED. Boletín No. 380. Guatemala, 6 de junio de 2009.

¹⁴⁶ CONRED. Boletín No. 387. Guatemala, 29 de junio de 2009.

¹⁴⁷ *Prensa Libre*, Guatemala, 3 de julio de 2009.

¹⁴⁸ CONRED. Boletín No. 388. Guatemala, 3 de julio de 2009.

Entre julio y agosto distintas comunidades sufrieron serios daños materiales: la carretera que comunica a Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, con Chicamán, Quiché, colapsó el 4 de julio debido al desbordamiento del río Chixoy, que obstruyó las vías con lodo y piedra, como consecuencia de las lluvias y el deslizamiento en el cerro Los Chorros que se produjo el 4 de enero. Varios derrumbes se registraron a causa de la lluvia en la carretera entre San Andrés Semetabaj y San Lucas Tolimán, particularmente en el kilómetro 139. Fuertes aguaceros causaron inundaciones en cinco colonias y tres barrios de Esquipulas, obligando a la evacuación de más de 30 familias, el 9 de agosto.

El 19 de agosto, las viviendas de cinco familias de la aldea Aceituno, en Escuintla, fueron destruidas y las de otras 28 resultaron dañadas a causa de la lluvia y el viento. Las viviendas se asentaban cerca de las riberas del río, el cual no ha sido dragado en los últimos cuatro años y carece de gaviones. Un tramo de la ruta al Pacífico, kilómetro 263, en Catarina, San Marcos, quedó destruido el 23 de agosto por el desborde del río Las Magdalenas. Quedaron incomunicadas varias comunidades de San Marcos y Quetzaltenango. El hecho ocurrió después de ocho días de lluvias torrenciales.

Los ríos Coyolate, Madre Vieja, Guacalate, Achiguate, Acome y Michatoya amenazaron con inundar varias comunidades de Nueva Concepción, La Gomera, Masagua, Puerto San José e Iztapa en agosto. La causa fue la ausencia de trabajos preventivos por parte del MICIVI, según denunciaron los alcaldes respectivos, ya que no aprobó una ampliación de fondos destinados a la protección de cuencas. Aunque este invierno no ha sido tan copioso, en algunos lugares los ríos Coyolate y Madre Vieja han destruido las bordas y dañado los cultivos.¹⁴⁹

En septiembre, el 22, los pobladores del caserío El Carmen, en San Andrés Villa Seca, quedaron incomunicados por el colapso del puente sobre el río Maricón, kilómetro 175. Daños similares, provocados por las lluvias, se produjeron en la aldea Simajuleu, San Juan Comalapa, donde hubo derrumbes, bloqueos de caminos y daños a cultivos; en el kilómetro 60 de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la lluvia inundó parte del tramo ubicado cerca del punto Chico Cimarrón; una escuela en San Antonio Palopó se inundó, debido a una correntada provocada por la falta de drenajes.

El 22 de septiembre un derrumbe dañó una de las paredes del cerro Lec, ubicado en el kilómetro 113.5, entre San Andrés Semetabaj y Panajachel. Según estudios de la CONRED, el cerro no es seguro y la lluvia puede causar deslizamientos de gran magnitud, convirtiendo en insegura esta ruta utilizada por vecinos y turistas.¹⁵⁰

El 26 de octubre, integrantes de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Guatemala (FENAPESCA) expusieron en Chiquimulilla que la mala construcción de algunas bocanarras del país causa fuertes oleajes que socavan playas, destruyen aldeas y vuelcan embarcaciones. A esto se agrega la merma en la producción pesquera, la cual es atribuida a la depredación en los manglares, la sedimentación en canales como el de Chiquimulilla y al aumento de la temperatura del agua. Septiembre fue el mes de mayores daños, pues hubo oleajes de más de tres metros de altura.

La lluvia del 29 de octubre provocó inundaciones, derrumbes, familias evacuadas y daños en las carreteras de las costas de Quetzaltenango y San Marcos.¹⁵¹ El mismo tipo de fenómeno, el 30 de octubre, causó daños a más de 50 casas y pérdidas en la agricultura en Malacatancito, Huehuetenango, debido al desborde de dos ríos, y en Coatepeque, Quetzaltenango, por el desborde del río Mazá.

Desde la primera semana de noviembre la lluvia que azotó al país, resultado de la tormenta tropical IDA, trajo como consecuencia, muerte, derrumbes, daños en carreteras, viviendas y la agricultura. Los derrumbes en la ruta hacia el municipio de la Reforma, San Marcos, amenazaron con dejar incomunicada a esa población, a principios de noviembre.¹⁵²

¹⁴⁹ *Prensa Libre*, ediciones del 5 y 8 de julio, y del 10, 21, 24 y 26 de agosto de 2009.

¹⁵⁰ *Prensa Libre*, Guatemala, 23 de septiembre de 2009.

¹⁵¹ *Prensa Libre*, ediciones del 27 y 30 de octubre de 2009.

¹⁵² *Prensa Libre*, ediciones del 1, 3 y 4 de noviembre de 2009.

Debido a las fuertes lluvias que afectaron a toda la República a principios del mes, se desbordó el río Coyolate en Escuintla, afectando el acceso a varias comunidades. La falta de drenajes y la fuerte lluvia provocaron que 15 viviendas sufrieran daños leves en la comunidad Chicalitos de Champerico, Retalhuleu, luego de que ingresara el agua a los inmuebles. Fue necesario evacuar a 75 personas, las que regresaron a su vivienda luego de asegurarse de que no existía riesgo al momento de retornar.¹⁵³

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Las Metas del Milenio). En septiembre de 2000, la Declaración de las Metas de Desarrollo del Milenio hizo explícitos los objetivos de desarrollo social que las naciones firmantes deberían alcanzar hacia 2015 para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer.

Según los Objetivos del Milenio (ODM), Guatemala, debe reducir, para ese año, la pobreza extrema a 9%, la pobreza medida por un ingreso igual o menor a un dólar al día a 10%, y la pobreza total nacional a 30.8%.

Tabla 69
Guatemala: indicadores de pobreza

Índice de Pobreza por año	Pobreza extrema	Pobreza extrema (US\$ 1 diario) ^b	Pobreza total nacional ^a
1989 (línea base)	18% ^c	20% ^c	61.5% ^d
2000	15.8%	16%	56.5%
2004		21.5%	
2006	15.2% ^e		51% ^e
Objetivos del Milenio	9%	10%	30.8%

Fuente:

^a ENCOVI 2000. Los indicadores de pobreza y desigualdad se calcularon utilizando el consumo per cápita del hogar.

^b ENCOVI 2000. Los indicadores de pobreza y desigualdad se calcularon utilizando el ingreso per cápita del hogar.

^c PNUD. *Informe de Metas del Milenio: Informe de avance de Guatemala*. Guatemala, 2002.

^d Banco Mundial. *La Pobreza en Guatemala*, informe N° 24221-GU. 2003

^e INE. ENCOVI 2006.

El cuadro anterior muestra que la pobreza extrema, medida por el porcentaje de población que cuenta con menos de un dólar al día de ingreso, ha seguido una trayectoria errática en el país, ya que disminuyó en 2000 respecto a 1989, pero volvió a aumentar en 2004, según se observa en la columna 3 del cuadro. La pobreza extrema medida por satisfacción de necesidades básicas y la pobreza total han tenido una trayectoria decreciente desde 1989, pero aún existe una brecha importante respecto de los ODM y la situación en la mayoría de los países latinoamericanos.

Un estudio realizado para la Secretaría de Planificación y Programación de La Presidencia (SEGEPLAN)¹⁵⁴ sostiene que Guatemala podría alcanzar la mayoría de las metas sociales del milenio al 2015 si se lograra la convergencia de tres dinámicas fundamentales: un nivel adecuado de crecimiento económico, la aplicación de políticas de redistribución del ingreso y de políticas sociales adicionales.

Este estudio determinó que existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento económico promedio anual en el período y la variación en el coeficiente de Gini, para alcanzar los ODM. A mayor crecimiento de la economía, se necesita menor disminución en el coeficiente de Gini para alcanzar dichas metas. En otras palabras, no basta con el crecimiento de la economía para abatir la pobreza si no hay una mejora en la distribución del ingreso, a menos que se alcanzaran tasas de crecimiento anual arriba del 5%.

¹⁵³ Boletín de CONRED. Guatemala, 7 de noviembre de 2009.

¹⁵⁴ Yamada, Gustavo *et al.* *Modelos de Predicción y Costeo del Cumplimiento de los Objetivos del Milenio en Guatemala*. SEGEPLAN, 2005.

Además, para el cumplimiento de las metas relacionadas a la pobreza extrema, educación, género, salud y nutrición en Guatemala, se necesitarían recursos anuales que fluctúen entre el 1.10% del PIB, si la economía creciera al 3% anual en el periodo 2005-2015, y 0.59% del PIB si la economía creciera al 5% anual.

Según el estudio citado, la economía del país debería crecer a una tasa promedio anual durante los próximos años de más de 5% anual, para alcanzar los ODM en lo que se refiere a la pobreza total. Para reducir la pobreza extrema, el crecimiento promedio anual debería ser cercano al 4.5%.

Por otra parte, una tasa promedio de crecimiento económico de 3% anual, necesitaría ser complementada con una redistribución del ingreso (una caída del coeficiente de Gini en 6.4%) a fin de poder alcanzar la meta del milenio en lo que se refiere a pobreza extrema. Más aún, si el crecimiento de la economía fuera sesgado hacia sectores poco intensivos en mano de obra, se necesitaría una redistribución de ingresos mayor (una caída de 10.7% en el coeficiente de Gini) para poder obtener la meta del milenio.

Para reducir la pobreza total a la mitad, respecto al nivel de 1989 (que era de 61.5%), según el estudio citado, este nivel de crecimiento debe ser complementado con una muy fuerte redistribución del ingreso (una caída del coeficiente de Gini en 44.6%) a fin de poder alcanzar la meta. Más aún, si el crecimiento de la economía fuera sesgado, se necesitaría una redistribución de ingresos mayor (una caída de 55.4% en el coeficiente de Gini) para poder obtener la meta planteada. En dicho escenario, los requerimientos de redistribución directa asociados fluctuarían entre 3.8% y 4.3% del PIB (969 a 1,112 millones de dólares anuales promedio).

Estas tasas resultan bastante optimistas con respecto a promedios históricos y a los resultados observados en la economía del país, principalmente después de la crisis mundial.

A partir de 2000, el crecimiento económico promedio de la economía del país ha sido del 2.6%. Durante la década de los años 90, el crecimiento promedio anual fue de 4% y la tasa promedio histórica registrada en la segunda mitad del siglo veinte fue de 3.9%, según estimaciones del BANGUAT (2005). La tasa más alta de crecimiento económico se registró en las década 60-70 y alcanzó la cifra de 5.5% anual.

Por lo tanto, las tasas observadas, menores al 3%, en el crecimiento del PIB del país en el último período, deberían ser compensadas con caídas importantes en el índice de Gini, uno de los mayores de América Latina, reflejo de la gran desigualdad en la distribución del ingreso en Guatemala. También es necesario un aumento en los gastos del gobierno dedicados a salud, educación y conservación del ambiente y un mejoramiento en la calidad de la ejecución de los diferentes programas de inversión social.

El panorama a corto plazo no es alentador para las metas de reducción de la pobreza total y extrema. Según estimaciones del BANGUAT, el crecimiento del PIB en 2009 estaría entre 0.4 y 1.2%, cifra que resulta optimista si se compara con las proyecciones del sector privado. Para 2010, el BANGUAT prevé un crecimiento del 2.1%, lo que depende de la recuperación de la economía internacional.

Por otra parte, es poco previsible que disminuya el índice de Gini en Guatemala a través de políticas consistentes de redistribución del ingreso. Además, existe una tendencia en la disminución del gasto social del Gobierno; el presupuesto para 2010 quedó en 49,723 millones de quetzales, igual que el año anterior, lo que implica que no haya aumentos en las asignaciones para educación y salud.

Por lo tanto, se puede afirmar que, en lo que se refiere a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de los diferentes indicadores sociales, Guatemala se está alejando de las Metas del Milenio. Si se mantiene una tasa de crecimiento de la economía menor al 3%, la ausencia de medidas de redistribución del ingreso, las reducciones en el gasto social y la ineficacia en la ejecución del presupuesto del Estado, la brecha tenderá a profundizarse en los próximos años.

En el marco de la afirmación anterior, el hambre hace cuestionar aún más la viabilidad de las Metas del Milenio en Guatemala. Los expertos señalan que la crisis en la seguridad alimentaria que se manifestó en 2009,

a la que se atribuye hasta el momento la muerte de 25 niños, ha sido provocada por la sequía, la crisis económica global, el alto precio de los alimentos y la caída del envío de remesas.

El 18 de septiembre de 2009, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que la crisis alimentaria en Guatemala continuaba empeorando y que la desnutrición aguda aumentaba rápidamente. La reducción y pérdida de la cosecha afectó a 2.5 millones de personas.¹⁵⁵

Guatemala avanza en forma lenta y desigual para cumplir los ODM en 2015, reconoció la subsecretaria de la SEGEPLAN, durante un foro celebrado el 27 de abril en la Universidad Rafael Landívar.

A mitad del período, la mortalidad materna y el analfabetismo se muestran como los males más persistentes. Según Castro, la mortalidad materna se produce principalmente por hemorragias durante el parto, sobre todo entre la población indígena en el área rural. La pobreza y la pobreza extrema constituyen condicionantes que incrementan estas graves violaciones del derecho a la salud.

Otro de los objetivos difíciles para Guatemala es conseguir que todos los niños y niñas culminen la enseñanza primaria y elevar la alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años. De nuevo, la población rural, indígena y femenina es la más rezagada: seis de cada diez mujeres mayas mayores de quince años son analfabetas. Por otra parte, aunque la evolución de los indicadores muestra progresos, sobre todo en cuanto a la matrícula, la deserción escolar es alta.

En cuanto al combate del SIDA, recogido en el objetivo sexto, Castro comentó que Guatemala logró elevar el uso de preservativos, principal método para evitar el contagio por vía sexual, pero hay 73,000 adultos, de 15 a 49 años, registrados como seropositivos. Según el II Informe de Avances, se observa un proceso de feminización de la epidemia y se ha alcanzado casi la paridad entre casos de hombres y mujeres.

Respecto a los objetivos de la sustentabilidad ambiental, todos los indicadores del país en este terreno muestran una tendencia al deterioro, como se muestra en el apartado relativo a los derechos ambientales de este informe, lo que permite predecir también un incremento en la brecha con relación a los ODM.

Finalmente, al analizar algunos indicadores específicos de los ODM para Guatemala en el tema de la salud, hay que subrayar que existe una gran desigualdad en este campo que los indicadores no reflejan.¹⁵⁶ Cuando se compara la mortalidad materna por grupo étnico, se observa que la población indígena posee una tasa de mortalidad materna tres veces mayor a la que posee la población no indígena. Los indicadores del progreso de Guatemala señalan que el tiempo que tomaría mejorar las condiciones de vida (conforme a los ODM) de los indígenas es de 83 años, mientras que para los no indígenas es de 23 años.¹⁵⁷

Los ODM relacionados con la reducción del VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades graves no están cuantificados. En Guatemala la prevalencia del VIH/SIDA para la población de 15 a 49 años se ha mantenido inalterable; sin embargo, no es posible concluir sobre el logro de este ODM, según el estudio citado.

Otro problema señalado por la AID¹⁵⁸ es el de la asimetría de información estadística de los indicadores de salud, especialmente el indicador de la muerte materna. Los subregistros en el cálculo de la mortalidad materno-infantil y la falta de información sobre el VIH/SIDA y demás enfermedades infectocontagiosas, limitan la capacidad de manejar información actualizada y monitorear el avance de los respectivos indicadores de salud.

¹⁵⁵ Centro de Noticias de la ONU, en <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp>.

¹⁵⁶ AID. *Análisis del progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para salud en Guatemala*. 2006.

¹⁵⁷ Martorrel R, Flores R, Hickey M. *Studing in Guatemala: Analyses of change over 15 years*. Emory University, 2002.

¹⁵⁸ AID. *Análisis del progreso... Op. cit.*

2.13 Derechos de los pueblos indígenas

El Estado de Guatemala, en su Constitución Política, reconoce la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Es deber del Estado, respetar, reconocer y promover a los pueblos indígenas, entre otros, las formas de vida, la organización social, las tradiciones, el uso del idioma y del traje y otros contenidos en los artículos del 66 al 70, referentes a las comunidades indígenas.

Los tratados y convenios internacionales suscritos por Guatemala, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, definen los derechos culturales vinculados a los grupos de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, como el derecho a disfrutar de su propia cultura y a profesar y practicar su propia religión y a utilizar su propio idioma.

Con la aplicación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos que en conjunto contienen garantías mínimas para la protección y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, se afianzan los derechos de estos pueblos.

En el Congreso de la República, además del marco legal existente, en 2009 se elaboraron iniciativas de ley que abordan situaciones diversas de los pueblos indígenas. Las iniciativas son las siguientes:

- La ley que aprueba el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Registro 2699), sustentada en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta iniciativa fue remitida a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, de la cual recibió un dictamen favorable, aprobada en primer debate en el pleno del Congreso de la República, y queda pendiente el segundo y tercer debate y discusión por artículos.
- Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, (Registro 4051), sustentada en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Pendiente de presentación en el Pleno del Congreso de la República, fue ingresada como nueva iniciativa de ley en mayo de 2009.
- Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas (Registro 3835), sustentada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, actualmente se encuentra en la Comisión de Paz y Desminado, Comisión de Comunidades Indígenas, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República. Pendiente de dictamen, con plazo ya vencido y con solicitud de prorroga del mismo.
- Ley de Generalización de Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural (Registro 3913), sustentada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención de los Derechos de los Niño y el Convenio 169 de la OIT. En discusión para su dictamen en la Comisión de Educación y Tecnología del Congreso de la República. Involucramiento de diversos actores sociales y objeciones del MINEDUC.
- La Ley de Jurisdicción Indígena (Registro 3946), basada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, pretende establecer el pluralismo jurídico y respetar el sistema de justicia de los pueblos indígenas. Con plazo para emitir dictamen vencido, se encuentra en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República. Prorroga de plazo solicitada.
- Ley que introduce la Reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Registro 3934), sustentada en el Decreto No. 11-2002 que corresponde a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Con la iniciativa se pretende la búsqueda de mayor participación indígena en número de participantes y tomas de decisión. Pendiente de dictamen, se encuentra en la Comisión de Descentralización y Desarrollo del Congreso de la República.

- Ley General de Pueblos Indígenas (Registro 4047), basada en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Se realizó presentación pública a la Comisión de Pueblos Indígenas. Pendiente de presentación al Pleno del Congreso.
- Ley de Medios de Comunicación Comunitaria (Registro 4087), basada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Actualmente en las Comisiones de Comunicación y de Pueblos Indígenas del Congreso de la República. Pendiente dictamen.

A pesar de que los derechos de los pueblos indígenas, como el acceso a la educación bilingüe e intercultural, a la expresión libre y preservación de sus idiomas, a mantener y expresar su identidad cultural propia, al acceso a la justicia, etc., se encuentran establecidos como garantías constitucionales, la situación refleja precariedad en su implementación. Se evidencian también otros derechos vulnerados, como salud y educación.

Construir la democracia ha debido requerir poner en agenda y hacer visible la desprotección del patrimonio cultural tangible e intangible y la aplicación de las políticas lingüísticas, así como la discusión sobre los proyectos energéticos; entre estos últimos, el tema de la explotación de recursos naturales y proyectos mineros, respecto a los cuales se llevaron a cabo más de 37 consultas comunitarias a nivel municipal.

En 2009, en el agro se mantuvo la tensión y el conflicto agrario. Los problemas no son exclusivamente de propiedad sino también de los mecanismos de las políticas de tierra. El sistema de mercado de tierras del FNTIERRAS, no logra producir los beneficios que del mismo se esperaban. Tierras ofertadas improductivas y caras, que los campesinos indígenas abandonan, ya que alcanzado el período de gracia de cuatro años, se encuentran sin capacidad de pagar.

Otro aspecto con complicaciones sociales en 2009 fue la seguridad ciudadana y comunidades indígenas. La seguridad comunitaria indígena ha registrado un profundo deterioro. Se originaron, junto a la PNC, formas paralelas de seguridad que el Ministerio de Gobernación denominó Juntas Locales de Seguridad (JLS), varias de las cuales operan sin ningún mecanismo de control, provocan atropellos a los derechos humanos y se conducen en muchas ocasiones al margen de la ley.

Las denuncias de violación de derechos de población indígena recibidas en la Procuraduría, de enero a octubre de 2009, fueron 53; de las cuales las que se relacionan con el respeto al trabajo digno representan el 11%, a la consulta de los pueblos indígenas, 4%; a comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, 6%; al desarrollo por posesión y protección a tierras comunales 2%; a no ser discriminado por raza u origen étnico, 6%; a la identidad cultural, 4%; a la aplicación de la religión y espiritualidad ancestral, 4%; a la protección del patrimonio ancestral y natural, 2%; y a los plenos derechos y libertades de los derechos colectivos y específicos, 57%.

Además, fueron conocidos por la institución del Procurador, algunos casos de racismo y discriminación. El 43% de los casos atendidos fueron denuncias realizadas de forma colectiva por personas indígenas, es decir, a nombre de un grupo o comunidad específica en defensa del derecho, y el 57%, por personas a título particular acerca de un derecho fundamental violentado por el hecho de ser indígenas; de las denuncias interpuestas individualmente, el 48% corresponde a mujeres y el 52% a hombres.

De los casos, por departamento, el 33% corresponde a Guatemala; a Quiché, el 23%; Alta Verapaz y Sololá, 9% cada uno; Petén, 6%; Chimaltenango, 8%; Escuintla, 2%; Quetzaltenango, 4%; Puerto Barrios, San Marcos y Baja Verapaz, 2% cada uno.

Las denuncias presentadas por discriminación racial son pocas en relación con el fenómeno existente de hecho, lo cual representa un subregistro. Se presentan algunas a continuación a manera de indicar la práctica que existe por discriminación y racismo, las siguientes:

- a) El denunciante, de ascendencia maya k'iche', es objeto de discriminación racial; en noviembre de 2008, mediante el sistema del Fomento de Hipotecas Aseguradas, adquirió una vivienda en residenciales Prados del Tabacal I, en el municipio de Villa Nueva, de Guatemala. Decidió instalar en su casa de habitación una pulpería y una tortillería. La administración del referido residencial SERPRADOS, S.A. y la asociación de vecinos, al ver la prosperidad del negocio, le proferieron diversos tipos de amenazas, lo ofendieron con términos discriminatorios. Además, elaboraron un reglamento de vecinos que prohíbe la instalación de negocios dentro del residencial; sin embargo, en el residencial existen varios comercios y las medidas y reglamento fueron impuestos únicamente al denunciante, prohibiéndole su actividad comercial, le cortaron el servicio de agua potable, le prohibieron entrar en su residencia, le retiraron la tarjeta electrónica para entrar a la residencial, por lo que debe ingresar a escondidas, le impusieron un cobro desmedido del servicio de agua de Q15,300 mensuales, cuando la cuota es de Q290 para los demás vecinos e incluye otros servicios.
- b) La trabajadora social del hospital de Salud Mental de la ciudad de Guatemala conoció el caso de la víctima, un hombre de 72 años de edad que fue referido al citado centro por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Poptún, Petén. El señor es monolingüe en el idioma maya q'eqchi'. A su ingreso al hospital le aplicaron medicamento para personas que padecen esquizofrenia, delirio de persecución y depresión, puesto que no se podían comunicar con él para hacerle los exámenes pertinentes. Posteriormente, y para el seguimiento de su caso, los médicos se apoyaron con una intérprete para entrevistarlo, determinándose que se encontraba sano, y que no padecía de enfermedad mental alguna, sino que su problema fue la barrera idiomática.
- c) La afectada, de ascendencia maya k'ich'e fue contratada como registradora civil en el Registro Nacional de las Personas de Totonicapán. Como parte de sus labores se encargó negociar con las autoridades de los 48 cantones a efecto de que la oficina fuese aceptada por la población en general, a pesar de que se encontraba contratada bajo el renglón 022, contrato renovado para 2009. A finales de enero, para cumplir con el procedimiento administrativo que le corresponde, evaluó el trabajo de las personas bajo su cargo, y una, de origen mestizo, tuvo deficiencias en su servicio y al enterarse de la calificación insultó a la afectada diciéndole: "India abusiva", además, amenazando su seguridad laboral bajo argumentos de más poder y que la iba a contratar como sirvienta de su casa o que descansara en paz. El 2 de febrero a la afectada se le notificó la rescisión de su contrato, pese a que durante su labor no tuvo quejas ni problemas en su desempeño.

En relación a algunos casos de sentencias de Órganos Jurisdiccionales, se citan:

- a) Caso de la ex segunda viceministra de Trabajo y Previsión Social, donde tres empleados públicos, en las instalaciones de la oficina del MINTRAB del municipio de Tecún Umán, la observaron despectivamente por motivos de su etnia, la excluyeron y no le prestaron la debida atención. Encerrándose, posteriormente, los tres empleados dentro de una oficina se mofaban de la referida funcionaria. El caso fue investigado por el Ministerio Público, y fue conocido por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, el cual luego del proceso resolvió que los tres acusados iban a ser juzgados con un año y cuatro meses de prisión, pena que se declaró conmutable en su totalidad a razón de Q 10.00 por cada día de prisión impuesto y una sanción de Q 676.76, y les perdonó el pago de los costos procesales por ser personas de escasos recursos económicos.
- b) El sábado 13 de abril de 2006, un grupo de estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Rural, se encontraba en una gira de estudios en la laguna de Yaloch jurisdicción del municipio de Melchor de Mencos, Petén. Durante la gira, uno de los estudiantes, insultó con peyorativos racistas y discriminadores a un compañero. El caso fue investigado por el Ministerio Público, al final del proceso, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Petén, con fecha 19 de septiembre de 2007, resuelve abrir a juicio el proceso No. C-98-2007.of.1°.TRIB.SENT, en el auto de apertura a juicio, el referido Juzgado señala como fecha para debate oral y público el 7 de febrero de 2008, seis meses después de dictado el auto, situación que no se ajusta a

los plazos establecidos en ley para celebrarse a los 15 días después de notificadas las partes. En el referido debate los informes periciales evidenciaron daño psicológico causado a la víctima. El Tribunal absuelve al procesado del delito de discriminación racial aduciendo falta de pruebas. Con fecha 10 de marzo de 2009 fue presentado el recurso de apelación especial del caso, ante la honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El referido recurso fue formalmente admitido.

Es meritorio reconocer que Guatemala ha transitado de manera positiva en el combate de la discriminación racial, pero los esfuerzos pueden redoblar al atender las denuncias y dar seguimiento a los casos de discriminación racial y, de manera especial, incentivar y mejorar las buenas prácticas institucionales.

2.14 Derecho a la cultura

En sociedades afectadas por la guerra y en procesos de transición y consolidación democráticas, la cultura de paz se ha instaurado como mecanismo para restaurar otros valores, como la justicia social, inclusión, pluralidad y tolerancia. La paz demanda nuevas formas de relacionarse no violenta, construir vías e intercambio de opiniones y la solución pacífica y alternativa de conflictos.

La cultura así entendida deja de ser una acumulación de obras y de conocimientos, no se limita al acceso a las obras de arte y a las humanidades sino que es, a la vez, adquisición de conocimientos, exigencias de un modo de vida y la necesidad de comunicación.¹⁵⁹ Ésta es una definición enriquecedora en el sentido que trasciende de los bienes culturales materiales a aquellos que se encuentran inmersos en el seno de la sociedad y que no son propiamente palpables.

Según la UNESCO, la cultura debe ser considerada

“como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”¹⁶⁰

Es decir, cultura comprendida desde una perspectiva emancipadora, como el conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio crítico y cambiar la realidad; esa realidad que debe cambiar de la violencia a la paz y reconciliación; “*los modos de vida, las maneras de vivir juntos.*”

Desde una perspectiva de paz, el objetivo del derecho a la cultura invoca una reconstrucción, valorización y cooperación entre individuos. La cultura de paz, por lo tanto, se basa en la edificación de valores, comportamientos, actitudes y modos de relacionarse que refuerzan la no violencia y el respeto a los derechos humanos en sus múltiples manifestaciones e interdependencias.

Por otra parte, puede interpretarse el término “derecho a la cultura” en dos vertientes diferentes, una activa, de acción o ejercicio por parte de las personas naturales o jurídicas (agentes culturales), y una vertiente pasiva, por cuanto corresponde a los poderes públicos promover y tutelar el acceso de personas a la cultura, que se configura como un derecho de todos. Por consiguiente, el derecho de los creadores a la libre expresión cultural y a las personas a su disfrute se ha convertido en uno de los derechos más apreciados de la época contemporánea.

En cuanto a la cultura como acción efectiva de los actores involucrados, ésta relaciona varias esferas de la temática sobre derechos humanos; en ella confluyen las prácticas de las personas, organizaciones, instituciones y el propio Estado en el fomento de la diversidad y tolerancia, en la pluralidad y aceptación, la no violencia y cultura de paz, la diversidad y la no discriminación.

¹⁵⁹ UNESCO, Conferencia General del 26 de noviembre de 1976. París, 1996.

¹⁶⁰ Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, adoptada por la 31 reunión de la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de noviembre de 2001.

De esa cuenta son válidas las razones que destacan la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho de acceder a la cultura, el deber público de promocionarla y generalizarla, así como no dejar de lado los problemas étnico-culturales que se manifiestan en Guatemala.

Además de ser el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de la comunidad y el derecho a la protección de las producciones científicas, literarias y artísticas, el derecho a la cultura se relaciona estrechamente con todos los derechos individuales y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de religión y creencia, la libertad de asociación y el derecho a la educación¹⁶¹ e incluso el derecho a la vida.

Estructura jurídica del derecho a la cultura. El artículo 57 de la Constitución Política de la República establece que *“toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la Nación”*, de tal forma que el derecho a la cultura trasciende los bienes materiales.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos define que toda persona tiene la potestad de ser parte de la vida cultural, de gozar y beneficiarse de las artes y del progreso científico de su país; igualmente contempla que debe garantizarse la protección de los intereses morales y materiales de las personas autoras de producciones científicas, literarias y artísticas¹⁶².

Los textos internacionales aceptados o ratificados por el Estado de Guatemala relacionados con el derecho a la cultura, son numerosos. A continuación una referencia extensa de los estándares internacionales relacionados a la materia, entre ellos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado con el Decreto No. 9-90 del Congreso de la República, y la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. El Convenio *Unidroit* sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente, suscrito en Roma, Italia, en 1995, aprobado por el Decreto No. 78-2002; el II Protocolo de Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, aprobado por el Decreto No. 41-2003 y los Estatutos de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Decreto No. 53-2002.

Asimismo, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, Decreto No. 25-2006 y el Decreto No. 64-2007, que aprueba la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO. Así como la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, Decreto No. 76-2007.

Los Convenios de Adhesión a la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) y de Santa Cruz de la Sierra, de la Secretaría General Iberoamericana (Decretos No. 12-84 y 01-2006 del Congreso de la República) que entre otras cosas incluyen compromisos como el de realizar acciones relacionadas con la cultura en general, como el Plan Iberoamericano de Lectura o el Plan Centroamericano de Desarrollo Cultural.¹⁶³

Dentro de la legislación interna, el derecho a la cultura en Guatemala se ha establecido como garantía constitucional y se ha impulsado y creado una gama de leyes que garantizan ese derecho.

La Constitución Política de la República legisla el derecho a la cultura desde el artículo 57 al 65. En ellos se garantiza el derecho a la cultura, a la identidad cultural, protección e investigación de la cultura, la protección al patrimonio cultural, el arte, el folclore y artesanías tradicionales, a la expresión creadora, al patrimonio natural,

¹⁶¹ Prott Lyndel V. “Cultural Rights as Peoples Rights in International Law”, en *The Rights of Peoples*. Clarendon Press, Oxford, 1988. pág. 92-102 (citado por el Dr. Stavenhagen).

¹⁶² Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 27.

¹⁶³ Araujo, Max. *Breviario de Legislación Cultural*. Ministerio de Cultura y Deportes, Banco Mundial / Universalización de La Educación Básica (Birf 7051-Gu), versión actualizada, Guatemala, 2009.

y la preservación y promoción de la cultura. Además de contemplar en los artículos 66 al 82, derechos relacionados con las comunidades indígenas, la educación, la educación superior y el deporte.

La legislación nacional contempla dentro de sus normativas las siguientes leyes que garantizan la participación y acceso a la cultura.

La Ley General de Descentralización (Decreto No. 14-2002), Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto No. 11-2002), Código Municipal (Decreto Legislativo No. 12-2002), Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (Decreto No. 02-2003), y Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto No. 52-2005), que contiene el sustento legal para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, principalmente el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas.

La Ley del Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Guatemala (24-2006), Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (Decreto No. 81-2002), Ley de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (Decreto No. 65-90) y sus reformas por el Decreto No. 24-2003.

Para lograr una mayor participación de grupos vulnerables en la vida cultural y garantizar el acceso al progreso científico se tiene la Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales (Decreto No. 58-2007).

En materia económica se han promulgado algunas leyes que tienen relación con la producción y protección artesanal y su fomento, como la Ley de Protección de la Producción Textil Indígena (Decreto 426) y la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal (Decreto No. 141-96) que protege las artesanías y las artes populares.

En cuanto al tema del acceso a al progreso científico, se ha aprobado el Decreto No. 65-2007, Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear en América Latina y el Caribe.

El Decreto No. 58-89 legisla la materia literaria por medio de la Ley de Fomento del Libro de Guatemala y su reglamento, según el Acuerdo Gubernativo No. 1408-90.

Esta última ley se encuentra relacionada con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decreto No. 33-98 y sus reformas por los Decretos No. 56-2000 y 11-2006).

En relación a la libertad de expresión, se encuentra la Ley de Radiodifusión Nacional (Decreto Ley 443), que regula las estaciones de radio y televisión.

El Decreto No. 42-2005 declara como Patrimonio Cultural de la Nación a Radio Faro Cultural y Deportiva, dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes y a la frecuencia radioeléctrica 104.5000 MHz (Banda de Frecuencia Modulada), que goza de protección del Estado. En el mismo ámbito, la Ley de Incentivo a los Medios de Comunicación (Decreto 73-89).

Otra normativa relacionada con el derecho a la cultura es la Ley de Espectáculos Públicos (Decreto No. 574-1956, modificado por el Decreto No. 323-1965), también la Ley de Espectáculos Deportivos, que regula la celebración de eventos culturales y deportivos en locales públicos y privados. La Ley de Desarrollo Rural (Decreto No. 42-2001), emitida el 26 de septiembre de 2001, también se relaciona con la presentación de espectáculos públicos.

En materia del patrimonio natural y cultural, la legislación nacional contiene las siguientes leyes que garantizan su protección y promoción: Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 26-97, reformado por el Decreto 81-98 del Congreso de la República), artículos 5, 13 y 42 y los artículos 59 y 472 del Código Civil (Decreto Ley 106) y los Acuerdos Gubernativos 778-2003 y 379-2005 del Ministerio de Cultura y Deportes que también abordan la materia.

La Ley de Áreas Protegidas (Decreto No. 4-89 del Congreso de la República) tiene como objetivo la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, los recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales.

También el Acuerdo de Creación de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos de los Períodos Prehispánico e Hispánico.

El Decreto 1,768, Ley del Archivo General de Centroamérica, reformado por el Decreto No. 12-72.

Las siguientes leyes, que pueden considerarse las más representativas en materia de conservación y preservación del patrimonio cultural e histórico: el Decreto No. 55-2003 que declara Área Protegida y Parque Nacional a los sitios arqueológicos Yaxhá, Nakum y Naranjo; y el Decreto No. 29-2005, Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad de la Antigua Guatemala y su Zona de Influencia.

Asimismo, el Decreto No. 60-2005, que declara patrimonio nacional y cultural de Guatemala a la Biblioteca Nacional “Luís Cardoza y Aragón” y el Acuerdo Ministerial No. 328-98 que declara al Centro Histórico de la ciudad de Guatemala como Patrimonio Cultural Protegido.

Existe legislación que contempla la creación de entidades con la finalidad de garantizar el derecho a la cultura, además del Ministerio de Cultura y Deportes que es el ente rector de la política cultural y deportiva, como la Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural y Artística (ADESCA), Decreto No. 95-96.

Así también, la Ley del Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco (IPSA), Decreto No. 81-90, modificado por el Decreto No. 54-91.

La Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Decreto No. 1701, reformada por los Decretos No. 22-71 y 25-73, establece que el INGUAT debe cooperar con las instituciones encargadas del mantenimiento, conservación, exhibición, restauración y conocimiento de los tesoros arqueológicos, históricos y artísticos, entre otros.

Por último, el derecho a la cultura se acompaña del desarrollo de la cooperación internacional y las relaciones internacionales en materia cultural y, en este sentido, durante el periodo de 2002 a 2009, Guatemala estableció convenios de cooperación cultural con Cuba, Ecuador, Perú, Italia y México, entre otros.

Evidentemente, el marco normativo tanto nacional como internacional vigente en nuestro país, es amplio y muestra la importancia reconocida del derecho a la cultura asumida por el Estado, lo cual es positivo y significa logros alcanzados.

Sin embargo, a pesar de ese amplio marco normativo, existen carencias y vacíos, falta de concordancia entre la legislación y mecanismos para resolver conflictos o promover más eficazmente la realización humana de los habitantes de Guatemala. La cultura de la violencia se sobrepone como un acicate a los canales incipientes que permiten las leyes vigentes con el fin de contrarrestar nuevas dinámicas y conflictos.

Situación del derecho a la cultura. Guatemala es un país de contraste y diversidad cultural, lo que constituye una fortaleza si se asume que la pluralidad de culturas es un factor positivo que promueve e impulsa el diálogo y la relación multicultural e intercultural.

Con respecto a la situación del derecho a la cultura, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, durante 2009 realizó una serie de procesos institucionalizados a través de las Auxiliaturas departamentales. Dentro de las acciones específicas, que incluyen la orientación, prevención, mediación, acompañamiento y conciliación entre otras, se ha tratado de fomentar la cultura de paz y el diálogo, propiciando acciones pertinentes que confluyen en las investigaciones sobre la violación a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los específicos, según las denuncias presentadas y casos atendidos. En total

se registraron 1,156 expedientes de investigación relacionados con los derechos civiles y políticos, 1,505 en los económicos, sociales y culturales, y 640 vinculados a los específicos. Las Auxiliaturas registraron un total de 3,301 casos. Dentro de las acciones específicas la prevención ocupa la mayor parte de casos con 5,722, le siguen la orientación (3,914), acompañamiento (1,884), mediación (1,300) y la conciliación (219).

Concerniente a la igualdad, dentro de los derechos civiles y políticos se consignaron un total de 19 expedientes de investigación y 213 acciones específicas. El mayor porcentaje del derecho vulnerado lo tiene la falta de atención pública (85.78%), la desigualdad jurídica (6.03%) y la discriminación o racismo (5.17).

Tabla 70
Derechos Civiles y Políticos - Igualdad
Expedientes de investigación y acciones específicas, 2009

Igualdad	Expedientes de investigación	Acciones específicas	TOTAL	%
Falta de atención pública	12	187	199	85.78
Desigualdad jurídica	4	10	14	6.03
Discriminación – racismo	2	10	12	5.17
No regulación de la diferencia		4	4	1.72
Discriminación - nacionalismo	1	1	2	0.86
Discriminación - sexismo		1	1	0.43
TOTAL	19	213	232	100.00

Fuente: elaboración propia, PDH, 2009.

En cuanto a la tolerancia, se registraron dos expedientes de investigación y tres acciones específicas en el rubro relativo a la represión.

Tabla 71
Derechos Civiles y Políticos - Tolerancia
Expedientes de investigación y acciones específicas, 2009

Tolerancia	Expedientes de investigación	Acciones específicas	TOTAL	%
Represión	2	3	5	100.00
TOTAL	2	3	5	100.00

Fuente: elaboración propia, PDH, 2009.

En el tema de derecho a la cultura y la ciencia, durante 2009 se registraron seis expedientes en proceso de investigación y se ejecutaron 16 acciones específicas. Del total del derecho vulnerado, recogen los mayores porcentajes la falta de oportunidades de participar en la vida cultural y artística (27.27%), el irrespeto al patrimonio natural y cultural (27.27%) y el no facilitar el disfrute del derecho a la recreación y al deporte (22.73%).

Tabla 72
Derechos Civiles y Políticos - Derecho a la cultura y a la ciencia
Expedientes de investigación y acciones específicas, 2009

Derecho a la cultura y la ciencia	Expedientes de investigación	Acciones específicas	TOTAL	%
Falta de oportunidades de participar en la vida cultural y artística		6	6	27.27
No respetar el patrimonio natural y cultural	3	3	6	27.27

No facilitar el disfrute del derecho a la recreación y al deporte	2	3	5	22.73
No apoyar la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura	1	2	3	13.64
Restricción a la libertad para la investigación científica y actividad creadora		1	1	4.55
Restringir el acceso a los medios de comunicación		1	1	4.55
TOTAL	6	16	22	100.00

Fuente: elaboración propia, PDH, 2009.

A su vez, la institución ha implementado actividades concernientes a promover el derecho a la cultura como una actividad incluyente de los diversos actores sociales. En el transcurso de 2009 se promovieron: el Certamen Fotográfico Generación en Generación, la inauguración del Diplomado en Derechos, Cultura de Paz, clínicas y encuentros deportivos como la carrera por los derechos humanos y actividades con personas con discapacidad y retos especiales.

Por otro lado, ante la imposibilidad de fomentar el entendimiento y acuerdo a través del diálogo, es importante destacar los procesos concernientes a la parte gubernamental, que ha enfrentado la conflictividad social decretando “estados de prevención” o la violencia para enfrentar las protestas de las comunidades. Ha existido incapacidad del Gobierno para concretar mecanismos de resolución de conflictos y fomentar una democracia participativa y deliberativa de la población.

En Coatepeque se decretaron tres Estados de Prevención, ante vendedores ambulantes que se oponen al traslado de sus ventas. El departamento de Huehuetenango no es ajeno a la problemática; durante 2009 fue decretado un Estado de Prevención por enfrentamientos entre la municipalidad y comunidades en la cabecera departamental por el manejo de la basura. San Marcos tuvo el último Estado de Prevención producto de las protestas y enfrentamientos por los constantes cortes de fluido eléctrico.

Por otra parte y como aspecto positivo, es importante señalar los esfuerzos interinstitucionales dirigidos a través del programa de Escuelas Abiertas, en el cual participan el MINEDUC, el MSPAS y secretarías del Ejecutivo, con el fin incentivar la utilización del tiempo libre para la niñez y juventud, y construir procesos educativos, tanto en lo artístico, cultural y deportivo.

Finalmente, es necesario señalar que no obstante el marco normativo vigente del derecho a la cultura, que es amplio, la implementación de esa normativa y su forma bajo políticas públicas y programas y proyectos del Estado, no encuentra la prioridad requerida por la compleja realidad social, cultural y política de la actualidad.

En gran medida, tanto la situación del derecho a la educación como la situación del derecho a la vida se entrelazan y se relacionan, a su vez, con esa precaria situación de la cultura y el acceso a ésta, imponiéndose negativamente situaciones de intolerancia y violencia.

A la postre, la realidad también implica la necesidad de nueva legislación con enfoque holístico, su armonización o actualización de acuerdo con las nuevas situaciones sociales y de cara al futuro. La cultura de la paz, existente en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, es una meta posible de alcanzar.

2.15 Acceso a la información y derecho de expresión

La libertad de expresión se entiende como el derecho de informar y ser informado. Comprende los derechos de opinión, expresión personal y la difusión del pensamiento a través de los distintos medios de comunicación. El derecho a la información y la libertad de expresión han estado marcados en las distintas etapas de la historia guatemalteca por la utilización y manipulación, el acceso exclusivo y de manera

paradigmática en la historia reciente, y la interferencia del Estado en la restricción de la información en torno a los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.

La libertad de expresión, la opinión y el acceso a la información están enmarcados por distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, y se encuentran extensamente garantizados por la Constitución Política de República.

Los distintos instrumentos ratificados por Guatemala, contenidos en el sistema interamericano, imponen al Estado la obligación de velar por la protección de la libertad de expresión. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre promulga en su artículo IV

“Toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

Otro instrumento de particular trascendencia que se estructura a partir de la necesidad e inclusión en la calidad democrática y ejercicio que implica la participación, desarrollo, comprensión y cooperación en la sociedad de la información es la Declaración Americana de Principios sobre Libertad de Expresión. Expresa taxativamente y valida los principios de libertad de expresión como derechos humanos, pero añade las condiciones en el acceso e igualdad de oportunidades, la no discriminación, el papel del Estado y la labor periodística.

En cuanto a los principios democráticos de acceder a la información, tanto en los usos como en el contenido, y aquella que las diversas instancias puedan poseer sobre las personas contenidas en bases de datos, públicas y privadas y sobre el acceso a la información en poder del Estado, la misma Declaración señala que:

“3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.”

La Constitución Política de Guatemala, en sus artículos 5 y 35, reafirma y regula lo concerniente a la difusión, las críticas o fiscalización de la función pública de los funcionarios, dando especial importancia al libre acceso a las fuentes de información y el papel de las autoridades.

Ley de Acceso a la Información. La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto No. 57-2008) entró en vigencia a partir del día 21 de abril de 2009. La importancia de su aprobación es que no sólo es un instrumento que fomenta la transparencia y posibilita la auditoría social, sino que también amplía la reglamentación entre los límites existentes de la información reservada o clasificada, el secreto de Estado y la no interferencia en materia de derechos humanos. Reafirma los principios constitucionales contenidos en el artículo 30, relativo a lo público de los actos administrativos y el derecho a obtener cualquier tipo de información.

La ley define temas torales que a través de la historia del país han sido severamente cuestionados y que se han fomentado a través de la confidencialidad y la impunidad en detrimento al acceso a la información. De suma importancia cobra, en este sentido, el artículo 24 que complementa la protección en torno a los derechos humanos.

La información no puede clasificarse como confidencial o reservada, quedando esta clasificación sólo para aquella información que por mandato constitucional tenga un carácter de seguridad nacional o esté relacionada con asuntos militares, aclarando que:

“en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Ley de acceso a la información pública, artículo 24.

En 2009, transcurrieron los primeros ocho meses de la entrada en vigencia de la ley, permitiendo finalmente a cualquier persona contar con un procedimiento que pueda garantizar, a través de trámites expeditos, el consagrado derecho humano y constitucional a la información pública y una efectiva rendición de cuentas por parte de los gobernantes y de todos aquellos que ejercen y administran la cosa pública. Sin embargo, hay que reconocer que la aprobación y entrada en vigencia de la ley no garantiza, por sí misma, que se respete el derecho de las personas de acceder a la información pública; se requiere de un cambio cultural en el quehacer de las instituciones del Estado donde se comprenda que en el ejercicio de la función pública se está sujeto a la ley dentro de un compromiso por la transparencia y sin un manejo patrimonialista de la información.

La existencia de un Estado de Derecho, entendido como aquel que descansa en el irrestricto respeto a la integridad de la persona humana y garantiza la seguridad, igualdad, certeza jurídica y el cumplimiento de las leyes, viene a ser un factor fundamental para que el acceso a la información pública, la transparencia y fiscalización sean una realidad que permita a cualquier persona de forma indubitable ejercer este derecho.

Después de varias iniciativas e intentos de implementación relacionados con el libre acceso a la información y el *habeas data*, la ley establece entre sus principios que:

“El acceso a la información pública como derecho humano fundamental previsto en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados o convenios internacionales en esta materia ratificados por el Estado de Guatemala, estará protegido por el Procurador de los Derechos Humanos en los términos de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la República”.

Las facultades como autoridad reguladora de la ley recaen en la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Ofrece la particularidad de definir el ejercicio del derecho a la información y clarificar en lo referente a la ordenación en torno a lo confidencial y reservado, sobre todo, para que ésta no quede al criterio y discrecionalidad de persona o institución alguna.

El Procurador de los Derechos Humanos, a pesar de no contar con el recurso financiero necesario para generar y ejecutar su propio programa de capacitación de la ley, durante estos primeros meses de vigencia se sumó a los esfuerzos emprendidos por otros actores nacionales e internacionales, como el Programa Municipios para el Desarrollo Local, cofinanciado por el Gobierno de Alemania y el Reino de Suecia y ejecutado a través de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ.

Otro aporte significativo en la materia ha sido la participación activa de la organización civil Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, quienes desde la presentación de la iniciativa de ley han participado decididamente en la promoción del derecho humano logrando incidir de forma positiva en los procesos de implementación y capacitación.

El derecho de acceso a la información a la luz de la vigencia de la ley. Ante la falta de la partida específica adicional en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para cumplir con las atribuciones establecidas en la ley, el Procurador de los Derechos Humanos, como entidad reguladora de la Ley de acceso a la información, en 2009 realizó grandes esfuerzos, en primer lugar, para reorientar recursos que dieran sustento financiero a las actividades de las unidades encargadas en la institución de cumplir con el mandato de la ley. En ese marco, de manera igualmente importante y prioritaria, realizó esfuerzos para hacer realidad el derecho de acceso a la información velando con la mayor escrupulosidad por la ejecución y realización de todas las acciones posibles en la aplicación del mandato de la ley.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, a través de la Dirección Nacional de Procuración y la Dirección Nacional de Auxiliaturas, la Procuraduría de Derechos Humanos se dio a la tarea de diligenciar y tramitar las denuncias recibidas por la violación al derecho humano de acceso a la información.

Los sujetos obligados de acuerdo con la ley tienen varias obligaciones que se diferencian en dos grupos. En primera instancia, las que se identifican como de “transparencia activa” que, de acuerdo al artículo 10, tienen

un mandato expreso para que los sujetos obligados tengan a disposición de las personas, ya sea para consulta física o a través de los portales electrónicos, información relacionada con varios temas que van desde el número y nombre de los servidores, salarios, dietas, viáticos, ejecución presupuestaria, procesos de compra, informes de auditoría, etc.

En segunda instancia, las que se agrupan en torno a la “transparencia pasiva”, que se refiere a que pueden recibir y dar respuesta a cualquier solicitud de acceso a la información que se presente. El cumplimiento de estas obligaciones se fundamenta a través de la obligatoriedad que establece la ley de crear o designar las respectivas Unidades de Información.

El Organismo Ejecutivo, a través de la Vicepresidencia de la República, dirigió esfuerzos para el cumplimiento efectivo de la ley, pero aún son acciones que resultan insuficientes. La implementación y respeto al derecho y acceso a la información conllevarán necesariamente cambios estructurales profundos, ante lo cual, en un corto plazo, el Estado de Guatemala parece no poder responder.

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y el INFOM impulsaron la implementación de la ley en las Municipalidades del país; sin embargo, el resultado no ha sido del todo positivo. Las municipalidades se presentan como el grupo más rezagado en el cumplimiento y observancia de la ley. En ese sentido, hicieron falta mejores condiciones materiales para que la ciudadanía en general hiciera efectivo su derecho de acceso a la información como lo prevé la ley.

La ANAM abrió espacios para que, a través de su portal electrónico, las Municipalidades pudieran comunicar la información pública obligatoria y de oficio para que cualquier interesado pueda tenerla a disposición. La implementación no tuvo mayor arraigo y muy pocas municipalidades cumplieron con el cometido.

En algunas alcaldías la falta de recursos económicos les impide designar al funcionario, empleado, oficina o servidor que debe fungir en Unidad de Información Pública.

Se pudo constatar el pobre cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa. Existe una debilidad institucional que impidió que a ocho meses de vigencia de la ley se cumpliera con el mandato legal. Incluso, la poca anuencia y voluntad política de los funcionarios de alto nivel de la administración pública hubiera podido reflejar de una mejor forma el cumplimiento de las obligaciones.

Se puso de manifiesto un relativo interés con la transparencia y el derecho humano de acceso a la información, situación que deberá cambiar en el transcurso del tiempo y el devenir de la aplicación de la ley así como a partir de la acción de la ciudadanía al hacer suyo el derecho que le asiste.

Al finalizar 2009 hubo todavía sujetos obligados sin Unidad de Información. Igualmente, no pusieron a disposición de los gobernados la información pública de oficio, por citar algunas de las deficiencias y falta de cumplimiento de la ley.

Otros obstáculos fueron falta de adecuados archivos públicos, falta de personal calificado y programas de capacitación. Debe reiterarse que la mayoría de las deficiencias registradas son superables si se tiene la convicción de que el acceso a la información es uno de los pilares fundamentales que permitirá transparentar la gestión pública y el país encaminarse hacia la consolidación democrática en torno a la transparencia y rendición de cuentas.

Todos los esfuerzos existentes deberán girar en torno a conseguir una cultura de la información en donde se privilegie el cumplimiento de la ley en todos y cada uno de sus aspectos, con ello, la segunda fase podrá incorporar mecanismos donde se puedan discutir y enfocar acciones para verificar y calificar la calidad de la información que se brinda a las personas.

La construcción normativa de la política pública de acceso a la información debe dar paso a una que dirija sus esfuerzos conforme a una estrategia de implementación de la ley en el ámbito organizacional de cada entidad,

teniendo en cuenta que tendrá implicaciones importantes en su quehacer. Tras las primeras acciones en el 2009, se hace evidente la necesidad de generar cambios profundos en el modo de generar, administrar, clasificar, conservar e incluso destruir la información pública.

Nuevos aspectos de nuestra cultura se harán presentes en el transcurso de la vigencia y aplicación de la ley, el manejo de la información puede hacer cambiar actitudes ciudadanas y de los funcionarios públicos así como nuevos modos organizacionales en el orden del Estado.

El comportamiento organizacional estatal, la democracia y la consolidación de un Estado de derecho deben superar el secreto administrativo y el ocultamiento de la información pública y dar paso a una cultura de apertura e información. Esto implica el cambio cualitativo hacia un Estado moderno que pretenda mejorar el sistema a través de una democracia participativa y la auditoría social. Además, se contribuye a que el ciudadano pueda contar con una herramienta eficaz para verificar el destino, utilización y manejo correcto de los fondos.

El libre acceso a la información contribuye a la rendición de cuentas y a mejorar la calidad de vida de las personas. La cultura de transparencia y rendición de cuentas son la respuesta a principal a los problemas generados por la corrupción y las violaciones a los derechos humanos que continuamente aquejan a las instituciones.

Algunas de las conclusiones que deja en su primera época de 2009, el cumplimiento de la ley son:

- Cumplimiento formal al determinarse que la mayoría de los sujetos evaluados hizo efectivo la obligación establecida, al haber designado al servidor público, empleado u órgano interno que funge como Unidad de Información Pública.
- Uno de los mayores problemas presentados para poder implementar las Unidades de Información Pública y dar cumplimiento a la ley como corresponde es la falta de presupuesto.
- En el ámbito local/municipal se justificó el criterio de que la obligación de conformación de las Unidades de Información Pública y la publicación de la información de oficio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública, empezó a regir 180 días después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, octubre de este año. Dicha interpretación es errática y se usó durante ese tiempo para justificar la no apertura de las respectivas Unidades de Información.
- Las Unidades de Información Pública presentaban recurso humano suficiente en número y con la adecuada capacitación para poder atender los requerimientos establecidos, sin embargo, muchas no cuentan con el espacio físico adecuado para desarrollar su trabajo.
- Asignación pendiente es el desarrollo de programas y acciones necesarias para que las instituciones cuenten con un archivo único que cumpla con estándares actuales e internacionales de archivística.
- Algunas entidades exigen como requisito para dar trámite a una solicitud de información, que se indique o se muestre el documento con que se identifica el interesado. La institución del Procurador de los Derechos Humanos ha reiterado el criterio de que por tratarse de un derecho humano consagrado por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, no es necesario que se pida como requisito *sine qua non* el documento con que se identifica el solicitante sino únicamente es necesario que se consigne el nombre de la persona en concordancia con lo que estipula el artículo 4 del Código Civil.
- La clasificación de la información, así como su actualización es prioritaria; los criterios deben ser específicos para el manejo coherente de la información

- Aún no se diseñaron ni se ejecutaron programas de capacitación y actualización en materia de acceso a la información pública y sobre el derecho de protección de datos personales.
- Con pocas excepciones, la información relacionada con el presupuesto de ingresos y egresos asignados para cada ejercicio fiscal se verificó ausente o incompleta en los portales electrónicos de los sujetos obligados.
- Las Municipalidades reflejaron en 2009, la mayor violación a la Ley de Acceso a la Información Pública. No existió la divulgación de la información pública a través de los portales electrónicos y se verificó una notoria ausencia de Unidades de Información para atender y orientar a los interesados. Las Municipalidades se presentaron como las instituciones con mayor necesidad de seguimiento y capacitación.
- Se verificó deficiencia en el compromiso por parte del Estado para con el acceso a la información pública. Una de las riquezas de la normativa pasa por revelar sin necesidad de solicitud alguna la información. La institución pública debe estar dispuesta a pasar por la inspección, y estar dispuesto en la rendición de cuentas, es decir, la obligación de los funcionarios y autoridades de responder a las solicitudes de información y los cuestionamientos de los gobernados.

CAPÍTULO III

Sectores de población especialmente vulnerados en sus derechos



- 3.1. Derechos de la mujer
- 3.2. Derechos de la niñez y la adolescencia
- 3.3. Derechos de las personas con discapacidad y retos especiales
- 3.4. Derechos de las personas adultas mayores
- 3.5. Derechos vulnerados de la población que vive con VIH-SIDA
- 3.6. Derechos de las minorías sexuales
- 3.7. Derechos de la población detenida o reclusa
- 3.8. Derechos de la población migrante y desarraigada
 - 3.8.1. Migrantes en tránsito por Guatemala
 - 3.8.2. Migrantes guatemaltecos en Estados Unidos

CAPÍTULO III

Sectores de población especialmente vulnerados en sus derechos

3.1 Derechos de la mujer

El Estado de Guatemala ha suscrito distintas convenciones y tratados en materia de derechos de las mujeres del sistema de las Naciones Unidas y del sistema Interamericano. El artículo 4 de la Constitución Política de la República establece que

“En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades”.

En el período que abarca este informe, el Procurador de los Derechos Humanos mantuvo una constante dinámica de trabajo para hacer visibles distintas violaciones de los derechos de las mujeres en el ámbito nacional. Las violaciones de los derechos específicos de este grupo, según las denuncias recibidas en la institución durante 2009 ilustran la vulnerabilidad del género, particularmente en lo que se refiere al derecho a la vida.

Dentro de las categorías más recurrentes se encuentra la violencia psicológica, la discriminación cultural, social, económica y política, el maltrato, la violencia y acoso sexual y la falta de acceso a la salud.

De enero a junio de 2009, según estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial (CENADOJ) se registraron 46,302 casos de violencia intrafamiliar¹ en el país; la recurrencia son mujeres adultas y niñas con 43,848 de los casos, indicando como principal agresor al conviviente o ex conviviente.

Tabla 73
Derechos específicos de la mujer
Expedientes de investigación y acciones específicas

Auxiliaturas	Violencia física o psicológica	Discriminación cultural, social, económica, política	Maltrato	Violencia sexual	Acoso sexual	Falta de acceso a la salud	Otros	TOTAL
Alta Verapaz	1	2	0	5	1	0	3	12
Baja Verapaz	42	4	5	1	2	2	7	63
Chimaltenango	8	25	4	3	3	0	0	43
Chiquimula	14	1	1	0	0	1	1	18
El Progreso	77	0	0	4	1	0	3	85
Escuintla	34	2	5	1	0	1	0	43
Guatemala	118	10	6	4	9	2	3	152
Quiché	19	16	8	8	0	0	4	55
Huehuetenango	59	28	3	2	2	0	0	94
Izabal	169	8	25	0	0	5	0	207
Jalapa	72	5	1	1	1	0	3	83
Jutiapa	27	0	6	0	1	0	0	34
Sacatepéquez	13	4	39	0	1	1	1	59

¹ Elaboración de CENADOJ. Estadística de casos ingresados en los juzgados de paz, paz penal, paz móvil y juzgados de 1ª Instancia del Ramo Familia en la República de Guatemala. Datos al tercer trimestre de 2009.

Petén	29	7	3	0	0	0	4	43
Quetzaltenango	46	8	1	2	2	0	2	61
Retalhuleu	45	0	1	0	0	0	0	46
San Marcos	14	0	0	0	0	0	0	14
Santa Rosa	50	21	3	0	0	3	8	85
Sololá	49	4	9	1	0	0	0	63
Suchitepéquez	4	3	3	1	0	0	0	11
Totonicapán	20	2	0	2	0	0	0	24
Zacapa	38	0	0	1	0	0	0	39
TOTAL	948	150	123	36	23	15	39	1334
% del total	71.06	11.24	9.22	2.70	1.72	1.12	2.92	100.00

Fuente: elaboración propia, 2009.

En la Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias de la sede central de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a octubre se habían recibido 474 denuncias por violencia intrafamiliar. Asimismo, la Unidad de Seguimiento al Centro de Llamadas de la institución contaba, hasta la misma fecha, con un seguimiento a 316 medidas urgentes de protección solicitadas a la PNC, para mujeres por violencia intrafamiliar.

El indicador que aparece con mayor recurrencia en las denuncias realizadas en las Auxiliaturas de la Procuraduría se refiere a la violencia física o psicológica. Se abrieron 948 casos en todo el país. Aparecen con los datos más sobresalientes los departamentos de Izabal (169) y Guatemala (118). En un rango ubicado entre las 80 y 40 denuncias están El Progreso (77), Jalapa (72), Santa Rosa (50), Sololá (49), Retalhuleu (45), Quetzaltenango (46) y Baja Verapaz (42).

En lo referente a la discriminación cultural, social, económica y política podemos agrupar el derecho al trabajo, a la educación y a la participación política. Las denuncias realizadas en las Auxiliaturas Departamentales con respecto a este tipo de derechos específicos en el caso de la mujer, sumaron 150 denuncias. Entre los departamentos con el mayor número de registros se encuentran Huehuetenango (28), Chimaltenango (25) y Santa Rosa (21).

La situación laboral para las mujeres no ha tenido mayores avances desde la perspectiva de su capacidad de poder adquisitivo para contribuir a mejorar sus condiciones de pobreza y extrema pobreza si se toma en cuenta que del total de mujeres en esta situación, 3,410,391 son pobres y en extrema pobreza,² situación que se agudiza en el área rural.

Durante el presente año, la crisis económica nacional bajo los efectos de la crisis financiera mundial, con sus altos índices de inflación y aumento en la precariedad de oportunidades, contribuyó también a la vulneración de los derechos de las mujeres al trabajo. Durante el año objeto del presente informe, la institución del Procurador recibió denuncias de mujeres cuyo derecho al trabajo por acciones u omisiones fue violentado, como despidos por gravidez o maternidad, falta de pago de sus prestaciones laborales, cesantía en sus empleos, cesación de sus contratos por no acceder a favores sexuales, acoso sexual en el trabajo, bajas remuneraciones, entre otros.

En el registro sobre derechos específicos de la mujer, el acoso sexual aparece como la quinta categoría dentro de los derechos más reportados. Los departamentos con el mayor número de expedientes en investigación y acciones específicas son Guatemala (9) y Chimaltenango (3).

Tanto las Auxiliaturas departamentales, como la sede central de la institución en la ciudad capital, se vieron inmersas en una dinámica de orientación, prevención, investigación en muchos casos, y haciendo públicas las acciones ante los órganos competentes, en busca de soluciones legales a situaciones de menoscabo de los derechos de las mujeres.³

² INE. *Mujeres y hombres en cifras*, 2008.

³ Expedientes PDH: Ord.AV.27-2009/DE; II.Nenton,Hue. 52-2009; Ord.Hue.11-2009/DCP; Ord.Hue.07-2009/DE; IZA. 07-2009/DESC; Ord. Poptun.P.02-2009/DESC.

En cuanto a la participación política, el último proceso electoral de Guatemala reflejó la realidad respecto al derecho de participación política de la mujer. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las mujeres empadronadas son 2.809,000, o sea un 46% del total de 5.990,029 aptas para ejercer el sufragio. De este total, el 60% de mujeres participó en ese evento, lo que significa un claro avance en el ejercicio de ese derecho.

En la ejecución de su mandato, el Procurador de los Derechos Humanos registra avances en materia del derecho a elegir de las mujeres, así como de la conciencia desarrollada en el sector femenino sobre la necesidad de ejercer el derecho al sufragio como opción civil para contribuir a la toma de decisiones en el país y desempeñar un rol de progreso en la organización y participación de la vida nacional. Sin embargo, necesariamente reconoce la lentitud o ausencia de avances en materia del derecho a ser electo y ocupar puestos de elección popular o de nombramiento en las esferas gubernamentales.

Finalmente, el derecho con el menor índice de denuncias en las Auxiliaturas departamentales tiene que ver con el derecho a la salud. La mayoría de la población femenina en el país, según los datos aportados por el INE,⁴ constituye un alto porcentaje de mujeres jóvenes que oscilan entre los 15 y 34 de edad, es decir una edad altamente reproductiva.

La situación de las mujeres a nivel nacional en relación con la atención primaria de salud se encuentra en condiciones lamentables por el difícil acceso y la lejanía de los centros de salud entre aldeas, caseríos y municipios, la falta de personal calificado o bien el poco personal, lo oneroso que representa para las mujeres asistir a los centros de atención y los medicamentos escasos.

Las entidades mayormente cuestionadas a nivel nacional son el IGGS y los hospitales nacionales de algunos departamentos.⁵ Las distintas Auxiliaturas departamentales y móviles, así como la Unidad de Derechos Específicos de la institución del Procurador, reportaron y abrieron expedientes por atención retardada, o prácticas médicas deficientes que han ameritado investigaciones para requerir las acciones correspondientes a los órganos estatales involucrados.

Algunos avances en materia de derechos de las mujeres. Describir la situación de las mujeres guatemaltecas en materia de derechos humanos implica abarcar grandes carencias y limitaciones a las que el género femenino se ve expuesto por las debilidades estructurales del país; si bien las luchas de las instituciones y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han logrado avances importantes. Diversos son también los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en el ámbito de los pactos y convenios internacionales.

Una iniciativa importante ha sido el fortalecimiento de los gobiernos locales a través del impulso e instauración de las oficinas municipales de las mujeres.

Otro avance lo constituye el trabajo que aborda la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), mecanismo nacional para el impulso de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belém do Pará, y ente encargado de la política nacional de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, a través del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres.

La CONAPREVI también ha implementado y fortalecido los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), financiados con fondos estatales y apoyo de la cooperación internacional.

Por otra parte, avance significativo es también la entrada en vigencia de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, contenida en el Decreto 9-2009 del Congreso de la República; instrumento normativo de mucha importancia para la protección de esta población con alto grado de vulnerabilidad.

En el marco de los derechos sexuales y reproductivos, ha sido de importancia la aprobación en el Congreso de la República del Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su

⁴ *Mujeres y Hombres en cifras*. INE, 2008

⁵ Expedientes aperturados por la PDH: Ord.Sac.06-2009/DESC; Prev.Chim.09-2009/DESC; EIO.Tot.01-2009/DESC; Ord.Sn.Marcos 01-2009/DESC; Ord.Jut. 025-2009/DCP; Ord.Izabal.12-2009, Izabal. 07-2009/DESC.

Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, Decreto 87-2005, y su entrada en vigencia, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 279-2009. A lo anterior se agrega la creación e instauración de la Comisión Nacional de Aseguramiento Anticonceptivo (CNAA) que deben velar por que esta ley y su reglamento sea derecho vigente y positivo en el país.

A pesar de los hechos mencionados, que significan un avance para el resguardo de la vida e integridad de las mujeres, debe señalarse que en general el presupuesto asignado fue disminuido en 2009 y también para 2010. Una de las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Yakin Ertürk, en su misión a Guatemala es explícitamente el fortalecimiento de la base jurídica y financiera de las instituciones del Estado que se ocupan de los derechos de la mujer, dentro de las cuales menciona especialmente a la CONAPREVI, entre otras.⁶

3.2 Derechos de la niñez y la adolescencia

Guatemala ha suscrito la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño; ambas establecen que los derechos del niño deben protegerse en función de su interés superior para garantizar el desarrollo integral. La niñez conforma un grupo de población altamente indefenso y de mayor vulnerabilidad física, emocional y psicológica.

Según los rangos de edad, población guatemalteca es un país joven. La cifra de la población menor de edad en Guatemala está comprendida en un total de 5,501,989,⁷ de donde un 49.6% corresponde a niñas y adolescentes frente a un 50.4%⁸ de niños y jóvenes. Un porcentaje alto lo constituyen niños y niñas de cero a seis años (46%); de siete a doce años tiene una proporción del 31% y finalmente los adolescentes de 13 a 17 años hacen un total del 23%.⁹ La población infantil se distribuye en su mayoría en el área rural del país (59.06%).

El Estado de Guatemala cuenta con el marco jurídico y político necesario para proteger y garantizar los derechos de la niñez. La Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 2, 3, 47, 50, 51 y 52, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, así como la Política Pública de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2002-2015), son herramientas idóneas para el desarrollo de acciones concretas a corto, mediano y largo plazo.

Lamentablemente, 2009 finalizó en medio de la crisis económica, con incremento de la violencia generalizada, la inseguridad constante, los elevados índices de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, explotación, tráfico y trata de menores, aumento del narcotráfico y mayor despliegue del crimen organizado.

Además, en este período se ha acrecentado la inserción y utilización de niños, niñas y adolescentes en pandillas¹⁰ o grupos denominados “maras”, que en éstas encuentran alguna respuesta a sus necesidades afectivas, económicas, de aceptación y revalorización de ser sujetos de atención, comprensión y de roles de poder.

Organizaciones que trabajan con jóvenes en conflicto con la ley señalan que el término *mara* designa a

“grupos de jóvenes pandilleros que tienen una organización jerárquica bien establecida, existe un cabecilla, veterano o jefe; tienen rituales de iniciación y ascenso (...) son solidarios entre ellos y socializan códigos de conducta, lealtad y honor. Se visten de acuerdo al grupo, utilizando tatuajes y peinados que los identifican. Practican un lenguaje corporal que también tiene códigos; sus miembros se involucran en acciones delictivas,

⁶ Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, misión a Guatemala - E/CN.4/2005/72/Add.3

⁷ UNICEF. *Niñez guatemalteca en cifras*, Guatemala, 2007.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ “Las pandillas son grupos a nivel de colonias o barrios, que comparten ciertas reglas y relaciones más o menos jerárquicas y se encuentran dispersas en un espacio nacional o internacional. Están integradas por jóvenes locales que comparten la identidad de la pandilla, interactúan a menudo entre ellos, se ven implicados con cierta frecuencia en actividades ilegales, expresan su identidad grupal mediante símbolos y señales, y reclaman control sobre ciertos asuntos, territorios o mercados económicos”, Savenije, W. citado en el informe del Procurador de los Derechos Humanos, *Las maras y el enfoque de seguridad democrática: tendencias actuales*. Guatemala, 2007, pág. 36.

consumo y tráfico de drogas y armas. Estos grupos dan un espacio de identidad y apoyo para los que ingresen.”¹¹

Paralelo a este contexto, en la realidad de los derechos económicos, sociales y culturales del país existen condiciones insuficientes en materia educativa, de recreación y formación de valores, así como posibilidades de empleo, superación laboral, profesional y personal como parte vital de la sociedad para hombres y mujeres jóvenes.

Los recursos del Estado aún son muy escasos como para ofrecer de manera integral perspectivas de realización humana a la juventud; por el contrario se convierte en norma la falta de oportunidades, la pobreza y extrema pobreza en que vive la mayoría de esta población, tanto en áreas urbanas como particularmente en rurales.

Avances normativos a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. El panorama para el país a juzgar por las condiciones en que vive y se desarrolla esta población no ha sido alentador, sin embargo, es pertinente señalar algunos avances normativos. La voluntad política y el trabajo constante y consistente son ingredientes necesarios para contribuir a la transformación de la realidad y el entorno de vida de niñez y adolescencia de forma tal que puedan generarse cambios sustantivos también en el marco del cumplimiento de las metas de los ODM.

El 12 de septiembre de 2008 se emitió el Acuerdo Ministerial No. 226-2008, sobre la gratuidad de la educación, constituyéndose en importante avance para el país según las necesidades existentes en la educación inicial, primaria y secundaria. A largo plazo, esta vital acción de la política pública, puede consolidarse y fortalecerse para mejorar los niveles educativos y el acceso a la educación en áreas urbanas y rurales por igual.

Asimismo, cabe mencionar la disminución de la mortalidad infantil que pasó de 39 muertes por cada mil nacidos vivos en el quinquenio 1997-2002, a 30 muertes por cada mil nacidos vivos. Igual descenso se observó para el mismo quinquenio en las muertes de la niñez, de 53 a 42.¹² Este cambio en la estadística es significativo si se toma en cuenta que el mayor número de muertes de niños se registra antes de llegar a los 5 años de edad, lo que coincide con una etapa de plena dependencia del seno del hogar y de la madre en particular, dadas la configuración de roles en el área rural principalmente.

En materia jurídica se hizo efectiva la vigencia del Convenio de la Haya relativo a niñez y cooperación en materia de adopciones, aprobado en 2007, abriéndose la posibilidad concreta de marcar la diferencia en este crucial tema para Guatemala. De tal forma entra en vigor la ley en materia de adopciones que demanda la instauración del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) instalado desde 2008.

En el mismo campo jurídico, constituye un avance importante la aprobación y entrada en vigencia del Decreto No. 9-2009, Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. La existencia de esta normativa es un avance y al mismo tiempo un reto de grandes dimensiones para todo el andamiaje de justicia, por el considerable aumento en los niveles de violencia sexual, explotación laboral y sexual a menores.

La funcionalidad y operatividad de la ley está a cargo del secretario ejecutivo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) a través del acuerdo de la Vicepresidencia de la República número 64-2009. Asimismo, el secretario ejecutivo de la SVET emitió dos acuerdos¹³ que dan sustento legal a la Comisión Técnica de Apoyo y a la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT).

A partir de estas herramientas se espera que la política, los planes y programas para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo se ejecuten en consonancia con lo establecido en el marco internacional y nacional para salvaguardar a las víctimas de este ilícito. Los avances, siendo positivos, aún se ven opacados frente a la cotidianidad que viven niños, niñas y adolescentes.

Violaciones a los derechos de la niñez. La educación. La niñez y la adolescencia tienen derecho a la educación, en condiciones de igualdad y sin discriminación. La educación debe permitirles desarrollar sus capacidades para enfrentar los retos de la cotidianidad y alcanzar un desenvolvimiento integral en todas las esferas de sus vidas.

¹¹ *Ibid.*, pág. 48 y 49.

¹² MSPAS. “Informe Preliminar de la V Encuesta de Salud Materno Infantil”, 2009.

¹³ Secretario Ejecutivo SVET, Acuerdos N° 01-2009 del 29 de julio, y No. 02-2009 del 30 de julio, 2009.

Uno de los compromisos asumidos por el Estado se relaciona con

“implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; fomentar el desarrollo, en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños/as dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar las medidas apropiadas para su gratuidad o bien la asistencia financiera en caso necesario.”¹⁴

Se valora la política de gratuidad de la educación y se recomienda hacerla extensiva a toda la población para lograr la mayor cobertura educativa y llegar a los lugares mas recónditos, sin obviar los estándares de calidad.

En el marco de la obligatoriedad de la educación primaria, el Comité de los Derechos del Niño expresa

“A fin de asegurar la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte centre más sus esfuerzos en la enseñanza obligatoria y primaria gratuita, en erradicar el analfabetismo y en la enseñanza bilingüe de los niños indígenas.”¹⁵

En septiembre de 2008 se emitió el Acuerdo Ministerial 226-2008, sobre la gratuidad de la educación y elimina cualquier tipo de aporte a las escuelas públicas por parte de padres, madres o responsables de los menores. El Estado asumirá el rol y la función contenidos en la Constitución Política.

La nueva situación vino a replantear retos para el sector educativo. Según fuentes hemerográficas, durante 2009 se incrementó la población estudiantil en un 47% en el sistema educativo nacional: 4,242,623 más niños, niñas y adolescentes en todos los niveles (preprimaria bilingüe, párvulos, primaria, secundaria y diversificado).

Entre 2004 y 2007, la población estudiantil se mantuvo en una media de 52.31% hombres y de 47.69% mujeres;¹⁶ en 2008 la población de niños bajó a un 51.98%, frente a un 48.02% de niñas, que se incrementa. El crecimiento que se ha dado en los últimos años no es elevado, se desprende que de 2004 a 2008 la población estudiantil en primaria mantuvo un crecimiento anual de 2.33%, mismo que no afecta al sistema educativo sustancialmente.

La diferencia entre el número ingresos en el año anterior y 2008, fue de 997,778. En su totalidad representó 2,218,062 para 2008 y para 2009 una población de estudiantes de 3,215,845.

Es necesario resaltar que la gratuidad de la educación y la política correspondiente deben convertirse en política de Estado. No se debe abandonar o dejar en la coyuntura del gobierno de turno, y por el contrario, los compromisos deben realizarse con visión a largo plazo y determinar sostenidamente el desarrollo institucional de la educación con dotación de todos los recursos necesarios.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de supervisiones administrativas realizadas en 2009, verificó la necesidad de una nueva política educativa tendiente a superar la mala infraestructura de los centros de enseñanza, la falta de equipo y mobiliario adecuado. A las deficiencias en infraestructura y equipo, se suman las carencia de docentes, el permanente atraso en el desembolso del MINEDUC de la refacción escolar, utensilios de limpieza, entrega tardía de la bolsa de útiles, falta de previsión ante el incremento y sobrepoblación estudiantil, abusos, maltrato y actos de discriminación por parte de personal de algunos centros educativos.

Como uno de los ejemplos paradigmáticos de violaciones de los derechos de la niñez, y específicamente del derecho a la educación y a la vida, se presenta en el municipio de San Raymundo, Guatemala, el alto índice de trabajo infantil, principalmente por la elaboración de cohettillos, que se realiza sin ninguna protección e incidiendo en la alta deserción escolar.

Los lugares en donde se fabrican los cohettillos son las propias residencias. Los habitantes están conscientes del riesgo que corren los menores en la elaboración de este producto, sin embargo, han manifestado ante investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos que es lo único que saben hacer, que si se les proporcionara otro medio de subsistencia dejarían de realizar esta actividad.

¹⁴ Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28.

¹⁵ CRC/37/1996 Derecho a la educación, enseñanza obligatoria y primaria gratuita.

¹⁶ MINEDUC, diciembre de 2009.

El nivel de vida adecuado. La política de protección integral de la niñez y adolescencia 2002-2015, entre sus objetivos específicos ha definido:

“Garantizar que la niñez y adolescencia tenga acceso a servicios de salud con calidad; Asegurar que la niñez y adolescencia tenga servicios básicos que le permitan tener una vida sana y reducir las tasas de mortalidad y morbilidad.”

Estas acciones contribuyen a mejorar la calidad y el desarrollo de la niñez aún cuando sean poblaciones alejadas de los centros urbanos del país, por lo que implica la necesidad de reorientar el presupuesto público a favor de la niñez.

La mortalidad infantil continúa cobrando vidas; la muerte de menores de cinco años conlleva la falta de atención y de prevención que recibe la madre del neonato y niño. En algunas ocasiones los menores pierden la vida por falta de condiciones mínimas tales como agua entubada, techo de lámina, piso de cemento y los requerimientos básicos de una ingesta de proteínas, vitaminas y calorías que permita a la madre amamantarlo en su primer año de vida.

El informe preliminar presentado por la V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) indica que por cada mil nacidos vivos en el área rural mueren 48 antes de cumplir los 5 años de edad. Entre los infantes figuran 17, le siguen los posneonatales (16) y los de 1 a 4 años (15).¹⁷ Los cinco departamentos con mayor número de muertes de niños son El Progreso, Petén, Quiché, San Marcos y Chiquimula.

En vacunación, los niveles han ido superando las barreras anteriores; se ha tenido acceso a este sistema en niños con edades de uno a cinco años. La muestra del informe de ENSMI 2008-2009 arroja cambios positivos, sin embargo aún son insuficientes tomando en cuenta el número de muertes de niños, niñas y adolescentes antes de llegar a los 5 años de edad.

En salud preventiva se han visto mejoras en los indicadores relativos a enfermedades tales como diarrea e infecciones respiratorias en cuanto al requerimiento de ayuda médica, tratamiento y prevención para los infantes. El nivel educativo de las madres ha sido un valor añadido e importante en los menores de cinco años, demostrando que la educación tiene una repercusión directa en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.

Reducir la mortalidad infantil, mejorar la calidad de vida de los infantes antes de cumplir los 5 años, contar con servicios básicos de letrinización, agua, vivienda, educación, servicios médicos, son responsabilidad tanto del Estado como de cada persona en particular; el primero porque es el obligado a garantizar esos derechos y el segundo porque debe hacer uso de esos servicios, requerirlos y exigir que sean de calidad para proteger la vida de niños, niñas y adolescentes.

Todo esto se traduce en acciones como: acceso y disponibilidad de servicios de salud integral para las madres y sus hijos con énfasis en las áreas más alejadas del país; acceso y disponibilidad de medicamentos gratis o a costos mínimos a fin de superar las enfermedades de los infantes; (bilingüismo) acceso en el idioma de las madres (por lo regular en el área rural las mujeres son las que cuidan y protegen a sus hijos); personal capacitado, controles y chequeos médicos para todos los menores de cinco años y una adecuada ingesta alimenticia para superar las barreras de la desnutrición.

Para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado de la niñez y adolescencia es primordial que la política respectiva cuente con estrategias definidas, incluido el presupuesto para su ejecución a corto, mediano y largo plazo.

La familia, violencia intrafamiliar y la adopción. La familia está concebida como la unidad básica de la sociedad y es protegida por la Constitución Política. La Ley de protección integral de la niñez y adolescencia afirma en su artículo 18 que,

“Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser criado y educado en el seno de su familia y excepcionalmente, en familia sustituta, asegurándole la convivencia familiar y comunitaria, en ambiente libre de la presencia de personas dependientes de sustancias alcohólicas y psicotrópicas que produzcan dependencia.”

¹⁷ MSPAS. Informe Preliminar de la V Encuesta de Salud Materno Infantil, 2009.

El trecho a recorrer para hacer de la ley una realidad de garantía para los derechos de la niñez es aún largo y distante. Los altos índices de violencia intrafamiliar ponen en evidencia las vejaciones constantes que causan el daño a la familia misma, en general a la mujer y casi siempre a los niños y niñas.

Los datos numéricos son indicadores que permiten identificar acciones y atender problemas sociales; en ese sentido, de 2005 a 2008, los casos de violencia intrafamiliar conocidos por el sistema de justicia fueron 171,027.¹⁸ El número de éstos se han elevado drásticamente en los últimos cinco años. Al mes de junio de 2009 los casos por violencia intrafamiliar ingresados al sector justicia sumaban 46,302,¹⁹ de los cuales 4,826 son casos en que menores de edad fueron las víctimas.

La realidad numérica sobre la violencia por lo regular se vive y reproduce dentro del hogar. Se convierte a diario en una forma de resolver diferencias, dándole a las relaciones entre padres, madres e hijos el carácter de relaciones violentas de poder. Los daños y secuelas crearán circunstancias imprevisibles para el desarrollo de la niñez.

Durante 2009 todas las Auxiliaturas departamentales y móviles de la Procuraduría de los Derechos Humanos recibieron denuncias de casos de violencia intrafamiliar. Se implementaron acciones, dando lugar a un inestimable valor y protección a sobrevivientes, a través de acompañamiento y asesoría para que los núcleos familiares afectados puedan contar con medidas de seguridad y así resguardar la vida, libertad, integridad, el bienestar de la familia y el interés superior de la niñez.

En el tema de adopciones es importante destacar el papel que debe asumir el CNA, que se enfrenta al reto de dar respuesta a la niñez víctima de venta, tráfico y robo frente a la práctica de la adopción que fue durante años el espacio de un lucrativo negocio.

El CNA, desde su fundación en 2008 hasta octubre de 2009, autorizó 222 adopciones de un total de 520 menores judicialmente declarados en condiciones de adoptabilidad. La demanda nacional e internacional fue de 549 familias en capacidad de adoptar.²⁰

El CNA tiene pendiente dar repuesta a los 3006 avisos de casos de niñez en transición.²¹ La información relacionada fue digitalizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el marco del Convenio de Cooperación Técnica firmado con el CNA y entregada a éste en febrero de 2009 para su resguardo informático.

En el marco del cumplimiento de la normativa vigente, el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional y la Ley de adopciones, entre las deficiencias identificadas en 2009 en la entidad rectora estuvieron: la necesidad de mejorar el presupuesto anual; la aprobación de su reglamento interno; la periodicidad en la supervisión y el monitoreo de los centros de cuidado de los infantes en espera de ser considerados sujetos de adoptabilidad; apertura de sedes en el interior del país; protocolos estandarizados para la aprobación, supervisión, monitoreos de los centros de cuidado infantil; el desarrollo de estadísticas confiables en materia de adopciones, así como fortalecimiento en recursos humanos de alta capacidad profesional y el trabajo de coordinación con el movimiento por la niñez.

Sobre una vida libre de violencia en los derechos garantizados por la Constitución, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho fundamental a la vida. Según la ley, es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridad y desarrollo integral, contenido en el artículo 9 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,

“(...) los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección, cuidado y asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual. Estos derechos se reconocen desde su concepción.”

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ CENADOJ. “Informe Estadístico. Casos ingresados por violencia intrafamiliar. Estadística Judicial”, diciembre de 2009.

²⁰ Informe del CNA a la Procuraduría de los Derechos Humanos, junio de 2009.

²¹ Memoria de Labores del CNA, 2008.

Tabla 74
Violencia intrafamiliar, lesiones y homicidios de menores de edad
(CENADOJ, Ene-Jun; PNC, Ene-Oct 09)

Género	Violencia contra menores de edad					
	Ene-Jun 2009		Ene-Oct 2009			
	Violencia intrafamiliar		Lesiones		Homicidios	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Femenino	2,444	50.64	181	21.57	88	20.18
Masculino	2,382	49.36	658	78.43	348	79.82
Total	4,826	100.00	839	100.00	436	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC y CENADOJ.

La cifras del CENADOJ sobre casos de violencia intrafamiliar ubican un índice relativamente mayor en contra de las niñas y adolescentes mujeres (50.64%) en comparación a sus pares niños y adolescentes (49.36%). En cambio, las cifras reportadas por la PNC transfieren la curva de lesiones y homicidios hacia los niños y adolescentes. El género masculino es el más afectado en los casos de lesiones (78.43%) y de homicidios (79.82%).

En el caso de los varones, la violencia tiende a manifestarse en el ámbito público que se refiere en el común de los casos a los espacios comunitarios y escolares. La cultura de denuncia opera en una forma distinta y no por ello menos violenta. Durante el proceso de socialización del niño con otros grupos puede ser infringida o replicada por personas ajenas a su ámbito privado. La violencia se pone de manifiesto en docentes, vecinos, amigos, etc., a través de actitudes, acciones u omisiones, actos de discriminación o castigos, que llevan el mensaje implícito de las relaciones de poder entre adultos y menores de edad.

El lugar donde se marca la violencia es en el entorno familiar, luego se traslada y se replica a la escuela. Durante el proceso de socialización del niño con otros grupos, o bien es infringida por docentes en actitudes, acciones de discriminación o castigos, que llevan el mensaje implícito de las relaciones de poder entre maestros y alumnado. Éstas son algunas de las conclusiones de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, luego de realizada la supervisión administrativa a centros educativos del sector público para indagar sobre el maltrato infantil en 2009. Se establece que la violencia intrafamiliar que sufre la niñez y adolescencia en su primer entorno, el hogar, es seguida por la que viven en los centros educativos.²²

Los niños, niñas y adolescentes agredidos tienden a responder a éstas con el mismo patrón y aceptación. Ante la interrogante sobre la actitud asumida en caso de ser víctimas de agresión, la respuesta fue evidente *“vengarse de quien los agrede”*. Este tipo de hallazgos demuestra y reafirma en el consciente y subconsciente colectivo que la violencia se está convirtiendo en la forma de resolver los problemas; la lucha del fuerte sobre el débil y finalmente en una manera de sobrevivir.

La cultura de paz conlleva grandes retos para reconstruir las relaciones humanas en la familia, escuela y lugares de trabajo, de diversión y esparcimiento e, inclusive, en los lugares de fe y religiosidad. Es grande la responsabilidad de las personas adultas, de las instituciones, funcionarios públicos y políticos en general.

3.3 Derechos de las personas con discapacidad y retos especiales

“(...) los 650 millones de personas con discapacidad -alrededor del 10% de la población mundial- carecen de las oportunidades que tiene la población en general. Se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden recibir educación; les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; les impiden tener acceso a la información; les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; les impiden desplazarse; les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados.”²³

²² Procurador de los Derechos Humanos. “Informe de supervisión institucional sobre maltrato en centros educativos”. Guatemala, octubre de 2009.

²³ Naciones Unidas, en <http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html> (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales).

La situación de los derechos de las personas con discapacidad y retos especiales no ha cambiado significativamente en los últimos años. A pesar de que Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales y existe un marco normativo amplio para garantizar la protección de sus derechos, el Estado no ha adoptado una estrategia que permita a este sector ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones.

Entre los instrumentos de los cuales Guatemala es parte se encuentra la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en la cual se establece que deben gozar de sus derechos humanos o libertades fundamentales en los mismos términos que otras personas de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo, y a la vez deben gozar de ciertos derechos específicamente ligados a su condición.

En 2008 Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ambos instrumentos de derechos humanos de la ONU, iniciativa de ley que fue aprobada de urgencia nacional por el Decreto No. 59-2008, entrando en vigor a partir del 7 de mayo de 2009.²⁴ En dicho instrumento se establece que la discriminación por razón de discapacidad es

“cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.”²⁵

Para el Estado de Guatemala la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad implica asumir los compromisos establecidos en la misma. Haciendo referencia al artículo 4 de la referida convención, éstos pueden resumirse de la siguiente manera:²⁶

- Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
- Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
- Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;
- Empezar o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías;
- Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
- En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad.

A partir de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su Protocolo Facultativo, el Organismo Ejecutivo aprobó el Acuerdo Gubernativo No. 79-2009, en el que se designa al Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) como el mecanismo nacional o ente gubernamental encargado de las cuestiones relativas a la aplicación de la referida convención. Su estructura y mandato específico se definen en el Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.

Cabe mencionar que, durante 2009, el CONADI tuvo un recorte en su presupuesto, según los informes proporcionados por la Junta Directiva; en los meses de abril y mayo el mismo se redujo significativamente y, al final del año, tal reducción representará más del 10% de los cinco millones de quetzales, presupuesto asignado a finales de 2008.

²⁴ CENADOJ. Sumario del Diario de Centro América, Guatemala, 18 de mayo de 2009.

²⁵ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 2.

²⁶ *Ibid.*

Siendo el CONADI la institución designada como la responsable de todas las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se deberá reformular su mandato de forma que tenga las facultades necesarias para cumplir efectivamente con las disposiciones descritas. Un análisis de la capacidad del Consejo indica que no se cuenta con una política de Estado que le permita promover los cambios en estructura orgánica, delegando a funcionarios con tal poder dentro de las distintas instituciones del Estado. Por ello es necesario que el Estado asuma este planteamiento y reformule de forma inmediata el mandato del CONADI.

Por otro lado, también se requieren acciones del Congreso de la República orientadas a la armonización legislativa necesaria para contar con la legislación mínima que dé cumplimiento a la Convención.

Dentro de los derechos vulnerados, la discriminación hacia el colectivo de personas con discapacidad es frecuente, en todos los ámbitos de participación; según las quejas recibidas en la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, son más comunes en el ámbito de los derechos laborales, el derecho a la educación y a la salud.

La visibilidad hacia la población con alguna discapacidad se ha hecho mayor en determinados ámbitos de la vida cotidiana de la ciudadanía, debido en parte a la legislación que se ha establecido así como la creación de instituciones u organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos específicos de este sector poblacional. De igual forma se han creado instancias o dependencias estatales que coadyuvan en esta dirección, como es el caso de la Dirección de Educación Especial, en el MINEDUC.

En la Constitución Política de la República²⁷ así como en el Convenio 159²⁸ de la OIT del cual el Estado de Guatemala es parte, se hace referencia a la protección y fomento del trabajo en igualdad de condiciones de las personas discapacitadas, sin embargo, trabajadoras y trabajadores con discapacidad constantemente enfrentan limitantes para ser contratados, o son objeto de actos discriminatorios en sus centros de labores.

La Defensoría de Personas con Discapacidad de la Procuraduría, ha constatado que se registran frecuentes despidos cuando una persona, desempeñando algún trabajo, adquiere alguna discapacidad (por enfermedad o por accidente). También son comunes los malos tratos por parte de empleadores, responsables de recursos humanos e incluso de los propios compañeros de trabajo, que le asignan a las personas con discapacidad tareas inadecuadas para su condición física, sobrecarga laboral y jornadas de trabajo más largas.

Como lo indica la Auxiliatura de Suchitepéquez, de la institución del Procurador, algunas personas con discapacidad se ven obligadas a practicar la mendicidad en las calles como medio de sobrevivencia, en muchos casos las familias dejan en total abandono o en la calle a familiares discapacitados, lo cual es preocupante debido a que no existen instituciones públicas o privadas que se hagan cargo y que puedan brindarles apoyo, excepto el Hospital Nacional de Salud Mental, donde sólo se realizan intervenciones curativas y de tratamiento inmediato, mas no funciona como albergue o internamiento.

Según la Política Nacional en Discapacidad, Decreto Legislativo No. 16-2008

“...no existen políticas de capacitación, formación y promoción para el trabajo de las personas con discapacidad. La normativa específica también carece de artículos que protejan y promuevan el derecho laboral de este sector de la población. La labor y estrategias de las organizaciones privadas y de la sociedad civil, han sido insuficientes para mejorar la situación ocupacional y laboral de las personas con discapacidad.”²⁹

En el ámbito educativo, la Defensoría de las Personas con Discapacidad ha registrado denuncias relacionadas con la discriminación en contra de niños, niñas y adolescentes con discapacidades, a quienes se les niega la inscripción en algunos centros educativos. Lo anterior se debe a que no se les aplica la adecuación curricular o la adaptación de las evaluaciones para la promoción escolar, las cuales son obligatorias según lo dispuesto en la Ley de Educación

²⁷ Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. “...m) Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales...”

²⁸ OIT. Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), artículo 4 “Dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos”.

²⁹ CONADE. *Política Nacional en Discapacidad*. Editorial Educativa, Guatemala, 2007, pág. 18.

Especial para Personas con Capacidades Especiales (Decreto Legislativo No. 58-2007). Asimismo, algunos son víctimas de burlas, sobrecarga escolar y asignación de tareas inadecuadas para su condición física, mental o sensorial, por parte de docentes y otras personas responsables en los centros escolares.

Cabe mencionar que, en el ámbito nacional, son más frecuentes las escuelas de educación especial, que la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema regular de educación. La mayoría de las escuelas de educación especial, en particular las que funcionan en el interior de la República, han sido creadas por iniciativas de las organizaciones de padres y madres de niños y niñas con discapacidades, haciendo énfasis en las intelectuales y mentales. Aunque en un inicio muchas empezaron funcionando con recursos propios, algunas han logrado hacer convenios con el MINEDUC o alguna autoridad local como Municipalidades y Gobernaciones Departamentales, para cubrir los salarios del personal docente de manera total o parcial.

El auxiliar municipal de Coatepeque de la Procuraduría de los Derechos Humanos reporta que en dicho municipio de Quetzaltenango, existen esfuerzos de particulares y algunos grupos sociales para reivindicar los derechos de este grupo poblacional, como el trabajo que realiza la Asociación de Ciegos, Sordos y Discapacitados del Sur Occidente, que actualmente brindan asesoría para poder realizar por sí misma sus diferentes actividades, con orientación espiritual y programas de educación, especialmente el método braille.

También funciona una escuela de educación especial para niños del nivel primario con retos especiales, la cual es avalada por el MINEDUC, y que actualmente funciona en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social del municipio. La Auxiliatura también menciona la labor realizada por FUNDABIEM, en cuanto a atención en terapias especiales; en este contexto señala como una limitante que en la región estos centros de atención tienen sede únicamente en el municipio de Coatepeque.

En cuanto a las posibilidades de locomoción de las personas con discapacidad, para tener acceso a servicios esenciales y gozar de derechos fundamentales como salud, educación, empleo, recreación, participación política y social, se requiere de un transporte accesible y digno, que les permita trasladarse de manera eficiente y segura.

En este sentido, el acceso al transporte público es una de las limitaciones más serias para las personas con discapacidad y con movilidad reducida, ya que no existen rampas de acceso, barras de seguridad, puertas anchas y otra serie de características necesarias. Tales carencias impiden que el transporte público pueda ser utilizado por la gran mayoría de este segmento poblacional, tanto en el ámbito metropolitano como en el departamental y rural.

Con cobertura principalmente en el área metropolitana existe y trabaja la Comisión Política de Accesibilidad al Transmetro y Espacios Físicos (CPAT), una alianza de organizaciones de personas con discapacidad que, con el apoyo de algunas ONG de derechos humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de su Defensoría de Personas con Discapacidad, ha realizado una incidencia política ante autoridades de la Municipalidad capitalina con el fin de lograr la accesibilidad en el sistema de transporte público denominado Transmetro.

En relación con lo anterior, la Sala Tercera de Trabajo y Previsión Social constituida en Corte de Apelaciones, por medio de la sentencia dictada dentro de la Acción de Amparo No. 398-2006, la cual quedó firme en febrero de 2008, ordena que el sistema del transporte público de la ciudad de Guatemala que se conoce como Transmetro, incluyendo infraestructura de paradas, mecanismos de pago y las unidades del transporte, se adapte para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida.

Dicha sentencia no es exclusiva para el Transmetro; también se ordena el acomodamiento de todas las unidades del transporte tradicional, y fija un plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación de la sentencia, para que en los reglamentos que norman la prestación de los servicios de transporte público en la ciudad de Guatemala se incluya la obligatoriedad de la accesibilidad a las personas con discapacidad. Sin embargo a más de año y medio de la sentencia, las adecuaciones no se han realizado y el reglamento ordenado aún no ha sido emitido.

En relación con el derecho a la información y comunicación, no existe regulación alguna para su efectividad, tampoco los medios necesarios para que las personas con discapacidad puedan tener el acceso, tales como formatos y medios alternativos. Sólo un medio informativo transmitido por televisión cerrada, en una de sus cuatro emisiones diarias, cuenta con interpretación en lenguaje de señas; tal sistema de comunicación fue resultado de una negociación de dicho medio informativo y el CONADI.

Los esfuerzos mencionados en párrafos anteriores no son suficientes; se violan los derechos de las personas con discapacidad a la información y comunicación, en particular los derechos establecidos en el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aborda el derecho a la libertad de expresión, de opinión, y de acceso a la información.

En lo que se refiere al acceso a la justicia, las personas con discapacidad encuentran limitantes para alcanzar este derecho, debido a que no existen los medios físicos, informativos y de comunicación que les permitan participar en todos los procedimientos judiciales, a través de la adaptación de dichos procedimientos, tal y como lo establece la referida Convención en el artículo 13:

“Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.”

Tales adaptaciones son distintas a la interpretación en lenguaje de señas obligatoria, y la accesibilidad física, y se refieren a reformas en el Código Procesal Penal, de forma que se adecuen etapas en los procesos de acuerdo con las capacidades físicas, sensoriales e intelectuales de la persona.

Paralelamente, las instituciones del Estado que dan servicios directos a las personas con discapacidad, tales como los distintos hospitales que componen la red hospitalaria nacional, cuentan con obligaciones ya establecidas previamente en leyes existentes, pero que no se cumplen en algunos casos porque no se cuentan con las asignaciones presupuestarias necesarias.

Denuncias de violación de derechos de personas con discapacidad y retos especiales. Durante 2009, la Procuraduría continuó recibiendo denuncias de violaciones a los derechos de este sector poblacional, particularmente casos de individuos con discapacidades mentales. Según la experiencia de trabajo de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, son frecuentes las solicitudes de apoyo, tanto de familiares como de vecinos y amigos, para encontrar una institución que se comprometa a brindar albergue y manutención a las personas con alguna discapacidad, un alto porcentaje de las cuales se encuentra abandonada. Dicha situación refuerza la idea de que la estigmatización, los prejuicios, el rechazo y la invisibilización prevalecen dentro de las percepciones sociales que se tienen de las personas con discapacidad.

Hospital Nacional de Salud Mental. Como en años anteriores, en 2009 la institución del Procurador recibió denuncias de violaciones de derechos humanos por la atención y condiciones en este Hospital. Las denuncias hacen referencia malos tratos a pacientes e internos por parte del personal, inadecuada alimentación y condiciones de vida e infraestructura.

La institución a través de la Defensoría de Personas con Discapacidad ejecutó varios monitoreos en el Hospital Nacional de Salud Mental Dr. Federico Mora para verificar las condiciones de atención a personas con discapacidad. Se observaron condiciones de infraestructura, equipo y calidad de atención. Los objetivos de los monitoreos y supervisiones al Hospital Nacional de Salud Mental versaron sobre la observación de dinámicas de relación entre pacientes y personal médico, entre pacientes y custodios; condiciones de la atención médica; infraestructura e higiene.

De esta cuenta, la Procuraduría de los Derechos Humanos nuevamente programó monitoreos y supervisiones administrativas para observar y verificar las condiciones de infraestructura y de calidad de atención a pacientes internos; verificar la calidad de servicio a pacientes externos y la relación entre pacientes, personal y custodios.

En esta supervisión se constataron condiciones inadecuadas de vestimenta de los pacientes, de higiene e infraestructura. Entre otros, sanitarios fuera de servicio, sin mantenimiento o destruidos; paredes agrietadas; colchones viejos o en mal estado y excretas expuestas al ambiente. Los reos declarados por orden judicial deficientes mentales, fueron denunciados por pacientes y personal del Hospital por maltrato y agresión.

Autoridades de ese nosocomio han rectificado y dado seguimiento a la denuncia contra custodios de reos que han sido declarados por orden judicial incapacitados mentales y que cumplen su condena en ese hospital. Según las denuncias presentadas, personal de salud que ha llamado la atención a los custodios por su conducta contra pacientes ha recibido amenazas y en algunos casos agresiones por parte de éstos.

A partir de la experiencia de verificación realizada en el año, entre otras cosas se hacen recomendaciones al Estado de Guatemala para avanzar en el cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales de protección y garantía de derechos humanos. También, dar cumplimiento y ejecutar la Política Nacional en Discapacidad en materia de salud así como la Ley de Atención a Personas con Discapacidad para garantizar el respeto al derecho de salud de las personas con discapacidad.

En el mismo año, a las autoridades del Hospital Nacional de Salud Mental se dirigieron recomendaciones, entre otras: que se revisen los tratamientos y las condiciones de internamiento de los pacientes, basados en criterios definidos por los Principios para la Protección de Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención en Salud Mental, con un enfoque fundamentado en el respeto de los derechos humanos. Igualmente, tomar en consideración que el fin de los tratamientos de salud mental es la rehabilitación de los pacientes que presentan este tipo de enfermedad, con el objeto de su reinserción social y comunitaria y no el internamiento permanente de los mismos.

A las autoridades del MSPAS se recomendó aportar el presupuesto adecuado al Hospital Nacional de Salud Mental, que permita la contratación del personal suficiente y calificado, el mantenimiento de la infraestructura, la dotación adecuada de medicamentos y otros insumos hospitalarios necesarios, contar con un ambiente adecuado para la recuperación de los enfermos y el buen desempeño profesional del personal, así como habilitar otros centros de atención de personas que presentan enfermedad mental, incluso en el interior de la República, debido a que el hospital actualmente se encuentra saturado de pacientes y la demanda se ha incrementado en los últimos años.

A las autoridades del Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y el Organismo Judicial, se recomendó que examinen periódicamente los casos de internamiento por orden judicial, asegurando que cada caso cuente con un examen forense que recomiende claramente el internamiento de la persona en una institución psiquiátrica. Asimismo, que el Sistema Penitenciario adecue instalaciones dentro de sus terrenos para el internamiento de las personas sentenciadas o que son sindicadas de delitos y que presenten enfermedad mental, para brindarles allí su debido tratamiento, procurando su recuperación.

Cabe mencionar que la Defensoría de Personas con Discapacidad conoció también denuncias en contra del Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación “Dr. Jorge von Ahn”, y el Hospital de Rehabilitación del IGSS. Las denuncias en contra del primero se refieren a mala atención y trato a los y las internas, condiciones inadecuadas de higiene, lo cual fue constatado por personal de la Defensoría, así como instalaciones deterioradas, y escasez generalizada en insumos para la rehabilitación física de pacientes internos y ambulatorios.

En relación con el segundo, las denuncias se refieren a la tardanza en la dotación de medicamentos y auxiliares de apoyo. En el caso de órtesis, prótesis y muletas, los pacientes se quejan de la mala calidad de los mismos, ya que ponen en riesgo su desplazamiento y, consecuentemente, su integridad personal.

Caso Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca (CDAG). La Defensoría de las Personas con Discapacidad, en conjunto con la DIMERCIPP de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, coordinan una mediación en el conflicto entre las organizaciones de personas con discapacidad que practican algún deporte, el CONADI y la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca (CDAG).

El conflicto surgió a raíz de la negativa de la CDAG de autorizar la incorporación de varias organizaciones de personas con discapacidad en la estructura organizativa de la Confederación, como una federación de deportistas con discapacidad, con el argumento que la discapacidad requiere un tratamiento especial, lo cual según los demandantes es claramente discriminatorio. La CDAG argumentó no estar obligada a tramitar la solicitud de incorporación en sus estructuras, en virtud de que las personas con discapacidad no pueden practicar deporte en iguales condiciones que el resto de la población.

El proceso de mediación ha sido prolongado, debido a que el sector de las organizaciones de personas con discapacidad, conjuntamente con el CONADI, desean hacer un planteamiento unificado y sólido ante la CDAG, que incluya reformas a la ley del deporte dentro del marco normativo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 30), según la cual a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes deben adoptar las medidas pertinentes para alentar y promover su participación en las actividades deportivas generales a todos los niveles; asegurar que tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados; también asegurar que tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.

Es de resaltar que en 2009, el proceso de organización del sector de personas con discapacidad se ha fortalecido y ha logrado acuerdos importantes para avanzar con sus demandas.

3.4 Derechos de las personas adultas mayores

El escenario más común donde ocurren múltiples formas de maltrato físico, psicológico y social, descuido y abandono de las personas adultas mayores, es en el entorno del hogar; la dimensión de dichos abusos no desmerece otras formas de maltrato y violencia sufridas por ellas y que poseen carácter estructural, como: negligencias, acciones y omisiones, por parte de agentes e instituciones estatales y estructuras sociales extrafamiliares.

El abuso intrafamiliar tiene sólidos fundamentos en estructuras sociales injustas; convive y se nutre de visiones desprovistas de solidaridad y comprensión acerca de la vejez y de las personas mayores. Se confina al ámbito privado asuntos que tienen trascendencia social y pública, que debieran reflejar también garantías de parte del Estado a través de políticas públicas integrales e incidir en el sistema de cuidados para las personas adultas mayores, coherentes con el proceso de envejecimiento demográfico en el país.

Hay también violencias que se evidencian en políticas, planes y programas que privilegian el asistencialismo sobre el respeto a los derechos y el aseguramiento de recursos primordiales para una vida digna: educación, salud, seguridad social, trabajo, protección, cultura, recreación.

Los adultos mayores son vistos como personas frágiles que necesitan protección y asistencia, sin embargo, se margina a la mayoría de ellas, minimizando su participación en los procesos de desarrollo del país y en el aporte de soluciones.

La edad, la condición económica precaria y el proceso de envejecimiento aumentan la vulnerabilidad, por lo que se deben enfocar programas de seguridad social, recreación y protección.

Según las Auxiliaturas departamentales de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la mayor parte del país se reportan abusos y violaciones a los derechos de los adultos mayores; por ejemplo, en Retalhuleu las denuncias más recurrentes son por exclusión de los programas de atención y de beneficio social. En Jutiapa, por escasez de alimentos, desnutrición y falta de pago de las pensiones, por no contar con el suficiente presupuesto.

En Escuintla, los adultos mayores no reciben la atención adecuada, se les discrimina y excluye de los principales servicios públicos, como salud, medicamentos y alimentos. En Quiché también se les excluye de los servicios de salud y son víctimas de violencia física y psicológica. En Suchitepéquez se ha recibido denuncias por violencia intrafamiliar.

Según estadísticas registradas por la Procuraduría, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, fueron objeto de muerte violenta 239 personas adultas mayores. La Defensora del Adulto Mayor de la Procuraduría de los Derechos Humanos gestionó 284 denuncias sobre hechos y casos relacionados con abusos, maltrato, violencia y violaciones a derechos humanos del adulto mayor.

Conforme la normativa nacional, regional e internacional en materia de derechos humanos, hay un conjunto de normas que protege y garantiza los derechos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores.

Los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos son inherentes para toda persona, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (edad).³⁰

La Convención de Ginebra de la Naciones Unidas, realizada en 1982, aprobó los Derechos Básicos de los Adultos Mayores; según este texto internacional, los adultos mayores sin discriminación alguna, tienen derecho a:

- Acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud mediante ingresos propios suficientes y/o el apoyo de sus familias y de la comunidad.
- Posibilidad de trabajar o tener acceso a otras alternativas de obtener ingresos.
- Participar en la determinación de cuánto y en qué medida cesarán de desempeñar actividades laborales.
- Acceso a programas educativos y de formación adecuados.
- Posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias y capacidades.
- Residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
- Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y en la aplicación de las políticas que afectan directamente su bienestar.
- Buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.
- Formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.
- Acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.
- Acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.
- Acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental.
- Acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
- Recibir un trato digno independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valorados, independientemente de su contribución económica.

A partir de 1990 se conmemora, el primero de octubre el Día Internacional del Adulto Mayor, establecido por las Naciones Unidas para favorecer la toma de conciencia sobre el valor de la prolongación de la vida y la necesidad de favorecer sociedades cada vez más integradoras y justas para todas las personas adultas mayores.

En el ámbito internacional, los adultos mayores no cuentan con un relator específico, aunque ya se han realizado acciones tendientes a impulsar la creación del mandato, a partir de la I Reunión de seguimiento de la declaración de Brasilia en el ámbito de los derechos humanos de las personas de edad (Río de Janeiro, Brasil, 2008), en la cual se acordó solicitar a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluar la designación de un relator especial, con el mandato de velar por la promoción y protección de los derechos de las personas de edad.

Esta declaración insta a realizar consultas pertinentes con los gobiernos, para impulsar la elaboración de una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores.

En el ámbito interno, por el Decreto 80-96, Ley de protección de las personas de la tercera edad, y Decreto No. 85-2005, relativo a la Ley del programa del aporte económico del adulto mayor, reformado en 2009, fueron asignados Q 500 millones para la ejecución de programas y acciones. En este Decreto se establece el 15 de noviembre como Día nacional del adulto mayor.

Derechos violados con mayor frecuencia. Los derechos de los adultos mayores violados con mayor frecuencia en todo el país son la vida, seguridad, libertad, dignidad e integridad personal.

La violencia e inseguridad pública se desarrolla en varios escenarios, en cada cual la población adulta mayor es víctima de hechos y acciones que atentan contra su vida y seguridad personal.

³⁰ Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2.

La tabla describe y cuantifica 284 denuncias recibidas por la Defensoría del Adulto Mayor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de enero a septiembre de 2009. Por la descripción de las denuncias se infiere que los sujetos violadores, por acción u omisión son el Estado y sus entidades gubernamentales y los actores sociales, que en muchos casos son los miembros de la propia familia.

Muchas de las situaciones sufridas por las víctimas ocurren en el interior de la familia, en los hogares donde residen estas personas. También suceden en instituciones y dependencias públicas. La escasez de políticas y programas orientados a los adultos mayores, impide que este sector social acceda a espacios para su superación personal, educación, trabajo, vivienda, vestido, cultura y recreación.

Tabla 75
Denuncias recibidas, enero a septiembre 2009

Descripción	Denuncias
Maltrato físico y psicológico	70
Cobertura social	51
Acceso al programa de aporte económico sin cobertura social del adulto mayor	31
Vivienda	26
Seguridad social	25
Trabajo	11
Violencia intrafamiliar	19
Servicios de salud	14
Acceso a medicamentos	7
Discriminación social, cultural, económica, política	5
Amenazas	4
Trata de personas	4
Abusos deshonestos	1
Violencia física o psicológica	7
Falta de acceso a servicios de salud	9
TOTAL	284

Fuente: elaboración propia.

Se considera que muchos de los abusos cometidos en contra de las personas de la tercera edad obedecen al desconocimiento y la escasa promoción de la Ley de protección de las personas de la tercera edad.

En este contexto, la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría del Adulto Mayor, lleva a cabo supervisiones administrativas a los hogares destinados para adultos mayores (y centros de día) con el fin de verificar las condiciones de organización, habitabilidad, higiene, seguridad, atención y ejecución de programas dirigidos a atender a esa población en condiciones de vulnerabilidad.

Además de supervisiones o monitoreos a la atención de adultos mayores en algunos hospitales o de seguridad social, de enero a septiembre de 2009, la Defensoría había efectuado supervisiones a 20 hogares destinados para personas adultas mayores y tres centros de atención de día, que funcionan por donación o de forma privada, para verificar las condiciones ofrecidas de habitabilidad, atención y programas de atención.

Como un indicador de la situación de vigencia de los derechos de esta población, los resultados de dichas supervisiones indican sobre la carencia de las condiciones mínimas con que cuenta esta clase de centros de atención a personas adultas mayores.

Las condiciones de habitabilidad e higiene en los hogares visitados, son aceptables, pero éstos carecen de condiciones infraestructurales adecuadas, por ejemplo, los corredores y pasillos no cuentan con pasamanos, hay poca ventilación e iluminación, hay escasez de servicios médicos y asistenciales. Se estableció que el MSPAS, ente rector en el ámbito de esta problemática, no realiza ninguna clase de supervisiones a los centros en cuestión.

Por otro lado, la Mesa de diálogo de organizaciones de pensionados, jubilados y sin cobertura social, que trata temas de interés para este sector y a la pertenece con funciones de coordinación la Defensora del Adulto Mayor, ha realizado actividades tendientes a mejorar, promover y defender los derechos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores. Entre otras, en septiembre de 2009 la Mesa hizo un pronunciamiento sobre los aspectos que afectan el equilibrio financiero de los regímenes de previsión social; el documento denuncia la actitud del Estado que disminuye fondos para pensiones y jubilaciones de beneficiarios civiles.³¹

Los adultos mayores afirman en el citado pronunciamiento que:

“La seguridad social es un derecho constitucional para todos los habitantes del Estado de Guatemala. Es responsabilidad de los gobiernos atender e impulsar políticas públicas destinadas a proteger a la persona y a la familia, así como la estabilidad financiera de los regímenes previsionales de pensiones enmarcados en la Seguridad Social; cuyo objetivo es cumplir con los fines para los cuales fueron creados.

Indican respecto a las garantías mencionadas que éstas

“sirven para salvaguardar a las personas y proteger los derechos de las personas afiliadas, por movimientos negativos del mercado financiero, y a la vez sirve para fomentar la confianza de la población en los regímenes de previsión social de pensiones; en nuestro país, a pesar de esto, el Gobierno está apoyando económicamente al régimen de pensiones del Instituto de Previsión Militar, no así a los demás regímenes existentes.”

La Defensoría del Adulto Mayor, en las acciones de seguimiento realizadas, ha identificado algunas situaciones, entre las que sobresalen las siguientes:

- Insuficiencia en la cobertura (no cubre los 333 municipios de la República) del Programa del Adulto Mayor sin Cobertura Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, programa con incapacidad de atender las solicitudes recibidas, que entre el 2006 y el 2009 suman 247,172.
- Atención deficiente en el CAMIP de Pamplona, zona 13, en particular por el trato y mal comportamiento del personal administrativo y secretarial, así como la falta de medicamentos. Las citas médicas se otorgan hasta con nueve meses de distancia. Las instalaciones siguen siendo insuficientes para la cantidad de usuarios, a pesar de que ya han efectuado traslados hacia CAMIP Barranquilla zona 5. Por el contrario, en este último, la situación de atención a las personas que acuden es más apropiada: se atiende a 5,500 personas, las citas se otorgan de manera escalonada cada dos meses y los pacientes pueden presentarse con 40 ó 30 minutos de antelación; se atiende en 6 clínicas de enfermedad común y en 9 de subespecialidades.
- Incumplimiento del Acuerdo Ministerial No.1096-2009 del 20 de marzo, en especial lo establecido en los artículos 3 y 4 que se refieren a la atención integral, diferenciada, ordenada y coordinada en el sector de salud pública, para brindar asistencia médica preventiva, curativa y de rehabilitación en las consultas externas de los hospitales nacionales, centros y puestos de salud a la población adulta mayor; por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, situación identificada en la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios, centro hospitalario en el cual según el acuerdo ministerial citado, debería estar habilitada una clínica específica, y no lo está.
- Se nombró al presidente de la junta directiva del Comité Nacional de Protección a la Vejez (CONAPROV), por gestión de la Defensora del Adulto Mayor ante la SOSEP. Esta instancia debe contribuir a mejorar la atención y la situación de las personas adultas mayores.

Acciones y omisiones del Estado. Además de las exclusiones arriba mencionadas, en la situación de la vigencia de los derechos de las personas adultas mayores, se observa una acentuada desigualdad en el acceso a los servicios de salud, vivienda, alimentación, vestido, medicinas y bienes económicos. No hay ninguna acción pública sostenida, en este marco, que beneficie a la mayor parte de las personas adultas mayores que se encuentra hoy en condiciones precarias.

La poca capacidad para generar ingresos propios, la insuficiente cobertura de los programas de seguridad social, los bajos montos de las pensiones de jubilación y otras limitaciones, contribuye a mantener las condiciones desfavorables de vida que ahora tiene la mayor parte de adultos mayores.

³¹ Pronunciamiento sobre aspectos que afectan el equilibrio financiero de los regímenes de previsión social, emitido por la mesa de diálogo de organizaciones de y para adultos mayores, coordinada por la defensoría del adulto mayor. PDH. Guatemala, septiembre 2009.

Pese a las condiciones citadas, una minoría de adultos mayores sin cobertura social, es beneficiada a través del programa de Aporte económico sin cobertura social, a cargo del MINTRAB. Este programa forma parte de la Ley de aporte económico para el adulto mayor aprobada en 2005.

Hasta 2009 se está beneficiando a las personas que ingresaron expediente en 2006, sin tomar en cuenta los expedientes ingresados en los años posteriores a la emisión de la mencionada ley.

Durante 2009, el Programa Nacional del Adulto Mayor (PRONAM),³² que pertenece a la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (SOSEP), excluyó a los adultos mayores que obtenían el beneficio de bolsa de víveres de la canasta básica, derecho otorgado desde hace varios años. Sumado a esta exclusión, fueron trasladadas las actividades que se desarrollaban en las instalaciones de PRONAM en la zona 1 de la ciudad, hacia las instalaciones del centro de día que funciona en la iglesia San Jerónimo Emiliani en la zona 6, perjudicando a todos los beneficiarios por la distancia que tienen que recorrer y la inseguridad que implica.

El Estado, según lo establece el Decreto No. 80-96, es el responsable de la creación de hogares destinados a personas mayores e indigentes que carezcan de familia o que se encuentren en abandono. En la actualidad sólo funciona un hogar estable, ubicado en Antigua Guatemala, que resulta insuficiente para atender la demanda existente. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que la población adulta mayor que tiene el beneficio de una pensión o jubilación, no ha visto incrementar el monto de éstas y los incrementos que han obtenido no cubren las necesidades del costo de la canasta básica, por lo que el monto del beneficio no les permite gozar de condiciones dignas de vida.

3.5 Derechos vulnerados de la población que vive con VIH-SIDA

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 94, establece que

“el Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.”

Según normas internacionales vigentes en nuestro ordenamiento interno, toda persona tiene derecho a la salud, “entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.”³³

El VIH/SIDA es considerado una enfermedad pandémica, que además de seguir expandiéndose, se ha convertido en un padecimiento socialmente estigmatizado.

En Guatemala viven aproximadamente 60,000 personas VIH positivas; sin embargo, el reporte oficial del sistema de vigilancia epidemiológica es de 16,000 casos, con un subregistro estimado de 76%. Los casos de SIDA se elevan a aproximadamente 11,000, lo cual significa que 7 de cada 10 personas afectadas por la epidemia son diagnosticadas cuando ya han desarrollado SIDA. La transmisión sexual representa 94%, seguida por la transmisión de madre a hijo o hija, con 5%, correspondiendo el 1% a otras formas de transmisión de la enfermedad.³⁴

Según el informe del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación,

“el sistema nacional de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual y del VIH y SIDA es principalmente de primera generación y pasivo, el proceso de reporte presenta limitaciones para la detección, diagnóstico, notificación, registro y seguimiento de casos, el subregistro estimado llega a 50%-70%”.³⁵

³² Ofrece atención integral a la población adulta mayor que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para contribuir a enfrentar la pobreza y mejorar su calidad de vida. Perfil PRONAM. SOSEP, Guatemala, 2009.

³³ Protocolo Adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, artículo 10.

³⁴ “Informe Evaluación del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación e Identificación de Acciones Prioritarias”, presentado al MSPAS por el Equipo Mundial de Referencia en Monitoreo y Evaluación (MERG); el Comité Organizador del Programa Nacional de ITS, VIH y Sida del MSPAS, Visión Mundial – Guatemala / Proyecto OPS, ONUSIDA, USAID/PASCA, Comité Técnico de Monitoreo y Evaluación, pág. 10, Guatemala, noviembre de 2008.

³⁵ *Ibid.* pág. 18.

A pesar de los esfuerzos interinstitucionales por promover la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y SIDA, se continúan dando una serie de atropellos que van en contra de su dignidad y que violentan sus derechos laborales, a la educación, al acceso a los servicios de salud y de seguridad social.

Dichos atropellos no son denunciados por los afectados debido a que muchos de ellos continúan dentro del anonimato y el seguir un proceso legal que les permita la reparación del daño causado les obligaría a revelar que son portadores del referido virus, lo cual les hace más vulnerables a ser objeto de discriminación, por el estigma que se ha creado para esta enfermedad.

Según la Auxiliatura Regional de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, los programas de salud y atención a este tipo de población no están totalmente regionalizados, lo cual afecta sobre todo a las personas de escasos recursos que residen en comunidades alejadas de los centros de atención, donde se suministran los medicamentos necesarios. Por otra parte, en los centros donde debieran suministrarse éstos, no se hace en la calidad y cantidad necesarias, lo que implica una violación de los derechos humanos a la salud y a la vida.

“Las autoridades no quieren reconocer la dimensión del problema y lejos de iniciar procesos de sensibilización se trata de esconder esa realidad.”³⁶

La discriminación es una práctica presente en temas étnicos, económicos, de salud y de preferencia sexual entre otros. La Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez ha registrado denuncias presentadas por personas que viven con VIH/SIDA debido a la discriminación de la cual han sido objeto, tanto por particulares como por miembros del propio entorno familiar.

Aunque no se cuenta con una cura para esta enfermedad, existen medicamentos para que las personas infectadas no lleguen a desarrollar el SIDA. Con el fin de tener el acceso a los medicamentos y ante la escasa existencia en los centros asistenciales, integrantes de la red legal y su observatorio de derechos humanos VIH y SIDA, presentaron denuncia por violación a su derecho humano a la salud y la vida y solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos para supervisar distintas clínicas y hospitales, tanto en la ciudad capital como en el interior del país, por presentar, según los pacientes, desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales.

Con base en el resultado de la supervisión, la institución del Procurador presentó una acción constitucional de amparo³⁷ contra el director del Programa Nacional del SIDA, la cual fue conocida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil constituido en Tribunal de Amparo. El acto reclamado constituía la actitud de la autoridad impugnada de no propiciar ni mantener periódica y constantemente el acceso y abastecimiento de las pruebas de carga viral plasmática y recuento de linfocitos CD4, así como del medicamento y tratamiento para enfermedades oportunistas derivadas del VIH y SIDA en todas las clínicas y hospitales de atención integral que forman parte de la Comisión Multisectorial, así como no prever el desabastecimiento de medicamentos en todas las clínicas y hospitales de atención integral de personas que viven con VIH y SIDA.

El referido órgano jurisdiccional emitió la resolución de fecha 15 de octubre de 2009, dentro de la cual se otorgó el Amparo Provisional solicitado por el Procurador de los Derechos Humanos y finalmente dio con lugar el mismo, debido a la violación del derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y el desarrollo integral de las personas que viven con VIH, por la falta de medicamentos y deficiente atención que se prestaba a los pacientes.

3.6 Derechos de las minorías sexuales

“En una parte considerable de los casos de tortura a miembros de minorías sexuales hay indicaciones de que a éstos se les somete a menudo a actos de violencia de índole sexual, como violaciones o agresiones sexuales, a fines de ‘castigarlos’ por traspasar las barreras del género o por cuestionar ideas predominantes con respecto al papel de cada sexo.”³⁸

³⁶ PDH. “Derechos Humanos y el VIH en Guatemala” producción de la Unidad de Televisión. Guatemala, noviembre de 2009.

³⁷ PDH. Acción Constitucional de Amparo N° 01047-2009-001004, oficial 4. Juzgado 2°, Primera Instancia del Ramo Civil constituido en Tribunal de Amparo, departamento de Guatemala.

³⁸ Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas, crueles inhumanos o degradantes, 3 de julio de 2001. A/56/156 párrafo 17.

En Guatemala son comunes las actitudes que vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación de hombres y mujeres que tienen una orientación sexual, o identidad de género, fuera del modelo establecido por la sociedad. Entendiendo que orientación sexual se refiere a

“la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.”³⁹

Y por identidad de género a

“la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”⁴⁰

Esta situación se refleja en la expresión de uno de los líderes de la Organización de Transexuales (Otrans) Reinas de la Noche,

“porque vivir en una sociedad cargada de machismo y discriminación, y dejar aflorar un comportamiento sexual distinto con el que se nace, es someterse a la burla, al rechazo y al desprecio.”⁴¹

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que:

“todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohíbe toda discriminación y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

En relación a la normativa es pertinente resaltar que los tratados internacionales en materia de derechos humanos excluyen la discriminación por razones de orientación sexual, respecto a lo cual el Comité de Derechos Humanos declaró que: la referencia al sexo que hacen los artículos 2 párrafo 1, y el 26 del referido Pacto, incluye “la inclinación sexual”, lo cual implica que los Estados no pueden limitar el disfrute de los derechos humanos en función de la orientación sexual de las personas.⁴²

Los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, conocidos como *Principios de Yogyakarta*, contemplan los derechos humanos y la aplicación de los mismos a los asuntos relacionados con la orientación sexual, y afirman la obligación primordial de los Estados de implementarlos.

La OEA ha manifestado su preocupación ante los actos de violencia y de las violaciones de derechos humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual, por lo que emitió la resolución de derechos humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en la cual urge a los Estados que se investiguen dichos actos de forma que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. A la vez insta a los Estados a que brinden una protección adecuada a los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia cometidos contra la referida población.⁴³

En relación con lo anterior, la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la Cuestión de los Defensores de Derechos Humanos, ha señalado que los defensores de los derechos de las lesbianas, los

³⁹ Preámbulo de los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, Principios de Yogyakarta.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Reportaje *Guatemala: Transexuales, despreciados en la sociedad*, publicación especial de SEMlac, Guatemala, 11 de julio de 2009

⁴² Fallo emitido por el Comité de Derechos Humanos el 31 de marzo de 1994 en el caso Toonen contra Australia; CCPR/C/50/D/488/1992, de fecha 4 de abril de 1992, apartado 8.7.

⁴³ OEA, Resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, AG/RES 2504 (XXXIX-0/09) 39 Asamblea General celebrada en San Pedro Sula, Honduras, el 4 de junio de 2009.

homosexuales, los bisexuales, los transexuales y los intersexuales, son más vulnerables a ser objeto de ataques o represalias por la labor de protección que desempeñan⁴⁴.

Derechos vulnerados. Las personas que pertenecen a minorías sexuales, son objeto de violencia, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios, lo que trae como consecuencia entre otros, la pérdida del sentido de pertenencia a su comunidad y el ocultamiento, por temor o como mecanismo de protección, de su identidad, viéndose forzados a vivir en la invisibilidad. Esta situación implica la limitación del acceso a la salud y el disfrute del derecho a la salud primaria y la sexual, a la educación e incluso a mejores oportunidades de trabajo, entre otros.

Sumado a lo anterior, la violencia de la cual son objeto tanto por personas particulares como por empleados o funcionarios públicos (como en el caso de las personas transexuales que ofrecen sus servicios en la vía pública), los hace estar expuestos a ataques que ponen en peligro su integridad física y su vida. Así lo denunciaron ante la opinión pública, representantes de la organización Otrans Reina de la Noche, a principios del mes de noviembre de 2009, en referencia a los hechos en donde al menos tres personas transexuales fueron asesinadas en Guatemala. El 75% de los crímenes en contra de la comunidad homosexual se centra en la referida población⁴⁵.

Otro aspecto a resaltar es el hecho que no existen numerosas denuncias, lo cual denota la invisibilidad, el temor y desconfianza en la que se encuentra la mayoría de hombres y mujeres que pertenecen a minorías sexuales.

Algunas denuncias presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. En la institución del Procurador, se conoció una denuncia por discriminación interpuesta por una persona con orientación sexual diferente, a quien no le permitieron el ingreso a un centro de detención, en calidad de visitante, en tanto que vestía según la autoridad, con ropa inapropiada.

Asimismo se recibió la denuncia de una persona transgénero cuya identidad es femenina, quien se presentó al Registro Civil a cargo de la Municipalidad de Guatemala, institución que en esa época tenía bajo su cargo el otorgamiento de la cédula de vecindad, con el objeto de solicitar que se le extendiera una reposición del aludido documento de identificación personal. Su solicitud fue rechazada debido a que al realizar el trámite respectivo presentó fotografías de una persona con características femeninas y al momento de confrontar el asiento de cédula correspondiente constaban dos fotografías de una persona con características masculinas y al verificar la partida de nacimiento se estableció que el inscrito era de sexo masculino.

Al no contar con un documento de identidad, no pueden realizar actividades de la vida cotidiana como por ejemplo acudir a una entidad bancaria a cobrar un cheque u optar a un trabajo, entre otros. Algunas personas al no encontrar una solución a dicha problemática deciden recurrir a actos ilícitos como la utilización de documentos alterados o falsos.

La situación descrita no se encuentra regulada explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico; al respecto el principio tercero de Yogyakarta, contempla el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, “ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género”⁴⁶.

Es importante actualizar y armonizar la legislación nacional, para adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género.

⁴⁴ Asamblea General, informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos. A/HRC/4/37, 24 de enero de 2007 Párr. 27.

⁴⁵ Rigalt, Carlos, Diario EL Periódico, Guatemala 13 de noviembre de 2009.

⁴⁶ Principios de Yogyakarta, sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Principio 3.

3.7 Derechos de la población detenida o reclusa

“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humanos.”⁴⁷

El artículo 6 de la Constitución Política de la República, establece que “*ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente*”. El artículo 19 establece que “*el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reducción de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos*”, de conformidad con ciertas normas mínimas que se establecen en dicho artículo. De tal forma que es el Estado el encargado de garantizar el respeto de los derechos de las personas que se encuentran detenidas o reclusas.

Es importante resaltar que dicha población es vulnerable a ser objeto de vejámenes que atentan contra su derecho a ser sujetos de un debido proceso, o que ponen en riesgo su integridad física y en algunos casos hasta la vida.

“Como consecuencia de la detención las personas pierden su derecho a la libertad de movimiento. Sin embargo deben continuar gozando de todos sus demás derechos”⁴⁸.

Avances en materia de derechos de la población detenida o reclusa. En relación a las acciones por parte del Estado en lo concerniente al debido proceso, cabe mencionar que las instancias encargadas de la administración de justicia han realizado esfuerzos encaminados a su mejoramiento. El funcionamiento de los juzgados de turno, ha permitido que las personas sean consignadas en los plazos constitucionales⁴⁹, así como resolver en el tiempo que corresponde legalmente, dando pie a las transformaciones necesarias que lleven a garantizar el pleno derecho de defensa y debido proceso.

A la fecha se han abierto cinco juzgados de turno, los cuales se encuentran ubicados en la ciudad capital, Villa Nueva, Escuintla, Mixco y recientemente en Sacatepéquez; se tiene el proyecto de ampliar su cobertura a otros departamentos con altos índices de violencia. Asimismo se han implementado un mayor número de tribunales y centros de justicia en departamentos con gran criminalidad, así como juzgados móviles, principalmente en la ciudad capital.

Otro avance lo constituye la creación de los tribunales de alto impacto con competencia ampliada, que conocerán de delitos graves como masacres, asesinatos y plagios. El problema que se enfrenta en la actualidad con dichos tribunales es la falta de infraestructura, instalaciones, seguridad para los juzgadores, vehículos, personal de apoyo y la carencia de un seguro.

Otro hecho sobresaliente fue la elaboración del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia dentro del cual se incluyen temas relacionados con la infraestructura carcelaria, el diseño e implementación de centros, el reglamento de la ley del régimen, realización del censo penitenciario, la inspección de cárceles, proceso de depuración del personal, implementación de salas o recintos ubicados en los centros penales que evitarían gastos y posibles fugas y, con el fin de evitar extorsiones, la colocación de antenas bloqueadoras de señales telefónicas.

Uno de los problemas recurrentes en el tema penitenciario han sido los constantes cambios de autoridades, principalmente directores y subdirectores, los cuales han significado limitaciones a la continuidad de los procesos de cambio tan necesarios para el sistema penitenciario como parte importante de la administración de justicia. Cabe mencionar que la Procuraduría ha conformado con otras instancias mesas de consenso en el tratamiento de temas comunes y a la vez se ha participado facilitando cursos propedéuticos para empleados penitenciarios.

Pendiente permanece la aprobación del reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, para lograr una mejor administración en los centros carcelarios; asimismo, a todo nivel, la formación en derechos humanos y el fomento de una cultura de prevención, fortaleciendo la capacidad mediadora del funcionario del sistema penitenciario, cualidad indispensable para mantener la seguridad y la armonía en los centros de detención preventiva y de

⁴⁷ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10, numeral 1.

⁴⁸ Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). *Monitoreo de lugares de detención, una guía práctica*, pág. 22. Ginebra, 2004.

⁴⁹ “*Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad...*” Constitución Política de la República, artículo 6.

condena. En el marco de la prevención de la tortura, malos tratos, inhumanos o degradantes será necesaria también la creación del mecanismo nacional adecuado.

Derechos vulnerados de población detenida o reclusa. En relación al debido proceso, según los casos conocidos por esta institución a través de la Defensoría del Debido Proceso, se violan con más frecuencia los derechos a la igualdad particularmente en el caso de las personas de escasos recursos, cuya defensa se encuentra a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal, entidad que debe hacer frente a un gran volumen de trabajo de defensa pública, que en ocasiones supera sus recursos disponibles.

También ha sido vulnerado el derecho de la presunción de inocencia, pues se realizan traslados de personas procesadas a sitios o centros de cumplimiento, lo cual pone en riesgo su integridad, y a la vez contraviene el precepto constitucional que establece, en su artículo 10, que las

“personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas.”

En relación a los derechos de los detenidos, tanto procesados como condenados, existen una serie de violaciones como la falta de acceso a servicios de salud integral, debido a la falta de médicos de tiempo completo y la carencia de medicamentos para determinadas enfermedades, ya que en los centros de detención y de cumplimiento de condena únicamente se cuenta con medicinas para dolencias menores como cefaleas, antidiarreicos, heridas leves, utilización de bolsas para colostomías, entre otros.

Un problema aunado a lo anterior, es la falta de coordinación de los jueces de ejecución penal con el Instituto de la Defensa Pública Penal en relación a la conformación de los expedientes de libertad anticipada, lo cual está regulado en el Ley del Régimen Penitenciario (Decreto 33-2006). En este tema se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la integridad, ya que en el sitio donde se encuentra el privado de libertad es aislado, relegándolo a la marginación por grupos de poder enquistados en el mismo sistema.

También se dan casos de traslados sin orden judicial, efectuados por el sistema penitenciario, en los cuales se trata de personas procesadas a quienes les asiste la presunción de inocencia, siendo enviados a centros de cumplimiento en donde no existe clasificación alguna, es decir conviven con reclusos que purgan condenas por delitos de impacto.

Cabe mencionar que en algunos casos se lleva a cabo primero el traslado y después se informa al juez que tramita la causa. Un hecho que ilustra la gravedad de la situación antes descrita fue lo ocurrido en el 2008, cuando fueron trasladados pandilleros de la denominada “Mara Salvatrucha” del penal de máxima seguridad denominado el Boquerón, ubicado en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, hacia el Centro de Reinstauración Constitucional de Fraijanes denominado Pavoncito, sitio en el cual fueron ejecutados por la población conocida como “paisas”, quienes no integran ninguna pandilla o son ex mareros.

Otros conculcados son el derecho de tener acceso a una convivencia adecuada y a no ser agredido, tanto por autoridades como por privados de libertad de cierta antigüedad, que ostentan un grado mayor de poder o son los encargados de sectores en los centros de detención.

Denuncias de violación de derechos de población detenida o reclusa. En la institución del Procurador, de enero a noviembre de 2009, se recibieron 729 denuncias relacionadas con la violación al derecho a un debido proceso y 239 denuncias de violaciones a derechos del detenido o recluso.

Las denuncias recibidas se refieren a la falta de medicamento en los centros de detención, falta de asistencia médica a los reos, condiciones precarias de habitabilidad, abuso de poder al momento de realizar requisas, traslados sin orden de juez competente, aún cuando la Ley del Régimen Penitenciario regula que es necesaria la intervención del juez para realizar tales cambios.

Es necesario mencionar, que varios hechos como los denunciados durante el presente año, han sido conocidos, tramitados y resueltos por la institución del Procurador de los Derechos Humanos en años anteriores, haciendo recomendaciones a fin de prevenir hechos o situaciones que, detectados a tiempo, son totalmente subsanables,

como el caso de la falta de medicamento o el traslado de reos a los diferentes centros hospitalarios para que reciban la atención médica debida.

Lamentablemente continúan dándose situaciones en las cuales se ven involucrados tanto funcionarios como empleados públicos. Tal es el caso de algunos agentes de la PNC, incluidos también comisarios, directores, encargados de seguridad, alcaides, directores de centro, encargados de sectores de las cárceles del país, entre otros.

Asimismo, las personas que son detenidas por elementos de la referida entidad policial son presentados ante los medios de comunicación y fotografiados como posibles culpables de hechos delictivos en contravención del artículo 13 Constitucional, el cual prohíbe a las autoridades policíacas presentar de oficio ante los medios de comunicación social a una persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.

En algunos casos, abusando de su posición, directores de centros penales, alcaides, agentes penitenciarios y encargados de sectores de alguna antigüedad, extorsionan a las personas que se encuentran reclusas y a familiares de estos, a cambio de no agredirlos contra su integridad sino que también contra su vida, dentro del centro de detención. Por el código del silencio, tales vejámenes en las prisiones no son fáciles de comprobar, imposibilitando esclarecer los hechos. Denuncias al respecto pueden dar motivo a venganzas y acciones de riesgo a la integridad física de los reclusos. El traslado de un privado de libertad a otro sector o granja, puede dar lugar a la agresión y/o la eliminación del sujeto de parte de los mismos compañeros reclusos. Las redes de comunicación a lo interno de los centros y de estos hacia fuera constituyen un complicado y eficaz sistema de información.

3.8 Derechos de la población migrante y desarraigada

“Nadie que no esté sufriendo la angustia que genera la pobreza estructural sale de Centroamérica; por lo tanto, los caminantes son ya, de por sí, víctimas despojadas de una vida digna.”⁵⁰

Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y en la actualidad también *país de retorno de población migrante* en situación irregular. Esta cuádruple connotación configura una compleja problemática para el permanente fenómeno migratorio motivado por las condiciones socioeconómicas locales y periféricas del país, que siguen generando flujos humanos empujados por la necesidad de encontrar un lugar en donde sus derechos sean respetados y gocen de garantías.

Durante 2009, las causas que generaron las diásporas desde, hacia y por Guatemala, no han variado sustancialmente, de hecho no han variado en los últimos años.

Las causas más frecuentes son: el deterioro en la calidad de vida, falta de acceso a servicios básicos, la persistencia y aumento de las desigualdades sociales, situaciones de desempleo o empleo por debajo de las condiciones legales mínimas; el contexto de la permanente impunidad y las cada vez más frecuentes extorsiones. Se siguen registrando casos de migraciones forzadas o bajo engaños de víctimas de trata, como en el caso de una mujer migrante de nacionalidad nicaragüense, en compañía de su hija de seis meses de edad, quienes el 4 de marzo de 2009, fueron trasladadas al albergue de la Pastoral de Atención al Migrante, Casa del Migrante y Pastoral de la Movilidad Humana, por agentes de la PNC, a bordo de la auto patrulla BV-052.

Al momento que personal de la Auxiliatura de la PDH de Baja Verapaz le entrevistó, la señora manifestó que fue traída a Guatemala para trabajar, mientras estaba en estado de gestación; ella relató que la llevaron a supuestos lugares de trabajo, donde la obligaron a prostituirse. Refirió que el último lugar donde estuvo fue un local comercial en Salamá, Baja Verapaz, donde fue objeto de malos tratos, encierro con su hija, despojo y retención de sus documentos.

La motivación económica al parecer es la más frecuente, como ha sido verificado por la Auxiliatura Departamental de Huehuetenango. Ante la escasez de trabajo, continúa en aumento el flujo migratorio, tanto hacia el interior del país, como al exterior del mismo. Dicha migración se hace evidente con la movilización de trabajadores a la zona

⁵⁰ Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México/ Belén, Posada del Migrante. Humanidad Sin Fronteras, A.C. Frontera Con Justicia, A.C. / Saltillo, Coahuila. Mayo de 2009.

costera del país y para el sur del territorio mexicano, para laborar como jornaleros en el corte de café y caña de azúcar o emprender la marcha hacia los Estados Unidos.

A las causas para la migración pueden agregarse motivaciones relacionadas con la violencia, entre la que puede incluirse aquella que tienen su origen en la violencia intrafamiliar, como el caso de una mujer guatemalteca, que luego de sufrir violencia doméstica por parte de su esposo por diez años, huyó del país en 1995 y pidió asilo político en Estados Unidos, el cual obtuvo en diciembre de 2009, y cuyo caso y proceso jurídico en ese país generó polémicas en torno a una reforma a las leyes migratorias del país del norte.

Las causas y motivaciones de la migración, siguen empujando a las personas a dejar lo que tienen, para emprender y transitar el camino incierto y peligroso, sin protección legal, y perjudicadas por rígidos y riesgosos sistemas migratorios.

Las personas migrantes siguen una ruta que las conduce principalmente hacia los países del norte del continente americano, sobre todo hacia los Estados Unidos, en donde la población originaria de países de habla hispana⁵¹, muestra un crecimiento constante, pasando de ser un 6.4% de la población total de ese país en 1980, a un 15.5% para 2010⁵². Los datos indican que en 2006 había 3,372,090 personas de origen centroamericano en Estados Unidos, lo que representa el 7.6% de la población hispana. El fenómeno migratorio, su importancia y abordaje se mantiene de manera prioritaria dentro de la agenda social, económica y de seguridad.

Para hacer un enfoque aproximado del grueso del flujo migratorio en tránsito, es conveniente señalar que en el primer semestre de 2009 la Dirección General de Migración (DGM) registró que 18,255 personas de origen centroamericano fueron deportadas por la vía terrestre hacia Guatemala desde México.⁵³

En 2005 el Instituto Nacional de Migración mexicano, reportó que había detenido a 125,093 personas de origen centroamericano en 226,539 eventos de aseguramiento y que de esos eventos 122,009 correspondían a personas centroamericanas que entraron a México por Guatemala⁵⁴.

Para completar el panorama se agregan las migraciones que llegan a su destino, es decir, de las que no existe registro de deportación o aseguramiento, y se incluyen los flujos de América del Sur y extracontinentales, aunque sin existencia de datos exactos. Sumando estas cifras, se estaría frente a un aproximado de un cuarto de millón de personas extranjeras que anualmente están de paso por el país de forma irregular. Por su parte, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala estima un flujo de migración en tránsito por año de unas 250,000 a 300,000 personas.⁵⁵

La migración irregular, sea cual sea la causa, supone una elevación de los niveles de riesgo, lo que genera un estatus distinto de vulnerabilidad para las personas que migran.

Por esto, el Procurador de los Derechos Humanos presta especial atención a los derechos de la población migrante y atiende esta situación por medio de la Defensoría de Población Migrante y Desarraigada, de la Unidad de Derechos Específicos de la Dirección de Procuración y de las Auxiliaturas Departamentales ubicadas en puntos fronterizos.

La Procuraduría ha prestado especial atención a los derechos humanos vinculados con el fenómeno migratorio desde tres planos: el ámbito local, con respecto a los derechos de los migrantes en tránsito; el ámbito internacional,

⁵¹ En el censo de Estados Unidos se tomó “hispano” como sinónimo de “latino” y aplica para personas originarias de países cuyo idioma oficial es el español, el informe tiene una categoría especial para personas de origen mexicano, puertorriqueño, cubano, dominicano o español, quienes fueron clasificadas de esa manera. Las personas que respondieron costarricense, guatemalteco, hondureño, nicaragüense, panameño, salvadoreño fueron clasificadas como “centroamericano”.

⁵² US Census Bureau, 1970, 1980, 1990, and 2000 Decennial Censuses; Population Projections, July 1, 2010 to July 1, 2050; publicado en febrero 2008. “Hispanics in the United States”, presentación en Power Point creada en Ethnicity and Ancestry Branch, Population Division, U.S. Census Bureau. 2006.

⁵³ DGM. *Boletín estadístico semestral* No. 1, año 1, Guatemala, Centro América.

⁵⁴ Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, México. 2007.

⁵⁵ MENAMIG. *Boletín Voz Itinerante*, No. 85. Guatemala, agosto de 2009.

atendiendo la situación de migrantes guatemaltecos en el extranjero y el de la situación de las personas migrantes guatemaltecas que retornan luego de ser deportadas.

Avances en materia de los derechos de las personas migrantes. la aprobación de normativa por el Decreto 09-2009, Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; la elaboración del informe alternativo sobre la implementación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, preparado por la Comisión Presidencial para la Política de Derechos Humanos del Ejecutivo para el órgano de tratado; el impulso de la estrategia nacional tendiente a contribuir en los procesos de búsqueda de una reforma migratoria integral en Estados Unidos de América. No obstante aún permanece como iniciativa pendiente el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, relativo a la creación del mecanismo nacional de prevención de la tortura en todo lugar de privación de libertad.

3.8.1 Migrantes en tránsito por Guatemala

En el 2009 los derechos más afectados de la población migrante internacional en Guatemala han sido al orden, seguridad, a la libertad, al debido proceso, a la integridad personal. En el caso de migrantes guatemaltecos deportados, se han recibido quejas sobre deficiencias en la prestación de asistencia consular, la alimentación inadecuada en lugares de privación de libertad y la criminalización de los migrantes por parte de autoridades estadounidenses que utilizan grilletes y les encierran en centros penales.

La vulneración de los derechos a la seguridad y libertad en Guatemala, se realiza mediante restricciones a la movilidad o detenciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. Estos casos suceden especialmente con los centroamericanos, no obstante que por Acuerdo CA-4 entre los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, los ciudadanos de tales países pueden movilizarse libremente hasta por 90 días, con la sola presentación de su Documento Único de Identidad (DUI). La situación se agrava en la actualidad puesto que el documento denominado CA-4 no se utiliza, lo que hace que las personas detenidas no puedan demostrar cuánto tiempo han permanecido en el país.

En casos de detenciones ocurridas en contra de personas centroamericanas en situación irregular, no se realizan los procedimientos debidos, llegando a extremos que pueden constituir detenciones ilegales, además de un quebrantamiento al derecho de toda persona a ser informada sobre su situación jurídica o, en muchos casos, la extorsión.

La Auxiliatura de Poptún conoció el caso de migrantes hondureños en tránsito por territorio petenero, quienes el 9 de julio de 2009 fueron extorsionados en los puestos de registro de la PNC instalados en la aldea San Pedro Cadenas, jurisdicción de San Luis, Petén y en Poptún, Petén; según la información disponible, los policías exigieron a cada emigrante la entrega de cien quetzales a cambio de permitirles continuar su marcha hacia el norte del país; éste es un delito cometido de manera constante en contra de población migrante en tránsito.

Por otra parte, la detención en condiciones no adecuadas por debajo de las mínimas que deben observarse en los centros de privación de libertad y vulneraciones al debido proceso, se han registrado con migrantes extracontinentales en el Área Internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según las acciones de protección emprendidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de la Población Migrante y Desarraigada, en el 2009, las autoridades mayormente señaladas de cometer abusos en contra de la población migrante son principalmente miembros de la PNC y de la DGM.

En general, las personas migrantes en tránsito evitan tener cualquier contacto con autoridades estatales, lo que puede reflejarse en el contraste entre el flujo migratorio real con el número de denuncias conocidas por la Dirección de Procuración de la Procuraduría; por ejemplo, al 31 de noviembre de 2009, se registraron 49 denuncias por presuntas violaciones a los derechos de la población migrante y desarraigada.

Normas internacionales en la materia establecen que, en los procedimientos judiciales o administrativos, se debe garantizar la libertad personal como regla general, y aplicar como excepción la privación preventiva de la libertad. Las detenciones y privaciones de libertad de personas migrantes deben ser medidas excepcionales y deben estar

sujetas a revisión de autoridad competente; si esos eventos se dan, en todo caso, las autoridades deben guardar el respeto y garantía de los derechos humanos.⁵⁶

Según los estándares internacionales vigentes, por privación de libertad debe entenderse cualquier forma de detención, encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.⁵⁷

Algunos de los casos conocidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos ponen de manifiesto la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la persona migrante cuando acontece una privación de libertad lo que en general puede conducir a la tolerancia de otras violaciones y abusos, como robos, extorsiones, la violación del derecho al debido proceso mediante la falta de garantía de asistencia profesional, legal, médica y psicológica y violación a la prohibición referente a que no debe existir privación de libertad por plazo indefinido.

Por otra parte, los tiempos de detención prolongados o indefinidos, suceden mayormente con personas que provienen de países extracontinentales y de América del Sur, en especial de los países que no tienen representación diplomática en Guatemala; al momento, no existe un programa de repatriación para devolverlos lo más pronto posible a sus lugares de origen. Como ejemplo, se puede citar el caso de tres ciudadanas chinas que fueron detenidas en el área internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora, por tiempo indefinido y por quienes se interpuso exhibición personal. Como resultado de esta acción, la Juez resolvió que la línea aérea que las trasladó a Guatemala las regresara a su país de origen.

En otro caso, dos hombres migrantes de origen ecuatoriano, fueron detenidos a mediados de octubre de 2008. De igual forma, dos hermanos colombianos, uno de ellos de 14 años, fueron detenidos el 16 enero de 2009. Ninguna de las cuatro personas fue devuelta a su respectivo país, debido a falta de recursos para tal fin; esa situación es común y ocasiona prolongados períodos en el albergue migratorio, en situación de privación de libertad.

Al mismo tiempo, se ha verificado que en el albergue migratorio, la ventilación artificial no funciona permanentemente y no existe ventilación natural adecuada; tampoco existe un área en donde los migrantes puedan recibir luz solar y caminar al aire libre; no existe atención médica y psicológica permanente.

Por otra parte, debe fortalecerse la capacidad de los servidores públicos para que puedan identificar, monitorear y atender posibles casos de trata. En el Aeropuerto Internacional La Aurora se ha verificado que no existe un lugar adecuado para detener a las personas que presentan problemas migratorios: el lugar en donde se les detiene no cuenta con camas, duchas, ni asistencia profesional, médica, legal ni psicológica; las personas detenidas no reciben luz solar.

Si bien, se trata de una detención administrativa y a las personas migrantes se les mantiene en un albergue destinado para ese fin, se deben aplicar los estándares que establecen los instrumentos internacionales para cualquier persona privada de libertad desde el momento de su detención y aseguramiento.

El albergue de la DGM, como se indicó anteriormente, no cuenta con condiciones básicas y no ofrece la posibilidad de utilizar un teléfono estatal o privado de uso público, cuando la normativa vigente en Guatemala establece que los extranjeros, cualquiera que sea su condición jurídica y su situación en materia de inmigración, tienen derecho a ponerse en contacto con el funcionario consular de su propio Estado en caso de detención o encarcelamiento.⁵⁸

En algunos casos, la incomunicación es absoluta si no se cuenta con intérpretes, como ocurrió en octubre de 2009 cuando un hombre y una mujer de origen hindú, estuvieron detenidos en el Área Internacional del Aeropuerto La Aurora; ambos permanecieron en un ambiente destinado para trabajo de la Policía Nacional Civil, se les restringió el acceso a representantes de la Defensoría de la Población Migrante y Desarraigada (expediente ORD.GUA.6380-2009/DE) de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se apersonaron al lugar para verificar la situación de los migrantes.

⁵⁶ “Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 131° período de sesiones, 3 al 14 de marzo de 2008.

⁵⁷ Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos, Crueles o Degradantes, ratificado por Guatemala mediante Decreto Legislativo No. 53-2007.

⁵⁸ Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La negativa de las autoridades motivó la interposición de exhibición personal a favor de los migrantes. Durante su permanencia en el lugar se verificó que no podían comunicarse por la ausencia de interprete; dormían en el suelo, se mostraban enfermos, sobre todo la mujer; los migrantes detenidos no tuvieron luz solar por más de quince días, tampoco pudieron bañarse durante ese tiempo, no se les brindó alimentación acorde a su cultura y por sus propios medios trataban de comprar comida rápida; las autoridades gubernamentales no tenían información disponible sobre la situación de salud y migratoria de las personas hindúes. En otros casos también se han identificado dificultades para establecer comunicación con migrantes procedentes de China, Bután, Nepal, Somalia, y Sri Lanka.

La detención incomunicada atenta contra el derecho a la integridad personal, pues en algunos casos, cuando la incomunicación es un acto deliberado e intencional e ilegal, puede facilitar la tortura y es *per se*, un trato inhumano. Como afirma la CIDH

“la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal”.⁵⁹

3.8.2 Migrantes guatemaltecos en Estados Unidos

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que en 2009 la población guatemalteca que reside en el exterior es de 1,590,832,⁶⁰ con una tendencia al aumento en los últimos años.

Los casos de secuestros de migrantes que se dirigen a Estados Unidos cometidos por grupos armados continuaron durante 2009, como ocurrió en el caso de dos personas migrantes (una de ellas no se identificó por temor), quienes fueron retenidos durante 21 días en poder de un grupo armado en Reynosa, Tamaulipas, México, durante los cuales fueron obligados a permanecer en una casa junto a otras 150 personas aproximadamente. Los migrantes relataron que las mujeres fueron víctimas de violación frente a todo el grupo, que recibían dos tiempos de comida y que su familia tuvo que pagar US\$4,000.00 mediante transferencias electrónicas.

Según la OIM, no obstante los riesgos y las duras políticas gubernamentales, 280,340 personas guatemaltecas tendrían intención de viajar hacia Estados Unidos entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2010.⁶¹

Durante 2009, las detenciones y deportaciones de migrantes han continuado en Estados Unidos y la atención del Estado guatemalteco ha resultado insuficiente; la Procuraduría de los Derechos Humanos ha verificado mediante entrevistas con migrantes deportados que en los consulados no responden a todos los requerimientos de socorro y es común que no reciban asistencia consular en los lugares de detención o en audiencias en la Corte.

Las personas migrantes, luego de ser detenidas en Estados Unidos, se quejan de no tener la oportunidad de recuperar sus bienes, como vehículo, ropa, menaje de casa, dinero en cuentas bancarias; también, algunas personas refieren que al ser detenidos, les recogen sus pertenencias y no les son devueltas al ser deportadas.

Según testimonios recibidos por la Defensoría de la Población Migrante y Desarraigada, un migrante guatemalteco, fue detenido por la policía local de Manazas Spring William en el Estado de Virginia, Estados Unidos, el 15 de enero de 2009; al momento de su detención le retuvieron US\$115.00, dos teléfonos móviles, una esclava de oro y ropa y ninguno de los objetos le fue devuelto.

Otro migrante guatemalteco fue detenido el 15 de diciembre de 2008 en Attobore Massachussets y en el momento de la detención le retuvieron su cédula de vecindad guatemalteca, documento que no fue devuelto. En otro caso, un migrante guatemalteco fue detenido el 6 de enero de 2009 en Providence, Rhode Island y en el momento de su detención le retuvieron su pasaporte, sin devolución posterior; las tres personas fueron deportadas hacia Guatemala.

⁵⁹ Párrafo 102 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lori Berenson, privada de libertad en un centro penal en Perú.

⁶⁰ OIM. *Cuaderno de Trabajo* No. 27, pág. 55.

⁶¹ *Ibid.*, pág. 53.

También se han recibido quejas de personas migrantes que alegan ser víctimas de tratos inhumanos y degradantes, puesto que durante su detención, han recibido maltrato verbal, uso de grilletes y otros medios de control; *“nos tratan como criminales”* han sido los términos que los migrantes han utilizado para referirse al trato que reciben.

Antes de ser deportados, son detenidos y recorren entre cuatro y seis centros penales de privación de libertad; en ocasiones los conducen a un cuarto frío y en casos extremos los aíslan en un lugar denominado “pozo” u “hoyo”, lugar que no tiene ventilación y es extremadamente oscuro y frío. Durante el retorno a Guatemala, en la mayoría de vuelos, los migrantes viajan engrillados de manos, cinturas y pies, sin que puedan usar el sanitario.

Al arribar al país, es grande el despliegue de entidades del Estado para la recepción de personas nacionales deportadas que llegan por vía aérea a la Base de la Fuerza Aérea Guatemalteca. La atención a personas deportadas está a cargo del MRE, el MSPAS, el MINTRAB, la DGN y la PNC.

No obstante el despliegue institucional, es necesario implementar acciones de seguimiento para la atención y promoción de la reinserción social de migrantes deportados; también en el momento de reingreso de niños, niñas y adolescentes al país, debe implementarse un protocolo de atención y devolución a sus familiares.

La deportación de migrantes conforma un serio problema de derechos humanos; un aspecto destacable ocurrido en 2009, es la conformación de la primera organización de guatemaltecos deportados, identificada como Comité Pro-mejoramiento de vida de los deportados de Estados Unidos originarios de Chimaltenango y Sacatepéquez; después de un año de su deportación, las personas retornadas señalan que no han recibido apoyo suficiente por parte del Estado para su reincorporación a la sociedad, además señalan que su situación económica se ha deteriorado de pobreza a extrema pobreza.

En relación al marco legal normativo, durante el 2009 se ha impulsado la propuesta de una nueva Ley de Migración. La posibilidad de innovar la normativa surge después de la construcción del proyecto único en base a tres propuestas distintas presentadas por la MENAMIG⁶², el Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar y el interventor de la DGM. La propuesta conjunta fue presentada al señor Presidente del Congreso de la República, el 21 de octubre de 2009.

El impulso de reformas ha trascendido el ámbito local, pues el cambio de gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica ha creado un contexto favorable para transformaciones en la política migratoria estadounidense.

En ese contexto representantes de la MENAMIG, así como del Consejo Nacional para las Migraciones de Guatemala, del Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (MIGUA), de la Pastoral de Movilidad Humana del Arzobispado, de la Asociación de Familiares de Morazán y familiares de migrantes de las comunidades de Cajolá y Sololá, se movilizaron frente a la embajada estadounidense en Guatemala para presentar una solicitud dirigida al señor Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos. La comunicación contiene una propuesta de inclusión del tema migratorio de los guatemaltecos en la agenda presidencial.

⁶² La MENAMIG se integra con el Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migración (STM); el Programa de Población Migrante del MSPAS; el Instituto de Investigación de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad de San Carlos de Guatemala; la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER); la Dirección de Investigaciones de la Universidad Rafael Landívar; la Procuraduría de los Derechos Humanos; el Centro de Estudios Urbanos (CEUR); la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG); Casa Alianza Guatemala; la Asociación de Salud Integral y la Asociación de Apoyo Integral.

CAPÍTULO IV

La situación social y defensa de los derechos humanos



- 4.1. Situación de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia
 - 4.1.1. Ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos
 - 4.1.2. Periodistas
 - 4.1.3. Operadores de Justicia
- 4.2. La situación de los derechos humanos a través de su protección internacional
- 4.3. La justicia transicional y el derecho a la verdad

CAPÍTULO IV

La situación social y defensa de los derechos humanos

Durante 2009 la sociedad guatemalteca enfrentó diversidad de conflictos prácticamente en todas las zonas del país, generados por situaciones que no han recibido el tratamiento adecuado y en las que ha habido una intervención insuficiente de las autoridades responsables.

Ante el alto índice de inseguridad ciudadana, el mantenimiento en constante peligro de la vida, la integridad física y la propiedad de miles de personas, no se observa una respuesta adecuada de las entidades encargadas de la materia.

La pobreza y la exclusión social de amplios sectores de la población constituyen el marco estructural en el que se incuban otras actividades y procesos que aumentan la conflictividad, como es la degradación del medio ambiente, la minería de cielo abierto, la escasez y contaminación del agua, la falta de acceso y conflictividad por la tierra, la construcción de megaproyectos sin contar con el consenso y apoyo de las poblaciones indígenas afectadas, el aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional en el Corredor Seco del país, la amenaza de nuevas epidemias y de desastres naturales.

Tabla 76
Intervenciones de mediación

DERECHO VULNERADO	TOTALES	%
Derecho al trabajo	48	27.0
Desarrollo económico	20	11.3
Orden y Seguridad	15	8.4
Vivienda	15	8.4
De acceso a la tierra	12	6.7
Libre locomoción	12	6.7
A la educación	11	6.2
Ambiente sano	7	4.0
Salud	7	4.0
Cívico-políticos	4	2.3
Consumidor y Usuario	4	2.3
Al resarcimiento por parte del estado	3	1.8
Libre organización	3	1.8
Seguridad social	3	1.8
Del adulto mayor	2	1.1
Servicios básicos	2	1.1
De dignidad e integridad de la mujer	2	1.1
Integridad física	1	0.5
Petición	1	0.5
De Manifestación y expresión	1	0.5
De integración familiar	1	0.5
Acceso a la información	1	0.5
Auditoria social	1	0.5
No discriminación	1	0.5
Propiedad privada	1	0.5
TOTAL	178	100

Fuente: elaboración propia, PDH, 2009.

En las expresiones de la conflictividad social se incluyeron ataques a defensores de derechos humanos; 129 casos y en 21 con resultado de muerte violenta.

El sector sindical sigue siendo el más golpeado y persisten los ataques en contra de activistas que promueven la sostenibilidad ambiental y que se oponen a la ejecución de proyectos extractivos. También contra de organizaciones campesinas relacionadas a la problemática de la tierra; en contra de organizaciones que promueven los derechos de

la mujer, y quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas. La Procuraduría de los Derechos Humanos también ha sido afectada por 13 ataques.

4.1 Situación de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia

En el 2009, la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, inclusive periodistas, se caracterizó por ataques, en un cerco ascendente de aguda violencia e inseguridad. Los esfuerzos gubernamentales resultaron insuficientes para garantizar la protección.

Las agresiones traslucen una situación que muestra deterioro; la investigación criminal de los ataques a cargo del Ministerio Público no ha dado resultados alentadores y la impunidad, al encajarse como una constante, no desmotiva la comisión de estos hechos. Esta situación se mantiene inmutable desde años anteriores; tal como fue constatado e informado por el Procurador de los Derechos Humanos en su informe de situación 2008.¹

4.1.1 Ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos

Se han identificado 24 tipos de acciones mediante las cuales se agreden a defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en 13 temáticas en todo el país. Las acciones identificadas se concentran en amenazas de muerte en persona, mediante mensajes de texto por teléfonos móviles, con papeles escritos, por llamadas telefónicas y correos electrónicos, intimidaciones a través de llamadas telefónicas o control evidente.

También se han identificado amenazas o presiones por parte de funcionarios públicos; así como mediante acciones legales que en algunos casos pueden convertirse en una criminalización de la defensa de los derechos humanos. Se han identificado otras acciones como: desalojos violentos, difamación, agresiones físicas, agresiones verbales, robos, extorsiones, allanamientos de sede o de vivienda y, en los casos más graves, ataques con arma de fuego y asesinatos; algunas de las acciones son dirigidas en contra de familiares de la defensora o defensor. Se iniciaron expedientes de investigación en 81 de estos casos.²

Temática de trabajo de las organizaciones agredidas. Según registros de la Procuraduría e información de fuentes externas, en el período se han registrado 138 casos de ataques en contra de defensores y defensoras, los hechos más graves se refieren a 25 casos cuyos hechos han ocasionado muerte violenta.

El sector sindical sigue siendo el más golpeado, registrando 80 acciones en 41 casos ocurridos en el período, lo que representa un 31% del total de acciones y un 29% del total de casos registrados en contra de organizaciones que trabajan en 13 temáticas. En 8 de estos casos los ataques ocasionaron daños irreparables, causando la muerte de 8 personas vinculadas al trabajo sindical, 4 de esos ataques se registraron en Quetzaltenango en contra de integrantes del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque.

Además, es son persistentes de ataques en contra de los defensores que promueven derechos vinculados con el ambiente y que se oponen a la ejecución de proyectos extractivos. También en contra de organizaciones campesinas que buscan resolver problemáticas de la tenencia de la tierra y la productividad agraria; en contra de organizaciones que promueven los derechos de la mujer, y de quienes defienden a los pueblos indígenas.

La Procuraduría también ha sido afectada por 13 ataques,³ estos han sucedido en un año muy significativo para el avance de las investigaciones de casos que se investigan en esta institución, y que buscan esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado interno; como el caso de la desaparición forzada en 1984, del sindicalista Fernando García y de la desaparición forzada en 1981, de miembros de la comunidad El Jute de Chiquimula.

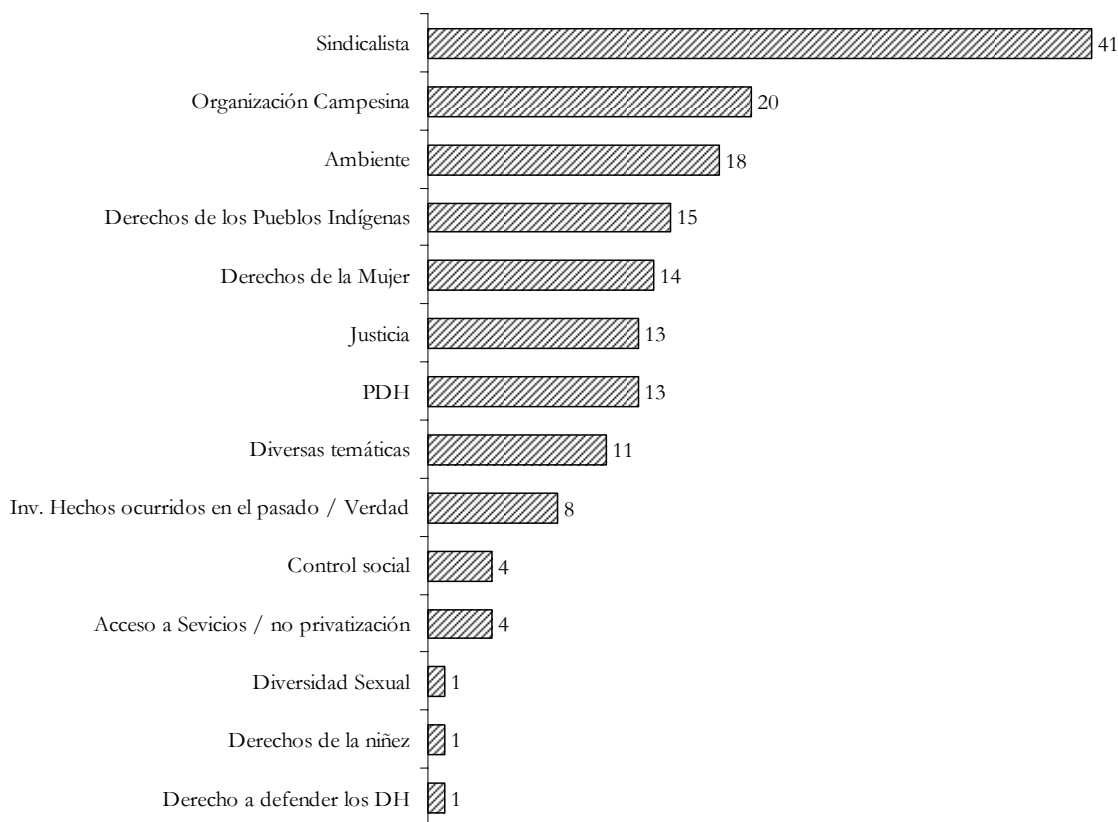
¹ Procurador de los Derechos Humanos. *Informe de situación de los derechos humanos 2008*, Guatemala, pág. 232.

² Número de casos en base al registro del sistema informático de recepción de denuncias que funciona en la sede central; se incluyen 22 expedientes iniciados por ataques en contra de periodistas y 5 por ataques contra operadores de justicia. Datos hasta el 31 de octubre de 2009.

³ Se registraron siete amenazas de diverso tipo, un allanamiento de vivienda, agresiones físicas y verbales, intimidaciones mediante control evidente; también de acciones en contra de familiares, como el ataque armado en contra de familiares de una trabajadora de la institución que causó la muerte de una persona y heridas graves a otra. Detalle de otros hechos se pueden consultar en el apartado de casos ilustrativos.

De las trece temáticas abordadas por las organizaciones interesadas, algunas con más de una temática de trabajo, por ejemplo en casos de defensores que trabajan en el ámbito de los derechos ambientales y al mismo tiempo derechos de los pueblos indígenas; como el Consejo de Desarrollo Las Nubes y el COCODE La Unión; o temas como “derechos de la mujer” y “justicia” como la Fundación Sobrevivientes; o “derechos de la mujer”, “justicia” y “pueblos indígenas”, como las Defensorías de la Mujer Indígena.

Gráfica 33
Ataques en contra de Defensores de Derecho Humanos 2009
Temáticas* de trabajo de las organizaciones atacadas



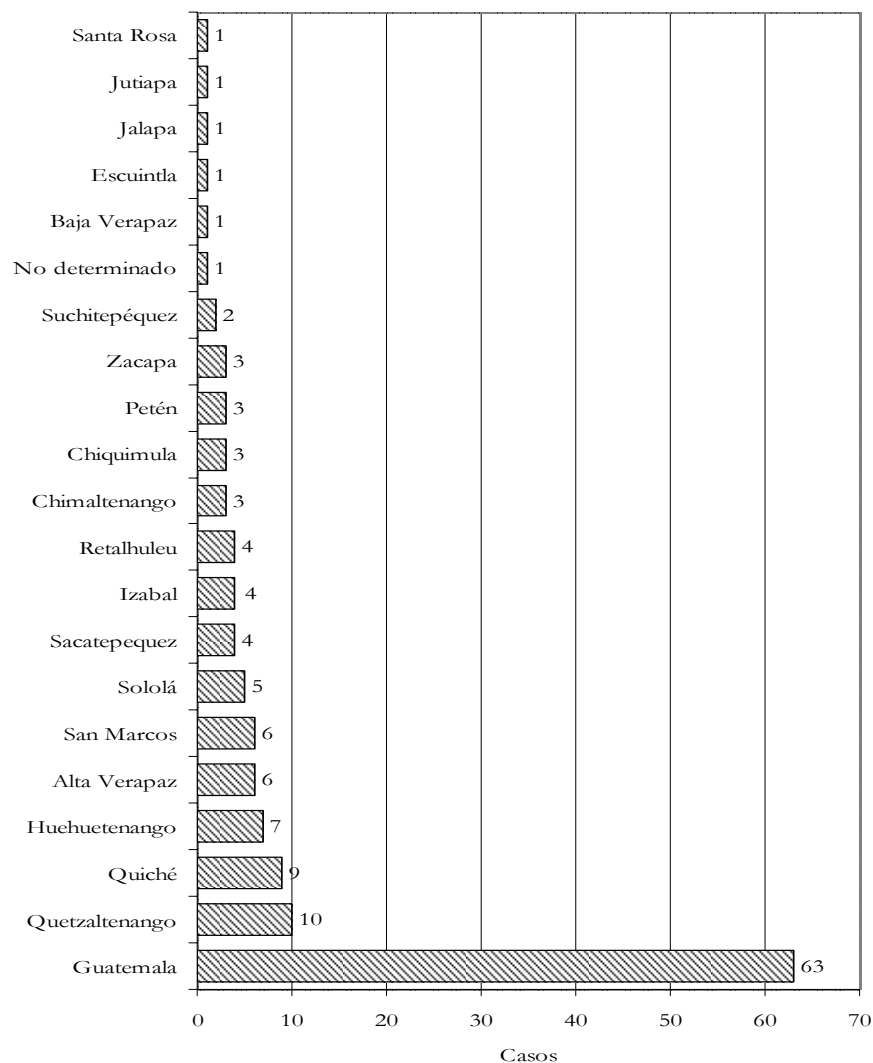
Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos y organizaciones locales e internacionales.

* Algunas organizaciones abordan más de una temática de trabajo.

Casos por departamento. De los 138 casos de ataques en contra de defensores y defensoras, en 117 se identificaron a 167 personas afectadas directamente, debiendo señalar que se consideraron personas afectadas también a los familiares. En los restantes 22 casos, las acciones fueron dirigidas de forma general en contra de todos los miembros de la organización afectada; éstos últimos se caracterizan por acciones de allanamientos, llamadas telefónicas y robos en sedes de organizaciones, cuyas denuncias fueron presentadas en nombre de alguna organización o bien solicitaron mantener el nombre en reserva por lo que no se individualizan con nombre propio.

Los ataques se han ejecutado en 20 de los 22 departamentos del país. El departamento de Guatemala mantiene el mayor número de casos, con el 46% del total. Quetzaltenango tiene más casos, de los diez registrados en ese lugar, ocho están vinculados con la problemática generada por la inconformidad de los vendedores de las calles y avenidas de Coatepeque, organizados en el Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque, quienes se oponen a ser trasladados hacia el mercado municipal.

Gráfica 34
Casos de ataques en contra de Defensores de Derechos
Humanos en Guatemala, Año 2009
Casos por Departamento

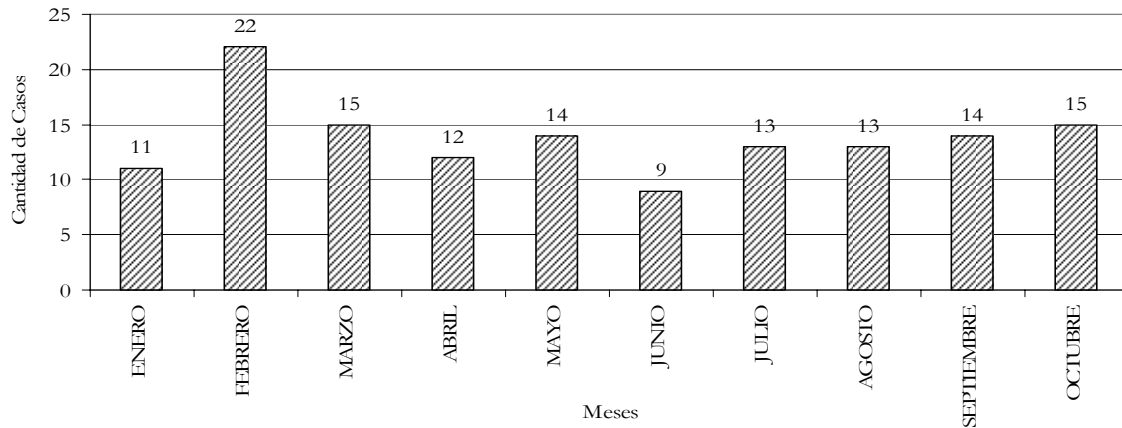


Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos y organizaciones locales e internacionales.
 *Un solo caso puede contener varias acciones.

Casos por mes. El mes que más casos de ataques en contra de defensores y defensoras registró fue febrero; sin embargo, los ataques fueron constantes durante todo el año, manteniéndose un promedio de casi 14 casos de agresiones por mes.

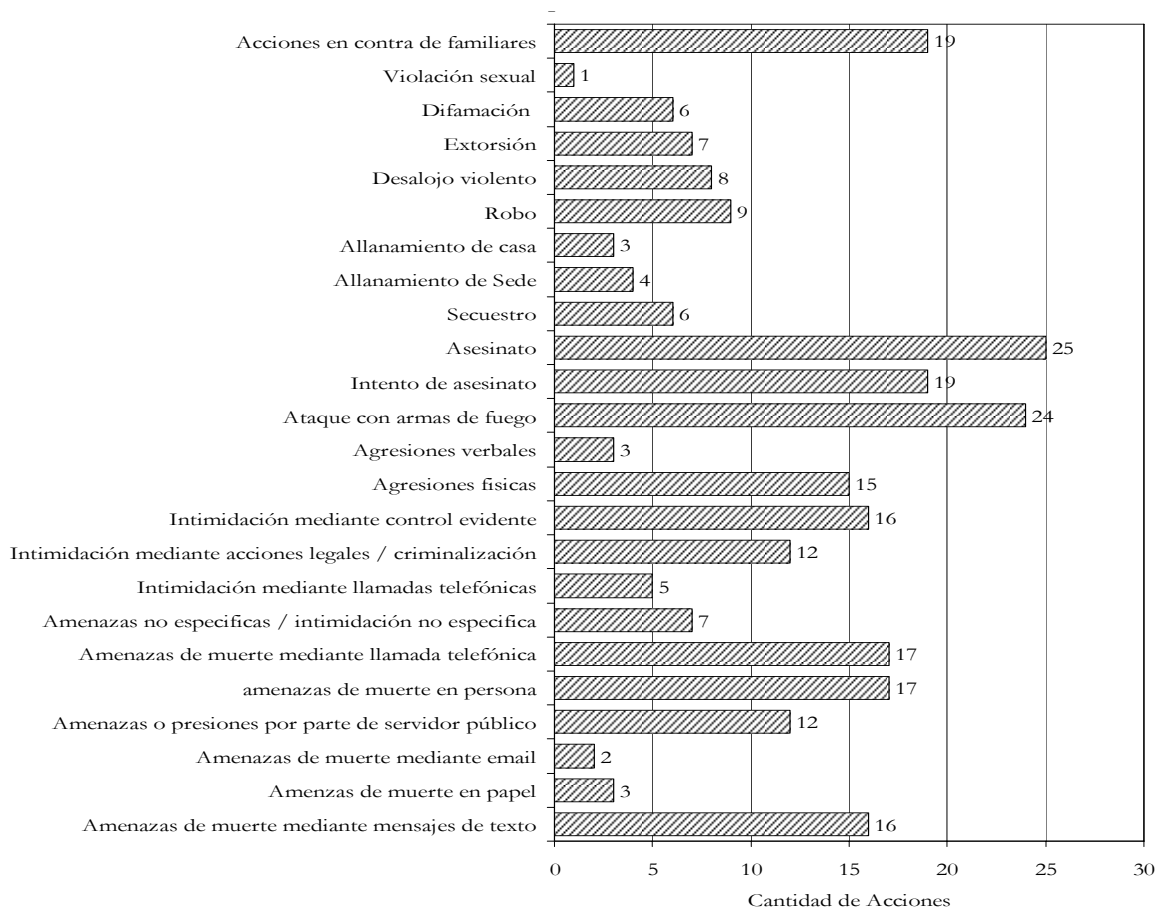
Octubre es el segundo mes en donde se registran más casos, siendo el más violento puesto que del 12 al 31 de octubre, se registraron 8 de los 25 casos de muertes violentas ocurridas en el período.

Gráfica 35
Año 2009
Casos por mes



Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos y organizaciones locales e internacionales.

Gráfica 36
Características de los ataques contra defensores de los derechos humanos
Por tipo de acción, 2009



Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos y organizaciones locales e internacionales.

Tipos de acción que caracterizan los ataques. Se registraron 256 acciones de diverso tipo. El asesinato es la forma más frecuente (25 casos), que sumado a los intentos de asesinato y ataques con armas de fuego, revelan una grave situación que aunada a los niveles sostenidos de impunidad, coloca a los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala en una grave esfera de riesgo.

En 20 casos los ataques se dieron en contra de familiares de defensores y defensoras; otra de las acciones constantes son las amenazas, que sumaron 74 de diverso tipo, inclusive, 12 amenazas o intimidaciones por servidores públicos.

Más de algún caso se asumieron varios tipos de acción; un caso de asesinato pudo haber incluido dos o más acciones, por ejemplo “asesinato” y “ataque con arma de fuego”; de forma similar, un “allanamiento de sede”, por lo general, también incluyó como consecuencia el “robo”.⁴

Casos ilustrativos

Fausto Otzín Poyón: (EIO.GUA 6700-09/CHIMAL) El señor Otzín Poyón, abogado y notario, fue encontrado muerto el 17 de octubre de 2009, en jurisdicción de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Era miembro de la Asociación de Abogados Indígenas y tenía a su cargo varios casos en defensa de territorios del pueblo maya. En la Procuraduría de Derechos Humanos se inició expediente el 23 de octubre de 2009.

Norma Cruz: Expediente PREVENCIÓN.ORD.GUA.3474-2009/US. La defensora Norma Cruz es directora de la Fundación Sobrevivientes, brindando asesoría y acompañamiento a familias de mujeres y mujeres víctimas de la violencia. Ella ha sido intimidada por medio de ataques dirigidos contra miembros de su familia.

El 19 de octubre de ese año, un miembro de la familia Cruz⁵ fue secuestrado por tres sujetos desconocidos que se conducían en un vehículo Toyota RAV4 color negro; fue obligado a subirse al vehículo, una vez dentro, uno de los sujetos le amenazó de muerte con un arma de fuego; luego lo dejaron a una cuadra de su vivienda. El 23 de octubre de 2008, el mismo familiar recibió una llamada telefónica en donde una persona desconocida le amenazó nuevamente. En horas de la tarde de ese mismo día la oficina de Sobrevivientes fue objeto de control evidente por parte de personas desde un vehículo.

La señora Cruz ha recibido llamadas telefónicas amenazantes y entre octubre a noviembre de 2008, integrantes de su familia fueron objeto de secuestro, entre ellos su yerno quien también es parte de la Fundación Sobrevivientes, a quien personas desconocidas lo obligaron a abordar un automóvil, lo golpearon y amedrentado con armas de fuego y después fue liberado en un sector alejado, días después recibió en su teléfono personal una llamada de amenaza de muerte; asimismo la madre de la señora Cruz fue secuestrada y golpeada cruelmente en el rostro, a tal grado de perder la memoria y seguidamente fue dejada en libertad.

En el 2009 continuaron las amenazas de muerte en contra de la vida e integridad de sus hijos. El 30 de mayo se conoció que la señora Norma Cruz y el personal de la Fundación Sobrevivientes están siendo objeto de intimidaciones y amenazas por parte de personas desconocidas.

SEDEM y UDEFEGUA: Seguridad y Democracia (SEDEM) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), ambas organizaciones forman parte de la Convergencia por los Derechos Humanos.

El 30 de abril de 2009, aproximadamente a las 8:30 horas, la señora Claudia Samayoa recibió una llamada de la señora Iduvina Hernández, en la cual le informaba que la señora Silvia Ruiz, subdirectora administrativa de SEDEM, había recibido a su teléfono móvil, varios mensajes de texto en donde la amenazaban de muerte a ella y a su familia, estos provenían del número 40765749.⁶ En principio las víctimas descartaron la posibilidad un ataque por su actividad en defensa de los derechos humanos, sin embargo el 2 de mayo, a las 9:46 horas, la señora Brenda Amperez, coordinadora de Programa de Incidencia y el señor Arturo Chu, subdirector ejecutivo, ambos de SEDEM, recibieron un mensaje de texto desde el número móvil de la señora Silvia Ruiz donde se les advertía que dejaran de meterse con los archivos desclasificados del Ejército de Guatemala o de lo contrario los matarían.

⁴ Para el cálculo de acciones no se consideraron números específicos para identificar cada caso: una acción en cada caso puede contener varias acciones similares, por ejemplo, si el defensor o defensora recibió cinco amenazas de muerte mediante mensajes de texto, se consideró en el descriptor “amenaza de muerte mediante mensajes de texto” como una sola acción.

⁵ Se omite el nombre por razones de seguridad

⁶ El número de teléfono perteneció a una persona conocida por la señora Silvia Ruiz.

Posteriormente, la señora Iduvina Hernández, así como la señora Aidé Hernández, asistente administrativa y el señor Benjamín Santiago, coordinador de la oficina en Quetzaltenango, todos del SEDEM, recibieron amenazas en sus teléfonos móviles, a través de mensajes de texto. La señora Samayoa denunció los hechos ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. A pesar de lo anterior, continuaron recibiendo mensajes de texto. Se cree que el teléfono de la señora Ruiz fue clonado. La señora Iduvina Hernández consideró que las amenazas pueden estar relacionadas con el trabajo que realizan como defensores de derechos humanos y a la incidencia que han tenido para que sean entregados los archivos desclasificados del Ejército de Guatemala.

El 6 de mayo de 2009, la Procuraduría de los Derechos Humanos, solicitó medidas de seguridad para las sedes de las oficinas de la SEDEM. El 8 de mayo de 2009, el Procurador envió una comunicación en donde pone los hechos en conocimiento de la Unidad de Defensores y Defensoras de DDHH de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y a la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial para la los Defensores de DDHH.

Erwin Estuardo Orrego Borrayo – Wilson Odair Morales Córdón: El señor Erwin Estuardo Orrego Borrayo, pertenece a la organización denominada “Bloque Popular Social-Guatemala”, la cual dentro de sus diversas actividades, al igual que el licenciado Armando Donald Sánchez Betancourt (asesinado en diciembre de 2008), prestaba apoyo a los comerciantes de calles, avenidas, mercados y terminal del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. Los vendedores se oponen a las disposiciones adoptadas por las autoridades municipales, de trasladarlos a un nuevo mercado ubicado en el centro del referido municipio.⁷

El 28 de febrero de 2008, el señor Orrego Borrayo participó en una serie de actividades organizativas en Mazatenango, Suchitépquez, al finalizar dichas actividades, junto a otras tres personas⁸, salieron del referido departamento en dirección a Guatemala, a bordo de un vehículo particular; después de pasar por el municipio de Siquinalá, dos personas desconocidas a bordo de una motocicleta efectuaron disparos en contra del señor Orrego Borrayo y sus acompañantes, afortunadamente nadie resultó herido.

El 23 de diciembre de 2008, a las 8:00 horas, el señor Orrego Borrayo, recibió una llamada a su teléfono móvil de un número privado, en la cual un hombre le indicó “*voz sos el próximo*”, en un principio Orrego Borrayo no dio importancia a dicha llamada, posteriormente consideró que podría tratarse de una amenaza de muerte, ya que le fue informado que en esa misma fecha había sido asesinado el licenciado Armando Donald Sánchez Betancourt⁹.

El señor Orrego Borrayo decidió salir del municipio de Coatepeque para resguardar su vida. La situación fue hecha del conocimiento de la Unidad Funcional de Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de febrero de 2008, así mismo en base a la denuncia se aperturó el expediente PREV.ORD.GUA.6922-2008/COAT, dentro del cual se solicitaron medidas de seguridad en su favor.

El 18 de febrero de 2009, el señor Erwin Estuardo denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos que era víctima de intimidaciones y amenazas de muerte por parte de personas desconocidas; ese día recibió en su teléfono móvil, un mensaje de texto diciendo “ya tenemos tu número”, proveniente del móvil número 51374611. El sábado 14 de febrero recibió una llamada diciéndole “voz serás el próximo”, horas después se enteró de que un día antes fue asesinado su compañero, Wilson Odair Morales Córdón, integrante de la Asociación de Campesinos y Campesinas Unidos con la Sociedad (ACUS). El viernes 14 de febrero, siendo las 20:30 horas, el señor Morales Córdón pereció en misteriosas circunstancias al ser arrollado por un tráiler con todo y la motocicleta que manejaba.

La descripción de los hechos denunciados consta en el expediente PREV.ORD.GUA.999-2009/US. La denuncia fue remitida a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes; asimismo, se solicitaron nuevamente medidas de seguridad personal y perimetral a favor del señor Orrego Borrayo. El 12 de marzo de 2009 el Procurador de los Derechos Humanos solicitó a la CIDH se otorgaran medidas cautelares a favor del señor Erwin Estuardo Orrego Borrayo.

⁷ Periódico regional *El Quetzalteco* en http://www.elquetzalteco.com.gt/05.08.2008/?q=locales/tensi_n_en_coatepeque.

⁸ El señor Erwin Estuardo Orrego Borrayo, no brindó el nombre de sus acompañantes por motivos de seguridad.

⁹ El 23 de diciembre de 2008, el señor Armando Donald Sánchez Betancourt, al descender de un camión placas C-208BKN, en la 4a. avenida, entre 5a. y 6a. calles de la zona 2, barrio El Rosario, municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, fue interceptado por sujetos desconocidos quienes le dispararon con arma de fuego, causándole la muerte.

Mario Cecilio Muralles Muralles y José Rubén Escalante Bolaños: El señor José Rubén Escalante Bolaños es presidente del Frente Nacional por la Dignidad (FND), y el señor Mario Cecilio Muralles Muralles fungía como vicepresidente de la referida organización. El FND realiza auditorías sociales para velar por la transparencia en la ejecución presupuestaria de los entes públicos, así como en los procesos de elección de funcionarios en base a la Ley de Comisiones de Postulación.

Durante 2009, el Frente promovió auditorías sociales en la municipalidad de Chinautla, y en la municipalidad de San Pedro Ayampuc, ambos del departamento de Guatemala; según el señor Escalante Bolaños, encontraron indicios de un mal manejo presupuestario en la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, lo que motivó una denuncia penal, esta situación habría ocasionado fricciones entre las autoridades municipales y su organización.

El 24 de abril de 2009, el señor Mario Muralles Muralles promovió querrela en contra de varias personas que trabajan en la Municipalidad de San Pedro Ayampuc; indicó que el 23 de abril de 2009, dichas personas se presentaron a su vivienda a bordo de un vehículo color beige; según el querellante, ellos llegaron con el propósito de agredirlo física y psicológicamente, y posteriormente habrían fotografiado la vivienda y sus alrededores.

El 11 de mayo de 2009, Muralles Muralles acudió al Ministerio Público para ratificar la querrela. El 12 de mayo de 2009, sujetos desconocidos dispararon en contra de su vivienda, un vecino contiguo resultó con heridas de bala, funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos constataron los hechos y recibieron información certera de que en el lugar se realizaron como mínimo 19 disparos. Ese mismo día, el señor Muralles Muralles presentó denuncia ante el Ministerio Público. Debido a la gravedad de los hechos, ese mismo día, el señor Carlos Enrique Mejía Mejía, Auxiliar Fiscal del Ministerio Público, solicitó a la Comisaría 12 de la PNC que prestara protección al señor Muralles Muralles y al señor Escalante Bolaños.

El 28 de mayo de 2009, la Procuraduría de los Derechos Humanos promovió de nuevo la adopción de medidas de protección mediante una solicitud dirigida a la Comisaría General de la PNC. El 10 de junio de 2009, la PNC comunicó a la Procuraduría que las medidas de protección a favor de los señores Muralles Muralles y Escalante Bolaños, estarían a cargo de la Comisaría 12 desde donde se realizarían patrullajes constantes.

El 31 de octubre de 2009 el señor Muralles Muralles y su esposa fueron atacados a tiros frente a su vivienda, cuando regresaban de realizar compras en el centro comercial Meta Terminal, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

El hecho ocurrió a las 12:00 del mediodía, cuando dos sujetos que se conducían en un automóvil Toyota Yaris Azul, les sorprendieron mientras descendían de su vehículo; y les atacaron con armas de fuego, lamentablemente, en el lugar falleció el señor Mario Cecilio Muralles Muralles¹⁰, la señora de Muralles resultó ilesa, mientras que la empleada en la casa del señor Muralles fue herida.

El 17 de noviembre de 2009 a las cero 0:30 horas, el señor Escalante Bolaños fue alertado por su esposa, debido a que un sujeto intentaba ingresar en su casa de habitación; solicitó auxilio a la PNC, en el ínterin, el sujeto se dio a la fuga.

La Procuraduría de los Derechos Humanos ha remitido la información disponible al Ministerio Público, paralelamente el 24 de noviembre de 2009, se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una solicitud de medidas de protección a favor del señor Escalante Bolaños y de la señora de Muralles.

SITRAPETEN: En febrero de 2007 los trabajadores de la empresa privada de agua pura Distribuidora Petén iniciaron las acciones legales para conformar el Sindicato Nacional del Sector de las Bebidas contando con 108 afiliados; después de haber presentado su solicitud al Ministerio de Trabajo y Previsión Social los trabajadores enfrentaron acciones laborales por parte del empleador, despidos injustificados e incluso intimidaciones mediante amenazas de muerte que hicieron desistir de su tentativa a 40 trabajadores¹¹. En marzo de 2008 el MTPS resolvió desfavorablemente a los trabajadores.

Después de la resolución, los trabajadores cambiaron la denominación a Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distribuidora de Petén (SITRAPETEN), esta vez con 60 afiliados. Las acciones del empleador se reactivaron, desmotivando esta vez a 41 afiliados, lo que significó que el sindicato en formación se quedara con 19 afiliados.

¹⁰ El certificado de defunción signado por el Dr. Danilo Arita, señala que la muerte del señor Muralles Muralles fue ocasionada por heridas penetrantes y perforantes en cráneo, tórax y abdomen.

¹¹ Comunicado público del Sindicato de Trabajadores de Distribuidora Petén, del 16 de diciembre de 2009

El Ministerio de Trabajo resolvió desfavorablemente en virtud de que el sindicato no tenía el número mínimo de trabajadores afiliados establecido en la ley. El 3 de mayo de 2008 el empleador anunció a los trabajadores el cierre de la empresa y les solicitó la renuncia; los trabajadores afiliados al sindicato en formación no accedieron a la pretensión del empleador. Los empleados fueron reprimidos por la policía privada de la empresa. Después de que la empresa había cerrado operaciones, el Ministerio de Trabajo autorizó la inscripción del SITRAPETEN; quienes iniciaron su reinstalación por vía judicial.

En junio de 2008 el señor Freddy Morales Villagrán, miembro del consejo consultivo del sindicato fue asesinado por hombres armados. El hecho no fue esclarecido. En febrero de 2009 un juez de trabajo resolvió con lugar la reinstalación solicitada por el sindicato declarando una sustitución patronal, la empresa se opuso a la resolución y ganó la apelación por lo que la reinstalación fue declarada sin lugar.

Según denuncia presentada en la Procuraduría de los Derechos Humanos identificada como EXP. PREVENCIÓN ORD. GUA. 5082-2009/US, el representante del SITRAPETEN denunció que el 6 de agosto del año en curso recibió presiones por parte de autoridades del Ministerio de Trabajo para que desalojaran la plaza central quienes les habrían advertido que les desalojarían por la fuerza.

El 10 y 11 de diciembre de 2009 los trabajadores fueron desalojados de la Plaza de la Constitución de forma violenta y con uso de gases por la PNC, según los trabajadores no existió una orden de autoridad competente para ejecutar el desalojo.

Víctor Gálvez: El 24 de Octubre de 2009, Víctor Gálvez Pérez murió asesinado con armas de fuego, en Malacatán, San Marcos. Era dirigente del Frente de Resistencia de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos, trabajaba con organizaciones comunitarias en coordinación con la diócesis de la iglesia católica en San Marcos, para atender la problemática generada por graves abusos que las organizaciones atribuyen a la empresa Distribuidora Eléctrica de Occidente de Unión Fenosa (DEOCSA).¹² El señor Gálvez había recibido amenazas previas.¹³

Defensores que realizan su labor desde la Procuraduría de los Derechos Humanos

Vinicio Hernández Fabián: El señor Hernández Fabián es el titular de la Defensoría de los Derechos del Trabajador de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ha sido víctima de intimidaciones derivadas de su labor en defensa y promoción de los derechos humanos desde 2007 cuando su vivienda fuera allanada por personas desconocidas y sustraída documentación relacionada con su actividad laboral anterior, como directorio de libros y publicaciones de la Organización Internacional del Trabajo, fotografías personales y de acontecimientos sociales.

El 10 de febrero de 2008, recibió amenaza de muerte de parte de individuo no identificado que llamó a su teléfono celular. En esos días el señor Hernández Fabián había estado trabajando alrededor de casos de sindicalistas asesinados en Guatemala.

El 24 de julio de 2008, en el parqueo de las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al vehículo le forzaron la cerradura, y el vidrio frontal había sido golpeado desde dentro del vehículo, además desconocidos habían depositado tierra y barro en los asientos delanteros. El día siguiente, nuevamente fue forzada la puerta del lado derecho de su vehículo, pero ningún objeto fue sustraído.

De nuevo, en el año 2009, el abogado Hernández Fabián fue víctima de constantes actos de hostigamiento. El último hecho en su contra ocurrió el 31 de octubre de 2009, cuando su vehículo fue forzado nuevamente y de su interior sustrajeron su teléfono celular y documentos de identificación personal, inclusive su carné que lo identifica como defensor de los derechos de los trabajadores en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Contexto de algunos ataques en contra de personas vinculadas a la Procuraduría de los Derechos Humanos: En julio de 2005, la institución del Procurador de los Derechos Humanos localizó un archivo físico de la extinta Policía Nacional;¹⁴ dicho archivo está compuesto por miles de documentos que datan desde 1902. Para mediados del 2009, los documentos del Archivo Histórico habían arrojado hallazgos que en el transcurso del año

¹² Comunicado de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos. 30 de octubre de 2009.

¹³ Denuncia ante el Ministerio Público MP166-2009-2257

¹⁴ Actualmente el Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional está bajo la administración del Ministerio de Cultura y Deportes por medio del Archivo General de Centroamérica.

permitieron avanzar en las investigaciones criminales de hechos ocurridos en el pasado y que implican graves violaciones de derechos humanos.

El 24 de marzo de 2009, la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo público el informe especial *El Derecho a Saber*, resultado de la primera investigación en derechos humanos realizada en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, autorizada por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil (Providencia de Urgencia 58-2005).

El Procurador de los Derechos Humanos tiene a su cargo la investigación de varios casos de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado, incluyendo casos de investigación criminal por mandato de Averiguación Especial de la Corte Suprema de Justicia, actuación que realiza a través de la Unidad de Averiguaciones Especiales.

Recientemente, las acciones impulsadas desde la Procuraduría, en un hecho sin precedentes permitieron avanzar en la investigación de la desaparición de Fernando García, ocurrida en 1984; los avances en las investigaciones motivaron que el órgano jurisdiccional girara órdenes de aprehensión y como consecuencia de éstas, dos personas vinculadas a la extinta Policía Nacional se encuentran en prisión preventiva.

Otro de los casos que obtuvo resultados en el 2009 es el conocido como El Jute¹⁵, por los hechos acaecidos el 19 de octubre de 1981, cuando efectivos del Ejército de Guatemala y comisionados militares llegaron a la aldea El Jute, en Chiquimula, y sustrajeron violentamente de sus residencias a los señores Jacobo Crisóstomo Chegüen, Miguel Angel Chegüen Crisóstomo, Raúl Chegüen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera y Santiago Gallardo Rivera. Por los hechos, fueron condenados en primera instancia, a 53 años de prisión, el coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa y los comisionados Gabriel Álvarez Ramos, José Domingo Ríos y Salomón Maldonado.

Roberto Romero: El viernes 13 de marzo de 2009, a las 19:00 horas aproximadamente el abogado Luis Roberto Romero Rivera, jefe de la Unidad de Averiguaciones Especiales del Procurador de los Derechos Humanos, fue atacado a golpes por dos hombres jóvenes; en el momento en que él aparcaba su vehículo frente a su casa de habitación, ubicada en la zona 4 de Mixco, Guatemala. Los sujetos aprovecharon que se encontraba sin seguridad,¹⁶ y sin mediar palabra, se dirigieron le descargaron puntapiés y puñetazos, luego lo lanzaron al suelo, ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo; se retiraron sin robarle ningún objeto personal u objetos del vehículo.

El 27 de octubre de 2009, integrantes de la Unidad de Averiguaciones Especiales de la institución de Procurador de los Derechos Humanos, entre ellos el abogado Roberto Romero, director del caso en el cual la Procuraduría actúa como ente investigador, y conjuntamente con el Ministerio Público como ente acusador, fueron intimidados por hombres fuertemente armados cuando se dirigían en un vehículo de la Procuraduría hacia el tribunal jurisdiccional de Chiquimula, en donde se celebraría la audiencia de debate dentro del proceso penal seguido en contra de los acusados de la desaparición de las personas de la comunidad El Jute.

El hecho ocurrió en el kilómetro 120, en Teculután, siendo aproximadamente las 19:00 horas, cuando el abogado Roberto Romero y sus acompañantes fueron objeto de persecución e intimidación por personas desconocidas que portaban armas de fuego de grueso calibre, vestían de particular y usaban botas militares.

El personal de la referida Unidad, en repetidas oportunidades fue perseguido por personas desconocidas a bordo de vehículos tipo pick up, durante los recorridos para la asistencia a las audiencias fijadas dentro del proceso penal. El personal de la institución continuó su trabajo alrededor del caso en Chiquimula, con el apoyo en seguridad de un equipo designado por el Ministerio de Gobernación.

Salvador Loarca: El 2 de abril de 2009 el abogado Salvador Loarca Marroquín, Auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá, recibió un mensaje en su teléfono celular, amenazándolo con ocasionarle un atentado. Unos días antes, el 27 de marzo de 2009, representantes de los Comités Comunitarios de Santiago Atitlán, en una reunión celebrada en la sede de la Auxiliatura de la Procuraduría, exigieron

¹⁵ El 19 de octubre de 1981 efectivos del Ejército de Guatemala y comisionados militares llegaron a la aldea El Jute, en el Departamento de Chiquimula, y sustrajeron violentamente de sus residencias a los señores Jacobo Crisóstomo Chegüen, Miguel Angel Chegüen Crisóstomo, Raúl Chegüen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera y Santiago Gallardo Rivera, a quienes se acusaba de pertenecer a la guerrilla.

¹⁶ El señor Roberto Romero Rivera es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 23 de septiembre de 2002.

eficiencia en las actuaciones de las autoridades vinculadas al sistema de justicia; la Auxiliatura a cargo del señor Loarca Marroquín se ha ocupado de supervisar el quehacer de esos órganos estatales.

Las autoridades locales solicitaron la presencia de la Procuraduría para que verificaran las diligencias de aprehensión en contra de diez personas presuntamente vinculadas a grupos que actúan fuera del margen de la ley; al momento de los hechos, esas personas estaban en prisión preventiva.

Raúl Santiago Monzón Fuentes: El 9 de marzo de 2009, entre las 9:16 y las 9:17 horas aproximadamente, el Director Nacional de Procuración y Auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en el departamento de Guatemala, Raúl Santiago Monzón Fuentes, recibió tres mensajes de texto en su teléfono celular, en los cuales le profririeron insultos y amenazas de muerte. En uno de los mensajes le indicaron que lo iban a eliminar por las acciones que ha realizado el Procurador y por ser Auxiliar del departamento de Guatemala.

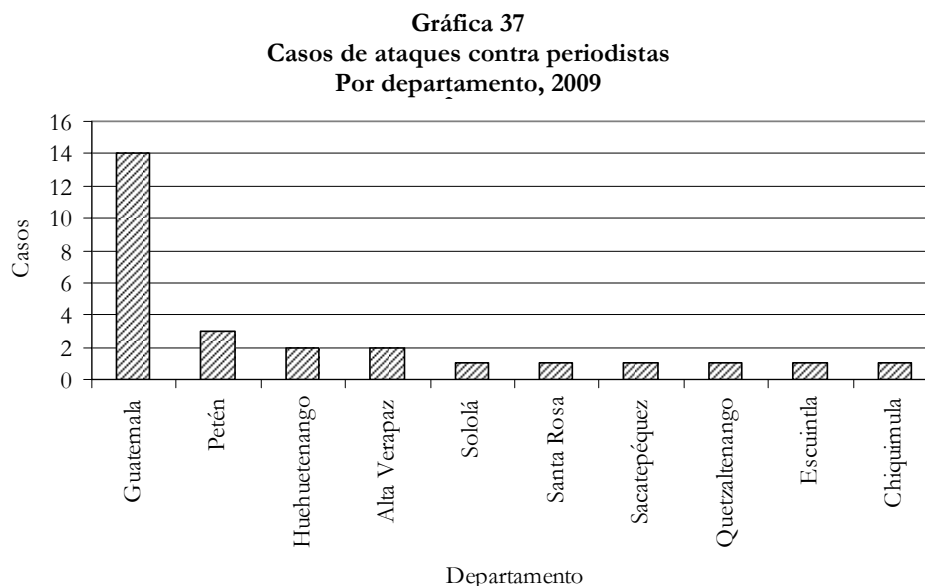
Adicionalmente, ocurrieron otros hechos vinculados a la investigación de casos ocurridos en el pasado, estos fueron actos de vigilancia, sucedidos el 13 y 17 de marzo, en contra de personas que laboraban en el Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, cuando este aún permanecía bajo la administración de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El 2 de octubre de 2009 fue allanada la residencia de la señora María Eugenia Morales Aceña de Sierra, Procuradora Adjunta I; los sujetos provocaron daños en el inmueble y robaron varios objetos.

4.1.2 Periodistas

La Procuraduría inició expedientes de investigación en 22 casos de ataques en contra de periodistas; considerando otras fuentes, en el período se han registrado 26 casos de ataques, que han afectado a 41 periodistas.¹⁷

Ataques contra periodistas, por departamento. Son 10 los departamentos en donde la actividad periodística se ha visto afectada por hostigamientos contra la labor periodística; el departamento de Guatemala concentra el 51% de ellos, seguido con mucha diferencia por Petén, Alta Verapaz y Huehuetenango, zonas en donde la particularidad de los casos muestra cobertura periodística a hechos vinculados con el narcotráfico. Otros seis departamentos Sololá, Santa Rosa, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Escuintla y Chiquimula registran el resto de casos contra periodistas.

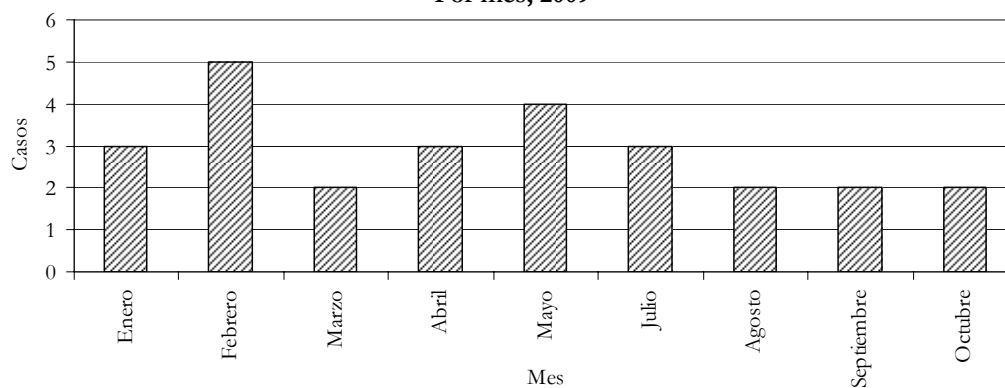


Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos y organizaciones locales e internacionales.

Ataques contra periodistas por mes: En promedio, se han registrado más de 2 ataques por mes, marzo, agosto, septiembre y octubre con 2 cada uno; febrero es el mes en donde los periodistas fueron más atacados.

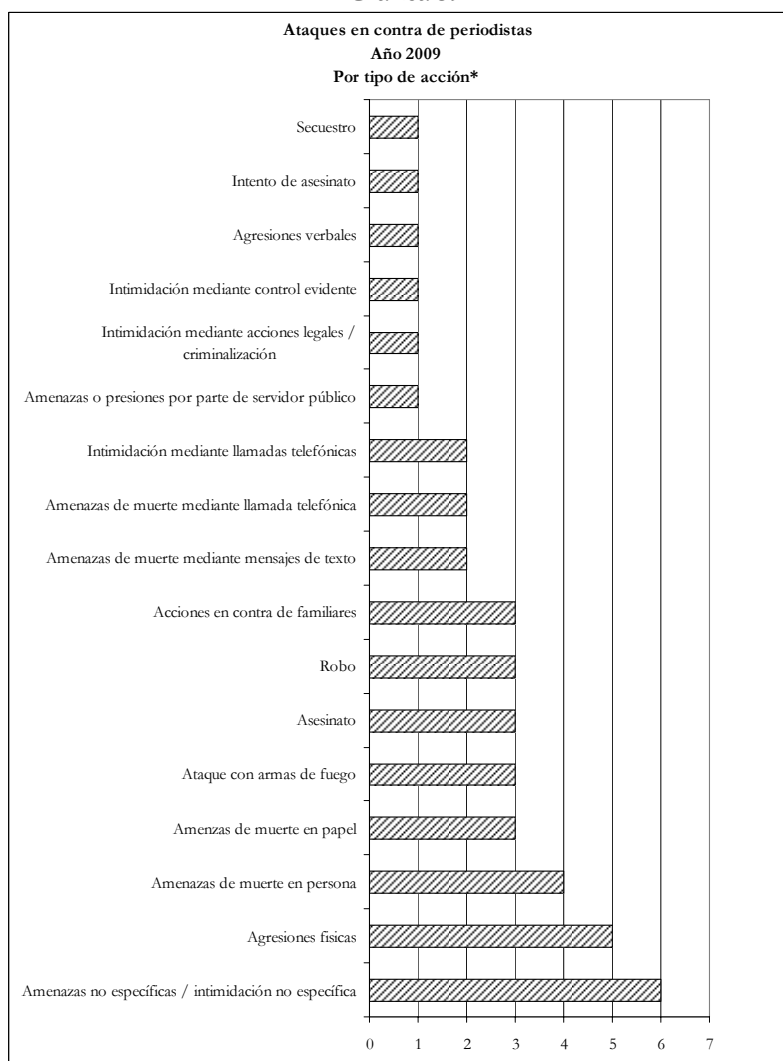
¹⁷ Casos del 1 de enero al 31 de octubre de 2009.

Gráfica 38
Casos de ataques contra periodistas
Por mes, 2009



Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos y organizaciones locales e internacionales.

Gráfica 39



Fuente: Procuraduría de los Derechos Humanos y organizaciones locales e internacionales.

Se registraron 42 acciones de diverso tipo en contra de periodistas, las más graves ocasionaron la muerte de tres cazanoticias en casos distintos, en uno de ellos, un periodista resultó herido de gravedad,¹⁸ las agresiones físicas fueron constantes, así como los ataques con arma de fuego. Las intimidaciones y amenazas de diverso tipo, incluyendo amenazas de muerte, han sido la principal forma de atacar a ese gremio.

Según los registros, el secuestro, el intento de asesinato, las agresiones verbales, controles evidentes, acciones legales, y amenazas o presiones provenientes del funcionario público, se mantuvieron en el mismo nivel de intensidad. Llamen la atención las acciones dirigidas hacia los familiares de la víctima directa como forma de hostigamiento y presión en contra del periodista; dicha modalidad no ha sido recurrente en el pasado y muestra nuevas características en el *modus operandi* de los agresores.

Las amenazas no específicas se refieren a hechos genéricos interpretados como presiones u hostigamientos, o con estos efectos.

Casos ilustrativos: periodistas

Periodista¹⁹ de Prensa Libre. Un periodista se presentó en abril de 2009 a la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el objeto de denunciar amenazas de muerte en su contra, puesto que días antes, acompañado de una colega de trabajo del diario Prensa Libre, cubrieron una nota relacionada con la declaración que darían ante el Ministerio Público un grupo de personas investigadas por el caso penal del asesinato de tres diputados salvadoreños al PARLACEN.²⁰

El periodista procedió a tomar fotografías de las personas que egresaban del lugar en donde habían rendido su declaración, en ese momento uno de los abogados de dichos sujetos procedió a detener un elevador para sus clientes, momento que fue aprovechado por él para tomar fotografías. El abogado defensor de los referidos sujetos llamó al periodista y le indicó que su cliente no quería que le hicieran fotografías.

Según indicó el periodista, el individuo²¹ al cual le tomó la fotografía procedió a hablar en privado con él, y le manifestó que si le sacaba una fotografía él podría matarlo. Ante la amenaza, el periodista se retiró inmediatamente del lugar. Indicó que dicha fotografía fue efectivamente publicada por el medio de comunicación en el cual trabaja, acreditándolo como fotógrafo. Sucedieron otros hechos de amenaza; el Procurador de los Derechos Humanos comunicó los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó medidas de protección. Las medidas cautelares no fueron otorgadas.

Félix Waldemar Maaz Bol: El 18 de agosto de 2009, a las 00:45 horas aproximadamente, en las afueras de su vivienda ubicada en la 3ª. calle 2-11 de la zona 1 del municipio de Cobán, Alta Verapaz, el periodista Maaz Bol, quien conduce el programa Video Prensa que se transmite por el canal 17 de televisión por cable del Sistema de las Verapaces, escuchó varios disparos, el desplazamiento de un vehículo y una explosión, ésta última provocó que las ventanas de su vivienda se rompieran; se trataba de un atentado en su contra. El periodista deduce que el atentado es consecuencia de su labor periodística, pues previamente había recibido llamadas sospechosas. El 29 de septiembre, a petición del Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado medidas cautelares urgentes de protección a favor del afectado.

Rolando Santiz: (expediente. EIO.GUA.2167-2009/DCP) El 1 de abril de 2009, dos personas armadas a bordo de una motocicleta, dispararon en contra del periodista Rolando Santiz y del camarógrafo Juan Antonio de León, quienes se conducían a bordo de un vehículo del noticiario Telecentro Trece, en la 4ª avenida y 20 calle de la zona 1 de la capital; falleciendo en el ataque el señor Rolando Santiz y resultando herido Juan Antonio de León.

¹⁸ Hecho ocurrido el 1 de abril de 2009, cuando fue asesinado el periodista Rolando Santiz, mientras Juan Antonio de León resultó herido.

¹⁹ Se omite el nombre por razones de seguridad.

²⁰ Eduardo José D'auhuissou, Wiliam Rizzier Pichinte y José Ramón González; en ese hecho ocurrido el 19 de febrero de 2007, también fue asesinado el piloto Gerardo Ramírez Castellanos

²¹ Por motivos de seguridad, el señor periodista no indicó el nombre del procesado.

Periodista²² de El Quetzalteco: A partir de 2005, el periodista inició una serie de investigaciones relacionadas con la situación de violencia en la región sur occidente, en donde se han agudizado los secuestros, extorsiones y asesinatos. Una de las investigaciones periodísticas se centró en el actuar de una banda organizada de secuestradores denominada Los Pitágoras. Los resultados de esa investigación han sido publicados desde enero de 2009 y se refieren a un grupo de individuos que presuntamente están vinculados a los secuestros de diez personas ocurridos en hechos distintos, entre agosto de 2008 y enero de 2009. El 22 de dicho mes fue hecho público que esos secuestros fueron realizados por la banda Los Pitágoras, cuyos dirigentes serían seis hombres que se encuentran reclusos en cuatro cárceles distintas, y que están en fase de ejecución de sentencia condenatoria por hechos vinculados a secuestros y asesinatos.

El Quetzalteco publicó que la banda criminal realizó un promedio de tres secuestros por mes, señalando que desde agosto de 2008 hasta esa fecha habrían realizado 14 secuestros y que en varios casos las víctimas fueron asesinadas a pesar de que sus familiares pagaron el dinero exigido como rescate.

En febrero de 2009 una persona identificada como Jorge Mario Reyes alias “Marino”, según la publicación miembro del grupo de los seis que dirigen a Los Pitágoras, se comunicó vía telefónica con el periodista y en tono intimidante, le pidió que dejaran de hacer publicaciones sobre ellos, pues él (supuestamente Reyes) era un empresario y no estaba relacionado con los hechos publicados; actualmente Reyes cumple una condena por secuestro en la cárcel de alta seguridad conocida como El Infiernito, en Escuintla.

El 4 de septiembre de 2009 se fugaron seis hombres del centro de prisión preventiva de Quetzaltenango, siendo cuatro de ellos los capturados por su presunta participación en secuestros realizados por “Los Pitágoras”.

En septiembre de 2009, el periodista fue informado por un investigador del Grupo de Investigación Especial Antisecuestros, que poseían información de que dos hombres jóvenes, asesinos a sueldo estarían planeando asesinarle. El 2 de octubre de 2009, la Procuraduría solicitó medidas de protección a favor del periodista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las medidas no fueron otorgadas.

Daimiro Castillo Morales: (expediente ORD.GUA.5267-2009/US) El señor Daimiro Castillo Morales, periodista del Nuestro Diario, corresponsal en Escuintla. A partir del martes 11 de agosto de 2009, el señor Castillo Morales fue víctima de presiones por medio de amenazas telefónicas. En Nuestro Diario se había publicado una noticia relacionada a un incidente en la Granja Penal Canadá, ubicada en Escuintla.

El periodista Castillo Morales sospecha que estas amenazas podrían provenir de personas que le conocen a él y a su familia, por lo que sus hijos debieron abandonar la escuela.

El 19 de agosto de 2009, la Procuraduría de los Derechos Humanos solicitó a la Policía Nacional Civil, que de manera urgente se implementaran medidas de protección a favor del periodista. En agosto de 2009, la Procuraduría solicitó medidas de protección ante la CIDH. Dichas medidas cautelares no fueron otorgadas.

4.1.3 Operadores de justicia

Los ataques en contra de personas que trabajan en entidades relacionadas con la administración de justicia fueron constantes en 2009, siendo alarmante que generalmente hayan culminado con la muerte y lesiones de los operadores. La grave situación motivó a algunos jueces a expresar públicamente el temor por amenazas en contra de ellos y sus familias.²³

La garantía de seguridad para los jueces, funcionarios del Ministerio Público, defensores públicos, abogados y testigos, es un requisito para afianzar la independencia judicial, la investigación criminal, el derecho de defensa y el acceso a la justicia. Una medida positiva observada es la concentración de los procesos con mayores riesgos, para centralizar las medidas de protección y asegurar la vida de los operadores implicados.

²² Se mantiene en reserva el nombre por cuestiones de seguridad.

²³ Diario Prensa Libre del 12 de marzo de 2009, en <http://www.prensalibre.com/pl/2009/marzo/12/301039.html>

En el 2009 se registraron 21 casos de ataques en contra de 27 personas vinculadas a la administración de justicia, entre ellas, magistrados, jueces, defensores públicos, fiscales, auxiliares fiscales y personal operativo del Ministerio Público. Además de abogados defensores de derechos humanos que sufrieron ataques.²⁴

En 17 de los ataques intentaron asesinar a los operadores, logrando su objetivo en 10 casos que ocasionaron la muerte en igual número de personas.

Tabla 77
Ataques en contra de operadores de justicia, 2009

Entidad	Cargo	Víctima		
		Asesinada	Herida	Ilesa
		F.	F.	F.
Instituto de la Defensa Pública Penal	Defensor	0	0	2
Corte de Constitucionalidad	Magistrado	0	0	3
Comisiones de Postulación	Comisionado	0	0	1
Organismo Judicial	Juez de Instancia Penal	1	0	2
	Oficial	3	0	0
	Juez de Paz	0	0	1
Instituto Nacional de Ciencias Forenses	Coordinador Regional	1	0	0
Ministerio Público	Agente Fiscal	0	0	1
	Auxiliar Fiscal	3	0	0
	Técnico en Recolección de Evidencias	1	2	0
	Piloto	0	1	0
	Detective	0	1	0
	Agente de Seguridad	1	0	0
Total		10	4	10

Fuente: elaboración propia según datos de base hemerográfica.

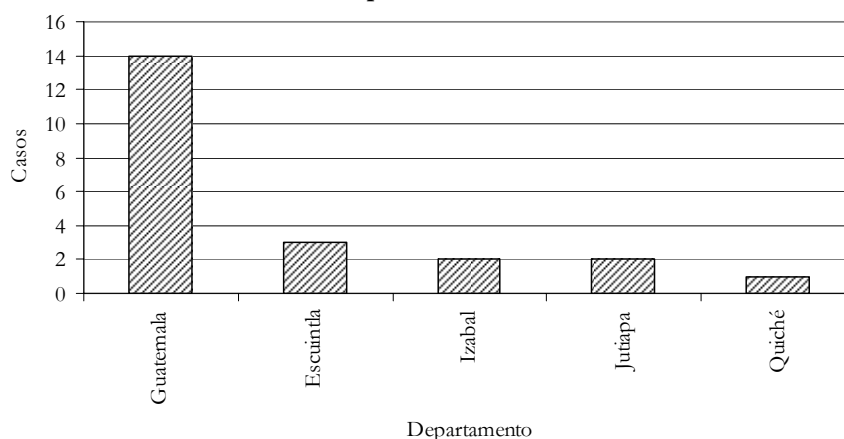
Casos por departamento. Los ataques en contra de los operadores de justicia se concentran en tan solo seis departamentos y representaron de manera simbólica la concentración de la administración de justicia en el país y los niveles de vulnerabilidad según distribución geográfica en 2009. De los registros también se deduce la responsabilidad y la necesidad de protección. De manera evidente, el departamento de Guatemala concentró el 83% de los casos, mientras que Escuintla, Izabal, Jutiapa, y Quiché registraron el 17% restante, cifra que representa la proporción total de un caso en cada uno de los departamentos indicados.

En 17 de los casos, las víctimas sufrieron ataques directos con armas de fuego, mientras que en 4 casos se registraron amenazas; esta situación es más grave que la registrada en 2008, cuando se reportaron 7 asesinatos.²⁵

²⁴ Registro hemerográfico 2009.

²⁵ Procurador de los Derechos Humanos. *Informe Anual Circunstanciado 2008, Situación de los Derechos Humanos*, pág. 243-244.

Gráfica 40
Casos de ataque contra operadores de justicia
Por departamento, 2009



Casos ilustrativos operadores de justicia²⁶

Eduardo Cojulún Sánchez, Juez Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el 20 de enero de 2009, denunció ser víctima de amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas, además su hija fue perseguida por parte de personas desconocidas.

Selvin Omar Tezén Arroyo, de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público, fue herido de bala, el 28 de enero; había participado en allanamientos realizados en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Fernando Mayén Alvarado, Fiscal del Ministerio Público, el 29 de enero fue asesinado por sujetos desconocidos en la aldea La Carretera, jurisdicción de San José Acatempa, en el kilómetro 75, en la denominada Cuesta de La Conora. Según investigaciones preliminares, Mayén Alvarado iba acompañado de los fiscales Édgar Ruano Godoy y José Mendizábal. En el lugar, un grupo de desconocidos detuvo el vehículo en el que viajaban. De inmediato, los despojaron de sus pertenencias, incluidos gorras y chalecos con el logotipo de la institución. Uno de los asaltantes disparó contra Mayén Alvarado, quien, aún con vida, fue trasladado por Ruano Godoy al hospital de Jutiapa, pero falleció en el camino.

Ovidio Manuel Salomón Quex, agente de seguridad del Ministerio Público, el 11 de febrero, fue herido por proyectiles de arma de fuego. Falleció a su ingreso al hospital.

Rudy Manuel Herrera Rodríguez, Auxiliar Fiscal del Ministerio Público, fue asesinado por un desconocido que lo atacó, el 8 de marzo. En el hecho resultó herido su hijo quien fue trasladado por bomberos al Hospital General, según testigos un sujeto sospechoso estuvo en el lugar durante varias horas antes del ataque.

Patricia Gámez, jueza Décima de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, denunció el 13 de abril, haber sido víctima de un atentado con arma de fuego, mientras se conducía, acompañada de su hija de 12 años, una sobrina y de un agente de seguridad, hacía su casa de habitación ubicada en la zona 4 de Mixco, Guatemala.

Víctor Alejandro Soyos Surte, de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público, el 7 de mayo, fue asesinado de un disparo en el rostro.

Luís Enrique Noriega Muñoz, Auxiliar Fiscal del Ministerio Público, el 2 de junio fue asesinado dentro de su vivienda. La víctima presentaba una herida de bala en la boca.

²⁶ Según información hemerográfica de los diarios nacionales y denuncias recibidas en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Denis Macario Samayoa, Auxiliar Fiscal del Ministerio Público, quien días atrás había desaparecido fue encontrado muerto el 29 de junio, a un costado de una gasolinera del kilómetro 15 de la ruta Interamericana, al final de la calzada Roosevelt, el cuerpo del señor Samayoa fue encontrado en su automóvil, al parecer, asfixiado.

Áxel Humberto Orantes Morales, médico forense Coordinador de la región sur del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, fue asesinado el 1 de julio, en el kilómetro 44 de la antigua carretera a Palín, Escuintla. Orantes también formaba parte de la Segunda Compañía de los Bomberos Voluntarios, y cuando fue atacado se dirigía a su residencia en la capital. Agentes de la PNC dieron a conocer que la víctima portaba en la cintura una pistola calibre 9 milímetros, la cual no fue accionada.

Ángel Mario Vásquez Orellana, empleado del Organismo Judicial fue asesinado a tiros el 4 de julio, tras recibir una llamada de un amigo que había sufrido un accidente de tránsito.

Cesar Rolando Álvarez Arana y Manuel de Jesús Ramírez, defensores Públicos del Instituto de la Defensa Pública Penal, denunciaron el 21 de julio, ser víctimas de amenazas mediante llamadas telefónicas e intimidación mediante control evidente frente a sus respectivas viviendas.

Flor de María Gil Ovalle de Juárez, jueza Duodécima de Trabajo, de 64 años, fue asesinada a balazos dentro de su automóvil por dos hombres que viajaban en una motocicleta, a las ocho de la mañana en la 6a. avenida y 5a. calle, zona 9, el 3 de agosto.

Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado y Mario Pérez Guerra, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, denunciaron públicamente, el 3 de agosto, que existían amenazas a su independencia judicial, en el marco del proceso de elección de Comisiones de Postulación para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

Blanca Aída Stalling Dávila, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, denunció el 13 de agosto, amenazas mediante llamadas recibidas en su teléfono celular, en las cuales le demandaban retirarse de la Dirección del Instituto de la Defensa Pública Penal y abandonar su candidatura para la reelección en el cargo.

Mireya Barrera Morales, Comisionada de Postulación y decana de la facultad de derecho de la Universidad Mariano Gálvez, denunció, el 25 de agosto, ser víctima de amenazas e intimidaciones por parte de personas desconocidas, esto sucedió en el marco de su participación en la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte de Apelaciones.

Wellington Mark Monzón Meza, Oficial del Juzgado Décimo de Sentencia Penal, el 30 de octubre, fue asesinado de un balazo. Monzón era el encargado de las diligencias que se llevan contra los 11 detenidos por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

Yaqueline Edelman y Aura Marina Duque, peritos de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público, especialistas en la escena del crimen y el señor Edgar Tul, piloto del Ministerio Público, fueron atacados el 3 de noviembre, luego de recolectar evidencias, tras el asesinato de un empleado del Sistema Penitenciario ocurrido en la zona 18. El Jefe de la Comisaría 13 de PNC afirmó que los responsables del atentado fueron ocho hombres, que dejaron abandonados los dos vehículos en la colonia La Barreda, zona 18.

Rocío Miranda, agente Fiscal del Ministerio Público en Izabal, fue atacada con armas de fuego, el 4 de noviembre; resultó ilesa.

Ana Isabel Guerra, jueza de Paz de Santa Catarina Pinula, el 10 diciembre fue atacada por un individuo, que portaba un tubo, el abogado Epaminondas González resultó con una fractura en el muslo derecho y el agente de la PNC Osman Martínez con un golpe, ambos auxiliaron a la jueza.

Olga Isabel Castellanos Smith de González, abogada, Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de diciembre, fue herida y posteriormente falleció en el hospital, el hecho ocurrió en la 3ª calle y 10ª avenida zona 2, la profesional del Derecho recibió un impacto de bala en el tórax. Estaba a cargo de las adjudicaciones de jueces en juzgados.

4.2 La situación de los derechos humanos a través de su protección internacional

La Constitución Política de la República consagra un amplio catálogo de derechos humanos, además, de manera acertada prevé la inclusión de otros derechos que están contenidos en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado; la Constitución también establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno²⁷.

Los tratados internacionales y los órganos de protección de los derechos humanos son creados por los Estados para que actúen de forma subsidiaria, no sustitutiva de los sistemas nacionales de protección. Los mecanismos internacionales no son contradictorios a los mecanismos locales; el fin de esos órganos internacionales es lograr el fortalecimiento de los mecanismos nacionales.

La incidencia de los órganos internacionales del sistema regional interamericano o del sistema universal de las Naciones Unidas en la situación de los derechos humanos en Guatemala durante 2009 ha sido relevante, en algunos casos de parte de los mecanismos de supervisión y control que tienen su sede al interno de las Naciones Unidas, Nueva York o Ginebra, como el Consejo de Derechos Humanos, los comités de supervisión de tratados o los procedimientos especiales (Relatores o Grupos de Trabajo) o en Washington y San José de Costa Rica, en el caso de la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos.

En otros casos a partir de la acción *in situ* con organismos que desempeñan su mandato en el país, por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el PNUD, UNICEF o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

La CICIG se ha constituido en una nueva experiencia global en la forma de cooperación entre los Estados y la ONU, en el marco de los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, los cuales promueven la cooperación internacional para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en ámbitos locales. El acuerdo de creación estableció un mandato por dos años para la CICIG, el plazo fue prorrogado por el Congreso de la República a partir del 4 de septiembre de 2009.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala en su respectiva materia y mandato ha constituido componentes de incidencia en la configuración de la situación de los derechos humanos en el 2009, a través principalmente del apoyo técnico para la promoción y protección de los derechos humanos a organizaciones de la sociedad civil, Procuraduría de los Derechos Humanos y entidades gubernamentales.

Instrumentos internacionales: Entre 2007 y 2008, el Estado ratificó dos tratados que contemplan la creación de mecanismos nacionales de prevención de violaciones de los derechos humanos: el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Decreto 53-2007 del 7 de noviembre de 2007, depositado ante Naciones Unidas el 9 de junio de 2008; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Decreto 59-2008 del Congreso de la República de Guatemala, vigente a partir del 7 de mayo de 2009.

En relación con el mecanismo nacional de prevención de la tortura, se inició un proceso interinstitucional en 2008 que se prolongó durante 2009, impulsado por un Comité Técnico integrado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y la Procuraduría de los Derechos Humanos, con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la facilitación de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, con el fin de elaborar la propuesta del proyecto de Ley para el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

²⁷ Constitución Política de la República de Guatemala., artículos 44 y 46.

El trabajo dio como resultado una propuesta que en 2009 fue presentada a los entes gubernamentales involucrados en la temática;²⁸ al cuerpo diplomático y a varios diputados del Congreso de la República. Objetivo final para dar cumplimiento al instrumento internacional ratificado, es que el Estado a través del Congreso de la República designe e implemente el mecanismo nacional de prevención en un corto plazo, puesto que se ha rebasado el periodo contemplado en el Protocolo²⁹, para la implementación del mecanismo.

En lo que atañe a los mecanismos nacionales contenidos en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2009, el gobierno designó al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad como entidad gubernamental encargado de las cuestiones relativas al cumplimiento y aplicación de la Convención.

El Estado aún se encuentra pendiente de designar cuál será el mecanismo que funcionará de manera independiente para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención, en función del artículo 3, párrafo 2 de la Convención el cual señala que el Estado, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrá, reforzará, designará o establecerá, a nivel nacional, uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención.

Son nueve los principales tratados en materia de derechos humanos que siguen pendientes de ser aceptados por el Estado. La agenda legislativa en la materia debería de concentrarse en:

La agenda pendiente en materia de ratificación de tratados internacionales está conformada por la recomendación formulada en el Examen Periódico Universal realizado a Guatemala en 2008 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.³⁰ Entre ellas pueden mencionarse: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la aceptación de la competencia para que el Comité de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, pueda recibir quejas.³¹

Importante en este marco, es la necesidad de dar coherencia al sistema normativo interno mejorando la seguridad jurídica y la fortaleza del Estado de Derecho, a través de la adecuación o armonización de la legislación interna a los estándares internacionales establecidos por los instrumentos ratificados y aceptados por el Estado. En ese marco, en el 2009 quedó pendiente la reforma a la tipificación del delito de tortura; así como la revisión de los aspectos legales relativos al trabajo infantil, y la adopción de medidas gubernamentales para implementar mecanismos que permitan una completa aplicación del Convenio 169 de la OIT,³² por ejemplo, la adopción de una Ley reguladora del procedimiento de consulta. Al respecto de la consulta, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado a favor de ella, pero ha señalado que no tiene carácter vinculante y que no es equivalente a una prerrogativa de veto.

Acciones de protección internacional que inciden en la situación local: En el contexto mundial, los mecanismos internacionales de derechos humanos se perfilan como formas globales de protección, debido a que tienen un peso muy importante para lograr la erradicación de situaciones violatorias y para conseguir la reparación en casos que no encuentran justicia en Guatemala; en ese entorno el Estado en el ámbito de su política exterior debe apostar por el fortalecimiento de los órganos de tratados y por su establecimiento como entes permanentes,³³ y en el ámbito interno por el fortalecimiento de los propios mecanismos de protección de los derechos humanos, lo que incluye el acatamiento y cumplimiento de las decisiones y sentencias de los órganos de supervisión y control regional o internacional.

Sentencia reciente de un órgano regional es la emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de noviembre de 2009, a través de la cual condenó al Estado de Guatemala por el caso de la Masacre de Las Dos Erres,³⁴ ocurrida en 1982, cuando miembros del comando Kaibil y soldados del Ejército, ingresaron a la comunidad para someter a las personas que allí vivían a graves violaciones a los derechos humanos mediante torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales.

²⁸ MSPAS, Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Gobernación, SBS, Procuraduría General de la Nación.

²⁹ El Protocolo establece plazo de un año a partir de su ratificación.

³⁰ Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, A/HRC/8/38.

³¹ La recomendación del Comité de la Convención contra la Discriminación (CERD) ha sido reiterada y data de 1995.

³² Recomendación CERD/19/2006 / A/HRC/WG.6/2/L.4 de mayo 2008, Recomendación 13).

³³ Actualmente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana cuentan con Secretarías que tienen carácter permanente.

³⁴ Algunas de las personas aún con vida, fueron arrojadas a un pozo que se construía en el lugar.

La Corte determinó que Guatemala violó los derechos humanos de las víctimas en cuanto a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal, a la protección a la familia y al nombre; ordenando al Estado una investigación sin mayor dilación, de forma seria y efectiva de los hechos que originaron las violaciones declaradas, con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables, además requirió que el proceso penal en ese caso se continúe sin mayor dilación; que se establezcan medios electrónicos para la búsqueda de niños desaparecidos a raíz de los hechos. La Corte también ordenó que el Estado debe exhumar, identificar y devolver los restos de las personas fallecidas en la masacre a sus familiares, entre otras disposiciones³⁵.

El 16 de noviembre de 2009, en su resolución de supervisión sobre la sentencia del caso Molina Theissen, la Corte Interamericana había señalado que el Estado ha permanecido pasivo ante las reparaciones pendientes desde el 2004, la misma Corte en otras resoluciones de supervisión de sentencia en el 2009, se refirió a que la falta de investigación criminal es una constante.³⁶

Las sentencias de la Corte Interamericana, como mecanismo internacional contencioso de protección, han incidido para la reapertura de casos en el ámbito nacional. El 23 de diciembre de 2009, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala con base en sentencias condenatorias del órgano interamericano, ordenó la reapertura de la investigación de los casos sobre el asesinato del señor Jorge Carpio Nicolle, Juan Vicente Villacorta Fajardo, Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas González, así como las lesiones graves que sufrió el señor Sydney Shaw Díaz en 1993; la Corte también ordenó la reapertura de las investigaciones en el caso conocido como “Panel Blanca” y el caso de las ejecuciones extrajudiciales conocido como “Niños de la Calle” o “Villagrán Morales y otros”.³⁷

En 2009, el contexto de inseguridad y violencia, como en años anteriores, generó un vasto número de casos de personas que buscaron la protección de sus derechos más elementales, por sentirse desprotegidos por los entes estatales encargados de la seguridad, investigación criminal y administración de justicia. Ante estos casos, el mecanismo de protección subsidiario de medidas cautelares es utilizado de forma permanente.

Durante el año, la institución del Procurador de los Derechos Humanos solicitó la intervención de los sistemas internacionales de protección entre estas el sistema interamericano para atender 19 casos con el fin de beneficiar a abogados y abogadas, defensores y defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, funcionarios públicos, periodistas y personas particulares. Sin embargo, debe señalarse que el Estado no pudo realizar una implementación efectiva de las medidas otorgadas, tal el caso de las medidas cautelares a favor del periodista Félix Maaz Bol, cuya protección se realizó de forma parcial.

Para la búsqueda de protección internacional de los derechos humanos, además de las acciones realizadas ante los mecanismos convencionales y especializados regionales o universales, fue importante la intervención y atención que organizaciones internacionales no gubernamentales mantuvieron sobre la situación en Guatemala y las acciones urgentes realizadas para garantizar los derechos de las víctimas, entre estas Amnistía Internacional; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL; Front Line, International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, Action for Human Rights, Federación Internacional de Derechos Humanos y FIAN Internacional, entre otros.

Visitas a Guatemala de mecanismos de protección. Las observaciones y recomendaciones emanadas de los mecanismos internacionales son producto de los exámenes de la situación particular del país que los órganos de protección realizan.³⁸ En 2009, varios delegados de mecanismos de protección estuvieron en Guatemala realizando misiones de trabajo.

En enero, mayo y julio, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, señor Leandro Despouy, visitó Guatemala, en donde siguió de cerca el proceso de elección de Comisiones de Postulación para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. El relator abogó por el avance y transparencia del proceso.

³⁵ Sentencia Dos Erres Vrs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 24 de noviembre de 2009.

³⁶ Bámaca Velásquez, resolución del 27 de enero de 2009; Carpio Nicolle, resolución del 1 de julio de 2009; Plan de Sánchez, resolución del 1 de julio de 2009; y Villagrán Morales y otros, resolución del 27 de enero de 2009.

³⁷ Diario Prensa Libre del 23 de diciembre de 2009, edición impresa, página 3.

³⁸ Hasta 2008 se contabilizaban 348 recomendaciones de mecanismos convencionales, “Las recomendaciones de los órganos de tratados a Guatemala”; Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mayo 2008.

En septiembre, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, llegó al país en seguimiento a la visita del anterior Relator Jean Ziegler, quien realizó una misión a Guatemala en febrero de 2005; el Relator de Schutter, enfatizó su preocupación por los niveles intolerables de las desigualdades en Guatemala, la desprotección laboral en zonas rurales, así como por la insuficiente protección jurídica del derecho a la alimentación.

4.3 La justicia transicional y el derecho a la verdad

Un acercamiento al concepto de justicia transicional aborda una gama y variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos por resolver los problemas derivados de un pasado violento, autoritario y represivo, en donde la justicia, la difusión de la verdad, el reconocimiento y la construcción de la memoria histórica surgen como iniciativas para promover las reparaciones, adopción de reformas institucionales y reconciliación.

La búsqueda de la verdad en distintas instancias de justicia, tanto a lo interno o externo de los Estados, produciéndose la mayor de las veces, en contextos donde la sociedad se recupera del conflicto o régimen autoritario.

La justicia transicional abarca una serie de medidas tendientes a esfuerzos integrales que promuevan la reconciliación, la reparación del hecho a través de garantías simbólicas que incluyan la cesación y prevención de que los hechos no se repitan. Consiste en el derecho de “*restitución, reparación y rehabilitación*” (Theo van Boven, 2003).

Durante las últimas décadas han fructificado una serie de instrumentos internacionales que fomentan la protección de los derechos humanos a través de la consecución y rescate de procesos judiciales ocurridos en el pasado, particularmente durante periodos extensivos de regímenes autoritarios y de conflictos armados que buscan evitar su repetición e impedir el fomento de la impunidad en la sociedad.

El derecho al conocimiento de la verdad, la reparación, judicialización e individualización de los crímenes son muestras inequívocas de la consolidación democrática. En ese marco también se han fortalecido a través de procesos diferenciados diversos mecanismos nacionales creados con el fin de proteger los derechos humanos y la impartición de justicia en Guatemala. La Constitución Política también se hace más transparente porque igualmente avanza en su cumplimiento y realización en nuestro país.

A través de la recuperación y la construcción de la memoria histórica, el Estado ha implementado una serie de acciones que forman parte de las recomendaciones del informe *Guatemala Memoria del Silencio*, emanadas de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. En el informe se establecen una serie de medidas en pro de preservar la memoria de las víctimas, el fomento de una cultura de respeto mutuo y la observancia de los derechos humanos. Conforman medidas tendientes a fortalecer el proceso democrático y otra serie de recomendaciones para promover la paz y la concordia nacional.

Todas estas acciones, en mayor o menor medida impulsadas por el Estado, se enmarcan en el periodo denominado de justicia transicional y constituyen hechos inéditos en la historia reciente del país, orientándose en la consecución y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos; y al mismo tiempo marcan un punto de inflexión en el acceso a la justicia y el rescate de la historia reciente vivida en el país.

En el marco de la celebración del Día Nacional contra la Desaparición Forzada, la institución del Procurador de los Derechos Humanos recordó a las víctimas desaparecidas durante el conflicto armado, haciendo énfasis en que el Estado debe tomar medidas urgentes para procurar su apareamiento y la explicación de los hechos ocurridos. El Procurador, en esa ocasión expresó que 30 años después de esas políticas, que sumaron al menos 45 mil desapariciones, el Estado no ha dado cumplimiento al acuerdo de paz, no ha creado la comisión de búsqueda.

El 2009 se caracterizó por ser un año de avances en varios casos históricos dentro del contexto de justicia transicional y procesos en el sistema de justicia. Sin duda sentarán precedentes normativos e históricos en la aplicación de justicia y sobretodo en el carácter vinculante de medidas emanadas del sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

Los hechos se enmarcaron a partir de una serie de acciones que evidencian el papel del Estado en el cumplimiento de sus funciones. También se adscriben las sentencias o decisiones emitidas por el sistema internacional de protección de derechos humanos; los llamados realizados por las organizaciones de defensa de los derechos

humanos, así como las resoluciones emanadas de la Corte de Constitucionalidad (CC) y las sentencias derivadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El análisis de la situación de 2009 incluye la mención de algunos casos paradigmáticos o procesos reivindicativos de derechos humanos, tanto a partir de las acciones implementadas por el Estado y la institución del Procurador, así como de otros mecanismos nacionales o internacionales de protección de los derechos humanos.

El Derecho a Saber: El 24 de marzo de 2009, ante la presencia de cientos de personas, el Procurador de los Derechos Humanos, presentó al público el primer informe del trabajo realizado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, entregando de manera simbólica al Vicepresidente de la República, Dr. Rafael Espada, al presidente del Congreso de la República, Roberto Alejos y al Presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, Eliú Higueros.

El informe denominado *El derecho a saber* consta de 262 páginas y en cuatro capítulos, describe el modelo funcional bajo el cual operaba la antigua institución policial, cumpliendo funciones orientadas por el Ejército nacional durante el conflicto armado interno.

Luego del rescate material de la documentación y su apertura al público con la entrega del informe, el “Archivo Histórico de la Policía Nacional” (AHPN) se constituye como fuente histórica y descriptiva de la estructura y funcionamiento de la PN permitiendo describir los fundamentos legales y pilares de la institución.

Casos emanados de las recomendaciones de la CEH: Particular relevancia tiene el 25 de febrero, fecha en que se conmemora el Día Nacional de las Víctimas en 2009, ese día, el presidente constitucional pidió perdón en nombre del Estado guatemalteco por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno, reconociendo la existencia de genocidio y etnocidio.

Entre las acciones impulsadas por el Estado y las organizaciones sociales en materia de justicia transicional, se recordaron personas y eventos relacionados con violaciones del derecho a la vida acaecidos durante el conflicto armado interno, registrados por el informe de la CEH como paradigmáticos, casos como los de Fernando García, Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Mohr e Irma Flaquer, entre muchos otros.

Fernando García: El artículo 467 del Código Procesal Penal faculta a la CSJ sobre procedimiento especial de averiguación. La Corte Suprema de Justicia puede a solicitud de cualquier persona que interponga un recurso de exhibición personal y dónde exista la sospecha que haya sido detenida por miembros de seguridad del Estado o por agentes regulares o irregulares, designar y encargar la averiguación o procedimiento preparatorio en la figura del Procurador de los Derechos Humanos.

La investigación realizada por la Procuraduría, luego de 12 años de existencia del mandato de averiguación, permitió el 5 de marzo 2009 las capturas de Héctor Roderico Ramírez Ríos, ex agente de la PN y miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) y la del ex policía Abrahán Lancerio Gómez. Ellos son acusados de participar en la desaparición del universitario y líder sindical Fernando García y la detención ilegal de Danilo Chinchilla el 18 de febrero de 1984 en las cercanías del Mercado del Guarda zona 11. Particularmente en este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos, desde 1997 cuenta con el mandato judicial para investigar y sumarse como ente acusador.

En mayo, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) solicitó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, agregar el delito de desaparición forzada a los dos ex policías nacionales (PN) Ramírez Ríos y Lancerio Gómez, acusados de plagio o secuestro, abuso de autoridad y detención ilegal.

En junio, la institución del Procurador presentó un amparo contra la resolución de Juzgado por la negativa de procesar a los dos acusados ligados al proceso. La justificación del juez se fundamenta en la figura del delito bajo la interpretación de que el delito en contra de García sucedió en 1984 y el delito de desaparición forzada fue creado a partir de 1996.

El Estado pide perdón en los casos de Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Mohr e Irma Flaquer: A 30 años del asesinato del líder político y ex alcalde capitalino, Manuel Colom Argueta, el Estado, a través del presidente de la República pidió perdón a los familiares y concedió mediante el acuerdo gubernativo 67-2009 la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz. También la Asociación Nacional de Municipalidades en un acto conmemorativo reconoció su labor y gestión como alcalde y primer presidente de la ANAM.

Asimismo la vía de apertura y acceso a la justicia comienza a bregar un camino distinto en el país. En esa sintonía se manifiestan los integrantes de la Asociación Adolfo Mijangos López quienes realizaron una denuncia ante la justicia guatemalteca en contra del asesinato de los líderes Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta. De acuerdo a uno de los integrantes, la acusación se realiza 30 años después porque en el país comienzan a gestarse una serie de acciones y condiciones para hacer efectiva la exigencia ante el Ministerio Público.

En el caso del asesinato de Alberto Fuentes Mohr, en el marco del reconocimiento y dignificación a las víctimas, el 29 de enero, fecha en que se recuerdan los treinta años de su asesinato, el gobierno de la República condecoró con la Orden Presidencial, recibida por el hijo de la víctima, doctor Juan Alberto Fuentes Knight y su hermano el ingeniero Fernando Fuentes Mohr.

En el caso de la periodista Irma Flaquer, el Estado de Guatemala pidió perdón por su desaparición ante los familiares y admitió los escasos resultados en las investigaciones realizadas sobre el hecho y la falta de condena a los responsables.

Entrega de archivos del Ejército Nacional: Indicador también ha sido la solicitud de entrega de los archivos del Ejército Nacional sobre los planes de las campañas denominadas Victoria 82, Firmeza 83, Sofía 82 e Ixil 82. La entrega de los archivos obedece al seguimiento de las investigaciones realizadas en torno a las denuncias por genocidio abiertas ante tribunales nacionales. De los archivos solicitados fueron entregados dos, los denominados Victoria 82 y Firmeza 83, los otros, según argumentos del Ministro de la Defensa, se desconoce el paradero.

La entrega de los documentos fue ordenada por el Juzgado Segundo de Instancia Penal y tiene cuatro años de retraso por los recursos de amparo presentados por los abogados de los militares procesados. En marzo de 2008, la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo definitivo en contra de dichos recursos y ordenó al Ministerio de la Defensa entregar los archivos a los tribunales.

En el caso del Plan Sofía, según publicaciones internacionales, la profesora y directora documentalista del Archivo de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kate Doyle, entregó durante el mes de diciembre al juez español Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional de España, el archivo, de donde se recogen las órdenes del Ejército para ejecutar a población civil durante los meses de julio y agosto de 1982.

Asesinato a testigo del caso Bámaca: En noviembre de 2000, la CIDH dictaminó la culpabilidad del Estado en la desaparición de Efraín Bámaca y ordenó, entre otras cosas, que el Estado localice los restos de Bámaca e investigue quiénes fueron los autores materiales del caso. La mayoría de estos acuerdos no han sido cumplidos y el caso se presenta como un hecho paradigmático que presenta serios debilitamientos en torno al acceso de la justicia.

Durante mayo 2009 fue asesinado a inmediaciones del colegio Perpetuo Socorro de Mazatenango el testigo Ángel Urizar García. Durante la época del asesinato de Efraín Bámaca fue miembro de la G-2 y contaba con suficiente información que permitió establecer un hilo conductor.

El testimonio de Urizar ayudó a desentrañar el laberíntico caso del asesinato de Efraín Bámaca (Comandante Everardo). En ese entonces, durante el año 1992 apareció un cuerpo cerca de un río con el rostro desfigurado y varios balazos por la espalda. La descripción del cadáver coincidía con la del líder revolucionario y de inmediato se difundió la noticia de que Bámaca estaba muerto. De ahí que el testimonio de Urizar García ayudó a establecer la verdadera identidad.

Durante los primeros días de junio 2009, fueron exhumados los “supuestos” restos del ex comandante guerrillero en un nicho de Retalhuleu con la participación de la viuda Jennifer Harbury, quién terminó por asegurar que no eran sus restos.

Caso Monseñor Juan Gerardi Conedera: El 26 de abril se rindió homenaje a la memoria del Obispo Juan Gerardi Conedera. Durante los primeros seis meses se dieron dos hechos de particular relevancia. El primero fue la reactivación del caso en la fiscalía donde se investigan a 13 personas vinculadas al asesinato. El otro hecho, se refiere al asesinato ocurrido el 2 de abril, del coronel retirado Roberto Antonio De la Cruz Prado, a quien se investigaba por el asesinato del obispo. A De La Cruz se le sindicaba debido a que por causas no establecidas removió del puesto a Waldemar Reyes, jefe del Estado Mayor en esa época.

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal al emitir condena contra tres militares y un sacerdote, acusados de participar en el asesinato del obispo, ordenó que se investigara a otros 13 supuestos implicados, entre ellos el coronel de la Cruz, encontrado sin vida y cuyo crimen no se atribuye a la delincuencia común.

Caso Miguel Tiu Imul: El caso de Miguel Tiu Imul, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 1993, es uno de 15 casos de ejecuciones extrajudiciales presentados a principios de los años 90 en el organismo interamericano, que concluyó declarando la responsabilidad del Estado de Guatemala.

Miguel Tiu Imul en julio de 1991 había dejado de patrullar (Patrullas de Autodefensa Civil) porque tenía 65 años y no tenía la capacidad física para hacerlo. Los Comisionados Militares y jefes de las patrullas, Domingo Castro Lux, Pedro Ixcotoyac, Juan Lux Castro y Juan de León Peres fueron acusados por la familia de Imul de haber cometido este asesinato, estos lo habrían amenazado de muerte previamente.

Miguel Tiu Imul fue ejecutado extrajudicialmente el 30 de noviembre de 1991. El hecho ocurrió cerca de su casa, Cantón de las Montañas, Parraxtut, Sacapulas, departamento de Quiché. La comisionada presidencial de Derechos Humanos, en nombre del presidente de la República, reconoció la responsabilidad del Estado y entregó el resarcimiento económico a la hija y a la esposa de la víctima.

Sistema Interamericano de protección de derechos humanos: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH, de acuerdo con la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizó al principio del año una serie de críticas a Guatemala por el incumplimiento de sentencias en varios casos. El primero de ellos sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas en cuanto al caso de la desaparición forzada del guerrillero Efraín Bámaca Velásquez. Los planteamientos dirigidos al gobierno fueron por la falta de investigación de los hechos que generaron la desaparición forzada, la sanción a los responsables y promulgación de los resultados, la falta de justicia y el fomento a la impunidad existente.

Esta situación se repite en otros diez casos que han obtenido una resolución luego del litigio correspondiente en ese Alto Tribunal del sistema interamericano, tal es el caso de la antropóloga Myrna Mack Chang, con resolución de la Corte de 26 de noviembre de 2007, donde se indica que la Corte: *“mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento”*, entre los cuales se encuentran:

“(...) el deber de investigar los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás responsables de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, y del encubrimiento de la ejecución extrajudicial y de los otros hechos del presente caso, independientemente de la persona que ya se encuentra sancionada por estos hechos, y que los resultados de las investigaciones deben ser públicamente divulgados...” así como entre otros puntos, además (...) la obligación de remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen en la impunidad el presente caso.”

Otro acontecimiento de importancia es el relacionado con la masacre de Las Dos Erres, donde la Corte Interamericana emitió sentencia en su sesión extraordinaria en La Paz, Bolivia, en julio 2009 por la no aplicación de la justicia en el caso de la masacre de la aldea de las Dos Erres, ocurrida el 7 de diciembre de 1982 y donde murieron unas 250 personas.

En 1996, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad y acordó en 2000 una solución amistosa a través de la que se comprometía a investigar los hechos, ofrecer reparaciones a los familiares y a las víctimas, y a sancionar a los responsables.

En el 2005, por su parte la Corte de Constitucionalidad atendió un amparo donde revocó lo actuado desde comienzos del proceso judicial. Esta acción anuló las órdenes de detención contra militares acusados y las declaraciones donde reconocen la participación en la masacre.

El incumplimiento estatal de los acuerdos arriba mencionados abrió el camino para que la Comisión Interamericana trasladara el caso ante la Corte Interamericana, emitiendo una sentencia que fue publicada el 24 de noviembre sobre la *“Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”* del caso.

El desenlace ante el sistema interamericano de derechos humanos aviene luego de 27 años de haberse cometido la masacre y a 15 años de haber hecho pública denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la denuncia de los hechos se encuentra en el Ministerio Público.

En orden de otros hechos, durante junio de 2009, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la aldea Panimá (Río Negro) y el asentamiento Pacux, para verificar los daños que causó la masacre del cerro Pak'oxom, liderada por el Ejército en marzo de 1982. Esta misión de la Comisión a Guatemala estuvo encabezada por el abogado Víctor Abramovich, primer vicepresidente del organismo interamericano en su calidad de Relator para Guatemala y Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En total, cinco masacres (conocidas como Caso Río Negro) fueron ejecutadas entre 1981 y 1982, por el Ejército y miembros de las extintas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La aldea Panimá se encuentra a orillas del Río Chixoy, y sus habitantes fueron reprimidos por el Gobierno de la época por su oposición a ser desalojados de sus comunidades durante la construcción de la hidroeléctrica.

Los delegados del organismo interamericano se reunieron con representantes de organizaciones pro Derechos Humanos, y escucharon testimonios de sobrevivientes y peticiones de justicia, como el caso de Laura Tecú, quien recordó que el 13 de marzo de 1982 niños y mujeres fueron torturados y muertos de manera brutal. El sobreviviente Jesús Tecú pidió a los emisarios de la Comisión elevar el caso ante la Corte Interamericana.

Abramovich informó que van a preparar el expediente de la evaluación e investigación, y esperan que el caso pase de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –cuya sede se encuentra en Washington D.C- a la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica. No solo para que se pronuncie, sino para que al final en Guatemala avancen los casos de justicia.

Sentencias en los tribunales de justicia: casos Choatulum y El Jute. A finales de agosto 2009 surge la primera condena en torno a un caso de desaparición forzada ocurrida durante el conflicto armado en Guatemala. Se trata del caso de la aldea Choatulum, municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Entre septiembre de 1982 y octubre de 1984 ocurrieron seis desapariciones forzadas en contra de personas del lugar. Las detenciones ilegales fueron cometidas por el comisionado militar de aquella época, Felipe Cusanero Coj, y otros miembros del ejército y patrulleros civiles.

Con fecha 7 de julio de 2009, la CC emitió una resolución de trascendencia en materia de justicia, la cual abrió las puertas para la aplicación de justicia en casos de desaparición forzada en el país. La Corte reconoce la permanencia del delito, auxiliándose en la ley de Reconciliación, el artículo 201 Ter del Código Penal y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Finalmente la sentencia condenatoria ocurrió el 30 de agosto, de donde el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango condenó a 150 años de prisión por hallar culpable de desaparición forzada de seis personas al ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj.

El caso de El Jute es otra sentencia paradigmática en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado. Los antecedentes del caso se fijan durante el 5 de marzo de 2002, fecha en que el Procurador de los Derechos Humanos es designado por parte de la Corte Suprema de Justicia, como investigador dentro del procedimiento especial de averiguación 02-2001, promovido a favor de Jacobo Crisóstomo Chegüen, Miguel Ángel Chegüen Crisóstomo, Raúl Chegüen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera y Santiago Gallardo Rivera.

A partir de esa fecha la institución del Procurador de los Derechos Humanos ha promovido y desarrollado actividades concernientes a la investigación procesal y ha solicitado medidas de coerción en contra de los imputados. Sin embargo, la defensa de Marco Antonio Sánchez con el objetivo de ser favorecido con una amnistía, promovió un incidente de inhibitoria con la intención de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional. El juez en atención a la petición trasladó el expediente a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, produciéndose la suspensión del proceso.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, accionó impugnando la suspensión del proceso en contra del acusado y finalmente interpuso un recurso de amparo para ser parte dentro del proceso y del trámite de aplicación de la Ley de Reconciliación. La ley de es clara en el sentido de que

“La extinción de la responsabilidad penal a la que se refiere esta ley no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.³⁹

El imputado volvió a interponer una acción procesal ante la CC para requerir y fundamentar que merecía la aplicación especial que propone la Ley. La CC resolvió a favor del acusado y dejó sin efecto la sentencia dictada por la CSJ, dejando al Procurador de los Derechos Humanos fuera del caso. En el devenir de los hechos, el Ministerio Público interpone un recurso por la resolución dictada de la CC y a la CSJ que dictara la resolución, confirmando el fallo inicial sobre la “inaplicabilidad” de la Ley de Reconciliación Nacional.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones determina que el Procurador de los Derechos Humanos tiene las mismas facultades y deberes que detentan los agentes del Ministerio Público de acuerdo a lo que establece la ley de Organismo Judicial (artículo 13), las disposiciones especiales prevalecen sobre las generales.

Al analizar la normativa por parte del órgano jurisdiccional, se llega a la conclusión que el Procurador es parte dentro del proceso, tanto como principal como accesorio, toda vez que se trata de un caso sometido a procedimiento específico denominado “*procedimiento especial de averiguación*”. El Procurador por tanto, es sujeto de la relación procesal.

Agotados todos los recursos de las partes, la fecha 8 de septiembre 2009 se estipula como día de inicio del debate oral, quedando suspendido y dejándose para el 22 de septiembre.

Con fecha de 3 diciembre, el Tribunal de Sentencia de Chiquimula condenó a 53 años y 4 meses de prisión por el delito de desaparición forzada a Marco Antonio Sánchez y a José Domingo Ríos Martínez, Gabriel Álvarez Ramos y Salomón Maldonado Ríos, por su participación en la operación militar en la que fueron desaparecidos los siete habitantes de la aldea El Jute. También se ordenó iniciar una investigación contra el ex ministro de la Defensa, Ángel Aníbal Guevara, y el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Benedicto Lucas García, para determinar su autoría intelectual en estos hechos.

Corte Suprema de Justicia. A partir de las sentencias de la CIDH, la CSJ ha reabierto la investigación del crimen contra el periodista y político Jorge Carpio Nicolle y sus acompañantes, así como también los casos conocidos con el nombre de “niños de la calle (Villagrán Morales y otros)” y el de la “Panel Blanca”.

Los fallos tienen un carácter inédito en la historia reciente del país. En primera instancia porque los magistrados de la Cámara Penal reconocen que Guatemala forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, reconociendo la jurisdicción que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano de justicia. El Estado por tanto, no puede obstruir, impedir o denegar el cumplimiento de las sentencias realizadas por la CIDH.

Las sentencias de la Corte Interamericana por lo tanto tienen un carácter vinculante para la justicia guatemalteca, pudiendo dejar sin efecto las sentencias resolutivas emitidas anteriormente en estos casos. En el caso Carpio se demandó que se investigue, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales, reabriendo el caso 16 años después de suscitado el hecho. Con esto, se reconoce el fallo de la CIDH que argumenta la falta de investigación objetiva y probatoria de los hechos en la inaplicabilidad en las responsabilidades penales.

En los otros dos, “Villagrán Morales y otros” y el de la “Panel Blanca”, la CSJ ordenó anular lo actuado en los procesos e iniciar nuevas investigaciones que puedan ser reales y efectivas, conforme al irrestricto respecto de las reglas del debido proceso, la averiguación de los hechos y se sancione a las personas que resulten implicadas y sean responsables.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala con su actuación al tratar la sentencia del máximo tribunal regional interamericano en materia de justicia y derechos humanos, sienta jurisprudencia que con toda seguridad trascenderá las fronteras nacionales.

³⁹ Ley de Reconciliación Nacional. Artículo 8. Guatemala.

RECOMENDACIONES



—

RECOMENDACIONES

Para superar los rezagos en la situación de los derechos humanos de 2009, el Procurador de los Derechos Humanos hace a los depositarios de los diferentes poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y toda entidad de carácter público de acuerdo con su mandato y atribuciones, las siguientes recomendaciones:

1. El cumplimiento de los compromisos suscritos alrededor del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, siendo éstos la oportunidad para reencauzar la institucionalidad y devolver al país la seguridad y la justicia perdidas; en particular, el desarrollo y ejecución de una política criminal de Estado que fortalezca a las instituciones responsables de accionar contra la delincuencia y que permita coherencia en la actuación.
2. El apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para la continuidad y fortalecimiento de sus actuaciones en la ejecución de su mandato.
3. El fortalecimiento del presupuesto a las instituciones con funciones estratégicas en la situación actual del país, como el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, dependencias del Organismo Judicial y las dedicadas a la ejecución del gasto social, dentro de esto, aumentar al 4% del PIB en los rubros de educación y salud.
4. La investigación y castigo del delito, proteger a la población frente a los elevados índices de corrupción y abusos de funcionarios públicos, así como celeridad en los procesos judiciales, como medidas generales de prevención efectiva de los linchamientos.
5. El fortalecimiento del ente rector en el Organismo Judicial, para la recopilación exhaustiva de las estadísticas para que se pueda conocer con exactitud la dimensión del fenómeno de la violencia intrafamiliar, para eliminar el subregistro existente en las cifras y, de esa manera, contar con una herramienta importante que contribuya a las decisiones necesarias para eliminar ese flagelo cuyas víctimas de mayor fragilidad son la niñez y las mujeres.
6. Sensibilizar a los operadores de justicia sobre la perspectiva de género para el adecuado tratamiento de los casos de femicidio y que de esa forma se facilite la aplicación de la ley en la investigación, juicio y condena de los presuntos responsables.
7. Para la eficaz aplicación y exitosos resultados de la Ley de Acceso a la Información Pública, como una oportunidad para progresar en lo referente al acceso y difusión de la ciencia y la cultura, así como en los procedimientos políticos de participación democrática, la fiscalización social y la transparencia, se hace necesario un mayor seguimiento y capacitación a las Municipalidades ya que éstas reflejan la mayor violación a los artículos de la mencionada Ley. Asimismo se hace necesaria la asignación de la partida financiera específica adicional en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información.
8. Ejecutar de manera eficaz la política pública y el plan para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, delito de lesa humanidad que se intensifica.
9. Eliminar o reducir a su mínima expresión las transferencias y los recortes presupuestarios con el fin de no afectar las acciones, políticas públicas y planes dedicados a los derechos e intereses de los segmentos especialmente vulnerables de la población, en los ámbitos del derecho a la salud y asistencia social, a la seguridad pública, a la alimentación, a la educación y a un medio ambiente sano.
10. Reformar la institucionalidad ejecutando la política de desarrollo agrario como ha sido consensuada, para hacer frente a la magnitud y complejidad de la problemática, disminuyendo las contradicciones y la conflictividad en esa área estratégica de la economía nacional.
11. El diseño y ejecución de una política eficaz para generar mayores fuentes de empleo y disminuir el daño causado a éste por la crisis económica que atraviesa el país.

12. El fortalecimiento estructural e institucional de los departamentos ubicados en el corredor seco de oriente, y en otras regiones de riesgo en el país, con el fin de disminuir y a la postre eliminar los indicadores sociales de la inseguridad alimentaria y nutricional relacionados con la pobreza y extrema pobreza.
13. Ampliar y fortalecer la política pública de cumplimiento del mandato constitucional sobre la educación gratuita de todos los niños y niñas en edad escolar. Garantizar los recursos para la existencia de escuelas y programas de enseñanza en cantidad suficiente, en todos los rincones del país, así como la infraestructura adecuada y disposición de docentes.
14. Cumplir con la responsabilidad de crear y ejecutar políticas integrales, dotación de recursos y también la coordinación y acuerdos con el sector privado de la construcción, para cubrir de manera satisfactoria la demanda existente de la vivienda adecuada.
15. Frente a la agudización de los efectos del cambio climático, disponer y ejecutar las políticas adecuadas y los recursos correspondientes para detener el deterioro acelerado de los recursos ambientales del país.
16. Para que la cultura de la paz pueda imponerse positivamente a la situación de intolerancia y violencia, es imprescindible invocar y ejecutar una reconstrucción y valorización de las relaciones entre individuos, la edificación de valores, comportamientos, actitudes y modos de relacionarse que favorezca la no violencia y el respeto a los derechos humanos en sus múltiples manifestaciones e interdependencias.
17. El estudio y aprobación de las diversas propuestas de ley relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran en el Congreso de la República a fin de reducir y eliminar su vulnerabilidad en los ámbitos del racismo, la desigualdad, la exclusión e inequidad social.
18. La elaboración de una estrategia de implementación adecuada y la ejecución correspondiente de la política pública de niñez y adolescencia 2002-2015, que redunde en el cambio de la situación caracterizada por altos niveles de mortalidad infantil por desnutrición, falta de oportunidades, inseguridad alimentaria, nutricional y sanitaria, violencia social y familiar.
19. Para promover la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad, fortalecer las políticas, la infraestructura adecuada y los recursos destinados a las instituciones encargadas de la elaboración, coordinación y ejecución de las políticas que tengan el fin de eliminar los prejuicios, rechazo e invisibilización de la cual es objeto dicho sector de población.
20. Garantizar la educación, derechos laborales, el acceso a los servicios de salud y de seguridad social a las personas que viven con el VIH/SIDA.
21. La implementación adecuada del Decreto 25-2009, ley que reforma el Decreto 85-2005 del Congreso de la República, para dar una atención real, efectiva, integral, diferenciada, ordenada y coordinada en el sector de salud pública, a las personas adultas mayores en el país.
22. El Estado debe visibilizar e identificar las necesidades de la población que pertenecen a minorías sexuales y garantizar la eliminación de la violencia, discriminación, exclusión y prejuicios de los que este grupo poblacional actualmente es objeto.
23. Introducir y realizar las reformas necesarias con el fin de dar cumplimiento a los estándares que establece la normativa internacional y nacional en relación con los derechos de las personas migrantes y, de igual forma, velar por los intereses y derechos de los connacionales migrantes en el extranjero.
24. Realizar todos los esfuerzos, de manera suficiente y efectiva para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, investigando y castigando los delitos que signifiquen ataques y amenazas hacia las defensoras y defensores que trabajan en los diferentes ámbitos de promoción o protección de derechos humanos.

ANEXOS



ANEXO I
Estadísticas de la institución del Procurador de los Derechos Humanos

Resumen - Expedientes de investigación y acciones específicas
Derechos Civiles y Políticos

Derechos Civiles y Políticos	Expedientes de investigación	Acciones específicas	TOTAL	%
Orden y seguridad	802	2075	2877	53.08
Dignidad	61	818	879	16.22
Debido proceso	100	629	729	13.45
Libertad	113	135	248	4.58
La igualdad	19	213	232	4.28
Integridad personal	45	173	218	4.02
El nombre	10	100	110	2.03
La personalidad	1	77	78	1.44
Derechos políticos	2	31	33	0.61
La tolerancia	2	3	5	0.09
Acciones en contra de la dignidad intrínseca y diversa del genoma	0	4	4	0.07
Acciones en torno a la concepción	0	4	4	0.07
Nacionalidad	1	2	3	0.06
TOTAL	1,156	4,264	5,420	100.00

Resumen - Expedientes de investigación y acciones específicas
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Expedientes de investigación	Acciones específicas	TOTAL	%
Trabajo	434	1014	1448	28.59
Consumidor y usuario	169	516	685	13.53
Vivienda	53	600	653	12.89
Salud	310	283	593	11.71
Educación	179	407	586	11.57
Medio ambiente sano	100	254	354	6.99
Derecho a la seguridad social	164	171	335	6.62
Libre determinación	6	154	160	3.16
Derecho al desarrollo	44	89	133	2.63
Alimentación	39	34	73	1.44
Derecho a la cultura y la ciencia	6	16	22	0.43
Derecho a la paz	1	21	22	0.43
TOTAL	1,505	3,559	5,064	100.00

Resumen - Expedientes de investigación y acciones específicas
Derechos Específicos

Derechos Específicos	Expedientes de investigación	Acciones específicas	TOTAL	%
Niñez y la juventud	205	2378	2583	51.91
Mujer	89	1245	1334	26.81
Adulto mayor	188	227	415	8.34
Pueblos indígenas	20	238	258	5.18
Detenido o recluso	69	170	239	4.80
Discapacitados y personas con retos especiales	45	55	100	2.01
Población desarraigada y migrante	13	23	36	0.72
Población víctima del conflicto armado interno	6		6	0.12
Población con VIH-SIDA	4		4	0.08
Población con orientación sexual diferente	1		1	0.02
TOTAL	640	4336	4976	100.00

ANEXO II
Estadísticas (enero a diciembre 2009)
Homicidios por municipio y por cada 100,000 habitantes

Tabla 1
Tasas de homicidios por cada 10,000 habitantes por municipio, 2009
Orden de mayor a menor tasa

No.	Departamento, municipio	Homicidios por cada 100,000 habitantes	No.	Departamento, municipio	Homicidios por cada 100,000 habitantes
1	Petén, Melchor de Mencos	208.78	45	Sololá, San Andrés Semetabaj	71.28
2	Petén, Flores	184.51	46	Chimaltenango, Parramos	70.31
3	Petén, San Andrés	181.76	47	Petén, Dolores	69.86
4	Chiquimula, Esquipulas	176.72	48	Suchitepéquez, Cuyotenango	69.16
5	Escuintla, San José	170.47	49	Jutiapa, El Progreso	69.12
6	Izabal, Puerto Barrios	143.73	50	El Progreso, San Agustín Acasaguastlán	68.35
7	San Marcos, Ayutla	134.45	51	Huehuetenango, Santa Ana Huista	68.27
8	Santa Rosa, Cuilapa	119.19	52	Santa Rosa, Santa Rosa de Lima	67.88
9	Petén, La Libertad	118.43	53	Izabal, Morales	67.68
10	Guatemala, Guatemala	113.17	54	Baja Verapaz, Rabinal	67.25
11	Chiquimula, Chiquimula	112.39	55	Chiquimula, San José La Arada	67.01
12	El Progreso, Guastatoya	108.41	56	Santa Rosa, Taxisco	66.71
13	Guatemala, Amatitlán	106.23	57	San Marcos, Malacatán	65.10
14	Petén, Poptún	98.74	58	Escuintla, La Gomera	64.66
15	Petén, San Benito	95.25	59	Chiquimula, Quezaltepeque	64.33
16	Zacapa, Zacapa	95.06	60	Jutiapa, Jutiapa	64.07
17	Petén, San Francisco	93.99	61	Escuintla, La Democracia	63.91
18	Escuintla, Masagua	93.60	62	Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez	63.80
19	Jalapa, San Manuel Chaparrón	93.09	63	Suchitepéquez, San Gabriel	63.44
20	Chimaltenango, El Tejar	90.96	64	Chiquimula, San Juan Ermita	63.35
21	Guatemala, Villa Canales	90.45	65	Quetzaltenango, Coatepeque	61.42
22	Santa Rosa, Santa María Ixhuatán	90.38	66	San Marcos, Pajapita	60.61
23	Escuintla, Escuintla	90.20	67	Chimaltenango, Chimaltenango	59.98
24	Escuintla, Palín	88.96	68	Jutiapa, Jalpatagua	58.90
25	Guatemala, Petapa	87.78	69	Huehuetenango, Huehuetenango	58.78
26	Santa Rosa, Pueblo Nuevo Viñas	87.31	70	Zacapa, Teculután	58.12
27	Guatemala, San José Pinula	86.89	71	Huehuetenango, La Democracia	57.77
28	Escuintla, Nueva Concepción	85.86	72	Zacapa, San Diego	57.60
29	Escuintla, Guanagazapa	85.64	73	Petén, Santa Ana	57.42
30	Jalapa, Jalapa	83.21	74	Jutiapa, San José Acatempa	57.20
31	Santa Rosa, Chiquimulilla	82.64	75	Zacapa, Río Hondo	56.94
32	Santa Rosa, Casillas	82.19	76	Chiquimula, Olopa	56.46
33	Jutiapa, Jerez	81.47	77	Jalapa, San Pedro Pinula	56.42
34	Suchitepéquez, Mazatenango	79.48	78	El Progreso, San Cristóbal Acasaguastlán	54.70
35	Guatemala, Villa Nueva	78.91	79	San Marcos, Ocós	54.44
36	Guatemala, Santa Catarina Pinula	78.88	80	Retalhuleu, San Sebastián	54.03
37	Escuintla, Tiquisate	78.28	81	Zacapa, Usumatlán	53.93
38	Guatemala, Mixco	77.67	82	San Marcos, El Rodeo	53.42
39	Guatemala, San Pedro Ayampuc	76.39	83	San Marcos, San Marcos	53.08
40	Chiquimula, Camotán	76.37	84	Suchitepéquez, San Francisco Zapotitlán	52.31
41	Chiquimula, Ipala	73.91	85	Jalapa, Mataquescuintla	51.03
42	Santa Rosa, Barberena	73.25	86	Escuintla, Siquinalá	51.01
43	Izabal, Los Amates	73.11	87	Zacapa, Gualán	50.47
44	Chiquimula, San Jacinto	71.66	88	Jutiapa, Pasaco	50.23

No.	Departamento, municipio	Homicidios por cada 100,000 habitantes	No.	Departamento, municipio	Homicidios por cada 100,000 habitantes
89	Jutiapa, Moyuta	50.23	138	San Marcos, Esquipulas Palo Gordo	29.21
90	Huehuetenango, Colotenango	49.92	139	Jutiapa, Zapotitlán	29.19
91	Guatemala, Chuarrancho	49.80	140	Alta Verapaz, San Cristóbal Verapaz	29.02
92	Guatemala, San Juan Sacatepéquez	48.90	141	Huehuetenango, Santiago Chimaltenango	28.86
93	Jalapa, Monjas	47.75	142	San Marcos, La Reforma	28.66
94	Jutiapa, Asunción Mita	47.74	143	Petén, Sayaxché	28.66
95	Quiché, Pachalum	47.65	144	San Marcos, El Tumbador	28.33
96	Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas	47.52	145	Chiquimula, Concepción Las Minas	27.97
97	Zacapa, Huité	47.46	146	Suchitepéquez, San Juan Bautista	27.37
98	Izabal, Livingston	46.59	147	Suchitepéquez, Chicacao	27.33
99	El Progreso, Morazán	46.26	148	Huehuetenango, San Antonio Huista	26.46
100	Guatemala, Chinautla	45.74	149	Guatemala, Palencia	26.36
101	El Progreso, Sanarate	45.69	150	Huehuetenango, San Rafael Petzal	26.11
102	Jutiapa, Yupiltepeque	44.87	151	Quetzaltenango, San Miguel Sigüilá	25.78
103	Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa	44.86	152	Huehuetenango, San Pedro Necta	25.77
104	Jalapa, San Luis Jilotepeque	44.56	153	Alta Verapaz, Lanquín	25.33
105	Alta Verapaz, Cobán	40.04	154	Baja Verapaz, San Miguel Chicaj	25.29
106	Alta Verapaz, Santa Cruz Verapaz	39.68	155	Baja Verapaz, Salamá	24.83
107	Quetzaltenango, Colomba	38.95	156	Zacapa, Estanzuela	24.64
108	Chiquimula, Jocotán	38.94	157	Santa Rosa, Guazacapán	23.99
109	Sololá, Concepción	38.74	158	Guatemala, San Pedro Sacatepéquez	23.95
110	Baja Verapaz, San Jerónimo	38.40	159	Alta Verapaz, Tactic	23.92
111	Guatemala, Fraijanes	38.23	160	San Marcos, Catarina	23.89
112	Santa Rosa, Nueva Santa Rosa	38.04	161	Suchitepéquez, Santo Domingo Suchitepéquez	23.43
113	Petén, San Luis	37.84	162	Petén, San José	23.38
114	Sololá, San Marcos La Laguna	37.43	163	Quiché, Ixcán	23.19
115	Suchitepéquez, Patulul	36.53	164	Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez	22.82
116	Quetzaltenango, Génova	35.70	165	Sacatepéquez, Jocotenango	22.58
117	Zacapa, La Unión	35.37	166	Sololá, Panajachel	22.57
118	Jutiapa, Comapa	35.35	167	Zacapa, Cabañas	22.43
119	Jutiapa, Agua Blanca	35.17	168	Quetzaltenango, Quetzaltenango	22.34
120	Sololá, San Lucas Tolimán	35.17	169	Huehuetenango, Ixtahuacán	22.01
121	Sololá, San José Chacayá	34.32	170	Quetzaltenango, Flores Costa Cuca	21.60
122	Jutiapa, Atescatempa	34.05	171	Huehuetenango, Malacatancito	21.58
123	Retalhuleu, San Felipe	33.98	172	Sacatepéquez, Pastores	21.53
124	Suchitepéquez, Río Bravo	33.91	173	Jutiapa, Santa Catarina Mita	21.41
125	Retalhuleu, Retalhuleu	33.31	174	Sacatepéquez, Alotenango	21.16
126	Retalhuleu, San Andrés Villa Seca	33.21	175	Retalhuleu, San Martín Zapotitlán	20.70
127	Suchitepéquez, Samayac	33.12	176	San Marcos, Ixchiguan	20.62
128	Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas	33.12	177	Escuintla, San Vicente Pacaya	19.84
129	Huehuetenango, Santa Bárbara	32.84	178	Sololá, Sololá	19.66
130	Sacatepéquez, Antigua Guatemala	32.64	179	Suchitepéquez, Pueblo Nuevo	19.11
131	Suchitepéquez, Zunilito	31.79	180	Sacatepéquez, San Miguel Dueñas	18.70
132	Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj	31.67	181	Guatemala, San Raymundo	18.53
133	Suchitepéquez, San Bernardino	31.39	182	Quiché, Canillá	18.48
134	Suchitepéquez, San Pablo Jocopilas	31.16	183	Santa Rosa, San Rafael las Flores	18.47
135	Suchitepéquez, San Antonio Suchitepéquez	31.00	184	Quetzaltenango, El Palmar	18.29
136	Retalhuleu, Champerico	29.85	185	Suchitepéquez, Santa Bárbara	18.26
137	Sololá, Santa Catarina Palopó	29.22	186	Retalhuleu, El Asintal	18.09

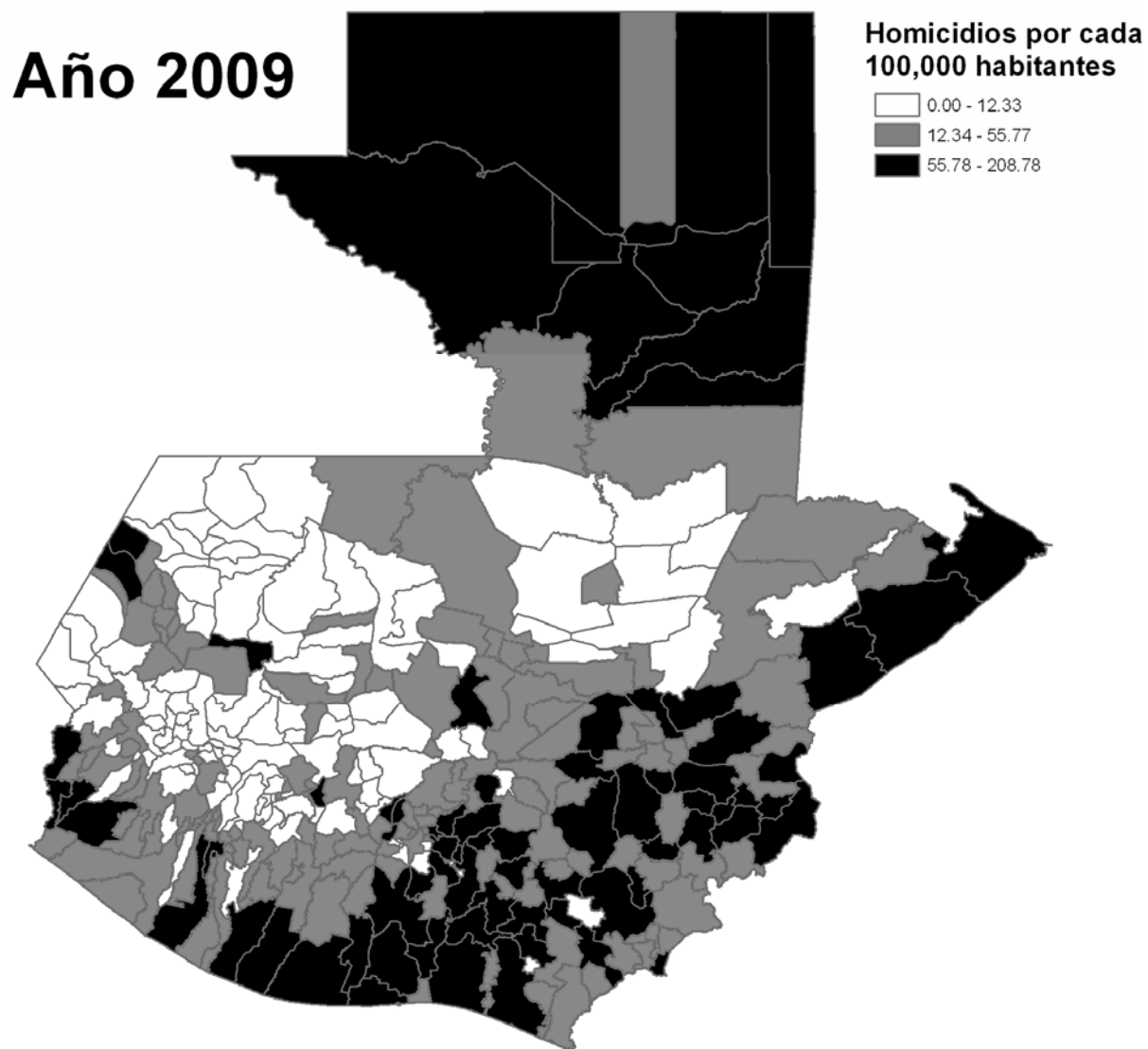


No.	Departamento, municipio	Homicidios por cada 100,000 habitantes	No.	Departamento, municipio	Homicidios por cada 100,000 habitantes
187	Sacatepéquez, Sumpango	17.97	236	Alta Verapaz, San Pedro Carchá	10.17
188	Chimaltenango, Patzicía	17.91	237	Sacatepéquez, Magdalena Milpas Altas	10.07
189	Baja Verapaz, Purulhá	17.59	238	Quiché, Chicamán	9.95
190	Quetzaltenango, La Esperanza	17.35	239	Baja Verapaz, El Chol	9.91
191	Baja Verapaz, Cubulco	17.29	240	Sacatepéquez, Ciudad Vieja	9.79
192	Santa Rosa, Oratorio	17.15	241	Huehuetenango, Jacaltenango	9.75
193	Chimaltenango, Pochuta	17.04	242	Quiché, San Antonio Ilotenango	9.75
194	Suchitepéquez, San Lorenzo	16.98	243	Sacatepéquez, San Antonio Aguas Calientes	9.71
195	El Progreso, San Antonio La Paz	16.60	244	Totonicapán, San Bartolo	9.66
196	Quiché, Santa Cruz del Quiché	16.13	245	San Marcos, Nuevo Progreso	9.62
197	Chimaltenango, San Andrés Itzapa	15.85	246	Quiché, Nebaj	9.38
198	Jutiapa, El Adelanto	15.79	247	Alta Verapaz, Panzós	9.36
199	El Progreso, El Jícaro	15.69	248	Sololá, San Pedro La Laguna	9.28
200	El Progreso, Sansare	15.64	249	Alta Verapaz, Senahú	9.23
201	Chimaltenango, Tecpán	15.41	250	Alta Verapaz, Tucurú	8.85
202	Quiché, San Pedro Jocopilas	15.40	251	San Marcos, San Lorenzo	8.63
203	Jutiapa, Conguaco	15.35	252	Quetzaltenango, Huitán	8.58
204	Escuintla, Iztapa	15.25	253	Quetzaltenango, Cajolá	8.49
205	Santa Rosa, Santa Cruz Naranjo	14.91	254	Alta Verapaz, Chisec	8.47
206	Huehuetenango, La Libertad	14.68	255	Huehuetenango, San Rafael La Independencia	7.74
207	Huehuetenango, San Gaspar Ixchil	14.43	256	Baja Verapaz, Granados	7.40
208	Chimaltenango, Yepocapa	14.26	257	Quetzaltenango, Palestina de los Altos	7.18
209	San Marcos, San Miguel Ixtahuacán	14.13	258	Totonicapán, Santa María Chiquimula	7.16
210	San Marcos, San Pablo	13.77	259	San Marcos, Concepción Tutuapa	6.79
211	Jalapa, San Carlos Alzatate	13.74	260	Totonicapán, Momostenango	6.72
212	Chimaltenango, Acatenango	13.72	261	Huehuetenango, Todos Santos Cuchumatán	6.42
213	Izabal, El Estor	13.65	262	Huehuetenango, San Juan Atitán	6.27
214	San Marcos, El Quetzal	13.25	263	Quiché, Chichicastenango	6.26
215	Alta Verapaz, Tamahú	13.22	264	Totonicapán, Santa Lucía La Reforma	6.22
216	Quiché, San Andrés Sajcabajá	13.21	265	Quetzaltenango, Almolonga	6.04
217	Quiché, San Juan Cotzal	12.54	266	Quiché, Uspantán	6.00
218	Alta Verapaz, Santa Catarina la Tinta	12.41	267	Chimaltenango, Patzún	5.94
219	Retalhuleu, Nuevo San Carlos	12.30	268	Quetzaltenango, San Carlos Sija	5.91
220	Quetzaltenango, Ostuncalco	12.22	269	Huehuetenango, Chiantla	5.59
221	San Marcos, Tajumulco	12.18	270	Huehuetenango, San Mateo Ixtatán	5.59
222	Huehuetenango, San Sebastián Huehuetenango	11.86	271	Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán	5.48
223	Huehuetenango, Tectitán	11.66	272	Huehuetenango, Cuilco	5.42
224	Sacatepéquez, Santa María de Jesús	11.60	273	Sololá, Santiago Atitlán	5.20
225	Huehuetenango, Nentón	11.57	274	San Marcos, San José Ojetenam	5.07
226	San Marcos, San Pedro Sacatepéquez	11.56	275	Alta Verapaz, Chahal	4.97
227	San Marcos, San Antonio Sacatepéquez	11.44	276	Jutiapa, Quesada	4.69
228	Sololá, Nahualá	11.30	277	Huehuetenango, San Sebastián Coatán	4.65
229	Huehuetenango, Santa Eulalia	11.14	278	Huehuetenango, San Juan Ixcay	4.33
230	Huehuetenango, Barillas	11.03	279	Quiché, Chiché	4.24
231	Quiché, Zacualpa	11.01	280	San Marcos, Tacaná	4.02
232	Suchitepéquez, San José El Idolo	10.96	281	Huehuetenango, San Miguel Acatán	3.84
233	Santa Rosa, San Juan Tecuaco	10.62	282	Alta Verapaz, Fray Bartolomé de Las Casas	3.76
234	Quiché, Chinique	10.46	283	Quetzaltenango, Olindepeque	3.72
235	Sololá, San Juan La Laguna	10.29	284	Quiché, Joyabaj	3.19

No.	Departamento, municipio	Homicidios por cada 100,000 habitantes
285	Quiché, Chajul	2.64
286	Totonicapán, Totonicapán	2.61
287	Chimaltenango, Comalapa	2.37
288	Quiché, Sacapulas	2.35
289	Alta Verapaz, San Juan Chamelco	2.15
290	Sololá, Santa Catarina Ixtahuacán	2.03
291	Huehuetenango, Aguacatán	2.01
292	Alta Verapaz, Cahabón	1.95
293	Totonicapán, San Francisco El Alto	1.85
294	Chimaltenango, San Martín Jilotepeque	1.43
295	Chimaltenango, San José Poaquil	0.00
296	Chimaltenango, Santa Apolonia	0.00
297	Chimaltenango, Santa Cruz Balanyá	0.00
298	Chimaltenango, Zaragoza	0.00
299	Guatemala, San José del Golfo	0.00
300	Huehuetenango, Concepción Huista	0.00
301	Huehuetenango, Soloma	0.00
302	Quetzaltenango, Cabricán	0.00
303	Quetzaltenango, Cantel	0.00
304	Quetzaltenango, Concepción Chiquirichapa	0.00
305	Quetzaltenango, Salcajá	0.00
306	Quetzaltenango, San Francisco La Unión	0.00
307	Quetzaltenango, San Martín Sacatepéquez	0.00
308	Quetzaltenango, San Mateo	0.00
309	Quetzaltenango, Sibilia	0.00
310	Quetzaltenango, Zunil	0.00
311	Quiché, Cunén	0.00
312	Quiché, Patzité	0.00
313	Quiché, San Bartolomé Jocotenango	0.00
314	Retalhuleu, Santa Cruz Muluá	0.00
315	Sacatepéquez, Santa Catarina Barahona	0.00
316	San Marcos, Comitancillo	0.00
317	San Marcos, Rio Blanco	0.00
318	San Marcos, San Cristóbal Cucho	0.00
319	San Marcos, San Rafael Pié de La Cuesta	0.00
320	San Marcos, Sibinal	0.00
321	San Marcos, Sipacapa	0.00
322	San Marcos, Tejutla	0.00
323	Sololá, San Antonio Palopó	0.00
324	Sololá, San Pablo La Laguna	0.00
325	Sololá, Santa Clara La Laguna	0.00
326	Sololá, Santa Cruz La Laguna	0.00
327	Sololá, Santa Lucía Utatlán	0.00
328	Sololá, Santa María Visitación	0.00
329	Suchitepéquez, San Miguel Panán	0.00
330	Suchitepéquez, Santo Tomás La Unión	0.00
331	Totonicapán, San Andrés Xecul	0.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC e INE.

Mapa 1
Tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes por municipio



Fuente: Elaboración propia con datos de PNC, INE e IGN.

Tabla 2
Homicidios por municipio, 2009
Orden de mayor a menor frecuencia

No.	Departamento, Municipio	Homicidios	No.	Departamento, Municipio	Homicidios
1	Guatemala, Guatemala	1272	45	Suchitepéquez, Cuyotenango	34
2	Guatemala, Mixco	374	46	Chiquimula, Camotán	33
3	Guatemala, Villa Nueva	335	47	Jalapa, San Pedro Pinula	29
4	Izabal, Puerto Barrios	139	48	El Progreso, San Agustín Acasaguastlán	28
5	Escuintla, Escuintla	129	49	Retalhuleu, Retalhuleu	28
6	Guatemala, Villa Canales	112	50	Izabal, Livingston	27
7	Chiquimula, Chiquimula	107	51	Petén, Dolores	27
8	Guatemala, Petapa	106	52	Baja Verapaz, Rabinal	25
9	Guatemala, Amatitlán	105	53	Huehuetenango, La Democracia	25
10	Jalapa, Jalapa	105	54	El Progreso, Guastatoya	24
11	Petén, La Libertad	95	55	Zacapa, Gualán	24
12	Guatemala, San Juan Sacatepéquez	89	56	Jutiapa, Asunción Mita	23
13	Chiquimula, Esquipulas	88	57	San Marcos, San Marcos	23
14	Escuintla, San José	85	58	Petén, San Luis	22
15	Jutiapa, Jutiapa	84	59	Jutiapa, Moyuta	21
16	Alta Verapaz, Cobán	69	60	Santa Rosa, Pueblo Nuevo Viñas	21
17	Izabal, Morales	69	61	Santa Rosa, Santa María Ixhuatán	21
18	Quetzaltenango, Coatepeque	69	62	Jalapa, Mataquescuintla	20
19	Petén, Flores	68	63	Santa Rosa, Casillas	20
20	Zacapa, Zacapa	67	64	Chiquimula, Jocotán	19
21	Suchitepéquez, Mazatenango	62	65	Chiquimula, Quezaltepeque	19
22	Escuintla, Nueva Concepción	61	66	Petén, Sayaxché	19
23	Guatemala, Santa Catarina Pinula	60	67	San Marcos, Ocós	19
24	Huehuetenango, Huehuetenango	57	68	Alta Verapaz, San Pedro Carchá	18
25	San Marcos, Malacatán	55	69	El Progreso, Sanarate	18
26	Chimaltenango, Chimaltenango	53	70	Quetzaltenango, Colomba	18
27	Guatemala, Chinautla	52	71	Santa Rosa, Taxisco	18
28	Guatemala, San José Pinula	49	72	Chiquimula, Ipala	17
29	Izabal, Los Amates	49	73	Quiché, Ixcán	17
30	Petén, Melchor de Mencos	47	74	Jutiapa, Jalpatagua	16
31	Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa	46	75	Sacatepéquez, Antigua Guatemala	16
32	Petén, San Andrés	44	76	Alta Verapaz, San Cristóbal Verapaz	15
33	San Marcos, Ayutla	44	77	Chimaltenango, El Tejar	15
34	Santa Rosa, Cuilapa	44	78	Guatemala, Palencia	15
35	Santa Rosa, Chiquimulilla	43	79	Jutiapa, El Progreso	15
36	Escuintla, Tiquisate	42	80	Sololá, Sololá	15
37	Petén, Poptún	42	81	Baja Verapaz, Salamá	14
38	Guatemala, San Pedro Ayampuc	41	82	Escuintla, La Democracia	14
39	Escuintla, Palín	39	83	Guatemala, Fraijanes	14
40	Escuintla, La Gomera	37	84	Retalhuleu, San Sebastián	14
41	Escuintla, Masagua	36	85	Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez	14
42	Petén, San Benito	34	86	Suchitepéquez, Chicacao	14
43	Quetzaltenango, Quetzaltenango	34	87	Suchitepéquez, San Antonio Suchitepéquez	14
44	Santa Rosa, Barberena	34	88	Escuintla, Guanagazapa	13

No.	Departamento, municipio	Homicidios	No.	Departamento, municipio	Homicidios
89	Huehuetenango, Colotenango	13	138	Suchitepéquez, Río Bravo	7
90	Quetzaltenango, Génova	13	139	Suchitepéquez, Samayac	7
91	Retalhuleu, San Andrés Villa Seca	13	140	Totonicapán, Momostenango	7
92	Santa Rosa, Nueva Santa Rosa	13	141	Alta Verapaz, Senahú	6
93	Suchitepéquez, Patulul	13	142	Chiquimula, San José La Arada	6
94	Chiquimula, Olopa	12	143	El Progreso, Morazán	6
95	Jalapa, Monjas	12	144	Guatemala, Chuarrancho	6
96	Quiché, Santa Cruz del Quiché	12	145	Huehuetenango, Santa Ana Huista	6
97	San Marcos, El Tumbador	12	146	Huehuetenango, Santa Bárbara	6
98	San Marcos, Pajapita	12	147	Jutiapa, Agua Blanca	6
99	Santa Rosa, Santa Rosa de Lima	12	148	Jutiapa, Atescatempa	6
100	Zacapa, Río Hondo	12	149	Jutiapa, Santa Catarina Mita	6
101	Chimaltenango, Tecpán	11	150	Quetzaltenango, Ostuncalco	6
102	Jalapa, San Luis Jilotepeque	11	151	Quiché, Nebaj	6
103	Huehuetenango, Barillas	10	152	Retalhuleu, El Asintal	6
104	Jutiapa, Comapa	10	153	Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez	6
105	Petén, San Francisco	10	154	Sacatepéquez, Sumpango	6
106	Petén, Santa Ana	10	155	San Marcos, San Pablo	6
107	Suchitepéquez, San Francisco Zapotitlán	10	156	San Marcos, Tajumulco	6
108	Zacapa, La Unión	10	157	Suchitepéquez, San Pablo Jocopilas	6
109	Zacapa, Teculután	10	158	Zacapa, Usumatlán	6
110	Alta Verapaz, Santa Cruz Verapaz	9	159	Alta Verapaz, Lanquín	5
111	Baja Verapaz, Cubulco	9	160	Alta Verapaz, Panzós	5
112	Chiquimula, San Jacinto	9	161	Chimaltenango, Patzicía	5
113	Chiquimula, San Juan Ermita	9	162	Guatemala, San Raymundo	5
114	Escuintla, Siquinalá	9	163	Huehuetenango, Chiantla	5
115	Guatemala, San Pedro Sacatepéquez	9	164	Huehuetenango, La Libertad	5
116	Retalhuleu, Champerico	9	165	Jutiapa, Jerez	5
117	San Marcos, El Rodeo	9	166	Jutiapa, Pasaco	5
118	Sololá, San Lucas Tolimán	9	167	Quetzaltenango, El Palmar	5
119	Suchitepéquez, Santo Domingo Suchitepéquez	9	168	Quetzaltenango, Flores Costa Cuca	5
120	Baja Verapaz, San Jerónimo	8	169	Sacatepéquez, Jocotenango	5
121	Chimaltenango, Parramos	8	170	San Marcos, Ixchiguán	5
122	Huehuetenango, Ixtahuacán	8	171	San Marcos, La Reforma	5
123	Huehuetenango, San Pedro Necta	8	172	San Marcos, San Miguel Ixtahuacán	5
124	Jalapa, San Manuel Chaparrón	8	173	Zacapa, Huité	5
125	Jutiapa, San José Acatepa	8	174	Alta Verapaz, Santa Catarina la Tinta	4
126	Quiché, Chichicastenango	8	175	Chimaltenango, San Andrés Itzapa	4
127	San Marcos, San Pedro Sacatepéquez	8	176	Chimaltenango, Yepocapa	4
128	Sololá, San Andrés Semetabaj	8	177	Chiquimula, Concepción Las Minas	4
129	Alta Verapaz, Chisec	7	178	El Progreso, San Cristóbal Acasaguastlán	4
130	Alta Verapaz, Tactic	7	179	Huehuetenango, Jacaltenango	4
131	Baja Verapaz, Purulhá	7	180	Huehuetenango, Malacatancito	4
132	Baja Verapaz, San Miguel Chicaj	7	181	Huehuetenango, Nentón	4
133	Izabal, El Estor	7	182	Huehuetenango, San Antonio Huista	4
134	Jutiapa, Yupiltepeque	7	183	Huehuetenango, Santa Eulalia	4
135	Retalhuleu, San Felipe	7	184	Quiché, Pachalum	4
136	San Marcos, Catarina	7	185	Quiché, San Pedro Jocopilas	4
137	Sololá, Nahualá	7	186	Retalhuleu, Nuevo San Carlos	4

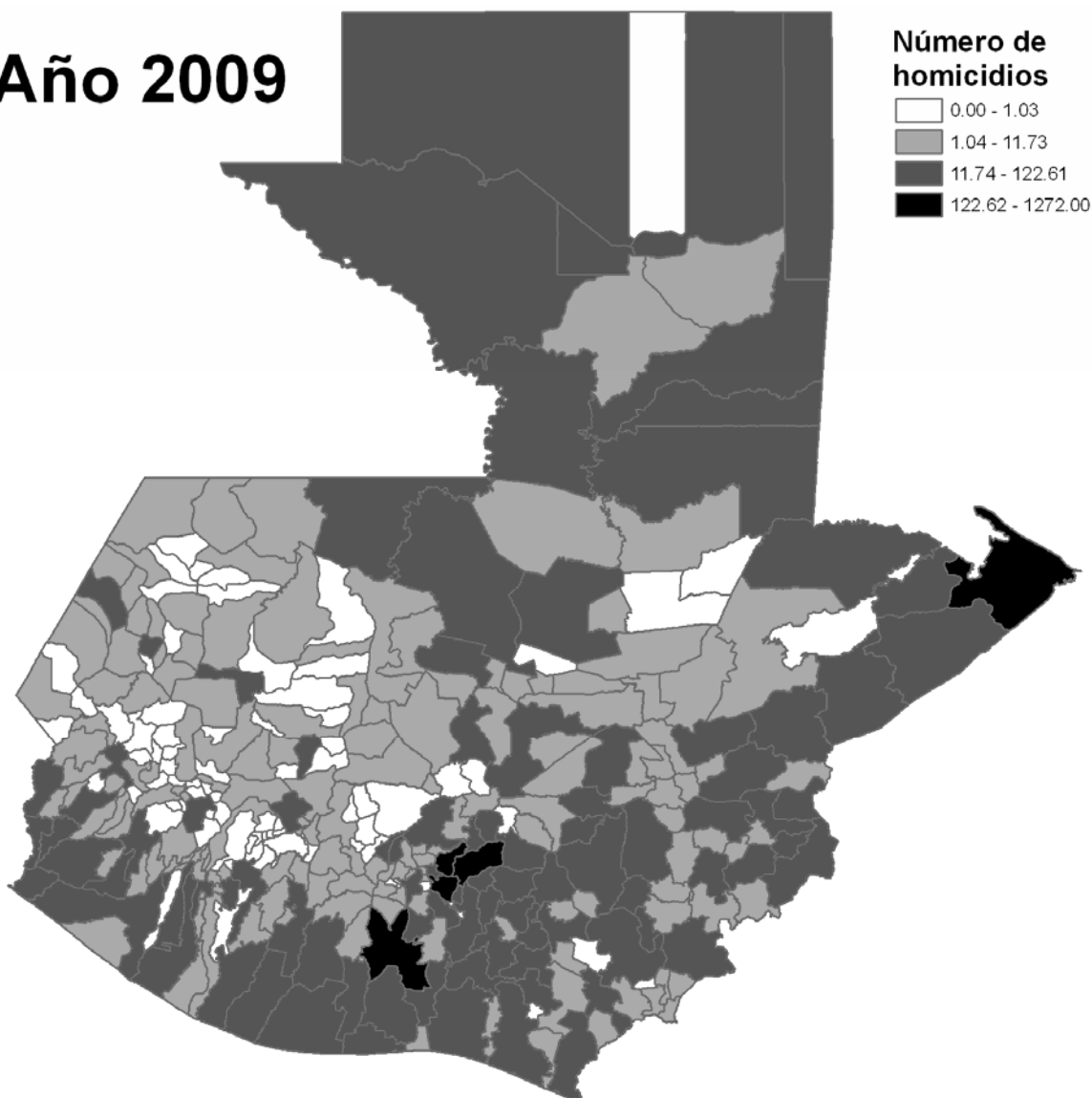
No.	Departamento, municipio	Homicidios	No.	Departamento, municipio	Homicidios
187	Sacatepéquez, Alotenango	4	236	Quetzaltenango, San Miguel Sigüilá	2
188	Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas	4	237	Quiché, Canillá	2
189	San Marcos, Concepción Tutuapa	4	238	Quiché, Joyabaj	2
190	Santa Rosa, Guazacapán	4	239	Quiché, San Antonio Ilotenango	2
191	Santa Rosa, Oratorio	4	240	Retalhuleu, San Martín Zapotitlán	2
192	Suchitepéquez, San Bernardino	4	241	Sacatepéquez, San Miguel Dueñas	2
193	Suchitepéquez, Santa Bárbara	4	242	Sacatepéquez, Santa María de Jesús	2
194	Zacapa, San Diego	4	243	San Marcos, San Antonio Sacatepéquez	2
195	Alta Verapaz, Tucurú	3	244	Santa Rosa, San Rafael las Flores	2
196	Chimaltenango, Acatenango	3	245	Santa Rosa, Santa Cruz Naranjo	2
197	Chimaltenango, Patzún	3	246	Sololá, Concepción	2
198	El Progreso, San Antonio La Paz	3	247	Sololá, Santiago Atitlán	2
199	Escuintla, San Vicente Pacaya	3	248	Suchitepéquez, Pueblo Nuevo	2
200	Huehuetenango, Cuilco	3	249	Suchitepéquez, San Juan Bautista	2
201	Huehuetenango, San Sebastián Huehuetenango	3	250	Suchitepéquez, San Lorenzo	2
202	Jutiapa, Conguaco	3	251	Suchitepéquez, Zunilito	2
203	Jutiapa, Zapotitlán	3	252	Totonicapán, San Cristobal Totonicapán	2
204	Quetzaltenango, La Esperanza	3	253	Alta Verapaz, Cahabón	1
205	Quiché, Chicamán	3	254	Alta Verapaz, Chahal	1
206	Quiché, San Andrés Sajcabajá	3	255	Alta Verapaz, San Juan Chamelco	1
207	Quiché, San Juan Cotzal	3	256	Baja Verapaz, El Chol	1
208	Quiché, Uspantán	3	257	Baja Verapaz, Granados	1
209	Quiché, Zacualpa	3	258	Chimaltenango, Comalapa	1
210	Sacatepéquez, Ciudad Vieja	3	259	Chimaltenango, San Martín Jilotepeque	1
211	Sacatepéquez, Pastores	3	260	Huehuetenango, Aguacatán	1
212	Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas	3	261	Huehuetenango, San Gaspar Ixchil	1
213	Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj	3	262	Huehuetenango, San Juan Atitán	1
214	San Marcos, El Quetzal	3	263	Huehuetenango, San Juan Ixcay	1
215	San Marcos, Esquipulas Palo Gordo	3	264	Huehuetenango, San Miguel Acatán	1
216	San Marcos, Nuevo Progreso	3	265	Huehuetenango, San Rafael La Independencia	1
217	San Marcos, Tacaná	3	266	Huehuetenango, San Sebastián Coatán	1
218	Sololá, Panajachel	3	267	Huehuetenango, Tectitán	1
219	Suchitepéquez, San Gabriel	3	268	Jutiapa, El Adelanto	1
220	Totonicapán, Santa María Chiquimula	3	269	Jutiapa, Quesada	1
221	Totonicapán, Totonicapán	3	270	Petén, San José	1
222	Zacapa, Cabañas	3	271	Quetzaltenango, Almolonga	1
223	Zacapa, Estanzuela	3	272	Quetzaltenango, Cajolá	1
224	Alta Verapaz, Fray Bartolomé de Las Casas	2	273	Quetzaltenango, Huitán	1
225	Alta Verapaz, Tamahú	2	274	Quetzaltenango, Olindepeque	1
226	Chimaltenango, Pochuta	2	275	Quetzaltenango, Palestina de los Altos	1
227	El Progreso, El Jicaro	2	276	Quiché, Chajul	1
228	El Progreso, Sansare	2	277	Quiché, Chiché	1
229	Escuintla, Iztapa	2	278	Quiché, Chinique	1
230	Huehuetenango, San Mateo Ixtatán	2	279	Quiché, Sacapulas	1
231	Huehuetenango, San Rafael Petzal	2	280	Sacatepéquez, Magdalena Milpas Altas	1
232	Huehuetenango, Santiago Chimaltenango	2	281	Sacatepéquez, San Antonio Aguas Calientes	1
233	Huehuetenango, Todos Santos Cuchumatán	2	282	San Marcos, San José Ojetenam	1
234	Jalapa, San Carlos Alzate	2	283	San Marcos, San Lorenzo	1
235	Quetzaltenango, San Carlos Sija	2	284	Santa Rosa, San Juan Tecuaco	1

No.	Departamento, Municipio	Homicidios
285	Sololá, San José Chacayá	1
286	Sololá, San Juan La Laguna	1
287	Sololá, San Marcos La Laguna	1
288	Sololá, San Pedro La Laguna	1
289	Sololá, Santa Catarina Ixtahuacán	1
290	Sololá, Santa Catarina Palopó	1
291	Suchitepéquez, San José El Idolo	1
292	Totonicapán, San Bartolo	1
293	Totonicapán, San Francisco El Alto	1
294	Totonicapán, Santa Lucía La Reforma	1
295	Chimaltenango, San José Poaquil	0
296	Chimaltenango, Santa Apolonia	0
297	Chimaltenango, Santa Cruz Balanyá	0
298	Chimaltenango, Zaragoza	0
299	Guatemala, San José del Golfo	0
300	Huehuetenango, Concepción Huista	0
301	Huehuetenango, Soloma	0
302	Quetzaltenango, Cabricán	0
303	Quetzaltenango, Cantel	0
304	Quetzaltenango, Concepción Chiquirichapa	0
305	Quetzaltenango, Salcajá	0
306	Quetzaltenango, San Francisco La Unión	0
307	Quetzaltenango, San Martín Sacatepéquez	0
308	Quetzaltenango, San Mateo	0
309	Quetzaltenango, Sibilia	0
310	Quetzaltenango, Zunil	0
311	Quiché, Cunén	0
312	Quiché, Patzité	0
313	Quiché, San Bartolomé Jocotenango	0
314	Retalhuleu, Santa Cruz Muluá	0
315	Sacatepéquez, Santa Catarina Barahona	0
316	San Marcos, Comitancillo	0
317	San Marcos, Rio Blanco	0
318	San Marcos, San Cristóbal Cucho	0
319	San Marcos, San Rafael Pié de La Cuesta	0
320	San Marcos, Sibinal	0
321	San Marcos, Sipacapa	0
322	San Marcos, Tejutla	0
323	Sololá, San Antonio Palopó	0
324	Sololá, San Pablo La Laguna	0
325	Sololá, Santa Clara La Laguna	0
326	Sololá, Santa Cruz La Laguna	0
327	Sololá, Santa Lucía Utatlán	0
328	Sololá, Santa María Visitación	0
329	Suchitepéquez, San Miguel Panán	0
330	Suchitepéquez, Santo Tomás La Unión	0
331	Totonicapán, San Andrés Xecul	0

Fuente: elaboración propia con datos de PNC.

Mapa 2
Homicidios por municipio

Año 2009



Fuente: Elaboración propia con datos de PNC, INE e IGN.

Tabla 3
Homicidios de mujeres por municipio, 2009
Orden de mayor a menor frecuencia

No.	Departamento, Municipio	Homicidios de mujeres	No.	Departamento, Municipio	Homicidios de mujeres
1	Guatemala, Guatemala	161	45	Petén, La Libertad	3
2	Guatemala, Mixco	49	46	Petén, San Benito	3
3	Guatemala, Villa Nueva	38	47	Huehuetenango, La Democracia	3
4	Jalapa, Jalapa	20	48	Huehuetenango, Ixtahuacán	3
5	Guatemala, Villa Canales	18	49	Baja Verapaz, Rabinal	3
6	Guatemala, San Juan Sacatepéquez	15	50	El Progreso, Sanarate	3
7	Escuintla, Escuintla	14	51	Chiquimula, Quezaltepeque	3
8	Jutiapa, Jutiapa	13	52	Retalhuleu, San Andrés Villa Seca	3
9	Chiquimula, Esquipulas	12	53	Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez	3
10	Guatemala, Amatitlán	12	54	Guatemala, Fraijanes	3
11	Guatemala, Chinautla	11	55	Santa Rosa, Chiquimulilla	3
12	San Marcos, Malacatán	9	56	Petén, San Andrés	2
13	Guatemala, Petapa	9	57	Huehuetenango, Barillas	2
14	Zacapa, Zacapa	8	58	Izabal, Livingston	2
15	Guatemala, San José Pinula	8	59	Huehuetenango, Santa Ana Huista	2
16	Guatemala, Santa Catarina Pinula	8	60	Huehuetenango, Cuilco	2
17	Suchitepéquez, Mazatenango	8	61	Huehuetenango, Colotenango	2
18	Alta Verapaz, Cobán	7	62	Huehuetenango, Santa Bárbara	2
19	Guatemala, San Pedro Ayampuc	7	63	Zacapa, Gualán	2
20	Santa Rosa, Cuilapa	7	64	Baja Verapaz, Purulhá	2
21	Izabal, Puerto Barrios	6	65	Zacapa, Río Hondo	2
22	Izabal, Morales	6	66	San Marcos, Ixchiguan	2
23	Izabal, Los Amates	6	67	El Progreso, San Agustín Acasaguastlán	2
24	Chiquimula, Chiquimula	6	68	San Marcos, Tajumulco	2
25	Jalapa, San Pedro Pinula	6	69	Baja Verapaz, San Jerónimo	2
26	Chimaltenango, Chimaltenango	6	70	San Marcos, El Tumbador	2
27	Quetzaltenango, Coatepeque	6	71	Sololá, Sololá	2
28	Escuintla, Tiquisate	6	72	Quetzaltenango, La Esperanza	2
29	Escuintla, San José	6	73	Sololá, Nahualá	2
30	Petén, Melchor de Mencos	5	74	Chiquimula, San Jacinto	2
31	San Marcos, Ayutla	5	75	Suchitepéquez, Chicacao	2
32	Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa	5	76	Suchitepéquez, San Pablo Jocopilas	2
33	Jutiapa, Moyuta	5	77	Sacatepéquez, Jocotenango	2
34	Petén, Flores	4	78	Santa Rosa, Santa Rosa de Lima	2
35	Petén, Sayaxché	4	79	Escuintla, Nueva Concepción	2
36	Petén, Poptún	4	80	Escuintla, La Democracia	2
37	Huehuetenango, Huehuetenango	4	81	Jutiapa, Yupiltepeque	2
38	San Marcos, San Marcos	4	82	Santa Rosa, Santa María Ixhuatán	2
39	Chiquimula, Camotán	4	83	Escuintla, La Gomera	2
40	Quetzaltenango, Quetzaltenango	4	84	Petén, Santa Ana	1
41	Jalapa, Monjas	4	85	Petén, Dolores	1
42	Retalhuleu, Retalhuleu	4	86	Petén, San Luis	1
43	Santa Rosa, Casillas	4	87	Quiché, Ixcán	1
44	Escuintla, Masagua	4	88	Alta Verapaz, Fray Bartolomé de Las Casas	1

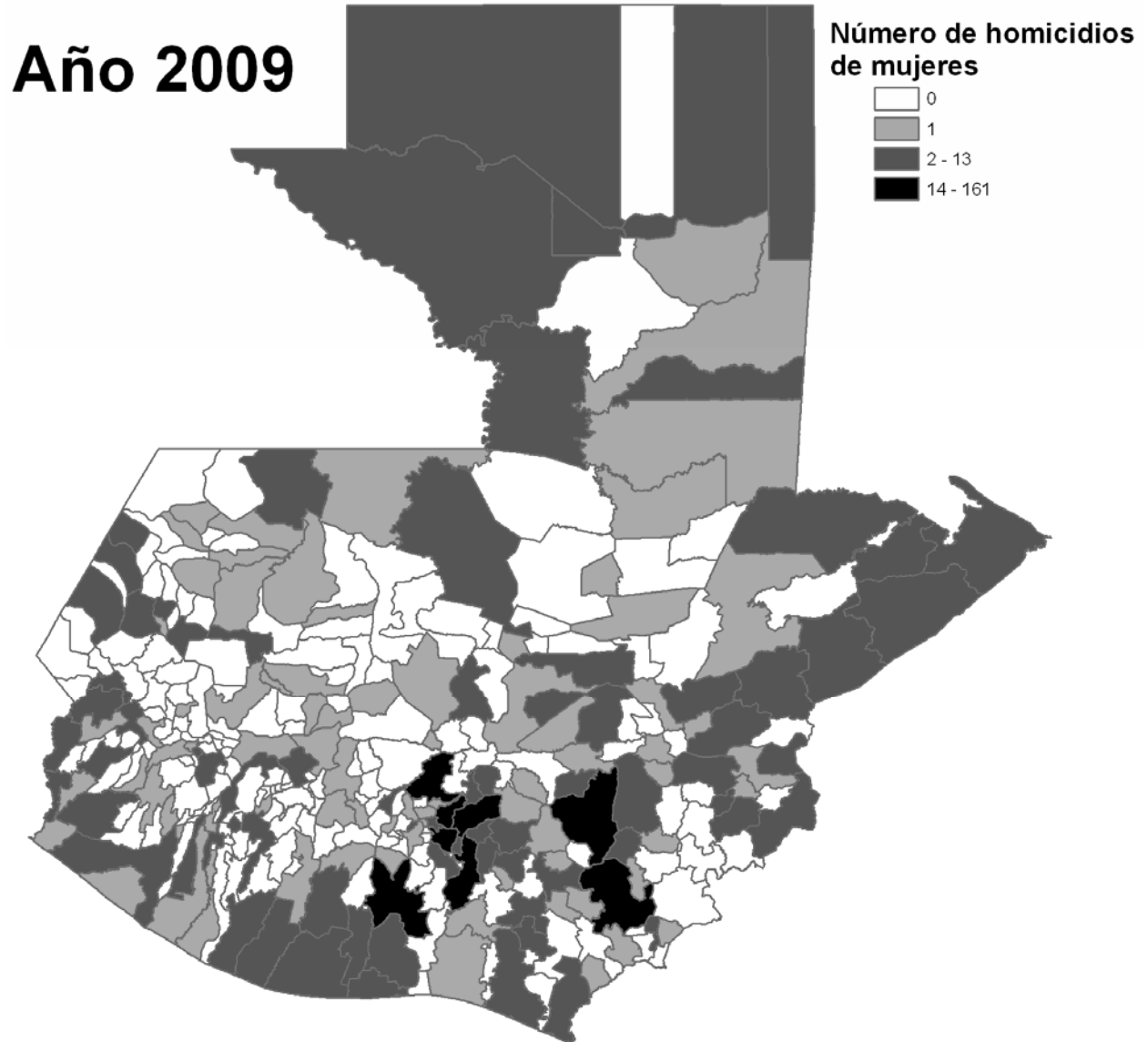
No.	Departamento, Municipio	Homicidios de mujeres	No.	Departamento, Municipio	Homicidios de mujeres
89	Huehuetenango, San Sebastián Coatán	1	138	Chimaltenango, Patzicía	1
90	Huehuetenango, Santa Eulalia	1	139	Jalapa, Mataquescuintla	1
91	Quiché, Nebaj	1	140	Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez	1
92	Huehuetenango, San Miguel Acatán	1	141	Chimaltenango, Parramos	1
93	Izabal, El Estor	1	142	Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas	1
94	Huehuetenango, San Juan Ixcay	1	143	Sacatepéquez, Antigua Guatemala	1
95	Alta Verapaz, Lanquín	1	144	San Marcos, Ocós	1
96	Huehuetenango, Chiantla	1	145	Suchitepéquez, Cuyotenango	1
97	Huehuetenango, Todos Santos Cuchumatán	1	146	Jalapa, San Manuel Chaparrón	1
98	Alta Verapaz, Senahú	1	147	Retalhuleu, San Sebastián	1
99	Quiché, San Juan Cotzal	1	148	Suchitepéquez, Patulul	1
100	Huehuetenango, San Gaspar Ixchil	1	149	Chimaltenango, Yepocapa	1
101	Alta Verapaz, Tactic	1	150	Sacatepéquez, Alotenango	1
102	Baja Verapaz, Cubulco	1	151	Santa Rosa, San Rafael las Flores	1
103	Totonicapán, Momostenango	1	152	Suchitepéquez, San Lorenzo	1
104	Baja Verapaz, Salamá	1	153	Jutiapa, El Progreso	1
105	Quiché, San Pedro Jocopilas	1	154	Santa Rosa, Santa Cruz Naranjo	1
106	Totonicapán, Santa Lucía La Reforma	1	155	Retalhuleu, Champerico	1
107	Zacapa, Teculután	1	156	Jutiapa, Quesada	1
108	Quiché, Zacualpa	1	157	Jutiapa, San José Acatepa	1
109	El Progreso, Morazán	1	158	Santa Rosa, Pueblo Nuevo Viñas	1
110	Quiché, Santa Cruz del Quiché	1	159	Jutiapa, Atescatempa	1
111	Quetzaltenango, Huitán	1	160	Jutiapa, Comapa	1
112	Quiché, Chiché	1	161	Santa Rosa, Taxisco	1
113	Zacapa, Estanzuela	1	162	Jutiapa, Conguaco	1
114	San Marcos, San Pablo	1	163	Alta Verapaz, Cahabón	0
115	San Marcos, San Pedro Sacatepéquez	1	164	Alta Verapaz, Chahal	0
116	Quiché, Chichicastenango	1	165	Alta Verapaz, Chisec	0
117	Quiché, Pachalum	1	166	Alta Verapaz, Panzós	0
118	Zacapa, Cabañas	1	167	Alta Verapaz, San Cristóbal Verapaz	0
119	Totonicapán, Totonicapán	1	168	Alta Verapaz, San Juan Chamelco	0
120	Chimaltenango, Tecpán	1	169	Alta Verapaz, San Pedro Carchá	0
121	El Progreso, Guastotoya	1	170	Alta Verapaz, Santa Catarina la Tinta	0
122	Quetzaltenango, Ostuncalco	1	171	Alta Verapaz, Santa Cruz Verapaz	0
123	Chiquimula, Jocotán	1	172	Alta Verapaz, Tamahú	0
124	Quetzaltenango, San Miguel Sigüilá	1	173	Alta Verapaz, Tucurú	0
125	San Marcos, El Quetzal	1	174	Baja Verapaz, El Chol	0
126	Zacapa, San Diego	1	175	Baja Verapaz, Granados	0
127	Quetzaltenango, Colomba	1	176	Baja Verapaz, San Miguel Chicaj	0
128	El Progreso, San Antonio La Paz	1	177	Chimaltenango, Acatenango	0
129	Chiquimula, San Juan Ermita	1	178	Chimaltenango, Comalapa	0
130	San Marcos, Pajapita	1	179	Chimaltenango, El Tejar	0
131	Guatemala, Palencia	1	180	Chimaltenango, Pochuta	0
132	Chimaltenango, Patzún	1	181	Chimaltenango, San Andrés Itzapa	0
133	Sacatepéquez, Sumpango	1	182	Chimaltenango, San José Poaquil	0
134	Guatemala, San Pedro Sacatepéquez	1	183	Chimaltenango, San Martín Jilotepeque	0
135	Sololá, San Juan La Laguna	1	184	Chimaltenango, Santa Apolonia	0
136	Retalhuleu, Nuevo San Carlos	1	185	Chimaltenango, Santa Cruz Balanyá	0
137	Suchitepéquez, San Francisco Zapotitlán	1	186	Chimaltenango, Zaragoza	0

No.	Departamento, Municipio	Homicidios de mujeres	No.	Departamento, Municipio	Homicidios de mujeres
187	Chiquimula, Concepción Las Minas	0	236	Quetzaltenango, Flores Costa Cuca	0
188	Chiquimula, Ipala	0	237	Quetzaltenango, Génova	0
189	Chiquimula, Olopa	0	238	Quetzaltenango, Olinstepeque	0
190	Chiquimula, San José La Arada	0	239	Quetzaltenango, Palestina de los Altos	0
191	El Progreso, El Júcaro	0	240	Quetzaltenango, Salcajá	0
192	El Progreso, San Cristóbal Acasaguastlán	0	241	Quetzaltenango, San Carlos Sija	0
193	El Progreso, Sansare	0	242	Quetzaltenango, San Francisco La Unión	0
194	Escuintla, Guanagazapa	0	243	Quetzaltenango, San Martín Sacatepéquez	0
195	Escuintla, Iztapa	0	244	Quetzaltenango, San Mateo	0
196	Escuintla, Palín	0	245	Quetzaltenango, Sibilia	0
197	Escuintla, San Vicente Pacaya	0	246	Quetzaltenango, Zunil	0
198	Escuintla, Siquinalá	0	247	Quiché, Canillá	0
199	Guatemala, Chuarrancho	0	248	Quiché, Chajul	0
200	Guatemala, San José del Golfo	0	249	Quiché, Chicamán	0
201	Guatemala, San Raymundo	0	250	Quiché, Chinique	0
202	Huehuetenango, Aguacatán	0	251	Quiché, Cunén	0
203	Huehuetenango, Concepción Huista	0	252	Quiché, Joyabaj	0
204	Huehuetenango, Jacaltenango	0	253	Quiché, Patzité	0
205	Huehuetenango, La Libertad	0	254	Quiché, Sacapulas	0
206	Huehuetenango, Malacatancito	0	255	Quiché, San Andrés Sajcabajá	0
207	Huehuetenango, Nentón	0	256	Quiché, San Antonio Ilotenango	0
208	Huehuetenango, San Antonio Huista	0	257	Quiché, San Bartolomé Jocotenango	0
209	Huehuetenango, San Juan Atitán	0	258	Quiché, Uspantán	0
210	Huehuetenango, San Mateo Ixtatán	0	259	Retalhuleu, El Asintal	0
211	Huehuetenango, San Pedro Necta	0	260	Retalhuleu, San Felipe	0
212	Huehuetenango, San Rafael La Independencia	0	261	Retalhuleu, San Martín Zapotitlán	0
213	Huehuetenango, San Rafael Petzal	0	262	Retalhuleu, Santa Cruz Muluá	0
214	Huehuetenango, San Sebastián Huehuetenango	0	263	Sacatepéquez, Ciudad Vieja	0
215	Huehuetenango, Santiago Chimaltenango	0	264	Sacatepéquez, Magdalena Milpas Altas	0
216	Huehuetenango, Soloma	0	265	Sacatepéquez, Pastores	0
217	Huehuetenango, Tectitán	0	266	Sacatepéquez, San Antonio Aguas Calientes	0
218	Jalapa, San Carlos Alzatate	0	267	Sacatepéquez, San Miguel Dueñas	0
219	Jalapa, San Luis Jilotepeque	0	268	Sacatepéquez, Santa Catarina Barahona	0
220	Jutiapa, Agua Blanca	0	269	Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas	0
221	Jutiapa, Asunción Mita	0	270	Sacatepéquez, Santa María de Jesús	0
222	Jutiapa, El Adelanto	0	271	Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj	0
223	Jutiapa, Jalpatagua	0	272	San Marcos, Catarina	0
224	Jutiapa, Jerez	0	273	San Marcos, Comitancillo	0
225	Jutiapa, Pasaco	0	274	San Marcos, Concepción Tutuapa	0
226	Jutiapa, Santa Catarina Mita	0	275	San Marcos, El Rodeo	0
227	Jutiapa, Zapotitlán	0	276	San Marcos, Esquipulas Palo Gordo	0
228	Petén, San Francisco	0	277	San Marcos, La Reforma	0
229	Petén, San José	0	278	San Marcos, Nuevo Progreso	0
230	Quetzaltenango, Almolonga	0	279	San Marcos, Río Blanco	0
231	Quetzaltenango, Cabricán	0	280	San Marcos, San Antonio Sacatepéquez	0
232	Quetzaltenango, Cajolá	0	281	San Marcos, San Cristóbal Cucho	0
233	Quetzaltenango, Cantel	0	282	San Marcos, San José Ojetenam	0
234	Quetzaltenango, Concepción Chiquirichapa	0	283	San Marcos, San Lorenzo	0
235	Quetzaltenango, El Palmar	0	284	San Marcos, San Miguel Ixtahuacán	0

No.	Departamento, Municipio	Homicidios de mujeres
285	San Marcos, San Rafael Pié de La Cuesta	0
286	San Marcos, Sibinal	0
287	San Marcos, Sipacapa	0
288	San Marcos, Tacaná	0
289	San Marcos, Tejutla	0
290	Santa Rosa, Barberena	0
291	Santa Rosa, Guazacapán	0
292	Santa Rosa, Nueva Santa Rosa	0
293	Santa Rosa, Oratorio	0
294	Santa Rosa, San Juan Tecuaco	0
295	Sololá, Concepción	0
296	Sololá, Panajachel	0
297	Sololá, San Andrés Semetabaj	0
298	Sololá, San Antonio Palopó	0
299	Sololá, San José Chacayá	0
300	Sololá, San Lucas Tolimán	0
301	Sololá, San Marcos La Laguna	0
302	Sololá, San Pablo La Laguna	0
303	Sololá, San Pedro La Laguna	0
304	Sololá, Santa Catarina Ixtahuacán	0
305	Sololá, Santa Catarina Palopó	0
306	Sololá, Santa Clara La Laguna	0
307	Sololá, Santa Cruz La Laguna	0
308	Sololá, Santa Lucía Utatlán	0
309	Sololá, Santa María Visitación	0
310	Sololá, Santiago Atitlán	0
311	Suchitepéquez, Pueblo Nuevo	0
312	Suchitepéquez, Río Bravo	0
313	Suchitepéquez, Samayac	0
314	Suchitepéquez, San Antonio Suchitepéquez	0
315	Suchitepéquez, San Bernardino	0
316	Suchitepéquez, San Gabriel	0
317	Suchitepéquez, San José El Idolo	0
318	Suchitepéquez, San Juan Bautista	0
319	Suchitepéquez, San Miguel Panán	0
320	Suchitepéquez, Santa Bárbara	0
321	Suchitepéquez, Santo Domingo Suchitepéquez	0
322	Suchitepéquez, Santo Tomás La Unión	0
323	Suchitepéquez, Zunilito	0
324	Totonicapán, San Andrés Xecul	0
325	Totonicapán, San Bartolo	0
326	Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán	0
327	Totonicapán, San Francisco El Alto	0
328	Totonicapán, Santa María Chiquimula	0
329	Zacapa, Huité	0
330	Zacapa, La Unión	0
331	Zacapa, Usumatlán	0

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Mapa 3
Homicidios de mujeres por municipio



Fuente: elaboración propia con datos de la PNC, el INE y el IGN.

Tabla 4
Homicidios de menores de edad por municipio, 2009
Orden de mayor a menor frecuencia

No.	Departamento, Municipio	Homicidios de menores	No.	Departamento, Municipio	Homicidios de menores
1	Guatemala, Guatemala	149	45	Guatemala, San Pedro Sacatepéquez	2
2	Guatemala, Villa Nueva	38	46	Suchitepéquez, Mazatenango	2
3	Guatemala, Mixco	34	47	Retalhuleu, Retalhuleu	2
4	Guatemala, San Juan Sacatepéquez	13	48	Suchitepéquez, San Antonio Suchitepéquez	2
5	Guatemala, Petapa	13	49	Santa Rosa, Santa Rosa de Lima	2
6	Guatemala, Villa Canales	12	50	Santa Rosa, Nueva Santa Rosa	2
7	Jalapa, Jalapa	11	51	Jutiapa, Jutiapa	2
8	Guatemala, Santa Catarina Pinula	10	52	Santa Rosa, Cuilapa	2
9	Guatemala, San José Pinula	8	53	Escuintla, Tiquisate	2
10	Guatemala, Amatitlán	8	54	Escuintla, Nueva Concepción	2
11	Escuintla, Escuintla	8	55	Jutiapa, Jalpatagua	2
12	Petén, San Andrés	7	56	Santa Rosa, Taxisco	2
13	Chiquimula, Esquipulas	7	57	Petén, Melchor de Mencos	1
14	Quetzaltenango, Coatepeque	7	58	Petén, Flores	1
15	Petén, La Libertad	6	59	Petén, Sayaxché	1
16	Chiquimula, Chiquimula	6	60	Petén, Poptún	1
17	Guatemala, Chimaltán	6	61	Alta Verapaz, Chisec	1
18	Izabal, Los Amates	5	62	Huehuetenango, Barillas	1
19	Escuintla, San José	5	63	Huehuetenango, Santa Eulalia	1
20	Petén, Santa Ana	4	64	Huehuetenango, San Miguel Acatán	1
21	Quiché, Ixcán	4	65	Alta Verapaz, San Pedro Carchá	1
22	Alta Verapaz, Cobán	4	66	Huehuetenango, La Democracia	1
23	Izabal, Puerto Barrios	4	67	Huehuetenango, La Libertad	1
24	Huehuetenango, Huehuetenango	4	68	Huehuetenango, Cuilco	1
25	San Marcos, Malacatán	4	69	Alta Verapaz, Senahú	1
26	Chimaltenango, Chimaltenango	4	70	Huehuetenango, San Juan Atitán	1
27	Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa	4	71	Huehuetenango, Ixtahuacán	1
28	Petén, San Benito	3	72	Huehuetenango, San Sebastián Huehuetenango	1
29	Izabal, Morales	3	73	Alta Verapaz, San Cristóbal Verapaz	1
30	El Progreso, San Agustín Acasaguastlán	3	74	Huehuetenango, Santa Bárbara	1
31	Chiquimula, Camotán	3	75	San Marcos, San Miguel Ixtahuacán	1
32	Sololá, Sololá	3	76	Zacapa, Gualán	1
33	Jalapa, San Pedro Pinula	3	77	Baja Verapaz, Rabinal	1
34	San Marcos, Ayutla	3	78	Totonicapán, Momostenango	1
35	Suchitepéquez, Chicacao	3	79	Baja Verapaz, Salamá	1
36	Sacatepéquez, San Lucas Sacatepéquez	3	80	Quetzaltenango, San Carlos Sija	1
37	Santa Rosa, Santa María Ixhuatán	3	81	San Marcos, Ixchiguan	1
38	Petén, Dolores	2	82	Zacapa, Teculután	1
39	Huehuetenango, Colotenango	2	83	San Marcos, Tajumulco	1
40	Alta Verapaz, Tactic	2	84	San Marcos, San Marcos	1
41	San Marcos, La Reforma	2	85	Chimaltenango, Tecpán	1
42	Quetzaltenango, Colomba	2	86	El Progreso, Guastatoya	1
43	Guatemala, San Pedro Ayampuc	2	87	Chiquimula, Jocotán	1
44	Jalapa, San Luis Jilotepeque	2	88	Guatemala, Chuarrancho	1

No.	Departamento, Municipio	Homicidios de menores	No.	Departamento, Municipio	Homicidios de menores
89	San Marcos, El Tumbador	1	138	Huehuetenango, Santiago Chimaltenango	0
90	Sololá, Nahualá	1	139	Quiché, Chicamán	0
91	Zacapa, San Diego	1	140	Alta Verapaz, Panzós	0
92	Chiquimula, San José La Arada	1	141	Huehuetenango, Aguacatán	0
93	Guatemala, Palencia	1	142	Quiché, San Juan Cotzal	0
94	Chimaltenango, El Tejar	1	143	Alta Verapaz, San Juan Chamelco	0
95	Sololá, San Juan La Laguna	1	144	Huehuetenango, San Rafael Petzal	0
96	Retalhuleu, Nuevo San Carlos	1	145	Huehuetenango, Tectitán	0
97	Jalapa, Mataquescuintla	1	146	Quiché, Cunén	0
98	Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez	1	147	San Marcos, Tacaná	0
99	Retalhuleu, San Andrés Villa Seca	1	148	Huehuetenango, San Gaspar Ixchil	0
100	Suchitepéquez, San Pablo Jocopilas	1	149	Alta Verapaz, Santa Cruz Verapaz	0
101	Sacatepéquez, Antigua Guatemala	1	150	Alta Verapaz, Tukurú	0
102	San Marcos, Ocós	1	151	Alta Verapaz, Tamahú	0
103	Retalhuleu, San Sebastián	1	152	San Marcos, Concepción Tutuapa	0
104	Suchitepéquez, Santa Bárbara	1	153	Baja Verapaz, Cubulco	0
105	Chimaltenango, Yepocapa	1	154	Quiché, San Andrés Sajcabajá	0
106	Santa Rosa, Casillas	1	155	Quiché, Sacapulas	0
107	Jutiapa, El Progreso	1	156	Huehuetenango, Malacatancito	0
108	Escuintla, Palín	1	157	Baja Verapaz, Purulhá	0
109	Santa Rosa, Barberena	1	158	Baja Verapaz, San Miguel Chicaj	0
110	Jutiapa, Yupiltepeque	1	159	San Marcos, San José Ojetenam	0
111	Escuintla, Masagua	1	160	Quiché, Canillá	0
112	Santa Rosa, Chiquimulilla	1	161	San Marcos, Sipacapa	0
113	Petén, San José	0	162	Quiché, San Pedro Jocopilas	0
114	Petén, San Francisco	0	163	San Marcos, Tejutla	0
115	Petén, San Luis	0	164	Quiché, San Bartolomé Jocotenango	0
116	Alta Verapaz, Fray Bartolomé de Las Casas	0	165	Zacapa, Río Hondo	0
117	Huehuetenango, San Mateo Ixtatán	0	166	Totonicapán, Santa Lucía La Reforma	0
118	Huehuetenango, Nentón	0	167	San Marcos, Comitancillo	0
119	Alta Verapaz, Chahal	0	168	San Marcos, Sibinal	0
120	Huehuetenango, San Sebastián Coatán	0	169	Quiché, Zacualpa	0
121	Izabal, Livingston	0	170	Quetzaltenango, Cabricán	0
122	Quiché, Nebaj	0	171	Totonicapán, San Bartolo	0
123	Huehuetenango, Jacaltenango	0	172	Baja Verapaz, San Jerónimo	0
124	Huehuetenango, Santa Ana Huista	0	173	Totonicapán, Santa María Chiquimula	0
125	Quiché, Chajul	0	174	Quiché, San Antonio Ilotenango	0
126	Huehuetenango, San Rafael La Independencia	0	175	El Progreso, Morazán	0
127	Quiché, Uspantán	0	176	Quiché, Santa Cruz del Quiché	0
128	Alta Verapaz, Cahabón	0	177	Quiché, Joyabaj	0
129	Huehuetenango, San Antonio Huista	0	178	El Progreso, San Cristóbal Acasaguastlán	0
130	Huehuetenango, Soloma	0	179	Quiché, Chinique	0
131	Izabal, El Estor	0	180	Zacapa, Zacapa	0
132	Huehuetenango, Concepción Huista	0	181	San Marcos, Río Blanco	0
133	Huehuetenango, San Juan Ixcay	0	182	Zacapa, Usumatlán	0
134	Alta Verapaz, Lanquín	0	183	Quetzaltenango, Huitán	0
135	Huehuetenango, Chiantla	0	184	Quiché, Chiché	0
136	Huehuetenango, Todos Santos Cuchumatán	0	185	Zacapa, Estanzuela	0
137	Huehuetenango, San Pedro Necta	0	186	San Marcos, San Lorenzo	0

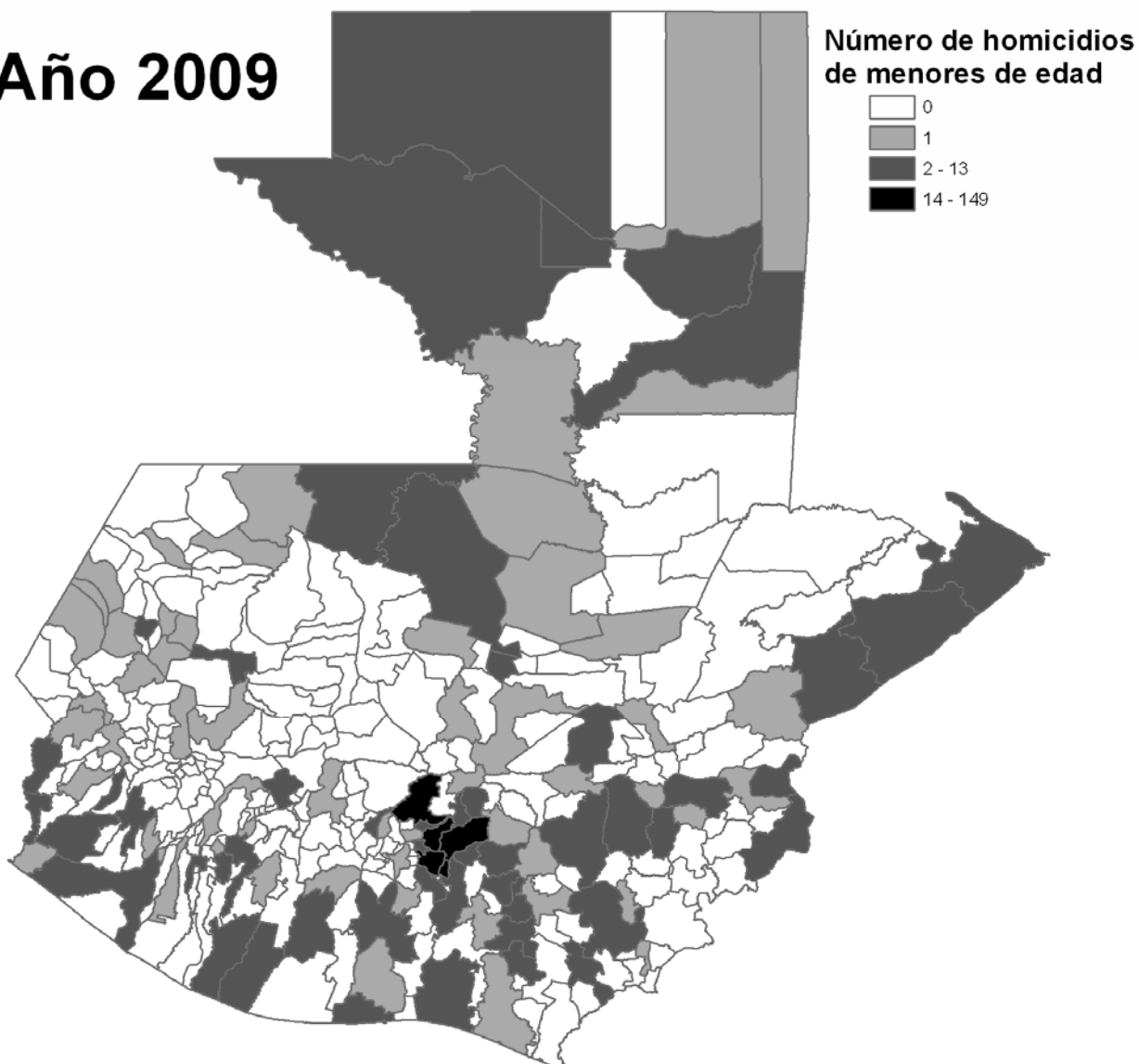
No.	Departamento, Municipio	Homicidios de menores	No.	Departamento, Municipio	Homicidios de menores
187	Zacapa, La Unión	0	236	Chiquimula, San Juan Ermita	0
188	San Marcos, San Pablo	0	237	Chimaltenango, Comalapa	0
189	Baja Verapaz, El Chol	0	238	Sololá, Concepción	0
190	Quetzaltenango, Sibilia	0	239	San Marcos, Pajapita	0
191	Totonicapán, San Francisco El Alto	0	240	Sololá, San José Chacayá	0
192	Baja Verapaz, Granados	0	241	Quetzaltenango, Zunil	0
193	San Marcos, San Pedro Sacatepéquez	0	242	Quetzaltenango, El Palmar	0
194	San Marcos, San Antonio Sacatepéquez	0	243	Chiquimula, Olopa	0
195	Quiché, Patzité	0	244	Sololá, Panajachel	0
196	Quiché, Chichicastenango	0	245	Sololá, Santa Cruz La Laguna	0
197	Zacapa, Huité	0	246	Sololá, San Marcos La Laguna	0
198	Quiché, Pachalum	0	247	Chiquimula, San Jacinto	0
199	San Marcos, San Rafael Pié de La Cuesta	0	248	Sololá, San Pablo La Laguna	0
200	Zacapa, Cabañas	0	249	Sololá, Santa Clara La Laguna	0
201	Quetzaltenango, Palestina de los Altos	0	250	Sololá, Santa Catarina Palopó	0
202	Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán	0	251	Chimaltenango, Zaragoza	0
203	San Marcos, Esquipulas Palo Gordo	0	252	Sololá, Santa María Visitación	0
204	Totonicapán, Totonicapán	0	253	Chimaltenango, Patzún	0
205	El Progreso, El Jícaro	0	254	Sacatepéquez, Sumpango	0
206	Quetzaltenango, Cajolá	0	255	Chimaltenango, Santa Cruz Balanyá	0
207	Quetzaltenango, San Francisco La Unión	0	256	Chiquimula, Quezaltepeque	0
208	Chimaltenango, San Martín Jilotepeque	0	257	Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj	0
209	San Marcos, El Rodeo	0	258	Sololá, San Antonio Palopó	0
210	Totonicapán, San Andrés Xecul	0	259	Suchitepéquez, Pueblo Nuevo	0
211	Chimaltenango, San José Poaquil	0	260	Suchitepéquez, San Francisco Zapotitlán	0
212	Quetzaltenango, Ostuncalco	0	261	Chiquimula, Ipala	0
213	Quetzaltenango, San Miguel Sigüilá	0	262	Chimaltenango, Patzicía	0
214	Quetzaltenango, Olinstepeque	0	263	Sololá, San Pedro La Laguna	0
215	San Marcos, San Cristóbal Cucho	0	264	Quetzaltenango, Flores Costa Cuca	0
216	San Marcos, Nuevo Progreso	0	265	Retalhuleu, San Felipe	0
217	San Marcos, Catarina	0	266	Quetzaltenango, Génova	0
218	Chimaltenango, Santa Apolonia	0	267	Sololá, Santiago Atitlán	0
219	Quetzaltenango, La Esperanza	0	268	Retalhuleu, El Asintal	0
220	El Progreso, Sansare	0	269	Suchitepéquez, Zunilito	0
221	Quetzaltenango, Salcajá	0	270	Chimaltenango, San Andrés Itzapa	0
222	Guatemala, San Raymundo	0	271	Sololá, San Lucas Toliman	0
223	Quetzaltenango, Quetzaltenango	0	272	Sacatepéquez, Pastores	0
224	San Marcos, El Quetzal	0	273	Suchitepéquez, Santo Tomás La Unión	0
225	Quetzaltenango, San Mateo	0	274	Chimaltenango, Parramos	0
226	Quetzaltenango, Concepción Chiquirichapa	0	275	Retalhuleu, San Martín Zapotitlán	0
227	Quetzaltenango, Cantel	0	276	Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas	0
228	Guatemala, San José del Golfo	0	277	Chimaltenango, Pochuta	0
229	Quetzaltenango, San Martín Sacatepéquez	0	278	Sacatepéquez, Jocotenango	0
230	Quetzaltenango, Almolonga	0	279	Suchitepéquez, Cuyotenango	0
231	Sololá, Santa Catarina Ixtahuacán	0	280	Chimaltenango, Acatenango	0
232	El Progreso, San Antonio La Paz	0	281	Jalapa, San Manuel Chaparrón	0
233	El Progreso, Sanarate	0	282	Retalhuleu, Santa Cruz Muluá	0
234	Sololá, Santa Lucía Utatlán	0	283	Suchitepéquez, Samayac	0
235	Sololá, San Andrés Semetabaj	0	284	Jalapa, Monjas	0

No.	Departamento, Municipio	Homicidios de menores
285	Chiquimula, Concepción Las Minas	0
286	Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas	0
287	Jutiapa, Agua Blanca	0
288	Sacatepéquez, Santa Catarina Barahona	0
289	Suchitepéquez, Patulul	0
290	Sacatepéquez, San Antonio Aguas Calientes	0
291	Sacatepéquez, San Miguel Dueñas	0
292	Sacatepéquez, Magdalena Milpas Altas	0
293	Sacatepéquez, Ciudad Vieja	0
294	Guatemala, Fraijanes	0
295	Suchitepéquez, San Bernardino	0
296	Jutiapa, Santa Catarina Mita	0
297	Jalapa, San Carlos Alzatate	0
298	Suchitepéquez, San Miguel Panán	0
299	Sacatepéquez, Santa María de Jesús	0
300	Suchitepéquez, San Gabriel	0
301	Suchitepéquez, Santo Domingo Suchitepéquez	0
302	Sacatepéquez, Alotenango	0
303	Santa Rosa, San Rafael las Flores	0
304	Suchitepéquez, San Lorenzo	0
305	Suchitepéquez, San José El Idolo	0
306	Suchitepéquez, Rio Bravo	0
307	Suchitepéquez, San Juan Bautista	0
308	Escuintla, Siquinalá	0
309	Jutiapa, Asunción Mita	0
310	Santa Rosa, Santa Cruz Naranjo	0
311	Escuintla, San Vicente Pacaya	0
312	Retalhuleu, Champerico	0
313	Jutiapa, Quesada	0
314	Jutiapa, San José Acatempa	0
315	Santa Rosa, Pueblo Nuevo Viñas	0
316	Escuintla, Guanagazapa	0
317	Escuintla, La Democracia	0
318	Santa Rosa, Oratorio	0
319	Jutiapa, Atescatempa	0
320	Jutiapa, Comapa	0
321	Jutiapa, El Adelanto	0
322	Escuintla, La Gomera	0
323	Jutiapa, Zapotitlán	0
324	Jutiapa, Jerez	0
325	Santa Rosa, Guazacapán	0
326	Santa Rosa, San Juan Tecuaco	0
327	Jutiapa, Conguaco	0
328	Jutiapa, Moyuta	0
329	Escuintla, Iztapa	0
330	Jutiapa, Pasaco	0
331	Alta Verapaz, Santa Catarina la Tinta	0

Fuente: Elaboración propia con datos de PNC.

Mapa 4
Homicidios de menores de edad por municipio

Año 2009



Fuente: Elaboración propia con datos de PNC, INE e IGN.

Tabla 5

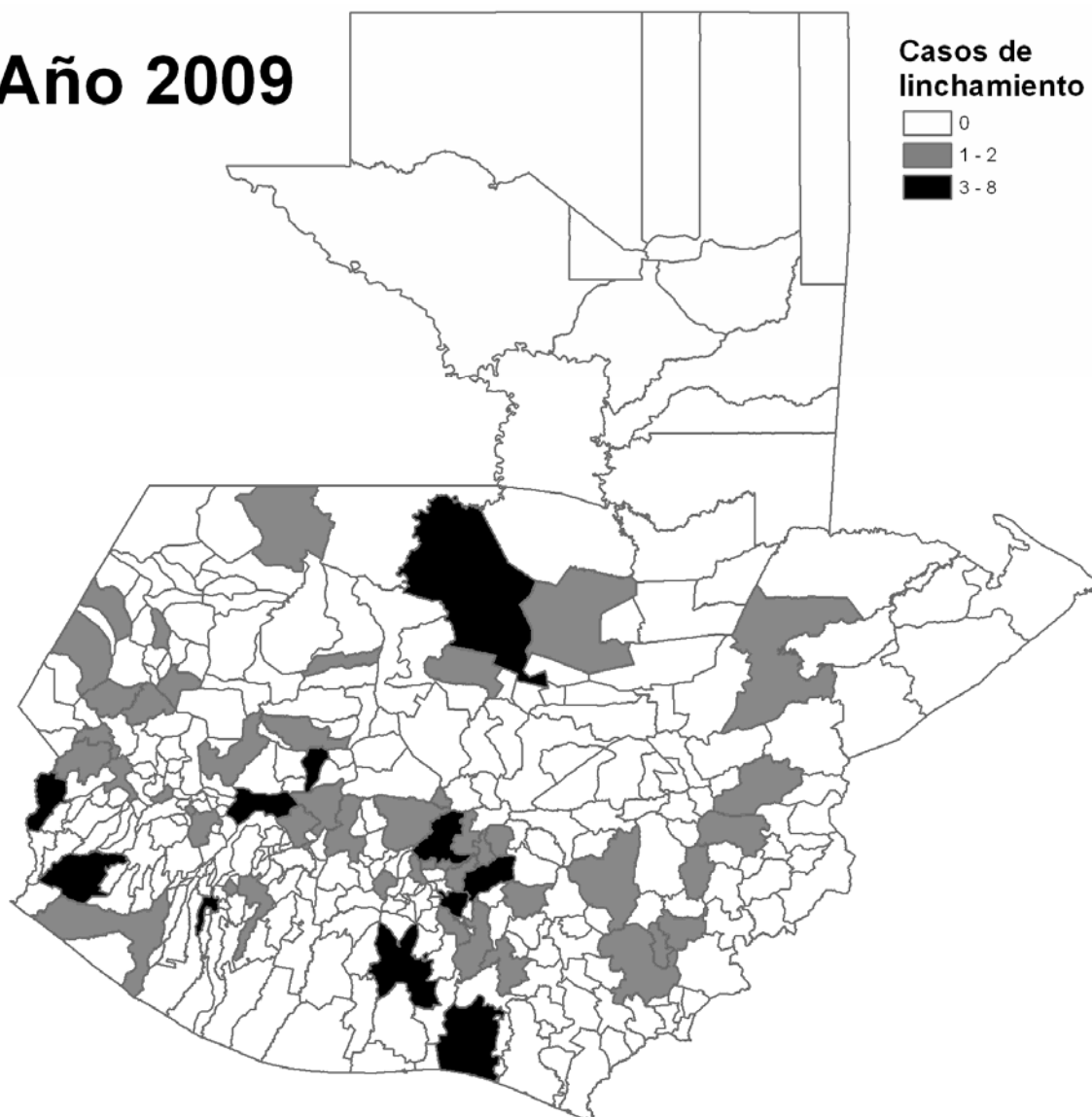
Linchamientos por municipio - Casos, heridos y fallecidos por sexo

Departamento, municipio	Casos	Herido femenino	Herido masculino	Mortal femenino	Mortal masculino
Guatemala, Guatemala	8	3	8		
Guatemala, San Juan Sacatepéquez	5		1		4
Suchitepéquez, Mazatenango	5		5		
Totonicapán, Totonicapán	5	1	8		
Escuintla, Escuintla	4		8		
San Marcos, Malacatán	4		4		
Guatemala, Villa Nueva	3		3		1
Quiché, Santa Cruz del Quiché	3		4		1
Alta Verapaz, Cobán	3		4		
Quetzaltenango, Coatepeque	3		5		
Santa Rosa, Taxisco	3		3		
Huehuetenango, Santa Bárbara	2	1	5	1	2
Sololá, Sololá	2		2	1	2
Guatemala, Mixco	2				2
Guatemala, Villa Canales	2		1		2
San Marcos, San Miguel Ixtahuacán	2		1		1
Alta Verapaz, San Pedro Carchá	2		5		
Chiquimula, Chiquimula	2		3		
Izabal, El Estor	2		5		
Quetzaltenango, Quetzaltenango	2		2		
Quiché, Chichicastenango	2		5		
Retalhuleu, Retalhuleu	2		3		
Huehuetenango, La Democracia	1				4
Guatemala, Chuarrancho	1				3
Huehuetenango, Huehuetenango	1				3
San Marcos, Concepción Tutuapa	1				3
Chimaltenango, San Andrés Itzapa	1				1
Chimaltenango, San Martín Jilotepeque	1				1
Guatemala, Amatitlán	1				1
Guatemala, San José Pinula	1				1
Guatemala, San Pedro Sacatepéquez	1				1
Huehuetenango, Santiago Chimaltenango	1				1
Jutiapa, Jutiapa	1				1
Quiché, San Juan Cotzal	1				1
Quiché, San Pedro Jocopilas	1				1
San Marcos, Ixchiguan	1				1
San Marcos, San Marcos	1				1
San Marcos, Tajumulco	1				1
Sololá, Panajachel	1	3			1
Alta Verapaz, San Cristóbal Verapaz	1		1		
Chimaltenango, Tecpán	1		1		
Guatemala, Chinautla	1		2		
Guatemala, San Pedro Ayampuc	1		1		
Guatemala, San Raimundo	1		1		
Huehuetenango, Barillas	1		1		
Huehuetenango, Cuilco	1		2		
Jalapa, Jalapa	1		1		
Jalapa, San Luis Jilotepeque	1		1		
Jutiapa, El Progreso	1		1		
Jutiapa, Santa Catarina Mita	1		1		
Quetzaltenango, La Esperanza	1		1		
Quetzaltenango, Palestina de los Altos	1		2		
Quiché, Pachalum	1	1	2		
Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj	1		4		
Sacatepéquez, Sumpango	1		1		
Santa Rosa, Barberena	1		1		
Suchitepéquez, Chicacao	1	1	2		
Suchitepéquez, San Pablo Jocopilas	1		1		
Totonicapán, Momostenango	1		2		
Zacapa, Zacapa	1		2		
Total	106	10	116	2	41

Fuente: elaboración propia con registro hemerográfico de linchamientos.

Mapa 5
Casos de linchamiento por municipio

Año 2009



Fuente: Elaboración propia con registro de linchamientos.

Tabla 6
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
Comparativo en número de casos y promedio mensual por categoría
Año 2006 a 2009

Homicidios de	Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto delincuente
Total de casos 2006	83	26	0*	1	1
Total de casos 2007	68	27	27	1	10
Total de casos 2008	131	44	31	0	10
Total de casos 2009	192	50	52	1	23
Promedio mensual 2006	6.92	2.17	0.00*	0.08	0.08
Promedio mensual 2007	5.67	2.25	2.25	0.08	0.83
Promedio mensual 2008	10.92	3.67	2.58	0.00	0.83
Promedio mensual 2009	16.00	4.17	4.33	0.08	1.92

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

*Sin sistematización de pasajeros para 2006.

NOTA: se estima una cifra negra (no reportada) de cerca del 12% para 2009, mayor para los años anteriores.

Tabla 7
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
Por mes y categoría, 2009

Homicidios de:	Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto delincuente
Mes	F.	F.	F.	F.	F.
Enero	11	5	5		
Febrero	16	2	4		2
Marzo	19	6	7		5
Abril	13	2	6		
Mayo	17	2	9		2
Junio	10	1	3		3
Julio	18	5	2		
Agosto	19	3	2		2
Septiembre	19	4	4		
Octubre	18	11	2		3
Noviembre	23	5	5	1	5
Diciembre	9	4	3		1
Total	192	50	52	1	23

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

NOTA: Personas heridas que fallecen en hospital después del hecho, no están registradas, por lo que la cifra de homicidios puede ser mayor de lo reportado.

Tabla 8
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
Por departamento, municipio y categoría, 2009

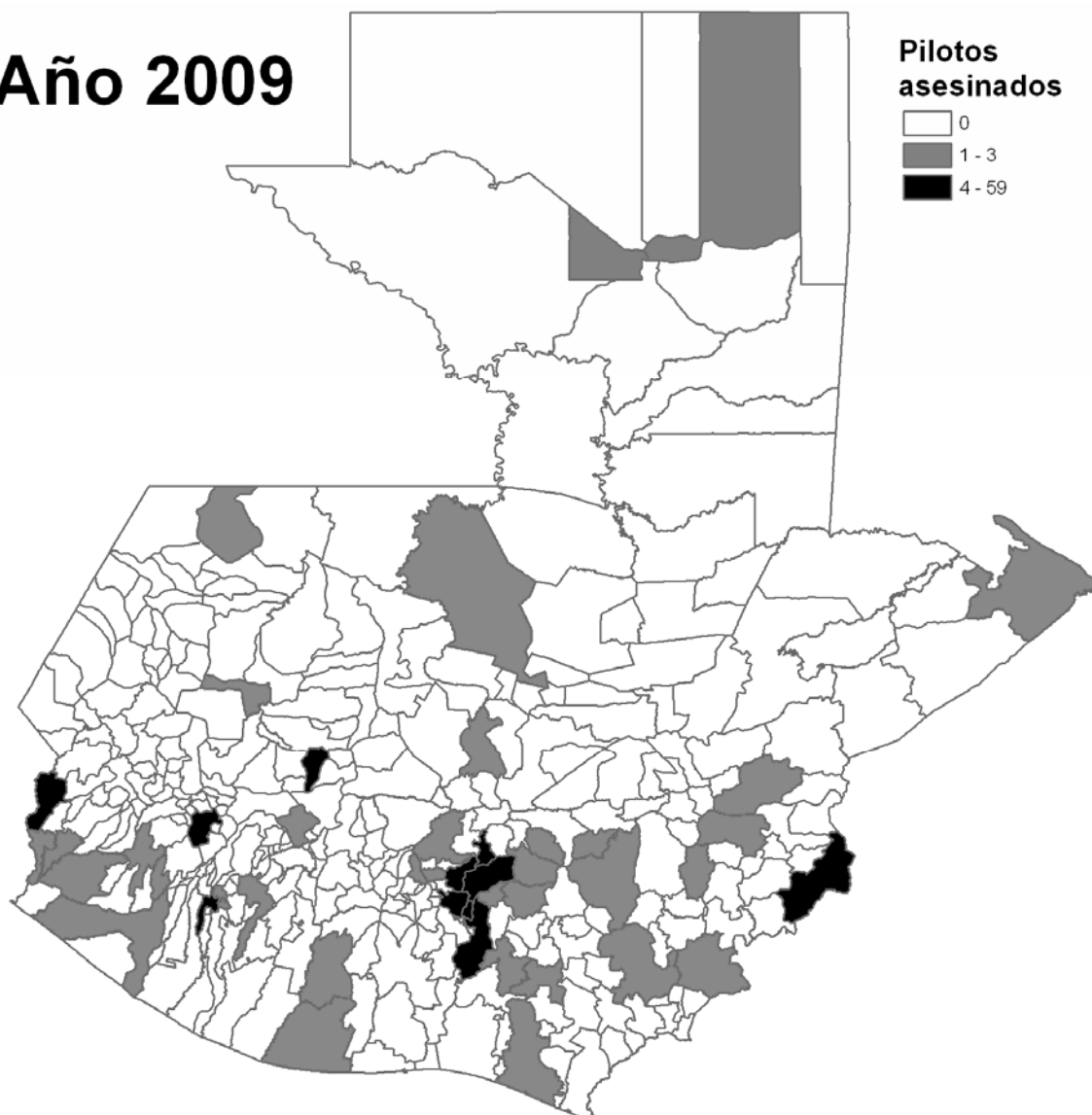
Departamento, municipio (zonas de la ciudad capital)	Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto delincuente	Total
	F.	F.	F.	F.	F.	F.
Guatemala, Mixco	24	8	9		1	42
Guatemala, Guatemala Z.18	17	4	2			23
Guatemala, Guatemala Z.6	11	2	3		1	17
Guatemala, Petapa	11	3				14
Guatemala, Guatemala	4	2	4	1	2	13
Guatemala, Guatemala Z.11	3	3	2		4	12
Guatemala, Guatemala Z.7	3		3		3	9
Chiquimula, Esquipulas	7					7
Guatemala, Guatemala Z.10	3	2	2			7
Guatemala, Villa Nueva	4	1	2			7
San Marcos, Malacatán	7					7
Guatemala, Guatemala Z.1	3		1		2	6
Guatemala, Santa Catarina Pinula	3	2			1	6
Guatemala, Villa Canales	5	1				6
Quetzaltenango, Quetzaltenango	5	1				6
Chiquimula, Chiquimula	3	2				5
Guatemala, Chinautla	4	1				5
Guatemala, Guatemala Z.12	3	2				5
Guatemala, Guatemala Z.19	1	1	1		2	5
Guatemala, Guatemala Z.21	2	3				5
Quiché, Santa Cruz del Quiché	4		1			5
Suchitepéquez, Mazatenango	4	1				5
Guatemala, Guatemala Z.5	2	2				4
Guatemala, Guatemala Z.9	2		2			4
Jalapa, Jalapa	3		1			4
Quetzaltenango, Coatepeque	3	1				4
Escuintla, Escuintla			2		1	3
Guatemala, Palencia	2	1				3
Guatemala, San Juan Sacatepéquez	1	2				3
Sacatepéquez, sin información del municipio			2		1	3
Sololá, sin información del municipio	1				2	3
Baja Verapaz, Rabinal	2					2
El Progreso, Sanarate	2					2
Escuintla, La Gomera	1		1			2
Escuintla, Palín			1		1	2
Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa	1		1			2
Guatemala, Guatemala Z.2	1		1			2
Guatemala, Guatemala Z.4		1			1	2
Guatemala, Guatemala Z.8			1		1	2

Departamento, municipio (zonas de la ciudad capital)	Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto delincuente	Total
	F.	F.	F.	F.	F.	F.
Guatemala, Guatemala Z.13	1		1			2
Guatemala, Guatemala Z.17	1		1			2
Huehuetenango, Huehuetenango	1	1				2
Jutiapa, Jutiapa	2					2
Retalhuleu, Retalhuleu	2					2
Sacatepéquez, Sumpango	2					2
San Marcos, Pajapita	2					2
Santa Rosa, Barberena	1		1			2
Santa Rosa, Cuilapa	2					2
Suchitepéquez, Chicacao	2					2
Suchitepéquez, Samayac	2					2
Zacapa, Zacapa	2					2
Guatemala, Guatemala Z.24	1		1			2
Alta Verapaz, Cobán	1					1
Chimaltenango, Chimaltenango			1			1
Chimaltenango, El Tejar			1			1
Chimaltenango, Patzicía			1			1
Chimaltenango, Tecpán			1			1
Chiquimula, Ipala		1				1
Chiquimula, Quezaltepeque		1				1
El Progreso, San Antonio La Paz	1					1
Guatemala, Guatemala Z.3		1				1
Guatemala, San José Pinula	1					1
Guatemala, sin información del municipio	1					1
Huehuetenango, San Mateo Ixtatán	1					1
Izabal, Puerto Barrios	1					1
Jalapa, San Luis Jilotepeque	1					1
Jutiapa, Asunción Mita	1					1
Jutiapa, San José Acatempa			1			1
Petén, Flores	1					1
Petén, San Benito	1					1
Petén, sin información del municipio	1					1
Quetzaltenango, Colomba	1					1
Retalhuleu, Nuevo San Carlos	1					1
Retalhuleu, San Felipe			1			1
Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez	1					1
San Marcos, Ayutla	1					1
Santa Rosa, Chiquimulilla	1					1
Sololá, Sololá	1					1
Suchitepéquez, San Bernardino	1					1
Petén, Santa Elena	1					1
Total	192	50	52	1	23	318

Fuente: elaboración propia con registro hemerográfico.

Mapa 6
Pilotos asesinados por municipio

Año 2009



Fuente: elaboración propia con registro hemerográfico.

Tabla 9
Homicidios de personas relacionadas con el transporte público
Por mes y categoría, 2007 – 2009

Homicidios de		Piloto	Ayudante	Pasajero	Guardia de seguridad	Presunto delincuente
Año	Mes	F.	F.	F.	F.	F.
2006	Enero	13				
	Febrero	5	6			
	Marzo	7	1		1	1
	Abril	8	4			
	Mayo	8	1			
	Junio	5	5			
	Julio	7	1			
	Agosto	1	3			
	Septiembre	11	1			
	Octubre	8	1			
	Noviembre	3	1			
	Diciembre	7	2			
2007	Enero	1	3			3
	Febrero	3	2	1		1
	Marzo	5	1			
	Abril	13	2	2		
	Mayo	7	3	3		
	Junio	5	3	2	1	3
	Julio	4	3	3		1
	Agosto	7	3	3		
	Septiembre	3	2	2		1
	Octubre	9	1	3		
	Noviembre	5	2	5		
	Diciembre	6	2	3		1
2008	Enero	7	4	6		
	Febrero	10	4			
	Marzo	17	3	1		2
	Abril	7	4	1		
	Mayo	9	3	2		1
	Junio	15	7	5		1
	Julio	9	5			
	Agosto	11		6		
	Septiembre	8	6			
	Octubre	14	4	3		1
	Noviembre	10	2	2		
	Diciembre	14	2	5		5
2009	Enero	11	5	5		
	Febrero	16	2	4		2
	Marzo	19	6	7		5
	Abril	13	2	6		
	Mayo	17	2	9		2
	Junio	10	1	3		3
	Julio	18	5	2		
	Agosto	19	3	2		2
	Septiembre	19	4	4		
	Octubre	18	11	2		3
	Noviembre	23	5	5	1	5
	Diciembre	9	4	3		1
Total		474	147	110	3	44

Fuente: elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Tabla 10
Homicidios según mes
Enero a diciembre, 2009

No. de casos y porcentajes		
Mes	No. de casos	%
Enero	567	8.73
Febrero	534	8.22
Marzo	544	8.37
Abril	499	7.68
Mayo	511	7.86
Junio	528	8.13
Julio	535	8.23
Agosto	609	9.37
Septiembre	551	8.48
Octubre	554	8.53
Noviembre	525	8.08
Diciembre	541	8.33
Total	6,498	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Tabla 11
Homicidios según día de la semana
Enero a diciembre, 2009

No. de casos y porcentajes		
Día	No. de casos	%
Lunes	956	14.71
Martes	856	13.17
Miércoles	762	11.73
Jueves	871	13.40
Viernes	907	13.96
Sábado	1004	15.45
Domingo	1,142	17.57
Total	6,498	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Tabla 12
Homicidios según medio utilizado
Enero a diciembre 2009

No. de casos y porcentajes		
Medio Utilizado	No. de Casos	%
Arma de Fuego	5,405	83.18
Arma blanca	593	9.13
Estrangulamiento	221	3.40
Arma contundente	220	3.39
Linchamiento*	49	0.75
Explosión	10	0.15
Total	6,498	100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC*

Tabla 13
Homicidios según género
Enero a diciembre, 2009

No. de casos y porcentajes		
Género	No. de casos	%
Femenino	720	11.08
Masculino	5,778	88.92
Total	6,498	100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

Tabla 14
Homicidios según rango de edades
Enero a diciembre 2009

No. de casos y porcentajes		
Rango de Edades	No. de Casos	%
00 - 17 Años	510	7.85
18 - 59 Años	5,595	86.10
60 - 99 Años	239	3.68
No especifica edad	154	2.37
Total	6,498	100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

Tabla 15
Homicidios según departamento
Enero a diciembre 2009

Departamento	Femenino		Masculino		Total	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Guatemala	341	47.36	2,303	39.86	2,644	40.69
Escuintla	41	5.69	475	8.22	516	7.94
Petén	28	3.89	392	6.78	420	6.46
Chiquimula	29	4.03	294	5.09	323	4.97
Izabal	21	2.92	270	4.67	291	4.48
Santa Rosa	22	3.06	217	3.76	239	3.68
San Marcos	29	4.03	207	3.58	236	3.63
Jutiapa	26	3.61	194	3.36	220	3.39
Suchitepéquez	16	2.22	180	3.12	196	3.02
Huehuetenango	27	3.75	162	2.80	189	2.91
Jalapa	32	4.44	155	2.68	187	2.88
Quetzaltenango	16	2.22	146	2.53	162	2.49
Alta Verapaz	11	1.53	149	2.58	160	2.46
Zacapa	16	2.22	128	2.22	144	2.22
Chimaltenango	11	1.53	99	1.71	110	1.69
El Progreso	8	1.11	79	1.37	87	1.34
Retalhuleu	10	1.39	73	1.26	83	1.28
Quiché	9	1.25	67	1.16	76	1.17
Sacatepéquez	10	1.39	63	1.09	73	1.12
Baja Verapaz	9	1.25	63	1.09	72	1.11
Sololá	5	0.69	47	0.81	52	0.80
Totonicapán	3	0.42	15	0.26	18	0.28
Total	720	100.00	5,778	100.00	6,498	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Tabla 16
Homicidios según área rural o urbana
Enero a diciembre 2009

No. de casos y porcentajes		
Área	No. de casos	%
Rural	2,228	34.29
Urbano	4,270	65.71
Total	6,498	100.00

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Tabla 17
Muerte violenta según mes
Enero a diciembre 2007-2009

Mes	2007		2008		2009	
	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%
Enero	515	8.91	493	7.84	567	8.73
Febrero	518	8.96	440	6.99	534	8.22
Marzo	472	8.16	477	7.58	544	8.37
Abril	420	7.27	439	6.98	499	7.68
Mayo	456	7.89	494	7.85	511	7.86
Junio	476	8.23	539	8.57	528	8.13
Julio	515	8.91	475	7.55	535	8.23
Agosto	482	8.34	616	9.79	609	9.37
Septiembre	441	7.63	525	8.34	551	8.48
Octubre	471	8.15	615	9.77	554	8.53
Noviembre	492	8.51	582	9.25	525	8.08
Diciembre	523	9.05	597	9.49	541	8.33
Total	5,781	100	6,292	100	6,498	100

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

Tabla 18
Muerte violenta según promedio mensual y diario
Enero a diciembre 2007-2009

Mes	2007	2008	2009
	No. de casos	No. de casos	No. de casos
Enero	515	493	567
Febrero	518	440	534
Marzo	472	477	544
Abril	420	439	499
Mayo	456	494	511
Junio	476	539	528
Julio	515	475	535
Agosto	482	616	609
Septiembre	441	525	551
Octubre	471	615	554
Noviembre	492	582	525
Diciembre	523	597	541
Total anual	5,781	6,292	6,498
Promedio mensual	481.75	524.33	541.50
Promedio diario	15.84	17.24	17.80

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Tabla 19
Muerte violenta según medio utilizado
Enero a diciembre 2007-2009

Medio utilizado	2007	2008	2009	TOTAL 2007 - 2009	
	No. de casos	No. de casos	No. de casos	No. de casos	%
Arma de fuego	4776	5237	5405	15418	83.02
Arma blanca	575	619	593	1787	9.62
Objeto contundente	199	217	220	636	3.42
Estrangulamiento	210	201	221	632	3.4
Linchamiento	20	17	49	86	0.46
Explosión	1	1	10	12	0.06
Total	5,781	6,292	6,498	18,571	100

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Índice

Presentación	7
1 Informe al honorable Congreso de la República Memoria de labores	9
Auxiliaturas	
2 Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz	15
3 Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz	31
4 Auxiliatura Departamental de Chimaltenango	47
5 Auxiliatura Departamental de Chiquimula	59
6 Auxiliatura Departamental de El Progreso	71
7 Auxiliatura Departamental de Escuintla	83
8 Auxiliatura Departamental de Guatemala	101
9 Auxiliaturas Móviles de Guatemala – Región I	147
10 Auxiliaturas Móviles de Guatemala – Región II	165
11 Auxiliatura Departamental de Huehuetenango	181
12 Auxiliatura Móvil de Huehuetenango	195
13 Auxiliatura Municipal de Nentón	209
14 Auxiliatura Departamental de Izabal	219
15 Auxiliatura Departamental de Jalapa	235
16 Auxiliatura Departamental de Jutiapa	249
17 Auxiliatura Departamental de Petén	267
18 Auxiliatura Regional de Poptún, Petén	281
19 Auxiliatura Municipal de El Naranjo, Petén	293
20 Auxiliatura Departamental de Quetzaltenango	301
21 Auxiliatura Regional de Coatepeque, Quetzaltenango	315
22 Auxiliatura Departamental de Quiché	327
23 Auxiliatura Municipal de Ixcán, Quiché	339
24 Auxiliatura Municipal de Santa María Nebaj, Quiché	349
25 Auxiliatura Departamental de Retalhuleu	359
26 Auxiliatura Departamental de Sacatepéquez	369
27 Auxiliatura Departamental de San Marcos	391
28 Auxiliatura Departamental de Santa Rosa	403
29 Auxiliatura Municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa	415
30 Auxiliatura Departamental de Sololá	423
31 Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlán, Sololá	437
32 Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez	451
33 Auxiliatura Departamental de Totonicapán	467
34 Auxiliatura Departamental de Zacapa	479
35 Datos estadísticos de enero a noviembre de 2009	493
Defensorías	
36 Defensoría de la Mujer	521
37 Defensoría de la Niñez y Adolescencia	533
38 Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante	543
39 Defensoría de las Personas con Discapacidad	555
40 Defensoría de los Pueblos Indígenas	565
41 Defensoría del Adulto Mayor	575

42	Defensoría del Debido Proceso y Recluso	589
43	Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario	597
44	Defensoría del Trabajador	605
45	Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz	619
46	Dirección de Educación y Promoción	631
47	Administración Central	647
48	Asesoría en Análisis Estratégico (AAE)	649
49	Coordinadora Nacional de Voluntariado	652
50	Dirección Administrativa	654
51	Dirección de Comunicación Social	655
52	Dirección de Estudio, Análisis e Investigación	658
53	Unidad de Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos	660
54	Unidad de Supervisión Administrativa	664
55	Dirección de Mediación y Resolución de Conflictos e Incidencia en Políticas Públicas	666
56	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	667
57	Dirección de Relaciones Internacionales	668
58	Dirección de Tecnología e Informática	672
59	Dirección Financiera	675
60	Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia	676
61	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	679
62	Programa para la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y sida	681
63	Programa de Prevención y Atención de Desastres	683
64	Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información	685
65	Unidad contra la Impunidad	689
66	Unidad de Auditoría Interna	691
67	Unidad de Asesores Jurídicos	693
68	Unidad de Información	694
69	Unidad de Protocolo y Eventos	696
70	Unidad de Registro Unificado y atención de casos de desaparición forzada y otras formas de desaparición (RUDFOR)	697
71	Datos estadísticos- diciembre 2009	701

Informe Anual Circunstanciado

Tomo II Memoria de labores 2009

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos



Guatemala, enero de 2010

DIRECTORIO

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos

Licda. María Eugenia de Sierra
Procuradora Adjunta I

Licda. Dunia Tobar de Leal
Procuradora Adjunta II

Lic. Pedro Edmundo Asencio
Secretario General

12.02.01.14

G918 Guatemala. Procurador de los Derechos Humanos
Informe Anual Circunstanciado: Memoria de labores /
Procurador de los Derechos Humanos. -- Guatemala :
PDH, 2009
704 p

1. INFORME ANUAL 2. VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS 3. DERECHOS HUMANOS
GUATEMALA I.t.

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

12 avenida 12-72, zona 1, Guatemala, Centro América
PBX: (502) 2424-1717
Denuncias 1555
www.pdh.org.gt

Impreso en los talleres de reproducción de materiales
de la institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
Tiraje de 1,000 ejemplares

Informe Anual Circunstanciado

Tomo II
Memoria de labores 2009



presentado por el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procurador de los Derechos Humanos

Presentación

Cuando los Constituyentes de 1985 decidieron crear la figura del Procurador de los Derechos Humanos tuvieron en mente que éste debiese reunir entre sus cualidades sustantivas la capacidad de apreciar con objetividad la situación del país, desde una perspectiva de derechos humanos, y de convertirse en la conciencia crítica de la nación para decir, con responsabilidad pero sin limitaciones, su diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de las garantías individuales y colectivas definidas por la Constitución Política de la República de Guatemala.

Al desarrollar los postulados constitucionales relativos a la institución del Procurador de los Derechos Humanos en la ley específica, el Congreso de la República especificó que el Magistrado de Conciencia debería también informar circunstanciadamente sobre el trabajo desplegado frente a aquella situación diagnosticada.

En efecto, el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos señala que “el Procurador deberá presentar al Congreso de la República durante la segunda quincena del mes de enero de cada año, por conducto de la Comisión respectiva, informe circunstanciado de sus actividades y de la situación de los derechos humanos, durante el año anterior”.

De este modo, el informe anual que el Procurador de los Derechos Humanos debe rendir al Congreso de la República, y a través de él a la nación entera, se desdobra en dos informes referidos a dos aspectos de una misma realidad: la situación actual de los derechos humanos y los trabajos realizados para modificar positivamente esa situación.

El informe anual del Procurador de los Derechos Humanos se presenta, pues, en dos volúmenes: uno de ellos es el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala y el otro es el Informe circunstanciado de labores institucional.

Se trata, como ya se dijo, de documentos complementarios entre sí, cuya lectura cruzada puede resultar fructífera para quien tenga interés en hacer un ejercicio de comprensión integral de los asuntos relativos a los derechos humanos en Guatemala.

Téngase en cuenta que la acción del Procurador, ya sea como protector o promotor, es consustancial a la situación de los derechos humanos, si bien la responsabilidad en los avances o retrocesos en esta materia recae en el conjunto de la institucionalidad estatal.

No es casual, por ello, que el texto del informe de situación tenga como referencia (no exclusiva) las intervenciones institucionales y los casos conocidos directamente a través de las denuncias recibidas y expedientes iniciados por la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Dicho de otra manera, el conocimiento que el Procurador tiene de la situación de los derechos humanos es, de inicio, resultado de su contacto diario con la sociedad guatemalteca, con los problemas de las y los habitantes, quienes buscan a la institución para encontrar respuestas a un entorno marcado por el irrespeto a las garantías constitucionales, el abuso, la arbitrariedad, la injusticia, la desigualdad y la discriminación.

Es, pues, un conocimiento nacido de la práctica de la defensa y la promoción de los derechos humanos, que se sobrepone al riesgo del empirismo con el adecuado, oportuno y sistemático estudio de la realidad nacional, a cargo tanto de unidades especializadas, como de las y los funcionarios responsables de la atención a las personas que cotidianamente acuden a la institución en busca de apoyo.

El conocimiento de la situación de los derechos humanos nace también del contacto directo con los actores de los procesos sociales.

Nos referimos, fundamentalmente, a las y los ciudadanos, ya sea que actúen individual o colectivamente, espontánea u organizadamente; personas con sueños y aspiraciones legítimas, deseosas de vivir con tranquilidad y en las mejores condiciones posibles. Pero también hablamos de las y los funcionarios del Estado, quienes usualmente ocupan el lugar de los sindicatos de incurrir en violaciones a las garantías constitucionales.

Tampoco quedan excluidos, en la formación de este conocimiento, los actores internacionales, tanto aquellos radicados dentro del país, como quienes desde el extranjero realizan una observación permanente de la evolución de los acontecimientos nacionales y el grado de respeto de los derechos humanos en Guatemala.

A trece años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el informe anual del Procurador de los Derechos Humanos hace especial mención del papel de todos aquellos protagonistas de la vida social, política, económica y cultural comprometidos con la búsqueda de la paz y la reconciliación

La cultura de paz se constituye como eje primordial y transversal dentro del presente informe, con el cual el Procurador de los Derechos Humanos desea dejar constancia de su reconocimiento a quienes, muchas veces en el anonimato del trabajo diario, en especial en instituciones como la nuestra, hacen un aporte sustancial al esfuerzo por superar las secuelas, todavía muy fuertes, de la intolerancia, la violencia y la impunidad.

La finalidad es que el informe, a la vez que signifique reconocimiento a las iniciativas, acciones y actitudes loables y respetuosas de los derechos humanos, también sirva como oportunidad para la realización de un balance de lo hecho y de lo omitido, de los problemas que deben ser resueltos, de los logros y avances, para construir planes, propósitos y objetivos principalmente de reparación en cuanto a aquellos daños que hubieren sido causados y las garantías de no repetición.

El Procurador de los Derechos Humanos rinde ante el Congreso de la República este informe, pero también ante las y los habitantes del país, para que sirva como instrumento para la construcción de un mejor país, sin violencia e impunidad, un país en el que se pueda consolidar una cultura de paz, entendida ésta como un proceso de aprendizaje, lento y a veces doloroso pero insoslayable.

Con ese propósito está comprometida nuestra institución, que se reconoce protagonista en la edificación de una realidad nacional distinta. De eso da cuenta el informe anual, en cuyas líneas podrá apreciarse a una institución fuerte, formada por mujeres y hombres que llevan con orgullo el honroso título de defensoras y defensores de los derechos humanos. Ésa es la institución que mira de frente al futuro, dispuesta a encarar con hidalguía los desafíos con que llega la nueva década.

Al entregar al juicio crítico de las y los guatemaltecos los dos volúmenes que forman el informe anual del Procurador, confiamos en que su lectura atenta contagie a muchos de este espíritu de adhesión al sueño de una vida mejor, marcada por el signo de la fraternidad y la convivencia respetuosa de todas y todos, en un país forjado en la riqueza de su diversidad humana.

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos

**Informe Anual Circunstanciado al honorable Congreso de la República,
presentado por el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos**

Memoria de labores 2009

Introducción

El Procurador de los Derechos Humanos rinde la presente memoria de labores de 2009 al Congreso de la República en cumplimiento de lo establecido en el artículo 274 de la Constitución Política de la República y el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos.

A partir de dicho marco normativo, el Magistrado de Conciencia realiza sus labores en consideración también de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Código Municipal, Ley general de descentralización, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, así como de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, leyes que le atañen directamente en la ejecución de su mandato.

Además, según el proceso de reforma, modernización y el desarrollo del marco legal guatemalteco, que ha asignado al Procurador de los Derechos Humanos nuevas atribuciones, por ejemplo aquellas contenidas en la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, Ley del programa de aporte económico para el adulto mayor sin cobertura, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala y la Ley de Acceso a la Información Pública.

Con la vigencia de esta última, a partir de abril de 2009, la institución del Procurador ha desarrollado acciones para cumplir con su responsabilidad de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y brindar asistencia técnica frente a resoluciones que afecten este derecho. El artículo 44 de esa misma ley designa al Procurador como la autoridad reguladora con sus correspondientes atribuciones.

En este marco, a raíz de la vigencia de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, el Procurador conformó el Grupo de Trabajo para el abordaje interinstitucional en el que participan ocho defensorías, la Dirección de Auxiliaturas departamentales y la Dirección de Procuración para promover, fortalecer, ampliar y desarrollar las capacidades institucionales, identificar casos y visibilizar el tema.

La segunda fuente rectora de las labores de la institución es su planificación estratégica y operativa, la cual se basa en el documento de formulación de las líneas estratégicas de la institución del Procurador. En éste se definen los tres principios rectores permanentes: a) Acercar la institución del PDH a las y los habitantes; b) el centro de la atención institucional es la

víctima; y c) la institución del Procurador de los Derechos Humanos debe cultivar su credibilidad, prestigio y autoridad moral como valores principales para cumplir su misión.

El mismo documento de formulación define también las áreas estratégicas de labor institucional:

- 1) Fortalecimiento y desarrollo institucional
- 2) Defensa y protección de los derechos humanos
- 3) Promoción y educación en derechos humanos
- 4) Supervisión de la administración pública
- 5) Fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil e instituciones del Estado
- 6) Promoción de la gobernabilidad democrática y consolidación de la paz
- 7) Fortalecimiento de las relaciones internacionales y de la cooperación
- 8) Derecho humano de acceso a la información pública.

En este contexto, el Plan Operativo Anual (POA) 2009 cuenta con una serie de objetivos estratégicos para cada una de las áreas antes referidas, que significaron tanto las actuaciones independientes de las distintas defensorías, direcciones, unidades y programas de la sede central como de las Auxiliaturas departamentales, municipales, regionales y móviles que conforman la institución como la coordinación entre éstas, como un medio para alcanzar los mandatos constitucionales relativos al actuar del Procurador de los Derechos Humanos.

Las metas y volúmenes consignados en el POA 2009 han sido revisadas, modificadas y adecuadas a las reducciones presupuestarias derivadas de la correspondiente disminución de los fondos asignados a la institución, sin por ello afectar la atención y protección de las víctimas, así como su labor de educación y promoción y demás definidas en los objetivos anteriores.

El presente informe refleja las labores desde la perspectiva de la prevención y de la respuesta inmediata a situaciones puntuales que afectan y vulneran los derechos humanos; también refleja los principales componentes que han caracterizado la situación nacional en el marco específico de los derechos humanos. A las condiciones históricas estructurales del país, que definen el quehacer del Estado y sus instituciones, su diseño y sus funciones, se suma el impacto en las condiciones sociales y económicas derivados de factores externos como la crisis financiera y económica que ha afectado las principales economías del mundo. Desde inicio de año se perfilaron sus efectos en el país y durante el mismo se fueron concretando en aspectos vinculados a repatriaciones, reducción de remesas, presión sobre el empleo, aumento de la actividad informal y disminución de la recaudación tributaria. También es de agregar el impacto de la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático y los desastres naturales relacionados con éstos.

Uno de los principales fenómenos que conllevó graves vulneraciones a los derechos humanos fue la violencia, con sus distintas expresiones, que afectó a la totalidad de los departamentos de Guatemala. Ello significó una constante labor desde diversos ámbitos de actuación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar la seguridad, la vida, la integridad y la dignidad de las personas afectadas. Al mismo tiempo, para constatar el cumplimiento de las normativas legales de reparación y aplicación de la justicia a las cuales el Estado y sus dependencias están obligados.

Estas condiciones han tenido impacto en los procesos migratorios que se incrementan a pesar de las medidas de blindaje de las fronteras de los países de destino, en particular los Estados Unidos.

La seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación son derechos de todos los guatemaltecos, subsanando sus necesidades nutricionales y sociales, condición fundamental para el logro del desarrollo integral de la persona y la sociedad en su conjunto. La crisis alimentaria de 2001 puso de manifiesto la necesidad ineludible de mejorar las condiciones para superar la inseguridad alimentaria y nutricional en que se encuentra la población guatemalteca. La crisis alimentaria de 2009 atribuida a condiciones derivadas de la sequía volvió a poner en evidencia que aún en situaciones de seguridad alimentaria, miles de guatemaltecos radicados en 4,059 comunidades en territorio nacional están en alto riesgo de padecer hambruna. El Procurador de los Derechos Humanos impulsó actividades en atención a la crisis y para cooperar de manera articulada con distintas instancias sociales y gubernamentales, a través de la creación del Frente contra el Hambre, en sus objetivos de lucha contra el hambre y la desnutrición, propiciando la realización de acciones coordinadas y complementarias para resolver la situación de emergencia y hacer sostenible la labor de erradicar de nuestro país ambos flagelos.

En términos de seguridad ciudadana, se dio seguimiento como parte del Grupo Garante al Acuerdo Nacional de Seguridad presentado a los tres poderes del Estado, y a la Hoja de Ruta que la institución del Procurador acompaña bajo reserva. Mientras las cifras oficiales y la percepción ciudadana reflejan un agravamiento de las condiciones que afectan el derecho a la seguridad y a la vida, el G-4 emite opinión sobre las acciones institucionales orientadas a la creación de un sistema nacional de seguridad.

Éstos son los principales ámbitos en los cuales la institución del Procurador de los Derechos Humanos volcó sus esfuerzos, mismos que son detallados en las páginas siguientes; así también, se describen los procesos y actividades que, en continuidad a la integralidad de los derechos humanos implican un trabajo conjunto y coordinado de las distintas áreas de la institución, mismas que son presentadas de acuerdo con su caracterización funcional.

En el primer apartado reportan las Auxiliaturas departamentales, municipales, regionales y móviles, cuya información permite establecer la realidad de cada región atendida, la cual es descrita tanto por datos cualitativos como cuantitativos. Al final de éste se incluyen datos estadísticos consolidados hasta noviembre de las violaciones a los derechos humanos conocidas en cada una de ellas. Las actividades de las defensorías y unidades especializadas en la atención de las poblaciones vulnerables específicas conforman el segundo apartado. El tercer apartado, denominado Administración Central, presenta de manera resumida el quehacer y las actividades emprendidas de las unidades cuya base de acción se encuentra en la sede central. Al final se incluyen los datos estadísticos de las violaciones denunciadas en las Auxiliaturas en diciembre.

Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz



Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz

De enero a noviembre de 2009, Alta Verapaz se caracterizó por el aumento de denuncias de violaciones de los derechos humanos, lo que refleja la problemática social en el país, en especial en este departamento, y la constante falta de atención de las autoridades de su localidad. Los expedientes son variados y el tipo de denuncias, diverso: abusos laborales, de autoridad, en contra de los pueblos indígenas, coacciones y amenazas, falta de negociación, escasez de servicios, de acceso a la educación, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia física y psicológica y desnutrición infantil. En este contexto, los sectores o grupos más vulnerables son: mujer, niñez, pueblos indígenas (q'eqchi y pocomchi) y, en especial, la población del área rural y los comerciantes informales.

Las áreas de mayor riesgo en Alta Verapaz son: la región del Polochic, la Franja Transversal del Norte y las zonas precarias de los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, San Cristóbal Verapaz y San Juan Chamelco, debido a la inaccesibilidad a las distintas dependencias o por la falta de atención de las autoridades correspondientes.

Por lo anterior, la labor de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) es sumamente compleja, se ocupa en diligenciar, mediar e intervenir en las denuncias que se plantean a diario, a fin de reparar y evitar que continúen los vejámenes y atropellos en contra de los afectados, y a su vez que ellos aprendan a defenderse a través de los procesos de capacitación basados en la promoción y educación en derechos humanos.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz se realizaron 400 acciones específicas: 180 de orientación, 146 de prevención, 59 de mediación y 15 de intervención inmediata.

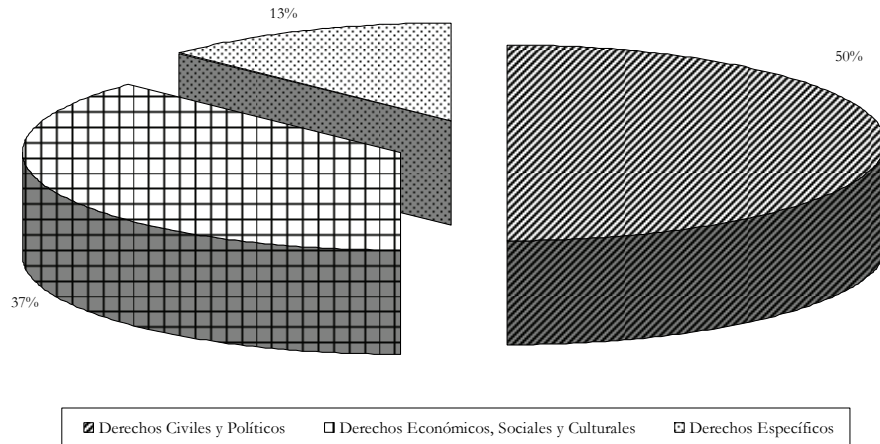
De investigación

Se abrieron 102 expedientes de investigación: 51 por violaciones a derechos individuales, 38 a derechos económicos, sociales y culturales y 13 a derechos específicos. De ellos, el 12.75% de oficio y el 87.25% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 70.21% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
Derechos Civiles y Políticos	1	1	5	4	8	9	5	8	3	6	1	51	50.00
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	8	6	6	5	1	1	1	2	2	1	5	38	37.25
Derechos Específicos	3	0	1	1	0	0	1	2	4	1	0	13	12.75
TOTAL MENSUAL	12	7	12	10	9	10	7	12	9	8	6	102	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
De oficio	1	0	2	0	0	4	0	1	3	1	1	13	12.75
Ordinario	11	7	10	10	9	6	7	11	6	7	5	89	87.25
TOTAL MENSUAL	12	7	12	10	9	10	7	12	9	8	6	102	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	Total	%
Orientación	180	45.00
Prevención	146	36.50
Mediación	59	14.75
Intervención inmediata	15	3.75
TOTAL	400	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	9	3	8	7	6	3	5	7	7	6	5	66	70.21
Judicial					1							1	1.06
Legislativo					1							1	1.06
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
Municipalidades	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	14	14.89
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	1	1				1	1					4	4.26
Ministerio Público			1						1			2	2.13
DEORSA				2				1		1		4	4.26
BANRURAL		1						1				2	2.13
TOTAL MENSUAL	11	7	10	10	9	6	7	11	9	8	6	94	100

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

En Alta Verapaz, las muertes violentas y los hechos delictivos mantienen a la sociedad en zozobra y, dada la deficiente administración de justicia, el reducido número de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el escaso equipamiento con que cuentan y los actos de corrupción de sus miembros, el crimen organizado y el narcotráfico se han enraizado en el departamento.

Dada la exclusión social, las personas ven limitada su posibilidad de disfrutar de los bienes y servicios básicos y son víctimas de un trato desigual al no tener acceso al trabajo, la educación, la salud, la seguridad social y al pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Por otro lado, son varias las autoridades que cometen abusos de poder o de autoridad, como alcaldes municipales, funcionarios del Organismo Ejecutivo, máxime los que pertenecen a la PNC, quienes actúan al amparo de la impunidad. Sin embargo, la Auxiliatura de Alta Verapaz ha recibido pocas denuncias en este sentido.

Expediente ORD.66-2009/DCP

El presidente de la Asociación de Periodistas de Alta Verapaz manifestó que el 18 de agosto personas desconocidas atentaron contra su vida y la de su hermano al detonar material explosivo fuera de su vivienda. Solicitó apoyo a las autoridades de Gobernación, al Ministerio Público (MP) y a la PNC, quienes hicieron caso omiso de sus denuncias. Personal de la institución del PDH se constituyó a constatar lo sucedido, requirió informes a las autoridades que conocieron el caso, remitiéndose la denuncia a la Fiscalía Distrital del MP y a la Unidad de Relaciones Internacionales de la PDH. Por la intervención de la PDH y la Organización de Estados Americanos (OEA) el Estado de Guatemala brindó al denunciante las medidas de seguridad, a efecto de resguardar su integridad física.

Expediente ORD.28-2009/DCP

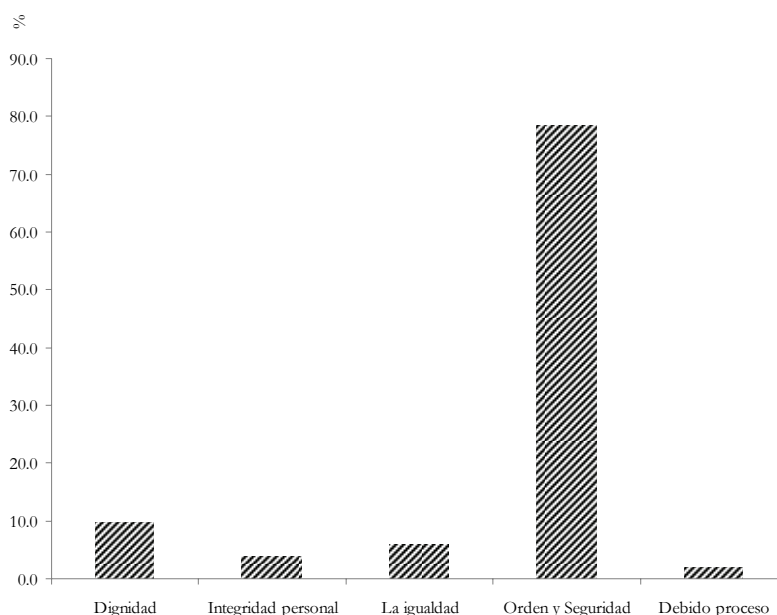
Se recibió denuncia contra el doctor Culajay, director del Centro de Salud de la aldea Telemán, municipio de Panzós, por presentarse bajo efectos de licor y fuera de horario a su trabajo, agrediendo física y verbalmente a un auxiliar de enfermería; indicándose que no es la primera vez de esta situación, con lo cual pone en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal del centro de salud en mención. Se remitió la denuncia al Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, solicitándole el informe correspondiente, asimismo, a la Dirección del Área de Salud de Alta Verapaz, solicitándole al denunciado que se pronunciara sobre los hechos. Finalmente, el denunciante desistió y manifestó que había exagerado los hechos.

Expediente ORD.30-2009/DCP

El presidente del COCODE y miembro de la Comisión de Seguridad Local del sector 15 de San Pedro Carchá denunció haber recibido intimidaciones por parte de agentes de la PNC de ese municipio, a quienes había reportado ante el Subcomisario por encontrarse ingiriendo licor en horas de trabajo. Como parte de la investigación se requirieron informes a la Dirección de la PNC y al subcomisario de Alta Verapaz, sosteniéndose reunión con las autoridades policíacas y el denunciante. Por la intervención de la institución del PDH, los agentes de la PNC involucrados se comprometieron a colaborar con la junta local de seguridad, pidiéndole disculpas al denunciante por su actuar, quien finalmente desistió de la querella.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Trato cruel, inhumano o degradante	1		1									2	3.92
Amenazas o intimidaciones		1		1						1		3	5.88
INTEGRIDAD PERSONAL													
Tortura			2									2	3.92
LA IGUALDAD													
Desigualdad jurídica					1							1	1.96
Falta de atención pública				1						1		2	3.92
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo			1	1	5	4	4		2	1		18	35.29
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial				1	1	4	1	8		2		17	33.33
Amenazas, coacción						1				1	1	3	5.88
Limitar el derecho de acción o de petición			1						1			2	3.92
DEBIDO PROCESO													
Acceso restringido a tribunales y dependencias del Estado					1							1	1.96
TOTAL MENSUAL	1	1	5	4	8	9	5	8	3	6	1	51	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La población de Alta Verapaz se ve afectada por exclusiones de tipo económico, étnico, de género, social y cultural. La desigualdad es grave y se ve reflejada en la distribución del ingreso, los niveles de educación, el acceso a la salud, entre otros aspectos.

Se ha vulnerado el derecho a la salud a la población indígena y de escasos recursos económicos al negársele el acceso a los servicios de salud. Situación similar ocurre en el marco de las políticas agrarias y laborales en tanto que el Estado ha relegado a la población indígena en la planificación, organización y ejecución de programas y proyectos en las distintas comunidades de Alta Verapaz, lo cual a desencadenado los actuales conflictos por la tenencia de la tierra y la adquisición de microproyectos de vivienda.

Expediente ORD.63-2009/DESC

Se denunció que en la agencia de Banrural de Cobán el personal debe ingresar a las 7:00 horas, su turno termina a las 22:00, sólo cuentan con 15 minutos para los tiempos de comida, y no les son pagadas las horas extra. Personal de la Auxiliatura se constituyó en la agencia denunciada en coordinación con personal de la Inspección de Trabajo, quienes la emplazaron; se requirió informe circunstanciado al gerente general de Banrural, Joel Edelman Velásquez López, y al de la agencia referida. La denuncia está diligenciándose ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de Alta Verapaz, pero el gerente general y el de agencia no cumplieron con rendir el informe al PDH.

Expediente ORD.48-2009/DESC

Se presentó denuncia en contra del personal médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Cobán por no atender de forma inmediata a un niño de un año de edad, ni suministrarle los medicamentos en el horario debido. Tres días después de internado fue trasladado al hospital de la zona 6 de la ciudad de Guatemala, donde falleció. Como parte de la investigación se requirieron informes circunstanciados a las autoridades del IGSS, remitiéndose la denuncia a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público.

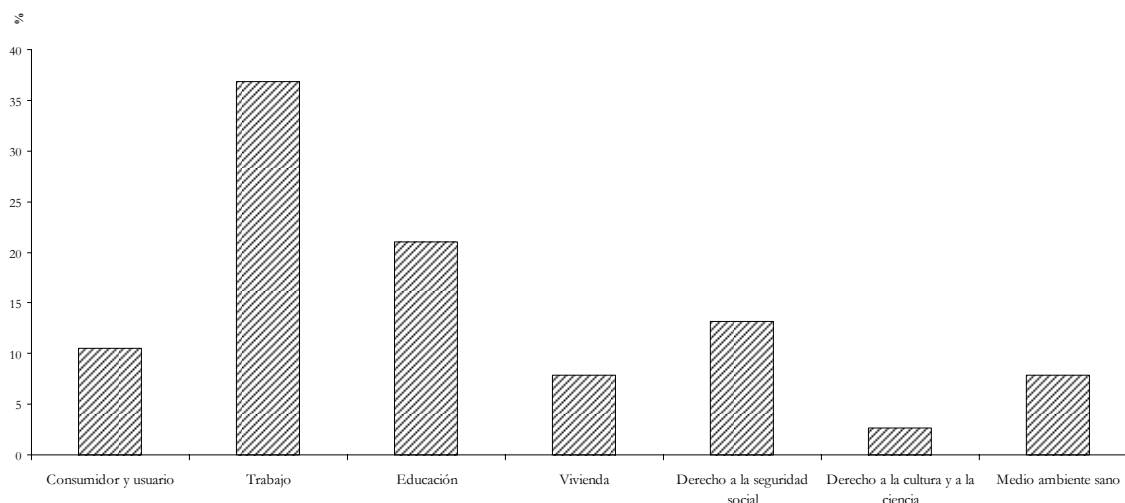
Expediente ORD. 12-2009/DESC

El 4 de octubre de 2005 una mujer presentó al IGSS un expediente para ser beneficiada con la pensión por Invalidez Vejez y Sobrevivencia (IVS), en virtud del fallecimiento de su esposo, ese mismo año, por un accidente en el lugar de trabajo. A pesar de haber completado la papelería y cumplir con todos los requisitos, aún no tiene respuesta. En atención a la denuncia se requirieron los informes correspondientes a las autoridades del IGSS y apoyo de la Unidad de Control Administrativo para constituir personal de la PDH en la oficina de IVS, con el fin de verificar el expediente, informando que la denunciante debía presentar certificación de cédula del beneficiario fallecido para darle trámite de forma inmediata.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Fraude				1								1	2.63
Abusos contractuales – contratos leoninos				1				1		1		3	7.89
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral		1										1	2.63
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones				1					1			2	5.26
Despido ilegal o injusto					1							1	2.63
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	2		2	1				1	1		2	9	23.7
Despido injusto	1											1	2.63
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita		1	1									2	5.26
Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria		1	1									2	5.26
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación	1	1	1									3	7.89
Educación NO orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de la dignidad											1	1	2.63
VIVIENDA													
Inseguridad jurídica de la tenencia	1	1										2	5.26
Falta de servicios, materiales e infraestructura				1								1	2.63
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Inexistente cobertura social						1	1					2	5.26
Insuficiente cobertura social de riesgos	1	1										2	5.26
Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social	1											1	2.63
DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA													
No respetar el patrimonio natural y cultural											1	1	2.63
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos			1									1	2.63
Distribuir agua contaminada	1											1	2.63
Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas											1	1	2.63
TOTAL MENSUAL	8	6	6	5	1	1	1	2	2	1	5	38	100.00





2.3 Derechos específicos

En diferentes municipios de Alta Verapaz se ha detectado el incremento de abusos y maltratos físicos y psicológicos en contra de la niñez, situación vinculada a la falta de políticas de desarrollo, trabajo y paz por parte del Estado. El Ministerio Público (MP) no atiende las denuncias presentadas por violencia sexual, atrasando las investigaciones jurisdiccionales que le son potestad constitucional atender de inmediato, y ha dejado de presentar las acusaciones correspondientes. Además, personas de la tercera edad han denunciado al IGSS por falta de atención médica y de prestaciones del programa IVS.

Asimismo, se ha observado que de las detenciones que realiza la PNC, ya sea por flagrancia del delito o con orden de juez, los detenidos no son presentados en las seis horas que lo indica la ley; por otra parte, los jueces de Prevención (de Paz) no se encuentran presentes durante sus respectivas judicaturas, vulnerándose en la audiencia el principio de inmediación, ya que sólo los secretarios u oficiales toman las declaraciones a las personas.

Expediente ORD.06-2009/DE

Se presentó denuncia contra Edna Maritza Quiroa Díaz, catedrática de cuarto bachillerato del Instituto Normal Mixto del Norte Emilio Rosales Ponce, de Cobán, porque durante 2008 agredió con palabras soeces a una alumna, llegando al extremo de reprobarla en el curso y en los exámenes de recuperación, sugiriéndole que hiciera la limpieza del laboratorio de biología para ganar el curso. Como parte de la investigación se requirió informe a las autoridades educativas correspondientes y personal de la PDH se constituyó en el lugar de los hechos para entrevistar a docentes y estudiantes, con lo cual se constató la veracidad de los hechos.

Expediente ORD.27-2009/DE

Una agente de la Dirección de Seguridad Turística de la PNC de este departamento denunció a su jefe (subcomisario), por violencia y abuso sexual, e impedirle que asistiera a las citaciones remitidas por los tribunales y el MP por la muerte violenta de una de sus hijas (también agente de la PNC). Como parte de la investigación se solicitó informe a la directora y al subcomisario de la PNC de Alta Verapaz, se remitió la denuncia a la Fiscalía Distrital del MP de esta ciudad y a la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima para brindarle asesoría jurídica a la denunciante, y el personal de la Auxiliatura entrevistó a agentes de la PNC.

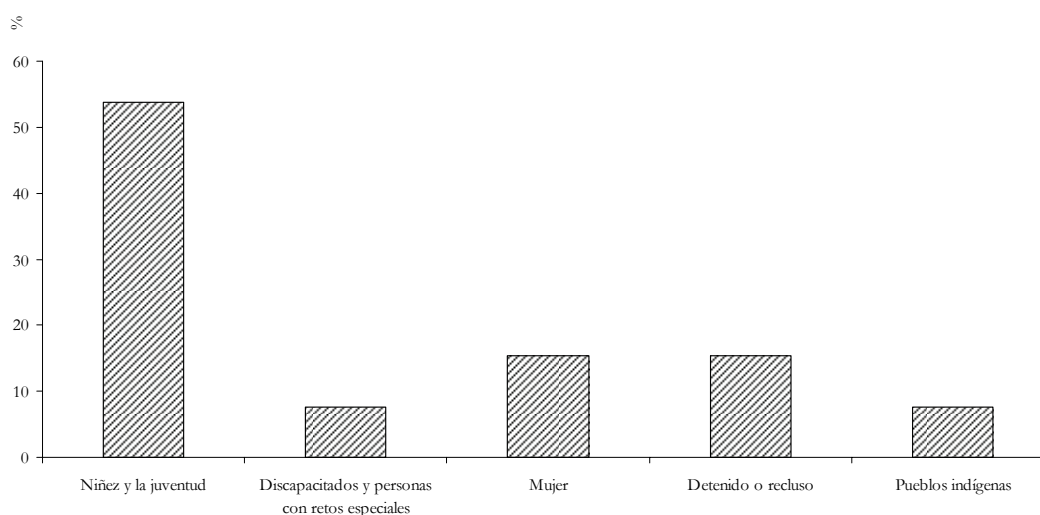
Expediente ORD.52-2009/DE

El personal del Centro de Detención Preventiva para hombres de Alta Verapaz fue denunciado por negarle atención médica a un recluso, dejándolo convulsionar por varias horas y realizando su posterior traslado en

forma violenta. Como parte de la investigación se requirió informe a las autoridades correspondientes y el personal de la Auxiliatura se constituyó para verificar el estado de salud de la persona y entrevistar a los reclusos del Centro Preventivo, estableciéndose que no le fue brindada atención médica inmediata.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – ESPECÍFICOS Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NINEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil	1			1			1	1				4	30.8
Descuidos o tratos negligentes									2			2	15.4
Acoso sexual										1		1	7.69
DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES													
Discriminación cultural, social, económica, política	1											1	7.69
MUJER													
Violencia sexual								1				1	7.69
Acoso sexual			1									1	7.69
DETENIDO O RECLUSO													
Acciones que atentan contra su dignidad									1			1	7.69
Ambiente y prácticas insalubres									1			1	7.69
PUEBLOS INDÍGENAS													
No permitir o facilitar el aprendizaje y el ejercicio de la identidad cultural (formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización, traje indígena, idiomas o variantes dialectales, instituciones propias)	1											1	7.69
TOTAL MENSUAL	3	0	1	1	0	0	1	2	4	1	0	13	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Expediente ORD.04-2009/DCP

La denunciante manifestó que su hermana ingresó a la emergencia del Hospital Regional Hellen Lossi de Laugerud de Cobán con labor de parto, dando a luz por cesárea a un varón; horas después se le informó que el recién nacido había fallecido por Síndrome de Aspiración de Meconio, y que debía realizar los trámites para inhumarlo. Al siguiente día llegó el esposo para recoger el cadáver solicitando le mostraran el rostro, lo que no fue autorizado por el encargado, llevándose a su residencia, en la aldea Sesimaj, San Pedro Carchá. Ante la duda abrió la caja constatando que el cuerpo pertenecía a una niña. Durante la investigación se verificó el expediente de la madre y las causas del fallecimiento del bebé; la denuncia fue remitida a la Fiscalía Distrital del MP, se requirió informe circunstanciado al MSPAS y al director del Área de Salud de Alta Verapaz y se escuchó al director del hospital en su calidad de denunciado. El caso está pendiente de resolución.

Expediente EIO.01-2009/DESC

El 4 de enero de 2009 miembros de la CONRED, vía telefónica, solicitaron la presencia de personal de la Auxiliatura para constatar y apoyar en el desastre ocurrido por el derrumbe del cerro Los Chorros, ubicado en la aldea Pamac, San Cristóbal Verapaz. Varias semanas antes del percance se advirtió a los comunitarios que no pasaran por el lugar porque habían ocurrido varios desprendimientos de tierra; sin embargo, 140 jornaleros caminaron por veredas que se encontraban en las faldas del cerro, cayendo sobre ellos un alud que abarcó más de un kilómetro de la carretera, con el resultado de 36 personas fallecidas. El personal de la Auxiliatura se movilizó al lugar de los hechos para verificar la asistencia y apoyo que se le estaba proporcionando tanto a los sobrevivientes como a quienes quedaron soterrados. Se solicitó informe a cada una de las autoridades relacionadas con el tema y se estableció el Centro de Operaciones para Emergencias (COE) para brindar apoyo a los damnificados. La alerta continúa y el expediente está abierto en virtud de que las autoridades no han habilitado una ruta alterna que permita a las comunidades afectadas circular.

Expediente MEDICACIÓN.34-2009, desalojo de la finca Guaxac, Tukurú

El propietario de la finca Guaxac solicitó a la institución del PDH realizar una mesa de diálogo y resolver su situación con campesinos de la comunidad Los Pinos a quienes, como pago de prestaciones laborales, otorgó una fracción de la finca en propiedad. Éstos, inconformes, ocuparon un espacio mayor, ante lo cual fueron desalojados de forma pacífica; por la noche nuevamente la ocuparon, produciéndose un nuevo desalojo, pero esta vez en condiciones violentas. En los días posteriores los campesinos desarmaron a los guardias de seguridad y otra vez ocuparon la finca. A solicitud del denunciante se realizó una investigación de los hechos y se instaló la mesa de diálogo en la cual las partes involucradas aceptaron iniciar una negociación abierta con la participación de organizaciones campesinas, la Iglesia Católica, comunitarios, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Fondo de Tierras y organizaciones no gubernamentales, y liderada por la PDH.

Expediente MEDIACIÓN.23-2009

Campesinos de las comunidades Cantutu y La Esperanza, del municipio de San Fernando Chahal, solicitaron la intervención de la institución del PDH puesto que la tierra donde han vivido por décadas cambió de dueño, quien pretendía desalojarlos. Ante la situación se instaló una mesa de diálogo con la participación de campesinos de ambas comunidades, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el ingeniero Carlos García Ical, representante del propietario Erick Ricardo Wagner Zamora, en la cual se estableció que éste había iniciado gestiones de proyectos forestales para esas fincas. A través de una investigación registral y catastral se constató que las áreas ocupadas por los campesinos son propiedad privada, por lo que se inició una fase de negociación y mediación entre las partes para buscar una salida pacífica. Se logró que el propietario otorgara cuatro cuerdas de terreno totalmente gratuitas para vivienda y la firma de un contrato de arrendamiento para cultivos, aceptando el pago con trabajo.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente PREVENCIÓN A.V. 31-2009/DE A favor de: Wilson Omar Ligorria Motivo: desconocer el paradero del menor de edad, luego de haber sido detenido Declarado con lugar: no
Descripción del caso: la señora Silvia Azucena Ligorria Cacao manifestó que su sobrino, menor de edad, desapareció luego de agredir a su hermana y de ser detenido, desconociendo a la fecha su paradero.
Expediente PREVENCIÓN A.V. 75-2009/DE A favor de: un menor de edad Motivo: haber sido objeto de abuso sexual Declarado con lugar: las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Paz de Santa Catarina La Tinta
Descripción del caso: vecinos del municipio manifestaron que el menor ha sido objeto de abuso sexual constante por un vecino y que a raíz de ello contrajo una enfermedad venérea, para la cual no ha recibido atención médica.
Expediente INTERVENCIÓN INMEDIATA A.V. 03-2009/DCP A favor de: Giovanni Beltetón y Daniel Solares Motivo: detenidos ilegalmente por un grupo de docentes en el municipio de Santa María Cahabón Declarado con lugar: no
Descripción del caso: vía telefónica, la profesora Mayra Hernández manifestó que en Santa María Cahabón un grupo de maestros tenía retenidos a los profesores Giovanni Beltetón y Daniel Solares, secretario general y secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (STEG).
Expediente ORIENTACIÓN A.V. 70-2009/DE A favor de: persona desconocida Motivo: encontrarse encerrada una mujer Declarado con lugar: las acciones fueron remitidas al Juzgado de Paz del municipio de San Juan Chamelco
Descripción del caso: se recibió denuncia anónima indicando que en una vivienda ubicada en la 4ª. calle 2-46 de la zona 5, barrio San Luis, de San Juan Chamelco, una persona de sexo femenino, al parecer, había sido agredida por su esposo quien posteriormente la dejó encerrada.
Expediente PREVENCIÓN A.V. 13-2009/DESC A favor de: Angelina Pop Tux Motivo: no permitir que se le brinde atención médica Declarado con lugar: no
Descripción del caso: la doctora Orieta Urias, directora del distrito del municipio Fray Bartolomé de las Casas, manifestó que en la comunidad Chinacobeja, del mismo municipio, la señora Pop Tux, quien presenta un cuadro delicado de salud por su embarazo de casi nueve meses, a la fecha no ha acudido a los servicios de salud para recibir el control correspondiente.
Expediente PREVENCIÓN A.V. 27-2009/DCP A favor de: Rogelio Xitumul Grave, menor de edad Motivo: detenido ilegalmente por el personal de seguridad de la empresa Despensa Familiar Declarado con lugar: no
Descripción del caso: la señora Romelia Xitumul Grave, madre del menor de edad, denunció que éste fue detenido ilegalmente por el personal de seguridad de la Despensa Familiar cuando ella pasó a pagar, dado que no le alcanzaba para cancelar todo.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que **SÍ** han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD. 03-2009	Dr. Erick Rafael Paau	Director	Hospital Regional Hellen Lossi Laugerud
ORD. 13-2009	Artemio Lima Pop	Alcalde Municipal	Municipalidad de Chisec
ORD. 14-2009	Concejo Municipal de Cobán	Concejales	Municipalidad de Cobán
ORD. 20-2009	Lic. José Amilcar Velásquez Zarate	Fiscal General	Ministerio Público
ORD. 21-2009	Germán Leonel Ixcot	Subcomisario	PNC
ORD. 22-2009	Licda. Carmen Aleyda Zabala	Coordinadora Departamental	Ministerio de Educación
ORD. 23-2009	Otto Oswaldo Quej Chen	Alcalde Municipal	Municipalidad de S. Pedro Carchá
ORD. 26-2009	Licda. Maria de la Cruz Ortiz	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD. 26-2009	Lic. Jose Amilcar Velasquez Zarate	Fiscal General	Ministerio Público
ORD. 27-2009	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
ORD. 29-2009	Germán Leonel Ixcot	Subcomisario	PNC
ORD. 31-2009	Jorge García	Jefe de Oficina Comercial	DEORSA
ORD. 36-2009	Alfredo Alvarez Cabnal	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD. 36-2009	Licda. Ana Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD. 37-2009	Ing. Leonel Arturo Chacón Barrios	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cobán
ORD. 40-2009	Rocael Edelman Fuentes y Fuentes	Subcomisario	PNC
ORD. 42-2009	Lic. Alfredo Álvarez Cabnal	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD. 42-2009	Licda. Ana Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD. 44-2009	Rocael Edelman Fuentes y Fuentes	Subcomisario	PNC
ORD. 45-2009	Germán Leonel Ixcot	Subcomisario	PNC
ORD. 45-2009	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
ORD. 51-2009	Lic. Alfredo Álvarez Cabnal	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD. 53-2009	Licda. Dominga Tecu Canil	Gobernadora	Gobernación Departamental
ORD. 53-2009	Ing. Leonel Arturo Chacón Barrios	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cobán
ORD. 54-2009	Rocael Edelman Fuentes y Fuentes	Subcomisario	PNC
ORD. 58-2009	Licda. Ana Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD. 58-2009	Alfredo Álvarez Cabnal	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD. 60-2009	Lic. Carlos Ortiz	Delegado Departamental	Ministerio de Trabajo
ORD. 61-2009	Lic. Alfredo Álvarez Cabnal	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD. 65-2009	Ing. Leonel Arturo Chacón Barrios	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cobán
ORD. 69-2009		Gobernadora Departamental	Ministerio de Gobernación
ORD. 69-2009	Dra. Lisbeth Rosario Cajas y Cajas	Directora Departamental	Ministerio de Salud
ORD. 72-2009	Ing. Héctor Romeo Champet Ordóñez	Coordinador Regional	Fondo de Tierras
ORD. 74-2009	Licda. Gloria Dominga Tecun Canil	Gobernadora	Gobernación Departamental
ORD. 82-2009	Hesler Rocael Godínez Velásquez	Comisario	PNC

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
ORD. 03-2009	Dr. Gustavo Urizar	Director	Área de Salud, Ministerio de Salud
ORD. 29-2009	Licda. María de la Cruz Ortiz	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD. 29-2009	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
ORD.15-2009	Alfredo Álvarez Cabnal	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD. 37-2009	Concejo Municipal	Concejales	Municipalidad de Cobán
ORD. 60-2009	Lic. Edgar Alfredo Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo
ORD. 59-2009	Ing. Leonel Arturo Chacón Barrios	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cobán
ORD. 59-2009	Concejo Municipal	Concejales	Municipalidad de Cobán
ORD. 41-2009	Licda. Marta Julia Pacay	Juez	Juzgado de Familia
ORD. 73-2009	Lic. Amilcar Velásquez Zarate	Fiscal General	Ministerio Público

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	417
De apertura de expedientes de investigación	109
Medidas urgentes	80
Ampliación de plazo para la investigación	40
Con suspensión por desistimiento	5
Acumulación de expedientes	4
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	10
TOTAL	665

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- **Operativo al Preventivo de Hombres de Cobán, Alta Verapaz.** Personal de la Auxiliatura se constituyó en el Centro Preventivo donde se constató que los miembros de seguridad penitenciaria revisan a cada una de las personas y sus pertenencias antes de ingresar; sin embargo, llamó la atención que uno de los guardias (no una mujer) pretendía revisar a la oficial de defensorías, lo que al parecer es una práctica común dentro del Preventivo. Además, se verificaron las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los reclusos, la falta de iluminación y ventilación, el deterioro de la infraestructura del edificio, la falta de unos 50 colchones en las literas, y la insuficiencia y poca calidad de los alimentos.
- **Frente contra el Hambre en Alta Verapaz.** El 8 de septiembre, en *Prensa Libre* se informaba que en el Centro de Atención Integral Materno-Infantil (CAIMI) de San Cristóbal Verapaz, donde funciona el Centro de Recuperación Nutricional de todo el departamento, se estaba alimentando a los niños con horchata por no contar con alimentos adecuados. Se abrió el expediente EIO.13/2009, y se empezó a gestionar, mediante la Unidad de Incidencia Política del departamento, la obtención de alimentos para dicho centro. Asimismo, se solicitó a la Fundación Castillo Córdova atender 37 casos de desnutrición

aguda en la comunidad de Tampur, municipio La Tinta; como respuesta entregó a cada una de las familias damnificadas una bolsa de productos que les ayudarían, de forma paliativa, para su subsistencia durante 15 días. Estas acciones fueron realizadas antes del lanzamiento del Frente Contra el Hambre.

Incidencia política

- Observación de desalojos en Alta Verapaz.
- Cinco monitoreos dirigidos por las oficinas centrales.
- Otorgamiento en propiedad, por los dueños, de un área de terreno a campesinos de las comunidades de Cantutu y la Esperanza, del municipio de San Fernando Chahal.
- Dos mesas de diálogo: una en conflicto de otorgamiento de derecho de paso de carretera nacional que se construye entre San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz; la otra, en conflicto entre las comunidades de Paraíso Privado y Santa María Samilha, de los municipios de Santa Catalina la Tinta y Panzós.
- Obtención de asistencia médica a niño con padecimiento de labio leporino, quien será intervenido por la fundación HELPS internacional.
- Tres mediaciones: una por el conflicto suscitado por el cambio de director en el Instituto Nacional de Educación Básica de Cobán; otra entre autoridades de la Municipalidad de Cobán y el COCODE de la colonia Chichochoc, por la instalación de una pasarela; y la tercera, en el conflicto de la comunidad Cubilguitz y la entidad Desarrollos Agropecuarios del Norte por disputas labores y derechos sobre la tenencia de la tierra.
- Participación en mediación y sensibilización en las comunidades afectadas por el deslave del cerro Los Chorros en San Cristóbal Verapaz, así como supervisión de las acciones del COE departamental por esta eventualidad.
- Instalación de una mesa de diálogo por situación de maestros bajo el renglón 0-21.
- Monitoreo de casos de gripe tipo AH1N1 en Alta Verapaz.
- Obtención de alimentos a través de la Fundación Castillo Córdoba para CAIMI, del municipio de San Cristóbal y para los niños con desnutrición aguda de la comunidad Tampur, Santa Catalina La Tinta.
- Instalación del Frente Departamental contra el Hambre.

Seguimiento de Acuerdos de Paz

- Un diplomado con docentes del municipio de Santa Cruz Verapaz, con el tema “Descubriendo el Pasado para construir el Futuro”, en coordinación con el capacitador técnico administrativo de dicho municipio.
- Una conferencia en conmemoración del Día de las Desapariciones Forzadas durante el Conflicto Armado Interno y un foro televisivo.

Educación y promoción

- Un diplomado con diez promotores juveniles comunitarios de siete comunidades del municipio de San Pedro Carchá.
- Cuatro talleres de diplomado dirigidos a 35 directores y docentes en el municipio de Santa Cruz Verapaz.
- Siete talleres en el proceso formativo de agentes de la PNC de Alta Verapaz, en el cual participaron agentes de las secciones del FIP, DISETUR, Núcleo de Reserva, Sección de Operaciones, Sección de Apoyo, DEIC, DIPRONA, DIMULT, y Equidad y Género.
- Un monitoreo de la enseñanza de los derechos humanos en el Sistema Nacional de Educación, en las escuelas oficiales urbanas de Tactic, San Cristóbal, Santa Cruz, San Juan Chamelco y San Pedro Carchá.
- Acuerdo de agilización de trámite de expedientes de los estudiantes egresados de 3º básico en 2008, entre la dirección del Instituto Nacional de Educación Básica y la Supervisión de Educación Media, con el propósito de que no fueran rechazados de los establecimientos donde se encontraban estudiando el nivel diversificado.
- Se logró la inscripción extemporánea de un niño en la Escuela Oficial Urbana Mixta Barrio Chibujbú, de San Pedro Carchá, quien por motivo de maltrato infantil no había sido inscrito. Se le dotó de una gran

parte de los útiles escolares pese a que no aparecía como beneficiario en la escuela desde finales del año anterior.

- Se logró que las autoridades educativas establecieran un mecanismo de control en la Escuela Oficial Urbana Mixta Carlos Ponce Archila, del municipio de San Juan Chamelco, a raíz de que a una estudiante le inyectara sustancias desconocidas una persona que se presentó en la entrada de dicha escuela.
- Dos talleres, uno dirigido a mujeres de la aldea Nimlajacoc, del municipio de Cobán, en coordinación con la Asociación Caja Lúdica de Guatemala, y el otro con estudiantes de la Escuela de Enfermería de Cobán.
- Se atendió a 12 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- Se orientó a estudiantes de nivel medio sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, los derechos humanos y los objetivos de la PDH.
- Una conferencia con estudiantes y docentes de la escuela del barrio Chibujbú.
- Dos conferencias dirigidas a COCODES, una en el municipio de Rasura y otra en el de Tukurú.
- Una conferencia dirigida a miembros del COMUDE de Chisec.
- Una conferencia a estudiantes de magisterio urbano del Instituto Normal Mixto del Norte Emilio Rosales Ponce, de Cobán.
- Una conferencia a estudiantes de nivel primario de la escuela Oficial Rural Mixta aldea Chajquej, del municipio de San Pedro Carchá.
- Una conferencia en la Universidad Rafael Landívar sobre el tema “La discriminación de los pueblos indígenas en el uso del idioma en las instituciones del Estado y privadas”.
- 23 programas de promoción, en directo, con distintos temas de derechos humanos, transmitidos en una emisora comunitaria del municipio de San Pedro Carchá.
- Dos *spots* de radio sobre la Ley de Acceso a la Información.
- Un programa de radio sobre la conmemoración del Día del Niño.
- Elección de Niño Procurador por un Año, recayendo la responsabilidad en una niña y dos niños de las escuelas de los municipios de San Juan Chamelco, Carchá y Cobán, respectivamente.
- Festival de dibujo dirigido a niños de tres escuelas de los municipios de San Pedro Carchá, Cobán y San Juan Chamelco.
- Concurso de dibujo en conmemoración del Día del Niño en el municipio de San Juan Chamelco, como actividad de la Niña Procuradora por un Año.
- Foro sobre los derechos de los pueblos indígenas, con participación de panelistas connotados y como público, estudiantes del nivel medio del Instituto Normal Mixto del Norte, Cobán.
- Encuentro intergeneracional “Abuelos y Abuelas por Siempre” en tres escuelas de Chamelco, Carchá y Cobán.

Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz



Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz

De enero a noviembre de 2009, en Baja Verapaz se registró un aumento considerable en las denuncias de expedientes de investigación y de acciones específicas, debido a la falta de concienciación en la población y la ineficacia de los operadores de justicia. Las más anuentes a presentar denuncias por atropellos de sus derechos son las zonas con descendencia o mayoría indígena.

Los índices de criminalidad y violencia familiares incrementaron. También, aumentó de forma considerable la violencia relacionada con conflictos de carácter agrario en las comunidades de Purulhá, Rabinal, El Chol, Salamá y Cubulco.

Es necesario que los funcionarios públicos profundicen su conocimiento y actuación en el marco de los derechos humanos, con énfasis en la fiscalización administrativa que compete a la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), y consolidar la incidencia política de la sociedad civil para reivindicar los derechos fundamentales ante autoridades locales, en especial en los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) y el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), así como ampliar el conocimiento de la población para su defensa y ejercicio.

Ante la falta de políticas de seguridad pública eficientes, Baja Verapaz tiene alta probabilidad de convertirse en una zona roja, producto de la delincuencia y el narcotráfico puesto que, según Gobernación, figura entre los posibles territorios de estos grupos, quedando en mayor riesgo los municipios de Rabinal, Salamá y Purulhá.

Aunado a esto, la inseguridad alimentaria afectaría a un 70% de la población debido a la pobreza y extrema pobreza en el departamento.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz se realizaron 323 acciones específicas: 44 de orientación, 214 de prevención, 36 de mediación, 1 de acompañamiento, 25 de conciliación y 3 de intervención inmediata.

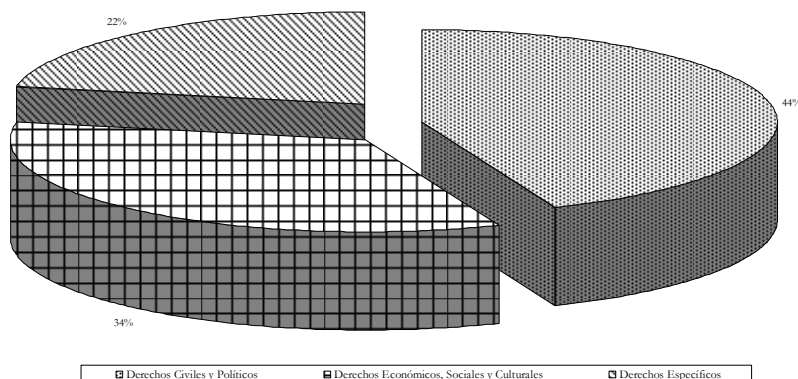
De investigación

Se abrieron 50 expedientes de investigación: 22 por violaciones a derechos individuales, 17 a derechos económicos, sociales y culturales y 11 a derechos específicos. De ellos, el 6% de oficio y el 94% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 74.14% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos		2			1	2	5	3	2	3		22	44.00
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	3	2	2	1	3		2	1		3		17	34.00
Derechos Específicos	2	1	1	2		2	2	1				11	22.00
TOTAL MENSUAL	5	5	3	7	4	4	9	5	2	6	0	50	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	2		1									3	6.00
Ordinario	3	5	2	7	4	4	9	5	2	6		47	94.00
TOTAL MENSUAL	5	5	3	7	4	4	9	5	2	6	0	50	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	44	13.62
Prevención	214	66.25
Mediación	36	11.15
Acompañamiento	1	0.31
Conciliación	25	7.74
Intervención inmediata	3	0.93
TOTAL MENSUAL	323	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS

Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	2	4	1	8	1	3	8	5	4	5	2	43	74.14
Judicial						1			1			2	3.45
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
Municipalidades	2	1	1	1			2				1	8	13.79
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social				1	2							3	5.17
A-A no determinado													0.00
Ministerio Público		1			1							2	3.45
TOTAL MENSUAL	4	6	2	10	4	4	10	5	5	5	3	58	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

En lo que va del año las instituciones más denunciadas y con mayor grado de responsabilidad por acción u omisión son: la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP), el Área de Salud Departamental, el Hospital Nacional, la Dirección Departamental de Educación, algunas municipalidades del departamento y el Registro Nacional de las Personas (RENAP).

Las arbitrariedades por parte de elementos de la PNC han aumentado, conociéndose casos de abuso de autoridad, agresiones físicas y verbales, y corrupción. También se registraron denuncias por violaciones a las garantías constitucionales, tales como detenciones ilegales, retardo o negación de la justicia, principalmente por fuerzas de seguridad y encargados de administrar la justicia.

Expediente ORD.B.V.26-2009/DCP

Se recibió denuncia contra agentes de la PNC por agredir a un hombre, quienes, además, al momento de su captura permitieron que el cuñado de éste también lo agrediera. Tras ser detenido, lo intimidaron para que se declarara culpable del delito de asesinato en grado de tentativa y que identificara a dos personas de una foto que los agentes le mostraron. El denunciante necesitó atención médica por lo que el personal de la Auxiliatura se constituyó en el centro carcelario. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC y se entrevistó a los agentes captores, quienes negaron las acusaciones. Se desestimó la denuncia por no hallarse indicios de golpes en el cuerpo del detenido.

Expediente ORD.B.V.44-2009/DCP

El 20 de septiembre una mujer fue agredida físicamente y detenida por agentes de la PNC, por defender a su primo quien recibía igual trato por éstos. La denunciante, quien se alteró e insultó a los agentes, fue remitida a la cárcel, pero recuperó su libertad el día siguiente; sin embargo, presenta una lesión en el brazo que le impide moverlo. Por la investigación realizada se estableció que en esa fecha la denunciante y su primo fueron puestos a disposición de juzgado pertinente, por faltas contra el orden público y el delito de responsabilidad de conductores, respectivamente, imponiéndoles una multa por encontrarse en estado de ebriedad. El Juez de Paz de Salamá indicó que si los detenidos se encuentran golpeados, los remite de inmediato a reconocimiento médico. Se desestimó la denuncia ya que ante el Juez de Paz la denunciante aceptó haberse alterado.

Expediente PREV.B.V.168-2009/DCP

Por medio de una copia del memorial dirigido al jefe de la Comisaría de la PNC de Salamá, un activista de derechos humanos en el municipio de Rabinal y sobreviviente del conflicto armado denunció recibir amenazas de persona desconocida a su teléfono celular. Como parte de la investigación se determinó el estado de la denuncia presentada en la Fiscalía Municipal del MP, constatando que el denunciante se presentó a la misma un día antes. El delito fue tipificado como amenazas y coacción y el expediente fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos cinco días después. En la Auxiliatura se archivó el expediente por conocer el caso el órgano competente.

Expediente ORD.B.V.27-2009/DCP

El COCODE y padres de familia de la aldea Rincón Grande, Salamá, presentaron una denuncia contra la directora y maestra de la EORM de dicha aldea, por abusos físicos y psicológicos contra los alumnos de ese establecimiento, los que dieron como resultado la deserción de la mayoría de los estudiantes. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a la Dirección Departamental de Educación, se obtuvo declaraciones testimoniales de padres y alumnos y se realizó una reunión conjunta con padres de familia, autoridades educativas y la maestra denunciada, para determinar la veracidad de los hechos. Aunque las

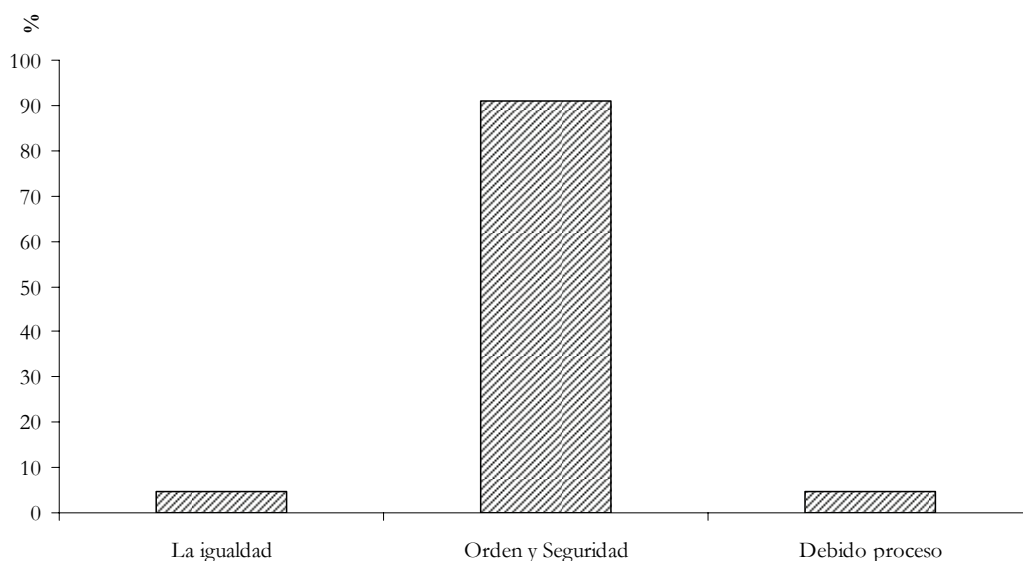
autoridades del Ministerio de Educación ordenaron la reubicación de la profesora a otro establecimiento, ella no acató dicha orden.

Expediente ORD.B.V.19-2009/DCP

Alumnas de la Escuela Normal Rural Elizardo Urizar Leal, de Salamá, presentaron una denuncia contra agentes de la PMT de Salamá dado que, tras consignar el bus en el cual las alumnas se transportaba, con el argumento de que no contaban con la documentación correcta, las agredieron causándoles lesiones que requirieron intervención médica y posteriormente las abandonaron en el barrio La Estancia. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al director de la PMT de Salamá, se obtuvo el testimonio de padres y alumnas, y de vecinos del lugar, lo que dio elementos suficientes para emitir una resolución. Como resultado se confirmó que sí hubo abuso de autoridad por parte de los agentes involucrados; el hecho fue conocido por el Juzgado de Paz de Salamá.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
LA IGUALDAD													
Discriminación – racismo		1										1	5
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo				3	1	2	4	3	1	3		17	77
Amenazas, coacción									1			1	5
Detención ilegal		1		1								2	9
DEBIDO PROCESO													
Discontinuidad y lentitud procesal							1					1	5
TOTAL MENSUAL	0	2	0	4	1	2	5	3	2	3	0	22	100



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

En Baja Verapaz los derechos más vulnerados son a la educación, salud, trabajo, alimentación y vivienda y los de consumidor y usuario, los cuales, en relación con el año pasado, reflejan un aumento significativo, en especial en los municipios de Salamá, Rabinal y San Miguel Chicaj.

Es uno de los departamentos con más altos índices de analfabetismo, principalmente en Purulhá; en cuanto a salud, la tasa de mortalidad infantil aumentó considerablemente en relación con el año pasado. El problema de la seguridad alimentaria también tuvo fuerte impacto nacional e internacionalmente, por lo que la institución del PDH creó el Frente contra el Hambre y la Mesa de Crisis Alimentaria y, con el apoyo de las instancias de la Comisión de Seguridad Alimentaria Departamental, se realizó el censo estratificado para obtener un panorama real de la situación, siendo Purulhá y Rabinal los más afectados.

Un aspecto que generó violencia social en el departamento fueron las constantes violaciones de los derechos humanos al consumidor y usuario, como el alza al combustible, al gas propano y a la energía eléctrica. Ciertas anomalías en la distribución de los distintos programas de gobierno, como Mi familia Progres, Adulto Mayor, Bolsas Solidarias, también causaron descontento entre la población.

Expediente ORD. B.V.07-2009/DESC

Ante la posibilidad de que un proyecto de minirriego que busca implementarse y para el cual se consideraba que debía eliminarse una toma de agua que beneficia a 35 personas de la aldea Xesiguán, para sus cultivos, se solicitó que, de realizarse, sea respetada dicha toma. Se solicitó informe a las autoridades competentes y se entrevistó al asistente administrativo del CODEDE, al presidente del COCODE y a vecinos de Xesiguán, así como al ingeniero de la Municipalidad encargado del proyecto; a partir de esta información se estableció que el proyecto no afectará a la comunidad y que como la toma en cuestión ha causado inundaciones, el proyecto mejorará la producción de las siembras locales.

Expediente ORD.B.V.20-2009/DESC

El primero de mayo de 2009 el denunciante recibió una llamada del encargado de personal del Área de Salud de Baja Verapaz indicándole que el 4 de mayo debía presentarse para tomar posesión de una plaza en el área; al llegar el encargado le negó tomar posesión y le dijo que hablara con el director. A la fecha de presentación de la denuncia (8 de mayo) sigue en espera de la misma. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al director del Área de Salud y se entrevistó al jefe de Recursos Humanos, quienes indicaron que sólo recibieron órdenes escritas de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Tras conocer los procedimientos del MSPAS para que una persona opte a una plaza, el denunciante debe cumplir con los mismos, ya que es dicha instancia la que evalúa y elige.

Expediente ORD.B.V.22-2009/DESC

Tras una extracción de dos cordales, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el denunciante regresó indicando que enfrentaba serias molestias y solicitando que se prolongara su suspensión de labores y, además, que se le tomara una radiografía, la cual reveló una fractura en el lado izquierdo de su mandíbula. Por ello culpó de mal procedimiento al médico que le practicó la extracción. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al director del Hospital General de Accidentes del IGSS; apoyo de la Unidad de Investigaciones de la sede central para verificar el expediente clínico del denunciante; y se entrevistó a los médicos tratantes. Se desestimó la denuncia dado que el denunciante pretendía continuar suspendido de sus labores y fue él quien provocó la fractura al ingerir alimentos inadecuados.

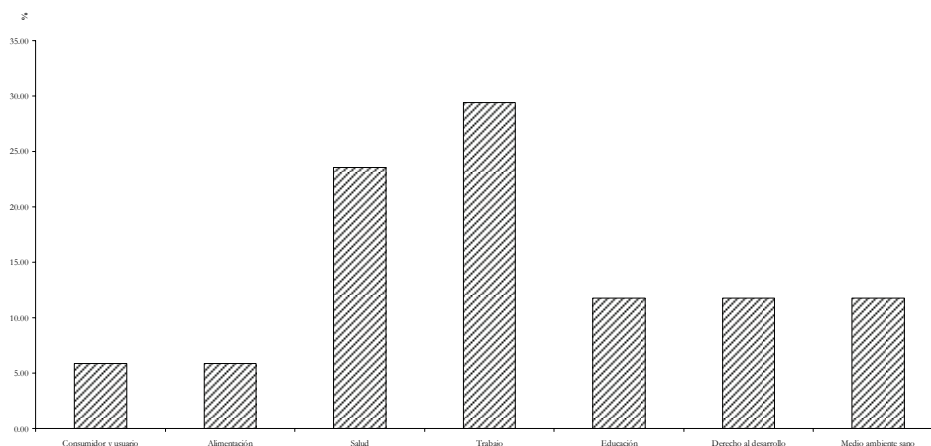
Expediente ORD.B.V.30-2009/DESC

Vecinos del barrio Agua Caliente presentaron una denuncia contra la Alcaldía Municipal de Salamá por la contaminación del ambiente a causa del basurero municipal ubicado en dicho barrio, el cual ha provocado el incremento de enfermedades respiratorias debido al humo tóxico que despiden. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a las autoridades competentes, se obtuvo testimonio de los vecinos y se

visitó el lugar de los hechos. Con base en dicha investigación se determinó la inadecuada ubicación del basurero debido a su cercanía a muchas viviendas y una escuela pública, lo que dio motivo para incidir ante la Municipalidad, logrando que lo clausurara.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Abusos contractuales – contratos leoninos							1					1	5.88
ALIMENTACIÓN													
Inseguridad alimentaria	1											1	5.88
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud					1							1	5.88
Mala práctica médica					1							1	5.88
Mala atención en centro de salud			1							1		2	11.76
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones					1							1	5.88
No evolución del salario				1								1	5.88
Subempleo										1		1	5.88
Despido ilegal o injusto		1										1	5.88
Omisión de fiscalización por parte del Estado										1		1	5.88
EDUCACIÓN													
Falta de oportunidades de participación en la toma de decisiones en situaciones reales								1				1	5.88
Falta de insumos y material didáctico	1											1	5.88
DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA													
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera	1	1										2	11.76
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos							1					1	5.88
Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos			1									1	5.88
TOTAL MENSUAL	3	2	2	1	3	0	2	1	0	3	0	17	100.00



2.3 Derechos específicos

En Baja Verapaz se sigue practicando la discriminación social en contra de los grupos étnicos, la niñez y la mujer, así como limitaciones a la libre participación de los grupos de la sociedad organizada en la toma de decisiones sobre la ejecución de obras y proyectos por parte de las municipalidades.

La violencia afecta en mayor medida a grupos vulnerables como mujeres, niñez, adulto mayor y personas con discapacidad. En la Auxiliatura, las mujeres denuncian violencia intrafamiliar por parte de sus esposos, convivientes, ex convivientes; las personas de la tercera edad son objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de sus hijos; y la niñez ha sido agredida de forma física y psicológica por parte de familiares, maestros y personas particulares.

Además, existe violación al debido proceso, por la lentitud en los casos penales en las instancias de aplicación de justicia. Asimismo, los jefes institucionales cometen discriminación, pues ubican a las trabajadoras en puestos donde no han sido asignadas, y son víctimas de abuso de autoridad, prepotencia, discriminación y exclusión.

Expediente ORD.B.V.03-2009/DE, mujer

En diciembre de 2008 el jefe de la denunciante le pidió a ésta que asistiera a trabajar a la oficina en sábado, ya estando allí le hizo insinuaciones deshonestas, la besó a la fuerza y le bajó el pantalón con intención de abusarla sexualmente. No se realizó ningún tipo de investigación debido a que la trabajadora ya había presentado denuncia formal en la Fiscalía del MP de este departamento, y con fecha 30 de enero se presentó en esta Auxiliatura con el fin de desistir de la querrela.

Expediente ORIENTACIÓN B.V.03-2009/DE

El 28 de enero los denunciados, Fabián Sis Sis, Agustín Canahuí López y Ángel de Paz Canahuí, detuvieron a un joven de 16 años de edad, quien padece de problemas mentales, acusándolo de haber abusado sexualmente de una menor de diez años; al momento de capturarlo le ataron pies y manos, le colocaron un lazo en el cuello y empezaron a golpearlo, causándole severas lesiones en todo el cuerpo. El padre acusó a los agresores. La denuncia fue remitida a la Fiscalía Distrital del MP del departamento para la investigación correspondiente.

Expediente PREVENTIVO B.V.20-2009/DE, adulto mayor

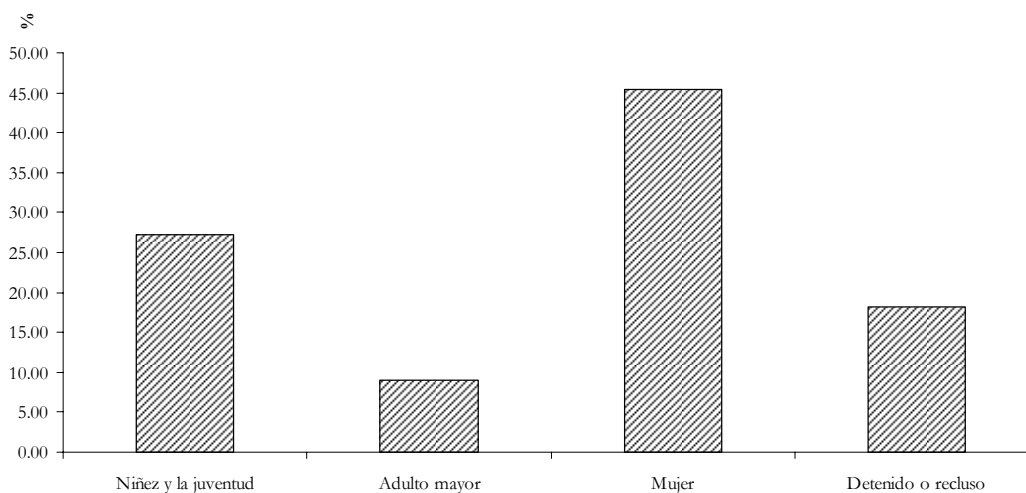
Un denunciante anónimo reportó que un hombre de 75 años de edad era objeto de maltrato físico y psicológico por parte de su hijo, quien además lo expulsó de la vivienda propiedad de su padre. Como parte de la investigación se remitió la denuncia al Juzgado de Paz de Salamá, solicitando las medidas de seguridad a favor de la víctima, las cuales fueron decretadas (proceso C-230-2009/Srio).

Expediente PREVENTIVO B.V.41-2009/DE, niñez y adolescencia

La PNC trasladó al albergue de la Pastoral de Atención al Migrante a una señora de nacionalidad nicaragüense y a su hija de seis meses de edad; al entrevistarla indicó que el último lugar donde estuvo fue en una refresquería del barrio Agua Caliente, de Salamá, donde era objeto de maltrato y privación de libertad. También refirió que con ella trabajaban dos menores de edad, ambas hondureñas, quienes son prostitutas. Se remitió denuncia al Juzgado de Paz de Salamá solicitando las medidas que amerita el caso para las menores; durante las diligencias realizadas por el Juzgado de Paz en el interior del negocio sólo se localizó a una menor, de más o menos 15 años de edad, quien se presume fue objeto de abuso y explotación sexual.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil			1	1				1				3	27.27
ADULTO MAYOR													
Discriminación cultural, social, económica, política				1								1	9.09
MUJER													
Discriminación cultural, social, económica, política							1					1	9.09
Violencia física o psicológica													
Maltrato							1					1	9.09
Acoso sexual	2											2	18.18
Falta de acceso a la seguridad social						1						1	9.09
Falta de acceso a la justicia													
DETENIDO O RECLUSO													
Acciones que atentan contra su dignidad		1				1						2	18.18
TOTAL MENSUAL	2	1	1	2	0	2	2	1	0	0	0	11	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Expediente ORD.B.V.16-2009/DCP

Una inspectora de la PNC presentó denuncia contra el oficial 3o. de la PNC, jefe de la Subestación 52-12, por falta de respeto y trato humillante, desvalorizándola y desautorizándola frente al personal bajo su cargo, y contra otro agente por faltarle al respeto frente a delegados de la institución que representa, la PDH, el ejército y la jefatura del Área de Salud. Se solicitó informe circunstanciado al superior inmediato, se entrevistó a los agentes de dicha subestación y se realizó una inspección documental del libro de faltas, copia del libro de turnos y se inspeccionaron las denuncias en el MP.

Expediente PREVENTIVO B.V.166-2009/DESC

Se presentó denuncia contra el director del Área de Salud de Baja Verapaz por abuso de autoridad y prepotencia, situación que ha provocado enfrentamientos y denuncias a nivel ministerial e, incluso, intervenciones del sector sindical. Se solicitó informe circunstanciado al MSPAS, se entrevistó a varios trabajadores y se solicitaron los registros, libros y antecedentes a varias instancias.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente ORD.B.V.15-2009/DCP

A favor de: Aurelio Ruiz

Motivo: detención ilegal y agresiones físicas

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: esta Auxiliatura inició acciones de investigación, promoviendo la exhibición personal a favor de la víctima, con base en la denuncia planteada por la licenciada Ana Odilia Luna Peláez por la captura ilegal de la víctima por parte de agentes de la PNC, quienes lo agredieron físicamente, ignorándose el motivo de su detención.

Expediente ORD.B.V.48-2009/DCP

A favor de: Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Salamá

Motivo: detención ilegal y arbitraria y agresiones físicas

Declarado con lugar: no

Descripción del caso: se iniciaron acciones de investigación y se promovió la acción de exhibición personal a favor de agentes de la Policía Municipal de Tránsito, quienes fueron objeto de detención ilegal, abuso de autoridad y prepotencia, ocasionándoles golpes en distintas partes del cuerpo.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.B.V.06-2009/DCP	Marvin Aníbal Caballeros	Director Subregional	Instituto Nacional de Bosques (INAB)
ORD.B.V.06-2009/DCP	Daniel Arturo Rivas Mérida	Jefe	Comisaría 52, PNC
ORD.B.V.07-2009/DESC	Ángela Flavia Reyes Larios	Gobernadora Departamental	Gobernación Departamental
ORD.B.V.08-2009	Gilma Judith García de León	Directora E.O.U.M	Ministerio de Educación
ORD.B.V.08-2009	Ana Concepción Escobar	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.B.V.09-2009/DCP	Mynor Contreras	Fiscal Distrital	Ministerio Público

ORD.B.V.10-2009/DE	Ana Concepción Escobar	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.B.V.10-2009/DE	Favián Amperez	Coordinador Técnico Administrativo	Ministerio de Educación
ORD.B.V.10-2009/DE	Gilma Judith García de León	Directora E.O.U.M	Ministerio de Educación
ORD.B.V.13-2009/DE	Alida Raymundo	Inspectora de Trabajo	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ORD.B.V.15-2009/DCP	Marco Tulio Folgar Palma	Jefe	Comisaría 52, PNC
ORD.B.V.16-2009/DCP	Marco Tulio Folgar Palma	Jefe	Comisaría 52, PNC
ORD.B.V.16-2009/DCP	Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Educación
ORD.B.V.16-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
ORD.B.V.18-2009/DESC		Director	IGSS
ORD.B.V.20-2009/DESC	Luis Gómez	Director	MSPAS
ORD.B.V.22-2009/DESC		Director General de Accidentes	IGSS
ORD.B.V.23-2009/DCP	Mynor Manuel Contreras Vela	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD.B.V.25-2009/DCP	Darwin Orsival Fuentes Fuentes	Comisario Departamental	PNC
ORD.B.V.26-2009/DCP	Darwin Orsival Fuentes Fuentes	Comisario Departamental	PNC
ORD.B.V.27-2009/DCP	Juan Gualberto Gramajo	Director	Ministerio de Educación
ORD.B.V.38-2009/DCP	Darwin Orsival Fuentes Fuentes	Jefe	Comisaría 52, PNC
ORD.B.V.40-2009/DCP	Darwin Orsival Fuentes Fuentes	Jefe	Comisaría 52, PNC
ORD.B.V.42-2009/DE	Mario Contreras	Fiscal Distrital	Ministerio Público
PREVENTIVO B.V.04-2009/DESC	Enrique Pérez Córdova	Jefe Zona Vial 14	Dirección General de Caminos
PREVENTIVO B.V.05-2009/DESC		Jurado Departamental	Ministerio de Educación
PREVENTIVO B.V. 19-2009/DE	Arnoldo Oliva	Delegado Departamental	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
PREVENTIVO B.V. 19-2009/DE	Luis Antonio Gómez Gómez	Director Departamental	MSPAS
PREVENTIVO B.V. 23-2009/DESC	Juan Alberto Calel García	Jefe de Agencia	Banrural S.A., Cooperativa Coopsama RL
PREVENTIVO B.V. 25-2009/DESC	Jose Bridijo Luna	Alcalde Municipal	Municipalidad
PREVENTIVO B.V. 27-2009/DESC		Jefe Subregional	INAB
PREVENTIVO B.V. 28-2009/DESC	Juan Veliz Izaguirre	Alcalde Municipal	Municipalidad
PREVENTIVO B.V. 37-2009/DE		Directora	Centro Atención Integral, Bienestar Social
PREVENTIVO B.V. 38-2009/DESC	Juan Veliz Izaguirre	Alcalde Municipal	Municipalidad
PREVENTIVO B.V. 46-2009/DCP	Daniel Rivas Mendoza		Comisario PNC
PREVENTIVO B.V. 51-2009/DESC	Juan Veliz Izaguirre	Alcalde Municipal	Municipalidad
PREVENTIVO B.V. 65-2009/DESC	Eder Abdul González González	Delegado Departamental	CONRED

PREVENTIVO B.V. 65-2009/DESC	Ángel Flavia Reyes Larios	Gobernadora Departamental	Gobernación Departamental
PREVENTIVO B.V. 65-2009/DESC	José Brigido Luna	Alcalde Municipal	Municipalidad
PREVENTIVO B.V. 71-2009/DE		Delegado Departamental	INAB
PREVENTIVO B.V. 78-2009/DESC		Directora Departamental	Ministerio de Educación
PREVENTIVO B.V. 80-2009/DESC	Eder Abdul González González	Delegado Departamental	CONRED
PREVENTIVO B.V. 103-2009/DE		Delegado Departamental	Departamento de Medio Ambiente
PREVENTIVO B.V. 104-2009/DESC	Julissa Marisol Castillo Morales	Directora	Proyecto Nuevo Amanecer
PREVENTIVO B.V. 104-2009/DESC	Mildred Magali Enríquez Reyes	Directora	Proyecto Nuevo Amanecer
PREVENTIVO B.V. 104-2009/DESC		Junta Directiva	Proyecto Nuevo Amanecer
PREVENTIVO B.V. 118-2009/DESC	Luisa Gómez Gómez	Directora Departamental	MSPAS
PREVENTIVO B.V. 118-2009/DESC		Delegado Departamental	Departamento de Medio Ambiente
PREVENTIVO B.V. 135-2009/DESC	Luis Antonio Gómez Gómez	Director	MSPAS
PREVENTIVO B.V. 80-2009/DESC	Luis Antonio Gómez Gómez	Director Departamental	MSPAS
PREVENTIVO B.V. 80-2009/DESC	Arnoldo Oliva	Delegado Departamental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
EIO.B.V.01-2009/DESC	Horacio Marroquín	Ingeniero	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
EIO.B.V.02-2009/DESC	Juan Veliz Izaguirre	Alcalde Municipal	Municipalidad
EIO.B.V.03-2009/DESC	Marcos Corazón Ismalej	Director E.N.B.I	Ministerio de Educación
MEDIACION B.V. 22-2009/DESC	Alejandra Marroquín	Coordinadora	Consejo de Cohesión social
MEDIACION B.V. 23-2009/DESC	Juan Veliz Izaguirre	Alcalde Municipal	Municipalidad

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.B.V.14-2009/DESC	Ana Concepción Escobar	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.B.V.11-2009/DE	Marco Tulio Folgar Palma	Subcomisario	PNC
ORD.B.V.12-2009/DE	Ana Concepción Escobar	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.B.V.14-2009/DESC	Ana Concepción Escobar	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.B.V.30-2009/DESC		Delegado Departamental	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ORD.B.V.38-2009/DCP		Delegado Departamental	FUNDEMABV
ORD.B.V.41-2009/DE	Edgar Audy González Coloch	Director	Ministerio de Educación



ORD.B.V.44-2009/DCP	Darwin Orsival Fuentes Fuentes	Comisario	PNC
PREVENTIVO B.V. 19-2009/DE	Luis Romero Ortiz Peláez	Ministro	Ministerio de Energía y Minas
PREVENTIVO B.V. 32-2009/DESC	David López Ayu	Gerente	Banrural
PREVENTIVO B.V. 51-2009/DESC	Luis Antonio Gómez Gómez	Director Departamental	MSPAS
PREVENTIVO B.V. 68-2009/DESC		Gerente	DEORSA
PREVENTIVO B.V. 71-2009/DE		Delegado Departamental	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
PREVENTIVO B.V. 72-2009/DESC		Gerente	DEORSA
PREVENTIVO B.V. 89-2009/DCP	Ana Concepción Escobar	Directora Departamental	Ministerio de Educación
EIO.B.V. 03-2009/DESC	Ana Concepción Escobar	Directora Departamental	Ministerio de Educación

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	323
De apertura de expedientes de investigación	54
Medidas urgentes	189
Se hace efectivo el apercibimiento por no haber cumplido con las medidas urgentes	54
Ampliación de plazo para la investigación	5
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	24
Enmienda de procedimientos	6
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	33
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	14
Con suspensión por desistimiento	19
Acumulación de expedientes	28
Resoluciones finales	
De NO violación - se determinó que no hubo violación	19
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	7
1> Con censura	3
2> Con recomendación	11
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	8
De control administrativo	5
Comportamiento administrativo lesivo	13
1> Con censura	7
2> Con recomendación	6
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	3
TOTAL	831

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Conformación de los COMRED en tres municipios del departamento.
- Verificación de familias en riesgo a causa de la lluvia y pérdida de cosechas.
- Mesas de diálogo, mediación y resolución de conflictos: en disputa entre vecinos y la Municipalidad de San Miguel Chicaj por dilatoria en la derogación de impuestos; en problema limítrofe entre San Miguel Chicaj y San Gabriel Pantzuj; entre transportistas autorizados e ilegales de San Miguel Chicaj; entre cofrades y Asochicaj en San Miguel Chicaj por disputa por administración de título municipal; en conflicto social e intermunicipal provocado por la Alcaldía de Salamá por la falta de basurero municipal; en la disputa intracomunitaria entre la aldea Laguna Patzijon y Patzaj, Cubulco; en el rechazo intermunicipal de Granados, Cubulco y Rabinal en contra del INAB por autorización de aprovechamiento forestal en zona de recarga hídrica del cerro Tunkaj; en oposición intermunicipal y de la sociedad civil ante proyectos mineros e hidroeléctricos en los municipios de Purulhá, Rabinal, San Miguel Chicaj y Cubulco; en conflicto social por negación de derecho de paso entre 60 familias, personas particulares y municipalidad de Salamá.
- Seis monitoreos: en rastros municipales por efectos de la sequía y precios de la canasta básica; acerca de cobros en escuelas públicas; por situación de la PNC; por brote de la gripe H1N1 en todo el departamento; a hospital (incidencia en la compra de nuevo equipo de lavandería); por el alza de pasaje en transporte extraurbano en la zona sur de Baja Verapaz.
- Reuniones con la Comisión de Seguridad, Derechos Humanos y Justicia del CODEDE.
- Elaboración del Plan Estratégico Departamental SECCATID.
- Actualización de información relacionada con el Centro Preventivo de Salamá.
- Acompañamiento a organizaciones de mujeres beneficiarias del programa FOGUAVI.
- Pronunciamiento sobre el efecto de la sequía a nivel departamental.
- Apoyo en el establecimiento de zonas libres de humo de tabaco a nivel departamental.
- Pronunciamiento sobre diversos temas relacionados con derechos humanos presentados y discutidos por la sociedad civil, la Comisión de Asuntos Agrarios y pueblos indígenas del CODEDE, Gobernación Departamental, SAA, Ministerio de Agricultura, FONTIERRA, RIC, CONAP, PGN, INAB, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Mesa de Tierra, Comisión Interinstitucional.

Educación y promoción

- Doce talleres con Juntas Municipales de Protección, coordinados con Plan Internacional, acerca de la protección de la niñez.
- Cuatro talleres con delegados de las oficinas de la mujer y niñez de las municipalidades de Baja Verapaz acerca de los derechos específicos de los grupos vulnerables y su atención municipal. Coordinado con PROMUDEL, DEMI, Plan y Mercy Corps.
- 32 talleres con docentes de Rabinal y Cubulco en el curso de Derechos Humanos y Docencia para la Paz, en coordinación con el Ministerio de Educación.
- Dos talleres con personal de Aldeas Infantiles SOS referente a los derechos de la niñez.
- Cuatro talleres con COCODES de San Jerónimo, coordinados con PROMUDEL, DEMI, Plan y Mercy Corps.
- Un taller dirigido a periodistas de Baja Verapaz sobre el sistema de protección a la niñez, en coordinación con Plan Internacional.
- Un taller con el personal de Plan Internacional de Baja Verapaz sobre salud mental y prevención de la violencia.
- Seis talleres de apoyo a centros educativos de Baja Verapaz con temas de derechos humanos, derechos de la niñez, memoria histórica, Acuerdos de Paz.

- Participación y acompañamiento para incidir en la inclusión de la formación ciudadana en el pensum escolar, en la Comisión Departamental de Educación, adscrita al CODEDE.
- Participación y acompañamiento en la red departamental de protección a la niñez.
- Participación y acompañamiento en la comisión de fortalecimiento comunitario adscrita al COMUDE de Purulhá para la planificación de procesos de fortalecimiento a COCODES y comisiones.
- Caminata de sensibilización contra el maltrato infantil con diez escuelas primarias urbanas del municipio de Salamá.
- Programa de televisión sobre la Ley de Acceso a la Información.
- Festival de oratoria y declamación con alumnos del municipio de Purulhá.
- Realización del festival “Abuelos por Siempre” en 16 escuelas de Rabinal.
- Celebración del festival “Expresemos nuestros derechos”.
- Apoyo en el *rally* de sensibilización organizado por la Junta Municipal de Protección y realizado en escuela urbana primaria de Purulhá, sobre prevención de maltrato y violencia.
- Elección de Niño Procurador por un Año.
- Participación en ocho ferias municipales por los derechos humanos, coordinadas por varias instituciones.
- Dos congresos de políticas públicas a favor de la niñez, en coordinación con Plan Internacional.
- Dos encuentros de compartimiento con juntas municipales de protección, en coordinación con Defensoría de la Niñez y Plan Internacional.

Durante 2009 fue hasta el segundo semestre que la Auxiliatura Municipal de Rabinal, contó de nuevo con oficina permanente. Las acciones que desde ella se realizaron durante ese período, se incorporan al informe general de la Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz, y constituyen un aproximado del 35% del total de las acciones realizadas en ese departamento. La Auxiliatura de Rabinal cobra especial importancia para dar cobertura a los municipios de Granados, Santa Cruz El Chol, Cubulco, y Rabinal, ya que acorta la distancia que la población debe recorrer para presentar sus denuncias.

Auxiliatura Departamental de Chimaltenango



Auxiliatura Departamental de Chimaltenango

De enero a noviembre de 2009, dado el aumento en el número de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en este departamento se realizaron diferentes acciones orientadas a la defensa y promoción de estos derechos.

El análisis de los datos estadísticos refleja el recrudecimiento e incremento de la inseguridad ciudadana. Las extorsiones, la proliferación de grupos de pandillas juveniles y la ineficiente función de las fuerzas de seguridad son consecuencia de la falta de políticas públicas del Estado.

En el campo de la salud pública sigue habiendo limitantes con respecto a medicinas preventivas, siendo la atención a la epidemia viral AH1N1 una prueba de la disfuncionalidad en las medidas hospitalarias adoptadas.

En el ámbito educacional la creciente desorganización administrativa ha provocado descontento en la sociedad, en especial entre los padres de familia que se quejan de no recibir el apoyo de la refacción escolar y de la poca cobertura de inscripción.

Al analizar el aspecto de la vivienda se observó el alto déficit de la misma y que la falta de políticas públicas y de atención estatal a esta problemática continúa latente. Cinco años después del Stan apenas se han entregado tres conjuntos habitacionales en Chimaltenango cabecera, San Pedro Yepocapa y El Tejar.

La violencia en contra de la población afecta principalmente a los grupos sociales más vulnerables, entre ellos: niños, mujeres y personas de la tercera edad. Gracias al trabajo interinstitucional han ido disminuyendo los casos de violencia intrafamiliar, y por la labor de sensibilización se han prevenido nuevos problemas.

Asimismo, los grupos indígenas son discriminados y excluidos de distintos programas de salud y educación pública, entre otros, irrespetando sus derechos los entes encargados de su observancia y aplicación.

Los estudios realizados revelan que los lugares más vulnerables son: Santa Cruz Balanyá, Parramos, Patzicía y Zaragoza (riesgo leve); San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, San José Poaquil, Santa Apolonia, El Tejar, San Pedro Yepocapa, Patzún y Acatenango (alto riesgo).

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Chimaltenango se realizaron 423 acciones específicas: 78 de orientación, 267 de prevención, 45 de mediación, 2 de acompañamiento, 7 de conciliación, 14 de intervención inmediata y 10 de seguimiento.

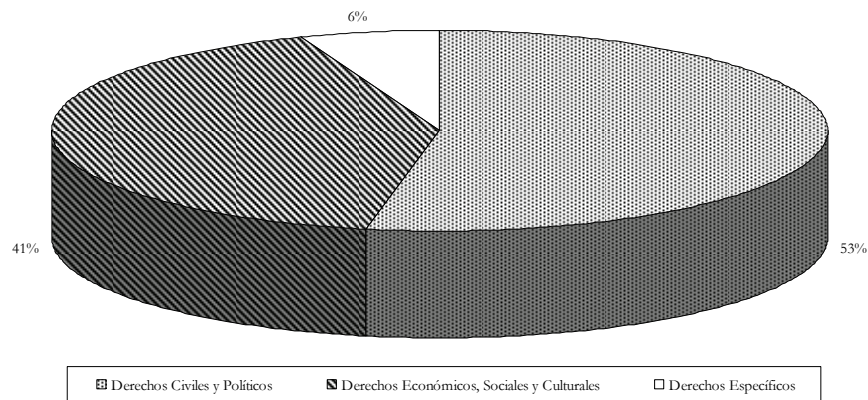
De investigación

Se abrieron 17 expedientes de investigación: 9 por violaciones a derechos individuales, 7 a derechos económicos, sociales y culturales y 1 a derechos específicos. De ellos, el 47.06% de oficio y el 52.94% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	1				2	2		1		2	9	52.94
Derechos Económicos, Sociales y Culturales			2	1	3						1	7	41.18
Derechos Específicos							1					1	5.88
TOTAL MENSUAL	1	1	2	1	3	2	3	0	1	0	3	17	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio			1	1	3	1	1				1	8	47.06
Ordinario	1	1	1			1	2		1		2	9	52.94
TOTAL MENSUAL	1	1	2	1	3	2	3	0	1	0	3	17	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	78	18.44
Prevención	267	63.12
Mediación	45	10.64
Acompañamiento	2	0.47
Conciliación	7	1.65
Intervención inmediata	14	3.31
Seguimiento	10	2.36
TOTAL	423	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
 Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo			2		1		2		1		1	7	41.18
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	1	1		1		1						4	23.53
Ministerio Público					1						2	3	17.65
DEOCSA					1							1	5.88
FOGUAVI						1	1					2	11.76
TOTAL MENSUAL	1	1	2	1	3	2	3	0	1	0	3	17	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

La inseguridad que se vive en el departamento se expresa en distintos hechos ilícitos: asesinatos, homicidios, asaltos, extorsiones y secuestros; y las autoridades encargadas de velar por la seguridad no responden a la necesidad de la población. Además de la falta de políticas administrativas, la corrupción en la administración pública es otro obstáculo para enfrentar tanta violencia. El número de agentes encargados de velar por el orden público es mínimo en comparación con la población existente, lo que se convierte en falta de garantías para la seguridad pública. Las transgresiones siguen siendo evidentes en las diferentes organizaciones del Estado, y por temor a represalias, la población no las denuncia.

Los numerosos sectores de la población indígena, que constituye la mayoría de habitantes en el departamento, se enfrentan a un alto índice de discriminación, en especial las mujeres. La exclusión y el limitado acceso a oportunidades es un obstáculo para que las diferentes comunidades del departamento se puedan desarrollar plenamente, lo que se refleja en problemas de tipo social y económico.

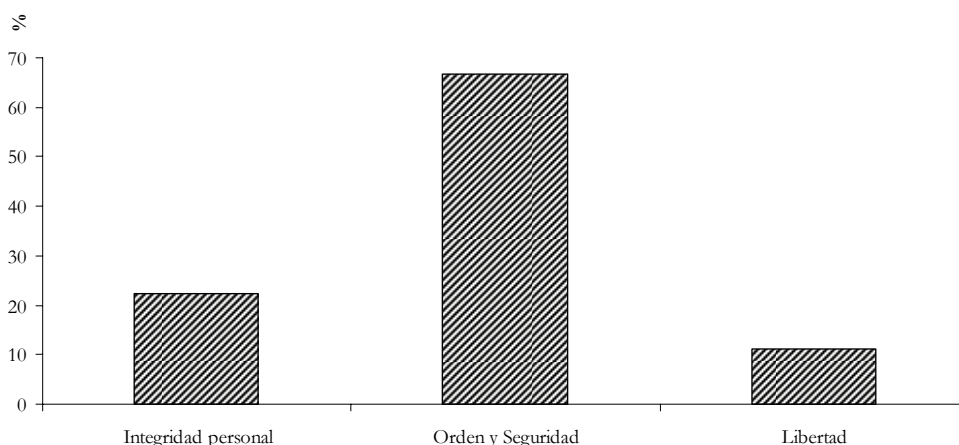
Expediente ORD.CHIM.04-2009/DCP

El Comité Pro Mejoramiento y vecinos de la colonia La Esmeralda, sector B, La Alameda, Chimaltenango, denunciaron que el representante de FOGUAVI intimidó a algunos vecinos de la colonia y los amenazó de despojarlos de sus viviendas. Como parte de la investigación realizada, a requerimiento de la presidenta del Comité Pro Mejoramiento de la colonia se dio acompañamiento en una junta conciliatoria en el Ministerio Público (MP), donde fue citado el denunciado. Ambas partes llegaron a un acuerdo pacífico.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
 Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte o ejecución extralegal o arbitraria											1	1	11.11
Muerte violenta											1	1	11.11

ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1	1				1	2	1				6	66.67
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Información negligente						1						1	11.11
TOTAL MENSUAL	1	1	0	0	0	2	2	1	0	0	2	9	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Los hechos más denunciados son violaciones al derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a un medio ambiente sano y a la salud, rubros que han sido totalmente descuidados por el Estado. La problemática social específica gira en torno a la falta de fuentes de trabajo, el incremento del valor de los productos de la canasta básica, aumentos en el valor de tarifas de consumo de energía eléctrica, la mala atención en los campos de salud, la inaccesibilidad a la vivienda y la deficiente cobertura educativa. En este contexto, los grupos más afectados son los pueblos indígenas, quienes enfrentan una constante discriminación. Las estructuras sociales y la falta de políticas gubernamentales en el orden social no permiten el acceso a las necesidades elementales de subsistencia, que son relegadas a un segundo plano dentro del contexto social.

Expediente EIO.CHIM.04-2009/DESC

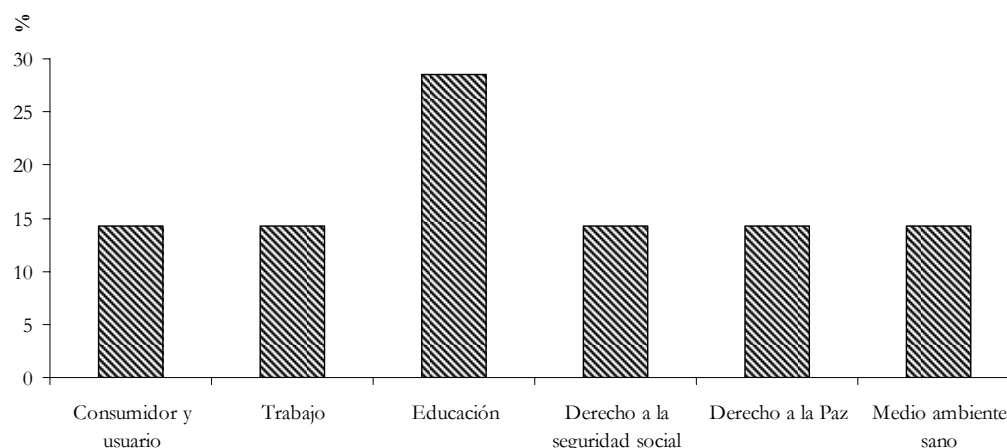
Los vecinos de Patzún y de Tecpán temen que el camino de terracería que comunica a ambos municipios colapse debido a las lluvias, por lo que han solicitado el apoyo de ambas municipalidades ante el temor de quedar incomunicados. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado a los alcaldes municipales de Patzún y Tecpán y al jefe de la Zona Vial No. 12 de Chimaltenango.

Expediente EIO.CHIM.007-2009/DE

Como respuesta a la publicación en *Prensa Libre* de la denuncia de padres de familia y maestros por la falta de recursos para la refacción escolar en las escuelas Santa Isabel de Chimaltenango y Centro América, situación que afecta a 325 estudiantes, se efectuaron visitas a los establecimientos educativos y se comprobó el compromiso para los desembolsos monetarios a proveedores de la refacción escolar.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Precios inaccesibles de medicamentos y servicios					1							1	14.3
TRABAJO													
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo			1									1	14.3
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita			1									1	14.3
No ser respetado											1	1	14.3
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social de riesgos					1							1	14.3
DERECHO A LA PAZ													
Agresión					1							1	14.3
MEDIO AMBIENTE SANO													
Arrojar residuos a las aguas de los ríos, riachuelos, manantiales y lagos				1								1	14.3
TOTAL MENSUAL	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	1	7	100.00



2.3 Derechos específicos

El ambiente socioeconómico y cultural en que se desenvuelve la sociedad de Chimaltenango parece ser el factor fundamental para analizar las denuncias presentadas por violación a los derechos fundamentales. La característica apatía de las autoridades estatales en este sentido margina a la mayoría de la población. Las estadísticas demuestran un alto índice de discriminación hacia ciertos sectores, especialmente en contra de la niñez y juventud, las mujeres y los pueblos indígenas.

Debido a la exclusión hacia los pueblos indígenas, la distribución equitativa de la tierra es nula, lo que genera conflictos, sin que exista por parte de la administración pública un mecanismo que vele por sus derechos esenciales.

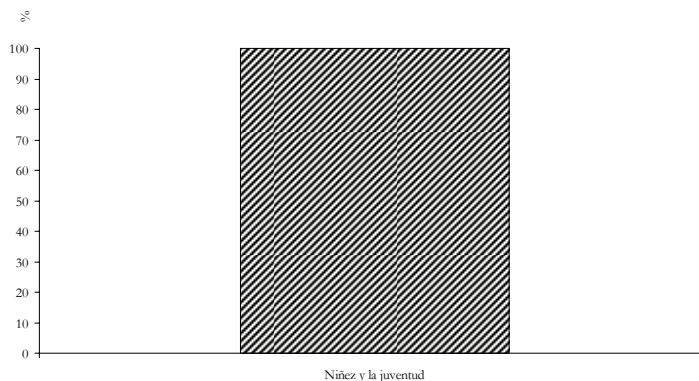
Se registraron innumerables casos de abuso de poder, especialmente en el ámbito educacional, en el cual se pone de manifiesto la vulnerabilidad de los niños, siendo, muchas veces, los mismos padres de familia quienes los explotan laboralmente. Además, la violencia se generaliza, en especial en el ámbito familiar, donde las mujeres, la niñez y personas de la tercera edad son víctimas de maltratos físicos, psicológicos y económicos.

Expediente PREVEN.CHIM.0160-2009/DE

La profesora de tercer grado de la escuela San Miguel Morazán, de El Tejar, afirma que unos de sus alumnos es maltratado físicamente por su madrastra, al extremo de ser agredido con objetos punzocortantes. La Auxiliatura, como parte de la investigación, tomó fotografías al afectado, mismas que fueron incluidas en el expediente; se remitió la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, adjuntando copia del informe de la investigación; y se logró que el padre del menor se presentara para coordinar el rescate.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven							1					1	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Expediente PREVEN.CHIM.009-2009/DESC

Se inició expediente tras la denuncia de que a una paciente del Hospital Nacional de Antigua Guatemala durante una operación se le dejó un objeto extraño en el abdomen, lo que le causó una infección severa. Se solicitó informe al cirujano general del Hospital, a partir del cual se constató la veracidad de la denuncia, se visitó a la paciente en su residencia, y se tramitó la ayuda pertinente por parte del Hospital.

Expediente PREVEN.CHIM.0188-2009/DESC

Se inició el expediente debido a la información reportada por *Prensa Libre* y *Guatavisión*, en agosto, relativa al grado de desnutrición que estaba afectando a todo el país. Según declaraciones, el problema se suscitó en el

oriente de la región debido a las zonas áridas y a la insuficiente lluvia para que los cultivos germinaran. Como parte de la investigación se solicitó informe al director del Área de Salud, al director del Hospital Nacional de Chimaltenango y al delegado departamental de la SESAN. Se recibió respuesta del director del Hospital mencionando dos casos de desnutrición que se conocieron en el mismo mes. El expediente se encuentra en investigación y se está coordinando el Frente Contra el Hambre.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
PREV.017-2009/DESC	Hugo Ezequiel Argueta Natareno	CTA	Dirección Departamental de Educación
PREV.017-2009/DESC	Miguel Ángel Juárez y Marco Antonio Monterroso	Directores	Instituto y Escuela Leonidas Mencos Ávila, jornadas matutina y vespertina
PREV.033-2009/DCP	Marco Antonio Quiñones Díaz	Juez de Paz	Juez de Paz, Santa Cruz Balanya
PREV.036-2009/DCP	Prof. Diodoro Chocoj Bernardino	Ministro	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
PREV.035-2009/DESC	Rubén Elíu Higueros	Magistrado Presidente	Corte Suprema de Justicia
PREV.084-2009/DESC	Isaias Marroquín	Alcalde	Municipalidad de Acatenango
PREV.031-2009/DESSC	Augusto Belarmino Montúfar	Alcalde	Municipalidad de Chimaltenango
PREV.0131-2009/DESC	Héctor Noel López Rustrian	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental
PREV.0131-2009/DESC	Dr. Erick de León Barriondo	Director	Jefatura Área de Salud
PREV.0131-2009/DESC	Ing. Lauro Landelino Portillo	Delegado Departamental	Ministerio del Medio Ambiente
PREV.0149-2009/DCP	Robby Darwin Solares de León	Comisario	PNC, Chimaltenango
PREV.0140-2009/DESC	Agusto Belarmino Montúfar	Alcalde Municipal	Municipalidad de Chimaltenango
PREV. 109- 2009 DESC	René Marroquín	Alcalde	Municipalidad de Zaragoza
PREV.0180-2009/DCP	Agusto Belarmino Montúfar	Alcalde	Municipalidad de Chimaltenango
PREV.0184-2009/DESC	Lic. Genaro Xoyón Hernández	Director	Escuela Pedro Molina
PREV.0188-2009/DESC	Dr. Erick de León Barriondo	Director	Jefatura Área de Salud
PREV. 0188- 2009 DESC	Dr. Walter José Córdova Pérez	Director Ejecutivo	Hospital de Chimaltenango
PREV.0136-2009/DCP	Augusto Belarmino Montúfar	Alcalde	Municipalidad de Chimaltenango
PREV.0118-2009/DESC	Ing. Lauro Landelino Portillo	Delegado dep.	Ministerio del Medio Ambiente
PREV.0118-2009/DESC	Dr. Erik de León Barriondo	Director	Jefatura Área de Salud
PREV.0118-2009/DESC	Héctor Noel López Rustrian	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental
PREV.0121-2009/DCP	Robby Darwin Solares de León	Comisario	PNC, Chimaltenango
PREV.0121-2009/DCP	Isaias Marroquín Figueroa	Alcalde	Municipalidad de Acatenango
PREV.0187-2009/DCP	Daniel Chavajay	Oficial II	Sección de Operaciones, Comisaría 73, PNC, Chimaltenango

PREV.037-2009/DE	Lic. Eduardo Pinto	Coordinador General	Secretaría Técnica de la Presidencia
PREV.038-2009/DE	Lic. Francisco Gómez Per	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
PREV.038-2009/DE	Prof. Diodoro Chocoj Bernardino	Coordinador Técnico Administrativo	Dirección Departamental de Educación
PREV.038-2009/DE	Dr. Walter José Córdova Pérez	Director Ejecutivo	Hospital Nacional de Chimaltenango
PREV.042-2009/DCP	Licda. María Lourdes Berreondo	Agente Fiscal	Ministerio Público
PREV.047-2009/DCP	Dr. Walter José Córdova Pérez	Director Ejecutivo	Hospital Nacional de Chimaltenango
PREV.058-2009/DCP	Genaro Xoyón Hernández	Director	Escuela Pedro Molina
PREV.059-2009/DCP	Robby Darwin Solares de León	Comisario	PNC, Chimaltenango
PREV.076-2009/DESC	Dr. Erick Danilo de León Barreondo	Director	Área de Salud
ORD.03-2009/DESC	Lic. Francisco Gómez Per	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
EIO.006-2009/DCP	Lic. Ernesto Morales	Asesor	Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
ORD.002-2009/DCP	Robby Darwin Solares de León	Comisario	PNC, Chimaltenango
ORD.002-2009/DCP	Isaias Marroquín	Alcalde	Municipalidad de Acatenango
EIO.002-2009/DESC	Ing. Lauro Landelino Portillo	Delegado Departamental	Ministerio del Medio Ambiente
EIO.002-2009/DESC	Héctor Noel López Rustian	Gobernador	Gobernación Departamental
EIO.005-2009/DESC	Julio Arnoldo Méndez Orozco	Fiscal	Ministerio Público
EIO.005-2009/DESC	Robby Darwin Solares de León	Comisario	PNC, Chimaltenango

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
PREV.009-2009/DESC	Dr. Walter Jose Cordova	Director	Hospital Nacional de Chimaltenango
PREV.017-2009/DESC	Francisco Gómez Per	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
PREV.016-2009/DESC	Francisco Gómez Per	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
PREV.046-2009/DESC	Longino Jiatz Batz	Alcalde	Municipalidad de Tecpan
PREV.074-2009/DESC	Francisco Gómez Per	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
PREV.0120-2009/DCP	Roby Darwin Solares de León	Comisario	PNC, Chimaltenango
PREV.109-2009/DESC	Roby Darwin Solares de León	Comisario	PNC, Chimaltenango
PREV.188-2009/DESC	Ing. Milton Díaz	Delegado	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición
EIO.001-2009/DESC	Augusto Belarmino Montúfar	Alcalde	Municipalidad de Chimaltenango
PREV.116-2009/DE	Licda. Jennye Aimeé Molina Morán	Jueza	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo, Previsión Social y de Familia

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPO DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expediente de Acción específica	359
De apertura de expedientes de investigación	14
Mediada urgentes	10
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	1
Acumulación de expediente	32
Resoluciones finales	
TOTAL	416

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Área de psicología

- 25 entrevista psicológicas a adultos y 16 a menores.
- 95 terapias de seguimiento a personas adultas.
- 59 terapias de seguimiento a menores.
- 20 terapias breves de apoyo a menores.
- 20 terapias breves de apoyo a personas referidos por el Ministerio Público

Incidencia política

- Tres reuniones de coordinación de mesa de diálogo intercultural.
- Taller con la mesa de diálogo intercultural sobre incidencia política.
- Trabajo de coordinación con la Red de Lucha Contra el VIH-SIDA y las ETS.
- Coordinación para conformar los grupos de apoyo para hombres involucrados en violencia intrafamiliar.
- Representación de la Auxiliatura en las reuniones mensuales de los COMUDES de los municipios de Patzún y Tecpán.
- Integración de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el municipio de Patzún.
- Monitoreo en las municipalidades y centros de salud sobre la cloración del agua potable.
- Apoyo y asesoría para la elaboración de un reglamento de uso del agua potable de la comunidad Santa Isabel, Chimaltenango.
- Seis capacitaciones a COCODES.

Educación y promoción

- Un monitoreo al derecho a la educación, con la finalidad de conocer las necesidades en los establecimientos del aumento de la población escolar en 2009.
- Un monitoreo realizado a 12 centros educativos del área urbana y rural para conocer la implementación de la enseñanza de los derechos humanos en cada una de las aulas.
- Un taller con 30 coordinadores de la Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX) de los departamentos de Chimaltenango, Quiché y Sololá, abordándose el tema de los valores.
- Un taller realizado con líderes estudiantiles del nivel básico de la aldea Bola de Oro, Chimaltenango, abordándose el tema de los valores.
- Cuatro talleres de capacitación sobre el Curriculum Nacional Base.
- Cinco talleres sobre auditoría social con 25 líderes representantes de instituciones de los municipios de San Andrés Itzapa, Parramos, Chimaltenango, Acatenango, Comalapa y San Martín Jilotepeque.

- Dos talleres con 185 líderes juveniles representantes de las aldeas, caseríos y parajes del municipio de San Martín Jilotepeque, para fortalecer su protagonismo a través del conocimiento y defensa de sus derechos.
- Siete talleres con 55 padres de familia y jóvenes del municipio de San Juan Comalapa, abordándose temas relativos a la niñez y adolescencia.
- Cuatro capacitaciones a maestras y maestros sobre valores humanos.
- Un taller dirigido a 100 padres de familia sobre el tema de los derechos humanos, coordinado con la ONG Semillas de Esperanza, del municipio de San Martín Jilotepeque.
- Un taller dirigido a 100 padres de familia de la Escuela Oficial de Párvulos del municipio de Parramos, sobre el tema de trabajo infantil y derechos de la niñez.
- Tres talleres de capacitación acerca de la erradicación de la explotación laboral de la niñez y juventud.
- Una charla a 35 niños de 5o. primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta del municipio de Parramos, con el tema “Atribuciones de la institución del Procurador de los Derechos Humanos”.
- Un taller sobre liderazgo dirigido a 60 personas de la tercera edad del Centro Municipal de Capacitación y Formación (CEMUCAF) de Chimaltenango.
- Cinco talleres sobre la Ley de Acceso a la Información Pública con las instituciones que tienen presencia en la cabecera departamental, San Andrés Itzapa, Parramos, San Miguel Pochuta y El Tejar.
- Festival “Expresemos Nuestros Derechos” en el municipio El Tejar, contándose con la participación de 3,312 niños del nivel preprimario y primario de 13 establecimientos.
- Elección del Niño o Niña Procurador por un Año, en el municipio El Tejar, siendo electa la niña representante del municipio de Parramos.
- Festival de canto y oratoria en Parramos, con la participación de 36 estudiantes de los niveles de preprimaria, primaria y medio de 18 establecimientos, abordándose los temas de violencia, medio ambiente y derechos de la niñez.
- Celebración del Foro sobre el Día contra la Tortura.
- Un taller de sensibilización del Día Internacional de la Mujer.
- Celebración del festival “Abuelos por Siempre”.

Auxiliatura Departamental de Chiquimula



Auxiliatura Departamental de Chiquimula

De enero a noviembre de 2009, la situación de los derechos humanos en este departamento se caracterizó por violaciones constantes contra los sectores más vulnerables (niñez y adolescencia y mujeres) viéndose afectada su integridad física, su seguridad y su salud. Las áreas de mayor riesgo son los municipios de Esquipulas, Camotán, Jocotán y Olopa.

Las limitaciones de recurso material y humano de la Policía Nacional Civil (PNC) no le permiten hacer frente a la situación de inseguridad en que vive la población de este departamento.

En materia de salud, uno de los problemas se refiere a la mínima asignación presupuestaria del Estado y la consecuente escasez de medicamentos e insumos en los centros hospitalarios. Las principales violaciones de derechos de los trabajadores obedecen al incumplimiento de condiciones laborales y del pago de prestaciones, causas vinculadas al incumplimiento del Ministerio de Trabajo, a través de la Inspectoría General en Chiquimula, de velar y resguardar los derechos del trabajador.

Por su parte, el Ministerio de Educación (MINEDUC) no cumplió con el pago de salarios a los maestros y no canceló la cuota laboral y patronal al seguro social, a pesar de haber hecho el descuento, afectando a aquellas personas que se presentaron a solicitar su pensión.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Chiquimula se realizaron 238 acciones específicas: 68 de orientación, 166 de prevención, 2 de mediación, 1 de conciliación y 1 de intervención inmediata.

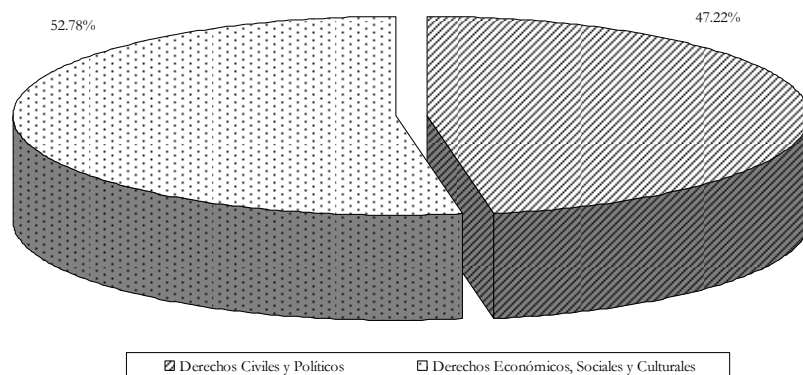
De investigación

Se abrieron 36 expedientes de investigación: 17 por violaciones a derechos individuales y 19 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 16.67% de oficio y el 83.33% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 96.55% forma parte del Organismo Ejecutivo y 3.45% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	3	1	1	3	1	1		4		2	1	17	47.22
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	3	1	2	1	1	3	1	1	3	3		19	52.78
TOTAL MENSUAL	6	2	3	4	2	4	1	5	3	5	1	36	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	1	1			1	1		1			1	6	16.67
Ordinario	5	1	3	4	1	3	1	4	3	5		30	83.33
TOTAL MENSUAL	6	2	3	4	2	4	1	5	3	5	1	36	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	68	28.57
Prevención	166	69.75
Mediación	2	0.84
Conciliación	1	0.42
Intervención inmediata	1	0.42
TOTAL	238	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	4	2	2	4	1	2	1	4	1	4	3	28	59.57
Judicial											1	1	2.13
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	2							1				3	6.38
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social					1	2		1	2	1	1	8	17.02
A-A no determinado		1	1									2	4.26
Ministerio Público	1										2	3	6.38
DEORSA											1	1	2.13
Consejos de Desarrollo	1											1	2.13
TOTAL MENSUAL	8	3	3	4	2	4	1	6	3	5	8	47	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

En Chiquimula, los derechos civiles y políticos más vulnerados son la seguridad, la integridad, la dignidad y el derecho a la propiedad privada. En lo relativo al derecho a la seguridad, en esta Auxiliatura se han recibido denuncias de personas que manifiestan ser víctima de amenazas, intimidaciones, insultos, agresiones físicas, coacción, amenazas de muerte, hechos que en su mayoría se dan entre particulares, y parte de ellos por funcionarios públicos. Al hacer un breve análisis se pudo establecer que los derechos de integridad y dignidad de los denunciantes son afectados por las acciones o conductas de algún servidor público o persona individual, con consecuencias físicas y psicológicas.

En cuanto al derecho a la propiedad privada, la mayoría de denuncias recibidas en esta Auxiliatura provienen del área rural, en especial de los municipios de San Jacinto, Jocotán, Camotán, Quezaltepeque y Chiquimula, por conflictos entre familias o particulares, que en algunos casos llegan hasta la muerte violenta, lo cual demuestra que el departamento no cuenta con certeza jurídica en lo relativo a la propiedad privada.

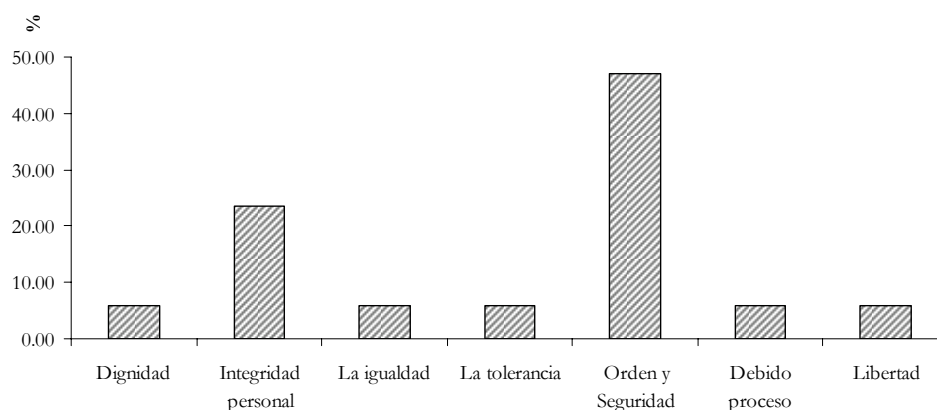
Expediente ORD.CHIQ.25-2009/DCP

Un hombre denunció que el 15 de agosto de 2009 dos personas particulares y dos agentes de la PNC se presentaron en la vivienda de su padre, en la aldea Pajco, Camotán, con intenciones de conducirlo por la fuerza sin previa orden judicial. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al gobernador departamental de Chiquimula, al jefe de la Comisaría No. 23 de Chiquimula y al director de la PNC. Asimismo, se cuenta con la declaración de la agente de la PNC encargada en ese momento de la Subestación 23-22 de Camotán, quien de forma verbal manifestó al denunciante que no existía orden de juez para la detención de su padre. Se remitió la denuncia a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP) de Chiquimula y a las Oficinas de Responsabilidad Profesional y de Derechos Humanos de la PNC.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Trato cruel, inhumano o degradante		1										1	5.88
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte violenta						1		2			1	4	23.53
LA IGUALDAD													
Desigualdad jurídica				1								1	5.88
LA TOLERANCIA													
Represión				1								1	5.88
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1			1	1			1		1		5	29.41
Corrupción	1											1	5.88
Detención ilegal										1		1	5.88
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal			1									1	5.88

DEBIDO PROCESO													
Discontinuidad y lentitud procesal	1											1	5.88
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Información inexacta								1				1	5.88
TOTAL MENSUAL	3	1	1	3	1	1	0	4	0	2	1	17	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

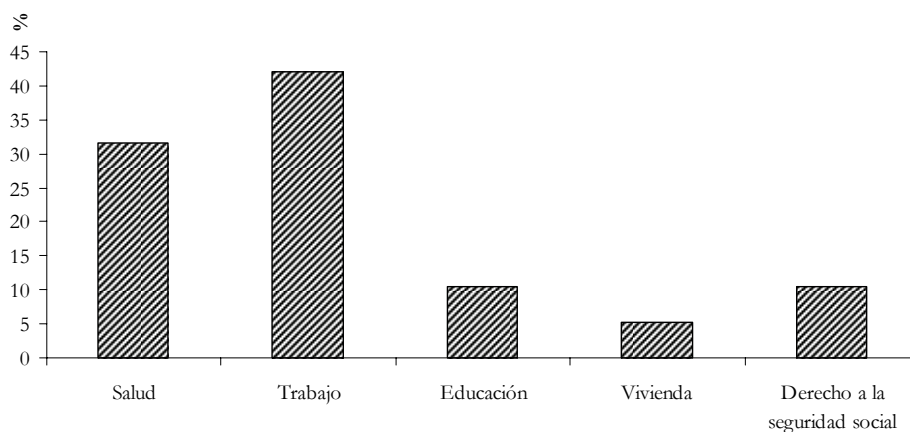
Los derechos de los maestros en este departamento están siendo violentados por las autoridades del MINEDUC, al restringirles el laborar en dos jornadas, pese a que el artículo 112 de la Constitución Política de la República y el numeral 7 del artículo 66 de la Ley de Servicio Civil establecen claramente que los únicos servidores públicos que pueden desempeñar más de un cargo estatal son las personas que laboran en centros docentes o instituciones asistenciales. No obstante, el MINEDUC, a través de una política ministerial, pretende restringir el derecho de los docentes contratados al obligarlos a renunciar a una de sus plazas aunque no haya traslape de horarios. Otro problemática enfrentada por la población son los cobros ilegales e injustos que, de manera arbitraria, realiza la Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA), violando con ello los derechos de consumidor y usuario.

Expediente PREV.CHIQ.91-2008/DESC

La denunciante manifestó que, en marzo de 2008, DEORSA le envió un recibo que sobrepasaba de forma excesiva el consumo en su hogar; en el mes de abril, además de un recibo por una cantidad aún mayor, fue informada del corte del servicio. Al preguntar en DEORSA no le dieron explicación alguna del exceso y sólo le indicaron que dicha cantidad debía ser cancelada. Se solicitó informe circunstanciado al jefe de la Agencia Comercial de DEORSA sobre los hechos denunciados, y se remitió la denuncia a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) para su conocimiento, análisis y efectos legales correspondientes. Finalmente, la gerencia jurídica de la CNEE declaró con lugar la denuncia presentada y recomendó sancionar a DEORSA.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
SALUD													
Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)						1						1	5.26
Cobros ilegales		1										1	5.26
Falta de atención o asistencia médica			1									1	5.26
Mala atención en centro de salud									1			1	5.26
Medidas inadecuadas para la rehabilitación.						1						1	5.26
Negación de atención médica										1		1	5.26
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones	2											2	10.53
Despido ilegal o injusto							1		1			2	10.53
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo						1			1	1		3	15.79
Falta de pago de las prestaciones laborales				1								1	5.26
EDUCACIÓN													
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación			1							1		2	10.53
VIVIENDA													
Falta de servicios, materiales e infraestructura	1											1	5.26
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social a beneficiarios					1			1				2	10.53
TOTAL MENSUAL	3	1	2	1	1	3	1	1	3	3	0	19	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Expediente ORD.CHIQ.26-2009/DCP

El denunciante indicó que elementos de la PNC y del ejército de Guatemala (destacados en la Zona Militar de Zacapa) allanaron sin orden judicial su residencia, ubicada en la aldea Cajón del Río, Camotán, además de coaccionarlo. Como parte de la investigación se tomó su declaración y se gestionó el apoyo para las medidas de seguridad de las víctimas ante la CIDH, por los actos denunciados. La Fiscalía Distrital del MP indicó que sí existía una orden autorizada por Juez competente.

Expediente ORD.CHIQ.34-2009/DESC

El denunciante informó que su hijo, de cinco meses de edad, fue llevado a un hospital particular; el doctor que lo atendió ordenó su traslado y atención con urgencia en el IGSS. El denunciado, médico general del IGSS en Chiquimula, no lo recibió; horas después otro doctor lo ingresó pero debido a la gravedad del niño fue llevado a un sanatorio privado por decisión de sus familiares, lográndose, posteriormente, su traslado al intensivo de la pediatría del IGSS.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente PREV. CHIQ.42-2009/DCP A favor de: Melida López Mateo Motivo: vejámenes y restricción a su libertad Declarado con lugar: sin lugar
Descripción del caso: el señor Luciano López Molina manifestó que su hija Melida López Mateo está siendo privada del goce de su libertad y sufriendo vejámenes por parte de su esposo, Ángel Antonio Gregorio Mateo.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que **SÍ** han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
ORD.1-2009/DE		Fiscal Distrital	Ministerio Público de Chiquimula
ORD.2-2009/DESC	Elder Roberto Martínez	Subsecretario	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
ORD.2-2009/DESC	A. T. Sonia M. Arriaga de Icó	Jefe de Delegación Departamental	Contraloría General de Cuentas
ORD.3-2009/DESC	Lic. Néstor Reynaldo Verbena Sagastume	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.7-2009/DCP	Br. Álvaro Rolando Morales Sandoval	Alcalde Municipal	Municipalidad de Camotán
ORD.7-2009/DCP	A. T. Sonia M. Arriaga de Icó	Jefe de Delegación Departamental	Contraloría General de Cuentas
ORD.8-2009/DCP	Lic. Néstor Reynaldo Verbena Sagastume	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.11-2009/DESC	Dr. Rory René Vides Alonzo	Coordinador Carrera de Médico y Cirujano	CUNORI, Universidad de San Carlos de Guatemala
ORD.14-2009/DE	Sr. Aquilino Soto García	Jefe	Subestación 23-11, PNC, Chiquimula
ORD.15-2009/DESC	Lic. Néstor Reynaldo Verbena Sagastume	Director Departamental	Ministerio de Educación

ORD.16-2009/DE	Sr. Aquilino Soto García	Jefe	Subestación 23-11, PNC, Chiquimula
ORD.17-2009/DCP	Sr. Marlon Vargas Espino		Ministerio de Cultura y Deportes
ORD.18-2009/DCP	Sr. Aquilino Soto García	Jefe	Subestación 23-11, PNC, Chiquimula
ORD.19-2009/DESC	Dr. Benjamín Alejandro Pérez Valdés	Director	Área de Salud de Chiquimula
ORD.19-2009/DESC	Prof. Ramón Díaz Gutiérrez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Jocotán
ORD.20-2009/DESC	Dr. Víctor Rodolfo Amado Hernández	Director	Consultorio IGSS, Chiquimula
ORD.21-2009/DESC	Dr. Víctor Rodolfo Amado Hernández	Director	Consultorio IGSS, Chiquimula
ORD.22-2009/DESC	Lic. Néstor Reynaldo Verbena Sagastume	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.23-2009/DESC	Kierkerrgard Orochena	Juez de Asuntos Municipales	Municipalidad de Quezaltepeque
ORD.24-2009/DESC	Dr. Edgar Rene Morales L.	Director Ejecutivo	Consultorio IGSS, Zacapa
ORD.25-2009/DCP	Pedro Esteban García López	Jefe	Subestación 23-11, PNC, Chiquimula
ORD.25-2009/DCP	Prof. Carlos Moscoso Machorro	Gobernador Departamental	Ministerio de Gobernación
ORD.26-2009/DCP	Sr. Domingo Lucas Álvarez	Jefe Interino	Comisaría 23-11, PNC
ORD.26-2009/DCP	Prof. Carlos Moscoso Machorro	Gobernador Departamental	Ministerio de Gobernación
ORD.26-2009/DCP	Sr. Odber Enrique Argueta Mérida	Coronel de Infantería DEM	Zona Militar de Zacapa, Ejército de Guatemala
		Comandante de la Segunda Brigada de Infantería “Capitán Gral. Rafael Carrera”	
ORD.27-2009/DE	Dra. Flor de María Figueroa	Directora	Hospital Modular “Carlos Manuel Arana Osorio”
ORD.28-2009/DESC	Dr. Víctor Rodolfo Amado Hernández	Director	Consultorio IGSS, Chiquimula
ORD.29-2009/DESC	Lic. Néstor Reynaldo Verbena Sagastume	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.30-2009/DESC	Dr. Víctor Rodolfo Amado Hernández	Director	Consultorio IGSS, Chiquimula
EIO.01-2009/DESC	Dra. Flor de María Figueroa García	Directora Ejecutiva	Hospital Modular de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio”
EIO.01-2009/DESC	Dr. Benjamín Alejandro Pérez Valdés	Director	Área de Salud de Chiquimula
EIO.02-2009/DESC	Dra. Flor de María Figueroa García	Directora Ejecutiva	Hospital Modular de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio”
EIO.03-2009/DESC	Sr. Oscar Guzmán Ramírez	Cajero Departamental	IGSS
EIO.03-2009/DESC	Sr. Miguel Tereso Rodas	Delegado Departamental	Inspectoría de Trabajo Chiquimula, Min. de Trabajo
EIO.04-2009/DCP	Dra. Aridia Mayely Castro Vásquez	Perito Profesional de la Medicina Forense	Coordinadora INACIF
EIO.04-2009/DCP	Sr. Domingo Lucas Álvarez	Subjefe	Comisaría 23, PNC, Chiquimula
EIO.05-2009/DCP	Sr. Domingo Lucas Álvarez	Jefe Interino	Comisaría 23, PNC, Chiquimula
ORD.31-2009/DCP	Prof. Carlos Moscoso Machorro	Gobernador Departamental	Ministerio de Gobernación

ORD.32-2009/DCP	Sr. Geovani Paredes García	Jefe	Subestación 23-11, PNC, Chiquimula
ORD.32-2009/DESC	Lic. Néstor Reynaldo Verbena Sagastume	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.33-2009/DESC	Lic. Néstor Reynaldo Verbena Sagastume	Director Departamental	Ministerio de Educación

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.4-2009/DESC	Licda. Margoth Benítez de Monroy	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.10-2009/DCP	Sr. Salvador Gándara	Ministro de Gobernación	Ministerio de Gobernación
ORD.10-2009/DCP		Directora General	PNC
ORD.10-2009/DCP			Oficina de Responsabilidad PNC
ORD.10-2009/DCP			Oficina Derechos Humanos PNC
ORD.11-2009/DESC		Decano de Facultad de Ciencias Médicas	Universidad de San Carlos de Guatemala
ORD.11-2009/DESC	Ing. Filiberto Coy	Coordinador Académico	CUNORI, Universidad de San Carlos de Guatemala
ORD.31-2009/DCP		Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula	Organismo Judicial

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	255
De apertura de expedientes de investigación	44
Ampliación de plazo para la investigación	5
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	16
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	3
Comportamiento administrativo lesivo	1
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	2
TOTAL	326

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Dos observaciones e intervenciones: en el conflicto promovido por campesinos de Plataforma Agraria en Chiquimula, quienes obstaculizaron la Carretera Interamericana en San Esteban Chiquimula, manifestando por el incumplimiento de los deberes del Estado para con los pueblos indígenas. Y en las manifestaciones pacíficas de los docentes bajo el renglón 021, del departamento, porque el MINEDUC no paga sus salarios y prestaciones en tiempo.
- Tres intervenciones y mediaciones: en retención del Concejo Municipal por trabajadores ediles de Chiquimula durante toda la noche en las instalaciones del edificio de la comuna, hasta que se firmó un acuerdo para la cancelación de salarios atrasados; y entre el Concejo Municipal, vendedores ambulantes y locales de Quetzaltepeque. Una mediación por límites territoriales con la participación de la PDH, la Secretaría de Asuntos Agrarios y representantes de las comunidades Tisipe y Brasilar de Jocotán.
- Reuniones con la Mesa de Concertación de Chiquimula para apoyar y promover acciones a favor de la población, en relación con el alza de precios de la energía eléctrica y abuso de autoridad de DEORSA, extralimitación de sus funciones y violación al derecho de defensa del consumidor.
- Verificación constante de casos de muertes maternas en el departamento de Chiquimula: los municipios que más casos registran son Jocotán, Camotán y Chiquimula, pero deben considerarse posibles subregistros ya que la situación de pobreza impide el traslado a los centros de salud para su atención.
- Dos reuniones: una con representantes de la Municipalidad de Jocotán y líderes de la aldea El Tesoro Abajo, por negación de inscripción a su comité de agua. Otra con el Concejo de Camotán y CODEFEM, por violencia contra la mujer en el municipio.
- Capacitación con presidentes de COCODES de Chiquimula acerca de la equidad de género.
- Seis monitoreos: uno en el IGSS de Chiquimula, para establecer el cumplimiento de las empresas privadas del derecho a la seguridad social para con sus empleados. Uno en el rastro municipal de Chiquimula, para establecer las condiciones de infraestructura y normas de higiene en el manejo de la carne de res. Uno al Centro de Salud de Camotán para establecer la existencia de medicamentos. Uno sobre derechos humanos en el Sistema Nacional de Educación en cinco escuelas rurales y cinco urbanas. Uno acerca de identidad cultural en el sistema educativo en escuelas de Jocotán y Camotán. Uno de potabilidad del agua en municipios del departamento y para verificar que todas las municipalidades implementaran las oficinas del Libre Acceso a la Información.
- Reunión con autoridades del Hospital Modular de Chiquimula por reducción del presupuesto.
- Mediación con estudiantes del Centro Universitario de Oriente de Chiquimula, quienes bloquearon la Carretera Interamericana.
- Inspección ocular del basurero municipal de Chiquimula para establecer el tratamiento de los desechos sólidos y la contaminación.
- Participación en reunión con alcalde de Esquipulas para la resolución de conflictos con transportistas extraurbanos.
- Foro sobre “Medio ambiente, cambio climático y su impacto en nuestras vidas”.
- Realización y presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiquimula, priorizando los ejes de justicia, seguridad, salud, educación y medio ambiente.
- Conformación del Frente contra el Hambre en Chiquimula.
- Censo estratificado para la detección temprana de niños menores de cinco años con desnutrición aguda.

Educación y promoción

- Once talleres: uno de capacitación sobre derechos y obligaciones regulados en la Ley Integral de la Niñez y Adolescencia, impartido a padres de familia del programa de la Asociación de Desarrollo Integral Miramundo, en Ipala. Otro a infantes y juventud del programa Asociación de Desarrollo Integral Miramundo, en Ipala. Seis de capacitación a las Juntas Municipales de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (JMPINA) de los municipios de Olopa (uno), San Juan Ermita (cuatro) y Chiquimula (uno).

Uno de capacitación en Derechos Humanos en la Escuela Oficial Rural Mixta Mario Morales Monroy, Shusho Abajo, Chiquimula; otro a estudiantes del primer y segundo semestres de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez en Chiquimula. Un taller de capacitación sobre Derechos de Familia a estudiantes del sexto semestre de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mariano Gálvez en Chiquimula

- Dos capacitaciones a la Comisión de Derechos Humanos en el centro estudiantil Liceo La Salle, Chiquimula.
- Una programación para conformar las JMPINA en Camotán, Jocotán, San Juan Ermita y Olopa.
- Dos monitoreos: uno al centro educativo especial Rayito de Luz, Chiquimula, y a Los Campeones, Esquipulas. Uno a escuelas públicas y privadas sobre situación de la educación en materia de derechos humanos.
- Dos foros: uno sobre situación del medio ambiente, desastres naturales y su impacto en la ciudad de Chiquimula. Otro sobre la situación de los Derechos Humanos en Chiquimula.
- Coordinación del Primer Campeonato Departamental de Futsala Chiquimula 2009.
- Reunión para socializar el proyecto Frente contra el Hambre con diferentes sectores de la sociedad civil.
- Celebración del festival “Expresemos Nuestros derechos”.
- Elección del Niño(a) Procurador por un Año.

Auxiliatura Departamental de El Progreso



Auxiliatura Departamental de El Progreso

De enero a noviembre de 2009 la situación de los derechos humanos en este departamento se caracterizó por la inseguridad pues, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, hasta septiembre se cometieron 48 homicidios. Un factor que incide en el repunte de la violencia, según opinión de sectores sociales, es la presencia de maras y grupos fuertemente armados; además, la mayoría de la población porta armas de fuego.

La inseguridad, el abuso de poder, la falta de credibilidad en los tribunales de justicia, la demora en los procesos judiciales y la impunidad han creado descontento en la población, provocando que haga justicia por sí misma. Además, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la insatisfacción de las necesidades básicas, la dificultad de acceso a la tierra, los suelos con poca fertilidad y la baja precipitación pluvial son condiciones que se presentan en el departamento, en especial en el área rural, y que no permiten un desarrollo social.

En el área de salud se reportó insuficiencia en el recurso humano del Hospital Nacional de Guastatoya, así como la carencia o escasez de medicamentos y equipo clínico. Además, son constantes las denuncias por la mala atención y cobros ilegales.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de El Progreso se realizaron 433 acciones específicas: 82 de orientación, 110 de prevención, 5 de mediación, 21 operativos, 28 de acompañamiento, 45 de conciliación, 42 de intervención inmediata y 100 de atención a la víctima.

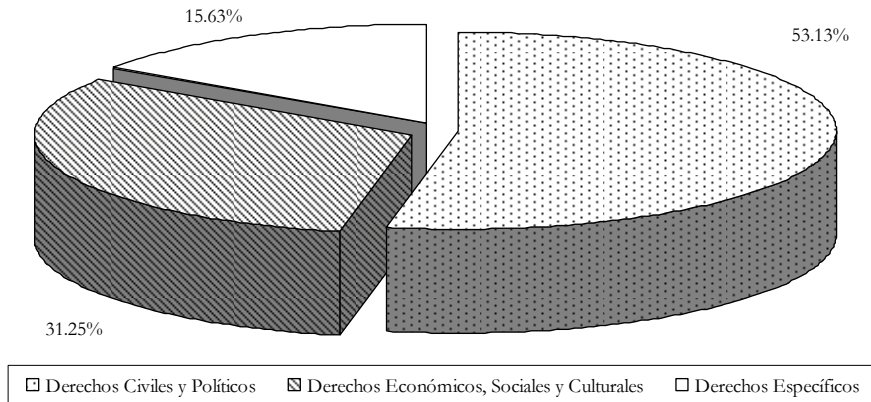
De investigación

Se abrieron 32 expedientes de investigación: 17 por violaciones a derechos individuales, 10 a derechos económicos, sociales y culturales y 5 a derechos específicos. De ellos, el 25% de oficio y el 75% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 88.46% forma parte del Organismo Ejecutivo y 11.54% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	1	3	1	1	2	1	2	4		1	17	53.13
Derechos Económicos, Sociales y Culturales				2		3		1	1		3	10	31.25
Derechos Específicos			2					2		1		5	15.63
TOTAL MENSUAL	1	1	5	3	1	5	1	5	5	1	4	32	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		1	1			1	1	2			2	8	25.00
Ordinario	1		4	3	1	4		3	5	1	2	24	75.00
TOTAL MENSUAL	1	1	5	3	1	5	1	5	5	1	4	32	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	82	18.94
Prevención	110	25.40
Mediación	5	1.15
Operativo	21	4.85
Acompañamiento	28	6.47
Conciliación	45	10.39
Intervención inmediata	42	9.70
Atención a la víctima	100	23.09
TOTAL	433	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	1		5		1	4		4	4	4	7	23	53.49
Judicial				1			1			1	2	3	6.98
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades				1		1					3	5	11.63
Ministerio Público		1			1			1				3	6.98
DEORSA											1	1	2.33

Consejos de Desarrollo										1	1	2	4.65
Defensa Pública Penal									1	1		2	4.65
Filial Sindical Hospital Nacional Guastatoya				1								1	2.33
Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya										1		1	2.33
Fundación Sobrevivientes											2	2	4.65
TOTAL MENSUAL	1	1	5	3	2	5	1	5	5	8	16	43	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Las violaciones más frecuentes a derechos civiles y políticos son: el incremento del abuso de autoridad por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); al nombre por la falta de registro, situación que empeoró con el traslado de los libros del Registro Civil de las municipalidades al RENAP. Asimismo, se tramitaron varios expedientes relacionados con la interferencia de las municipalidades en la elección de los COCODES de algunas comunidades, negándose a registrarlos porque no estaban conformados por personas de su confianza y afines a sus partidos políticos. En cuanto a inseguridad, varios pobladores son objeto de amenazas e intimidaciones a través de llamadas telefónicas hechas por reos del centro preventivo de Guastatoya.

Las acciones emprendidas por el Estado para enfrentar la problemática de violación a los derechos humanos en El Progreso son escasas o desacordes, a lo cual debe sumarse el debilitamiento del aparato de seguridad estatal, lo cual repercute en la grave desatención de las dificultades que atraviesa la sociedad. Esta Auxiliatura, con el afán de contrarrestar las violaciones a los derechos humanos, ha realizando eventos de educación y promoción, incidiendo en las instituciones del Estado para propiciar que se le de atención a cada una de las áreas conflictivas del departamento.

Expediente PREVENCIÓN. PRO.08-2009/DCP

Los denunciantes, pobladores del municipio de Sansare, indicaron que todos los menores nacidos entre 2004 y 2006 en dicho municipio carecían de la partida de nacimiento necesaria para su inscripción en los centros educativos, dado que el RENAP les indicó no contar con los libros de registro que la Municipalidad le entregó; ésta, por su parte, informó que dichos libros habían sido operados y entregados por la anterior administración. Como parte de la investigación se sostuvo una reunión con el alcalde municipal de Sansare, con el supervisor regional del RENAP, y con padres de familia, acordando inscribir extemporáneamente a los más de 800 niños; al final sólo 75 fueron inscritos, tras solventar el caso de los demás con base en las inscripciones originales.

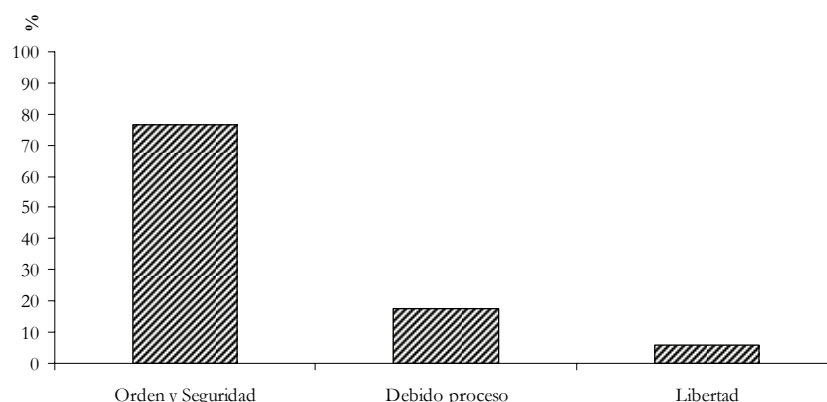
Expediente PREVENCIÓN. PRO. 14-2009/DCP

Vecinos de la aldea Piedras Blancas, San Cristóbal Acasaguastlán, denuncian inconformidad en la elección de la directiva del COCODE de esa comunidad, por haberse escogido a personas sin relación con la comunidad, incluyendo empleados municipales, ante lo que solicitaron realizar nueva asamblea general para reelegirla. Se entrevistó a la alcaldesa municipal, se dio seguimiento a los hechos denunciados, así como acompañamiento a cada reunión programada para darle solución al conflicto y mediar entre las partes, concluyendo con la elección legítima del COCODE.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo			2		1	1	1	1	2			8	47.06
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial									1			1	5.88
Amenazas, coacción								1	1			2	11.76
Detención ilegal	1		1									2	11.76
DEBIDO PROCESO													
Discontinuidad y lentitud procesal		1		1							1	3	17.65
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Información negligente						1						1	5.88
TOTAL MENSUAL	1	1	3	1	1	2	1	2	4	0	1	17	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Se observó un incremento en las denuncias de violaciones del derecho al trabajo, siendo las más frecuentes por falta de pago de prestaciones laborales, por persecución al trabajador y por abuso de autoridad y arbitrariedad de delegados y directores de algunas instituciones departamentales del sector público.

En la conservación del medio ambiente, en los municipios no existen plantas de tratamiento de aguas negras y las comunidades que sí las tienen no manejan los desechos como es debido. La inseguridad alimentaria y desnutrición demandó mayor atención de esta Auxiliatura, y en varias oportunidades el personal se trasladó a las comunidades afectadas con el objeto de hacer conciencia en los padres de familia para trasladar a los menores de edad con problemas de desnutrición aguda para que fueran atendidos y, en su defecto, se solicitaron las medidas de seguridad al órgano jurisdiccional correspondiente.

Expediente PREV.PRO.39-2009/DESC

Los COCODES de Morazán y San Agustín Acasaguastlán presentaron una denuncia contra la Municipalidad de Morazán ya que sólo hay drenaje en la cabecera municipal, por lo que las comunidades vierten sus aguas

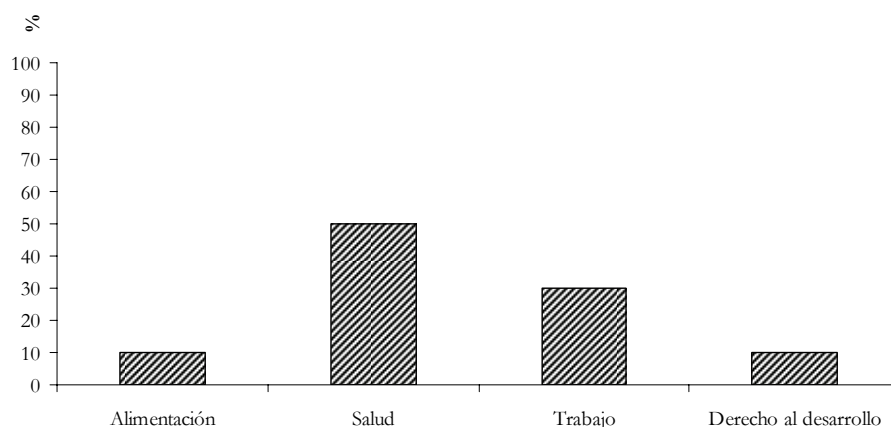
negras en el río Toco, del cual se abastecen las comunidades Aristondo y Marajuma, y Tulumajillo y Tulumaje, de San Agustín Acasaguastlán. La Municipalidad de Morazán y los COCODES de las comunidades afectadas conformaron una comisión de seguimiento y de inspecciones oculares, se realizaron pruebas de laboratorio del agua del río, y se le dio seguimiento a la licitación de la empresa encargada de construir la planta de tratamiento para el municipio.

Expediente ORD.PRO.20-2009/DESC

En el Hospital Nacional de Guastatoya fue atendido por fractura en muñeca y cadera el señor Daniel Ramos Pérez, por el traumatólogo de dicho Hospital, quien indicó que debía ser intervenido, solicitando para ello que se depositaran Q9,900 en su cuenta personal. El denunciante lo hizo, quedándose con copia de la boleta de depósito, pero Ramos Pérez falleció un día antes de la operación. Al solicitar la devolución del dinero el denunciado se negó.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ALIMENTACIÓN													
Hambre								1				1	10.00
SALUD													
Insuficiente personal sanitario						1						1	10.00
Cobros ilegales									1			1	10.00
Falta de atención o asistencia médica						1					1	2	20.00
Negligencia médica											1	1	10.00
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones				1								1	10.00
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo						1						1	10.00
Despido injusto											1	1	10.00
DERECHO AL DESARROLLO													
Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza				1								1	10.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	2	0	3	0	1	1	0	3	10	100.00



2.3 DERECHOS ESPECÍFICOS

Expediente PREV.PRO.75-2009/DE

El ex conviviente y tres agentes de la PNC irrumpieron en la casa de denunciante, quien ya se había separado debido a la violencia que ejercía sobre ella y sus dos hijos; al llegar presentó una copia de las medidas de seguridad otorgadas por el Juzgado de Familia en las cuales le suspendían, provisionalmente, la guarda y custodia de sus dos hijos. La denunciante fue referida al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y de Familia del departamento para que se le otorgara nuevamente la guarda y custodia.

Expediente PREV.PRO.72-2009/DE

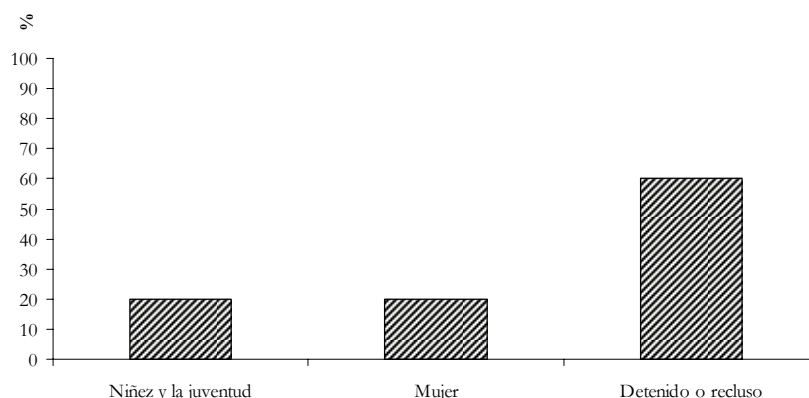
Indica la denunciante que llevó a consulta externa a su cuñado, persona de la tercera edad que presenta limitaciones de sus facultades mentales por problemas de hemoglobina, dejándolo internado en el Hospital Nacional de Guastatoya; cinco días después se presentó a dicho centro pero en la cama donde había dejado a su cuñado estaba otra persona. Acudió a las autoridades para que le dieran una explicación, debido a la entrega del paciente a otro familiar sin quedar registro alguno de ello. Con la investigación se constató que el paciente ya había sido localizado y que toda la situación se debía a problemas relacionados con una herencia.

Expediente ORIENTACIÓN.PRO.09-2009/DE

A causa de una picadura de animal desconocido, la denunciante fue trasladada de urgencia al hospital de la cabecera departamental, pero por la gravedad de su condición fue referida al Hospital General San Juan de Dios; el esposo aprovechó la situación para acudir al Juzgado de Familia del departamento a solicitar la guarda y custodia de sus dos hijos menores, la cual el Juez, de manera arbitraria, le otorgó sin conocer el estado de salud de la denunciante. Se le brindó acompañamiento a la víctima, el Juez de Familia le otorgó medidas de seguridad y la guarda y custodia de sus hijos y el caso fue certificado al MP, determinando la psicóloga que hubo daño psicológico por parte del esposo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Descuidos o tratos negligentes			1									1	20.00
MUJER													
Violencia física o psicológica								1				1	20.00
DETENIDO O RECLUSO													
Maltrato			1							1		2	40.00
Traslados inadecuados o peligrosos								1				1	20.00
TOTAL MENSUAL	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	5	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente EIO.PRO.05-2009/DESC

Según publicación en *Prensa Libre*, la prolongada sequía en los departamentos del “corredor seco” del país, ocasionó graves daños a los cultivos de la región, agravando la inseguridad alimentaria existente en el área, siendo El Progreso uno de los más afectados. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al MAGA, al MSPAS, a la SESAN y a Gobernación Departamental, con el objeto de conocer las acciones emprendidas por estas instancias para darle solución a dicha crisis; se realizaron monitoreos en las comunidades afectadas para corroborar la entrega de ayuda gubernamental que, según los informes rendidos, estaba dándose; y se dio seguimiento a la categorización de las comunidades más afectadas y a los niños que de acuerdo con el Área de Salud sufren desnutrición.

Expediente EIO.PRO.03-2009/DESC

Por una llamada anónima se supo que el Hospital Nacional de Guastatoya no cuenta con anestesiólogo de 8:00 a 14:00 horas, lo cual afecta a los usuarios, llegando al extremo de practicar lavados y curaciones a un paciente sin aplicarle anestesia, provocándole fuertes dolores. A partir de la investigación realizada se estableció la veracidad de los hechos, obteniendo además el testimonio del paciente aludido, quien además fue objeto de negligencia médica y malos tratos por parte del médico traumatólogo de ese hospital, pues por el mal procedimiento en una operación quirúrgica, le provocó una infección nosocomial. Según el director del hospital el problema se debió al periodo de vacaciones del anestesiólogo, quien indicó haber hecho un acuerdo con los técnicos anestesistas pero no lo respetaron, aunque no pudo sustentar dicho acuerdo. Se solicitó informe circunstanciado al ministro de Salud Pública, al director del Hospital y al doctor denunciado en relación con el tratamiento practicado. A raíz de los pronunciamientos y recomendaciones hechas a las autoridades correspondientes por esta Auxiliatura, el citado hospital cuenta con técnicos anestesistas las 24 horas del día, y con médico anestesiólogo durante cierto horario.

Expediente ACCIÓN INMEDIATA.PRO.21-2009/DESC

El denunciante, técnico en salud rural y miembro del CODESAN del departamento, manifestó la renuencia de los denunciados de trasladar a un centro de recuperación alimenticia y nutricional a su hija de 18 meses de edad por presentar un cuadro desnutrición aguda, aun después de recalcar la necesidad del traslado. Después de un constante insistencia, accedieron a referirla pero sólo si la madre la acompañaba y se coordinó su traslado para el siguiente día; ante una nueva negativa, a través de la Procuraduría General de la Nación se coordinó el rescate de la menor con el Juez de Paz de San Agustín Acasaguastlán, logrando el traslado y, por consiguiente, su recuperación.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente EIO.PRO.02-2009/DE

A favor de: Anthony Bryan Morales Pineda

Motivo: falta de asistencia médica

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: el recluso Anthony Bryan Morales Pineda, según lo indicado por el denunciante, fue objeto de agresiones físicas por parte de guardias del centro de detención preventiva de Guastatoya, quienes lo dejaron herido de gravedad. Al practicar la exhibición personal, el señor Bryan Morales indicó que los golpes eran resultado de un juego de fútbol, y que al solicitar atención médica los guardias del sistema penitenciario se la brindaron oportunamente.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que **SÍ** han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.PRO.01-2009/DCP	Lic. José Cruz Córdova Larios	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD.PRO.01-2009/DCP	Carlos René Huertas Juárez	Agente	Subestación PNC de Sanarate
ORD. PRO.01-2009/DCP	Merly Roxana Maldonado Miranda	Agente	Subestación PNC de Sanarate
EIO. PRO.02-2009/DCP		Director	Centro de Detención Preventiva Guastatoya
ORD. PRO 03-2009/DCP	Heberto Salazar López	Oficial Tercero	Subestación PNC de Guastatoya
ORD. PRO.04-2009/DE		Directora	Escuela Oficial Rural Mixta Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz
ORD.PRO.05-2009/DCP	Juan Pablo Aguilar Paredes	Agente	Subestación PNC de Guastatoya
ORD.PRO.05-2009/DCP	Humberto Juárez Menchú	Agente	Subestación PNC de Guastatoya
ORD.PRO.06-2009/DESC		Síndico Municipal	Municipalidad de San Antonio La Paz
ORD.PRO.13-2009/DCP		Agente	Subestación PNC, Las Champas, El Rancho
ORD.PRO.14-2009/DCP	Daniel Ortega Morales	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán
EIO.PRO.03-2009/DESC	Dr. Celso Cerezo	Ministro	MSPAS
EIO. PRO. 04-2009/DCP	Lic. Carlos Joaquín Sosa Marroquín	Juez	Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia de El Progreso
ORD. PRO 17-2009/DE	Lic. José Cruz Córdova Larios	Fiscal Distrital	Ministerio Público
EIO.PRO.05-2009/DESC	Lic. Manfredo Marroquín	Gobernador Departamental	Ministerio de Gobernación
EIO.PRO.05-2009/DESC	Ing. Luís Albisurez	Delegado Departamental	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
EIO.PRO.05-2009/DESC	Ing. Erick Castillo	Delegado Departamental	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
EIO.PRO.05-2009/DESC	Dr. Ramiro Joaquín Quiyuch	Jefe	Área de Salud de El Progreso
ORD.PRO.18-2009/DCP	Lic. Ronaldo Antonio Posadas Fernández	Delegado Departamental	Instituto de la Defensa Pública Penal
ORD.PRO.20-2009/DESC	Dr. Ernesto Rivas Castellanos	Director	Hospital Nacional de Guastatoya
PREV.PRO.62-2009/DCP	Oficial Primero Felipe Mejía	Jefe de Comisaría	Comisaría 53, PNC
ORD.PRO.25-2009/DESC	Dr. Ernesto Rivas Castellanos	Director	Hospital Nacional de Guastatoya

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.PRO.06-2009/DE		Director General	Sistema Penitenciario
PREV.PRO.102-2009/DCP	Lic. Manfredo Marroquín	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	452
De apertura de expedientes de investigación	33
Medidas urgentes	1
Ampliación de plazo para la investigación	1
Enmienda de procedimientos	1
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	10
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	2
Acumulación de expedientes	26
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	1
TOTAL	527

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Monitoreo sobre la gratuidad de la educación en los establecimientos educativos del MINEDUC.
- Crisis hospitalaria: problemas administrativos y de servicio para la prestación del servicio esencial.
- Dirección departamental de educación: problema con la contratación de maestros y la tardanza en el pago de sus salarios, al igual que con personal del renglón 011.
- Sierra de las Minas: deforestación y abuso en el uso de los recursos naturales.
- Repunte delincencial: por los hechos positivos y negativos reportados por la PNC, en especial de jóvenes, así como los problemas con la venta y consumo de sustancias prohibidas.
- Problema de malnutrición: repunte de casos de niños y niñas menores de 15 años con problemas nutricionales, en especial los menores de cinco años.

Incidencia política

- Se ha trabajado en el monitoreo e incidencia en políticas públicas, con visitas a instituciones, entrevistas y la participación en algunos espacios generados.
- Conformación de la Junta Municipal de Protección de la Niñez y Adolescencia, en Morazán.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- 35 talleres para la promoción de los Acuerdos de Paz con diferentes grupos de población en los cuales se incluyen estudiantes del nivel primario y básico, así como otras personas de la sociedad civil.

- Acompañamiento de verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en instancias del Estado, entre ellas: Ministerio de Gobernación, PNC, Ministerio de Educación, MSPAS, municipalidades.

Educación y promoción

Se atendió a diferentes grupos de población en talleres de capacitación con temas sobre Derechos Humanos y temas afines: cultura de paz, no violencia, métodos alternativos de resolución de conflictos, medio ambiente, enfoque de género, maltrato infantil, Acuerdos de Paz, reconciliación, interculturalidad, democracia, participación ciudadana, auditoría social, relaciones interpersonales, VIH/SIDA, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Ley contra el Femicidio, Ley de Acceso a la Información, siendo los siguientes:

- 86 conferencias con 6,460 alumnos y alumnas de primaria.
- 36 talleres con 3,460 estudiantes del nivel básico y diversificado.
- Cinco talleres con 350 docentes de niveles primario, básico y diversificado.
- 28 pláticas a padres de familia
- Taller con 35 líderes y lideresas sobre auditoría social.
- Un diplomado sobre derechos humanos a 22 líderes y lideresas de COCODES.
- Un diplomado sobre derechos humanos a 35 agentes de la PNC, Distrito Nororiental.
- Tres talleres con 125 agentes de la PNC de la Comisaría 53.
- Un taller con 35 lideresas madres cuidadoras de Hogares Comunitarios de SOSEP.
- Un taller con maestras de hogares comunitarios de la SOSEP.
- Un taller sobre derechos humanos con el grupo voluntario de jóvenes RENACER, Iglesia Católica.
- Cinco talleres con 250 integrantes del grupo Alcohólicos Anónimos.
- Dos talleres con personal de Ministerio de Salud Pública.
- Un taller sobre derechos humanos con estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez.
- Celebración del festival “Expresemos nuestros derechos” con la participación de 2,500 alumnos y alumnas.

Auxiliatura Departamental de Escuintla



Auxiliatura Departamental de Escuintla

De enero a noviembre de 2009, a raíz del incremento de las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, en esta Auxiliatura se ejecutaron acciones orientadas a la defensa y promoción de estos derechos.

Los municipios más violentos son San Vicente Pacaya, Guanagazapa, Masagua, La Nueva Concepción y Palín, por lo que surgieron políticas de Estado a las cuales se les está dando seguimiento. Preocupan las estadísticas de venta y robo de niños, extorsiones, secuestros rápidos y asesinatos con arma de fuego. Prevalece el temor por la proliferación de estos últimos pues, debido a la impunidad con la que actúan los delincuentes, la población no encuentra apoyo en las fuerzas de seguridad. Otro hecho de impacto son las desapariciones forzadas, sin que se aclararen los casos o se castigue a los responsables.

En Escuintla no se cuenta con suficientes elementos de seguridad, en 2009 la Policía Nacional Civil (PNC) de todo el departamento la integraban 351 elementos, distribuidos en los 13 municipios. La indefensión que experimentan los habitantes del departamento ha provocado que aumenten los intentos de linchamiento.

La falta de acceso y atención a los servicios públicos se evidenció en 2009, entre ellos el transporte urbano y extraurbano, agua, luz, drenajes, extracción de basura, alumbrado público, entre otros.

El derecho a la salud es uno de los más vulnerados en lo que se refiere a falta de atención médica: pocos insumos hospitalarios y medicinas, así como escasez de personal médico.

En el sector agrario, los terrenos administrados por la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado (OCRET) siguieron provocando conflictos, pues a pesar de la prohibición legal continúan siendo adjudicados a terceras personas con intereses de lucro.

En educación, la problemática radica en la inadecuada política administrativa implementada, específicamente en la cobertura educativa, contratación del recurso humano, falta de mantenimiento y seguridad en las escuelas públicas. Asimismo, la falta de monitoreo a la calidad educacional y la defectuosa cobertura de los programas de refacción escolar y útiles.

El medio ambiente también ha sufrido daños considerables sin que existan políticas para paliar o evitar en el corto y mediano plazo su impacto: la proliferación de basureros clandestinos y depósitos de basura mal ubicados pone en peligro la flora y la fauna, y la salud de los pobladores.

Dentro del Sistema Penitenciario se siguen cometiendo múltiples violaciones a los derechos humanos de los reclusos: malos tratos, falta de rehabilitación y actos de corrupción y abusos dentro de las cárceles.

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas de gran trascendencia, no obstante, esta Auxiliatura ha jugado un papel importante al brindar protección y las medidas de seguridad necesaria para resguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes escuintlecos.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Escuintla se realizaron 68 acciones específicas: 39 de orientación, 4 de prevención, 3 operativos, 1 de acompañamiento y 21 de intervención inmediata.

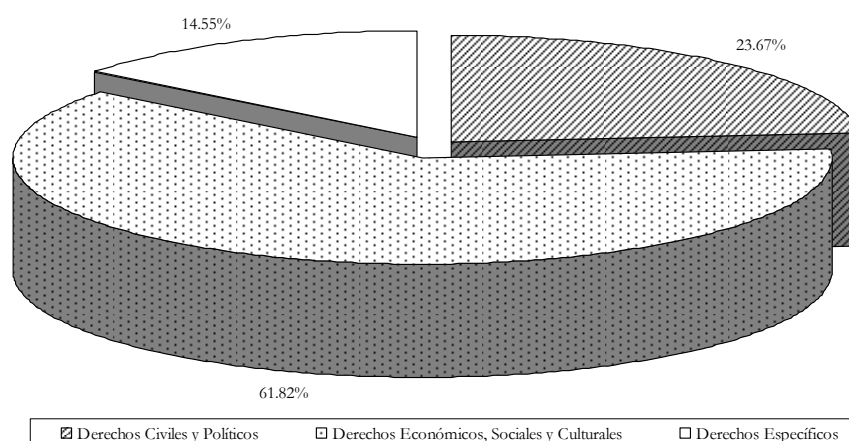
De investigación

Se abrieron 106 expedientes de investigación: 26 por violaciones a derechos individuales y 68 a derechos económicos, sociales y culturales, y 16 a derechos específicos. De ellos, el 17.27% de oficio y el 82.73% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 96.92% forma parte del Organismo Ejecutivo y 3.08% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	2	1	6	4	4	5		3	1			26	23.64
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	6	3	16	5	8	8	5	6	9		2	68	61.82
Derechos Específicos		1	7	1	2			2	2		1	16	14.55
TOTAL MENSUAL	8	5	29	10	14	13	5	11	12	0	3	110	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	5		6		1	3	1	1	2			19	17.27
Ordinario	3	5	23	10	13	10	4	10	10		3	91	82.73
TOTAL MENSUAL	8	5	29	10	14	13	5	11	12	0	3	110	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	86	11.81
Prevención	429	58.93
Mediación	69	9.48
Intervención inmediata	144	19.78
TOTAL	728	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	7	4	12	7	8	9	2	7	5		2	63	57.27
Judicial			1					1				2	1.82
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	1	1	7	2	4	1	0	0	4			20	18.18
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social			4	1		2	2	2	2		1	14	12.73
A-A no determinado			1									1	0.91
Ministerio Público			2		1			1	1			5	4.55
EEGSA			1									1	0.91
Particulares					1	1	1					3	2.73
PGN			1									1	0.91
TOTAL MENSUAL	8	5	29	10	14	13	5	11	12	0	3	110	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

La violencia contra la población afecta principalmente a los grupos sociales más vulnerables (mujeres, niños y jóvenes y adulto mayor). A ello se suma el avance del crimen organizado y la proliferación del narcotráfico, la corrupción y la falta de justicia que impera en las instituciones del Estado, la poca actuación de la PNC en la captura y el combate de la delincuencia. Aunque el Ministerio Público (MP) ha aumentado su presencia con la apertura de fiscalías municipales, continúa siendo ineficiente. Además, no todos los juzgados y tribunales ni la PNC cumplen con su función de administrar justicia, por falta de personal capacitado y de sensibilidad social.

Los hechos delictivos registrados de enero a noviembre de 2009 son: venta y robo de niños, extorsiones y secuestros rápidos (afectado mayormente a estudiantes de establecimientos educativos). También se dan delitos contra la vida; en los casos de homicidios registrados predominan las muertes violentas por armas de fuego, blanca, contundente, y los delitos contra el patrimonio, predominando el robo de vehículos. Los homicidios por arma de fuego sobresalen en la cabecera departamental, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Puerto de San José, Tiquisate y Palín.

En cuanto al abuso de poder y de autoridad, elementos de la PNC han cometido procedimientos ilegales, incumplimiento en sus funciones, extorsiones, evasiones y otros actos reñidos con la ley.

Expediente ORD.ESC.034-2009/DCP

El denunciante recibe amenazas de muerte vía telefónica y responsabiliza de ello al asesor jurídico de la Municipalidad, al alcalde y al juez de asuntos municipales, todos de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa. El caso fue remitido a la Fiscalía Municipal del MP de Santa Lucía Cotzumalguapa para su trámite.

Expediente ORD.ESC.040-2009/DCP

Se recibió la denuncia contra agentes de la PNC de Masagua, quienes llegaron a un instituto e intentaron sacar a un alumno para llevarlo a un lugar desconocido, sin presentar orden de juez e indicando que estaba implicado en el robo de una motocicleta. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al

jefe de la Subestación de la PNC de Masagua y la denuncia fue remitida a la Fiscalía Distrital del MP de Puerto de San José para su trámite legal.

Expediente ORD.ESC.046-2009/DCP

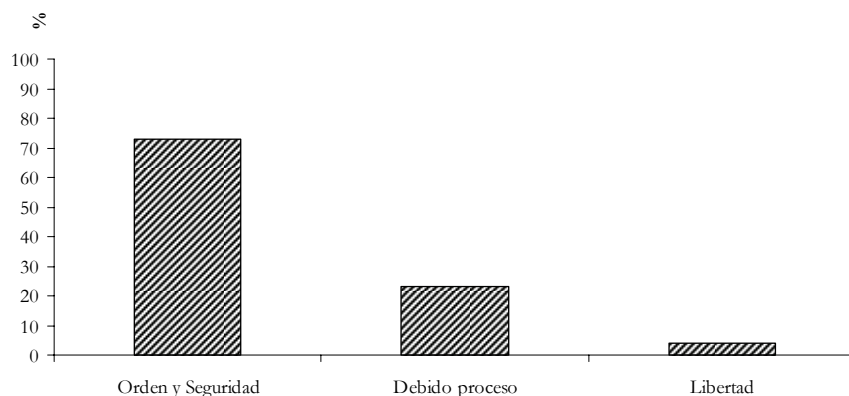
Elementos de la Subestación Norte de la PNC de Escuintla allanaron sin orden judicial una vivienda; la denunciante los acusa del desaparecimiento de dinero y un teléfono celular. Como parte de la investigación se solicitó informe al comisario departamental y al jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC de Guatemala y se realizaron las entrevistas pertinentes. Se determinó que, efectivamente, el allanamiento se realizó sin orden judicial, justificando acciones de rescate y seguridad; el expediente se trasladó a Guatemala.

Expediente ORD.ESC.052-2009/DCP

Agentes motorizados de la PNC de Escuintla llegaron a una vivienda y amenazaron, intimidaron y agredieron físicamente a cinco menores de edad. Como parte de la investigación se realizaron entrevistas y se solicitó informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC de Escuintla en relación con los hechos denunciados, comprobándose que los agentes sí infligieron maltrato físico a los menores.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS **Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1			1	1	1		2				6	23.08
Uso excesivo de la fuerza						1						1	3.85
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial						1		1				2	7.69
Corrupción		1	2		1							4	15.38
Amenazas, coacción	1					1						2	7.69
Detención ilegal			1	1								2	7.69
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal			1									1	3.85
Cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos			1									1	3.85
DEBIDO PROCESO													
Discontinuidad y lentitud procesal			1	2	2				1			6	23.08
LIBERTAD													
Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de movimiento o circulación						1						1	3.85
TOTAL MENSUAL	2	1	6	4	4	5	0	3	1	0	0	26	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

En educación, los problemas radican en la falta de respeto en el orden administrativo y jerárquico y en la inadecuada política administrativa implementada por el Ministerio de Educación, específicamente en la contratación del recurso humano, la falta de mantenimiento y seguridad en las escuelas públicas, la falta de monitoreo de la calidad de la educación que se imparte, y la defectuosa política administrativa en la cobertura de los programas de refacción escolar y útiles escolares.

El derecho a la salud es de los más vulnerados por la falta de atención médica, los escasos insumos y el poco personal. La Dirección del Área de Salud, como rectora y encargada de prestar este servicio público, no logra brindar la cobertura y la calidad del servicio que demanda la población. En cuanto a la seguridad social, quienes ya tienen derecho a la cobertura del Programa de Invalides Vejez y Sobrevivencia (IVS) han tenido que plantear juicios ordinarios ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social, por la negativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de reconocerles este derecho.

En a lo referente al tema de la seguridad alimentaria, por intervención del PDH, el Juzgado 4o. de Instancia Civil de la ciudad de Guatemala amparó provisionalmente y ordenó a las autoridades la inmediata y urgente atención a esa problemática, creándose el Frente Departamental contra el Hambre.

También la falta de acceso y atención a los servicios públicos, como transporte urbano y extraurbano, agua, luz, drenajes, extracción de basura, alumbrado público, afecta directamente a la población del departamento.

Se ha generado conflictividad agraria por el área contigua al mar, donde se ubican terrenos administrados por OCRET que siguen siendo adjudicados a personas y empresas cuyo único interés es la explotación de los mismos. Estos conflictos se incrementaron en jurisdicción del Puerto de San José, en donde aún permanecen ocupadas dos fincas particulares y una propiedad del Estado, que cada poco son desalojadas y vueltas a ocupar por las mismas personas, generando problemas constantes en esas comunidades.

Expediente ORD.ESC.027-2009 DESC

Se presentó denuncia contra el Programa de Beneficio Económico del Adulto Mayor por no dar continuidad, desde 2008, al procedimiento para el pago a una persona de la tercera edad. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al ministro de Trabajo y Previsión Social, al director del Programa de Adulto Mayor de Escuintla, y se entrevistó al denunciante y los denunciados, con lo cual se determinó que el retraso se debía a un error en el registro del nombre del solicitante en la sección de informática del Ministerio de Trabajo en Guatemala, situación que fue corregida para asignar la remuneración.

Expediente ORD.ESC.016-2009/DESC

Una mujer de la tercera edad solicitó ser acogida al programa del IVS, pero hasta marzo no tenía respuesta, perjudicándola económicamente. Tras solicitar informe circunstanciado al IVS del IGSS de Guatemala y de Escuintla y realizarse las entrevistas respectivas, la Unidad de Prestaciones Pecuniarias del IGSS resolvió beneficiarla con el pago a partir del mes de mayo.

Expediente ORD.ESC.031-2009/DESC

Un denunciante anónimo acusó a la directora de la Escuela Oficial Quintas San Marcos, del municipio de Masagua, por dar un castigo degradante a un alumno y a su progenitora, por lo que el menor decidió no acudir más a la escuela. Como parte de la investigación se entrevistó a los alumnos y maestros de la escuela, así como al menor y a sus familiares, y se solicitó informe circunstanciado a la Dirección Departamental de Educación, confirmando que el alumno abandonó la escuela a consecuencia del maltrato.

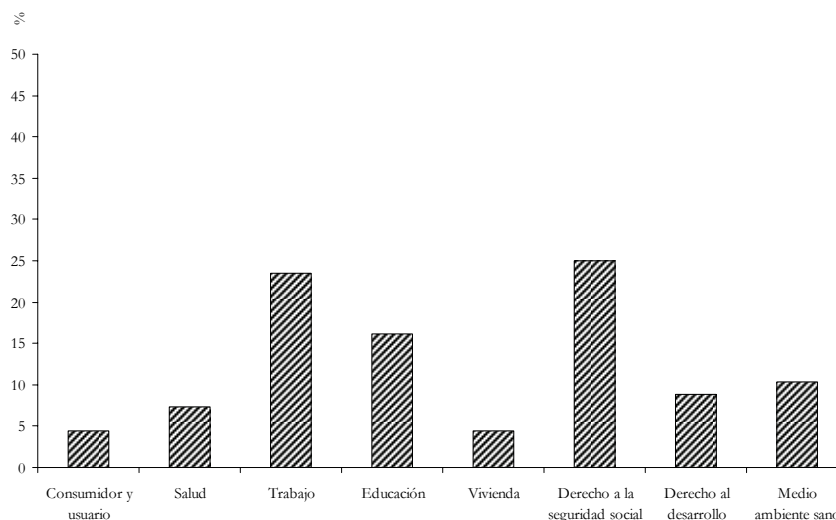
Expediente EIO.ESC.014-2009/DESC

Se inició expediente por la posible responsabilidad de las autoridades departamentales de Escuintla al no determinar con anticipación los daños en varios sectores del municipio de Escuintla, a consecuencia de desastres naturales. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a los miembros del Comité de Emergencia de Desastres de Escuintla con el fin de determinar su capacidad de prevención, estableciéndose con ello la limitada capacidad en este aspecto debido a la inadecuada administración de los recursos por parte de varias instituciones, como la Municipalidad y Gobernación, entre otras.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Falta de advertencia sobre uso y riesgo en el uso de productos			1									1	1.47
Desabastecimiento							1					1	1.47
Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo							1					1	1.47
SALUD													
Mala práctica médica						1		1	1			3	4.41
Falta de atención o asistencia médica		1										1	1.47
Mala atención en centro de salud			1									1	1.47
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral	1			1	1				1			4	5.88
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones				1			1					2	2.94
Falta de negociación						1						1	1.47
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo			1		1			1	1			4	5.88
Falta de pago de las prestaciones laborales		1							1			2	2.94
Despido injusto						2	1					3	4.41

EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita	1											1	1.47
Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria			1				1					2	2.94
Falta de educación en la comprensión, tolerancia y amistad									1			1	1.47
No ser tratado con justicia								2	1			3	4.41
No ser respetado			1	1								2	2.94
Falta de insumos y material didáctico		1										1	1.47
Falta de infraestructura	1											1	1.47
VIVIENDA													
Inseguridad jurídica de la tenencia				1	1	1						3	4.41
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social de riesgos	1								1			2	2.94
Insuficiente cobertura social a beneficiarios	1		1									2	2.94
Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social			6	1	1			2				10	14.71
Negación y retiro del derecho a gozar a la seguridad social											1	1	1.47
Negación de pensión por invalidez o sobrevivencia			1								1	2	2.94
DERECHO AL DESARROLLO													
Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza	1					1						2	2.94
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera			1			2			1			4	5.88
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminación visual									1			1	1.47
Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos			2		1							3	4.41
Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos					2							2	2.94
Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes					1							1	1.47
TOTAL MENSUAL	6	3	16	5	8	8	5	6	9	0	2	68	100.00



2.3 Derechos específicos

En 2009 la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil siguen afectando a las mujeres y a la niñez de Escuintla. El tema de las personas con discapacidad no ha sido considerado prioritario por las autoridades, por lo que no se han creado fuentes de trabajo ni condiciones idóneas para esta población. Es constante el retraso de la cobertura social de las personas adultas mayores para cumplir con el programa de ayuda económica, además de ser discriminados en el uso de servicios públicos como salud y transporte. También los derechos de los reclusos han sido violentados al ser objeto de tratos crueles y degradantes y hacinamiento, y el Sistema Penitenciario no da importancia a la inseguridad en los centros carcelarios.

Expediente MED.ESC.044-2009/DE

Doscientas familias de la colonia Magnolias, de Escuintla, se ven afectadas por las correntadas de aguas servidas que ingresan en sus casas, debido a que el ingenio Concepción y la Municipalidad de Escuintla las desviaron por medio de un sistema inadecuado. Ante la denuncia se realizó una mediación para conocer los hechos y se dialogó el problema con autoridades como CONRED, Gobernación Departamental, la Municipalidad, el ingenio Concepción y el COCODE de Magnolias, proponiéndose soluciones al problema. Los vecinos participarán en los cambios que los beneficiarán, así como a las colonias vecinas que padecen el mismo problema.

Expediente MED.ESC.054-2009/DE

A consecuencia de la manifestación pacífica en la vía pública que miembros del sindicatos de trabajadores de Salud de la Región 05 realizaran en apoyo a aquellos pacientes que no reciben prestaciones del servicio de salud, se brindó asesoramiento para implementar una mesa de diálogo en el departamento, que posteriormente se trasladó al Congreso de la República, donde se estableció el apoyo para el sector salud en relación con la asignación presupuestaria.

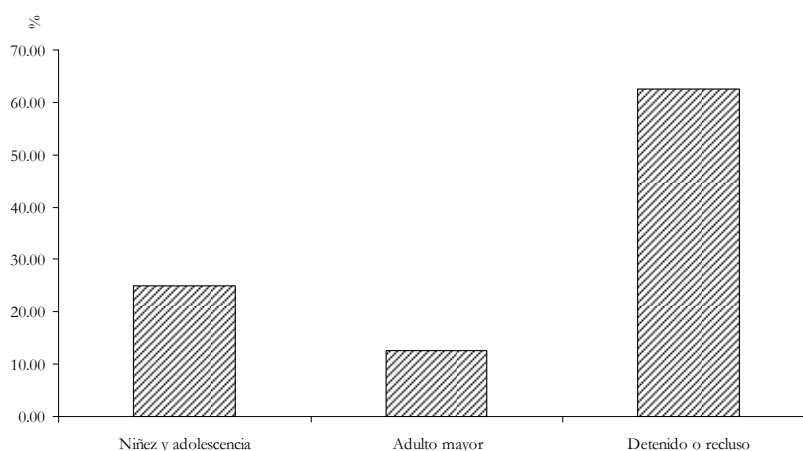
Expediente PREV.ESC.0290-2009/DE

Representantes del COCODE denunciaron que en la colonia Las Golondrinas, Escuintla, la Municipalidad dejó inconclusos trabajos de drenajes, con lo cual las aguas pluviales recolectadas en canales de tierra socavaron los cimientos de varias casas y se desviaron hacia un cerro que representa un peligro para las viviendas del lugar. La denuncia fue remitida al Concejo Municipal de Escuintla, el cual ordenó al encargado de Aguas y Drenajes de la Municipalidad de Escuintla que terminara los trabajos.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil			2					2				4	25.00
ADULTO MAYOR													
Discriminación cultural, social, económica, política			2									2	12.50
DETENIDO O RECLUSO													
Acciones que atentan contra su dignidad				1	1							2	12.50
Acciones que atentan contra su integridad		1	1		1				1			4	25.00
Maltrato			1									1	6.25
No conceder la visita conyugal en los centros femeninos			1									1	6.25
No permitir el acceso a beneficios penitenciarios									1			1	6.25
No permitir visita											1	1	6.25
TOTAL MENSUAL	0	1	5	1	2	0	0	0	2	0	1	16	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente ORD.ESC.027-2009/DESC

Se abrió expediente contra la Dirección del Área de Salud de Escuintla por una denuncia anónima relativa a la falta de medicamentos. A partir de los informes circunstanciados presentados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Área de Salud de Escuintla, se determinó la responsabilidad de la Dirección del Área de Salud por mal procedimiento en el trámite de requisición de los medicamentos.

Expediente ORD.ESC.032-2009/DE

El 31 marzo de 2009, hacia la medianoche, unos 200 elementos de la PNC, agentes del DIC con pasamontañas y 20 agentes del grupo élite del Sistema Penitenciario se presentaron en la Cárcel de Alta Seguridad Canadá de Escuintla para realizar una requisa e intentaron llevarse con rumbo desconocido a los

denunciantes y los amenazaron de muerte. Como parte de la investigación se entrevistó a los denunciantes, se planteó exhibición personal a su favor para proteger su integridad física, y se solicitó informe circunstanciado al director nacional del Sistema Penitenciario. La exhibición personal fue declarada improcedente puesta ya que, según el juez que realizó la acción, pueden realizarse inspecciones en horario inhábil.

Expediente ORD.ESC.056-2009/DCP

Se presentó denuncia contra elementos de la PNC de la Subestación de Santa Lucía Cotzumalguapa por torturar y someter a violencia física extrema a un hombre dentro de las instalaciones de la Subestación luego de haberlo capturado sindicado de hechos ilícitos. Como parte de la investigación se entrevistó a la víctima y se solicitó informe circunstanciado al jefe de la Subestación y al jefe de la Comisaría Departamental. La denuncia fue remitida a la Fiscalía Municipal del MP de Santa Lucía Cotzumalguapa y la víctima a la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Canadá de Escuintla. La investigación realizada por el MP no reveló datos de violaciones a los derechos humanos, pero la misma continúa.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente ORD.ESC.032-2009/DE A favor de: Maynor Leonel Barillas, Rigoberto Morales, Jorge Raúl Calderón y Jorge Morales Reyes. Motivo: por amenazas. Declarado con lugar: no (improcedente)
Descripción del caso: por amenaza de muerte y desaparición de los denunciantes en requisa en la Cárcel de Alta Seguridad Canadá, de Escuintla.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
ORD.ESC.002-2009/DESC	Licda. Leticia Arce Avelar	Administradora Trabajo Social	Departamento del Programa de Aporte Económico de Adulto Mayor de Guatemala
ORD.ESC.002-2009/DESC	Lic. José Luis Ávila López	Coordinador	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, Escuintla
ORD.ESC.006-2009/DE	Lic. Geovani Pivaral de León	Director	Granja Penal Canadá, Escuintla
ORD.ESC.006-2009/DE	Lic. Eddy A. Morales M.	Director General	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.ESC.08-2009/DESC	Licda. María del Rosario Balcarcel de Ávila	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación de Escuintla
ORD.ESC.020-2009/DESC	Lic. José Luis Ávila López	Coordinador	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, Escuintla
ORD. ESC. 022-2009/DE	Lic. Amilcar Velasquez Zarate	Fiscal General	MP, Guatemala
ORD.ESC.024-2009/DESC	Lic. José Luis Ávila López	Coordinador	Programa Aporte Económico de Adulto Mayor, Escuintla
ORD.ESC.024-2009/DESC	Byron Randulfo Rustrian Amado	Alcalde Municipal	Municipalidad de Palín
ORD.ESC.026-2009/DESC	Lic. Julio Celada	Fiscal Municipal	MP, Santa Lucía Cotzumalguapa
ORD.ESC.026-2009/DESC	Lic. Amilcar Velasquez Zarate	Fiscal General	MP, Guatemala
ORD.ESC.030-2009/DE	Licda. Ana Lisette Canahui Padilla	Juez	Juzgado de Paz de Palín

ORD.ESC.030-2009/DE	Lic. Jorge Guillermo Arauz Aguilar	Secretario	Corte Suprema de Justicia
ORD.ESC.032-2009/DE	Luis Alfonso Donado Martínez	Subdirector	Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla
ORD.ESC.032-2009/DE	Hriberto Guzmán Muñoz	Subdirector	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.ESC.036-2009/DESC	Licda. Ingrid Coralia Miranda	Delegada	Ministerio de Trabajo de Escuintla
ORD.ESC.038-2009/DESC	Lic. Josew Arnoldo Calderón Chacón	Director Ejecutivo	Fondo Guatemalteco para la Vivienda
ORD.ESC.040-2009/DCP	Fdo. José Leonel García Velasquez	Jefe	Comisaría 31, PNC, Escuintla
ORD.ESC.040-2009/DCP	Isaias Osbely Carrera Sales	Jefe	Subestación 31-34, PNC, Masagua
ORD.ESC.042-2009/DESC	José Leonel García Velasquez	Jefe	Comisaría 31, PNC, Escuintla
ORD.ESC.048-2009/DESC	Eduardo Enrique Machuca Quiroa	Juez de Asuntos Municipales	Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa
ORD.ESC.048-2009/DESC	Rodolfo Chang Shum	Alcalde	Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa
ORD.ESC.052-2009/DCP	José Leonel García Velasquez	Jefe	Comisaría 31, PNC, Escuintla
ORD.ESC.054-2009/DE	Bernabé Salazar Marroquín	Director	Granja de Alta Seguridad de Escuintla
ORD.ESC.054-2009/DE	Christian Gerardo Mendez	Subdirector General	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.ESC.056-2009/DCP	José Leonel García Velasquez	Jefe	Comisaría 31, PNC, Escuintla
ORD.ESC.062-2009/DESC	Licda. Irma Elizabeth de Paz de Loaiza	Secretaria	Secretaría de Gerencia del IGSS
ORD.ESC.062-2009/DESC	Ing. Carlos Enrique Ortega Sarti	Jefe	Departamento de Recursos Humanos, IGSS, Guatemala
ORD.ESC.068-2009/DESC	Ing. Flavio Reyes	Consejal II	Municipalidad de Escuintla
ORD.ESC.070-2009/DESC	Lic. José Luis Ávila López	Coordinador	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor Escuintla
ORD.ESC.072-2009/DCP	Lic. Byron Waldemar Pinto Hernandez	Agente Fiscal	Fiscalía Municipal, Puerto de San José
ORD.ESC.076-2009/DE	Lic. Rigoberto Ralon Gonzalez	Director	Escuela Oficial Rural Mixta de Educación de Párvulos Adolfo Santizo, Escuintla
ORD.ESC.078-2209/DE	Lic. Rigoberto Ralon Gonzalez	Director	Escuela Oficial Rural Mixta de Educación de Párvulos Adolfo Santizo, Escuintla
EIO.ESC.012-2009/DCP	Lic. Randolph Rafael Rojas Cetina	Coordinador	Secretaría de Coordinación Técnica, MP, Guatemala
EIO.ESC.014-2009/DESC	Ing. Flavio Reyes	Concejal II	Municipalidad de Escuintla
EIO.ESC.014-2009/DESC	Pedro René Escobar Alvizurez	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental de Escuintla
ORD.ESC.016-2009/DESC	Licda. Irma Elizabeth de Paz de Loaiza	Secretaria de Gerencia	IGSS, Guatemala
ORD.ESC.003-2009/DCP	Pedro René Escobar Alvisurez	Gobernador	Gobernación Departamental de Escuintla
ORD.ESC.003-2009/DCP	Víctor de Jesús Duarte Mendoza	Coordinador General	Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular de Guatemala (UDEVIPO)
ORD.ESC.007-2009/DESC	Wilson Mejía	Alcalde	Municipalidad de Guanagazapa

ORD.ESC.013-2009/DESC	Nohe Boror Hernández	3er Viceministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala
ORD.ESC.015-2009/DESC	Sonia Lisset Borrayo Obando	Representante Legal	Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima
ORD.ESC.017-2009/DESC	Carlos César Barrios Castillo	Delegado Departamental	IGSS, Escuintla
ORD.ESC.017-2009/DESC	Douglas Guerrero	Director	Hospital del IGSS Departamental
ORD.ESC.017-2009/DESC	Rolando del Cid	Gerente General	IGSS
ORD.ESC.029-2009/DCP	Julio Melgar	Alcalde	Municipalidad de Escuintla
ORD.ESC.029-2009/DCP	Marlene Lapola Blanco	Directora	PNC, Guatemala
ORD.ESC.029-2009/DCP	Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala
ORD.ESC.031-2009/DESC	María Del Rosario Balcarcel de Ávila	Directora	Dirección Departamental de Educación de Escuintla
ORD.ESC.033-2009/DESC	María Del Rosario Balcarcel de Ávila	Directora	Dirección Departamental de Educación de Escuintla
ORD.ESC.035-2009/DESC	Edgar Alfredo Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala
ORD.ESC.037-2009/DE	Leonel Jarquin	Alcalde	Municipalidad de Tiquisate
ORD.ESC.039-2009/DESC	Roberto Calvo	Director	Hospital Nacional Regional de Escuintla
ORD.ESC.043-2009/DESC	Ingrid Carolina Miranda	Delegado Departamental	Inspección de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Escuintla
ORD.ESC.049-2009/DE	Alejandro Bran de la Rosa	Alcalde	Municipalidad de Masagua
ORD.ESC.053-2009/DE	Gumerindo Ruíz Méndez	Jefe	Subestación 31-31, PNC, Puerto de San José
ORD.ESC.059-2009/DCP	José Leonel García Velasquez	Subcomisario	Comisaría PNC de Escuintla
ORD.ESC.065-2009/DESC	Douglas Guerrero	Director	Hospital del IGSS Departamental
ORD.ESC.067-2009/DESC	Douglas Guerrero	Director	Hospital del IGSS Departamental
ORD.ESC.069-2009/DCP	Abel Tobar Torres	Comisario	Comisaría PNC de Escuintla
EIO.ESC.007-2009/DESC	Ana Francisca Del Rosario Ordoñez de Molina	Ministra	MINEDUC Guatemala
EIO.ESC.011-2009/DE	Giovani Pivaral de León	Director	Cárcel Granja Modelo de Rehabilitación Canadá
EIO.ESC.015-2009/DCP	Axel Humberto Orantes Morales	Coordinador	INACIF, Guatemala
EIO.ESC.015-2009/DCP	Roberto Calvo	Director	Hospital Nacional Regional de Escuintla

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
ORD.ESC.08-2009/DESC	Dina Araceli Cardoza Guerra	Directora	Instituto Oficial de Educación Básica de Telesecundaria Colonia Monterrey
ORD.ESC.020-2009/DESC	Licda. Ingrid Coralia Miranda	Delegada	Ministerio de Trabajo de Escuintla
ORD.ESC.020-2009/DESC	Licda. Leticia Arce Avelar	Administradora T. Social	Programa de Aporte Económico del Ministerio de Trabajo Guatemala
ORD.ESC.034-2009/DCP	Eduardo Enrique Machuca	Juez de Asuntos Municipales	Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa

ORD.ESC.034-2009/DCP	Lic. Walter Robles	Asesor Jurídico	Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa
ORD.ESC.034-2009/DCP	Lic. Rodolfo Chang	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa
ORD.ESC.036-2009/DESC	Edgar Alfredo Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo, Guatemala
ORD.ESC.038-2009/DESC	Lic. Guillermo Andres Castillo Ruiz	Ministro	Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
ORD.ESC.040-2009/DESC	Profesor Alex Eribe Salazar de Leon	Director	Instituto Nacional de Educación Diversificada de Masagua
ORD.ESC.042-2009/DESC	Dra. Blanca Rosa Guevara	Directora	Área de Salud de Escuintla
ORD.ESC.042-2009/DESC	Anibal de la Rosa Herrera	Delegado	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Escuintla
ORD.ESC.044-2009/DESC	Lic. Coralia Miranda	Delegada	Ministerio de Trabajo, Escuintla
ORD.ESC.046-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC
ORD.ESC.056-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC
ORD.ESC.060-2009/DESC	Miembros del Concejo Municipal		Municipalidad de Masagua
ORD.ESC.060-2009/DESC	Alejandro Bran de la Rosa	Alcalde Municipal	Municipalidad de Masagua
ORD.ESC.066-2009/DESC	Giulio Tlamonti Gudiel	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.ESC.068-2009/DESC	Sergio Fidel Méndez Alonzo	Presidente	Junta Directiva de la Cooperativa El Modelo, R. L., Escuintla
ORD.ESC.070-2009/DESC		Coordinador	Programa de Aporte Económico del Ministerio de Trabajo, Guatemala
ORD.ESC.072-2009/DI	Claudia María Muñoz Saenz	Auxiliar Fiscal I	Fiscalía Municipal de Puerto de San José
ORD.ESC.076-2009/DE	Licda. María del Carmen Sandoval L.	Supervisora Educativa	Dirección Departamental de Educación de Escuintla
ORD.ESC.078-2009/DE	Licda. María del Carmen Sandoval L.	Supervisora Educativa	Dirección Departamental de Educación de Escuintla
ORD.ESC.080-2009/DESC	Leidy Nohemí Flores Morales	Directora	Escuela Oficial Rural Mixta Quintas San Marcos Masagua
ORD.ESC.080-2009/DESC	Licda. Paulina Lobo	Coordinadora Educativa	Dirección Departamental de Educación de Escuintla
EIO.ESC.014-2009/DESC	Edgar Gomar	Delegado	CONRED
ORD.ESC.055-2009/DCP	Dagoberto Gutiérrez	Fiscal Distrital	MP, Escuintla
ORD.ESC.061-2009/DESC	Ana Francisca Del Rosario Ordóñez de Molina	Ministra	MINEDUC, Guatemala
ORD.ESC.063-2009/DESC	Rolando del Cid	Gerente General	IGSS

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	584
De apertura de expedientes de investigación	103
Medidas urgentes	115
Se hace efectivo el apercibimiento por no haber cumplido con las medidas urgentes	2
Ampliación de plazo para la investigación	17

Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	1
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	1
Con suspensión por desistimiento	3
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	2
Resoluciones impugnadas	2
TOTAL	830

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Monitoreo de gratuidad de la educación y por educación bilingüe
- Monitoreo a hospitales nacionales y centros de salud, por desabastecimiento de medicinas y atención a pacientes.
- Monitoreo de abastecimiento y atención de hospitales nacionales y centros de salud.
- Monitoreo de cloración de agua potable por parte de las Municipalidades.
- Monitoreo de atención a INACIF.
- Monitoreo de oficinas municipales para cumplimiento de Ley de Acceso a la Información.
- Monitoreo de desnutrición y morbilidad infantil departamental.
- Frente Departamental contra el Hambre.

Incidencia política

- Organización e inauguración de mesas de diálogo en los municipios de alto riesgo, para tratar asuntos de educación, vivienda, seguridad ciudadana, trabajo, salud y alimentación.
- Conformación de COCODES en las aldeas y colonias de Escuintla.
- Participación en los COMUDES de los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa, Puerto de San José y Escuintla para ejecutar proyectos juntamente con cada mesa de concertación.
- Organización de la sala situacional con respecto a los municipios de alto riesgo conforme al diagnóstico situacional realizado.
- Monitoreos con respecto a cada uno de los problemas sociales de forma coyuntural y de proceso que se dieron en el departamento: desalojos, contaminación de ríos, basureros clandestinos, bloqueos o manifestaciones en carreteras, alza de los costos de la canasta básica familiar, inundaciones y desastres ocasionados por las intensas lluvias.
- Organización de mesas de diálogo: con autoridades departamentales y municipales para tratar el desabastecimiento de medicina y equipo quirúrgico en el municipio de Escuintla; con autoridades departamentales para tratar la problemática del magisterio por incumplimiento de pago de prestaciones laborales.
- Realización del mapeo de conflictividad para organizar las distintas mesas para tratar cada uno de los problemas y buscarles algún tipo de solución.
- Participación en la mesa de diálogo organizada para tratar la problemática de la reubicación de los vendedores navideños de Escuintla.
- Observación y seguimiento en los distintos lugares en que se han efectuado órdenes de desalojos de tierras por invasores.
- Seguimiento de la situación en que se encuentran los reos de la cárcel de Escuintla.
- Observación y negociación en los distintos bloqueos y manifestaciones efectuados en distintos sectores.
- Asesoramiento y vigilancia en la aplicación de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a las Municipalidades del departamento en la conformación y registro de los COCODES.

- Conformación de una instancia para resolver la problemática de las personas de la tercera edad en lo que respecta a la gratuidad en el pago del servicio de transporte urbano.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Orientación y asesoramiento a grupos organizados de la sociedad civil en lo referente al ejercicio de la auditoría social a través de la instancia Diálogos por la Paz.
- Establecimiento de diálogos y otros procedimientos pacíficos de resolución de conflictos en problemas diversos en el departamento de Escuintla.
- Incidencia en la aplicación de la Ley de Descentralización y el Código Municipal.
- Asesoría y verificación de la participación ciudadana en los Consejos Comunitarios de Desarrollo.
- Desarrollo del proceso de observación del funcionamiento del Registro Nacional de Personas (RENAP).
- Participación activa en programas de radio y televisión local relacionados con los Derechos Humanos.
- Integración de grupos y redes juveniles enfocadas a la formación y participación juvenil en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas comunitarios.
- Fortalecimiento de las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Juventud de Santa Lucía Cotzumalguapa, Puerto de San José, La Democracia y Tiquisate.
- Incidencia en las municipalidades para que utilicen el presupuesto con equidad y en los rubros establecidos.
- Promoción de la organización ciudadana, participando en asambleas de conformación y elecciones de Consejos Comunitarios de Desarrollo.

Educación y promoción

- Conformación de la Instancia Interuniversitaria de Derechos Humanos, para la orientación, asesoría, consulta y desarrollo de actividades conjuntas, con incidencia en la calidad de la educación superior.
- Actividades de educación y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los municipios de Escuintla, Guanagazapa y Masagua, Puerto de San José, Nueva Concepción, Tiquisate, Santa Lucía Cotzumalguapa.
- Actividades para la vigilancia de los derechos del adulto mayor, discapacitados, pueblos indígenas.
- Talleres en diferentes establecimientos educativos con el propósito desarrollar los contenidos del Curriculum Nacional de Base en los niveles primario y medio.
- Capacitación a madres de familia sobre violencia y maltrato infantil.
- Elección del Niño Procurador y Niño Alcalde del departamento.

Auxiliatura Departamental de Guatemala



Auxiliatura Departamental de Guatemala

La Dirección Nacional de Procuración se creó dentro de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para coordinar el trabajo que se realiza, en materia de Derechos Humanos, en las diferentes áreas y unidades de procuración, que incluye sede central y auxiliaturas, teniendo una estrecha relación con las demás direcciones en relación con el trabajo que se realiza tanto en el trámite de expedientes como monitoreos, operativos y atención a la víctima.

La Dirección de Procuración, a través de su director y de acuerdo con la normativa de la institución del PDH, está orientada a atender el Departamento de Procuración y representar al Magistrado de Conciencia en las actividades inherentes al Departamento de Procuración, a efecto de que la misma cumpla sus funciones de manera ágil y eficiente. Le corresponde, de igual forma, la organización y supervisión del departamento y, para tal efecto, dará prioridad a la calificación de las denuncias y su asignación a las unidades que lo conforman, el adecuado tratamiento de los expedientes y todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de su labor.

La Dirección de Procuración busca que, a través de su gestión y coordinación, en el ámbito nacional se unifiquen los criterios a aplicar en la resolución y tramitación de los expedientes que se inician con motivo de denuncias que sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones de los derechos humanos en todas las auxiliaturas y oficinas de la institución del PDH.

Así, ha logrado formar grupos de trabajo e investigación con resultados favorables en casos que son planteados a la institución, y se han obtenido resultados satisfactorios en los acompañamientos y monitoreos efectuados, con respuestas positivas para los denunciantes y las víctimas. Los logros de las distintas unidades bajo la Dirección de Procuración también son logros de ésta, pues como ente coordinador del trabajo que se realiza en el departamento, marca la pauta a seguir en los casos paradigmáticos y que requieren de mayor atención, logrando un trabajo armonioso y profesional.

Durante el presente año se alcanzaron los siguientes productos:

- Protocolos del Centro de Llamadas y de la Unidad de Seguimiento al Centro de Llamadas, revisados y aplicados satisfactoriamente.
- Informes de los resultados de las evaluaciones de atención a la víctima.
- Protocolo de coordinación de las diferentes áreas para la atención a la víctima, elaborado y aplicado.
- Tabla de calificación de denuncias actualizada.
- Dictámenes técnicos psicológicos.
- Reuniones de coordinación entre la Dirección de Procuración y las unidades que atienden a la víctima, con la finalidad de buscar apoyo de otras instituciones, y así brindarle la atención necesaria a la víctima.
- Capacitaciones del personal de Recepción y Calificación de Denuncias, en técnicas de entrevista, derechos humanos e intervención en crisis.
- Protocolo de acompañamientos, verificación de denuncias y monitoreos.
- Informe sobre monitoreos, acompañamientos y verificación de denuncias.
- Evaluación del protocolo de intervención en monitoreos, acompañamientos y verificación de denuncias.
- Socializar resultados de la aplicación del protocolo de intervención en monitoreos, acompañamientos y verificación de denuncias.
- Estudio de la aplicación de la ficha digital única para recepción, atención y seguimiento de casos, a la Dirección de Tecnología e Informática.
- Protocolo a aplicar en cumplimiento de las solicitudes a la institución del PDH de conformidad con la Ley de Acceso a la Información.

1. RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE DENUNCIAS

De enero a noviembre de 2009 se atendieron 6,475 denuncias, ocupando el primer lugar el derecho a la seguridad, en segundo, los derechos de la niñez y adolescencia, tercero, los derechos de la mujer y en cuarto lugar, los derechos del adulto mayor; lo que refleja la falta de políticas públicas para el cumplimiento de las funciones y atribuciones del Estado de Guatemala a través de sus instituciones y de los funcionarios que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de la población, en especial de los más desprotegidos.

También se recibieron denuncias en relación con la extracción y explotación minera, el desarrollo de hidroeléctricas en comunidades de San Marcos, Huehuetenango, Chiquimula y Alta Verapaz, y situaciones de seguridad alimentaria, iniciando un expediente por la falta de políticas integrales referidas a este flagelo que afecta a los más pobres en toda la República.

Se ha capacitado al personal para abordar la trata de personas, permitiendo coordinar con instituciones relacionadas con la temática. Además, a raíz de la vigencia del Decreto No. 57-2008, se ha brindado atención especial a las denuncias de violación del derecho al acceso a la información pública. Además, durante el mes de octubre se trabajó en la validación de la segunda fase del Sistema de Gestión de Denuncias, lo que permitirá agilizar los procesos de tramitación de las denuncias y los plazos establecidos.

RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE DENUNCIAS Enero a noviembre de 2009

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN	Subtotal	TOTAL
Trasladados a las áreas de Procuración, en el departamento de Guatemala		
Derechos Civiles y Políticos	117	1,017
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	615	
Derechos Específicos	285	
Resolución de apertura de expedientes	1,017	
EXPEDIENTES DE ACCIONES ESPECÍFICAS	Subtotal	TOTAL
Mediación	586	1,235
Orientación	649	
TRASLADADOS A AUXILIATURAS	Subtotal	TOTAL
Móviles del departamento de Guatemala	810	1,382
Departamentales	572	
EXPEDIENTES DERIVADOS DE LLAMADAS AL CALL CENTER	TOTAL DE LLAMADAS ATENTDIDAS	
De ellas se iniciaron 1,761 expedientes	15,257	
- 1,005 de investigación		
- 756 acciones específicas (222 de prevención, 79 de mediación, 114 de acompañamiento, 279 de intervención inmediata y 62 de atención a la víctima)		

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

El departamento de Guatemala se ha caracterizado por ser de los más violentos, y la discriminación y la exclusión son factores fundamentales en la vulneración de los derechos humanos, en especial en cuanto a derechos civiles y políticos se refiere. La falta de supervisión y las deficiencias de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil (PNC) han permitido que sus elementos actúen con abuso de poder y de forma arbitraria en contra de la población guatemalteca.

Los casos más denunciados son los relacionados con la seguridad, intimidad y el debido proceso. Además se observa la falta de interés de las autoridades correspondientes para la erradicación de las violaciones de los derechos humanos; siendo el principal problema el desconocimiento de las funciones y atribuciones del PDH.

Expediente ORD.GUA.2809-2009/DCP

Indicó el denunciante que fue amenazado de muerte y agredido de forma física y verbal por agentes de la PNC y que al indicarles que era testigo protegido del Ministerio Público (MP), éstos ignoraron tal situación, destruyendo el documento que lo acreditaba como tal e incrementando el ataque. Como parte de la investigación se requirieron informes circunstanciados, se solicitaron las diligencias de investigación a dependencias de la PNC, se entrevistó al denunciante, se verificó el parte de consignación del denunciante para poder individualizar a los tres agentes captores, siendo entrevistados dos de ellos; además, personal de la PDH se constituyó en el lugar de los hechos, a la estación de la PNC “El Limón” y a la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, para obtener más elementos de juicio y poder sustentar una conclusión. El 27 de octubre se dictó resolución final declarando la violación del derecho humano a la seguridad e integridad personal de que fue objeto el denunciante, hallando responsables a los tres agentes de la PNC y certificándose lo actuado a la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP.

Expediente EIO.GUA.3000-2009/DCP

De acuerdo con denuncia publicada en *Prensa Libre*, el 30 de abril de 2009, la Unidad de Información del Hospital General San Juan de Dios fue cerrada, indicando que toda persona que desee informarse deberá acudir a las oficinas centrales de dicha cartera. Como parte de la investigación se requirieron informes circunstanciados a las autoridades correspondientes y se verificó en las instalaciones del Hospital General San Juan de Dios. El 21 de julio se dictó resolución final, declarando la violación del derecho humano al libre acceso a la información pública, con indicios racionales de responsabilidad por parte del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

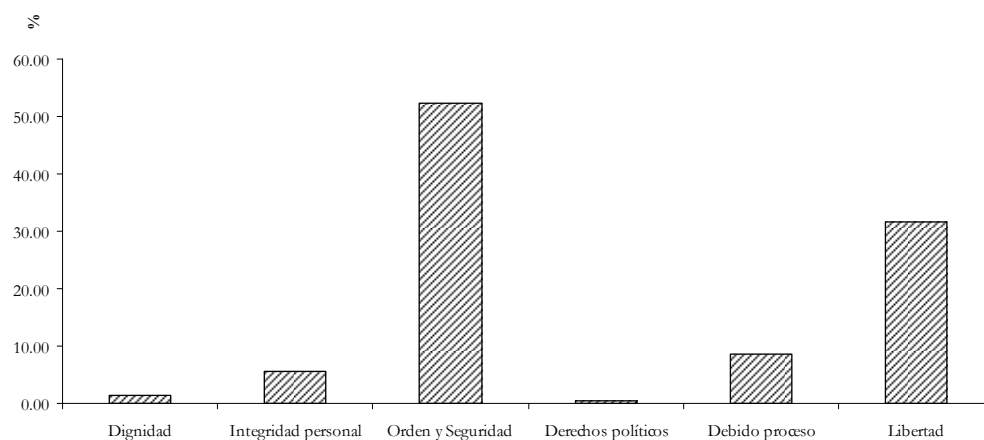
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS **Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Amenazas o intimidaciones										2	1	3	1.30
INTEGRIDAD PERSONAL													
Desaparición forzada	2	1	1	1		1						6	2.60
Muerte violenta	1		2	1		1	1			1		7	3.03
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	4	3	5	9	5		1	6	9	9	4	55	23.81
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial									3	3	3	9	3.90
Amenazas, coacción	6	3	1	6	8	7	1	2	2	10	6	52	22.51
Detención ilegal	1		1					1				3	1.30
Omisión de los requisitos de la detención legal					1			1				2	0.87



DERECHOS POLÍTICOS													
Denegación de la libre participación									1			1	0.43
DEBIDO PROCESO												0	
No contar con el auxilio de un abogado						1						1	0.43
No permitir su defensa							1	1			1	3	1.30
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial											1	1	0.43
Discontinuidad y lentitud procesal			1		2	1	2			6	3	15	6.49
LIBERTAD													
Restringir la libertad de expresión: Censura		1							1			2	0.87
Restringir el derecho a ser informado: Información negligente						1	3	1	3	3	2	13	5.63
Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de movimiento o circulación						1	1	1	1	3		7	3.03
Violación del derecho a la intimidad: Violación al secreto de las comunicaciones	5	5	2	1	3	3	4	2	9	12	5	51	22.08
TOTAL MENSUAL	19	13	13	18	19	16	14	15	29	49	26	231	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	3	3	2	7	4	2	2	4	5	3	2	37	16.02
Ordinario	16	10	11	11	15	14	12	11	24	46	24	194	83.98
TOTAL MENSUAL	19	13	13	18	19	16	14	15	29	49	26	231	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre de 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	9	6	6	7	4	4	3	5	7			51	32.48
Judicial			1		3		2	1	2			9	5.73
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades			1		2	1			1			5	3.18
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social				1								1	0.64
Ministerio Público	1				1	1	1	4	2			10	6.37
Defensa Pública Penal						1	1					2	1.27
Consejo de la Defensa Pública Penal									1			1	0.64
Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte de Apelaciones									1			1	0.64
Crédito Hipotecario Nacional							1					1	0.64
Informes en Red, S. A.	4	5	1	1	1	2	3	2	6			25	15.92
Trans Unión Guatemala, S. A.	1		1		2	1	1		3			9	5.73
Registro Nacional de las Personas			1						3	1		5	3.18
Desconocidos	4	2	2	9	6	6	2	3	3			37	23.57
TOTAL MENSUAL	19	13	13	18	19	16	14	15	29	1	0	157	100.00

a. Casos paradigmáticos

Expediente EIO.GUA.1268-2009/DCP, ACUMULADO EIO.GUA.1969-2009/DCP

Se inició expediente por violación del derecho humano al medio ambiente sano, deforestación, contaminación visual y autorización de actividades industriales y comerciales ambientalmente peligrosas y destrucción del área boscosa en jurisdicción de Villa Nueva, contra el Estado de Guatemala, por autorización otorgada para la extracción de arena y otros minerales a las empresas El Carmen e Industrias, Productos y Equipos para la Construcción (INDACO, S.A), lo cual ocasiona destrucción de la flora y fauna del lugar y de la cuenca del Lago de Amatitlán. Se requirieron informes circunstanciados a las autoridades correspondientes, se realizó inspección ocular en los lugares afectados, personal de esta institución se constituyó en las empresas areneras mencionadas y en el Ministerio de Energía y Minas, se acompañó a los residentes de las áreas afectadas, se entrevistó a vecinos afectados y personas relacionadas con el conflicto y se interpuso recursos de exhibición personal. El 25 de mayo se dictó resolución final, declarándose la violación del derecho humano al medio ambiente sano; se certificó lo actuado a la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente del MP.

Expedientes EIO.GUA.1749-2009/DCP, ACUMULADO EIO. GUA. 1875-2009/DCP, EIO. GUA. 2045-2009/DCP

Personas desconocidas a bordo de un vehículo tomaron fotos al momento de retirarse el personal del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (PRAHPN); asimismo, se denunciaron las amenazas recibidas por personal de la sede central de esta institución, vía mensajes de texto a

celulares, y los ataque con arma de fuego contra dos trabajadores. Se requirieron informes circunstanciados al Ministerio de Gobernación, al MP, a la División de Investigación Criminal y a la Dirección General de la PNC; se realizaron entrevistas, investigación de campo, solicitud de medidas de seguridad perimetrales y personales a favor de las víctimas y se gestionaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 9 de julio de 2009 se dictó resolución final, declarando la violación del derecho humano a la seguridad, así como el derecho de defender y promover los derechos humanos de los trabajadores de esta institución, señalando que existen indicios racionales que responsabilizan de dichas violaciones al Ministerio de Gobernación a través de la PNC, por incumplir con su deber de brindar seguridad a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y omisión de realizar acciones efectivas para garantizar el libre ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial del PDH. Se certificó copia de la resolución al MP.

b. Funcionarios fiscalizados

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.GUA.1560-2009/DCP	Jorge Mario Sánchez Díaz	Director	Dirección General de Transportes
EIO.GUA.1560-2009/DCP	Guillermo Andrés Castillo Ruíz	Ministro	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
ORD.GUA.3352-2009/DCP	Blanca Lily Cojulún Marroquín	Fiscal de Sección	Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, MP
ORD.GUA.4000-2009/DCP	Jaime Leonel Otzin Díaz	Subdirector General de Operaciones	PNC
ORD.GUA.4000-2009/DCP	Jorge Ernesto Aldana Chávez	Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.GUA.4741-2009/DCP	Adolfo González Rodas	Presidente	Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal
ORD.GUA.4741-2009/DCP	Remberto Leonel Ruiz Barrientos	Director General en Funciones	Instituto de la Defensa Pública Penal
ORD.GUA.5402-2009/DCP	Jildy Marroquín de Manzo	Directora de Recursos Humanos	Ministerio Público
ORD.GUA.5402-2009/DCP	Bonifacio Salvador de León	Agente Fiscal	Fiscalía Municipal de Chisec, Alta Verapaz
ORD.GUA.5979-2009/DCP	Julia Mercedes Meza Bran de Oliva	Agente Fiscal	Agencia 6 de Desjudicialización, MP

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.GUA.4537-2009/DCP	Guillermo Porras Ovalle	Procurador	Procuraduría General de la Nación
EIO.GUA.4760-2009/DCP	Maximiliano Afre Vásquez	Mayor	Ejército de Guatemala
ORD.GUA.5369-2009/DCP	Fernando Reyes Palencia	Director	Policía Municipal, Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.6200-2009/DCP	Baltasar Gómez Barrios	Director General	PNC
ORD.GUA.6193-2009/DCP	Amilcar Velásquez Zarate	Fiscal General y Jefe	Ministerio Público

Funcionarios públicos declarados violadores de derechos humanos

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.GUA.2809-2009/DCP	Hilder Pernillo Pérez, Abel Salvador Méndez, Wilmer Ivan Mira Hernández	Agentes	PNC
EIO.GUA.3000-2009/DCP	Celso David Cerezo Mulet	Ministro	MSPAS
ORD.GUA.4085-2009/DCP	Edwin Elías Marroquín Azurdia	Fiscal	Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida e Integridad de la Persona, MP
ORD.GUA.5039-2009/DCP		Jefe	Unidad de Información Pública, MP
EIO.GUA.6462-2009/DE	Eddy Morales	Director	Sistema Penitenciario
ORD.GUA.1455-2008/DCP	Marvin Manolo Salguero Flores, Gilberto López	Agentes	PNC
ORD.GUA.4861-2008/DCP, ACUMULADO ORD.GUA.5458-2008/DCP		Agentes	Comisaría 13, PNC

c. Resoluciones emitidas

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
Ampliación de plazo para la investigación	202
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	18
Enmienda de procedimientos	8
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	145
Acumulación de expedientes	13
Resoluciones finales	0
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	84
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	51
> Con recomendación	3
De control administrativo	12
Acciones o recursos planteados	0
TOTAL	536

2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

En cuanto a la violación del derecho humano a la salud, las denuncias recibidas van en aumento, ya que tanto la red hospitalaria nacional como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no prestan la atención médica adecuada. La mayor parte de denuncias son referentes a falta de medicamentos, mala atención, negligencia médica, falta de equipo, insumos y material.

En cuanto a la violación al derecho humano al trabajo, un 90% de las denuncias se refiere a hostigamiento laboral, despidos injustificados y falta de pago de prestaciones. En lo concerniente a la educación, específicamente del sector público, no existe capacidad en infraestructura, maestros ni material didáctico.

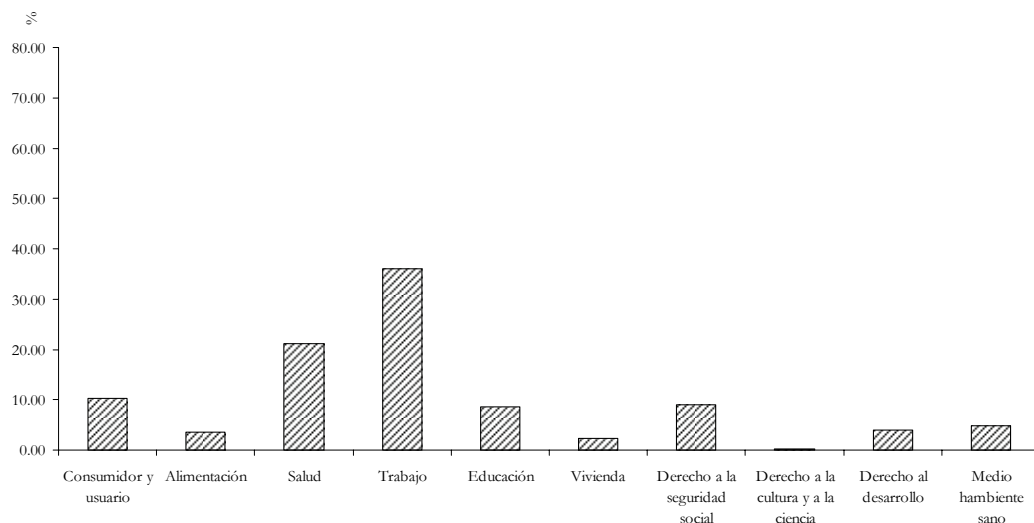
También se ha violado el derecho humano a los servicios públicos, entre ellos el acceso al agua y el de la energía eléctrica, por el aumento inmoderado de su valor.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Negación o insuficiencia de información sobre todos los aspectos de productos de consumo						1					1	2	0.29
Falta de advertencia sobre uso y riesgo en el uso de productos	1											1	0.14
Desabastecimiento		1	2	1			3	1	1	1		10	1.44
Alzas inmoderadas de precios y tarifas	5	7	6	6	6	2	1	6	3	3	5	50	7.22
Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo		1	1		1	1					1	5	0.72
Inexistencia de medidas que permitan que los consumidores obtengan compensación									1			1	0.14
Ausencia de políticas públicas a favor del consumidor									1		1	2	0.29
ALIMENTACIÓN													
Hambre									14	6		20	2.89
Inseguridad alimentaria	1					1						2	0.29
Desnutrición y sus consecuencias (problemas del crecimiento, dificultades motrices, en el funcionamiento de los sistemas inmunológicos y de reproducción, diarrea, reducción de nivel de juego y actividades, limitación del desarrollo y cognoscitivo, malformaciones como médula bífida, ceguera, raquitismo)					1	1		1				3	0.43
SALUD													
Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)									1			1	0.14
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)								1		1		2	0.29
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud		2	2		1						1	6	0.87
Mala práctica médica	1			3	2		2		1			9	1.30
Cobros ilegales				2					1			3	0.43
Falta de atención o asistencia médica	4	9	4	6	2	5	2	1	5	7	3	48	6.93
Negligencia médica	3							1	2	2		8	1.15

Medidas inadecuadas para la rehabilitación										2		2	0.29
Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado			1						1	1		3	0.43
Negación de atención médica			2	3			1		1	4	3	14	2.02
Negación o falta de medicamentos	3	5	11	5	1	1	3	9	3	6	4	51	7.36
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral						1		1			1	3	0.43
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones	4	10	13	3	9	6	4	4	13	11	11	88	12.70
No evolución del salario	2									2		4	0.58
Subempleo								1				1	0.14
Falta de negociación						1					3	4	0.58
Despido ilegal o injusto	2	5	7	1	1	1		1	3	5	1	27	3.90
Omisión administrativa (comisiones paritarias)					1							1	0.14
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	7	8	4	17	3	5	3	4	4	5	6	66	9.52
Falta de pago de las prestaciones laborales	5	1	1	3	1	3	3	1	5	10	1	34	4.91
Despido injusto				3	1		1	1	1	6	1	14	2.02
Restricciones a la libertad sindical			2			1	1		1		3	8	1.15
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la formación profesional		1	3	1	2			2		3	4	16	2.31
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita										1		1	0.14
Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria						1				1		2	0.29
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	1	21	3.03
Educación NO orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de la dignidad					1	2	1		1	4	2	11	1.59
Falta de capacitación para participar efectivamente en sociedad										1		1	0.14
No ser tratado con justicia		1										1	0.14
Falta de insumos y material didáctico		1										1	0.14
Falta de infraestructura		1					1				1	3	0.43
Incrementos de cuotas de estudio		1				2						3	0.43
VIVIENDA													
Vivienda inadecuada	1	1						2				4	0.58
Inseguridad jurídica de la tenencia	1	3	1								3	8	1.15
Falta de servicios, materiales e infraestructura			1						1			2	0.29
Inasequibilidad de la vivienda (precios, créditos)											1	1	0.14

Inaccesibilidad a centros de empleo, servicios de salud, guarderías, escuela, etc.				1								1	0.14
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social					1				1		1	3	0.43
Negación y retiro del derecho a gozar a la seguridad social		2	3	4		1	1	1			1	13	1.88
Negación de pensión por invalidez o sobrevivencia	2	5	4	4	3	8	4	6	3	3	4	46	6.64
DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA													
No apoyar la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura									1			1	0.14
DERECHO AL DESARROLLO													
Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza						1			1		2	4	0.58
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera	1	3	3	5	2			4	2		3	23	3.32
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas	1		1			1	2			3		8	1.15
Contaminación sonora	1	1	2		3	1	1	1	3	3	2	18	2.60
Deforestación	1			1					1			3	0.43
Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos			2									2	0.29
Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas		2										2	0.29
Cortar, recolectar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora o fauna silvestre sin contar con licencia									1			1	0.14
TOTAL MENSUAL	47	73	78	71	44	48	35	52	80	94	71	693	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	13	13	15	8	9	7	8	1	28	28	12	142	20.49
Ordinario	34	60	63	63	35	41	27	51	52	66	59	551	79.51
TOTAL MENSUAL	47	73	78	71	44	48	35	52	80	94	71	693	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	23	29	29	27	15	18	11	13	41	48	34	288	41.68
Judicial	0	1	0	2	1	1	0	0	3	3	0	11	1.59
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	3	10	9	10	6	3	2	13	6	4	6	72	10.42
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	12	21	21	25	6	15	12	20	19	23	15	189	27.35
A-A no determinado	4	3	9	4	5	7	6	4	8	9	7	66	9.55
Ministerio Público	1	1	3	1	1	2	1		2	2	1	15	2.17
Centros educativos particulares	1	5	3	1	4	2	1	1	1	4	4	27	3.91
EEGSA	1	1	2	2	2		2		1		2	13	1.88
DEOCSA			1									1	0.14
DEORSA										1		1	0.14
TELGUA	1	1									1	3	0.43
Defensa Pública Penal	1											1	0.14
Bomberos Municipales		1										1	0.14
Iglesia Católica								1				1	0.14
PGN			1								1	2	0.29
TOTAL MENSUAL	47	73	78	72	40	48	35	52	81	94	71	691	100.00

a. Casos paradigmáticos

Expedientes EIO.GUA.330-2007/DESC, ACUMULADOS

**EIO.GUA.500-2007/DESC; ORD.GUA.116-2008/DESC; ORD.GUA.478-2008/DESC;
ORD.GUA.1296-2008/DESC; ORD.GUA.1705-2008/DESC; ORD.GUA.1806-2008/DESC;
ORD.GUA.2021-2008/DESC; ORD.GUA.2276-2008/DESC; EIO.GUA.2316-2008/DESC;
EIO.GUA.2494-2008/DESC; ORD.GUA.2691-2008/DESC; EIO.GUA.2761-2008/DESC;
ORD.GUA.2757-2008/DESC; EIO.GUA.2907-2008/DESC; ORD.GUA.2926-2008/DESC;
ORD.GUA.3276-2008/DESC; ORD.GUA.3391-2008/DESC; ORD.GUA.3579-2008/DESC;
ORD.GUA.3602-2008/DESC; ORD.GUA.3754-2008/DESC; ORD.GUA.3755-2008/DESC;
ORD.GUA.3858-2008/DESC; ORD.GUA.3967-2008/DESC; ORD.GUA.5925-2008/DESC;
ORD.GUA.5997-2008/DESC; ORD.GUA.6055-2008/DESC; EIO.GUA.6361-2008/DESC;
ORD.GUA.6392-2008/DESC; ORD.GUA.6403-2008/DESC; EIO.GUA.6895-2008/DESC;
EIO.GUA.651-2009/DESC; EIO.GUA.685-2009/DESC; EIO.GUA.1096-2009/DESC**

Se realizaron las siguientes diligencias: I. Se solicitaron informes circunstanciados a las autoridades siguientes: licenciado Alfredo Antonio Privado Medrano, ex Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; doctor Eusebio Del Cid Peralta, ex Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; doctor Celso David Cerezo Mulet, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; doctor Gustavo Adolfo Batres Cerezo, ex director del Hospital Roosevelt; doctor Guillermo Enrique Echeverría Peralta, director del Hospital Roosevelt; doctor Héctor Ricardo Fong Véliz, director del Hospital General San Juan de Dios. II. Personal de la institución del PDH realizó monitoreos durante el primer trimestre del presente año para verificar el estado de los diferentes servicios y unidades de los hospitales nacionales y las condiciones bajo las que se administran los servicios de salud a la población guatemalteca; asimismo, se supervisó la existencia de insumos, personal, equipo e infraestructura. A partir de lo anterior se determinó que la estructura física de los hospitales nacionales no ha sido modificada significativamente desde su fundación, en contraste con el aumento de la demanda actual, lo que genera deficiencias en la atención proporcionada a la población guatemalteca que solicita sus servicios, además de evidenciarse saturación en ellos. El equipo es insuficiente, gran parte presenta desperfectos y hace falta equipo específico. Los medicamentos no son proporcionados en la calidad y cantidad adecuada y existe desabastecimiento de insumos médicos. Los pacientes ambulatorios no reciben los medicamentos necesarios para sus tratamientos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no presta servicios clínicos a pacientes portadores del VIH y personas con SIDA ya que el área de Infectología de ambos hospitales no se encuentra bajo la administración de los mismos, sino de organizaciones no gubernamentales.

**Expedientes EIO.GUA.2008-2007/DESC, acumulados EIO.GUA.372-2007/DESC,
EIO.GUA.501-2007/DESC, EIO.GUA.232-2008/DESC, EIO.GUA.731-2008/DESC,
EIO.GUA.3342-2008/DESCM EIO.GUA.6753-2008/DESC**

Se realizaron las siguientes diligencias: I. Se solicitaron informes circunstanciados al doctor José Carlos García Macal, ex Ministro de Economía; licenciado Luis Oscar Estrada, ex Ministro de Economía; licenciado Rómulo Alfredo Caballeros Otero, ex Ministro de Economía; licenciada Silvia Escobar de Padilla, ex directora de Atención y Asistencia al Consumidor; doctor Eusebio del Cid Peralta, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; ingeniero Raúl Robles, ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; ingeniero Julio Recinos Salas, ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; doctor Juan Rodolfo Aguilar León, Secretario de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República. II. Se realizó un monitoreo en los mercados Central, Colón, Sur II y La Parroquia, y en los hospitales nacionales para verificar los estándares de atención a niños con desnutrición y establecer la procedencia de los mismos, así como investigación en panaderías y molinos para harina de trigo, verificando el uso de bromato de potasio de acuerdo con el Reglamento Técnico Centroamericano. Las diferentes autoridades del Ministerio de Economía (MINECO), a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), argumentaron no tener responsabilidad en relación con el aumento de los precios de la canasta básica, y refirieron los monitoreos realizados en supermercados, mercados y tiendas de barrio, presentando denuncias ante el MP por el delito de especulación cometido por vendedores, aunque la cantidad de negocios

monitoreados no representa una muestra significativa. Por lo anterior, personal de la PDH se constituyó en los referidos mercados, estableciéndose que los precios de los productos de la canasta básica están sujetos a factores como el cambio climático, el precio del combustible y otros, lo que influye en esta situación, sin que las autoridades realicen acciones que tiendan a proteger la economía familiar. En cuanto a la calidad de los alimentos, el MSPAS y el MINECO, a través de la DIACO, son responsables de su verificación por medio de procesos establecidos. El MSPAS informó que, como medida de acción en respuesta a la denuncia relacionada con el uso excesivo de bromato de potasio en la harina de trigo, el Departamento de Regulación y Control de Alimentos agregó a sus normativas la validación del análisis del contenido de bromato de potasio en las harinas de trigo, por lo que el 11 de marzo personal de esta institución se constituyó en el Laboratorio Nacional de Salud del MSPAS para verificar si se han efectuado dichos análisis, informando el personal del referido laboratorio que sí se han realizado; sin embargo, no pudieron aportar información oral ni documentación. Autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informaron que el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional entregó raciones alimenticias familiares a población vulnerable y de leche fortalecida con micronutrientes en escuelas públicas de nivel preprimario y primario, pero a la fecha no hay un informe claro y preciso que incluya un listado de las familias beneficiadas. Además, personal de la institución del PDH tiene conocimiento de que el referido vaso de leche, en la actualidad, no se proporciona a los estudiantes.

**Expediente EIO.GUA. 279-2008/DESC, ACUMULADOS ORD.GUA.476-2008/DESC;
ORD.GUA.6381-2009/DESC**

Se realizaron las siguientes diligencias: I. Se solicitaron informes circunstanciados al doctor Eusebio del Cid Peralta, ex Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; doctor Celso Cerezo Mulet, ex Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; licenciada Ana Francisca Ordóñez de Molina, ex Ministra de Educación; licenciado Edgar Rodríguez, Ministro de Trabajo y Previsión Social; doctor Ludwin Werner Ovalle Cabrera, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; y licenciada Mariel Castro Méndez, directora del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ITS/VIH/SIDA. II. Se realizaron inspecciones en hospitales regionales de Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Escuintla, Quetzaltenango, Petén, Izabal, Zacapa, y en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios de Guatemala. A partir de lo anterior se estableció que las unidades para la atención de las personas (personas adultas y menores de edad) que viven con VIH y SIDA no cuentan con los insumos básicos para brindar una atención integral (antirretrovirales necesarios, pruebas de carga viral plasmática y recuento de linfocitos CD4), suficiente personal médico, protocolos de atención integral, ni acciones orientadas al tratamiento de la población infantil, entre otros. Por ello se interpuso acción de amparo, el cual se declaró con lugar, en contra del MSPAS.

Expediente ORD.GUA.1385-2009/DESC

La denunciante llevó a su hija a la emergencia del Hospital Roosevelt, por presentar un problema estomacal, siendo atendida por el médico jefe de grupo, dos residentes y un estudiante de Medicina. Le aplicaron ranitidina y solución árnica, sin estudio ni examen previo. En horas de la madrugada la menor sintió adormecimiento en diferentes partes del cuerpo y perdió el conocimiento; los médicos intentaron resucitarla pero falleció. Consta en autos que los médicos entrevistados coinciden en indicar que la paciente tuvo complicaciones en la frecuencia cardíaca, presentando taquicardia, sin embargo, los mismos no indicaron de manera concreta la causa de la muerte, y debido a la falta de certeza en relación con los motivos por los cuales la paciente presentó la sintomatología indicada, se ordenó practicar una necropsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Como parte de la investigación, delegados de la institución del PDH se constituyeron en la morgue del INACIF para obtener mayor información, verificando que en los registros del referido instituto figura como principal motivo asfixia por estrangulamiento, aunque los médicos tratantes manifestaron no haber observado ningún tipo de agresión física. El deceso de la menor está siendo conocido e investigado por el MP en la Agencia Dos de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas. También se solicitó informe circunstanciado al director general del Hospital Roosevelt y a la directora del INACIF; se entrevistó al director de Servicios Técnicos de Apoyo del Hospital Roosevelt y a

médicos que atendieron a la menor; y se analizaron los documentos, actuaciones, informe de la necropsia y demás documentos que obran en autos.

b. Expedientes en los que se interpuso acción de amparo

Expediente ORD.GUA.4136-2009/DESC
Descripción del caso: en el IGSS no le proporcionan el medicamento Bevacizumab a la señora Ligia Karina Urrutia Sánchez.

Expediente ORD.GUA.4793-2009/DESC
Descripción del caso: en el IGSS no le proporcionan el medicamento Everolimus a la señora Ana Patricia Guzmán Méndez.

Expediente ORD.GUA.1972-2009/DESC
Descripción del caso: en el IGSS no le proporcionan el medicamento Nexavar al señor Francisco Arturo Hurtado Rosales.

Expediente EIO.GUA. 279-2008/DESC, ACUMULADOS ORD.GUA.476-2008/DESC, ORD.GUA.6381-2009/DESC
Descripción del caso: se interpuso acción constitucional de amparo, otorgado de forma provisional por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil constituido en Tribunal de Amparo, ordenando al MPSAS propiciar y mantener periódica y constantemente el acceso y abastecimiento a pruebas de carga viral plasmática, así como los medicamentos y tratamientos para enfermedades oportunistas derivadas del VIH y SIDA. Además, se ha sensibilizado a autoridades y a víctimas de esta enfermedad.

c. Funcionarios fiscalizados

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.GUA.4029-2009/DESC	Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5031-2009/DESC	Alfredo Guzmán	Gerente	EMPAGUA
ORD.GUA.5919-2009/DESC		Director	Asuntos Internos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
ORD.GUA.5656-2009/DESC	Jose Amilcar Velasquez Zarate	Fiscal General	Ministerio Público
ORD.GUA.5079-2009/DESC	Alfredo Guzmán	Gerente	EMPAGUA
ORD.GUA.2447-2009/DESC	Alvaro Arzú Irigoyen	Alcalde	Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.2829-2009/DESC	Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.2936-2009/DESC	Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.4903-2009/DESC	Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.GUA.2692-2009/DESC	Comisaria Marlene Raquel Blanco	Ex directora	Policía Nacional Civil
ORD.GUA.6821-2009/DESC	Gerardo Paz	Director	Abastos de la Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.5953-2009/DESC		Gerente	Unión FENOSA
EIO.GUA.5766-2009/DESC	Erick Pocasangre	Gobernador	Gobernador Departamental
EIO.GUA.5821-2009/DESC	Erick Pocasangre	Gobernador	Gobernador Departamental
ORD.GUA.4869-2009/DESC	Gerardo Paz	Jefe	Abastos de la Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.6871-2009/DESC	Howard Yang Luke	Director	EMETRA
EIO.GUA.4788-2009/DESC	Dr. Luis Alberto Ferraté	Ministro	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.GUA.424-2009/DESC	Jorge Galicia Guillen	Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.GUA.3207-2009/DESC	Ana Ordóñez De Molina	Ex Ministra	Dirección Departamental de Educación

Funcionarios públicos declarados violadores de derechos humanos

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.GUA.279-2008/DESC	Dr. Eusebio del Cid Peralta Dr. Celso Cerezo Mulet Lic. Maribel Castro Méndez	Ex Ministros y Directora	MSPAS Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
ORD.GUA.476-2008/DESC	Dr. Eusebio del Cid Peralta Dr. Celso Cerezo Mulet Lic. Maribel Castro Méndez	Ex Ministros y Directora	MSPAS Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA
ORD.GUA.6381-2009/DESC	Dr. Eusebio del Cid Peralta Dr. Celso Cerezo Mulet Lic. Maribel Castro Méndez	Ex Ministros y Directora	MSPAS Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA
EIO.GUA.3342-2008/DESC	Lic. Rómulo Alfredo Caballeros Otero	Ex Ministro	Ministerio de Economía
EIO.GUA.6753-2008/DESC	Lic. Rómulo Alfredo Caballeros Otero	Ex Ministro	Ministerio de Economía
EIO.GUA.731-2008/DESC	Lic. Rómulo Alfredo Caballeros Otero	Ex Ministro	Ministerio de Economía
EIO.GUA.232-2008/DESC	Lic. Rómulo Alfredo Caballeros Otero	Ex Ministro	Ministerio de Economía
EIO.GUA.501-2008/DESC	Lic. Rómulo Alfredo Caballeros Otero	Ex Ministro	Ministerio de Economía
EIO.GUA.372-2008/DESC	Lic. Rómulo Alfredo Caballeros Otero	Ex Ministro	Ministerio de Economía

EIO.GUA.330-2007/DESC EIO.GUA.500-2007/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.116-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.478-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.1296-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.1705/D ESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.1806-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.2021-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.2276-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
EIO.GUA.2316-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
EIO.GUA.2494-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.2691-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
EIO.GUA.2761-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.2757-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
EIO.GUA.2907-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.2926-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3276-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3391-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3579-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3602-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3754-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3755-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3858-2008/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS

ORD.GUA.3967-2008/DESC ORD.GUA.5925-2008/DESC ORD.GUA.5997-2008/DESC ORD.GUA.6055-2008/DESC EIO.GUA.6361-2008/DESC ORD.GUA.6392-2008/DESC ORD.GUA.6403-2008/DESC EIO.GUA.6895-2008/DESC EIO.GUA.651-2009/DESC EIO.GUA.685-2009/DESC EIO.GUA.1096-2009/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
--	------------------------------	-------------	-------

d. Resoluciones emitidas

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
Medidas urgentes	104
Con suspensión por conocer un órgano jurisdiccional	79
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	61
Con suspensión por desistimiento	0
Acumulación de expedientes	29
Resoluciones finales	
De no violación	428
De violación	62
Comportamiento administrativo lesivo	2
Suspensión	80
Recomendación	2
TOTAL	847

2.3 Derechos específicos

Siendo las personas de la tercera edad una de las poblaciones más vulnerables en nuestra sociedad, durante 2009 tuvo mayor incidencia en materia de denuncias, siendo las entidades más señaladas el IGSS y el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por falta de cobertura, de medicamentos y de atención médica. Las personas con discapacidad han enfrentado denegación de coberturas por invalidez y maltrato. Respecto a la población portadora de VIH-SIDA, se ha dado trámite a varias denuncias por denegación del acceso a la salud.

En el tema de niñez se han tramitado, principalmente, denuncias por violencia psicológica y física en establecimientos educativos públicos y privados; y la salud ha sido otro de los derechos vulnerados.

Es de suma preocupación el incremento de denuncias en contra de entidades estatales que han retirado a madres trabajadoras de sus puestos justamente aduciendo su estado; también se han generado denuncias en contra de autoridades de varias instituciones por acoso, tanto sexual como laboral.

En cuanto a la población reclusa se han tramitado varias denuncias, por falta de medicamento en los centros de detención, falta de asistencia médica, condiciones precarias de habitabilidad, abuso de poder durante las requisas, incluso trasladados realizados sin orden de juez competente.

En materia de derechos de la población migrante, se tramitaron denuncias interpuestas en contra del Estado de Guatemala por no garantizar la seguridad y la integridad de quienes fueron retenidos por ingresar en el país de manera ilegal; así también se cursaron a la Cancillería denuncias interpuestas por connacionales en contra de otros Estados, por la violación a sus derechos humanos.

Las denuncias recibidas por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas se refieren a falta de seguridad, no consideración ni inclusión de sus opiniones y prioridades en los procesos de desarrollo económico, social y cultural.

Se conoció además, una denuncia interpuesta por discriminación por parte de una persona con orientación sexual diferente, a quien no le permitieron el ingreso a un centro de detención, en calidad de visitante, en tanto que vestía, según la autoridad, con ropa inapropiada.

Expedientes EIO.GUA.694-2009/DE, EIO.GUA.1387-2009/DE, EIO.GUA.742-2009/DE, EIO.GUA.916-2009/DE, PREV.EIO.GUA.2508-2009/US

Los denunciantes manifestaron su inconformidad por la violación del derecho humano a la dignidad, seguridad, integridad, educación y protección de la que fueron víctimas niños, niñas y adolescentes atendidos en casas hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), y beneficiarios de programas que impulsa esa entidad, al no renovar contratos laborales a trabajadores de estas casas, generando que el personal que continuaba trabajando no cubriera por completo las necesidades de dicha población infantil. Con la investigación realizada se estableció que en los diferentes hogares de Protección y Abrigo, Centros de Atención Integral y programas a cargo de la SBS laboraban personas contratadas a través del Comité Central de Acción Social, y finalizados sus contratos no fueron renovados, motivo por el cual trabajaron con menos personal del requerido. Se interpuso acción de amparo a favor de la niñez y adolescencia afectada ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, esperando optimizar el servicio, y se encuentra en proceso la creación de nuevas plazas, ya autorizadas por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Expediente ORD. GUA. 2464-2009/DE

Indica la denunciante que la víctima fue ingresada de emergencia al Hospital General San Juan de Dios en varias ocasiones, tras lo cual fue dada de alta con receta de algunos medicamentos, ya que según criterio médico no tenía nada serio. Finalmente fue llevada al Hospital Roosevelt, diagnosticándole anemia severa, insuficiencia renal y falta de sodio. Como parte de la investigación se requirió informe circunstanciado al doctor Héctor Ricardo Fong Véliz, director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios, se solicitó la colaboración del doctor Guillermo Enrique Echeverría Peralta, director ejecutivo del Hospital Roosevelt, y se contó con el apoyo de la Unidad de Supervisión de Servicios de Salud de esta institución, la que realizó una investigación en el San Juan de Dios. A partir de la información recavada, se declaró la violación del derecho humano a la salud señalando la responsabilidad institucional del doctor Fong Véliz, y se le exigió efectuar una investigación exhaustiva a los facultativos que atendieron a la afectada, así como la sanción administrativa por la negligencia en que se incurrió.

Expediente ORD. GUA.2927-2009/DE, acumulados ORD.GUA.3546-2009/DE, ORD.GUA. 3623-2009/DE

Manifestaron las denunciantes que laboraron para el Ministerio de la Defensa y que fueron despedidas por encontrarse en estado de gravidez. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Ministro de la Defensa Nacional; y la institución del PDH ha brindado orientación y acompañamiento a las denunciantes, a efecto de iniciar los trámites legales que correspondan en cada uno de los casos.

Expediente ORD.GUA.1019-2007/DE

Manifestó el denunciante que el IGSS le negó el derecho a ser acogido al régimen de IVS por falta de cuotas, pese a que laboró por muchos años para el Comisariato del Ejército, que tras clausurar transfirió sus funciones y trabajadores a la entidad denominada Industria Militar. El denunciante padece cáncer de colon, razón por la cual solicitó atención médica especializada urgente. Se solicitó informe circunstanciado al gerente del IGSS, licenciado Alfredo Rolando del Cid Pinillos, al ex jefe del departamento de IVS y al subjefe de Industria Militar, coronel Luis Fernando Reyes. Además, se interpuso una acción de amparo a favor del denunciante, por medio de la cual se logró que el Seguro Social brindara la atención médica urgente que necesitaba, en tanto se tramitaba del expediente administrativo, declarándose la violación del derecho humano a la seguridad y a la previsión social, la salud, la vida y la integridad del denunciante.

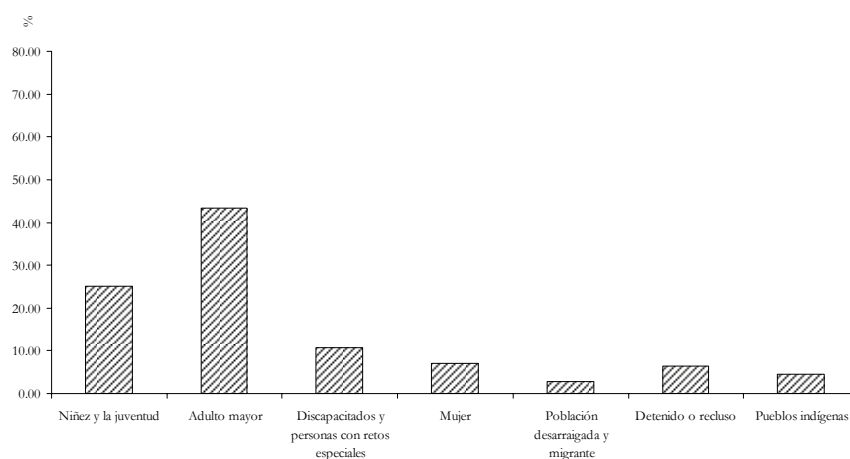
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS
Enero a noviembre 2009

Derechos específicos	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil		3	4	4	8	2	1	4	9	12	7	54	13.53
Falta de acceso a la salud			1		1	2		2	1	3		10	2.51
La separación de los niños, niñas y jóvenes de sus familias, salvo circunstancias especiales definidas en la Ley							1	1			3	5	1.25
La adopción ilegal				1								1	0.25
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven	1	1	3						1		1	7	1.75
Abuso físico o mental	1											1	0.25
Abuso sexual			1							1		2	0.50
Descuidos o tratos negligentes		1		1								2	0.50
Prostitución infantil	1											1	0.25
Acoso sexual								1				1	0.25
Falta de atención médica adecuada		1								2	3	6	1.50
Falta de acceso a la educación		1	2	1	1					4		9	2.26
Muerte								1				1	0.25
ADULTO MAYOR												0	
Discriminación cultural, social, económica, política		2	2	1	2							7	1.75
Violencia física o psicológica					1						2	3	0.75
Exclusión								1	2	1		4	1.00
Maltrato		1				1		2	2	2	3	11	2.76
Falta de acceso a servicios de salud	2		2	1	4			2	3	10	1	25	6.27
Falta de acceso a la seguridad social	4	8	14	4	11	15	11	13	13	13	14	120	30.08
Falta de acceso a la justicia										2		2	0.50
Derecho a la libre locomoción			1									1	0.25



DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES													
Discriminación cultural, social, económica, política					1						2	3	0.75
Violencia física o psicológica									1	1	1	2	0.50
Maltrato	2		1		1		1	1	2		1	9	2.26
Falta de acceso a servicios de salud			2					1			4	7	1.75
Falta de acceso a servicios educativos		1										1	0.25
Falta de acceso a la seguridad social	1		5		5	4	3	2			1	21	5.26
MUJER													
Discriminación cultural, social, económica, política					1	1	1				1	4	1.00
Violencia física o psicológica									1	1	1	3	0.75
Maltrato					2				1			3	0.75
Acoso sexual		1	1	3				1		1	2	9	2.26
Acoso laboral hacia mujeres embarazadas						1		3	2			6	1.50
Falta de acceso a la salud			2									2	0.50
Falta de acceso a la seguridad social		1										1	0.25
POBLACIÓN DESARRAIGADA Y MIGRANTE													
Repatriación involuntaria	1											1	0.25
Expulsión			2									2	0.50
Violencia física o psicológica			2									2	0.50
Falta de acceso a los servicios de salud										1		1	0.25
Abuso de autoridad			2						1			3	0.75
Falta de acceso a la justicia		1	1									2	0.50
DETENIDO O RECLUSO													
Acciones que atentan contra su dignidad	1	1		1	1							4	1.00
Acciones que atentan contra su integridad											5	5	1.25
Maltrato			2							1		3	0.75
Traslados inadecuados o peligrosos	1		1	1						1		4	1.00
No permitir el acceso a beneficios penitenciarios				1								1	0.25
Acciones que atentan contra la salud				2	2			1	1	1		7	1.75
Falta de acceso a la justicia			1	1								2	0.50
PUEBLOS INDÍGENAS													
Discriminación racial						1					2	3	0.75
Falta de seguridad					1							1	0.25
Ejecución de proyectos sin consulta y sin evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente							1					1	0.25
No tomar en consideración el derecho indígena										1		1	0.25
Falta de acceso a la justicia		1										1	0.25

POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO													
Trato desigual y excluyente hacia familiares de personas desaparecidas	1											1	0.25
Falta de resarcimiento											1	1	0.25
Falta de atención a demandas de las comunidades afectadas por el Conflicto Armado Interno		1	2	1								4	1.00
POBLACIÓN CON VIH-SIDA													
Falta de acceso a la salud				1			1	1				3	0.75
Denegación del derecho al trabajo por ser portador de VIH-SIDA											1	1	0.25
POBLACIÓN CON ORIENTACIÓN SEXUAL DIFERENTE													
Discriminación y exclusión	1											1	0.25
TOTAL MENSUAL	17	25	54	24	42	27	20	37	39	58	56	399	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre de 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	9	3	13	7	7	4	1	4	4	7	46	105	26.32
Ordinario	8	22	41	17	35	23	19	33	35	51	10	294	73.68
TOTAL MENSUAL	17	25	54	24	42	27	20	37	39	58	56	399	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADAS
Enero a noviembre de 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	10	14	31	15	31	12	6	22	24	20	29	214	54.31
Judicial		1	1	3				1		2	2	10	2.54
Legislativo											1	1	0.25
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades		1	2			1			2	2	1	9	2.28
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	7	8	15	4	9	14	12	13	9	21	16	128	32.49
A-A no determinado			3	2	2		1	1			1	10	2.54
Ministerio Público			1									1	0.25
Centros educativos particulares			1				1		3	7	3	15	3.81
EEGSA		1									2	3	0.76
BANRURAL										1		1	0.25
Programa Nacional de Resarcimiento											1	1	0.25
Federación Nacional de Atletismo									1			1	0.25
TOTAL MENSUAL	17	25	54	24	42	27	20	37	39	53	56	394	100.00

a. Casos paradigmáticos

Expediente ORD.GUA.029-2008/DE, acumulado PREV.ORD.GUA.2566-2009/US

Se inició investigación por violación del derecho humano a la salud y a la seguridad de los vecinos residentes en los alrededores de la Planta Carbo Generadora de Ingeniería y Montaje, S. A., La Libertad, por el humo negro, partículas de carbón y ruido excesivo que expelle dicha planta. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, doctor Luis Alberto Ferraté Felice; al ex Ministro del MSPAS, doctor Celso David Cerezo Mulet; al alcalde de Villa Nueva en funciones, José Domingo Sical; a la auxiliar fiscal de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público, licenciada Michelle Melisa Martínez, y al gerente de la planta; y personal de la institución se constituyó en la Municipalidad de Villa Nueva, en los alrededores de la empresa, en el residencial afectado, el Mayan Golf Club, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del MP y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Se declaró violación del derecho humano a la salud, a la seguridad y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado de los residentes en cuestión, declarándose un comportamiento administrativo lesivo por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de la Municipalidad de Villa Nueva.

Expediente ORD.GUA.5444-2009/DE

El hijo menor de la denunciante fue objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de sus compañeros de clase del Colegio Lehnsen, ubicado en Mixco, Guatemala, quienes se burlaron de él y lo insultaron por ser de tez morena, llegando al extremo de ser golpeado y amenazado por un alumno mayor que él, situación que lo afectó de forma drástica. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al director Departamental de Educación, Área Occidente, licenciado Salvador Pacach Ramírez, a la directora general del Colegio Lehnsen, Silvia Margarita Barrios Mérida de Escobar, a la directora del ciclo básico, Miriam Patricia Elizabeth Ortiz Morales de Cabrera, y al director ejecutivo del Hospital Roosevelt; se entrevistó a la madre del adolescente agraviado y a éste; y se constituyó en la Fiscalía de Sección Adjunta de Menores del MP y en el Colegio Lehnsen. El caso se sometió a consideración del PDH para declarar violación del derecho humano a

la dignidad, seguridad e integridad, ante la falta de un efectivo control sobre los alumnos, y con el fin de evitar incidentes relacionados con la discriminación, abuso, acoso y agresión.

b. Funcionarios fiscalizados

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
ORD.GUA.1184-2008/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6901-2008/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA.6901-2008/DE	Nelson Mesías	Director	Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II
ORD.GUA.6901-2008/DE	Lic. Oscar López Bartlett	Subsecretario	Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
ORD.GUA.39-2009/DE	Lic. Edgar Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ORD.GUA.39-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.179-2009/DE	Lic. Roger Haroldo Rodas Melgar	Ministro	Ministerio de Relaciones Exteriores
ORD.GUA.179-2009/DE	Lic. Oscar Padilla Lam	Director	Dirección de Asuntos Consulares
ORD.GUA.179-2009/DE	Herbert Estuardo Meneses Coronado	Embajador	Embajada de Guatemala en la República de Cuba
ORD.GUA.169-2009/DE	Héctor Ricardo Fong Véliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
ORD.GUA.576-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD. GUA. 750-2009/DE	Lic. Jorge Galicia Guillén	Director	Dirección Departamental de Educación
ORD. GUA. 750-2009/DE	Miriam Pompilia Vides de Balsells	Directora	Escuela Nacional para Varones José Antonio Liendo y Goicoechea
EIO. GUA. 900-2009/DE	Julio René Conde Trujillo	Director	Hogar Cristiano para Ancianos Bethel
EIO. GUA. 1169-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO. GUA. 1169-2009/DE	Dra. Ana Leticia Guzmán Santiago	Directora	Centro de Atención Médico Integral para Pensionados
ORD. GUA. 615-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD. GUA. 948-2009/DE	Luis Alberto Gutiérrez Alemán	Director	Dirección de Catastro y Administración del Impuesto Único sobre Inmuebles de la Municipalidad de Mixco
ORD.GUA.1128-2009/DE	Licda. Ana Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.GUA.1153-2009/DE	Lic. Byron Renato Durán Menéndez	Interventor	Dirección General de Migración
ORD.GUA.1153-2009/DE	José Antonio Zaldaño Hernández	Jefe	División de Operativos de la Dirección General de Migración
ORD.GUA.1153-2009/DE	Bryan Fernando Mérida Donis	Trabajador	Albergue de la Dirección General de Migración
ORD.GUA.6506-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO. GUA. 1405-2009/DE	Lic. Miguel Von Hoegen	Presidente	Junta Directiva de la Asociación Comité Prociegos y Sordos de Guatemala
EIO. GUA. 1287-2009/DE	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ex Ministro	MSPAS
EIO. GUA. 1287-2009/DE	Dr. Moisés Arturo Soto Pérez	Director	Hospital Nacional de Salud Mental
ORD.GUA.1734-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.1734-2009/DE	Dr. Arturo Ernesto García Aquino	Director Médico	Hospital General de Accidentes, IGSS
ORD.GUA.1796-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS

ORD.GUA.1775-2009/DE	Lic. César Augusto Dávila Gómez	Presidente	Comisión Nacional de Resarcimiento
ORD.GUA. 2108-2009/DE	Arq. Howard Yang Luke	Director General	Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala
EIO. GUA. 1709-2009/DE	Comisaria Raquel Blanco Lapola	Directora General	PNC
EIO. GUA. 1709-2009/DE	Comisario Jorge Ernesto Aldana Gálvez	Jefe a.i.	Oficina de Responsabilidad Profesional Inspectoría General, PNC
EIO. GUA. 1709-2009/DE	Bayron Baldomero de León Navarro	Oficial III	PNC
EIO. GUA. 153-2009/DE	Orlando Blanco	Secretario	Secretaría de la Paz
EIO. GUA. 153-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
EIO. GUA. 2330-2009/DE	Lic. Giulio Antonio Talamonti	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
EIO. GUA. 2330-2009/DE	Licda. Elizabeth Callejas Candelaurd	Trabajadora Social	Juzgado Primero de Ejecución Penal
ORD.GUA. 2296-2009/DE	Dr. Héctor Ricardo Fong Veliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
ORD.GUA.2634-2009/DE	Lic. Jorge Galicia Guillén	Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.GUA.2634-2009/DE	Lic. Hugo Valdemar Rivas Morales	Director	Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, jornada vespertina
ORD.GUA.2805-2009/DE	General de División Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional
ORD.GUA.2805-2009/DE	Coronel de Artillería Gustavo Adolfo Puga Baldizón	Gerente	Instituto de Previsión Militar
ORD.GUA.3217-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO. GUA. 3220-2009/DE	Julio Daniel de la Rosa Hernández	Piloto de ambulancias	Hospital General de Enfermedades, IGSS
EIO. GUA. 3220-2009/DE	Dr. Edwin L. Cambranes Morales	Director Médico	Hospital General de Enfermedades, IGSS
ORD.GUA.3860-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.4549-2009/DE	Lic. Edgar Alfredo Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ORD.GUA.4549-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
EIO. GUA. 4864-2009/DE	José Paulino Boch Cojón	Director	Academia de la PNC
EIO. GUA. 4864-2009/DE	Baltazar Gómez Barrios	Director	PNC
ORD.GUA.5679-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA.5679-2009/DE	Licda. Aída Reyes de Gramajo	Directora	Jardín Infantil Pasito a Pasito
ORD.GUA.5399-2009/DE	Lic. Israel Enrique Solórzano Rodas	Presidente	Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado Sincronizado
ORD.GUA.5212-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.5038-2009/DE	Licda. Evelyn del Rosario Segura	Directora	Jardín Infantil de la Policía Nacional Civil
ORD.GUA.6745-2009/DE	Dr. Hector Ricardo Fong Véliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
ORD.GUA.6745-2009/DE	Dr. Guillermo Enrique Echeverría Peralta	Director Ejecutivo	Hospital Roosevelt
ORD.GUA.4268-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.2993-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.4846-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.4937-2009/DE	General de División Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional

ORD.GUA.6506-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6724-2009/DE	Lic. Eddy Morales Mazariegos	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.6730-2009/DE	Lic. Eddy Morales Mazariegos	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.6742-2009/DE	Lic. Eddy Morales Mazariegos	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.6809-2009/DE	Lic. Eddy Morales Mazariegos	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.6811-2009/DE	Lic. Eddy Morales Mazariegos	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.3904-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5809-2009/DE	Licda.. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.4639-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6270-2009/DE	Robert Mario Rogers Clark	Director Administrativo	Colegio Evelyn Rogers
ORD.GUA.6270-2009/DE	Sylvia Ruest	Coordinadora de preprimaria	Colegio Evelyn Rogers
ORD.GUA.4367-2009/DE	Licda. Sonia Lisette García	Directora General	Instituto de Estudios Especializados en Ciencias de la Computación
ORD.GUA.4367-2009/DE	Elda Nidia Estrada Salazar	Secretaria	Instituto de Estudios Especializados en Ciencias de la Computación
ORD.GUA.3631-2009/DE	Dr. Alfredo B. Flores	Presidente	Federación Guatemalteca de Ciclismo
ORD.GUA.3631-2009/DE	Lic. Sergio Danilo Castro Basteguieta	Presidente a.i.	Federación Deportiva Autónoma de Guatemala
ORD.GUA.7103-2009/DE	Licda. Ana Isabel Guerra Jordán	Juez de Paz	Juzgado de Paz de San José Pinula
ORD.GUA.6188-2009/DE	Dr. Guillermo Enrique Echeverría Peralta	Director Ejecutivo	Hospital Roosevelt
ORD.GUA.172-2009/DE	Lic. Rudy Baldemar Villeda	Superintendente	Superintendencia de Administración Tributaria
EIO.GUA.6953-2008/DE	Edgar Iván Pinto Roca	Director	Centro de Detención Preventiva para Hombres zona 18
ORD.GUA 6840-2008/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3873-2008DE	Edgar Gabriel Grajeda Orantes	Administrador Ejecutivo	Universidad de San Carlos de Guatemala
ORD.GUA.3873-2008DE	Lic. Estuardo Gálvez	Rector	Universidad de San Carlos de Guatemala
ORD.GUA. 380-2009/DE	Lic. Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 548-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.640-2009/DE	Lic. Baudilio Portillo Merlos	Procurador General	Procuraduría General de la Nación
ORD.GUA. 579-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA. 579-2009/DE	Sor María Isabel Velásquez	Directora	Escuela Experimental con Orientación Ocupacional Villa de los Niños
ORD.GUA. 892-2009/DE	Lic. Rodrigo Walter Mérida	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación de Guatemala del Área Oriente
ORD.GUA. 892-2009/DE	Sandra de Trujillo	Directora	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 131 Mario Méndez Montenegro, jornada vespertina
ORD.GUA. 875-2009/DE	Edy Morales	Director	Sistema Penitenciario
ORD.GUA. 875-2009/DE	César Augusto Sánchez	Director	Centro de Detención Preventiva para Hombres zona 18
ORD.GUA. 874-2009/DE	Lic. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA. 421-2009/DE	Lic. Roger Haroldo Rodas	Ministro	Ministerio de Relaciones Exteriores
ORD.GUA 698-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS



ORD.GUA. 572-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo Gonzalez	Secretaría	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA. 1034-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD. GUA. 1309-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA 887-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD. GUA. 982-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 1398-2009/DE	Antonio Escobedo Sanabria	Director General Adjunto	Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores
ORD. GUA. 1703-2009/DE	Lic. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA. 2187-2009/DE	Dora García Valenzuela	Subdirectora	Instituto Mixto Miguel de Cervantes
ORD.GUA 1401-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA. 2438-2009/DE	Lic. José Francisco Gallegos	Subdirector	Colegio Salesiano Don Bosco
ORD.GUA.1654-2009/DE	José Abraham Castillo Ramírez	Profesor de Ciencias Naturales	Instituto para Señoritas Belén
	German Rossberth Divas Pivaral	Profesor de Educación Musical	Instituto para Señoritas Belén
ORD.GUA.2509-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.2172-2009/DE	Lic. Giulio Antonio Talamonti	Director	Sistema Penitenciario
EIO.GUA.1878-2009/DE	Marco Antonio Quinteros	Director Administrativo	Colegio Católico para Varones San Pablo
ORD.GUA 2515-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.2792-2008/DE	Sara Lizberh Colindres Milián	Directora	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 86 Elena Guerra de Sandoval
	Lic. Salvador Pacach Ramírez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente
ORD.GUA. 2927-2009/DE	General de División Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional
ORD.GUA 3546-2009/DE	Coronel de Infantería Benjamín Casiano Sánchez Laparra	Comandante	Brigada Policía Militar Guardia de Honor del Ministerio de la Defensa Nacional
y EXP. ORD.GUA 3623-2009/DE	Coronel de Infantería José Chay	Comandante	Brigada Militar Mariscal Zavala del Ministerio de la Defensa Nacional
ORD.GUA.3008-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.2997-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
	Dra. Ana Beatriz Vidal	Doctora Clínica 21	Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP)
ORD.GUA.3578-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 3258-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA. 3553-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA 5879-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA 3571-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA 3908-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3650-2009/DE	Licenciado Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA. 3558-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 4054-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor

ORD.GUA. 4611-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.4327-2009/DE	Irma Yolanda Del Valle	Directora	Colegio Mixto Fraternidad Infantil
ORD.GUA.4823-2008/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 5290-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA. 4308-2009/DE	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ministro	MSPAS
	Ing. Carlos Iván Meany Valerio	Ministro	Ministerio de Energía y Minas
	Dr. Luis Alberto Ferraté Felice	Ministro	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
	Lloyd Kenneth Jongezzon Morfin	Representante legal	Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas, Sociedad Anónima
	Carlos Leonel Moscoso Machorro	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental de Chiquimula
	Guillermo Antonio Guerra y Guerra	Alcalde Municipal	Municipalidad de Camotán, Chiquimula
	Ramón Díaz Gutiérrez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Jocotán, Chiquimula
ORD.GUA. 5067-2009	Licda. Silvia Palomo Gonzáles	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA. 5320-2009/DE	Lic. César Augusto Dávila Gómez	Presidente	Comisión Nacional de Resarcimiento
	Lic. Roger Haroldo Rodas	Ministro	Ministerio de Relaciones Exteriores
EIO.GUA.2595-2009/DE	Lic. Giulio Antonio Talamonti	Director	Sistema Penitenciario
	Dr. Moisés Soto	Director Ejecutivo	Hospital Nacional de Salud Mental
	Celso David Cerezo Mulet	Ministro	MSPAS
	Raúl Velásquez	Ministro	Ministerio de Gobernación
ORD.GUA.5085-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.5252-2009/DE	Sonia Montenegro	Directora	Escuela Oficial Mixta No. 606 El Aceituno
ORD.GUA.5567-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5391-2009/DE	Comisario General Baltazar Gomez Barrios	Director General	PNC
	Cruz Magaly Sian Sipaque	Subjefe	Estación 13.4 zona 15 de la PNC
	Jesús Marinel Castillo Salazar	Jefe	Estación 13 de la PNC
ORD.GUA.4740-2009/DE	General de División Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministro de la Defensa Nacional
	Coronel de Infantería Oscar Humberto Cordón	Jefe	Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala
ORD.GUA.5756-2009/DE	Dr. Gustavo Alberto González García	Jefe	Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos, MPSAS
ORD.GUA.5714-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.5993-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6244-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6234-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6383-2009/DE	Lic. Erick Alfonso Álvarez Mancilla	Presidente	Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
ORD.GUA. 5177-2009/DE	Jorge García	Director	Liceo Técnico Comercial Jornada Matutina
ORD.GUA. 6508-2009/DE	M.A Rodrigo Walter Mérida Alba	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente
ORD.GUA. 6539-2009/DE	Ana Isabel Tello Sáenz de López	Directora	Instituto Guillermo Putzeys Álvarez
ORD.GUA. 6198-2009/DE	Dr. Ludwig Ovalle	Ministro	MSPAS
	Dr. Guillermo Enrique Echeverría	Director Ejecutivo	Hospital Roosevelt, MSPAS

EIO.GUA.6380-2009/DE	Lic. Guillermo Andrés Castillo Ruiz	Ministro	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
	Lic. Juan José Carlos Juárez	Director	Dirección General de Aeronáutica Civil
	Lic. Raúl Arandi Ramírez	Interventor	Dirección General de Migración
EIO.GUA.117-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	Hospital Roosevelt
EIO.GUA.193-2009/DE	Dr. Marco Vinicio Arévalo Veras		Depto. Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud, MSPAS
ORD.GUA.83-2009/DE	Lic. César Augusto Dávila Gómez	Presidente	Comisión Nacional de Resarcimiento
	Licda. Sonia Yamina Fong Nakazawa	Directora Ejecutiva	Programa Nacional de Resarcimiento
ORD.GUA.252-2009/DE	Alvaro Arzú Irigoyen	Alcalde Municipal	Municipalidad de Guatemala
	Ing. Alfredo Guzmán	Gerente General	EMPAGUA, Municipalidad de Guatemala
EIO.GUA.116-2009/DE	Alvaro Arzú Irigoyen	Alcalde Municipal	Municipalidad de Guatemala
	Arq. Howard Yang Luke	Director General	EMETRA, Municipalidad de Guatemala
	Salvador Gándara	Alcalde Municipal	Municipalidad de Villa Nueva
ORD.GUA.601-2009/DE	Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Gobernación
	Com. Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora General	PNC
	Rember Larios	Subdirector General	PNC
	César Augusto Sánchez	Director	Centro de Detención Preventiva para Hombres zona 18
ORD.GUA.130-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.808-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA.1011-2009/DE	Dr. Hector Ricardo Fong Véliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
	Dra. Ana María de los Ángeles López	Coordinadora,	Pabellón de Pacientes Crónicos, Hospital Nacional de Salud Mental
ORD.GUA.738-2009/DE	Lic. César Augusto Dávila Gómez	Presidente	Comisión Nacional de Resarcimiento
EIO.GUA.1097-2009/DE	Lic. Roger Haroldo Rodas Melgar	Ministro	Ministerio de Relaciones Exteriores
ORD.GUA.1181-2009/DE	Lic. Amílcar Velásquez Zárate	Fiscal General y Jefe	Ministerio Público
		Director	Centro de Detención Preventiva para Hombres zona 18
ORD.GUA.877-2009/DE	Lic. Fancisco Alberto Góngora Pinelo	Director	Instituto Nacional Central para Varones, jornada matutina
EIO.GUA.742-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA.1394-2009/DE	Dr. Héctor Ricardo Fong Veliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
	Dr. Erwin Raúl Castañeda Pineda	Jefe	Departamento de Pediatría, Hospital General San Juan de Dios
EIO.GUA.916-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA.1235-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.991-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Galicia Guillén	Director	Departamental de Educación, área norte, Ministerio de Educación
	Licda. Matilde Escobar de Yonker	Directora	EOUV Cayetano Francos y Monroy, Ministerio de Educación
	Luigui Galdino Ovalle Salguero	Profesor	EOUV Cayetano Francos y Monroy, Ministerio de Educación
EIO.GUA.1387-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
EIO.GUA.1232-2009/DE	Lic. Porfirio Aldana	Director	Dirección Departamental de Educación, Área Sur, Ministerio de Educación

ORD.GUA.1379-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
EIO.GUA.1528-2009/DE	Lic. Salvador Pacach	Director	Dirección Departamental de Educación, Área Occidente, Ministerio de Educación
	Isabel Marroquín Bóleres de Ortiz	Directora	EOUM Gabriel Arriola Porres, Ministerio de Educación
ORD.GUA.2093-2009/DE	Alvaro Arzú Irigoyen	Alcalde Municipal	Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.2093-2009/DE	Ing. Alfredo Guzmán	Gerente General	EMPAGUA, Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.1713-2009/DE	Lic. Luis Fernando González Toscano	Juez Primero de Ejecución Penal	Organismo Judicial
ORD.GUA.2101-2009/DE, acumulado el	Com. Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora General	PNC
ORD.GUA.2674-2009/DE	Inspector Hugo Dionel Sic Sanic	Jefe	Subestación Terminal Buses de Oriente PNC
ORD.GUA.2066-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.1760-2009/DE	General de División Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional
ORD.GUA.2496-2009/DE	Lic. Giulio Antonino Talamonti	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.2091-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.2464-2009/DE	Dr. Héctor Ricardo Fong Veliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
EIO.GUA.2435-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
PREV.EIO.GUA.2508-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA.2791-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.2764-2009/DE	General de División Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional
		Director	Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala, Ministerio de la Defensa Nacional
ORD.GUA.2514-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
	Dra. Olga Urrutia Aldana	Subdirectora	Centro de Atención Médica Integral para Pensionados, IGSS
ORD.GUA.3177-2009/DE	Lic. Rubén Eliú Higueros	Presidente	Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial
	Lic. Milton Danilo Torres Caravantes	Presidente	Junta de Disciplina Judicial, Organismo Judicial
	Lic. Wilfrido Porras Escobar	Juez Segundo de Ejecución Penal	Organismo Judicial
ORD.GUA.3315-2009/DE	Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Gobernación
	Com. Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora General	PNC
	Subcom. Daniel Arturo Rivas Mérida	Jefe	División Especializada en Investigación Criminal, PNC
ORD.GUA.3237-2009/DE	Licda. Ana Laura Matute	Supervisora	Ministerio Público
	Licda. Silvia Noemí Pineda Chete	Auxiliar Fiscal	Ministerio Público
ORD.GUA.2940-2009/DE	Lic. Edgar Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
	Lic. Antonio Mosquera	Director de Previsión Social	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor

ORD.GUA.3421-2009/DE	Lic. Edgar Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
EIO.GUA.3572-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3940-2009/DE	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.3823-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3361-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 3921-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3902-2009/DE	Lic. Baudilio Portillo Merlos	Procurador	Procuraduría General de la Nación
	Lic. Ricardo Gómez Damman	Juez Tercero de la Niñez y Adolescencia	Organismo Judicial
	Dr. Héctor Ricardo Fong Veliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
ORD.GUA.3526-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3961-2009/DE	Lic. Edgar Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.3815-2009/DE	Josefina Palacios de Pur	Directora	Instituto Normal para Señoritas Belén, Ministerio de Educación
ORD.GUA.4331-2009/DE	Lic. Edgar Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
	Lic. Antonio Mosquera	Director de Previsión Social	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
	Licda. Ana María Escobar	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.4483-2009/DE	Yolanda González de González	Directora	EOUM Andrés Gilberto Cuxil Toc, Ministerio de Educación
	Consuelo Floridalma Hernández Vásquez	Maestra	EOUM Andrés Gilberto Cuxil Toc, Ministerio de Educación
ORD.GUA.4369-2009/DE		Presidente	Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial
		Presidente	Junta de Disciplina Judicial Organismo Judicial
	Lic. Ricardo Gómez Damman	Juez Tercero de la Niñez y Adolescencia	Organismo Judicial
EIO.GUA.4299-2009/DE	Lic. Raúl Velásquez Ramos	Ministro	Ministerio de Gobernación
		Director General	Dirección General del Sistema Penitenciario
	Licda. Alejandra Guillén	Oficina de Derechos Humanos	Dirección General del Sistema Penitenciario
	Dr. Imer Antonio Palma	Jefe de Servicios Médicos	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.4701-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.4950-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5136-2009/DE	Dr. Guillermo Enrique Echeverría Peralta	Director Ejecutivo	Hospital Roosevelt
ORD.GUA.4979-2009/DE	Lic. Raúl Velásquez Ramos	Ministro	Ministerio de Gobernación
		Director General	PNC
		Jefe, Oficina de Responsabilidad Profesional	PNC

ORD.GUA.5305-2009/DE	Alvaro Arzú Irigoyen	Alcalde Municipal	Municipalidad de Guatemala
	Arq. Howard Yang Luke	Director General	EMETRA, Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.4246-2009/DE	Edyn Raquel Palma Vega	Juez Primero de Asuntos Municipales de Tránsito	Municipalidad de Guatemala
	Arq. Howard Yang Luke	Director General	EMETRA, Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.5533-2009/DE	Lic. Rodrigo Walter Mérida	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación, Área Oriente, Ministerio de Educación
ORD.GUA.4724-2009/DE	Lic. Guillermo Andrés Castillo Ruiz	Ministro	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
ORD.GUA.5633-2009/DE		Presidente, Junta Directiva	IGSS
EIO.GUA.4571-2009/DE	Ing. Mario Roberto Aldana Pérez	Ministro	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
	Ing. José Manuel Álvarez Girón	Director Ejecutivo Nac.	Registro de Información Catastral
ORD.GUA.5958-2009/DE	Lic. Salvador Pacach	Director	Dirección Departamental de Educación, Área Occidente, Ministerio de Educación
	Bessie Magdalena Hernández García	Directora	EOUM "25 de septiembre", Ministerio de Educación
	María Concepción Cofre de Ortiz	Maestra	EOUM "25 de septiembre", Ministerio de Educación
ORD.GUA.5857-2009/DE	Oscar Cano	Presidente	Federación de Judo, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
	Carlos Gozález	Instructor	Federación de Judo, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
	Jorge Quintanal	Instructor	Federación de Judo, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
ORD.GUA.5939-2009/DE	Licda. Patricia de Arzú	Secretaria de Asuntos Sociales	Municipalidad de Guatemala
		Directora	Jardín Municipal Santa Isabel, Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.6243-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6310-2009/DE	Licda. Sandra Aldana de Samayoa	Jefa,	División de Recursos Humanos, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)
	Ing. Elmer Oswaldo Zelada Moreira	Jefe	Centro de Capacitación Guatemala Uno, INTECAP
	Christian Raúl Rada Monterroso	Jefe Administrativo	Centro de Capacitación Guatemala Uno, INTECAP
EIO.GUA.6313-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.165-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
	Dra. Ana Leticia Guzmán Santiago	Directora	Centro de Atención Médico Integral para Pensionados, IGSS
ORD.GUA.284-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.356-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.426-2009/DE	Licda. Ana Ordoñez de Molina	Ex Ministra	Ministerio de Educación
	Lic. Porfirio Aldana Castillo	Director	Dirección Departamental de Educación Área Sur
ORD.GUA.470-2009/DE	Lic. Felix Romero Hernandez Bran	Presidente	Asociación de Ayuda Mutua del Empleado y ex Empleado Municipal de la Municipalidad de Guatemala.

EIO.GUA.502-2009/DE	Lic. Rubén Eliú Higueros	Ex Presidente	Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial
	Lic. José Amílcar Zarate Velásquez	Fiscal General y Jefe	Ministerio Público
ORD.GUA.508-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Directora	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.551-2009/DE	Licda. Marta Lorena de Molina	Directora	Colegio IMB-PC
ORD.GUA.670-2009/DE	Dr. Héctor Ricardo Fong Véliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
	Dr. Erwin Raúl Castañeda	Jefe	Pediatría del Hospital General San Juan de Dios
	Licda. Perla de León	Jefa	Trabajo Social, Hospital General San Juan de Dios
	Licda. Miriam Dolores Ovalle de Monroy	Directora	Instituto Nacional de Ciencias Forenses
ORD.GUA.683-2009/DE	Dr. Guillermo Echeverría Peralta	Director	Hospital Roosevelt
	Dr. Jorge Mario Izaguirre	Médico pediatra	Clínica Niño Sano Hospital Roosevelt
EIO.GUA.1014-2009/DE	Lic. Renato Durán	Director/Interventor	Dirección General de Migración
	Subcomisario Sergio Antonio Cabrera Pineda	Jefe	División de Puertos y Aeropuertos, PNC
	Lic. Marco Antonio Pascual Luna	Gerente de Seguridad	Aeropuerto Internacional La Aurora, Dirección General de Aeronáutica Civil
ORD.GUA.1139-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA.1147-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.1204-2009/DE	Lic. Eddy Amílcar Morales Mazariegos	Director General	Sistema Penitenciario
ORD.GUA.1205-2009/DE	Lic. Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Gobernación
	Lic. Eddy Amílcar Morales Mazariegos	Director General	Sistema Penitenciario
EIO.GUA.1230-2009/DE	Lic. Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Gobernación
	Lic. Byron Renato Durán Méndez	Director Interventor	Dirección General de Migración
	Juan José Carlos	Director	Dirección de Aeronáutica Civil
	Lic. Marco Antonio Pascual Luna	Gerente de Seguridad	Aeropuerto Internacional La Aurora, Dirección General de Aeronáutica Civil
ORD.GUA.1284-2009/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría Bienestar Social
ORD.GUA.1464-2009/DE	Lic. Milton Danilo Torres Caravantes	Presidente	Junta Disciplinaria, Organismo Judicial
EIO.GUA.1546-2009/DE	Lic. Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Gobernación
		Director General	Sistema Penitenciario
		Director	Centro de Detención Preventiva para Hombres zona 18
ORD.GUA.1583-2009/DE	Lic. Eddy Amílcar Morales Mazariegos	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.1631-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.1699-2009/DE	Héctor Fong Véliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
ORD.GUA.1858-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.2340-2009/DE		Director General	Dirección General de Caminos

	Lic. Miguel Angel Castellanos Osoy	Jefe	Recursos Humanos de la Dirección General de Caminos
	David Marcial Morales	Jefe	Seguridad de la Dirección General de Caminos
ORD.GUA.2367-2009/DE		Junta Directiva	IGSS
ORD.GUA.2500-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.2542-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.2558-2009/DE	Alvaro Arzú Irigoyen	Alcalde	Municipalidad de Guatemala
	Ingeniero Alfredo Guzmán	Gerente General	EMPAGUA, Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.2789-2009/DE		Miembros	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
ORD.GUA.3134-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3238-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3624-2009/DE	Licenciado Edgar Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ORD.GUA.3624-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.3679-2009/DE	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ministro	MSPAS
ORD.GUA.3712-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3712-2009/DE		Director	Hospital de Escuintla, IGSS
EIO.GUA.4086-2009/DE	Dr. Gustavo González	Director	Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud
EIO.GUA.4086-2009/DE		Directora	Programa del Adulto Mayor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
EIO.GUA.4086-2009/DE		Directora	Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente de Paul
EIO.GUA.4086-2009/DE		Secretaria	Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
ORD.GUA.4401-2009/DE	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ministro	MSPAS
ORD.GUA.4401-2009/DE	Dr. Guillermo Echeverría Peralta	Director Ejecutivo	Hospital Roosevelt
ORD.GUA.4420-2009/DE	Lic. Edgar Alfredo Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ORD.GUA.4420-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.4562-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA.4782-2009/DE	Profesora Silvia Rosil	Directora	Escuela Ramiro De León Carpio
EIO.GUA.4782-2009/DE	Jeffrey Nefatli Carrera Cruz	Profesor	Escuela Ramiro De León Carpio
ORD.GUA.4810-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.4936-2009/DE	Lourdes Ninnette Marroquín Trabanino	Directora	Colegio Wonderland Guatemala
ORD.GUA.4936-2009/DE	Alba Marisol Juárez	Profesora	Colegio Wonderland Guatemala
ORD.GUA.5135-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5182-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Departamento del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
ORD.GUA.5602-2009/DE	Silvia Del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA.5602-2009/DE	Oscar Nájera	Director	Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones
EIO.GUA.5691-2009/DE	Lic. Bienvenido Argueta	Ministro	Ministerio de Educación
EIO.GUA.5691-2009/DE		Director	Colegio Cipresales



ORD.GUA.5732-2009/DE	Lic. Erick Álvarez Mancilla	Presidente	Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial
ORD.GUA.5732-2009/DE		Junta	Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial
ORD.GUA.5732-2009/DE	Licda. Angélica Noemí Téllez Hernández	Jueza	Juzgado Segundo de la Niñez y la Adolescencia
ORD.GUA.6744-2009/DE	Lic. Edgar Rodríguez	Ministro	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ORD.GUA.6744-2009/DE	Licda. Ana María Escobar de Arango	Jefa	Departamento del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.GUA.6771-2008/DE	Lic. Roger Haroldo Rodas Melgar	Ministro	Ministerio de Relaciones Exteriores
EIO.GUA.6771-2008/DE	Dr. Hector Ricardo Fong Véliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
EIO.GUA.6787-2008/DE	Lic. Alexander Colop	Jefe	Unidad contra la Trata de Personas Ministerio Público
EIO.GUA.6787-2008/DE	Oficial II Elmer Pérez	Jefe	Unidad contra la Trata de Personas División de Investigación Criminal
ORD.GUA.576-2009/DE	Lic. Carlos Samayoa Flores	Interventor	Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)
EIO.GUA.900-2009/DE	Dr. Gustavo González	Jefe	Depto. de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud, MSPAS
ORD.GUA.948-2009/DE	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco, Guatemala
ORD.GUA.1128-2009/DE	Licda. Silvia Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social
ORD.GUA.1180-2009/DE	Lic. Roger Haroldo Rodas Melgar	Ministro	Ministerio de Relaciones Exteriores
ORD.GUA.1180-2009/DE	Lic. Oscar Padilla Lam	Director	Dirección de Asuntos Consulares
ORD.GUA.2108-2009/DE	Fernando Waldemar Reyes Palencia	Director General	Policía Municipal de Guatemala
ORD.GUA.2618-2009/DE	Lic. Salvador Pacach	Director	Dirección Departamental de Educación Area Occidente
ORD.GUA.2618-2009/DE		Directora	Colegio Bilingüe Roussel
ORD.GUA.3218-2009/DE		Junta Directiva	IGSS
EIO.GUA.3220-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5038-2009/DE	Baltazar Gómez Barrios	Director	PNC
ORD.GUA.5070-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6104-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6104-2009/DE		Director	Hospital General de Enfermedad Común
ORD.GUA.6379-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6281-2009/DE	Lic. Edy Morales	Director General	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.6515-2009/DE	Baltazar Gómez Barrios	Director	PNC
ORD.GUA.6515-2009/DE	Justino Jerónimo Alvarado	Jefe	División Especializada en Investigación Criminal, PNC
ORD.GUA.6604-2009/DE		Junta Directiva	IGSS
ORD.GUA.6571-2009/DE	Lic. Rodrigo Walter Mérida	Director	Dirección Departamental de Educación, Area Oriente
ORD.GUA.6510-2009/DE	Lic. Jorge Palacios	Gerente Gral.	Empresa Municipal TRANSMETRO

ORD.GUA.6745-2009/DE	Dr. José Antonio Hernández Vásquez	Director	Hospital Nacional Pedro de Bethancourt
ORD.GUA.3878-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5926-2009/DE	Licda. Mayra Nineth Estrada		Gestión Efectiva, S. A., Municipalidad de Guatemala
ORD.GUA.6270-2009/DE	Lic. Rodrigo Walter Mérida	Director	Dirección Departamental de Educación Area Oriente
ORD.GUA.4367-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Galicia Guillén	Director	Dirección Departamental de Educación Area Norte
ORD.GUA.5776-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6188-2009/DE	Dr. Héctor Ricardo Fong	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
ORD.GUA.572-2009/DE	Evaristo Chen	Director	Casa Hogar Tío Juan
ORD.GUA.5177-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte, Guatemala
ORD.GUA. 985-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 4327-2009/DE	Licda. Ana Ordoñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
EIO.GUA.2595-2009/DE	Comisario General Baltazar Gomez Barrios	Director General	PNC
ORD.GUA.5252-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Guillén	Director	Dirección Departamental de Educación Area Norte, Ministerio de Educación
ORD.GUA. 5067-2009/DE		Directora	Fundación Remar
ORD.GUA. 6350-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA. 4544-2009/DE	Comisario General Porfirio Pérez Paniagua	Director General	PNC
ORD.GUA. 4544-2009/DE		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.GUA. 4544-2009/DE		Jefe	División Especializada en Investigación Criminal, PNC
EIO.GUA. 2438-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte Guatemala
ORD.GUA. 6539-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte Guatemala
ORD.GUA. 4433-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
EIO.GUA. 1878-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte Guatemala
ORD.GUA.2187-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte Guatemala
ORD.GUA 4006-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando Del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.1654-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte Guatemala
ORD.GUA.1654-2009/DE	Josefina de Pur	Directora	Instituto para Señoritas Belén
ORD.GUA.4088-2009/DE	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ministro	MSPAS
EIO.GUA.116-2009/DE	José Domingo Sical Flores	Alcalde Municipal	Municipalidad de Villa Nueva
	Dr. Rafael Eduardo González Rosales	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Miguel Petapa
ORD.GUA.877-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Galicia Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte Guatemala
	Com. Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora General	PNC
ORD.GUA.3815-2009/DE	Lic. Jorge Humberto Galicia Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Norte Guatemala
ORD.GUA.4403-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.4483-2009/DE	Lic. Porfirio Aldana	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Area Sur Guatemala
ORD.GUA.4954-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA.4299-2009/DE	Lic. Ángel Torres	Supervisor General	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.GUA.4246-2009/DE	Josué Monzón	Agente	Policía Municipal de Tránsito, Municipalidad de Guatemala



ORD.GUA.5712-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5739-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5113-2009/DE	Lic. Rodrigo Walter Mérida	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación, Área Oriente
ORD.GUA.5857-2009/DE	Lic. Sergio Danilo Castro	Presidente	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
ORD.GUA.6227-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA.6152-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5944-2009/DE	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.470-2009/DE	Señor Alvaro Arzú Irigoyen	Alcalde	Municipalidad de Guatemala.
ORD.GUA.551-2009/DE	Lic Porfirio Aldana Castillo	Director	Dirección Departamental de Educación Área Sur
ORD.GUA.574-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.574-2009/DE		Junta Directiva	IGSS
ORD.GUA.1464-2009/DE	Licenciado Wilfrido Porras	Juez	Juzgado Segundo de Ejecución Penal
ORD.GUA.1464-2009/DE	Guillermo Flores Rodas	Oficial Noveno	Juzgado Segundo de Ejecución Penal
EIO.GUA.2839-2009/DE		Secretario	Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
EIO.GUA.3426-2009/DE	Licenciado Porfirio Aldana Castillo	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Área Sur
EIO.GUA.3426-2009/DE	Profesora Ada Verena García de López	Directora	Escuela de Aplicación Doctor Carlos Martínez Durán
ORD.GUA.3536-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3816-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3836-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.3970-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.4530-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.4686-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA.4782-2009/DE	Lic. Porfirio Aldana Castillo	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Área Sur
ORD.GUA.4936-2009/DE	Lic. Rodrigo Wálter Mérida	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Área Oriente
ORD.GUA.5324-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.5383-2009/DE	Dr. Héctor Ricargo Fong Véliz	Director	Hospital General San Juan de Dios
EIO.GUA.5691-2009/DE	Licenciado Jorge Galicia Guillén	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación Área Norte
EIO.GUA.5691-2009/DE	Sujeidy Azucely Sija Gómez	Profesora	Colegio Cipresales
ORD.GUA.5732-2009/DE	Lic. Guillermo Antonio Porras Ovalle	Procurador	Procuraduría General de la Nación
ORD.GUA.6102-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6133-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.6143-2009/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS

Funcionarios públicos declarados violadores de derechos humanos

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.GUA.83-2007/DE	José María Verón y sus colaboradores	Encargado	Casa Hogar Eliab
EIO.GUA.401-2007/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.71-2007/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS



EIO.GUA.2883-2008/DE	Responsabilidad institucional del Estado		Dirección General del Sistema Penitenciario
EIO.GUA.1481-2008/DE acumulado al EIO.GUA.1922-2008/DE	Edvin Méndez	Docente	Instituto Normal para Señoritas Centro América
ORD.GUA.1561-2007/DE	Responsabilidad institucional del Estado		IGSS
ORD.GUA.386-2007/DE		Autoridades	Hogar Jardín de Niños San Jerónimo Emiliani
ORD.GUA.4233-2008/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
EIO.GUA.374-207/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.1117-207/DE acumulado al ORD.GUA.1126-2007/DE	Responsabilidad institucional	Agentes	Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito
ORD.GUA.1419-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.1311-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.43-2007/DE	Responsabilidad institucional	Junta Directiva	IGSS
ORD.GUA.529-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
EIO.GUA.325-2007/DE	Responsabilidad institucional		Centro de Atención Médica Integral para Pensionados, IGSS
ORD.GUA.903-2007/DE	Martha Migdalia Mazariegos Castro	Ex docente	Escuela Oficial de Niñas número 15 "República de Cuba"
ORD.GUA.465-2007/DE	Orpha Betsabee Soto Larios	Docente	Escuela Naciones Unidas
ORD.GUA.1283-2007/DE	Licda. Susana Lucía Zárate Santano	Ex psicóloga	Instituto Oficial Mixto de Educación Básica de Chinautla
ORD.GUA.1045-2007/DE	Lic Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.GUA.21-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.860-2007/DE	Responsabilidad institucional		Dirección General de Aeronáutica Civil
ORD.GUA.2952-2007/US	Responsabilidad institucional		Centro de Acción Legal en Derechos Humanos
ORD.GUA.1578-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.1031-2007/DE	Blanca Elizabeth Mejía González	Docente	Escuela Oficial Urbana Mixta San Rafael La Laguna Dos
ORD.GUA.603-207/DE	Nury Menéndez	Ex directora	Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, zona 18
ORD.GUA.878-2007/DE	Herlinda Méndez	Ex trabajadora	Casa del Niño número 5, Sociedad Protectora del Niño
ORD.GUA.1175-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
EIO.GUA.416-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.775-2007/DE	Responsabilidad institucional		Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia y Sub Gerencia de Prestaciones Pecuniarias, IGSS
EIO.GUA.453-2007/DE acumulado al ORD.GUA.15342007/DE	Licda. Consuelo Fidelia Reyes Corado	Directora	Colegio Atenas
EIO.GUA.496-2007/DE	Carlos Peláez Lamm	Docente	Escuela Oficial Urbana Mixta John F. Kennedy
EIO.GUA.2894-2009/DE	Edgar Iván Pinto Roca	Director	Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona dieciocho
ORD.GUA.1263-2008/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.029-2008/DE acumulado al PREV.ORD.GUA.2566-2009/US	Responsabilidad institucional		Compañía Eléctrica La Libertad
EIO.GUA.206-2007/DE	Teodoro García Machic, Rubén Efraín Orozco Gabriel, Edilser González Cardona y Raúl Enrique Morales	Oficial Tercero y agentes	PNC

ORD.GUA.2464-2009/DE	Responsabilidad institucional Dr. Héctor Ricardo Fong Véliz	Director Ejecutivo	Hospital General San Juan de Dios
ORD.GUA.2180-2008/DE	Responsabilidad institucional	Gerente	IGSS
ORD.GUA.639-2007/DE	Responsabilidad institucional		IGSS
ORD.GUA.2873-2008/DE	Responsabilidad institucional		Dirección de Recursos Humanos, Municipalidad de Guatemala

c. Resoluciones emitidas

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
Ampliación de plazo para la investigación	179
Enmienda de procedimientos	3
Con suspensión y certificación al órgano jurisdiccional correspondiente	36
Con suspensión por desistimiento	1
Acumulación de expedientes	20
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	119
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	39
> Con recomendación	24
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	6
Comportamiento administrativo lesivo	24
> Con recomendación	14
TOTAL	465

3. UNIDADES DE APOYO

3.1 Unidad de Notificaciones

La Unidad de Notificaciones tiene como objetivo notificar a las partes interesadas todas las resoluciones que se dicten en los trámites de investigación iniciados por la institución del PDH, teniendo como base legal lo regulado por el artículo 31 del Código Procesal Civil y Mercantil, y artículo 31 del Decreto 54-86, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala.

Entre los logros concretos caben resaltar los controles específicos implementados de la documentación asignada a cada miembro de la Unidad, desde un control escrito diario realizado por cada uno de los integrantes de los equipos (notificadores y mensajeros) hasta el control diario por medio de la base electrónica de datos, permitiendo realizar consultas por fecha de entrega y recepción, logrando la individualización de expedientes en trámite, notificación y documentos importantes, datos en los cuales también se identifica a la persona responsable que fue asignada para la diligencia requerida.

Por la cantidad de expedientes que en la actualidad se tramitan, aunada al número de oficios que son diligenciados por las diferentes instancias (9,680 oficios diligenciados al 31 de noviembre), se proyecta para el 2010 una reorganización del personal para el mejor aprovechamiento del mismo, además de la modernización del equipo de cómputo para un mejor control electrónico.

RESOLUCIONES RECIBIDAS PARA NOTIFICAR, POR ÁREA

Enero a noviembre 2009

UNIDADES DE PROCURACIÓN	EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	63	68	44	40	46	42	39	29	53	62	40	526	24.63
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	128	148	107	121	129	75	134	51	60	75	115	1,143	53.51
Derechos Específicos	55	40	50	69	40	34	43	27	33	36	40	467	21.86
TOTAL MENSUAL	246	256	201	230	215	151	216	107	146	173	195	2,136	100.00

3.2 Unidad de Seguimiento

Esta Unidad supervisa el fiel cumplimiento de las resoluciones finales emitidas por el Procurador de los Derechos Humanos, desarrollando las acciones necesarias en busca del cumplimiento de las mismas, logrando la modificación del comportamiento administrativo objetado; asimismo, previene que hechos denunciados por los usuarios puedan constituir violación de los derechos humanos a través de acciones de seguimiento que se realizan a denuncias que originan expedientes abiertos como PREVENCIÓN, dando la asistencia necesaria a los denunciantes.

Con base en el nuevo Protocolo de Seguimiento se busca elevar el porcentaje de cumplimiento de las resoluciones finales emitidas por el Magistrado de Conciencia, además de incidir en instituciones públicas a partir del seguimiento a las resoluciones finales, orientadas a prevenir la reincidencia en el comportamiento administrativo objetado. Por otro lado, se busca fortalecer el registro de la Unidad de Antecedentes de esta institución, dando el aviso inmediato de los funcionarios que no acataron lo resuelto por el PDH.

Para 2010 se contempla reducir de forma significativa la cantidad de expedientes que se encuentran en trámite en la unidad, con la continuidad en la aplicación del protocolo de seguimiento. También se busca mejorar el registro de expedientes de la unidad para viabilizar una mejor y pronta respuesta a las solicitudes de información que se trasladan de la Dirección de Procuración, y con la incidencia interinstitucional, mantener el porcentaje de cumplimiento de las resoluciones del PDH, evitando la reincidencia de comportamientos administrativos objetados.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – ENTIDADES SUJETAS A VERIFICACIÓN

UNIDAD DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

No.	Institución	Expedientes verificados
1	Banco de Guatemala	1
2	Corte de Constitucionalidad	1
3	Dirección General de Migración	1
4	Empresa Informes en Red, Sociedad Anónima	6
5	Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito	1
6	Instituto Nacional de Ciencias Forenses	1
7	Ministerio de Gobernación	4
8	Ministerio Público	244
9	Municipalidad de Guatemala	5
10	Municipalidad de Villa Nueva, departamento de Guatemala	2
11	Organismo Judicial	5

12	Personas particulares	7
13	Policía Nacional Civil	45
14	Procuraduría de los Derechos Humanos	3
15	Tran Unión, S.A.	2
	TOTAL	328

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – ENTIDADES SUJETAS A VERIFICACIÓN UNIDAD DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

No.	Institución	Expedientes verificados
1	Comisión Nacional de Energía Eléctrica	1
2	Fuerza Área Guatemalteca	1
3	Instituto de la Defensa Pública Penal	1
4	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	8
5	Instituto Nacional de Cancerología	1
6	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	6
7	Ministerio de Economía	1
8	Ministerio de Educación	5
9	Ministerio de Gobernación	2
10	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1
11	Ministerio Público	36
12	Municipalidad de Guatemala	4
13	Municipalidad de Mixco, departamento de Guatemala	1
14	Municipalidad de Villa Nueva, departamento de Guatemala	1
15	Oficina Nacional del Servicio Civil	1
16	Organismo Judicial	10
17	Policía Nacional Civil	1
18	Universidad de San Carlos de Guatemala	1
	TOTAL	82

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – ENTIDADES SUJETAS A VERIFICACIÓN UNIDAD DE DERECHOS ESPECÍFICOS

No.	Institución	Expedientes verificados
1	Congreso de la República de Guatemala	2
2	Corte de Constitucionalidad	2
3	Fondo Guatemalteco de Vivienda	1
4	Hospital General San Juan de Dios	1
5	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	12
6	Instituto Guatemalteco de Turismo	1
7	Ministerio de Educación	3
8	Ministerio de Gobernación	1
9	Ministerio de la Defensa Nacional	6
10	Ministerio de Relaciones Exteriores	1
11	Ministerio de Trabajo y Previsión Social	1
12	Ministerio Público	55
13	Organismo Judicial	11
14	Policía Nacional Civil	3
15	Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente	1
16	Sistema Penitenciario	2
	TOTAL	103

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES – RESUMEN

Enero a noviembre de 2009

UNIDADES DE PROCURACIÓN	Resoluciones cumplidas	Resoluciones incumplidas
Derechos Civiles y Políticos	328	0
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	82	0
Derechos Específicos	101	2
TOTAL	511	2

3.3 Unidad de Atención al Maltrato

Su objetivo es velar por la protección de los derechos humanos de la niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con discapacidad o retos especiales, y cuando sus derechos se encuentren amenazados o violados, que éstos sean respetados o restituidos. Asimismo, verifica las denuncias de maltrato a estos grupos de población que son presentadas o iniciadas de oficio en la institución del PDH, y en casos concretos de malos tratos se remiten a los órganos jurisdiccionales competentes, centros de salud y otras instituciones de apoyo para su tratamiento, rehabilitación y medidas o sanciones correspondientes. Se orientan y realizan acompañamientos a víctimas de maltrato a niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con discapacidad, además de la elaboración de actas e informes en estos casos de maltrato.

TRÁMITE DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE MALTRATO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Maltrato a niñez y adolescencia	247
Maltrato a adulto mayor	27
Maltrato a personas con discapacidad	2
TOTAL	276

Entre las acciones específicas de la Unidad está la observación de dinámicas familiares *in situ* (en el sitio); elaboración de diagnósticos de los casos positivos o negativos de malos tratos; orientación educativa a las víctimas y denunciados en este tipo de casos; atención en crisis y terapia breve; solicitud de medidas urgentes a los órganos jurisdiccionales competentes y solicitud de rescates a los juzgados correspondientes, y en algunos casos, remisión de denuncias al Ministerio Público (expedientes relacionados con delitos); remisión de casos de malos tratos a adultos mayores y personas con discapacidad a la Procuraduría General de la Nación; evaluación de la situación socioeconómica de las víctimas y denunciados; así como el avance de las labores investigativas requeridas para la obtención de pruebas y circunstancias de tiempo, modo y lugar, para poner el caso en conocimiento de los juzgados y el Ministerio Público, para su judicialización.

La Unidad de Atención al Maltrato coordina y apoya acciones con la Procuraduría General de la Nación, los juzgados de Niñez y Adolescencia, de Familia, de Paz Penal, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil e, intrainstitucionalmente, con la Dirección Nacional de Procuración, el Área de Recepción y Calificación de Denuncias y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. También coopera con hogares de ancianos, centros de salud, hospitales nacionales, el Instituto de Dermatología y Piel, escuelas públicas, colegios privados, Fundación Sobrevivientes, Centro Alida España de Arana, Escuela para Sordos y Ciegos Fray Pedro Ponce de León. Algunos de éstos prestan colaboración gratuita a las víctimas y otros la solicitan por medio de denuncias.

Entre las proyecciones para 2010, se busca lograr la capacitación continua a todos los operadores de justicia en el tema del maltrato en el plano operativo e implementar un programa de enseñanza de habilidades parentales o familiares (grupos educativos), con el objetivo de ayudar a las familias maltratantes y negligentes

a subsanar los déficit que presentan en sus habilidades de trato y manejo de la conducta del niño, adolescente, adulto mayor o persona con discapacidad, y también implementar un área de ludoterapia –juego terapéutico– para niños y niñas.

3.4 Unidad de Supervisión

La Unidad de Supervisión del Departamento de Procuración tiene como objetivos: incidir institucionalmente en la agilización y efectividad del trámite de las denuncias recibidas en la PDH y promover el fortalecimiento de la investigación científica que requieran los hechos denunciados, atendiendo el enfoque victimológico de la institución y ejecutando las respectivas acciones de supervisión y análisis, así como velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información en la Dirección de Procuración, para lo cual administra las solicitudes de información presentadas a dicha Dirección y elaborar los informes correspondientes.

Entre sus atribuciones están: ejercer control administrativo del trámite de los expedientes que, para el caso del departamento de Guatemala, se inicia en la Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias y en el Centro de Llamadas, y que se atiende en las unidades de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Específicos, de Seguimiento, de Notificaciones y Mensajería y de Maltrato, y en la Sub-Unidad de Referencias y Seguimiento a Denuncias, todas del Departamento de Procuración y, de igual forma, en las auxiliaturas departamentales, regionales y municipales.

En su defecto, ordena a las unidades y subunidades competentes del Departamento de Procuración que realicen rigurosa investigación científica en el trámite de las denuncias contenidas en los denominados expedientes de investigación, la que debe incluir necesariamente la técnica del trabajo de campo. Además de elaborar y remitir a la Dirección de Procuración los informes, estadísticas y reportes de las supervisiones realizadas y de los monitoreos en las unidades y subunidades, para el trámite correspondiente.

Asimismo, requiere tanto de las unidades y subunidades del Departamento de Procuración como de las auxiliaturas departamentales, regionales y municipales, los insumos informativos y expedientes necesarios para elaborar los informes que la Unidad de Información de la institución solicite a la Dirección de Procuración, con base en el Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública; y coordina con la Unidad de Información el procesamiento de los datos recolectados para, finalmente, elaborar y tramitar los informes.

3.5 Call Center

El Centro de Llamadas 1555 es un canal del Procurador de los Derechos Humanos para facilitar el contacto con los habitantes de todo el territorio nacional, a fin de brindar apoyo para la defensa de sus derechos inherentes como personas humanas y ofrecer los servicios de recepción de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, información, orientación y enlace o canalización de requerimiento de asistencia interinstitucionalmente.

Su objetivo fundamental es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14, literal k, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, promoviendo una reorganización administrativa de la institución con el objetivo de dotarla de una estructura organizativa que garantice el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes relacionadas con su mandato.

Sus objetivos específicos son brindar un servicio rápido, efectivo, accesible e inmediato con la finalidad de tutelar, prevenir o cesar las violaciones de los derechos humanos, a través de la recepción de denuncias, apertura del expediente de mérito, brindando información sobre derechos humanos y asesoría en las diversas ramas del derecho; realizar coordinaciones institucionales e interinstitucionales que coadyuven a garantizar los

derechos fundamentales de las personas, así como su integridad y seguridad; y, resolver institucionalmente inquietudes y necesidades que requieran atención inmediata.

3.6 Unidad de Seguimiento al Centro de Llamadas

La Unidad de Seguimiento al Centro de Llamadas tiene como prioridad dar continuidad al área de Recepción y Calificación de Denuncias del *Call Center*, además de ser herramienta de apoyo para fortalecer y dar seguimiento a las denuncias recibidas por dicha área. La Unidad se proyecta de forma directa con la víctima, quien después de presentarse a la institución del PDH continuará su trámite de solicitud de medidas de seguridad, para lo cual se requiere, cuando lo amerite, de un acompañamiento por circunstancias especiales, así como velar por la buena atención al denunciante y ser un transmisor entre el denunciante en la institución del PDH y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para brindar apoyo a la víctima.

Sus principales funciones y atribuciones son: dar seguimiento a las denuncias de violencia intrafamiliar y a las denuncias recibidas en el Centro de Llamadas y en el Área de Recepción y Calificación de Denuncias de la institución del PDH; dar acompañamiento a la denunciante o víctima, si lo requiere; dar inmediato acompañamiento a las víctimas cuando lo requieran; dar seguimiento a las resoluciones del PDH, verificar el hecho denunciado y darle solución inmediata a la problemática; y orientar a los denunciantes sobre los trámites a seguir y las autoridades o dependencias a las cuales dirigirse cuando las denuncias presentadas y los hechos denunciados no son de competencia del PDH. Así también, realizar estudios socioeconómicos, los cuales son requeridos por la Dirección de Asesores de la institución del PDH, en materia de acciones de amparo en toda la República.

Auxiliatura móvil de Guatemala - Región I



Auxiliatura Móvil I de Guatemala – Región I

De enero a noviembre de 2009, la situación en los municipios que cubre esta Auxiliatura es preocupante por los altos índices de violaciones a los derechos humanos, siendo las áreas que afrontan mayor riesgo: Mixco, Villa Nueva, Chinautla, San Miguel Petapa, Villa Canales, Palencia, Palín, Chuarrancho y San Vicente Pacaya.

La exclusión social, la falta de programas alimenticios, de cobertura de salud y proyectos de seguridad ciudadana son algunos de los múltiples problemas que afrontan los municipios de la región. Asimismo, la calidad de vida de los ciudadanos más necesitados se ve afectada por la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos y la carencia de recursos para lugares cercanos a las cabeceras municipales. Dentro de la jurisdicción de esta Auxiliatura hay diversidad de irregularidades en cada uno de los municipios, los que afrontan problemas de agua, de libre locomoción, de seguridad alimentaria, así como violencia en contra de la niñez y la mujer, violaciones laborales y proliferación de asentamientos.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura móvil Guatemala, región I, se realizaron 1,33 acciones específicas: 45 de orientación, 949 de prevención, 13 de mediación, 3 operativos, 4 de acompañamiento, 1 de conciliación y 8 de intervención inmediata.

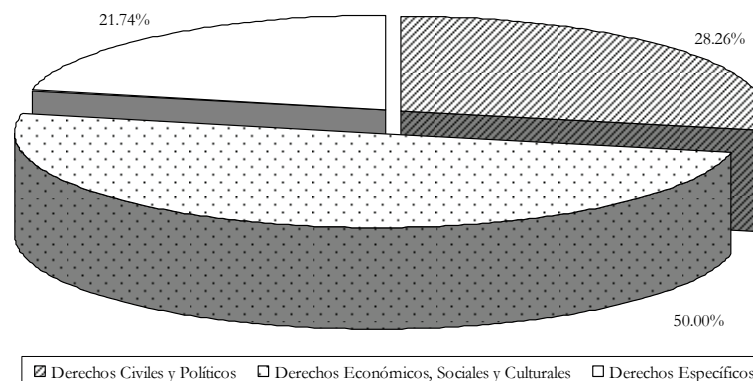
De investigación

Se abrieron 46 expedientes de investigación: 13 por violaciones a derechos individuales, 23 a derechos económicos, sociales y culturales y 10 a derechos específicos. De ellos, el 21.74% de oficio y el 78.26% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 69.93% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	1	2			2	4		3			13	28.26
Derechos Económicos, Sociales y Culturales		5	2	5	3	1	2	3	2			23	50.00
Derechos Específicos		2	2	3	1		1		1			10	21.74
TOTAL MENSUAL	1	8	6	8	4	3	7	3	6	0	0	46	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		3		3			1	2	1			10	21.74
Ordinario	1	5	6	5	4	3	6	1	5			36	78.26
TOTAL MENSUAL	1	8	6	8	4	3	7	3	6	0	0	46	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	45	4.36
Prevención	949	91.87
Mediación	13	1.26
Operativo	3	0.29
Acompañamiento	4	0.39
Conciliación	1	0.10
Intervención inmediata	18	1.74
TOTAL MENSUAL	1,033	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo		8	9	13	5	10	10	13	23	2	7	100	9.27
Judicial	2	4	6	7	4	5	2	3	9	1	2	45	4.17
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	3	4	8	15	5	4	6	5	9	5	5	69	6.39
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		2		2		2		1	1		2	10	0.93
Ministerio Público		3	2	5					3	1		14	1.30
Centros educativos particulares		1	2		1		2		2	2		10	0.93
EEGSA				1				1	1	1		4	0.37
DEORSA										1		1	0.09
Particulares	23	68	73	83	63	65	102	61	134	71	79	822	76.18
Empresa de Agua					2							2	0.19
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala	1		1									2	0.19
TOTAL MENSUAL	29	90	101	126	80	86	122	84	182	84	95	1,079	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Estadísticas obtenidas en las Comisaría 15 y 16 de la Policía Nacional Civil (PNC) dan cuenta del alto índice de criminalidad en los municipios de Villa Nueva y Mixco debido a la proliferación de grupos de pandilleros juveniles, quienes por el cobro de impuesto a los negocios han ocasionado el cierre de varios de éstos. Con respecto al abuso de poder, ha habido un alto porcentaje de denuncias en contra de agentes o funcionarios de la PNC.

Expediente ORD.7-2009/DCP Mixco

Se recibió denuncia contra agentes de tránsito de la Municipalidad de Mixco por agredir físicamente al esposo de la denunciante cuando viajaba en un bus extraurbano. A partir de la investigación realizada se determinó que sí hubo agresión, y que también golpearon a su hija, y se conoció el nombre de los agentes involucrados.

Expediente PREV. 034-2009/DCP Aux. Villa Canales

La afectada interpuso una denuncia en la Fiscalía Municipal del Ministerio Público (MP) de Villa Canales por agresión física y verbal por parte de los denunciados a causa de una deuda monetaria que ambas partes anteriormente habían contraído. El Área de Recepción y Calificación de Denuncias de la PDH solicitó a la directora general de la PNC medidas urgentes de seguridad perimetral a favor de la denunciante. Como parte de la investigación se dio seguimiento al expediente a las instancias correspondientes y las autoridades cumplieron con brindar las medidas de seguridad.

Expediente PREV. 055-2009/DCP Aux. Villa Nueva

Según el denunciante, el Auxiliar Fiscal I le indicó que debía firmar un acta en la cual aparece como usurpador de un bien inmueble, siendo, supuestamente, otra persona la verdadera propietaria. Como parte de la investigación se verificó el estado del expediente en la Fiscalía Municipal y se solicitó información al Fondo de Tierras para comprobar lo expuesto por el denunciante, a partir del informe rendido por el departamento de Catastro el legítimo dueño no es el denunciante.

Expediente ORD. 006-2009/DCP Aux. Villa Nueva

La denunciante, Juez de Primera Instancia de Familia, fue secuestrada por personas desconocidas. Ya en repetidas ocasiones había solicitado, a varias instituciones, medidas de seguridad perimetral y personal, pero fueron negadas, poniendo en riesgo su integridad y la de su familia. Como parte de la investigación se entrevistó a la juez, se pidieron informes a las instituciones que no cumplieron con las solicitudes (Ministerio de Gobernación), y se requirieron medidas cautelares a favor de la denunciante.

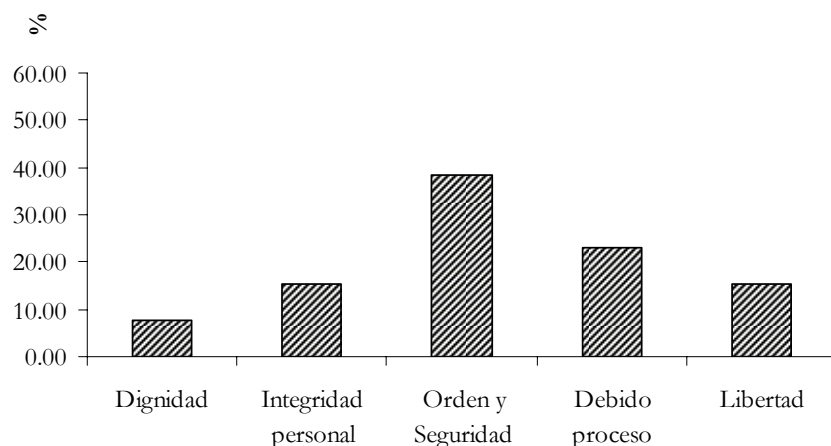
Expediente PREV. 015-2009/DCP

La directora de la Escuela Oficial Urbana Mixta Prados de Villa Hermosa denunció que, desde hace varios años, recibe amenazas de muerte vía telefónica y escrita, por parte de personas desconocidas. Al verificar los anónimos enviados se orientó a la denunciante para que se presentara en la Fiscalía Municipal del MP de Villa Canales; asimismo se solicitaron medidas urgentes de seguridad personal y perimetral para el claustro de maestros y alumnos del centro educativo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Trato cruel, inhumano o degradante							1					1	7.69
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte violenta							2					2	15.38
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1								2			3	23.08
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial									1			1	7.69
Amenazas, coacción						1						1	7.69
DEBIDO PROCESO													
No presumir su inocencia			2									2	15.38
Discontinuidad y lentitud procesal						1						1	7.69
LIBERTAD													
Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de cátedra							1					1	7.69
Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de reunión		1										1	7.69
TOTAL MENSUAL	1	1	2	0	0	2	4	0	3	0	0	13	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La morbilidad tiene sus principales causas en las infecciones respiratorias y parasitismo intestinal. La cobertura del Centro de Salud de los municipios es insuficiente ya que no se cuenta con equipo y personal necesarios. La alimentación se ve afectada por el alto costo de la canasta básica, y los malos cultivos generan un incremento en los gastos para mitigar los casos de desnutrición crónica.

Respecto a la vivienda, se han protagonizado varios conflictos entre particulares por los linderos de propiedades, producto de herencias o invasiones. La Auxiliatura ha verificado desalojos en Mixco y Villa Nueva, donde fueron expulsadas más de 800 familias. Además, la necesidad de vivienda hace que personas de escasos recursos no midan las consecuencias de habitar áreas consideradas de alto riesgo, como a las orillas de los ríos Platanitos, Villa Lobos, el Mico, las Vacas, entre otros. A ello se suma la falta de agua, especialmente en el municipio de Mixco, lo cual ha generado descontento entre los pobladores.

En lo que concierne al transporte urbano, aunque hay suficientes unidades para cubrir las necesidades de la población, el incremento al pasaje ha afectado la economía de los usuarios.

El medio ambiente sufre fuerte contaminación por el masivo tránsito vehicular y los desechos de las distintas industrias y comercios que funcionan en los municipios. En el casco urbano y en muchas áreas rurales se carece de áreas verdes. Asimismo, la falta de plantas de tratamiento de aguas negras pone en peligro la conservación de los recursos naturales.

Expediente ORD. 01-2009/DESC Aux. Chinautla

Indican los denunciantes, vecinos de la aldea El Durazno, que sufren demasiados problemas con la prestación del servicio de agua potable, debido al desabastecimiento y la contaminación de la misma, lo que les ha ocasionado problemas de salud. Como parte de la investigación se realizaron acciones en coordinación con personal de la Municipalidad y el Centro de Salud del municipio de Chinautla, pudiéndose determinar que efectivamente existe un grado de contaminación del agua para consumo humano. La Municipalidad prometió aumentar la capacidad de la bomba de agua.

Expediente PREV. 062-2009/DESC Aux. Villa Nueva

Se presentó denuncia en la Auxiliatura en virtud de que habían indicios de que el agua de los pozos de Amatitlán se encontraba contaminada, solicitándose monitoreo al centro de salud del referido municipio. Como parte de la investigación se entrevistó a varios vecinos y se analizaron, juntamente con el inspector de saneamiento, las muestras de agua para comprobar su estado de purificación, constatándose su potabilidad.

Expediente PREV. 064-2009/DESC Aux. Villa Nueva

Según la denunciante, no recibió buena atención médica por parte del personal del Hospital Nacional de Amatitlán. Personal de la auxiliatura se presentó a las instalaciones para verificar lo denunciado y solicitó informe al director del hospital y entrevistó a varios pacientes. A partir de la investigación realizada se constató que dicho centro no contaba con los médicos necesarios para cubrir las necesidades de los pacientes.

Expediente PREV. 15-2009/DESC; PREV. 65-2009/DESC; PREV. 92-2009/DESC Aux. Mixco

Trabajadores de la Municipalidad de Mixco denunciaron que ésta se niega a pagarles sus prestaciones luego de haberlos despedido sin motivo alguno. Con la investigación realizada se determinó que, efectivamente, 400 trabajadores fueron despedidos bajo el argumento de no contar con los recursos suficientes para mantener a dicho personal; se coordinó con la unidad específica de la Municipalidad de Mixco para que se haga efectivas las indemnizaciones, las cuales serán canceladas en tres pagos.

Expediente EIO 01-2009/DESC San Miguel Petapa

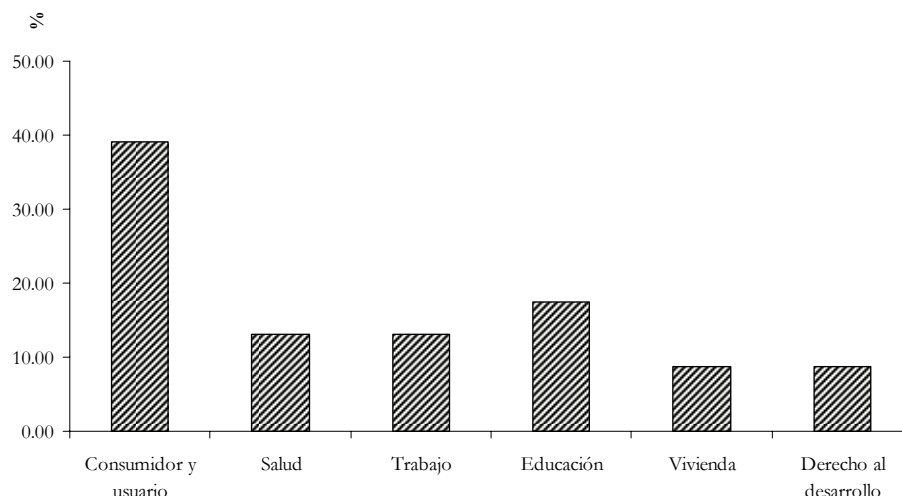
A raíz de información publicada en *Prensa Libre*, el 26 de agosto de 2009, notificando una epidemia de dengue hemorrágico que afectaba a vecinos de San Miguel Petapa, personal de la sede central de la PDH realizó una

verificación y solicitó informe circunstanciado al director del Centro de Salud de dicho municipio. En dicho informe se indicaba que no existía brote alguno y que el Centro contaba con medicamentos para su tratamiento; se realizaron actividades educativas en escuelas e institutos sobre cómo prevenir tal epidemia.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Enero a noviembre de 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Desabastecimiento		3		3	2							8	34.78
Alzas inmoderadas de precios y tarifas					1							1	4.35
SALUD													
Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)			1					2				3	13.04
TRABAJO													
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo		1										1	4.35
Falta de pago de las prestaciones laborales				1								1	4.35
Despido injusto		1										1	4.35
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita							1					1	4.35
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación									1			1	4.35
No ser capacitado para lograr una subsistencia digna, el mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad								1				1	4.35
Imponer a los padres el tipo de enseñanza para sus hijos									1			1	4.35
VIVIENDA													
Vivienda inadecuada			1									1	4.35
Falta de servicios, materiales e infraestructura						1						1	4.35
DERECHO AL DESARROLLO													
Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza							1					1	4.35
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera				1								1	4.35
TOTAL MENSUAL	0	5	2	5	3	1	2	3	2	0	0	23	100.00





2.3 Derechos específicos

En el presente año se ha observado una serie de denuncias con respecto a abusos sexuales contra menores de edad, por lo que fue necesario hacer monitoreos constantes para resguardar la integridad y dignidad de este grupo vulnerable. Además, el incremento de los femicidios evidencia la vulnerabilidad de este grupo.

Expediente PREV. 15-2009/DE Aux. Palencia

Un correo electrónico anónimo informó que el denunciado abusó sexualmente de una de sus hijas, que producto de dicho acto ilícito tuvo un hijo y que, además, había otra menor de edad que corría riesgo de ser abusada. Personal de la Unidad Móvil I se presentó y entrevistó a una de las afectadas, confirmando el abuso cometido por su progenitor, por lo que se solicitaron medidas cautelares a favor del grupo familiar, retirándose al denunciado de la residencia, y se remitió el caso de la hija mayor de edad a la Fiscalía del MP.

Expediente PREV. 019-2009/DE Aux. Villa Canales

La denunciante acusó a su esposo de querer llevarse a su hija con lujo de fuerza, no logrando su objetivo; posteriormente la golpeó y amenazó de muerte a la madre. Mientras el caso era investigado se brindaron las medidas de seguridad perimetral a favor de la denunciante y su hija.

Expediente PREV. 019-2009/DE Aux. San Miguel Petapa

Manifestó la denunciante que desde hace cinco años está separada de su esposo, a pesar de seguir viviendo en la misma residencia, y sigue siendo maltratada física y psicológicamente por el denunciado. Con el fin de garantizar la integridad física de la denunciante se dictaron las medidas de seguridad correspondientes mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

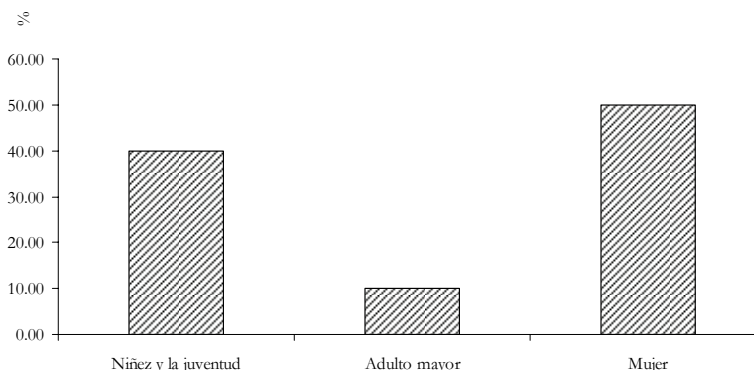
Expediente PREV. 143-2009/DE Aux. Villa Nueva

El afectado presentó denuncia contra el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Residenciales Prados de Tabacal I y la empresa administradora de servicios básicos del referido residencial, por estar siendo obligado a cancelar una multa por un comercio ubicado dentro de la colonia Prados del Tabacal, siéndole, además, suspendido el servicio de agua. Personal de la PDH realizó un monitoreo dentro de la colonia verificando la existencia de varios negocios con las mismas características y se realizó una investigación con el juez de Asuntos Municipales para determinar lo concerniente a los permisos y pagos legales de agua.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS

Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil			1	2								3	30.00
Falta de reconocimiento familiar y de alimentos (alimentación, vestuario, vivienda)				1								1	10.00
ADULTO MAYOR													
Falta de acceso a la seguridad social		1										1	10.00
MUJER													
Discriminación cultural, social, económica, política		1										1	10.00
Violencia física o psicológica			1		1				1			3	30.00
Violencia sexual							1					1	10.00
TOTAL MENSUAL	0	2	2	3	1	0	1	0	1	0	0	10	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente ORD. 04-2009/DCP Aux. Mixco

Indicó el denunciante que los hijos de su hermana fallecida se oponen a su deseo de llevarse el cuerpo para ser sepultado en Costa Rica, y el MP no resuelve. A partir de la investigación realizada se determinó que dicha instancia realiza las acciones necesarias por considerar que la muerte de la víctima fue violenta.

Expediente PREV. 010-2009/DCP Aux. Villa Canales

Indicó la denunciante que los miembros de la Junta de Seguridad Local de la aldea El Tablón cometen una serie de hechos delictivos, y que ha recibido amenazas y coacciones por parte de ellos. Personal de la PDH se presentó a la Fiscalía del MP de Villa Canales con el objetivo de verificar los avances en materia penal en relación con la denuncia presentada, y obtuvo que se brindaran las medidas de seguridad solicitadas para proteger al núcleo familiar de la denunciante.

Expediente PREV. 02-2009/DCP Aux. Villa Canales

Se recibió denuncia de que en lote 4, manzana M, sector 3, colonia Villa Hermosa I, zona 7 de San Miguel Petapa, se encuentran personas armadas que intimidan a los vecinos, por lo que solicitaron las medidas de seguridad correspondientes. Personal de la PDH orientó al denunciante para que presentara la denuncia en el MP de Villa Canales; asimismo, agentes de la PNC brindaron el apoyo solicitado.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

<p>Expediente PREV. 12-2009/DCP Mixco A favor de: Maria Carias Motivo: se llevaron a la víctima en contra de su voluntad Declarado con lugar: no</p> <p>Descripción del caso: el padre la sacó con uso de fuerza física de la Universidad de San Carlos de Guatemala y desde esa fecha no se sabe nada de ella.</p>
<p>Expediente PREV. 31-2009/DCP Mixco A favor de: Marco Antonio Morales Chutan Motivo: desaparición forzada Declarado con lugar: sí</p> <p>Descripción del caso: indica el denunciante que la víctima fue interceptada por personas desconocidas que se la llevaron, y hasta el momento no saben de su paradero.</p>
<p>Expediente PREV. 153-2009/DCP Mixco A favor de: Juan Alberto Morales Motivo: desaparición Declarado con lugar: sí</p> <p>Descripción del caso: indica la denunciante que su esposo desapareció tras ser introducido por la fuerza en un vehículo del cual desconoce las características, sin saber de su paradero.</p>
<p>Expediente PREV. 216-2009/DCP A favor de: María Raquel Alvarado Motivo: desaparición Declarado con lugar: sí</p> <p>Descripción del caso: indica el denunciante que su nieta, menor de edad, posiblemente fue llevada hacia Estados Unidos en contra de su voluntad.</p>
<p>Expediente PREV. 03-2009/DCP Aux. Villa Canales A favor de: María Joaquina Domínguez Motivo: amenazas de muerte Declarado con lugar: sí</p> <p>Descripción del caso: la señora Domínguez presenta denuncia formal en contra de los miembros de la Junta de Seguridad Local de la aldea El Tablón, específicamente en contra de los señores Jerónimo Monterroso Solís, César Augusto Rafael Mazate, José Victorino Solís, Agustín Solís Hernández, Nicolás Pérez Elías, Eulogio Domínguez Saso, Genaro Elías Pérez, Horacio Monterroso, Aurelio Pérez, quienes, valiéndose de sus puestos en dicha junta, cometen una serie de hechos ilícitos en contra de los vecinos.</p>
<p>Expediente ORD. 01-2009/DE Aux. Villa Canales A favor de: Yeny Hernández Aguilar Motivo: desaparición Declarado con lugar: sí</p> <p>Descripción del caso: el señor Denis Isai Aguilar Payes desapareció desde el ocho de enero de 2009, sin que a la fecha se conozca su paradero. El caso lo conoce el señor Daniel Hernández, auxiliar fiscal del MP de Villa Canales, a quien se le han proporcionado los datos de la desaparición pero no le ha dado seguimiento al caso. Expediente MP 182-2008/agencia dos.</p>

Expediente PREV. 36-2009/DE Aux. Villa Canales

A favor de: Iris Floridalma Pichiya

Motivo: niñez y adolescencia

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: la denunciante recibe maltrato físico y psicológico por parte de la Casa de Rehabilitación de Santa Anita Boca del Monte, Villa Canales, por lo que la PDH solicitó exhibición personal a favor de ella y de su hijo, el cual tuvo en dicho centro asistencial.

Expediente PREV. 012-2009 Aux. San Miguel Petapa

A favor de: Luis Humberto Fuentes

Motivo: amenazas de muerte

Declarado con lugar: no

Descripción del caso: tanto el denunciante como su familia reciben amenazas de muerte por parte de la señora Mariela Barrillas, quien en repetidas ocasiones ha intimidado física y verbalmente a los afectados.

Expediente PREV. 015-2009 Aux. San Miguel Petapa

A favor de: Saira Maritza Hernández

Motivo: amenazas de muerte

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: desde enero de 2009 la profesora Gladis Consuelo Lobos Sandoval y miembros del personal docente de la escuela en San Miguel Petapa han recibido amenazas, vía telefónica y escrita.

Expediente PREV. 019-2009 Aux. San Miguel Petapa

A favor de: Vilma Contreras Mellado de Morales

Motivo: violencia intrafamiliar

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: la señora Vilma Contreras Mellado de Morales, separada de su esposo desde hace algún tiempo, es maltratada físicamente por él, por lo que se solicitó las medidas pertinentes.

Expediente PREV. 36-2009/DE Aux. San Miguel Petapa

A favor de: Yara Chávez Gálvez

Motivo: violencia intrafamiliar

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: la denunciante convive desde hace cinco años con el señor Contreras Pinto, y desde entonces ha sido objeto de violencia física y psicológica, al punto de ser amenazada de muerte ella y su hijo menor de edad, por lo que solicitó medidas de seguridad.

Expediente PREV. 40-2009/DE Aux. San Miguel Petapa

A favor de: Horacio Francisco Castillo Argueta

Motivo: amenazas de muerte

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: el señor Horacio Francisco Castillo Argueta manifiesta que sus hijos fueron extorsionados y amenazados de muerte, vía telefónica, por una persona desconocida, por lo que solicitó las medidas correspondientes a la PNC.

Expediente PREV. 02-2009/DCP Aux. VILLA CANALES

A favor de: Juana Esperanza Reyes de León y tres menores de edad.

Motivo: por violación del derecho humano al orden y la seguridad, por amenazas de muerte por parte de los señores José Reynabel Reyes, Lidia Esperanza Amaya de Reyes y María de los Ángeles Amaya.

Declarado con lugar: sí; se cumplió, según oficio número cero uno guión dos mil nueve diagonal REF LEJP, del 4 de enero de 2009, se le brindaron las medidas de seguridad solicitadas, según información

proporcionada por el inspector de la PNC Luis Ernesto Juárez Pichiyá, encargado de la Oficina de la Víctima de dicha institución, del municipio de Villa Canales.
Descripción del caso: la señora Juana Esperanza Reyes presentó denuncia a esta institución por múltiples amenazas de muerte en su contra. La auxiliar del área de Recepción y Calificación de Denuncias de la PDH solicitó medidas urgentes de seguridad perimetral a favor de la denunciante y de tres menores de edad.

Expediente PREV. 027-2009/DE Aux. Villa Nueva A favor de: Andrea Mariel Milla Samayoa Motivo: prostitución Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: la señora Patricia Samayoa, progenitora de la menor de edad, la obligaba a prostituirse en contra de su voluntad.

Expediente PREV. 219-2009/DESC A favor de: Marlos Oswaldo Alvarado Reyes Motivo: falsa acusación Declarado con lugar: no
Descripción del caso: por falsa acusación en su contra, supuestos elementos de la PNC y personas desconocidas se encuentran vigilando su vivienda, negándole el derecho a la libre locomoción.

Expediente PREV. 164-2009DE Aux. Villa Nueva A favor de: menor de edad Motivo: entrega de bebé por parte del hospital de Amatitlán Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: la señora Estefanía Corina Abrego dio a luz un bebé en el Hospital de Amatitlán el 3 de agosto de 2009, dándola de alta dos días después. Al momento de solicitar que le entregaran a su hijo, se negaron, aduciendo que debía llegar una persona mayor de edad para poder entregárselo, por lo que se solicitó la exhibición personal.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.03-2009/DE/Mixco	Ana Judith Caceres	Directora	Secretaría de Asuntos Agrarios
ORD.05-2009/DCP/Mixco	Samuel Antonio Lima Morales	Jefe	PNC, Mixco-Centro
EIO.01-2009/DCP/Mixco	Juan Alberto Estrada	Gerente Gral.	EMIXTRA
ORD.07-2009/DCP/Mixco	Juan Alberto Estrada	Gerente Gral.	EMIXTRA
PREV.054-2009/DCP/Mixco	Leopoldo Mejía Toc	Auxiliar Fiscal	Ministerio Público
PREV.40-2009/DESC/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.33-2009/DCP/Mixco	Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.29-2009/DCP/Mixco	Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.14-2009/DCP/Mixco	Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.150-2009/DESC/Mixco	Lic. Emilio Rafael Miranda López	Directora	I.N:E.B. con Orientación Ocupacional Simón Bolívar, jornada matutina
PREV.222-2009/DCP/Mixco	Porfirio Pérez Paniagua	Director Gral.	PNC, Mixco-Centro
PREV.223-2009/DCP/Mixco	Porfirio Pérez Paniagua	Director Gral.	PNC, Mixco-Centro



PREV.232-2009/DCP/Mixco	Porfirio Pérez Paniagua	Director Gral.	PNC, Mixco-Centro
PREV.237-2009/DCP/Mixco	Guillermo Torres Pastor	Agente Oficinista de Turno	PNC, Mixco-Centro
PREV.249-2009/DE/Mixco	Lic. Elvis David Hernandez Dominguez	Juez	Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Mixco
PREV.253-2009/DCP/Mixco	Porfirio Pérez Paniagua	Director Gral.	PNC
PREV.254-2009/DCP/Mixco	Porfirio Pérez Paniagua	Director Gral.	PNC
PREV.266-2009/DESC/Mixco	Porfirio Pérez Paniagua	Director Gral.	PNC
PREV.273-2009/DCP/Mixco	Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora Gral.	PNC
Orientación.22-2009/DCP/Mixco	Lic. Elvis David Hernandez Dominguez	Juez	Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Mixco
Verificación.02-2009/DESC/Mixco		Director	Centro de Salud de Mixco
PREV.270-2009/DE	Víctor Hugo Perez Rosales	Juez	Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Mixco
PREV.50-2009/DCP/Mixco	Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora Gral.	PNC
Acompañamiento.01-2009/DCP/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.122-2009/DESC/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.15-2009/DESC/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.65-2009/DESC/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.92-2009/DESC/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.105-2009/DCP/Mixco	Merlene Blanco Lapola	Directora Gral.	PNC
Orientación.10-2009/DCP/Mixco	Norberto Cuyan Cruz	Jefe Recursos Humanos	Municipalidad de Mixco
Acción Inmediata.02-2009/DCP/Mixco	José David Martínez Ramirez	Oficial II	Dirección General, PNC
Acción Inmediata 02-2009/DCP/Mixco	Jaime Leonel Otzin Díaz	Subdirector General de Operaciones	PNC
Acción Inmediata 02-2009/DCP/Mixco	Julio Roberto Canuz Guevara	Jefe	Subestación Mixco Centro Comisaría 16, PNC
PREV.244-2009/DCP	Miguel Pú Morales	Director Gral.	Unidad Vía Pública Municipalidad de Mixco
PREV.029-2009/DCP/Chinautla	Marlene Raquel Blanco Lapola	Directora Gral.	PNC
PREV.31-2009/DCP/Chinautla	Baltazar Gómez Barrios	Director General	PNC
PREV.01-2009/DESC/Palencia	Álvaro Arzú Irigoyen	Alcalde	Municipalidad de Guatemala
PREV.17-2009/DESC/PALENCIA	Alberto Reyes	Alcalde	Municipalidad de Palencia
PREV. 002-2009/DCP	Luis Emeterio Pichiya	Encargado	Oficina de Atención a la Víctima
PREV.062-2009/DCP	Baltazar Gomez Barrios	Comisario	PNC
EIO.001-2009/DESC	Mario Fernando Monzon	Director	Centro de Salud, Villa Canales
ORD.001-2009/DESC	Emilio Orozco Ramos	Jefe de Extensión	El Porvenir Municipalidad de Villa Canales
PREV.038-2009/DESC	Mario Fernando Monzon	Director	Centro de Salud, Villa Canales

EIO.01-2009/DESC/ San Miguel Petapa	Dr. Juan Rumualdo Molina Santos	Director	Centro de Salud, San Miguel Petapa
PREV.19-2009/DE/San Miguel Petapa	Lic. Darwin Homero Porras Quezada	Juez	Juzgado de Paz de Turno del municipio de Villa Nueva
EIO.006-2009/DESC	Dra. Esquivel	Directora	Centro de Salud de Villa Nueva
EIO.001-2009/DESC		Director	Dirección General de Transporte
EIO.002-2009/DESC		Director	Dirección General de Transporte
EIO.003-2009/DESC		Director	Dirección General de Transporte
EIO.004-2009/DESC		Director	Dirección General de Transporte
EIO.005-2009/DESC		Director	Dirección General de Transporte
ORD.001-2009/DESC	Julio Cesar Recinos Salas	Ministro	Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
ORD.002-2009/DESC	Jorge Luis Hernandez Zavaleta	Director	Hospital Nacional de Amatitlán
ORD.003-2009/DESC	Antonio Gonzalez Flores	Juez	Juez de Asuntos Municipales Municipalidad de Villa Nueva
ORD.004-2009/DESC	Antonio Gonzalez Flores	Juez	Juez de Asuntos Municipales Municipalidad de Villa Nueva
ORD.005-2009/DESC		Ministro	Ministerio de Educación
ORD.007-2009/DESC	Jorge Luis Hernandez Zavaleta	Director	Hospital Nacional de Amatitlán
PREV.003-2009/DESC	Antonio Gonzalez Flores	Juez	Juez de Asuntos Municipales Municipalidad de Villa Nueva
PREV.005-2009/DESC	Antonio Gonzalez Flores	Juez	Juez de Asuntos Municipales Municipalidad de Villa Nueva
PREV.007-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.020-2009/DESC		Inspector	Inspección General de Trabajo
PREV.021-2009/DESC		Director	Psiquiatría
PREV.025-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.055-2009/DCP	Ing. Gerson de Leon	Equipo Móvil Central	Fondo de Tierras
PREV.086-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.092-2009/DESC	Jorge Chacon	Director	Servicios Públicos
PREV.150-2009/DE	Dra. Leslie Quevedo	Medico Forense	Ministerio Público
PREV.149-2009/DE	Dra. Leslie Quevedo	Medico Forense	Ministerio Público
PREV.147-2009/DESC	Salvador Gandara	Alcalde	Municipalidad de Villa Nueva
PREV.146-2009/DE	Antonio Gonzalez Flores	Juez	Asuntos Municipales
PREV.165-2009/DESC	Salvador Gandara	Alcalde	Municipalidad de Villa Nueva
PREV.237-2009/DE	Miriam Haide Salvador	juez	Juzgado de Primera Instancia de Familia
PREV.085-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.273-2009/DCP	Baltazar Gomez Barrios	Director	PNC
PREV.132-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora	PNC
PREV.164-2009/DE		Juez	Juzgado de Paz Penal de Turno Villa Nueva

PREV.196-2009/DE		Director	Centro de Salud de Amatitlán
PREV.197-2009/DESC	Jorge Luis Hernandez Zavaleta	Director	Hospital Nacional de Amatitlán
PREV.198-2009/DESC	Jorge Luis Hernandez Zavaleta	Director	Hospital Nacional de Amatitlán

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
PREV.08-2009/DESC/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.329-2009/DESC/Mixco	Amilcar Rivera	Alcalde	Municipalidad de Mixco
PREV.329-2009/DESC/Mixco	Juan Estrada	Gerente General	Municipalidad de Mixco
PREV.320-2009/DESC/Mixco	Autoridades	SASCIM	Municipalidad de Mixco
PREV.10-2009/DESC	Pavel Vinicio Medina Barrera	Inspector	Ministerio de Trabajo
PREV.28-2009/DESC		Inspector	Ministerio de Trabajo
PREV.61-2009/DCP	comisaria15	Inspector	PNC
PREV.127-2009/DCP	Abel Del Cid	Jefe	Comisaría 15, PNC
PREV.033-2009/DESC	Juan Francisco Aniz	Inspector	Inspección General de trabajo

5. RESOLUCIONES

Enero a noviembre de 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	1,068
De apertura de expedientes de investigación	46
Medidas urgentes	96
Se hace efectivo el apercibimiento por no haber cumplido con las medidas urgentes	9
Ampliación de plazo para la investigación	46
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	9
Enmienda de procedimientos	1
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	260
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	3
Acumulación de expedientes	77
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	181
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	82
ACCIONES O RECURSOS PLANTEADOS	
Exhibiciones	18
TOTAL	1,896

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- La resolución de los conflictos de transporte y agua potable se ha realizado por medio de la participación de la unidad específica, a través de mesas de diálogo y compromisos de la unidad encargada, la cual se encuentra en la disposición de asuntos de la Auxiliatura Móvil I, como ente encargado.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Existe auditoría social en la lectura de los indicadores respectivos, a través de la participación permanente.

Educación y promoción

- Desarrollo de la actividad “Valores para la Familia”, en coordinación con la Universidad de San Carlos de Guatemala, ejecutada en octubre, con los temas: proyección de la tolerancia, respeto, honestidad, autoestima, responsabilidad, empatía y dignidad.
- Actividad para la red social en contra de la violencia contra el menor de edad, la mujer y el adulto mayor.

Auxiliatura Móvil de Guatemala - Región II



Auxiliatura Móvil de Guatemala – Región II

De enero a noviembre de 2009, la situación de los derechos humanos en la región atendida por esta Auxiliatura se caracteriza por la insuficiente cobertura de servicios de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo cual la población se ha organizado en grupos o juntas de vigilancia para garantizar de alguna manera la seguridad de sus familias. Los municipios más afectados son: San José del Golfo, San Pedro Sacatepéquez y San Raymundo.

La presencia de grupos delincuenciales como las maras es un problema que afecta, principalmente, a San Pedro y San Juan Sacatepéquez y San Pedro Ayampuc, pues se dedican al cobro del llamado impuesto a residentes y comerciantes. Esta actividad afecta más al sistema de transporte público, que por los constantes ataques a pilotos y ayudantes ha suspendido sus servicios en varias ocasiones.

Otro de los problemas a enfrentar es el poco acceso a los servicios básicos, en parte por el otorgamiento de licencias de construcción a lotificadoras que no cumplen con los requerimientos básicos, como sucede en los municipios de San Pedro y San Juan Sacatepéquez y San Pedro Ayampuc.

En el tema ambiental, el mayor problema se ha suscitado por la intención de instalar una fábrica de cemento en la aldea Santa Fe Ocaña, lo cual ha provocado descontento en varias aldeas del municipio, ocasionando enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad. San Pedro Ayampuc es uno de los municipios que presentan mayor contaminación del medio ambiente, ya que una lotificadora autorizada por la Municipalidad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras, lo que implica que los desechos desfogueen en el río Los Uretes, mismo que es utilizado para diferentes usos domésticos.

En San Raymundo se dedican principalmente a la elaboración de cohetillos, involucrando a menores de edad en esta actividad, lo que ha causado la deserción en las escuelas. Aunque los habitantes están conscientes del riesgo que corren los menores en dicha labor, manifiestan que es lo único que saben hacer.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Móvil de Guatemala Región II se realizaron 474 acciones específicas: 155 de orientación, 288 de prevención, 3 operativos, 16 de acompañamiento y 12 de intervención inmediata.

De investigación

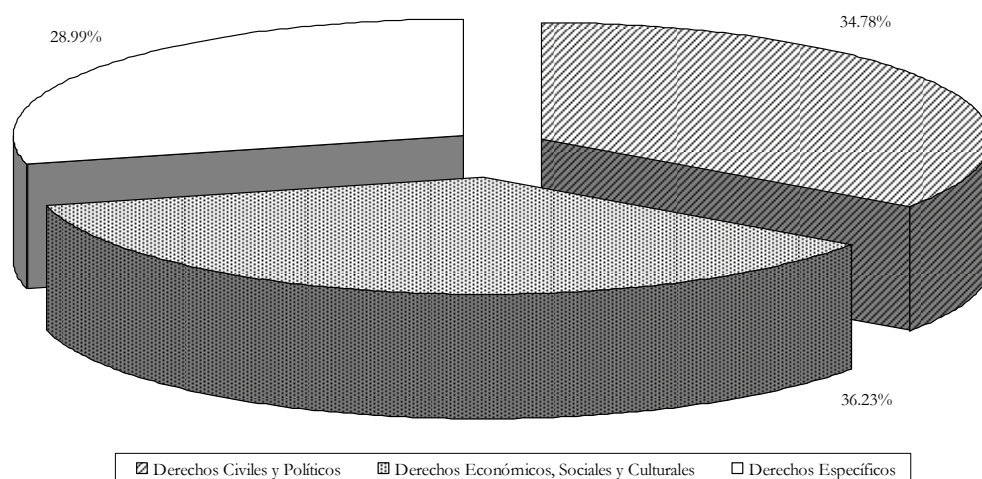
Se abrieron 138 expedientes de investigación: 48 por violaciones a derechos individuales, 50 a derechos económicos, sociales y culturales y 40 a derechos específicos. De ellos, el 7.97% de oficio y el 92.03% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	3	8	4	1	2	5	4	5	10	5	1	48	34.78
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1	3	6	6	12	4	7	4	3	4		50	36.23
Derechos Específicos	5	5	4	4	2	2	5	3	6	4		40	28.99
TOTAL MENSUAL	9	16	14	11	16	11	16	12	19	13	1	138	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		2			4	3		1		1		11	7.97
Ordinario	9	14	14	11	12	8	16	11	19	12	1	127	92.03
TOTAL MENSUAL	9	16	14	11	16	11	16	12	19	13	1	138	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	155	32.70
Prevención	288	60.76
Operativo	3	0.63
Acompañamiento	16	3.38
Intervención inmediata	12	2.53
TOTAL	474	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	4	7	8	4	5	5	7	2	7	7		56	40.58
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	5	8	6	6	9	6	9	10	12	5		76	55.07
Comités Locales de Seguridad		1		1	2					1	1	6	4.35
TOTAL MENSUAL	9	16	14	11	16	11	16	12	19	13	1	138	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Las denuncias más recurrentes en el departamento de Guatemala son por violaciones del derecho humano al orden y la seguridad, específicamente con relación a la coacción y amenazas, así como abuso de poder. El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación y la PNC, ha intentado contrarrestar los hechos denunciados, incrementando el número de agentes de la PNC en el sector e instalando nuevas subestaciones; asimismo, el Ministerio de la Defensa, a través del Ejército Nacional, ha enviado elementos a las diferentes aldeas y se instaló un destacamento en el área más conflictiva.

La Auxiliatura Móvil de la región II ha participado en las diversas actividades de sensibilización, también en reuniones con los líderes comunitarios y se ha acercado a los miembros de las Juntas Locales de Seguridad con el propósito de crearles conciencia de que al momento de patrullar deben respetar los derechos humanos de todas las personas, así como a las fuerzas de seguridad.

Expediente ORD. SJS. GUA. 03-2009/DCP AUX. MOV. II

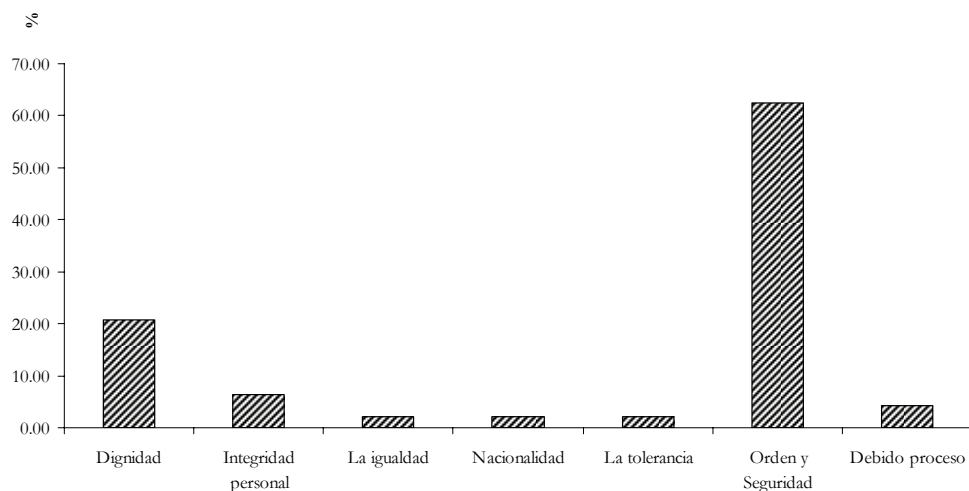
Un denunciante anónimo refirió que las Juntas Locales de Seguridad usan gorros pasamontañas y armas punzocortantes, contundentes y de fuego de dudosa procedencia para cometer todo tipo de arbitrariedades en contra de los vecinos del lugar. Las mismas declararon el toque de queda a partir de las 21 horas, y cualquier persona que sea sorprendida después de esa hora en las calles es detenida, registrada y agredida por sus miembros. Además, los vecinos son obligados a participar en los patrullajes que realizan estos grupos en sus respectivas comunidades, y de no hacerlo son agredidos y amenazados de muerte. Tampoco respetan a las autoridades de seguridad y en varias ocasiones han retenido y amenazado a agentes de la PNC del municipio. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Ministerio de Gobernación, a la Dirección General de la PNC y a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, y se entrevistó a vecinos de diferentes aldeas del municipio con el propósito de recabar información al respecto, estableciéndose que dichas juntas no están legalmente constituidas y que funcionan de manera arbitraria, razón por la cual no se tiene ningún tipo de control sobre ellas.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS **Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Secuestro						1						1	2.08
Trato cruel, inhumano o degradante						1						1	2.08
Amenazas o intimidaciones								4		3	1	8	16.67



INTEGRIDAD PERSONAL													
Tratos o penas inhumanas o degradantes								3				3	6.25
LA IGUALDAD													
Discriminación - nacionalismo								1				1	2.08
NACIONALIDAD													
Privación arbitraria de nacionalidad							1					1	2.08
LA TOLERANCIA													
Represión					1							1	2.08
ORDEN Y SEGURIDAD													
Falta de asistencia social		1										1	2.08
Abuso de autoridad / poder administrativo		2		1	2	1		3	1			10	20.83
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial									1			1	2.08
Amenazas, coacción	3	4	4				1					12	25.00
Detención ilegal								1				1	2.08
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal							1					1	2.08
Limitar el derecho de acción o de petición							1					1	2.08
Linchamientos					1			1				2	4.17
Cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos		1										1	2.08
DEBIDO PROCESO													
No presumir su inocencia								1				1	2.08
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial							1					1	2.08
TOTAL MENSUAL	3	8	4	1	2	5	4	5	10	5	1	48	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Las denuncias más recurrentes son por violaciones del derecho humano al medio ambiente sano y a la salud, por encontrarse grandes focos de contaminación en los diferentes municipios. También son recurrentes las denuncias de violaciones al derecho humano al consumidor y usuario por falta de servicios básicos tales como agua potable, drenajes, calles pavimentadas.

Expediente ORD. SJS. GUA. 17-2009/DESC AUX. MOV. II

A partir de la denuncia que en la Academia de la PNC ubicada dentro de las instalaciones de la Escuela Politécnica de San Juan Sacatepéquez no se cuenta con servicios de agua potable para el consumo de los internos, personal de la Auxiliatura quiso visitar las instalaciones de la referida academia, pero no se le permitió el ingreso, y se solicitó informe circunstanciado a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, constatándose que las instalaciones referidas cuentan con pozo propio. Producto de la investigación, el Ministerio de Gobernación realizó los trabajos necesarios para garantizar el abastecimiento de agua potable en las instalaciones de la Academia de la PNC.

Expediente ORD. SJP. GUA. 19-2009/DESC AUX. MOV. II

Manifiestan los denunciantes, miembros del Comité de Vecinos del callejón Los Rafaelés, aldea Las Anonas, municipio de San José Pinula, que no cuentan con energía eléctrica, agua potable ni drenajes, y que el Comité no ha sido inscrito como tal en la Municipalidad, razón por la cual no ha podido realizar las gestiones para la instalación de los referidos servicios. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal de San José Pinula, en el cual refiere que se han ido realizando trabajos, por fases, de drenajes en la aldea Las Anonas, pero que la implementación de los mismos en el callejón Los Rafaelés tiene un costo muy elevado por la topografía del lugar, por lo que aún no se han planificado.

Expediente ORD. SJP. GUA. 39-2009/DESC AUX. MOV. II

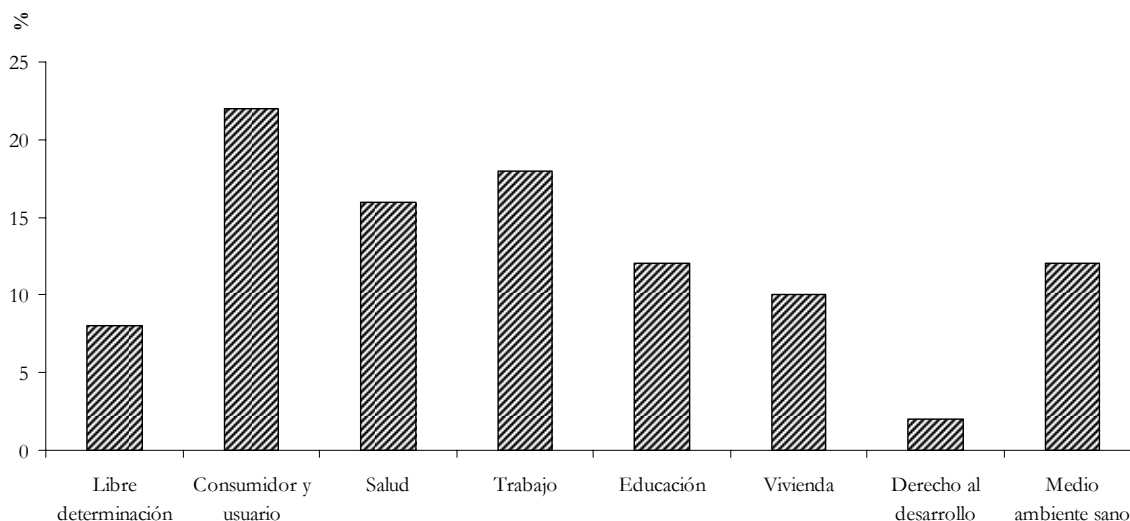
Denuncian los miembros de la Asociación de Vecinos Pro Mejoramiento y Desarrollo de la lotificación Colinas del Prado, ubicada en San José Pinula, que la constructora Plaza San José, Sociedad Anónima, no ha cumplido con la prestación de los servicios básicos contenidos en el contrato de compraventa que se realizara entre ésta y los vecinos, tales como servicio de agua potable (ya que está contaminada), pavimentación, áreas verdes, alumbrado público. Personal de la Auxiliatura solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal de San José Pinula y a la directora del Centro de Salud del mismo municipio, con el fin de que se investiguen los hechos y se tomen cartas en el asunto; asimismo, se visitó el lugar para verificar los extremos de la denuncia.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
LIBRE DETERMINACIÓN													
Restricciones al derecho a la propiedad					1		3					4	8.00
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Fraude								1				1	2.00
Agua contaminada								1				1	2.00
Abusos contractuales – contratos leoninos						1						1	2.00
Desabastecimiento			1	1	2							4	8.00
Alzas inmoderadas de precios y tarifas		2					1					3	6.00
Ausencia de políticas públicas a favor del consumidor					1							1	2.00



SALUD													
Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)					1							1	2.00
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)				1	3	1	1	1				7	14.00
TRABAJO													
Renumeración desigual (rural, mujer, niños)				1								1	2.00
Falta de negociación					1							1	2.00
Despido ilegal o injusto					1							1	2.00
Omisión administrativa (comisiones paritarias)									1			1	2.00
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo			1			2						3	6.00
Falta de pago de las prestaciones laborales									1			1	2.00
Despido injusto							1					1	2.00
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita	1											1	2.00
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación				1								1	2.00
Falta de educación en la comprensión, tolerancia y amistad										1		1	2.00
No ser tratado con justicia					1							1	2.00
Incrementos de cuotas de estudio			2									2	4.00
VIVIENDA													
Inseguridad jurídica de la tenencia		1		2	1							4	8.00
Falta de servicios, materiales e infraestructura										1		1	2.00
DERECHO AL DESARROLLO													
Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza							1					1	2.00
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas								1				1	2.00
Contaminación sonora									1			1	2.00
Desviar o detener de su curso normal el agua			1									1	2.00
Arrojar residuos a las aguas de los ríos, riachuelos, manantiales y lagos			1									1	2.00
Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes										2		2	4.00
TOTAL MENSUAL	1	3	6	6	12	4	7	4	3	4	0	50	100.00



2.3 Derechos específicos

En virtud de que la Auxiliatura Móvil II cubre los municipios de Fraijanes y San José Pínula, donde se ubican los centro penitenciarios de adultos y menores de edad, respectivamente, las denuncias más frecuentes son las que se refieren a violaciones de los derechos humanos de la población reclusa.

Expediente ORD. FRA. GUA. 08-2009/DE AUX. MOV. II

El denunciante informó haber sido brutalmente golpeado y expulsado del sector al cual pertenecía por los demás internos y encontrarse en un sector de aislamiento sin servicios básicos (agua, sanitario, vestido y alimentación). Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a la Dirección General del Sistema Penitenciario, y se entrevistó al director de la Granja Pavón y a los internos del sector 7B, al cual pertenecía el denunciante, para verificar los hechos denunciados. Se estableció que debido al mal comportamiento del denunciante fue expulsado del referido sector por los propios internos, por lo que, para resguardar su seguridad, fue trasladado a un sector de aislamiento donde cuenta con todos los servicios.

Expediente ORD. FRA. GUA. 45-2009/DE AUX. MOV. II

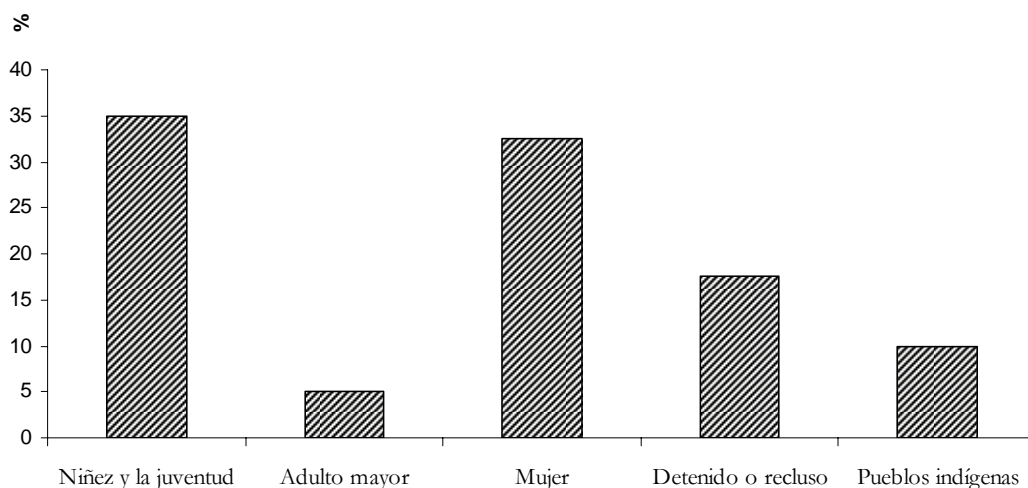
A raíz de la denuncia relativa al traslado de dos privados de libertad del Centro Preventivo de la zona 18 al Centro de Rehabilitación para Hombres Fraijanes II sin la autorización de juez competente, razón por la cual se teme por su integridad física, se solicitó informe circunstanciado a la Dirección General del Sistema Penitenciario, el cual indica que según la Ley del Régimen Penitenciario se pueden realizar los traslados que se consideren pertinentes, dando aviso al Juzgado de Ejecución inmediatamente; en el presente caso el aviso se dio el mismo día. Los traslados fueron realizados en virtud de que el Centro de Rehabilitación para Hombres cuenta con áreas de individualización para el resguardo de la seguridad de reclusos sindicados de delitos de alto impacto.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil	1				1	1	1	1		2		7	17.50
Falta de reconocimiento familiar y de alimentos (alimentación, vestuario, vivienda)		1					2		2			5	12.50
Abuso físico o mental							1					1	2.50
Descuidos o tratos negligentes				1								1	2.50



ADULTO MAYOR														
Violencia física o psicológica		1											1	2.50
Maltrato	1												1	2.50
MUJER														
Discriminación cultural, social, económica, política		2	1						1				4	10.00
Violencia física o psicológica	2		2				1		1				6	15.00
Maltrato								2	1				3	7.50
DETENIDO O RECLUSO														
Acciones que atentan contra su dignidad	1	1		1									3	7.50
Maltrato			1										1	2.50
Traslados inadecuados o peligrosos										1			1	2.50
No permitir visita									1	1			2	5.00
PUEBLOS INDÍGENAS														
Inexistencia de políticas y acciones afirmativas				1									1	2.50
Ejecución de proyectos sin consulta y sin evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente)				1	1	1							3	7.50
TOTAL MENSUAL	5	5	4	4	2	2	5	3	6	4	0	40	100	



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente ACOMPAÑAMIENTO. SJS. GUA. 02-2009/AUX. MOV. II

La alcaldesa municipal de San Juan Sacatepéquez solicitó la presencia de personal de esta Auxiliatura en las elecciones convocadas debido a que, por la división que existe entre los miembros de las comunidades de San Juan Sacatepéquez por la implementación de la planta de Cementos Progreso en el lugar, no hay autoridades

locales reconocidas por la comunidad. Aunque esta Auxiliatura se constituyó en el caserío San Antonio Las Trojes, aldea Cruz Blanca, para verificar el proceso, el mismo no se llevó a cabo porque el grupo que está en contra de la implementación de la empresa cementera no cumplió con lo acordado en reuniones anteriores, de que el sufragio fuera secreto para que los votantes no se sintieran intimidados.

Expediente INTERVENCIÓN INMEDIATA. SJP. GUA. 02-2009/AUX. MOV. II

Personal de esta Auxiliatura intentó iniciar un proceso de mediación pacífica con los internos del Centro Correccional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Etapa II quienes, para exigir el retorno de dos internos trasladados porque ya habían alcanzado la mayoría de edad, retuvieron como rehenes a dos monitores y tres maestros. Sin embargo, al no alcanzarse ningún acuerdo y constatarse que uno de los rehenes había sido brutalmente asesinado, las fuerzas de seguridad ingresaron en el centro por la fuerza tomando el control del recinto y liberando a los otros rehenes.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente INTERVENCIÓN INMEDIATA.SJS.GUA.04-2009 / AUX. MOV. II A favor de: licenciado Rodolfo Zúñiga, Juez de Paz del municipio de San Juan Sacatepéquez Motivo: secuestro Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: la tarde del 4 de junio de 2009, en un sector del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, personas no identificadas se subieron al bus extraurbano en el cual se dirigía el Lic. Zúñiga y se lo llevaron con rumbo desconocido a él y a una joven no identificada.

Expediente PREV.SJS.GUA.24-2009 / AUX. MOV. II A favor de: Carlos Enrique Martínez Motivo: desaparición Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: el 30 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 5:00 horas, salió de su casa de habitación, ubicada en Ciudad Quetzal, rumbo a sus labores en la empresa TELGUA, lugar al que nunca se presentó, según informaron autoridades de dicha empresa, ignorándose su paradero hasta la fecha.

Expediente PREV.FRA.GUA.26-2009 / AUX. MOV. II A favor de: Pedro Augusto González Talva Motivo: negación de asistencia a intervención quirúrgica Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: según informaron familiares, el 29 de enero de 2009 el interno tenía que presentarse al área de Oftalmología del Hospital Roosevelt para ser intervenido quirúrgicamente del ojo derecho, pero dicha cita fue ignorada por las autoridades del Centro de Detención para Hombres Fraijanes I.

Expediente PREV. SJP. GUA. 51-2009 / AUX. MOV. II A favor de: Mario Alexander Amezcuita España y aproximadamente 30 menores más Motivo: hacinación en un lugar pequeño sin que se les proporcionen alimentos Declarado con lugar: no
Descripción del caso: se tuvo conocimiento de que en el Centro de Privación de Libertad para Varones Etapa II tienen hacinados en un cuarto muy pequeño a los adolescentes internos y que llevan 48 horas sin que les sean proporcionados sus alimentos.

Expediente PREV. FRA. GUA. 92-2009/AUX. MOV. II A favor de: José Antonio Galindo (U.A.) Motivo: amenazas y extorsiones Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: el señor José Antonio Galindo (U.A.) fue trasladado de la Granja Penal Canadá, Escuintla, a la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, y al llegar a la misma fue golpeado y extorsionado por otros internos.

Expediente PREV. SJS. GUA. 161-2009/AUX. MOV. II A favor de: Osbaldo Car García, Juan Zet Tubac, Juan Antonio Sabán Turuy, Elio Coloma Orellana, José Mario Turuy Nij, Pablo Chacach Subuyuj, Alberto Díaz Zet y Cornelio Subuyuj Camey Motivo: persecución por parte de Agentes de la PNC y personas desconocidas Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: la exhibición personal fue realizada por parte de personal de la Auxiliatura Móvil región II, toda vez que fue comisionada por la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Juez de Paz del municipio de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala no pudo realizarla, pues fue insultado y amenazado por parte de los vecinos de las comunidades.

Expediente PREV. SCP. GUA. 181-2009/AUX. MOV. II A favor de: Gerson Ariel Franco Gómez, menor de edad Motivo: maltrato infantil por parte de su padre Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: el menor de edad es víctima de maltrato infantil por parte de su padre, Elmer Neemias Franco Reyes, razón por la cual el menor fue rescatado y enviado a una casa hogar con el propósito de resguardar su seguridad.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.FRA.GUA.01-2009/DE AUX.MOV.II	Floridalma del Cid	Directora	Centro de Orientación Femenino, Sistema Penitenciario
ORD.SJS.GUA.03-2009/DI AUX.MOV.II	Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Gobernación
ORD.SJS.GUA.03-2009/DI AUX.MOV.II	Marlene Blanco	Directora	PNC
ORD.SJS.GUA.03-2009/DI AUX.MOV.II	Marta de Coronado	Alcaldesa	Municipalidad de San Juan Sacatepéquez
ORD.SR.GUA.04-2009/DCP AUX.MOV.II	Ramón Pablo Méndez	Jefe de Comisaría	Comisaría 16, PNC
ORD.FRA.GUA.09-2009/DE AUX.MOV.II	Tulio Meda	Alcalde	Municipalidad de Fraijanes
ORD.FRA.GUA.08-2009/DE AUX. MOV. II	Eddy Morales	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.SJS.GUA.12-2009/DESC AUX.MOV.II	Alba Samayoa	Supervisora	Supervisión de Educación de San Juan Sacatepéquez
ORD.SJS.GUA.14-2009/DESC AUX.MOV.II	Marta de Coronado	Alcaldesa	Municipalidad de San Juan Sacatepéquez
ORD.SJS.GUA.17-2009/DESC AUX.MOV.II	Marlene Blanco	Directora	PNC

ORD.SJS.GUA.17-2009/DESC AUX.MOV.II	Marta de Coronado	Alcaldesa	Municipalidad de San Juan Sacatepéquez
ORD.SJP.GUA.19-2009/DESC AUX.MOV.II	Victor Reyes	Alcalde	Municipalidad de San José Pinula
ORD.SCP.GUA.20-2009/DESC AUX.MOV.II	Antonio Coro	Alcalde	Municipalidad de Santa Catarina Pinula
ORD.SCP.GUA.21-2009/DESC AUX.MOV.II	Antonio Coro	Alcalde	Municipalidad de Santa Catarina Pinula
ORD.SR.GUA.26-2009/DESC AUX.MOV.II	Ana Ordóñez	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.SJS.GUA.28-2009/DESC AUX.MOV.II	Jorge Galicia	Director	Dirección Departamental de Educación de Guatemala
ORD.SJP.GUA.29-2009/DESC AUX.MOV.II	Sergio Acajabón	Director	Área de Salud Guatemala Nor-oriente
ORD.FRA.GUA.33-2009/DESC AUX.MOV.II	Tulio Meda	Alcalde	Municipalidad de Fraijanes
ORD.FRA.GUA.33-2009/DESC AUX.MOV.II	Luis Alberto Ferraté	Ministro	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.FRA.GUA.35-2009/DE AUX.MOV.II	Eddy Morales	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.FRA.GUA.35-2009/DE AUX.MOV.II	Pedro Baltasar Gómez	Director	PNC
ORD.FRA.GUA.36-2009/DESC AUX.MOV.II	Tulio Meda	Alcalde	Municipalidad de Fraijanes
ORD.FRA.GUA.37-2009/DE AUX.MOV.II	Eddy Morales	Director	Dirección General del Sistema Penitenciario
ORD.FRA.GUA.37-2009/DE AUX.MOV.II	Pedro Baltasar Gómez	Director	PNC

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SJG.GUA.02-2009/DESC AUX. MOV. II	Arnulfo Ávila	Supervisor	Supervisión de Educación de San José del Golfo
ORD.SJS.GUA.06-2009/DESC AUX.MOV.II	Augusto Marroquín	Director General	Dirección General de Transporte
ORD.SJS.GUA.09-2009/DESC AUX.MOV.II	Federico Irungaray	Supervisor	Supervisión de Educación de San Juan Sacatepéquez
ORD.SJG.GUA.13-2009/DESC AUX.MOV.II	Fidelino Palencia	Alcalde	Municipalidad de San José del Golfo
ORD.SJG.GUA.22-2009/DESC AUX.MOV.II	Fidelino Palencia	Alcalde	Municipalidad de San José del Golfo
ORD.SCP.GUA.30-2009/DESC AUX.MOV.II	Antonio Coro	Alcalde	Municipalidad de Santa Catarina Pinula
ORD.FRA.GUA.36-2009/DESC AUX.MOV.II	Erick Pocasangre Morán	Gobernador	Gobernación Departamental de Guatemala
ORD.FRA.GUA.36-2009/DESC AUX.MOV.II	Luis Alberto Ferraté	Ministro	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Funcionarios públicos declarados violadores de derechos humanos

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SPA.GUA.48-2007/DESC AUX.MOV.II	Eduardo Avalos	Alcalde	Municipalidad de San Pedro Ayampuc
ORD.SJS.GUA.56-2007/DESC AUX.MOV.II	Marta de Coronado	Alcaldesa	Municipalidad de San Juan Sacatepéquez
ORD.SPA.GUA.22-2008/DESC AUX.MOV.II	Eduardo Avalos	Alcalde	Municipalidad de San Pedro Ayampuc
ORD.FRA.GUA.27-2008/DI AUX.MOV.II	Isabel Mendóza	Ex director	PNC
ORD.SJP.GUA.45-2008/DESC	Víctor Reyes	Alcalde	Municipalidad de San José Pinula
ORD.SPA.GUA.05-2009/DESC AUX.MOV.II	Augusto Morroquín	Director	Dirección General de Transporte
ORD.SJS.GUA.06-2009/DESC AUX.MOV.II	Augusto Morroquín	Director	Dirección General de Transporte

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	491
De apertura de expedientes de investigación	47
Medidas urgentes	29
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	4
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	5
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	1
Acumulación de expedientes	48
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	20
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	7
1> Con censura	1
2> Con recomendación	2
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	1
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	7
TOTAL	663

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Informe de muertes violentas: afectando principalmente a los municipios de San Juan Sacatepéquez y San José Pinula, y los menos, San José del Golfo y Fraijanes.

Incidencia política

- Ocho monitoreo en los centros de salud de los municipios que cubre esta Auxiliatura para verificar la cantidad del medicamento Tamiflu con que contaban para atender a personas infectadas con la gripe A H1N1, determinándose que ningún centro de salud tenía la cantidad adecuada.

Educación y promoción

- Dos charlas sobre derechos humanos y el quehacer de esta institución. Una en capacitación a promotores ambientales, realizada en la asociación Sangre de Cristo, del municipio de San Pedro Ayampuc; otra en un diplomado sobre Victimología impartido a jóvenes de los municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, por la asociación juvenil Kojb'iyin Junam.
- Celebración del festival “Vivo mi Juventud sin Violencia” en conmemoración del Día Internacional de la Juventud, en el municipio de San Raymundo.

Auxiliatura Departamental de Huehuetenango



Auxiliatura Departamental de Huehuetenango

De enero a noviembre de 2009, la situación de los derechos humanos en el departamento se caracterizó por el incremento en los índices de delincuencia, lo que viola el derecho a la seguridad; aunado a esto, en la cabecera departamental por más de ocho meses ha existido un conflicto con la Municipalidad por demanda de servicios, llegando al extremo de que la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentó con algunos pobladores, arriesgando la integridad física de personas inocentes que transitaban por el lugar.

El medio ambiente se ve afectado por la basura desechada en las calles de diferentes sectores de Huehuetenango y lugares utilizados como vertederos temporales a los que no se les da un tratamiento adecuado, convirtiéndose en focos de contaminación.

La salud es otro derecho vulnerado por la falta de cobertura del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o por la poca asignación de recursos al Hospital Nacional del departamento, lo que en su momento motivó aperturar el expediente respectivo. La inseguridad alimentaria en varios municipios en extrema pobreza se agudizó por la falta de lluvias y, por ende, la pérdida de cosechas, sobresaliendo el alto grado de desnutrición en Malacatancito.

En cuanto a educación, hay varios problemas: falta de maestros e infraestructura. Entre los casos administrativos y laborales se presentaron: falta de nombramiento a maestros, asignaciones equivocadas de plazas, discriminación a maestros que se les adjudica plazas por razones de edad y género, persecución laboral a docentes por denunciar presunta malversación de fondos en las escuelas, acoso sexual a profesoras.

En otro orden, los hechos de violencia intrafamiliar han incrementado, por lo que esta Auxiliatura constantemente se ocupa de la sensibilización, acompañamientos y orientación a las víctimas de grupos vulnerables y coordina con órganos jurisdiccionales las medidas legales necesarias.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Huehuetenango se realizaron 155 acciones específicas: 30 de orientación, 65 de prevención y 60 de intervención inmediata.

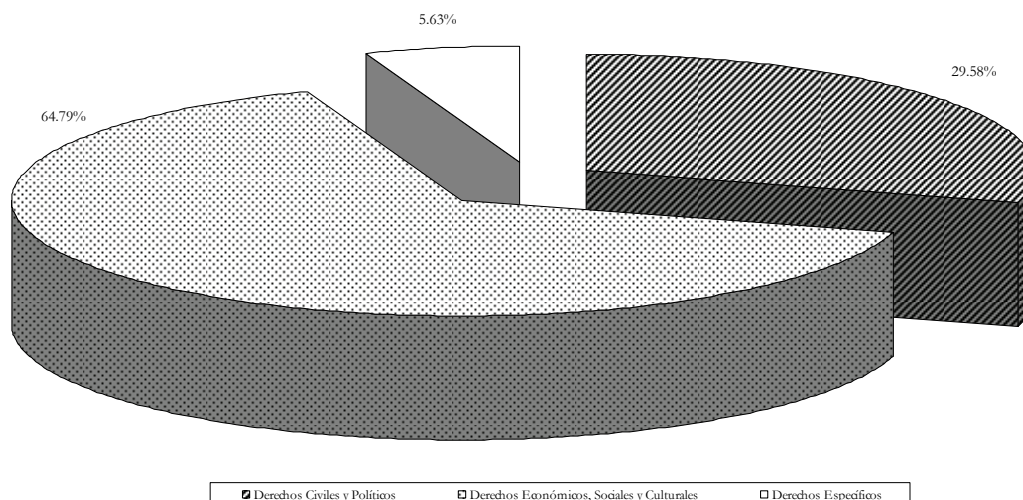
De investigación

Se abrieron 71 expedientes de investigación: 21 por violaciones a derechos individuales, 46 a derechos económicos, sociales y culturales y 4 a derechos específicos. De ellos, el 23.35% de oficio y el 74.65% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 51.92% forma parte del Organismo Ejecutivo y 48.08% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	2	2	3	2		1	2	2	2	4	21	29.58
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	4	5	4	1	4	6	9	2	6	4	1	46	64.79
Derechos Específicos		1						1	2			4	5.63
TOTAL MENSUAL	5	8	6	4	6	6	10	5	10	6	5	71	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	3	3		1	1	2	3	2	1	2		18	25.35
Ordinario	2	5	6	3	5	4	7	3	9	4	5	53	74.65
TOTAL MENSUAL	5	8	6	4	6	6	10	5	10	6	5	71	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	30	19.35
Prevención	65	41.94
Intervención inmediata	60	38.71
TOTAL	155	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	4	10	5	4	6	8	14	5	11	7	7	81	35.84
Judicial	4	8	5	7	11	4	5	5	10	10	6	75	33.19
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	2	9	4	2	1	4	4	3	2	1	2	34	15.04
Ministerio Público				2	6	5	2	1				16	7.08
Centros educativos particulares	1						2	1				4	1.77
DEOCSA				1	1	1	1					4	1.77

Particulares		1		1	1							3	1.33
Consejos de Desarrollo			1	1		1						3	1.33
Comité de Comerciantes			1									1	0.44
Minas de Guatemala		1										1	0.44
Empresa Eléctrica Municipal				1	1	1						3	1.33
Defensoría Maya							1					1	0.44
TOTAL MENSUAL	11	29	16	19	27	24	29	15	23	18	15	226	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Las muertes violentas experimentan aumento constante en el departamento; según autoridades policiales, muchas se relacionan con el narcotráfico y el crimen organizado, y otras se deben a la delincuencia común. La violencia intrafamiliar, ya sea física, sexual, psicológica y patrimonial, está a la orden del día, interviniendo esta Auxiliatura con la solicitud de medidas cautelares necesarias en los casos denunciados.

Se han dado algunos intentos de linchamiento en Santa Cruz Barillas, Malacatancito y Huehuetenango, los cuales se han evitado gracias a la intervención de las diferentes instituciones con las que se ha trabajado de forma coordinada.

La población ha presentado constantes denuncias a esta Auxiliatura en contra de elementos de la PNC por detenciones ilegales, agresiones y extorsiones, y en algunos casos se han visto involucrados algunos funcionarios públicos que cometen abuso de poder, tal el caso de los operadores de justicia.

No se evidencian acciones concretas por parte del Estado para contrarrestar o minimizar las violaciones de los derechos cívicos y políticos de la población, por lo que se han implementado campañas de divulgación, tanto radiales como escritas, para la promoción y divulgación de los derechos humanos; asimismo, se han creado alianzas y coordinaciones entre organizaciones sociales e instituciones gubernamentales.

Expediente EIO.HUE.01-2009/DCP

En oposición a un basurero que contamina, instalado por la Municipalidad de Huehuetenango, vecinos del caserío Las Pilas, La Estancia, bloquearon la carretera y solicitaron la presencia del alcalde. Al presentarse éste, los pobladores pretendían que firmara un acta comprometiéndose a no llevar más basura, pero, al considerarse detenido por los inconformes, solicitó la presencia del Ejército. La Quinta Brigada Militar Mariscal Gregorio Solares, sin mediar palabras, se enfrentó con el grupo de forma verbal y física, para tratar de rescatarlo. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al alcalde en mención, al gobernador departamental, al comandante de la Quinta Brigada, a la COPREDEH y al Ministro de la Defensa, estableciéndose que los elementos de la Brigada actuaron con abuso de poder y autoridad en contra de los vecinos, declarándose violación a los derechos humanos.

Expediente EIO.HUE.05-2009/DCP

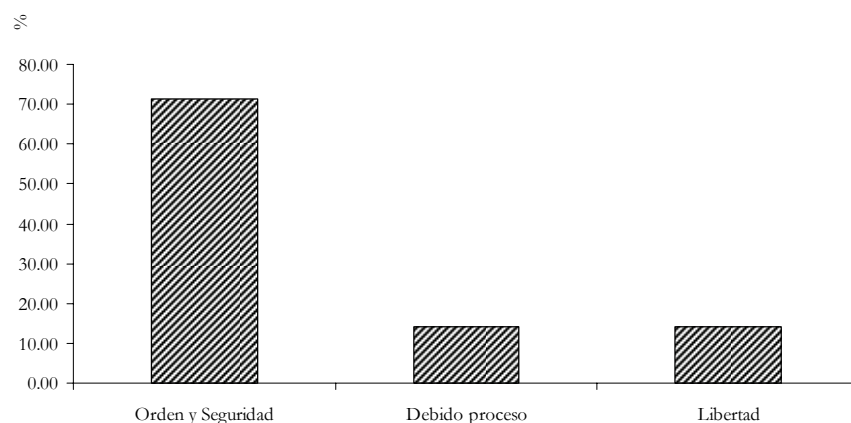
El 26 de febrero tres periodistas, al cubrir una nota periodística, fueron agredidos por pobladores de Malacatancito, sin que el alcalde ni la PNC les prestaran auxilio; al contrario, el alcalde incitó a la población a que los agrediera. Como parte de la investigación se entrevistó a los periodistas agredidos y al alcalde, solicitando informe circunstanciado a éste, quien informó que los pobladores intentaron linchar a un supuesto delincuente en el parque de Malacatancito, por lo que pidió acompañamiento de la PNC logrando su rescate, pero no ordenó que agredieran a los periodistas ni se dio cuenta de que hubiera medios de comunicación en el lugar por no haberse identificado como tales. En el MP se tramitó antejuicio contra el alcalde municipal en el Juzgado de Paz de Malacatancito y al comisario departamental de la PNC se le investigó.

Expediente ORD.HUE.40-2009/DCP

Los denunciantes, representantes de la sociedad civil de Aguacatán, solicitaron información a la Unidad de Información Pública de la Municipalidad de Aguacatán, la que indicó que por notificación de la casa edil se les estaba negando dicho derecho. Se solicitó informe circunstanciado a la Municipalidad, en el cual el alcalde refiere que, según artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por falta de requisitos mínimos no se tramitó la solicitud. Los solicitantes complementaron la información requerida y la Municipalidad les indicó que le diera un tiempo prudencial para recabar los datos, pero no se negó a proporcionarla.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1	2		1			1		1		1	7	33.33
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial			1	2							1	4	19.04
Detención ilegal			1		2			1				4	19.04
DEBIDO PROCESO													
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial											1	1	4.76
Discontinuidad y lentitud procesal											1	1	4.76
Incumplimiento del Estado de su deber de prevenir, investigar, sancionar a los responsables de delitos o crímenes										1		1	4.76
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Información negligente								1	1			2	9.52
Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de movimiento o circulación										1		1	4.76
TOTAL MENSUAL	1	2	2	3	2	0	1	2	2	2	4	21	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Aunque según el Estado sus acciones van encaminadas a erradicar la pobreza y fortalecer los sistemas de salud y educación, se le debe exigir el cumplimiento de la prestación de los servicios y el incremento presupuestario correspondiente. En el ámbito educativo, aún hay un alto porcentaje de analfabetismo, resultado de la mala orientación de los recursos económicos del Ministerio de Educación, y el acceso a los centros de enseñanza se dificulta para los más pobres. Lo mismo ocurre en salud, pues la pobre asignación de recursos económicos y la mala atención, así como la falta de medicamentos básicos, ocasionan que se deje de atender a la población necesitada.

Además, hay deficiencia en la prestación de los servicios públicos, en especial en el municipio de Huehuetenango: el agua no es potable y sólo se clora, el servicio de energía eléctrica es irregular y el cobro es exagerado, y el poco o inexistente conocimiento para el manejo de los desechos sólidos afecta a la población. Condiciones estas que han provocado conflictos locales.

La arbitrariedad se da en todos los ámbitos, por ejemplo, la distribución de proyectos se hace por compadrazgo o compromisos políticos y los proyectos se ejecutan en lugares donde no se necesitan, como los casos de entrega de fertilizantes, Mi familia progresa y otros.

La tenencia de la tierra continúa siendo desigual, pues está en manos de una minoría, lo que genera los conflictos locales más comunes.

Expediente EIO.HUE.02-2009/DESC

Por problemas suscitados con el anterior botadero de basura, la Municipalidad de Huehuetenango abrió un basurero temporal en el caserío Las Pilas, La Estancia. Los vecinos manifestaron que dicho lugar, por no cumplir con los requisitos mínimos de salubridad, es foco de contaminación. Como parte de la investigación se visitó el lugar denunciado y se solicitaron informes circunstanciados en los cuales se evidenció que, pese a las recomendaciones respectivas, no se cumplió con lo requerido para disminuir el impacto en el caserío.

Expediente EIO.HUE.03-2009/DESC

El COCODE de Las Lagunas, zona 10 de Huehuetenango, manifestó su inconformidad por la tala inmoderada de árboles en la comunidad de Ixcuná por parte de la Municipalidad de Huehuetenango, para instalar un basurero en dicho sector. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado y se evidenció que dicha acción es ilícita, por lo que se remitió el caso a la Fiscalía del MP de Huehuetenango para que iniciara las acciones legales correspondientes por la tala de árboles, dándosele el seguimiento respectivo.

Expediente EIO.HUE.06-2009/DESC

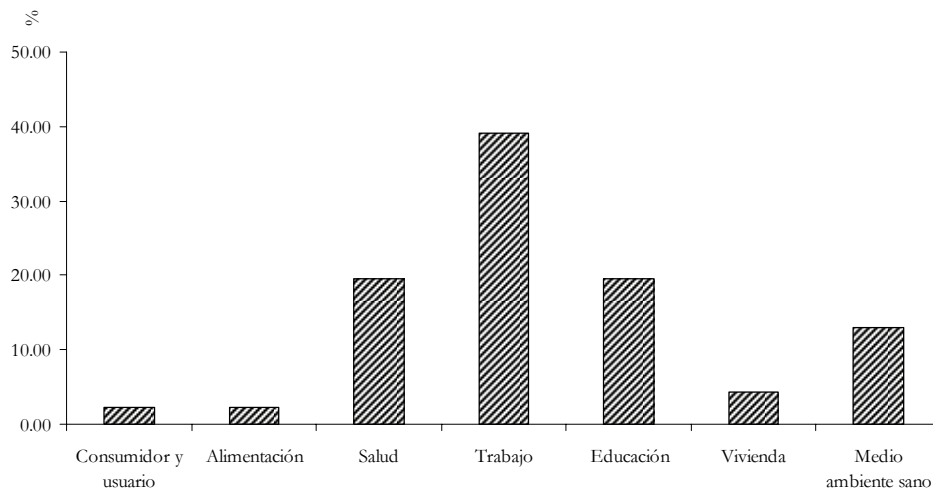
Vecinos y propietarios de negocios denunciaron que la población ha depositado su basura en diferentes puntos de la ciudad de Huehuetenango, a causa de que la Municipalidad de Huehuetenango no encuentra un lugar para instalar un basurero y por falta de recolección. A partir de los informe circunstanciado rendidos se confirmó la situación, lo cual ha causado contaminación ambiental y representa un riesgo a la salud.

Expediente EIO.HUE.10-2009/DESC

Por llamada anónima se denunció que en la Escuela Oficial El Quequeste, La Labor, del municipio de Chiantla, no se cuenta con infraestructura y mobiliario adecuado, y un solo maestro atiende todos los grados de primaria, siendo 50 alumnos los que reciben clases en estas condiciones. A partir de la investigación realizada se confirmaron las condiciones denunciadas y se tuvo conocimiento de que la escuela no ha recibido ninguna ayuda del gobierno. Al momento que la PDH investigó la situación descrita, la Dirección Departamental de Educación inició gestiones de ayuda hacia la escuela.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo									1			1	2.17
ALIMENTACIÓN													
Servicios públicos										1		1	2.17
SALUD													
Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)						1	2					3	6.52
Mala práctica médica			1									1	2.17
Cobros ilegales							1		1			2	4.35
Falta de atención o asistencia médica										1		1	2.17
Negligencia médica			1							1		2	4.35
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones					2	2		1				5	10.87
No evolución del salario						1						1	2.17
Despido ilegal o injusto	1							1	1			3	6.52
Omisión administrativa (comisiones paritarias)		1			1		1		1			4	8.70
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo		1										1	2.17
Falta de pago de las prestaciones laborales						1						1	2.17
Despido injusto									1			1	2.17
Restricciones a la libertad sindical			2									2	4.35
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita		1			1							2	4.35
Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria	1						1					2	4.35
No ser tratado con justicia									1	1	1	3	6.52
No ser respetado							1					1	2.17
Falta de infraestructura						1						1	2.17
VIVIENDA													
Vivienda inadecuada				1								1	2.17
Inseguridad jurídica de la tenencia							1					1	2.17
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas	2	2					2					6	13.04
TOTAL MENSUAL	4	5	4	1	4	6	9	2	6	4	1	46	100.00



2.3 Derechos específicos

La violencia intrafamiliar se ha dado de forma física, sexual, psicológica y patrimonial, siendo los grupos más discriminados: mujeres, personas de la tercera edad, pueblos indígenas, población migrante, niñez y juventud. La Auxiliatura departamental ha intervenido solicitando las medidas cautelares necesarias.

En el caso de la mujer, esta situación muchas veces no es denunciada ya que se origina en el núcleo familiar y en el ámbito laboral es relegada, desconociendo su capacidad intelectual. Entre las personas de la tercera edad, la falta de información por parte del Estado de los derechos que les asisten, así como el irrespeto a sus derechos por su familia y por funcionarios públicos al requerir la prestación de un servicio, vienen a constituir una constante violación a sus derechos. La niñez y adolescencia ve violentados sus derechos al no existir garantías en cuanto al acceso a la educación, dándose un alto porcentaje de analfabetismo debido a la incorrecta distribución de los recursos por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC).

La población indígena de este departamento es otro grupo que sufre discriminación racial, social o cultural, siendo excluida de espacios políticos y laborales. Además, por la escasez de trabajo continúa el flujo migratorio, derivado de la poca o ninguna intervención del Ministerio de Trabajo en el departamento, evidente con la movilización de trabajadores a la zona costera del país y al sur de México para laborar como jornaleros en el corte de café y caña de azúcar, y hacia los Estados Unidos.

Expediente ORD.HUE.07-2009/DE

Una maestra presentó denuncia contra el coordinador técnico administrativo del municipio de Chiantla, quien le ofreció que, a cambio de favores sexuales, le permitiría tener una plaza más cerca de su casa; al no acceder tuvo problemas laborales, así como por haber denunciado el acoso. La denuncia fue remitida a la Fiscalía del MP de Huehuetenango, se solicitó informe circunstanciado a la Directora Departamental de Educación y se realizaron las entrevistas necesarias.

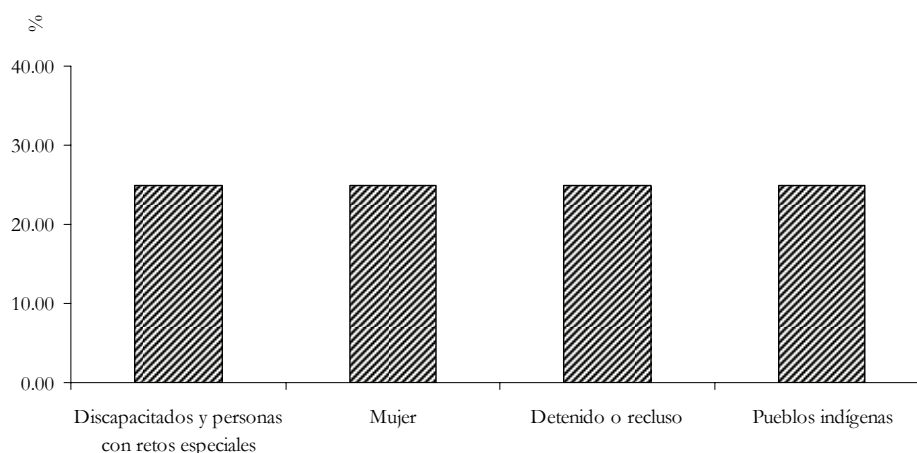
Expediente ORD. HUE.43-2009/DE

Alcaldes y miembros del Consejo Municipal de San Rafael la Independencia presentaron una denuncia por considerar que se están violando los derechos de los pueblos indígenas, al dar concesión de explotación minera sin respetar la consulta popular realizada en ese municipio. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Ministerio de Energía y Minas en relación con los hechos denunciados.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES													
Discriminación cultural, social, económica, política									1			1	25.00
MUJER													
Acoso sexual		1										1	25.00
DETENIDO O RECLUSO													
Acciones que atentan contra su integridad								1				1	25.00
PUEBLOS INDÍGENAS													
No tomar en consideración el derecho indígena									1			1	25.00
TOTAL MENSUAL	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente ORIENTACIÓN HUE. 20-2009

El 10 de agosto, vía telefónica, se informó que el día anterior el señor Alonso Domingo Pérez había sido aprehendido, con supuesta orden de captura por incumplimiento en el pago de pensión alimenticia, y trasladado por agentes de la PNC al Centro Preventivo del municipio de Huehuetenango, donde fue agredido por no pagar la *talacha*. El día de la denuncia, el detenido solicitó a sus familiares y al denunciante que lo que lo llevaran a un centro asistencial por sufrir severos dolores. Cuando lo trasladaban para declarar ante el Juez, se desviaron al sanatorio privado San Rafael, lugar donde se pidió la presencia de la PDH para verificar lo sucedido, pues el señor Pérez había fallecido, situación que era del conocimiento del MP por estar presente con los familiares en el hospital. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC, al médico legal del INACIF y se remitió la denuncia al MP.

Expediente ORD. HUE.26-2009

Vecinos de la colonia Las Rosas, zona 3 de Huehuetenango, presentaron una denuncia contra el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a causa de los cables de alta tensión que cruzan por los techos de las casas sin consentimiento ni permiso de los habitantes, siendo de alto riesgo y peligrosidad para los mismos.

Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y al gerente del INDE.

Expediente ORD. HUE.14-2009/DESC

Vecinos de Santa Bárbara, Huehuetenango presentaron denuncia contra la Municipalidad de Santa Bárbara, COVIAL y COCODES debido a que, con el objeto de ampliar la carretera que de la aldea Chicol conduce a la cabecera municipal de Santa Bárbara, debían demolerse más de 50 viviendas que estaban al lado de la carretera; los COCODES, sin ninguna orden judicial, desalojaron y destruyeron dichas viviendas. Como parte de la investigación se remitió a la Fiscalía del MP de Huehuetenango la denuncia, se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal, al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y a la Dirección General de Caminos.

Expediente EIO.HUE.14-2009/DCP

Por nota publicada en *Prensa Libre*, el 7 de agosto, se tuvo conocimiento de que los denunciantes, vecinos de Malacatancito, en varias ocasiones solicitaron información a la comuna del municipio, pero el alcalde y el Concejo Municipal implementaron otros requisitos, además de los que aparecen en la Ley de Acceso a la Información Pública, justificando así su negativa a brindar información al argumentar que los vecinos no llenaban dichos requisitos (boleto de ornato, solvencia municipal, entre otros). Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal de Malacatancito; con el resultado de un proyecto de resolución final con violación por la falta de acceso a la información por parte del alcalde y miembros del Concejo Municipal de Malacatancito.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE AMPARO

Expediente EIO.HUE.06-2009/DESC Denunciante: de conocimiento Denunciado: Municipalidad de Huehuetenango
Descripción del caso: porque la Municipalidad no encontraba un lugar para instalar un basurero y la falta de recolección, la población inició a depositar su basura en diferentes puntos de la ciudad, creando focos de contaminación y perjudicando a vecinos y propietarios de negocios. Se constató la situación, evidenciándose efectos negativos en la salud y el medio ambiente, por lo que se planteó un amparo.

5. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente II.HUE.26-2009/DCP A favor de: Ludving Camposeco y un acompañante Motivo: por desaparición Declarado con lugar: no
Descripción del caso: desaparición de Ludving Camposeco y un acompañante en el departamento de Huehuetenango.

6. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
II.HUE.93-2008	Marvel Danilo Angel Robledo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Huehuetenango
ORD.HUE.30-2008	Dr. Frank Rivera	Director Departamental	IGSS
II.HUE.103-2008	Marvel Danilo Angel Robledo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Huehuetenango

ORD.HUE.50-2007	Gaspar Marquin Simón	Alcalde Municipal	Municipalidad de Aguacatán
II.HUE.93-2008	Juan Hernández Fabián	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Sebastián H
EIO.HUE.01-2009	Marvel Danilo Angel Robledo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Huehuetenango
EIO.HUE.01-2009	Rudy Otoniel Cardona Chávez	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental Huehuetenango
EIO.HUE.01-2009		Comandante	Quinta Brigada Huehuetenango
EIO.HUE.01-2009		Delegado	COPREDEH
EIO.HUE.02-2009	Ing. Herman Ochoa Castillo	Delegado	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
EIO.HUE.02-2009	Marvel Danilo Angel Robledo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Huehuetenango
II.HUE.01-2009		CTA San Sebastian H	CTA San Sebastian H
II.HUE.58-2008	Lic.Edwin Recinos	Fiscal Distrital	Ministerio Público
II.HUE.102-2008		Comisario	PNC, Huehuetenango
II.HUE.92-2008	Marvel Danilo Angel Robledo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Huehuetenango
ORD.HUE.02-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
EIO.HUE.09-2008	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
EIO.HUE.02-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Director Departamental	Dirección del Área de Salud
II.HUE.98-2008	Lic. Carlos Castillo	Fiscal Municipal	Ministerio Público, Santa Eulalia
EIO.HUE.01-2009		Comandante	Quinta Brigada Huehuetenango
ORD.HUE.02-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
II.HUE.100-2008	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
II.HUE.93-2008			Plan de Prestaciones del Empleado Municipal
II.HUE.91-2008	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
II.HUE.07-2008			IVS/IGSS Guatemala
II.HUE.28-2008	Ing. Herman Ochoa Castillo	Delegado	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
II.HUE.79-2008		Ministra	Ministerio de Educación
II.HUE.100-2008		Ministra	Ministerio de Educación
EIO.HUE.01-2009	Abraham Valenzuela Gonzalez	Ministro	Ministerio de la Defensa
ORD.HUE.03-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
II.HUE.04-2009		Gerente	Empresa Eléctrica Municipal Huehuetenango
EIO.HUE.05-2009	Irene Hidalgo López	Alcalde Municipal	Municipalidad de Malacatancito
EIO.HUE.05-2009		Comisario	PNC, Huehuetenango
II.HUE.09-2009	Ricardo Herrera	Alcalde Municipal	Municipalidad Chiantla
ORD.HUE.37-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
ORD.HUE.38-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
ORD.HUE.42-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
PREV.HUE.43-2009	Jesus Eliseo Lopez Merida	Director Departamental	SESAN
PREV.HUE.43-2009	Dr. Jose Orlando Cano Lopez	Director Departamental	Dirección Área de Salud, Huehuetenango
ORD.HUE.40-2009	Gaspar Marquin Simón	Alcalde municipal	Municipalidad de Aguacatán

PREV.HUE.59-2009	Romy Fuentes	Comisario	PNC, Huehuetenango
ORD.HUE.44-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
ORD.HUE.50-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
PREV.HUE.61-2009	Doc. Frank Rivera	Director	IGSS
II.HUE.60-2009		Encargado de Presidios	PNC, Huehuetenango

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
II.HUE.101-2008	Pascual Lopez Escobar	Alcalde Municial	Municipalidad de Concepción Huista
II.HUE.83-2008	Ing. Hermán Ochoa Castillo	Delegado	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
II.HUE.83-2008	Marvel Danilo Ángel Robledo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Huehuetenango
II.HUE.01-2009	Juan Hernández Fabián	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Sebastián H
ORD.HUE.03-2009	Licda. Alida Guillermina Merida	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación, Huehuetenango
II.HUE.61-2008	Gregorio Luciano Nolasco	Alcalde Municipal	Municipalidad de Sta. Cruz Barillas
II.HUE.51-2009	Ing. César Augusto Fernandez Fernandez	Director General	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
PREV.HUE.61-2009	Gregorio Luciano Nolasco	Alcalde Municipal	Municipalidad de Sta. Cruz Barillas
ORD.HUE.47-2009	Saturnino Figueroa	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Juan Ixcoy

7. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	154
De apertura de expedientes de investigación	71
Medidas urgentes	1
Se hace efectivo el apercibimiento por no haber cumplido con las medidas urgentes	1
Ampliación de plazo para la investigación	225
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	213
Acumulación de expedientes	4
Resoluciones finales	
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	
> Con recomendación	6
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	12
De control administrativo	1
Comportamiento administrativo lesivo	3
> Con recomendación	5
Acciones o recursos planteados	
Amparos	1
Exhibiciones	1
TOTAL	698



8. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- 24 intervenciones en incidencia en políticas públicas en diferentes conflictos.
- 30 reuniones con las instituciones del departamento para coordinar diversas acciones.
- Ocho mapeos políticos de diferente naturaleza remitidos a la sede central.
- 50 alertas tempranas y monitoreos con la sede central.
- Seis reuniones con la Comisión de Seguridad y Resolución de Conflictos y Derechos Humanos del departamento.
- 60 orientaciones a personas en diferentes aspectos.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Capacitación a 32 miembros del COMUDE en el municipio de San Rafael Petzal sobre el tema “Acuerdos de Paz, Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria”.
- Continuidad en la verificación y monitoreo en las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, en relación con la atención a los casos presentados por la población.

Educación y promoción

- Nueve seminarios sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, con la participación de tres municipalidades, COCODES de primer y segundo nivel del municipio de Huehuetenango y personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Cuatro seminarios de prevención de linchamientos en coordinación con el Organismo Judicial, dirigido a alcaldes auxiliares, regidores y presidentes de COCODES de los municipios de San Gaspar Ixchil, Santa Bárbara y Santa Cruz Barillas.
- 71 actividades educativas de proyección social: “Abuelos por siempre”, realizado en escuelas del municipio de Malacatancito; “Expresemos nuestros derechos”, dirigido a estudiantes del nivel primario de escuelas del municipio de Chiantla, “Proyecto Niño o Niña Procurador o Procuradora por un año”, capacitación, elección y visita al PDH en sede central.
- Celebración del Día Internacional de la Paz en diferentes estaciones radiales y dos sistemas de cable local.
- Seis talleres sobre derechos humanos dirigidos al personal de la PNC.
- Cinco talleres de formación en el tema de acciones policiales para el abordaje contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, dirigido a agentes de la PNC.
- 21 seminarios y talleres sobre la visión integral de los derechos humanos, mecanismos alternativos, resolución de conflictos y Acuerdos de Paz.
- Conformación y seguimiento de la red de paternidad y maternidad responsable en todo el departamento.
- Coordinación, seguimiento y apoyo a la Comisión No. 2 del Comité Ejecutivo de Justicia, con el tema de MARC’S y derecho consuetudinario o derecho maya.
- Un programa televisivo con el tema “Derechos del Migrante”.
- Tres foros sobre “Derechos Humanos de la Mujer, Violencia Intrafamiliar y el quehacer institucional” por el Día Internacional de la Mujer.
- Cuatro programa de radio con los temas: “Derechos del Trabajador”, “Medio Ambiente y Consumidor”, “Derechos de las Personas con Discapacidad” y “Derechos de los Pueblos Indígenas”.
- Cuatro capacitaciones con los temas: “Derechos Humanos de la Mujer” a estudiantes de la Escuela de Enfermería (EPAEH); “Perspectiva de Género y Resolución de Conflictos”, en Santa Cruz Barillas; “Derechos de los Pueblos Indígenas”, en San Rafael Petzal; “Instrumentos Nacionales e Internacionales que protegen a la mujer”, en la aldea Checruz, Colotenango.
- Tres actividades sociales: con niñez trabajadora de las calles de Huehuetenango, entregando vitaminas donadas por ONG; entrega de víveres donados por ONG, a personas de la tercera edad del Asilo del Amparo de San José de Huehuetenango; por el Día del Niño, realizada en Jacaltenango, con el tema “Derechos de la Niñez”.



Auxiliatura Móvil de Huehuetenango



Auxiliatura Móvil de Huehuetenango

La situación de los derechos humanos en los diez municipios de Huehuetenango cubiertos por esta Auxiliatura se caracteriza por la falta de políticas públicas integrales que garanticen los derechos de cada persona; aunado a esto, la crisis económica que atraviesa el país afecta aún más las áreas rurales, lo que incrementa la pobreza y extrema pobreza, en especial del área mam del departamento. Las condiciones sociales adversas y la falta de infraestructura, personal y equipo de la Policía Nacional Civil (PNC) inciden en el incremento de la violencia, vulnerándose el derecho a la vida y la seguridad ciudadana.

Referente a la justicia, seis de los diez municipios cuentan con un Juzgado de Paz, pero por sus limitaciones no pueden atender todos los casos de tipo civil, laboral y penal, siendo necesario crear las instancias necesarias que faciliten estos servicios.

Los problemas agrarios continúan sin solucionarse: ante la falta de recursos económicos para pagar abogados, las personas no acuden a las instancias que deberían ocuparse de ello.

Los centros de salud, aunque ahora cuentan con más personal que el año pasado siguen careciendo de insumos, medicamentos e instalaciones apropiadas.

En el campo educativo, prevalece el analfabetismo en los municipios del área sur mam del departamento, situación vinculada a la falta de infraestructura y de personal para los centros educativos de los niveles básico y diversificado.

Los grupos más vulnerables se encuentran en el área rural siendo éstos: mujer, niñez y adolescencia, y adultos mayores. Las áreas más conflictivas son los municipios de San Ildefonso Ixtahuacán, Colotenango, Santiago Chimaltenango, La Democracia y San Gaspar Ixchil.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Móvil de Huehuetenango se realizaron 431 acciones específicas: 255 de orientación, 52 de prevención, 13 de observación, 16 de mediación, 44 de acompañamiento, 39 de intervención inmediata y 12 de atención a la víctima.

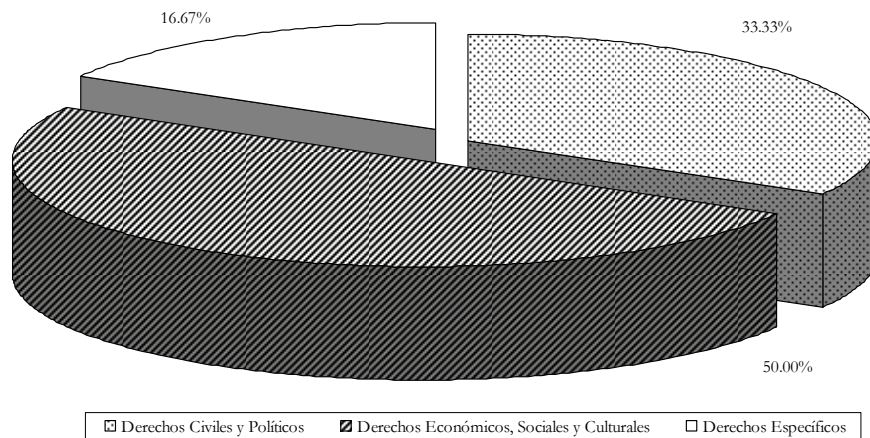
De investigación

Se abrieron 6 expedientes de investigación: 2 por violaciones a derechos individuales, 3 a derechos económicos, sociales y culturales y 1 a derechos específicos. De ellos, el 33.33% de oficio y el 66.67% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos								1	1			2	33.33
Derechos Económicos, Sociales y Culturales					2			1				3	50.00
Derechos Específicos			1									1	16.67
TOTAL MENSUAL	0	0	1	0	2	0	0	2	1	0	0	6	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio								1	1			2	33.33
Ordinario			1		2			1				4	66.67
TOTAL MENSUAL	0	0	1	0	2	0	0	2	1	0	0	6	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	255	59.16
Prevención	52	12.06
Observación	13	3.02
Mediación	16	3.71
Acompañamiento	44	10.21
Intervención inmediata	39	9.05
Atención a la víctima	12	2.78
TOTAL	431	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo			1		2							3	9.09
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades								2	1		2	5	15.15
DEORSA											2	2	6.06
Particulares											22	22	66.67
Consejos de Desarrollo											1	1	3.03
TOTAL MENSUAL	0	0	1	0	2	0	0	2	1	0	27	33	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Las principales problemáticas enfrentadas se dan por violaciones al derecho a la igualdad, al nombre, al reconocimiento paterno ante autoridad competente, a la dignidad (en su mayoría, mujeres y personas de la tercera edad), por diferentes causas y entes agresores.

En cuanto a la integridad personal, se han dado varios casos de muertes violentas, violación al orden y seguridad por abuso de autoridad, de libertad, en el incumplimiento del Estado en resarcir a las víctimas, siendo los más vulnerables las personas adultas mayores, la niñez y juventud y las mujeres.

Expediente EIO.AUX.MOV.CUILCO.HUE.001-2009/DCP

Acción Ciudadana, según publicación de *Prensa Libre* del 6 de agosto, denuncia que un vecino solicitó información acerca de sueldos y cargos en la Municipalidad de Cuilco, indicándole en ésta que no contaban con Unidad de Acceso a la Información Pública, por lo que al final sólo le enviaron un listado con dietas y viáticos. Personal de la PDH verificó en esa Municipalidad la existencia de la oficina de acceso a la información, solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal y entrevistó a la trabajadora de aquella oficina, quien manifestó que sí se recibió la solicitud de información referida, pero sólo se entregó información parcial, indicios que dan origen a aperturar otro expediente.

Expediente EIO.AUX.MOV.CUILCO.HUE.002-2009/DCP

Los oficios No. 28-2009 Ref. COCODE y No. 36-2009 Ref. COCODE se refieren a una solicitud de información presentada al alcalde municipal de Cuilco, la cual, según Decreto No. 57-2008 del Congreso de la República, no es reservada ni confidencial. Como parte de la investigación se entrevistó a la responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública, quien manifestó que debe solicitar la información al tesorero.

Expediente ORIENT.AUX.MOV.SAN ILD.IXTA.003-2009/DCP

Tras una discusión en la finca El Lucero, aldea Isnul, San Pedro Necta, el caporal de la finca asesinó con arma de fuego al esposo de la denunciante, en presencia de su hijo menor de edad; tres horas después llegó la esposa del ultimado y el encargado de la finca le manifestó que arreglaran el problema amistosamente, que se encargaría de todos los gastos y, además, le daría una compensación económica, pero no cumplió. Posteriormente un familiar de la viuda le manifestó que había rumores de que el encargado de la finca quería asesinarla y a sus hijos. El Ministerio Público tiene conocimiento de lo sucedido e investiga el caso.

Expediente ORIENT.AUX.MOV.LA DEMO.HUE.66- 2009/DCP

El director de la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Vega Pontzaj, La Democracia, aprovechó la visita del alcalde municipal a esa comunidad para solicitar la ampliación de la escuela con tres aulas; construcción que fue ejecutada. Sin embargo, algunos integrantes del COCODE, en especial el presidente, se quedaron con las llaves de las aulas no queriendo entregarlas. Tras entrevistar al alcalde municipal para saber qué conocimiento tenía del problema, éste dialogó con los integrantes del COCODE, quienes aceptaron entregar las llaves.

Expediente ORIENT.AUX.MOV.SANT.CHIMALT.HUE.63-2009/DCP

El 26 de septiembre, en horas de la madrugada, la víctima recibió una llamada anónima indicándole que saliera a la calle, lo cual hizo y ya no regresó a su casa. Después, llamaron al hermano de la víctima desde el celular de éste, y una voz lo interrogó sobre la certeza de la desaparición y luego le indicó que ya estaba muerto. La esposa del desaparecido manifestó desconocer si su esposo estaba amenazado. Personal de la Auxiliatura brindó orientación para que plantearan su denuncia en la instancia de justicia respectiva.

Expediente MEDIACIÓN.AUX.MOV.S.ILDEFONSO.IXTA.HUE.01-2009/DCP

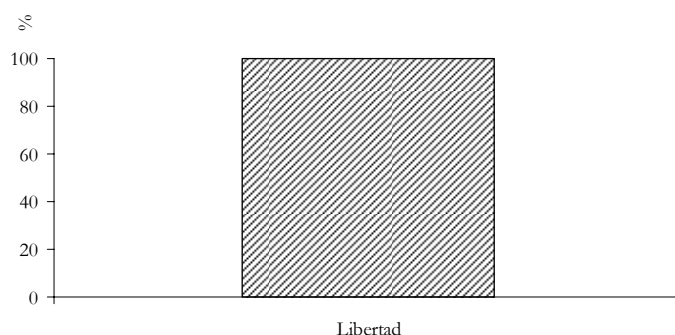
Los denunciantes, concejales del municipio, solicitaron la mediación de la Auxiliatura Móvil en el conflicto que afronta la Municipalidad por diferencias administrativas, abuso de autoridad, violación a la dignidad y la

falta de coordinación entre ellos y los denunciados (alcalde municipal y síndicos I y II). Aunque durante la mediación ambas partes acordaron trabajar en equipo, tres meses después los problemas empeoraron al punto de cerrar la Municipalidad; luego de las manifestaciones de los vecinos se reabrió, mas a la población sólo la atienden los concejales.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
LIBERTAD													
Restringir la libertad de expresión: Falta de acceso								1	1			2	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

En lo referente a la educación se dieron casos de poco personal docente en los institutos de enseñanza media y el desacato de profesores en cuanto a cubrir de forma temporal ciertos lugares. También se iniciaron expedientes en materia laboral, por despido injusto e incumplimiento de pago de prestaciones y por no reconocer una plaza ganada por oposición.

También son frecuentes las denuncias sobre el derecho a la propiedad, pues se han dado casos en que las personas venden sus terrenos y, luego de algunos años, lo venden nuevamente; los conflictos por usurpación de estos bienes son frecuentes, así como los conflictos limítrofes, llegando a consecuencias muy lamentables.

Expediente ORD.AUX.MOV.SANTIAGO CHIMAL. 001-2009/DESC

Los denunciantes indican que solicitaron la contratación de profesores a la Coordinadora Técnica Administrativa, a la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango y a la Ministra de este ramo, por contar con sólo dos maestros para atender a 130 alumnos, pero a la fecha de la denuncia no habían recibido respuesta favorable. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado y se entrevistó al coordinador técnico administrativo de San Pedro Necta, quien emite resolución No. 14-2009 del 16 de abril, asignando temporalmente a dos profesores para prestar sus servicios en el INEB Telesecundaria jornada matutina del cantón Las Piedras, Santiago Chimaltenango.

Expediente ORD.AUX.MOV.DEMOCRACIA.HUE.02-2009/DESC

Según la denunciante, en agosto de 2007 fue asignada para impartir el curso de Estudios Sociales en el Instituto Nacional de Educación Básica de La Democracia, pero a la fecha no ha recibido ninguna información respecto a su nombramiento, habiendo consultado en diferentes ocasiones a la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango. Según el informe rendido por la directora departamental de Educación, el expediente de la profesora fue enviado a la Oficina Nacional de Servicio Civil, indicando que debe acreditar el título de Profesorado en Educación Media especializado en Historia y Ciencias Sociales, indispensable para la asignación de puestos de nivel medio.

Expediente ORD.AUX.MOV.DEMO.HUE.03-2009/DESC

El denunciante indicó que el Concejo Municipal lo despidió ilegal e injustamente y no le ha pagado sus prestaciones laborales. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal, quien indicó que se hará efectivo el pago de las prestaciones y los meses pendientes.

Expediente ORIENT.AUX.MOV.SAN.ILDF.IXTA.HUE.44-2009/DESC

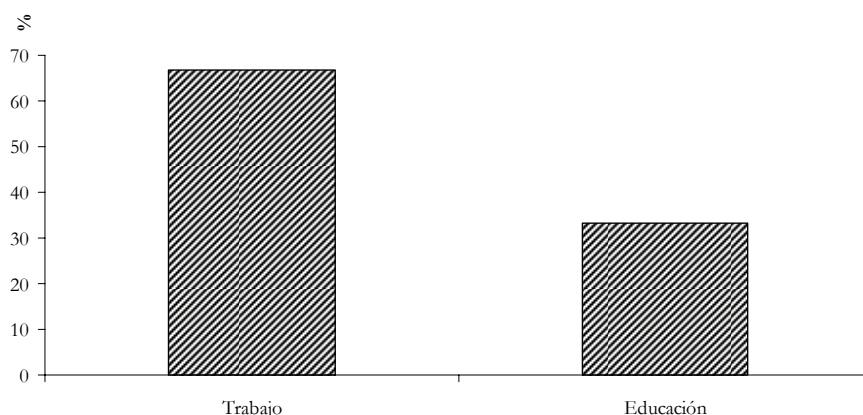
En la aldea La Cumbre se está abriendo una brecha que beneficiará a varios vecinos y comunidades como el cantón Tuisamiento, no obstante, el lugar tiene un nacimiento de agua que beneficia a más de 60 familias, el cual está amenazado de ser contaminado por la maquinaria que se está utilizando. El Comité Pro Carretera Aldea La Cumbre, San Ildefonso Ixtahuacán, indicó que integrantes del comité, vecinos y líderes estarán presentes el día que pase la maquinaria para verificar que no se dañe el nacimiento de agua.

Expediente No. ORIENT.AUX.MOV.CUILCO.HUE.34-2009/DESC.

El denunciante indicó que el 20 de febrero de 1977 el denunciado vendió un terreno a representantes del equipo de futbol del caserío Ixtatitl, Hoja Blanca, Cuilco, para construir un campo de futbol comunitario; pero actualmente indica que el terreno es de él y no deja que se use para recreación. Otro vecino indica que el terreno es comunitario por lo que no debería negarse su uso y que, además, el denunciado les quitó el documento original con el que lo volvió a vender, pero la comunidad tiene un acta suscrita y firmada por él y los representantes de la comunidad de cuando fue vendido. Como parte de la investigación se revisaron fotocopias de los documentos presentados por el denunciante orientándolo para iniciar un juicio civil y se coordinó con la Defensoría Maya, la cual llevará este caso ante el Juzgado competente.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral					1							1	33.33
Falta de pago de las prestaciones laborales								1				1	33.33
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria					1							1	33.33
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	100.00



2.3 Derechos específicos

Expediente ORD.AUX.MOV.STGO.CHIMALTENANGO.HUE.001-2009/DE

Un grupo de padres de familia de los alumnos del Instituto Nacional de Telesecundaria de Santiago Chimaltenango denunciaron que el director y maestros tras obligar a los estudiantes a recaudar víveres, hicieron mal manejo de ellos en conjunto con miembros del comité de padres de familia. Además, coaccionaron a los jóvenes para vender números de una rifa bajo amenaza de no darles exámenes finales. Durante la investigación el director manifestó que se coordinó con el alcalde municipal para la entrega de víveres pero enfrentaron problemas para trasportarlos hasta el lugar beneficiario; personal de la Auxiliatura Móvil constató que aún hay víveres pero que una parte se la quedó el comité.

Expediente ORIENT. AUX.MOV. SAN ILD. IXTA. HUE. 49-2009/DE

La denunciante manifestó que contrajo matrimonio civil con el denunciado, con quien procrearon una hija, a la cual no quiere reconocer legalmente. Se coordinaron acciones con la Defensoría de la Mujer Indígena para que se le brinde orientación jurídica en el proceso de paternidad y filiación ya que la víctima es de escasos recursos económicos.

Expediente ORIENT. AUX. MOV. SAN ILD. IXTA. HUE. 69-2009/DE

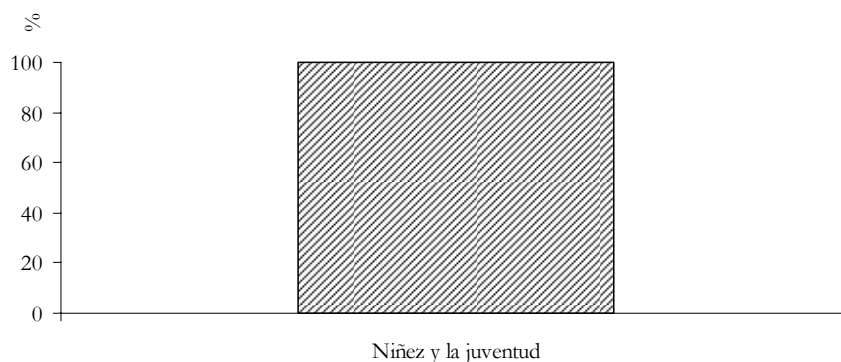
Indica la denunciante que desde la separación, el padre de sus hijos, dos menores de edad, se niega a proporcionarle la pensión alimenticia. Se coordinó con la Defensoría Maya para que los practicantes brinden a la denunciante la dirección jurídica necesaria ante los tribunales competentes.

Expediente ORIET. AUX. MOV. SAN ILD. IXTA. HUE. 64-2009/DE

La denunciante indica que el padre de su hijo no le ha proporcionado la pensión alimenticia a favor del menor pese a la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Familia. Se coordinó con la Defensoría Maya para que se asigne el juicio ejecutivo en la vía de apremio.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven			1									1	100.00
TOTAL MENSUAL			1									1	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Expediente PREV.AUX.MÓV.SAN.ILD.IXTA.HUE.04-2009/DCP

El 3 de febrero vecinos no identificados de la comunidad de Chanchiquía, San Ildefonso Ixtahuacán, detuvieron a dos jóvenes acusándolos de robar objetos religiosos, los ataron y agredieron físicamente. Personal de la Auxiliatura indicó a los encargados de la junta de seguridad de las comunidades de Chanchiquía y Chejoj que estaban cometiendo un delito al retener ilegalmente y querer linchar a estos jóvenes, y que debían entregarlos a la autoridad competente, orientando a los líderes comunitarios para que sensibilizaran a la población. Vía telefónica, un profesor del instituto de telesecundaria de esta comunidad convenció a los vecinos para que liberaran a los jóvenes.

Expediente ORIENT.AUX.MOV.SAN.ILD.IXTA.HUE.132-2009/DE

Personal de la PDH, un auxiliar de enfermería, la Supervisora Municipal del Centro de Salud y personal del Centro de Atención Permanente de San Ildefonso Ixtahuacán se presentaron a la casa del afectado, quien quedó paralítico a causa de un accidente, ya que por estar postrado en una cama empezó a tener llagas en las piernas, las que se infectaron por falta de cuidado e higiene. Se sensibilizó al afectado y a su familia para que pudiera ser revisado y luego remitido al Hospital Nacional de Huehuetenango.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente PREV.AUX.MÓV.CUILCO.HUE.010-2009/DE

A favor de: Carolina Claudio Juárez y tres hijas menores

Motivo: sus tres hijas le fueron arrebatadas por su ex conviviente, Amílcar Micael López Gerónimo

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: al Juzgado de Paz de Cuilco se le solicitó exhibición personal porque la señora Carolina Claudio Juárez manifestó que su ex conviviente es muy violento, motivo por el cual se separó. En los primeros días de junio él se llevó a las hijas y la señora teme que las agreda de forma física y psicológica, incluso que pueda abusar sexualmente de ellas.

Expediente PREV.AUX.MOV.LA DEMOCRACIA.HUE. 016-2009/DCP

A favor de: Marco Vinicio Jiménez Sánchez

Motivo: encarcelado ilegalmente por estar ebrio y peleándose con un vecino

Declarado con lugar: no

Descripción del caso: al Juzgado de Paz de Colotenango se le solicitó exhibición personal porque en la aldea la Barranca Grande, Colotenango, alcaldes auxiliares integrantes de los COCODES y otros líderes comunitarios confinaron por dos días en una cárcel clandestina que se encuentra en esa comunidad al señor Marco Vinicio Jiménez Sánchez, por insultar a algunos vecinos mientras se encontraba en estado de ebriedad. Finalmente fue dejado en libertad.

Expediente PREV.AUX.MOV.LA DEMOCRACIA.HUE. 019-2009/DCP

A favor de: Humberto Jesús López Martín

Motivo: por estar detenido y amarrado en un poste

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: al Juzgado de Paz de La Democracia se solicitó exhibición personal a favor del señor Humberto Jesús López Martín, originario de la comunidad Pueblo Nuevo, San Pedro Saloma, quien fue atado a un poste cerca del Ministerio Público de la Democracia y agredido físicamente por vecinos y comerciantes que lo acusaban de robo. Fue entregado a la PNC con la condición que devolviera lo robado.

Expediente PREV.AUX.MOV.SAN GASPAR IX.HUE.24-2009/DCP

A favor de: Efraín García López, alcalde municipal, y Sebastián Godínez Mendoza, presidente del COCODE de la cabecera urbana

Motivo: detención ilegal

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: al Juez de Paz de San Ildefonso Ixtahuacán se le solicitó exhibición personal a favor de Efraín García López y Sebastián Godínez Mendoza, detenidos ilegalmente por un grupo de vecinos de diferentes comunidades, acusados de no haberles trasladado la información correcta respecto a la manifestación pacífica en contra de la explotación de los recursos naturales, los ataques y asesinatos de líderes del área mam. Regresaron molestos al despacho del alcalde, le quitaron las llaves al comisario edil de la cárcel y encerraron a las personas mencionadas; posteriormene las liberaron, pero exigieron al alcalde que les pagara su día laboral.

Expediente PREV.AUX.MOV.SAN ILDEF.IXTA.HUE.26-2009/DCP

A favor de: Carlos Morales Maldonado

Motivo: retenerlo por intimidar a uno de los concejales municipales

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: se solicitó al Juez de Paz de San Ildefonso Ixtahuacán exhibición personal a favor de Carlos Morales Maldonado, originario del caserío Siete Caminos, aldea Vega de Polajá, quien se encontraba retenido en las oficinas municipales por amenazar al primer concejal. El señor Morales Maldonado había llegado a una tienda preguntando cuánto dinero le darían por una cabeza humana, por lo que fue llevado ante las autoridades municipales, donde amenazó al Primer Concejal Municipal en presencia de algunos vecinos de otras comunidades quienes, molestos por la situación, lo ataron a uno de los pilares del edificio municipal y pretendían lincharlo. Se persuadió al concejal para entregar a la persona a las autoridades competentes y se coordinó con la PNC de Colotenango para rescate.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.AUX.MOV.STGO. CHIMALTENANGO HUE.001-2009/DE	Licda. Alida Guillermina Mérida de Agustín	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.AUX.MOV.STGO. CHIMALTENANGO. HUE.001-2009/DESC	Licda. Alida Guillermina Mérida de Agustín	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.AUX.MOV. DEMOCRACIA.HUE. 002-2009/DESC	Licda. Alida Guillermina Mérida de Agustín	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.AUX.MOV. DEMOCRACIA.HUE. 003-2009/DESC	Delmar Amancio González Rivas	Alcalde Municipal	Municipalidad de La Democracia
EIO.AUX.MOV.CUILCO .HUE.001-2009/DCP	Delmar Bosbelí Gálvez de León	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cuilco
EIO.AUX.MOV.CUILCO .HUE.002-2009/DCP	Delmar Bosbelí Gálvez de León	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cuilco

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre de 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	431
De apertura de expedientes de investigación	6
Medidas urgentes	15
Ampliación de plazo para la investigación	2
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	3
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	
> Con recomendación	3
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	10
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	5
TOTAL	475

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Conflicto político surgido entre los miembros del Concejo Municipal de San Ildefonso Ixtahuacán, en virtud de que el alcalde municipal, según cinco concejales, no los toma en cuenta en las decisiones por consenso, y aducen que existe malversación de fondos de las arcas municipales. Esto lo conocen los tribunales competentes, sin embargo, los dos antejuicios que los concejales interpusieron contra el alcalde se los negaron. Solicitaron el desaforo del alcalde y los dos síndicos, pero el Tribunal Supremo Electoral no procedió.
- Conflicto político que enfrentó el alcalde municipal de Santiago Chimaltenango con algunos líderes comunitarios a quienes les interesa que se rinda un informe financiero del año ejecutado porque tienen dudas de la ejecución presupuestaria.
- Se estuvo en calidad de observadores en la consulta comunitaria de buena fe realizada en el municipio de San Gaspar Ixchil contra el reconocimiento, exploración y explotación de la minería a cielo abierto.
- Se participó en calidad de observadores en las manifestaciones realizadas el 14 y 15 de julio, por organizaciones campesinas sobre la ruta Interamericana y la frontera de La Mesilla, Huehuetenango, para demandar la no criminalización de los líderes y rechazar la explotación minera a cielo abierto y el respeto de los recursos naturales por parte del Estado.
- Integración de la coordinadora interinstitucional del municipio de Colotenango, con la que se realizó el diagnóstico del plan estratégico de desarrollo municipal para el período 2009-2019, en coordinación con la corporación municipal, el encargado de la Oficina Municipal de Planificación, el Consejo Comunitario de Desarrollo de las aldeas, líderes y lideresas, y representantes de jóvenes del municipio.

Incidencia política

- Varias reuniones interinstitucionales relacionadas con el tema de los migrantes en referencia al convenio bilateral entre organizaciones de Chiapas, México, y Huehuetenango, para coordinar acciones que los beneficien.

- Once reuniones con los Consejos Municipales de Desarrollo de Colotenango (4), San Gaspar Ixchil (3) y San Ildefonso Ixtahuacán (4) con el objeto de incidir en las políticas públicas y ser garantes de los derechos de las personas.
- Cuatro reuniones con los líderes comunitarios, alcalde municipal y gobernador departamental para encontrar la solución al problema suscitado por un proyecto de la Municipalidad para cambiar la tubería del agua potable proveniente del nacimiento ubicado en la aldea La Cumbre, lo cual generó un conflicto con las comunidades de esa aldea, la aldea Casaca, el caserío Cerro Platanar y la cabecera municipal, que se abastecen de dicho nacimiento
- Dos diálogos: uno con el concejal I del municipio de Huehuetenango para que se retire el basurero del municipio de Cuilco; y otro con el alcalde municipal de San Ildefonso Ixtahuacán, el gobernador departamental y líderes comunitarios del caserío Arroyo Pajarito, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, para que se retirara de la carretera principal la basura proveniente del municipio de Huehuetenango, con desenlace satisfactorio.
- Dos reuniones: una que la Comisión de Energía Eléctrica, conformada por los líderes comunitarios de San Ildefonso Ixtahuacán, sostuvo con personal de DEOCSA y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en la capital. Otra, en la cabecera municipal de San Ildefonso Ixtahuacán, con personal de DEOCSA de Huehuetenango para aclarar dudas que se tenían por el cambio de 720 lámparas del alumbrado público de mercurio a sodio.
- Tres monitoreos en el Hospital Nacional de San Pedro Necta para verificar que cuente con personal, medicamentos y equipo suficiente, la cantidad de pacientes atendidos y los planes de contingencia.
- Doce monitoreos: uno en el Hospital Nacional de San Pedro Necta sobre la fiebre AH1N1 y sobre seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en la morbilidad y mortalidad asociada a la desnutrición proteico-calórica y las causas principales de mortalidad y morbilidad en niños de 0 a 5 años. Uno en los Centros de Atención Permanente de San Gaspar Ixchil y de La Democracia sobre la fiebre AH1N1. Nueve monitoreos en los Centros de Atención Permanente de San Ildefonso Ixtahuacán, Colotenango, San Gaspar Ixchil, Tectitán, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango, La Democracia, La Libertad, el Hospital Nacional de San Pedro Necta y el Centro de Atención Materno Infantil de Cuilco, sobre potabilidad del agua, y con cada uno de los alcaldes municipales, para incidir en los funcionarios públicos y garantizar los derechos de la población. Un monitoreo en el Instituto Nacional de Educación Básica Cesar Julio Mérida Vásquez de San Ildefonso Ixtahuacán sobre el respeto a la identidad cultural de estudiantes indígenas.
- Participación en el diagnóstico municipal de Colotenango 2009-2019, con líderes comunitarios, autoridades municipales, estudiantes, vecinos, jóvenes de cada una de las comunidades, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para buscar el desarrollo integral del municipio.
- En calidad de observadores, se participó en la apertura de las oficinas del edificio municipal de San Ildefonso Ixtahuacán que funcionarán como la Oficina Municipal de Planificación, Tesorería, Secretaría, Oficina Forestal, Oficina del Agua Municipal, Oficina Municipal de La Mujer, Oficina de los Síndicos Municipales, y otras.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Doce reuniones: se participa en la Coordinadora Interinstitucional en los municipios de Colotenango (cinco reuniones) y San Ildefonso Ixtahuacán (tres reuniones), La Libertad (dos reuniones) y Cuilco (dos reuniones) con el objeto de incidir y garantizar los derechos humanos de las personas y que sean beneficiadas de forma equitativa.
- Se coordinada con los empleados del Juzgado de Paz, para garantizar el acceso a la justicia de la población.

Educación y promoción

- Festival de dibujo “Expresemos nuestros derechos” en la escuela oficial rural mixta caserío Tumiche, San Ildefonso Ixtahuacán, en el que participaron estudiantes de 1o. a 6o. grado, en conjunto con el coordinador técnico administrativo y el director del establecimiento educativo.

- Taller de capacitación sobre pueblos indígenas, dirigido a estudiantes de 1o. a 3o. grado básico del instituto nacional de educación básica César Julio Mérida Vásquez, de San Ildefonso Ixtahuacán, coordinado con el director del establecimiento educativo.
- Taller de capacitación en el salón municipal de San Gaspar Ixchil dirigido a líderes y lideresas de la comunidad acerca de el gobierno municipal, coordinado con el encargado de la Oficina Municipal de Planificación.
- Taller de sensibilización sobre seguridad alimentaria y nutricional en la aldea Chejoj, San Ildefonso Ixtahuacán, dirigido a un grupo de mujeres de esta comunidad, en coordinación con personal de ACODIHUE.
- Taller de capacitación y sensibilización sobre violencia intrafamiliar en el cantón Joya Verde, Colotenango, dirigido a mujeres y hombres de esta comunidad.
- Dos talleres de capacitación sobre liderazgo juvenil y uno sobre la visión integral de los derechos humanos, en el Instituto Nacional de Telesecundaria del municipio de San Gaspar Ixchil, impartido a los estudiantes de 1o. a 3o. básico, en coordinación con el director del establecimiento educativo.
- Un taller sobre prevención del delito dirigido a coordinadores y otros integrantes de los COCODES de San Gaspar Ixchil, en coordinación con el Juez de Paz local.
- Taller de capacitación y sensibilización sobre enfoque de género dirigido a integrantes de grupos de mujeres organizados.
- Tres talleres de capacitación sobre auditoría social dirigido a los integrantes de la Comisión de Auditoría Social, líderes y lideresas de diferentes comunidades de Santiago Chimaltenango.
- Participación en las caminatas realizadas en Colotenango y La Libertad para celebrar el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, y en los foros orientados a sensibilizar y fortalecer a los participantes sobre los derechos de las mujeres; estuvieron presentes estudiantes, líderes comunitarios y vecinos de diferentes comunidades de los municipios.
- Foro sobre derechos humanos dirigido a líderes, lideresas y vecinos de algunas de las comunidades de San Ildefonso Ixtahuacán, con el objeto de dar a conocer las funciones que realizan las personas que trabajan para la defensa y protección de los derechos humanos, en especial de la institución del PDH, así como para garantizar los derechos de las personas y el debido proceso cuando se les acusa de cometer alguna falta o delito.

Auxiliatura Municipal de Nentón, Huehuetenango



Auxiliatura Municipal de Nentón, Huehuetenango

De enero a noviembre de 2009, la situación de los derechos humanos en la región huista, cubierta por esta Auxiliatura, se caracterizó por la determinación de la población de exigir que se respeten derechos fundamentales como la vida, salud, educación, seguridad; asimismo, los grupos pro derechos humanos se encargan de velar porque no sucedan violaciones por parte de las autoridades locales, personas particulares e instituciones del Estado.

Se ha efectuado un fuerte trabajo de incidencia con entidades del Estado, autoridades locales y la sociedad civil para que las violaciones de los derechos humanos disminuyan. Con esto, varios funcionarios públicos han tomado conciencia respecto a las garantías constitucionales y proporcionan una mejor atención. Sin embargo, entre aquellos denunciados hay jueces de paz de Nentón, San Antonio y Santa Ana Huista, alcaldes municipales de Jacaltenango, Nentón, Concepción y San Antonio Huista, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público de La Democracia.

La problemática de la situación de los derechos humanos se enmarca en los conflictos entre pobladores y autoridades municipales, por tierras entre comunidades y municipios, siendo un gran problema la falta de acceso y certeza jurídica en la posesión de la tierra. En cuanto a la minería, la región ha manifestado su rotundo rechazo a la misma y exige al gobierno que se respeten sus derechos.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Municipal de Nentón se realizaron 68 acciones específicas: 39 de orientación, 4 de prevención, 3 operativos, 1 de acompañamiento y 21 de intervención inmediata.

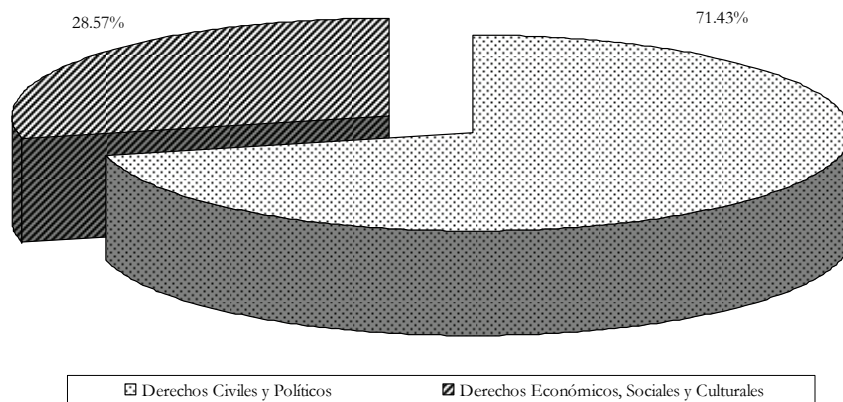
De investigación

Se abrieron 7 expedientes de investigación: 5 por violaciones a derechos individuales y 2 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 14.29% de oficio y el 85.71% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 25% forma parte del Organismo Ejecutivo y 75% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos			1		2				1		1	5	71.43
Derechos Económicos, Sociales y Culturales		1				1						2	28.57
Derechos Específicos													
TOTAL MENSUAL	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	7	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio									1			1	14.29
Ordinario		1	1		2	1					1	6	85.71
TOTAL MENSUAL	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0	1	7	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	39	57.35
Prevención	4	5.88
Operativo	3	4.41
Acompañamiento	1	1.47
Intervención inmediata	21	30.88
TOTAL	68	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo		1					1					2	5.88
Judicial			1		1	3	1					6	17.65
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades		6	3		2	1	2	1	2			17	50.00
Ministerio Público							2					2	5.88
Programa Nacional de Resarcimiento		1		1	1	1			1			5	14.71
Defensoría Maya		1					1					2	5.88
TOTAL MENSUAL	0	9	4	1	4	5	7	1	3	0	0	34	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Los municipios más violentos son Jacaltenango y Nentón, motivo por el cual se ha realizado un arduo trabajo de incidencia para hacer que las violaciones de los derechos humanos disminuyan. También se ha trabajado en la promoción y divulgación de estos derechos y se ha dado a conocer la función de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para que la población denuncie cualquier tipo de abuso de poder, arbitrariedad, discriminación y exclusión de que sea objeto.

Expediente ORD.HUE.10-2009

La denunciante manifestó que para recuperar la libertad de su hijo el Juez de Paz de Nentón le cobró Q1,100 sin extenderle ningún comprobante, cumpliendo el detenido dos noches y un día y medio en la cárcel. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado, se entrevistó al Juez de Paz y se copió el expediente tramitado en el juzgado.

Expediente ORD.HUE.19-2009

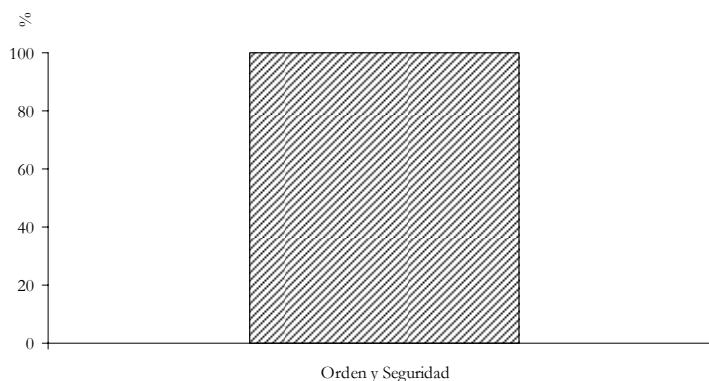
Manifiestó el denunciante que tras su detención su progenitora se presentó al Juzgado de Paz de Nentón para solventar su situación. El Juez de Paz le cobró Q1,500 sin entregarle ningún comprobante, y se tardó dos días y medio para dar la orden de libertad. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado, se entrevistó al Juez de Paz y se copió el expediente tramitado en el juzgado.

Expediente ORD.HUE.20-2009

Los hijos del denunciante fueron trasladados a la cárcel de la Policía Nacional Civil de Nentón y, al presentarse el padre para solucionar el problema en el Juzgado de Paz, el juez le cobró Q800, no entregándole ningún comprobante. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado, se entrevistó al Juez de Paz y se copió el expediente tramitado en el juzgado.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Corrupción											1	1	20.00
Detención ilegal			1		2				1			4	80.00
TOTAL MENSUAL	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	5	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La mayoría de denuncias se refiere a que las autoridades municipales han realizado despidos injustificados de trabajadores sin pagarles las prestaciones laborales, por lo que se ha hecho necesaria la intervención inmediata de la institución del PDH. Además, esta Auxiliatura se ha coordinado con los centros de salud de los municipios para apoyar a la población que presenta problemas de desnutrición.

Expediente II.HUE.13-2009

El denunciante manifestó que debido a razones personales tuvo que retirarse de su trabajo en la Municipalidad, pero al presentarse a solicitar sus prestaciones el alcalde se las negó. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal y se le entrevistó, manifestando éste que en ningún momento negó el pago de las prestaciones al denunciante y que se le había indicado que se presentara a la Municipalidad para solventar su situación.

Expediente II.HUE.52-2009

Una profesora denunció que el Ministerio de Educación no le había hecho efectivo el pago de su salario de junio y julio, ni el bono catorce. Se solicitó informe circunstanciado a la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango y se entrevistó al encargado de Recursos Humanos de dicha Dirección, quien indicó que era la Unidad de Nóminas y Pagos de la sede de Guatemala la que debía solucionar ese problema.

Expediente PREV.HUE.37-2009

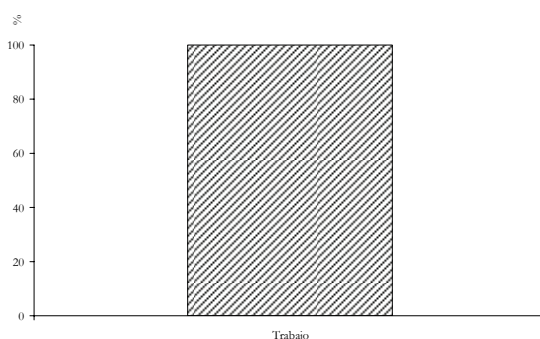
El denunciante manifestó que el alcalde municipal lo despidió injustamente de su plaza de oficial de la Municipalidad. El alcalde indicó que el despido se debió a malversación de recursos municipales pero que no le está negando las prestaciones laborales; además, sostuvo una reunión de conciliación con el denunciante, indicándole que de sus prestaciones se le descontaría lo que él había sustraído. El caso se encuentra en la Inspección de Trabajo y en el Ministerio Público.

Expediente PREV.HUE.11-2009

El denunciante manifestó que el alcalde municipal quiere impulsar un proyecto de aguas negras que dañará el río Lagartero y propiedades privadas. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado y se entrevistó al alcalde, quien indicó el proyecto en mención no se tiene considerado.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
TRABAJO													
Falta de pago de las prestaciones laborales		1				1						2	100.00
TOTAL MENSUAL	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.00



2.3 Derechos específicos

En la región, las mujeres son vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar, por lo que son necesarios mayores esfuerzos entre las instancias involucradas en el tema de la protección de los derechos humanos de la mujer, para que los niveles de este flagelo disminuyan. Se incidió en las autoridades para brindar el apoyo necesario a las mujeres, niños y jóvenes víctimas de violencia intrafamiliar.

Para enfrentar la discriminación, en coordinación con la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo se han impartido capacitaciones en tres municipios del área y una campaña de *spot* radiales para disminuir tales situaciones entre los pobladores, especialmente en lo referente a exclusión, abuso de poder y arbitrariedad.

Expediente ACOM.HUE.02-2009

La denunciante manifestó que sufre violencia intrafamiliar por parte de su conviviente, por lo que solicitó el acompañamiento de personal de la PDH para denunciarlo ante el Juez de Paz, pues ella es de escasos recursos económicos y tiene problemas para hablar el idioma español, brindándosele el acompañamiento e intervención con el Juez de Paz.

Expediente PREV.NENT. 01-2009

La víctima denunció que sufre de violencia intrafamiliar por parte de su conviviente, por lo que solicitó el apoyo de personal de la PDH. La denuncia fue remitida al Juzgado de Paz de Nentón y se solicitaron las medidas de seguridad pertinentes.

3. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente: II-Hue 26-2009/DI-2009 A favor de: Luis Estuardo Tamayac Sequen y Ludvin Camposeco Diaz Motivo: desaparición Declarado con lugar: no Descripción del caso: Dolores Sequen Ávila manifestó que su hijo Luis Estuardo Tamayac y el señor Ludvin Camposeco desaparecieron el 22 de abril, en jurisdicción del municipio de Nentón, y a partir de entonces se ignora su paradero.
--

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.HUE.10-2009	Lic. Efraín Gonzlez	Juez de Paz	Organismo Judicial
ORD.HUE.13-2009	Orlando Montejo Ross	Alcalde	Municipalidad de Jacaltenango
ORD.HUE.19-2009	Lic. Efraín Gonzlez	Juez de Paz	Organismo Judicial
ORD.HUE.20-2009	Lic. Efraín Gonzlez	Juez de Paz	Juez de Paz
II.HUE.09-2009	Lic. Guillermina Merida	Directora	Ministerio de Educación
II.HUE.47-2009	Lic. Manolo Cano	Fiscal	Ministerio Público
II.HUE.49-2009	Lic. Manolo Cano	Fiscal	Ministerio Público
II.HUE.48-2009	Carlos Morales	Alcalde	Municipalidad de San Antonio Huista
PREV.HUE.11-2009	Rafael Cruz Carrillo	Alcalde	Municipalidad de Nentón

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
II.HUE.04-2009	Pascual López Escobar	Alcalde	Municipalidad de Concepción Huista
II.HUE.05-2009	Pascual López Escobar	Alcalde	Municipalidad de Concepción Huista

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	65
De apertura de expedientes de investigación	7
Medidas urgentes	2
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	1
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	1
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	2
TOTAL	78

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Una mesa de diálogo instalada por la institución del PDH para solucionar un conflicto suscitado entre pobladores de la comunidad San Andrés Huista, Jacaltenango, y el alcalde municipal de Jacaltenango; interviniendo COPREDEH, el comandante de la Zona Militar del lugar, jefes de la PNC, la Red de Atención a Conflictos y el doctor del Centro de Salud.
- Dos informes de rescate: uno a favor de un niño que era maltratado por la madre, según denuncia presentada por el padre del menor, por lo que se coordinó con el Juez de Paz de Santa Ana Huista, la PNC y la Procuraduría General de la Nación. El menor fue entregado a su padre. Otro a favor de un señor que supuestamente estaba siendo amenazado de ser linchado por pobladores de la comunidad de Nueva Catarina, Jacaltenango, coordinando acciones para su liberación con la PNC de Nentón y Jacaltenango, el alcalde municipal de Jacaltenango y líderes comunitarios.
- Tres monitoreos: a hospitales y centros de salud en relación con la atención y abastecimiento de medicamentos; a la Municipalidad en requerimiento de la totalidad del agua que se distribuye en los municipios; a los centros educativos para verificar los cobros y cupo de inscripciones de alumnos, así como de la exigencia de la utilización del uniforme a estudiantes mayas.

Incidencia política

- Prevención de conflictos, propiciando la solución pacífica a través de mesas de diálogo, entre ellos el caso del conflicto entre el alcalde municipal de Jacaltenango y pobladores de la comunidad San Andrés Huista.
- Incidencia realizada a operadores de justicia, jefes de Centros de Salud, Educación y Seguridad, para lograr una sensibilización y reducir los niveles de violaciones de los derechos humanos, a través de reuniones, visitas y la participación en las redes de paternidad y maternidad responsable.
- Presencia y participación en reuniones de los COMUDES para fortalecer la Comisión de Derechos Humanos.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Se mantiene la fiscalización de las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz para garantizar el acceso a la tierra y la certeza jurídica, el Programa Nacional de Resarcimiento y coordinación con instancias que atienden dicha problemática.

Educación y promoción

- Tres módulos de capacitación y sensibilización a estudiantes de nivel básico y diversificado de los municipios de Nentón, San Antonio Huista y Jacaltenango, acerca de la temática de derechos humanos y la no discriminación y racismo contra los pueblos indígenas, coordinados con la Comisión Presidencial para este tema.
- Dos capacitaciones y sensibilización: una a integrantes del COMUDE de San Antonio Huista, acerca de los derechos humanos y funciones del Magistrado de Conciencia; otra a maestros de educación primaria de diferentes comunidades e idiomas mayas de los municipios de Nentón, San Antonio Huista y Jacaltenango, en materia de derechos humanos y las funciones del PDH; otra relativa a la no discriminación y racismo contra los pueblos indígenas.

Auxiliatura Departamental de Izabal



Auxiliatura Departamental de Izabal

De enero a noviembre de 2009, los expedientes aperturados en materia de derechos al orden y la seguridad se vinculan al abuso de autoridad, en especial por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), empleados de la Dirección de Puertos y Aeropuertos (DIPA) y funcionarios de Gobernación Departamental y Migración. Asimismo, por violación al debido proceso y derecho de defensa por parte de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP).

En materia de seguridad, se observó que las subestaciones de la PNC cuentan con poco personal y el equipo se encuentra en pésimo estado, lo que ha causado que sectores de la sociedad civil, como juntas de seguridad local, Consejos Comunitarios de Desarrollo o comerciantes tengan que proporcionar combustible para los patrullajes policiales.

Instituciones gubernamentales de reciente funcionamiento, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), no prestan la debida colaboración a la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). El Registro Nacional de las Personas (RENAP) afronta varios problemas para garantizar la identidad y la documentación de los vecinos.

Los grupos más vulnerables son los usuarios de los servicios solicitados a los operadores de justicia. Las áreas de mayor riesgo son los municipios de Puerto Barrios, Morales y El Estor, por deficiencias en la administración de justicia.

En el derecho a la salud se señala la falta de acciones preventivas y de respuesta, malas prácticas médicas, lentitud en la atención, insuficiente cobertura y escasez de medicinas. En cuanto a la seguridad alimentaria no hay acciones para reducir las secuelas que provoca la desnutrición.

Los grupos más vulnerables en materia de derechos económicos, sociales y culturales son la niñez y las personas adultas mayores de las comunidades indígenas, ya que la falta de personal bilingüe no permite la debida atención en los servicios salud.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Izabal se realizaron 738 acciones específicas: 184 de orientación, 547 de prevención y 7 de mediación.

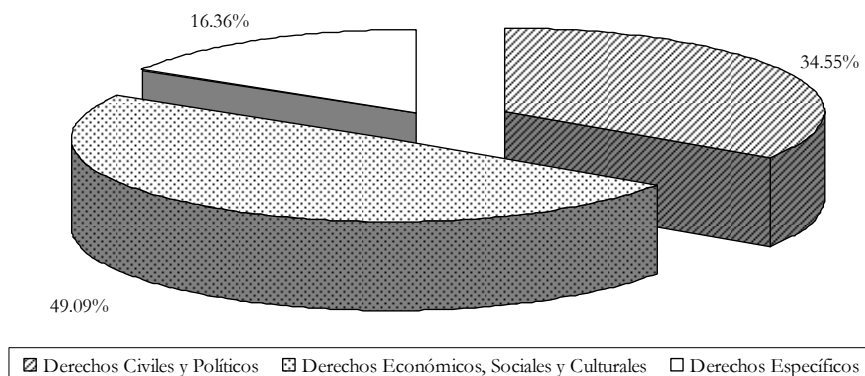
De investigación

Se abrieron 55 expedientes de investigación: 19 por violaciones a derechos individuales, 27 a derechos económicos, sociales y culturales y 9 a derechos específicos. De ellos, el 30.36% de oficio y el 69.64% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 96.67% forma parte del Organismo Ejecutivo y 3.33% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	2	1				3		1	5	3	4	19	34.55
Derechos Económicos, Sociales y Culturales		4	1	1				3	5	8	5	27	49.09
Derechos Específicos		1	2	2	1	0	1	1		1		9	16.36
TOTAL MENSUAL	2	6	3	3	1	3	1	5	10	12	9	55	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		4	1	3	1	1		2	3	2		17	30.36
Ordinario	2	2	2			3	1	3	7	10	9	39	69.64
TOTAL MENSUAL	2	6	3	3	1	4	1	5	10	12	9	56	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	184	24.93
Prevención	547	74.12
Mediación	7	0.95
TOTAL	738	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	2	4	1	1		2	1	4	5	5	4	29	51.79
Judicial			1									1	1.79
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades					1				2			3	5.36
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social			1						3	4	3	11	19.64

A-A no determinado		2		2								4	7.14
Ministerio Público						2		1				3	5.36
DEORSA											1	1	1.79
Superintendencia de Administración Tributaria										1		1	1.79
Registro Nacional de las Personas										1	1	2	3.57
Sistema Penitenciario										1		1	1.79
TOTAL MENSUAL	2	6	3	3	1	4	1	5	10	12	9	56	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

El abuso de poder es la conducta más recurrente de los funcionarios y empleados públicos, así como la arbitrariedad por parte de agentes y auxiliares de la Fiscalía Distrital del MP. Además, los operadores de justicia muestran poco interés por atender los casos planteados en instituciones como el MP y los Juzgados de Paz y de Primera Instancia Penal.

Expedientes acumulados ORD.IZA.01-2009/DCP, ORD.IZA. 03-2009/DCP

El denunciante, que labora como taxista, expresó que fue interceptado por un vehículo del cual descendieron tres hombres fuertemente armados; uno de ellos se identificó con un carné de la PNC y como miembro de la Dirección de Investigaciones Criminológicas. De forma violenta lo registraron y revisaron su vehículo. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado y se realizó visita a la Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC con sede en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios. A partir de la hoja de servicio y personal de dicha institución se estableció que los agentes detuvieron ilegalmente al denunciante.

Expediente ORD.IZA.03-2009/DCP

Manifestó la denunciante que agentes de la PNC llegaron a bordo de la patrulla 027 Izabal a su residencia e ingresaron de forma violenta con la intención de recuperar supuestas motos robadas, causando serios daños al inmueble. Como parte de la investigación se visitó la residencia allanada y se solicitó informe circunstanciado, comprobándose el allanamiento ilegal y que los agentes denunciados incurrieron en abuso de autoridad.

Expediente EIO.IZA.10-2009/DCP

A raíz de información difundida por un noticiario local se tuvo conocimiento que en el área del río Sauce, del municipio de El Estor, 70 agentes de la Comisaría 61 de la PNC y elementos de las Brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional pretendían desalojar a una persona de su propiedad. El desalojo había sido solicitado por el fiscal municipal del MP de Santa Catalina La Tinta, departamento de Alta Verapaz en respuesta a la solicitud del agraviado, quien presentó un testimonio de la Escritura Pública número 406, consistente en una compraventa de derechos de posesión y mejoras del bien inmueble. El abogado responsable de tramitar la causa penal en la Fiscalía Municipal del MP violentó el derecho de defensa y debido proceso del denunciante al no permitirle aportar pruebas a su favor en la etapa procesal oportuna.

Expediente ORD.IZA.08-2009/DCP

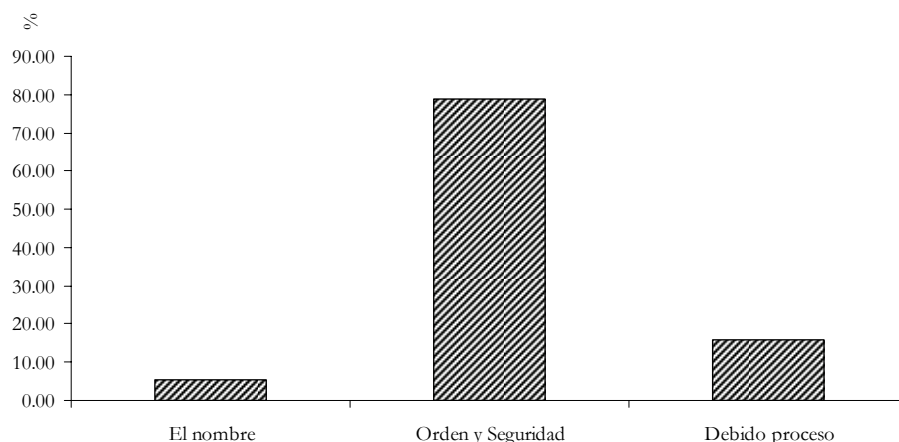
Expresó el denunciante que el auxiliar fiscal se presentó en su residencia, ubicada en la aldea El Cedro, municipio de Morales, acompañado por agentes de la PNC, indicándole que tenía orden de captura. Además, le ordenó que retirara el ganado de una finca propiedad de la empresa El Botiquín, Sociedad Anónima. Al preguntarles por la orden de allanamiento, respondieron que no la necesitaban. Se estableció que la diligencia realizada por el auxiliar del MP era una inspección ocular, parte de una causa penal, pero no se había dado el aviso previo; asimismo, que el MP no ha establecido las medidas exactas de la propiedad en disputa. Se determinó que el auxiliar fiscal, al no observar el principio de objetividad en el diligenciamiento de la causa

penal, violentó el derecho de defensa y debido proceso del denunciante, por no haberlo citado previamente para que aportara pruebas a su favor en la etapa procesal oportuna.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
EL NOMBRE													
La falta de registro										1		1	5.26
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	2	1				1			3	1	2	10	52.63
Uso excesivo de la fuerza									1			1	5.26
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial											1	1	5.26
Amenazas, coacción											1	1	5.26
Detención ilegal										1		1	5.26
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal									1			1	5.26
DEBIDO PROCESO													
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial						2		1				3	15.79
TOTAL MENSUAL	2	1	0	0	0	3	0	1	5	3	4	19	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Se diligenciaron expedientes correspondientes al derecho a la seguridad social contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por deficiente atención del personal administrativo y paramédico, retardo en el Programa de Invalidez, Vejez y Supervivencia (IVS), insuficiente cobertura social a beneficiarios, e insuficiente cobertura social de riesgos. Asimismo, por el derecho al trabajo, contra la Inspectoría General de Trabajo por la falta de fiscalización, ausencia de políticas en materia laboral, persecución y violencia en contra del trabajador y sus organizaciones, incumplimiento de condiciones de trabajo, estancamiento del salario, restricciones a la libertad sindical, incumplimiento de pago de las prestaciones laborales, falta de acceso

de los trabajadores a los servicios de la Inspección General de Trabajo. En materia educativa, aún se encuentra en proceso la incorporación de maestros bilingües.

Expediente ORD.IZA. 12-2009/DESC

Expresaron los denunciantes, representantes de las comunidades de Guaira Cocolí, La Pista, Plan Grande Quehueche, Playa Quehueche, Setal, Cacaguatal, Plan Grande Tatin, Barrio Jul Ha Crecke Chino y la Asociación Indígena Campesina Amates de la Tierra del municipio de Livingston, que desde hace años sufren de mala atención médica por parte del personal del Centro de Salud de Livingston, en especial los residentes de la etnia q'eqchi'. El descontento se agudizó con el fallecimiento de dos niños por falta de adecuada atención médica. Como parte de la investigación realizada se estableció que uno de los niños, según la ficha clínica del doctor de turno, no presentaba signos de enfermedad graves, sin embargo, falleció por bronconeumonía dos días después. En el segundo caso, el infante llevaba signos de neumonía pero no se le dejó en observación, falleciendo un día después.

Expediente ORD.IZA.12-2009/DESC

Expresó el denunciante que su hija fue trasladada por el IGSS a un hospital privado para una intervención por labor de parto, por no contar con el equipo adecuado para dichas emergencias. Tras la intervención la paciente presentó complicaciones, por lo cual tuvo que ser trasladada al IGSS de la zona 6 capitalina. Como parte de la investigación realizada se constataron las limitaciones del Hospital para dar una atención adecuada y eficiente en el presente caso, violando con ello el derecho a la salud y a la seguridad social de la afiliada.

Expediente ORD.IZA.07-2009/DESC

La denunciante internó a su hermana en la Emergencia del Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala por fuertes dolores abdominales. Los médicos de turno le dieron medicamentos para minimizar las dolencias y le dieron de alta; posteriormente fue llevada a un hospital privado donde le diagnosticaron un problema grave en la vesícula, recomendando que fuera intervenida de inmediato. Fue remitida al Hospital Nacional, donde sólo le administraron la misma dosis de medicina, falleciendo un día después. A partir de la investigación realizada se verificó la muerte de la paciente en el Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala, según el certificado de defunción por peritonitis química por trasudado hepático y obstrucción de vías biliares y, con ello, comprobándose que su deceso ocurrió por la deficiente atención del Hospital denunciado.

Expediente EIO.IZA.07-2009/DESC

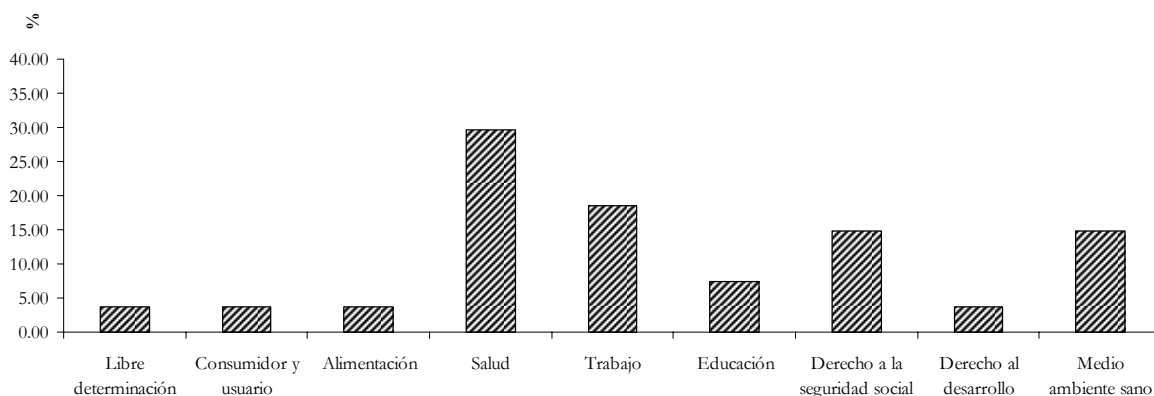
La denunciante ha sido afectada por procedimientos administrativos arbitrarios por parte del Ministerio de Educación, al no ser favorecida en el concurso de oposición en el cual participó para optar a una plaza bilingüe, del cual su expediente calificó con la nota más alta. La Junta Calificadora argumentó que no le podía otorgar plaza debido a que no presentó las constancias, lo cual contradice el artículo 12, inciso a, del Acuerdo Ministerial 704. A partir de la investigación realizada se determinó que la Junta Calificadora no dio valor probatorio al título presentado por la denunciante, lo cual afectó su promoción, a pesar de haber llenado todos los requisitos correspondientes.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
LIBRE DETERMINACIÓN													
Injusticia tributaria										1		1	3.70
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Alzas inmoderadas de precios y tarifas											1	1	3.70



ALIMENTACIÓN													
Desnutrición y sus consecuencias (problemas del crecimiento, dificultades motrices, en el funcionamiento de los sistemas inmunológicos y de reproducción, diarrea, reducción de nivel de juego y actividades, limitación del desarrollo y cognoscitivo, malformaciones como médula bífida, ceguera, raquitismo)										1		1	3.70
SALUD													
Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)								1			1	2	7.41
Mala práctica médica			1									1	3.70
Falta de atención o asistencia médica		1						1				2	7.41
Mala atención en centro de salud								1				1	3.70
Negligencia médica										1	1	2	7.41
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones									2	1		3	11.11
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo				1							1	2	7.41
EDUCACIÓN													
No ser tratado con justicia										1		1	3.70
No ser informado / formado acerca de las consecuencias de sus decisiones y de los actos derivados de ellas										1		1	3.70
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social a beneficiarios											1	1	3.70
Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social									1	1		2	7.41
Negación y retiro del derecho a gozar a la seguridad social										1		1	3.70
DERECHO AL DESARROLLO													0.00
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera		1										1	3.70
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos									2			2	7.41
Deforestación		1										1	3.70
Transportar, intercambiar, comercializar o explotar ejemplares vivos o muertos o derivados de flora o fauna silvestre amenazadas en extinción, así como de las endémicas y especies consideradas dentro de listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicadas por CONAP			1									1	3.70
TOTAL MENSUAL	0	4	1	1	0	0	0	3	5	8	5	27	100.00



2.3 Derechos específicos

Los expedientes describen conductas cometidas por funcionarios y empleados públicos que afectan a la niñez y juventud, siendo buena parte de ellos relativa a protección por maltrato infantil, acceso a la justicia y a la administración pública, niñez en riesgo y abandono, políticas públicas de niñez y juventud, falta de registros de nacimientos, falta de ciudadanía e identidad personal, educación y salud en riesgo. También se han tomado acciones a favor del adulto mayor y se han solicitado medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el Juzgado de Familia y en los juzgados de Paz de los municipios de Morales, Los Amates, El Estor y Livingston.

Expediente ORD.IZA.10-2009/DE

Un denunciante anónimo manifestó que el maestro de la escuela de la aldea Chacalte, municipio de Livingston, desde hace varios años abusa sexualmente de los niños. Como parte de la investigación se visitó la comunidad y la escuela referida; los vecinos entrevistados indicaron que el denunciado se comporta de forma decorosa con los padres de familia y los miembros de la junta escolar de la comunidad, sin embargo, uno de los niños afectados refirió ciertas conductas anómalas del maestro hacia su persona. Se estableció que el denunciado violentó los derechos humanos de la niñez y adolescencia, específicamente por abuso sexual.

Expediente ORD.IZA.04-2009/DE

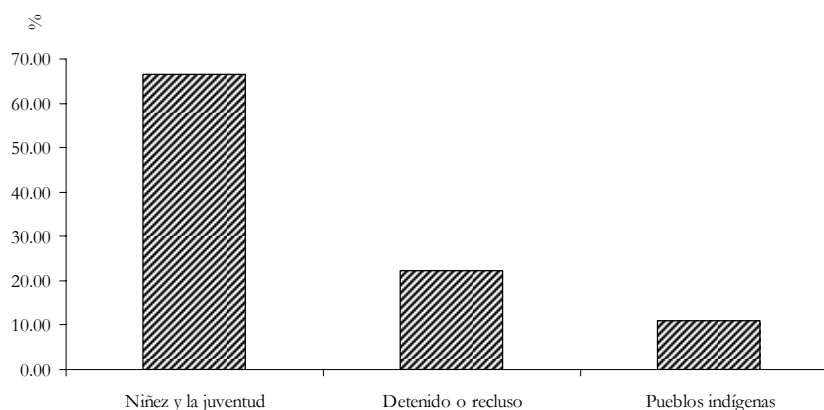
A partir de la denuncia anónima de que en la guardería del Centro de Bienestar Social de la Presidencia de la República ubicada en el municipio de Puerto Barrios no son bien atendidos los niños debido a falta de personal, incluyendo una maestra, personal de la Auxiliatura visitó el lugar referido, donde comprobó que en años anteriores contaba con más personal para la atención educativa de los infantes. Esta reducción de personal afecta el desarrollo físico, educativo y cultural de la niñez atendida.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil			1	2								3	33.33
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven		1										1	11.11
Abuso sexual							1					1	11.11
Falta de políticas sociales que permitan el nacimiento y el desarrollo sano y armonioso					1							1	11.11



DETENIDO O RECLUSO													
Acciones que atentan contra su integridad			1									1	11.11
No permitir visita										1		1	11.11
PUEBLOS INDÍGENAS													
Falta de oportunidades de decidir su propio modelo de desarrollo								1				1	11.11
TOTAL MENSUAL	0	1	2	2	1	0	1	1	0	1	0	9	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente EIO.IZA. 11-2009/DE

En el monitoreo realizado en el Hospital Infantil Elisa Martínez de Puerto Barrios, en relación con los casos de dengue hemorrágico y clásico que dicho centro ha atendido, se constató que muchos niños y niñas del municipio son afectados por esta epidemia. A partir de las entrevistas realizadas se tuvo conocimiento de la atención de más de 60 posibles casos de esta epidemia, de acuerdo con la sintomatología que presentaban los pacientes, y que a la fecha se han detectado 300 casos confirmados. A partir de la investigación realizada se estableció que a la Dirección del Área de Salud de Izabal fue presentado el Plan Integral para la Vigilancia Entomológica en el distrito de Salud de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, el cual no ejecutó, lo que facilitó el brote de la epidemia, ni realizó campañas preventivas de información y orientación a la población. Por lo anterior, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Dirección del Área de Salud de Izabal, la Unidad de Vectores de Puerto Barrios y la Dirección del Hospital Infantil Elisa Martínez violentaron el derecho humano a la salud de los habitantes de Izabal, así como el derecho humano a la vida por las personas que fallecieron a consecuencia de dicho mal.

Expediente EIO.IZA.15-2009/DCP

Expresó el representante de la comunidad Las Nubes, municipio de El Estor, que la gobernadora departamental, acompañada por elementos de la PNC y agentes de seguridad privada de la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel, se presentaron en la comunidad argumentando que dicha empresa es la propietaria de los terrenos. A partir de la investigación realizada se comprobaron los hechos, y que los agentes de seguridad privada contratados por la Compañía atacaron con arma de fuego a los vecinos de la comunidad, enfrentamiento durante el cual uno de los pobladores perdió la vida; situación que se dio cerca de la subestación de la PNC.

Expediente EIO.IZA.16-2009/DESC

Con la creación del Frente contra el Hambre en Izabal, conformado por representantes de las Iglesias Católica y Evangélica, Universidad de San Carlos de Guatemala y la institución del PDH, se realizó un censo para determinar los niveles de desnutrición que afectan a la niñez en los diferentes municipios de El Estor y Livingston, detectando un alto porcentaje de víctimas de este flagelo. Con el censo se estableció que en Izabal no existen centros de recuperación nutricional dentro de las instancias gubernamentales responsables de la salud y de la alimentación, y que tampoco se ha dado seguimiento a la política de seguridad alimentaria y nutricional, derivado de que el departamento, según las estadísticas oficiales del MSPAS, no presenta niveles graves de desnutrición.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE AMPARO

Expediente 3-2009 SRIA. Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Izabal, constituido en Tribunal de Amparo
Descripción del caso: se confirió audiencia porque el accionante propuso a esta Auxiliatura como terceros interesados por la supuesta violación de sus derechos al haber sido removido del cargo de director del Centro Educativo por Cooperativa que funciona en la jornada vespertina en las instalaciones del Instituto Experimental Doctor Luis Pasteur, en Puerto Barrios.
Resultados: el amparo fue resuelto sin lugar por el Juzgado que conoció el trámite.

5. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente PREV.IZA.487-2009/DI Exhibición personal 14-2009 SRIA. Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal A favor de: Juan Carlos Coc y Francisco Bolom Tox, pertenecientes a la etnia q'eqchi' Motivo: por permanecer detenidos ilegalmente por un grupo de personas de la aldea Sexam, El Estor Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: Juan Carlos Coc y Francisco Bolom Tox fueron detenidos de forma ilegal por habitantes de la comunidad de Chichipate y entregados a pobladores de Sexan, poniendo en riesgo su integridad física y violando su derecho a la libertad de locomoción.

Expediente ORD.IZA.29-2009/DCP Exhibición personal 54-2009 Oficial 2o. Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra en Ambiente de Zacapa A favor de: Oscar Aalejandro Sub Maquin, de 17 años de edad; José Sub Quib, Emilio Caal Caal, Antonio Sub Beb, Juan Xo Xol y Abelino Sub Choc, pertenecientes a la etnia q'ueqchi'. Motivo: fueron detenidos por los Servicios de Protección de la Naturaleza de la PNC y trasladados a la sede policial de Morales sin haber sido escuchados por la ayuda de un intérprete Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: se solicitó la actuación de la fuerza pública bajo el argumento de que las personas antes mencionadas estaban talando en una finca privada sin ninguna autorización. El Juez de Paz de El Estor ordenó su ingreso a la cárcel de Los Jocotes por delitos contra los recursos forestales y tala de árboles de especies protegidas. Sin embargo, se estableció que ellos son los propietarios y que contaban con autorización de la Asociación de Ecuación y Asistencia Social para limpiar dichos terrenos.

6. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.01-09/DCP	Osberto Godínez Fuentes	2o. Jefe	Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica
ORD.02-09/DCP	Osberto Godínez Fuentes	2o. Jefe	Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica
ORD.04-09/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica
ORD.05-09/DE	Alex Haroldo Marroquín González	Director	Granja Modelo de Rehabilitación Pavón
ORD.06-09/DESC	Dr. Jaime Obdulio Sánchez Figueroa	Director	Hospital del IGSS
ORD.08-09/DCP	Marvin Rivahi López Barrios	Jefe a.i.	Comisaría PNC
ORD.08-09/DCP	Salvador Melvin Samayoa Godoy	Auxiliar Fiscal	Ministerio Público
ORD.08-09/DCP	Lic. Feliciano Rivas	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD.09-09/DCP	Rudy Leonardo Galicia López	Jefe	Subestación PNC
ORD.10-09/DE	Lic. Julio De León	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.11-09/DCP	Salvador Melvin Samayoa Godoy	Auxiliar Fiscal	Ministerio Público
ORD.11-09/DCP	Byron Revolorio De León	Subjefe	Comisaría PNC
ORD.11-09/DCP	Ing. Byron Aroldo Barrientos Grijalva	Coordinador de Región	Secretaría de Asuntos Agrarios
ORD.12-09/DESC	Dr. Celso Cerezo	Ministro	MSPAS
ORD.12-09/DESC	Dr. Roderico Trabanino	Director	Área de Salud Izabal
ORD.13-09/DESC	Ing. Agr. Iván Cabrera	Director Regional	CONAP
EIO.03-09/DESC	Lic. César Augusto Dávila Gómez	Presidente	Comisión Nacional de Resarcimiento
EIO.03-09/DESC	Lic. Julio César Recinos Salas	Ministro	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
EIO.10-09/DCP	Byron Revolorio De León	Subjefe	Comisaría PNC
EIO.10-09/DCP	Benigno Ramírez Choc	Agente Fiscal	Ministerio Público
EIO.10-09/DCP	Lic. Edin Romelio Pereira	Secretario	Ministerio Público
EIO.11-09/DE	Licda. Vivian Franzela Cordón de Nájera	Directora	Área de Salud de Izabal
EIO.11-09/DE	Dr. Rolando Gómez Salay	Director	Hospital Nacional Infantil "Elisa Martínez"
EIO.11-09/DE	Edgar René Ramirez Ramos	Jefe	Programa de Vectores Puerto Barrios
EIO.12-09/DESC	Dr. Edwin Arturo Prera	Director	Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala
EIO.13-09/DESC	Licda. Vivian Franzela Cordón de Nájera	Directora	Área de Salud Izabal
ORD.06-09/DESC	Dr. Hugo René Dávila Méndez	Director	Hospital General Dr. Juan José Arévalo B.

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.04-09/DE	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaria	Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
ORD.07-09/DESC	Dr. Edwin Arturo Prera	Director	Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala

ORD.07-09/DESC	Dra. María del Carmen Granados	Médico Forense	Instituto Nacional de Ciencias Forenses
EIO.02-09/DESC	Ing. Agr. Iván Cabrera	Director Regional	CONAP
EIO.03-09/DESC	Prof. Miguel Rax Asig	Alcalde	Municipio de Livingston
EIO.07-09/DESC	Lic. Miguel Ángel Reyes Gómez, Otto Efraín De León, Profa. Gloria Violeta Alonso Martínez, Profa. Rosa Anabela Palacios, Profa. Zoila Rosario Santos Paiz, Prof. Raúl Sigfrido Cu Pérez	Jurado Nacional de Oposición	Ministerio de Educación
EIO.07-09/DESC	Licda. Ana Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación

Funcionarios públicos declarados violadores de derechos humanos

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.11-09/DE	Dr. Celso Cerezo Muleth	Ministro	MSPAS
	Licda. Vivian Franzela Cordon de Nájera	Directora	Jefatura de Salud de Izabal
	Dr. Rolando Gomez Salay	Directora	Hospital Nacional Infantil
	Edgar René Ramírez Ramos	Jefe	Sector de Vectores de Puerto Barrios

Funcionarios públicos declarados violadores de derechos humanos, que NO han acatado la resolución del PDH

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.11-09/DE	Dr. Celso Cerezo Muleth	Ministro	MSPAS
	Licda. Vivian Franzela Cordon de Nájera	Directora	Jefatura de Salud de Izabal
	Dr. Rolando Gomez Salay	Directora	Hospital Nacional Infantil
	Edgar René Ramírez Ramos	Jefe	Sector de Vectores de Puerto Barrios

7. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	777
De apertura de expedientes de investigación	60
Medidas urgentes	2
Ampliación de plazo para la investigación	59
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	1
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	5
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	
> Con recomendación	6
Comportamiento administrativo lesivo	
> Con recomendación	5
Acciones o recursos planteados	
Amparos	1
Exhibiciones	2
TOTAL	918



8. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Informe relativo al brote de dengue clásico y hemorrágico detectado en el Hospital Infantil de Puerto Barrios.
- Informe-diagnóstico sobre los indicadores de desarrollo en las áreas de salud, educación, seguridad, empleo y vivienda en el departamento.
- Informe sobre la situación suscitada en el municipio de El Estor, entre pobladores de la aldea Chupón, Las Nubes y barrio la Unión, con miembros de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, en la cual perdió la vida el profesor y líder comunitario Adolfo Ich Chamán.

Incidencia política

- Coordinaciones con
 - ✓ Red contra la explotación sexual infantil.
 - ✓ Red interinstitucional y organizaciones de la sociedad civil para el abordaje de la atención a personas con VIH/SIDA.
 - ✓ Red de Paternidad y Maternidad Responsables.
 - ✓ Red de Personas de la Tercera Edad.
 - ✓ 80 redes infantiles, 80 juveniles, 80 de líderes adultos en los municipios de Morales y Los Amates para la observancia y protección de los derechos de la niñez y juventud.
 - ✓ Mesa laboral para resolver los conflictos entre las organizaciones sindicales y autoridades del IGSS.
 - ✓ Juntas Municipales de Protección de la Niñez y Juventud en los municipios de Morales, Los Amates, El Estor y Livingston.
 - ✓ Comité de Muertes Maternas.
 - ✓ Foro de la Mujer en el ámbito departamental.
 - ✓ Comisión de la Mujer en el Consejo Municipal de Desarrollo de Puerto Barrios.
 - ✓ Comisión de la Niñez en los Consejos Municipales de Desarrollo de Morales y Los Amates.
 - ✓ Comisión de Medio Ambiente en el Consejo Municipal de Desarrollo de Puerto Barrios.
- Incidencia en el Observatorio en Salud Reproductiva.
- Monitoreo para verificar el cumplimiento de la gratuidad en las inscripciones, entrega de refacción escolar y dotación de útiles escolares en las escuelas primarias de Izabal.
- Monitoreo al Hospital Nacional de Puerto Barrios, para corroborar información publicada en los medios de comunicación en relación con malos tratos a los pacientes por parte del personal médico y de enfermería.
- Monitoreo en la Dirección de Atención al Consumidor en Puerto Barrios, en relación con su funcionamiento y atención de denuncias de usuarios y consumidores.
- Monitoreo en las afueras del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, donde se concentraban los seguidores del líder campesino Ramiro Choc, para prevenir incidentes con las fuerzas de seguridad apostadas en dicho lugar.
- Monitoreo en los Centros de Salud de Izabal y en las municipalidades respectivas para verificar el proceso de cloración del agua para consumo humano.
- Monitoreo en la delegación de Izabal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para verificar procesos de atención en casos de violencia contra la mujer y femicidio.
- Monitoreo a los hospitales de Izabal, así como al Área de Salud, para establecer el monto y los rubros afectados por el recorte presupuestario efectuado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Monitoreo al Hospital Nacional de La Amistad Japón-Guatemala, para verificar el funcionamiento, dotación de medicinas, espacios físicos y personal contratado en la clínica de Infectología (VIH-SIDA).

- Monitoreo al rastro municipal de Puerto Barrios para verificar las condiciones de higiene en las instalaciones y el proceso de sacrificio de ganado vacuno y bovino.
- Monitoreo en el Hospital Nacional de La Amistad Japón-Guatemala y en el Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez por investigación de los casos de Gripe AH1N1 en Izabal, y dotación de medicamentos.
- Monitoreo en escuelas del nivel primario y secundario del municipio de Livingston en relación con el respeto a la identidad cultural de los alumnos por parte de las autoridades educativas.
- Monitoreo por los casos detectados de desnutrición infantil crónica y aguda en Izabal.
- Monitoreo en el Hospital Nacional Infantil de Puerto Barrios por los casos de dengue clásico y hemorrágico infantil detectados; se verificaron las condiciones de atención y las medidas preventivas adoptadas por el Área de Salud para contrarrestar dicha epidemia.
- Monitoreo para establecer el número de procesos tramitados y llevados a sentencia, condiciones ambientales, necesidades de recurso humano, problemática de seguridad de jueces, corrupción y presiones hacia el personal.
- Monitoreo para conocer la cantidad de procesos tramitados, prestación del servicio, abordaje de la escena del crimen y percepción de los usuarios del servicio que prestan las Fiscalías.
- Monitoreo al Centro de Atención del Adulto Mayor de Puerto Barrios San Francisco de Asís para verificar el funcionamiento y condiciones de atención.
- Incidencia en reuniones:
 - ✓ Con Gobernación Departamental, Área de Salud, Migración, PNC, Municipalidad Puerto Barrios y propietarios de cantinas y prostíbulos, para tratar lo concerniente a la situación migratoria de las personas que laboran en los mismos, los requisitos para operar dichos centros y los supuestos abusos cometidos por la PNC durante los operativos realizados.
 - ✓ Con el director del hospital del IGSS de Puerto Barrios y los dirigentes sindicales de las fincas bananeras, en la cual se abordaron peticiones y quejas de los afiliados en contra del servicio del referido centro hospitalario, así como el problema de la falta de medicamentos.
 - ✓ Con miembros de la comunidad de Tamagás Creeck, de Livingston, y Gobernación Departamental de Izabal, delegación del MINEDUC, alcalde municipal de Livingston y diputada distrital de Izabal, para resolver conflicto escolar entre vecinos de la etnia q'eqchi' y pobladores ladinos de dicha comunidad.
 - ✓ Con miembros de la comunidad de San Miguelito, Puerto Barrios, el director de FUNDAECO y el delegado de CONAP, por el otorgamiento de licencias a miembros de la comunidad para el aprovechamiento de recursos para consumo familiar dentro del área protegida donde habitan.
 - ✓ Con representantes de los COCODE de Puerto Barrios, el alcalde y su Concejo Municipal, para trasladarle petición de los vecinos de declaración de lesividad o nulidad del contrato suscrito entre la referida municipalidad y la empresa Aguas de Izabal, para la prestación del servicio de agua potable a Puerto Barrios.
 - ✓ Con representantes de los COCODE de Livingston y el director del Centro de Salud del municipio para abordar la problemática del servicio prestado por dicho Centro a la población y para asumir compromisos para hacer más eficiente su servicio.
 - ✓ Con Gobernación Departamental, el alcalde municipal de Puerto Barrios, la delegada del RENAP y los dirigentes sindicales bananeros del ramal de Entre Ríos, Puerto Barrios, para plantear múltiples quejas por el servicio prestado por la oficina de RENAP en Puerto Barrios, asumiendo compromisos para mejorar dicha situación.
 - ✓ Con delegados del RIC, FONTIERRA, SAA, la Alcaldía de Livingston, Gobernación Departamental de Izabal y representantes de grupos campesinos de Livingston para abordar el caso de las comunidades de Buena Vista, La Esperanza y Vista Hermosa, de Livingston.
 - ✓ Con la comunidad de Tameja, municipio de Livingston, el MP y la PNC, para escuchar quejas de la comunidad por daños causados a algunos de sus animales (ganado vacuno) por parte de miembros de la comunidad de Creeck Agua Caliente, con quienes tienen disputa por terrenos de cultivo.

- Conformación del Frente contra el Hambre con representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la sede de la Universidad de San Carlos de Izabal, con el objetivo de ubicar y rescatar a niños menores de cinco años con cuadro de desnutrición aguda, para internarlos en el Centro de Recuperación Nutricional establecido para su recuperación nutricional y posterior seguimiento en su hogar.
- Socialización del objetivo del Frente contra el Hambre con diferentes delegados del Organismo Ejecutivo en el departamento, el alcalde municipal de Puerto Barrios y representantes de los COCODE de segundo nivel de Puerto Barrios para atender de forma integral la identificación, rescate y recuperación de los niños menores de cinco años con cuadro de desnutrición aguda en Izabal.
- Coordinación de la marcha del Día de la Juventud
- Coordinación con las escuelas de los municipios de Puerto Barrios, Morales, Los Amates, Livingston y El Estor, para la celebración del Día de las Personas Adultas Mayores, como parte del proyecto “Abuelos por Siempre”.
- Conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, del Día del Migrante y del Día Internacional del Niño.

Educación y promoción

- 36 capacitaciones a docentes sobre los Derechos de la Niñez, en los municipios de Puerto Barrios, los Amates, Morales, El Estor y Livingston.
- Tres capacitaciones a personal administrativo, directores, médicos, paramédicos y personal operativo del Área de Salud.
- 29 talleres del proyecto “Escuela para padres y madres de familia”, en los municipios de Puerto Barrios y Los Amates.
- Cinco capacitaciones a internos del Centro Penitenciario de Puerto Barrios.
- Seis talleres del proyecto “Resolución de conflictos escolares”, dirigido a maestros de los cinco municipios de Izabal, en coordinación con personal de ACONANI.
- 20 talleres dirigidos a la comunidad educativa como parte del proyecto “Abuelos y abuelos por siempre” en los municipios de Puerto Barrios, Morales, Río Dulce, Los Amates y El Estor.
- Dos talleres del proyecto “Ruta Crítica del Migrante”, dirigidos a jóvenes de los diferentes centros educativos de Puerto Barrios, en coordinación con la asociación Nuevos Horizontes.
- Tres talleres de capacitación dirigidos a docentes.
- 54 charlas: cinco con padres de familia, 35 a estudiantes del proyecto de promoción y educación de los derechos de la niñez de cinco escuelas del municipio de Puerto Barrios, dirigido a docentes de educación primaria, estudiantes, padres y madres de familia
- Seis talleres de capacitación a la Red Institucional de Paternidad y Maternidad Responsable.
- Ocho talleres de capacitación dirigidos a mujeres privadas de libertad y personal administrativo del Centro Penal.
- Realización del foro regional de derechos de las personas con VIH/SIDA.
- 17 capacitaciones sobre derechos de la mujer: diez a organizaciones de mujeres de Izabal y siete al Comando Naval del Atlántico de Izabal.
- Dos foros sobre explotación sexual infantil, dirigidos a la Procuraduría General de la Nación, al MP, al Juzgado de la Niñez y a operadores de justicia de Izabal.

Auxiliatura Departamental de Jalapa



Auxiliatura Departamental de Jalapa

De enero a noviembre de 2009, la situación de los derechos humanos en este departamento tuvo un incremento en las denuncias de violencia, especialmente por violaciones del derecho a la vida. Entre los afectados prevalecen la niñez y juventud y las mujeres.

La seguridad alimentaria y nutricional se ve afectada por los altos índices de pobreza y la escasez de cultivos, detectándose numerosos casos de desnutrición en varios municipios del departamento. El medio ambiente es dañado por la tala inmoderada en las zonas boscosas del departamento, lo que ha perjudicado el ecosistema. En el área rural los servicios básicos de salud, vivienda, educación, agua, entre otros, son limitados.

Las áreas de mayor riesgo en la cabecera municipal son: barrios la Esperanza y San Francisco; y entre las urbanas, las aldeas El Chagüite, Los Izotes y La Fuente; en el municipio de Mataquescuintla, la aldea San Miguel; el municipio de Monjas y el barrio La Reforma. El casco urbano de San Manuel Chaparrón, y en San Pedro Pinula, las aldeas San José, Plan de la Cruz y La Cumbre, así como el casco urbano de San Luis Jilotepeque.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Jalapa se realizaron 477 acciones específicas: 212 de orientación, 166 de prevención, 33 de observación, 6 de mediación, 22 operativos y 38 de intervención inmediata.

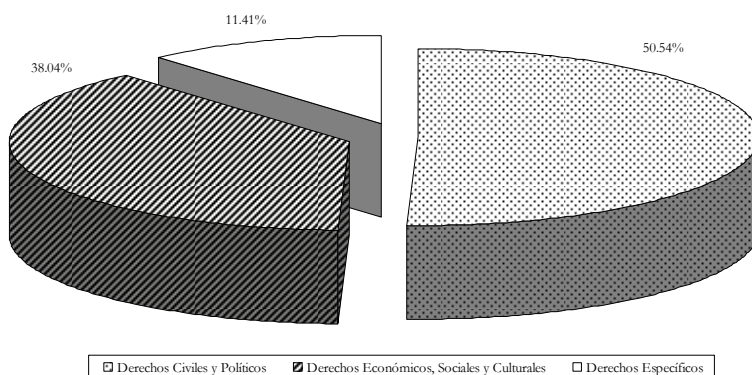
De investigación

Se abrieron 184 expedientes de investigación: 93 por violaciones a derechos individuales, 70 a derechos económicos, sociales y culturales y 21 a derechos específicos. De ellos, el 22.83% de oficio y el 77.17% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 92.59% forma parte del Organismo Ejecutivo y 7.41% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	7	8	16	7	8	17	4	7	13	2	4	93	50.54
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	11	6	3	4	6	11	6	5	7	2	9	70	38.04
Derechos Específicos	1	1	3	1	2	5	4	1	1	2		21	11.41
TOTAL MENSUAL	19	15	22	12	16	33	14	13	21	6	13	184	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	1	1	3	6	6	12	4	4	2		3	42	22.83
Ordinario	18	14	19	6	10	21	10	9	19	6	10	142	77.17
TOTAL MENSUAL	19	15	22	12	16	33	14	13	21	6	13	184	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	212	44.44
Prevención	166	34.80
Observación	33	6.92
Mediación	6	1.26
Operativo	22	4.61
Intervención inmediata	38	7.97
TOTAL	477	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	17	8	17	10	8	22	11	6	15	5	6	125	68.68
Judicial		1	1			3		3	1	0	1	10	5.49
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades		3	2	1	5	4	3	2	2	1	3	26	14.29
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	2	3			2			1	3		1	10	5.49
Ministerio Público			1			1						2	1.10
Centros educativos particulares				1	1							2	1.10
Consejos de Desarrollo						2						2	1.10
Empresa de productos mineros						1						1	0.55
Centros educativos comunitarios			1									1	0.55
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala								1				1	0.55
USAC											1	1	0.55
Sindicato de Trabajadores del Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social											1	1	0.55
TOTAL MENSUAL	19	15	22	12	16	33	14	13	21	6	13	182	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Estos derechos han sido violentados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito. El abuso de poder se evidenció en los funcionarios o empleados públicos hacia sus subordinados, excediéndose en sus funciones administrativas y en la atención hacia las personas. Asimismo, cuando ejecutan procedimientos lesivos a los intereses de la población, aplicando de forma incorrecta las disposiciones establecidas legalmente.

La violencia se ha incrementado de forma alarmante, causando violaciones del derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad. En función de ello, en materia de seguridad, Gobernación Departamental junto con otras instituciones conformaron la Comisión Departamental de Seguridad, con el objeto de disminuir los índices de violencia.

La discriminación se manifestó por la falta de respeto al principio de igualdad, en las rivalidades políticas y sociales, y en la división de los sistemas económicos del departamento.

Expediente EIO. JAL.06-2009/DCP

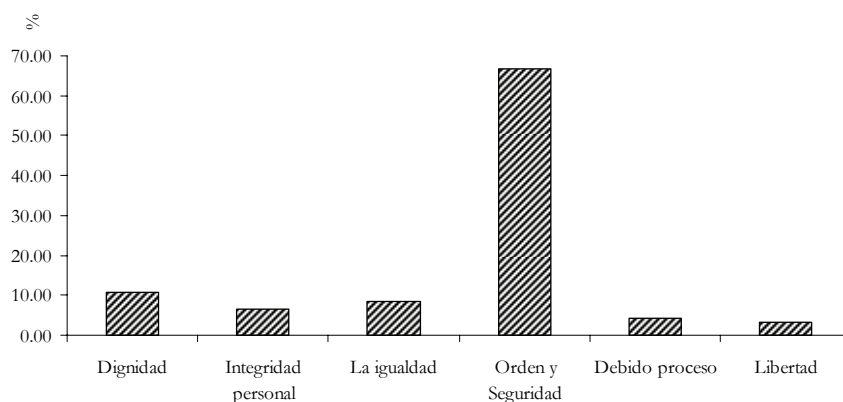
Se abrió expediente con base en la denuncia publicada en *Prensa Libre* referente a que la cabecera departamental de Jalapa está altamente expuesta a la violencia debido a que sólo seis agentes de la PNC protegen a más de 60 mil habitantes. En el mismo expediente se reporta a cinco miembros de una familia que fueron asesinados en la aldea El Chagüite, Jalapa. Como parte de la investigación se requirió informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC y al gobernador departamental de Jalapa; se entrevistó al comisario departamental por la escasez de agentes y sobre el tema de seguridad. Con lo anterior se logró la ampliación del número de agentes y unidades vehiculares.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Trato cruel, inhumano o degradante								1				1	1.08
Trabajo forzoso													
Amenazas o intimidaciones			2		1	4		1	1			9	9.68
INTEGRIDAD PERSONAL													
Tratos o penas inhumanas o degradantes			2	1					1			4	4.30
Muerte violenta				1	1							2	2.15
LA IGUALDAD													
Desigualdad jurídica		1										1	1.08
Falta de atención pública				1	1	4			1			7	7.53
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	5	7	11	2	5	7	4	3	7	1	2	54	58.06
Uso excesivo de la fuerza						1						1	1.08



Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial				2		1						3	3.23
Corrupción			1						1			2	2.15
Amenazas, coacción	1											1	1.08
Limitar el derecho de acción o de petición	1											1	1.08
DEBIDO PROCESO													
No permitir la utilización de todos los recursos								1	1			2	2.15
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial										1		1	1.08
Discontinuidad y lentitud procesal									1			1	1.08
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Falsedad										1		1	1.08
Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de movimiento o circulación								1		1		2	2.15
TOTAL MENSUAL	7	8	16	7	8	17	4	7	13	2	4	93	100.00



2.2. Derechos económicos, sociales y culturales

En relación con estos derechos, uno de los más vulnerados es el de la salud, en virtud de la mala atención, las limitaciones tecnológicas y de equipo para atender las especificidades que ciertos casos presentan. En cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional, ha azotado especialmente a la niñez y adolescencia de los diferentes municipios del departamento.

Los grupos más vulnerables son la niñez, las mujeres, las personas de la tercera edad y los pueblos indígenas, en función de la falta de oportunidades para tener una vida plena y el poco interés del Estado para proteger la integridad y la igualdad de estos grupos vulnerables.

La arbitrariedad se manifiesta, entre otros, en los elevados cobros de los servicios públicos, lo cual es una clara violación a los derechos del consumidor y usuario, y una actuación lesiva por parte de las entidades que prestan dichos servicios.

Expediente ORD.JAL.019-2009/DESC

Vecinos de San Manuel Chaparrón denuncian que el lugar denominado como El Pinal fue objeto de tala inmoderada de árboles. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal de San Manuel Chaparrón para que se pronunciara sobre los hechos denunciados, quien no respondió en el plazo estipulado, lo cual motivó a la elaboración del informe respectivo; se realizó un reconocimiento del área; y se entrevistó a los líderes comunitarios del lugar. El caso fue remitido a la Fiscalía Distrital del MP y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con el objeto de que se realicen las disposiciones legales pertinentes. Se emitió la resolución final, que se certificó a la Fiscalía Distrital del MP, para que sea agregada a los antecedentes y se realicen las acciones legales correspondientes.

Expediente ORD.JAL.061-2009/DESC

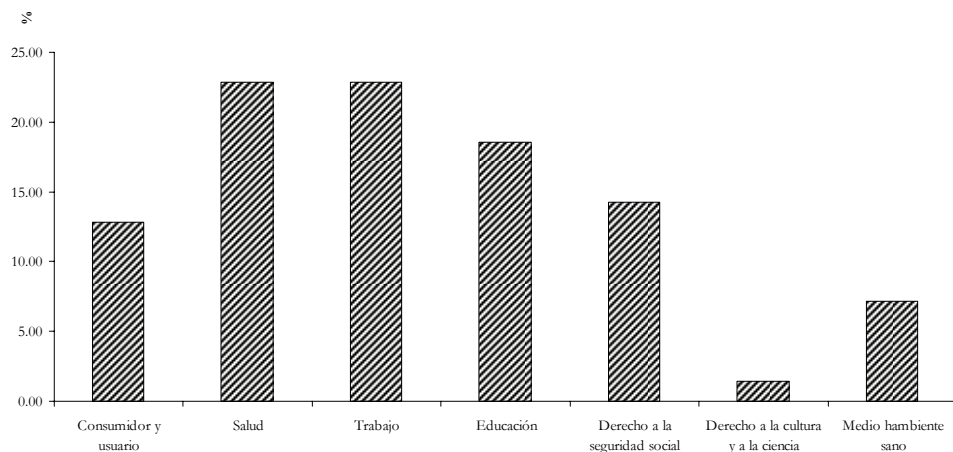
Los integrantes del Consejo Comunitario de la colonia La Calzada solicitaron la intervención del personal de esta Auxiliatura con el objeto de pedir a la Municipalidad de Jalapa la agilización de los trabajos de introducción de drenajes. El personal de la institución del PDH se constituyó en el lugar con el objeto de establecer los hechos denunciados, verificándose la existencia de una zanja inconclusa de aproximadamente cuatro metros de profundidad, así como deslizamientos de tierra por las recientes lluvias, situación que representaba un riesgo para los vecinos.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Abusos contractuales – contratos leoninos									1			1	1.43
Alzas inmoderadas de precios y tarifas						1		1				2	2.86
Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo					1	2	1				1	5	7.14
Ausencia de políticas públicas a favor del consumidor					1							1	1.43
SALUD													
Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)					1						1	2	2.86
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)	1	1		1	1	2						6	8.57
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud								1			1	2	2.86
Falta de atención o asistencia médica			2									2	2.86
Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado				1						1		2	2.86
Negación de atención médica	1	1										2	2.86
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones											1	1	1.43
Despido ilegal o injusto	2			1		1		1				5	7.14
Omisión administrativa (comisiones paritarias)							2	1				3	4.29



Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	1						1					2	2.86
Falta de pago de las prestaciones laborales	2						2		1			5	7.14
EDUCACIÓN													
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación	1					2					1	4	5.71
No ser escuchado										1	2	3	4.29
Falta de oportunidades de participación en la toma de decisiones en situaciones reales		1										1	1.43
No ser tratado con justicia									2			2	2.86
Falta de insumos y material didáctico	1					1						2	2.86
Falta de infraestructura						1						1	1.43
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Inexistente cobertura social	2								1			3	4.29
Insuficiente cobertura social a beneficiarios					2						1	3	4.29
Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social		1							1			2	2.86
Negación de pensión por invalidez o sobrevivencia		1							1			2	2.86
DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA													
No facilitar el disfrute del derecho a la recreación y al deporte								1				1	1.43
MEDIO AMBIENTE SANO													
Deforestación		1	1									2	2.86
Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes											1	1	1.43
Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas						1						1	1.43
Destrucción de los recursos no renovables				1								1	1.43
TOTAL MENSUAL	11	6	3	4	6	11	6	5	7	2	9	70	100.00



2.3 Derechos específicos

Existen registros alarmantes y denuncias por violencia intrafamiliar y maltrato infantil en la sociedad. La discriminación se manifiesta hacia los grupos más vulnerables: niñez y juventud, adulto mayor, personas discapacitadas, mujer y pueblos indígenas. En los centros de detención no se da cumplimiento a los programas de rehabilitación.

Expediente Orientación JAL.046-2009/DE

Una persona que solicitó a la Inspección de Trabajo ayuda económica del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor denunció que la trabajadora social aún no se ha presentado a su residencia para realizar el estudio socioeconómico correspondiente. Como parte de la investigación, personal de la PDH se presentó a la Inspección de Trabajo y Previsión Social para solicitar información referente al proceso, informando la secretaria de dicha entidad que el expediente había sido archivado en un lugar equivocado, por lo que agilizaría los trámites respectivos.

Expediente PREV.JAL.138-2009/DE

La denunciante es víctima de violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge, por lo que solicita que se remita la denuncia al Juzgado de Familia para que le sean brindadas medidas de seguridad a ella y a sus hijos menores de edad. Se remitió la denuncia al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia, se otorgó la custodia de los hijos, y se facilitó las medidas de seguridad correspondientes.

Expediente Orientación JAL.141-2009

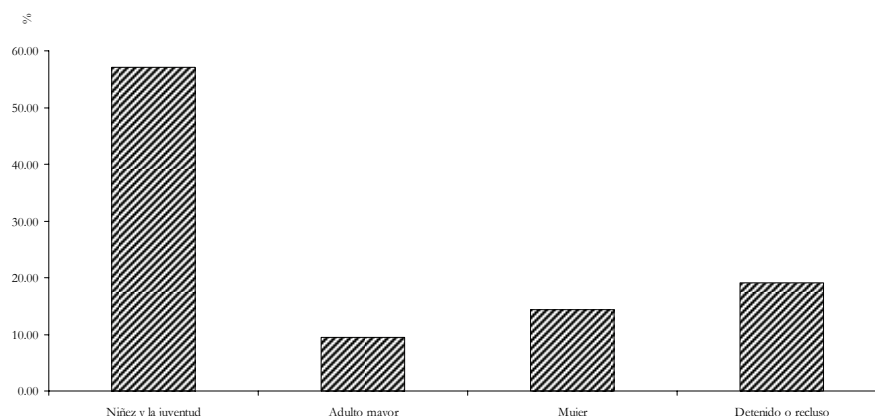
Refirió el denunciante que su hijo menor de edad, quien había partido hacia los Estados Unidos sin documentación, había sido detenido y que estaría retenido en Arizona por aproximadamente cuatro semanas para luego ser deportado a Guatemala. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al director general de Asuntos Consulares Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, así como la fecha prevista de la deportación. El joven fue deportado diez días después.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil		1	1	1		3	1	1		1		9	42.86
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven						1						1	4.76
Descuidos o tratos negligentes									1			1	4.76
Acoso sexual					1							1	4.76
ADULTO MAYOR													
Discriminación cultural, social, económica, política	1						1					2	9.52
MUJER													
Discriminación cultural, social, económica, política						1	1			1		3	14.29



DETENIDO O RECLUSO													
Alimentación inadecuada e insuficiente o en mal estado			1									1	4.76
Acciones que atentan contra su dignidad			1		1		1					3	14.29
TOTAL MENSUAL	1	1	3	1	2	5	4	1	1	2	0	21	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente EIO.JAL.034-2009/DE

Se recibió denuncia anónima referente a que la maestra de los grados cuarto, quinto y sexto de primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta La Aurora maltrata físicamente a los estudiantes, cobra para costear la limpieza del aula y no cumple con el horario establecido. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a la Directora Departamental de Educación de Jalapa y personal de la Auxiliatura dialogó con la directora del establecimiento, quien manifestó que la catedrática en ningún momento agredió a los estudiantes. Sin embargo, algunos alumnos y los afectados entrevistados manifestaron que en más de una ocasión han sido agredidos físicamente. La denunciada indicó que ella se considera exigente con los alumnos, lo cual ha generado molestia entre los padres de familia.

Expediente ORD.JAL.043-2009

Las denunciadas, reclusas de Presidios de Hombres y Mujeres de la ciudad de Jalapa, a raíz de una notificación de los encargados de proveer la alimentación al presidio, temen que ya no les proporcionen sus respectivos alimentos. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al director del Sistema Penitenciario, quien manifestó que no se contaba con la prórroga del contrato respectivo para realizar los pagos pendientes, por lo que personal de la PDH gestionó para que los vales por la provisión de alimentos a las cárceles de esta ciudad fueran firmados, así como la obtención de una nota de recomendación suscrita por el gobernador departamental para que se le diera trámite del pago por la provisión de alimentos.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.JAL.016-2009/DESC	Licda. Rosemary Guerra Orellana	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.JAL.108-2009/DESC		Juez de Asuntos Municipales	Municipalidad de San Luis Jilotepeque
ORD.JAL.110-2009/DESC	Sergio Milne Zea	Director Jalapa	IGSS
ORD.JAL.115-2009/DCP	Dr. Elder Fernando Portillo	Director	Hospital Nacional Nicolasa Cruz
ORD.JAL.043-2009/DE	Lic. Giulio Antonio Talamonti Gudiel	Director General	Sistema Penitenciario
ORD.JAL.104-2009/DESC	Efraín Salazar	Director Departamental	Ministerio de Educación
EIO.JAL.027-2009/DE	Pedro Ramos	Director	Escuela Normal Regional de Oriente
ORD.JAL.061-2009/DESC	Alfredo Sandoval	Alcalde Municipal	Municipalidad de Jalapa.
ORD.JAL.051-2009/DESC	Licda. Rosemary Guerra Orellana	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.JAL.085-2009/DCP	Oficial Santana Arana	Comisario Departamental	PNC
ORD.JAL.059-2009/DCP	Cesar Portillo Sandoval	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pedro Pinula
ORD.JAL.134-2009/DESC	Alfredo Sandoval	Alcalde Municipal	Municipalidad de Jalapa
EIO.JAL.042-2009/DESC EIO.JAL.038-2009/DCP	Elder Fernando Portillo	Director	Hospital Nacional Nicolasa Cruz
EIO.JAL.040-2009/DCP	Elmer Guerra	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental
EIO.JAL.040-2009/DCP	Marina Juárez	Delegada departamental	Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
EIO.JAL.040-2009/DCP	Otoniel Cruz	Delegado Departamental	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
ORD.JAL.137-2009/DESC	Julio Cesar Sandoval Portillo	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pedro Pinula
ORD.JAL.135-2009/DCP	Dr. Rafael Campos Polanco	Director	Jefatura del Área de Salud de Jalapa, MSPAS

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.JAL.013-2009/DCP	Licda. Rosemary Guerra Orellana	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.JAL.025-2009/DESC	Carlos Enrique Rosemberg Echeverría	Subgerente	Prestaciones Pecuniarias, IGSS
ORD.JAL.092-2009/DESC	Licda. Rosemary Guerra Orellana	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.JAL.096-2009/DESC	Licda. Rosemary Guerra Orellana	Directora Departamental	Ministerio de Educación
ORD.JAL.112-2009/DCP	Jaime Salvatierra Aquino	Comisario Departamental	PNC
ORD.JAL.094-2009/DESC		Encargado	Unidad de Nóminas, Ministerio de Educación
ORD.JAL.118-2009/DESC	Dr. Sergio Milne Zea	Director	IGSS Jalapa



ORD.JAL.117-2009/DESC ORD.JAL.133-2009/DESC ORD.JAL.138-2009/DCP	Efraín Salazar	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.JAL.099-2009/DCP	Edgar Nemesio Ortiz	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORIENTACIÓN. JAL. 178-2009/DCP	Lic. Mynor Carrera	Director	Centro Universitario de Sur Oriente, Universidad de San Carlos de Guatemala
ORD.JAL.139-2009/DE	Jorge Adelino Ucelo	Coordinador Técnico Administrativo	Ministerio de Educación
ORD.JAL.136-2009/DESC	Alfredo Sandoval	Alcalde Municipal	Municipalidad de Jalapa

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	477
De apertura de expedientes de investigación	184
Medidas urgentes	63
Ampliación de plazo para la investigación	9
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	14
Enmienda de procedimientos	2
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	141
Con suspensión por desistimiento	1
Resoluciones finales	
De NO Violación - Se determinó que no hubo violación	7
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	5
Comportamiento administrativo lesivo	1
TOTAL	904

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Intervención en el conflicto entre la sociedad civil y la comuna del municipio de San Carlos Alzatate por la inversión millonaria que la comuna efectuó para la construcción de obras municipales, lo cual creó incertidumbre en la población por el endeudamiento del municipio con una institución bancaria.
- Intervención ante la escasez de alimentos; se forma el Frente contra el Hambre, integrado por la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Universidad de San Carlos de Guatemala y la institución del PDH.
- Acompañamientos en manifestaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y otras como la Iglesia Católica y las Brigadas de Paz: manifestaciones en contra de la minería, en contra del aumento de la energía eléctrica.
- Seis monitoreos: uno al presupuesto adjudicado a la salud en este departamento, uno al Hospital Nacional de Jalapa, por la falta de insumos; uno en los centros de educación pública, por la gratuidad de la educación; uno por la seguridad alimentaria; uno sobre educación en derechos humanos y discriminación en los centros de educación básica; otro sobre capacidad para la atención de menores con desnutrición en el departamento.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Talleres de capacitación, sensibilización y orientación con diversos sectores de la sociedad civil, como pueblos indígenas, asociaciones, sindicatos, establecimientos educativos.
- Monitoreos para verificar si la niñez en situación de pobreza goza del acceso a la educación.
- Monitoreo en los diferentes puestos de salud y las Municipalidades para verificar la calidad del agua potable distribuida en los municipios y aldeas del departamento.
- Monitoreos al Hospital Nacional y los diferentes puestos de salud para garantizar la calidad y atención del servicio.
- Congreso sobre el tema de la discriminación.
- Foro sobre el Día de la Juventud: motivación, orientación y capacitación a la juventud del departamento.
- Orientación a través de distintas emisoras radiales a las personas sobre sus derechos: salud, educación, derecho a la vida, a la libre determinación; derechos de las personas de la tercera edad, de las personas con discapacidad, entre otros. Además, se da a conocer el trabajo que hace la Auxiliatura en el departamento.

Educación y promoción

- Campañas de sensibilización dirigidas a niños, niñas, maestros y padres de familia en el tema de derechos de la niñez y adolescencia.
- Varias capacitaciones dirigidas a la PMT sobre derechos civiles y políticos, mediante las cuales se les dio a conocer el funcionamiento de la institución y la Ley del Procurador de los Derechos Humanos.
- Una capacitación sobre derechos humanos a miembros voluntarios de redes de 24 diferentes comunidades del departamentos, en coordinación con Plan Internacional.
- Cinco foros: uno por el Día Internacional de la Mujer, en el cual se trataron temas relacionados con los derechos de la mujer, involucrando a los órganos de justicia que operan en Jalapa, y dos con miembros de las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia, en el cual se trataron temas relacionados con la violación de los derechos de la niñez. Un foro con estudiantes normalistas en celebración del Día de la Juventud. Uno enfocado al maltrato y abuso sexual y la ruta para su denuncia, dirigido a diferentes sectores.
- Doce conferencias-taller en diferentes establecimientos educativo de primaria, básico y diversificado, sobre diferentes temáticas de los derechos humanos.
- Encuentro con miembros de las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia, y voluntarios que apoyan el proceso educativo, enfocado al maltrato infantil y los derechos de la niñez.
- Quince jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a diferentes sectores (niñez, padres de familia), con el tema violencia y derechos de la niñez, en las comunidades de los municipios de San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y en la cabecera departamental.
- Charlas de difusión de los Acuerdos de Paz dirigidas a estudiantes del nivel básico de las escuelas normales de Jalapa.
- Diez capacitaciones en el área rural a grupos de mujeres en el tema de violencia intrafamiliar, en coordinación con los alumnos del Centro Universitario Sur Oriente (CUNSURORI).
- Tres capacitaciones a alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos de Jalapa, sobre el tema de VIH/SIDA, coordinado con el Área de Salud y Plan Internacional.
- Elección e investidura del Niño o Niña Procurador por un año, Adjunto I y Adjunto II, para el período 2009-2010.
- Encuentro dirigido a la población indígena, en el cual se les dio a conocer los derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos en general.
- Inducción a los estudiantes del CUNSURORI sobre derechos humanos.
- Capacitación a voluntarios del Frente contra el Hambre en el municipio de Monjas, coordinado con personal del Centro de Salud y la Municipalidad.

- Presentación del trabajo que realiza la PDH a los voluntarios de diferentes comunidades en Jalapa.
- Encuentro con los integrantes de las Juntas Municipales de todo el departamento referente a la protección a la niñez y adolescencia.
- Talleres y conferencias a jóvenes normalistas “Migrante: tus derechos viajan contigo, trata de personas”.
- Un foro con conferencistas delegados de diferentes órganos jurisdiccionales con el tema “Violencia intrafamiliar: la ruta de la denuncia”, vinculado a la celebración del Día de la Mujer y en acompañamiento a varias actividades que realizaron diferentes grupos de mujeres del departamento.
- Dos talleres con aproximadamente 200 personas con el tema de los derechos del trabajador, tanto del área rural como de la urbana.
- Un encuentro con diferentes instituciones nacionales relativo a los derechos del adulto mayor.
- Celebración de la semana “Abuelos por Siempre”, en coordinación con diferentes establecimientos del departamento.
- Una plática a niños sobre la discriminación y el respeto de los derechos del discapacitado.
- Una actividad recreativa con niños de Fundabien.

Auxiliatura Departamental de Jutiapa



Auxiliatura Departamental de Jutiapa

De enero a noviembre 2009 hubo gran cantidad de denuncias recibidas por esta Auxiliatura, en especial las que se refieren a violaciones de los derechos individuales. La violencia es uno de los factores preocupantes en Jutiapa, sin que la Policía Nacional Civil (PNC) brinde la seguridad necesaria ante la escasez de agentes.

La sequía, la desnutrición y el hambre ponen en riesgo a la población, a lo cual se suma la vulnerabilidad de la mayoría y las limitaciones en materia de seguridad, servicios básicos, vivienda, salud, educación y derechos laborales. Otro factor que ha afectado a la población es el alto costo de la canasta básica y el combustible, así como los cobros desmedidos de la energía eléctrica por parte DEORSA.

Los grupos más vulnerables son los más afectados por la falta de acciones gubernamentales, entre ellos: la niñez, que está expuesta a la explotación sexual infantil, pornografía infantil, desnutrición y hambre; la mujer, por la violencia intrafamiliar y discriminación; las personas de la tercera edad, a pesar de haber calificado en los estudios socioeconómicos para recibir la pensión, debido a que el Programa del Adulto Mayor no cuenta con presupuesto suficiente para atenderlas.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Jutiapa se realizaron 234 acciones específicas: 127 de orientación, 78 de prevención, 11 de mediación y 18 de intervención inmediata.

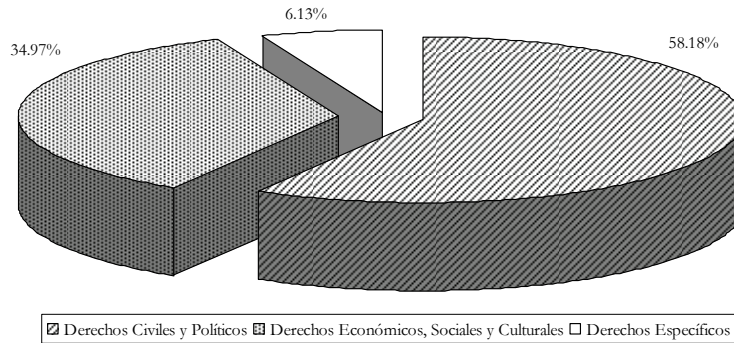
De investigación

Se abrieron 163 expedientes de investigación: 96 por violaciones a derechos individuales, 57 a derechos económicos, sociales y culturales y 10 a derechos específicos. De ellos, el 11.66% de oficio y el 88.34% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 94.44% forma parte del Organismo Ejecutivo, 5.56% del Organismo Judicial y 0% del Organismo Legislativo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	2	4	14	3	5	14	3	10	9	14	18	96	58.90
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1	12	7	9	4	5	1	4	2	9	3	57	34.97
Derechos Específicos		3	1	1		1			3		1	10	6.13
TOTAL MENSUAL	3	19	22	13	9	20	4	14	14	23	22	163	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		2		4	1	2		2	3	2	3	19	11.66
Ordinario	3	17	22	9	8	18	4	12	11	21	19	144	88.34
TOTAL MENSUAL	3	19	22	13	9	20	4	14	14	23	22	163	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	127	54.27
Prevención	78	33.33
Mediación	11	4.70
Intervención inmediata	18	7.69
TOTAL	234	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	2	2	8	13	5	10	10	1	8	9		68	59.65
Judicial			1		1			1	1			4	3.51
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades			4	2	2	1		3		2		14	12.28
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	1	1	1	0	1					2		6	5.26
Ministerio Público			2						1	1		4	3.51
Centros educativos particulares			1							1		2	1.75
DEORSA		5			1					1		7	6.14
Particulares		2										2	1.75
Consejos de Desarrollo										1		1	0.88
TELGUA		1	1				1					3	2.63
Defensa Publica Penal						1	1					2	1.75
Registro Nacional de las Personas						1						1	0.88
TOTAL MENSUAL	3	11	18	15	10	13	12	5	10	17	0	114	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

En lo que respecta a los derechos civiles y políticos vulnerados durante el año, destaca la violación del derecho humano al orden y la seguridad, y del derecho al debido proceso. Sobresalen los constantes robos y ataques a maestros del área rural; las violaciones sexuales y los asaltos a buses, de lo cual tiene un amplio conocimiento la PNC, siendo incapaz de implementar un plan de seguridad.

Las autoridades o funcionarios públicos no cumplen con sus funciones específicas, ignorando la atención que deben prestar a la población en general. El abuso de poder, ya sea por acción u omisión, por parte de la PNC se refleja en los actos de cohecho y extorsión y amenazas; a ello debe sumarse la participación de algunos agentes en bandas delincuenciales.

Expediente ORD. JUT.022-2009/DCP

El denunciante indica que su nombramiento no ha sido aprobado, a pesar de haber ganado la convocatoria, por lo que está trabajando sin recibir salario. En la Dirección Departamental de Educación y el Ministerio de Educación no le dan respuesta alguna. A partir de la investigación realizada se ubicó el expediente en la Dirección Departamental de Educación, que presentaba algunos errores de forma en la papelería, motivo por el cual no había sido aprobado el nombramiento. Tras la corrección de los errores se logró el nombramiento del denunciante en su plaza y recibió su salario con normalidad.

Expediente ORD.JUT.025-2009/DCP

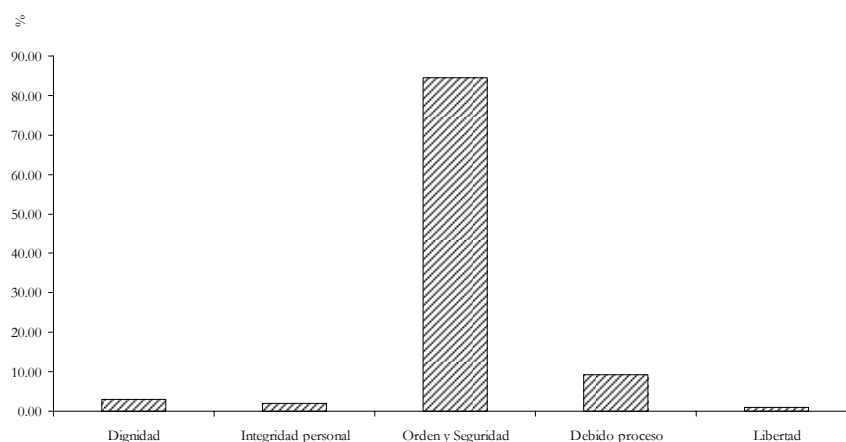
El denunciante manifestó haber ingresado a su esposa al Hospital de Jutiapa en estado de gravedad. Tras practicarle una cesárea sus piernas quedaron inmovilizadas, además de padecer fuertes dolores en éstas y la columna. Se corroboró la situación de la paciente, la cual se atribuye a una mala práctica profesional del anestesista. El MP convocó a una audiencia conciliatoria entre las partes para proporcionar la atención médica necesaria mientras se deduce la responsabilidad del médico anestesista, de acuerdo con el dictamen que rinda el médico forense.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Amenazas o intimidaciones		1								1	1	3	3.13
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte violenta									1		1	2	2.08
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1	2	4	0	3	7	1	3	3	5	5	34	35.42
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial	1		5	1	0	5	1	5	4	5	7	34	35.42
Corrupción			3	1	1					1	3	9	9.38
Amenazas, coacción								2				2	2.08
Por hora inhábil de atención al público						1						1	1.04
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal					1							1	1.04



DEBIDO PROCESO													
Acceso restringido a tribunales y dependencias del Estado									1			1	1.04
No permitir su defensa		1										1	1.04
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial			1	1			1					3	3.13
Discontinuidad y lentitud procesal										1		1	1.04
Incumplimiento del Estado de su deber de prevenir, investigar, sancionar a los responsables de delitos o crímenes			1			1				1		3	3.13
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Información negligente											1	1	1.04
TOTAL MENSUAL	2	4	14	3	5	14	3	10	9	14	18	96	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La poca inversión en programas de desarrollo y los recortes presupuestarios de las instituciones del Estado, que limitan la ejecución de este tipo de proyectos, vinculado a la pobreza y las condiciones de vida, en especial las áreas rurales, no permiten que los habitantes disfruten de un nivel de vida digna. A ello debe sumarse el incremento en las tarifas de los servicios básicos y la falta de políticas encaminadas a generar fuentes de empleo.

El Ministerio de Educación (MINEDUC) se ha enfocado únicamente en el nivel primario, no dando cobertura a los niveles preprimario, básico ni diversificado. Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tiene varias denuncias por falta de atención médica para sus asociados, incumpliendo con horarios de consultas médicas y negligencias para con sus afiliados. El programa del Adulto Mayor funcionó con regularidad hasta mediados del año, sin embargo, en el segundo semestre aunque validó varias solicitudes informó que no se harían efectivos los pagos por falta de presupuesto.

En otro orden, Jutiapa es altamente vulnerable ante desastres naturales y no existe una cultura de prevención, por lo que es necesario un trabajo arduo para sensibilizar a la población y a los alcaldes de los municipios de Conguaco, Moyuta, Comapa, Yupiltepeque, El Adelanto, Zapotitlán y Jutiapa, declarados áreas de mayor riesgo por las sequías que afectan al departamento.

Expediente ORD.JUT.0013-2009/DESC

La denunciante fue despedida de la Secretaría de Bienestar Social a pesar de laborar desde hace diez años en el renglón 011 y estar embarazada, aunque sin conocimiento del patrono. A partir de la investigación realizada se confirmó el despido de la denunciante y dos trabajadoras más, bajo el argumento de una reorganización en toda la República, de la entidad denunciada, así como el desconocimiento de las autoridades de la institución con respecto a su embarazo. También se constató que la denunciante podía haber apelado ante el Servicio Civil pero el plazo había vencido. Aunque se le asesoró para que, de forma extemporánea, acudiera al Servicio Civil a ejercer apelación y se le brindó acompañamiento, decidió aceptar su despido.

Expediente ORD.JUT.055-2009/DCP

La denunciante manifestó que hace casi un año que labora en el MINEDUC sin que a la fecha se le haya hecho efectivo ningún salario. A partir de la investigación realizada se corroboró que el retraso se debía a algunos errores en el acta de la maestra, lográndose que se le acreditara su salario y que se solucionaran todos los errores de forma en su papelería, recibiendo, a partir de esa fecha, su salario con normalidad.

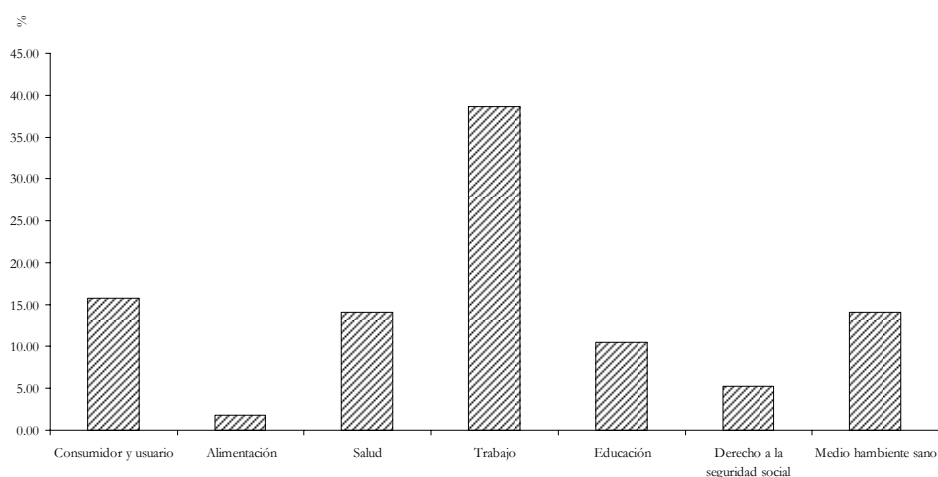
**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Fraude									1			1	1.75
Desabastecimiento					1							1	1.75
Alzas inmoderadas de precios y tarifas		4	1		1					1		7	12.28
ALIMENTACIÓN													
Inseguridad alimentaria								1				1	1.75
SALUD													
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud				1				1				2	3.51
Insuficiente cobertura de inmunización				1								1	1.75
Mala atención en centro de salud		1										1	1.75
Negligencia médica			1									1	1.75
Medidas inadecuadas para la rehabilitación		2		1								3	5.26
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral											1	1	1.75
No evolución del salario			1									1	1.75
Falta de negociación									1	1		2	3.51
Omisión administrativa (comisiones paritarias)										1		1	1.75
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	1		1	2	2	1				1	2	10	17.54
Falta de pago de las prestaciones laborales						1		1				2	3.51
Por no efectuar la organización del trabajo con base a principios de justicia social			1									1	1.75
Despido injusto		1		1		2						4	7.02



EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita		1										1	1.75
Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria				1								1	1.75
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación								1				1	1.75
No ser escuchado										1		1	1.75
No ser tratado con justicia										1		1	1.75
No ser respetado		1										1	1.75
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social a beneficiarios		1		1						1		3	5.26
MEDIO AMBIENTE SANO													
Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes						1						1	1.75
Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas		1	1	1			1			2		6	10.53
Por no prevenir la contaminación del medio ambiente				1								1	1.75
TOTAL MENSUAL	1	12	7	9	4	5	1	4	2	9	3	57	100.00



2.3 Derechos específicos

La situación de los derechos de la niñez y juventud preocupa sobremanera por generarse desde el propio hogar, en otros casos los agresores son los maestros; a ello deben sumarse los casos de abuso sexual y la pornografía infantil, situación que vulnera todos sus derechos. Además, debido a la arbitrariedad de algunos funcionarios, se han emitido resoluciones que separan a los hijos de sus padres, perjudicando la integridad familiar, medidas muchas veces innecesarias.

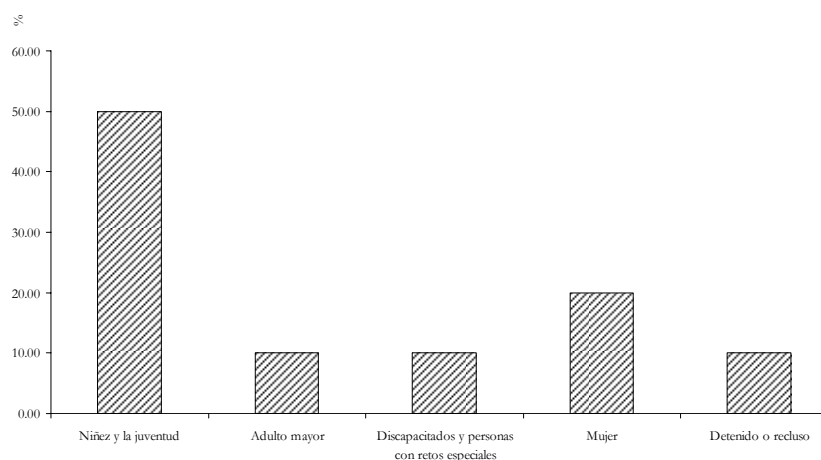
Los derechos de la mujer también son gravemente vulnerados debido a la violencia física y psicológica, además de actos de discriminación en el ámbito público y privado.

Expedientes ORIENTACION. JUT.092-2009/S, ORIENTACION. JUT.093-2009/S, ORIENTACION. JUT.096-2009/S, ORIENTACION. JUT.098-2009/S

El conjunto de expedientes enumerados se abrió por denuncias presentadas contra la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (DEORSA). En respuesta a esta situación, y con base en las pruebas presentadas por ambas partes, la Auxiliatura determinó de forma preliminar la violación a los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica y, al no obtener resultados de la administración de la empresa, se decidió iniciar un trámite en todo el departamento. Con el apoyo del Departamento Jurídico de la institución del PDH se plantearon ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Ministro de Economía los trámites realizados para que ellos también intervinieran en el restablecimiento de los derechos violados. Con ello se obtuvo el otorgamiento de un amparo para las personas afectadas, así como una resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en la que se hace saber a DEORSA que a los usuarios reclamantes no les podrá ser interrumpido el servicio; asimismo, se le ordena que se abstenga de cobrar a los usuarios reclamantes los montos que son objetos de investigación hasta que se resuelva de forma definitiva los reclamos efectuados y que las autoridades competentes que están conociendo el problema tomen las medidas pertinentes.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil		2										2	20.00
Abuso físico o mental				1					1			2	20.00
Abuso sexual									1			1	10.00
ADULTO MAYOR													
Falta de acceso a servicios de salud			1									1	10.00
DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES													
Violencia física o psicológica											1	1	10.00
MUJER													
Violencia física o psicológica						1			1			2	20.00
DETENIDO O RECLUSO													
Alimentación inadecuada e insuficiente o en mal estado		1										1	10.00
TOTAL MENSUAL	0	3	1	1	0	1	0	0	3	0	1	10	100.00



3. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente AI. JUT.008-2009/S A favor de: Maria Ordoñez Díaz Motivo: abuso sexual por parte de su padre, con quien procreó cuatro niñas. Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: la señora María Ordóñez Díaz era víctima de violación continuada por parte de su padre, con quien procreó cuatro hijas, y estaba cautiva en la casa de residencia del señor Javier Díaz. Fue rescatada el 03 de agosto por el Juez de Paz de Jutiapa y trasladada al Grupo Guatemalteco de Mujeres de la ciudad de Guatemala, donde se encuentra resguardada para su seguridad.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
ORD.JUT.001-2009/DESC	Lic. Jirian Remberto Corado Esquivel	Director departamental	IGSS
ORD.JUT.003-2009/DCP	Dr. Oscar Enrique Escobar Martínez	Director	Área de Salud
ORD.JUT.009-2009/DESC	Dr. César Armando Azurdia Fajardo	Director	IGSS)
ORD.JUT.009-2009/DESC	Dr. Héctor Enrique Juarez Navas	Director Ejecutivo	Hospital Nacional Jutiapa
ORD.JUT.009-2009/DESC	Licda. Rosa Maybelin Campos Avalos	Asesora Legal	Ministerio de Gobernación
ORD.JUT.011-2009/DCP	Jaime Rolando Salvatierra Aquino.	Jefe	Comisaría 21, PNC
ORD.JUT.013-2009/DESC	Licda. Silvia del Carmen Palomo González	Secretaría	Secretaría de Bienestar Social
ORD.JUT.014-2009/DCP	Licda. Ericka Lorena Aifan Avila	Jueza	Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente
ORD.JUT.015-2009/DCP	Lic. Fredy Arturo Paiz López	Juez	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.015-2009/DCP	Heydi Carranza	Administrador	Mercado Municipal
ORD.JUT.016-2009/DESC	Ing. Julio Virula Medrano	Delegado Departamental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.JUT.017-2009/DESC	Noé Zuñiga	Jefe	Distribuidora Eléctrica Oriental Sociedad Anónima
ORD.JUT.020-2009/DESC	Licda. Mirna Isabel Martínez de Villeda	Directora	Dirección Departamental
ORD.JUT.021-2009/DCP	Jaime Rolando Salvatierra Aquino	Jefe	Comisaría 21, PNC
ORD.JUT.022-2009/DCP	Licda. Sandra Nineth Bonilla Archila	Representante Despacho Ministerial	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.022-2009/DCP	Miguel Ángel Reyes Gómez	Rep. Despacho Ministerial	Jurado Nacional de Oposición
ORD.JUT.023-2009/DESC	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde Municipal	Municipalidad
ORD.JUT.023-2009/DEC	Ing. Julio Virula Medrano	Delegado	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

ORD.JUT.024-2009/DCP	Dr. Héctor Enrique Juárez Navas	Director Ejecutivo	Hospital Nacional Jutiapa
ORD.JUT.024-2009/DCP	Dr. Juan Manuel Gonzáles Vivas	Profesional I	Hospital Nacional Jutiapa
ORD.JUT.024-2009/DCP	Dr. Celso Cerezo	Mnistro	Ministerio de Salud
ORD.JUT.024-2009/DCP	Dra. Lucía Eleonora Terrón Gómez	Secretaria	Tribunal de Honor Médicos y Cirujanos
ORD.JUT.025-2009/DESC	Lic. César Augusto Polanco Arana	Agente Fiscal	Ministerio Público, Jutiapa
ORD.JUT.027-2009/DESC	Lic. Carlos Manuel García Marroquín	Asesor Jurídico	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.027-2009/DESC	Lic. Manuel Fernando González Santos	SubDirector Asesoría Jurídica	Ministerio de Educación
ORD.JUT.029-2009/DESC	Lic. Roni Esmelzer Ramos Quiñonez	Supervisor Educativo	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.030-2009/DCP	Lic. Carlos Alberto Cambara Santos	Coordinador A. I.	Defensa Penal, Jutiapa
ORD.JUT.032-2009/DESC	Lizandro Maldonado Regil	Jefe	Estación 21, PNC
ORD.JUT.032-2009/DESC	Jorge Adalberto Mateo	Encargado	Subestacion 21-11, PNC
ORD.JUT.033-2009/DESC	Licda. Irma Elizabeth de Paz de Loaiza	Secretaria General A. I.	IGSS
ORD.JUT.033-2009/DESC	Lic. Jiriam Remberto Corado Ezquivel	Director Departamental	IGSS
ORD.JUT.035-2009/DESC	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.035-2009/DESC	Marco Enrique López y López	Coordinador de COCODES	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.036-2009/DESC	Dra. Ana Laura Matute Calderón	Supervisora General	Ministerio Público, Jutiapa
ORD.JUT.037-2009/DESC	Dr. Héctor Enrique Juárez Navas	Director	Hospital Nacional
ORD.JUT.037-2009/DESC	Licda. Estela Marina Juárez Gutiérrez	Jefa del Área Laboral	Asesoría Jurídica, MSPAS Guatemala
	Leonardo Arana	Jefe	Subestacion 21-32, PNC Atescatempa
ORD.JUT.039-2009/DCP	Licda. Ericka Lorena Aifan Avila		Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente
ORD.JUT.044-2009/DCP		Jueza	Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente
ORD.JUT.045-2009/DESC	Lic. Carlos Manuel García Marroquín	Asesor Jurídico	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.045-2009/DESC	Lic. Manuel Fernando González Santos	Subdirector	Dirección de Asesoría Jurídica, Ministerio de Educación
ORD.JUT.045-2009/DESC	Licda. Mirna Isabel Martínez de Villeda	Directora	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.046-2009/DESC	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.047-2009/DESC	Dr. German S. Mauhardt Corrales	Director Ejecutivo	Hospital Nacional de Jutiapa
ORD.JUT.048-2009/DESC	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.049-2009/DESC	Dr. Genard Antonio Méndez Guzmán	Director	Área de Salud Jutiapa
ORD.JUT.041-2009/DESC	Lic. Héctor Aníbal Gonzáles	Director A. I.	IGSS, Jutiapa

ORD.JUT.041-2009/DESC	Licda. Irma Elizabeth de Paz de Loaiza	Secretaria General A. I.	IGSS, Guatemala
ORD.JUT.050-2009/DCP	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.051-2009/DCP	Licda. Gladis Amanda Najarro Gonzáles	Jefa	Delegación Departamental Contraloría General de Cuentas
ORD.JUT.051-2009/DCP	Emilio de Maria García Guerra	Alcalde	Municipalidad de Agua Blanca
ORD.JUT.052-2009/DESC	Mirna Isabel Martínez de Villeda	Directora	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.054-2009/DCP	Lic. Jirían Remberto Corado Esquivel	Director Departamental	IGSS
ORD.JUT.055-2009/DESC	Licda. Irma Elizabeth de Paz de Loaiza	Secretaria General A. I.	IGSS Guatemala
ORD.JUT.055-2009/DECS	Lic. Carlos Manuel García Marroquín	Asesor Legal	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.055-2009/DESC	Lic. Manuel Fernando González Santos	Subdirector	Dirección de Asesoría Jurídica Ministerio de Educación
ORD.JUT.056-2009/DESC	Antonio Daniel Valladares Evans	Director	Departamento de Insumos, PRORURAL
ORD.JUT.056-2009/DESC	Roberto Daton	Coordinador Ejecutivo	PRORURAL
ORD.JUT.057-2009/DESC	Lisete Castro	Jefe Oficina Comercial	Distribuidora Eléctrica Oriental Sociedad Anónima, Jutiapa
ORD.JUT.057-2009/DESC	Ing. Cesar Augusto Fernández Fernández	Director	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ORD.JUT.058-2009/DCP	Jaime Rolando Salvatierra Aquino		Subcomisaría 21, PNC
ORD.JUT.060-2009/DCP	Iris Hernández Galicia	Registrador Civil	Registro Nacional de las Personas
ORD.JUT.061-2009/DCP	José Arturo Linares Argueta	Alcalde Municipal	Municipalidad Conguaco
ORD.JUT.062-2009/DCP	Carlos Humberto Barahona Pineda	Subjefe	Comisaría 21-11 Poniente, PNC Jutiapa
ORD.JUT.064-2009/DESC	Lic. Manuel Fernando González Santos	Subdirector	Asesoría Jurídica, Ministerio de Educación
ORD.JUT.064-2009/DESC	Licda. Mirna Izabel Martínez de Villeda	Directora	Dirección Departamental, Jutiapa
ORD.JUT.065-2009/DESC	Dr. Herman Maulhart Hernan	Director	Hospital Nacional de Jutiapa
ORD.JUT.069-2009/DESC	Dr. Genard Méndez Guzmán	Director	Área de Salud
ORD.JUT.069-2009/DESC	Adalberto Ranferi	Coordinador	Programa Vectores, Área de Salud Jutiapa
ORD.JUT.070-2009/DCP	P.A. Mauricio Contreras Marrón	Alcalde	Municipalidad de Atescatempa
ORD.JUT.070-2009/DCP		Oficina de COCODE	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.071-2009/DCP	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad Jutiapa
ORD.JUT.072-2009/DESC		Jurado Departamental de Oposición	Dirección de Educación, Jutiapa
ORD.JUT.073-2009/DCP	Alvaro Nagera Castro	Subinspector	Comisaría 21-11 Poniente, PNC Jutiapa
ORD.JUT.075-2009/DESC	Magno Lemus Pérez	Alcalde	Municipalidad Moyuta
ORD.JUT.078-2009/DESC	Fredy Paiz López	Juez Municipal	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.079-2009/DCP	Dr. Herman Maulhart Hernan	Director	Hospital Nacional de Jutiapa
ORD.JUT.082-2009/DCP	Tiofilo Corado Asmitin	Alcalde	Municipalidad Adelanto, Jutiapa
ORD.JUT.084-2009/DCP	Jesús Esquivel Hernández	Jefe	Comisaría 21, PNC Jutiapa

ORD.JUT.084-2009/DCP	Edvin Josué Trejo Salazar	Gobernador	Gobernación Departamental
ORD.JUT.084-2009/DCP	Licda. Mabelyn Campos Avalos	Asesora Legal	Oficina Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación
ORD.JUT.086-2009/DCP	Ing. Juan Francisco Rivas Guerra	Encargado de Valuación, Control y Seguridad Ambiental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.JUT.086-2009/DCP	Dr. Genard Antonio Méndez Guzmán	Director	Área de Salud, Jutiapa
ORD.JUT.087-2009/DESC	Ing. Juan Francisco Rivas Guevara	Encargado de Valuación, Control y Seguridad Ambiental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.JUT.087-2009/DCP	Dr. Herman Maulhart Hernan	Director	Hospital Nacional de Jutiapa
ORD.JUT.090-2009/DCP	Lic. Marco Tulio Castillo Melgar	Supervisor educativo	Colegio Privado Jutiapa
ORD.JUT.091-2009/DCP	Lic. Marco Enrique López y López	Coordinador COCODE	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.093-2009/DCP	Jusús Esquivel Hernandez	Jefe	Comisaría 21, PNC Jutiapa
ORD.JUT.094-2009/DCP	Lic. Julio Federico Barrera Salguero	Director	Técnico Administrativo Nivel Medio

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.JUT.002-2009/DCP		Jurado Nacional de Oposición	Ministerio de Educación
ORD.JUT.003-2009/DCP	Dr. Genard Mendez Guzman	Director	Área de Salud, MSPAS
ORD.JUT.006-2009/DESC		Jefe	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ORD.JUT.006-2009/DESC	Lic. Julio Gomez García	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD.JUT.006-2009/DESC	Noe Zuñiga	Delegado	Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.
ORD.JUT.010-2009/DESC	Dr. Oscar Enrique Escobar Martínez	Director	Área de Salud
ORD.JUT.016-2009/DCP		Director	Servicio Civil
ORD.JUT.016-2009/DCP		Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.016-2009/DCP		Directora	Colegio Vida Nueva
ORD.JUT.016-2009/DCP	Elsi Olimpia Vega Camey	Profesora	Colegio Vida Nueva
ORD.JUT.016-2009/DESC		Delegado	Telgua
ORD.JUT.017-2009/DESC		Delegado	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ORD.JUT.018-2009/DESC		Delegado	Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A.
ORD.JUT.021-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional
ORD.JUT.023-2009/DESC		Asesor Jurídico	Municipalidad
ORD.JUT.023-2009/DCP		Directora General	Ministerio de Ambiente Recursos Naturales.
ORD.JUT.025-2009/DCP	Dr. Hector Juarez	Director	Hospital Nacional Jutiapa.
ORD.JUT.026-2009/DESC	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Consejo Municipal	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.026-2009/DESC		Consejo Municipal	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.026-2009/DESC	Enrique Lopez	COCODE	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.028-2009/DESC	Lic. Fredy Pais	Juez Municipal	Municipalidad de Jutiapa



ORD.JUT.028-2009/DESC	Ing. Julio Virula	Delegado	Ministerio de Ambiente Recursos Naturales
ORD.JUT.028-2009/DESC	Dr. Oscar Escobar Martinez	Jefe	Área de Salud Jutiapa
ORD.JUT.029-2009/DESC	Licda. Mirna Izabel Martinez de Villeda.	Directora	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.029-2009/DESC		Directora	Escuela Ciencias de la Comunidad
ORD.JUT.031-2009/DCP		Consejo Municipal	Municipalidad de Asunción Mita, Jutiapa
ORD.JUT.032-2009/DESC		Delegada	Oficina de Responsabilidad Profesional
ORD.JUT.032-2009/DESC	Marlen Blanco Lapola	Directora General	PNC
ORD.JUT.035-2009/DCP		Consejo Municipal	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.039-2009/DCP	Jaime Orlando Salvatierra Lapola	Jefe	Comisaría Departamental de Jutiapa
ORD.JUT.041-2009/DCP		Fiscal Municipal	Fiscaliza Municipal, Moyuta
ORD.JUT.041-2009/DESC		Junta Directiva	IGSS
ORD.JUT.042-2009/DESC		Ministro	Ministerio de Salud
ORD.JUT.042-2009/DESC		Viceministro	Ministerio de Salud
ORD.JUT.042-2009/DESC		Director de Salud	Hospital Nacional
ORD.JUT.043-2009/DESC	Lic. Julio Gomez Garcia	Fiscal Distrital	Ministerio Publico, Jutiapa
ORD.JUT.044-2009/DCP		Supervisor	Junta Disciplinaria, Organismo Judicial
ORD.JUT.046-2009/DCP		Consejo Municipal	Consejo Municipal de Jutiapa
ORD.JUT.047-2009/DESC		Delegado	Colegio de Médicos de Guatemala
ORD.JUT.048-2009/DESC	Ing. Julio Virula	Delegado	Ministerio de Ambiente Recursos Naturales
ORD.JUT.050-2009/DCP		Corporación Municipal	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.052-2009/DESC		Ministra	Ministerio de Educación
ORD.JUT.053-2009/DCP			Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.JUT.053-2009/DCP		Directora	PNC
ORD.JUT.055-2009/DESC		Ministra	Ministerio de Educación
ORD.JUT.058-2009/DCP			Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.JUT.059-2009/DCP	Jaime Orlando Salvatierra Aquino	Subcomisario	PNC, Jutiapa
ORD.JUT.059-2009/DCP	Marlen Blanco Lapola	Directora General	PNC
ORD.JUT.059-2009/DCP			Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.JUT.061-2009/DCP	Dra. Ilma Recinos	Directora	Centro de Salud, Conguaco
ORD.JUT.061-2009/DCP		Presidente	COMUDE
ORD.JUT.061-2009/DCP	Dr. Genar Mendez Guzman	Director	Área de Salud
ORD.JUT.062-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.JUT.062-2009/DCP	Marlen Blanco Lapola	Directora General	PNC
ORD.JUT.063-2009/DCP	Mirna Izabel Martinez de Villeda	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.066-2009/DESC	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad de Jutiapa
ORD.JUT.068-2009/DESC	Ing. Justo Alfredo Cobar Guerra	Director Ejecutor	COVIAL
ORD.JUT.068-2009/DESC	Arturo Rodriguez	Alcalde	Municipalidad de Asunción Mita
ORD.JUT.070-2009/DCP		Oficina COCODE	Municipalidad de Atescatempa
ORD.JUT.071-2009/DCP		Corporación Municipal	Municipalidad Atescatempa

ORD.JUT.072-2009/DESC		Jurado Nacional de Oposición	Ministerio de Educación, Guatemala
ORD.JUT.073-2009/DCP	Lic. Julio Gomez García	Fiscal Distrital	Ministerio Público, Jutiapa
ORD.JUT.074-2009/DCP	Lic. Julio Gomez García	Fiscal Distrital	Ministerio Público, Jutiapa
ORD.JUT.074-2009/DCP	Jaime Orlando Salvatierra Aquino	Comisario Departamental	PNC Jutiapa
ORD.JUT.074-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC Guatemala
ORD.JUT.075-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC Guatemala
ORD.JUT.075-2009/DCP	Jaime Orlando Salvatierra Aquino	Jefe	Comisaría 21, PNC Jutiapa
ORD.JUT.075-2009/DCP	Lic. Julio Gómez García	Fiscal Distrital	Ministerio Público, Jutiapa.
ORD.JUT.076-2009/DCP		Consejo Municipal	Alcaldía Municipal, Moyuta.
ORD.JUT.077-2009/DCP	Licda. Erica Alfán Dávila	Jueza	Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente
ORD.JUT.078-2009/DESC	Ing. Julio Virula Medrano	Delegado	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.JUT.078-2009/DESC		Gerente	TELGUA
ORD.JUT.079-2009/DCP	Lic. Julio Gomez García	Fiscal Distrital	Ministerio Público, Jutiapa.
ORD.JUT.081-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.JUT.081-2009/DCP	Lic. Julio Gomez García	Fiscal Distrital	Ministerio Público, Jutiapa.
ORD.JUT.081-2009/DCP	Jesus Hernandez Esquivel	Comisario	Comisaría 21, Jutiapa.
ORD.JUT.083-2009/DCP	Lic. Julio Gomez García	Fiscal Distrital	Ministerio Público, Jutiapa.
ORD.JUT.084-2009/DCP		Jefe	Oficina de Responsabilidad Profesional, PNC
ORD.JUT.085-2009/DESC	Licda. Mirna Isabel Martines de Villeda	Directora	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.085-2009/DESC		Supervisor Educativo	Ministerio de Educación, Asunción Mita
ORD.JUT.086-2009/DCP	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad de Jutiapa.
ORD.JUT.087-2009/DESC	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde	Municipalidad de Jutiapa.
ORD.JUT.089-2009/DCP	Ing. Ramos Rodriguez	Coordinador Técnico Administrativo	Ministerio de Educación, Jerez, Jutiapa
ORD.JUT.089-2009/DCP	Licda. Mirna Isabel Martines de Villeda	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.089-2009/DCP	Iris Azuleina Elvira Contreras de España	Maestra	Escuela Oficial de Párvulos
ORD.JUT.090-2009/DCP	Licda. Mirna Isabel Martines de Villeda	Directora	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.091-2009/DCP.	Ing. Mario Lisandro Salazar Salguero	Alcalde Municipal	Municipalidad, Jutiapa
ORD.JUT.092-2009/DCP	Lic. Nery Antonio Carranza Valdez	Juez	Juzgado de la Niñez
ORD.JUT.092-2009/DCP	Profesor Sergio Ricardo Salguero Contrera	Maestro, 3ro. Primaria	Escuela Pedro Molina, Jalpatagua
ORD.JUT.092-2009/DCP	Profesor Rolando Sazo	Profesor	Escuela Pedro Molina, Jalpatagua
ORD.JUT.092-2009/DCP	Profesora Silvia Esquivel Medrano	Profesora	Escuela Pedro Molina, Jalpatagu
ORD.JUT.093-2009/DCP	Ing. Edwin Josue Trejo Salazar	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental

ORD.JUT.093-2009/DCP	Lic. Pedro Baltazar Gómez Barrios	Director General	PNC, Guatemala
ORD.JUT.094-2009/DCP	Lic. Marco Tulio Castillo Melgar	Supervisor Educativo	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT.095-2009/DCP		Jefes	Junta Disciplinaria, Organismo Judicial
ORD.JUT.096-2009/DCP		Supervisor Educativo	Dirección Departamental de Educación
ORD.JUT. 096-2009/DCP	Licda. Mirna Izabel Martines de Villeda	Directora	Dirección Departamental de Educación
EIO.JUT.15-2009/DESC	Noé Zúñiga	Jefe	Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA), Jutiapa

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCION	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	235
De apertura de expedientes de investigación	164
Medidas urgentes.	27
Ampliación de plazo para la investigación.	164
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios.	5
Acciones o recursos planteados	
Amparos.	1
Exhibiciones	1
TOTAL	597

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Por mortalidad materna de 2008 a 2009.
- De Juntas Municipales activas en Jutiapa.
- Por denuncias recibidas del Hospital Nacional de Jutiapa.
- De investigación acerca de la problemática de DEORSA en el departamento.
- Sobre denuncias por agresiones a periodistas o corresponsales de prensa.
- De diagnóstico sobre necesidades prioritarias del departamento de Jutiapa.
- De denuncias sobre la ley de Libre Acceso a la Información.
- Sobre casos de trata de personas registrados en la Auxiliatura.
- Acerca de los avances de la Comisión de Educación.

Incidencia política

- Monitoreo al Hospital Nacional acerca de la atención en el área de encamamiento y consulta externa.
- Monitoreo a dos escuelas rurales y siete a urbanas para verificar la gratuidad de la educación y la atención al estudiantado y los padres de familia.
- Monitoreo en las comisarías de la PNC de Jutiapa y Quezada.
- Monitoreo de supervisión a la DIACO por atención y asistencia al consumidor del departamento.
- Monitoreo de supervisión al INACIF, a peritos y médicos contra la impunidad.
- Monitoreo al Hospital y Centros de Salud con relación a la emergencia de la influenza AH1N1.
- Monitoreo de verificación por recorte presupuestario realizado a la red hospitalaria y preventiva.

- Monitoreo sobre potabilidad del agua en los municipios de Atescatempa, Agua Blanca y Santa Catarina Mita.
- Dos monitoreos a la PNC y el Hospital Nacional de Jutiapa.
- Una mediación en caso de problemas de estudiantes por traslado de sección como medida disciplinaria.
- Una reunión para conocer los avances con la Comisión Interinstitucional de Medidas de Protección para la Niñez y Adolescencia (CIMEPRO).
- Participación para revisar el diagnóstico sobre la situación de la niñez y juventud en el municipio de Asunción Mita.
- Participación en la reunión para calificar currículo de candidatos a técnico para la Organización y posterior elección del candidato, con CIMEPRO.
- Apoyo en la convocatoria para la conformación del Frente contra el Hambre departamental.
- Cuatro mesas de resolución de conflictos del medio ambiente vinculadas a la problemática de las antenas de telecomunicaciones, con la participación de aproximadamente 15 autoridades departamentales relacionadas con el tema.
- Tres mesa de atención al consumidor y al usuario, donde se tocó la problemática originada por DEORSA y se evidenciaron los múltiples abusos de la empresa para con los usuarios del servicio.
- Dos reuniones del Frente contra el Hambre, además del trabajo de campo en municipios priorizados por casos de desnutrición infantil.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- En todas las actividades de educación y prevención se hace un seguimiento a los Acuerdos de Paz, utilizándolo como base en temáticas relacionadas con capacitaciones en derechos humanos.

Educación y promoción

- Una campaña interinstitucional Limpia tu celular, en contra de la pornografía y contenidos de connotación sexual y violenta, dirigida a la niñez y juventud, realizando la visita a 34 centros educativos públicos y privados del casco urbano de la cabecera departamental, llegando a 6,720 alumnos.
- Una capacitación, en coordinación con CIMEPRO, a 209 alfabetizadores de CONALFA para ser agentes multiplicadores en el tema de los derechos de la niñez y adolescencia y cultura de denuncia, y estos a su vez impartieron talleres en el mismo tema a 3,135 participantes de todo el departamento.
- Capacitación sobre derechos humanos y derechos de las personas privadas de libertad a 265 aspirantes a guardias del Sistema Penitenciario en la cabecera departamental.
- Inauguración de la Oficina de la Mujer en la Municipalidad de Jutiapa, con la participación de organizaciones feministas e instituciones.
- Una actividad cultural para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con 60 participantes.
- Tres caminatas por distintos temas, con la participación de centros educativos y sociedad civil en general.
- Un foro acerca del origen del Día Internacional de la Mujer en el municipio de El Progreso, con la participación de 500 personas de distintas instituciones.
- Kioscos culturales en Yupiltepeque, con la participación de niños, jóvenes y personas de la tercera edad (100 participantes).
- Una actividad sobre Acuerdos de Paz, derechos y deberes de los niños y maltrato infantil en Jutiapa, con 66 participantes del nivel primario de escuelas y colegios (cuatro estudiantes por centro educativo).
- Elección del Niño o Niña Procurador o Procuradora, con la participación de ocho centros educativos (43 participantes) en El Progreso.
- Siete Festivales Expresemos Nuestros Derechos, realizados en las escuelas: Las Uvas, Júcaro Grande, Las Tunas, El Aguacate, Panalvía, El Coco y El Barrial, en septiembre de 2009.
- Inauguración del proyecto “Abuelos por siempre”, con la participación de personas de la tercera edad, directores y estudiantes de diversos centros educativos.

- Celebración del festival “Expresemos nuestros derechos” con la participación de estudiantes de siete centros educativos de cuatro municipios.
- Dos procesos educativos con los temas: derechos de los niños, VIH-SIDA, drogadicción y maltrato infantil, en escuelas de Júcaro Grande y la comunidad Aguacate, Jutiapa, con la participación de estudiantes de 5°. y 6°. grado de primaria.
- Celebración del Día del Niño, en coordinación con CIMEPRO, la Municipalidad de Yupiltepeque, supervisor y maestros, con la participación de 1,100 niños y niñas de tres escuelas.
- Seis monitoreos de educación en derechos humanos en escuelas de primaria, entrevistas a padres de familia, estudiantes y docentes.
- Once programas de radio y televisión con temas variados en el contexto de los derechos humanos en Jutiapa y El Progreso.
- Cuatro conversatorios con estudiantes de las escuelas de Las Tunas, el Júcaro y de la aldea El Aguacate Grande, y con Subestación 21-11 de la cabecera departamental de Jutiapa.
- Una reunión con representantes de Juntas Municipales de Jutiapa; 10 participantes.
- Tres capacitaciones en el tema mujeres y sistema penal, trata de personas públicos, y Ley de Acceso a la Información, dirigidos a funcionarios de distintas instituciones del departamento.
- Seis conferencias sobre autoestima dirigidas a estudiantes del ciclo medio y diversificado (512 participantes).
- Taller sobre derechos humanos dirigido a los integrantes del COMUDE (38 participantes)
- Taller sobre Ley Desarrollo Social y Ley de Planificación Familiar con la participación de lideresas comunitarias y docentes (34 participantes).
- Conferencia y presentación de película sobre explotación sexual comercial a estudiantes del nivel medio (226 participantes).
- Una actividad de sensibilización a 80 participantes, entre padres y madres de familia, acerca de los derechos y deberes de los niños, en la aldea Valle Lindo, Jutiapa.
- Taller sobre derechos humanos, género e interculturalidad, dirigido a 63 estudiantes de enfermería.

Auxiliatura Departamental de Petén



Auxiliatura Departamental de Petén

De enero a noviembre de 2009 la situación de los derechos humanos en Petén se caracterizó por el aumento de denuncias recibidas en esta Auxiliatura, situación plasmada en los expedientes de investigación y acciones específicas, lo cual es un reflejo de la compleja problemática que afecta a la región.

Se dio un incremento de la violencia en relación con los años recién pasados: de un promedio de 30 muertes por mes registradas en 2008, aumentó a 45 mensuales en este año, pudiéndose afirmar con ello que las autoridades gubernamentales no están garantizando el derecho a la seguridad y a la vida de los habitantes de la región.

Las invasiones a las áreas protegidas del departamento han aumentado, sobre todo porque las autoridades han asumido una actitud radicalmente opuesta al diálogo, limitándose a realizar operativos de fuerzas combinadas, Policía Nacional Civil (PNC) y ejército, junto con miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) sin proponer alternativas a los campesinos que, por la necesidad de tierras para cultivar y sobrevivir, han invadido dichas área.

La inseguridad alimentaria y nutricional es otro tema relevante: esta Auxiliatura inició una investigación para determinar la magnitud del problema de desnutrición infantil en el departamento, con el fin de evidenciar el problema y aportar a su solución.

Las denuncias por violencia intrafamiliar reflejan uno problema social que afecta a gran número de familias, tanto del área rural como urbana. Al respecto, se han realizado mediaciones o se han remitido las denuncias a los órganos competentes.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Petén se realizaron 585 acciones específicas: 12 de orientación, 106 de prevención, 119 de observación, 103 de mediación, 11 operativos, 202 de acompañamiento, 1 de conciliación y 31 de intervención inmediata.

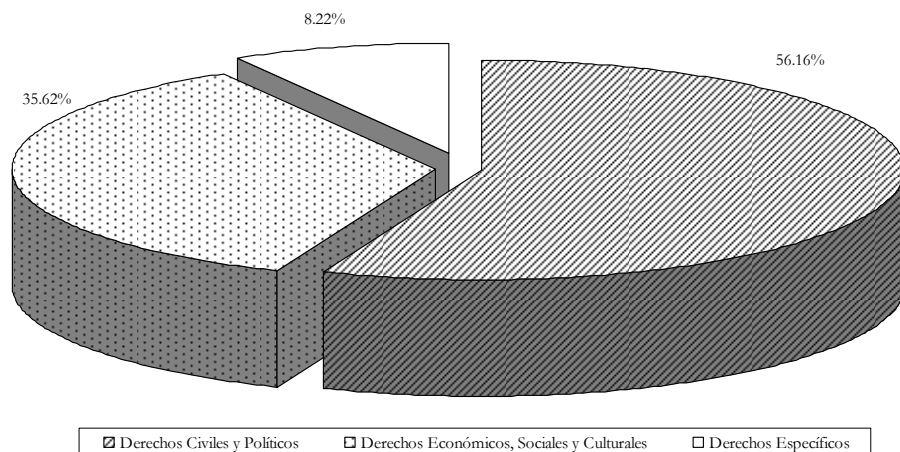
De investigación

Se abrieron 73 expedientes de investigación: 41 por violaciones a derechos individuales, 26 a derechos económicos, sociales y culturales y 6 a derechos específicos. De ellos, el 6.85% de oficio y el 93.15% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 92.55% forma parte del Organismo Ejecutivo y 7.45% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	6	6	5	4	3	7	1	3	1	4	41	56.16
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	7	2	5	1	2	2	4	2	1	0		26	35.62
Derechos Específicos	2	1	1	1					1	0		6	8.22
TOTAL MENSUAL	10	9	12	7	6	5	11	3	5	1	4	73	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		1	1				1		2			5	6.85
Ordinario	10	8	11	7	6	5	10	3	3	1	4	68	93.15
TOTAL MENSUAL	10	9	12	7	6	5	11	3	5	1	4	73	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	12	2.05
Prevención	106	18.12
Observación	119	20.34
Mediación	103	17.61
Operativo	11	1.88
Acompañamiento	202	34.53
Conciliación	1	0.17
Intervención inmediata	31	5.30
TOTAL	585	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	19	7	13	7	8	5	9	5	6	4	4	87	19.46
Judicial				2	1		1		1		2	7	1.57
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	1	2		2	2		2		3	1	1	14	3.13
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	1	2	1	3	1	2			1		1	12	2.68

Ministerio Público		1		1				1	1		2	6	1.34
Centros educativos particulares			2									2	0.45
DEORSA	2	2	3	2	2	1			1	1		14	3.13
Particulares	19	37	37	32	26	22	22	20	30	29	14	288	64.43
TELGUA		1	1			1						3	0.67
BANRURAL			1									1	0.22
PGN							1					1	0.22
ALBORA,S.A	1											1	0.22
Misión Técnica Agrícola de la Republica de China	1											1	0.22
Empresa de Aceite Ideal (NAISA)		2										2	0.45
Defensores de la Naturaleza (ONG)		1										1	0.22
Banco de los Trabajadores		1									1	2	0.45
Asesores Industriales, S.A (Rangers)			1	1			1					3	0.67
Banco Azteca de Guatemala								1				1	0.22
Sistema de Infornet, Intranet											1	1	0.22
TOTAL MENSUAL	44	56	59	50	40	31	36	27	43	35	26	447	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Las violaciones a los derechos civiles y políticos constituyen las denuncias más frecuentes en esta Auxiliatura, sobresaliendo imputaciones a elementos de las fuerzas de seguridad y personal que labora en otras instituciones del Organismo Ejecutivo. Los casos de mayor impacto han sido las invasiones a áreas protegidas, en respuesta a las cuales las autoridades de turno han realizado operativos con desenlaces fatales.

La inseguridad, al igual que en otras regiones del país, es un fenómeno creciente que golpea a los habitantes de Petén y, aunque no hay denuncias al respecto, esta Auxiliatura recaba mensualmente datos sobre muertes violentas obtenidos de los registros de la PNC, los cuales reflejan el aumento de estas muertes en relación a 2008. Los municipios de mayor riesgo son San Benito, Flores, La Libertad, San Andrés y Melchor de Mencos.

Expediente EIO.PET.01-2009/DCP

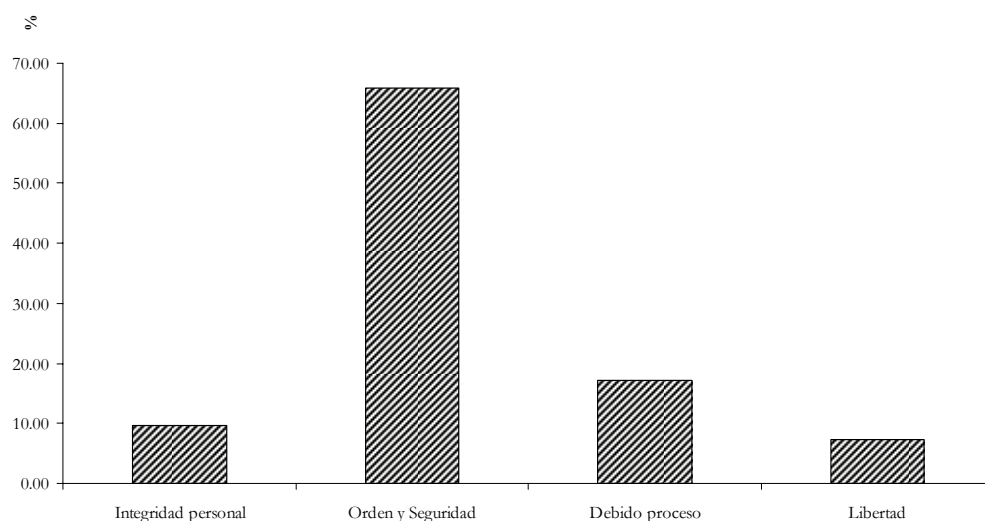
Como resultado de un operativo de las fuerzas de seguridad combinadas, PNC y ejército, en la comunidad de Santa Amelia, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, municipio de San Andrés, dos personas fallecieron por heridas de arma de fuego. El objetivo del operativo era rescatar a dos guardarrrecursos CONAP que habían sido tomados como rehenes por habitantes de esa comunidad como represalia a un desalojo realizado recientemente en el asentamiento El Vergelito. Dos días antes de la incursión de las fuerzas de seguridad, personal de esta Auxiliatura se presentó a la comunidad para negociar la entrega de los dos guardarrrecursos, sin embargo, los comunitarios indicaron que sólo los entregarían si el gobernador departamental de Petén y la directora regional del CONAP dialogaban con ellos. Las autoridades se mostraron renuentes en todo momento y anunciaron un operativo para liberarlos por la fuerza. Como parte de la investigación realizada, personal de la Auxiliatura se constituyó en el Hospital Nacional de San Benito y se solicitaron informes circunstanciados a las autoridades correspondientes. El jefe de la Comisaría 62 de la PNC informó que, al momento de presentarse las fuerzas policiales en Santa Amelia, un grupo de personas disparó contra aquellas. El Ministro de la Defensa Nacional informó que los fallecidos fueron heridos por las mismas personas que mantenían secuestrados a los guardarrrecursos y que los elementos del ejército únicamente participaron en apoyo a la PNC. Finalmente, los guardarrrecursos fueron rescatados y detenidas 44 personas. La Fiscalía Distrital del Ministerio Público de San Benito investiga el caso pero aún no se ha responsabilizado a nadie de las dos muertes. Comunitarios de Santa Amelia y otras comunidades del Parque



Nacional presentes en el lugar de los hechos se han negado a declarar ante el Ministerio Público manifestando que temen ser objeto de represalias por parte de las fuerzas de seguridad.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
INTEGRIDAD PERSONAL													
Desaparición forzada				1	1							2	4.88
Muerte violenta		2										2	4.88
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo		2	6	2	1	2	3			1	1	18	43.90
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial		1										1	2.44
Amenazas, coacción					1		1		2			4	9.76
Detención ilegal	1			1		1						3	7.32
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal									1			1	2.44
DEBIDO PROCESO													
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial							1				2	3	7.32
Discontinuidad y lentitud procesal		1		1	1			1				4	9.76
Restringir el derecho a ser informado: Información inexacta							1				1	2	4.88
Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de reunión							1					1	2.44
TOTAL MENSUAL	1	6	6	5	4	3	7	1	3	1	4	41	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

En la Auxiliatura Departamental se recibieron múltiples denuncias señalando a diferentes instituciones, entre las cuales sobresalen el Hospital Nacional de San Benito por casos de negligencia médica; el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por insuficiente cobertura social; y DEORSA, por violación al derecho del consumidor y usuario debido al aumento del costo de la energía eléctrica.

En cuanto a la desnutrición, a partir de la conformación del Frente contra el Hambre se busca identificar los casos de desnutrición infantil en el país; en este caso, el esfuerzo se centró en determinar las dimensiones de la problemática alimentaria y nutricional en el departamento de Petén.

Expediente EIO.PET.05-2009/DESC

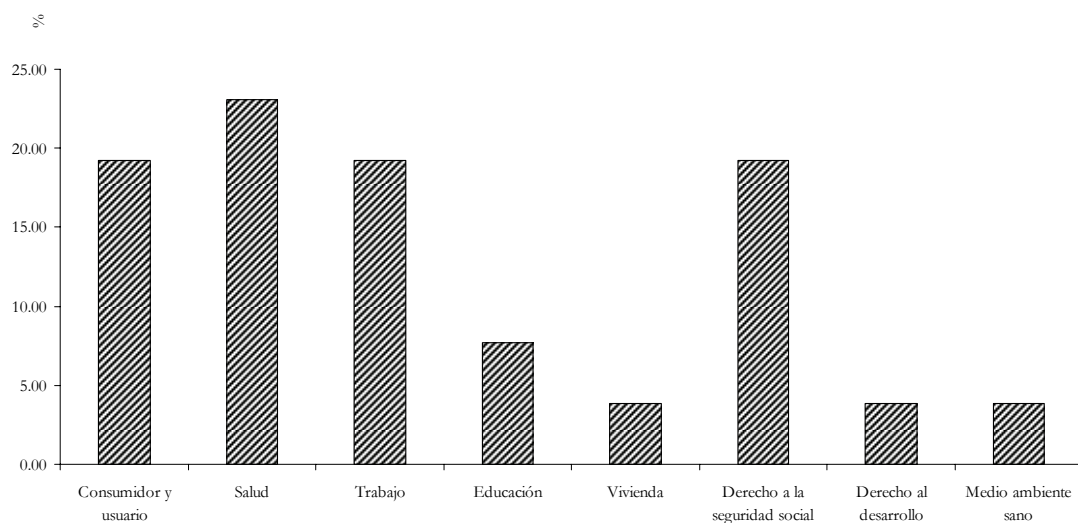
La Auxiliatura Departamental de Petén inició expediente de oficio con base en publicaciones de prensa relacionadas con la violación del derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Como parte de la Investigación, personal de esta Auxiliatura se constituyó a las jefaturas de Áreas de Salud Petén Norte, Petén Suroriental y Petén Suroccidental, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y al Centro Nutricional Santa Luisa del Vicariato Apostólico de Petén, en la cabecera municipal de Dolores, para recabar datos sobre casos identificados y atendidos de desnutrición infantil crónica y severa durante 2009. Se determinó que en el área Petén Norte (municipios de Flores, Melchor de Mencos, San José, San Andrés, San Benito y San Francisco) se identificaron 73 casos de desnutrición crónica y 3 de desnutrición severa; en el área Petén Suroriental (Poptún, San Luis, Dolores y Santa Ana) se identificaron 58 casos de desnutrición crónica y 18 de desnutrición severa; en el área Petén Suroccidental (Sayaxché y La Libertad) se identificaron 900 casos de desnutrición infantil crónica y 5 de desnutrición infantil severa. Los niños y niñas con desnutrición severa han sido trasladados al Centro Nutricional Santa Luisa para su tratamiento.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Fraude							1					1	3.85
Desabastecimiento			1									1	3.85
Alzas inmoderadas de precios y tarifas	1		2									3	11.54
SALUD													
Cobros ilegales	1											1	3.85
Falta de atención o asistencia Médica							1					1	3.85
Negligencia medica	1				1	1						3	11.54
Negación de Atención médica								1				1	3.85
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral	1											1	3.85
Falta de pago de las prestaciones laborales	1				1			1				3	11.54
Despido injusto	1											1	3.85



EDUCACIÓN													
Deserción escolar							1					1	3.85
No ser tratado con justicia							1					1	3.85
VIVIENDA													
Inseguridad jurídica de la tenencia	1											1	3.85
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social a beneficiarios		2	1			1			1			5	19.23
DERECHO AL DESARROLLO													
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera				1								1	3.85
MEDIO AMBIENTE SANO													
Promover, facilitar o invadir tierras ubicadas dentro de áreas protegidas con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito			1									1	3.85
TOTAL MENSUAL	7	2	5	1	2	2	4	2	1	0	0	26	100.00



2.3 Derechos específicos

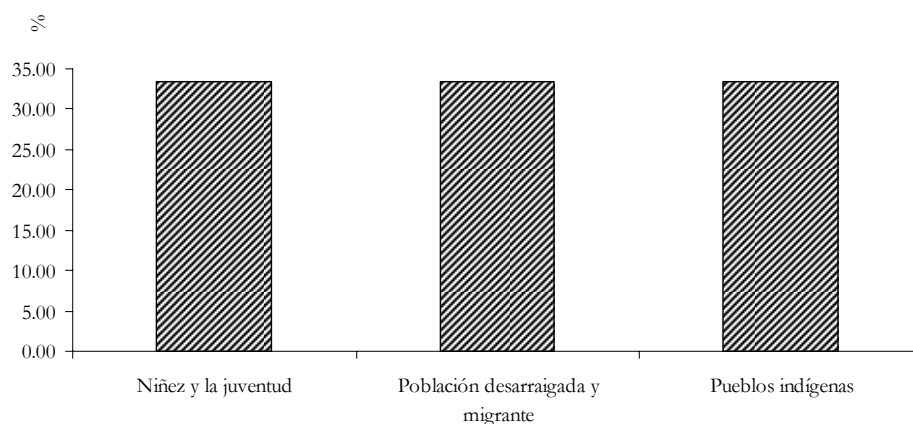
Las denuncias más comunes recibidas por esta Auxiliatura son por violaciones de los derechos de la mujer por violencia intrafamiliar, de la niñez, de los trabajadores, así como imputaciones sobre violaciones a los derechos de los reclusos.

Expediente: PREVENCIÓN.PET.086-2009/DE

Manifestó la denunciante que su hijo menor, quien estudia en la Escuela Oficial Mixta Tres de Abril, en el municipio de San Benito, se mostraba renuente a asistir a clases debido a que la profesora lo agredía verbal y físicamente. Como parte de la investigación se citó a la denunciada y a la directora de la escuela a la Auxiliatura para aclarar la situación ante la denunciante; la maestra negó haber agredido físicamente al menor y ofreció una disculpa por posibles ofensas, y la directora acordó dialogar con el grupo de maestros con el fin de prevenir futuros incidentes.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven									1			1	16.67
Abuso físico o mental	1											1	16.67
POBLACION DESARRAIGADA Y MIGRANTE													
Persecución		1										1	16.67
Impedir el retorno				1								1	16.67
PUEBLOS INDÍGENAS													
Discriminación racial	1		1									2	33.33
TOTAL MENSUAL	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	6	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente: ORD.PET.057-2009/DCP

Para una reunión ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de Petén acudieron periodistas de los medios de comunicación regional, pero el gobernador departamental había girado instrucciones al personal de seguridad gubernamental para que no permitiera el ingreso a los reporteros, por lo que uno de los reporteros presentó la denuncia, pues considera que las reuniones del CODEDE son públicas y se está violando el derecho de acceso a las fuentes de información. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al gobernador departamental quien no lo rindió, motivo por el cual se emitió resolución en la que se dan por ciertos los hechos denunciados. Algunos meses después el denunciante se presentó a esta Auxiliatura manifestando que el gobernador departamental ha cambiado su actitud y ha sido más accesible a los medios de comunicación, por lo que desistió de continuar el trámite del expediente y solicitó el archivo del mismo.

Expediente PREVENCIÓN.PET.056-2009/DE

Manifestó la denunciante que es víctima de violencia intrafamiliar psicológica por parte de su esposo, con quien procrearon dos hijas, además de exigirle que abandone la casa, por lo que solicitó la intervención de la PDH para protegerla a ella y sus hijas. Como parte de la investigación se abrió expediente por violencia intrafamiliar y se certificó la denuncia al Juzgado de Primera Instancia de Familia de San Benito Petén; se dio seguimiento a lo actuado por el Juez de Familia, quien protegió a la víctima, decretando las medidas de seguridad correspondientes y ordenó terapia psicológica por parte del Juzgado.

Expediente ORDINARIO.PET.047-2009/DCP

El denunciante manifestó su padre y su hermano se encontraban en la Línea de Adyacencia entre Guatemala y Belice sembrando milpa cuando fueron capturados por soldados beliceños y enviados a la cárcel central de Belice, desconociéndose el motivo de la aprehensión. Como parte de la investigación, el Oficial Analista de esta Auxiliatura se comunicó con el cónsul de Guatemala en Benque Viejo del Carmen, quien indicó que las dos personas tenían prisión preventiva por el delito de entrada ilegal al país, y que serían llamados a audiencia, durante la cual Migración presentaría las pruebas. Posteriormente el cónsul de Guatemala informó que los señores capturados fueron liberados debido a que se tomaron en cuenta las Medidas de Fomento de Confianza entre Belice y Guatemala y la Oficina de la Secretaría General de la OEA en la Zona de Adyacencia.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
OBS.PET.093-2008/DESC	Lic. Rudy Estuardo Mauricio Baldizón	Director	Dirección Departamental de Educación
OBS.PET.081-2008/DESC	Carlos Marín Rosado	Alcalde	Municipalidad de La Libertad
OBS.PET.014-2009/DESC	Lic. Rudy Estuar Mauricio Baldizón	Director	Dirección Departamental de Educación
PET.PREV.09-2009/DCP	Ing. José Rodolfo Aspuaca Aspuac	Coordinador Departamental	Registro de Información Catastral
OBS.PET.069-2009/DESC	Rudel Mauricio Álvarez	Gobernador	Gobernación Departamental
PET.PREV.02-2009.D.E	Lic. Marco Tulio Locón Marroquín	Juez	Primera Intancia de Familia

ORD.PET.062-2009/D.E	Lic. Edgar Enríquez Pérez Barrientos	Fiscal Adjunto	Fiscalía Distrital Adjunta, Ministerio Público
ORD.PET.07-2009/DESC	Angel Boanerge Cano Moreno	Alcalde	Municipalidad de San Andrés
ORD.PET.013-2009/DCP	Gral. Abrahan Valensuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional
ORD.PET.013-2009/DCP	Dr. Armando Mejía Cárcamo	Director	Hospital Regional de San Benito, Petén
ORD.PET.016-2009/DESC	Doctor Mario Adolfo Recinos Salam	Director	Área de Salud, Petén Norte
ORD.PET.022-2009/DCP	Coronel AV. Edwin Efraín Nagera Castañeda	Comandante	Comando Aéreo del Norte
ORD.PET.018-2009/DCP	José Manuel Méndez	Coordinador Departamental	Secretaría de Asuntos Agrarios
ORD.PET.024-2009/DESC	Ing. Mario Romero Zetina	Gerente	Distribuidora de Electricidad del Oriente
ORD.PET.017-2009/DCP	Lic. Luis Armando Monzón Mota	Fiscal Distrital	Fiscalía Distrital del Ministerio Público
OBS.PET.048-2009/DESC	Lic. René Armando Más Reyes	Delegado	Inspección de Trabajo y Previsión Social
ORD.PET.032-2009/DCP	Licda. Bremely de Castillo Carbajal	Jueza	Juzgado de Paz, Flores
ORD.PET.032-2009/DCP	Samuel Barrios	Jefe de Comisaría	Comisaría 62, PNC San Benito
EIO.PET.01-2009/DCP	Lic. Luis Armando Monzón Mota	Fiscal Distrital	Fiscalía Distrital del Ministerio Público
ORD.PET.031-2009/DCP	Licda. Sonia Aide Toledo	Jueza	Tribunal de Sentencia
OBS.PET.046-2009/DESC	Javier López Marroquín	Alcalde	Alcalde Municipal de San Benito
OBS.PET.061-2009/DESC	Licda. Mariela López de Tager	Directora	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
ORD.PET.040-2009/DESC	Dr. Joel Abdís Sis García	Director	Hospital Distrital de Melchor de Mencos
MED.PET.037-2009/DESC	Lic. Erick Estuardo Castellanos Romero	Director	Regulación del Fondo de Tierras
ORD.PET.041-2009/DCP	Pedro Say	Subdirector	Centro de Prevención, Santa Elena
MED. PET.037-2009/DESC	Ing. Moises Coyote	Coordinador	Secretaría de Asuntos Agrarios, La Libertad
ORD.PET.043-2009/DESC	Dra. Sandra Sanchinelli	Directora	Hospital Distrital de Sayaxché
ORD.PET.021-2009/DESC	Rafael Chí Sequera	Delegado Regional	IGSS
OBS.PET.084-2009/DESC	Avi Maguín Cifuentes	Alcalde	Municipalidad de Sayaxché
OBS.PET.076-2009/DESC	Ricardo Avila García	Alcalde	Municipalidad de Melchor de Mencos
OBS.PET.096-2009/DESC	Leonidas Antonio Sandoval Felipe	Alcalde	Municipalidad de Santa Ana
OBS.PET.088-2009/DE	Lic. René Linares	Director	DIGEPSA-PRONADE
ORD.PET.024-2009/DESC	Lic. Carlos Meany	Ministro	Ministerio de Energía y Minas
EIO. PET.03-2009/DESC	Dr. Roy Fitzgerald Flores Alvarez	Director	Área de Salud, Suroccidental
ORD.PET.07-2009/DESC	Lic. Edy Caseres Rodríguez	Juez	Juzgado de Primera Instancia Civil, Económico, Coactivo de Trabajo y Previsión Social.

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
OBS.PET.071-2008/DESC	Licda. María del Pilar Samayoa	Gerente R.H.	Dirección General de Aeronáutica Civil
OBS.PET.06-2009/DESC	Licda. Mayra Sánchez Larios	Directora General R.H.	Ministerio de Salud
PREV.PET. 069-2009/DCP	Lic. Roberto Solorzano Elias	Viceministro	Viceministerio de Gobernación

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	382
De apertura de expedientes de investigación	74
Medidas urgentes	49
Ampliación de plazo para la investigación	49
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	47
Acumulación de expedientes	4
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	360
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	1
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	1
TOTAL	967

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Informes sobre mortalidad materna y muerte violenta de mujeres durante 2008 y los primeros cuatro meses de 2009 en Petén.
- Informes de denuncias recibidas sobre potabilidad del agua.
- Informes de violaciones a los derechos humanos de sindicalistas.
- Informes sobre condiciones en que labora la Clínica de Atención Integral para personas con VIH/SIDA de San Benito, Petén.
- Informes sobre personal y pacientes atendidos en los hospitales de Petén.

Incidencia política

- Reuniones con las siguientes organizaciones: Comité para la Defensa, Promoción y Protección del Parque Nacional Laguna del Tigre; Consejo Departamental de Desarrollo; Red contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Petén; Red de Paternidad y Maternidad Responsable de Petén.
- Observatorio en salud sexual y reproductiva de Petén, conformado por diferentes instituciones estatales y de la sociedad civil.

- Seguimiento al proceso de construcción e implementación de la Clínica de Atención Integral para VIH/SIDA en el Hospital de San Benito, Petén.
- Participación en el proceso de reubicaciones de maestros que afrontan problemas en las comunidades en que laboran.
- Participación en las reuniones de la Mesa de Diálogo del Parque Nacional Laguna del Tigre.
- Seis monitoreos o supervisiones a instituciones estatales u organizaciones que prestan servicios sociales.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Tres conferencias: una sobre Acuerdos de Paz a estudiantes del Centro Educativo Petén, dos sobre derechos de los pueblos indígenas en los centros educativos Colegio Shadai y Liceo Petenero.

Educación y promoción

- Seis foros radiofónicos abordando los siguientes temas: derechos laborales, deforestación y contaminación, derechos del adulto mayor, derechos de las personas con discapacidad, participación de la mujer en los diferentes espacios, derechos de la mujer y la no violencia.
- 17 eventos educativos, entre conferencias y talleres de capacitación, en diferentes centros de estudio, la PNC y la Primera Brigada de Infantería de Santa Elena, Petén, abordando los siguientes temas: “Qué son los derechos humanos. Historia”, “Derechos del niño”, “Ley de violencia sexual, explotación y trata de personas”, “Ley contra el femicidio y otras formas de discriminación contra la mujer”, “Equidad de género y violencia intrafamiliar”, “Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, “Violencia contra la mujer”.

Auxiliatura Regional de Poptún, Petén



Auxiliatura Regional de Poptún, Petén

De enero a noviembre de 2009 se observó el incremento de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desnutrición, la inseguridad, la violencia y la falta de fuentes de trabajo. Se lograron algunos resultados concretos en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, especialmente en la incautación de estupefacientes, no así en la captura de posibles responsables.

La violencia intrafamiliar es otro tema de preocupación; y el maltrato infantil y a otros grupos vulnerables es latente y continuo.

En mayo un tornado afectó buena parte del territorio municipal destruyendo viviendas, cultivos, cosechas y sembrados, lo cual, además, agravó los problemas de hambruna en las regiones afectadas.

La epidemia de dengue clásico y hemorrágico que atacó a la región desde agosto cobró la vida de muchas personas, especialmente aquellas de escasos recursos, evidenciándose con ello la falta de planes de prevención por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Algo similar ocurrió con la epidemia de gripe tipo A H1N1, aunque en este aspecto hubo más campañas de prevención.

En cuanto a la impunidad y el abuso de poder, campesinos guatemaltecos han sido atropellados y vulnerados en sus derechos fundamentales por parte de los elementos de las Fuerzas de Defensa de Belice. Se abrió expediente porque dicha institución está edificando un campamento militar en las cercanías de la Zona de Adyacencia.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Regional de Poptún se realizaron 135 acciones específicas: 46 de orientación, 3 de prevención, 8 de observación, 21 de mediación, 41 de conciliación y 16 de intervención inmediata.

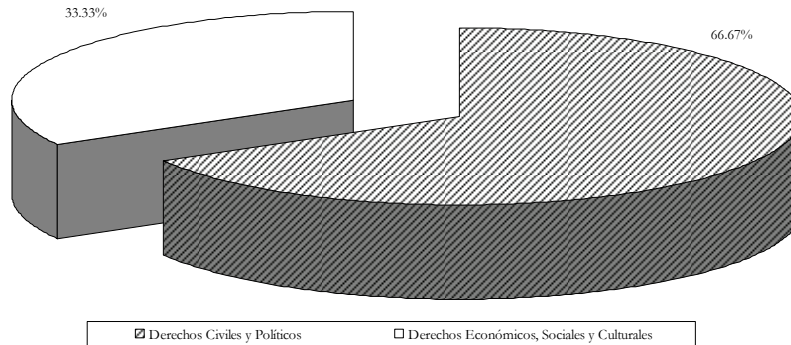
De investigación

Se abrieron 36 expedientes de investigación: 24 por violaciones a derechos individuales y 12 a derechos económicos, sociales y culturales.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	5	2	4	3	1	1	3	2	3			24	66.67
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1	3				1		2	1	2	2	12	33.33
TOTAL MENSUAL	6	5	4	3	1	2	3	4	4	2	2	36	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	2	1					1	1		1	1	7	19.44
Ordinario	4	4	4	3	1	2	2	3	4	1	1	29	80.56
TOTAL MENSUAL	6	5	4	3	1	2	3	4	4	2	2	36	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	46	34.07
Prevención	3	2.22
Observación	8	5.93
Mediación	21	15.56
Conciliación	41	30.37
Intervención inmediata	16	11.85
TOTAL	135	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	6	5	4	3	1	2	3	4	4	2	2	36	50.00
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades			1	1								2	2.78
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		1						1	1			3	4.17
DEORSA		1									2	3	4.17
Ministerio de Gobernación-PNC	2		1		1		2		2			8	11.11

Ministerio de Educación	3		1				1	1	1			7	9.72
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		1		1		1		1		2		6	8.33
Ejército de Guatemala		1	1			1						3	4.17
INACIF	1											1	1.39
Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC)		1										1	1.39
Ejército de Belice				1								1	1.39
Centro de Rehabilitación Piedra Viva								1				1	1.39
TOTAL MENSUAL	12	10	8	6	2	4	6	8	8	4	4	72	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Algunos de los problemas que afronta la población son el abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) al capturar a personas sindicadas de delitos. Las Juntas de Seguridad Local de los municipios de San Luis y Poptún, no obstante que colaboran con la PNC, han incurrido en abusos o procedimientos no adecuados, aunque los afectados no han presentado denuncias por temor a represalias. A lo anterior se suman los constantes asaltos en los caminos vecinales, situación que no puede ser controlada dada la escasez de elementos de la PNC para dar cobertura a toda la región.

Otro problema es el actuar de algunos funcionarios ediles, como el caso del alcalde municipal de Dolores, cuyo comportamiento ha molestado a gran parte del vecindario de ese municipio, así como el actuar violento que ha demostrado ante grupos de promoción social.

Expediente ORD.P.P.01-2009/DI

La seguridad de los pobladores de la aldea Santa Cruz, municipio de San Luis, está siendo violada por el jefe de la subestación de la PNC y el comandante del Destacamento Militar de Joventé, al incumplir con sus funciones institucionales y permitir que soldados de las Fuerzas de Defensa de Belice ingresen en territorio guatemalteco por la aldea Santa Cruz, uniformados y equipados con sus armas, para ingerir licor en los diferentes negocios, poniendo en riesgo la seguridad y la integridad física de las personas y la seguridad de sus bienes. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al Ministerio de la Defensa Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al comisario departamental de la PNC y al director de la Oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Zona de Adyacencia entre Guatemala y Belice.

Expediente ORD.P.P.13-2009/DI

El denunciante indicó que el alcalde municipal de Dolores ingresó en su finca, ubicada en la aldea Boca del Monte, disparando con arma de fuego al aire y contra su residencia, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de su familia. Como parte de la investigación se requirió información circunstanciada al Consejo Municipal, pero no rindió informe, y se entrevistó al agraviado, quien ratificó la denuncia. El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público de Poptún.

Expediente ORD.P.P.16-2009/DI

Una agente de la PNC denunció que quien fuera su jefe en la Subestación de la PNC de Poptún la hostigó laboralmente exigiéndole que hiciera turnos que no le correspondían, la trataba mal delante de sus compañeros de trabajo y le hacía propuestas indecorosas, amenazando con destituirlo de su cargo si no accedía a tales propuestas, llegando al extremo de amenazar su vida y la de su familia si lo denunciaba. Como

parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC y se entrevistó al denunciado, quien negó los hechos. La Fiscalía del Ministerio Público de Poptún conoce el caso.

Expediente ORD.P.P.17-2009/DI

El denunciante manifestó que él y un menor de edad fueron atacados por un grupo de soldados del Ejército de Guatemala del Destacamento Militar ubicado a un kilómetro de la entrada a la aldea Calzada Mopán, Dolores. El menor resultó herido por un proyectil de arma de fuego. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Ministro de la Defensa Nacional y se entrevistó al agraviado; el caso fue remitido al Ministerio Público.

Expediente ORD.P.P.23-2009/DI

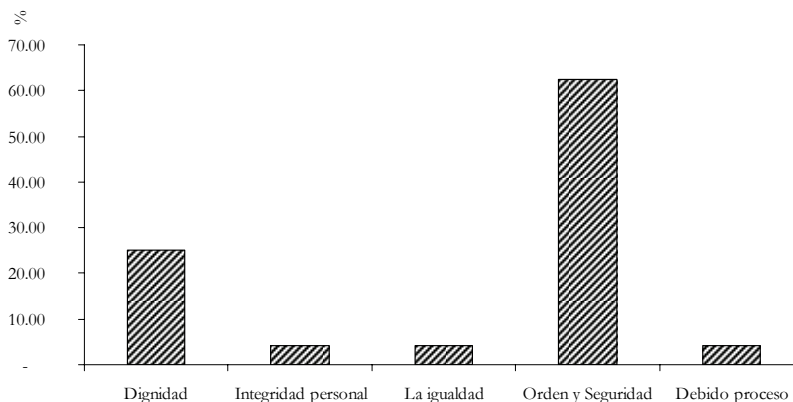
El denunciante indicó que el encargado del Centro de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos Piedra Viva, ubicado en el barrio El Centro de Poptún, lo agredió físicamente, llegando al extremo de torturarlo. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal y al gobernador departamental; se entrevistó a la víctima; y se certificó el caso a la Fiscalía del Ministerio Público de Poptún.

Expediente ORD.P.P.26-2009/DI

Un grupo de estudiantes de sexto grado de la carrera de perito contador con orientación en computación de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, presentó denuncia contra la directora de dicho centro educativo por dirigirse a los alumnos utilizando un lenguaje inapropiado, con palabras obscenas y de forma abusiva; además, como asesora de Seminario de los denunciantes, le vendió a otro grupo de seminaristas del mismo grado y escuela información que el grupo denunciante había recabado. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al Supervisor de Educación; se entrevistó a los estudiantes denunciantes y demás escolares; y se certificó lo conducente a la Dirección Departamental de Educación en Santa Elena, Petén.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS **Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Violación sexual			1				1		1			3	12.50
Trato cruel, inhumano o degradante				1				2				3	12.50
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte o ejecución extralegal o arbitraria			1									1	4.17
LA IGUALDAD													
Falta de atención pública	1											1	4.17
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	2	1	1	1	1	1	2		2			11	45.83
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial	2											2	8.33
Amenazas, coacción			1									1	4.17
Detención arbitraria				1								1	4.17
DEBIDO PROCESO													
No permitir su defensa		1										1	4.17
TOTAL MENSUAL	5	2	4	3	1	1	3	2	3	0	0	24	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La pobreza, la falta de fuentes de trabajo, el hambre y las enfermedades epidémicas han afectado a la población, especialmente en el área rural que es la más abandonada y expuesta. A ello se suma el cobro excesivo en los servicios básicos como la energía eléctrica, servicio telefónico y el transporte, afectando a la población de manera significativa; ni la DIACO ni la Dirección General de Transportes han podido obtener algún resultado en beneficio de los consumidores.

Expediente ORD.P.P.05-2009/DESC

Se abrió expediente ordinario con base en el memorial presentado por el denunciante para investigar la violación del derecho humano del consumidor por supuesta alteración o manipulación de su medidor por la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima (DEORSA). Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al gerente de DEORSA y a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Expediente ORD.P.P.02-2009/DESC

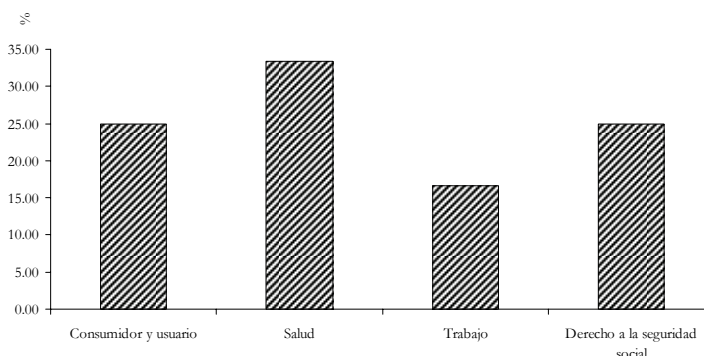
Denunció una profesora que el Jurado Auxiliar Departamental de Oposición del Ministerio de Educación, con sede en Santa Elena, extravió su expediente laboral; aunque obtuvo la calificación necesaria para optar a la plaza de maestra en la escuela oficial rural mixta del caserío Sabanetas Tanjoc, Poptún, en el concurso de oposición, el nombramiento se asignó a un profesor que obtuvo menor calificación. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Director Departamental de Educación de Santa Elena, Petén y se solicitó al Jurado Nacional de Oposición buscar una solución al caso denunciado.

Expediente ORD.P.P.18-2009/DESC

El afectado presentó denuncia contra la gerente de la Jefatura del Área de Salud de Petén Suroriental, Poptún, por el retraso en la tramitación del pago de los salarios del denunciante, de enero a junio de 2009, como peón vigilante en las instalaciones de dicha Jefatura. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al director de Área de Salud, estableciéndose que el atraso se debía a que el denunciante había sido reinstalado por orden judicial, aunque no hubiera fondos para dicha plaza presupuestaria porque no existía. Tras el pago de los salarios pendientes el empleado desistió de su denuncia.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Falta de advertencia sobre uso y riesgo en el uso de productos											1	1	8.33
Alzas inmoderadas de precios y tarifas		1									1	2	16.67
SALUD													
Contaminación hospitalaria										1		1	8.33
Negligencia médica		1								1		2	16.67
Negación de atención médica								1				1	8.33
TRABAJO													
Omisión administrativa (comisiones paritarias)	1											1	8.33
Falta de pago de las prestaciones laborales						1						1	8.33
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Inexistente cobertura social								1	1			2	16.67
Insuficiente cobertura social de riesgos		1										1	8.33
TOTAL MENSUAL	1	3	0	0	0	1	0	2	1	2	2	12	100.00



2.3 Derechos específicos

El Programa del Adulto Mayor funciona con deficiencia dado que el personal fue designado por afinidad política al gobierno de turno; aunque se inauguraron asilos en cada uno de los tres municipios que forman la zona sur de Petén, seis meses después los centros aún permanecen cerrados.

Los derechos del consumidor y usuario están siendo violentados por la empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de Oriente (DEORSA), por el incremento desmesurado del servicio; por haber cerrado sus oficinas en la región, los usuarios tienen que viajar hasta la cabecera departamental para solventar problemas con la prestación del servicio; además, exigió el uso e instalación de cajas de policarbonato para la protección de los contadores de energía, previo a la instalación de servicios.

En la región cubierta por esta Auxiliatura prevalece el habla q'eqchi', pero la mayoría de instituciones estatales no cuenta con personas que hablen este idioma, lo que dificulta la atención y orientación de este grupo.

En cuanto al abuso de poder, el mayor problema es la poca educación en derechos humanos y la cultura de los integrantes de la PNC, quienes proceden con exceso de fuerza en contra de jóvenes o menores de edad.

Expediente EIO.P.P.04-2009

A raíz de información publicada en el diario *Prensa Libre*, se abrió expediente para investigar la denuncia relativa a que las personas migrantes de nacionalidad hondureña que transitan por el territorio petenero han sido extorsionadas por agentes policiales en los puestos de registro de la PNC instalados en la aldea San Pedro Cadenas, jurisdicción de San Luis, y en Poptún, quienes exigen Q.100 por persona para permitirles continuar su marcha. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC de San Benito.

Expediente EIO.P.P.07-2009/DESC

Con base en una nota publicada en medios de comunicación escrita, en la cual la Comisión Nacional de Energía Eléctrica informaba a los usuarios que no era obligatorio adquirir cajas de policarbonato para la instalación del servicio de energía eléctrica, se inició expediente de oficio para investigar la violación al derecho humano del consumidor a los usuarios de la región suroriental de Petén por parte de la DEORSA, que en la región sí exige dicha instalación.

3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente Mediación.P.P. 15-2009

Los trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de la Dirección de Área de Salud, Petén suroriental de Poptún, argumentan que el director del Área no atiende sus peticiones y necesidades y que no cumple con sus horarios laborales, además, lo responsabilizan de mal manejo de los fondos de funcionamiento. La institución del PDH intervino como mediadora para propiciar un diálogo entre las partes, acordando éstas respetar la seguridad e integridad de ambas y permitir el ingreso a la sede de la Dirección; sin embargo, el acuerdo no fue cumplido y un día después se rompió, cerrándose con ello la mediación de la PDH y quedando las partes en libertad de acudir ante los Tribunales de Justicia.

Expediente Acciones de Conciliación P.P.30-2009

Vecinos de la aldea Santa Cruz, San Luis, cercanos a la Zona de Adyacencia entre Guatemala y Belice, denuncian su inconformidad por la construcción del Destacamento Militar de las Fuerzas de Defensa de Belice en la Zona de Adyacencia, argumentando que constituye un peligro o riesgo para los pobladores del lugar por posibles hechos de violencia. Como parte de la investigación se solicitó intervención de la Oficina de la Organización de Estados Americanos, en la Zona de Adyacencia.

Expediente Intervención Inmediata P.P.12-2009

Una menor de edad, originaria de Cobán, solicitó el apoyo de la institución del PDH ya que su tío, con consentimiento de los padres de ella, la trajo a la región para trabajar en un bar, pero la obliga a tener relaciones sexuales con distintos hombres, lo que ha sucedido en cuatro ocasiones. Ante la gravedad de la situación se solicitó ante juez competente medidas de seguridad a su favor, las cuales fueron otorgadas. Tras constatar los hechos denunciados, se certificó lo conducente por el Juzgado de Paz a la Fiscalía del Ministerio Público de Poptún.

Expediente Orientación P.P. 18-2009

Por denuncia anónima se tuvo conocimiento de que un menor de edad era agredido físicamente por su padre, causándole golpes, moretones y laceraciones visibles en diferentes partes del cuerpo. Tras establecer la veracidad de la información, se solicitaron las medidas de seguridad ante la Juez de Paz de Poptún, las cuales fueron otorgadas.

Expediente Intervención Inmediata P.P. 07-2009

Un denunciante anónimo refirió que el denunciado agrede físicamente a sus hijas y a su conviviente, además de no darles dinero para los gastos del hogar. Tras verificar la denuncia de violencia intrafamiliar por parte del padre se solicitaron las medidas de seguridad a favor de las menores. El Juzgado de Paz de Poptún otorgó las medidas de seguridad, prohibiendo al agresor acercarse a las víctimas, bajo apercibimiento de iniciarle proceso penal por desobediencia si no respeta las medidas de seguridad.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.P.P. 1-2009/DI	Abraham Valenzuela González	Ministro	Ministerio de la Defensa Nacional
ORD.P.P. 2-2009/DESC	Aroldo Rolando Reyna Roldán	Subdirector administrativo	Dirección Departamental de Educación
ORD.P.P. 03-2009/DI	Cruz Felipe Lorenzo	Subcomisario	Comisaría Departamental PNC, San Benito
ORD.P.P.06-2009/DESC	Lic. Alfredo Rolando del Cid Pinillos	Gerente	IGSS
ORD.P.P.09-2009/DI	Licda. Ana Rosaura Castro Villatoro	Asesora	Centro de Asistencia Legal e Incidencia Contra la Corrupción
ORD.P.P.15-2009/DI	Lic. Antonio Roberto Castellanos	Embajador, Secretario Ejecutivo Comisión de Belice	Ministerio de Relaciones Exteriores
ORD.P.P.18-2009/DESC	Dr. José Víctor Mis Morales	Director	Área de Salud, MSPAS
ORD.P.P.21-2009/DI	Prof. Eduardo Aguilar Ramírez	Coordinador Técnico Administrativo	Ministerio de Educación
ORD.P.P.22-2009/DES	Lic. Mynor Leonel Florián Carbonell	Secretario	Junta Directiva, IGSS
ORD.P.P.26-2009/DI.	Prof. Juan Francisco Oliva Estrada	Supervisor de Poptún	Ministerio de Educación
ORD.P.P.23-2009/DI	Rudel Mauricio Álvarez	Gobernador Departamental	Ministerio de Gobernación
EIO.02-2009/DI	Lic. José Rodolfo Payés Reyes	Secretario General	Instituto Nacional de Ciencias Forenses
EIO.03-2009/DS	Dr. Armando Mejía Cárcamo	Director	Hospital de San Benito
EIO.03-2009/DS	Dr. Rubén Rodríguez de León	Director	Hospital de Poptún

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.P.P.13-2009/DI		Consejo Municipal	Municipalidad de Dolores

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	132
De apertura de expedientes de investigación	36
Medidas urgentes	17
Ampliación de plazo para la investigación	31
Enmienda de procedimientos	2
TOTAL	218

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Se impartieron charlas con el tema de derechos humanos a 35 estudiantes del sexto grado de la carrera de turismo del colegio San Martín de Porres de Dolores.
- Se desarrollaron talleres sobre derechos humanos con 45 estudiantes del colegio Picazo, del sexto grado de administración, Poptún.
- Se participa en el COCODE, así como en el Comité de Operaciones de Emergencia para afrontar los problemas relacionados con tormentas, huracanes, epidemia de gripe AH1N1 y dengue.
- Se integró el Frente contra el Hambre.
- Verificación y acompañamiento en casos de intervención inmediata, especialmente los que implican el derecho a la salud y seguridad, más concretamente en casos que implican los servicios del Hospital y la PNC. Trabajo coordinado especialmente con la oficial analista y de procedimientos.
- Reuniones de evaluación del Proyecto y Verificación al Cambio de Juntas Directivas del Comité de Mujeres y reuniones de conciliación y mediación cuando ha existido algún conflicto. Las comunidades atendidas fueron San Antonio Chunacté, Arroyo El Delegado y Quebrada Seca.

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Cuatro talleres a estudiantes de Galonista Profesional del Ejército, sobre introducción e historia de los derechos humanos.

Educación y promoción

- Dos capacitaciones: sobre el derecho a la educación, la violencia contra la mujer e intrafamiliar, los derechos del niño, la equidad de género, en estrecha coordinación con la Oficial de Defensorías.
- Apoyo y orientación a estudiantes del curso de seminario en la temática y los posibles proyectos de impacto, como desnutrición infantil y el abordaje de la organización comunitaria.
- Reuniones de orientación, acompañamiento y dotación de material bibliográfico para la fundamentación teórica y académica de trabajos comunitarios. Este trabajo se extiende también a estudiantes de nivel universitario, especialmente de Trabajo Social y de Derecho.
- Foros de discusión pública sobre temas como “Violencia y sus consecuencias en la participación ciudadana”, “Nuestro sistema político”, “Pobreza y realidad socioeconómica de Guatemala” y “Derechos de los pueblos indígenas”. Se ha coordinado principalmente con las radios Utan Kaj y Galáctica.
- Apoyo a la Mesa de Tierras para su fortalecimiento organizativo y programático, a las reuniones en la que invitan a la Auxiliatura Regional y en la cual la asistencia y apoyo a actividades puntuales contribuye a un entendimiento y apoyo mutuo.
- Coordinación con el Juzgado de Paz y la PNC para promover el liderazgo de las microrregiones que componen Poptún, sobre las funciones de los COCODES en materia de seguridad y justicia, en particular

para prevenir intentos de linchamiento y encauzar la problemática social comunitaria por las vías legales e institucionales.

- Recopilación, con base en cuatro materiales bibliográficos, de un manual de dinámicas para talleres de capacitación en derechos humanos.

Auxiliatura Municipal de El Naranjo, Petén



Auxiliatura Municipal de El Naranjo, Petén

De enero a noviembre de 2009, la situación de los derechos humanos en la cabecera municipal se caracteriza por un incremento de las violaciones de los derechos humanos, siendo los casos más denunciados: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, agresión física y psicológica contra la mujer, amenazas e intimidación, abuso de autoridad, sustracción de niños y violación de los derechos del trabajador.

Debido a la falta de medios de comunicación y planes de prevención y contingencia en casos de emergencias naturales, las áreas de mayor riesgo son la urbana y los lugares bajos.

Otras problemáticas son: la falta de certeza jurídica de la propiedad de la tierra y situaciones que surgen por la minería, falta de infraestructura o maestros en las escuelas, y escasez de medicamentos en los centros de salud.

Los grupos más vulnerables son la mujer, la niñez, las personas adultas mayores y las personas migrantes.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Municipal de El Naranjo se realizaron 172 acciones específicas: 20 de orientación, 43 de prevención, 1 de observación, 88 de mediación, 15 operativos, 2 de acompañamiento, 1 de conciliación y 2 de intervención inmediata.

De investigación

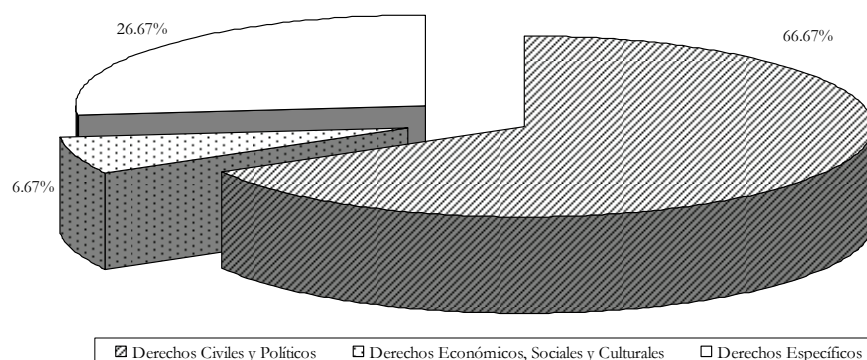
Se abrieron 15 expedientes de investigación: 10 por violaciones a derechos individuales, 1 a derechos económicos, sociales y culturales y 4 a derechos específicos. De ellos, el 73.33% de oficio y el 26.67% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100.00% forma parte del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	0	2	1	0	0	1	3	1	1	0	10	66.67
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6.67
Derechos Específicos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	26.67
TOTAL MENSUAL	1	0	2	2	1	0	1	3	1	2	2	15	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	1	0	1	1	1	0	0	2	1	2	2	11	73.33
Ordinario	0	0	1	1	0	0	1	1	0			4	26.67
TOTAL MENSUAL	1	0	2	2	1	0	1	3	1	2	2	15	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	20	11.63
Prevención	43	25.00
Observación	1	0.58
Mediación	88	51.16
Operativo	15	8.72
Acompañamiento	2	1.16
Conciliación	1	0.58
Intervención inmediata	2	1.16
TOTAL	172	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Judicial			2	1				1		1		5	71.43
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Centros educativos comunitarios							1					1	14.29
CONAP					1							1	14.29
TOTAL MENSUAL	0	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	7	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

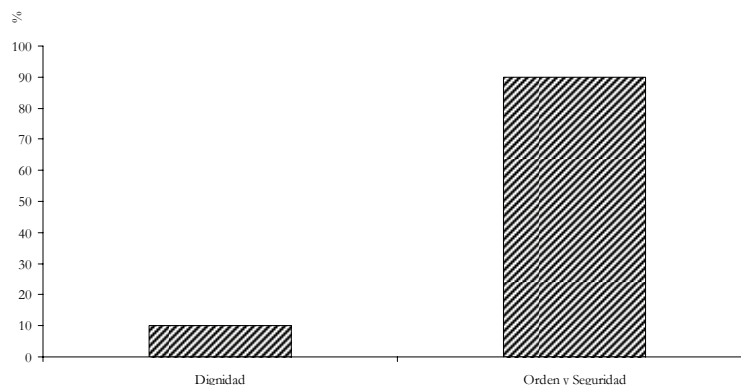
El índice delictivo es alto: agresiones con arma blanca, contundente y de fuego. El abuso de poder es constante en el municipio, por ejemplo, los migrantes son extorsionados por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y delegados de Migración, sin que el Estado tome acciones concretas para contrarrestar esta situación.

Expediente EIO.Nar.Pet.41-2009/DCP

Vía telefónica se informó que dos agentes de la PNC de la subestación del barrio de la Ermita de San Benito dispararon contra el gerente de Banrural de La Libertad, causándole lesiones. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al Ministerio de Gobernación de Guatemala y a la Comisaría 62 de San Benito y se estableció que el caso es conocido por la Fiscalía del Ministerio Público de San Benito.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Secuestro	1											1	10.0
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo			2	1			1	3	1	1		9	90.00
TOTAL MENSUAL	1	0	2	1	0	0	1	3	1	1	0	10	100.00



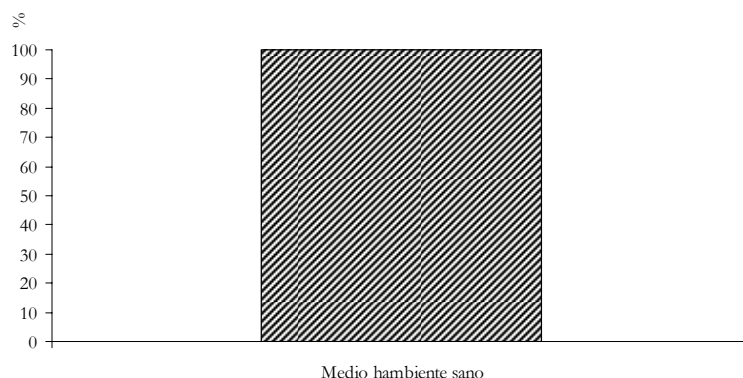
2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Expediente ORD.Nar.Pet.109-2009/DESC

La denunciante informó que el Coordinador Técnico Administrativo le notificó que había sido suspendida de su labor educativa, supuestamente por enviar mensajes de amenaza a una maestra. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado a la Dirección Departamental de Educación. Finalmente, el coordinador técnico administrativo llegó a un acuerdo con la denunciante.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
MEDIO AMBIENTE SANO													
Deforestación					1							1	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00



2.3 Derechos específicos

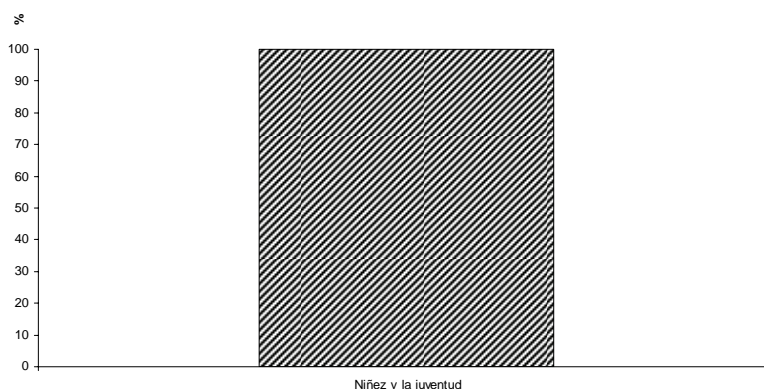
La violencia intrafamiliar es la que más afecta a las mujeres y a la niñez, no sólo en los municipios que la Auxiliatura atiende, sino en todo el departamento. A diario se presentan denuncias de mujeres y niños por agresión física, psicológica, patrimonial, económica y maltrato. Además, sigue manifestándose una fuerte discriminación contra la mujer, al negarle su participación en el ámbito público y relegándola a las labores domésticas.

Expediente EIO.Nar.Pet.31-2009/DE

Una denunciante anónima informó que menores de edad son maltratados física y psicológicamente por su progenitora desde hace varios años. El caso fue remitido al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de San Benito, Petén, para solicitar las medidas de seguridad y velar por la integridad física y psicológica de los menores, las cuales fueron otorgadas para el resguardo de éstos.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil										1	1	2	50.00
Prostitución juvenil											1	1	25.00
Muerte				1								1	25.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	100.00



3. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que **SÍ** han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.NAR.PET.41-2009/DCP	Licda. Rosa Mabelin Campos Avalos	Asesora legal	Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación
ORD.NAR.PET.48-2009/DCP	Licda. Rosa Mabelin Campos Avalos	Asesora legal	Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación
ORD.NAR.PET.61-2009/DCP	Bradi Leonel Cano Gamarro	Jefe Delegación	DIPRONA, PNC
	Carlos Francisco Sagastume Ramos	Coronel de Infantería	Fuerza de Tarea "Interinstitucional Norte", Ministerio Defensa Nacional
	Julio César García Ayala	Procurador Jurídico	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
EIO.NAR.PET.70-2009/DESC	Licda. Claudia Mariela López Díaz	Directora Regional	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
ORD.NAR.PET.109-2009/DESC	Licda. Ana Beatriz Sagastume	Coordinadora	Sección de Recurso Humanos, Dirección Departamental de Educación
EIO.NAR.PET.117-2009/DCP	Lic. Ángel Donald González Cuevas	Viceministro	Ministerio de Gobernación
EIO.NAR.PET.146-2009/DCP	Licda. Rosa Mabelin Campos Avalos	Asesora Legal	Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación

4. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	161
De apertura de expedientes de investigación	16
Medidas urgentes	8
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	6
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	1
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	1
TOTAL	193

5. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Trece monitoreos: tres en puestos de salud y diez en centro de educación.
- Cuatro talleres de capacitación en materia de derechos humanos, cultura de paz, Ley de Protección Integral de la Niñez, derechos de la mujer, derechos del adulto mayor y derechos de los pueblos indígenas.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Tres capacitaciones sobre los Acuerdos de Paz a líderes comunitarios, con el objetivo de dar a conocer los contenidos de dichos acuerdos y los compromisos que el Estado adquirió para su cumplimiento.

Educación y promoción

- Afiches, programas de radio, trifoliales, charlas enfocadas a la temática de los derechos humanos.
- Participación en el evento del Día Internacional de la Niñez
- Participación en el evento del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

Auxiliatura Departamental de Quetzaltenango



Auxiliatura Departamental de Quetzaltenango

De enero a noviembre de 2009, la violación de los derechos humanos continúa en diferentes ámbitos sociales, por ejemplo: el derecho constitucional a la vida es uno de los más vulnerados, no existiendo consignación de la autoría de los mismos; hubo un marcado aumento de secuestros, quedando impunes por falta de pruebas, consignaciones o denuncias por temor a represalias. Otro flagelo es la extorsión, muchas veces operada desde la cárcel.

En materia de educación se han recibido denuncias contra centros de enseñanza por diversos motivos, por lo cual la Auxiliatura ha hecho esfuerzos para sensibilizar a la población educativa en materia de derechos humanos, realizando acciones interinstitucionales con la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Dirección Departamental de Educación, la Universidad Rafael Landívar (URL), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Comisión Contra la Discriminación Racial (CODISRA), siendo el grupo meta estudiantes de todos los niveles formativos y educadores, directores y supervisores de los 103 colegios privados de la ciudad de Quetzaltenango como primera fase, y en la segunda, con el sector oficial de la ciudad altense.

Los grupos más vulnerables son: niñez y adolescencia, mujer y adulto mayor; las áreas de mayor riesgo son: Concepción Chiquirichapa, Zunil, San Juan Ostuncalco, San Martín Chilverde, Palestina de los Altos, Huitán, Cabricán y la cabecera departamental, por registrar más hechos delictivos.

En cuanto a salud, no hay atención a pacientes que presentan desnutrición, a pesar de ser un problema latente en la región. Para la atención de sectores vulnerables no existen programas ni albergues de protección integral, y en vivienda no se vislumbran estrategias para contrarrestar esta necesidad. En términos generales no existen políticas públicas ni alertas tempranas que respondan a las necesidades de la sociedad.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Quetzaltenango se realizaron 624 acciones específicas: 77 de orientación, 335 de prevención, 38 de mediación, 18 operativos, y 156 de intervención inmediata.

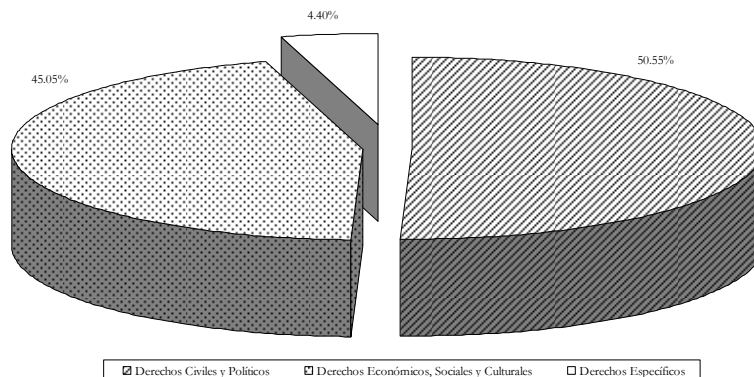
De investigación

Se abrieron 91 expedientes de investigación: 46 por violaciones a derechos individuales, 41 a derechos económicos, sociales y culturales y 4 a derechos específicos. De ellos, el 14.29% de oficio y el 85.71% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 50% forma parte del Organismo Ejecutivo, 16.67% del Organismo Judicial y 2.56% del Organismo Legislativo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	8	5	6	3	2	3	3	6	7	3		46	50.55
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	8	6	3	2	3	1	4	7	3	2	2	41	45.05
Derechos Específicos		1					1			2		4	4.40
TOTAL MENSUAL	16	12	9	5	5	4	8	13	10	7	2	91	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	2	4	1	3		1	1	3	2		1	18	19.78
Ordinario	14	8	8	2	5	3	7	10	8	7	1	73	80.22
TOTAL MENSUAL	16	12	9	5	5	4	8	13	10	7	2	91	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	77	12.34
Prevención	335	53.69
Mediación	38	6.09
Operativo	18	2.88
Intervención inmediata	156	25.00
TOTAL	624	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	7	7	6	1	2	1	5	4	5	1		39	50.00
Judicial	1	1	1	1	1	2	2	1	3			13	16.67
Legislativo				1						1		2	2.56
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	4		1					3	1	2		11	14.10
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	1								1	1		3	3.85
A-A no determinado	1	2		1				2	1	1		8	10.26
Ministerio Público			1									1	1.28
Centros educativos particulares		1										1	1.28
TOTAL MENSUAL	14	11	9	4	3	3	7	10	11	6	0	78	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

El abuso de poder y la impunidad se expresan en las denuncias en contra de las patrullas civiles de Concepción Chiquirichapa, por actos delictivos y atentar contra la integridad, seguridad y dignidad de los vecinos; o como en el caso de las comunidades de San Mateo y San Juan Ostuncalco donde los vecinos se han organizado para contrarrestar la delincuencia, portando armamento de alto poder, prohibido para uso de particulares, con el cual intimidan a los vecinos del lugar.

Por su parte, la PNC es incapaz de proteger a la población, por carecer de recurso humano y logístico, a lo cual se suma la desconfianza de la ciudadanía al denunciar y falta de credibilidad hacia la institución, por lo que autoridades municipales han requerido la presencia militar. En todo el departamento de Quetzaltenango hay 462 elementos de la PNC para prestar seguridad ciudadana a 624,716 habitantes en los 24 municipios, es decir, que un solo policía brinda seguridad a 1,352 habitantes. En cuanto al Ministerio Público, sigue siendo señalado de no investigar los casos o estancarlos, situación que facilita la libertad de los sindicados por falta de mérito o pruebas.

Las vinculaciones políticas de algunos alcaldes municipales han afectado a los COCODES, quienes enfrentan dificultades de registro, situación en la cual ha mediando la institución del PDH para evitar que las comunidades afectadas tomen medidas de hecho.

La inconformidad de los habitantes ha provocado que se cometan conatos de linchamientos en los municipios de Huitán, La Esperanza y San Juan Ostuncalco, sin consecuencias fatales, por lo que esta Auxiliatura realiza campañas de sensibilización con el fin de minimizar estos casos.

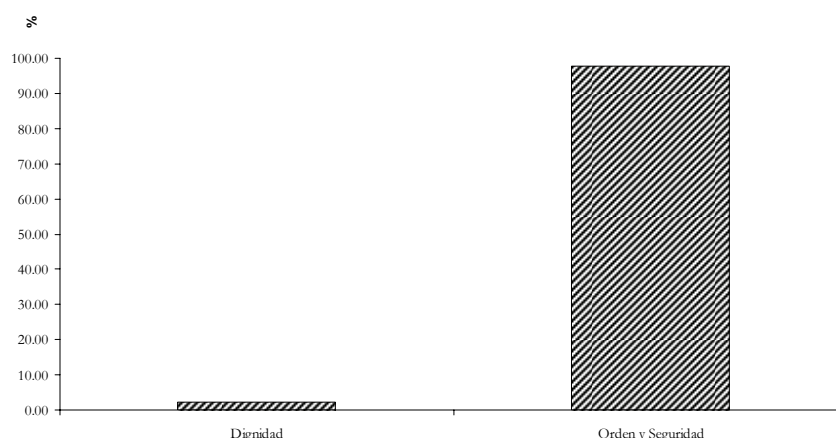
Expediente ORD.QUET.44-2009/DCP

La denunciada se presentó con agentes de la PNC a la casa de la denunciante, indicando que vía telefónica había sido informada de que en un autohotel estaban violando a una menor, motivo por el cual quería constatar cómo se encontraban las hijas de la denunciante; por este motivo entró en la residencia sin orden de juez, aduciendo que por ser trabajadora de la PDH no necesitaba orden. Como parte de la investigación se entrevistó a los agentes de la PNC presentes en los hechos, se solicitó informe circunstanciado al jefe de la División Cuadrante de la PNC y se remitió la denuncia a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Amenazas o intimidaciones	1											1	2.174
ORDEN Y SEGURIDAD													
Falta de asistencia social									1			1	2.17
Abuso de autoridad / poder administrativo	4	2	4	1	2	2		2	4	1		22	47.83
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial	3	3	2	2			2	2	2	1		17	36.96

Amenazas, coacción								2		1		3	6.52
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal							1					1	2.17
Linchamientos						1						1	2.17
TOTAL MENSUAL	8	5	6	3	2	3	3	6	7	3	0	46	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

El derecho a la salud es vulnerado porque el Ministerio de este ramo carece de alertas tempranas para contrarrestar los efectos de diversas enfermedades, en consecuencia, hay varias denuncias contra el Hospital Regional de Occidente. Monitoreos que la PDH ha realizado establecen la carencia de medicamentos, falta de personal médico, mobiliario, equipo quirúrgico, etc. Además, el servicio prestado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es deficiente, destacando: mala infraestructura, citas demasiado espaciadas, el médico tratante no cuenta con expedientes clínicos al momento de las citas fijadas y recetan medicamentos agotados en la farmacia del instituto, además de abuso y prepotencia del personal administrativo y trámites burocráticos de jubilaciones.

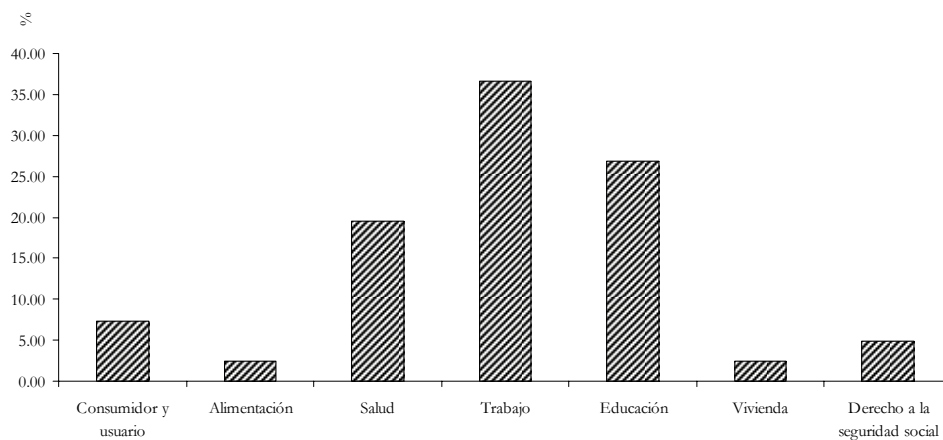
La Auxiliatura de Quetzaltenango inició el proceso “Implementación de los derechos humanos en la comunidad educativa”, para sensibilizar a docentes y evitar violaciones de los derechos humanos; además se incidió en las políticas públicas del Estado para que se incluya en el pensum de estudio cursos de derechos humanos, propuesta aceptada por la Ministra del ramo, a través de la Dirección Departamental de Educación, iniciándose un plan piloto en 2010.

Expediente ORD.QUET.52-2009/DESC

Una denuncia anónima indicó que el gobernador departamental acosa laboralmente a sus trabajadores, les levanta actas sin justificación alguna y busca que se contrate personal afín a su partido. Como parte de la investigación realizada se entrevistó a los trabajadores de Gobernación Departamental, y se solicitó informe circunstanciado al Gobernador Departamental.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Desabastecimiento	1		1									2	4.88
Alzas inmoderadas de precios y tarifas				1								1	2.44
ALIMENTACIÓN													
Hambruna											1	1	2.44
SALUD													
Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)				1					1			2	4.88
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud										1		1	2.44
Mala práctica médica								1				1	2.44
Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado							1	1				2	4.88
Negación de atención médica									1			1	2.44
Negación o falta de medicamentos		1										1	2.44
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral		1			1							2	4.88
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones	3	2						2				7	17.07
Falta de negociación			2									2	4.88
Omisión administrativa (comisiones paritarias)	2				1							3	7.32
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo						1						1	2.44
EDUCACIÓN													
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación	1	1									1	3	7.32
No ser tratado con justicia	1											1	2.44
No ser respetado		1					3	2				6	14.63
Falta de insumos y material didáctico									1			1	2.44
VIVIENDA													
Falta de servicios, materiales e infraestructura					1							1	2.44
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social de riesgos								1		1		2	4.88
TOTAL MENSUAL	8	6	3	2	3	1	4	7	3	2	2	41	100.00



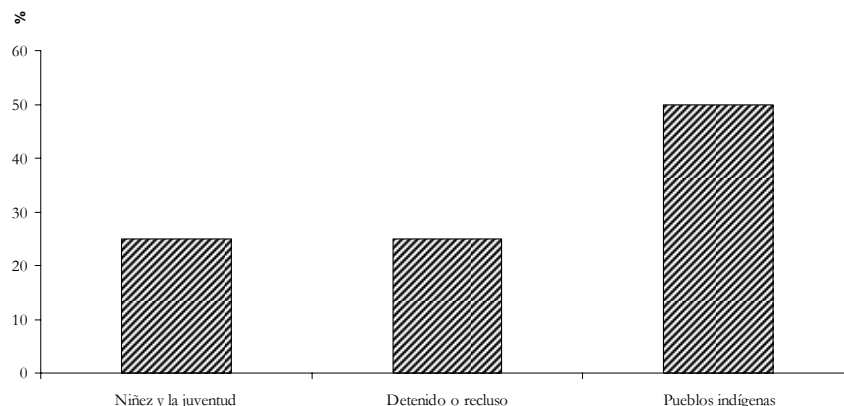
2.3 Derechos específicos

Entre los conflictos más relevantes conocidos por esta Auxiliatura prevalece el de la Empresa Eléctrica Municipal y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), resultante de la posibilidad de que los costos de este servicio aumenten 300%.

La implementación y vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, son instrumentos que fortalecen el sistema de justicia, para hacer efectivo el respeto de los derechos humanos de los sectores vulnerables del país.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Abuso físico o mental										1		1	25.00
DETENIDO O RECLUSO													
Falta de garantías procesales							1					1	25.00
PUEBLOS INDÍGENAS													
Discriminación racial		1										1	25.00
No permitir o facilitar el aprendizaje y el ejercicio de la identidad cultural (formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización, traje indígena, idiomas o variantes dialectales, instituciones propias)										1		1	25.00
TOTAL MENSUAL	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente EIO.QUET.09-2009/DESC

El INDE amenazó con cortar el suministro de energía eléctrica a la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango y, por ende, a los habitantes de Quetzaltenango, en virtud de que quiere aumentar la tarifa de dicho servicio. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al alcalde municipal de Quetzaltenango, en el cual indicó que la Municipalidad interpuso un amparo contra el INDE; se entrevistó al personal del Departamento de Occidente del INDE, quien manifestó que el caso lo está llevando el Departamento de Relaciones Públicas y Asesoría Jurídica de Guatemala.

Expediente ORD.QUET.57-2009/DCP

A raíz de la denuncia de la fuga de seis personas de sexo masculino reclusas en el centro Preventivo para Hombres de esta ciudad, personal de la institución del PDH verificó los hechos, solicitó informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC, entrevistó a los agentes que se encontraban de servicio el día de los hechos, se verificó el número de causa y se está dando seguimiento al proceso en la Fiscalía Distrital del Ministerio Público.

Expediente: Exp. ORD.QUET.53-2009/DCP

Se abrió expediente a partir de la denuncia de que a la delegada de la Defensoría de la Mujer Indígena de Quetzaltenango (DEMI) la agredieron físicamente en sus oficinas. Como parte de la investigación se verificaron los hechos denunciados, se entrevistó a la agraviada, se verificó el número y estado actual del proceso en el Ministerio Público de Quetzaltenango y se realizó un aviso en los medios de comunicación repudiando y condenando el hecho.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.QUET.03-2009 DCP	Alfono Sacba Pop	Comisario Departamental	Comisaría 41, PNC Quetzaltenango
EIO.QUET.03-2009/DCP	Ciriaco Ramírez	Inspector	Comisaría 41, PNC Quetzaltenango
EIO.QUET.01-2009/DESC	Anselmo de Jesús Soto Alvarado	Alcalde	Municipalidad de Salcajá

EIO.QUET.09-2009/DESC	Ing. Juan Fernando Castro Martínez	Gerente General	Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
ORD.QUET. 03-2009 DESC	Lic. Manuel Salazar Tezahuic	Viceministro	Despacho Bilingüe Intercultural, Ministerio de Educación
ORD.QUET.13-2009/DESC		Supervisor de Colegios Privados	Ministerio de Educación
ORD.QUET.21-2009/DESC		Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ORD.QUET.35-2009/DE	Lic. Giulio Talamontti	Director General	Sistema Penitenciario
ORD.QUET.47-2009/DESC	Dr. Marvin Giovanni Ortega Méndez	Director	Hospital Regional de Occidente "San Juan de Dios"
ORD.QUET.45-2009/DCP	Yezica Amarilis Navarro Guillermo	Jueza	Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito de Quetzaltenango
ORD.QUET.33-2009/DESC	Lic. Rafael Alvarado López	Director	Director Departamental de Educación
ORD.QUET.30-2009/DESC	Lic. Jorge Rolando Barrientos Pellicer	Alcalde	Municipalidad de Quetzaltenango
ORD.QUET.25-2009/DCP	Alfonso Sacba Pop	Comisario Departamental	Comisaría 41, PNC Quetzaltenango
ORD.QUET.22-2009/DCP		Supervisor de Educación	Supervisión Educativa de Salcajá, Ministerio de Educación
ORD.QUET. 24-2009/DCP	Prof. Germán Xum Anastasio	Director	Escuela Oficial Rural Mixta aldea San Isidro, Olintepeque
ORD.QUET.24-2009/DCP		Supervisor	Supervisión Educativa de Olintepeque, Ministerio de Educación

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.QUET.03-2009/DCP		Director	Oficina de Responsabilidad Penal, PNC
ORD.QUET.03-2009/DESC	Lic. Carlos René Coyoy Tay	Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.04-2009/DESC		Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.04-2009/DESC	Lic. Augusto René Escobar de León	Alcalde	Municipalidad de La Esperanza
ORD.QUET.04-2009/DESC		Jurado Nacional de Oposición	Ministerio de Educación
ORD.QUET.11-2009/DCP		Ministro	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.QUET.13-2009/DESC		Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.16-2009/DESC		Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.16-2009/DESC		Supervisor de Colegios Privados	Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.35-2009/DE		Director	Granja Modelo de Rehabilitación Penal, Cantel
ORD.QUET.40-2009/DESC		Supervisor de Educación	Ministerio de Educación
ORD.QUET.41-2009/DESC		Director	Dirección Departamental de Educación

ORD.QUET.42-2009/DESC		Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.44-2009/DCP	Carlos Alberto Tercian Cot	Agente	División Cuadrante, Seguridad Preventiva, PNC Quetzaltenango
ORD.QUET.51-2009/DESC		Director	Escuela Oficial Rural Mixta PIMUT Centro, Olinstepeque
ORD.QUET.51-2009/DESC		Supervisor Educativo, Olinstepeque	Ministerio de Educación
ORD.QUET.53-2009/DCP		Comisario Departamental	Comisaría 41, PNC Quetzaltenango
ORD.QUET.55-2009 DCP		Ministro	Ministerio de Educación
ORD.QUET.22-2009/DCP		Director	Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.24-2009/DCP		Director	Dirección Departamental de Educación
EIO.QUET.05-2009/DCP		Encargado	Unidad Ejecutora de Conservación Vial
EIO.QUET.04-2009/DESC	Dra. Mary Pastor Quixtán	Directora	Centro de Salud de Olinstepeque
EIO.QUET.04-2009/DESC	Dr. Giovanni Ortega	Director	Hospital Regional de Occidente "San Juan de Dios"
EIO.QUET.04-2009/DESC		Director	Área de Salud de Quetzaltenango
EIO.QUET.04-2009/DESC		Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ORD.QUET.43-2009/DCP		Supervisor	Supervisión de Educación, Dirección Departamental de Educación
ORD.QUET.59-2009/DCP		Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
EIO.QUET.15-2009/DESC		Director	Granja Modelo de Rehabilitación Penal, Cantel
ORD.QUET.58-2009/DCP		Jefe	Distrito Cuadrante de Seguridad Preventiva, PNC Quetzaltenango
ORD.QUET.58-2009/DCP		Comisario Departamental	Comisaría 41, PNC Quetzaltenango
ORD.QUET.56-2009/DESC	Lic. Jorge Molina Canales		
ORD.QUET.56-2009/DESC		Fiscal General	Ministerio Público
EIO.QUET.06-2009/DE		Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
EIO.QUET.06-2009/DE		Supervisor Educativo	Dirección Departamental de Educación
ORD. QUET 02-2009/DE	Ignacio Pérez	Alcalde	Municipalidad de Palestina de los Altos

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	513
De apertura de expedientes de investigación	92
Medidas urgentes	26
Ampliación de plazo para la investigación	91

Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	7
Acumulación de expedientes	2
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	23
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	2
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	9
De control administrativo (acciones específicas)	120
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	5
TOTAL	890

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Monitoreo a rastros municipales para verificar las condiciones de éstos.
- Monitoreo al Hospital Regional de Occidente, por emergencia de epidemia de gripe A H1N1, inspección en farmacia, emergencia y área de aislamiento, e implementación y existencia de mascarillas y medicamentos.
- Monitoreo al Hospital Regional de Occidente, la Jefatura del Área de Salud y el Hospital Rodolfo Robles sobre casos de desnutrición, comunidades en riesgo, planes de contingencia.
- Monitoreo a la Farmacia de Adscripción del IGSS para verificar la existencia de medicamentos.
- Monitoreo a las escuelas oficiales rurales mixtas, con relación al número de alumnos inscritos, y la influencia del fondo de gratuidad implementado por el Gobierno.
- Una capacitación en la sede central sobre instauración del Frente contra el Hambre y la Mesa de Crisis Alimentaria.
- Instauración del Frente contra el Hambre en Quetzaltenango, en coordinación con el Arzobispado de Quetzaltenango, la Confraternidad de Iglesias Evangélicas, la Universidad de San Carlos y la institución del PDH.
- Instauración de la Mesa de Crisis Alimentaria en Gobernación Departamental.
- Dos talleres, uno sobre métodos alternativos de resolución de conflictos y otro sobre seguridad alimentaria, impartido por la FAO.

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Cine foro en conmemoración del Día de la Dignificación Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, en el Centro Universitario de Occidente, contando con 250 participantes, orientado a sensibilizar a la población sobre la historia del país y consecuencias de la población desarraigada y víctimas del conflicto armado interno.
- Coordinación con radios locales comerciales para la difusión de cuñas radiales acerca de los derechos humanos.
- Coordinación con la sociedad civil para respaldar la petición de esta Auxiliatura de promover el cumplimiento de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, con la participación de 15 organizaciones.
- Capacitación a grupo de mujeres acerca de los progresos de los Acuerdos de Paz y las acciones del gobierno actual, en coordinación con CODECOT.
- Presentación fotográfica de víctimas del conflicto en memoria de Otto René Castillo, con la participación de 800 estudiantes universitarios, en coordinación con la Asociación de Estudiantes Universitarios, Estudiantina CUNOC y conjunto de organizaciones sociales.
- Presentación de documental sobre desaparición forzada y Acuerdos de Paz, en coordinación con la sociedad civil y CUNOC; con la participación de 200 personas.

- Campaña “Con un trato digno hacemos justicia” de concientización y sensibilización a operadores y funcionarios de justicia sobre problemas de actitud en la atención a la población vulnerable, realizada en el mes octubre en medios de comunicación masiva, centros de justicia, centros de salud y con grupos de la sociedad civil; a través de afiches y acordeones, en coordinación con PIES de Occidente y la Coordinadora Interinstitucional de Apoyo a la justicia.

Educación y promoción

- Un proceso de capacitación a docente comunitarios UNODESMA (personal administrativo y docente), de San Martín Sacatepéquez, 18 participantes.
- Siete talleres de capacitación a 75 alcaldes auxiliares de San Martín Sacatepéquez y a 60 miembros de COCODES y 40 de COMUDES de San Juan Ostuncalco y San Miguel Sigüilá.
- 279 talleres relativos a la implementación de los derechos humanos en la comunidad educativa, desglosados de la siguiente manera: 103 talleres con colegios privados, 150 con escuelas oficiales, 16 con docentes y diez con padres de familia, en coordinación con MINEDUC, PGN, PNC y URL.
- Dos talleres de sensibilización a las Comisiones de Derechos Humanos de los Concejos Municipales de Sibilia, San Miguel Sigüilá, San Juan Cajolá, Concepción, San Martín Sacatepéquez y La Esperanza.
- Dos talleres de capacitación al Quinto Escuadrón para la seguridad ciudadana del ejército de Guatemala.
- Cinco talleres de capacitación a elementos de la PNC, en la ciudad de Quetzaltenango, con la participación de 45 agentes y jefes de cada subdelegación de cada municipio.
- Dos proyectos: uno de elección del Niño o Niña Procurador de los Derechos Humanos de Quetzaltenango a realizarse en la cabecera departamental y 14 municipios del resto del departamento, con la participación de 16 niños y niñas. Otro de “Una noche con los Derechos Humanos” realizado en la ciudad de Quetzaltenango, con la participación de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil.
- Proyecto de implementación de los derechos humanos con 25 docentes de San José Chuiquilajá, enfocado a la identificación de la violación sistemática de los derechos humanos.
- Cuatro pláticas de fortalecimiento de libertad de expresión, con integrantes de Katzijobal para el fortalecimiento de la organización comunitaria para una cultura de denuncia; fortalecimiento de la organización juvenil estudiantil a través de la implementación de los derechos humanos, con la participación de 75 estudiantes del nivel básico; fortalecimiento a la organización juvenil estudiantil a través de la implementación de los derechos humanos, con 45 estudiantes del colegio El Prado.
- Una plática sobre el tema de los derechos humanos a docentes para que sean agentes multiplicadores, realizado en Pueblo Nuevo.
- Evento de promoción y divulgación de los derechos humanos con 15 dirigentes y administradores del mercado La terminal y Quetzaltenango, para la prevención de abusos.
- Dos coordinaciones: una para seguimiento en derechos humanos al personal docente del Instituto Básico de Palestina; otra para seguimiento de procesos en derechos humanos a 30 directores de escuelas públicas de Sibilia.
- Una conferencias a estudiantes interesados en la promoción y divulgación de los derechos humanos, con 15 dirigentes estudiantiles universitarios en Quetzaltenango.
- Proyecto de protección y garantías de los derechos humanos dirigido a población de diversidad sexual, realizado en Quetzaltenango.
- Proyecto de aplicación del respeto de los derechos humanos, con 75 estudiantes de nivel primario de Santa Rita, La Esperanza.
- Una capacitación en derechos humanos y ambiente de armonía entre docentes y padres de familia de la comunidad educativa Escuela Oficial Pimut, de La Cumbre, Olintepeque.

Auxiliatura Regional de Coatepeque, Quetzaltenango



Auxiliatura Regional de Coatepeque, Quetzaltenango

De enero a noviembre de 2009, la violación de derechos esenciales como la vida (en especial de mujeres, en su mayoría jóvenes y de escasos recursos económicos), la seguridad e integridad fue recurrente, y muchos de estos casos quedaron impunes por la tardanza en la recolección de evidencias y engorrosos procesos burocráticos. Asimismo, han proliferado las pandillas juveniles y muchos de sus miembros se han visto obligados a integrarse a ellas por temor a sufrir atentados contra su vida. Estas situaciones continúan sin ser investigadas por los entes correspondientes del Estado y no se vislumbran políticas de seguridad que contrarresten este flagelo.

Debido a la cultura de violencia imperante en el área, la mayor parte de los conflictos no son solucionados a través del diálogo y la conciliación, por el contrario, son resueltos con venganzas y agresiones que atentan contra la integridad física de las personas.

La inestabilidad económica por la que atraviesa el país ha contribuido a la pobreza extrema que impera en la región, en especial por falta de fuentes de trabajo y de producción agrícola, en particular en los municipios de El Quetzal y La Reforma, San Marcos, en los cuales es notoria la falta de seguridad alimentaria y nutricional, habiendo familias enteras con marcados grados de desnutrición, siendo más vulnerable la niñez y adolescencia.

La violencia intrafamiliar es otro problema frecuentemente denunciado en esta Auxiliatura, estos casos son remitidos al órgano jurisdiccional competente para su trámite respectivo, sin embargo, las resoluciones de dicho órgano son insuficientes para erradicar este flagelo por no contarse con los medios suficientes para que las medidas de seguridad y protección decretadas por el juez sean efectivas. A lo anterior se suma la inexistencia de un albergue estatal que auxilie a las víctimas, contándose sólo con el de una organización no gubernamental en Quetzaltenango, el cual no es suficiente; tampoco se proporciona orientación y tratamiento psicológico a las víctimas ni al victimario, ya que el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo, Previsión Social y de Familia de este municipio no cuenta con esa área; y los programas de prevención no son suficientes por falta de recursos económicos y por intereses político-partidistas.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Municipal de Coatepeque se realizaron 288 acciones específicas: 87 de orientación, 127 de prevención, 25 de observación, 15 de mediación y 34 de intervención inmediata.

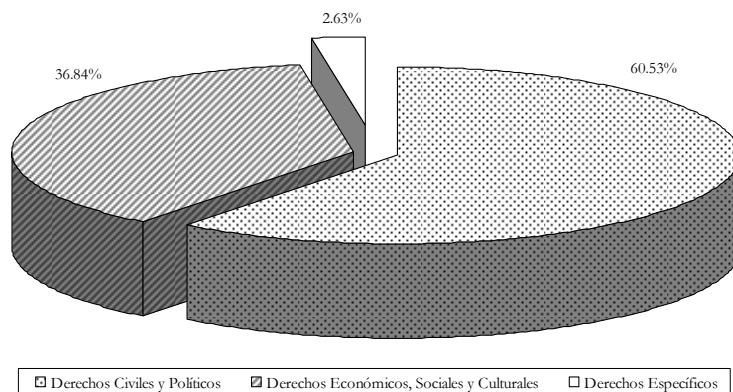
De investigación

Se abrieron 38 expedientes de investigación: 23 por violaciones a derechos individuales, 14 a derechos económicos, sociales y culturales y 1 a derechos específicos. De ellos, el 23.68% de oficio y el 76.32% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 67.65% forma parte del Organismo Ejecutivo y 2.94% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	1	1	1	7	1	2	3	3	2	1	23	60.53
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1	4		2	1		2		2	2		14	36.84
Derechos Específicos			1									1	2.63
TOTAL MENSUAL	2	5	2	3	8	1	4	3	5	4	1	38	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		3		2			2		1	1		9	23.68
Ordinario	2	2	2	1	8	1	2	3	4	3	1	29	76.32
TOTAL MENSUAL	2	5	2	3	8	1	4	3	5	4	1	38	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	87	30.21
Prevención	127	44.10
Observación	25	8.68
Mediación	15	5.21
Intervención inmediata	34	11.81
TOTAL	288	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	2	4	1	2	2		3	3	3	3		23	67.65
Judicial					1							1	2.94
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
Municipalidades					4				1	1	1	7	20.59
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social			1									1	2.94
A-A no determinado			1									1	2.94
Ministerio Público											1	1	2.94
TOTAL MENSUAL	2	4	3	2	7	0	3	3	4	4	2	34	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Los derechos individuales son de los más vulnerados, entre ellos, el derecho a la libre locomoción, a la vida, la integridad, detención ilegal y abuso de autoridad; la PNC es uno de los entes del Estado que más conculca este último, pero la Policía Municipal de Coatepeque también ha cometido abusos, con el uso excesivo de la fuerza en el desalojo de comerciantes informales, inclusive al utilizar armas de fuego de grueso calibre.

Es notoria la carencia de seguridad, ya que sólo se resuelven situaciones emergentes; aunado a esto, hay desconfianza de los habitantes hacia la PNC, ya que algunos de sus integrantes han sido responsables de muchos delitos, como robos, asaltos, secuestros, abuso de autoridad, etcétera.

Se suscitó un conflicto entre el alcalde Municipal de Flores Costa Cuca y los pobladores porque las autoridades ediles decidieron cambiar el nombre de dicho municipio sin haber agotado las vías correspondientes para realizar tal acción; sin embargo, aunque la Corte de Constitucionalidad resolvió que el nombre es el de siempre, la autoridad municipal está reacia a ello, por lo que el conflicto continúa. En términos más generales, los alcaldes no motivan la participación social de las organizaciones comunitarias establecida en la Ley de los Consejos de Desarrollo, el Código Municipal y la Ley de Descentralización, y se evidencia la priorización de proyectos sin tomar en cuenta a los COCODES.

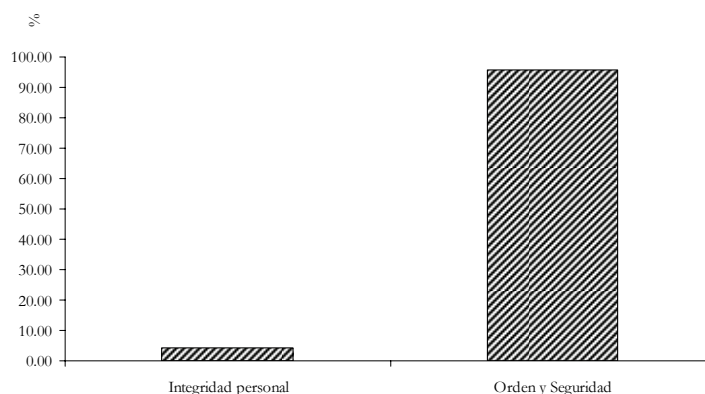
Expediente ORD.COAT. 26-2009/DCP

Por denuncia anónima se tuvo conocimiento de que los agentes de la Policía Municipal de Coatepeque, al desalojar a los comerciantes informales de las diferentes calles y avenidas de dicha localidad, han abusado de sus funciones y han recurrido al uso excesivo de la fuerza, armas de fuego de grueso calibre y hasta se han presentado con pasamontañas para realizar dicha labor. Todo lo anterior es contrario a la ley que especifica las atribuciones de esta entidad. Como parte de la investigación realizada se constataron los hechos denunciados y se presentaron los informes circunstanciados solicitados.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte violenta					1							1	4.35
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo			1	1	4	1	1		2	2	1	13	56.52
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial					1		1	1	1			4	17.39
Corrupción	1											1	4.35
Amenazas, coacción		1			1							2	8.70
Detención ilegal								2				2	8.70
TOTAL MENSUAL	1	1	1	1	7	1	2	3	3	2	1	23	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

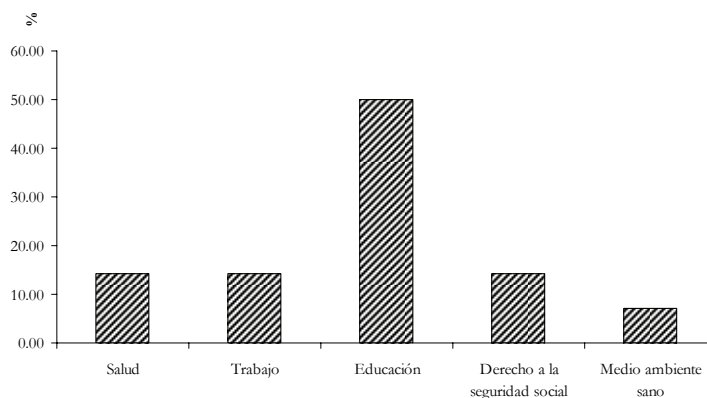
El acceso a los servicios públicos es deficiente por no haber un presupuesto acorde a las necesidades básicas y prioritarias de la población que vive en pobreza y extrema pobreza, situación que se ha agravado debido a los recortes presupuestarios realizados por el Gobierno, lo que ha repercutido principalmente en la prestación de servicios de salud y educación.

Expediente ORD.COAT.24-2009/DESC

Alrededor de 38 comunidades de Coatepeque están inconformes con el servicio que prestan Unión FENOSA DEOCSA y DEORSA, por cobros ilegales y brindar mala atención al público, por lo que decidieron bloquear caminos como medida de hecho. Personal de esta Auxiliatura conversó con los vecinos para evitar el bloqueo, al mismo tiempo que se solicitaron informes circunstanciados y se sostuvo una reunión con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para buscar las mejores soluciones al caso, proceso en el cual se sigue efectuando la mediación correspondiente.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
SALUD													
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud							1		1			2	14.29
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones				1								1	7.14
Falta de negociación										1		1	7.14
EDUCACIÓN													
No ser tratado con justicia									1			1	7.14
No ser respetado	1						1					2	14.29
Falta de infraestructura		3								1		4	28.57
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Inexistente cobertura social					1							1	7.14
Insuficiente cobertura social a beneficiarios		1										1	7.14
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas				1								1	7.14
TOTAL MENSUAL	1	4	0	2	1	0	2	0	2	2	0	14	100.00



2.3 Derechos específicos

La niñez y adolescencia continúa siendo uno de los sectores más vulnerables: no son considerados en los programas de desarrollo integral, un alto porcentaje no tiene acceso a la educación primaria, y la pobreza y extrema pobreza de las familias numerosas limita sus oportunidades ante la necesidad de trabajar desde temprana edad. Un problema de trascendencia es la explotación sexual comercial de adolescentes, sin que existan políticas estatales que contrarresten estas situaciones, siendo más vulnerables la adolescencia migrante, por ser presa fácil para el comercio sexual en los municipios fronterizos.

El Programa de Invalidez, Vejez y Supervivencia (IVS) es deficiente por los trámites burocráticos que se deben realizar, y el Programa del Adulto Mayor no tiene capacidad para dar cobertura a todas las necesidades básicas de esta población. Aunado a ello, el desconocimiento de la Ley del Adulto Mayor no les permite exigir sus derechos.

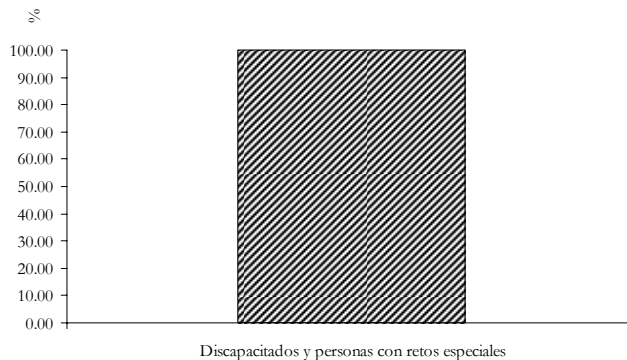
Se han logrado avances significativos en la función institucional en relación con el trabajo preventivo que se realiza en educación y promoción de los derechos humanos, por ejemplo: la Corte Suprema de Justicia creó el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en Coatepeque, contribuyendo al fortalecimiento de las instancias que trabajan en beneficio de este grupo. Sin embargo, no hay presencia de la Fiscalía de la Mujer, lo cual conlleva procesos judiciales lentos, motivando a la víctima o denunciante a desistir de los trámites.

Expediente ORD.COAT.06-2009/DE

Indica la denunciante que, en forma reiterada, dos personas la han agredido físicamente, sacándola de su residencia, y el Juez de Paz de Génova Costa Cuca sólo llama a las partes a conciliación, lo cual considera inadecuado. El juez de paz y la PNC no la han atendido adecuadamente. Como parte de la investigación se abrió expediente por la violación de los derechos humanos del adulto mayor, discriminación social y falta de acceso a la justicia por parte del juez de paz mencionado. El expediente se encuentra en la sede central de la institución del PDH con proyecto de resolución final de violación de derechos humanos.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES													
Discriminación cultural, social, económica, política			1									1	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00



3. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.04-2009/DCP	Felix Ramiro García Grijalva	Jefe	Subestación Coatepeque, PNC
ORD.04-2009/DCP	Alfonso Federico Sacbá Pop	Jefe Quetzaltenango	Comisaría 41, PNC
ORD.05-2009/DCP	Manuel Fernando González Santos	Asesor Jurídico	Ministerio de Educación
ORD.05-2009/DCP	Enrique Santiago Díaz Lainez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación de San Marcos

ORD.03-2009/DESC		Junta Directiva	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
ORD.06-2009/DE		Cuerpo colegiado	Corte Suprema de Justicia, Organismo Judicial
EIO.01-2009/DESC	Ana Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
EIO.02-2009/DESC	Carmen Maldonado de Joachín	CTA	Ministerio de Educación
EIO.02-2009/DESC	Ana Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.07-2009/DCP	Alfonso Federico Sacbá Pop	Jefe	Comisaría 41, PNC
ORD.09-2009/DCP	Salvador Gándara	Ministro	Ministerio de Gobernación
ORD.10-2009/DCP	Tito Natanael Vásquez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Flores Costa Cuca
ORD.10-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora General	PNC
ORD.11-2009/DCP	Tito Natanael Vásquez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Flores Costa Cuca
ORD.12-200/DCP	Prof. Julio Cesar Enríquez Zamora	Director	Escuela Oficial Urbana Mixta Oscar de León Palacios, Coatepeque
ORD.12-200/DCP	Licda. Ana Francisca Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.12-200/DCP	Lic. David Cifuentes	Supervisor Educativo	Coatepeque, Ministerio de Educación
ORD.14-2009/DCP	Lic. Jorge Adolfo Díaz Alonzo	Juez de Paz del municipio de Pajapita, San Marcos	Organismo Judicial
ORD.14-2009/DCP	Lic. Milton Danilo Torres Caravantes	Presidente	Junta Disciplinaria Judicial, Organismo Judicial
ORD.15-2009/DESC	Tito Natanael Vásquez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Flores Costa Cuca
ORD.15-2009/DESC	Cesar Aníbal Batres Sánchez	Coordinador Departamental	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
ORD.15-2009/DESC	Ing. Raul Robles	Ministro	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
ORD.16-2009/DCP	Lic. Rafael Alvarado López	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación, Quetzaltenango
ORD.16-2009/DCP	Licda. Ana Francisca Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.17-2009/DCP	José Alfonso Cruz Valdez	Comisario Departamental	PNC San Marcos
ORD.18-2009/DESC	Licda. Ana Francisca Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.18-2009/DESC	Lic. Enrique Santiago Díaz Lainez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación, San Marcos
ORD.19-2009/DCP	Subinspector Milton Iván Pérez Pérez	Jefe	Subestación Nuevo Progreso, PNC San Marcos
ORD.20-2009/DCP	David Federico Cifuentes Hurtado	Supervisor Educativo	Coatepeque, Ministerio de Educación
ORD.20-2009/DCP	Licda. Ana Francisca Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.21-2009/DCP	Erwin Aroldo López Escobar	Auxiliar Fiscal	Fiscalía Municipal de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, Ministerio Público
EIO.05-2009/DESC	Edwin Rolando Vega Pérez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Coatepeque
EIO.06-2009/DCP	Edgar Juárez	Director	Hospital Nacional Juan José Ortega, Coatepeque

EIO.06-2009/DCP	Diego Antonio Manrique	Director	Área de Salud, Quetzaltenango
EIO.07-2009/DESC	Diego Antonio Manrique	Director	Área de Salud, Quetzaltenango

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
ORD.02-2009/DESC	Licda. Ana Francisca Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.02-2009/DESC	Lic. Rafael Alvarado López	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación, Quetzaltenango
EIO.03-2009/DESC.	Licda. Ana Francisca Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
PREV.05-2009/DCP.	Edwin Vega Pérez	Alcalde	Municipalidad de Coatepeque
PREV.06-2009/DESC	German Valenzuela	Encargado	Inspección de Trabajo, Coatepeque
PREV.29-2009/DCP	Byron Primitivo de León	Juez	Juzgado de Paz de Colomba Costa Cuca
PREV.33-2009/DESC	Oscar René Ochaeta	Encargado	Oficina de DEOCSA, Coatepeque
PREV.37-2009/DESC		Delegado	Ministerio de Ambiente y Recursos naturales
ORD.07-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora General	PNC.
ORD.07-2009/DCP	Lic. Willian Donaldo Quiché Ajú	Jefe de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Coatepeque, Quetzaltenango	Organismo Judicial
ORD.09-2009/DCP	Oficial II Félix García Grijalva	Jefe, Quetzaltenango	Estación de Coatepeque, PNC
ORD.09-2009/DCP	Edwin Vega Pérez	Alcalde	Municipalidad de Coatepeque
ORD.09-2009/DCP	Julio César Macario	Jefe Policía Municipal	Municipalidad de Coatepeque
ORD.10-2009/DCP	Gladimiro Hernández.	Fiscal Distrital	Fiscalía Distrital del Ministerio Público, Coatepeque
ORD.10-2009/DCP	Alfonso Federico Sachá Pop	Jefe	Comisaría 41, PNC Quetzaltenango
ORD.11-2009/DCP	Gladimiro Hernández	Fiscal Distrital	Fiscalía Distrital del Ministerio Público, Coatepeque
ORD.12-2009/DCP	Lic. Rafael Alvarado	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación, Quetzaltenango
ORD.12-2009/DCP	Gladimiro Hernández	Fiscal Distrital	Fiscalía Distrital del Ministerio Público, Coatepeque
ORD.13-2009/DCP	Dr. Edgar Juarez	Director	Hospital Nacional Juan Jose Ortega, Coatepeque
ORD.13-2009/DCP	Lic. Gladimiro Hernández	Fiscal Distrital	Fiscalía Distrital del Ministerio Público, Coatepeque
ORD.13-2009/DCP	Dr. Diego Manrique	Jefe Departamental	Área de Salud, Quetzaltenango
ORD.13-2009/DCP	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ORD.17-2009/DCP	Marlene Blanco Lapola	Directora General	PNC

ORD. 19-2009/DCP	José Alfonso Cruz Valdez	Comisario Departamental	PNC, San Marcos
ORD. 19-2009/DCP		Encargada	Oficina de Derechos Humanos, PNC
ORD. 20-2009/DCP	Rafael Alvarado López	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación, Quetzaltenango
ORD. 21-2009/DCP		Jefe	Estación de Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, PNC
ORD. 21-2009/DCP	Lic. William Donaldo Quiché Ajú	Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Coatepeque, Quetzaltenango	Organismo Judicial
EIO. 05-2009/DESC	William López	Delegado Departamental de Quetzaltenango	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
EIO. 05-2009/DESC	Luis Ferraté	Ministro	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
EIO. 06-2009/DCP		Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
EIO. 07-2009/DESC	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
EIO. 08-2009/DCP	Dr. Celso David Cerezo Mulet	Ministro de Salud	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
EIO. 09-2009/DESC	Lic. Manfield Castañon	Supervisor educativo	Ministerio de Educación
EIO. 09-2009/DESC	Lic. David Cifuentes	Supervisor educativo	Ministerio de Educación

4. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	288
De apertura de expedientes de investigación	39
Medidas urgentes	16
Ampliación de plazo para la investigación	22
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	10
Enmienda de procedimientos	5
Con suspensión por desistimiento	1
Acumulación de expedientes	12
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	1
Comportamiento administrativo lesivo	
> Con recomendación	2
ACCIONES O RECURSOS PLANTEADOS	
Exhibiciones	8
TOTAL	404

5. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Incidencia e intervención en problemática y controversias entre la Municipalidad de Coatepeque y los comerciantes informales de dicha ciudad.
- Proceso de acercamiento de entendimiento y diálogo entre el alcalde municipal de Flores Costa Cuca y pobladores del lugar, por el cambio ilegal del nombre de dicho municipio, de lo cual la Corte de Constitucionalidad ha resuelto en definitiva que el nombre continúa siendo el mismo.
- Rescate de niñez con alto grado de desnutrición en los municipios de El Quetzal y La Reforma, San Marcos.
- Monitoreo en el Hospital Regional Juan José Ortega, de Coatepeque, respecto al abastecimiento de medicamentos a Clínica de Atención a Pacientes con Enfermedades Infectocontagiosas, conocida como “Clínica 12”.

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Socialización del proceso de recuperación del Archivo Histórico de la PNC y las desapariciones forzadas, logrando la sensibilización del conocimiento de este tema.

Auxiliatura Departamental de Quiché



Auxiliatura Departamental de Quiché

De enero a noviembre de 2009 la situación de los derechos humanos en este departamento se caracterizó por una constante violación de éstos. Una de las principales causas de denuncia fue la inseguridad que afecta a la población de toda la región.

La certeza jurídica de la tierra es uno de los grandes problemas, ya que por la falta de un registro confiable se han dado casos de usurpación que, a su vez, han provocando enfrentamientos entre los afectados.

En el ámbito educacional se han impulsado los programas de gratuidad de la educación, los cuales han creado ciertos conflictos entre maestros y padres de familia en virtud de que no se cuenta, entre otros, con la infraestructura necesaria para atender la sobrepoblación estudiantil. En el tema de salud la cobertura es insuficiente; la desnutrición es notoria siendo los niños menores de cinco años los más vulnerables.

En lo que se refiere al abuso de poder, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, usurpación de tierras e intentos de linchamientos, las comunidades de los municipios de Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché, Zacualpa y Joyabaj son las más afectadas.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Quiché se realizaron 2,018 acciones específicas: 270 de orientación, 74 de prevención, 9 de observación, 49 de mediación, 63 operativos, 132 de acompañamiento, 11 de conciliación, 401 de intervención inmediata y 1,009 de atención a la víctima.

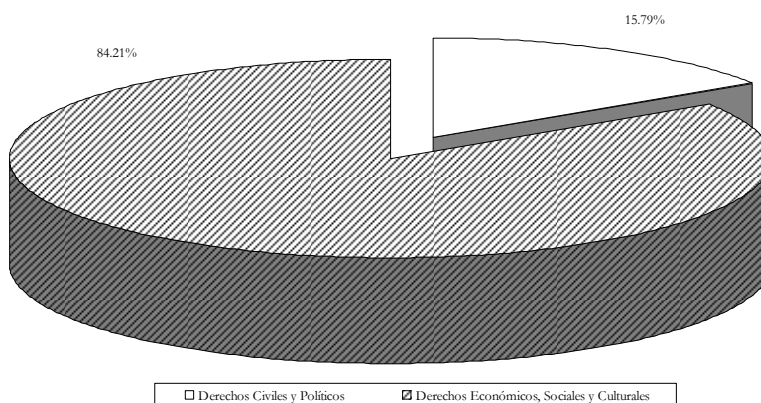
De investigación

Se abrieron 19 expedientes de investigación: 3 por violaciones a derechos individuales y 16 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 14.29% de oficio y el 85.71% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100.00% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos					1		1		1			3	15.79
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	2	1	1	4	1			3		2	2	16	84.21
TOTAL MENSUAL	2	1	1	4	2	0	1	3	1	2	2	19	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	2	1		4	1			3		1	2	14	73.68
Ordinario			1		1		1		1	1		5	26.32
TOTAL MENSUAL	2	1	1	4	2	0	1	3	1	2	2	19	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	270	13.38
Prevención	74	3.67
Observación	9	0.45
Mediación	49	2.43
Operativo	63	3.12
Acompañamiento	132	6.54
Conciliación	11	0.55
Intervención inmediata	401	19.87
Atención a la víctima	1009	50.00
TOTAL	2018	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo		1			1		1	1	1	1	1	7	36.84
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
Municipalidades	2		1	4	1			2		1	1	12	63.16
TOTAL MENSUAL	2	1	1	4	2	0	1	3	1	2	2	19	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Cada vez son más las denuncias relacionadas con amenazas de muerte, intimidaciones, abuso de autoridad, corrupción y detención arbitraria de particulares por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

En algunos municipios se ha manipulado a la organización comunitaria (COCODES), nombrando por conveniencia a sus integrantes, con el objetivo de que personas con fines políticos avalen proyectos de forma anómala; en este sentido las quejas y denuncias provienen de los municipios de Sacapulas, Zacualpa, Joyabaj y Chichicastenango principalmente.

Se registraron denuncias en contra de autoridades comunitarias por la forma de aplicar la justicia a través de castigos corporales crueles, acción contraria a una cultura de paz; los casos más graves se registraron en los municipios de Chichicastenango, Zacualpa, Joyabaj y Santa Cruz del Quiché.

Expediente PREV.QUI. 21-2009/DCP

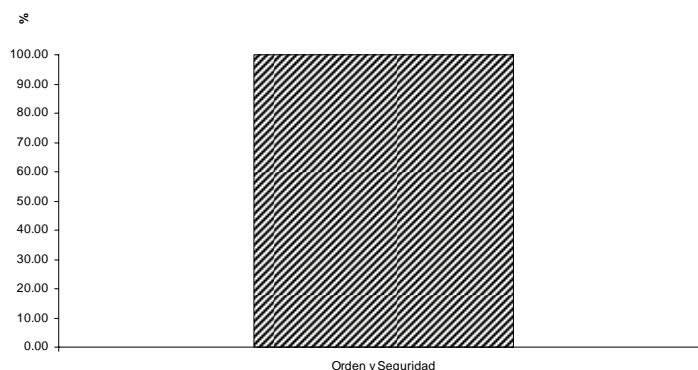
La Asociación Prodesarrollo Integral del cantón Chumimá, municipio de Chichicastenango, denunció que, como consecuencia de un conflicto vinculado al servicio del agua, se retuvo ilegalmente a varias personas, amenazándolas de ser linchadas si no se resolvía dicha situación. Se estableció una mesa de diálogo para buscar una solución alternativa al problema y se solicitaron medidas de seguridad a favor de los afectados y medidas cautelares internacionales de ser procedente.

Expediente PREV.QUI. 19-2009/DCP

Tras el secuestro de una menor de edad en el parque de Chimaltenango por personas desconocidas, que la llevaron por fuerza a un lugar denominado El Carrizal, se remitió la denuncia a la Fiscalía de Santa Cruz del Quiché. Aunque la menor sobrevivió al hecho, fue agredida físicamente, por lo cual se solicitaron medidas de seguridad a favor de la familia afectada. Se le dio seguimiento al caso en la Fiscalía de la ciudad de Guatemala.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS **Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo					1		1		1			3	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La mayoría de personas no tiene acceso a los servicios básicos de salud y educación, y se ha notado que la logística institucional no es equitativa, ya que se prioriza el área urbana, dejando vulnerable a la población más necesitada. La contaminación ambiental debido a basureros clandestinos y la falta de cloración del agua entubada son otro problema que afecta a la población del departamento.

Los usuarios del servicio de agua al exigir su comprobante de haber colaborado son agredidos por los miembros del comité, quienes los amenazan con suspender o cortar el servicio.

Las comunidades rurales de los municipios de Chichicastenango, Zacualpa, Joyabaj y Santa Cruz del Quiché se ven afectadas por el abuso de autoridad de los COCODES, quienes amenazan con cortar el suministro de servicios básicos o usurpar parte de la propiedad privada o comunal de los pobladores si éstos no hacen lo que ellos ordenan o si reclaman sus derechos.

Expediente ORD.QUI. 01-2009/DESC

La alcaldesa comunitaria de Xesic I denunció que, desde hace varios meses, las fuentes de agua de esa comunidad están siendo contaminadas. Como parte de la investigación realizada se entrevistó al alcalde municipal de Santa Cruz del Quiché, quien manifestó que existe un Comité que vela por las mejoras de ese servicio; y se solicitó informe circunstanciado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y al Centro de Salud. Tras la denuncia, la Municipalidad empezó a clorar el agua que abastece a dicha comunidad, y se está buscando la forma de desviar las aguas negras que contaminan la región.

Expediente PREV.QUI.75-2009/DESC

El denunciante manifestó que fue excluido del servicio de agua entubada por los actuales miembros del COCODE de la comunidad de Chinilla, San Andrés Sajcabajá. El caso sigue en proceso de investigación en el Ministerio Público.

Expediente PREV.QUI.02-2009/DESC

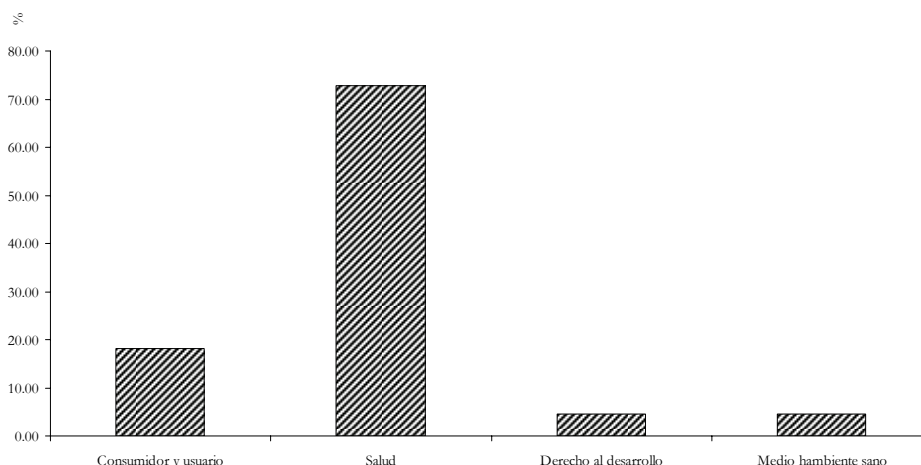
El denunciante ha sido objeto de hostigamiento y calumnias por parte de un miembro de la Junta Escolar de la comunidad, negándole, además, el derecho a inscribir a sus hijos en dicha escuela. Personal de la Auxiliatura se reunió con la autoridad departamental y municipal de Educación, con el objeto de buscar una solución para que a los menores no se les niegue el derecho a la educación, alcanzándose con ello medidas administrativas favorables y los niños fueron inscritos.

Expediente: EIO.QUI.07-2009/DESC

El expediente, iniciado de oficio, se debió a que el alcalde municipal de San Bartolomé, Jocotenango, no ha tomado las medidas de saneamiento del agua para consumo humano, aduciendo inconformidad de los vecinos. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a las autoridades de salud y se entrevistó al alcalde municipal.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Agua contaminada			1	2								3	18.75
Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo											1	1	6.25
SALUD													
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)	2			2	1			2		1		8	50
Falta de atención o asistencia médica										1		1	6.25
Mala atención en centro de salud		1										1	6.25
DERECHO AL DESARROLLO													
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera								1				1	6.25
MEDIO AMBIENTE SANO													
Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes											1	1	6.25
TOTAL MENSUAL	2	1	1	4	1	0	0	3	0	2	2	16	100.00



2.3 Derechos específicos

La violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual son los derechos más violentados. No obstante, en los casos de maltrato infantil se ha observado voluntad por parte de los operadores de justicia para aplicar la ley, ya que se dictan las medidas precautorias en el tiempo límite aceptable, lográndose que muchos niños y niñas sean rescatados

La discriminación hacia la mujer sigue excluyéndola de los espacios políticos y económicos. Por su parte, las personas de la tercera edad no tienen acceso a los servicios de salud. Con base en las denuncias presentadas y por la observación realizada, se ha establecido que los reclusos son objeto de maltrato por parte de las autoridades de los centros preventivos, además que ven limitadas sus oportunidades de superación.

Expediente PREV.QUI. 23-2009/DE

La denunciante manifestó que su ex conviviente se llevó en contra de su voluntad a sus dos hijos. La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Paz de Chichicastenango. Personal de esta Auxiliatura brindó la atención correspondiente y el acompañamiento al Juzgado de la Niñez y Adolescencia para establecer su situación jurídica, donde no se había resuelto, por lo que se ordenó trasladar el caso a la Procuraduría General de la Nación, lográndose que se verificara el caso y se ordenara el rescate de los menores.

Expediente PREV.QUI.50-2009/DE

La denunciante manifestó que su hija es objeto de abuso sexual por parte de un catedrático de la Escuela Oficial Urbana Mixta Ofelia Paz Robles, municipio de Sacapulas, lugar donde ella estudia. La denuncia fue certificada al Ministerio Público y se solicitaron informes circunstanciados a la Dirección Departamental de Educación.

Expediente PREV.QUI. 42-2009/DE

El oficial de Incidencia y Negociación de la Auxiliatura, a solicitud de la denunciante, le brindó acompañamiento en virtud de que estaba siendo objeto de violencia intrafamiliar de parte de su esposo y una mujer desconocida. Encontrándose lesionada, fue acompañada a la Fiscalía del Ministerio Público para presentar la denuncia respectiva y, con una orden de solicitud de práctica pericial de la Fiscalía, fue acompañada al Instituto de Ciencias Forenses (INACIF) sin que fuera atendida por el médico de turno, motivo por el cual se solicitó informe circunstanciado a este último. Se tomaron las medidas administrativas correspondientes a efecto de enmendar el comportamiento de los empleados del INACIF.

3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente PREV.QUI.40-2009/DCP

Las autoridades y comunitarios del cantón Pocohil Primero, municipio de Chichicastenango, retuvieron a tres personas de la Fundación de Antropología Forense que se encontraban realizando trabajos de exhumación; según los comunitarios, no contaban con el aval de las autoridades de la comunidad, que durante el proceso los familiares de las víctimas fueron amenazados e intimidados, y por el supuesto intento de secuestro del pastor de la comunidad, quien fuera alcalde y miembro de las patrullas de autodefensa civil en la década de los ochenta. Además, los comunitarios también retuvieron al personal de esta Auxiliatura cuando llegó a la comunidad para negociar la liberación de los antropólogos. A partir de la investigación realizada se estableció que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y los familiares sí solicitaron el permiso a la comunidad; se remitió la denuncia a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público y se le dio el seguimiento correspondiente. El Ministerio Público, en cumplimiento a una solicitud realizada por la Sección de la Fiscalía de Derechos Humanos de la capital, remitió las actuaciones para el trámite que corresponde.

Expediente ORD.QUI.29-2009/DCP

El denunciante afirmó que fue objeto de amenaza y coacción por parte de cuatro agentes de la PNC, quienes lo detuvieron al salir de su trabajo y, a raíz de que su licencia de conducir estaba vencida, lo golpearon y le solicitaron cierta cantidad de dinero a cambio de su libertad. Con la investigación realizada se estableció la participación de los cuatro agentes, en dos unidades de la PNC; dos de ellos sólo prestaron el apoyo y los otros dos intervinieron de manera directa. Los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público. Finalmente se resolvió trasladar a dos agentes y dar de baja a los otros dos mientras la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público con sede en la capital continúa con la investigación. A partir del expediente abierto en esta Auxiliatura se le otorgó acompañamiento a la familia por parte del oficial de control administrativo.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.QUI.01-2009/DESC	Laercio Rafael Juarez Pérez	Director	Dirección de Salud Pública, Quiché
EIO.QUI.03-2009/DESC	Laercio Rafael Juarez Pérez	Director	Dirección de Salud Pública, Quiché
EIO.QUI.03-2009/DESC	Marco Antonio González	Director	Centro de Salud, Chichicastenango
ORD.QUI.02-2009/DCP	Elías Rodríguez Vásquez	Encargado	Comisaría 71, PNC Quiché
ORD.QUI.04-2009/DCP	Juan Alfonso Aldana Santana	Subjefe	Comisaría 71, PNC Quiché
ORD.QUI.03-2009/DCP	Rubén Israel de León Mazariegos	Jefe	Comisaría 71, PNC Quiché
EIO.QUI.01-2009/DESC	Marco Antonio González	Director	Centro de Salud, Chichicastenango
EIO.QUI.01-2009/DESC	Laercio Rafael Juárez Pérez	Director	Dirección de Salud Pública, Quiché
EIO.QUI.02-2009/DESC	Héctor Melinton Segura Corzo	Director	Centro de Salud, Santa Cruz del Quiché
	Laercio Rafael Juarez Pérez	Director	Dirección de Salud Pública, Quiché

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.QUI. 08-2009/DESC	Alfredo Cobar	Director	COVIAL de Guatemala
EIO.QUI. 05-2009/DESC	Laercio Rafael Juárez Pérez	Director	Dirección de Salud, Quiché
		Director	Centro de Salud, San Pedro Jocopilas

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	964
De apertura de expedientes de investigación	19
Medidas urgentes	7
Ampliación de plazo para la investigación	19
Enmienda de procedimientos	1
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	2
Con suspensión por desistimiento	1
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	11
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	5
De control administrativo	78
Comportamiento administrativo lesivo	
TOTAL	1,057

9. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Dos intervenciones directas en conflictos, uno de tierras en Estanzuela, Joyabaj, y otro entre vendedores de la plaza pública y la municipalidad de Joyabaj.
- Tres mediaciones: en un conflicto entre el Instituto de Antropología Forense y comunitarios de Pocohil Primero, de Chichicastenango; en conflicto entre la compañía CONASA y propietarios de terrenos afectados por la construcción de la carretera en los kilómetros 106 y 112; y en conato de linchamiento en Panimache II, Chichicastenango.
- Rescate de dos presuntos delincuentes que fueron baleados y casi linchados en la aldea Llano Grande de Sacapulas.

Incidencia política

- Intervenciones: 26 mediaciones, 91 seguimientos, 12 conciliaciones, 20 acompañamientos, 8 cabildeos, 28 acercamientos, 5 concertaciones, 57 audiencias.
- Investigación sobre la situación de los derechos humanos para la incidencia y negociación: 14 diálogos situacionales de los derechos humanos, 80 mapeos de conflictividad social, diez estudios e investigación de asuntos prioritarios de interés social, inventarios de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comunitarias.

- Compilación de 17 mapas de poder.
- Diagnósticos situacionales: 19 focalizaciones de indicadores de impacto; 16 focalizaciones de municipios de alto, mediano y bajo riesgo; y siete focalizaciones de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comunitarias.
- Promoción de la organización social para la incidencia en políticas públicas: 20 mesas de diálogo (proceso y coyuntura), 28 reuniones individuales y colectivas, 32 promociones de grupos sociales, 20 capacitaciones y 41 asesoramientos.
- Coordinación institucional para incidencia en políticas públicas: 23 acciones de coordinación interna y 28 acciones de coordinación externa.
- Control de las acciones de incidencias y negociación: 69 registros y control de casos específicos (de proceso y coyuntura), 72 informes de casos sociales, nueve cronogramas mensuales, nueve cuadros de asistencia, diez gestiones específicas de la Unidad de Incidencia y Negociación, nueve capacitaciones recibidas, 11 capacitaciones impartidas, 41 citaciones, 90 informes mensuales.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Doce talleres sobre seguimiento de los Acuerdo de Paz, con las encargadas de las oficinas municipales de la mujer, con la comisión de la mujer del CODEDE y con el COMUDE de Chichicastenango.
- Once diagnósticos situacionales (grupos vulnerables).
- Tres investigaciones sobre grupos vulnerables y 68 eventos de promoción, eje educativo, a organizaciones desde los grupos vulnerables.
- Conformación de siete mesas de diálogo.
- 48 reuniones con diversas instituciones.
- 13 actividades para tratar diversos temas: pueblos indígenas (2), mujer (2), niñez (2), adulto mayor (2), personas con discapacidad (1), debido proceso (1), medio ambiente (2), y con juntas municipales (1).

Control administrativo

- 56 monitoreos: a rastros municipales (10), por cloración de agua (10), a escuelas por refacción escolar (10), a instalaciones y personal de la PNC (5), por seguridad alimentaria (10), por atención y servicio al Programa Nacional de Resarcimiento (1), a Municipalidades en verificación de la Oficina de Libre Acceso a la Información (7), a Juzgados de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos (3).
- Capacitaciones: a personal de salud (5), a personal de la PNC sobre derechos de la niñez y derechos humanos (2).
- Dos talleres sobre la cloración del agua a integrantes de COCODES y comités de agua potable.
- Cinco acompañamientos y mediaciones en varias comunidades.
- 70 investigaciones y verificaciones.

Comunicación social

- Dos capacitaciones: una a representantes y líderes comunitarios de Chichicastenango y una a representantes de diversas instituciones.
- Siete programas de radio.
- Dos talleres: uno de sensibilización y temas sobre VIH/SIDA, y otro sobre derechos de los pueblos indígenas.
- Dos procesos de formación para el fortalecimiento de liderazgo y ejercicio de la ciudadanía.
- Dos conferencias de prensa por las actividades realizadas por la PDH.

Educación y promoción

- Dos jornadas médicas integrales en los municipios de: San Antonio Ilotenango, Joyabaj, en coordinación con el Consejo de Protección a la Niñez y Adolescencia trabajadora del Quiché, el Área de Salud y el Ministerio de Cultura y Deportes.

- Concurso de *spots* radiales sobre la importancia de la práctica de valores, la autoestima y unidad familiar. para la prevención y atención de las adicciones en Quiché, en coordinación con la Red de Prevención y Atención de las Adicciones en Quiché, y la participación de diez establecimientos del nivel medio y diversificado, públicos y privados del municipio de Santa Cruz del Quiché.
- Festival de pintura de murales, con el apoyo y coordinación de la Red de atención y prevención de las adicciones en el Quiché, siendo los temas principales: Práctica de valores, Autoestima, y la unidad familiar
- Elección e investidura del Niño Procurador de los Derechos y Procuradoras adjuntas, período 2009-2010.
- Concurso de oratoria y declamación, con la participación de alumnos del nivel medio y diversificado, públicos y privados; representantes de los diferentes establecimientos.
- 15 festivales “Expresemos Nuestros Derechos”.
- 60 talleres de sensibilización, capacitación y organización comunitaria sobre “Fortalecimiento del liderazgo y ejercicio de la ciudadanía plena” con estudiantes de los niveles: primario, básico y diversificado de diferentes establecimientos públicos y privados de Quiché, docentes, padres de familia, líderes comunitarios, lideresas de diferentes comunidades, niñez trabajadora, alcaldes y empleados municipales, y promotores voluntarios de la PDH de Quiché.
- Tres foros sobre derecho humano a la salud, con funcionarios y empleados del sector salud de Quiché.
- Campaña de promoción y divulgación sobre la función de la institución del PDH en Quiché.
- Supervisión institucional a las escuelas públicas del nivel primario, en relación con la gratuidad de la educación, a institutos del nivel medio y diversificado; entrevistándose a la comunidad educativa.
- Dos monitoreos de implementación: uno en el área de formación ciudadana y derechos humanos en el aula, en escuelas públicas, institutos del nivel medio y diversificado; entrevistándose a la comunidad educativa. Otro sobre la modalidad de la educación bilingüe intercultural en escuelas públicas, institutos del nivel medio y diversificado; entrevistándose a la comunidad educativa.

Auxiliatura Municipal de Ixcán, Quiché



Auxiliatura Municipal de Ixcán, Quiché

De enero a noviembre 2009, en este municipio han sucedido diversidad de hechos que han quedado impunes, lo cual ha generado desconfianza entre la población hacia los órganos jurisdiccionales. A pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión de Seguridad Ciudadana del municipio para prevenir y erradicar la violencia, han sido constantes las denuncias relacionadas con este flagelo: extorsiones, asaltos en carreteras, asesinatos, uso de armas de fuego sin moderación, y la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido incapaz de mantener un control de los hechos delictivos que a diario suceden, por la falta de agentes y vehículos. Por otro lado, las entidades encargadas de aplicar la justicia no cuentan con los recursos económicos ni humanos para la eficiente aplicación de la ley y otros problemas sociales que afectan a la población.

Se han recibido múltiples denuncias por violencia intrafamiliar, además de casos de maltrato infantil, en su mayoría cometidos por personas conocidas o familiares de los menores.

La certeza jurídica de la tierra es otro de los grandes problemas, existen conflictos por delimitaciones de los terrenos. Por ejemplo, en Malacatancito, Ixcán, y Barillas las comunidades se disputan la legalidad de dichas tierras llegando al punto de enfrentamientos que han dejado numerosos heridos, a pesar de la intervención oportuna de una mesa de diálogo conformada por la Secretaría de Asuntos Agrarios, los gobernadores de Quiché y Huehuetenango, COPREDEH, la Pastoral Social y la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Entre los programas que no cubren todas las comunidades de Ixcán tenemos el de la refacción escolar, lo cual vulnera los derechos de la niñez, y el proyecto de fertilizantes, que no cumple con los objetivos planteados. En lo referente a la salud, la Dirección del Área de Salud no cuenta ni con el recurso humano ni con medicamentos y la infraestructura de los dispensarios es deficiente.

Entre las áreas de mayor riesgo podemos mencionar los lugares más alejados de la cabecera municipal y de más difícil acceso, como los valles y Patio de Bolas de Copón, donde aún no hay vías de acceso, lo que hace difícil que las víctimas puedan movilizarse, por lo que muchas veces prefieren no denunciar sus problemas.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Municipal de Ixcán se realizaron 251 acciones específicas: 26 de orientación, 32 de prevención, 166 de mediación, 2 de acompañamiento y 25 de intervención inmediata.

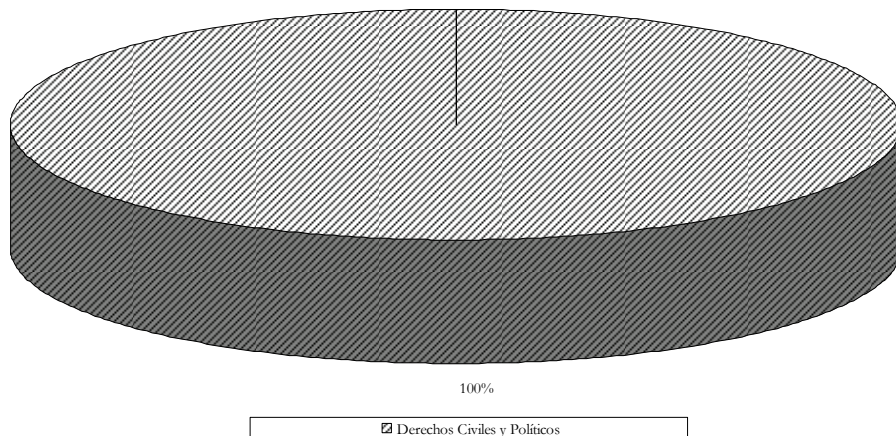
De investigación

Se abrieron 2 expedientes de investigación: ambos por violaciones a derechos individuales. De ellos, el 100% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 19.35% forma parte del Organismo Ejecutivo y 80.65% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos				1						1		2	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ordinario				1						1		2	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	26	10.36
Prevención	32	12.75
Mediación	166	66.14
Acompañamiento	2	0.80
Intervención inmediata	25	9.96
TOTAL	251	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo		1		1		1		1		2		6	8.57
Judicial	3			2	1	5	4	1	2	4	3	25	35.71
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
Municipalidades								2	1			3	4.29
Ministerio Público	2	1	3		3	1	1			2	2	15	21.43
BANRURAL							1					1	1.43
Programa Nacional de Resarcimiento	1											1	1.43
FONTIERRA y Bienes del Estado	2				1	1						4	5.71
Bufete Popular		2	1			4	2	2				11	15.71
Juez de Asuntos Municipales		1										1	1.43
ONG encargada de mediciones de tierras		1										1	1.43
COOPSAMA					1							1	1.43
ALBORA						1						1	1.43
TOTAL MENSUAL	8	6	4	3	6	13	8	6	3	8	5	70	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Del conjunto de estos derechos, las principales violaciones se dan por a muertes violentas; la inseguridad que prevalece ha provocado que el número de éstas se mantenga igual que el año anterior. Las limitaciones de personal (apenas tres o cuatro agentes) y equipamiento de la PNC hacen imposible que se brinde seguridad a los casi cien mil habitantes del municipio; en contraposición, el número de delincuentes y el armamento con que cuentan es mayor. Esto tema ha sido abordado en el COMUDE, en demanda de más seguridad.

Expediente ORD-IXC-001-2009/DCP

El denunciante manifestó que fue interceptado por elementos del ejército destacados en Cobán, Alta Verapaz, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo intimidaron con armas de fuego. Como parte de la investigación se trató de verificar en el Ministerio Público de este municipio, pero ante la imposibilidad de contactar al fiscal distrital, el expediente fue referido a la Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz, por tratarse de un hecho de esa jurisdicción.

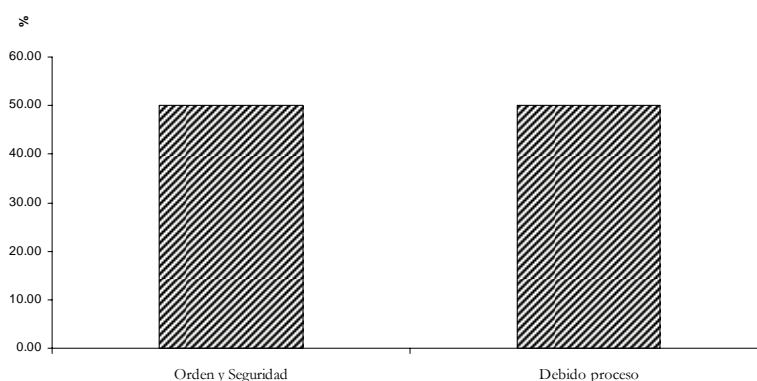
Expediente ORD-IXC-002-2009/DCP

Los denunciantes afirmaron que después de haber participado en una manifestación convocada por la CONIC, un grupo de campesinos fue detenido por un retén militar cerca de la comunidad Shuc Azul y fueron interrogados de forma amenazante por elementos del ejército de Cobán, Alta Verapaz. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al comandante del Resguardo Militar de Playa Grande, en el cual se indicaba la delimitación jurisdiccional a su cargo para mantener el control operativo en la frontera con México y las comunidades de Cobán, Alta Verapaz. También se solicitó informe al Ministro de la Defensa, donde constata que se están realizando las investigaciones pertinentes.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo				1								1	50.00
DEBIDO PROCESO													
Discontinuidad y lentitud procesal										1		1	50.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La falta de certeza jurídica de la tierra es un problema que se remonta a décadas sin que las instituciones encargadas hayan diseñado políticas adecuadas para su legalización, lo que ha provocado conflictos en las comunidades. En la actualidad se está tratando por medio del Fondo de Tierras y Bienes de la Nación darles cierta certeza sobre sus tierras a los campesinos.

En general la situación de salud ha ido mejorando, ya que de alguna manera la población ha tomado conciencia de las medidas preventivas: cloración del agua, vacunación, uso de letrinas, etcétera; sin embargo, el problema sigue siendo serio en determinadas épocas del año, en gran parte debido a que los servicios de agua potable y drenajes no existen en el municipio.

Las principales causas de morbilidad en el Ixcán son: infecciones intestinales, infecciones respiratorias, anemia, parásitos, y problemas de la piel. Por lo general se presentan altos grados de desnutrición, lo cual trae consigo infecciones respiratorias o intestinales. En el caso de las mujeres embarazadas, las principales causas de mortalidad se deben a hemorragias, retención de placenta o infecciones postparto.

El municipio de Ixcán cuenta con tres centros de salud, 13 puestos de salud y 41 centros de convergencia, pero ninguno cuenta con los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades de salud de la población.

Aunque el programa de seguridad alimentaria y nutricional fue recientemente implementado en el aérea, no se conoce ninguna acción encaminada a la solución de la problemática, tampoco existe delegación en el municipio y sus visitas son esporádicas, con lo cual no han dado cumplimiento a sus objetivos.

En materia educativa, aunque en la mayoría de comunidades las escuelas imparten de primero a sexto grados de primaria, la calidad educativa sigue siendo deficiente y varias escuelas no cuenta con los recursos materiales necesarios, además de que las aulas son insuficientes e inadecuadas para atender a toda la población estudiantil.

2.3 Derechos específicos

Según denuncias recibidas durante el presente año, las mujeres y la niñez son los grupos más vulnerables, siendo las violaciones, las agresiones psicológicas y las físicas las que más los afectan.

Expediente MED-IXC-014-2009/DE

El denunciante, quien reside en la comunidad de Bethel, indicó que estaba siendo intimidado por los propietarios de la finca Horizontes, quienes amenazan con desalojarlos a él y a 17 familias más aduciendo que dicho inmueble les pertenece. El denunciante afirma que ocupan la propiedad desde la tormenta Mitch cuando CONRED la usó como refugio. Se inició un diálogo con líderes comunitarios de Bethel y propietarios de la finca Horizontes, en el cual participaron, a requerimiento de la institución del PDH, la Secretaría de Asuntos Agrarios, FONTIERRA y la Municipalidad; entidades a las que se solicitó informe circunstanciado. El Fondo de Tierra emitió una resolución que establece que la finca Horizontes tiene 15 caballerías con 23 manzanas, y no 19 como aseguraban los propietarios; a partir de lo anterior se coordinó una reunión con líderes de Bethel y los propietarios de la finca para que el reconocimiento sea conjunto y los campesinos puedan iniciar el proceso de adjudicación ante FONTIERRA.

3. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que Sí han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
PREV-IXC-001-2009/DCP ORIENT-IXC-002-2009/DCP ORIENT-IXC-010-2009/DCP PREV- IXC- 010.2009/DCP PREV-IXC-011-2009/DCP ORIENT-IXC-012-2009/DCP PREV-IXC-014-2009/DCP PREV-IXC-016-2009/DE MED-IXC-049-2009/DCP MED-IXC-087-2009/DCP ORIENT-IXC-024-2009/DE ORD-IXC-003-2009/DCP ORIENT-IXC-026-2009/DE PREV-IXC-031-2009/DESC	Lic. Cesar Augusto Paz Fuentes, Círido Romero Pérez y Marco Antonio Rivera Cosuegra, Dra. Laura Matute de Calderón	Fiscales Distritales y Auxiliar Fiscal	Ministerio Público
PREV-IXC-003-2009/DCP	Lic. Cesar Augusto Dávila Gómez	Presidente	Comisión Nacional de Resarcimiento
PREV-IXC-04-2009/DCP MED-IXC-014-2009/DE MED- IXC-046-2009/DE MED-IXC-079-2009/DE	Lic. Carlos Enrique Girón, Jaime Agustin Vasquez y Juan Alberto Cac Sacraba	Gerente Gral. de FONTIERRA, Director y Delegado Municipal	FONTIERRA y Bienes del Estado

<p>ORIENT- IXC- 001-2009/DE</p> <p>ORIENT-IXC-006-2009/DE</p> <p>ORIENT-IXC-007-2009/DE</p> <p>ORIENT-IXC-011-2009/DE</p> <p>INTER INM- IXC-002-2009/DE</p> <p>INTER INM- IXC-005-2009/DE</p> <p>INTER INM- IXC-006-2009/DE</p> <p>INTER- INM--IXC-008-2009/DE</p> <p>ORIENT-IXC-016-2009/DE</p> <p>MED-IXC-067-2009/DCP</p> <p>MED-IXC-080-2009/DE</p> <p>INTER INM-IXC-010-2009/DE</p> <p>PREV- IXC-027-2009/DE</p> <p>INTER INM. IXC-021-2009/DE</p> <p>INTER INM-IXC-022-2009/DE</p> <p>INTER INM- IXC- 020-2009/DE</p> <p>INTERV- INMED-IXC-024-2009/DE</p> <p>INTERV- INMED-IXC-023-2009/DE</p> <p>MED-IXC-165-2009/DE</p> <p>INTERV- INMED-IXC-2009/DE</p>	<p>Lic. Benjamin Guidos Chinchilla y Rolando Amado Barrera Florian</p>	<p>Juez de Paz</p>	<p>Juzgado de Paz de Ixcán</p>
<p>MED-IXC-017-2009/DE</p> <p>ORIENT-IXC-008-2009/DE</p> <p>MED-IXC-031-2009/DE</p> <p>MED-IXC-065-2009/DE</p> <p>MED-IXC-074-2009/DE</p> <p>MED-IXC-076-2009/DE</p> <p>MED-IXC-078-2009/DE</p> <p>MED-IXC-088-2009/DE</p> <p>MED-IXC-097-2009/DE</p> <p>MED-IXC-110-2009/DE</p> <p>MED-IXC-111-2009/DE</p>	<p>Licda. Edna Nohemi Cabrera</p>	<p>Coordinadora</p>	<p>Centro de Administración de Justicia</p>
<p>MED-IXC-021-2009/DCP</p>	<p>Guillermo Domingo Baltazar</p>	<p>Juez de Asuntos Municipales</p>	<p>Municipalidad</p>
<p>PREV- IXC-007-2009/DE</p>	<p>Miguel Segura</p>	<p>Jefe de Ingenieros</p>	<p>Oficina de Ingenieros</p>
<p>PREV-IXC-006-2009/DESC</p>	<p>Dr. José Luis Padilla White y Dra. Miriam Ninet Reyes</p>	<p>Director Área de Salud Tipo A</p>	<p>MSPAS</p>
<p>MED- IXC-055-2009/DCP</p>	<p>Alfonso Juc Cucul</p>	<p>Jefe de Agencia</p>	<p>Cooperativa de Ahorro y Crédito</p>

MED-IXC-075-2009/DCP	Ing. Héctor Sandoval	Jefe de Oficia	Oficina de Ingenieros de Topografía Geoposición y Medición Forestal
INTER-INM-008-A-2009/DE INTER-INM-IXC-009-2009/DE MED-IXC-090-2009/DE INTER-INM-IXC-013-2009/DE	Lic. José Luis Molina Muñoz	Juez de Primera Instancia	Juzgado de Primera Instancia Penal y de Familia
MED-IXC-095-2009/DE	Antonio Coronado	Gerente General	Agencia No. 40, BANRURAL
PREV-IXC-023-2009/DCP PREV-IXC-021-2009/DCP PREV-IXC-025-2009/DCP	Carlos Alfredo Cahuec Quej	Alcalde Municipal	Municipalidad de Playa Grande, Ixcán
PREV-IXC- 022-2009/DCP		Juez de Paz	Juzgado de Paz de Salacuin, Cobán, Alta Verapaz
ORIET-IXC-020-2009/DE		Juez de Paz	Juzgado de Paz de Playa Grande, Ixcán
ORIENT-IXC-023-2009/DE	Dr. Julio Alfonso Figueroa Carrera	Jefe	Departamento de Registro Médico, Hospital San Juan de Dios, Ciudad de Guatemala

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
PREV-IXC-017-2009/DESC	Lic. Alberto Ajcu	Jefe	Departamento de Sueldos y Salarios, MSPAS

4. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	171
De apertura de expedientes de investigación	40
Medidas urgentes	24
Se hace efectivo el apercibimiento por no haber cumplido con las medidas urgentes	
Ampliación de plazo para la investigación	2
Acumulación de expedientes	1
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	1
TOTAL	239

5. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Informe relacionado con la detención de tres personas, entre ellos una mujer, sindicados de ser asaltantes, quienes fueron rescatados por la PNC gracias a la intervención de la institución del PDH. La población pretendía lincharlos.

- Informe por la detención de dos personas sindicadas de practicar brujería, a quienes la población pretendía lincharlas.
- Informe referente al desalojo de una familia en la finca El Milagro por orden judicial, misma que no fue ejecutada por resistencia de toda la comunidad del Valle, quienes bloquearon la carretera para evitar ser desalojados, reteniendo al personal de esta institución en dicho lugar.

Incidencia política

La Auxiliatura forma parte de las siguientes comisiones:

- COMRED
- Comisión de la Mujer
- Comisión Educativa
- Comisión de Aplicación de Justicia y Derechos Humanos
- Foro de Tierra
- Comisión de Seguridad Ciudadana

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Diez actividades con estudiantes de diversificado con los temas: derechos de la niñez y de la adolescencia, violencia intrafamiliar, derechos de la mujer, identidad de los pueblos indígenas, y discriminación.

Educación y promoción

- Cinco actividades para tratar los derechos y obligaciones de la niñez, realizadas en tres escuelas del municipio.
- Siete actividades con alcaldes comunitarios y miembros de los COCODE, relacionadas con sus derechos y obligaciones, realizadas en las siete microrregiones, atendiendo a 176 comunidades.
- Una actividad conmemorativa de las víctimas del conflicto armado interno.
- Varios asesoramientos a estudiantes en seminarios sobre derechos humanos.
- Un proyecto sobre el Día Internacional de la Mujer.
- Tres programas radiales sobre los temas de seguridad ciudadana y violencia intrafamiliar.

**Auxiliatura
Municipal de Santa
María Nebaj, Quiché**



Auxiliatura Municipal de Santa María Nebaj, Quiché

De enero a noviembre de 2009, la situación de los derechos humanos en Santa María Nebaj se caracterizó por heredar una estructura social dañada, cuyas secuelas causan diversidad de problemas, reflejados en el trabajo que realiza esta Auxiliatura y el Centro de Administración de Justicia.

En cuanto al derecho a la vida, el accionar de los operadores del sistema de justicia (Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo Civil y de Familia, Juzgado de Paz Penal y Civil, Ministerio Público, Defensa Pública Penal, Bufete Popular y la Policía Nacional Civil) ha garantizado la vida de las personas; asimismo, las organizaciones comunitarias contribuyen a resolver conflictos, que en muchas ocasiones pueden llegar a situaciones trágicas o lamentables. De igual forma, los Comités de Seguridad Ciudadana han contribuido a controlar la delincuencia, garantizando la vida de las personas trabajadoras.

En relación con el derecho a la tierra, existen conflictos serios y cada una de las instituciones lleva controles en función de su intervención derivada de la denuncia. Personal de esta Auxiliatura ha estado presente en los conflictos y en la búsqueda de soluciones en coordinación con otras instancias y participando en el fortalecimiento de los procesos. La desigualdad en la distribución de la tierra es causa de exclusión social, pobreza y extrema pobreza de gran parte de la población.

En cuanto a la certeza jurídica, la mayoría de los campesinos no tiene certeza sobre sus tierras. Por ejemplo, en las aldeas San Felipe Chenla, Santa Avelina, Chisis y Quisis del Municipio de Cotzal, no tienen documentos que les acrediten la propiedad. Aunque en el municipio de Nebaj hay presencia de las instituciones gubernamentales vinculadas a este tema, como el Fondo de Tierra y la Secretaría de Asuntos Agrarios, las mismas se han visto debilitadas para buscar solución al problema.

En Nebaj hay un solo centro de salud aunque en algunas aldeas hay puestos de salud. Cada uno es atendido por un enfermero o enfermera graduada y en algunos hay un médico y en otros, ninguno. La principal causa de mortalidad es la materna, por falta de atención durante el embarazo.

En lo relativo a la seguridad alimentaria se han tramitado expedientes en esta Auxiliatura a favor de las familias de las aldeas San Marcos y San Antonio Belejú, San José, El Soch, Chocorral, los Plátanos, la Cumbre, el Amay, Monte María, Panto Iosh, La Campana, Pajuil, Esquipulas y otras del municipio de Chicamán.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Municipal de Santa María Nebaj se realizaron 397 acciones específicas: 347 de orientación, 26 de prevención, 14 de mediación, 4 de acompañamiento, 1 de conciliación y 5 de intervención inmediata.

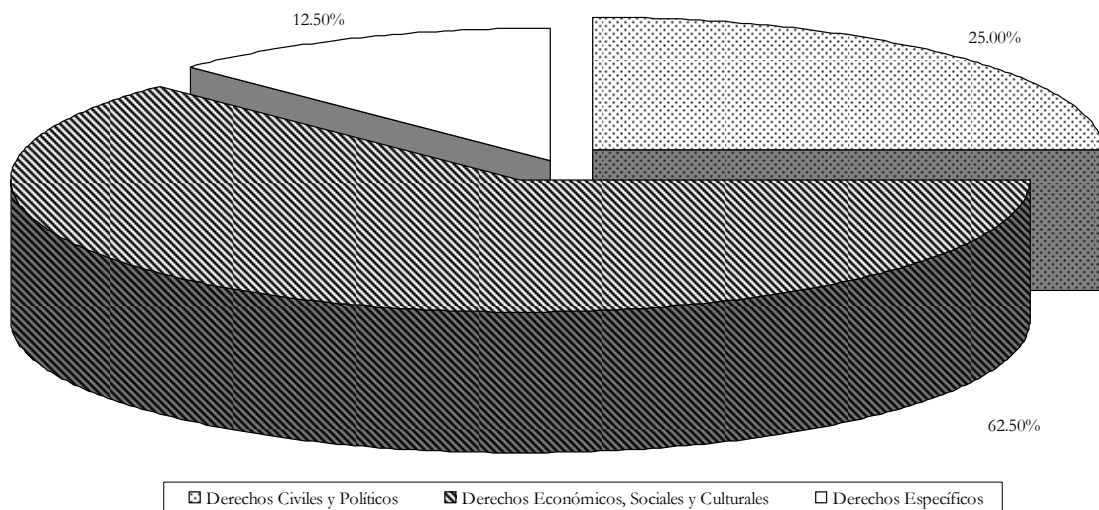
De investigación

Se abrieron 8 expedientes de investigación: 2 por violaciones a derechos individuales, 5 a derechos económicos, sociales y culturales y 1 a derechos específicos. De ellos, el 12.5% de oficio y el 87.5% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100.00% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre de 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos		1							1			2	25.00
Derechos Económicos, Sociales y Culturales			4		1							5	62.50
Derechos Específicos			1									1	12.50
TOTAL MENSUAL	0	1	5	0	1	0	0	0	1	0	0	8	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre de 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio			1									1	12.50
Ordinario		1	4		1				1			7	87.50
TOTAL MENSUAL	0	1	5	0	1	0	0	0	1	0	0	8	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre de 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	347	87.41
Prevención	26	6.55
Mediación	14	3.53
Acompañamiento	4	1.01
Conciliación	1	0.25
Intervención inmediata	5	1.26
TOTAL	397	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre de 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo		1	5		1				1			8	50
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Centros educativos comunitarios		1	1		1							3	18.75
Programa Nacional de Resarcimiento			1									1	6.25
Hospital Nacional			3		1							4	25
TOTAL MENSUAL	0	2	10	0	3	0	0	0	1	0	0	16	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

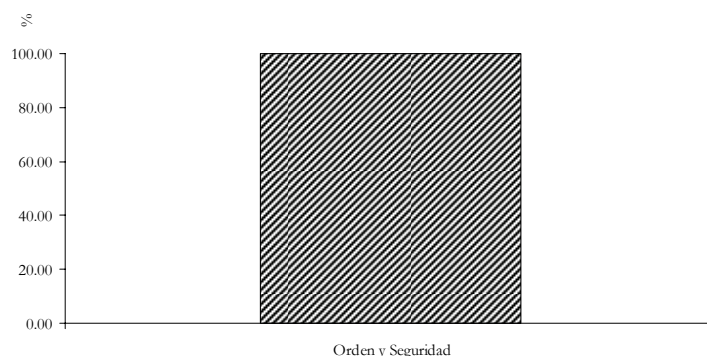
En el presente año han disminuido los asesinatos gracias a la iniciativa de las comunidades de organizarse para brindar seguridad, pero la inseguridad continúa por la poca presencia de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). Se aperturaron expedientes de investigación por abuso de autoridad por parte de docentes de escuelas públicas; situaciones similares se han dado en Nebaj y Cotzal por parte de las autoridades municipales.

Expediente ORD.NEB.01-2009/DCP

El director de la Escuela Oficial Rural Mixta aldea La Pista, del municipio de Nebaj, fue denunciado por no tomar en cuenta a la Junta Escolar en las decisiones relacionadas con las necesidades de la escuela, por adoptar actitudes prepotentes y por no dar información referente al desayuno escolar. Como parte de la investigación se requirió informe circunstanciado al coordinador técnico administrativo del Ministerio de Educación y se entrevistó a los padres de familia. El coordinador técnico administrativo intervino inmediatamente para buscar solución al problema.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad/poder administrativo		1							1			2	100.00
TOTAL MENSUAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Esta auxiliatura aperturó expediente de investigación de oficio, por la violación del derecho humano a la seguridad alimentaria de la niñez de las comunidades de Belejú y Amay, municipio de Chicamán, por sufrir desnutrición crónica, resultado de la falta de políticas públicas para la atención de los niños con síntomas de desnutrición.

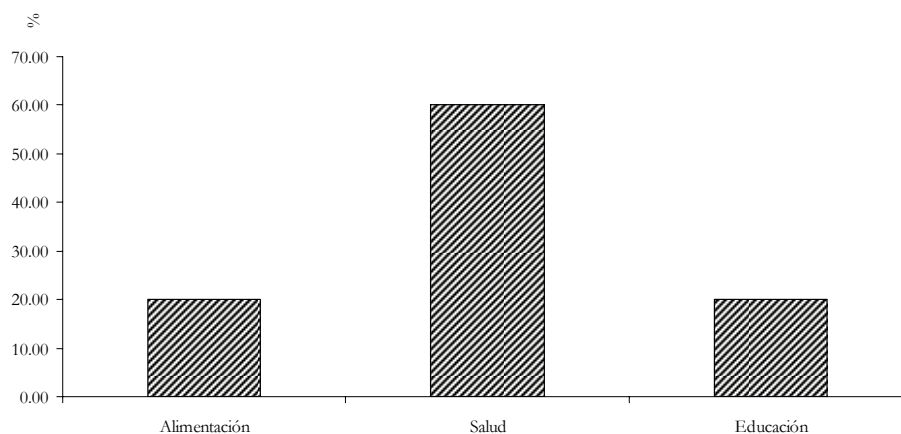
La falta de acceso a la tierra sigue siendo un problema que afecta principalmente a la población indígena, sin que se planteen políticas tendientes a solventar esta situación. A ello se suman los problemas surgidos por la construcción de dos hidroeléctricas en el departamento, una en el municipio de San Gaspar Chajul, y la otra en el municipio de San Juan Cotzal.

Expediente EIO.NEB.01-2009/DESC

A partir de un monitoreo se constató que la niñez de las aldeas de San Marcos y San Antonio Belejú, San José el Soch, Chocoral, Los Plátanos, la Campana y de todas las aldeas del municipio de Chicamán, presenta desnutrición crónica. Se solicitó informe circunstanciado al coordinador de la Secretaría de Seguridad Alimentaria con sede en el departamento, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a Gobernación Departamental, y al coordinador del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Personal de la Auxiliatura se constituyó en el lugar de los hechos.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ALIMENTACIÓN													
Inseguridad alimentaria			1									1	20.00
SALUD													
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud			1									1	20.00
Falta de atención o asistencia médica			1		1							2	40.00
EDUCACIÓN													
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación			1									1	20.00
TOTAL MENSUAL	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100.00



2.3 Derechos específicos

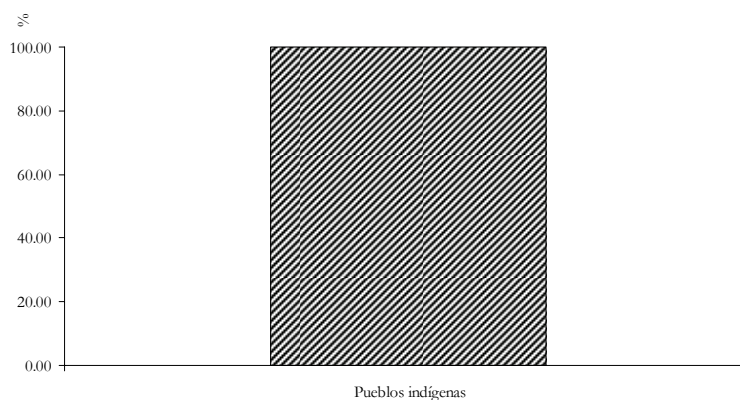
Durante el presente año disminuyeron las denuncias por violaciones de los derechos específicos, ello debido a que las diferentes instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales han emprendido diferentes actividades preventivas. Sin embargo, la población indígena, especialmente las mujeres, sigue siendo la más vulnerable.

Expediente ORD.NEB.04-2009/DE

El denunciante fue víctima de discriminación y exclusión por parte del personal de la sede del Programa Nacional de Resarcimiento en el municipio de Nebaj. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a la directora y al coordinador del Programa Nacional de Resarcimiento del municipio de Nebaj.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre de 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
PUEBLOS INDÍGENAS													
Otros			1									1	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente PREV.NEB.07-2009/DCP

Manifestó el denunciante que la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo, en Cotzal, está dañando los terrenos aledaños, propiedad de aproximadamente 50 familias, las cuales dependen de la cosecha de diferentes productos de esas tierras, y la empresa responsable no quiere resarcirlos por el perjuicio ocasionado. Personal de esta Auxiliatura logró concertar una mesa de diálogo, a partir de la cual se resarcieron los daños ocasionados.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente Orientación.NEB.01-2009/DCP A favor de: trabajadores detenidos de forma ilegal en el Área de Salud del municipio de Nebaj Motivo: detención ilegal Declarado ha lugar: sí
Descripción del caso: un grupo de trabajadores del Área de Salud del municipio de Nebaj fueron detenidos ilegalmente en dicho lugar.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.NEB.01/2009/DESC	Jorge Andrés Alvarado	Coordinador	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Quiché
EIO.NEB.01/2009/DCP	Laercio Juárez	Director	Área de Salud, MSPAS, Quiché
ORD.NEB.1/2009/DCP	Osberto Filkadelfo Ruiz Urizar	Coordinador	Ministerio de Educación, Nebaj
ORD.NEB.2/2009/DCP	Silvia Recinos Franco	Director	Hospital Nacional de Nebaj
ORD. NEB. 4/2009/DE	Cesar Augusto Dávila Gómez	Presidente	Programa Nacional de Resarcimiento

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre de 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	408
De apertura de expedientes de investigación	8
Medidas urgentes	1
Ampliación de plazo para la investigación	3
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	1
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	1
TOTAL	422

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Ocho talleres: dos sobre los derechos de las personas con discapacidad, dos relacionados con la temática de los pueblos indígenas, dos sobre derechos económicos sociales y culturales, y dos relacionados con los derechos de la niñez.
- Dos monitoreos en salud, uno de educación y otro de seguridad alimentaria.
- Tres programas: dos relacionados con la temática de derechos humanos en cablevisión y uno enfocado a los derechos de los pueblos indígenas en Radio Ixil.

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Participación y acompañamiento a víctimas del conflicto armado interno a la Oficina Municipal de Resarcimiento de Nebaj.

Educación y promoción

- Ocho talleres de capacitación sobre medio ambiente, violencia intrafamiliar, aplicación de la Ley contra el Femicidio, violación de los derechos de la niñez, secuelas de la violencia y fortalecimiento de la organización comunitaria, todos dirigidos a padres de familia y estudiantes.
- Cinco programas en los medios de comunicación: tres en Cablevisión (uno conjuntamente con el director del Centro de Administración de Justicia), con una audiencia de aproximadamente dos mil personas; dos en Radio Ixil.
- Una asesoría a autoridades comunitarias, como parte del seguimiento al proceso que se desarrolla con el apoyo del servicio alemán.

Auxiliatura Departamental de Retalhuleu



Auxiliatura Departamental de Retalhuleu

De enero a noviembre de 2009, en el departamento prevaleció la inseguridad y la Policía Nacional Civil (PNC) no cuenta con el suficiente recurso humano para atender a toda la población. Los hechos delictivos aumentaron: desde hurtos y asaltos a mano armada, hasta muertes violentas de personas particulares y líderes sindicales, la mayoría cometidas con arma de fuego.

Otro factor preocupante es la escasez de fuentes de trabajo, el 40% de la población no cuenta un trabajo estable, la mayoría se dedica a la agricultura y a la pesca artesanal. En cuanto a la salud, persiste la mortalidad y morbilidad materno-infantil, en especial en Champerico, El Asintal y San Andrés Villa Seca.

En cuanto a la vivienda, no existen programas de vivienda popular, derivando en la ocupación de la propiedad privada y las áreas circundantes a la línea férrea por familias en extrema pobreza de San Felipe, San Sebastián, Retalhuleu y Champerico. Muchas familias viven en lugares de alto riesgo, exponiéndose al peligro en invierno. En el área rural la mayor parte las casas no cuenta con servicios básicos y están hechas de madera, lámina y bambú, sin que las autoridades competentes impulsen políticas de prevención.

Debido a la recurrencia de la violencia intrafamiliar, con el apoyo de otras instituciones se imparten talleres de capacitación a personas de diferentes comunidades, los cuales se han enfocado en la prevención de violencia intrafamiliar y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.

El maltrato infantil ha aumentado en los hogares y en la comunidad educativa, vulnerando los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. Debido a la pobreza, la niñez ha tenido que constituirse en una fuerza laboral para complementar la economía familiar, por lo que esta Auxiliatura promueve talleres acerca de los derechos de la niñez y adolescencia dirigido a padres de familia, docentes y estudiantes, e imparte conferencias solicitadas por extensiones y centros universitarios en materia de derechos humanos.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Retalhuleu se realizaron 852 acciones específicas: 143 de orientación, 209 de prevención y 500 de intervención inmediata.

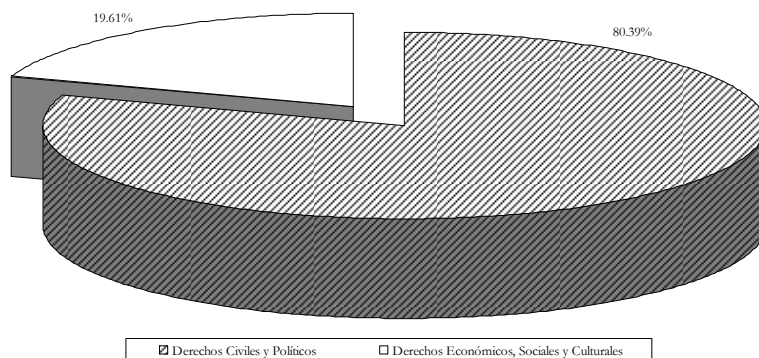
De investigación

Se abrieron 51 expedientes de investigación: 41 por violaciones a derechos individuales y 10 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 31.37% de oficio y el 68.63% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 93.94% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	3	3	4	3	6		2	5	5	6	4	41	80.39
Derechos Económicos, Sociales y Culturales								1	2	7		10	19.61
TOTAL MENSUAL	3	3	4	3	6	0	2	6	7	13	4	51	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	1		1					1	4	8	1	16	31.37
Ordinario	2	3	3	3	6		2	5	3	5	3	35	68.63
TOTAL MENSUAL	3	3	4	3	6	0	2	6	7	13	4	51	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	143	16.78
Prevención	209	24.53
Intervención inmediata	500	58.69
TOTAL	852	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	3	3	4	3	6		1	6	5			31	9.09
Judicial									2			2	0.59
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	2	3	1	3	3	1		1	2			16	4.69
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		1	1	2	1				1			6	1.76
Ministerio Público		3	3	1			1					8	2.35
Ministerio de Educación	5	2	6	3	3		1	1	2			23	6.74
Ministerio de Gobernación		1	1		1		1					4	1.17
Policía Nacional Civil		3	1	1	4	1	2	1	2			15	4.40
Sistema Penitenciario			1					1	3			5	1.47
Servicios Hospitalarios		1			1		1					3	0.88
Registro Nacional de las Personas		2	1			1						4	1.17
DEOCSA		2		1	2		1		1			7	2.05
TELGUA	1	1										2	0.59
OCRET			1									1	0.29

Particulares	15	35	36	33	19	16	16	19					189	55.43
Consejos de Desarrollo		4											4	1.17
Programa Nacional de Resarcimiento		1											1	0.29
Centros educativos particulares		3		2		1	1						7	2.05
Centros educativos comunitarios		1											1	0.29
Centros Educativos Públicos			1	1	2		3	2	1				10	2.93
Instituto Adolfo V Hall									1				1	0.29
Muerte Violenta				1									1	0.29
TOTAL MENSUAL	26	66	57	51	42	20	28	31	20	0	0		341	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Se ha coordinado con los diferentes jefes, delegados o encargados de las instituciones de gobierno representadas en el departamento, a efecto de contribuir al respeto de los derechos humanos de la población retalteca. No obstante, se han observado algunas decisiones arbitrarias de los funcionarios públicos con el objetivo de favorecer a grupos afines a ellos, sin importar si se vulnera o no el derecho de la mayoría.

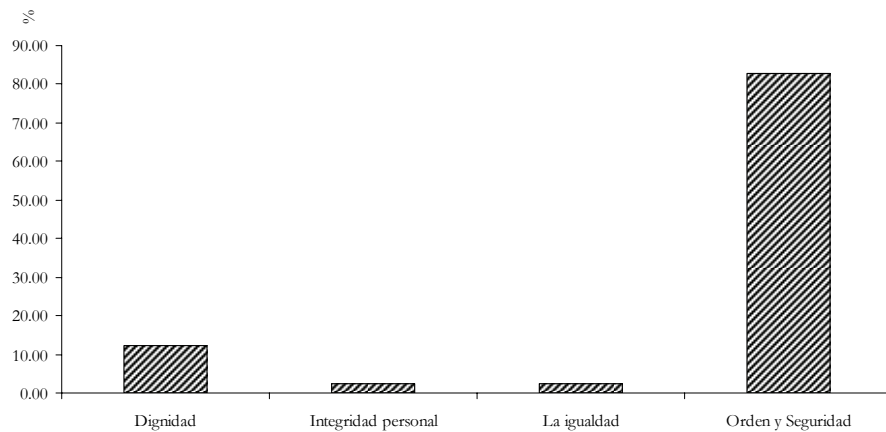
Expediente EIO.002-2009/DCP

Por información publicada en los medios de comunicación local se tuvo conocimiento del atentado con arma de fuego perpetrado contra el alcalde municipal de El Asintal por personas desconocidas. A partir de las averiguaciones realizadas se tuvo conocimiento de su ingreso al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde falleció, motivo por el cual se giraron los oficios correspondientes a las autoridades involucradas y se remitió la denuncia a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Retalhuleu, para su conocimiento y resolución. Por su parte, la PNC y Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Retalhuleu brindaron medidas de seguridad a la familia del occiso, y el MP investigó el hecho.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Trato cruel, inhumano o degradante	1		1		1				1			4	9.76
Amenazas o intimidaciones								1				1	2.44
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte violenta			1									1	2.44
LA IGUALDAD													
Desigualdad jurídica			1									1	2.44
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1	2	1	2	2		2	3	2	2	3	20	48.78
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial	1	1		1	2			1	2	2	1	11	26.83
Corrupción					1					2		3	7.32
TOTAL MENSUAL	3	3	4	3	6	0	2	5	5	6	4	41	100.00





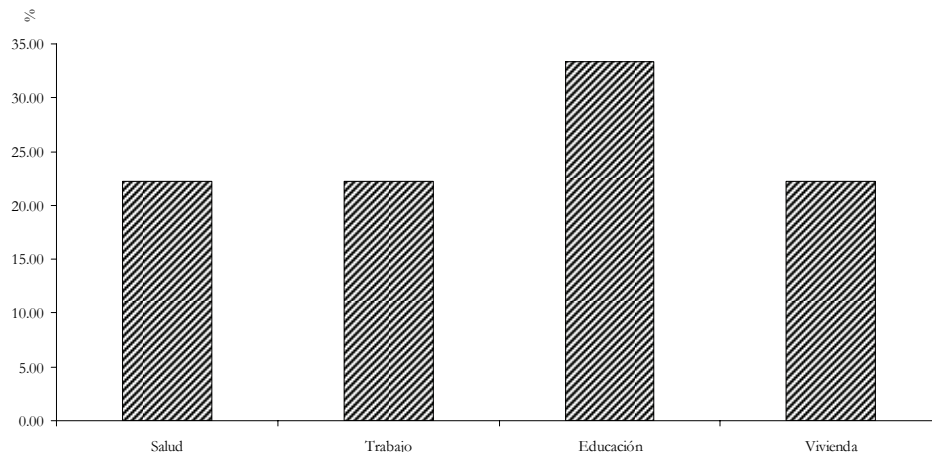
2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Expediente ORD.REU.27-2009

Los denunciantes manifestaron que el director departamental de Educación no los escucha y no hace nada para resolver su situación laboral, en vista de que hace varios meses el Ministerio de Educación no les acredita sus salarios. Como parte de la investigación realizada se requirieron los informes correspondientes al Ministerio de Educación y a la Dirección Departamental de Educación, y se entrevistó al denunciado y los denunciantes.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
SALUD													
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)										3		3	30.00
TRABAJO													
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo									1	1		2	20.00
EDUCACIÓN													
Falta de oportunidades de participación en la toma de decisiones en situaciones reales										1		1	10.00
Falta de insumos y material didáctico								1				1	10.00
Falta de infraestructura										1		1	10.00
VIVIENDA													
Falta de servicios, materiales e infraestructura									1	1		2	20.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	0	10	100.00



2.3 Derechos específicos

Por prejuicios, se excluye de la vida política a las mujeres, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad; por ejemplo, en los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) la única casilla para la mujer es la que ocupa la Comisión de la Mujer.

La población de la tercera edad se encuentra a margen de los programas de atención; y la población con retos especiales no cuenta con programas especiales, y en el departamento sólo funcional la clínica de Fundabiem.

Expediente EIO.REU.08-2009

Durante un operativo realizado en la subestación de la PNC del municipio de Champerico, las personas allí recluidas manifestaron no haber sido objeto de maltrato, no obstante, se quejaron por las pésimas condiciones en que se encuentra la cárcel de esa subestación, la que no reúne las condiciones mínimas para funcionar como lugar de detención. Como parte de la investigación se requirió informe al encargado de la Comisaría No. 34 y al Ministerio de Gobernación y se entrevistó a los detenidos en dicha prisión. Las autoridades administrativas presentaron sus informes circunstanciados, manifestando su preocupación por el estado de los centros preventivos.

3. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	873
De apertura de expedientes de investigación	51
Ampliación de plazo para la investigación	51
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	2
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	2
Acumulación de expedientes	2
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	4
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	2
TOTAL	987

4. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- Trece visitas a alcaldes municipales, Gobernación Departamental, Dirección Departamental de Educación, SOSEP, MAGA, Área de Salud y centros de salud, con el objetivo de fortalecer procesos y acciones que prevengan conflictos.
- Tres mediaciones con el director departamental de Educación con el objetivo de solucionar situaciones que se dieron en esta área.
- Dos reuniones de conciliación con el Concejo Municipal de Retalhuleu para solucionar problema de mototaxis y salarios atrasados del personal de dicha Municipalidad.
- Once acompañamientos individuales y colectivos a DEOCSA, a municipalidades de San Sebastián, San Carlos, Champerico y Ministerio de Trabajo, a fin de evitar la violación de derechos humanos y restaurar el goce de los mismos.
- 17 cabildos efectuados en la gestión de proyectos locales que viabilicen la gobernabilidad.
- Doce audiencias con alcaldes municipales con el objetivo de dialogar sobre problemas en las municipalidades y posibles soluciones. Así también, con el Director de Área de Salud, Director del Hospital Nacional y Directora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para verificar problemas y buscarles solución.
- Cinco mapeos de conflictividad social, en coordinación con alcaldes municipales, sociedad civil, la PNC y Gobernación Departamental.
- 42 alertas tempranas, coordinadas con la sociedad civil organizada, la PNC, Gobernación Departamental y CONRED, en la prevención de conflictos.
- Cuatro inventarios de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comunitarias de los municipios de San Felipe, Santa Cruz Muluá y Retalhuleu.
- Mesa de diálogo en el IGSS con la directiva del Hospital para elaboración de historia de conflictos.
- Diez reuniones con CODEDE y COMUDE de San Sebastián y seguridad ciudadana de Retalhuleu.
- Organización del Frente contra el Hambre en Retalhuleu.
- Coordinación con Seguridad Ciudadana.
- Dos verificaciones a instituciones, en especial a Juzgados de Paz, para verificar el proceso de los casos de personas que solicitan este requerimiento.
- Dos verificaciones en el Hospital Nacional y el IGSS acerca del inventario de medicina para tratar enfermos con VIH/SIDA, y medicina general.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- La Auxiliatura de Retalhuleu ha participado, coordinado y dado seguimiento a la mesa de concertación y seguimientos de los Acuerdos de Paz, la cual está conformada por varias instituciones del Estado y la sociedad civil, realizando varios eventos y trabaja con personas que viven en el área rural del departamento.

Educación y promoción

- Encuentro nacional de redes para el monitoreo de la enseñanza de los derechos humanos, con la participación de diez miembros de la Red Departamental de Retalhuleu.
- Dos talleres de seguimiento a la implementación del área de “Formación ciudadana” en el aula.
- Encuentro regional con docentes sensibilizados para la implementación del área de formación ciudadana en el aula, con la participación de 30 docentes del municipio de San Andrés Villa Seca.
- Diez talleres para el diplomado en “Derechos Humanos, Acuerdos de Paz y Resolución de Conflictos”, dirigido al personal técnico, administrativo y operativo de la PNC en Retalhuleu.
- Realización de tres festivales: “Segundo Festival Artístico Expresión 2009”, en coordinación con las dos escuelas normales del sector oficial y los diferentes establecimientos educativos del sector privado con

carreras de diversificado; “Segundo Festival de Oratoria” y “Primer Festival de Canto Nacional”, en coordinación con los establecimientos de educación media del sector oficial.

- Elección de niño y niña Procurador de los Derechos Humanos, para lo cual se realizó una serie de talleres acerca de los derechos y obligaciones de la niñez y adolescencia en los establecimientos de educación del nivel primario del sector oficial, en el que se designó a un representante por municipio para la final.
- Video-foro sobre los años del conflicto armado, coordinado con el director del Instituto Normal Mixto Carlos Dubón, dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de la carrera de Magisterio.
- Feria de la Salud con jóvenes estudiantes, padres de familia y público en general.
- Actividad cultural con la Orquesta Sin Fronteras, “Melodías en la capital del mundo”, para dar a conocer por medio de la expresión artística cómo se viven y se sienten los derechos humanos.
- Taller de capacitación enfocado al “Derecho de informar y ser informado”, dirigido a periodistas y medios de comunicación de Retalhuleu.
- Celebración del Día de la Niñez, con niños de la calle, estudiantes, niños trabajadores (900 participantes).
- Campaña de promoción y divulgación de los derechos humanos y transmisión de *spots* y cuñas institucionales en radios de la región.

Auxiliatura Departamental de Sacatepéquez



Auxiliatura Departamental de Sacatepéquez

De enero a noviembre de 2009, las denuncias más comunes fueron por inseguridad, abusos laborales, falta de servicios básicos, acceso a la educación, coacciones y amenazas; abusos de autoridad y discriminación hacia los pueblos indígenas; y maltrato infantil. Pese a los distintos conflictos, se obtuvieron resultados satisfactorios y muchos de los casos fueron cerrados favorablemente.

Los altos índices de inseguridad afectaron a todos los sectores de la región. La violencia intrafamiliar fue un problema categórico para mujeres, niños y adolescentes, quienes son víctimas sensibles de este flagelo, lo que en cierta medida provocó que algunos niños y jóvenes se integraran a grupos delincuenciales que operan en los municipios de Antigua Guatemala, San Lucas Sacatepéquez, Ciudad Vieja, Jocotenango, San Bartolomé Milpas Altas, San Juan Alotenango, y Santiago Sacatepéquez.

En detrimento de un ambiente saludable se da la tala inmoderada de árboles en lugares como la aldea Santa María Cauqué en el municipio de Santiago Sacatepéquez. No se cuenta con servicio público de recolección de basura, proliferando los basureros clandestinos.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Sacatepéquez se realizaron 262 acciones específicas: 159 de orientación, 5 de observación, 12 de mediación, 17 operativos, 27 de acompañamiento, 31 de intervención inmediata y 11 de verificación.

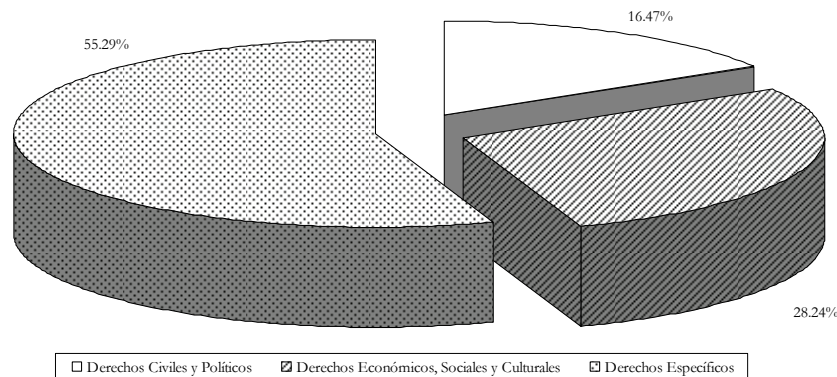
De investigación

Se abrieron 85 expedientes de investigación: 14 por violaciones a derechos individuales, 24 a derechos económicos, sociales y culturales y 47 a derechos específicos. De ellos, el 9.41% de oficio y el 90.59% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 33.33% forma parte del Organismo Ejecutivo y 66.67% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	4		1	2	4			1	1		14	16.47
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	4	5	2		2	1	2		3	3	2	24	28.24
Derechos Específicos	1	1	8	6	7	2	5	8	3	2	4	47	55.29
TOTAL MENSUAL	6	10	10	7	11	7	7	8	7	6	6	85	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	1	2	1		1		1			2		8	9.41
Ordinario	5	8	9	7	10	7	6	8	7	4	6	77	90.59
TOTAL MENSUAL	6	10	10	7	11	7	7	8	7	6	6	85	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	159	60.69
Observación	5	1.91
Mediación	12	4.58
Operativo	17	6.49
Acompañamiento	27	10.31
Intervención inmediata	31	11.83
Verificación	11	4.20
TOTAL	262	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	3	4	1		2	3			2	1		16	20.25
Judicial	1		6	4	5	1	5	7	2	1		32	40.51
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ministerio Público									1			1	1.27
Municipalidades	2	4		1	2	2	1			3		15	18.99
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social						1						1	1.27
Procuraduría General de la Nación		1		1	1					1		4	5.06
Centros educativos particulares									1			1	1.27
Particulares			3	1	1		1	1				7	8.86
Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala		1										1	1.27
Iglesia Evangélica									1			1	1.27
TOTAL MENSUAL	6	10	10	7	11	7	7	8	7	6	0	79	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

La seguridad de las personas es el derecho más frecuentemente violado en el departamento. Según estadísticas, entre los hechos ilícitos más frecuentes están: muerte violenta, secuestros, desapariciones, violaciones a mujeres, robos a residencias, comercios, transeúntes, siendo los municipios de Antigua Guatemala, San Lucas Sacatepéquez, Ciudad Vieja y Pastores los más afectados.

Pese a ser un centro turístico nacional e internacional, la Antigua Guatemala requiere de una fuerza policial preventiva e investigativa, ya que los elementos destacados no se dan abasto. La Comisaría 74 cuenta con 478 agentes, pero sólo 90 cubren la cabecera departamental. A éstos se suman los 30 soldados del ejército en dos destacamentos militares en Jocotenango y Santiago Sacatepéquez.

El tráfico y consumo de drogas se incrementó en los municipios de Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Jocotenango, Pastores, Santiago Sacatepéquez, Alotenango y San Lucas Sacatepéquez, sin que el Estado de Guatemala haga nada por contrarrestarlo.

Los grupos más vulnerables son los niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad, puesto que no existen políticas concretas directas para su protección. También el sector indígena está desprotegido y no encuentra una solución para su superación.

Expediente ORD.SAC.07-2009/DCP

El denunciante arrenda, desde hace tres años, un bien inmueble ubicado en la aldea San Bartolomé Becerra, Antigua Guatemala, pero la denunciada desde enero de 2008 no paga la renta, motivo por el cual le exigió que desocupara el inmueble. La denunciada, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), de servicio en la Comisaría 73, lo amenazó con su arma. Como parte de la investigación se solicitó informe al Director de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC, y se remitió oficio al jefe de la Comisaría 73 para la comparecencia de la denunciada a fin de que expusiera los hechos. El expediente se remitió a la sede central de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, con proyecto de resolución final, indicándose que no existen elementos suficientes para declarar violación de los derechos humanos.

Expediente ORD.SAC.09-2009/DCP

El denunciante tuvo un altercado con un agente de la Policía Municipal de Tránsito de la Antigua Guatemala, cuando se conducía a bordo del microbús propiedad de la empresa para la que labora. El agente denunciado se interpuso en su camino, lo agredió físicamente y le dio una multa monetaria. Cuando el denunciante no quiso tomar la multa, el agente, vía radio, solicitó el apoyo de otros elementos que, utilizando la fuerza excesiva, le impusieron otra multa. Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados al alcalde de Antigua Guatemala, al director de la Policía Municipal de Turismo y al agente denunciado; y se incluyó la certificación de interposición de denuncia ante la PNC por parte del denunciando y copia del informe suscrito por la perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Expediente ORD.SAC.12-2009/DCP

Refiere el denunciante que, vía telefónica, ha sido intimidado; personas no identificadas le exigían dinero a cambio de no lastimar a su familia. Personal de esta Auxiliatura se constituyó en la residencia del denunciante a fin de coordinar con miembros de la División Especial de Investigaciones Criminales de la PNC para que orientaran a la familia sobre las acciones que debían emprender. Asimismo, se solicitaron las medidas de seguridad perimetrales pertinentes.

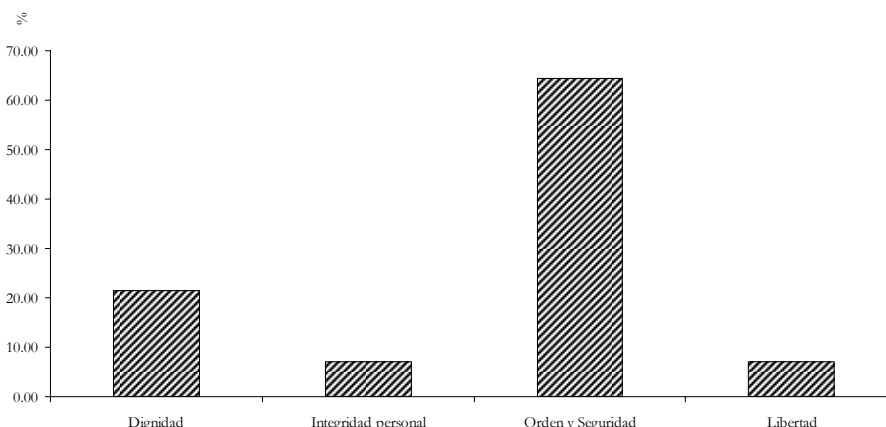
Expediente PREV.SAC.31-2009/DCP

El denunciante refirió que su hija, menor de edad, fue secuestrada por personas no identificadas, las que pretendían intercambiar a la menor por la vida del denunciante; también indicó que ha podido hablar con la hija, quien le indica que se encuentra en Nicaragua. Como parte de la investigación se ofició al jefe de la Comisaría 74 de la PNC de Sacatepéquez y se le solicitó que iniciara la investigación del hecho denunciado; asimismo, se remitió la denuncia a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público para su conocimiento e investigación. Se entrevistó al denunciante y se recibió informe del Jefe de la Comisaría 74 de la PNC, en el cual detalla las acciones que ha realizado.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Secuestro						1						1	7.14
Trato cruel, inhumano o degradante						1				1		2	14.29
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte violenta						1						1	7.14
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1	2		1		1						5	35.71
Amenazas, coacción					2							2	14.29
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal		1										1	7.14
Limitar el derecho de acción o de petición		1										1	7.14
LIBERTAD													
Restringir la libertad de expresión: Falta de acceso									1			1	7.14
TOTAL MENSUAL	1	4	0	1	2	4	0	0	1	1	0	14	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

En Sacatepéquez se carece de un ambiente sano por la contaminación que producen los basureros clandestinos y la quema de desechos, motivo por el cual la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que protegen el medio ambiente hicieron públicas sus denuncias por la excesiva contaminación.

La problemática social se ve en la ineficiencia en la prestación de servicios públicos; la falta de acceso a fuentes de trabajo, de condiciones laborales y de pago de prestaciones; y la falta programas de salud acordes a las necesidades de la población, escasez de equipo y personal en centros asistenciales.

En cuanto a la educación, pese a la gratuidad de la misma muchos niños y niñas no acudieron a recibir clases debido a la pobreza de sus familias, que no tenían para la compra de útiles, pues, a pesar de que fueron distribuidas bolsas escolares éstas no alcanzaron para cubrir a todos los estudiantes.

Expediente ORD.SAC.02-2009/DESC

Indicó el denunciante que se hizo acreedor a una plaza bajo el renglón 0-11 en la Escuela Oficial para Niñas Francisco Marroquín del municipio de Ciudad Vieja, pero por errores administrativos del Jurado Departamental de Oposición y la Unidad de Desarrollo Administrativo, no fue entregado dicho nombramiento. Como parte de la investigación se requirió informe al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación; al director departamental de Educación de Sacatepéquez y a la Unidad de Desarrollo Administrativo; los cuales fueron recibidos y analizados en su oportunidad. Se logró que el expediente del denunciado ingresara al sistema de cómputo del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, y se procedió al nombramiento y toma de posesión de la plaza.

Expediente ORD.SAC.06-2009/DESC

La denunciante, que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Nacional Pedro de Betancourt, de Antigua Guatemala, presentó complicaciones postoperatorias, las cuales considera se deben a la anestesia a la que fue expuesta. Como parte de la investigación se ofició a la entonces directora del centro asistencial, al anestesista y al coordinador del Área de Neurología del hospital, quien presentó declaración respecto al estudio clínico que le efectuó a la denunciante.

Expediente ORD.SAC.08-2009/DESC

Vecinos del barrio La Merced denunciaron que la fachada de la *Casa de las Cinco Puertas* está siendo destruida sin que los propietarios consideren las normas de construcción para preservar el Patrimonio Cultural de Antigua Guatemala, en tanto que el inmueble es un edificio histórico que data de 1912. Como parte de la investigación se ofició al conservador de la Antigua Guatemala y al alcalde municipal, a fin de que investigaran el hecho denunciado e informaran a esta Auxiliatura Departamental.

Expediente ORD.SAC.10-2009/DESC

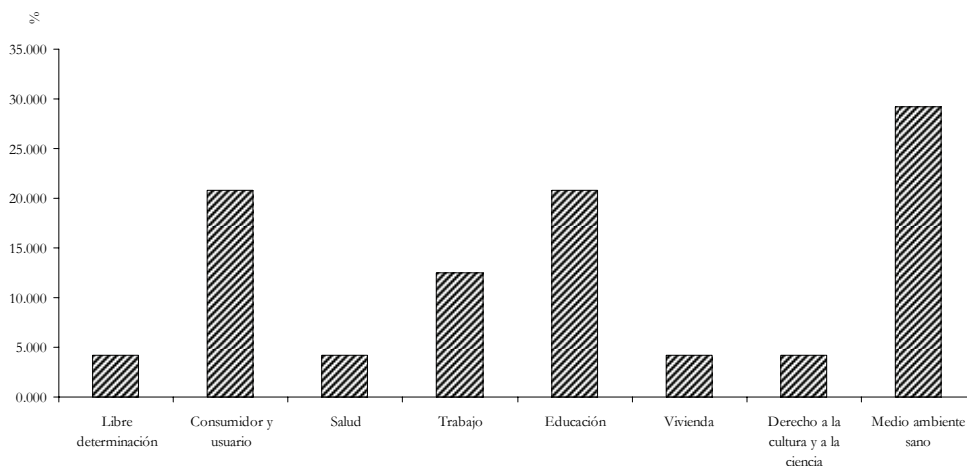
Transportistas de la ruta Santa María de Jesús-Antigua Guatemala denunciaron que están siendo perseguidos e intimidados por agentes de la Policía Municipal de Tránsito quienes, además, han secuestrado los documentos de algunas unidades de transporte sin contar con la orden judicial necesaria y les han impuesto multas sin fundamento. Como parte de la investigación se ofició al jefe de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala y al alcalde municipal para que investiguen el hecho denunciado y tomen las medidas necesarias; y se entrevistó al asesor jurídico de la comuna de Antigua Guatemala. Se resolvió el expediente, suspendiendo la actuación toda vez que los hechos que motivaron su apertura fueron conocidos y tramitados por el Juzgado de Asuntos Municipales de Antigua Guatemala.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
LIBRE DETERMINACIÓN													
Barreras comerciales					1							1	4.17
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Desabastecimiento	2	2					1					5	20.83
SALUD													
Mala práctica médica		1										1	4.17
TRABAJO													
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones		1									1	2	8.33
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	1											1	4.17



EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita			1									1	4.17
Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria			1			1						2	8.33
Falta de educación en la comprensión, tolerancia y amistad									1			1	4.17
No ser respetado									1			1	4.17
VIVIENDA													
Inseguridad jurídica de la tenencia										1		1	4.17
DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA													
No respetar el patrimonio natural y cultural		1										1	4.17
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas	1						1			2		4	16.67
Contaminación visual													
Contaminación sonora									1		1	2	8.33
Deforestación					1							1	4.17
TOTAL MENSUAL	4	5	2	0	2	1	2	0	3	3	2	24	100.00



2.3 Derechos específicos

La situación de los derechos específicos de la mujer, niñez y adolescencia, pese a las múltiples acciones que han realizado la sociedad civil, esta Auxiliatura y las autoridades locales, no presenta ningún avance, pues las denuncias sobre violaciones a sus derechos son cotidianas.

La violencia contra la mujer, niños y adolescentes sobresale en el departamento, debido a que aún continúan sin erradicarse las actitudes prepotentes y autoritarias; a ello debe sumarse que la niñez es explotada laboralmente por comerciantes informales.

La discriminación sigue dándose hacia la población kaqchikel, que es mayoría en Sacatepéquez, principalmente los vecinos de Santa María de Jesús, quienes llegan a comercializar sus productos y no les

permiten vender libremente. En los municipios de Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, Santiago Sacatepéquez y San Lucas Sacatepéquez, a los trabajadores se les excluye de participar en organizaciones sociales, lo que ha impedido que participen en organizaciones sindicalistas para luchar por la reivindicación de sus derechos.

Expediente PREV.SAC.32-2009/DE

Refirió la denunciante que desde hace diez años ha sido víctima de violencia física, psicológica, patrimonial y sexual por parte de su cónyuge, con quien vive desde hace 16 años; el denunciado ha llegado al extremo de amenazar de muerte a ella y sus hijos. Se ofició a la jueza de Primera Instancia de Familia de Sacatepéquez a fin de brindar medidas de protección a la denunciante y su núcleo familiar, las cuales fueron dictadas por el oficial primero en el Juzgado de Familia de Sacatepéquez.

Expediente PREV.SAC.45-2009/DE

Indicó la denunciante que su cónyuge, del cual se encuentra separada, dejó de aportar los alimentos básicos para ella y sus hijos; además, la amenazó de muerte. Se ofició a la jueza de Primera Instancia de Familia de Sacatepéquez para las medidas de seguridad pertinentes para la denunciante y sus cinco hijos menores de edad, las cuales fueron dictadas por el oficial cuarto en el Juzgado de Familia del departamento de Sacatepéquez.

Expediente PREV.SAC.42-2009/DE

La denunciante indicó que es víctima de maltrato intrafamiliar por parte de su esposo, quien no se hace responsable de la manutención de los hijos, uno de los cuales padece una enfermedad congénita. Se ofició a la jueza de Primera Instancia de Familia de Sacatepéquez a fin de que se formara expediente con base en la denuncia y que se fije pensión provisional para la alimentación de los afectados. El oficial tercero del Juzgado de Familia de Sacatepéquez dictó medidas de protección a favor de la denunciante y sus cuatro hijos menores de edad y fijó pensión alimenticia al denunciado.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS **Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil			3	5	1			1	2	1	2	15	31.91
La separación de los niños, niñas y jóvenes de sus familias, salvo circunstancias especiales definidas en la Ley			1									1	2.13
Abuso sexual		1										1	2.13
Descuidos o tratos negligentes			2			1						3	6.38
Acoso sexual				1								1	2.13
Trabajo infantil peligroso					1							1	2.13
MUJER													
Violencia física o psicológica											1	1	2.13
Maltrato	1		2		5	1	5	7	1	1	1	24	51.06
TOTAL MENSUAL	1	1	8	6	7	2	5	8	3	2	4	47	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente MEDIACION.SAC.12-2009/A

Llamadas telefónicas de pobladores de la aldea de Santiago Zamora, del municipio de San Antonio Aguas Calientes, refirieron que las llaves de paso del tanque de distribución de agua entubada que los abastece fueron destruidas por personas no identificadas, pero responsabilizan a las autoridades de la Municipalidad. Personal de esta Auxiliatura se constituyó en la aldea para mediar con los pobladores, quienes retenían a varias personas, entre ellas personeros de la comuna y el alcalde municipal, lográndose su liberación; asimismo, se instaló una mesa de diálogo entre los pobladores y el jefe de la comuna de San Antonio Aguas Calientes para la pronta solución del problema.

Expediente INTERVENCION INMEDIATA SAC.07-2009/A

Al ser informado de que un menor de edad se encontraba abandonado en la colonia Los Llanos, municipio de Jocotenango y que, al parecer, estaba inconsciente y golpeado físicamente, personal de esta Auxiliatura se constituyó en la colonia referida, a fin de mediar entre los enardecidos pobladores, y cooperó con personal de la Procuraduría General de la Nación, la PNC y el Ministerio Público. El menor de edad fue trasladado al Hospital Nacional Pedro Betancourt, de Antigua Guatemala, donde recibió asistencia médica y continuó con tratamiento psicológico. Asimismo, se evitó el linchamiento de los dos supuestos responsables y de los elementos de la PNC.

Expediente ORD.SAC.13-2009/DCP

Un denunciante anónimo, vía telefónica, indicó que tres niñas menores de edad habían muerto de forma violenta en la aldea Chicamen, municipio de San Lucas Sacatepéquez. Personal de esta Auxiliatura se constituyó en la aldea referida, solicitando informes circunstanciados a las autoridades, entre ellas, el jefe de la Comisaría 74 de la PNC; se remitió la denuncia a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Sacatepéquez; se escuchó a vecinos y familiares de las víctimas; se solicitaron medidas de seguridad personales y perimetrales urgentes para la madre y familia de las niñas, y se obtuvieron documentos que permitieron tener elementos de juicio para fundamentar la resolución. La investigación permitió aprehender a los supuestos responsables.

Expediente PREV.SAC.21-2009/DE

Tras tener conocimiento de que varios menores de edad están siendo explotados laboralmente por personas y padres de familia que tienen ventas ambulantes en las afueras del Centro de Servicios, se remitió la denuncia a la Sede Regional de la Procuraduría General de la Nación de Sacatepéquez, para que fuera investigada y se formara el expediente respectivo. Se logró el rescate de ocho menores que eran víctimas de explotación laboral infantil en el Centro de Servicios de la Antigua Guatemala, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

<p>Expediente INTERVENCIÓN INMEDIATA SAC.13-2009/A A favor de: Germán Alfredo Estrada Cancinos Motivo: la denunciante expuso que a su hijo, internado en el Hogar Casa Shalón, de Santiago Sacatepéquez, se le negó la asistencia médica requerida Declarado con lugar: sí</p>
<p>Descripción del caso: se interpuso la acción de exhibición personal, y por orden de juez competente fue entregado a sus familiares. El caso fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez.</p>

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que **SÍ** han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SAC.01-2009/DCP	Edgar Misael Samayoa Martínez	Jefe	Subestación 74-32, PNC
ORD.SAC.01-2009/DCP	Marlyn Suceli Herrera Aldana	Secretaría Gral. a.i	Dirección General PNC
ORD.SAC.05-2009/DESC	Yener Haroldo Plaza Natareno	Alcalde	Municipalidad de San Lucas
ORD.SAC.06-2009/DESC	Miriam Zamara López Gutiérrez	Directora Ejecutiva	Hospital Pedro de Bathancourt
ORD.SAC.06-2009/DESC	José Antonio Hernández Vásquez	Director Ejecutivo	Hospital Pedro de Bathancourt
ORD.SAC.08-2009/DESC	Sergio Estuardo Cruz Cortez	Conservador	Concejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala
ORD.SAC.08-2009/DESC	Adolfo Vivar Marroquín	Alcalde	Municipalidad de Antigua Guatemala
PREV. SAC.05-2009/DESC	Sotero Chunuj Reyes	Alcalde	Municipalidad de Santa María de Jesús
PREV.SAC.28-2009/DE	José Alberto Álvarez Salazar	Juez de Asuntos Municipales	Municipalidad de Pastores
EIO.SAC.08-2009/DESC	Oscar Darío Farrington Monterroso	Alcalde	Municipalidad de Jocotenango
ORD.SAC.22-2009/DESC	Marvin Francisco Barrios De León	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental
ORD.SAC.22-2009/DESC	Sergio Estuardo Cruz Cortez	Conservador	Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala
ORD.SAC.21-2009/DESC	Dámarys Chévez Morales	Cajera Departamental	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
ORD.SAC.21-2009/DESC	Carlos Enrique Rosemberg Echeverría	Subgerente	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
ORD.SAC.20-2009/DESC	Rolando Coloc Chioc	Alcalde	Municipalidad de Santiago Sacatepéquez
ORD.SAC.20-2009/DESC	Luis Fernando Peña	Gerente General	Fondo de Tierras
ORD.SAC.19-2009/DCP	Erik Osmar Peláez Sguenza	Comandante	Brigada Militar Mariscal Zavala
ORD.SAC.23-2009/DESC	Oscar Darío Farrington Monterroso	Alcalde	Municipalidad de Jocotenango



Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.SAC.01-2009/DESC	José Juventino Paredes Galindo	Alcalde	Municipalidad de Ciudad Vieja
EIO.SAC.01-2009/DESC	Miembros del Concejo Municipal	Concejo Municipal	Municipalidad de Ciudad Vieja
ORD.SAC.04-2009/DCP	Adolfo Vivar Marroquín	Alcalde	Municipalidad de Antigua Guatemala
ORD.SAC.04-2009/DCP		Miembros del Concejo Municipal	Municipalidad de Antigua Guatemala

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	264
De apertura de expedientes de investigación	88
Medidas urgentes	36
Se hace efectivo el apercibimiento por no haber cumplido con las medidas urgentes	
Ampliación de plazo para la investigación	3
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	5
Enmienda de procedimientos	2
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	3
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	1
Acumulación de expedientes	31
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	5
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	1
De control administrativo	321
Comportamiento administrativo lesivo	1
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	2
TOTAL	763

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Se reporta la falta de medicamentos, equipo y personal médico en los distintos centros y puestos de salud.
- Se informó sobre los casos de la gripe tipo A H1N1, luego de varias acciones realizadas en centros asistenciales en Sacatepéquez; 35 casos comprobados y ningún fallecimiento.
- En la aldea Santiago Zamora, municipio de San Antonio Aguas Calientes, se liberó a ocho personas que fueron tomadas como rehenes por unos 400 residentes que exigían la presencia del alcalde para que explicara el porqué de la distribución anómala del agua potable. En el municipio de Jocotenango, personal de esta Auxiliatura evitó el linchamiento de dos menores de edad que estaban bajo efectos de alcohol.

- En el mercado municipal de la Antigua Guatemala se realizó un operativo para rescatar a nueve niños que estaban siendo explotados laboralmente por padres de familiares y otras personas; los menores fueron enviados al Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Chimaltenango.
- Se comprobó que los rastros municipales en Sacatepéquez no cumplen las normas de higiene y que no cuentan con veterinario.
- Esta Auxiliatura dio acompañamiento al Juez de Asuntos Municipales de San Lucas Sacatepéquez y observó que no se violentaran los derechos humanos, como el caso de derribamiento de garitas, talanqueras, así como la habilitación de pasos de servidumbre y caminos vecinales que habían sido obstruidos por propietarios y administradores de condominios.
- Se informó sobre la reunión sostenida entre representantes de la comuna de la Antigua Guatemala, el Centro de Salud, la Policía Municipal de Turismo y las hermandades católicas de todo el departamento, relacionada con los requisitos para la instalación de puestos de venta para la Cuaresma.
- Monitoreo a las municipalidades de Sacatepéquez para establecer si el agua que consumen los vecinos está potabilizada: aldeas como Santa María de Jesús, San Miguel Dueñas, Magdalena Milpas Altas, Santiago Sacatepéquez y Sumpango no cuentan con sistema de cloración.
- Monitoreo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), comprobando que carece de personal especializado, no realiza eficientemente los peritajes en las defunciones y no practica hisopados que aporten prueba científica a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público.
- Monitoreo, en colaboración con el Frente contra el Hambre de Sacatepéquez, para comprobar el estado de desnutrición en varias áreas del departamento.

Incidencia política

- Se incidió ante el alcalde del municipio de Jocotenango para que no desalojara a un grupo de residentes de la colonia Los Llanos.
- Con el Frente Nacional de Lucha se participó en distintas reuniones para que se reasignaran recursos para el abastecimiento de medicamentos y contratación de personal médico.
- En la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez se incidió para que a propietarios de vehículos rodados importados no se les desalojara del puesto que venían ocupando desde hace más de ocho años.
- Se reorganizaron, con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las comisiones de la Red contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes de Sacatepéquez, y se adquirió el compromiso de organizar reuniones de trabajo para presentar y evaluar las acciones realizadas, socializar el proyecto y, fundamentalmente, la atención jurídico-social a estudiantes, maestros, personal de salud, padres y madres de familia.
- Se realizó incidencia con los propietarios del transporte intermunicipal que cubre la ruta entre los municipios de Santa María de Jesús y la Antigua Guatemala, para que bajaran el precio del pasaje.
- La Auxiliatura convocó a un taller a la Multisectorial de Atención a la Familia de Sacatepéquez para tratar los problemas de género, sus causas y consecuencias, la importancia de la autoestima y la participación cívica y política de la mujer en la sociedad guatemalteca.
- Se incidió en la liberación de ocho personas, entre ellas tres mujeres, que habían sido tomadas como rehenes por residentes de la aldea Santiago Zamora, municipio de San Antonio Aguas Calientes, que reclamaban la prestación y distribución eficiente del agua potable.
- Se logró el reconocimiento del alcalde auxiliar de la aldea San Juan del Obispo, municipio de Antigua Guatemala, luego de una votación en la cual personal de esta Auxiliatura participó como observador.
- Tras constituirse en el Área de Salud, la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, la Delegación del Ministerio de Comunicaciones, Vivienda e Infraestructura, la PNC, la Inspección de Trabajo y Gobernación Departamental, se participó en reuniones del Consejo de Desarrollo Departamental de Sacatepéquez, durante las cuales se establecieron las necesidades de salud, educación seguridad, empleo y vivienda.

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Foro para establecer la estructura y elección de las representantes de la sectorial de organización de mujeres indígenas; a las concurrentes se les impartió conferencias relacionadas con los Acuerdos de Paz.
- Evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, al cual concurrieron organizaciones de todos los municipios de Sacatepéquez.
- Operativo en escuelas de preprimaria, primaria y diversificado de los municipios de Santa Lucía Milpas Altas y Jocotenango, en relación con la identidad indígena y la utilización del traje típico en los establecimientos educativos.

Educación y promoción

- Un taller y diplomado sobre Acceso a la Información Pública, en el cual se trató sobre los antecedentes de la ley, su base constitucional y legal, y el fortalecimiento para la aplicación de la ley y la transparencia gubernamental y municipal.
- Conferencia sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA, solicitada por la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, dirigida a padres y madres de familia, alumnos y maestros de diferentes escuelas del municipio de Antigua Guatemala.
- Dos capacitaciones: una a estudiantes de bachillerato del colegio privado Gettzemani, de San Lucas Sacatepéquez, sobre los procedimientos para la denuncia de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y femicidio; una relacionada con el tratamiento que reciben los pacientes seropositivos en los hospitales, centros y puestos de salud del departamento, los medicamentos que se les deben otorgar, la denuncia y la función que realiza la Auxiliatura Departamental, dirigida a pobladores de las aldeas San Gaspar y San Juan del Obispo, conjuntamente con el alcalde auxiliar de dichas aldeas.
- Varias charlas para capacitar a alumnos y alumnas del proyecto educativo que desarrollan en varias aldeas de los municipios de Antigua Guatemala, Jocotenango, Pastores, Ciudad Vieja y Santa María de Jesús.
- Un curso sobre violencia intrafamiliar, impartido a padres de familia, maestros y alumnos de sexto Perito en Administración de Empresas y Bachillerato en Turismo y Administración Hotelera, del colegio Alpha y Omega del municipio de San Juan Alotenango.
- Una conferencia y orientación al alcalde del municipio de San Antonio Aguas Calientes y al director de la Escuela Oficial Mixta de Educación Primaria, para capacitar a padres de familia y alumnos sobre el maltrato infantil, cómo formular la denuncia y ante qué instituciones.
- Un taller, en el municipio de San Juan Alotenango, en conmemoración del Día Internacional del Niño, en el cual participaron 50 familias y 200 niños, niñas y adolescentes, entre los 12 y 14 años de edad y en el cual se abordaron los temas “Derechos de la niñez y adolescencia” y “Explotación sexual comercial y trata de personas”.

**Auxiliatura Municipal
de Santa Lucía Milpas
Altas, Sacatepéquez**



Auxiliatura Municipal de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez

De enero a noviembre de 2009, la inseguridad en el departamento provocó que la gente se organizara y tomara medidas para combatirla. Los comerciantes fueron los más afectados por las extorsiones.

En el tema de violencia intrafamiliar, las denuncias son principalmente por niños y mujeres que sufren violencia por parte del padre y cónyuge. La escasez de querellas presentadas en los Juzgados de Paz de Magdalena y Santa Lucía Milpas Altas se debe al temor de las personas por las posibles represalias. Frente a esta situación, las municipalidades, mediante programas sociales, están apoyando con capacitaciones y proyectos para niños en calidad de aprendizaje.

En cuanto a la vivienda, proliferan los asentamientos ubicados en lugares de alto riesgo, como el caso de la aldea San José las Cañas, que está en las faldas de la peña y la tierra es porosa. Además, los lugareños son presionados por gente proveniente de otros lugares que por medio de amenazas o engaños los obligan a ceder sus terrenos.

Referente a la salud de los dos municipios, los centros hospitalarios y puestos de salud no cuentan con personal lo suficientemente capacitado y la atención no es buena, a lo cual se suma la carencia de medicamentos y equipo médico para prestar un mejor servicio.

En el ramo educativo, se inauguraron escuelas abiertas en cada municipio y se crearon laboratorios de computación en ocho escuelas.

El Estado ha brindado apoyo al sector campesino con capacitaciones en temas de su interés, así como donaciones de abono a distintos sectores de los municipios.

Las áreas de mayor riesgo frente a desastres naturales se ubican en la aldea San José las Cañas, ya que se encuentra a orillas de barrancos, y en la aldea La Libertad, por ubicarse en las faldas de un cerro que actualmente está siendo afectado por la deforestación.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

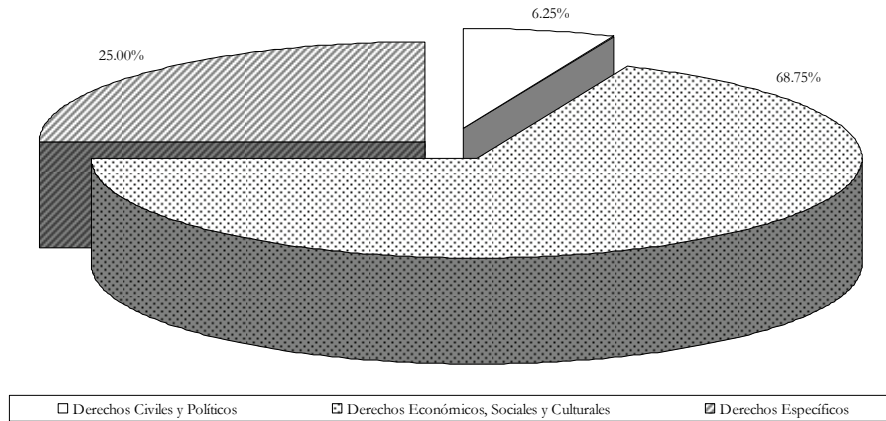
En la Auxiliatura Municipal de Santa Lucía Milpas Altas se realizaron 16 acciones específicas: 3 de orientación, 2 de prevención, 6 de observación, 4 de acompañamiento y 1 de intervención inmediata.

De investigación

Se abrieron 16 expedientes de investigación: 1 por violaciones a derechos individuales, 11 a derechos económicos, sociales y culturales y 4 a derechos específicos. De ellos, el 14.29% de oficio y el 85.71% por denuncias recibidas.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos						1						1	6.25
Derechos Económicos, Sociales y Culturales						4	1			1	5	11	68.75
Derechos Específicos									3	1		4	25.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	5	1	0	3	2	5	16	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio						3	1		2	1	3	10	62.50
Ordinario						2			1	1	2	6	37.50
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	5	1	0	3	2	5	16	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	3	18.75
Prevención	2	12.50
Observación	6	37.50
Acompañamiento	4	25.00
Intervención inmediata	1	6.25
TOTAL	16	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Se recibió denuncias de pacientes de centros hospitalarios que fueron tratados de una forma inhumana y no se les presta la atención necesaria. También, personas que han presentado denuncias en el Ministerio de Trabajo y no han tenido respuesta alguna. En Santa Lucía Milpas Altas se trabaja en un plan de denuncia en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Juzgado, a fin de disminuir la violencia intrafamiliar y maltrato a la niñez, entre otros.

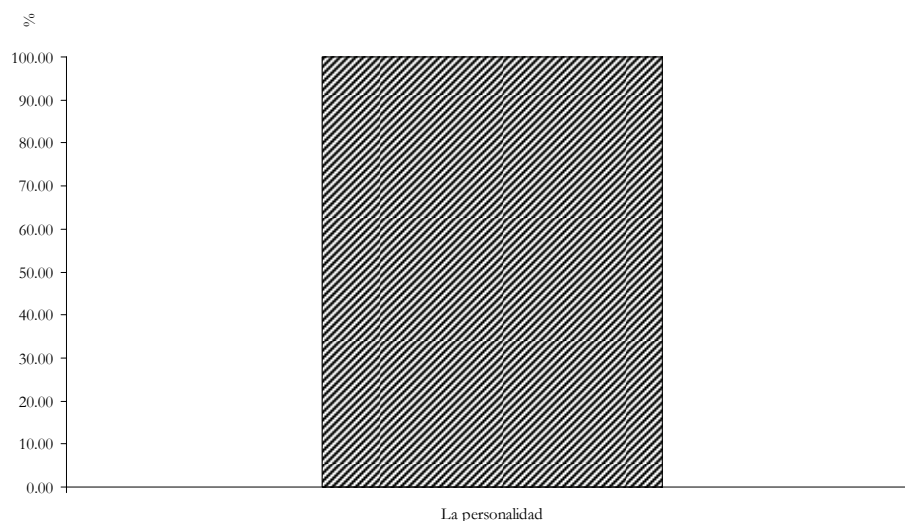
Expediente AUX.SLMA.SAC 04-13-JULIO-2009

La denunciante informó que fue atendida en el puesto de salud de Santa Lucía Milpas Altas por el médico de turno, quien la remitió al Hospital Nacional donde fue mal recibida y no le prestaron la atención debida, pese a la gravedad de su estado. Como parte de la investigación se entrevistó al jefe de turno y al encargado de dar los números; las personas que se encontraban esperando consulta expusieron que el hospital siempre las trata mal. Se logró que la denunciante fuera atendida y operada.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
LA PERSONALIDAD													
Derechos y obligaciones						1						1	100.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Las municipalidades de los dos municipios ya tienen detectados los asentamientos donde hay problemas de vivienda y de alimentación, y ya trabajan en este aspecto con varias entidades, entre ellas la institución del PDH.

En educación, se han impartido charlas sobre derechos humanos, las cuales incluyen actividades de recreación en distintas escuelas. También se han impartido programas de salud mental para los alumnos de los centros educativos de ambos municipios, y se han realizado actividades culturales durante las clausuras de tres escuelas.

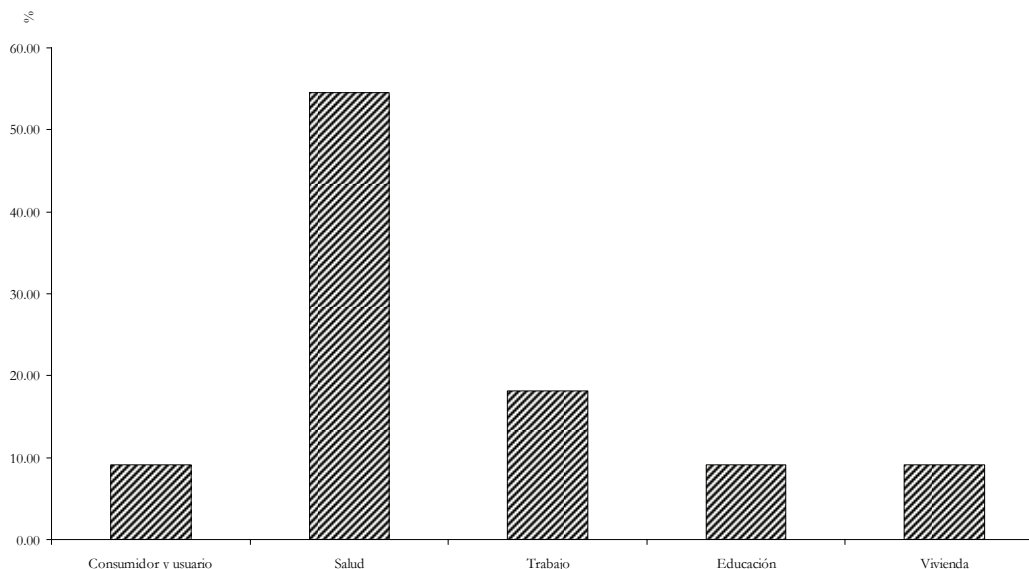
En incidencia local, se ha propuesto a las autoridades municipales que involucren a las distintas organizaciones para que formen parte de los proyectos.

Expediente: AUX.SLMA.SAC 01-09-JUNIO-2009

El denunciante manifestó que fue despedido de la empresa donde laboraba sin firmar ningún documento, por lo que presentó su denuncia en el Ministerio de Trabajo, pero no fue escuchado, por lo cual solicitó al personal de esta Auxiliatura acompañamiento y apoyo. Se logró el acercamiento con el gerente de la empresa, quien acordó cancelar las prestaciones del afectado en dos pagos.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Agua contaminada						1						1	9.09
SALUD													
Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)						1						1	9.09
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)											3	3	27.27
Mala atención en centro de salud											1	1	9.09
Negación de atención médica							1					1	9.09
TRABAJO													
Falta de pago de las prestaciones laborales						1						1	9.09
Despido injusto						1						1	9.09
EDUCACIÓN													
Incrementos de cuotas de estudio											1	1	9.09
VIVIENDA													
Inseguridad jurídica de la tenencia										1		1	9.09
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	5	11	100.00

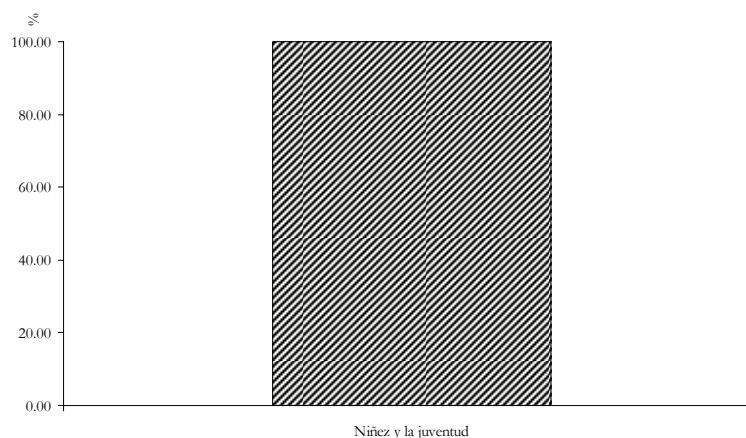


2.3 Derechos específicos

La auxiliatura estuvo presente en la reunión del COMUDE en la cual las autoridades municipales dieron a conocer que el cuerpo de Bomberos Municipales presentaba una irregularidad dentro de su personal, lo cual despertó el interés de los presentes, ya que exponen que algunos elementos no están preparados e ingieren licor los fines de semana, por lo que no están de acuerdo en que se dé un servicio de esa manera.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Violencia intrafamiliar										1		1	25.00
La adopción por motivos económicos									1			1	25.00
Abandono									1			1	25.00
Descuidos o tratos negligentes									1			1	25.00
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	100.00



4. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	2
Medidas urgentes	1
Resoluciones finales	
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	
> Con recomendación	1
De control administrativo	12
TOTAL	16

5. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Monitoreo de educación en derechos humanos en el sistema educativo nacional, dirigido a docentes, padres de familia y directores, mediante el cual se pudo detectar que en algunas escuelas no se informa a los alumnos sobre sus derechos.
- Monitoreo sobre derecho a la seguridad alimentaria, en julio, con el cual se verificó la magnitud del problema en las distintas aldeas.
- Monitoreo a las Municipalidades para verificar si contaban con Oficina de Acceso a la Información.
- Monitoreo a los Juzgados de Paz de los dos municipios, durante el cual se solicitó informe circunstanciado sobre casos, solicitado por la Unidad contra la Impunidad de la PDH, sede central.

Incidencia política

- Dos talleres de derechos humanos, uno en la escuela de Santa Lucía y otro en Magdalena Milpas Altas.
- Una reunión, solicitada por el Puesto de Salud de Santa Lucía y Magdalena, en la cual se planteó la problemática que presentan las Municipalidades al no acatar las sugerencias que hacen los puestos de salud debido a la falta de cloración y contaminación de pozos y nacimientos de agua. Se realizaron cuatro monitoreos que comprobaron los hechos planteados.

Educación y promoción

- Charlas sobre derechos humanos solicitadas por los directores de las tres escuelas principales de Magdalena y Santa Lucía Milpas Altas, culminando el ciclo escolar 2009.
- En eventos y promociones en las escuelas se finalizó con la participación de las doce escuelas en el Segundo Festival de la No Violencia, en teatro, canto y baile, organizado por esta Auxiliatura.

Auxiliatura Departamental de San Marcos



Auxiliatura Departamental de San Marcos

De enero a noviembre de 2009 la violencia ha afectando a varios municipios de este departamento, especialmente por los secuestros y, a pesar de que se han pagado los rescates, no han aparecido las víctimas.

Los abusos son cometidos por varias entidades que prestan servicios, como la Empresa Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA), que constantemente aumenta la facturación mensual, notándose el malestar generalizado de la población, tanto del altiplano como de la costa.

Por otra parte, continúa la exploración y explotación minera, principalmente en el Altiplano marquense, Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, evidenciando el rechazo unánime de la población.

Los problemas de tierra más comunes en este departamento son por límites entre municipios de Tajumulco e Ixchiguan, y entre San Pedro Sacatepéquez y San Marcos, y los límites entre las comunidades de San Luis Tuimuj y Twi Muj del municipio de Comitancillo; así también, en las fincas de la zona costera.

En materia de salud no se cuenta con el recurso humano ni económico suficiente, por lo que la mayor parte de la población no tiene acceso directo e inmediato a los servicios. Igual sucede con la educación: hacen falta maestros e insumos para mejorar este rubro.

Se siguen dando actos de corrupción, principalmente en el manejo de los fondos municipales, pero la población, por temor a represalias y por la misma impunidad, se abstiene de denunciarlos.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de San Marcos se realizaron 1,056 acciones específicas: 64 de orientación, 77 de prevención, 10 de mediación, 45 operativos, 351 de acompañamiento, 8 de conciliación, 150 de intervención inmediata y 351 de atención a la víctima.

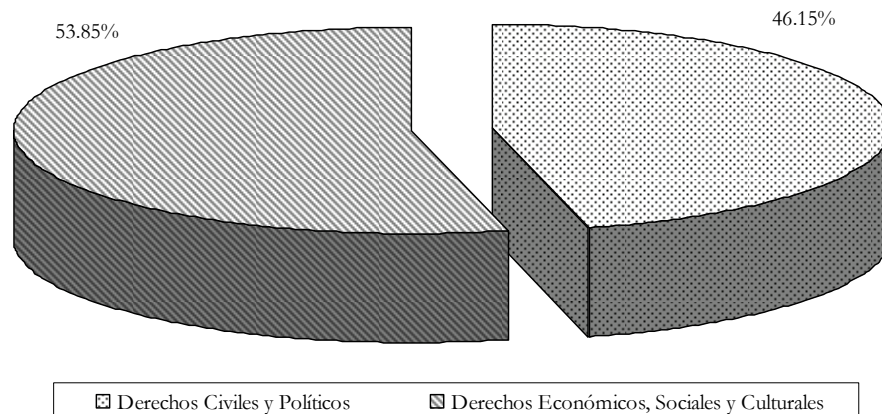
De investigación

Se abrieron 13 expedientes de investigación: 6 por violaciones a derechos individuales y 7 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 23.08% de oficio y el 76.92% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 100.00% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	2	2					1	1				6	46.15
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	4	1	1	1								7	53.85
TOTAL MENSUAL	6	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	13	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	2	1										3	23.08
Ordinario	4	2	1	1			1	1				10	76.92
TOTAL MENSUAL	6	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	13	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	64	6.06
Prevención	77	7.29
Mediación	10	0.95
Operativo	45	4.26
Acompañamiento	351	33.24
Conciliación	8	0.76
Intervención inmediata	150	14.20
Atención a la víctima	351	33.24
TOTAL	1,056	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	4	2					1	1				8	61.54
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	2	1	1	1								5	38.46
TOTAL MENSUAL	6	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	13	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

La violencia se ha incrementado año tras año; se ha trabajado por organizar a la sociedad civil para que exija a la Policía Nacional Civil (PNC) que dé seguridad a la población marquésense, pero ésta no ha cumplido con sus funciones. La arbitrariedad es cometida constantemente por empleados públicos, autoridades judiciales, el Ministerio Público, la PNC y el magisterio.

Expediente ORD.SM.06-2009/DCP

La denunciante refirió que la profesora del segundo grado de primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta Francisco Aparicio Mérida Morales, del cantón El Mosquito, San Pedro Sacatepéquez, en repetidas ocasiones trató a su hijo de forma denigrante y con palabras soeces, motivo por el cual el menor dejó de estudiar en ese establecimiento; en su momento manifestó esta situación al director de la escuela, pero éste no hizo nada para corregir la actuación de la maestra. Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados al director departamental de Educación y al director de la Escuela Francisco Aparicio Mérida Morales, a fin de obtener mayores elementos de convicción; se realizó investigación de campo en el establecimiento en referencia. La Fiscalía Distrital del Ministerio Público de San Marcos conoció el caso.

Expediente ORD.SM.03-2009/DCP

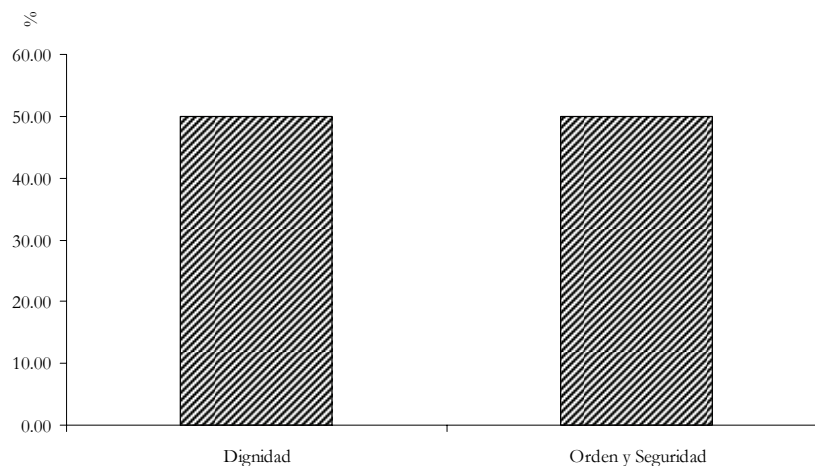
El denunciante manifestó haber sido objeto de abuso de autoridad por parte del médico denunciado, quien le ordenó que se presentara a sus labores a pesar de estar suspendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados al denunciado y a la directora departamental del IGSS de San Marcos, y personal de esta Auxiliatura se constituyó en las instalaciones del Hospital Nacional de San Marcos, constatando que el denunciante se encontraba legalmente suspendido por el IGSS y los actos arbitrarios cometidos por el doctor.

Expediente ORD.SM.09-2009/DCP

Manifiestó el denunciante que sus dos hijos menores de edad se negaban a presentarse a la Escuela Oficial Urbana Mixta Francisco Aparicio Mérida Morales donde estudian, que se ubica en el cantón El Mosquito del municipio de San Pedro Sacatepéquez, porque recibían malos tratos por parte del director. Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados al director departamental de Educación y al director de la escuela a fin de obtener mayores elementos de convicción, y personal de esta Auxiliatura se constituyó en la escuela para verificar los hechos. La Fiscalía Distrital del Ministerio Público de San Marcos conoce el caso.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Trato cruel, inhumano o degradante		1					1	1				3	50.00
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	2	1										3	50.00
TOTAL MENSUAL	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Expediente ORD.SM.08-2009/DESC

El Comité Pro Mejoramiento Cantón Santa Isabel, San Marcos manifestó que contiguo a la central de autobuses extraurbanos se ubica un zanjón por el cual fluye una corriente de aguas negras que ha causado muchos problemas a la población, sin que la Municipalidad solucione el problema. Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados a los alcaldes municipales de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos, así como al delegado departamental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de San Marcos; y se verificaron las condiciones descritas en el lugar.

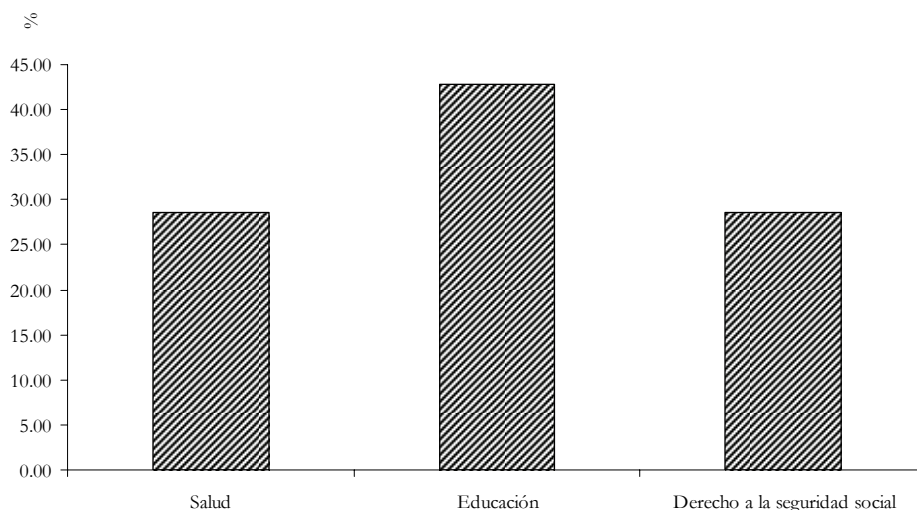
Expediente ORD.SM.01-2009/DESC

Indicó la denunciante que por orden médica debía practicársele un USG-obstétrico, pero al presentarse al IGSS de Malacatán le indicaron que no contaban con ese servicio, por lo que debía acudir a la ciudad de Quetzaltenango, situación con la que ella no estuvo de acuerdo debido a que su embarazo es de alto riesgo. A partir de la investigación realizada se estableció que la empresa que prestaba dicho servicio presentó su renuncia al IGSS, razón por la que el servicio fue suspendido, pero en cuestión de días el mismo fue restablecido.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
SALUD													
Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)	1			1								2	28.57
EDUCACIÓN													
Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita	1											1	14.29
No ser tratado con justicia	1											1	14.29
Falta de insumos y material didáctico		1										1	14.29

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social de riesgos			1									1	14.29
Insuficiente cobertura social a beneficiarios	1											1	14.29
TOTAL MENSUAL	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente EIO.SM.01-2009/DESC

Se inició expediente con base en la noticia presentada en un telenoticiario local, referente al cobro de Q10 por estudiante como cuota de inscripción, no obstante lo ordenado por el Ministerio de Educación referente a la gratuidad de la educación. Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados a la Ministra de Educación, al director departamental de Educación, lográndose establecer que la cantidad requerida era un acuerdo al que se había llegado en reunión sostenida por padres de familia para colaborar con las actividades del desfile; sin embargo la profesora denunciada, para evitar inconvenientes devolvió dicha cantidad a los padres de familia.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE AMPARO

Expediente II.SM.91-2009/DCP

Descripción del caso: se abrió expediente con base en la denuncia presentada por la trabajadora social del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, quien manifestó que todo el municipio se encuentra sin servicio de energía eléctrica, lo cual ocasiona serios problemas para el funcionamiento del banco de sangre de ese hospital, así como para el almacenamiento de medicamentos y vacunas. Por lo anterior, el Procurador de los Derechos Humanos interpuso una acción constitucional de amparo con el fin de solucionar inmediatamente el problema.

5. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente II.SM.42-2009/DCP A favor de: David Ventura Roblero Motivo: retenido ilegalmente por pobladores de la aldea Ixmucá, Tejutla Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: se abrió expediente a partir de la llamada telefónica realizada por la señora Jova Lorenza Ramírez Díaz, quien solicitó apoyo a la institución del PDH a efecto de practicar una exhibición personal a favor de su hermano David Ventura Roblero.

6. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que **SÍ** han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SM.01-2009/DESC	Licda. Miriam Aracely Fuentes	Dra. Deptal.	IGSS San Marcos
ORD.SM.01-2009/DESC	Damaris Reina	Analista	IGSS Malacatán
ORD.SM.01-2009/DESC	Lic. Alfredo del Cid	Gerente Gral.	IGSS
ORD.SM.01-2009/DESC	Dr. Gustavo Gutiérrez	Director	IGSS Malacatán
ORD.SM.03-2009/DCP	Licda. Miriam Aracely Fuentes	Dra. Deptal.	IGSS San Marcos
ORD.SM.03-2009/DCP	Dr. Jorge René Fuentes Joaquín	Director	Hospital Nacional de San Marcos
ORD.SM.05-2009/DCP	Lic. Saul Abner Navarro	Juez de Asuntos Municipales	Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
ORD.SM.10-2009/DCP	Lic. Enrique Díaz Laninez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
EIO.SM.01-2009/DESC	Lic. Enrique Díaz Laninez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
EIO.SM.03-2009/DESC	Licda. Ana Ordóñez de Molina	Ministra de Educación	Ministerio de Educación
EIO.SM.03-2009/DESC	Lic. Enrique Díaz Laninez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.SM.02-2009/DCP	Dr. Marco Antonio Orozco Arriola	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
ORD.SM.04-2009/DESC	Lic. Enrique Díaz Laninez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.SM.06-2009/DCP	Lic. Enrique Díaz Laninez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.SM.08-2009/DESC	Dr. Marco Antonio Orozco Arriola	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez
	TAE. Carlos Barrios Sacher	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Marcos
	Ing. Amilcar Ruiz Téllez	Delegado Departamental	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
EIO.SM.02-2009/DESC	Francisco Rogelio Sandoval López	Alcalde Municipal	Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo
ORD.SM.07-2009/DESC	Lic. Alfredo Pinillos	Gerente General	IGSS
ORD.SM.07-2009/DESC	Julio Cesar Barcarcel Ramírez	Alcalde Municipal	Municipalidad de San José el Rodeo

ORD.SM.09-2009/DCP	Prof. Erwin Alangumer Velasquez Miranda	Director	Escuela Oficial Urbana Mixta Aparicio Francisco Merida Morales
ORD.SM.09-2009/DCP	Lic. Jorge Adalberto Orozco Orozco	Supervisor Técnico Administrativo	Sector Educativo 1202,4
ORD.SM.09-2009/DCP	Lic. Enrique Díaz Laninez	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación

7. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	305
De apertura de expedientes de investigación	13
Ampliación de plazo para la investigación	13
Enmienda de procedimientos	1
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	71
Con suspensión por desistimiento	1
Acciones o recursos planteados	
Amparos	1
Exhibiciones	2
TOTAL	407

8. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Informe sobre Municipalidades que han implementado la Oficina de Acceso a la Información.
- Informe sobre Juntas Municipales de la Niñez existentes en San Marcos.
- Informe sobre casos de linchamiento en aldea Tuikiaj, Tajumulco; conato de linchamiento en Ixchiguan; linchamiento en aldea San Sebastián, San Marcos;
- Informe de denuncias contra compañías eléctricas.
- Informe por violaciones a los derechos humanos de ambientalistas.
- Informe sobre seguridad alimentaria y nutricional.
- Informe de denuncias presentadas por sindicalistas.
- Informe de denuncias sobre casos de VIH/SIDA.
- Informe sobre sala situacional del departamento de San Marcos 2009.
- Informe sobre casos de violencia intrafamiliar denunciados durante 2009.
- Informe de morbo-mortalidad en hospitales nacionales.
- Informe sobre conflictividad en San Marcos.
- Mapa de poder político.
- Informe sobre monitoreo de inscripción en escuelas públicas y privadas.
- Informe de monitoreo sobre hambruna y desnutrición aguda en San Marcos.

Incidencia política

- Capacitaciones en las oficinas centrales de la institución referente a historia de conflictos y mapa de conflictividad social en cada uno de los departamentos de la República, para encontrar los indicadores del incremento de la problemática social: a) contaminación ambiental; b) desastres; c) narcotráfico; d) falta de

medicamentos; e) problemas de tierra; f) maltrato infantil; g) problemas de agua; h) transporte urbano y extraurbano; violencia intrafamiliar; i) violencia e inseguridad.

- Capacitación en Sacatepéquez, con el tema de resolución de conflictos, referente al proceso de inscripción de alumnos en los establecimientos públicos y privados de San Marcos, del nivel preprimario, primario, básico y diversificado; cobros, uniformes, contratación de maestros y servicios básicos de los establecimientos educativos.
- Participación en la Red de Paternidad y Maternidad Responsable, conjuntamente con las instituciones gubernamentales que tienen presencia en San Marcos, coordinado por la jefatura de Área de Salud de San Marcos, conformando la estructura e infraestructura de las instituciones participantes.
- Taller sobre defensa legal indígena y principales problemas que afectan el comportamiento de la familia y de la sociedad, organizado por CODISRA.
- Participación en las caminatas en contra de la violencia, especialmente en rechazo a los secuestros y robos en todos los municipios de San Marcos.
- Acompañamiento a los abastecedores de carne bobina y porcina, verificando la contaminación del destace de las reses, en los municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, Comitancillo, San Rafael Pie de la Cuesta, Malacatán, Concepción Tutuapa y Tacaná.
- Tres monitoreos: uno a las instituciones encargadas de velar por las acciones tomadas en el problema de la hambruna y la desnutrición en el departamento y sus municipios, asociadas con la morbilidad y mortalidad en los niños de 0 a 6 meses edad y de 1 a 5 años, respectivamente. Otro al Hospital Nacional de San Marcos, al Hospital Distrital de Malacatán, a la Jefatura del Área de Salud, a los centros y puestos de salud, y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para verificar el derecho a la situación alimentaria y nutricional en San Marcos. Otro sobre el derecho a la educación en materia de derechos humanos en San Marcos.
- Talleres-foro, en las instalaciones de la Jefatura del Área de Salud, sobre prevención en la detección de la influenza A-H1N1, socializando al personal del Comité de Emergencia Departamental y conformación del Comité Directivo.
- Doce reuniones de trabajo con el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de San Marcos.
- Reuniones de trabajo de los consejos comunitarios de los municipios de Esquipulas Palo Gordo, San Rafael Pie de la Cuesta, Malacatán, Concepción Tutuapa y Tacaná.
- Dos acompañamientos: uno en el proceso cuyuntural del problema de límites de tierra entre las autoridades municipales de Ixchiguan, Tajumulco, los habitantes de la comunidades de los caseríos Once de Mayo, Nuevo Porvenir y San Antonio de Ixchiguan, y los habitantes de la comunidad de Boxoncán, Tajumulco. Uno en las oficinas de Gobernación Departamental de San Marcos con instituciones que componen la Comisión Interinstitucional sobre el problema de límites de tierra en el altiplano marquense y otras comunidades.
- Verificación y socialización con alcaldes municipales y concejos municipales, monitoreando el problema de la institución distribuidora de la energía eléctrica con las poblaciones de la costa y bocacosta.
- Reunión de trabajo y coordinación, en San Pedro Sacatepéquez, entre las autoridades gubernamentales y la sociedad civil para dar soluciones definitivas al problema de UNION FENOSA-DEOCSA, y conformar una comisión departamental para dialogar con las autoridades centrales del Gobierno de Guatemala.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Se ha desarrollado el tema de los Acuerdos de Paz en diferentes programaciones de la Radio Nacional de San Marcos y radios comunitarias.
- Complementando el trabajo realizado por el Dirección de Educación y Promoción en esta Auxiliatura Departamental, a través del programa de radio “El abc de los derechos humanos” se han tratado temas relacionados con los derechos humanos e información de las actividades que realiza esta Auxiliatura departamental y el Procurador de los Derechos Humanos.

Educación y promoción

- Coordinación con el director departamental de Educación y directores de los centros educativos para la realización de procesos de sensibilización, capacitación desarrollados en los siguientes centros educativos:
 - ✓ Instituto Experimental de San Marcos María Cristina Barrios, doce procesos.
 - ✓ Escuela de Enfermeras de San Marcos, talleres cada 15 días.
 - ✓ Instituto Diversificado INMO Justo Rufino Barrios, procesos mensuales.
 - ✓ Escuela de Enfermería San Marcos, con la temática de derechos humanos en la prestación del servicio de salud.
 - ✓ Academia Técnica Profesional de Formación Educativa Juan Pablo II, talleres mensuales.
- Las autoridades de centros educativos han solicitado pláticas en las cuales se han capacitado a diferentes grupos como padres de familia, alumnos de distintos centros educativos, así como de la extensión universitaria, entre ellos: Instituto por Cooperativa Chamac (420 alumnos y 513 padres de familia), Escuela Rural Mixta Aldea San Antonio (180 madres de familia), Instituto por Cooperativa Aldea Chim (73 alumnos), Escuela para Varones J. Antonio de León Bonilla (56 alumnos), Instituto Nacional San Rafael (713 alumnos), Escuela para Niñas Justa Gonzáles (552 alumnas), Extensión Universitaria Mariano Gálvez (47 estudiantes), Escuela José Ramón Gramajo (242 alumnos), Escuela Rural Mixta Aldea Las Nubes (67 alumnos y 32 padres de familia).
- Diplomado en derechos humanos y valores a jóvenes líderes de diferentes centros de educación básica de los municipios de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos, al cual asisten cuatro alumnos por cada establecimiento, comprometiéndose a ser entes multiplicadores del mensaje. Esta actividad se llevó a cabo una vez por mes con estudiantes del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, el Instituto Experimental María Cristina Barrios, el instituto particular San Carlos, la Escuela Superior E.S.C., el Colegio La Asunción, el Colegio Amigos, el Instituto Experimental de San Pedro Sacatepéquez, el Colegio Santa Ana, el Instituto de Educación Básica INMO Caxaque, el colegio particular El Spencer, la Asociación Niño Shecano y el colegio particular El Mesías.
- Establecimientos participantes de los municipios de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos en el festival “Expresemos nuestros derechos”: Escuela Oficial Doctor Ulises Rojas (323 alumnos), Escuela Oficial para Varones Delfino Aguilar (252 alumnos), Escuela Oficial de Niñas Isabel Barrios y Barrios (432 alumnos), Colegio Mixto Santa Ana, San Pedro Sacatepéquez (390 alumnos), Colegio Evangélico el Mesías (148 alumnos), Escuela Oficial Estado de Israel (400 alumnos), Liceo Cristiano Amigos (136 alumnos), Escuela Oficial Carlos Castillo Armas (512 alumnos), Escuela Oficial José Ramón Gramajo (242 alumnos), Escuela Oficial Doctor Carlos Martínez Durán (489 alumnos), Escuela Oficial Simón Bolívar (145 alumnos), Escuela Oficial para Niñas Justa González (552 alumnos), Escuela Urbana para Varones Felipe Rodríguez (450 alumnos), Escuela Oficial Urbana de Niñas No.2 Delia Anzueto de Orantes (385 alumnos), Escuela Oficial Aparicio Mérida (450 alumnos), Colegio La Asunción (198 alumnos), Escuela Oficial Naciones Unidas (270 alumnos), Colegio Evangélico Nazareno (115 alumnos), Colegio Mixto San Carlos (653 alumnos), Colegio Mixto San Marcos (512 alumnos), Colegio Sagrado Corazón (300 alumnos), Escuela Oficial Urbana para Varones J. Antonio de León Bonilla (400 alumnos), Escuela de Educación Superior (480 alumnos), Escuela Oficial Estado de Israel, jornada vespertina (680 alumnos), Colegio Particular Mixto Minerva (482 alumnos) y Colegio El Candelero de Oro (604 alumnos).
- Festival de oratoria y declamación. Se realizaron preliminares en cada sector distrital para que participara el mayor número de jóvenes, con el objetivo de descubrir liderazgos y fomentar la participación de los que eran seleccionados.
- Elección de Niño o Niña Procurador por un año, en la cual participaron varios centros educativos, con alumnos de cuarto a sexto grado, con el tema dignidad humana.
- Educación no formal. Por medio de pláticas se fortaleció a diferentes grupos como mujeres, Policía Municipal de Tránsito, trabajadores del Hospital Nacional, alcaldes auxiliares, PNC, jueces:
 - ✓ Organización MECAPAL San Pedro Sacatepéquez, dirigido a mujeres.
 - ✓ SEPREM, San Rafael Pie de La Cuesta, dirigido a mujeres.
 - ✓ Save The Children, aldea Pueblo Nuevo, Tajumulco, dirigido a mujeres.
 - ✓ Municipalidad de Tacaná, dirigido a alcaldes auxiliares.

- ✓ Municipalidad de San Marcos, dirigido a Policía Municipal de Tránsito.
- ✓ Director Hospital Nacional, dirigido a personal de enfermería y operativos.
- ✓ Departamento de Educación de la PNC, dirigido a agentes del departamento de San Marcos.
- ✓ Coordinación con el Departamento de Educación de Guatemala, dirigido a jueces de San Marcos.
- Monitoreos en la educación, foros sobre linchamientos, migrante, violencia intrafamiliar, maltrato infantil.



Auxiliatura Departamental de Santa Rosa



Auxiliatura Departamental de Santa Rosa

De enero a noviembre de 2009 persistió la violación de los derechos humanos, siendo los más vulnerados: en derechos específicos, los de la mujer y la niñez; en derechos económicos sociales y culturales, los del consumidor y usuario, trabajo, vivienda y salud; y en derechos cívicos y políticos, el derecho al orden y a la seguridad.

La seguridad es uno de los derechos más afectados, por el incremento de los secuestros, las extorsiones y los robos en las áreas urbanas y rurales. Otra situación preocupante son los casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.

Entre los abusos contra la población están los cometidos por la Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA), por cobros injustificados en el servicio de energía eléctrica.

Los grupos más vulnerables del departamento son: mujer y niñez y adulto mayor. Las áreas de mayor riesgo son las asentadas en la costa del Pacífico, debido a las inundaciones en épocas de invierno; pero en contraste, este año la población ha padecido la falta de lluvias, dañándose las cosechas, lo que ha significado un aumento de los casos de hambruna y desnutrición.

Entre los avances y logros de la Auxiliatura está la sensibilización a la población en cuanto a la cultura de denuncia, apreciado en el número de casos que se recibieron este año, lo que minimiza en alguna medida la violación de los derechos fundamentales de la sociedad. También el Estado ha tratado de cumplir, en lo posible, con la aplicación de justicia. Se conformó el Frente contra el Hambre y la Mesa de Crisis, con diferentes sectores sociales, a efecto de mitigar la desnutrición que se vive en el departamento.

No obstante, se han enfrentado obstáculos como la apatía de la población por empoderarse de estos derechos para la convivencia democrática y social y la indolencia de ciertas autoridades ante las violaciones de los derechos de los habitantes.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Santa Rosa se realizaron 384 acciones específicas: 221 de orientación, 107 de prevención, 3 de mediación, 5 de conciliación, 47 de intervención inmediata y 1 de atención a la víctima.

De investigación

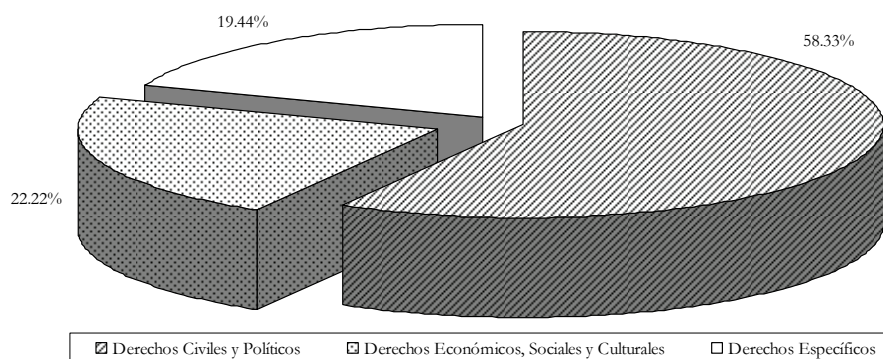
Se abrieron 36 expedientes de investigación: 21 por violaciones a derechos individuales, 8 a derechos económicos, sociales y culturales y 7 a derechos específicos. De ellos, el 66.67% de oficio y el 33.33% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 92.86% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos			2	15	1	1		2				21	58.33
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1	3		1	1				1	1		8	22.22
Derechos Específicos		3	1	2	1							7	19.44
TOTAL MENSUAL	1	6	3	18	3	1	0	2	1	1	0	36	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	1	2	2	16				2		1		24	66.67
Ordinario		4	1	2	3	1			1			12	33.33
TOTAL MENSUAL	1	6	3	18	3	1	0	2	1	1	0	36	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	221	57.55
Prevención	107	27.86
Mediación	3	0.78
Conciliación	5	1.30
Intervención inmediata	47	12.24
Atención a la víctima	1	0.26
TOTAL	384	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	1	5	1	3	2			1				13	36.11
Judicial					1							1	2.78
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT.	%
Municipalidades				14		1		1	1	1		18	50.00
A-A no determinado			1	1								2	5.56
Ministerio Público			1									1	2.78
DEORSA		1										1	2.78
TOTAL MENSUAL	1	6	3	18	3	1	0	2	1	1	0	36	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

En relación con los derechos civiles y políticos, en 2009 los derechos al debido proceso y al orden y seguridad fueron los más afectados.

Se han producido constantes hechos de violencia contra a personas que han sido objeto de secuestro y robo, y las comunidades reclaman que la Policía Nacional Civil (PNC) no cumple con sus funciones.

La discriminación se da hacia los vecinos de las áreas rurales, pues no todos han sido beneficiados con los programas de gobierno y una gran cantidad de personas ha quedado por completo excluida, ya que el programa Mi Familia Progresá y otros van dirigidos a pequeños grupos.

El abuso de poder es notorio, gran parte de los funcionarios de gobierno en el ejercicio de sus funciones, ya sea por acción u omisión, se exceden, resaltando la actuación de alcaldes municipales, quienes a diario cometen actos de arbitrariedad; y agentes de la PNC vinculados con bandas delincuenciales causan zozobra y desconfianza entre la población.

Expediente EIO.SR.04-2009/DCP

Por información publicada en el diario *Prensa Libre*, se tuvo conocimiento de las reiteradas solicitudes de vecinos de la aldea El Cernal, Barberena, para que sea instalada una subestación de la PNC para que brinden seguridad a los 22 mil habitantes del lugar, a causa de las extorsiones y asaltos ocurridos a diario. Como parte de la investigación se requirió informe circunstanciado al comisario departamental y al jefe de la Subestación de la PNC de Barberena, estableciéndose que la solicitud está en trámite, asimismo, los afectados entrevistados manifestaron que ya hay mayor presencia de la PNC en la zona.

Expediente EIO.SR.07-2009/DCP

Para establecer si la Municipalidad de Barberena cumplió con implementar la Unidad de Información y su acuerdo de creación, se solicitó informe circunstanciado al jefe edilicio y se visitó la Municipalidad, estableciéndose que la unidad fue creada.

Expediente EIO.SR.20-2009/DCP

A partir de información publicada en *Prensa Libre* se tuvo conocimiento que el corresponsal de dicho medio había sido herido por arma de fuego durante un asalto perpetrado por cuatro individuos, encontrándolo en el Km 193 de la ruta hacia Chiquimulilla. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al comisario departamental de la PNC acerca de la investigación hecha por esa institución. Se resolvió certificar el expediente a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Cuilapa, en vista de que los hechos son constitutivos de delito.

Expediente EIO.SR.22-2009/DCP

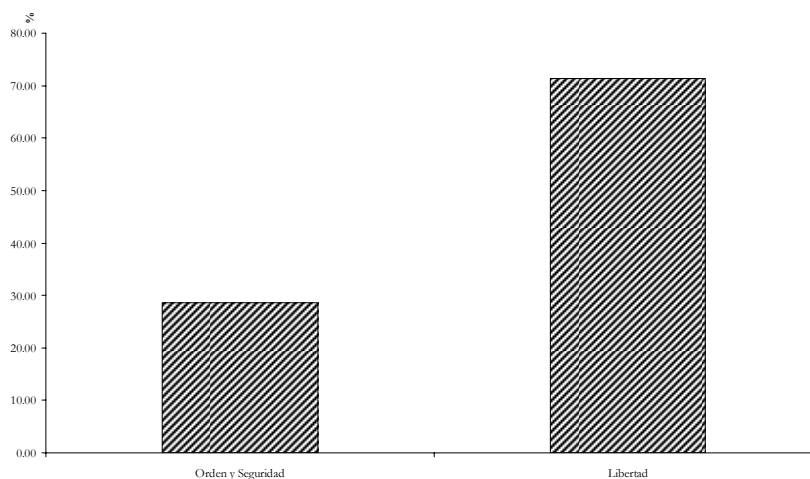
Debido a los múltiples secuestros ocurridos en Cuilapa, los vecinos manifestaron a reporteros de medios de comunicación escrita de Santa Rosa su preocupación por la inseguridad imperante, sin que las autoridades adopten medidas pertinentes para garantizar su seguridad. Como parte de la investigación realizada se tuvo conocimiento que la PNC no contaba con el Departamento de Investigación Criminal (DEINC) en Santa Rosa; al iniciar funciones dicha unidad han sido identificadas varias bandas de delinquentes.

Expediente EIO.SR.23-2009/DCP

Con base en el expediente de prevención SR.08-2009/DCP, el denunciante manifestó que fue electo popularmente como síndico primero de la Municipalidad de San Rafael Las Flores para el período 2008-2012, pero el alcalde municipal y el Concejo no le permiten reintegrarse a su cargo después de un permiso de un año que se le concedió. A partir de la investigación realizada se confirmaron los hechos denunciados.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo						1		1				2	9.52
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial			1									1	4.76
Detención ilegal					1			1				2	9.52
Omisión de brindar seguridad preventiva o personal			1									1	4.76
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Información inexacta				15								15	71.43
TOTAL MENSUAL	0	0	2	15	1	1	0	2	0	0	0	21	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Los derechos más afectados son a la salud, a la seguridad social y los cometidos contra el consumidor y usuario, por cobros desmedidos y anomalías en servicios básicos como la energía eléctrica, sin que existan procedimientos efectivos y rápidos por parte del Estado que protejan estos derechos. El abuso de poder por parte de los funcionarios municipales afecta a los vecinos, por ejemplo, en el municipio de Cuilapa se incrementó el costo del canon de agua sin explicación alguna.

En cuanto a discriminación, las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) han dejado aislado al departamento de Santa Rosa en relación con la cobertura de enfermedad común que le asiste a sus afiliados, para lo cual las personas, inclusive las de tercera edad, que gozan de este beneficio, tienen que viajar a la capital para ser atendidas.

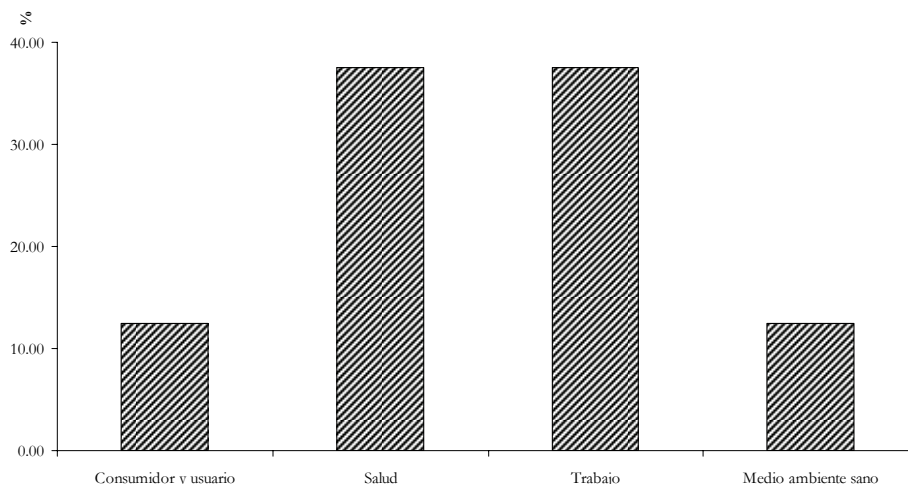
Los alcaldes, además, al tomar posesión de sus cargos, destituyeron injustamente a empleados municipales; no obstante, el Estado ha contrarrestado esta situación mediante resoluciones judiciales, contribuyendo a que se respete el derecho de los trabajadores. Asimismo, esta Auxiliatura, al tener conocimiento de los hechos, inició acciones locales, se aperturaron los expedientes respectivos y se dio asesoría a las personas para la restitución de sus derechos.

Expediente ORIENTACIÓN.SR.66-2009

El afectado inició una demanda laboral en contra del IGSS porque éste resolvió que no tiene derecho a pensión del Programa de Invalidez Vejez y Sobrevivencia (IVS) por no reunir el número de cuotas, a pesar de haber trabajado por más de 30 años en la finca la Morena, en Chiquimulilla, lugar en el cual vive. Dicha demanda la inició en el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica, Guatemala. Como parte de la investigación realizada se verificó que en el Juzgado referido se declaró sin lugar el proceso promovido por el denunciante, lo cual constituye una violación del derecho a la seguridad social por negación de la pensión por vejez.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Fraude		1										1	12.50
SALUD													
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud		1										1	12.50
Mala práctica médica	1				1							2	25.00
TRABAJO													
Falta de negociación		1										1	12.50
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo				1						1		2	25.00
MEDIO AMBIENTE SANO													
Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos									1			1	12.50
TOTAL MENSUAL	1	3	0	1	1	0	0	0	1	1	0	8	100.00



2.3 Derechos específicos

En la Auxiliatura de Santa Rosa preocupa el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar en contra de la niñez y la mujer, situaciones generadas en los propios hogares por los familiares o progenitores.

Las personas adultas mayores son discriminadas económicamente, aunque existe una ley que protege sus derechos, además de enfrentarse al incumplimiento del programa ejecutado a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Las personas reclusas en la Cárcel de Máxima Seguridad El Boquerón son obligadas a realizar trabajos forzados dentro del penal, además de verse expuestas al hacinamiento, situaciones que no son consideradas por las autoridades del Sistema Penitenciario.

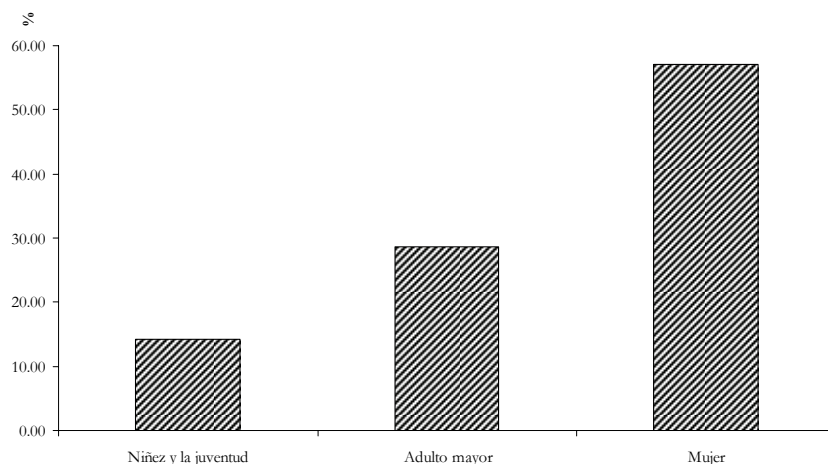
Expediente ORD.SR.05-2009

Indicó la denunciante que el juez de Primera Instancia Penal y el auxiliar fiscal de la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Taxisco agredieron físicamente a una señorita. Los vecinos colaboraron con la PNC en la captura de los agresores, quienes estuvieron detenidos en la subestación de Chiquimulilla y, posteriormente, fueron trasladados a la Cárcel El Boquerón. Ese mismo día fueron escuchados en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cuilapa, y dejados en libertad, sin que el Ministerio Público solicitara la evaluación de la víctima por médico forense para determinar el grado de lesiones que presentaba. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa y a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público; y se estableció que el personal del Ministerio Público no requirió el examen médico forense para presentarlo en la audiencia de la primera declaración, motivo por el cual los sindicados fueron dejados en libertad por falta de mérito.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil				1								1	14.29
ADULTO MAYOR													
Falta de acceso a la seguridad social		1		1								2	28.57

MUJER													
Discriminación cultural, social, económica, política		1										1	14.29
Violencia física o psicológica		1	1									2	28.57
Abusos deshonestos					1							1	14.29
TOTAL MENSUAL	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	7	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente ORD.SR.05-2009

Indicó la denunciante que el juez de Primera Instancia Penal y el auxiliar fiscal de la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Taxisco agredieron físicamente a una señorita. Los vecinos colaboraron con la PNC en la captura de los agresores, quienes estuvieron detenidos en la subestación de Chiquimulilla y, posteriormente, fueron trasladados a la Cárcel El Boquerón. Ese mismo día fueron escuchados en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cuilapa, y dejados en libertad, sin que el Ministerio Público solicitara la evaluación de la víctima por médico forense para determinar el grado de lesiones que presentaba. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa y a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público; y se estableció que el personal del Ministerio Público no requirió el examen médico forense para presentarlo en la audiencia de la primera declaración, motivo por el cual los sindicados fueron dejados en libertad por falta de mérito.

Expediente PREVENCIÓN.SR.18-2009/DE

Se recibió denuncia que informaba que el denunciado llevó al Hospital Nacional Regional de Cuilapa, Santa Rosa, a una menor de 14 años de edad, quien dio a luz a una niña; la madre fue dada de alta y la recién nacida permaneció internada por problemas de salud, según los médicos. Sin embargo, se constató que la madre al haber sido dada de alta no quiso llevarse a la recién nacida. El caso lo conoció el Juzgado de Menores en conflicto con la Ley Penal.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

<p>Expediente INTERVENCIÓN INMEDIATA. SR.42-2009/DE A favor de: Marco Tulio Marroquín Hernández Motivo: privado de libertad en la Cárcel de Máxima Seguridad El Boquerón necesita atención médica Declarado con lugar: el Juez de Paz ordenó el traslado del reo a un centro asistencial</p> <p>Descripción del caso: se denunció que el reo, del sector donde están reclusos los miembros de la mara Salvatrucha, padece problemas de salud por tener fracturada una pierna de la cual brota fluido con olor fétido, sin que las autoridades del Sistema Penitenciario tomen las medidas adecuadas para resguardar su salud.</p>

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.SR.01-2009/DESC	Dra. Margarita Elizabeth Cortés Arévalo de Polanco	Directora Administrativa	Hospital Nacional Regional de Cuilapa
EIO.SR.21-2009/DESC	Dra. Margarita Elizabeth Cortés Arévalo de Polanco	Directora Administrativa	Hospital Nacional Regional de Cuilapa
EIO.SR.07-2009DCP	Rubelio Recinos Corea	Alcalde Municipal	Municipalidad de Barberena
EIO.SR.06-2009/DCP y PREV.SR.59-2009/DCP	Rudy Estuardo Castillo Guerra	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cuilapa
EIO.SR.14-2009/DCP	Abel Sandoval Martínez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Oratorio
EIO.SR.09-2009/DCP	José Manuel de Jesús Morales Girón	Alcalde Municipal	Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas
EIO.SR.15-2009/DCP	Genaro Paez Vásquez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Chiquimulilla
EIO.SR.17-2009 DCP	Otto Enrique Vásquez Peralta	Alcalde Municipal	Municipalidad de Taxisco
EIO.SR.22-2009/DCP	Luis Francisco González Estrada	Comisario Departamental	Comisaría 32, PNC Cuilapa
ORD.SR.06-2009/DE	Edgar Armando Paz López	Delegado Departamental	Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SR.03-2009/DESC			Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima (DEORSA)
PREV.SR.05-2009/DCP	Ing. Enrique Cossich	Director Ejecutivo	Registro Nacional de Personas
PREV.SR.34-2009/DCP y PREV.SR.36-2009/DESC	Rudy Estuardo Castillo Guerra	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cuilapa
PREV.SR.68-2009/DESC	Felipe Rojas Rodríguez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Casillas
PREV.SR.08-2009/DCP y PREV.SR.60-2009DCP	Marvin de Jesús Pivarla Monterrozo	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Rafael Las Flores

Funcionarios públicos declarados violadores de derechos humanos

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.SR.23-2009/DCP, acumulado PREV.SR.08-2009/DCP	Marvin de Jesús Pivarla Monterrozo	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Rafael Las Flores

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	383
De apertura de expedientes de investigación	36
Ampliación de plazo para la investigación	36
Acumulación de expedientes	1
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	28
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	4
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	1
Comportamiento administrativo lesivo	
> Con recomendación	2
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	3
TOTAL	494

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Reuniones con diferentes representantes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil para tratar el tema de desnutrición en el departamento y conformación del Frente contra el Hambre.

Incidencia política

- Dos monitoreos a escuelas para verificar procesos de inscripciones y entrega de refacción escolar.
- Tres monitoreos al Hospital Regional de Cuilapa para verificar los servicios prestados, presupuesto y casos de desnutrición.
- Dos monitoreos, realizados en Barberena, conjuntamente con el Salud, Ambiente y la Municipalidad, por la venta de bebidas alcohólicas cerca de establecimientos educativos.
- Seis monitoreos: agua potable, seguridad alimentaria, Oficina de Acceso a la Información, infraestructura de establecimientos educativos, educación en Derechos Humanos.
- 28 reuniones: seis con la Comisión Departamental de Medio Ambiente para tratar temas relacionados con el ambiente, seis con la Comisión de Prevención del SIDA, ocho con el Consejo Departamental de Desarrollo de Santa Rosa, cinco con Consejos Municipales de Desarrollo, una con la Coordinadora Departamental de CODRED sobre el Sistema de CONRED y principales amenazas, y dos con diferentes instituciones para tratar el tema de seguridad alimentaria.
- Dos incidencias: una por bloqueo de carretera en el kilómetro 65, por campesinos de la plataforma agraria de los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa; y otro por el Sindicato de Salud de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa.

- Seis visitas a la Cárcel de Máxima Seguridad El Boquerón, cinco para durante requisas realizadas y una por disturbios.
- Participación en la elección de COCODES de las diferentes comunidades del departamento.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz mediante el desarrollo de procesos participativos de capacitación, reflexión e intercambio con las diferentes entidades estatales, organizaciones y la sociedad civil, para fomentar el diálogo y negociación en la búsqueda y fortalecimiento de una cultura de paz.
- El proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz ha sido insuficiente para la mayoría de la población guatemalteca, debido a que lo gubernamental se ha limitado a la organización y conformación de comisiones o instituciones que velen por el cumplimiento, pero en la mayoría de los casos no se traduce en ejercicio permanente de políticas públicas.

Educación y promoción

- 36 reuniones con las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).
- 20 talleres de Escuela para Padres de Familia en los diferentes municipios de Santa Rosa.
- 16 capacitaciones: 13 a la niñez y juventud de los establecimientos educativos de Santa Rosa; tres con grupos de personal de ascenso de antinarcóticos de la Escuela Centroamericana Antinarcótica Canina PNC-DAIA en la aldea El Cernal, Barberena.
- 20 capacitaciones sobre recepción de denuncias y seguimiento a las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia de los municipios de Pueblo Nuevo Viñas y Casillas.
- Cuatro reuniones interinstitucionales con el Ministerio Público, Iglesia Católica y el Área de Salud para el seguimiento de la Red de Derivación de Cuilapa.
- Dos ferias de la Niñez y Juventud, en coordinación con Plan Internacional y autoridades locales, en los municipios de Santa Cruz Naranjo y Taxisco.
- Elección del Niño o Niña Procurador en Santa Rosa.
- Celebración de dos festivales “Expresemos nuestros Derechos”, en establecimientos educativos del municipio de Casillas.

Auxiliatura Municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa



Auxiliatura Municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa

De enero a noviembre de 2009 se han suscitado varios hechos delictivos en la región: muertes violentas y secuestros, pese a ello, no se ha recibido ninguna denuncia en esta Auxiliatura. En este contexto, el Estado es el responsable de brindar seguridad a la ciudadanía, la que debe ser asumida por las correspondientes autoridades y exigida de manera responsable por la sociedad civil. A la situación anterior se suma la intolerancia y falta de respeto por parte de las autoridades, debido al autoritarismo, prepotencia y abuso de poder.

Uno de los programas sociales de gobierno que ha creado expectativa en la población es el que pretende favorecer de forma económica a las personas de la tercera edad, sin embargo, en este departamento es un proceso lento. El Estado debe invertir más en el área de la salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional, de manera que se garantice el desarrollo integral de la niñez y juventud.

En cada municipio que cubre esta Auxiliatura hay un Juzgado de Paz, y el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía Municipal instalada en Taxisco, lo que indica que la cobertura de justicia ha mejorado, no obstante, hay muchas quejas acerca del seguimiento a los procesos. El temor a represalias afecta la presentación de pruebas para las condenas, lo cual repercute en la aplicación de la justicia.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Municipal de Chiquimulilla se realizaron 119 acciones específicas: 40 de orientación, 43 de prevención, 14 de observación, 6 de mediación, 1 operativos y 15 de intervención inmediata.

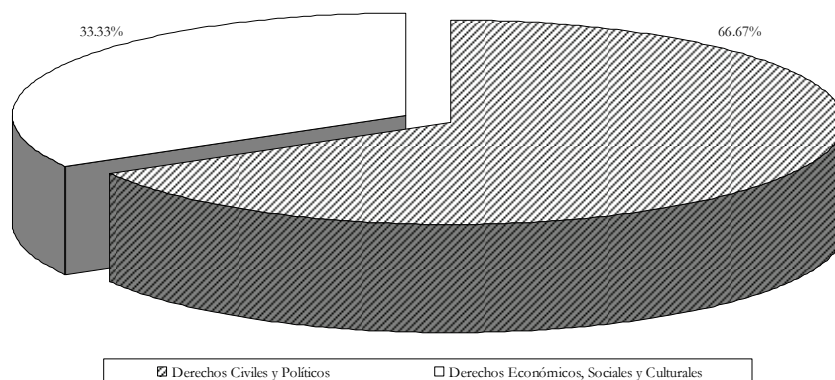
De investigación

Se abrieron 3 expedientes de investigación: 2 por violaciones a derechos individuales y 1 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 33.33% de oficio y el 66.67% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 92.31% forma parte del Organismo Ejecutivo.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos			1				1					2	66.67
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1											1	33.33
TOTAL MENSUAL	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio							1					1	33.33
Ordinario	1		1									2	66.67
TOTAL MENSUAL	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	40	33.61
Prevención	43	36.13
Observación	14	11.76
Mediación	6	5.04
Operativo	1	0.84
Intervención inmediata	15	12.61
TOTAL	119	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo		2	1	1	1	1	1			3	2	12	9.30
Judicial	1											1	0.78
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	2	1	1	1			1		1	1		8	6.20
A-A no determinado					1							1	0.78
Ministerio Público			1			1			1			3	2.33
Centros educativos particulares								1		1		2	1.55
DEORSA	1	1	1	1	1		2		1			8	6.20
Particulares	6	9	8	10	6	8	8	9	7	8	10	89	68.99
Registro Nacional de las Personas					2							2	1.55
COCODES				1	1							2	1.55
OCRET									1			1	0.78
TOTAL MENSUAL	10	13	12	14	12	10	12	10	11	13	12	129	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

La problemática social que se vive en la región es compleja y la población se ve afectada por la violencia, la extorsión, asaltos y robos. Los lugares de mayor riesgo son: Chiquimulilla, Taxisco y Guazacapán. Un avance positivo es la presencia de un delegado del Viceministerio de Gobernación que trabaja organizando juntas locales municipales de seguridad; por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) realiza acercamientos con la población por medio de reuniones, visitas a las escuelas y una campaña de puerta en puerta, en especial en el área urbana. La estación de la PNC de Chiquimulilla, que tiene a su cargo las subestaciones de Chiquimulilla, Taxisco, Guazacapán, San Juan Tecuaco, Casas Viejas y Monterrico, fue dotada con equipo y la infraestructura de sus instalaciones fue mejorada y ampliada.

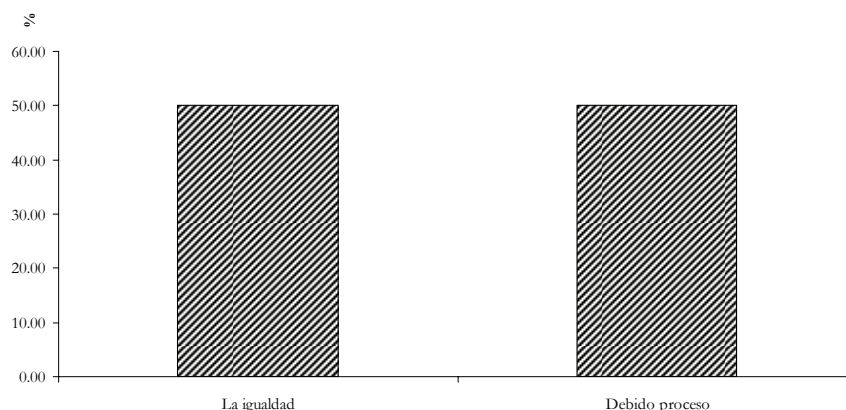
Esta Auxiliatura ha realizado acciones de incidencia, con énfasis en casos relacionados con autoridades del gobierno municipal, y ha asistido a reuniones convocadas por Gobernación Departamental, la SEGEPLAN, la PNC y alcaldes municipales para tratar temas como violencia y seguridad ciudadana, y acciones en centros educativos del nivel medio, enfocadas a justicia, dignidad, respeto y tolerancia, con el afán de prevenir toda acción violenta en la juventud.

Expediente PREV.CHI.SR.14-2009/DCP

Vecinos de Guazacapán denunciaron al alcalde municipal por instalar, de manera arbitraria, un mercado en plena vía pública, todos los lunes a partir de las seis de la mañana y, aunque hace falta, el lugar no es adecuado. A partir de la investigación realizada se determinó que el mercado obstaculiza las puertas de las viviendas y las salidas vehiculares, expele malos olores y la basura ha proliferado en el lugar. Además, la vía es acceso a Guazacapán para todos los vehículos del transporte urbano, extraurbano y particulares que transitan de oriente a poniente. Se logró que el alcalde municipal se reuniera con el grupo de vecinos, en presencia de un delegado de la PDH, proponiendo los afectados otro lugar para dicho mercado.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
LA IGUALDAD													
Falta de atención pública							1					1	50.00
DEBIDO PROCESO													
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial			1									1	50.00
TOTAL MENSUAL	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

La discriminación y exclusión se observa en la prestación de servicios por parte de algunos empleados públicos, siendo en ocasiones denunciados funcionarios municipales, de Salud Pública, del Magisterio, de los Juzgados de Paz y del Ministerio Público, entre otros.

La situación de pobreza y falta de empleo en la región, así como los altos precios de la canasta básica, los combustibles y el transporte urbano y extraurbano, entre otros, así como deficiencias en los servicios de salud y educativos, hacen que gran parte de la población se halle en situación de vulnerabilidad.

Se hace necesario que el Estado desarrolle acciones tendientes a defender los derechos de los consumidores, para que las empresas que prestan los servicios no cometan arbitrariedades ni abusos de poder. Tal es el caso de la DEORSA, pues los vecinos han denunciado abusos de toda clase cometidos por personal de esta empresa, señalándolos de cobrar energía sin facturar, cobrar excesos de consumo manipulando los contadores, no aceptar reclamos, cobrar por toda clase de “servicio” (como revisiones de acometidas), prepotencia y abusos en contra del usuario.

Expediente ORD.CHI.SR.01-2009/DESC

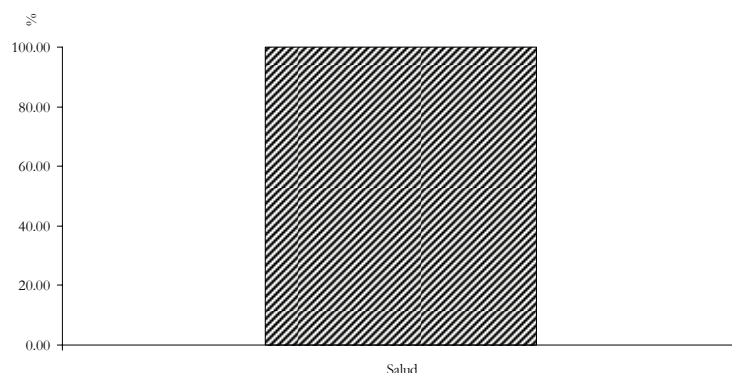
La denunciante manifestó que dio a luz a una niña que fue atendida por personal de turno en el área de Maternidad del Centro de Salud de Chiquimulilla quienes, por una mala práctica médica, provocaron la muerte de la recién nacida. Como parte de la investigación se requirieron informes circunstanciados al director del Área de Salud de Santa Rosa y al Centro de Salud de Chiquimulilla y se entrevistó a los padres.

Expediente OBSERVACION.CHI.SR.04-2009/DESC

Vecinos de Chiquimulilla han rechazado el incremento al valor del alumbrado público; durante su campaña electoral, el actual alcalde ofreció bajar dicho costo pero no cumplió. Como parte de la investigación se verificó un aumento de más del 100% al servicio, llegando al extremo que usuarios del área urbana y rural pagan más por alumbrado público que por consumo propio. El actual gobierno municipal adoptó la política de colocar lámparas donde no las había, pagando los vecinos por dicho servicio. Se efectuaron reuniones con participación de representantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, DEORSA, la Municipalidad y la sociedad civil de Chiquimulilla.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - DESC Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
SALUD													
Mala práctica médica	1											1	100.00
TOTAL MENSUAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00



2.3 Derechos específicos

Expediente Orientación.CHI.SR.08-2009/DE

Vía telefónica se recibió una denuncia anónima referente a que el denunciado obligaba a sus cuatro hijos menores de edad a pedir dinero en la vía pública, en Guazacapán, y que los menores se encuentran en situación de abandono, desnutrición y mendicidad. Aparentemente, la madre está muy enferma. Con la investigación realizada se constataron los hechos denunciados, por lo que se solicitó el rescate de los menores, el cual estuvo a cargo del Juez de Paz de Guazacapán (con acompañamiento de personal de esta Auxiliatura) y el caso fue remitido al Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia de Jutiapa.

Expediente Orientación.CHI.SR.05-2009/DE

La denunciante indicó que desde el año 2005, tras la separación de su conviviente en el Juzgado de Paz de Chiquimulilla, éste quedó obligado a dar pensión alimenticia de Q450 mensuales para la manutención de los dos hijos que procrearon juntos. No obstante, él la ha intimidado y ofendido y, en ocasiones, en estado de ebriedad, ha ingresado por la fuerza a la vivienda, violentado la puerta y destruyendo algunos objetos, situación por la cual la hijastra presentó una denuncia en la Fiscalía Distrital del Ministerio Público. Como parte de la investigación se verificó que la Fiscalía Municipal de Taxisco tiene documentado el caso, y que citó al denunciado quien, en acta firmada, se comprometió a no seguir agrediendo a la familia.

3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente EIO.CHI.SR.05-2009/DCP

Se solicitó la presencia de personal de esta Auxiliatura debido a que, al momento de capturar a dos mujeres que habían sido sorprendidas robando en una residencia en Chiquimulilla, las acompañaba una niña de 4 años de edad, hija de una de las detenidas. Como parte de las diligencias efectuadas se localizó al hermano de la madre quien, luego de identificarse debidamente, se hizo cargo de la menor.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
OBSERV.CHI.SR.01-2009/DCP	Licda. Ana Maritza Mazariegos	Jueza de Paz	Juzgado de Paz
OBSERV.CHI.SR.05-2009/DCP	Licda. Siria González	CTA	Supervisión de Educación, Chiquimulilla
INT.INM.CHI.SR.07-2009/DCP	Oficial Mainor Lemus	Jefe de Estación	Subestación PNC de Chiquimulilla
EIO.CHI.SR.01-2009/DCP	Prof. Genaro Páez Vásquez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Chiquimulilla
PREV.CHI.SR.14-2009/DCP	Francisco Orantes	Alcalde Municipal	Municipalidad de Guazacapán
OBSERV.CHI.SR.06-2009/DCP	Lic. Otto Vásquez Peralta	Alcalde Municipal	Municipalidad de Taxisco
ORIENT.CHI.SR.10-2009/DCP	Lic. René Arturo López Camey	Fiscal Municipal	Fiscalía Municipal, Ministerio Público, Taxisco
ORD.CHI.SR.01-2009/DESC	Dra. Lilians de León	Coordinadora de Salud	Centro de Salud, Chiquimulilla
PREV.CHI.SR.03-2009/DCP	Prof. Genaro Páez Vásquez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Chiquimulilla



5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	118
De apertura de expedientes de investigación	3
Ampliación de plazo para la investigación	3
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	42
Con suspensión por conocerlo un órgano administrativo	12
Con suspensión por desistimiento	4
Acumulación de expedientes	74
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	3
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	1
> Con recomendación	1
Que existe violación mas no nos pronunciamos sobre los grados de participación y responsabilidad por existir indicios de delito y, por tanto, certificamos al Ministerio Público	2
Comportamiento administrativo lesivo	1
> Con censura	1
TOTAL	265

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- De potabilidad del agua.
- De respeto a la identidad cultural en centros educativos.
- Del sistema de Consejos de Desarrollo.
- De trata de personas.
- De seguridad alimentaria y nutricional.
- De amenazas contra activistas de los derechos humanos.

Incidencia política

- Además del acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil organizada se ha ejercido toda clase de presión a efecto de lograr que se bajen los costos del alumbrado público.

Educación y promoción

- Cuatro conferencias: en el Colegio Proyecto Iglesia de Dios, con motivo del aniversario de la convención de los derechos del niño; en la Asociación Campesina Xinca Las Lomas; en la Escuela Departamental de Educación Física de Guazacapán, y durante la actividad con red de jóvenes del nivel regional, en coordinación con APROFAM.

Auxiliatura Departamental de Sololá



Auxiliatura Departamental de Sololá

De enero a noviembre de 2009 se ha observado que la falta de políticas públicas pertinentes ha incidido en que los índices de mortalidad, analfabetismo, pobreza, delincuencia, desempleo, y la falta de vivienda, salud, educación, etcétera, sigan afectando al grueso de la población.

Además de la violación del derecho a la vida, los hechos delictivos aumentan, sin que las autoridades encargadas de brindar seguridad a la población sean capaces de dar la cobertura y atención necesarias. La población más vulnerable es la niñez y juventud, y la mujer. Los niños y niñas son víctimas de maltrato infantil, abuso sexual, pornografía infantil, desnutrición y negligencia en relación con la atención médica. Las mujeres sufren de violencia intrafamiliar física, psicológica y patrimonial.

No obstante, se han observado avances en materia de aplicación de leyes especiales, como la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que favorecen a estos grupos. Del mismo modo, en la aplicación de justicia en los casos de niñez y adolescencia se han decretado medidas cautelares de urgencia, rescate y traslado a hogares de cuidado u hospitales, y en los casos de violencia intrafamiliar se han decretado las medidas de seguridad pertinentes.

En cuanto a salud, los puestos de Salud, así como los centros de convergencia y el Hospital Nacional no cuentan con los servicios, medicamentos, personal e infraestructura requeridos por la población, con lo cual se ha registrado un aumento de la mortalidad infantil y materna. La falta de políticas y condiciones en materia educativa no permite que haya una reducción en los porcentajes de analfabetismo.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Sololá se realizaron 1,034 acciones específicas: 292 de orientación, 157 de prevención, 38 de observación, 94 de mediación, 19 operativos, 218 de acompañamiento, 35 de conciliación, 52 de intervención inmediata y 129 de atención a la víctima.

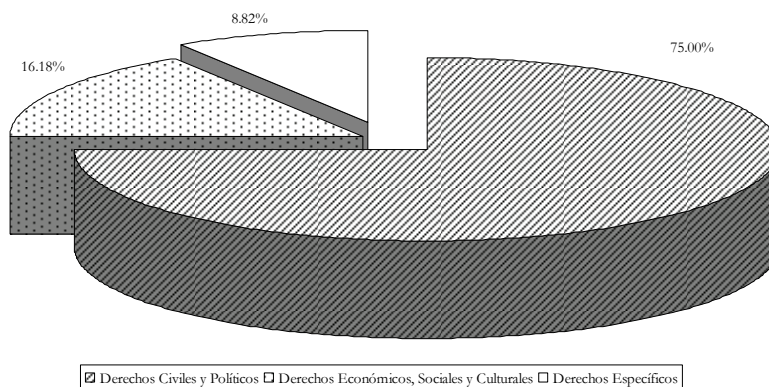
De investigación

Se abrieron 68 expedientes de investigación: 51 por violaciones a derechos individuales, 11 a derechos económicos, sociales y culturales y 6 a derechos específicos. De ellos, el 10.29% de oficio y el 89.71% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 88.89% forma parte del Organismo Ejecutivo y 11.11% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	9	3	3	6	2	5	1	3	2	6	11	51	75.00
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1		3	1			1	4		1		11	16.18
Derechos Específicos		2	1	1	2							6	8.82
TOTAL MENSUAL	10	5	7	8	4	5	2	7	2	7	11	68	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio		1	1				1	2		1	1	7	10.29
Ordinario	10	4	6	8	4	5	1	5	2	6	10	61	89.71
TOTAL MENSUAL	10	5	7	8	4	5	2	7	2	7	11	68	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	292	28.24
Prevención	157	15.18
Observación	38	3.68
Mediación	94	9.09
Operativo	19	1.84
Acompañamiento	218	21.08
Conciliación	35	3.38
Intervención inmediata	52	5.03
Atención a la víctima	129	12.48
TOTAL	1,034	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	5	2	1	6	1	2	2	3	2	3	5	32	47.06
Judicial		1			1	1					1	4	5.88
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	1	2	2		1	2		3		3	3	17	25.00
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social				1				1				2	2.94
Ministerio Público	2										1	3	4.41

DEOCSA			1									1	1.47
Programa Nacional de Resarcimiento										1	1	2	2.94
TELGUA	1											1	1.47
Centros educativos comunitarios	1											1	1.47
Particulares			3	1	1							5	7.35
TOTAL MENSUAL	10	5	7	8	4	5	2	7	2	7	11	68	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

El derecho al orden y la seguridad ha sido el más violado en el departamento, sin que las autoridades encuentren una solución para disminuir la violencia y la delincuencia en el área, dándose casos de asesinatos en varios municipios, en especial en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

El número de denuncias por amenazas e intimidaciones ha aumentado, siendo principalmente por extorsiones vía telefónica; en todos los casos, esta Auxiliatura ha solicitado seguridad perimetral y personal, con el fin de proteger la vida de las personas afectadas.

Otra de las problemáticas afrontadas es el incumplimiento de deberes de muchos funcionarios o empleados públicos de las diferentes instituciones con presencia en Sololá, tal el caso de jueces que no toman en cuenta denuncias y declaraciones.

Expediente ORD.SOL.14-2009/DCP

Indicó la denunciante que el juez de paz de Nahualá no tomó en cuenta su declaración en la denuncia que interpusiera por un conflicto familiar. Como parte de la investigación se entrevistó a la familia de la denunciante y se solicitó informe circunstanciado al juez de paz de Nahualá. En la entrevista y los informes entregados por el juez de paz se comprobó que no está registrada la denuncia ni la declaración como medio de defensa por parte de denunciante.

Expediente ORD.SOL.09-2009/DCP

Una persona anónima manifestó que las mujeres recluidas en el Centro Preventivo de Sololá son objeto de maltrato e intimidaciones por parte de la rectora de dicho centro. Como parte de la investigación se entrevistó a las ocho mujeres reclusas y a la encargada del centro (agente de la PNC) y se solicitó informe circunstanciado a las autoridades competentes. Tras haberse comprobado los hechos denunciados, la rectora fue trasladada a otro centro.

Expediente PREV.SOL.80-2009/DCP

Manifestó el denunciante que él y su familia fueron objeto de amenazas por personas desconocidas, hecho conocido por la PNC e investigado por las instancias correspondientes; sin embargo, solicitó la intervención del Procurador de los Derechos Humanos para que le sean brindadas medidas de seguridad. Se realizaron los oficios correspondientes para solicitar medidas de seguridad (perimetral) a favor del denunciante y su familia y se remitió denuncia a la Fiscalía del Ministerio Público para que, en coordinación con la PNC, se hicieran las investigaciones correspondientes del caso; finalmente se logró la captura de los presuntos responsables.

Expediente ORD.SOL.19-2009/DCP

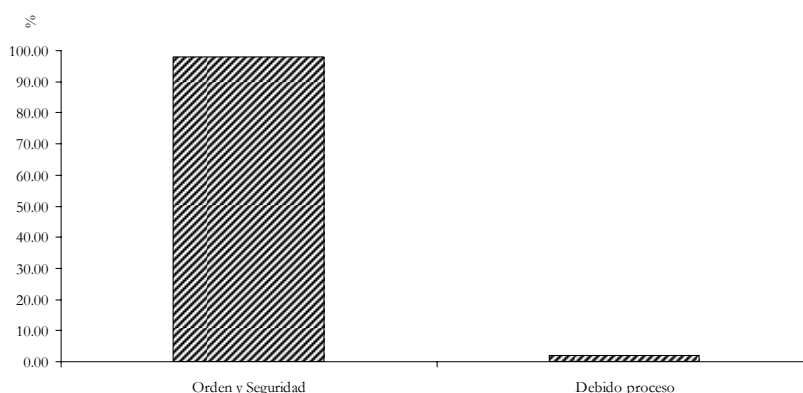
Pobladores de San Antonio Palopó manifestaron su preocupación porque se repita la tragedia ocurrida el 15 de julio de 2008 cuando, debido a los trabajos de construcción de la colonia Residenciales Villas de Santiago, un desborde de aguas pluviales causó destrucción de viviendas y la muerte de algunas personas en la cabecera

municipal. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al delegado departamental del Ministerio de Ambiente y Recurso Naturales, al alcalde municipal de San Antonio Palopó y a la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público; además, se realizaron inspecciones oculares en diferentes fechas.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	7	1	1	4	2	3	1	2	2	3	3	29	56.86
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial	1	1	2	1		2		1		2	6	16	31.37
Amenazas, coacción	1											1	1.96
Limitar el derecho de acción o de petición		1		1						1	1	4	7.84
DEBIDO PROCESO													
Discontinuidad y lentitud procesal											1	1	1.96
TOTAL MENSUAL	9	3	3	6	2	5	1	3	2	6	11	51	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

El Ministerio de Educación, con base en las actuales políticas, espera superar el déficit en la cobertura educativa, en especial con la modalidad bilingüe intercultural, buscando resolver problemas como la falta de aulas y edificios, y el consecuente hacinamiento.

Los derechos de los trabajadores se han visto violentados por despidos ilegales e injustos y la falta de pago de las prestaciones laborales.

En materia de salud, no se ha logrado reducir la tasa de mortalidad infantil, situación que se ha visto agravada por los problemas de desnutrición crónica y aguda que afronta la niñez del departamento. Los problemas relativos a la cloración del agua potable por parte de las autoridades municipales han desencadenado

conflictos entre comunidades. También se ha detectado falta de salubridad en los rastros municipales de los seis municipios que se toman como base para el operativo que se realiza en el ámbito institucional.

Con respecto del tema del medio ambiente, han proliferado los basureros clandestinos en muchos lugares del departamento, dañando la salud de las personas y vulnerándole su derecho a un ambiente sano.

Expediente ORD.SOL.42-2009/DESC

Como parte del operativo realizado por el personal de la institución del PDH para establecer si los rastros cumplen con los requisitos higiénicos, se entrevistó a los propietarios o encargados de los rastro, a los trabajadores encargados del sacrificio y faenado del ganado y se realizó observación de infraestructura. Además, se solicitaron informes circunstanciados al representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a la Jefatura del Área de Salud, y a los alcaldes municipales de Sololá, Santa Lucía Utatlán, Santa María Visitación, Santa Clara la Laguna, Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. A partir de la investigación se determinó que ninguno de los rastros inspeccionados llena los requisitos mínimos para el sacrificio del ganado.

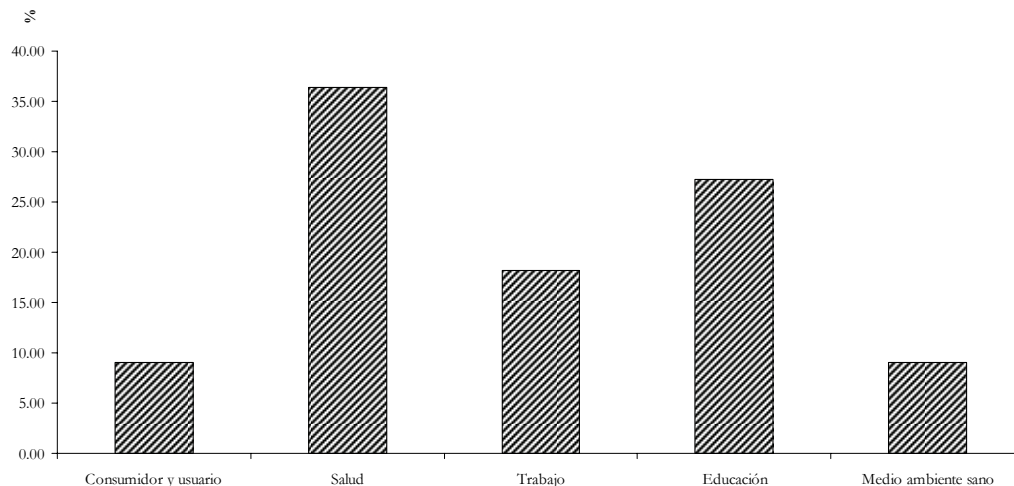
Expediente EIO.SOL.05-2009/DESC

A partir de información proporcionada por la Jefatura del Área de Salud, para el año 2008, de las 2,500 personas atendidas por los centros y puestos de salud, la casi totalidad presentaba problemas gastrointestinales y diarrea, siendo una de las principales causas el consumo de agua sin hervir o no potabilizada, situación que afectó más a los menores de 1 a 10 años de edad, se entrevistó a las autoridades municipales y se solicitaron informes circunstanciados a los alcaldes municipales, a la Jefatura del Área de Salud y al representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Además, se realizaron verificaciones en cada municipio.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Alzas inmoderadas de precios y tarifas			1									1	9.09
SALUD													
Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)	1							1				2	18.18
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)								1				1	9.09
Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado			1									1	9.09
TRABAJO													
Despido ilegal o injusto				1				1				2	18.18
EDUCACIÓN													
Falta de insumos y material didáctico			1									1	9.09
Falta de infraestructura							1	1				2	18.18
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos										1		1	9.09
TOTAL MENSUAL	1	0	3	1	0	0	1	4	0	1	0	11	100.00





2.3 Derechos específicos

Se ha registrado un mayor número de casos de violación a los derechos de la niñez, víctima de maltrato infantil, abuso sexual, pornografía, desnutrición y negligencia en la atención médica. En cuanto a la mujer, las denuncias refieren violencia intrafamiliar, física, psicológica y patrimonial. Siempre en referencia a este grupo, las mujeres reclusas fueron víctimas de agresiones psicológicas y verbales y mala alimentación.

En este contexto, la Auxiliatura ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia de Familia las medidas de seguridad, pero se ha observado que las personas desconocen la aplicación de éstas. Otro factor preocupante es que muchos operadores de justicia recurren a juntas conciliatorias en los casos de violencia intrafamiliar, sin importar la vida y la integridad de las mujeres y los niños.

Expediente PREV.SOL.57-2009/DE

La denunciante manifestó que desde octubre de 2008 ha sido víctima de maltrato por parte de su esposo, quien la agrede verbal y psicológicamente, y sólo le da entre Q.200 y Q.300 a la semana para la alimentación de los cinco menores a su cargo. Se brindó acompañamiento para presentar la denuncia ante el Juzgado de Paz local, donde se solicitaron las medidas de seguridad, las cuales fueron decretadas. El Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia confirmó las medidas.

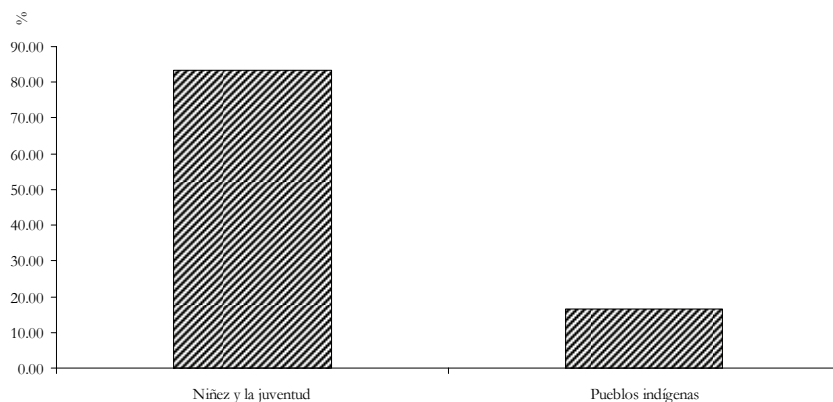
Expediente PREV.SOL.68-2009/DE

Se recibió denuncia anónima, vía telefónica, informando que en el barrio Xepatuj, municipio de Nahualá, vive una niña de 13 años que fue violada, producto de lo cual dio a luz a un bebé, acusando de este hecho a un maestro de la localidad, dueño de la casa que la familia de la menor alquila. Tras verificar el caso, se remitió la denuncia la Fiscalía Distrital del Ministerio Público, se solicitaron medidas cautelares al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia de Sololá, se realizó solicitud de acompañamiento jurídico a la Defensoría de la Mujer Indígena, se remitió el caso a la delegada de la Procuraduría General de la Nación, se brindó acompañamiento y se solicitó un examen de ADN.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil			1									1	16.67
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven		1			1							2	33.33
Abuso físico o mental		1										1	16.67
Abuso sexual				1								1	16.67
PUEBLOS INDÍGENAS													
Discriminación racial					1							1	16.67
TOTAL MENSUAL	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	100.00



3. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente PREV.SOL.77-2009/DCP

A favor de: Manuel Tambriz

Motivo: por desaparición

Declarado con lugar: no, porque al estudiar el caso no se dan los presupuestos contenidos en el artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Descripción del caso: el 31 de mayo de 2009, el señor Tambriz, de 28 años de edad, se encontraba en el cantón Paxhipac, Nahualá, donde vive el señor Manuel Ramírez, quien lo golpeó en diferentes partes del cuerpo y después de la fecha referida se desconoce el paradero de la víctima.

Expediente PREV.SOL.123-2009/DCP

A favor de: Cinthia Estephania Gómez y Mario César Gómez

Motivo: por estar retenidos contra su voluntad

Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: el 13 de agosto de 2009 se remitió memorial al Juzgado de Paz de Nahualá, el que contiene exhibición personal a favor de Mario Cesar y Cinthia Estephania, ambos de apellidos Gómez, por estar retenidos en contra de su voluntad en la vivienda de la señora Catarina Tzoc Sac.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD SOLICITADAS

Expediente PREV.SOL.01-2009/DCP A favor de: Oneyda Rosario Palacios de León y su familia Motivo: por amenazas de muerte por parte de personas desconocidas Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: personas desconocidas llegaron a la vivienda de la denunciante en un vehículo con vidrios polarizados, insultando e intimidándola a ella y a su familia, amenazándola de muerte, por lo cual se teme por la seguridad e integridad física de los afectados.
Expediente PREV.SOL.05-2009/DCP A favor de: Santos Mendoza Motivo: por atentado en contra de la integridad física del líder y defensor de los derechos humanos Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: vía telefónica, el Auxiliar Móvil de Sololá indicó que el señor Santos Mendoza, líder indígena y defensor de los derechos humanos, fue víctima de un atentado.
Expediente PREV.SOL.71-2009/DCP A favor de: Angélica Dalia Sazo Xaminez y su familia Motivo: por amenazas de ser linchada por los cuatro cantones de la comunidad de Santa Lucía Utatlán Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: teme por su vida y la de su familia, pues es objeto de señalamientos por parte de su esposo, por celos, y la amenaza de ser linchada por la comunidad.
Expediente PREV.SOL.102-2009/DCP A favor de: Catalina Quisquiná Cuc Motivo: por amenazas e intimidaciones Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: el 19 de julio de 2009 la víctima recibió una llamada telefónica en la cual la amenazaron de muerte, indicándole que la estaban esperando en el kilómetro 120.
Expediente PREV.SOL.109-2009/DCP A favor de: Jorge Alonzo Xalcut Motivo: por amenazas e intimidaciones Declarado con lugar: sí
Descripción del caso: en varias oportunidades la víctima ha sido amenazada de muerte con arma de fuego por parte del señor Antonio Pocop Acetun.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SOL.02-2009/DESC	Gerardo Isamel Higueros Miranda	Alcalde	Municipalidad de Panajachel
ORD.SOL.03-2009/2009	José Amilcar Velásquez Sarate	Fiscal General	Ministerio Público
ORD.SOL.04-2009/DCP	Israel Chochoy Yac	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.SOL.06-2009/DCP	Erik Giovanini Locon Yac	Director	Escuela de Canoas Altas, San Andrés Semetabaj

ORD.SOL.07-2009/DCP	Gerardo Isamel Higueros Miranda	Alcalde	Municipalidad de Panajachel
	Dr. Julio Roberto Marroquín Alburez	Gerente General	Instituto de Fomento Económico (INFOM)
	Diego Díaz	Presidente	Órgano de Coordinación, Panajachel
ORD.SOL.08-2009/DCP	Alberto Tzep Toj	Delegado Municipal	Registro Nacional de las Personas
ORD.SOL.09-2009/DCP	Lic. Eddy Morales	Director General	Dirección General del Sistema Penitenciario
	Rafael Enrique Gonzáles Huinac	Comisario	PNC
ORD.SOL.10-2009/DCP	Rafael Enrique Gonzáles Huinac	Comisario	PNC
	Gral. Habraham Valenzuela Gonzáles	Ministro	Ministerio de Defensa
ORD.SOL.11-2009/DCP	Ing. Juan Fernando Castro Martínez	Gerente General	Instituto Nacional de Electrificación
ORD.SOL.14-2009/DCP	Lic. Oscar Chavayay Dionicio	Juez de Paz	Organismo Judicial
ORD.SOL.19-2009/DCP	Ing. Genry Estuardo Pérez Juárez	Delegado Departamental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
	Andres Cúmes Pérez	Acalde	Municipalidad de San Antonio Palopó
ORD.SOL.20-2009/DESC	Ing. Cesar Augusto Fernández Fernández	Director	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ORD.SOL.21-2009/DCP	Lic. Israel Chocoj Yac	Director Departamental	Ministerio de Educación
	Licda. Olga Patricia Tuy Jiatz	Encargada de UDA.	Ministerio de Educación
	Lic. Otto de León	Encargado	Jurado Nacional de Oposición, Ministerio de Educación
	Licda. Samara Yojana Velásquez Herrera	Directora de Recursos Humanos	Ministerio de Educación
ORD.SOL.24-2009/DCP	Faustino Villatoro Pisqui	Encargado	Subestación PNC
	Lic. Elmer Fernando Martínez Mejía	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD.SOL.25-2009/DESC	Dr. Israel Lemus Bojorquez	Director General del Sistema Integral	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
	Aristides Arnoldo Arévalo Arévalo	Jefe de Recursos Humanos	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ORD.SOL.26-2009/DCP	Rafael Enrique Gonzáles Huinac	Comisario	PNC
ORD.SOL.28-2009/DCP	Dr. Francisco Moscoso	Director	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
ORD.SOL.30-2009/DCP	Lic. Oscar Chavayay Dionicio	Juez de Paz	Organismo Judicial
ORD.SOL.31-2009/DCP	Lic. Israel Chocoj Yac	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.SOL.32-2009/DE	Gerardo Isamel Higueros Miranda	Alcalde	Municipalidad de Panajachel
	Francisco Ricardo Navarro	Juez de Asuntos Municipales	Municipalidad de Panajachel
ORD.SOL.33-2009/DCP	Lic. Israel Chocoj Yac	Director Departamental	Ministerio de Educación
ORD.SOL.34-2009/DCP	Gerardo Isamel Higueros Miranda	Alcalde	Municipalidad de Panajachel
ORD.SOL.35-2009/DCP	Rafael Enrique Gonzáles Huinac	Comisario	PNC
	Herbert López Carreto	Encargado	Subestación PNC

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SOL.03-2009/DCP	Licda. Claudia Marina Muñoz Andrade	Agente Fiscal	Ministerio Público
ORD.SOL.04-2009/DCP	Lic. Pedro Iboy Chiroy	Presidente	Jurado Departamental, Ministerio de Educación
ORD.SOL.05-2009/DCP	Licda. Claudia Marina Muñoz Andrade	Agente Fiscal	Ministerio Público
ORD.SOL.08-2009/DCP	Rubén Reyes Ruis	Delegado Departamental	Registro Nacional de las Personas
ORD.SOL.16-2009/DESC	Lic. Israel Chocoj Yac	Director Departamental	Ministerio de Educación
	Licda. Dinora Cabrera Linares	Encargada DIGEPSA	Ministerio de Educación
ORD.SOL.19-2009/DCP	Cristian Rodríguez	Delegado Departamental	CONRED
	Lic. Noe Saúl López Palacios	Fiscal de Sección	Ministerio Público
ORD.SOL.20-2009/DESC		Encargado Departamental	Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA)
ORD.SOL.25-2009/DESC	Dr. Celso Cerezo Mulet	Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
	Dr. Eddy Martín Puac Peneleú	Director	Área de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ORD.SOL.36-2009/DCP	Lic. Fabián de León Pérez	Juez de Primera de Instancia Penal	Organismo Judicial
ORD.SOL.37-2009/DCP	Francisco Tambriz Tambriz	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán
ORD.SOL.40-2009/DCP	Dr. Eddy Martín Puac Peneleú	Director	Área de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
EIO.SOL.02-2009/DESC	Dr. Miguel Augusto Rodas	Director	Centro de Salud, Municipio de Nahualá
EIO.SOL.03-2009/DESC	Toribio Say Bajan	Gerente	COCODE, municipio y departamento de Sololá
EIO.SOL.05-2009/DESC	Lic. Manuel Tzoc Carrillo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Nahualá
	Francisco Tambriz Tambriz	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán
	Ing. Edgar Rolando Sosa Dionisio	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santa María Visitación

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	559
De apertura de expedientes de investigación	72
Medidas urgentes	18
Ampliación de plazo para la investigación	35
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	30
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	1
Acumulación de expedientes	2

Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	77
ACCIONES O RECURSOS PLANTEADOS	
Exhibiciones	2
TOTAL	796

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Apoyo a la asociación CODEIN en la elaboración de dos diagnósticos específicos: salud y educación, en el tema de discriminación y racismo.
- Diagnóstico de salud identificando 12 posibles casos de discriminación cometidos en Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá y el municipio de Sololá.
- Diagnóstico de educación dando prioridad a dos casos: la no autorización del Instituto Básico por Cooperativa Aq'ab'al de Santa Catarina Ixtahuacán, habiendo demanda de población escolar; y, abuso de relaciones de poder que da como resultado la presunta comisión del delito de discriminación y violencia en contra de la mujer en educación.
- Realización de foros con operadores de justicia y autoridades de Salud y Educación, en los temas: “Herramientas y convenios nacionales e internaciones para erradicar la discriminación” y “Análisis de la discriminación como delito, artículo 202 BIS del Código Penal”.

Incidencia política

15 monitoreos a las distintas instituciones del Estado y municipalidades de los diferentes municipios de Sololá sobre:

- útiles y refacción escolar,
- calidad de la atención médica y tratamiento e intervenciones a pacientes en el Hospital Nacional,
- potabilidad del agua para el consumo humano,
- condiciones higiénico-sanitarias de los rastros municipales y
- seguridad alimentaria.

Educación y promoción

- Una reunión de intercambio de experiencias para la socialización de educación en derechos humanos en el departamento.
- Tres talleres de capacitación sobre la Ley del Procurador de los Derechos Humanos
- Taller de capacitación sobre violaciones de las garantías constitucionales durante el conflicto armado interno, con líderes y lideresas, en coordinación con ASO-SEPRODI, en Santa Catarina Ixtahuacán (25 participantes).
- Taller de capacitación a lideresas de comunidades de Sololá (18 participantes).
- Taller de capacitación con madres y padres de familia beneficiarios de CARITAS Sololá.
- Tres talleres de capacitación con estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales de Sololá, sobre tema de seminario: “Multiculturalidad e interculturalidad” (10 participantes).
- Taller dirigido a personas de centros y puestos de salud, educación, comadronas y COCODES (30 participantes).
- Conferencia sobre la Ley de Acceso a la Información, con miembros de la Asamblea Ordinaria del COMUDE de San Andrés Semetabaj (60 participantes).
- Acompañamiento para la revisión del Reglamento Interno para estudiantes de la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO), con la participación de autoridades educativas de la Dirección Departamental de Educación, coordinadores técnicos administrativos, autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de Santa Lucía Utatlán.

- Actividad con el tema: “Qué son los derechos humanos” (15 participantes).
- Tres reuniones con la Red de Paternidad y Maternidad Responsable (14 participantes).
- Cuatro conformaciones con la Red Municipal de Paternidad y Maternidad Responsable de San Lucas Tolimán, Santa Lucía Utatlán, Nahualá y Santiago Atitlán.
- Ocho conferencias con el tema “Acceso a la justicia oficial y aplicación del derecho maya”, con la participación de alcaldes comunitarios y COCODES.
- Foro sobre discriminación y racismo, con la participación de personal de Educación y jueces de Paz (36 participantes).
- Capacitación a promotoras de COINDE (11 participantes).
- Proyección del vídeo “Luchemos contra el olvido” (95 participantes).
- Ocho programas radiales en español y k’iche’, abierto a preguntas al aire, uno de los cuales se enlazó con cinco emisoras en toda la República.
- Una actividad del proyecto “Abuelos por siempre”.

Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlán, Sololá



Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlán, Sololá

De enero a noviembre de 2009, en esta área han disminuido los casos de muertes violentas, sin embargo, los vecinos y visitantes siguen siendo víctimas de robo por parte de bandas delincuenciales que operan en la carretera de San Lucas Tolimán, según datos proporcionados por la estación de la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio de Santiago Atitlán. Aunque la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), conjuntamente con la sociedad civil, ha logrado que la Comisaría 72 de la PNC implemente patrullajes constantes y cumpla con operativos y acción policial para contrarrestar y desarticular a dichas bandas, el recurso humano y equipamiento no le permiten dar la cobertura necesaria a toda el área.

Las denuncias de violencia intrafamiliar han disminuido por los constantes procesos de sensibilización y divulgación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; sin embargo, en algunos casos las mujeres no han denunciado los hechos de violencia por temor a que sus esposos vayan a la cárcel.

Por otra parte, los encargados de aplicar la ley aún tienen desconocimiento del derecho y de las leyes vigentes en Guatemala, por cuanto que algunas resoluciones judiciales no han sido apegadas al derecho, violando con ello el debido proceso, lo que repercute en la situación jurídica de algunos sindicados o procesados.

En materia de salud, el grupo más vulnerable son las familias de escasos recursos económicos, puesto que cuando acuden a los centros de salud y centros de convergencia sólo les extienden recetas para comprar los medicamentos en las farmacias particulares, debido a la escasez de éstos en dichos centros asistenciales. En cuanto a la educación, en las escuelas públicas hay sobrepoblación de alumnos por la falta de infraestructura. El programa Mi Familia Progresando no ha logrado satisfacer las necesidades básicas de las familias de extrema pobreza, en tanto que no se les ha dado prioridad en materia económica, vivienda digna, trabajo y acceso a la tierra.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlán se realizaron 465 acciones específicas: 62 de orientación, 38 de prevención, 34 de mediación, 8 operativos, 93 de acompañamiento, 3 de intervención inmediata y 227 de atención a la víctima.

De investigación

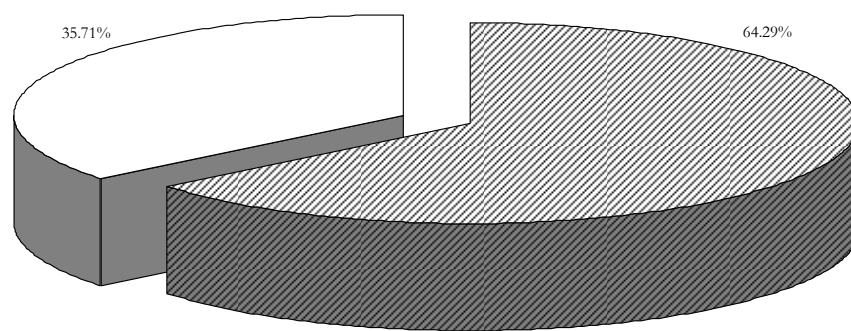
Se abrieron 28 expedientes de investigación: 18 por violaciones a derechos individuales y 10 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 21.43% de oficio y el 78.57% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 83.33% forma parte del Organismo Ejecutivo y 16.67% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1	4	3	3	2			2		1	2	18	64.29
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1	1	1	2	2					1	2	10	35.71
TOTAL MENSUAL	2	5	4	5	4	0	0	2	0	2	4	28	100.00



☒ Derechos Civiles y Políticos

☐ Derechos Económicos, Sociales y Culturales

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	1			1	1			1		1	1	6	21.43
Ordinario	1	5	4	4	3			1		1	3	22	78.57
TOTAL MENSUAL	2	5	4	5	4	0	0	2	0	2	4	28	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	62	13.33
Prevención	38	8.17
Mediación	34	7.31
Operativo	8	1.72
Acompañamiento	93	20.00
Intervención inmediata	3	0.65
Atención a la víctima	227	48.82
TOTAL	465	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	2	1	1	3	1			1		1		10	41.67
Judicial					1			1				2	8.33
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades		3	2	1	2					1		9	37.50
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		1	1									2	8.33
Consejos de Desarrollo				1								1	4.17
TOTAL MENSUAL	2	5	4	5	4	0	0	2	0	2	0	24	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

En el área, los hechos o circunstancias más frecuentes son las violaciones de los derechos a la seguridad e integridad física, puesto que siguen los asaltos en las carreteras. Las amenazas en contra de líderes comunitarios por grupos de delincuentes organizados no se han logrado contrarrestar. A ello se suma que aquellos grupos organizados para garantizar la seguridad de los vecinos de cada municipio, también violan los derechos de muchos ciudadanos, al detenerlos sin ningún motivo legal, argumentando que es la forma de contrarrestar la delincuencia.

La arbitrariedad se pone de manifiesto al momento de la detención de las personas, pues no se les informa de su derecho a un abogado en las diligencias, y por tal motivo la Auxiliatura ha interpuesto recursos de amparo. Por su parte, los encargados de impartir justicia violan el principio de igualdad ante la ley y el derecho a un juicio imparcial, garante del debido proceso.

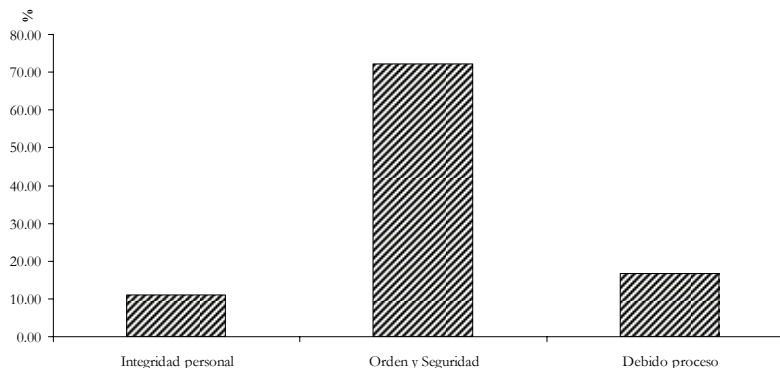
Expediente ORD.MOV.SOL.01-2009/DCP

Según los denunciantes, el dueño del hotel Villa del Sol llamó a la Policía Municipal debido a que un joven se encontraba en el lugar haciendo escándalo bajo efectos del alcohol. Cuando los agentes denunciados llegaron al lugar el joven ya se había retirado, pero lo encontraron caminando por la calle, donde lo detuvieron y agredieron físicamente, acusándolo de intento de robo. Motivo de la agresión tuvo que ser internado en el Hospital Roosevelt, por lo que se solicitó la intervención de la institución del PDH. Como parte de la investigación se requirió informe circunstanciado al alcalde municipal de San Pedro la Laguna y al jefe de la Subestación de la PNC del citado municipio, y se tomó declaración testimonial del agente de la Policía Municipal y del dueño del hotel. El caso es conocido e investigado por la Fiscalía Municipal del Ministerio Público del municipio de Santiago Atitlán.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
INTEGRIDAD PERSONAL													
Tratos o penas inhumanas o degradantes	1			1								2	11.11
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo		1	3	2	1			1		1	1	10	55.56
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial		2										2	11.11
Limitar el derecho de acción o de petición		1										1	5.56
DEBIDO PROCESO													
No presumir su inocencia											1	1	5.56
No permitir su defensa								1				1	5.56
No tener acceso a instancias plurales (apelaciones)					1							1	5.56
TOTAL MENSUAL	1	4	3	3	2	0	0	2	0	1	2	18	100.00





2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Los derechos económicos, sociales y culturales se ven afectados porque el Estado no ha garantizado el derecho a la salud, a la tierra, a una vivienda digna, principalmente en las áreas afectadas por la tormenta Stan. Existe violación del derecho al seguro social, teniéndose conocimiento de dos casos a los cuales no se ha dado el trámite correspondiente para agilizar el goce del derecho de jubilación. Ha habido discriminación en la atención a la salud por falta de personal y medicamentos. Y en las escuelas públicas faltan docentes y la infraestructura es insuficiente para la cantidad de alumnos. En cuanto al abuso de poder, los servicios son lentos y engorrosos, situación que afecta a la población.

Expediente ORD.MOV.SOL.07-2009/DESC

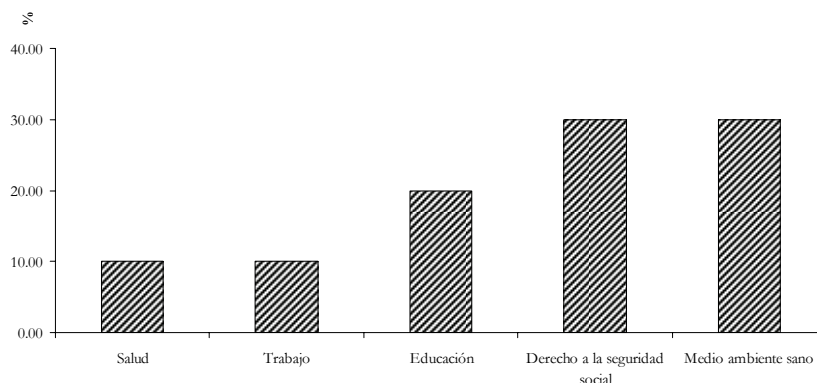
Indicó el denunciante que en agosto de 2008 solicitó a la Caja del IGSS la jubilación por invalidez, pero le manifestaron que para tener derecho a la misma debía contar con el dictamen del departamento de Medicina Legal. El denunciante estableció fecha para llevar a cabo el diagnóstico médico pero dicha cita se canceló debido al atraso del banco en el envío de un formulario. Debido a que el IGSS le negó otra cita, solicitó la intervención de la institución del PDH, por considerar que las actitudes de los funcionarios públicos pueden vedarle su derecho. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al gerente general del IGSS y se le informó de la posible violación del derecho a la seguridad social por la insuficiente cobertura al beneficiario. A partir de la información recabada se determinó que fue el denunciante quien no asistió a la cita en el departamento de Medicina Legal y no se presentó a la Caja departamental a solicitar una nueva cita para ser evaluado.

Expediente ORD.MOV.SOL.04-2009/DESC

El denunciante manifestó que en 2003 ingresó solicitud de pensión por vejez en la Caja del IGSS de Patulul, Suchitepéquez, pero le negaron la pensión en vista de que le faltan 23 contribuciones, pero el afectado considera haber alcanzado el número necesario. Se solicitó informe circunstanciado al gerente general del IGSS. Con base en la revisión y análisis por parte de la Junta Directiva del IGSS, y de acuerdo con el artículo 15 inciso a) del Acuerdo 1124 de la Junta Directiva, se demostró que al denunciante le faltan 23 aportes al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, para cumplir con lo establecido en dicho artículo.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Negación o falta de medicamentos				1								1	10.00
TRABAJO													
Falta de negociación											1	1	10.00
EDUCACIÓN													
No ser tratado con justicia											1	1	10.00
Falta de infraestructura				1								1	10.00
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Inexistente cobertura social		1	1		1							3	30.00
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos	1				1					1		3	30.00
TOTAL MENSUAL	1	1	1	2	2	0	0	0	0	1	2	10	100.00



2.3 Derechos específicos

En estas áreas se evidencia la falta de atención a las necesidades específicas y condiciones de los grupos tradicionalmente marginados o particularmente vulnerados: mujeres, niñez y adolescencia, personas adultas mayores y personas con discapacidad. La discriminación y exclusión contra los pueblos indígenas y las mujeres persisten y de forma marcada. El abuso de poder es cometido con frecuencias contra personas de escasos recursos quienes, por su misma condición, carecen de los medios para contar con el auxilio de un profesional en casos penales.

Expediente ORD.MOV.SOL.17-2009/DE

El denunciante fue condenado por faltas contra las personas, pero no le fue entregada copia de la sentencia, perjudicándolo por la imposibilidad de interponer un recurso de apelación. Como parte de la investigación realizada se solicitó informe circunstanciado al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial; y se orientó al denunciante para interponer el recurso constitucional de Amparo, en virtud de que una organización internacional le proporcionó un abogado para que lo auxilie. Aunque las investigaciones permitieron establecer que la jueza de Paz del municipio fue responsable de violación del derecho humano al debido proceso por negar el acceso a instancias plurales, en virtud de que el

denunciante no logró interponer las acciones legales que corresponde en el tiempo perentorio, la Junta Directiva no resolvió a lugar la denuncia en contra de la juzgadora, ni el recurso constitucional de amparo.

Expediente ORD.MOV.SOL.18-2009/DE

La afectada denunció que un grupo de agentes de la PNC, encabezado por la fiscal contra la Narcoactividad de Occidente, se presentó a su residencia e ingresó a ella sin presentar la orden de juez competente ni explicarle el motivo del allanamiento, además de haberla coaccionado e intimidado. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado al juez de Paz del municipio de San Pedro La Laguna y al jefe de la Subestación de la PNC; y se entrevistó al esposo de la denunciante. Con base en la información recabada se determinó que el allanamiento fue apegado a derecho en virtud de que el esposo de la denunciante es propietario de un bien inmueble donde días antes había sido localizado un cultivo de marihuana valorado en Q300 mil.

3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente EIO.MOV.SOL.02-2009/DESC

Con base en información publicada en el diario *Prensa Libre* y el monitoreo realizado por esta Auxiliatura, se estableció que en los centros de salud, puestos de salud y centros de convergencias hay escasez de medicamentos, motivo por el cual los pacientes deben comprar las medicinas en farmacias particulares. Esta situación afecta a la población de los municipios de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna y San Juan la Laguna. La investigación realizada y los informes circunstanciados rendidos por las autoridades respectivas permitieron establecer que la falta de medicamentos se debió a un retraso en la recepción de éstos en el Área de Salud de Sololá, lo que repercutió en los centros de salud de los municipios antes mencionados. Sin embargo, aunque se cumplió con el abastecimiento los medicamentos entregados no fueron suficientes.

Expediente EIO.MOV.SOL.02-2009/DESC

A partir de información publicada en *Prensa Libre* referente al riesgo de que la bahía de San Lucas, en el lago de Atitlán se convierta en pantano por los altos niveles de basura que la contaminan, vecinos y el presidente del Comité de Autogestión Turística de Patulul, Suchitepéquez, y San Lucas Tolimán, Sololá, expresaron su preocupación ante la falta de respuesta por parte de las autoridades. Ante la situación se solicitó informe circunstanciado a la gobernadora departamental de Sololá, al director administrativo de AMSCLAE y al delegado departamental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Sololá, autoridades éstas que han iniciados acciones en coordinación con las autoridades municipales de San Lucas Tolimán para buscar alternativas que ayuden a contrarrestar la contaminación.

Expediente PREV.MOV.SOL.21-2009/DE

Tras la captura de un hombre, que bajo efectos del alcohol insultaba y amenazaba a su ex conviviente, el sindicato prestó declaración ante el juez de Paz del municipio de San Pedro la Laguna sin contar con el auxilio de abogado defensor, lo que le ha impedido no sólo poder defenderse de la acusación en su contra sino, además, se le ha imposibilitado impugnar las declaraciones judiciales emitidas. Como parte de la investigación se trasladó el caso al área de asesores de la institución del PDH, donde fue analizado y se presentó un amparo ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sololá, el cual trasladó el caso al Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Santiago.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE AMPARO

Expediente ORD.MOV.SOL.17-2009/DE

Descripción del caso: José Reanda Pablo solicitó acción constitucional de amparo contra la señora Armida Jeannette Gramajo Rivera, jueza de Paz Interina del municipio de Santiago Atitlán, por violación del debido proceso. En la resolución se ordenó a la institución aconsejar o patrocinar al compareciente, por actuar sin la dirección y procuración de un abogado por carecer de recurso económicos. El Procurador de los Derechos Humanos le dio el auxilio profesional al amparista.

Expediente PREV.MOV.SOL.21-2009/DE

Descripción del caso: en agosto de 2009 se presentó ante el Tribunal de Sentencia Penal de Sololá un amparo verbal a favor del señor Agustín García Coché, a quien se le atribuyó que bajo efectos de licor insultaba y amenazaba de muerte a su ex conviviente, quebrantando las medidas de seguridad vigentes a favor de dicha persona. El sindicado prestó declaración ante la autoridad impugnada sin contar con el auxilio de abogado defensor.

Expediente PREV.MOV.SOL.22-2009/DE

Descripción del caso: los señores Félix Enrique López Criado y Marvín Antonio Tuch González fueron condenados por el delito de desobediencia y se les impuso multa por incumplir con las medidas de seguridad que habían sido otorgadas por el juez competente. Los sindicados prestaron declaración ante el Juez de Paz del municipio de San Pedro La Laguna sin contar con el auxilio de un abogado defensor. No se justifica en el caso concreto que el condenado haya ejercido su propia defensa, porque no tiene ningún conocimiento técnico legal sobre la materia y porque ello le perjudicaba en la eficacia de la defensa técnica.

5. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente PREV.MOV.SOL.19-2009/DCP

A favor de: Felipe Sosof Pospoy
Motivo: por detención ilegal
Declarado con lugar: sí

Descripción del caso: según la señora Juana Sapalú Reanda, el 8 de junio su conviviente Felipe Sosof Pospoy se encontraba en su casa, ubicada en la colonia Alfa y Omega, en Santiago Atitlán, cuando llegó un grupo de agentes de la PNC, la jueza de Paz y el Comité de Seguridad a realizar un allanamiento, ya que sospechaban que el referido señor había participado en un hecho ilícito, por lo fue aprehendido. Al establecer la hora y lugar en que se llevó a cabo el ilícito, el señor Sosof Pospoy se encontraba trabajando en el lugar denominado Chokumuk 3, por lo que no había indicios racionales para ser detenido.

Expediente PREV.MOV.SOL.22-2009/DCP

A favor de: Marvin Antonio Tuch González
Motivo: violación al debido proceso
Declarado con lugar: no

Descripción del caso: esta institución conoció de oficio que el señor Marvin Antonio Tuch González fue sentenciado por el delito de desobediencia. En la parte resolutive de la sentencia aparece que el imputado es autor responsable del delito, por cuya autoría se le impone una multa en efectivo y de no hacerla efectiva dentro del plazo legal se le privará de su libertad a razón de Q100 por cada día, haciendo un total de 500 días de prisión. El referido lleva aproximadamente diez meses de prisión pero la pena impuesta rebasa el límite que establece el Código Penal de sesenta días de privación de libertad. Esta institución solicitó la intervención inmediata de la jueza de paz de Santiago Atitlán en virtud de que la sentencia dictada viola los derechos del debido proceso y por lo tanto existe una detención ilegal.

Expediente PREV.MOV.SOL.23-2009/DCP A favor de: Félix Enrique López Criado Motivo: violación al debido proceso Declarado con lugar: no
Descripción del caso: el señor Félix Enrique López Criado fue sentenciado por el delito de desobediencia, por cuya autoría se le impone una sanción económica y de no hacerla efectiva dentro del plazo legal, se hará la conversión necesaria cumpliendo su condena con privación de libertad, a razón de Q50 por cada día, haciendo un total de 100 días de prisión. Pero como la pena impuesta rebasa el límite que establece el Código Penal de sesenta días de privación de libertad, esta institución solicitó la intervención inmediata de la jueza de paz del municipio de Santiago Atitlán en virtud de que la sentencia viola los derechos del debido proceso y por lo tanto existe una detención ilegal.

6. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.MOV.SOL.01-2009/DCP	Manuel Reanda Pablo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santiago Atitlán
ORD.MOV.SOL.02-2009/DCP	Manuel Reanda Pablo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santiago Atitlán
ORD.MOV.SOL.03-2009/DCP	Joel Francisco Mendoza	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pedro La Laguna
ORD.MOV.SOL.04-2009/DESC	Alfredo Rolando del Cid	Gerente General	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
ORD.MOV.SOL.05-2009/DCP	Israel Chocoj Yac	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.MOV.SOL.06-2009/DCP	Joel Francisco Mendoza	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pedro la Laguna
ORD.MOV.SOL.07-2009/DESC	Alfredo Rolando del Cid	Gerente General	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
ORD.MOV.SOL.08-2009/DCP	Manuel Reanda Pablo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santiago Atitlán
ORD.MOV.SOL.10-2009/DCP	Manuel Reanda Pablo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santiago Atitlán
ORD.MOV.SOL.11-2009/DCP	Francisco Tzoc Guarchaj	Presidente	COCODE de Tzucubal, Nahualá
ORD.MOV.SOL.12-2009/DCP	Manuel Reanda Pablo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santiago Atitlán
ORD.MOV.SOL.13-2009/DCP	López Pineda y Pérez Jiménez	Director	PNC
ORD.MOV.SOL.14-2009/DCP	López Pineda y Pérez Jiménez	Director	PNC
ORD.MOV.SOL.15-2009/DCP	José Flavio Yojcom Garcia	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Juan La Laguna
ORD.MOV.SOL.16-2009/DCP	Oscar Pic Solís	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Lucas Tolimán
ORD.MOV.SOL.17-2009/DCP	Arminda Jeaneth Gramajo	Juez de Paz	Juez de Paz de Santiago Atitlán
ORD.MOV.SOL.18-2009/DCP	Arminda Jeaneth Gramajo	Juez de Paz	Juez de Paz de San Pedro la Laguna
EIO.MOV.SOL.01-2009-DESC	Víctor Ariaza	Director Administrativo	AMSCLAE

EIO.MOV.SOL.01-2009-DESC	Juan Chumil Cuc	Director	Centro de Salud, Santiago Atitlán
EIO.MOV.SOL.02-2009-DESC	Juan Chumil Cuc	Director	Área de Salud, Santiago Atitlán
EIO.MOV.SOL.02-2009-DESC	Elena Yojcom	Gobernadora Departamental	Gobernación Departamental
EIO.MOV.SOL.03-2009/DESC	Víctor Ariaza	Director Administrativo	AMSCLAE
EIO.MOV.SOL.03-2009/DESC	Neri Paz	Director Ejecutivo	AMSCLAE
EIO.MOV.SOL.03-2009/DESC	Henri Estuardo Pérez Juárez	Delegado Departamental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
EIO.MOV.SOL.03-2009/DESC	Elena Yojcom	Gobernadora Departamental	Gobernación Departamental
EIO.MOV.SOL.04-2009/DCP	José Flavio Yojcom García	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Juan la Laguna
EIO.MOV.SOL.04-2009/DCP	Rafael González Huinán	Comisario	Comisaría Departamental de Sololá
ORD.MOV.SOL.19-2009	Manuel Reanda Pablo	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santiago Atitlán

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del Funcionario	Cargo	Institución
EIO.MOV.SOL.15-2009/DESC	José Flavio Yojcom García	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Juan la Laguna

7. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre de 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	134
De apertura de expedientes de investigación	28
Medidas urgentes	19
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	2
Con suspensión por desistimiento	1
Acumulación de expedientes	159
Acciones o recursos planteados	
Amparos	3
Exhibiciones	4
TOTAL	350

8. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Del resultado del diagnóstico situacional con base en indicadores, la Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlán estableció que a) del total de la población, 74.6% vive en la pobreza; b) que prevalece la falta de políticas públicas encaminadas a promover el desarrollo integral de las personas mediante educación, salud, trabajo, seguridad y vivienda; c) la debilidad política y falta de capacidad de la administración del Estado en las tareas de salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, etcétera; d) que la violencia ha ido

en aumento, sobresaliendo los asesinatos, secuestros, asaltos a buses y carros para carga, la violencia intrafamiliar y las violaciones.

Incidencia política

- 20 reuniones para fortalecer los grupos de mujeres de los municipios de Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán. En este último se conformó la Comisión de la Mujer, que aglutina a seis organizaciones de mujeres, incluyendo la Oficina Municipal, con el fin de crear un frente común para solicitar proyectos productivos en el espacio municipal, departamental y nacional.
- Dos talleres sobre los derechos de los pueblos indígenas dirigidos a grupos organizados de sacerdotes mayas, curanderos, guías espirituales y ancianos de Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna, San Juan la Laguna y San Pablo la Laguna.
- Cinco talleres relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia, dirigidos principalmente a padres de familia de la aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, con el fin de sensibilizarlos sobre los principales derechos y obligaciones de este grupo.
- Un taller en el municipio de San Juan la Laguna, dirigido al personal docente, médico y trabajadores de los centros de atención de educación especial, con los temas de derechos humanos de las personas con discapacidad, los instrumentos legales nacionales e internacionales que velan por sus derechos y la ruta a seguir en casos concretos de denuncia.
- Actividades para la promoción de los derechos de la niñez en el Día Internacional del Niño.
- Monitoreo en los municipios de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna y San Juan la Laguna para verificar la existencia de personas con discapacidad y de los centros estatales y de organizaciones no gubernamentales que atienden a este grupo.
- Mediación en el conflicto suscitado entre el Bufete Popular con sede en el municipio de Santiago Atitlán y la jueza de Primera Instancia Penal, cuyas acciones afectan a los usuarios de seis municipios que solicitan los servicios gratuitos del Bufete Popular.
- Verificación del cumplimiento del Acuerdo Ministerial número 1492-2008 del Ministerio de Educación, para garantizar que la educación de la niñez guatemalteca sea impartida por el Estado de manera gratuita.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- Tres eventos enfocados al respeto a los pueblos indígenas, con el fin de que conozcan los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
- En lo referente al acceso a la justicia, el Estado no cumple a cabalidad con facilitar funcionarios bilingües en los diferentes órganos jurisdiccionales, además, la presencia de intérpretes es escasa en varias instituciones.
- En cuanto a la educación, el Estado no ha cumplido con garantizar una educación digna ya que la infraestructura no es adecuada o es insuficiente, y la dotación de útiles, libros, material didáctico y refacciones no llegan puntualmente.

Educación y promoción

- Tres capacitaciones: una enfocada a dar a conocer la situación actual de los derechos humanos en Guatemala a un grupo de extranjeros; una con niños, niñas y adolescentes trabajadores del municipio de Santiago Atitlán enfocada a dar a conocer los derechos y garantías laborales y sensibilizar a los menores de edad respecto de sus obligaciones y derechos en materia laboral; una dirigida a padres de familia del instituto de Cerro de Oro para dar a conocer las funciones de la institución del PDH y la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia.
- Un foro con mujeres lideresas de las diferentes comunidades del municipio de Santiago Atitlán, con el objeto de darles a conocer el origen de los derechos de la mujer.
- Intercambio de experiencias con autoridades indígenas, en la comunidad de Xojolá, Nahualá, con el objeto de enfocar las intervenciones conciliatorias para evitar enfrentamientos por cuestiones de límites entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

- Unificación del trabajo que realiza cada organización de mujeres.
- Sensibilización sobre el cuidado y protección del medio ambiente enfocado a niños y niñas de la institución FOTOKIDS.
- Siembra de árboles para fomentar la conciencia ambiental, en coordinación con la comuna y una organización no gubernamental, con la participación de niños y niñas que adoptaron un árbol cada uno con el objeto de que tenga responsabilidad de cuidarlo.
- Actividad con las autoridades indígenas, con el fin de darles a conocer el contenido del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT.
- Celebración del Día del Niño y la Niña, con la niñez de Santiago Atitlán, durante la que se dieron a conocer sus derechos y sus obligaciones.
- Festival de dibujo en las escuelas públicas de los municipios de San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, con el fin de promocionar los derechos humanos de la niñez; participaron aproximadamente 800 alumnos.

Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez



Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez

De enero a noviembre de 2009, los habitantes de este departamento han sufrido persistentes violaciones de sus derechos humanos, principalmente, falta de compromiso y carencia de políticas integrales de gobierno, incremento de la violencia, discriminación, intolerancia, irrespeto, marginación y menosprecio de los grupos vulnerables. A ello se suma el hecho que la injerencia política obstaculiza el respeto de los derechos humanos por las disposiciones arbitrarias y el abuso de autoridad.

Se ha detectado un aumento de los de casos de violencia intrafamiliar producida, incluso, antes de la convivencia en pareja, con embarazos no deseados o paternidad irresponsable, afectando tanto a la mujer como a los menores de edad, quienes muchas veces se ven obligados a trabajar en las calles.

Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad no cuentan con condiciones ni servicios acordes para su atención, y en muchos casos se ven obligadas a mendigar ante el abandono o rechazo familiar y la inexistencia de instituciones públicas o privadas de atención y albergue.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental se realizaron 2,648 acciones específicas: 186 de orientación, 192 de prevención, 312 de observación, 19 de mediación, 39 operativos, 111 de acompañamiento, 30 de conciliación, 1,239 de intervención inmediata y 520 de atención a la víctima.

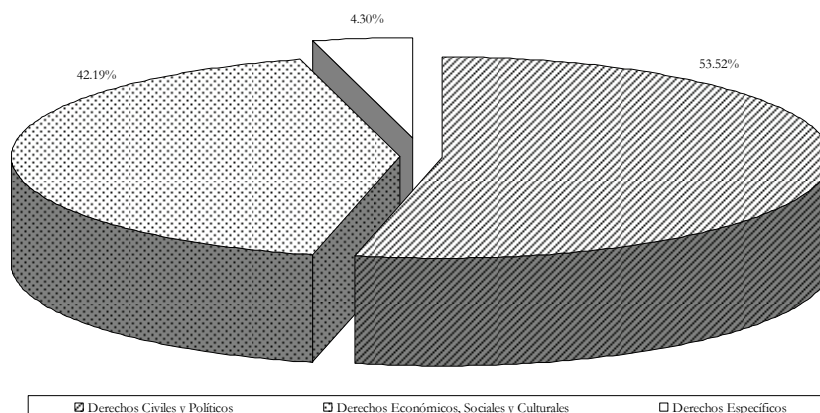
De investigación

Se abrieron 256 expedientes de investigación: 137 por violaciones a derechos individuales, 108 a derechos económicos, sociales y culturales y 11 a derechos específicos. De ellos, el 13.67% de oficio y el 86.33% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 86.43% forma parte del Organismo Ejecutivo y 13.57% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	8	14	24	10	13	13	12	12	13	12	6	137	53.52
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	9	6	16	10	14	6	18	12	2	7	8	108	42.19
Derechos Específicos	1							1	1	2	6	11	4.30
TOTAL MENSUAL	18	20	40	20	27	19	30	25	16	21	20	256	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	3	4	5	2	5	4	7	2	2	1		35	13.67
Ordinario	15	16	35	18	22	15	23	23	14	20	20	221	86.33
TOTAL MENSUAL	18	20	40	20	27	19	30	25	16	21	20	256	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	186	7.02
Prevención	192	7.25
Observación	312	11.78
Mediación	19	0.72
Operativo	39	1.47
Acompañamiento	111	4.19
Conciliación	30	1.13
Intervención inmediata	1,239	46.79
Atención a la víctima	520	19.64
TOTAL	2,648	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	6	4	2	5	16	11	20	10	11	21	15	121	35.17
Judicial	2	2	1	2	5	1	3	2			1	19	5.52
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	4	3	5	3	7	6	7	6	2	4	2	49	14.24
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	4	2	6	5	7	10	5	3	4	7	1	54	15.70
A-A no determinado				1								1	0.29
Ministerio Público	1	3	2	2	4	3	2	1	2	5		25	7.27
Centros educativos particulares	3	2	3	1	1							10	2.91
DEOCSA	2	4	6	3	6	2	5	3	3	3	1	38	11.05
Particulares			1									1	0.29
Consejos de Desarrollo	2		2	1								5	1.45
Defensa Pública Penal				1								1	0.29
Tribunal Supremo Electoral	1			1								2	0.58
BANRURAL			1							2		3	0.87
Programa Nacional de Resarcimiento				2								2	0.58
Programa Nacional del Adulto Mayor											3	3	0.87
Registro Nacional de Personas											2	2	0.58
Sistema Penitenciario											2	2	0.58

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación											1	1	0.29
Organismo Judicial											1	1	0.29
Ministerio de Salud											2	2	0.58
Ejército Nacional											1	1	0.29
Policía Nacional Civil											1	1	0.29
TOTAL MENSUAL	25	20	29	27	46	33	42	25	22	42	33	344	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

De los derechos civiles y políticos, los más quebrantados son los de orden y seguridad, en especial por abusos de autoridad, detención ilegal y limitación del derecho de acción o petición, siguiéndoles los de debido proceso. Aunque se han implementado programas de seguridad, éstos no resultan ser eficientes y, constantemente, se registran hechos violentos producidos con arma de fuego, en gran medida vinculados con el narcotráfico y la proliferación de centros nocturnos.

El abuso de poder apuntaló las violaciones de los derechos humanos en el departamento, enfatizando los cometidos por la Policía Nacional Civil (PNC) contra particulares; por los alcaldes al incrementar el valor de ciertos arbitrios y el mal trato a la población y trabajadores ediles, llegando al extremo de hacer despidos masivos de empleados con trayectoria por vinculaciones partidistas.

Expediente ORD.SUCH.28-2009/DCP

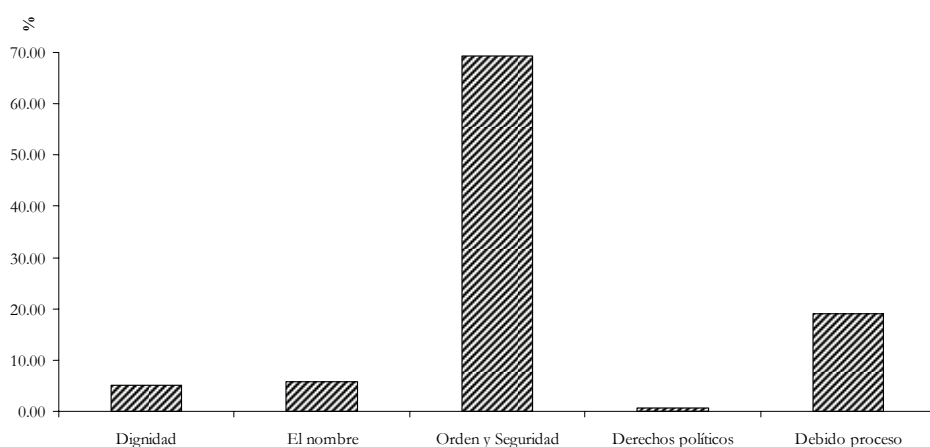
El denunciante, piloto de mototaxi, indicó que del estacionamiento de mototaxis del parque central fue conducido a la subestación de la PNC por instrucciones del denunciado, oficial 1º y jefe de la subestación, quien lo agredió físicamente y lo amenazó de muerte. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado y se citó a prestar declaración al oficial involucrado; se certificó lo conducente a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público, y oficio al Ministro de Gobernación, al director general de la PNC y a la Oficina de Responsabilidad Profesional. Se logró procedimiento penal instruido y procedimiento disciplinario administrativo en contra del sindicado y su traslado hacia otra subestación, como medida provisional.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Amenazas o intimidaciones		4							3			7	5.11
EL NOMBRE													
La falta de registro	3		1				1		1		2	8	5.84
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1	5	4	4	2	2	2	6	3	6	4	39	28.47
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial	1		4	1		1	1	2	3			13	9.49
Corrupción	1		1			1	2					5	3.65
Amenazas, coacción	1	1	1	1	1	1	1			1		8	5.84
Detención ilegal		2	1			1		1				5	3.65



Limitar el derecho de acción o de petición	1	1	4	1	4	4	3	2	3	1		24	17.52
Linchamientos						1						1	0.73
DERECHOS POLÍTICOS													
Falta de acceso a la función política								1				1	0.73
DEBIDO PROCESO													
No ser citado y oído en juicio			1									1	0.73
No ser informado de sus derechos		1	3	1								5	3.65
No contar con el auxilio de un abogado										1		1	0.73
No permitir su defensa					1							1	0.73
No permitir la utilización de todos los recursos										1		1	0.73
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial			4	2	2	2	2					12	8.76
Discontinuidad y lentitud procesal					3					2		5	3.65
TOTAL MENSUAL	8	14	24	10	13	13	12	12	13	12	6	137	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales más recurrentes son al derecho a la seguridad social, los derechos del consumidor y usuario, y a la vivienda.

Las violaciones de los derechos del usuario y consumidor han repuntado, como en el caso de los cobros desmesurados o imposición de tarifas anómalas en perjuicio de los usuarios por parte de Unión FENOSA-DEOCSA.

Se iniciaron expedientes contra la mayoría de las municipalidades por violaciones del derecho a un medio ambiente sano debido a que el manejo inadecuado de los desechos ha causado la proliferación de basureros clandestinos, por lo general en riveras o causes de ríos.

En cuanto a la educación, el Ejecutivo dispuso la gratuidad de este rubro, sin embargo, fueron detectados centros educativos que realizaron ciertos cobros con la supuesta aprobación de las asambleas de padres de familia, provocando desaprobación y malestar general en el área urbana y rural. El derecho a la educación afronta serias dificultades derivadas del idioma y los servicios prestados por entidades del Estado.

En el tema del derecho al trabajo figuran denuncias de personas que tras años de trabajar y descontárseles las cuotas de contribución al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al momento de realizar sus trámites, ya sea en los servicios hospitalarios o por jubilación en el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), son informadas que las cuotas no fueron aportadas por los patronos, negándoseles la asistencia necesaria.

Expediente SUCH.135-2009/DESC

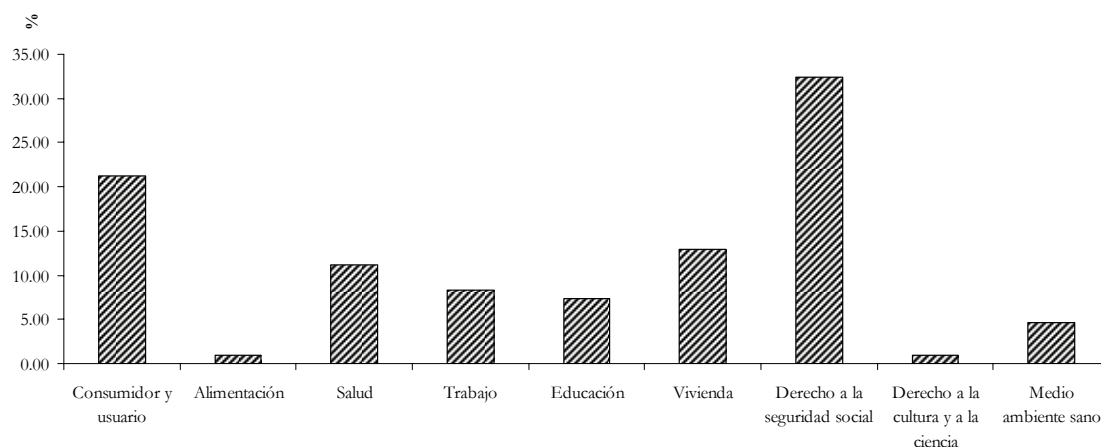
El denunciante solicitó a DEOCSA, en marzo y mayo del presente año, la reconexión del servicio de energía, cancelando la cantidad estipulada para tal efecto, pero en julio se le extendió una factura con un cobro adicional por un servicio que no solicitó y que no fue efectuado. Como parte de la investigación se verificó en DEOCSA el hecho denunciado y se solicitó informe circunstanciado a la jefa de comercialización y al jefe regional de DEOCSA, y se remitió la denuncia a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Al conocer esta entidad el hecho, DEOCSA revocó el cobro y procedió a tramitar una nueva factura con la deducción del cobro adicional.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Fraude										1	2	3	2.78
Desabastecimiento	1			3								4	3.70
Alzas inmoderadas de precios y tarifas	1	2	1		2		3					9	8.33
Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo	1		1		1	1	1	2				7	6.48
ALIMENTACIÓN													
Hambruna										1		1	0.93
SALUD													
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)			3		3		3	2		1		12	11.11
TRABAJO													
Omisión de políticas de Estado en materia laboral	1	1				2						4	3.70
Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones										1		1	0.93
Renumeración desigual (rural, mujer, niños)											1	1	0.93
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo										1	1	2	1.85
Falta de pago de las prestaciones laborales											1	1	0.93
EDUCACIÓN													
Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación										1		1	0.93
No ser escuchado			1									1	0.93
No ser tratado con justicia				1	2							3	2.78
No ser respetado							3					3	2.78



VIVIENDA													
Vivienda inadecuada			2									2	1.85
Inseguridad jurídica de la tenencia				2	2		2	2				8	7.41
Falta de servicios, materiales e infraestructura			1			2						3	2.78
Inaccesibilidad a centros de empleo, servicios de salud, guarderías, escuela, etc.						1						1	0.93
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Inexistente cobertura social								1		1	2	4	3.70
Insuficiente cobertura social de riesgos	1		2					1	1		1	6	5.56
Insuficiente cobertura social a beneficiarios			1					1	1			3	2.78
Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social	3	3	2	2	3		6	3				22	20.37
DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA													
No facilitar el disfrute del derecho a la recreación y al deporte			1									1	0.93
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminación sonora				1								1	0.93
Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos	1			1	1							3	2.78
Distribuir agua contaminada			1									1	0.93
TOTAL MENSUAL	9	6	16	10	14	6	18	12	2	7	8	108	100.00



2.3 Derechos específicos

Se registran altos índices de violencia intrafamiliar en contra de los sectores más vulnerables (mujeres, niños, personas discapacitadas y de la tercera edad), afectando la dignidad, la vida, la libertad y la integridad física y psicológica de dicha población, por lo que la Auxiliatura, en correspondencia con las leyes que amparan a tales sectores, realiza acciones y coordinaciones acordes a la necesidad de cada caso, así como todas las diligencias

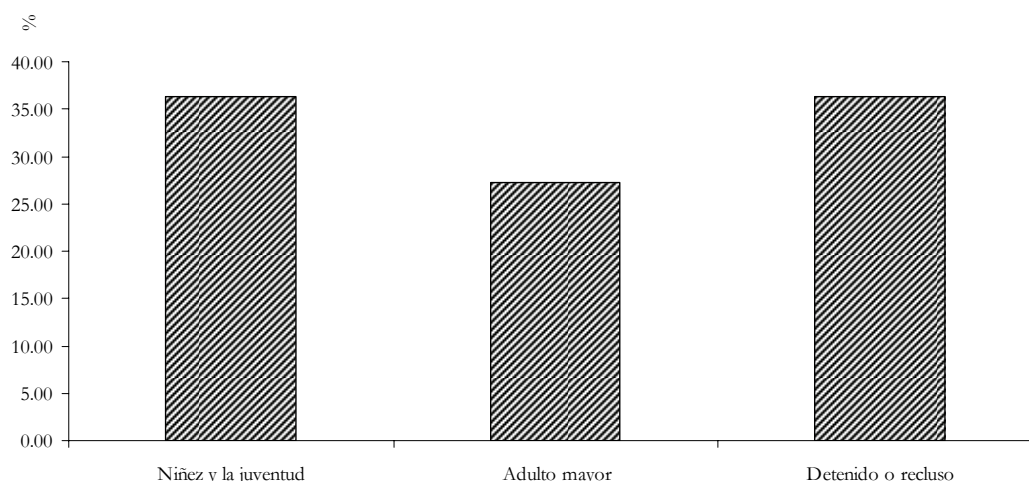
pertinentes para su abordaje y solución respectiva, con acciones a través de la Red Departamental de Atención a la Víctima.

Se ha tenido conocimiento de casos de explotación laboral de menores de edad, no obstante, ante la limitación de las políticas estatales de atención, desarrollo y seguridad no es posible realizar acciones en favor de ellos. A ello se suma el aumento del robo de infantes, situación que se considera vinculada a su comercio, extorsión o tráfico de órganos.

Pese a la promoción de los derechos específicos y la conformación y organización de grupos de personas en situación de vulnerabilidad, persiste la exclusión y discriminación de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas de la tercera edad, las personas con retos especiales y de la diversidad sexual. De éstos, los grupos más discriminados, de acuerdo con los registros de esta Auxiliatura, son las personas indígenas y las personas con discapacidad, principalmente en el ámbito laboral, pero también en el hogar. Para las personas de la tercera edad, a esta situación se suma la falta de atención integral y de programas garantes de una vejez digna, así como los insuficientes recursos de los escasos asilos que brindan atención especial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Maltrato infantil y juvenil								1	1			2	18.18
Acoso sexual										1	1	2	18.18
ADULTO MAYOR													
Discriminación cultural, social, económica, política											3	3	27.27
DETENIDO O RECLUSO													
Acciones que atentan contra su dignidad											1	1	9.09
Maltrato	1											1	9.09
Acciones que atentan contra la salud										1	1	2	18.18
TOTAL MENSUAL	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	11	100.00



3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente ORD.GUA.4017-2008/DE

A requerimiento de la Coordinadora de Auxiliaturas de la institución del PDH se realizó diligenciamiento para detectar supuestos malos tratos a niños del Hogar para Niños Jerusalén, por presumir que el fundador abusaba sexualmente de ellos; la mayoría de los menores se encuentra en custodia temporal por los juzgados correspondientes. A partir de la investigación realizada se estableció que el denunciado efectivamente había cometido los hechos de los que se le acusa, pero en la casa hogar de Quetzaltenango. La Fiscalía Distrital del Ministerio Público ha recibido varias denuncias por el delito de abusos deshonestos contra el agresor; las víctimas, menores de entre 5 y 8 años de edad, denunciaron estos abusos, los que fueron comprobados al realizar pruebas psicológicas y médicas. Se rescató a 50 menores, los que fueron puestos a disposición del juez competente.

Expediente ORD.SUCH. 153-2008/DESC

El denunciante manifestó que su esposa dio a luz en el IGSS; al presentarse al Registro Nacional de las Personas para la inscripción del niño le exigieron el certificado de nacimiento, pero en el IGSS no se lo quisieron extender a menos que llevara a un donador de sangre. A partir de la investigación realizada se confirmó que el IGSS está ejerciendo tales mecanismos para abastecer el banco de sangre, lo cual se considera violatorio de los derechos de los afiliados, toda vez que la norma de proceso señala que para obtener los servicios del seguro social el único requisito es estar cotizando. Se intercedió a favor del denunciante ante la Junta Directiva del IGSS y se corrigió tal procedimiento.

Expediente ORD.SUCH. 01-2009/DESC

El denunciante manifestó que en noviembre de 2008 realizó el pago de Q35 para la conexión de drenajes a la Tesorería Municipal de Santo Domingo Suchitepéquez; en enero de este año solicitó otra conexión, para la cual le requirieron la cantidad de Q500. A partir de la investigación realizada se tuvo conocimiento que el Concejo Municipal autorizó una nueva tarifa de arbitrios, según el alcalde municipal por la necesidad de incrementar las arcas municipales por la deuda millonaria dejada por la anterior administración. Sin embargo, el secretario municipal manifestó que no existía el punto de acta de la sesión ordinaria del Concejo mediante el cual se autorizaban tales tarifas y que, además, disposiciones de ese tipo deben ser publicadas en el diario oficial para su vigencia, de lo contrario tales cobros serían ilegales. Finalmente, los cobros quedaron sin efecto, por no haber sido tratados en sesión ordinaria de Concejo ni existir publicación en el diario oficial.

EXPEDIENTE ORD.SUCH.152-2009/DESC

La denunciante, enfermera del Centro de Salud del municipio de San Bernardino, denunció una serie de anomalías, principalmente carencias y debilidades de ese centro de asistencia médica, al jefe de Distrito, pero no fue atendida. Posteriormente, por presiones del alcalde municipal y sin motivo, fue trasladada. A partir de la investigación realizada se confirmó que la Jefatura del Área de Salud dispuso el traslado de la denunciante por presiones del alcalde en mención; medida administrativa que fue revocada a partir de la intervención de esta Auxiliatura.

Expediente ORD.SUCH.52-2009/DCP

La denunciante manifestó que su hija, de 17 años de edad, quien padece problemas de sordomudez, fue violada y, aunque el acusado fue detenido, fue liberado por la jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mazatenango. A partir de la investigación realizada se estableció que la juzgadora decretó medida de coerción personal de prisión preventiva y, un mes después, resolvió dejar sin efecto tal medida, ordenando la libertad del sindicado por falta de mérito y refutando que se concedía por falta de investigación del ente acusador. El informe médico forense establece que el resultado

del examen no permite confirmar el caso. La Fiscalía argumentó que tal resolución obvió valorar la prueba ofrecida objetivamente, en principio porque la menor reconoció irrefutablemente a su agresor, a lo cual se suma el hecho que, después de un período de 24 horas, no se puedan encontrar rastros de fluidos corporales porque el mismo cuerpo los desecha, siendo el caso de la agraviada puesto que el examen médico forense se practicó semanas después de que el ilícito fuera cometido. Por lo anterior, La Fiscalía apeló la resolución, pero fue rechazada porque en ausencia del fiscal, el auxiliar a cargo rubricó el escrito de impugnación y, conforme lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, no está facultado para hacerlo. El caso se reactivará, solicitando el Ministerio Público al médico forense una ampliación del informe respectivo donde se pongan en relevancia tales extremos. Asimismo, se logró la revisión de la causa penal y se remitió la denuncia correspondiente a la Supervisión de Tribunales del Organismo Judicial.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SUCH.12-2009/DCP	Enon Lapoyeu Ortíz	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Lorenzo
ORD.SUCH.14-2009/DESC	Rocael Armando Coc Ulín	Registrador Civil	Registro Nacional de las Personas, Santo Domingo
ORD.SUCH.08-2009/DESC	Lic. David Castillo Padilla	Director Administrativo	Instituto de Educación Básica de Mazatenango, Rafael Landívar
ORD.SUCH.08-2009/DESC	Licda. Milgyam Santiesteban	Coordinadora Técnico Administrativa	Ministerio de Educación
ORD.SUCH.145-2009/DESC	José Dionicio Noj Toj	Alcalde Municipal	Municipalidad de Samayac
ORD.SUCH.131-2009/DESC	Rocael Armando Coc Ulín	Registrador Civil	Registro Nacional de las Personas, Santo Domingo
ORD.SUCH.121-2009/DESC	Lic. Hugo D. Figueroa Estrada	Intendente de Estudios y Tecnología	Superintendencia de Bancos
ORD.SUCH.33-2009/DESC	Jorge Arturo Reyes Ceballos	Alcalde Municipal	Municipalidad de Cuyotenango
ORD.SUCH.117-2009/DESC	Licda. Juana María Cifuentes Pérez	Coordinadora Técnico Administrativa	Ministerio de Educación
ORD.SUCH.109-2009/DESC	Dr. Carlos Enrique Díaz Espinoza	Director	Jefatura del Área de Salud
ORD.SUCH.105-2009/DESC	Prof. Manuel Delgado Sagarminaga	Alcalde Municipal	Municipalidad de Mazatenango
ORD.SUCH.51-2009/DCP	Francisco Odilio Vela Tunay	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pablo Jocopilas
ORD.SUCH.73-2009/DESC	Ing. Melgin Ulises Godoy Estrada	Delegado Departamental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
ORD.SUCH.91-2009/DESC	Licda. Nery Rasales de Pérez	Representante del Despacho ante el Jurado Dental de Oposición	Ministerio de Educación
ORD.SUCH.87-2009/DESC	Lic. Byron de Jesús Morales	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.SUCH.39-2009/DESC	Lic. César Eulogio Ixcot Guzmán	Auxiliar Fiscal	Fiscalía Distrital del Ministerio Público
ORD.SUCH.28-2009/DCP	Marlene Raquel Blanco	Directora	PNC

ORD.SUCH.28-2009/DCP	Licda. Rosa Mabel Campos Avalos	Asesora Legal	Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de Gobernación
ORD.SUCH.54-2009/DCP	Licda. Milgyam Santiesteban	Coordinadora Técnico Administrativa	Dirección Departamental de Educación
ORD.SUCH.32-2009/DCP	Oliver Leonel de León Pérez	Director	Escuela Iniciación Deportiva, Ministerio de Educación
ORD.SUCH.50-2009/DESC	Patricia Hidalgo	Jefa Oficina Comercial	DEOCSA
ORD.SUCH.50-2009/DESC	Ing. Carlos Colón	Presidente	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ORD.SUCH.060-2009/DESC	Donal Ivan Mazariegos	Alcalde Municipal	Municipalidad de Patulul
ORD.SUCH. 66-2009/DESC	Dr. Carlos Enrique Díaz Espinoza	Director	Área de Salud, Suchitepéquez
ORD.SUCH.72-2009	Dr. Juan Alberto Oliva Alfaro	Director	Hospital Nacional de Mazatenango
ORD.SUCH.43-2009/DESC	Dr. Rigoberto Ortiz y Ortiz	Director	Hospital del IGSS
ORD.SUCH.150-2009/DESC	Manuel Delgado Sagarminaga	Alcalde Municipal	Municipalidad de Mazatenango
ORD.SUCH.86-2009/DESC	Israel Fernando Gramajo	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Antonio Suchitepéquez
ORD.SUCH.88-2009/DESC	Dr. Juan Alberto Oliva Alfaro	Director	Hospital Nacional de Mazatenango
ORD.SUCH.100-2009/DESC	Juan Francisco López Díaz	Alcalde Municipal	Municipalidad de Río Bravo
ORD.SUCH.102-2009/DCP	Comisario Fredy Fernando López Trabanino	Comisario	PNC
ORD.SUCH.104-2009/DESC	Ana de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.SUCH.136-2009/DESC	Julio Roberto Flores Samayoa	Delegado Departamental	Dirección Departamental del IGSS
ORD.SUCH.134-2009/DESC	Lic. Byron de Jesús Morales	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
EIO.SUCH.31-2009/DESC	Ing. Melgin Ulises Godoy Estrada	Delegado Departamental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
EIO.SUCH.30-2009/DESC	Israel Fernando Gramajo	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Antonio Suchitepéquez
EIO.SUCH.28-2009/DESC	Ing. César Augusto Fernández Fernández	Director Nacional	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
EIO.SUCH. 26-2009/DESC	Marco Aurelio Salzá Tay	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santo Domingo
EIO.SUCH. 25-2009/DESC	Manuel Delgado Sagarminaga	Alcalde Municipal	Municipalidad de Mazatenango
EIO.SUCH. 25-2009/DESC	Ing. Agr. Harold Alexander Pérez Vásquez	Coordinador Departamental	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
EIO.SUCH. 25-2009/DESC	Dr. Carlos Enrique Díaz Espinoza	Director	Jefatura del Área de Salud
EIO.SUCH. 21-2009/S	Francisco Javier Chivichón Núñez	Técnico en Registro y Catastro	Secretaría de Asuntos Agrarios
EIO.SUCH. 18-2009/DESC	Ing. Melgin Ulises Godoy Estrada	Delegado Departamental	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
EIO.SUCH. 10-2009/DESC	Dr. Juan Alberto Oliva Alfaro	Director Departamental	Hospital Nacional de Mazatenango
EIO.SUCH. 08-2009/DESC	Dr. Carlos Enrique Díaz Espinoza	Director	Jefatura del Área de Salud
EIO.SUCH. 015-2009/DESC	Prof. Manuel Delgado Sagarminaga	Alcalde Municipal	Municipalidad de Mazatenango
EIO.SUCH. 08-2009/DESC	Juan González Cruz	Alcalde Municipal	Municipalidad de Río Bravo

EIO.SUCH.08-2009/DESC	José Antonio Mas Yojcom	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Miguel Panán
EIO.SUCH.08-2009/DESC	Francisco Odilio Vela Tunay	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Pablo Jocopilas
EIO.SUCH.08-2009/DESC	Fernando González Kuntze	Alcalde Municipal	Municipalidad de Pueblo Nuevo
EIO.SUCH.08-2009/DESC	Juan Liberto Pineda	Alcalde Municipal	Municipalidad de San José El Ídolo
EIO.SUCH.08-2009/DESC	José Dionicio Noj Toj	Alcalde Municipal	Municipalidad de Samayac

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.SUCH.57-2009/DESC	Julio Flores Samayoa	Delegado Departamental	Departamento de IVS, IGSS
ORD.SUCH.152-2009/DESC	Dr. Celso Cerezo	Ministro	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ORD.SUCH.152-2009/DESC	Dr. Carlos Rodrigo Huertas	Director	Centro de Salud de San Antonio Suchitepéquez
ORD.SUCH.36-2009/DCP	Prof. Manuel Delgado Sagarminaga	Alcalde Municipal	Municipalidad de Mazatenango
ORD.SUCH.52-2009/DE	Lic. Edi de Jesús Ac Herrera	Fiscal Municipal	Fiscalía Municipal de San Juan Bautista
ORD.SUCH.62-2009/DCP	Pedro Vicente Gutiérrez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santo Tomás La Unión
ORD.SUCH.68-2009/DCP	Lic. Byron de Jesús Morales	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.SUCH.94-2009/DCP	Lic. Albert Clinton Whyte Bernard	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD.SUCH.106-2009/DE	Lic. Albert Clinton Whyte Bernard	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORIENTACIÓN.SUCH. 21-2009/DESC	Arq. Werner Enecón Martínez	Gobernador Departamental	Gobernación Departamental
ORIENTACIÓN.SUCH. 21-2009/DESC	Dr. Carlos Enrique Díaz Espinoza	Director	Jefatura del Área de Salud
ORD.SUCH.173-2009/DCP	Subcomisario Fredy Fernando López Trabanino	Jefe	Comisaría, PNC Suchitepéquez
ORD.SUCH.93-2009/DESC	Licda. Ana Francisca Ordóñez de Molina	Ministra	Ministerio de Educación
ORD.SUCH.23-2009/DESC	Lic. Gabriel de Jesús Galindo	Jefe	Departamento de IVS, IGSS
ORD.SUCH.15-2009/DCP	Juan González	Alcalde Municipal	Municipalidad de Chicacao
ORD.SUCH.29-2009/DCP	Subcomisario Fredy Fernando López Trabanino	Jefe	Comisaría, PNC Suchitepéquez
ORD.SUCH.69-2009/DESC	Carolina Díaz	Jefa de Registros Médicos	IGSS
ORD.SUCH.79-2009/DESC	Geovanni Soto Santos	Inspector General de Trabajo	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ORD.SUCH.52-2009/DCP	Edy de Jesús Herrera	Fiscal Municipal San Juan Bautista	Ministerio Público
ORD.SUCH.28-2009/DCP	Salvador Gándara Gaytan	Ministro	Ministerio de Gobernación
ORD.SUCH.62-2009/DCP	Pedro Vicente Gutiérrez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santo Tomás La Unión
ORD.SUCH.68-2009/DCP	Lic. Byron de Jesús Morales	Director Departamental	Dirección Departamental de Educación



ORD.SUCH.162-2009/DCP	Licda. Rita Elena Gonzáles	Coordinadora Técnica Administrativa	Ministerio de Educación
ORD.SUCH.162-2009/DCP	Lic. Byron de Jesús Morales	Director	Ministerio de Educación
ORD.SUCH.90-2009/DESC	Lic. Danilo Madrazo	Alcalde Municipal	Municipalidad San Francisco Zapotitlán
ORD.SUCH.112-2009/DCP	Ricardo Rodríguez	Director	Registro Nacional de las Personas, San Antonio Suchitepéquez
ORD.SUCH.108-2009/DE	Lic. Albert Clinton Whyte Bernard	Fiscal Distrital	Ministerio Público
ORD.SUCH.126-2009/DESC	Ing. Carlos Enrique Rosenberg Echeverría	Subgerente	IGSS Guatemala
ORD.SUCH.126-2009/DESC	Lic. Gabriel de Jesús Galindo García	Jefe	Departamento IVS, IGSS Guatemala
ORD.SUCH.132-2009/DESC	Ing. Carlos Enrique Rosenberg Echeverría	Subgerente	IGSS Guatemala
ORD.SUCH.148-2009/DESC	Lic. Rocael De León	Tesorero	Municipalidad de Patulul
EIO.SUCH.31-2009/DESC	Prof. Manuel Delgado Sagarminaga	Alcalde Municipal	Municipalidad de Mazatenango
EIO.SUCH.08-2009/DESC	Marco Aurelio Salzá Tay	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santo Domingo
EIO.SUCH.08-2009/DESC	Pedro Vicente Gutiérrez	Alcalde Municipal	Municipalidad de Santo Tomás La Unión
EIO.SUCH.08-2009/DESC	Víctor Hugo Méndez Cáceres	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Bernardino

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	338
De apertura de expedientes de investigación	258
Medidas urgentes	140
Ampliación de plazo para la investigación	200
Se tienen por ciertos los hechos denunciados por no recibir informe circunstanciado de funcionarios	100
Con suspensión por desistimiento	2
Acumulación de expedientes	2
Resoluciones finales	
De NO violación - Se determinó que no hubo violación	1
De violación - Que existe violación y se ordena el cese de la misma	2
> Con recomendación	2
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	4
TOTAL	1,049

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Incidencia política

- 15 acompañamientos a manifestaciones pacíficas de diferentes organizaciones: a) magisterio, ante la inconformidad por la falta de contratos a docentes; b) Frente de Lucha (CODECA y CONIC) por incumplimiento de promesas de campaña del gobierno y desacuerdo ante el alza en las tarifas de energía eléctrica de DEOCSA; c) vecinos mazatecos denunciando los índices de violencia en el país y en el departamento, a raíz del secuestro y muerte de Carlos Saravia.
- Tres capacitaciones: una sobre historia del conflicto, una sobre mediación y resolución de conflictos, y una sobre la conformación del Frente contra el Hambre.
- 56 solicitudes de informes a diferentes instituciones: a la Dirección Departamental de Salud, para conocer la calidad del agua entubada que es distribuida a la población por medio de las 20 Municipalidades y por el incumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias de los rastros municipales de Suchitepéquez; a las 20 municipalidades de Suchitepéquez por la falta de implementación de la Oficina de Acceso a la Información; al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por falta de profesional encargado de velar por las condiciones del rastro municipal de Mazatenango y la falta de entrega de fertilizantes en diferentes comunidades.
- 30 concertaciones de mesas de diálogo para mediación de diferentes conflictos: entre transportistas de Mazatenango, Santo Domingo y Cuyotenango y autoridades de la Dirección General de Transporte, por inconformidad en el alza de las tarifas de transporte urbano; y entre vendedores de la Avenida Lincoln y la municipalidad de Mazatenango, por su traslado a la nueva terminal de buses, entre otras.
- 18 monitoreos a diferentes instituciones del departamento: a centros de salud de diferentes comunidades por la falta de medicamentos mínimos; a escuelas del área rural y urbana para establecer la educación sobre derechos humanos; y a rastros municipales para verificar la condiciones de salubridad en que son sacrificadas reses y porcinos.
- 23 capacitaciones impartidas a diferentes COCODES de las comunidades del departamento, sobre mediación y resolución de conflictos en prevención.
- 52 comunicaciones de alertas tempranas a DIMERCIPP, siendo las más relevantes: paro departamental de transporte por alza en combustible; bloqueo departamental de carreteras, por CODECA y CONIC ante incumplimiento de promesas de campaña; asamblea permanente del magisterio por la falta de contratos a docentes; y toma de la municipalidad de Pueblo Nuevo por empleados destituidos de forma injusta.
- Elaboración de 42 informes de diferentes temáticas: de actividades y cronogramas de trabajo mensuales; informe de las municipalidades que han implementado la Oficina de Acceso a la Información; sobre recorte presupuestario de la Dirección Departamental de Salud y el Hospital Nacional; y sobre la incidencia en las reuniones de los CODEDES.
- 63 audiencias con funcionarios de diferentes instituciones.
- Asistencias a reuniones mensuales de CODEDE y CONRED.
- 35 acciones en diferentes áreas relacionadas con la mediación y resolución de conflictos.

Seguimiento a los Acuerdos de Paz

- En los meses de febrero, marzo y abril se coordinó con establecimientos educativos de nivel medio la divulgación del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
- A través del departamento de Educación y Defensorías se han realizado actividades de promoción y divulgación en medios radiales, y se ha compartido esta temática en actividades de sensibilización como parte del Diplomado en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, impartido mensualmente a un grupo de maestros y líderes del municipio de Santo Domingo Suchitepéquez, el cual se viene desarrollando desde el segundo semestre del año 2008 y que culminó en noviembre del año en curso.
- Evento en materia de Acuerdos de Paz dirigido a estudiantes del nivel medio de establecimientos por cooperativa y experimentales.

Educación y promoción

- 150 visitas a establecimientos educativos oficiales y privados de nivel primario para dar a conocer los derechos humanos, la Constitución Política de la República y leyes diversas.
- 50 capacitaciones a líderes comunitarios de los municipios de Santo Tomás La Unión, Zunilito, Pueblo Nuevo, Santa Bárbara y San Juan Bautista.
- 86 reuniones: 12 con la Escuela para Padres en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango; diez para impartir un curso de derechos humanos dirigido a docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango; 12 con la Escuela para Padres del Instituto Nacional Lic. Julio César Méndez Montenegro, jornada vespertina; diez reuniones de capacitación del Diplomado sobre Derechos Humanos, Educación Holista y Currículo Nacional Base, para 60 docentes del nivel preprimario y primario del municipio de San Bernardino; 20 del Diplomado sobre Derechos Humanos, Cultura de Paz y Resolución de Conflictos, dirigido a líderes comunitarios, trabajadores municipales y docentes de educación primaria de Santo Domingo Suchitepéquez; diez con la Red Departamental de Prevención contra el VIH-SIDA; y 12 del Diplomado sobre Prevención de VIH y SIDA, en coordinación con la Dirección del Área de Salud de Suchitepéquez y la organización no gubernamental ALFALIT.
- Un congreso departamental juvenil con 60 estudiantes representantes de diversos establecimientos educativos.
- Un concurso de oratoria y declamación en el municipio de Mazatenango, con la participación de seis establecimientos educativos.
- Festival “Expresemos Nuestros Derechos”, realizado en el municipio de Cuyotenango con la participación de 15 escuelas.
- Cinco proyectos divulgativos sobre “Información preventiva del VIH/SIDA”.
- Dos coordinaciones con el oficial de incidencias en políticas públicas para la capacitación a alcaldes comunitarios del municipio de Río Bravo.

Auxiliatura Departamental de Totonicapán



Auxiliatura Departamental de Totonicapán

De enero a noviembre de 2009, los altos índices de pobreza y pobreza extrema han afectado a toda la población de los ocho municipios de Totonicapán; el avance de diversos programas sociales debería apoyar a los grupos más vulnerables, especialmente a la niñez.

La creciente violencia vulnera los derechos de humanos de la población pero se espera que esta situación mejore a través de los compromisos adquiridos por el Gabinete de Seguridad del Gobierno, entre los cuales está el de aumentar el número de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para hacer frente a los hechos delictivos que agobian a todo el departamento.

La organización comunal indígena ha contribuido a enfrentar las posibles violaciones de los derechos humanos al buscar soluciones, a través del diálogo y la conciliación, a la mayoría de los conflictos y problemas que han surgido durante el presente año.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Totonicapán se realizaron 1,909 acciones específicas: 167 de orientación, 202 de prevención, 52 de observación, 281 de mediación, 74 operativos, 483 de acompañamiento y 650 de atención a la víctima.

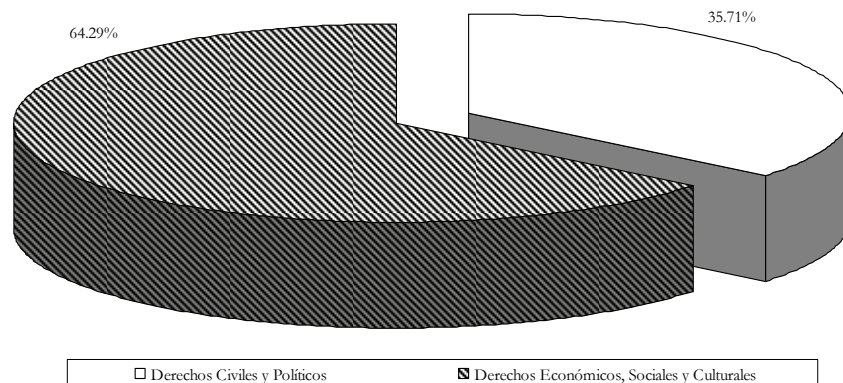
De investigación

Se abrieron 14 expedientes de investigación: 5 por violaciones a derechos individuales y 9 a derechos económicos, sociales y culturales. De ellos, el 64.29% de oficio y el 35.71% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 85.71% forma parte del Organismo Ejecutivo y 7.14% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	1		1	1			2					5	35.71
Derechos Económicos, Sociales y Culturales							1			7	1	9	64.29
TOTAL MENSUAL	1	0	1	1	0	0	3	0	0	7	1	14	100.00



□ Derechos Civiles y Políticos

■ Derechos Económicos, Sociales y Culturales



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio							3			6		9	64.29
Ordinario	1		1	1						1	1	5	35.71
TOTAL MENSUAL	1	0	1	1	0	0	3	0	0	7	1	14	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS
Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	167	8.75
Prevención	202	10.58
Observación	52	2.72
Mediación	281	14.72
Operativo	74	3.88
Acompañamiento	483	25.30
Atención a la víctima	650	34.05
TOTAL	1,909	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	1		1				2			7	1	12	85.71
Judicial				1								1	7.14
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Centros educativos particulares							1					1	7.14
TOTAL MENSUAL	1	0	1	1	0	0	3	0	0	7	1	14	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

Una de las principales violaciones en materia de derechos civiles y políticos se refiere al abuso de autoridad, específicamente por parte de la PNC. También se han detectado algunos casos de arbitrariedad por parte de maestros, quienes han actuado en contra de los alumnos.

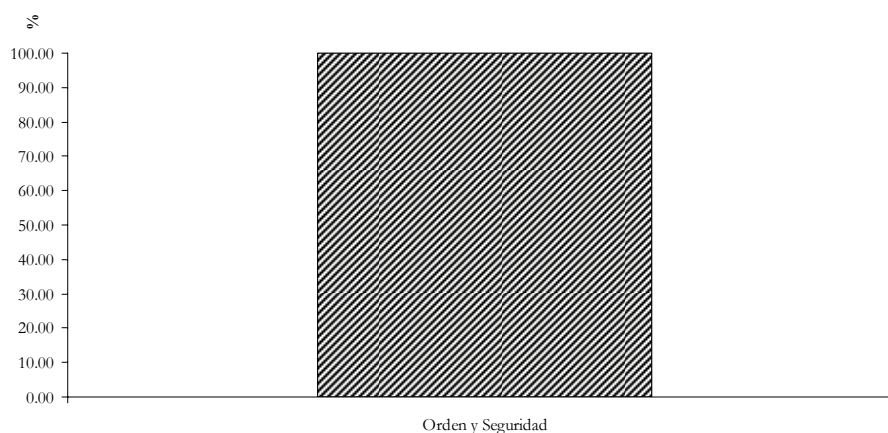
Expediente EIO.TOT.02-2009/DCP

Se recibió una denuncia anónima manifestando que el acusado constantemente le exige dinero a los alumnos del Instituto Técnico en Computación a cambio de ganar los cursos, y a las alumnas las acosa sexualmente, indicándoles que para ganar los cursos deben sostener relaciones sexuales con él. Como parte de la investigación realizada se solicitaron informes circunstanciados, se entrevistó al alumnado del instituto y se realizó una inspección ocular. El caso fue conocido por el Ministerio Público de Totonicapán, tramitado por los delitos de abuso de autoridad y violencia contra la mujer.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	1		1				1					3	60.00
Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial				1			1					2	40.00
TOTAL MENSUAL	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	5	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Se ha observado un retroceso en lo que concierne a este tipo de derechos: el alto costo de la canasta básica, la falta de empleo y la escasez de alimentos han recrudecido los casos de desnutrición, por lo que es necesario impulsar programas sociales de asistencia, así como la implementación de centros de atención permanente de Salud en los ocho municipios.

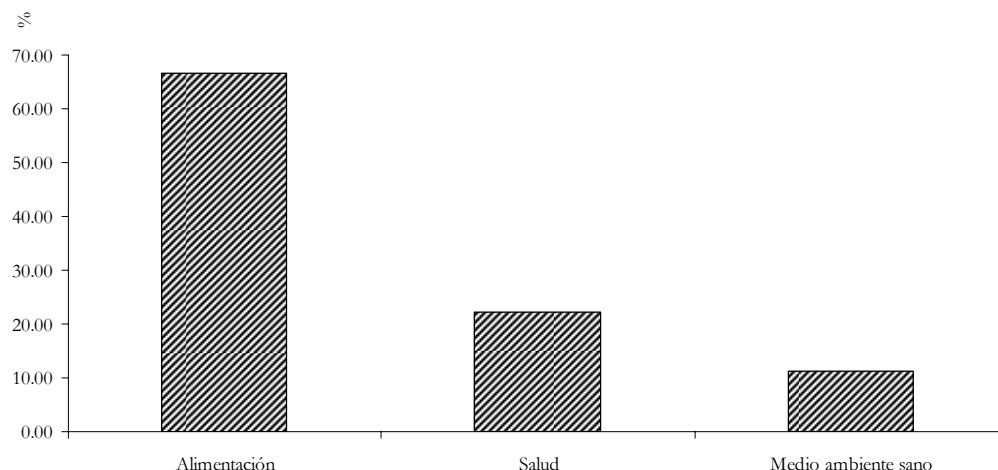
La discriminación y la exclusión se reflejan en las áreas más pobres de la región, resaltando en educación y salud pública; las personas más necesitadas son las que menos oportunidades tienen de obtener un trabajo digno o de recibir atención médica.

Expediente EIO.TOT.01-2009/DESC

Un denunciante anónimo indicó que personal del Centro de Salud de Momostenango le negó la asistencia médica a una paciente, argumentando que su horario ya había concluido, por lo que, por sus propios medios, se dirigió al Hospital Nacional de Totonicapán, donde fue intervenida quirúrgicamente. Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados, se entrevistó a la agraviada y a testigos del hecho, y al personal médico; y se efectuó inspección ocular. A partir de la información recabada se estableció que el médico de turno se encontraba atendiendo un parto, por lo que no pudo recibir a la paciente; y se verificó la denuncia relativa al argumento del resto del personal, el cual pretendía que fuera el siguiente turno el que la atendiera.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Desnutrición y sus consecuencias (problemas del crecimiento, dificultades motrices, en el funcionamiento de los sistemas inmunológicos y de reproducción, diarrea, reducción de nivel de juego y actividades, limitación del desarrollo y cognoscitivo, malformaciones como médula bífida, ceguera, raquitismo)										6		6	66.67
SALUD													
Mala práctica médica											1	1	11.11
Negación de atención médica							1					1	11.11
MEDIO AMBIENTE SANO													
Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos										1		1	11.11
TOTAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	1	9	100.00



2.3 Derechos específicos

En el tema de derechos específicos, en Totonicapán se ha observado un retroceso debido al aumento de casos de maltrato infantil y violencia familiar, las limitaciones de los programas de apoyo al adulto mayor, y la carencia de programas de rehabilitación y de oportunidades de trabajo para personas con retos especiales.

Expediente PREVENCIÓN.TOT.05-2009/S

Al realizar un operativo en el centro preventivo de Totonicapán se pudo establecer que en la cárcel de mujeres se encontraban reclusas 16 personas, cantidad que rebasa la capacidad de dicho centro; además de que no se cumplen con las condiciones de higiene y seguridad requeridas. En coordinación con Gobernación Departamental y al investigar el caso, se determinó que el hacinamiento se debía a que el centro preventivo de

Quiché aún no ha sido habilitado, motivo por el cual fueron llevadas al de este departamento; por lo anterior, la jueza de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quiché solicitó a las autoridades competentes la pronta habilitación del referido centro.

3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente PREVENCION.TOT.11-2009/S

De oficio, se tuvo conocimiento que el juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Totonicapán sufrió un atentado por parte de sujetos desconocidos que dispararon a la ventana de su despacho. Como parte de la investigación se realizó una inspección en el lugar de los hechos. El caso se encuentra en investigación en la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Totonicapán y esta Auxiliatura solicitó medidas de seguridad perimetral a favor del referido juzgador.

Expediente PREVENCION.TOT.20-2009/S

Un denunciante anónimo informó que un grupo de personas pretendía linchar a un supuesto delincuente por asaltar, junto con otras dos personas que habían logrado darse a la fuga, un comercio. Personal de esta Auxiliatura se presentó en el lugar y tras dialogar con la turba se logró que la persona retenida fuera entregada a la PNC para ser puesta a disposición de los tribunales de justicia, evitando su linchamiento.

Expediente PREVENCION.TOT.59-2009/S

La denunciante manifestó que su hijo, de 7 años de edad, sufrió un accidente en su centro de estudios, Colegio Evangélico Guatemala, cuando un pizarrón del aula cayó sobre él fracturándole un dedo, pero la maestra no lo atendió debidamente y, por la falta de asistencia médica oportuna, fue necesario amputarle el dedo. Como parte de la investigación se solicitaron los informes circunstanciados correspondientes y se entrevistó a los testigos. El expediente certificado fue remitido a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público y las autoridades de Educación han exigido a los propietarios del centro educativo realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios. El proceso penal aún se encuentra en trámite en el Ministerio Público.

4. EXPEDIENTES EN LOS QUE SE INTERPUSO ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL

Expediente PREVENCION.TOT.32-2009/S

A favor de: niña menor de edad

Motivo: maltrato infantil.

Declarado ha lugar: no

Descripción del caso: una denuncia anónima refirió que una menor de 6 años de edad era víctima de maltrato infantil por parte de sus tíos, en virtud de que los padres la abandonaron. Se practicó la exhibición personal ante la negativa de los familiares de ponerla a la vista para verificar los extremos de la denuncia, determinándose que la menor no sufría de maltrato infantil.

5. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
ORD.TOT.01-2009	Leonso Gómez Escobar	Comisario	Comisaría 44, PNC
ORD.TOT.02-2009	Oscar Ernesto López Arriaga	Director	Escuela Urbana Mixta Barrio La Ciénaga, San Cristóbal Totonicapán
ORD.TOT.02-2009	Fabiana Camila Tzul Tzul de Alvarado	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación
ORD.TOT.03-2009	Héctor Anibal De León Velasco	Secretario General	Presidencia del Organismo Judicial
EIO.TOT.01-2009	Oscar Rafael Rodríguez	Subdirector	Área de Salud, Totonicapán
EIO.TOT.01-2009	Jorge Ariel Díaz Ordóñez	Director	Centro de Salud, municipio de Momostenango
EIO.TOT.02-2009	Fabiana Camila Tzul Tzul de Alvarado	Directora Departamental	Dirección Departamental de Educación
	Teresa de Jesús Veliz	Directora	Instituto Técnico en Computación
EIO.TOT.03-2009	Luis Aurelio Acevedo Ovalle	Director	Hospital Nacional de Totonicapán José Felipe Flores
EIO.TOT.04-2009	Luis Aurelio Acevedo Ovalle	Director	Hospital Nacional de Totonicapán José Felipe Flores
ORD.TOT.05-2009	Luis Aurelio Acevedo Ovalle	Director	Hospital Nacional de Totonicapán José Felipe Flores

6. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	674
De apertura de expedientes de investigación	14
Medidas urgentes	37
Con suspensión por conocerlo un órgano jurisdiccional	1
Acumulación de expedientes	2
Acciones o recursos planteados	
Exhibiciones	1
TOTAL	729

7. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Monitoreo para determinar el promedio de pacientes, médicos, personal de enfermería, auxiliares y profesionales en el Hospital Nacional Dr. José Felipe Flores de Totonicapán; a requerimiento de la Dirección de Auxiliaturas.
- Visitas a escuelas del nivel primario urbano y rural de Totonicapán a requerimiento de la unidad de Control Administrativo.
- Verificación de los procedimientos utilizados en la práctica de las necropsias en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), a requerimiento de la Unidad Contra la Impunidad.

- Informe con respecto a la potabilidad del agua, en las municipalidades y centros de salud, promovido por la Unidad de Control Administrativo.
- Acciones de seguimiento con respecto a la influenza A H1N1, en el Hospital Nacional Dr. José Felipe Flores de Totonicapán, promovidas por la Dirección de Auxiliaturas.
- Informe sobre el movimiento y desplazamiento de personas a la capital para participar en una manifestación, por indicaciones de la Dirección Nacional de Auxiliaturas.
- Informe sobre las condiciones de higiene y procedimientos sanitarios en el rastro municipal, promovido por la Defensoría del Medio Ambiente y Consumidor.
- Seguimiento para determinar el nivel de discriminación en los centros educativos estatales de primaria, básico y diversificado hacia los estudiantes indígenas de Totonicapán, en las escuelas oficiales Juan Bautista Gutiérrez, Instituto Nacional de Educación Básica Adscrito a la ENRO e Instituto de Bachillerato en Computación; promovido por la Defensoría de los Pueblos Indígenas.
- Informe para determinar la implementación y educación de los derechos humanos en el sistema educativo nacional en el marco del Currículo Nacional Base, emanado de la reforma educativa nacional.
- Informe sobre seguridad alimentaria a través de la recolección de información; el monitoreo fue realizado en escuelas, centros de salud, instituciones representadas en el departamento y líderes comunitarios.
- Seguimiento a estadísticas de morbo-mortalidad infantil en el Hospital Nacional de Totonicapán y el Área de Salud.

Incidencia política

- Participación en mesa de diálogo con instituciones gubernamentales sobre incidencia en políticas públicas.
- Reunión y coordinación para la incidencia en políticas públicas con miembros de Gobernación Departamental y la Red Departamental de Albergues, coordinada por CONRED.
- Participación en el COMUDE del municipio de Santa María Chiquimula para habilitar espacios de diálogo en incidencia en políticas públicas.
- Reunión en la Municipalidad de Totonicapán con la comunidad de Palomota, del municipio de San Andrés Xecúl, para la resolución del conflicto de límites territoriales del bosque Chomaxjal y para verificar el usufructo del mismo.
- Reunión con autoridades comunitarias del cantón Chuisúc de Totonicapán, por problemas de asignación comunal en el paraje Chuculjuyup.
- Participación en el CODEDE para tratar el tema de la elección del representante de los pueblos indígenas, así como la asignación del presupuesto departamental.
- Mesa de diálogo en el área de Salud Pública con autoridades de gobierno y vecinos de la comunidad de San Antonio Sija, de San Francisco El Alto. Proceso de reinicio de cobertura en salud pública en ese lugar ya que se había retirado por descontento de la población.
- Reunión con la red departamental de sociedad civil enfocada a la Ley de Acceso a la Información.
- Presentación del programa educativo 2009 hacia políticas de gobierno y su aplicación en los ocho municipios del Totonicapán.
- Verificación, con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de la entrega de fertilizantes.
- Observación en el proceso de coordinación para la prevención de desastres en San Cristóbal, Totonicapán.
- Verificación en Pasuc, Momostenango, sobre riesgo por posibles grietas en la tierra.
- Participación en una mesa de diálogo con el Consejo Departamental, en municipio de San Francisco, sobre proceso de las políticas públicas.
- Observación en el proceso de presentación del plan operativo anual del área de Salud Pública.
- Capacitación y reforzamiento en el proceso para la resolución de conflictos.
- Diálogo sobre el medio ambiente, análisis de desastres y prevención en áreas de riesgo en el departamento.

- Coordinación y verificación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la cobertura general sobre nutrición en las 29 instalaciones de la SESAN.
- Participación con el Consejo Municipal de desarrollo del municipio, para la verificación y el manejo de los fondos públicos.
- Mediación en la manifestación pacífica suscitada en Cuatro Caminos, del municipio de San Cristóbal Totonicapán, acerca de los programas del INAB para su asignación presupuestaria.
- Diálogos con representantes de CONRED y SESAN sobre seguridad en caso de desastres naturales y seguridad alimentaria en el departamento.
- Procesos de formación en derechos humanos dirigidos a agentes de la PNC, como una forma de contrarrestar las denuncias presentadas en contra de sus elementos y para que conozcan más sobre los derechos de la sociedad.
- Capacitaciones con operadores de Justicia y del Ministerio Público, enfocadas, entre otros temas, a la prevención de linchamientos.
- Monitoreos a las distintas instituciones del Estado (Red Hospitalaria, Comisaría No. 44 de la PNC, Unidad de Adscripción del IGSS) para verificar la dotación de medicamentos, atención a los pacientes, abusos de autoridad y el trato a los reclusos.
- Acompañamiento a autoridades comunales de la aldea Tierra Colorada, de Momostenango, por problemas limítrofes en los bosques comunales en dicho lugar.
- Reunión para elaborar la planificación municipal para el período 2008-2012, con autoridades de la Alcaldía de Totonicapán.
- Observación sobre datos de participación en la entrega del documento personal de identificación en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas.
- Participación en la coordinación interinstitucional promovida por CONRED en el proceso de coordinación para la prevención de desastres, promovido por Gobernación Departamental.
- Coordinación con la Municipalidad de Santa Lucía La Reforma en la actividad de seguridad alimentaria, con miembros del Concejo Municipal y líderes de la región.
- Asistencia técnica en la actividad de oratoria y declamación sobre derechos humanos de la Casa de la Cultura de Totonicapán.
- Foro sobre seguridad alimentaria, con la participación de líderes y lideresas del municipio de Panajachel, Sololá.
- Observación del proceso de cobertura de salud pública en la comunidad de San Antonio Sija, municipio de San Francisco el Alto.
- Coordinación con autoridades de salud sobre monitoreo de desnutrición aguda en el departamento.
- Coordinación con autoridades administrativas del hospital José Felipe Flores, por crisis alimentaria.

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Capacitaciones a estudiantes del Instituto de Educación Básica del cantón Juchanep, estudiantes del Instituto de Educación Básica de la aldea Patachaj del municipio de San Cristóbal Totonicapán y estudiantes del nivel básico del Colegio Evangélico Guatemala.

Educación y promoción

- Dos capacitaciones a la asociación de mujeres Oxlajuj Kat, del municipio de San Francisco El Alto.
- Diez capacitaciones a la asociación de mujeres de Pro-rural de la aldea Rancho de Teja, municipio de San Francisco El Alto.
- Seis capacitaciones a elementos de la Policía de Tránsito de la municipalidad de San Francisco El Alto.
- Doce capacitaciones: seis a los alfabetizadores de CONALFA del municipio de San Andrés Xecul, y seis a los de Santa María Chiquimula.
- Ocho capacitaciones a los alumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta del municipio de Santa María Chiquimula.



- Cuatro capacitaciones a los alumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta Centro América, del municipio de Momostenango.
- Dieciocho capacitaciones a las comadronas: nueve a las del Centro de Salud de Totonicapán y nueve a las del Centro de Salud de la aldea Chipuac, de Totonicapán.
- Cuatro capacitaciones a los elementos de la PNC de Totonicapán.
- 36 capacitaciones: siete en la Escuela Oficial Rural Mixta del cantón Coxom, ocho en la Escuela Oficial Rural de la aldea Chuculjuyup, siete en la Escuela Oficial Rural del paraje Xoljuchanep, del cantón Juchanep, cuatro en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Chipuac, cinco en la Escuela Oficial Urbana para Niñas Tipo Federación Atanasio Tzul, cinco en la Escuela Oficial Urbana para Niñas Miguel García Granados, jornada matutina.
- Diez capacitaciones a estudiantes del Instituto de Educación Básica de la aldea Patachaj, municipio de San Cristóbal.
- Tres talleres a estudiantes de educación básica del municipio de San Bartolo Aguas Calientes.
- Dos talleres a distintas autoridades comunitarias del municipio de Momostenango.
- Dos talleres a los alumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta del municipio de Santa Lucía la Reforma.
- Dos talleres dirigidos a docentes: uno en la Escuela Oficial Urbana Mixta Centro América, del municipio de Momostenango, y otro en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Chuculjuyup.
- Cuatro talleres: uno a los estudiantes del nivel básico de la Escuela Normal Rural de Occidente, jornada matutina, otro a los del Instituto de Educación Básica del cantón Nimapa, y dos a los del Instituto de Educación Básica del municipio de Santa María Chiquimula y a los del Instituto de Educación Básica NUFED, aldea Rácana de Santa María Chiquimula.
- Un taller a la Escuela de Auxiliares de Enfermería Sagrada Familia.
- Un taller a los empleados de la empresa Totopan.
- Un taller a los manipuladores de alimentos de la aldea Patachaj, del municipio de San Cristóbal.
- Dos taller a estudiantes seminaristas, uno en el instituto de Bachillerato en Computación y otro en el Colegio Evangélico Guatemala.
- Un taller a estudiantes graduados de las diferentes carreras de las escuelas oficiales y colegios privados de Totonicapán.
- Un taller a los padres de familia de la institución ASOSAM.
- Elección del Niño Procurador de los Derechos Humanos, en coordinación con la Oficial de Comunicación Social, realizada en el Instituto de Educación Básica del cantón Juchanep, Totonicapán.
- Festival “Expresemos nuestros derechos”, realizado en diversas escuelas públicas del departamento.
- Concurso de dramatizaciones, en coordinación con la oficial de Comunicación Social.
- Celebración del “Festival de la canción” en coordinación con la oficial de Comunicación Social.
- Realización del “Festival de oratoria y declamación” en coordinación con la oficial de Comunicación Social.
- 115 programas de “Educación en derechos humanos” en diez radios del departamento.
- Nueve *spots* radiales y nueve anuncios televisivos sobre derechos humanos.
- 22 programas radiales: tres sobre derechos del adulto mayor, tres de niñez y adolescencia, dos sobre derechos de los pueblos indígenas, uno sobre la discriminación racial, uno sobre el Día Mundial de la Salud, uno sobre el Día Internacional de la Familia, uno sobre Acuerdos de Paz, uno de medio ambiente, uno de paternidad y maternidad responsables, tres programas radiales especiales, uno sobre derechos de las personas con discapacidad, uno de los derechos de la mujer y tres sobre la erradicación de la pobreza, alimentación y el Día Internacional de las Naciones Unidas.
- Nueve capacitaciones: dos de orientación sobre derechos humanos, una sobre derechos de los privados de libertad, una a voluntarios, una como parta de la celebración del Día Mundial de la Salud, cuatro acerca de los derechos de los pueblos indígenas.
- Tres foros: uno sobre el conflicto armado y dos acerca de los derechos humanos y el VIH/SIDA.

Auxiliatura Departamental de Zacapa



Auxiliatura Departamental de Zacapa

De enero a noviembre de 2009, los derechos civiles y políticos más vulnerados fueron la seguridad, la organización, la integridad, la dignidad y de petición.

El derecho a la seguridad no se garantiza en el departamento: casi a diario ocurren hechos violentos, sobresaliendo los asesinatos, siendo los municipios de Zacapa y Gualán los que registran la mayor cantidad de homicidios o muertes violentas. En función de la cantidad de denuncias recibidas y tramitadas, la violencia intrafamiliar sigue siendo otra de las claras violaciones a los derechos humanos en Zacapa.

En cuanto a la organización comunitaria, los Consejos Comunitario de Desarrollo han sido objeto de manipulación política y ello responde a que son electos o conformados de acuerdo con orientaciones emanadas de los jefes ediles, lo cual limita el ejercicio democrático.

Debido a que los municipios de San Diego, Cabañas, Huité y Teculután forman parte del corredor seco, los casos de niñez con cuadros de desnutrición aumentaron y en el Centro de Recuperación Nutricional tienen pocos insumos y alimentos para poder atender la demanda de los afectados.

En cuanto a la salud, el departamento no cuenta con un área de apoyo para el tratamiento de las personas infectadas con VIH/SIDA, muchas de las cuales, de escasos recursos, tienen que costear sus gastos y viajar a la ciudad de Guatemala para recibir el tratamiento.

En relación con el derecho al trabajador, se presentaron denuncias de componendas entre patronos o dueños de algunas empresas del sector privado e inspectores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el fin de que los patronos evadan el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.

Los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad son violados en contextos de hacinamiento, falta de acceso a agua potable, salud y educación.

La violencia contra la mujer ha ido en aumento, a lo que se suma la falta de información y las limitaciones de las políticas adecuadas para la atención y apoyo a este grupo.

1. APERTURA DE EXPEDIENTES EN ESTA AUXILIATURA

De acciones específicas

En la Auxiliatura Departamental de Zacapa se realizaron 504 acciones específicas: 137 de orientación, 281 de prevención, 4 de observación, 1 de mediación, 32 operativos, 2 de acompañamiento, 7 de conciliación, 17 de intervención inmediata y 23 de atención a la víctima.

De investigación

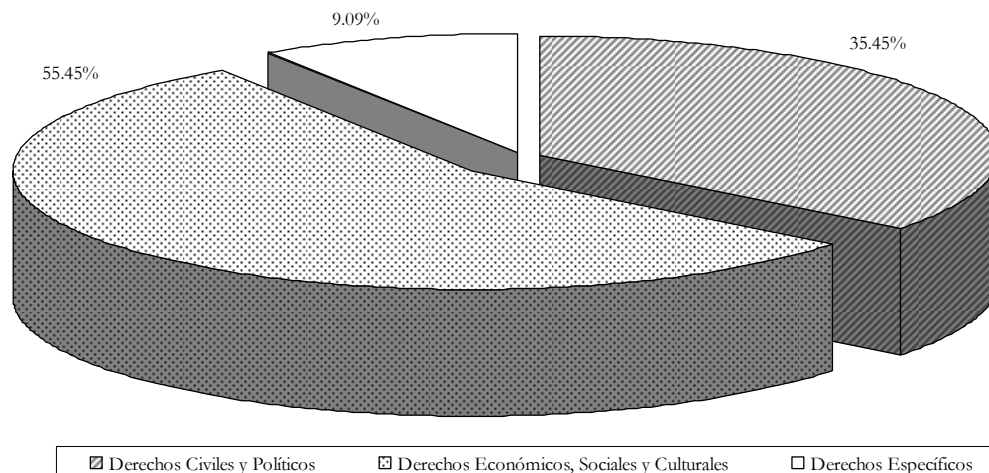
Se abrieron 110 expedientes de investigación: 39 por violaciones a derechos individuales, 61 a derechos económicos, sociales y culturales y 10 a derechos específicos. De ellos, el 32.73% de oficio y el 67.27% por denuncias recibidas.

De todos los funcionarios, servidores públicos y dependencias denunciados, 31.58% forma parte del Organismo Ejecutivo y 5.26% del Organismo Judicial.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

Violaciones	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Derechos Civiles y Políticos	2	7	5	3	8	4	4	3	2		1	39	35.45
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	5	11	7	4	4	11	8	5	2	3	1	61	55.45
Derechos Específicos	2	1	3		2	1	1			0		10	9.09
TOTAL MENSUAL	9	19	15	7	14	16	13	8	4	3	2	110	100.00



EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN

Enero a noviembre 2009

INICIO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
De oficio	3	6	7	2	5	4	5	2	1		1	36	32.73
Ordinario	6	13	8	5	9	12	8	6	3	4		74	67.27
TOTAL MENSUAL	9	19	15	7	14	16	13	8	4	4	1	110	100.00

ACCIONES ESPECÍFICAS

Enero a noviembre 2009

Tipos de acción	TOT	%
Orientación	137	27.18
Prevención	281	55.75
Observación	4	0.79
Mediación	1	0.20
Operativo	32	6.35
Acompañamiento	2	0.40
Conciliación	7	1.39
Intervención inmediata	17	3.37
Atención a la víctima	23	4.56
TOTAL	504	100.00

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – RESUMEN
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS
Enero a noviembre 2009

ORGANISMOS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Ejecutivo	5	4	9									18	31.58
Judicial			1							2		3	5.26
AUTÓNOMAS, DESCENTRALIZADAS U OTRAS	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
Municipalidades	1	3	3							1		8	14.04
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales										2		2	3.51
Ministerio de Educación										1		1	1.75
Ministerio Público		1	3									4	7.02
FONAPAZ										1		1	1.75
SOSEP										1		1	1.75
Defensa Publica Penal										1		1	1.75
Ministerio de la Defensa Nacional		1										1	1.75
BANRURAL										1		1	1.75
Jefatura de Área de Salud										1		1	1.75
IGSS	1		1							1		3	5.26
Comisión Nacional de Energía Eléctrica	1											1	1.75
Mercado Municipal		2										2	3.51
Centro de Salud de Zacapa		1										1	1.75
Empresa Eléctrica Municipal		1	1								1	3	5.26
INFOM			1									1	1.75
Registro Nacional de las Personas - RENAP-			1							1		2	3.51
Instituto Nacional de Bosques										1	1	2	3.51
TOTAL MENSUAL	8	13	20	0	0	0	0	0	0	14	2	57	100.00

2. DERECHOS VULNERADOS

2.1 Derechos civiles y políticos

La violencia aumentó en Zacapa en los últimos dos años, lo cual pone en evidencia la ineficacia de los mecanismos de control por parte de las autoridades encargadas. A ello se suman las diversas problemáticas vinculadas con el trasiego y tráfico de drogas y los grupos delincuenciales, que involucran a gran parte de los jóvenes del departamento, y la limitada presencia de la PNC en aquellos lugares de difícil acceso por sus características topográficas.

Aunque las denuncias contra agentes de la PNC u otras fuerzas de seguridad del Estado disminuyeron considerablemente con respecto al año pasado, hubo incremento de aquellas contra funcionarios municipales

y el ejército, destacando las actitudes del gerente de la Municipalidad de Zacapa, del administrador y del juez de Asuntos Municipales, por no realizar las acciones que por competencia les asiste resolver.

El municipio más pobre es La Unión, y la población del área rural es la más afectada, lo que ha provocado que gran parte migre hacia el extranjero. Aunado a ello, los desastres naturales han traído muertes por derrumbes o deslaves.

Las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal, familiar o civil, no son informadas, por negligencia o por omisión, sobre las resoluciones de su situación procesal, y la mayoría de los casos termina siendo archivada. En Gualán, el Ministerio Público se ha visto limitado en el proceso de investigación penal, debido el poco personal con el que cuenta y la inaccesibilidad de algunos lugares de los dos municipios que tiene que cubrir.

Expediente ORD.ZAC.63-2009/DCP

El Comité de Vecinos del Área Urbana del municipio de La Unión, basándose en la Ley de Acceso a la Información, solicitó al alcalde municipal un informe detallado del personal despedido en el presente año. Personal de esta Auxiliatura brindó acompañamiento a los miembros del Comité de Vecinos a efecto de que les fuera entregada la información requerida.

Expediente EIO.ZAC.28-2009/DCP

Tras el asesinato del líder comunitario Atiliano Herrera Osorio, en la aldea Plan de Agua Fría, sus familiares fueron amenazados e intimidados por grupo de personas dedicado a realizar asesinatos en la parte alta de Zacapa. Por tal motivo, la familia decidió abandonar la zona, sin indicar su destino. Personal de la Auxiliatura Departamental se constituyó en la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Gualán para indagar sobre el caso, donde se descubrió que el señor Atiliano Herrera fue ejecutado con arma blanca y, posteriormente, lanzado en una quebrada de la comunidad.

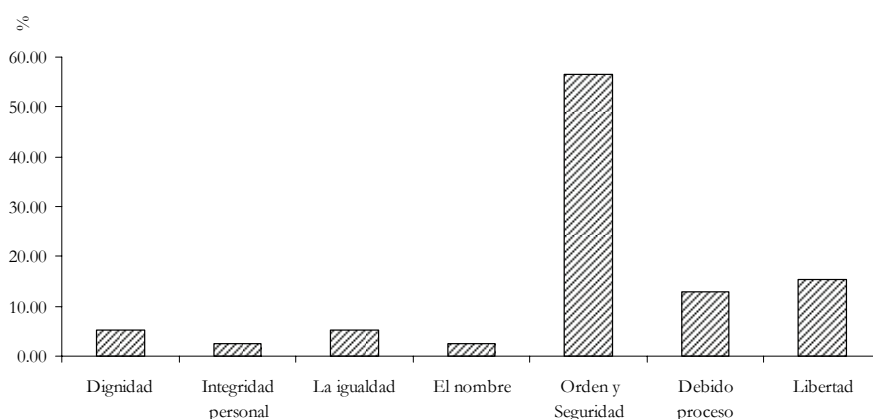
Expediente ORD.ZAC.24-2009/DCP

El denunciante indicó que se presentó a las oficinas del Registro Nacional de las Personas de Zacapa para solicitar el certificado de nacimiento de su hija, pero el registrador civil le informó que no podían extender tal documento porque su hija aparecía en el libro de las personas fallecidas. Como parte de la investigación se solicitó al supervisor administrativo departamental de Zacapa que se pronunciara en relación con el señalamiento. El funcionario señaló que se encontró el libro de inscripción de nacimiento de la afectada, la cual fue realizada de manera fraudulenta, porque la inscribieron sobre la partida de una persona fallecida.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS **Enero a noviembre 2009**

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
DIGNIDAD													
Amenazas o intimidaciones							1	1				2	5.13
INTEGRIDAD PERSONAL													
Muerte violenta		1										1	2.56
LA IGUALDAD													
Discriminación – racismo						1						1	2.56
Falta de atención pública										1		1	2.56
EL NOMBRE													
La falta de registro			1									1	2.56
ORDEN Y SEGURIDAD													
Abuso de autoridad / poder administrativo	2	4	1	2		1		1	2			13	33.33

Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa / discreción judicial		1	1	1								3	7.69
Amenazas, coacción		1	1		4							6	15.38
DEBIDO PROCESO													
No contar con el auxilio de un abogado					1							1	2.56
No permitir su defensa						1						1	2.56
No ser juzgado en un proceso justo e imparcial							1					1	2.56
No permitirle interrogar o hacer interrogar a testigos de cargo y a obtener comparecencia de testigos de descargo que sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo			1									1	2.56
Discontinuidad y lentitud procesal					1							1	2.56
LIBERTAD													
Restringir el derecho a ser informado: Información inexacta							2	1				3	7.69
Restringir el derecho a ser informado: Información negligente					2	1						3	7.69
TOTAL MENSUAL	2	7	5	3	8	4	4	3	2	1	0	39	100.00



2.2 Derechos económicos, sociales y culturales

Se violenta el derecho humano a la salud, por la carencia de personal y la falta de medicamentos en casi toda la red hospitalaria. Los brotes de influenza, dengue hemorrágico y clásico, así como un incremento considerable de niños con problemas de desnutrición, han visibilizado las limitaciones del sistema de alerta temprana en la vigilancia epidemiológica.

La conflictividad agraria se mantiene entre indígenas ch'orti' de la parte alta de La Unión que, con el apoyo de algunas organizaciones, luchan porque se reconozcan sus derechos en relación con los lugares que históricamente les ha pertenecido.

El consumidor y usuario sigue siendo afectado por las anomalías en los cobros por parte de DEORSA, principalmente por supuestos arreglos a los contadores que se traducen en cobros de grandes cantidades por consumo de energía eléctrica.

Expediente EIO.ZAC.33-2009/DESC

Información publicada en un medio de comunicación escrita refirió la crisis de seguridad alimentaria que vive el país, a través del denominado Corredor Seco; el 90% de los municipios de Zacapa sufrió la falta de alimentos. A pesar de que el Área de Salud cuenta con un sistema de monitoreo de peso y talla, sólo lleva recuento del 50% de su población infantil menor de 5 años. Como parte de la investigación realizada se solicitaron informes circunstanciados al jefe del Área de Salud Pública del departamento, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al delegado departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al secretario Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al delegado departamental del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y al ministro de este ramo, y al presidente del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural; así como informes de verificación a las diferentes instituciones integradas al Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. A partir de dicha información se estableció la poca coordinación dichas instancias y que los municipios de Zacapa, La Unión, Gualán y Teculután son los que presentan los mayores indicadores de desnutrición.

Expediente EIO.ZAC.29-2009/DESC

Por monitoreo realizado en el Centro de Salud del municipio de Huité se estableció, por medio del listado proporcionado por el encargado de bodega, la falta de medicamentos básicos. Enfermeras entrevistadas manifestaron que a la mayoría de los pacientes o usuarios que llegan al referido centro únicamente se les están entregando las recetas. Como parte de la investigación se solicitaron informes circunstanciados al jefe del Área de Salud del departamento y al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, en los cuales se informaba que, de acuerdo con la programación efectuada, ya se estaba organizando el contrato con una casa proveedora de medicamentos.

Expediente PREV.ZAC.17-2009/DESC

Los denunciantes, en representación de los inquilinos del mercado informal del municipio de Cabañas, solicitaron la intervención del auxiliar departamental ante la orden de su traslado al campo donde se realiza la feria, lugar que no cuenta con ningún servicio básico. Como parte de la investigación se solicitó informe circunstanciado a las autoridades municipales. El alcalde indicó que dicha medida obedece a que en la calle principal de la Plazuela se produce congestionamiento vehicular y se obstaculiza la vía de acceso de la calle principal, lo que pone en riesgo la vida de los transeúntes; además, los vecinos del lugar han planteado sus quejas y la solicitud de traslado. Se llegó a una resolución satisfactoria para ambas partes.

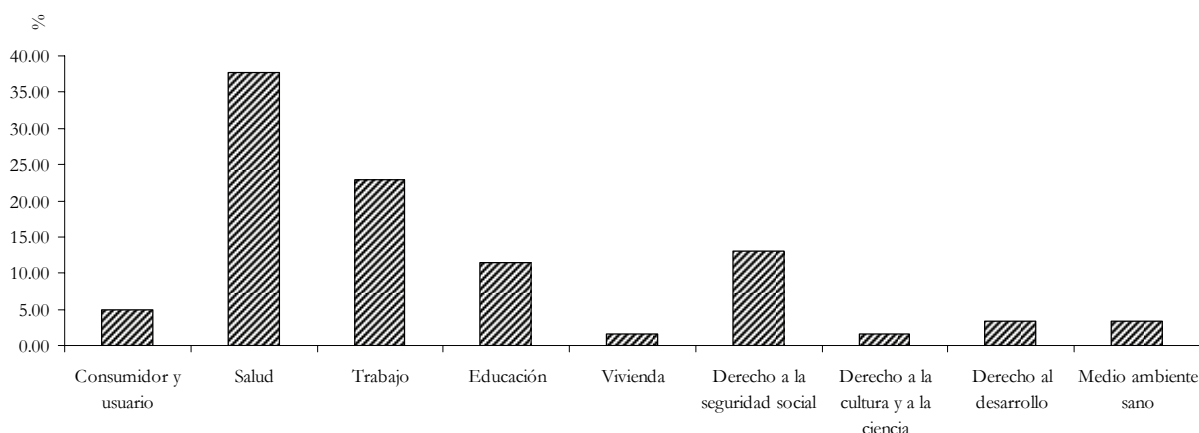
Expediente EIO.ZAC.23-2009/DESC

El gremio magisterial de La Unión presentó denuncia contra el director departamental de Educación por el incumplimiento en el pago de sus salarios desde enero de 2009, motivo por el cual solicitaron la intervención de esta Auxiliatura. Se estableció, a partir de los informes rendidos por el Ministerio de Educación y la Oficina Nacional del Servicio Civil, que, efectivamente, no se han realizado los pagos correspondientes, lo cual, según la Oficina Nacional de Servicio Civil, es responsabilidad del Ministerio de Educación. El director departamental informó que a finales de junio se empezarían a cancelar los salarios a los damnificados.

**EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES**
Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
CONSUMIDOR Y USUARIO													
Desabastecimiento											1	1	1.64
Inexistencia de medidas que permitan que los consumidores obtengan compensación		1										1	1.64
Ausencia de políticas públicas a favor del consumidor							1					1	1.64
SALUD													
Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)						1			1			2	3.28
Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud										1		1	1.64
Insuficiente cobertura de inmunización			1									1	1.64
Cobros ilegales						1						1	1.64
Falta de atención o asistencia médica	1	1	1					1	1	1		6	9.84
Mala atención en centro de salud		2				1						3	4.92
Negligencia médica							2					2	3.28
Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado		2										2	3.28
Negación o falta de medicamentos			1	1			2					4	6.56
Cobros en consulta externa y emergencias			1									1	1.64
TRABAJO													
Despido ilegal o injusto		1		1								2	3.28
Omisión administrativa (comisiones paritarias)													
Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	1		1		1	5				1		9	14.75
Falta de pago de las prestaciones laborales			1		1							2	3.28
Despido injusto							1					1	1.64
EDUCACIÓN													
No ser escuchado	1											1	1.64
No ser tratado con justicia						1						1	1.64
Falta de infraestructura		1	1				1					3	4.92
Incrementos de cuotas de estudio	1	1										2	3.28

VIVIENDA													
Inseguridad jurídica de la tenencia						1						1	1.64
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL													
Insuficiente cobertura social a beneficiarios	1	1		1	2			1				6	9.84
Negación y retiro del derecho a gozar a la seguridad social						1	1					2	3.28
DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA													
No respetar el patrimonio natural y cultural								1				1	1.64
DERECHO AL DESARROLLO													
Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera								2				2	3.28
MEDIO AMBIENTE SANO													
Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas		1										1	1.64
Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes				1								1	1.64
TOTAL MENSUAL	5	11	7	4	4	11	8	5	2	3	1	61	100.00



2.3 Derechos específicos

Los casos de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil han sido mayoría y el grado de agresividad hacia la mujer y la niñez es cada vez más intensa, y frente a ello el sistema de justicia no garantiza la protección y seguridad de estos sectores.

Varias mujeres han sido despedidas de la Brigada Militar por el hecho de estar embarazadas, lo que es un despido injustificado y una clara violación a sus derechos laborales. El abuso de poder por parte de la PNC se traduce en una constante violación de los derechos de las mujeres, conociéndose tanto casos de discriminación como de acoso sexual, situación que pone a este grupo en una situación de vulnerabilidad, situación que la mayoría de las veces no es denunciada por las víctimas, ante el riesgo de perder el empleo.

El Juzgado de Familia, además de atender los casos de su competencia, también debe atender el Juzgado de Trabajo, y esta doble función la debe realizar con el mismo número de empleados, lo que hace que los procesos se retrasen.

Expediente EIO.ZAC.24-2009/DE

Dos reclusos denunciaron al director del Sistema Penitenciario por haber ordenado, a través del subdirector general, su traslado a las Granjas Modelos de Rehabilitación Canadá y Fraijanes no obstante existir prohibición judicial para dicho procedimiento. Como parte de la investigación se documentaron los hechos denunciados y se entrevistó a los denunciantes. El director general informó que, con base en resolución emitida en abril, notificada a su despacho, los reclusos no serán trasladados.

Expediente PREV.ZAC.001-2009/DE

Indicó el denunciante que una personas de 69 se presentó al Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor y, al momento de consignar sus datos en el sistema de información, fue ingresado con un nombre completamente diferente al que aparece en su cédula de vecindad, situación que desembocó en dificultades para el posible beneficiario. En el informe remitido por la representante del Programa se reconoce el haber consignado los apellidos del afectado de manera errónea e indica que trasladará la notificación a la Sede Departamental del Programa en Escuintla. Al afectado se le otorgó el beneficio del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor.

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN – DERECHOS ESPECÍFICOS Enero a noviembre 2009

Violaciones denunciadas	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	TOT	%
NIÑEZ Y LA JUVENTUD													
Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven			2									2	20.00
Descuidos o tratos negligentes					2							2	20.00
DETENIDO O RECLUSO													
Alimentación inadecuada e insuficiente o en mal estado			1									1	10.00
Acciones que atentan contra su integridad		1										1	10.00
Maltrato	2											2	20.00
Traslados inadecuados o peligrosos						1	1					2	20.00
TOTAL MENSUAL	2	1	3	0	2	1	1	0	0	0	0	10	100.00

3. CASOS PARADIGMÁTICOS

Entre los casos atendidos en esta Auxiliatura, en función de su impacto social y las innovaciones en su tratamiento, tenemos:

Expediente PREV.ZAC.006-2009/DE

Por denuncia anónima se tuvo conocimiento de que una menor de 13 años de edad estaba siendo abusada sexualmente por su progenitor, quien permanecía en el hogar mientras la madre trabajaba, amenazando a los hijos para que no contaran nada. Como parte de la investigación se entrevistó a una tía de la menor, quien confirmó la denuncia, y afirmó que la madre de la menor sabía del problema pero era amenazada por el

hermano del agresor. Se practicó un examen médico forense a la menor, el cual confirmó el abuso sexual y reveló que estaba embarazada. A partir de los Resultados, el Ministerio Público ordenó la captura del agresor; la niña se encuentra en el Hogar Machén, en Antigua Guatemala.

4. FUNCIONARIOS FISCALIZADOS

Funcionarios públicos que SÍ han cumplido con el deber de rendir el informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.ZAC.03-2009/DE	Dr. Eddy Morales	Director General	Dirección General del Sistema Penitenciario
EIO.ZAC.02-2009/DE	Dr. Eddy Morales	Director General	Dirección General del Sistema Penitenciario
EIO.ZAC.02-2009/DE	Arnaldo de Jesús Osorio Isales	Director	Centro Preventivo Los Jocotes, Sistema Penitenciario
EIO.ZAC.01-2009/DESC	PEM. Sonia Haydee Ruiz Wong	Supervisora Educativa Sector Oficial Área Urbana	Ministerio de Educación
ORD.ZAC.02-2009/DESC	PEM. Eduardo García Orellana	Subdirector	Instituto Diversificado Administración Empresas
ORD.ZAC.02-2009/DESC	PEM. Sonia Haydee Ruiz Wong	Supervisora Educativa Sector Oficial Área Urbana	Ministerio de Educación
ORD.ZAC.02-2009/DESC	Marco Antonio López Ramos	Director Instituto Experimental	Ministerio de Educación
ORD.ZAC.03-2009/DESC	Dr. Eduardo Alberto Luna Ordóñez	Director Ejecutivo	Hospital Regional de Zacapa

Funcionarios públicos que NO han cumplido con el deber de rendir informe al PDH, durante la fase de investigación

Expediente	Nombre del funcionario	Cargo	Institución
EIO.ZAC.03-2009/DE	Wilfido Porras Escobar	Juez Segundo de Ejecución Penal	Organismo Judicial
EIO.ZAC.01-2009/DESC	Lic. Osman Nolberto Ayala Victoria	Director Departamental	Ministerio de Educación
EIO.ZAC.01-2009/DESC	Marco Antonio López Ramos	Director Instituto Experimental	Ministerio de Educación

5. RESOLUCIONES EMITIDAS

Enero a noviembre 2009

TIPOS DE RESOLUCIÓN	TOTAL
Resoluciones de trámite	
De apertura de expedientes de acciones específicas	465
De apertura de expedientes de investigación	114
Medidas urgentes	35
TOTAL	614

6. OTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO

Informes especiales

- Informe situacional sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Resarcimiento, Región Oriente, Zacapa, enfocado al avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
- Informe situacional de las escuelas públicas del departamento de Zacapa. Monitoreo de verificación y supervisión de los procesos de inscripción de alumnos de primer ingreso y reingreso al Sistema Educativo Nacional de Educación Pública, y verificación de la infraestructura de las escuelas.
- Informe coyuntural sobre el caso de la montaña de Las Granadillas, Zacapa, por tala inmoderada de árboles y posibles daños al recurso hídrico del lugar, el cual abastece a la ciudad de Zacapa y algunas comunidades de Chiquimula.
- Informe de operativo situacional sobre otorgamiento de licencias para la explotación y exploración minera.
- Informe situacional al Hospital Regional de Zacapa. Verificación de atención a los usuarios, las condiciones de encamamiento y el cumplimiento de la atención integral por parte del personal administrativo y médico.
- Operativo realizado al Centro Preventivo Alvaro Arzú Irigoyen, detectándose hacinamiento de reclusos cumpliendo condenas y presencia de población femenina en las mismas instalaciones.
- Informe ejecutivo sobre el operativo realizado a los Centros de Atención Integral (CAI), de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).
- Informe situacional sobre potabilidad del agua.
- Informe situacional de seguridad alimentaria y nutricional.
- Informe situacional sobre vulnerabilidad contra desastres naturales de La Unión.
- Informe situacional relacionado con el trabajo realizado en el tema de VIH/SIDA por parte de las instituciones del Ministerio de Salud y el IGSS.

Incidencia política

- Tres acompañamientos: uno en las mesas de Resolución de Conflictos entre la Asociación para la Protección de la Montaña de Las Granadillas y autoridades de Gobierno; uno en la mesa de Resolución de Conflictos de Carácter Agrario y autoridades involucradas en el tema (SAA-PDH); uno a maestros de La Unión que no habían sido notificados sobre su situación salarial, para posteriormente ser escuchados y, por ende, cancelados sus sueldos atrasados.
- Dos monitoreos y operativos: uno a los centros y puestos de salud y el Hospital Regional de Zacapa en sus diferentes unidades de atención médica, uno para investigar los casos de gripe tipo AH1N1 en Zacapa.
- Dos mesas de diálogo: una realizada en el conflicto generado por el bloqueo de la Asociación para la Protección de la Montaña de Las Granadillas y su posterior resolución con los propietarios de fincas privadas; una para intervención en el conflicto que se suscitó entre inquilinos del mercado informal del municipio de Cabañas y miembros del Concejo Municipal.
- Instalación del Frente Departamental contra el Hambre (Alianza Multisectorial contra el Hambre, de Zacapa).

Seguimiento de los Acuerdos de Paz

- Un diplomado “Eduquémonos para el nunca más”, coordinado con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), dirigido al sector magisterial.
- Un foro y dos charlas sobre “Memoria histórica”, dirigidos a estudiantes de diversificado de Zacapa.
- Capacitación sobre “Memoria histórica” al Movimiento Social Zacapaneco.

Educación y promoción

- En la aldea Santa Cruz y Pasabién, de Río Hondo; aldeas Los Achiotres, Cuchilla Tendida, Guancintepeque, Juan Ponce, Mayuelas y Mal Paso, de Gualán; aldeas El Oreganal y La Colonia, de Teculután; y aldeas Los Vados, El Chico, El Mirador, de Usumatlán, se realizó una coordinación con Defensores de la Naturaleza para trabajar un proyecto educativo con las personas que viven en las aldeas y caseríos ubicados cerca de la Sierra de Las Minas para que conozcan, promuevan y defiendan sus derechos humanos, y concienciarlas en la conservación de los recursos naturales.
- Cuatro procesos de capacitación y formación: al Movimiento Social y Popular de Zacapa; con estudiantes de básico de La Unión, enfocado en derechos humanos; con maestros de educación básica de La Unión, enfocado a la propuesta pedagógica “Educando para el nunca más”; y con trabajadores de la Fundación Defensores de la Naturaleza en Río Hondo.
- Monitoreo sobre la enseñanza de los derechos humanos en el Sistema Nacional de Educación, en las escuelas oficiales urbanas de Zacapa, Estandzuela y Gualán.
- Incidencia educativa: se logró la devolución del dinero que los padres de familia habían pagado al Instituto Experimental José Rodríguez Cerna de Zacapa, como colaboración para el área de computación.
- Taller dirigido a directores de escuelas públicas del área rural de Zacapa, sobre resolución de conflictos.
- Orientación a seminaristas de los colegios Normal Zacapaneco y Liceo Cristiano.
- Siete conferencias: una con estudiantes y docentes del Colegio Tecnológico, cuatro en la Universidad Rafael Landívar, una en el Instituto Intercultural, y una en el Colegio Normal Zacapaneco.
- Conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

Datos estadísticos

Enero a noviembre 2009



Cuadro 1 – DATOS CONSOLIDADOS
Enero a noviembre 2009

AUXILIATURAS	Expedientes de investigación			Acciones específicas														OTROS
	Civiles y Políticos	DESC	Específicos	Orientación	Prevención	Observación	Mediación	Conciliación	Operativo	Acompañamiento	Atención a la Víctima	Intervención inmediata	Seguimiento	Verificación	Exhibiciones personales	TOTAL	%	Llamadas al 1555
Alta Verapaz	51	38	13	180	146		59					15			10	512	2.09	
Baja Verapaz	22	17	11	44	214		36	25		1		3			3	376	1.53	
Chimaltenango	9	7	1	78	267		45	7		2		14	10			440	1.80	
Chiquimula	17	19		68	166		2	1				1			2	276	1.13	
El Progreso	17	10	5	82	110		5	45	21	28	100	42			1	466	1.90	
Escuintla	26	68	16	86	429		69					144			2	840	3.43	
Guatemala	231	693	399	649			586									2,558	10.44	15,257
Guate-móvil I	13	23	10	45	949		13	1	3	4		18			18	1,097	4.48	
Guate-móvil II	48	50	40	155	288				3	16		12			7	619	2.53	
Huehuetenango	21	46	4	30	65							60			1	227	0.93	
Huehuc-móvil	2	3	1	255	52	13	16			44	12	39			5	442	1.80	
Huehuc-Nentón	5	2		39	4				3	1		21			2	77	0.31	
Izabal	19	27	9	184	547		7								2	795	3.24	
Jalapa	93	70	21	212	166	33	6		22			38				661	2.70	
Jutiapa	96	57	10	127	78		11					18			1	398	1.62	
Petén	41	26	6	12	106	119	103	1	11	202		31			1	659	2.69	
Petén-Poptún	24	12		46	3	8	21	41				16				171	0.70	
El Naranjo	10	1	4	20	43	1	88	1	15	2		2				187	0.76	
Quetzaltenango	46	41	4	77	335		38		18			156			5	720	2.94	
Coatepeque	23	14	1	87	127	25	15					34			8	334	1.36	
Quiché	3	16		270	74	9	49	11	63	132	1,009	401				2,037	8.31	
Quiché-Ixcán	2			26	32		166			2		25			1	254	1.04	
Quiché-Nebaj	2	5	1	347	26		14	1		4		5			1	406	1.66	
Retalhuleu	41	10		143	209							500			2	905	3.69	
Sacatepéquez	14	24	47	159		5	12		17	27		31		11	2	349	1.42	
Sta. Lucía Milpas Altas	1	11	4	3	2	6				4		1				32	0.13	
San Marcos	6	7		64	77		10	8	45	351	351	150			2	1,071	4.37	
Santa Rosa	21	8	7	221	107		3	5			1	47			3	423	1.73	
Chiquimulilla	2	1		40	43	14	6		1			15				122	0.50	
Sololá	51	11	6	292	157	38	94	35	19	218	129	52			2	1,104	4.51	
Santiago Atitlán	18	10		62	38		34		8	93	227	3			4	497	2.03	
Suchitepéquez	137	108	11	186	192	312	19	30	39	111	520	1,239			4	2,908	11.87	
Totonicapán	5	9		167	202	52	281		74	483	650				1	1,924	7.85	
Zacapa	39	61	10	137	281	4	1	7	32	2	23	17				614	2.51	
TOTAL	1,156	1,505	641	4,593	5,535	639	1,809	219	394	1,727	3,022	3,150	10	11	90	24,501	100.00	
%	4.72	6.14	2.62	18.75	22.59	2.61	7.38	0.89	1.61	7.05	12.33	12.86	0.04	0.04	0.37	100.00		

Cuadro 2 (parte 1 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
1	DIGNIDAD															
2	Secuestro									1						
3	Violación sexual															
4	Trato cruel, inhumano o degradante	2			1				1	1					1	
5	Amenazas o intimidaciones	3						3		8					9	3
6	INTEGRIDAD PERSONAL															
7	Tortura	2														
8	Tratos o penas inhumanas o degradantes									3					4	
9	Desaparición forzada							6								
10	Muerte o ejecución extralegal o arbitraria			1												
11	Muerte violenta			1	4			7	2						2	2
12	LA IGUALDAD															
13	Discriminación – racismo		1													
14	Discriminación - nacionalismo									1						
15	Desigualdad jurídica	1			1										1	
16	Falta de atención pública	2													7	
17	LA PERSONALIDAD															
18	Derechos y obligaciones															
19	EL NOMBRE															
20	La falta de registro													1		
21	NACIONALIDAD															
22	Privación arbitraria de nacionalidad									1						
23	LA TOLERANCIA															
24	Represión				1					1						
25	ORDEN Y SEGURIDAD															
26	Falta de asistencia social									1						
27	Abuso de autoridad / poder administrativo	18	17	6	5	8	6	55	3	10	7			10	54	34
28	Uso excesivo de la fuerza						1							1	1	
29	Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial	17				1	2	9	1	1	4			1	3	34
30	Corrupción				1		4						1		2	9
31	Amenazas, coacción	3	1			2	2	52	1	12				1	1	2
32	Detención ilegal		2		1	2	2	3		1	4		4	1		
33	Detención arbitraria															
34	Omisión de los requisitos de la detención legal							2								
35	Omisión de brindar seguridad preventiva o personal				1		1			1				1		1

Cuadro 2 (parte 1 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	Total	%
1																					
2			1							1										3	0.3
3		3																		3	0.3
4		3							4	2		3								18	1.6
5				1					1								7		2	37	3.2
6																					
7																				2	0.2
8																2				9	0.8
9	2																			8	0.7
10		1																		2	0.2
11	2				1				1	1									1	24	2.1
12																					
13																			1	2	0.2
14																				1	0.1
15									1											4	0.3
16		1												1					1	12	1.0
17																					
18											1									1	0.1
19																					
20																	8		1	10	0.9
21																					
22																				1	0.1
23																					
24																				2	0.2
25																					
26				1																2	0.2
27	18	11	9	22	13	3	1	2	20	5		3	2		29	10	39	3	13	436	37.7
28																				3	0.3
29	1	2		17	4				11				1		16	2	13	2	3	145	12.5
30					1				3								5			26	2.2
31	4	1		3	2					2					1		8		6	104	9.0
32	3				2								2				5			32	2.8
33		1																		1	0.1
34																				2	0.2
35	1			1						1			1							9	0.8

Cuadro 2 (parte 2 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
36	Limitar el derecho de acción o de petición	2								1					1	
37	Linchamientos									2						
38	Impunidad															1
39	Cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos					1				1						
40	DERECHOS POLÍTICOS															
41	Denegación de la libre participación							1								
42	Falta de acceso a la función política															
43	DEBIDO PROCESO															
44	Acceso restringido a tribunales y dependencias del Estado	1														1
45	No presumir su inocencia								2	1						
46	No ser citado y oído en juicio															
47	No ser informado de sus derechos															
48	No contar con el auxilio de un abogado							1								
49	No permitir su defensa							3								1
50	No permitir la utilización de todos los recursos														2	
51	No ser juzgado en un proceso justo e imparcial							1		1	1			3	1	3
52	No permitirle interrogar o hacer interrogar a testigos de cargo y a obtener comparecencia de testigos de descargo que sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo															
53	No tener acceso a instancias plurales (apelaciones)															
54	Discontinuidad y lentitud procesal		1		1	3	6	15	1		1				1	1
55	Incumplimiento del Estado de su deber de prevenir, investigar, sancionar a los responsables de delitos o crímenes										1					3
56	LIBERTAD															
57	Restringir la libertad de expresión: Censura							2								
58	Restringir la libertad de expresión: Falta de acceso										2					
59	Restringir el derecho a ser informado: Falsedad														1	
60	Restringir el derecho a ser informado: Información inexacta				1											
61	Restringir el derecho a ser informado: Información negligente			1		1		13			2					1
62	Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de cátedra								1							
63	Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de reunión								1							
64	Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de movimiento o circulación						1	7			1				2	
65	Violación del derecho a la intimidad: Violación al secreto de las comunicaciones							51								
66	TOTAL MENSUAL	51	22	9	17	17	26	231	13	48	21	2	5	19	93	96
67	%	4.4	1.9	0.8	1.5	1.5	2.2	20.0	1.1	4.2	1.8	0.2	0.4	1.6	8.0	8.3

Cuadro 2 (parte 2 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	Total	%
36										1					4	1	24			34	2.9
37				1													1			4	0.3
38																				1	0.1
39																				2	0.2
40																					
41																				1	0.1
42																	1			1	0.1
43																					
44																				2	0.2
45																1				4	0.3
46																	1			1	0.1
47																	5			5	0.4
48																	1		1	3	0.3
49		1														1	1		1	8	0.7
50																	1			3	0.3
51	3													1			12		1	27	2.3
52																			1	1	0.1
53																1				1	0.1
54	4						1								1		5		1	42	3.6
55																				4	0.3
56																					
57																				2	0.2
58										1										3	0.3
59																				1	0.1
60	2												15						3	21	1.8
61																			3	21	1.8
62																				1	0.1
63	1																			2	0.2
64																				11	1.0
65																				51	4.4
66	41	24	10	46	23	3	2	2	41	14	1	6	21	2	51	18	137	5	39	1156	100.0
67	3.5	2.1	0.9	4.0	2.0	0.3	0.2	0.2	3.5	1.2	0.1	0.5	1.8	0.2	4.4	1.6	11.9	0.4	3.4	100.0	

Cuadro 3
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS –
Resumen expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa	Petén
1	Dignidad	5			1			3	1	10					10	3	
2	Integridad personal	2		2	4			13	2	3					6	2	4
3	La igualdad	3	1		1					1					8		
4	La personalidad																
5	El nombre													1			
6	Nacionalidad									1							
7	La tolerancia				1					1							
8	Orden y seguridad	40	20	6	8	13	19	121	5	30	15		5	15	62	81	27
9	Derechos políticos							1									
10	Debido proceso	1	1		1	3	6	20	3	2	3			3	4	9	7
11	Libertad			1	1	1	1	73	2		3	2			3	1	3
12	TOTAL	51	22	9	17	17	26	231	13	48	21	2	5	19	93	96	41
13	%	4.4	1.9	0.8	1.5	1.5	2.2	20.0	1.1	4.2	1.8	0.2	0.4	1.6	8.0	8.3	3.5

Cuadro 3
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS –
Resumen expedientes de investigación iniciados

	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	Total	%
1	6	1	1					5	3		3					7		2	61	5.3
2	1			1				1	1						2			1	45	3.9
3	1							1					1					2	19	1.6
4										1									1	0.1
5																8		1	10	0.9
6																			1	0.1
7																			2	0.2
8	15	9	45	22	3	1	2	34	9		3	6		50	13	95	5	22	801	69.3
9																1			2	0.2
10	1					1							1	1	3	26		5	101	8.7
11									1			15						6	113	9.8
12	24	10	46	23	3	2	2	41	14	1	6	21	2	51	18	137	5	39	1,156	100.0
13	2.1	0.9	4.0	2.0	0.3	0.2	0.2	3.5	1.2	0.1	0.5	1.8	0.2	4.4	1.6	11.9	0.4	3.4	100.0	

**Cuadro 4 (parte 1 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
1	LIBRE DETERMINACIÓN														
2	Barreras comerciales														
3	Restricciones al derecho a la propiedad									4					
4	Injusticia tributaria													1	
5	CONSUMIDOR Y USUARIO														
6	Fraude	1								1					
7	Negación o insuficiencia de información sobre todos los aspectos de productos de consumo							2							
8	Falta de advertencia sobre uso y riesgo en el uso de productos						1	1							
9	Agua contaminada									1					
10	Abusos contractuales – contratos leoninos	3	1							1					1
11	Desabastecimiento						1	10	8	4					
12	Alzas inmoderadas de precios y tarifas							50	1	3				1	2
13	Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo						1	5			1				5
14	Inexistencia de medidas que permitan que los consumidores obtengan compensación							1							
15	Ausencia de políticas públicas a favor del consumidor							2		1					1
16	Precios inaccesibles de medicamentos y servicios			1											
17	ALIMENTACIÓN														
18	Hambruna					1		20							
19	Inseguridad alimentaria		1					2							
20	Desnutrición y sus consecuencias (problemas del crecimiento, dificultades motrices, en el funcionamiento de los sistemas inmunológicos y de reproducción, diarrea, reducción de nivel de juego y actividades, limitación del desarrollo y cognoscitivo, malformaciones como médula bífida, ceguera, raquitismo)							3						1	
21	Servicios públicos										1				
22	SALUD														
23	Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)								3		3			2	2
24	Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)				1			1		1					
25	Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)							2		7					6
26	Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud		1					6							2
27	Insuficiente personal sanitario					1									
28	Insuficiente cobertura de inmunización														
29	Contaminación hospitalaria														
30	Mala práctica médica		1				3	9			1			1	
31	Cobros ilegales				1	1		3			2				
32	Falta de atención o asistencia médica				1	2	1	48			1			2	2
33	Mala atención en centro de salud		2		1		1							1	
34	Negligencia médica					1		8			2			2	

**Cuadro 4 (parte 1 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
1																						
2											1										1	0.1
3																					4	0.3
4																					1	0.1
5																						
6	1	1												1				3			8	0.5
7																					2	0.1
8			1																		3	0.2
9							3					1									5	0.3
10																					6	0.4
11	1	1			2						5							4		1	37	2.5
12	7	3	2		1											1		9			80	5.3
13							1											7			20	1.3
14																				1	2	0.1
15																				1	5	0.3
16																					1	0.1
17																						
18					1													1			23	1.5
19	1								1												5	0.3
20																			6		10	0.7
21																					1	0.1
22																						
23																					10	0.7
24					2							1	2			2					10	0.7
25							8			3		3				1		12		2	44	2.9
26	2				1	2			1					1						1	17	1.1
27																					1	0.1
28	1																			1	2	0.1
29			1																		1	0.1
30					1						1			2	1				1		21	1.4
31		1																		1	9	0.6
32		1					1		2											6	67	4.5
33	1						1					1								3	11	0.7
34	1	3	2																	2	21	1.4

**Cuadro 4 (parte 2 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
35	Medidas inadecuadas para la rehabilitación.				1			2							
36	Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado							3							2
37	Negación de atención médica				1			14							2
38	Negación o falta de medicamentos							51							
39	Cobros en consulta externa y emergencias														
40	TRABAJO														
41	Omisión de políticas de Estado en materia laboral	1					4	3				1			
42	Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones	2	1		2	1	2	88			5			3	1
43	No evolución del salario		1					4			1				
44	Subempleo		1					1							
45	Renumeración desigual (rural, mujer, niños)									1					
46	Falta de negociación						1	4		1					
47	Despido ilegal o injusto	1	1		2			27		1	3				5
48	Omisión de fiscalización por parte del Estado		1												
49	Omisión administrativa (comisiones paritarias)							1		1	4				3
50	Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	9		1	3	1	4	66	1	3	1			2	2
51	Falta de pago de las prestaciones laborales				1		2	34	1	1	1	1	2		5
52	Despido injusto	1				1	3	14	1	1	1				
53	Restricciones a la libertad sindical							8			2				
54	EDUCACIÓN														
55	Acceso insuficiente a la formación profesional							16							
56	Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita	2		1			1	1	1	1	2				
57	Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria	2					2	2			2	1			
58	Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación	3			2			21	1	1					4
59	Deserción escolar														
60	Educación NO orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de la dignidad	1						11							
61	Falta de capacitación para participar efectivamente en sociedad							1							
62	Falta de educación en la comprensión, tolerancia y amistad						1			1					
63	No ser capacitado para lograr una subsistencia digna, el mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad								1						
64	Imponer a los padres el tipo de enseñanza para sus hijos								1						
65	No ser escuchado														3
66	Falta de oportunidades de participación en la toma de decisiones en situaciones reales		1												1
67	No ser tratado con justicia						3	1		1	3			1	2
68	No ser informado / formado acerca de las consecuencias de sus decisiones y de los actos derivados de ellas													1	
69	No ser respetado			1			2				1				
70	Falta de insumos y material didáctico		1				1	1							2

**Cuadro 4 (parte 2 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
35	3																				6	0.4
36					2											1				2	10	0.7
37		1	1		1							1							1		22	1.5
38					1												1			4	57	3.8
39																				1	1	0.1
40																						
41	1	1			2													4			17	1.1
42					7	1					2							1			116	7.7
43	1																				7	0.5
44																					2	0.1
45																		1			2	0.1
46	2				2	1								1			1				13	0.9
47																2				2	44	2.9
48	1																				2	0.1
49	10		1		3																23	1.5
50	2				1					2	1			2				2		9	112	7.4
51	1	3	1									1						1		2	57	3.8
52	4	1										1								1	29	1.9
53																					10	0.7
54																						
55																					16	1.1
56	1										1		1								12	0.8
57	1										2										12	0.8
58	1				3				1									1			38	2.5
59		1																			1	0.1
60																					12	0.8
61																					1	0.1
62											1										3	0.2
63																					1	0.1
64																					1	0.1
65	1																	1		1	6	0.4
66										1											3	0.2
67	1	1			1	1							1				1	3		1	21	1.4
68																					1	0.1
69	1				6	2					1							3			17	1.1
70					1					1			1			1					9	0.6

**Cuadro 4 (parte 3 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
71	Falta de infraestructura						1	3			1				1
72	Incrementos de cuotas de estudio							3		2					
73	VIVIENDA														
74	Vivienda inadecuada							4	1		1				
75	Inseguridad jurídica de la tenencia	2					3	8		4	1				
76	Falta de servicios, materiales e infraestructura	1			1			2	1	1					
77	Inasequibilidad de la vivienda (precios, créditos)							1							
78	Inaccesibilidad a centros de empleo, servicios de salud, guarderías, escuela, etc.							1							
79	DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL														
80	Inexistente cobertura social	2													3
81	Insuficiente cobertura social de riesgos	2		1			2								
82	Insuficiente cobertura social a beneficiarios				2		2							1	3
83	Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social	1					10	3						2	2
84	Negación y retiro del derecho a gozar a la seguridad social						1	13						1	
85	Negación de pensión por invalidez o sobrevivencia						2	46							2
86	DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA														
87	No apoyar la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura							1							
88	No respetar el patrimonio natural y cultural	1													
89	No facilitar el disfrute del derecho a la recreación y al deporte														1
90	DERECHO AL DESARROLLO														
91	Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza					1	2	4	1	1					
92	Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera		2				4	23	1					1	
93	DERECHO A LA PAZ														
94	Agresión			1											
95	MEDIO AMBIENTE SANO														
96	Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas							8		1	6				
97	Contaminación visual						1								
98	Contaminación sonora							18		1					
99	Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos	1	1				3							2	
100	Distribuir agua contaminada	1													
101	Deforestación							3						1	2
102	Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos		1				2	2							
103	Desviar o detener de su curso normal el agua									1					
104	Arrojar residuos a las aguas de los ríos, riachuelos, manantiales y lagos			1						1					
105	Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes						1			2					1
106	Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas	1						2							1
107	Cortar, recolectar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora o fauna silvestre sin contar con licencia							1							

**Cuadro 4 (parte 3 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
71					4					1						2	1			3	17	1.1
72												1								2	8	0.5
73																						
74																		2			8	0.5
75		1									1	1						8		1	30	2.0
76					1					2								3			12	0.8
77																					1	0.1
78																		1			2	0.1
79																						
80			2			1											3	4			15	1.0
81			1		2								1					6			15	1.0
82	3	5				1							1					3		6	27	1.8
83																		22			40	2.7
84																				2	17	1.1
85																					50	3.3
86																						
87																					1	0.1
88											1									1	3	0.2
89																		1			2	0.1
90																						
91																					9	0.6
92		1					1													2	35	2.3
93																						
94																					1	0.1
95																						
96	1					1					4									1	22	1.5
97																					1	0.1
98											2							1			22	1.5
99																1	3	3			14	0.9
100																		1			2	0.1
101				1							1										8	0.5
102														1					1		7	0.5
103																					1	0.1
104																					2	0.1
105	1						1													1	7	0.5
106	6																				10	0.7
107																					1	0.1

**Cuadro 4 (parte 4 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
108	Promover, facilitar o invadir tierras ubicadas dentro de áreas protegidas con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito														
109	Transportar, intercambiar, comercializar o explotar ejemplares vivos o muertos o derivados de flora o fauna silvestre amenazadas en extinción, así como de las endémicas y especies consideradas dentro de listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicadas por CONAP													1	
110	Destrucción de los Recursos No Renovables														1
111	TOTAL MENSUAL	38	17	7	19	10	68	693	23	50	46	3	2	27	70
112	%	2.5	1.1	0.5	1.3	0.7	4.5	46.0	1.5	3.3	3.1	0.2	0.1	1.8	4.7

**Cuadro 5 – Resumen expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
1	Libre determinación									4				1		
2	Consumidor y usuario	4	1	1			3	71	9	11	1			1	9	9
3	Alimentación		1			1		25			1			1		1
4	Salud		4		6	5	5	147	3	8	9			8	16	8
5	Trabajo	14	5	1	8	3	16	250	3	9	18	2	2	5	16	22
6	Educación	8	2	2	2		11	60	4	6	9	1		2	13	6
7	Vivienda	3			1		3	16	2	5	2					
8	Derecho a la seguridad social	5		1	2		17	62						4	10	3
9	Derecho a la cultura y la ciencia	1						1							1	
10	Derecho al desarrollo		2			1	6	27	2	1				1		
11	Derecho a la paz			1												
12	Medio ambiente sano	3	2	1			7	34		6	6			4	5	8
13	TOTAL	38	17	7	19	10	68	693	23	50	46	3	2	27	70	57
14	%	2.5	1.1	0.5	1.3	0.7	4.5	46.0	1.5	3.3	3.1	0.2	0.1	1.8	4.7	3.8

**Cuadro 4 (parte 4 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
108		1																			1	0.1
109																					1	0.1
110																					1	0.1
111	57	26	12	1	41	14	16	0	5	10	24	11	7	8	1	11	10	108	9	61	1505	100.0
112	3.8	1.7	0.8	0.1	2.7	0.9	1.1	0.0	0.3	0.7	1.6	0.7	0.5	0.5	0.1	0.7	0.7	7.2	0.6	4.1	100.0	

**Cuadro 5 – Resumen expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
1										1										6	0.4
2	5	3		3		4				5	1		1		1		23		3	169	11.2
3				1				1									1	6		39	2.6
4	6	4		8	2	10		3	3	1	6	2	3	1	4	1	12	2	23	310	20.6
5	5	2		15	2				2	3	2		3		2	1	9		14	434	28.8
6	2			11	7			1	3	5	1	3			3	2	8		7	179	11.9
7	1			1					2	1	1						14		1	53	3.5
8	5	3		2	2							2				3	35		8	164	10.9
9										1							1		1	6	0.4
10	1																		2	43	2.9
11						1														2	0.1
12	1		1		1	1				7			1		1	3	5	1	2	100	6.6
13	26	12	1	41	14	16	0	5	10	24	11	7	8	1	11	10	108	9	61	1,505	100.0
14	1.7	0.8	0.1	2.7	0.9	1.1	0.0	0.3	0.7	1.6	0.7	0.5	0.5	0.1	0.7	0.7	7.2	0.6	4.1	100.0	

Cuadro 6 (parte 1 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
1	NIÑEZ Y LA JUVENTUD														
2	Maltrato infantil y juvenil	4	3				4	54	3	7				3	9
3	Violencia intrafamiliar														
4	Falta de acceso a la salud							10		5					
5	Falta de reconocimiento familiar y de alimentos (alimentación, vestuario, vivienda)								1						
6	La separación de los niños, niñas y jóvenes de sus familias, salvo circunstancias especiales definidas en la Ley							5							
7	La adopción ilegal							1							
8	La adopción por motivos económicos														
9	Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven			1				7				1		1	1
10	Abandono														
11	Abuso físico o mental							1		1					
12	Abuso sexual							2						1	
13	Descuidos o tratos negligentes	2				1		2		1					1
14	Prostitución infantil							1							
15	Prostitución juvenil														
16	Acoso sexual	1						1							1
17	Falta de políticas sociales que permitan el nacimiento y el desarrollo sano y armonioso													1	
18	Falta de atención médica adecuada							6							
19	Trabajo infantil peligroso														
20	Falta de acceso a la educación							9							
21	Muerte							1							
22	ADULTO MAYOR														
23	Discriminación cultural, social, económica, política		1				2	7							2
24	Violencia física o psicológica							3		1					
25	Exclusión							4							
26	Maltrato							11		1					
27	Falta de acceso a servicios de salud							25							
28	Falta de acceso a la seguridad social							120	1						
29	Falta de acceso a la justicia							2							
30	Derecho a la libre locomoción							1							
31	DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES														
32	Discriminación cultural, social, económica, política	1						3			1				
33	Violencia física o psicológica							2							
34	Maltrato							9							
35	Falta de acceso a servicios de salud							7							
36	Falta de acceso a servicios educativos							1							
37	Falta de acceso a la seguridad social							21							

Cuadro 6 (parte 1 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Jutiapa	Peñén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
1																						
2	2			2							15			1		1		2			110	17.2
3												1									1	0.2
4																					15	2.3
5																					1	0.2
6											1										6	0.9
7																					1	0.2
8												1									1	0.2
9		1														2				2	16	2.5
10												1									1	0.2
11	2	1			1											1					7	1.1
12	1										1					1					6	0.9
13											3	1								2	13	2.0
14																					1	0.2
15				1																	1	0.2
16											1						2				6	0.9
17																					1	0.2
18																					6	0.9
19											1										1	0.2
20																					9	1.4
21				1																	2	0.3
22																						
23																	3				15	2.3
24																					4	0.6
25																					4	0.6
26																					12	1.9
27	1																				26	4.1
28														2							123	19.2
29																					2	0.3
30																					1	0.2
31																						
32						1															6	0.9
33	1																				3	0.5
34																					9	1.4
35																					7	1.1
36																					1	0.2
37																					21	3.3

Cuadro 6 (parte 2 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
38	MUJER														
39	Discriminación cultural, social, económica, política		1					4	1	4					3
40	Violencia física o psicológica					1		3	3	6					
41	Maltrato		1					3		3					
42	Abusos deshonestos														
43	Violencia sexual	1							1						
44	Acoso sexual	1	2					9			1				
45	Acoso laboral hacia mujeres embarazadas							6							
46	Falta de acceso a la salud							2							
47	Falta de acceso a la seguridad social		1					1							
48	POBLACION DESARRAIGADA Y MIGRANTE														
49	Persecución														
50	Impedir el retorno														
51	Repatriación involuntaria							1							
52	Expulsión							2							
53	Violencia física o psicológica							2							
54	Falta de acceso a los servicios de salud							1							
55	Abuso de autoridad							3							
56	Falta de acceso a la justicia							2							
57	DETENIDO O RECLUSO														
58	Alimentación inadecuada e insuficiente o en mal estado														1
59	Acciones que atentan contra su dignidad	1	2				2	4		3					3
60	Acciones que atentan contra su integridad						4	5			1			1	
61	Ambiente y prácticas insalubres	1													
62	Maltrato					2	1	3		1					
63	Traslados inadecuados o peligrosos					1		4		1					
64	No conceder la visita conyugal en los centros femeninos						1								
65	No permitir el acceso a beneficios penitenciarios						1	1							
66	Acciones que atentan contra la salud							7							
67	No permitir visita						1			2				1	
68	Falta de garantías procesales														
69	Falta de acceso a la justicia							2							
70	PUEBLOS INDÍGENAS														
71	Discriminación racial							3							
72	No permitir o facilitar el aprendizaje y el ejercicio de la identidad cultural (formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización, traje indígena, idiomas o variantes dialectales, instituciones propias)	1													
73	Falta de seguridad							1							
74	Falta de oportunidades de decidir su propio modelo de desarrollo													1	
75	Inexistencia de políticas y acciones afirmativas									1					

Cuadro 6 (parte 2 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
38																						
39														1							14	2.2
40	2										1			2							18	2.8
41											24										31	4.8
42														1							1	0.2
43																					2	0.3
44																					13	2.0
45																					6	0.9
46																					2	0.3
47																					2	0.3
48																						
49		1																			1	0.2
50		1																			1	0.2
51																					1	0.2
52																					2	0.3
53																					2	0.3
54																					1	0.2
55																					3	0.5
56																					2	0.3
57																						
58	1																			1	3	0.5
59																		1			16	2.5
60																				1	12	1.9
61																					1	0.2
62																		1		2	10	1.6
63																				2	8	1.2
64																					1	0.2
65																					2	0.3
66																		2			9	1.4
67																					4	0.6
68					1																1	0.2
69																					2	0.3
70																						
71		2			1											1					7	1.1
72					1																2	0.3
73																					1	0.2
74																					1	0.2
75																					1	0.2

Cuadro 6 (parte 3 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
76	Ejecución de proyectos sin consulta y sin evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente)							1		3					
77	No tomar en consideración el derecho indígena							1			1				
78	Falta de acceso a la justicia							1							
79	Otros														
80	POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO														
81	Trato desigual y excluyente hacia familiares de personas desaparecidas							1							
82	Falte de resarcimiento							1							
83	Falta de atención a demandas de las comunidades afectadas por el Conflicto Armado Interno							4							
84	POBLACION CON VIH-SIDA														
85	Falta de acceso a la salud							3							
86	Denegación del derecho al trabajo por ser portador de VIH-SIDA							1							
87	POBLACION CON ORIENTACION SEXUAL DIFERENTE														
88	Discriminación y exclusión							1							
89	TOTAL MENSUAL	13	11	1	0	5	16	399	10	40	4	1	0	9	21
90	%	2.0	1.7	0.2	0.0	0.8	2.5	62.2	1.6	6.2	0.6	0.2	0.0	1.4	3.3

Cuadro 7
DERECHOS ESPECÍFICOS – Resumen expedientes de investigación iniciados

Derechos específicos	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
Niñez y la juventud	7	3	1		1	4	100	4	14		1		6	12	5
Adulto mayor		1				2	173	1	2					2	1
Discapacitados y personas con retos especiales	1						43			1					1
Mujer	2	5			1		28	5	13	1				3	2
Población desarraigada y migrante							11								
Detenido o recluso	2	2			3	10	26		7	1			2	4	1
Pueblos indígenas	1						7		4	1			1		
Población víctima del conflicto armado interno							6								
Población con VIH-SIDA							4								
Población con orientación sexual diferente							1								
TOTAL	13	11	1	0	5	16	399	10	40	4	1	0	9	21	10
%	2.0	1.7	0.2	0.0	0.8	2.5	62.2	1.6	6.2	0.6	0.2	0.0	1.4	3.3	1.6

Cuadro 6 (parte 3 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

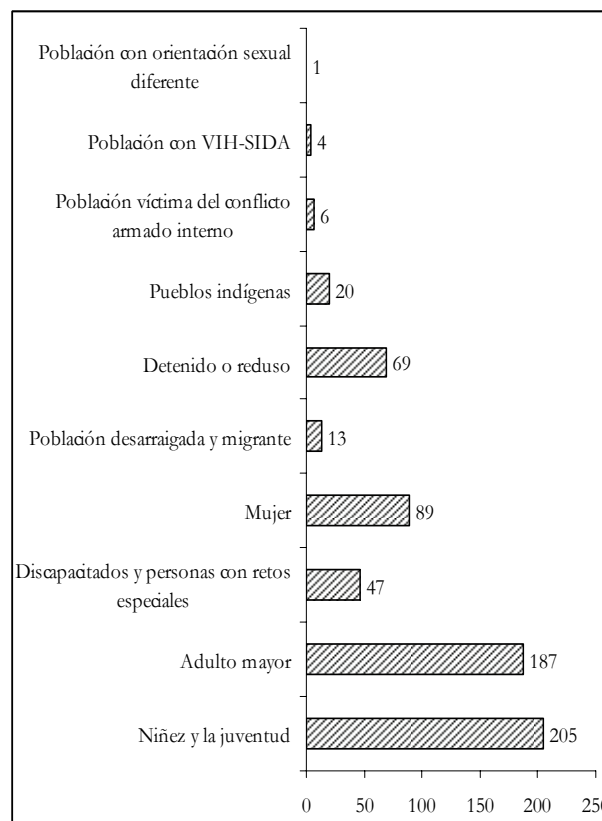
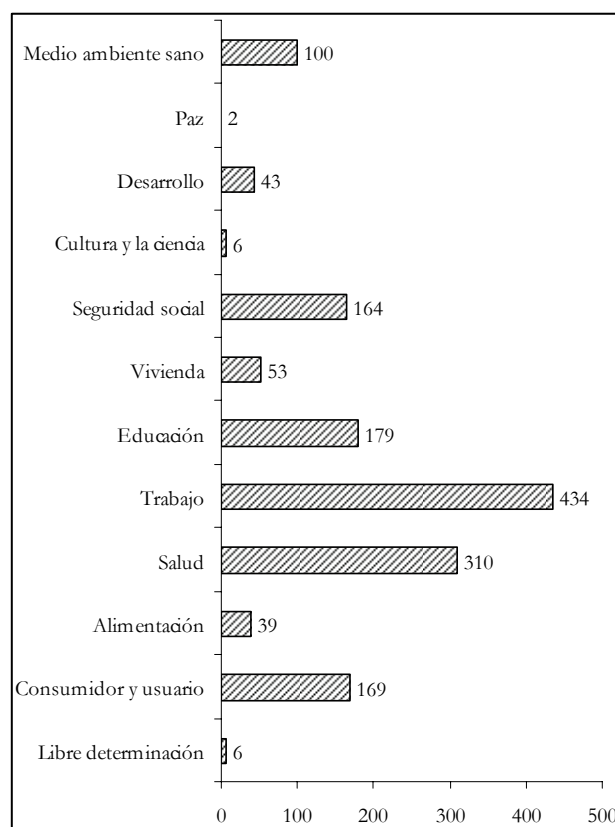
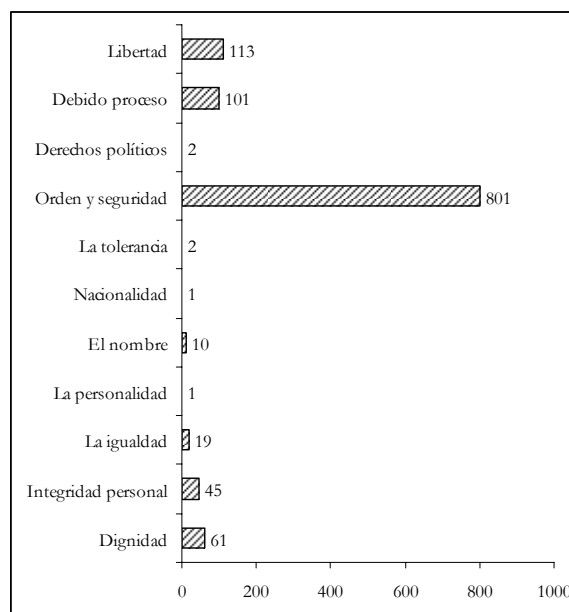
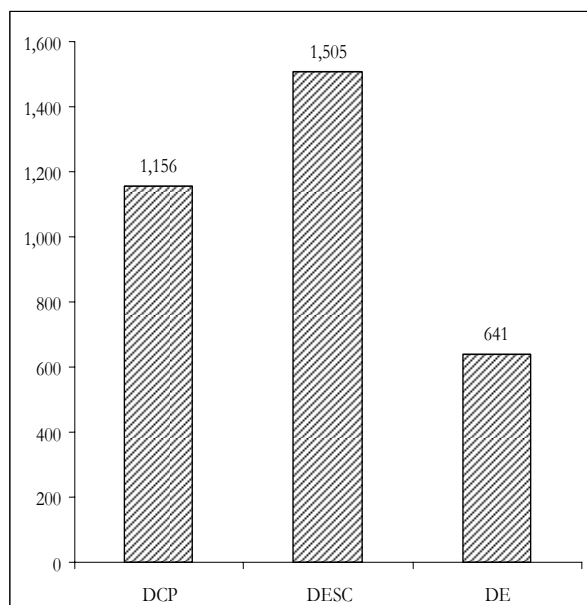
	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
76																					4	0.6
77																					2	0.3
78																					1	0.2
79									1												1	0.2
80																						
81																					1	0.2
82																					1	0.2
83																					4	0.6
84																						
85																					3	0.5
86																					1	0.2
87																						
88																					1	0.2
89	10	6	0	4	4	1	0	0	1	0	47	4	0	7	0	6	0	11	0	10	641	100.0
90	1.6	0.9	0.0	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	7.3	0.6	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	1.6	100.0	

Cuadro 7
DERECHOS ESPECÍFICOS – Resumen expedientes de investigación iniciados

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
2		4	1							22	4		1		5		4		4	205	32.0
													2				3			187	29.2
					1															47	7.3
										25			4							89	13.9
2																				13	2.0
				1													4		6	69	10.8
2				2				1							1					20	3.1
																				6	0.9
																				4	0.6
																				1	0.2
6	0	4	4	1	0	0	1	0	47	4	0	7	0	6	0	11	0	10		641	100.0
0.9	0.0	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	7.3	0.6	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	1.6		100.0	

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS

Enero a noviembre 2009



Cuadro 8
INICIO DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN

AUXILIATURAS	INICIADOS DE OFICIO (EIO)	INICIADOS POR DENUNCIA (ORD)	TOTAL
Alta Verapaz	13	89	102
Baja Verapaz	3	47	50
Chimaltenango	9	8	17
Chiquimula	6	30	36
El Progreso	8	24	32
Escuintla	19	91	110
Guatemala	37	194	231
Guate - móvil I	10	36	46
Guate - móvil II	11	127	138
Huehuetenango	18	53	71
Huehue - móvil	2	4	6
Huehue - Nentón	1	6	7
Izabal	17	39	56
Jalapa	42	142	184
Jutiapa	19	144	163
Petén	5	68	73
Petén - Poptún	7	29	36
Petén - El Naranjo	11	4	15
Quetzaltenango	18	73	91
Coatepeque	9	29	38
Quiché	14	5	19
Quiché - Ixcán		2	2
Quiché - Nebaj	1	7	8
Retalhuleu	16	35	51
Sacatepéquez	8	77	85
Santa Lucía Milpas Altas	10	6	16
San Marcos	3	10	13
Santa Rosa	24	12	36
SR - Chiquimulilla	1	2	3
Sololá	7	61	68
Santiago Atitlán	6	22	28
Suchitepéquez	35	221	256
Totonicapán	9	5	14
Zacapa	36	74	110
TOTAL	435	1,776	2,211

Cuadro 9
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS

AUXILIATURAS	Organismo Ejecutivo	Organismo Judicial	Organismo Legislativo	Entidades autónomas o descentralizadas	Empresas privadas o personas particulares	TOTAL	%
Alta Verapaz	66	1	1	26		94	2.22
Baja Verapaz	43	2		13		58	1.37
Chimaltenango	7			10		17	0.40
Chiquimula	28	1		16	2	47	1.11
El Progreso	23	3		17		43	1.02
Escuintla	63	2		40	5	110	2.60
Guatemala	51	9		26	71	157	3.71
Guate - móvil 1	100	45		96	838	1079	25.47
Guate - móvil 2	56			76	6	138	3.26
Huehuetenango	81	75		62	8	226	5.34
Huehue - móvil sur	3			8	22	33	0.78
Huehue - Nentón	2	6		26		34	0.80
Izabal	29	1		22	4	56	1.32
Jalapa	125	10		45	2	182	4.30
Jutiapa	68	4		38	4	114	2.69
Petén	87	7		54	299	447	10.55
Petén - Poptún	36			35	1	72	1.70
El Naranjo		5		2		7	0.17
Quetzaltenango	39	13	2	22	2	78	1.84
Coatepeque	23	1		9	1	34	0.80
Quiché	7			12		19	0.45
Quiché - Ixcán	6	25		37	2	70	1.65
Quiché - Nebaj	8			8		16	0.38
Retalhuleu	31	2		112	196	341	8.05
Sacatepéquez	16	32		22	9	79	1.86
Santa Lucía Milpas Altas						0	0.00
San Marcos	8			5		13	0.31
Santa Rosa	13	1		20	2	36	0.85
Chiquimulilla	12	1		24	92	129	3.05
Sololá	32	4		27	5	68	1.61
Santiago Atitlán	10	2		12		24	0.57
Suchitepéquez	121	19		192	12	344	8.12
Totonicapán	12	1			1	14	0.33
Zacapa	18	3		34	2	57	1.35
TOTAL	1,224	275	3	1,148	1,586	4,236	100.00
%	28.90	6.49	0.07	27.10	37.44	100.00	

Defensoría de la Mujer



Defensoría de la Mujer

Objetivo

La Defensoría de los Derechos de la Mujer (Defem) fue creada, mediante Acuerdo No. 04-91 de la Secretaría General de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, en abril de 1991. Administrativamente surgió encargada de promover, divulgar y proteger los derechos de la mujer contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado guatemalteco.

Objetivo específicos

1. Incidir en el ámbito social y legal, en el diseño y aplicación de políticas públicas que fomenten el respeto y el ejercicio de los derechos de las mujeres, a través de actividades de supervisión, observación e investigación.
2. Promover y divulgar los derechos de las mujeres.
3. Monitorear y dar seguimiento a las agendas de la administración pública y los Acuerdos de Paz, en el marco de los derechos de las mujeres, enfatizando la equidad de género.
4. Fortalecer las capacidades institucionales de la Defensoría de los Derechos de la Mujer.

Atribuciones

Procurar la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres a través de la incidencia, fiscalización a la administración pública y la procuración de sus derechos, para el fortalecimiento de la organización de la mujer.

Funciones

Promover, divulgar, procurar, observar, analizar e investigar el respeto y desarrollo de los derechos de las mujeres.

Visión

Trabajar como una instancia sólida, política, representativa y legítima que monitorea y verifica la vigencia plena de los derechos de las mujeres, con el fin de contribuir a la construcción y consolidación de la justicia, la democracia y la cultura de paz.

Misión

Promover, divulgar, procurar, observar, analizar e investigar el respeto y desarrollo de los derechos de las mujeres; observar el cumplimiento de las leyes y la pertinencia socioeconómica y cultural de las políticas públicas, a fin de garantizar el respeto de los derechos de las mujeres a través de acciones estratégicas de alto impacto.

Estructura

La Defensoría de la Mujer está estructurada de la siguiente manera:

1. Defensora de los derechos de la mujer
2. Secretaria
3. Auxiliar de Defensoría
4. Auxiliar Administrativa

Marco jurídico:

El Acuerdo SG-04-91 tiene como base jurídica los artículos 13, 14, 18, 20 y 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos y sus reformas contenidas en los Decretos 54-86 y 32-87 del Congreso de la República; y en los artículos 5º, 6º y 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Antecedentes

Por muchos años no estuvo garantizado el pleno respeto a los derechos humanos de la mujer, ya que existía una marcada discriminación y abuso a su condición y, como consecuencia, surgió una serie de movimientos mundiales en defensa de los derechos de la mujer, logrando avances significativos en esta materia. En Guatemala se requirió de una serie de acciones necesarias que establecieron una vinculación más estrecha con todas aquellas instituciones nacionales e internacionales consagradas a la protección de los derechos de la mujer, con la finalidad de coordinar acciones y optimizar esfuerzos o recursos para establecer y mantener la vigencia efectiva de los derechos de la mujer. Por lo que, dada la importante tarea que realiza la institución del Procurador de los Derechos Humanos, se hacía necesario contar con una instancia encargada de promover, divulgar y proteger los derechos de las mujeres, impulsando con otras organizaciones su incorporación al proceso de desarrollo del país.

Cobertura

La Defem cubre toda la República; los departamentos son atendidos a través las oficiales de la Defensoría, que son parte del equipo de las Auxiliaturas Departamentales para el tema de la mujer.

Problemática enfrentada

La falta de voluntad política de los órganos jurisdiccionales para la pronta y correcta aplicación de la normativa vigente, permite los altos índices de violencia intrafamiliar, violencia y muerte de mujeres. Asimismo, la falta de cultura de la denuncia hace que muchas mujeres se mantengan en el anonimato.

Violencia. La violencia contra la mujer limita el pleno goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida y su seguridad personal, la salud física y mental, la educación, el trabajo y a la vivienda, así como la participación en la vida pública. La violencia perpetúa la subordinación de las mujeres y el abuso del poder de los hombres. Además, acarrea un pesado costo humano y económico, obstaculiza su desarrollo y puede ser causa de migración. Según la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, “debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1º). Existen tratados y convenios internacionales que amparan a la mujer, y tienen como objetivo garantizar la vida, la libertad, integridad, dignidad, la protección e igualdad ante la Ley.

La sociedad guatemalteca enfrenta una cultura de violencia en general; sin embargo, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres se evidencia cada día más, con consecuencias que alteran la salud pública y seguridad ciudadana. De enero a septiembre del 2009 se atendieron 227 casos de asesorías y orientaciones a mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar por las siguientes violaciones:

Mes	Violencia física	Violencia psicológica	Violencia sexual	Violencia económica y patrimonial	Violencia laboral	Otros tipos de violencia	TOTAL
Enero	4	2		8	2		16
Febrero	6	3	3	9	1	1	23
Marzo	5	9		8		2	24
Abril	4	5		7		2	18
Mayo	4	9	1	5	3		22
Junio	5	10	2	4	2	3	26
Julio	2	14		2	1	19	38
Agosto	3	19	4	4		4	34
Septiembre	6	6	1	2	2	9	26
TOTALES	39	77	11	49	11	40	227

Muerte violenta de mujeres. El problema de este flagelo es crónico, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), hasta el 23 de agosto se reportaron 535 muertes violentas de mujeres. Lo más preocupante es que en los últimos cinco años han ido en aumento: durante 2004 fueron 497 mujeres, en 2005 la cifra aumentó a 518, en 2006 fueron 603, en 2007 se dieron 590 casos y en 2008 se elevó a 722 mujeres asesinadas. Con el agravante de que, según el Ministerio de Gobernación, durante 2008 y 2009, el 38% de los asesinatos fue producto de la violencia intrafamiliar. No obstante la existencia del marco jurídico legal, aprobado en abril de 2008 y vigente desde el 7 de mayo del mismo año, y la implementación de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto No. 22-2008), estos índices aún no disminuyen, por la falta de acciones eficaces por parte de las instituciones operadoras de justicia.

Abuso de poder. Se manifiesta en el abuso de autoridad tanto en el ámbito privado como en el público, y está íntimamente ligado a las acciones de violencia en contra de la mujer, así como de la niñez.

Discriminación. Las mujeres son uno de los grupos más excluidos; a pesar de los avances en algunos países, no tienen las mismas oportunidades que los hombres y, por tanto, son marginadas.

Maltrato. El maltrato a la mujer es un acto de cobardía y machismo que lamentablemente afecta de manera radical al núcleo familiar, haciendo que termine destruyéndose.

Exclusión. La exclusión y la discriminación hacia las mujeres obedecen a patrones de crianza heredados que tienen se basan en un alto contenido de desigualdad.

Arbitrariedad. Son decisiones tomadas en forma unipersonal dentro del núcleo familiar, sin tomar en cuenta a la mujer. Este patrón se transmite paulatinamente a la niñez, que lo repite en la edad adulta en sus propios hogares y entorno.

Resarcimiento a las mujeres sobrevivientes de violencia y familiares de las víctimas. El artículo 11 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer establece que la reparación a la víctima será proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del autor del delito. En ningún caso implicará un enriquecimiento sin causa de la víctima. El resarcimiento podrá decretarse por los órganos de justicia que conozcan del caso. Cuando la víctima haya fallecido, el derecho a la reparación se extiende a sus sucesores, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y Código Procesal Penal. Los perjuicios se refieren a los ingresos que la sobreviviente haya dejado de percibir y, en el caso de las víctimas de femicidio, lo que en términos económicos representaba el apoyo de la víctima para su familia antes de su muerte.

Femicidio. “Muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres” (artículo 3 de la Ley contra el femicidio). Se trata de un homicidio calificado en el cual concurren circunstancias particulares que se cometen en contra de las víctimas por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino. Según la Convención de Belém Do Pará, en su artículo 1, el femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Es una manifestación de violencia en su contra.¹

Misoginia. Odio o desprecio a las mujeres, o subestimación de las mujeres por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino. Es una manifestación del patriarcado que descalifica o desvaloriza la condición de las mujeres como personas con dignidad, capacidades y facultades, se les interioriza, se les coloca en un plano secundario y de desvalorización. Se presenta en la vida cotidiana, pero, cuando se exagera, se traduce en diversas formas de violencia contra la mujer. En el caso de los femicidios, la misoginia se evidencia por la forma como las víctimas son encontradas: sus cuerpos demuestran una extrema violencia, lo cual demuestra una doble tortura hacia las mujeres.²

¹ Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Decreto No. 22-2008. Comentada y concordada. Guatemala, abril de 2009. p. 15.

² *Ibid.*

Acciones emprendidas

- Se crearon ocho nuevas redes de paternidad y maternidad responsable, llegando a 24 en toda la República, en las cuales participan instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
- En coordinación con la Dirección de Defensorías y el Centro de Salud Reproductiva del Hospital San Juan de Dios se elaboró y presentó públicamente el “Protocolo para la prevención de la mortalidad materna”, en conferencia de prensa, juntamente con la Defensoría de Pueblos Indígenas. Este protocolo pretende impulsar la campaña en contra de la muerte materna en Guatemala, con el objetivo de involucrar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema y las instituciones de justicia, para deducir responsabilidades a las personas que por una u otra razón se vean involucradas en las muertes maternas; se considera que transmitir mayor información a la población genere conciencia en la toma de decisiones que demande la justicia.
- Participación en el Congreso Nacional de Salud; se elaboraron propuestas y se presentaron los temas sobre la violencia contra la mujer y violencia sexual, con el apoyo del Ministerio Público y Médicos sin Fronteras, instituciones que trabajan estos temas, con lo que se aportó a la construcción de propuestas para abordar la problemática de la salud de la mujer a partir de las consecuencias físicas, psicológicas y psiquiátricas que causa la violencia contra la mujer.
- Participación en la Red de Organizaciones e Instituciones del Estado y Sociedad Civil, que elaboró la propuesta de iniciativa de Ley que plantea reformar el Código de Trabajo y Previsión Social para incluir los derechos de las mujeres trabajadoras de casa particular. La propuesta fue presentada y aprobada por el pleno del Congreso de la República en segunda lectura; se espera su aprobación definitiva para el primer semestre de 2010. Se contó con el apoyo de la Comisión de la Mujer del Congreso, que formó la mesa de discusión, teniendo como resultado la propuesta de la iniciativa.
- Se atendió a 227 mujeres brindándoles asesoría y orientación, quienes presentaron su denuncia en la Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias de la institución.

Acompañamientos

- Esta unidad brindó 76 acompañamientos a mujeres sobrevivientes de violencia a las diferentes instancias del Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública, lo cual se traduce en por lo menos siete sentencias a favor de las mujeres.

Investigaciones

- Éstas van encaminadas a identificar los índices de las muertes violentas de mujeres, desde los lugares donde se producen los hechos, así como sus causas; información de la cual se lleva un archivo vertical.
- Se investigan los casos de las mujeres sobrevivientes de violencia cuando los procesos ante los órganos de justicia no dan una respuesta pronta y efectiva.
- Controles estadísticos del número de asesorías y orientaciones que se brindan a diario, clasificados por el tipo de violencia, nivel de escolaridad, etnia y edades de las sobrevivientes. Esta información es utilizada constantemente para elaborar informes solicitados tanto interna como externamente.

Monitoreos

- Verificación y monitoreo a los servicios prestados por instituciones del Estado, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Preventivo de mujeres privadas de libertad. En el caso de éstas últimas se han realizado visitas y se reciben denuncias de las constantes violaciones de sus derechos, a las cuales, además de trasladarlas a las unidades internas de la PDH, se le da seguimiento y se verifica su atención.

- Monitoreo de la problemática de las mujeres afectadas por la trata de personas, en coordinación con la Asociación de Salud Integral (ASI), dando pie al taller para conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niños y Adolescentes.
- El tema de las trabajadoras de casa particular se coordina con la Asociación de las Trabajadoras de Casa Particular; se ha dado el seguimiento a violaciones laborales, y en algunos casos se han solucionado en coordinación con la Unidad de la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Supervisiones

- En el presente año se realizó la supervisión en toda la República, a las instituciones operadoras de Justicia, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil y Ministerio Público, en coordinación con la Unidad Contra la Impunidad, para verificar el avance en el cumplimiento de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
- Supervisión en materia de avances en el acceso de la mujer a la justicia, con resultados positivos que permitirán fortalecer la atención del tema de la mujer.

Casos atendidos por la Defensoría

Rescate de una mujer sobreviviente de violencia.

La persona solicitó asesoría y orientación a la Defem, y presentó su denuncia en la Unidad de Recepción de Denuncias de la PDH; se solicitaron medidas de seguridad, las cuales se hicieron efectivas: el agresor al ser notificado para salir del hogar conyugal por la Policía Nacional Civil (PNC), tuvo que hacerlo en el plazo de 48 horas, para permitir que la familia viva y se desarrolle en un ambiente libre de violencia.

Rescate de un menor

Un menor fue sustraído con engaños del hogar de su progenitora cuando se encontraba al cuidado de la abuela materna, ya que la madre estaba trabajando. La familia del esposo se lo llevó a Jalapa. La madre solicitó apoyo de la institución del PDH para recuperar a su hijo, por lo que se presentó la denuncia. Se coordinó con la Unidad para la Atención de la violencia contra la mujer de la Defensa Pública, y se coordinó con las Auxiliaturas Departamentales de Jalapa y Jutiapa. Fue necesario involucrar a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público, al Organismo Judicial y la PNC. Después de dos acciones, entre éstas un allanamiento, el menor fue rescatado en medio de presiones de la población en apoyo al padre. La Oficial de Defensorías de la Auxiliatura de Jalapa dio acompañamiento y coordinó con la PNC el traslado del menor y la madre hasta su hogar en la capital.

Sobreviviente de violencia contra la mujer

La víctima interpuso una denuncia contra su ex conviviente por violencia, quien reside en la aldea La Arada, Gualán, Zacapa, a donde ella fue citada por el Ministerio Público, por denuncia de difamación y calumnia, debido que el ex conviviente tiene nexos con las autoridades de ese lugar. La afectada temía por su vida. Se coordinó con la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público, se envió un resumen del caso y se logró anexar las acciones al expediente de la señora en la Fiscalía de la Mujer en la capital. El caso ha seguido el debido proceso y el agresor fue capturado. El Ministerio Público logró la solicitud de la acusación y apertura a juicio en el debate realizado el 29 de octubre por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Rescate de sobreviviente de violencia

Por medio de su hermana, la persona afectada solicitó asesoría y orientación presentando su denuncia, y le fueron otorgadas medidas de seguridad contra el esposo. Al llegar la PNC a notificar dichas medidas al agresor se negó a entregar a la esposa; por el contrario, volvió a agredirla físicamente obligándola a desistir de la denuncia, para lo que la llevó al Ministerio Público. La víctima le pidió a su familia que la rescatara al llegar a este lugar, cuando supuestamente irían a retirar la denuncia. Al llegar al Ministerio Público, la señora actuaba

bajo coacción, la Defem estableció comunicación con el juez que conocía el caso y con funcionarias de la Unidad de Atención a la Víctima de esta institución e inmediatamente se ordenó la entrega de la afectada a su familia.

Denuncias por violencia intrafamiliar en los departamentos

Departamento	Total
Guatemala	413
Sacatepéquez	60
Retalhuleu	44
Santiago Atitlán	7
El Progreso	133
Chiquimula	11
Santa Rosa	11
Quetzaltenango	35
Huehuetenango	39
San Marcos	5
Santa Cruz del Quiché	45
Totonicapán	26
Huehuetenango	24
Escuintla	27
Chimaltenango	18
Izabal	137
Huehuetenango, Nentón	8
El Quiché	8
Sololá	71
Suchitepéquez	48
Jalapa	61
Poptún, Petén	38
TOTAL	1,269

Casos de violación de los derechos de la mujer en el departamento de Guatemala Enero a septiembre de 2009

Tipo de violencia	Total
Abusos deshonestos	5
Acoso sexual	6
Delitos contra el honor	2
Discriminación cultural, económica y social	3
Femicidio	17
Maltrato	28
Violación del derecho al trabajo (violencia económica)	12
Violencia intrafamiliar; incluye violencia física, psicológica y sexual	413
TOTAL	486

Actividades

Promoción de los derechos humanos

- 25 talleres de sensibilización sobre derechos de la mujer y violencia intrafamiliar y contra la mujer, género, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, paternidad y maternidad responsable, salud reproductiva, explotación sexual y trata de personas y participación política, dirigidos a señoritas de colegios e institutos, organizaciones de mujeres de la sociedad civil y el Estado,

unidades y estudiantes del último año de la Academia de la PNC, grupos de las universidades San Carlos de Guatemala y Mariano Gálvez, beneficiándose a 2,300 mujeres y 85 hombres.

- Publicación de dos comunicados en los medios escritos, en conmemoración del Día internacional de la mujer (8 de marzo) y el Día internacional contra la explotación sexual y trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
- Tres conferencia de prensa: la primera dio a conocer el protocolo de atención que plantea la reducción de la muerte materna; la segunda, en coordinación con la Defensoría de Pueblos Indígenas, para denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres de las maquilas, juntamente con la Defensoría del Trabajador; y la última, para conmemorar el Día internacional de la explotación sexual y trata de personas. Se tuvo cobertura de trece medios escritos, televisivos y radiales. Se participó en el programa de 60 minutos en radio Sonora, para abordar el mismo tema, alternando con la Asociación de Salud Integral y UNICEF.
- Reproducción de cuatro trifoliales para divulgar los derechos de la mujer, y temas como violencia intrafamiliar, explotación sexual y trata de mujeres, niñas niños y adolescentes, y no violencia contra la mujer, con una reproducción de ocho mil ejemplares distribuidos en toda la República.
- Declaraciones en los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, sobre la violencia contra la mujer, muerte violenta de mujeres, acceso de la mujer a la Justicia, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia laboral, permitiendo abordar la problemática de la mujer en el ámbito nacional y generar mejor opinión en la población sobre el tema de las violaciones a los derechos de este genero.
- En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó la semana de promoción de los derechos de la mujer, con la participación de trabajadoras y trabajadores de la institución, la sociedad civil y el Estado. Esta sensibilización se realizó alrededor de la República a través de las Oficiales de Defensorías responsables del tema de la mujer en las Auxiliaturas Departamentales.
- Se participó fiscalizando el proceso de elección de dos delegadas de la mujer al Consejo de Desarrollo departamental (CODEDE) de Chimaltenango, con el nombramiento de testigas de honor, actuando en la verificación de dos asambleas departamentales, donde la Secretaría Presidencial de la Mujer, como parte del procedimiento, convocó a 70 organizaciones de mujeres.
- Verificación del proceso de elección de delegadas, titular y suplente, de la Coordinadora Nacional del Foro Nacional de la Mujer para el departamento de Guatemala. La Defem participó en la supervisión del proceso, contribuyendo a la transparencia del proceso y al fortalecimiento de esta organización.
- En el marco del cumplimiento del convenio PDH-Ministerio Público, se elaboró un protocolo que permitirá que la institución monitoree y verifique el cumplimiento del instrumento de apoyo a las víctimas de violencia sexual; en el proceso participan no sólo las instituciones firmantes, sino también los hospitales nacionales, San Juan de Dios y Roosevelt, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
- 50 entrevistas, principalmente a estudiantes de colegios, institutos y distintas universidades del país, así como organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales e instituciones del Estado (entre éstas la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala con sede en Washington, la Asociación Latinoamericana Las Petateras, el equipo de la Radio Feminista de Nicaragua y la Asociación Mía con sede en Estados Unidos, y el medio de comunicación español Mi País), acerca de la temática de la mujer, acceso a la justicia, género, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, muerte violenta y sobre los avances y limitaciones en la aplicación de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, entre otros.
- Acompañamiento de varios procesos en los juzgados de justicia, entre éstos, uno donde el victimario es un policía sentenciado a 17 años; otro en el proceso en el cual se aplica la primera sentencia sobre violencia contra la mujer. Con las acciones de la Defem se logró que en uno de los casos que se ha acompañado desde el 2007, se aprobara apertura a debate para 2010.

Procuración y control administrativo:

- Supervisión a las instituciones operadoras de justicia, Organismo Judicial, PNC y Ministerio Público, en coordinación con la Unidad Contra la Impunidad, Control Administrativo y las Auxiliaturas

Departamentales para verificar el avance en el cumplimiento de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la aplicación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.

- Recepción periódica de denuncias de mujeres privadas de libertad, las cuales son trasladadas al Departamento de Procuración, para su verificación y atención..
- Monitoreo de la problemática de la trata de personas, a través de la coordinación con la Asociación de Salud Integral (ASI).
- El tema de las trabajadoras de casa particular y la atención de situaciones de violencia contra este grupo se coordina con la Asociación de la Trabajadoras de Casa Particular.

Asesoría y seguimiento de casos

- Atención a 227 mujeres sobrevivientes de violencia, proporcionándoles asesoría y orientación en la aplicación de las medidas de seguridad. De estos casos se ha dado seguimiento a por lo menos al 30%, proporcionando 78 acompañamientos a diferentes instancias, juzgados, centros de mediación y varias agencias del Ministerio Público. Además, 95% se trasladó a la Defensa Pública Penal para asesoría legal, 70% a la Fundación Sobrevivientes para atención psicológica, y 2% al Centro de Atención Integral para resguardar su vida y seguridad.
- Del total de sobrevivientes atendidas, 30 recibieron un proceso de atención psicológica, con el apoyo de dos estudiantes del último año de Psicología de la Universidad Panamericana.

Incidencia social

- Participación en el Tercer Encuentro Nacional de las Oficinas Municipales de la Mujer, con el fin de fortalecer su actuación a través de compartir experiencias entre las delegadas en toda la República; además, se proporcionó información del proceso de reforma al Código Municipal que pretende incorporarse en estas oficinas, como Secretarías Técnicas de las Municipalidades.
- Coordinación con la Asociación de Salud Integral (ASI) para apoyar en la sensibilización de los derechos de las mujeres trabajadoras del sexo, para lo cual se desarrolló un taller enfocado a al tema de violencia sexual, explotación y trata de personas, en el marco de la conmemoración del Día internacional contra la explotación sexual y trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
- La Defem integra la Comisión de Educación de la Red Nacional de Paternidad y Maternidad Responsable, la cual se reúne una vez al mes, y participa en las acciones de promoción y conformación de las redes departamentales y municipales, que suman 24 instancias organizativas, integradas por las instituciones del Estado y la sociedad civil.
- En el marco del Día Internacional de la Acción de la Salud de la Mujer, se participó en la coordinación de acciones con la Red de Salud. En mayo se desarrolló una caminata y un foro sobre la problemática de la salud reproductiva, generando propuestas al Estado respecto de la reducción de la muerte materna, sobre la implementación de la Ley de Planificación Familiar y el equipamiento del área materno-infantil de los hospitales nacionales, para mejorar las condiciones de la salud de las mujeres.
- Coordinación de actividades con la Asociación de Mujeres en Solidaridad (AMES), para apoyar a mujeres de escasos recursos que buscan atención para su salud.
- Diálogos con el Colectivo para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CODEFEM) en diez municipios del oriente, norte y occidente del país, orientados a la incidencia política de las Oficinas Municipales de la Mujer y la generación de propuestas a los Gobiernos municipales para fortalecer estas oficinas.

Incidencia política

- Participación y coordinación con la Comisión Multisectorial, para la vida y la seguridad de las mujeres, que funciona en el Ministerio de Gobernación, con la participación de la institucionalidad de la mujer, la sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para coordinar las acciones de seguridad de las mujeres y lograr el cumplimiento de los agresores en el pago la pensión económica, el

seguimiento a casos de violencia urgentes. Se está trabajando los espacios libres de violencia en tres municipios de Guatemala, en función de los índices de muertes violentas de mujeres y violencia contra la mujer. También se impulsa el proyecto contra la violencia hacia la mujer en el municipio Mixco, en coordinación con el gobierno local.

- Se ha participado en la ejecución del convenio firmado entre PDH y CONAPREVI, que genera acciones conjuntas para la prevención de la violencia contra la mujer.
- Junto con las áreas de Procuración e Informática de la institución, y el INE, se ha trabajado en la revisión y adecuación de la boleta de registro de la PDH con la Boleta Única para las estadísticas de la violencia.
- Coordinación de la Comisión de Atención a la Víctima, en la cual se ha trabajado para mejorar las condiciones de atención a las víctimas que llegan al Ministerio Público y a la institución del PDH.
- Elaboración del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, en coordinación con el INACIF, los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt; la institución del PDH verifica y monitorea el cumplimiento del mismo (instrumento pendiente de aprobación).
- Se ha participado en la elaboración de los indicadores sobre la violencia contra la mujer, que como mandato le corresponde a la institución del PDH en tanto receptora de denuncias; actividad coordinada y convocada por la Coordinadora Nacional para la Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer y el Instituto Nacional de Estadística, con la participación de las entidades de justicia del Estado.
- Elaboración del informe sobre indicadores de violencia contra la mujer, como parte del requerimiento de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, responsabilidad que se asigna a las instituciones receptoras de denuncia, con la coordinación del Instituto Nacional de Estadística.
- coordinación, con el apoyo de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, tanto para la elaboración de las iniciativas de ley, como para la interpelación de algunos agresores, con el fin de que se impongan las sanciones correspondientes por la violación a los derechos de las mujeres
- Coordinación con el Ministerio de Educación, a través del Programa de Gratuidad, para establecer las orientaciones en el ingreso de denuncias por las violaciones de los derechos de las y los adolescentes, niñas y niños. La coordinación se realizó junto con la Dirección de Procuración.
- Participación, junto con la Defensoría de Pueblos Indígenas y el Programa de Estadísticas de muerte materna del hospital San Juan de Dios, en la elaboración del protocolo para sensibilizar a la población sobre la responsabilidad de registrar los casos de muerte materna a través del *call center* de la institución del PDH, a partir de la cual se dará seguimiento a los casos.

Incidencia legislativa

- Participación e incidencia política en el impulso de la Iniciativa de Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, aprobada por el Congreso de la República el 18 de febrero de 2009, según Decreto 9-2009.
- Participación en la Comisión Interinstitucional que tiene como objetivo institucionalizar las Oficinas Municipales de la Mujer, al incorporar estas instancias al Código Municipal; a la fecha se han organizado 241 oficinas.
- Se integró la red conformada por organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado que realizó la revisión del Código de Trabajo y Previsión Social, teniendo como resultado la iniciativa que plantea incluir los derechos de las mujeres trabajadoras de casa particular.
- Se planteó, junto con las instituciones del Estado, la reforma a la Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la cual reforma el artículo 264 del Código Procesal Penal y el artículo 7 de esta ley, en el sentido de que no proceda la aplicación de una medida sustitutiva en los casos de violencia intrafamiliar y de negación de asistencia económica para evitar daños de gravedad a la vida e integridad de la persona, garantizar la protección de las niñas, los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad y la aplicación de la pensión económica.

Proyecciones y expectativas para 2010

- Coordinar talleres de sensibilización sobre la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer con operadores de justicia.
- Coordinar el abordaje de los casos de trata con el Grupo contra la Trata de la PDH, el Ministerio Público y el Grupo Articulador para la implementación de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.
- Continuar incidiendo en las reformas al Código de Trabajo.
- Seguimiento a la problemática de la violencia intrafamiliar y contra la mujer y derechos de la mujer.
- Sistematizar los testimonios de las y los familiares de las víctimas de violencia contra la mujer.
- Supervisar los órganos jurisdiccionales en la aplicación de la justicia hacia la mujer.
- Coordinar talleres de capacitación en temas de trata, violencia sexual, VIH-SIDA, femicidio y violencia intrafamiliar y contra la mujer, con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y entidades estatales involucradas en la prevención y atención al tema.
- Fortalecer las redes de maternidad y paternidad responsable en toda la República.
- Coordinar con otras defensorías de la institución los temas transversales.
- Sensibilizar a los operadores de justicia para que apliquen la ley debidamente.
- Dar seguimiento, a través de las diferentes defensorías, a la aprobación de la Agenda Legislativa pendiente en el Congreso de la República que contiene siete iniciativas para mejorar la defensa de los derechos de la mujer.
- Continuar participando en la Comisión Interinstitucional e impulso de la institucionalidad de las Oficinas Municipales de la Mujer.
- Mejorar y ampliar la coordinación de acciones pertinentes con las Auxiliaturas Departamentales, con la participación de las Oficiales de Defensorías.
- Incidencia para el fortalecimiento de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, para que se haga efectivo el financiamiento asignado y coordinar acciones interinstitucionales para que se cumpla con la implementación de esta ley.
- Desarrollar acciones para visibilizar las violaciones de los derechos de las mujeres: trabajadoras de casas particulares, afectadas por VIH/SIDA, trabajadoras explotadas sexualmente, privadas de libertad, entre otras.

Defensoría de la Niñez y Adolescencia



Defensoría de la Niñez y Juventud

El Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de la Niñez, tiene entre sus facultades promover, fiscalizar tutelar y divulgar la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, así como velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones que en esta materia precisa el ordenamiento jurídico nacional: la Constitución Política de la República (artículos 274 y 275), Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto 54-86 y 32-87 del Congreso; el Acuerdo de creación de la Defensoría SG-2-90, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003, la Política Pública y Plan de Acción a favor de la Niñez y Adolescencia 2004-2015; asimismo, la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos relativos a la participación de los niños en los conflictos armados, y el que se refiere a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), artículos 138 y 182; y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala.

Dado que la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) cuenta con 30 Auxiliaturas (regionales, departamentales y móviles), la cobertura se proyectó hacia el ámbito nacional, departamental y municipal. El trabajo de atención a la denuncia y promoción de los derechos del niño se realiza mediante la conformación de Juntas Municipales de Protección de la Niñez y Adolescencia, las cuales están adscritas a la institución del PDH.

Misión

Velar por el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia, definiendo políticas y estrategias de monitoreo y fiscalización para incidir en el buen funcionamiento y agilización de la administración pública. Analizando la coyuntura para definir políticas, objetivos, metas y actividades que servirán para asesorar, mediar, acompañar, orientar y conciliar en los problemas emergentes en esta materia.

Objetivos

1. Protección de los derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud, establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, mediante la supervisión permanente de la administración pública. Investigación de denuncias presentadas o tramitadas de oficio en relación con la violación de tales derechos, a efecto de determinar las responsabilidades, ordenar la cesación de las violaciones ocurridas y promover las medidas o denuncias que procedan ante los órganos competentes.
2. Definir criterios y estrategias para la formulación de políticas generales del Procurador de los Derechos Humanos en materia de niñez y adolescencia.
3. Monitorear y fiscalizar la administración pública en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez.

LÍNEAS DE TRABAJO

Generales

1. Definir políticas y estrategias institucionales en materia de niñez y adolescencia, con la aprobación del Procurador de los Derechos Humanos.
2. Elaborar análisis de coyuntura que sirvan de base para establecer políticas generales, objetivos, metas y actividades de planes de trabajo.
3. Diagnosticar y presentar periódicamente al Magistrado de Conciencia el estado de la coyuntura en materia de niñez y adolescencia, para definir los pasos a seguir cuando se comprueben hechos lesivos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
4. Verificar y fiscalizar las políticas gubernamentales al visitar grupos de población meta.

5. Velar porque las autoridades encargadas de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes cumplan con sus atribuciones y que en su actuación se atienda lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño.
6. Valerse de todos los medios posibles de promoción para que la educación en derechos humanos y su efectivo cumplimiento sea posible para las niñas, niños y adolescentes.

Específicas

1. Referir al denunciante al área de Recepción y Calificación de Denuncias del Departamento de Procuración, para su atención y trámite.
2. Coordinar con el área de Derechos Específicos del Departamento de Procuración el seguimiento del expediente con el objeto de emitir el pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos.
3. Fortalecer el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, reforzando las responsabilidades de la institucionalidad a cargo, fortaleciendo la Red pro Niñez, creando un observatorio, coordinando y articulando con organizaciones sociales nacionales e internacionales.
4. Supervisión de centros y hogares de protección y abrigo, estatales y privados, que atienden a la niñez víctima y en riesgo. Coordinación con la Unidad de Investigaciones, para supervisiones especiales. Informe periódico sobre la supervisión.
5. Coordinación con otras instancias del Estado y articulación con organizaciones sociales. Gestión ante el Congreso y organismos del Estado para la aprobación de iniciativa de ley que fortalezca el Sistema Nacional de Protección, o la aplicación señalada en la Ley de Adopciones, responsabilidades de la Secretaría de Bienestar Social, entre otros.
6. Actualización de la investigación sociológica y estadística de la muerte violenta de niños y adolescentes. Articulación con organizaciones sociales clave. Acompañamiento en casos especiales. Coordinación con la Defensoría del Debido Proceso. Monitoreo permanente coordinado con otras áreas de la institución a los centros de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Apoyo de la Dirección de Estudios, Análisis e Investigación.
7. Consolidación, fortalecimiento y sostenibilidad del proceso de Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia, que funcionan actualmente en cerca de 100 municipios del país. Atención, con el apoyo de las Auxiliaturas de la institución del PDH, lo que permite la institucionalización del proceso. Coordinación con la Comisión Nacional de la Niñez, Mesa de Municipalización, ANAM y Consejos de Desarrollo, para la mejor inserción en los municipios y articulación con los Consejos de Desarrollo. Recopilar la documentación e investigación del proceso. Gestión ante el Congreso y organismos nacionales e internacionales para el apoyo al voluntariado que conforma las Juntas.
8. Seguimiento a la Comisión de Búsqueda de Niñez Desaparecida. Oficializar la Comisión de Búsqueda de Niñez Desaparecida durante el Conflicto Armado Interno, misma que preside el Procurador y representa la defensora de la niñez y adolescencia, con organizaciones de la sociedad civil y otras que intervienen en forma independiente de la Comisión. En esta materia, coordinación con la Unidad del Registro Unificado y Atención de Casos de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición y, anteriormente, con el Archivo Histórico de la Policía Nacional, Auxiliaturas Departamentales, Dirección de Estudios, Análisis e Investigación y las unidades que el Procurador de los Derechos Humanos considere.
9. Seguimiento a las investigaciones que ya se han realizado: piratería, tráfico y explotación sexual, adopciones, atención y rehabilitación de adolescentes con adicciones.
10. Impulsar iniciativas como el “Niñ@scopio” (Observatorio), Hogar de Diagnóstico para niños víctimas o en riesgo; construcción de un hospital especializado para la niñez; construcción de un módulo para adolescentes que han cometido delitos graves.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Guatemala cuenta con una población aproximada de entre 12 o 15 millones de guatemaltecos. De ellos, se estima que 2 millones 998 mil personas pertenecen al sexo femenino y 3 millones 304 mil al sexo masculino, menores de 18 años.

Problemática enfrentada

Violencia

Debido a que la violencia es aprendida, asume conductas donde el poder y la fuerza juegan un papel importante. Se impone y anula a quien la sufre. El uso de la violencia minimiza el potencial de todo ser humano y alcanza niveles extremos de intolerancia y exclusión.

Es común confundir la violencia con la delincuencia, lo que impide visualizar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar pues el agresor no es considerado delincuente en el espacio familiar. La violencia altera al individuo, a su colectividad, se desarrolla en espacios alterados y se sustenta en el poder y la fuerza. Y lo que es peor, se reproduce. Sus efectos conllevan costos económicos, humanos, sociales y la escisión en el tejido social. Se mide con la aceptación de: ataques a la vida, integridad de las personas, violación sistemática de derecho a vivir la vida dignamente.

Lo más lamentable es que va produciendo la tolerancia y retroalimentación de conductas violentas que dictan pautas para la relación entre personas. Esta aceptación se puede ejemplificar comparativamente tomando como referencia la que se aplica en las pandillas mediante los ritos de iniciación que requiere una “paliza”, y no es menos aquella de la que se valen los educadores, padres y madres de familia, encargados de la niñez y adolescencia para “disciplinarlos”, justificando que les ayuda a ser mejores personas; ambos constituyen un castigo físico que violenta la integridad física y emocional de esta población.

Ésta es la realidad de violencia que vive actualmente la niñez y adolescencia guatemalteca. Las condiciones para su desarrollo integral se ven irrumpidas por manifestaciones de diversos tipos de violencia. Las políticas públicas actuales manifiestan una debilidad al no incorporar en sus objetivos programas específicos para la niñez y adolescencia; específicamente de prevención contra la violencia. No basta con desarrollar programas y acciones piloto a corto plazo, porque más de 51% de esta población está creciendo bajo el temor, el miedo y ansiedades, lo que repercute en su salud emocional, física, psicológica y espiritual.

Durante este año, la institución del PDH presentó el *Mapa de conflictividad social*, publicado en enero, en el cual se revela que la violencia e inseguridad, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer ocupan los primeros lugares entre los principales problemas sociales. Reporta que la violencia e inseguridad se manifiesta en 230 municipios, pero es un problema recurrente en toda la República. Uno de los efectos de la violencia es la violación de los derechos de la niñez y adolescencia.

El cuadro que a continuación se presenta, ejemplifica cuales de estos derechos son frecuentemente violados atendiendo a datos que se registran en la institución, de enero a octubre; de acuerdo al informe SGD 2009.

Denuncias recibidas por género Enero a octubre 2009

Tipo de violación	Masculino	Femenino	Total
Trata de personas	15	14	29
Abandono	16	21	37
Abuso físico y mental	23	22	45
Abuso sexual	10	33	43
Agresiones por particulares	16	16	32
Descuidos o tratos negligentes	38	30	68
Falta de alimentación, vestido y vivienda	25	67	92
Maltrato infantil y de adolescentes	216	249	465
Total	359	452	811

En consultas realizadas con niños, niñas y adolescentes, durante visitas realizadas a centros de estudio para conocer su opinión sobre las características que forman parte de esta población, se establecieron los siguientes rasgos: es una persona, es un ser humano con derechos, posee virtudes. Es alegre, piensa positivamente, son trabajadores, anhelan estudiar, son responsables; son discriminados, son explotados. Tienen voluntad y entusiasmo, inquietos. Algunos son abandonados, son vistos como objetos y no como sujetos de ningún derecho. Tienen baja autoestima por problemas familiares, económicos, etcétera.

Las limitaciones del presupuesto asignado y las políticas enfocadas a atender este tipo de problemática, la cual prolifera en el país, afectan la implementación de programas de sensibilización en materia de discriminación; además, los Acuerdos de Paz no se han cumplido.

La niñez y adolescencia empieza a ser discriminada desde su casa, por ejemplo, desde que nacen los padres prefieren que sean varones y no mujeres, discriminándolas desde su nacimiento. Además, los niños o niñas que tienen que trabajar son explotados, no les pagan un salario digno; y en la escuela son discriminados por factores económicos, por la ropa o los útiles que llevan, por ser personas con alguna discapacidad, mayormente si forman parte de la población indígena.

Ante el mundo adulto la discriminación se hace manifiesta al no ser escuchada su opinión, debido a que no son mayores de edad. El sistema de discriminación y racismo que se ha instalado en la sociedad guatemalteca conlleva actitudes de desprecio, exclusión y prácticas desiguales en las relaciones que el niño, niña y adolescente establece en su comunidad, escuela, iglesia, instituciones públicas, centros de salud, hospitales, registro nacional de las personas, y otros servicios que presta el Estado, a pesar de los avances que se concretan en la legislación contra la discriminación, la aprobación de convenios internacionales como el Decreto 169 de la OIT, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de protección Integral.

Maltrato

La niñez se ve expuesta a condiciones de maltrato por parte de padres de familia, encargados, profesores, autoridades institucionales. Según investigaciones recientes que buscan identificar el cumplimiento de las metas del milenio, las niñas son las mayores víctimas de agresiones emocionales, entre ellas, insultos, burlas, amenazas, bromas pesadas, intimidación.

Se suman también las diferentes formas de violencia física que conlleva daños psicoemocionales, citando entre las de mayor frecuencia: la violación y abuso sexual, golpes, jalones de pelo, patadas, empujones, arañones, pellizcos, escupidas; el acoso sexual, ya sea en la escuela o centros religiosos, instituciones de servicio, es promovido indirectamente por el Estado al carecer de políticas públicas que contrarresten el sistema autoritario y patriarcal que prevalece.

Incumplimiento de las obligaciones estatales

A pesar de haber avanzado en el campo organizativo, jurídico, social y en la acción educativa en materia de derechos humanos, aún deben ser superados desafíos enormes como lo es la documentación de la niñez y adolescencia. El registro nacional de las personas muestra debilidad para realizar un registro eficaz y eficiente de la inscripción de nacimientos. Esto contribuye a que la niñez y adolescencia indocumentada se invisibilice ante la sociedad y ante las instancias del Estado y, por lo mismo, no sea tomada en cuenta.

El no estar documentado tiene que ver con la concurrencia de la pobreza, vivir en el área rural, la falta de acceso a la escuela, que conlleva al analfabetismo. Quienes viven con mayor crudeza esta situación son las mujeres, debido a las condiciones de exclusión en las que se encuentran. La indocumentación es una historia que heredada, se traslada a los niños y niñas símbolo y producto de las múltiples desigualdades que lo produce. Por lo anterior las mujeres se vuelven vulnerables, ya que obstaculiza sus posibilidades de participar y aspirar protagonicamente a la política; negarles la documentación es vedarles su derecho a la expresión, a la

participación político-social, el derecho a ir construyendo su identidad, lo cual repercute en el sentido de pertenencia de un grupo social y de una nación, y el de saberse reconocido por otros.

Desnutrición

En Guatemala este problema se ha constituido en una constante y evidencia el sistema de desigualdades que existe en el país, debido a los salarios de hambre que se pagan en el sector formal o informal de la economía: comercio, servicios, financiero y en la agricultura. Visibiliza la falta de capacidad del Estado para informar y formar a la población mediante el sistema educativo y los programas de salud, a fin de promover en la población herramientas que les permitan la elaboración de dietas que aporten los nutrientes necesarios al organismo.

El último censo nacional de peso y talla de 2008 indica que 46% de los niños guatemaltecos reportó una menor talla debido a la desnutrición crónica. Chimaltenango está en el sexto lugar en los índices de desnutrición, indicando que 53% de los niños y niñas no alcanzan ni la estatura ni el peso adecuado (entre más de millón y medio de alumnos de primer grado evaluados durante ese año en toda Guatemala). Aunque la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN) entrega los micronutrientes “Chispitas” y el Vitacereal, esta entrega se limita a la niñez de hasta 6 meses de edad, dejando fuera al resto de la niñez, comprendida entre los 7 meses y los 5 años, edades que identifican la primera infancia.

Esta falencia muestra la indiferencia, discriminación y maltrato, la falta de organización con que trabajan las instituciones del Estado que deben de ejecutar programas para atender esta situación a fin de que la niñez y adolescencia tenga una vida digna y de calidad.

ACCIONES EMPRENDIDAS

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia reporta 1,123 acciones realizadas, que comprenden 742 contenidas en el Plan Operativo Anual de la Defensoría y 381 fueron requeridas a lo largo del año por los distintos segmentos poblacionales. La diversidad de actividades fue sintetizada en ejes que responden a las funciones asignadas a esta Defensoría, de acuerdo con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y a los lineamientos generales de la Institución del PDH.

Protección

En el tema de denuncias, la Defensoría ha trasladado 36 a la Dirección de Procuración, ha realizado 47 medidas urgentes e intervenido en 47 mediaciones, a fin de no acudir a los juzgados de menores.

Supervisión

Dentro de la planificación estratégica que la institución establece para este año, se han apoyado y coordinado 52 monitoreos institucionales de impacto y estratégicos; se han articulado 162 actividades de diverso tipo con instancias de la PDH, desde el apoyo a todas las defensorías y unidades en las semanas de sensibilización, actividades de tipo educativo de incidencia, etcétera.

Coordinación

- Desde 2002, con el Movimiento Social por la Niñez y otras organizaciones se elaboró una agenda que impulsa acciones y políticas que favorezcan la situación de la niñez y la adolescencia. Ejes identificados: restitución y protección de derechos; legislación; generación de políticas públicas y organización, coordinación y acciones sociopolíticas de respaldo.
- Por otro lado, se dio acompañamiento a redes contra el maltrato y la explotación sexual, a los foros de niñez en situación de calle y por explotación laboral infantil.
- Se realizaron 57 acompañamientos, 45 accesorias, seguimiento de 36 casos específicos, 40 monitoreos de defensorías especializadas en temas de impacto, 63 orientaciones, 34 medidas legales y 183 articulaciones

con organizaciones sociales. Éstas se dan en su mayoría por solicitud o invitación de acompañamiento a la institución del PDH y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Acciones de prevención

- Incidencia en medios de comunicación: la Defensoría no sólo se ha convertido en un espacio que facilita el flujo de información, sino que también es un centro que por el monitoreo de medios de comunicación ha logrado posicionarse en el escenario nacional a través de su proyección en los medios escritos, radiales y televisivos.
- A la fecha se han otorgado 107 entrevistas con medios de comunicación. Con un promedio de 3 a 4 notas semanales con el tema de niñez y juventud, destacando los temas de violencia, adopciones, maltrato infantil, desnutrición y sobre la situación de los derechos del niño.

Investigaciones

La Defensoría de la Niñez se ha vuelto en un referente bibliográfico y de opinión para la elaboración de diversos estudios, análisis e investigaciones, por lo que en el transcurso de los tres trimestres se estima que ha contribuido plenamente en siete investigaciones y estudios enfocados al tema de niñez y juventud. También ha realizado y contribuido en la elaboración de nueve materiales impresos para divulgar y promover la defensa de los derechos del niño y adolescencia.

Acciones requeridas durante 2009 por distintos segmentos poblacionales

Acciones	Cantidad
Acciones en juzgados	13
Articulación con organizaciones gubernamentales	40
Articulación con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales	65
Orientación telefónica	31
Articulación con dependencias de la institución del PDH	67
Entrevistas concedidas a medios de comunicación social: prensa escrita, radio y televisión	77
Verificación de denuncias	14
Promoción y divulgación de los derechos de la niñez y adolescencia	25
Acompañamientos	16
Monitoreo	19
Supervisiones	4
Acciones con Juntas Municipales	5
Medidas urgentes	5
Total	381

LOGROS

- A pesar de la limitación económica en el trabajo con Juntas Municipales de Protección, se registran diversas acciones: orientaciones telefónicas, traslado de denuncias a la Dirección de Procuración, entrega de material de apoyo a las Juntas Municipales de Protección, reuniones regionales de coordinación y capacitación, invitaciones a capacitaciones y reuniones de trabajo.
- Se ha dado seguimiento a las denuncias presentadas, por parte de personal de la Defensoría.
- Se ha participado de forma directa e indirecta en capacitaciones de la Ley de Protección Integral de la Niñez o se ha asistido a diversas capacitaciones de temas en general vinculados a la problemática de la niñez y adolescencia.
- Se ha coordinado con instituciones de gobierno: autoridades educativas públicas, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, autoridades de centros de protección y abrigo, autoridades de centros de detención de menores en conflicto con la ley penal y autoridades policiales, entre otras.

- Se han fortalecido los lazos de coordinación coyuntural con diversas expresiones de la sociedad civil, mediante actividades de incidencia política y legislativa entre la Defensoría y el movimiento por los derechos de la niñez en general.

PROYECCIONES Y EXPECTATIVAS PARA 2010

- Desarrollar formas eficientes de cooperación entre la Dirección de Procuración y las Defensorías para lograr una mejor resolución de los casos y atención a las víctimas.
- Planificar y coordinar la supervisión y monitoreo a las instituciones del Estado responsables de la vigencia y protección de derechos de la niñez y adolescencia.
- Fortalecer y ampliar las alianzas estratégicas con organizaciones sociales defensoras y promotoras de los derechos humanos, en temas y grupos específicos.
- Coordinar con las unidades correspondientes de la institución del PDH la realización de campañas de difusión y otras actividades relacionadas con los derechos específicos de la niñez y adolescencia.
- Presentar informes de las supervisiones a la administración pública, antes de que pierdan vigencia.
- Supervisión y monitoreos a la administración pública, con énfasis en hogares de protección y abrigo y centros educativos.
- Impulsar la realización de actividades como congresos, foros, talleres, seminarios, festivales, en conjunto con organizaciones sociales.

Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante



Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante

En 1993 se creó la Oficina de Atención a la Población Desarraigada, cuya finalidad fue orientar, capacitar, mediar y acompañar a las comunidades de retornados, repatriados y desplazados internos; en 1998 se constituyó como Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante, con la expectativa de ampliar su atención hacia la población migrante, tanto nacional como internacionalmente.

Fundamento legal

Basándose en el Acuerdo SG-15-98, artículo 23, el Procurador de los Derechos Humanos delega el trabajo en pro de los derechos específicos, bajo la coordinación de una oficina de atención a las mismas.

Objetivo general

Incidir en el fortalecimiento institucional para el cumplimiento del mandato del Procurador de los Derechos Humanos al monitorear, supervisar, proteger, promover y denunciar las violaciones de los derechos humanos de la población desarraigada y migrante y víctimas de trata de personas, tomando en cuenta el mandato constitucional, los Acuerdos de Paz, el Plan Marco del Procurador de los Derechos Humanos, las políticas públicas, planes de desarrollo y leyes específicas.

Objetivos específicos

1. Denunciar las violaciones de los derechos humanos de los migrantes asegurados, así como de los migrantes centroamericanos en Guatemala, especialmente de niños, niñas y adolescentes, a través de la defensa, protección, promoción y educación en derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la supervisión a la administración pública.
2. Desarrollar acciones de coordinación institucional para la promoción y difusión de los derechos de la población desarraigada y migrante y víctimas de trata de personas.
3. Ejercer control y monitoreo de la administración pública vinculada a la población desarraigada y migrante y víctimas de trata de personas.
4. Realizar una labor eficiente de protección entendida como la prevención y defensa de los derechos de estos dos grupos de población, con enfoque victimológico.
5. Coordinar acciones con organizaciones, redes e instituciones nacionales e internacionales, en defensa de los derechos humanos de los migrantes y víctimas de trata de personas.

Funciones y atribuciones

Funciones

1. Promoción y defensa de los derechos humanos de la población desarraigada y migrante y víctimas de trata de personas.
2. Acompañamiento, asesoría y orientación en casos especiales, a petición de la Dirección de Procuración y las Auxiliaturas Departamentales, o autoridades superiores.
3. Mantener interlocución permanente con las autoridades de las instituciones del Estado, con el propósito de obtener información actualizada sobre su funcionamiento; que se adopten medidas y se asigne recursos o se legisle a favor del mejor cumplimiento de los derechos humanos de estos grupos vulnerables.
4. Monitoreos o verificaciones de campo para detectar el grado de cumplimiento del respeto de los derechos humanos en problemas o situaciones específicas, para lo cual se coordina con la Dirección de Estudio, Análisis e Investigaciones.
5. Ser el medio de relación entre el Procurador de los Derechos Humanos y las organizaciones representantes de estos grupos poblacionales o con los actores involucrados en la temática, a efecto de coordinar acciones de promoción, incidencia, mediación o acompañamiento en sus reivindicaciones de derechos ante las instituciones del Estado.

6. Desarrollar un programa permanente de sensibilización a través de talleres, seminarios, foros, informes y campañas divulgativas.
7. Trasladar al área de Recepción y Calificación de Denuncias toda solicitud de investigación sobre violaciones de derechos humanos de los migrantes y las víctimas de trata de personas.

Atribuciones

1. Planificar y coordinar el trabajo de la Defensoría.
2. Educar, sensibilizar y promover los derechos de la población desarraigada y migrante y víctimas de trata de personas, preparando materiales educativos.
3. Elaborar informes ejecutivos al Procurador de los Derechos Humanos.
4. Facilitar entrevistas e información a medios de comunicación.
5. Representar al Magistrado de Conciencia cuando sea designado en actividades nacionales e internacionales.
6. Supervisión a la administración pública.

Misión

Tutelar los derechos humanos de la población desarraigada y migrante, en demanda de sus necesidades, contribuyendo a la construcción de una sociedad democrática y de bienestar social.

Visión

La Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante es una dependencia de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) que aborda los fenómenos sociales relacionados con la población desarraigada y migrante y víctimas de trata de personas, nacional e internacionalmente; incide en espacios con el fin de articular esfuerzos para la defensa, protección, promoción y difusión de sus derechos humanos, así como en la formulación de políticas públicas orientadas a la búsqueda de soluciones a la problemática que enfrentan. Cumple con su papel institucional realizando acciones de acompañamiento, fiscalización, denuncia y vigilancia en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Es la encargada de dar acompañamiento, asesoría, y orientación a las Auxiliaturas departamentales, municipales, regionales y móviles de la institución del PDH, en el tema relacionado con la población desarraigada y migrante y víctimas de trata de personas. Cuenta con un equipo especializado que hace posible que los objetivos trazados se concreten en acciones que benefician a la población meta.

Monitorea y fiscaliza las instituciones públicas en cuanto a la atención brindada a este sector; sensibiliza a la población guatemalteca, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y comunidad internacional sobre la importancia de defender y abordar estos temas específicos.

Organización

El defensor de la población desarraigada y migrante tiene a su cargo a auxiliares de defensorías, oficiales de defensorías y una secretaria.

PROBLEMÁTICA ENFRENTADA

Por ser Guatemala un país de origen, tránsito y destino de migrantes, el fenómeno migratorio se torna más complejo debido a la lucha contra el terrorismo, que ha generado una persecución abierta contra los migrantes, tanto en nuestro país como en México y los Estados Unidos de América (EUA).

Como consecuencia de las políticas antimigratorias, se han implementado dispositivos de control en los países de la región: en Guatemala, la Multisectorial de Combate a la Trata y Narcotráfico, la Policía Nacional Civil, los patrullajes marítimos y el Ejército realizan diversos operativos. En los EUA existe el Plan Guardián, Arizona Borders Control, Muro Fronterizo, Patrullaje de la Guardia Nacional; y en México, el Plan Sellamiento Fronterizo 1998, Plan Sur 2001 y Plan Mérida 2008, lo que ha obligado a los migrantes a utilizar nuevas rutas para llegar a su destino, buscando lugares más alejados y difíciles de recorrer.

Con la toma de posesión de Barack Obama como presidente de los EUA, a principios de 2009, se crearon falsas expectativas, pues en su discurso de campaña ofreció apoyar una reforma migratoria integral, sin embargo, las redadas y las deportaciones no han cesado y el tema aún no ha sido puesto a discusión. Según datos estadísticos de la Dirección General de Migración, al 18 de octubre han ingresado vía aérea procedentes de Estados Unidos 27,222 guatemaltecos deportados, y de México, vía terrestre, al 20 de noviembre, 27,208, que hacen un total de 54,430 personas.

El tema migratorio se enfoca hacia los migrantes guatemaltecos en los EUA, por lo que el Gobierno no se preocupa por generar políticas y legislaciones que promuevan la integración de miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que desde hace años radican en el país.

En Guatemala, como país de destino, prevalece una serie de carencias en el ámbito social, político, cultural y económico, es decir, se persiste en criminalizar y estigmatizar al migrante como delincuente, asimismo, la ausencia de programas para la regularización e integración social, la detención administrativa prolongada ante la ineficacia de distinguir el tráfico ilegal y la trata de personas o la estadía irregular, se constituyen en retos que requieren ser atendidos.

El Estado ha tenido poca gestión y cabildeo ante las autoridades de los países de destino, deficiente atención consular, desatención de trabajadores fronterizos en México y falta de programas de reinserción social para los deportados y sus familias, tanto para aquellos provenientes de los EUA como de México.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

Migrantes en Guatemala

Además de ser parte del corredor migratorio hacia los EUA, Guatemala es un país de destino donde la mayoría de centroamericanos encuentra un lugar para vivir y trabajar. Con el objetivo de verificar la situación de los migrantes asegurados, durante 2009 la Defensoría realizó once monitoreos al albergue de la Dirección General de Migración con el fin de verificar las condiciones del lugar y la situación de los migrantes asegurados.

Durante los monitoreos se recogió una muestra de 59 entrevistas: 66% corresponde a mujeres y 34% a hombres; de ellos, 67% son solteros, 20% unidos, 8% casados y 5% viudos. El 53% de las mujeres entrevistadas tiene hijos a su cargo y sólo 22% de los hombres es padre. Asimismo, 39% de la muestra corresponde a personas de origen salvadoreño; 39% es nicaragüense; 7% hondureño; 10% ecuatoriano y 5% colombiano; la mayoría ingresó a Guatemala por las fronteras de Valle Nuevo, San Cristóbal y Ciudad Pedro de Alvarado.

La mayor parte de personas que toman la difícil decisión de migrar son jóvenes en edad productiva: 66% comprendido entre las edades de 18 a 30 años y 32%, entre 31 y 45. Referente al grado de escolaridad, 42% de los entrevistados tiene estudios primarios; 37% estudios básicos y 12% de diversificado.

Las personas migran principalmente por la pobreza en la que viven en su lugar de origen y el deseo de una vida mejor; según la muestra, 41 personas emigraron por razones económicas o laborales; 3 por reunificación familiar; 4 porque se dirigían hacia Estados Unidos; 4 por turismo y 7 por diversos motivos.

Situación laboral, según la muestra obtenida

Ocupación	%
Trabajadora sexual	39.00
Bailarinas	7.00
No trabaja / no responde	27.00
Comerciantes	8.00
Meseras	7.00
Otros	12.00
Total	100.00

La mayoría de migrantes de permanencia irregular no denuncia las violaciones de sus derechos humanos por temor a represalias durante el tiempo que permanecen asegurados; señalaron que quienes cometieron las violaciones fueron funcionarios públicos, pero que si presentan denuncia tendrán problemas a su regreso al país, por lo que prefieren callar.

De las personas entrevistadas en el albergue, la mayoría indicó que fue detenida por la Multisectorial contra Narcoactividad y Trata de Personas, durante operativos realizados en bares y centros nocturnos, y que no se les informó el motivo de su detención, sólo se les preguntó su nacionalidad y posteriormente fueron conducidas al albergue de la Dirección General de Migración, donde no se les permite hacer una llamada telefónica. Muchas de las mujeres detenidas son madres solteras que han dejado a sus hijos al cuidado de terceras personas, por lo que permanecer detenidas sin derecho a comunicarse les causa aflicción y desesperación. Algunos indicaron haber sufrido malos tratos durante la detención y traslado hacia dicho albergue por parte de elementos de la Policía Nacional Civil, refiriendo empujones, agresiones verbales e insultos, amenazas, entre otros. Sin embargo, sólo se recibió una denuncia de robo de dinero por parte de un delegado de la Dirección General de Migración que trabaja en dicho albergue (expediente ORD.GUA.1153-2009/DE).

También se conocieron casos de solicitantes de refugio, entre ellos, cinco ciudadanos de Somalia y tres de Nepal, que llegaron al país dentro de un furgón procedente de Honduras y quienes manifestaron que hacía seis meses que habían salido de sus países de origen, debido a la inseguridad y la guerra. En el caso de tres ciudadanos de China, dos de Bután y dos de Cuba abandonaron el procedimiento.

Área internacional del Aeropuerto Internacional la Aurora

Durante 2009 se ha incrementado el ingreso a nuestro país de personas de origen asiático (China, Bután, Sri Lanka, Somalia y Nepal) y de otras nacionalidades que se cree utilizan Guatemala como puente para pasar hacia los EUA.

La Defensoría realizó cinco monitoreos en dicha área, donde se trataron los siguientes casos:

- Tres ciudadanas de China que, a través de traductores, se deduce que podría ser un caso de trata de personas.
- Tres ciudadanos de Bután que no hablan español ni inglés, al final solicitaron refugio pero abandonaron el procedimiento.
- Cinco personas de la India, a quienes no fue posible entrevistar debido a que autoridades de Aeronáutica Civil no permitieron el ingreso del personal de la Defensoría a las instalaciones del Aeropuerto, por lo que se aperturó el expediente ORD.GUA.6380-2009/DE, y entre las acciones se solicitó la práctica de Recurso Constitucional de Exhibición Personal con número 01141-2009-00880, el cual realizó el Juez de Paz Penal de Faltas de turno, a favor de los ciudadanos de la India, pero quedó sin lugar; sin embargo, se logró evidenciar las condiciones en que se encontraban.

Es preocupante que las autoridades de Aeronáutica Civil no conozcan cómo ingresan estas personas, con el argumento de que no cuentan con cámaras de seguridad dentro del aeropuerto y que ninguna línea aérea se hace responsable de ello. Es inadmisibles que nieguen información sobre los casos que se presentan en el área internacional del Aeropuerto, ya que deja en estado de indefensión a las personas detenidas en ese lugar.

El aeropuerto La Aurora no cuenta con la infraestructura ni los servicios necesarios para la atención de migrantes que por diversos motivos no se les permite el ingreso en el país, poniéndolos en situación de vulnerabilidad, aunado a la falta de intérpretes de los diferentes idiomas y la inexistencia de relaciones diplomáticas con esos países.

Migrantes guatemaltecos en los EUA y deportados

La migración internacional indocumentada (tendencia dominante) es una de las principales manifestaciones de una realidad altamente desigual donde la exclusión obliga a los guatemaltecos a movilizarse hacia el Norte con un alto grado de sacrificio, riesgo y vulnerabilidad.

Dada la alta vulnerabilidad de esta población, la Defensoría realiza monitoreos a la Fuerza Aérea Guatemalteca para verificar las condiciones en que retornan nuestros connacionales que son deportados vía aérea desde los EUA. En 2009 se efectuaron once monitoreos, en los que se entrevistó a 196 personas: 142 hombres y 54 mujeres. Estos manifestaron frustración, tristeza y preocupación por su situación económica y porque la mayoría adquirió deudas para realizar el viaje. El 83% manifestó que la causa de la migración fue la situación económica, 12% por reunificación familiar y 5% por otros motivos.

De esta población, 4% se encuentra comprendida en el rango de 8 a 17 años de edad, 38% de 18 a 25; 16% entre 26 y 30, 22% de 31 a 39, y 12% de 40 a 60 años; es decir que quienes migran son personas jóvenes y altamente productivas, con algún grado de escolaridad: 52% manifestó haber cursado algún grado de primaria; 21% educación básica; 12% diversificado, 1% estudios superiores, y 13% indicó no haber estudiado.

Según las entrevistas, la mayoría de los deportados son originarios de San Marcos, Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango, de los cuales 31% es indígena, 59% no indígena y 10% no respondió a la pregunta. De ellos, 53% dejó familiares en los EUA.

Las fronteras que más utilizan los migrantes hacia los EUA son: La Mesilla, en Huehuetenango, 33%; Tecún Umán, 23% y El Carmen, 7%, en San Marcos; y El Naranjo, en Petén, 11%.

La falta de fuentes de trabajo en Guatemala no permite que la población tenga una vida digna, con educación y vivienda, por lo que 36% de los deportados reintentan el viaje hacia los EUA, pese a los obstáculos, riesgos y peligros a los que se exponen; el 39% indicó que no lo hará y 18% no sabe.

Por otra parte, debido a la situación económica por la que atraviesa los EUA, 30% de los guatemaltecos que vive allá está pensando seriamente en retornar a Guatemala.¹

Las capturas de los migrantes se dan mayormente en Texas y Arizona, ubicados en la frontera sur de los EUA, en donde las medidas antimigratorias son más agresivas. En la ciudad de Maricopa, del Estado de Arizona, opera el alguacil Joe Arpaio denominado “El terror de los migrantes”, quien es investigado por maltratar a los detenidos, quienes lo acusan de racista. Sus detractores lo consideran el peor exponente del sistema de detención de migrantes indocumentados que luego son deportados. Arpaio sostiene que su trabajo no es cuestionar las leyes, sino aplicarlas con mano dura.²

¹ Estudio realizado por el doctor Manuel Orozco, Director del Programa de Remesas y Desarrollo, Inter-American Dialogue, Washington, D.C., Estados Unidos.

² Artículo editado por Miguel González y Agencias de Noticias, publicado *Prensa Libre* el 28 de marzo de 2009.

Es muy preocupante el trato que reciben los migrantes durante su aseguramiento. La mayoría de los deportados manifiesta haber estado en diferentes centros de detención, en los cuales no les proporcionan agua envasada, sino entubada con fuerte olor a cloro, se quejan de la mala calidad de la alimentación e indican que si se enferman deben llenar muchos formularios antes de que se les preste la atención necesaria.

En cuanto al trato que reciben durante la captura, aseguramiento y deportación, 28% manifestó haber recibido malos tratos, por lo general, agresiones verbales. Algunos indican que se han sentido humillados al ser tratados como criminales, siendo engrilletados de pies, manos y cintura, y que son obligados a firmar su deportación.

Según los deportados, es necesario que el Estado de Guatemala fortalezca sus consulados en los EUA y que les presten mayor atención; de los entrevistados, 14% manifestó que no tuvo oportunidad de comunicarse con su consulado, el 81% indicó que sí logró comunicación, pero que la persona que atendió sólo se concretó a corroborar su nacionalidad y algunos datos personales y 5% no respondió. La muestra indica que de ellos, 57% logró comunicación vía telefónica, 15% a través de video-conferencia y sólo el 5% recibió la visita personal del cónsul, el 4% por dos vías y del resto no hay datos.

En relación con lo que el consulado hace por ellos, 38% respondió que nada, 18% dijo que se le extendió documento, 14% no tuvo oportunidad de comunicarse, el 5% no respondió; al 6% se le permitió realizar una llamada para comunicarse con su familia, y el resto está reflejado en la tabla universal que a continuación se presenta:

¿Qué hizo el cónsul?	Si	No	No hay datos	TOTAL
No se comunicó		28		28
Extendió documento	39			39
Consideración especial	4			4
Se comunicó con su familia	6			6
Le permitió llamar	11			11
Nada	77			77
Documento y consideración especial	3			3
Documento y le permitió llamar	3			3
Consideración especial/se comunicó con familia	2			2
Documento; comunicación con familia; permitió llamar	4			4
Documento; consideración especial; comunicó con familia y le permitió hacer una llamada	6			6
No hay dato			10	10
Documento y comunicación con familia	1			1
Comunicación con familia y le permitió llamada	2			2
TOTAL	158	28	10	196

La mayoría de los deportados refiere que ha sido discriminada por ser de origen latino e indocumentada, lo que les hace vulnerables al maltrato por parte de las autoridades migratorias y en los centros de detención.

Migrantes guatemaltecos en México

Cuando los guatemaltecos van rumbo a los EUA, en su paso por México enfrentan políticas restrictivas, trata, lugares desérticos, frío, calor, persecuciones, agresiones físicas y verbales por parte de las autoridades, discriminación, violaciones constantes de sus derechos humanos, y a esto se suma ahora el secuestro, nueva modalidad que está implementado el crimen organizado en México.

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) hace visibles las limitadas condiciones jurídicas que enfrentan los migrantes para denunciar los delitos de los que son víctimas, lo que puede llegar a constituir una negación a su derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño, así como sensibilizar a las autoridades y a la sociedad de la gravedad, frecuencia y crueldad con la que se realizan los secuestros de migrantes, para alentar la denuncia ciudadana y activar la acción gubernamental en contra de ese delito.

En cuanto a la nacionalidad de los migrantes secuestrados, sólo fue posible precisar el origen de 552 víctimas: 372 de Honduras, 101 de El Salvador, 74 de Guatemala y 5 de Nicaragua. El informe señala que al menos en 91 casos existe complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado.

El 15 de octubre el sacerdote Pedro Pantoja, director de Belén Casa del Migrante, con sede en Saltillo, advirtió que Coahuila es un Estado eminentemente xenófobo y racista en el que legisladores, autoridades y la mayor parte de la sociedad civil mantienen un clima de persecución a los migrantes centroamericanos que se aventuran a recorrer sus caminos para llegar a la frontera con los EUA. Agregó que el crimen organizado ha perfeccionado sus métodos de secuestro, al grado de que selecciona, amarra y separa a los migrantes centroamericanos por los que van a pedir rescate.

Incumplimiento de las obligaciones estatales

- El Estado no crea las condiciones necesarias para que los guatemaltecos no se vean obligados a migrar y buscar mejores condiciones de vida en otros países.
- No existe un programa dirigido a los deportados desde los EUA y México para su reinserción social en sus comunidades de origen.
- Guatemala no cuenta con una política pública integral en el tema migratorio.
- No se ha presentado el primer Informe de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que haya adoptado Guatemala, y que debió ser presentado en el plazo de un año, a partir de su entrada en vigencia, el 14 de marzo de 2003. Posterior a ello, debe presentar informe cada cinco años.
- El Estado no ha elaborado un protocolo para la atención de los migrantes guatemaltecos deportados de otros países.
- No existe protocolo de atención a migrantes irregulares que se encuentran en Guatemala y que esperan ser deportados.
- No hay un protocolo de atención a guatemaltecos menores de edad deportados de los EUA y México, pese a ser es una población altamente vulnerable.
- En la frontera El Carmen, en donde son entregados los deportados guatemaltecos procedentes de México, no hay un programa de recepción como el que existe en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

ACCIONES EMPRENDIDAS

Acompañamientos

Se realizaron ocho acompañamientos en diversos casos:

- En tres oportunidades, a una menor de edad que a partir de la redada masiva de Pottsville, el 12 de mayo de 2008, se vio obligada a regresar a Guatemala. Actualmente tiene un trámite en los EUA para la obtención de una Visa tipo U, que le permitirá ingresar a ese país con documentos.
- En tres oportunidades, a miembros del Comité Pro Mejoramiento de Vida de los Deportados de Estados Unidos, originarios de Chimaltenango y Sacatepéquez: al Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se les autenticó documento de identificación para trámites iniciados en diferentes

instancias del Estado. Este comité se constituyó con el apoyo de la Defensoría, y es el único en su clase en Guatemala.

- A estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala quienes, dirigidos por su catedrático, entregaron víveres y levantaron información sobre la situación de la comunidad de San José Calderas, y a los deportados de los EUA con el objetivo de apoyarlos.
- Se dio acompañamiento a la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) a la Pastoral de Movilidad Humana, al Centro de Desarrollo Municipal y Comunitario (CEDMUC), a familiares de migrantes del municipio de Morazán y de Quetzaltenango, al “plantón” que se hizo enfrente de la Embajada de los EUA un día antes de la toma de posesión del nuevo Presidente de ese país. Las organizaciones entregaron una carta donde se pide el cese de las deportaciones y la aprobación de una Ley Migratoria Integral.

Monitoreos

- Once monitoreos al albergue de la Dirección General de Migración, con 59 entrevistas a migrantes de diferentes nacionalidades interceptados en territorio nacional y que, por carecer de documentos o permisos de trabajo, son llevados al albergue para ser deportados. Estos monitoreos se efectúan con el fin de proteger los derechos humanos de los migrantes y verificar las condiciones del lugar.
- En el Aeropuerto Internacional La Aurora se realizaron cinco monitoreos con el fin de verificar las instalaciones, espacios para personas que no ingresan a territorio guatemalteco, para determinar si hubo violación de derechos humanos de los detenidos y para realizar entrevistas a las personas a quienes no se les permitió el ingreso al país y que están pendientes de su repatriación
- En la Fuerza Aérea Guatemalteca se realizaron once monitoreos y se entrevistó a 196 personas deportadas vía aérea desde los EUA.

Denuncias

De los 39 casos que la Defensoría recibió, se abrieron los siguientes expedientes:

ORD.GUA.421-2009/DE, PREV.EIO.GUA.740-2009/US, EIO.GUA.1014-2009/DE, EIO.GUA.1365-2009/US, ORD.GUA.1153-2009/DE, PREV.EIO.GUA.6774-08/US, EIO.GUA.1230-2009/DE, EIO.GUA.2652-2009/US, ORD.GUA.6380-2009/DE. De los 39 casos, 16 están concluidos.

LOGROS

Comité de Deportados de Estados Unidos

La Defensoría considera como el logro más importante la conformación del primer comité de deportados de los EUA en Guatemala, denominado Comité Pro-Mejoramiento de Vida de los deportados de Estados Unidos originarios de Chimaltenango y Sacatepéquez, ubicado en la aldea San José Calderas, del municipio de San Andrés Itzapa, de Chimaltenango, el cual brinda orientación y apoyo en las diferentes solicitudes ante instancias del Estado, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Promoción de los derechos humanos

- Cuatro talleres regionales dirigidos a auxiliares y oficiales de Defensoría de 21 Auxiliaturas Departamentales, 5 Móviles, 4 Municipales y 2 Regionales, así como a representantes de la sociedad civil, en los que se abordó el tema de “Migración y su nexos con la trata de personas” y la campaña “Tus derechos viajan contigo”.
- Inducción a personal de nuevo ingreso en la institución, al cual se les brindó información sobre el quehacer de la Defensoría y las actividades que se realizan.

- En febrero hubo una semana de sensibilización, en coordinación con los oficiales de las Auxiliaturas, se participó en un programa de una hora por el cable local de San Marcos y se brindó una entrevista a la prensa local. Asimismo, se distribuyó a todas las Auxiliaturas el material de la campaña “Tus derechos viajan contigo”.
- Se realizaron tres talleres con oficiales y cuadros medios de la Policía Nacional Civil y tres con estudiantes de la Escuela de la Policía, sobre los derechos de los migrantes y la campaña “Tus derechos viajan contigo”.
- Como parte del Grupo Intrainstitucional de Combate contra la Trata de Personas, se impartió una plática sobre “Migración y su nexa con la trata de personas” a personal de la Unidad de Recepción y Calificación de denuncias.

Protección de los derechos humanos

- Se actualizó el Protocolo para la atención de casos de población migrante, con el objetivo de dar atención especializada en casos relacionados con violaciones de los derechos humanos de los migrantes y se distribuyó, en físico y digital, a la Dirección de Procuración y a todas las Auxiliaturas.
- Se solicitó al Área de Recepción y Calificación de Denuncias la apertura de nueve expedientes relacionados con la violación de los derechos humanos de los migrantes, durante el proceso de intercepción, detención, aseguramiento, recepción y deportación.

Asesoría y seguimiento de casos

La Defensoría solicitó al Área de Recepción y Calificación de Denuncias la apertura de nueve expedientes, los cuales fueron producto de denuncias recibidas en las instalaciones de la Defensoría, como también en el Albergue de la Dirección General de Migración y en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Incidencia social

- Se participó durante todo el año en las asambleas ordinarias de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala. Asimismo, se han coordinado acciones de denuncia, de promoción e incidencia legislativa.
- Coordinación con la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Se ha tenido el apoyo en la Casa del Migrante en los casos de migrantes de diferentes nacionalidades que transitan por el país y necesitan un lugar donde dormir y comer, mientras continúan su viaje. Como todos los años, se participó en el Vía crucis del Migrante, se ha asistido al Encuentro Nacional de la Pastoral, donde se ha tenido la oportunidad de compartir la experiencia del trabajo de la Defensoría con las pastorales.

Incidencia política

- Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el año se coordinó con la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios para la investigación de denuncias presentadas en la Defensoría y en los monitoreos a la Fuerza Aérea Guatemalteca. También, se coordinaron las actividades del seminario-taller “El voto en el extranjero”, organizado por la institución del PDH.
- Dirección General de Migración. Se realizaron dos reuniones, una con cada director-interventor de los dos que tuvo este año esa institución, abordando los temas de recepción y atención a migrantes. Al nuevo interventor se le entregó un oficio sobre algunas de las violaciones que han sufrido los migrantes asegurados en el albergue, como abuso de autoridad y maltrato.
- Consulados de Centroamérica, Colombia, Ecuador y Guatemala en Atlanta, EUA. Durante el año se tuvo comunicación constante con personal de los consulados señalados, el cual ha proporcionado información de casos y ha facilitado la documentación de los migrantes que la solicitan por intermedio de la Defensoría.
- Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil. Se sostuvieron reuniones de coordinación en las cuales solicitaron a la Defensoría capacitar a oficiales y cuadros medios, así como a estudiantes de la

Academia de la PNC. Asimismo, se coordinó la recepción de denuncias en contra de elementos de esa institución.

- Fiscalía de Trata de Personas del Ministerio Público y Multisectorial. Reuniones para abordar el tema de trata de personas, sus limitaciones en el combate y violaciones de los derechos humanos cometidos por la Multisectorial.

Incidencia legislativa

En coordinación con la MENAMIG, a comienzos de año se hizo cabildeo en el Congreso de la República para dar a conocer la propuesta de reformas a la Ley de Migración. A mediados de año se presentó dicho proyecto a la Comisión del Migrante del Congreso. Esta Comisión recibió tres propuestas de reformas, de MENAMIG, la Universidad Rafael Landívar y la Dirección General de Migración. Para buscar consenso y generar una sola propuesta, la Comisión del Migrante realizó tres seminarios, durante los cuales se trabajaron las diferentes posturas. La Comisión se comprometió a llevar la propuesta a primera lectura antes de finalizar el año.

PROYECCIONES Y EXPECTATIVAS PARA 2010

- Incidir y coordinar ante las autoridades guatemaltecas que tienen en su agenda el tema migratorio, para que se respeten los derechos humanos de la población migrante en los procesos de intercepción, detención, deportación y recepción, mediante la denuncia pública.
- Realización de monitoreos que le permitan a la Defensoría recibir denuncias a través de las entrevistas, y así elaborar informes tanto de los migrantes que son detenidos en el albergue de Migración como los que vienen deportados a la Fuerza Aérea desde los EUA y los que se encuentran detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
- Continuar con la difusión de la campaña nacional “Tus derechos viajan contigo”, por diferentes actividades: asistencia a talleres, seminarios, charlas, visitas al Albergue de la DGM, y con las personas deportadas de los EUA.
- Continuar con el acompañamiento al Comité Pro-Mejoramiento de Vida de los deportados de Estados Unidos originarios de Chimaltenango y Sacatepéquez en las múltiples solicitudes que realice, para lograr la reinserción social integral.
- Continuar con el abordaje del tema de trata de personas y su nexa con el tráfico ilícito de migrantes.

Defensoría de las Personas con Discapacidad



Defensoría de las Personas con Discapacidad

La Defensoría de las Personas con Discapacidad fue creada por Acuerdo de Secretaría General 47-2003, de fecha 2 de junio de 2003. Esta unidad responde a la necesidad de abordar las constantes violaciones de los derechos humanos de este grupo, a través de la educación y promoción, así como la continua supervisión de la administración de los servicios públicos destinados a garantizar el pleno ejercicio de los mismos por parte de esta población, y la incidencia política y social.

Objetivo general

Proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los contenidos en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, aceptados y ratificados por Guatemala, mediante la supervisión permanente de la administración pública.

Objetivos específicos

- Promover el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
- Promover la aprobación de leyes y tratados internacionales para la protección, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, así como los mecanismos para su exigibilidad.
- Asesorar en la temática especializada a las instituciones del Estado, así como a organizaciones y sectores de sociedad civil.
- Realizar supervisión y control de la administración pública en instituciones con planes y programas dirigidos a las personas con discapacidad.
- Realizar incidencia legislativa y en las instituciones para la aprobación y aplicación de políticas, planes y programas dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Funciones

- Definir las políticas y estrategias generales de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en relación con las personas con discapacidad.
- Referir las denuncias en los casos de violación de derechos humanos en contra de personas con discapacidad a la Dirección de Procuración.
- Asesorar y dar seguimiento a todos los casos referidos a la Dirección de Procuración o que por indicaciones del Procurador de los Derechos Humanos se señalen.
- Procurar resultados de incidencia legislativa y en las políticas de atención a las personas con discapacidad.
- Elaborar un análisis de coyuntura que sirva de base para establecer la política general, objetivos, metas y actividades de los planes de trabajo, sean éstos mensuales, trimestrales o anuales.
- Diagnosticar periódicamente el estado de la coyuntura en la materia a manera de sugerir al Procurador de los Derechos Humanos los pasos a seguir cuando se comprueben hechos lesivos a los intereses de esta población.
- Determinar una política de mediación en conflictos que surjan entre las autoridades que tienen la obligación de velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad y los afectados directos, cuando éstos así lo soliciten y de manera oficiosa, cuando la gravedad de dichos hechos y actos lesionen intereses vitales.
- Preparar insumos en materia de educación y promoción de los derechos de la población con discapacidad dirigidos a este grupo en general, en coordinación con la Dirección de Educación, para que les apoye en estas actividades.
- Realizar cualquier actividad cuyos objetivos sean la sensibilización de la población en general, a fin de lograr el respeto de los intereses y derechos de este colectivo de personas.
- Mantener una base de datos y sistematización analítica de la situación con base en los casos manejados en la Defensoría.



Misión

Definir la política del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a través de la supervisión permanente a la administración pública, la educación, y la consulta y acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

La Defensoría central coordina acciones con los y las oficiales de las Defensorías que se encuentran en las distintas Auxiliaturas de la institución del PDH, así como con el personal de la Dirección de Educación y otras áreas de la institución para dar cobertura a todo el ámbito nacional.

PROBLEMÁTICA ENFRENTADA

Maltrato y abandono

La estigmatización persistente de la cual son víctimas las personas con discapacidad se traduce en la práctica del abandono, una de las formas de maltrato; la problemática más común que se observa para esta población, y en la que el Estado se ha constituido en violador de los derechos de las personas con discapacidad, es la omisión de medidas y políticas necesarias para prevenir, atender y resolver esta situación.

Tal hecho se evidencia con las comunicaciones frecuentes que se reciben en la Defensoría, de personas en lo individual o de otras instituciones que solicitan el apoyo del PDH para internar a las personas con discapacidad que se encuentran abandonadas, en algún albergue, asilo u hogar. El Estado carece de este tipo de instituciones. Sin embargo, los albergues no son la única medida a tomar para brindar apoyo a esta población. En el Estado tampoco existen políticas de prevención, atención, recuperación y educación sobre el maltrato y el abandono. Las personas con discapacidades mentales son quienes sufren mayor rechazo de sus familias, sus comunidades y la sociedad guatemalteca.

Discriminación

La discriminación también es común en todas las esferas de participación. Se da en la educación, dentro de las escuelas y otros centros del sistema educativo, en el sistema nacional de salud, en el ámbito laboral y en la esfera deportiva, artística y social.

Omisión

Las normas nacionales e internacionales que protegen y promueven los derechos de las personas con discapacidad son amplias e integrales. Sin embargo, no son aplicables en virtud de la inexistencia de políticas efectivas para la inclusión económica, política y social de las personas con discapacidad, incluyendo las medidas que deben aplicarse de manera urgente para eliminar todas las formas de discriminación en contra de esta población.

Aunque la discriminación por motivo de discapacidad está tipificada como delito en el Código Penal, son escasas las denuncias que se han hecho, pese a que la discriminación se da en todos los ámbitos: desde el ingreso a comercios, oficinas públicas, instalaciones de todo tipo, hasta la discriminación laboral, cultural y deportiva. No se cuenta con normativas que protejan específicamente estos hechos, ni medidas para resarcir a quienes se sienten agraviados por ser objeto de discriminación.

Incumplimiento de obligaciones estatales

La Política Nacional en Discapacidad fue aprobada como una política de Estado por medio del Decreto Legislativo No. 16-2008, al mismo tiempo que el Congreso aprobó la asignación de Q5 millones al Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad (CONADI), para el inicio de su aplicación, monitoreo y evaluación. No obstante, el presupuesto, aunque mínimo, nunca fue asignado, siendo ésta una política de Estado tan importante para avanzar en la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito nacional. A manera de contraste, el Congreso aprobó la donación de Q10 millones a una organización no gubernamental que promueve la caridad hacia las personas con discapacidad, hace recaudación pública de fondos y recibe honorarios por los servicios que brinda a la población.

Adicionalmente, en el presupuesto nacional de 2009 se había asignado una cantidad de Q5 millones al CONADI para su funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el Decreto Legislativo No. 135-96 o Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad. De abril a julio se hicieron reducciones significativas en las entregas mensuales, mismas que ya no fueron recuperadas, por lo que el presupuesto anual se redujo en más de 10%. Es decir, el CONADI no contó con los recursos mínimos para iniciar con la aplicación del plan para la Política Nacional en Discapacidad, ni para cumplir con su plan operativo anual. El Estado, a través del Congreso de la República y del Ministerio de Finanzas, incumple con la obligación de fortalecer la institucionalidad que coordina las cuestiones relativas a la garantía y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Por otro lado, existe una orden judicial emanada de la sentencia al amparo número 318-2006 interpuesta por organizaciones de personas con discapacidad en contra de las autoridades de la Municipalidad de Guatemala, el cual fue resuelto en sentencia firme en abril de 2008. La sentencia ordena la adecuación de todo el sistema del Transmetro, tanto el eje sur en funcionamiento como los ejes que se implementen a futuro, además de construcciones de infraestructura de paradas, centrales de transferencia, aceras, pasarelas y autobuses. También se ordena la aprobación de un reglamento de tránsito que incluya la obligación de incorporar la normativa de la accesibilidad para personas con discapacidad. La orden judicial ha sido claramente incumplida, hecho verificado por la Defensoría a través de la ejecución de un operativo de supervisión administrativa y monitoreo de la infraestructura física.

ACCIONES EMPRENDIDAS

Supervisiones administrativas y monitoreos

La Defensoría planificó tres supervisiones administrativas: al Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn, al Hospital Nacional de Salud Mental y al Hospital de Rehabilitación del IGSS. Los tres operativos fueron planificados y ejecutados en coordinación con la Unidad de Supervisión Administrativa, siguiendo el procedimiento aprobado y establecido en la guía para la ejecución de operativos de supervisión administrativa. Los procesos incluyeron la elaboración de planes de supervisión, de instrumentos de recolección de información, de planes de los operativos y de informes preliminares y finales de supervisión.

De la supervisión realizada al Hospital Nacional de Salud Mental hubo hallazgos importantes que indican la posibilidad de graves violaciones de los derechos de los pacientes internos en él. Como seguimiento, se han aperturado dos expedientes de competencia: (1) por la existencia de locales utilizados como salas de aislamiento para pacientes en estados de crisis de agresividad, los cuales no llenan requerimientos mínimos de higiene, seguridad, personal ni dignidad, atentando contra la integridad física y mental, e incluso la vida de quienes son internados; y (2) el internamiento indefinido de pacientes con medidas de seguridad, pese a que han sido dados de alta médica. Los dos casos han generado la necesidad de realizar monitoreos de seguimiento, tanto para verificar las situaciones mencionadas como para dialogar con las autoridades del hospital.

Durante los monitoreos de seguimiento se han constatado los hechos señalados. En el primer caso, las autoridades del hospital confirman la existencia de las salas de aislamiento, y las justifican con el argumento de la necesidad de “proteger” a los pacientes que se encuentran en estado de crisis agresiva. La Defensoría elaboró un informe sobre la investigación de esta situación en particular, e hizo recomendaciones para la clausura de dichos locales, basadas en informes de expertos internacionales en la materia, así como los lineamientos para el respeto de los derechos de los pacientes de los sistemas de salud mental adoptados por la Organización Mundial de la Salud. Al cierre de este informe, el expediente de competencia EIO.GUA.1287-2009/DE estaba pendiente de resolución.

En el caso relacionado con el internamiento indefinido de algunos pacientes con medidas de seguridad en el pabellón número cuatro del hospital mencionado, se aperturó el expediente EIO.GUA.5188-2009/DE por violación a la libertad y seguridad de las personas. Las autoridades del nosocomio colaboraron con la investigación, proporcionando información sobre el estado de la salud de dichos pacientes, quienes permanecen internos por orden judicial. Elaboraron dictámenes médicos en donde se declara el alta médica a estos pacientes, y solicitaron a los jueces el cese de la internación; sin embargo, algunas de estas personas permanecen internas por varios años todavía. El caso está siendo coordinado entre la Defensoría y la Unidad de Asesores Jurídicos, además de la Unidad de Derechos Específicos, en donde el expediente se procesa. A la fecha del cierre de este informe, el expediente se encuentra pendiente de una resolución.

También se realizó un monitoreo al Transmetro, en coordinación con representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y un asesor técnico experto en accesibilidad a los espacios físicos y a los medios de transporte, con el objetivo de verificar los avances en el cumplimiento del Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, en su Capítulo VII, referido a la accesibilidad al espacio físico y los medios de transporte, y en la sentencia emitida por la Sala Tercera de Apelaciones a favor del amparo interpuesto por organizaciones de personas con discapacidad, que ordena la adaptación de todo el sistema del Transmetro, presente y a futuro, a modo de garantizar la accesibilidad a todas las personas con discapacidad y con movilidad reducida.

Se verificó que las autoridades ediles de la Municipalidad de Guatemala no han cumplido con lo ordenado en la sentencia, ya que el eje sur del Transmetro, a lo largo de todo su recorrido, no ha sido modificado desde que la obra fue inaugurada, por lo que las barreras de acceso en la Central de Transferencia (zona 12), paradas, infraestructura perimetral y autobuses siguen existiendo, impidiendo el uso autónomo y seguro por parte de este grupo vulnerable.

La sentencia también ordena la aprobación de un reglamento de tránsito que incluya obligaciones para los prestadores de los servicios de transporte urbano colectivo, de incorporar normas de accesibilidad en dichos servicios. Tal reglamento tampoco ha sido aprobado.

Denuncias recibidas

La Defensoría recibió, hasta el 31 de octubre de 2009, un total de 28 denuncias por violaciones de derechos de personas con discapacidad, que fueron trasladadas a la Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias. Sin embargo, este número no constituye la totalidad de denuncias recibidas en la institución, debido a que la mayoría son recibidas directamente por la Dirección de Procuración, a través de la Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias, el Centro de Llamadas, o de las distintas Auxiliaturas de la República.

Se hizo acompañamiento y se brindó asesoría en las denuncias recibidas por casos colectivos, y se dio debida orientación a los casos de personas individuales.

Mediaciones

La Asociación Guatemalteca de Deportistas con Discapacidad (AGDEPDIS) solicitó la intervención del PDH. Dicha organización presentó documentación para su ingreso a la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca (CDAG), misma que fue rechazada con el argumento de no considerar el deporte especializado practicado por personas con discapacidad igual que el practicado convencionalmente, o por deportistas que no tienen ninguna discapacidad. La Unidad de Asesores Jurídicos, en coordinación con la Defensoría, emitió dictamen recomendando a la CDAG reconsiderar la solicitud, bajo el riesgo de que AGDEPDIS fuera víctima de discriminación por parte de dicha entidad deportiva. AGDEPDIS solicitó posteriormente la mediación de la institución del PDH, buscando unificar criterios de incidencia y propuestas para la inclusión plena del deporte de personas con discapacidad en la normativa nacional, fundamentada en convenios internacionales de los cuales Guatemala forma parte, y en las instituciones rectoras en la materia. El proceso de mediación ha integrado ampliamente a las distintas organizaciones de personas con discapacidad que practican deporte, y al CONADI. El proceso continúa, y se busca que la propuesta pueda ser apoyada por todo el sector de personas con discapacidad, para acudir nuevamente a CDAG con el acompañamiento de la institución del PDH.

ACTIVIDADES

Promoción de los derechos humanos

En el presente año se coordinaron acciones de promoción con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el CONADI. En particular, se realizaron actividades de promoción y capacitación sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). En esta temática, se llevaron a cabo las capacitaciones siguientes:

- Taller sobre derechos económicos, sociales y culturales, dirigido a la Coordinadora de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Guatemala (COPDIGUA).
- Taller de socialización de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dirigido a miembros de organizaciones de personas con discapacidad en Quetzaltenango y región suroccidente.
- Tres talleres de capacitación sobre derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dirigidos a miembros de la Asociación de Sordos de Guatemala (ASORGUA),
- Participación en el panel inaugural de la I Escuela de Formación Política para Mujeres con Discapacidad, dirigido a mujeres con discapacidad miembros de las organizaciones de estos grupos vulnerables.
- Presentación de ponencia en el II Congreso Nacional de Rehabilitación basada en la Comunidad, organizado por el CONADI, con una conferencia sobre la CDPD.
- Organización y realización del II Congreso Nacional del CONADI “Desafíos para el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Otras actividades de promoción y educación de los derechos humanos fueron organizadas internamente. Se realizan periódicas capacitaciones al personal de nuevo ingreso, y la Defensoría colabora con la Unidad de Motivación y Capacitación Interna dictando charlas sobre la temática específica.

Bajo la coordinación de la Dirección de Defensorías, agosto se constituyó en el mes institucional dedicado a los derechos de las personas con discapacidad. La Defensoría distribuyó material promocional y de capacitación, incluyendo manuales para promotores de derechos de las personas con discapacidad, a todas las Auxiliaturas del PDH. Asimismo, organizó las siguientes actividades en el marco de una semana institucional dedicada a la temática:

- Video foro, con la proyección de la película sobre la vida de Gaby Brimmer, una mujer con discapacidad.
- Elaboración y exposición fotográfica con el tema “Barreras arquitectónicas”.

- Conversatorio con el tema “Programa de IVS del IGSS”, contándose con la participación del director de dicho programa, dirigido a miembros del personal en la sede central.
- Jornada deportiva de baloncesto sobre sillas de ruedas, con la participación de deportistas con discapacidad sobre sillas de ruedas del Club Rápido Rodante y miembros del personal de la institución.
- Coordinación con la Auxiliatura de Santiago Atitlán para la realización del taller sobre derechos de las personas con discapacidad y la CDPD, dirigido a miembros de organizaciones de personas con discapacidad y personal de las instituciones que trabajan con esta población, en San Juan La Laguna.

La Defensoría ha sido invitada a varios eventos internacionales sobre derechos de personas con discapacidad, en donde se ha asistido como conferencistas o ponentes. Algunas de estas participaciones son:

- Facilitación del I Encuentro de Organizaciones Beneficiarias del *Disability Rights Fund* en Perú, que tuvo como resultado la conformación de una red de coordinación para dar seguimiento a la CDPD en ese país.
- Participación como conferencista magistral en mesa redonda organizada por la representación del PNUD en Perú, dirigida a organizaciones de personas con discapacidad, con el tema “El rol de la sociedad civil en la implementación y el monitoreo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU”.
- Participación en el XII Foro Interamericano de Alcaldes, exponiendo la experiencia guatemalteca de incidencia exitosa en el logro de la accesibilidad para personas con discapacidad al transporte público, dirigido a alcaldes, concejales y personal de las municipalidades y alcaldías del continente americano.
- Participación en la II Conferencia de Estados parte a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, como parte de la delegación guatemalteca ante la ONU.
- Participación en II Foro Centroamericano sobre VIH/SIDA y discapacidad, para dar seguimiento a acuerdos de coordinación interinstitucional para el impulso de acciones de promoción y educación sobre VIH/SIDA, con organizaciones de personas con discapacidad de Guatemala y la región Centroamericana.
- Conferencista magistral en el foro internacional “El quehacer de la discapacidad visual y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con el tema “El rol de la sociedad civil en la implementación y monitoreo de la CDPD”, dirigido a organizaciones de personas con discapacidad visual de México y América Latina.

Incidencia legislativa

Iniciativa de ley registro No. 3932 relativa a la oficialización de la lengua de señas guatemaltecas (LENSEGUA). Con el apoyo del Asesor Legislativo de la Dirección de Defensorías, se han coordinado varias reuniones con la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, que conoce la iniciativa y debe presentar dictamen al pleno para su aprobación. La Defensoría revisó la iniciativa y elaboró propuestas para su modificación, mismas que fueron tomadas en cuenta por dicha comisión legislativa. También se han coordinado reuniones de incidencia con organizaciones de personas con discapacidad auditiva y sordo-ceguera, con el fin de consensuar ideas y llevar una propuesta unificada al Congreso de la República.

Incidencia social

Acompañamiento a organizaciones de personas con discapacidad en el seguimiento de la implementación de las nuevas rutas del Transmetro. Tanto el monitoreo realizado a este sistema de transporte como otras acciones se han desarrollado en coordinación con las organizaciones dentro de la alianza de la Comisión Política de Accesibilidad al Transmetro y otros Espacios Físicos (CPAT).

Cumplimiento de atribuciones del PDH según la ley

Por disposiciones del Decreto Legislativo No. 135-96, artículo 24, el PDH integra el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI). Es un ente colegiado, integrado por representantes

de siete instituciones del Estado, e igual número de representantes de la sociedad civil. El PDH ha delegado su representación a la Defensora ante esta instancia. El Consejo se reúne para deliberar sobre asuntos de su competencia, ordinariamente cada mes, y extraordinariamente cuando la urgencia o inmediatez de la situación que convoca lo amerita. El rol de la institución del PDH en dicho ente colegiado es el de observador, y participar como asesor en materia de derechos humanos, sin voto.

Además, el CONADI también se organiza en distintas comisiones de trabajo; la Defensoría participa en la Comisión de Políticas e Incidencia, elaborando planes para la aprobación, seguimiento y evaluación de políticas y legislación en materia de derechos de personas con discapacidad.

También, en coordinación con CONADI, se han realizado capacitaciones en derechos humanos y sobre la CDPD; foros y el II Congreso Nacional del CONADI titulado “Desafíos para el cumplimiento de la CDPD”. La Comisión de Políticas e Incidencia también coordina acciones de incidencia política, y como uno de sus resultados se está considerando la integración del CONADI como parte de la Comisión de Alto Nivel de Derechos Humanos que coordina el Viceministro de Relaciones Exteriores, y donde también participa la PDH.

Informes

La Federación Iberoamericana de Ombudsmen (FIO) elabora un informe anual, el presente año corresponde al Séptimo Informe de Derechos Humanos con la temática de derechos de las personas con discapacidad. La Defensoría elaboró los capítulos correspondientes a Guatemala, con un análisis jurídico normativo y de la situación de los derechos humanos de esta población.

PROYECCIONES Y EXPECTATIVAS PARA 2010

La reducción presupuestaria al CONADI obligará a que muchas de las acciones planificadas para el año no puedan ejecutarse. Estas acciones, algunas incluso en coordinación con la institución del PDH, están dirigidas al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

En relación con la supervisión que debe hacerse de los programas y políticas públicas, y de la eficacia en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, las organizaciones de la sociedad civil deberán jugar un papel protagónico.

La institución del PDH continuará con las capacitaciones, acompañamientos en sus demandas, y en su papel de observador en el CONADI, la única instancia que reúne tanto a funcionarios representantes del Estado como de las organizaciones de personas con discapacidad.

La Defensoría de las Personas con Discapacidad continuará con los operativos de supervisión administrativa, incidencia legislativa y política. Enfocará sus esfuerzos en fortalecer la coordinación con el CONADI, para incidir en un verdadero y efectivo cumplimiento de las responsabilidades emanadas de la CDPD. Fortalecerá sus vínculos con las organizaciones de personas con discapacidad de la sociedad civil, apoyando las acciones de auditoría social, y brindando acompañamiento a sus demandas y exigencias por el pleno respeto de sus derechos humanos.

La institución del PDH tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del nuevo tratado internacional de derechos humanos, así como promover y defender los derechos contenidos en él.

Defensoría de los Pueblos Indígenas



Defensoría de los Pueblos Indígenas

Creada por el Procurador de los Derechos Humanos según Acuerdo SG-15-98 del 15 de julio de 1998, la Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas surge por la particular vulnerabilidad e indefensión de los pueblos indígenas y la constante violación de sus derechos colectivos y específicos, los cuales han conllevado a la desigualdad, trato inhumano, injusticia y racismo.

Misión

Definir políticas y estrategias generales de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para erradicar la violación de los derechos humanos, tanto colectivos como específicos, de los pueblos indígenas. Así como, promover y accionar eficazmente en la defensa, promoción y vigilancia de los derechos, respetando los valores y principios de la cultura de esta población.

Durante 2009 la Defensoría dirigió su atención a la lucha contra las diversas formas de violación de los derechos humanos, centrando esfuerzos en diferentes procesos de incidencia, así como en la proscripción de la discriminación racial y la exclusión a todo nivel de los miembros de los pueblos indígenas. Realizó varias acciones para fortalecer y buscar la apertura de espacios para la aplicación de la legislación a favor del respeto de los derechos fundamentales de esta agrupación.

La Defensoría cuenta con seis modalidades de atención e intervención:

1. Apoyo a los procesos educativos con énfasis en temas indígenas.
2. Apoyo a los procesos de procuración de casos relacionados con derechos específicos de pueblos indígenas.
3. Mediación, orientación, verificación, prevención y acompañamiento en aquellos casos relacionados con pueblos indígenas y hechos cometidos por personas e instituciones particulares.
4. Comunicación e interacción permanente con organizaciones de los pueblos indígenas.
5. Incidencia en la definición de distintas políticas y acciones en atención a los pueblos indígenas.
6. Investigación de situaciones particulares relevantes y atinentes a la vida de los pueblos indígenas.

El trabajo de la Defensoría se realiza de manera coordinada con todas las áreas y departamentos de la institución del (PDH), con la Dirección de Procuración, para la atención de la denuncia y la investigación correspondiente, con las Auxiliaturas departamentales, municipales, regionales y móviles, y las otras áreas técnico-sustantivas; se trata de un trabajo integrado, y en este sentido se reporta el conjunto de sus intervenciones.

En las diversas Auxiliaturas Departamentales se continuó con la labor de los oficiales de Defensoría, quienes tuvieron a su cargo, entre otros temas, el abordaje de la situación de los pueblos indígenas, a través de actividades de promoción de los derechos humanos.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Los derechos de los pueblos indígenas muestran un rezago en su avance e implementación, y enfrentaron diferentes situaciones que configuran una mayor vulnerabilidad en diferentes aspectos, lo cual profundiza la exclusión y la segregación social.

Derechos humanos de los pueblos indígenas

El conjunto normativo crea un andamiaje legal, tanto de normas internas como de convenios internacionales ratificados por Guatemala, propicio para que se fortalezca la convivencia y coexistencia de los diferentes pueblos, sin embargo, esos compromisos de orden legal muestran incumplimientos y rezagos, a lo cual se

suman los resabios de prácticas y concepciones racistas; ello requiere transformar las prácticas sociales orientadas al cambio de mentalidades, actitudes, comportamientos discriminatorios a todo nivel, tanto en las estructuras administrativas del Estado como del sector privado, necesarias para que se produzca y fortalezca una convivencia digna, igualitaria y solidaria entre todos los guatemaltecos.

Explotación de recursos naturales y proyectos mineros

La iniciativa del Gobierno de impulsar los diferentes proyectos mineros continuó sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas, a pesar de realizarse más de 37 consultas comunitarias en el nivel municipal, y en todas hubo oposición a dichos proyectos. Fueron más de 600 mil personas las que se pronunciaron al respecto, por lo que sí merecen atención gubernamental.

Seguridad ciudadana y comunidades indígenas

La seguridad comunitaria indígena muestra un profundo deterioro, el descontento va en aumento. Se han creado, junto a la Policía Nacional Civil (PNC), formas paralelas de seguridad, que el Ministerio de Gobernación denomina Juntas Locales de Seguridad, y cita un número mayor a los mil grupos, varios de las cuales operan sin ningún control y funcionan al margen de la ley, lo cual ha resultado en la violación de varios derechos fundamentales de las personas a las que supuestamente deben proteger.

Hechos como el linchamiento de los agentes de la PNC San Martín Jilotepeque, Chimaltenango (16 de noviembre), y en San Juan Cotzal, Quiché (16 de octubre); vinculados a las actuaciones de las Juntas Locales de Seguridad, muestran que estos grupos operan sin supervisión.

Igualmente, preocupa que algunos miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y Comités de Desarrollo, al amparo de instrumentos legítimos de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tomen medidas arbitrarias. Tal el caso de de la aldea Chicajalaj, de Comitancillo, San Marcos: la Alcaldía Auxiliar y el Consejo Comunitario de Desarrollo (COMUDE) emitieron un reglamento para la construcción, ampliación y mantenimiento de caminos vecinales para tránsito vehicular liviano y de carga, así como la apertura de otros caminos, pero, según dicho reglamento, los vecinos expropiados no podrán reclamar indemnización alguna, y se les prohíbe denunciar ante los órganos jurisdiccionales el reclamo de sus derechos.

Otro caso es el de la comunidad Chuaxic de Sololá, donde, a través de un Comité de Caminos, se organizaron para presionar a tres personas de la misma comunidad para que cedieran sus tierras en forma gratuita, en las cuales se construiría un camino vecinal que facilitaría a 800 familias el traslado de sus cosechas al mercado local. Este caso generó un conflicto de jurisdicción debido a que los tres inconformes interpusieron denuncia contra los miembros del COMUDE en el Juzgado de Primera Instancia Penal, y éste giró órdenes de captura.

Urge un mecanismo institucional que permita crear el marco legal en el cual se reconozca las funciones de las autoridades indígenas y se determinen sus competencias en el ámbito local.

Criminalización de la lucha por los derechos humanos, por la tierra y los recursos naturales

Las áreas temáticas que reflejan mayor persecución contra líderes son aquellas relacionadas con la explotación de recursos naturales, minería, petróleo, hidroeléctricas y con la tierra. La persecución penal contra activistas de derechos humanos, campesinos e indígenas se localiza en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde opera el proyecto Marlyn de Montana Exploradora; San Juan Sacatepéquez, Guatemala, donde opera la fábrica de cementos San Juan, de Cementos Progreso, con 72 procesos legales contra líderes indígenas; y en El Estor, Izabal, donde opera la Compañía Guatemalteca de Níquel.

En los últimos seis años se acentuó el interés gubernamental por encaminar una política de explotación minera, fundamentalmente con proyectos a cielo abierto para la extracción de oro, plata y otros recursos naturales no renovables, sin embargo, preocupa que los derechos humanos no formen parte de esta política. Las comunidades han quedado a merced de las arbitrariedades y abusos de las empresas y no se garantizan derechos fundamentales como la integridad como pueblo indígena, la consulta, participación, protección del medio ambiente, el resarcimiento de daños.

La postura gubernamental es firme en cuanto a impulsar e insistir en este tipo de proyectos. Sin embargo, este conjunto de iniciativas se vienen impulsando en lo que podemos llamar reservas territoriales de los pueblos indígenas, no en el sentido de propiedad, sino en el de hábitat. Espacios territoriales que en varios de los casos son el reducto de la sobrevivencia de comunidades enteras en cuanto al recurso hídrico.

Por el proyecto San Juan, de Cementos Progreso, hay más de cien líderes de ascendencia maya kaqchikel sujetos a proceso criminal, uno de ellos sentenciado a 150 años, así como más de 22 asesinatos no esclarecidos y un estado de prevención decretado por el gobierno en 2008. A raíz de esta problemática surgieron dos grupos clandestinos, uno a favor y otro contra la empresa, uno de ellos denominado El Escuadrón del cual conoce e investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ese grupo actúa con tanta impunidad al grado de tomar el control sobre los elementos policiales quienes son registrados por estos grupos. Además, existen más de 25 expedientes tramitados por violaciones a los derechos humanos en conocimiento del Procurador de los Derechos Humanos.

La problemática vinculada a la Compañía Guatemalteca de Níquel de El Estor, Izabal, también ha generado conflictos de seriedad, y ha afectado a los líderes indígenas q'eqchi', al extremo que, en uno de los últimos incidentes, el 27 de septiembre, murió el maestro Adolfo Ich Chub, líder indígena del barrio La Unión. El docente fue brutalmente asesinado por la seguridad privada de esa empresa de níquel, en presencia de varios campesinos y otros quedaron gravemente heridos. Otro líder campesino fue sentenciado por los problemas agrarios.

La acción gubernamental se centra en la conflictividad y no en la definición de una política agraria; la Secretaría de Asuntos Agrarios reportó en junio que conocía 1,450 conflictos de tierras y que las zonas con mayores índices son Petén, Izabal, Alta Verapaz y Quiché.

Racismo

El Ministerio Público enfrenta dificultades para el abordaje de la denuncia y la persecución penal, así como la ausencia de un criterio objetivo en cuanto a la prueba. Los fiscales y auxiliares están orientando la atención de la discriminación racial hacia una política de desjudicialización, no se conocen más de tres casos resueltos, la mayoría de hechos penales sobre discriminación racial se archivan y sobreseen.

Política legislativa

En la discusión de los proyectos afloran sentimientos racistas por parte de algunos legisladores quienes con resabios históricos deniegan el abordaje de los temas, bajo el pretexto de fomentar un conflicto mayor, la división del país o la creación de privilegios, así como la justificación de que todos somos guatemaltecos y la ley debe ser igual. Cabe profundizar el debate sobre las razones históricas que justifican este tipo de demandas legales. Entre estas iniciativas se citan:

Ley que aprueba el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Registro 2699). Está sustentada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, en su artículo 14. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Pueblos Indígenas de la

cual ya recibió un dictamen favorable, y aprobada en primer debate en el pleno del Congreso de la República. Se encuentra pendiente de la segunda y tercera lectura.

Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas (Registro 4051). Esta iniciativa fue ingresada como proyecto nuevo en mayo de 2009 y tiene como antecedente la iniciativa No. 3684 sustentada en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; cuenta con dictamen favorable por la Comisión de Comunidades Indígenas. El proyecto no ha sido presentado al pleno del Congreso de la República. Cuenta con el apoyo del Foro Indígena Parlamentario, COMG, CEDIM, Colectivo Tz'onoj Tzij y CNAP.

Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas (Registro 3835). Sustentada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, actualmente se encuentra en la Comisión de Paz y Desminado, Comisión de Comunidades Indígenas, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, tiene dictamen favorable por la Comisión de Pueblos Indígenas y Comisión de Paz y Desminado. Las organizaciones que impulsan esta iniciativa son Oxlajuj Ajpop, Foro Indígena Parlamentario, Ministerio de Cultura y Deportes, con la participación de la Defensoría de Pueblos Indígenas.

Ley de Generalización de Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural (Registro 3913). Se sustenta en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Educación y Tecnología del Congreso de la República para que emita dictamen.

Ley de Jurisdicción Indígena (Registro 3946). La iniciativa busca desarrollar el pluralismo jurídico y respetar el sistema de justicia de los pueblos indígenas que, hasta ahora, ha sido pronto y cumplido en las comunidades indígenas. Se basa en la realidad de 20 mil comunidades y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. La elaboración del dictamen corresponde a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República.

Reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Registro 3934). Se sustenta en el análisis del Decreto 11-2002, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Con esta iniciativa se pretende la búsqueda de mayor participación indígena en el número de participantes y tomas de decisión comunitaria, así como fortalecer la auditoría social. Actualmente se encuentra en la Comisión de Descentralización y Desarrollo del Congreso de la República, y tiene dictamen favorable.

Ley General de Pueblos Indígenas (Registro 4047). Está basada en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se encuentra pendiente de su dictamen y presentación al Pleno del Congreso. El estudio del dictamen está a cargo de la Comisión de Pueblos Indígenas.

Ley de Medios de Comunicación Comunitaria (Registro 4087). Se basa en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y se encuentra en las Comisiones de Comunicación y Pueblos Indígenas del Congreso de la República, pendiente de dictamen.

Ley de Desarrollo Rural (Registro 3901). Se sustenta en el hecho de que la pobreza afecta a un 72.2% de la población, así como la referencia sobre la tenencia de la tierra, la producción agrícola, los compromisos de los Acuerdos de Paz y las metas del milenio. Plantea la incorporación de la población del área rural al desarrollo económico mediante la creación del fundamento jurídico, la definición de principios y conceptos propios orientadores del nuevo enfoque de desarrollo; la necesidad de consensuar una política de desarrollo rural integral y fortalece la rectoría del Ministerio de Agricultura; así como la orientación de los recursos financieros y la necesaria coordinación institucional entre las entidades públicas.

En la agenda legislativa referente a pueblos indígenas, durante 2009 no hubo mayores avances. Se discutieron únicamente a nivel de Comisiones de Trabajo del Legislativo: las iniciativas de Ley de Lugares Sagrados,

Generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural, Ley de Consulta a los pueblos indígenas y las reformas a la Ley de los Consejos de Desarrollo, y sólo tres iniciativas concluyeron con un dictamen favorable.

Visitas de relatores de mecanismos internacionales

La visita de los relatores permitió centrar la atención en diferentes situaciones de los pueblos indígenas; así, el Relator de la Organización de los Estados Americanos recomendó mayor atención hacia la discriminación racial y tomar medidas institucionales para no perseguir a los defensores de derechos humanos, y el respeto a los mecanismos de consulta de los pueblos indígenas. El Relator sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas recomendó mayor atención a la situación de exclusión de la educación, la no pertinencia del sistema educativo con los pueblos indígenas, así como la necesidad de mejorar los esfuerzos en la educación bilingüe intercultural. En ocasión de la visita, diversas organizaciones elaboraron informes que contienen diferentes indicadores de exclusión.

El informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, hace una reflexión comparativa con el del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y el del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como del Consejo de Derechos Humanos. Advierte sobre las esferas de posible cooperación. Luego examina el marco práctico de su labor e incluye un resumen de sus actividades en relación con cuatro esferas de trabajo: la promoción de las buenas prácticas, los estudios temáticos, los informes de países y los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos. Dedicó la segunda parte de su informe a analizar el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas sobre cuestiones que los afectan, con lo que espera ofrecer una perspectiva sobre la forma en que los gobiernos, los pueblos indígenas, el sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas pueden abordar esta cuestión esencial en el futuro, y presenta varias recomendaciones al respecto.

El Informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, para la Conferencia Examen de Durban 2009, presentado en marzo de 2009 en Ginebra, tiene la finalidad de revisar el progreso en la implementación de la Declaración de Durban y su Programa de Acción. Recalca que si bien existen progresos, algunas acciones son dispersas y falta mejorar las buenas prácticas institucionales. A su vez, reitera su preocupación por los pocos alcances de las acciones y que aún no se revierte la discriminación racial que ha traído como consecuencia la exclusión y marginación de los pueblos maya, garífuna y xinca.

Sentencias de órganos jurisdiccionales

Caso de la licenciada Cándida González Chipix, ex segundo viceministro de Trabajo y Previsión Social: en ocasión de una supervisión en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Tecún Umán, San Marcos, los trabajadores la miraron despectivamente; no la reconocieron como la autoridad máxima, no le prestaron la debida atención ni la colaboración; se encerraron dentro de la oficina, desde donde se burlaban y carcajeaban en presencia de la referida funcionaria. Por el hecho trasladó informe al Ministro, las tres personas fueron destituidas, pero por vicios en el proceso del despido fueron reinstalados. El Ministerio Público investigó el hecho y lo trasladó al Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. La sanción impuesta a los tres implicados es de un año y cuatro meses de prisión. El Tribunal los eximió del pago correspondiente de las costas procesales por ser personas de escasos recursos económicos.

Caso del señor José Antonio Cac Cucul. El sábado 13 de abril de 2006 un grupo de estudiantes del primer semestre de Ingeniería Ambiental se encontraban realizando una gira de estudios; cuando se dirigían a la laguna de Yaloch, jurisdicción de Melchor de Mencos, Petén, un compañero de estudio, Mynor René Trujillo Lara, agredió verbalmente al señor José Antonio Cac Cucul por lo que éste planteó denuncia en el Ministerio Público. El hecho fue investigado. En el auto de apertura a juicio el referido juzgado señala como fecha para

el debate oral y público el 7 de febrero de 2008, seis meses después de dictado el auto, situación que no se ajusta a los plazos establecidos en ley que es de 15 días después de notificadas las partes. Con fecha 10 de marzo de 2009 fue presentado el recurso de apelación especial ante la honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Los trámites judiciales para la atención de la discriminación racial resultan por demás engorrosos y llegan a un fin que no satisface a las víctimas, lo que hace que los afectados pierdan aún más la confianza en el sistema y tomen la justicia por propia mano.

ACCIONES EMPRENDIDAS

En la Defensoría se prestó asesoría legal, acompañamientos y diligenciamiento a 79 casos de vulneración de diferentes derechos fundamentales a los indígenas, quienes por su condición son objeto de trato desigual, retardo en la atención, engaños y trato despectivo; lo que demanda una mejor conciencia social y medidas administrativas efectivas para contrarrestar este tipo de situación.

Las denuncias y derechos afectados fueron: plenos derechos y libertades, 39 casos (48%); hacerse comprender en procedimientos legales, 9 casos (10%), al trabajo digno, 7 casos (9%), discriminación por motivos de raza u origen étnico, 6 casos (8%), a la identidad cultural, salud adecuada y aplicar el derecho consuetudinario indígena, 3 casos cada uno (4%), derecho a practicar su religión ancestral, al desarrollo, a la consulta, a protección del patrimonio ancestral y natural, 2 casos cada uno (3%), y 1 caso relacionado con la participación política.

Las diferentes formas de violación de los derechos indígenas impiden su desarrollo y adecuado desenvolvimiento, y constituyen un obstáculo para el ejercicio de sus derechos como seres humanos y como ciudadanos.

Denuncias por violación de derechos colectivos

Derecho vulnerado	%
A la identidad cultural	4.00
A la práctica de religión ancestral indígena	3.00
Al desarrollo	3.00
Al trabajo digno	9.00
A la consulta	3.00
A la participación política	1.00
A aplicar el derecho consuetudinario indígena	4.00
A comprender y hacerse comprender en procedimientos legales	10.00
A protección del patrimonio ancestral y natural	3.00
A salud adecuada	4.00
A plenos derechos y libertades	48.00
A no ser discriminado por motivos de raza u origen étnico	8.00
Total	100

Relato de algunos casos

El denunciante, de ascendencia maya k'iche', es objeto de discriminación racial; en noviembre de 2008, mediante el sistemas del Fomento de Hipotecas Aseguradas, adquirió una vivienda en residenciales Prados del Tabacal I, en el municipio de Villa Nueva, de Guatemala. Decidió instalar en su casa de habitación una pulpería y una tortillería. La administración del referido residencial SERPRADOS, S.A. y la asociación de vecinos, al ver la prosperidad del negocio, le profirieron diversos tipos de amenazas, lo ofendieron con términos discriminatorios. Además, elaboraron un reglamento de vecinos que prohíbe la instalación de negocios dentro del residencial; sin embargo, en el residencial existen varios comercios y las medidas y

reglamento fueron impuestos únicamente al denunciante, prohibiéndole su actividad comercial, le cortaron el servicio de agua potable, le prohibieron entrar en su residencia, le retiraron la tarjeta electrónica para entrar a la residencial, por lo que debe ingresar a escondidas, le impusieron un cobro desmedido del servicio de agua de Q15,300 mensuales, cuando la cuota es de Q290 para los demás vecinos e incluye otros servicios.

La trabajadora social del hospital de Salud Mental de la ciudad de Guatemala conoció el caso de la víctima, un hombre de 72 años de edad que fue referido al citado centro por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Poptún, Petén. El señor es monolingüe en el idioma maya q'eqchi'. A su ingreso al hospital le aplicaron medicamento para personas que padecen esquizofrenia, delirio de persecución y depresión, puesto que no se podían comunicar con él para hacerle los exámenes pertinentes. Posteriormente, y para el seguimiento de su caso, los médicos se apoyaron con una intérprete para entrevistarlos, determinándose que se encontraba sano, y que no padecía de enfermedad mental alguna, sino que su problema fue la barrera idiomática.

La afectada, de ascendencia maya k'ich'e fue contratada como registradora civil en el Registro Nacional de las Personas de Totonicapán. Como parte de sus labores se encargó negociar con las autoridades de los 48 cantones a efecto de que la oficina fuese aceptada por la población en general, a pesar de que se encontraba contratada bajo el renglón 022, contrato renovado para 2009. A finales de enero, para cumplir con el procedimiento administrativo que le corresponde, evaluó el trabajo de las personas bajo su cargo, y una, de origen mestizo, tuvo deficiencias en su servicio y al enterarse de la calificación insultó a afectada diciéndole: "India abusiva", además, amenazando su seguridad laboral bajo argumentos de más poder y que la iba a contratar como sirvienta de su casa o que descansara en paz. El 2 de febrero a la afectada se le notificó la rescisión de su contrato, pese a que durante su labor no tuvo quejas ni problemas en su desempeño.

Derechos colectivos y específicos

En el presente año, 43% de los casos atendidos en la Defensoría fueron realizados de forma colectiva por las personas indígenas, es decir a nombre de un grupo o comunidad específica en defensa del derecho violentado, y 57% por personas a título particular por un derecho fundamental que les está siendo violentado por el hecho de ser indígenas. Del total de las denuncias interpuestas, 37% fue planteado por hombres, 27% por mujeres y 36% en forma colectiva.

De los casos, en el departamento de Guatemala se atendieron 29 casos (37%); en Quiché, 16 (20%); en Sololá y Chimaltenango, 7 (9%); en Alta Verapaz, 6 (8%); en Quetzaltenango, 4 (5%); en Petén, 3 casos (4%); en Totonicapán, 2 (3%); y en Escuintla, Izabal, San Marcos y Baja Verapaz, 1 (1%).

Tabla de casos por departamento

Departamento	%
Guatemala	37.00
El Quiché	20.00
Alta Verapaz	8.00
Sololá	9.00
Petén	4.00
Chimaltenango	9.00
Quetzaltenango	5.00
Escuintla	1.00
Izabal	1.00
San Marcos	1.00
Baja Verapaz	1.00
Totonicapán	3.00
Sacatepéquez	1.00
Total	100.00



Promoción, defensa y divulgación de los derecho humanos

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se transmitieron *spots* publicitarios en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché y la ciudad capital, así como televisión Maya, Radio Universidad y el canal de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Se atendió de manera directa a 522 personas de la sociedad civil, de organizaciones de los pueblos indígenas y funcionarios de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, así como de otras dependencias públicas.

Se tuvo participación en Guatevisión, en el marco del día Internacional de los Pueblos Indígenas con el tema: “Significado y retos del Gobierno frente a los pueblos indígenas”; en *Prensa Libre*, con los temas de acceso a la justicia y sobre el sistema jurídico indígena; en Vea Canal, sobre derecho humano al idioma y alcances de la Ley de Idiomas Nacionales; en radio Nawual Stereo, con el tema derechos de los pueblos indígenas.

Se atendió a un aproximado de 8,258 personas mediante los procesos más extendidos: seminarios, talleres, foros, congresos, a través de exposiciones y presentaciones de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en coordinación con otras instituciones.

Se capacitó a un aproximado de 11 mil personas, en forma directa e indirectamente, desde las Auxiliaturas Departamentales. Entre los principales temas abordados se citan: racismo y discriminación racial, epigrafía maya, Acuerdo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley de Idiomas Nacionales, sistema de protección de sitios sagrados, significado del 13 B'aqtun, alcances de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ejercicio de la autoridad indígena, discusión sobre el proyecto de Ley sobre Jurisdicción Indígena del Congreso de la República, derecho indígena como sistema jurídico, derechos de los pueblos indígenas, y derechos de la mujer indígena, avances y desafíos,

Tabla capacitaciones sobre derechos de los pueblos indígenas

Tipo de capacitación	%
Capacitación directa por la Defensoría	3.00
Capacitación desde Auxiliaturas Departamentales	55.00
Exposiciones y presentaciones de la Defensoría	42.00
Total	100.00

Defensoría del Adulto Mayor



Defensoría del Adulto Mayor

La Defensoría del Adulto Mayor es una instancia creada por el Procurador de los Derechos Humanos mediante el acuerdo de Secretaría General No.15/98, con el fin de proteger, promover y tutelar el respeto por los derechos humanos de la población que envejece, la que por diversas situaciones de carácter social, económico, político e histórico requiere especial atención en sus derechos como ciudadanos.

Funciones

Entre sus funciones, debe mantener interlocución permanente con las autoridades de las instituciones del Estado, realizar monitoreos o verificaciones de campo para detectar el grado de cumplimiento de los derechos humanos, ser el medio de relación entre el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y las organizaciones de la sociedad civil, además de desarrollar programas de sensibilización, coordinación de acciones de promoción, mediación y acompañamiento; asimismo, diseñar materiales e insumos educativos.

Los derechos de los adultos mayores están enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 25; y en el artículo 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al respecto, el Decreto No. 80-96, Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad y sus reformas, Decretos No. 2-97 y 51-98, el reglamento de ésta, Acuerdo Gubernativo 135-2002, tienen por objeto tutelar y proteger a la población adulta mayor, abordando temas como derechos y obligaciones de las instituciones encargadas de su atención, el régimen social y, como parte de éste, la familia, la salud, la vivienda, el medio ambiente, la educación, el trabajo y la seguridad social, creando el Comité Nacional de Protección a la Vejez (CONAPROV) como un comité de alto nivel rector de la Ley.

El Decreto No. 85-2005 Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, y sus reformas, Decreto No. 39-2006 y Decreto No. 25-2009, y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 86-2007, advierten que esta Ley tiene por objeto proporcionar una pensión económica a la población adulta mayor sin cobertura social, que les permita atender en forma mínima sus necesidades básicas, como alimentación, salud física y vestuario. La ejecución de la misma es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, la Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, en su artículo 2, refiere que las personas adultas mayores son una población de especial protección en el ámbito de la Ley; la Ley de Protección para las personas de la Tercera Edad (80-96), sanciona a la misma familia por ejercer violencia, despojo o abandono contra las personas adultas mayores.

Objetivo general

Promover y tutelar el reconocimiento y el respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas adultas mayores, apoyando la construcción de una sociedad más justa, más humana y solidaria.

Objetivos específicos

1. Sensibilizar a los funcionarios públicos y a la sociedad en general para lograr el respeto de las personas adultas mayores.
2. Propiciar espacios de coordinación y enlaces entre instituciones del Estado y de la sociedad civil, para la defensa, promoción y concientización de los derechos humanos de las personas adultas mayores guatemaltecas.
3. Fortalecer y promover los movimientos asociativos de personas adultas mayores, promoviendo una participación activa dentro de la sociedad guatemalteca.

Misión

Ser un ente fiscalizador que brinde atención a las demandas y necesidades que la población adulta mayor requiera ante las instituciones del Estado, promoviendo de esta forma la institucionalización de la temática y la integración dentro de las políticas públicas.

Visión

Apoyar el proceso y la estructura de acciones, programas y políticas públicas que sean transformadoras para lograr la participación, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de la población adulta mayor guatemalteca.

Estructura y organización

La Defensoría del Adulto Mayor depende del Procurador de los Derechos Humanos a través de la Dirección de Defensorías, quien delega en el defensor la representatividad en la defensa y protección de la población adulta mayor guatemalteca, con el apoyo de auxiliares, oficiales y coordinadores de programas.

Son programas específicos de la Defensoría: de monitoreo y vigilancia, de voluntariado “De mayores para mayores”, de relaciones intergeneracionales “Abuelos y abuelas por siempre”, de conversatorios de relaciones intergeneracionales, de coordinación de la mesa de diálogo de organizaciones de y para adultos mayores de pensionados, jubilados y sin cobertura social. Cada programa cuenta con sus líneas específicas de acción en promoción de los derechos humanos; incidencia social, legislativa y política; asesoría; investigación; proyección y labor social, así como asistencia a indigentes.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Cobertura en el ámbito nacional

Los términos adulto mayor, tercera edad, personas de edad, personas adultas mayores son vocablos que en Guatemala se refieren a toda persona de 60 años o más de cualquier sexo, grupo étnico o religión; y está dentro de los grupos vulnerables de la sociedad. La Defensoría del Adulto Mayor tiene bajo su responsabilidad la tutela de los derechos humanos de las personas adultas mayores, especialmente de aquellas que careciendo de protección adecuada sufren o están expuestas a sufrir desviaciones o trastornos en su estado físico o mental y las que se encuentren en situación de riesgo (artículo 3 de la Ley de protección para las Personas de la Tercera Edad).

Problemática enfrentada

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los adultos mayores se localizan 52% en el área urbana y 48% en el área rural, encontrándose en su mayoría en situación de riesgo social, excluidos y privados de oportunidades, debido a la pobreza, falta de oportunidades laborales y desigualdades. No todos cuentan con una pensión, por lo que en un porcentaje bastante elevado se dedican a actividades informales, y los niveles de educación son bajos, afectando más a los que viven en el área rural, donde las mujeres mantienen cifras más altas de analfabetismo que los hombres. Esto se acentúa más por la ideología que prevalece en la sociedad guatemalteca que se llama el “viejismo”, en la cual consideran la vejez como una etapa de decadencia física y mental, y proyecta sobre una imagen de discapacidad, inutilidad social, obsolescencia y rigidez.

Violencia

Los altos índices de violencia que se viven en el país han hecho que este sector de población se vuelva más vulnerable y ha sido objeto de distintos actos de violencia. Las personas adultas mayores están expuestas a distintos tipos de violencia, entre ellos:

Violencia social: son objeto de asaltos, robos, secuestros, agresiones físicas; irrespeto en el transporte urbano por parte de los pilotos y de ayudantes, lo cual va desde no pararles el bus cuando ellos lo requieren, insultos y agresiones verbales, físicas y psicológicas, les quitan el carné de identificación extendido por Gobernación Departamental y les obligan a pagar sus pasajes, a pesar de que la Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad establece la gratuidad del transporte colectivo para personas mayores, llegando al extremo de causarles la muerte por accidentes.

Muertes violentas de adultos mayores: según datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y octubre de 2009 se cometieron 118 homicidios contra personas de la tercera edad: 39.83% falleció por arma de fuego, 14.41% por arma blanca, 11.86% por objetos contundentes, 6.78% calcinados, 4.24% por explosiones, 0.85% por estrangulamiento y de un 22% se desconoce la causa de muerte. Las cifras anteriores confirman que las personas adultas mayores se ven directamente afectadas por el clima de violencia que se vive en el país, sin que exista un programa de prevención y protección contra la violencia hacia esta población. El 68.64% de las personas adultas mayores asesinadas se ubica en el rango de edad de 60 a 71 años.

Homicidios de adultos mayores, según género Enero a octubre 2009

Sexo	Frecuencia	%
Masculino	88	74.58
Femenino	30	25.42
Total	118	100.00

Abuso de poder

El abuso de poder lo ejercen algunos funcionarios o autoridades de gobierno, así como mandos gerenciales en la iniciativa privada que, aprovechándose de su jerarquía, utilizan mecanismos de presión psicológica para desesperar a personas adultas mayores que aún prestan sus servicios laborales para que presenten su renuncia.

Discriminación y maltrato

Según las proyecciones de envejecimiento poblacional en Guatemala (INE-CELADE 2003), en 2025 los adultos mayores llegarán a ser 1,429,230 (7.3 % de la población), y para 2050 la cifra aumentará a 3,625,000 (13 % de la población total). Esto refleja un rápido proceso de envejecimiento, consecuencia de las decisiones antinatalistas de la década de los 60.

Por su vulnerabilidad, los adultos mayores son objeto de discriminación por parte de la sociedad y por la propia familia, lo que lleva a la marginación, impidiéndoles el acceso a los servicios básicos, situación que violenta las garantías y sus derechos específicos.

En la institución del PDH, de enero a octubre se recibieron 336 denuncias sobre violación de derechos humanos de población adulta mayor, en las cuales se establecen los siguientes registros:

Denuncias recibidas por derechos violados

Derecho violado	Denuncias
Maltrato	84
Cobertura social	56
Acceso al programa de Aporte Económico del Adulto Mayor sin Cobertura Social	33
Vivienda	31
Seguridad social	29

Violencia intrafamiliar	23
Trabajo	16
Servicios de salud	15
Negación de acceso a medicamentos	11
Violencia física y psicológica	10
Falta de acceso a servicios de salud	9
Amenazas	7
Discriminación social, cultural, económica, política	6
Trata de personas	5
Abusos deshonestos	1
TOTAL	336

Entre las primeras tres violaciones más frecuentes se encuentra el maltrato, mismo que se genera dentro de la familia, siendo los hijos quienes abusan de los adultos mayores; luego está la falta de cobertura social, lo cual demuestra la dificultad que tienen las personas de la tercera edad para optar a los beneficios que ésta conlleva; así también, la cantidad de denuncias recibidas por falta de acceso al Programa de Aporte Económico de las Personas sin Cobertura Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social demuestra que únicamente se beneficia a una minoría.

Exclusión

Entre los factores que determinan la exclusión en la población adulta mayor están la edad, la falta de voluntad política de los gobiernos para la implementación de una política de atención integral, la apatía generalizada que existe en la sociedad guatemalteca para atender la temática del adulto mayor, y la pobreza.

La mayoría de personas de la tercera edad vive en pobreza y extrema pobreza, derivada de la falta de seguridad económica, ya sea por la carencia de empleo remunerado o por los magros ingresos por jubilación, lo cual repercute en malas condiciones de salud, enfermedades crónicas y degenerativas, y carencia de alimentos. Las mujeres adultas mayores son las que más sufren la exclusión en el área de salud al alcanzar la menopausia, ya que los programas de salud están dirigidos a mujeres en edad reproductiva. Además, un gran número de personas adultas mayores viven solas y en viviendas precarias.

En lo referente a la educación, se les excluye tanto de los programas de alfabetización, como en los niveles de primaria, básicos, diversificado y superior, ya que no existen programas de educación abierta en los que puedan participar.

Arbitrariedad

A pesar de la Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad (Decreto No. 80-96), la cual garantiza los derechos para este sector, existe un sin número de arbitrariedades que se comente en contra de ellos, por ejemplo, el Estado no ha asumido la responsabilidad de crear hogares donde puedan tener una vida digna los adultos mayores desprotegidos y sólo ha permitido que personas particulares abran hogares con fines comerciales, los cuales en su mayoría no reúnen los requisitos mínimos para brindar una atención integral.

Las acciones que se han generado desde la sociedad civil han sido mínimas, en virtud de que las pocas que se han emprendido no han contado con el apoyo y participación de todas las organizaciones de jubilados, pensionados y sin cobertura social, no existe unificación por falta de solidaridad y organización, con lo cual los intereses de este sector de la población no se han podido aglutinar en una alianza que lo beneficie.

A pesar de que el Gobierno ha subsidiado el servicio de transporte urbano en la capital, éste no ha beneficiado a la mayoría de personas adultas mayores usuarias, ya que, por malos tratos y falta de voluntad por parte de los pilotos para brindar este servicio, se ven obligados a cancelar el costo del pasaje.

Por otro lado, la población que cuenta con el beneficio de una pensión o jubilación se enfrenta a la negativa política para incrementar los montos de éstas, lo que no les permite cubrir sus necesidades básicas. Sólo una minoría se beneficia del Programa de Aporte Económico a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

A partir de las supervisiones y monitoreos efectuados en los hogares por la institución del PDH, se estableció que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no realiza ningún tipo de control para establecer el adecuado funcionamiento de los mismos.

Racismo

Las personas adultas mayores pertenecientes a los pueblos indígenas que conforman el país son discriminadas y excluidas en los centros públicos de atención, situación que se acentúa en los servicios de salud, los órganos jurisdiccionales competentes y el Programa de Aporte Económico, no habiendo, en la mayoría de ellos, personal bilingüe que brinde la atención adecuada a este grupo de la población.

Incumplimiento de las obligaciones estatales

El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor sin Cobertura Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 85-2005, no da cobertura a los 333 municipios de la República y no han podido atender la demanda de todas las solicitudes recibidas entre 2006 y 2009, que suman 247,172; hasta el momento sólo está tratando de cubrir los ingresos en 2006, y limitándose a las personas de 80 años en adelante y aquellas que sufren alguna discapacidad.

El Acuerdo Ministerial No.1096-2009, del Ministerio de Salud, establece la atención integral, diferenciada, ordenada y coordinada en el sector de salud pública a manera de brindar asistencia médica preventiva, curativa y de rehabilitación en las consultas externas de los hospitales nacionales, centros y puestos de salud a la población adulta mayor; sin embargo, las clínicas específicas destinadas para este fin aún no han sido habilitadas.

En referencia al Decreto 80-96, Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, se puede mencionar el incumplimiento de aspectos como los siguientes:

- La ley establece el servicio de transporte urbano gratuito, sin embargo, la población adulta mayor es víctima de malos tratos por parte de los pilotos de dicho servicio.
- Se deben crear hogares o albergues temporales por parte de las Gobernaciones Departamentales, en coordinación con las Municipalidades; no obstante, no se ha abierto ninguno.
- La realización de estudios actuariales sobre la situación de la población jubilada y adoptar las medidas necesarias que se adecuen a la realidad derivada de los ciclos económicos que afectan al país, para incrementar las prestaciones económicas sociales; hasta hoy no se ha cumplido, por lo que las pensiones no han sido niveladas a la situación económica actual.
- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no ha promovido programas de reinserción laboral y capacitación empresarial para las personas adultas mayores.
- Incumplimiento de la no discriminación en el acceso al trabajo, además, el Ministerio de Trabajo no cumple con vigilar que cuando los trabajadores sea despedidos, se contemple lo que establece el Código de Trabajo en materia de edades, a razón de no ser forzados a renunciar por motivos de edad.
- El Estado de Guatemala, a través del Comité Nacional de Protección a la Vejez, debe exigir el cumplimiento de la Ley, sin embargo no ha habido mayor avance, ya que dicho Comité no ha promovido convenios con la iniciativa privada para que los adultos mayores cuenten con descuentos especiales en compra de medicina, transporte, hospedaje y alimentación, ingreso a centros culturales y turísticos, artículos de canasta básica, electricidad y agua potable.

- El Comité Nacional de Protección a la Vejez no ha realizado ninguna acción concreta, durante el año, a favor de la población adulta mayor; por otro lado, los cambios de dirección en el PRONAM no han permitido que se establezca una junta directiva con fines específicos.
- Las personas adultas mayores beneficiarias del Programa Nacional del Adulto Mayor fueron afectadas en situaciones como las siguientes: suspensión de actividades de cocina, manualidades y servicios en las instalaciones de la zona 1, por ser trasladadas al centro de Día de la zona 6, lo cual les perjudica por tiempo, recursos económicos e inseguridad; suspensión de la bolsa de víveres Y retiro definitivo de éstas para aquellas personas que son beneficiarias del Programa del Aporte Económico.

Investigaciones

La Defensoría del Adulto Mayor, en coordinación con la Mesa de Diálogo de Organizaciones de y para adultos mayores de Pensionados Jubilados y sin Cobertura Social emitieron un documento denunciando los aspectos que afectan el equilibrio financiero de los regímenes de previsión en nuestro país, lo que se dio a conocer a través medios de comunicación.

Monitoreos y supervisiones

- Se realizó monitoreo institucional, en coordinación con el área de supervisión administrativa y Auxiliaturas Departamentales, a los centros de atención a la población adulta mayor con el fin de establecer las condiciones cuanto a habitabilidad, funcionamiento y trato; se cubrieron diez centros en el departamento de Guatemala y 11 en el interior de la República (Quiché, Baja Verapaz, Suchitepéquez, Izabal, Quetzaltenango Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula y Petén).
- Veinte supervisiones a hogares o centros de atención y tres centros de atención de día que funcionan por donación o de forma privada, ubicados en el departamento de Guatemala, con el objetivo de verificar las condiciones de habitabilidad, atención y programas dirigidos a la población que atienden. Se estableció que la mayoría de ellos carece de las condiciones mínimas y que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es el ente rector, no los supervisa.
- Monitoreo a los Centros de Atención Médico Integral para Pensionados (CAMIP), estableciéndose que en el de Pamplona, zona 13, continúa la mala atención de los beneficiarios y las instalaciones son insuficientes para la cantidad de usuarios, aunque las autoridades han trasladado a aproximadamente 5,500 personas adultas mayores al CAMIP Barranquilla, zona 5. Al realizar la supervisión a CAMIP Barranquilla, se verificó la atención a 5,500, con citas escalonadas cada dos meses, los pacientes llegan 40 minutos o media hora antes de la misma y son atendidos en seis clínicas de enfermedad común y nueve de subespecialidades.
- Supervisión a la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios para establecer si cuenta con una clínica específica destinada a la asistencia médica preventiva, curativa y de rehabilitación para adultos mayores; el director de dicho centro hospitalario indicó que el incumplimiento se debe a cuestiones presupuestarias.

Denuncias

Durante el presente año se ha incrementado el número de adultos mayores que se acercaron a esta Defensoría con el fin de exponer su problemática tanto en el ámbito social y familiar, quienes requirieron orientación y asesoría, y en algunos casos el traslado al Área de Recepción y Calificación de Denuncias para la apertura del expediente respectivo. Entre los casos trasladados hay por maltrato económico y patrimonial, maltrato físico, maltrato psicológico, negación de acceso a los servicios de salud y medicamento, y violación al derecho a ser beneficiarios del aporte económico.

LOGROS

La institución del PDH, a través de la Defensoría del Adulto Mayor, coordinó con el Ministerio de Educación para que el programa “Abuelos y Abuelas por Siempre” se implementara dentro del área de Formación Ciudadana del Currículo Nacional Base, en los niveles de preprimaria y primaria, para lo cual se estableció en la agenda escolar, en julio, la Semana de Abuelas y Abuelos por Siempre, en los centros educativos públicos y privados de toda la República.

El Congreso de la República, mediante el Decreto 25-2009, declaró el 15 de noviembre Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

ACTIVIDADES

Promoción de los derechos humanos

- Diez conversatorios de relaciones intergeneracionales, con el objetivo de sensibilizar a adolescentes y jóvenes de nivel básico y diversificado, en centros educativos públicos y privados en el área metropolitana, contando con la participación de 1,605 estudiantes.
- Implementación del programa “Abuelos y Abuelas por Siempre” dirigido a estudiantes del nivel preprimario y primario, en coordinación de las Auxiliaturas Departamentales y el Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer las relaciones familiares y rescate de valores, costumbres y tradiciones, contribuyendo con ello al fomento de la solidaridad y el respeto entre la niñez y las personas adultas mayores.
- Capacitación del personal de la Dirección Departamental de Educación, coordinadores de regiones, supervisores y directores de las diferentes zonas y municipios del departamento de Guatemala, sobre el programa escolar intergeneracional Abuelos y Abuelas por Siempre.
- Capacitación y sensibilización a directores y personal que labora en hogares de atención para adultos mayores de toda la República, en coordinación con PRONAM.
- Una capacitación dirigida tanto al personal que labora como a las personas adultas mayores que asisten al centro de día de Mixco y zona 6. Se coordinó con las Auxiliaturas Departamentales en cuya jurisdicción funcionan centros de día para la realización de estas capacitaciones.
- Dos capacitaciones en EPS, dirigidas a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social y de Psicología de la Universidad de San Carlos.
- Capacitaciones a las integrantes del Voluntariado de Mayores para Mayores.
- Capacitación en la temática del adulto mayor al personal que integra la Unidad de Salud de esta institución.
- Capacitación sobre derechos humanos y mecanismos de protección a las personas adultas mayores, grupo de coordinadoras de apoyo familiar por la excelencia, quienes son líderes comunitarias de la Municipalidad de Guatemala.
- Información sobre los derechos del adulto mayor y mecanismos de protección a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar.
- Atención a estudiante de nivel diversificado que se encontraban realizando su estudio de seminario en el tema de adulto mayor.
- Información sobre derechos del adulto mayor a personal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, para la elaboración de un manual para la atención de personas adultas mayores privadas de libertad, mismo que fue utilizado para capacitar al personal del sistema penitenciario.
- Se concedieron entrevistas a los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, como *Nuestro Diario*, *La Hora*, *Siglo XXI*, *El Periódico*, *Prensa Libre*, *Diario de Centro América*, Emisoras Unidas, Radio Universidad y Noticiero Maya Cable de Cobán, programa de la Escuela de Trabajo Social en la Radio Universidad, Tele Centro 13, Telediario, Guatevisión; así como participación en programa de televisión del canal 84.

- Capacitación a adultos mayores que asisten al centro de día que funciona en la iglesia San Jerónimo Emiliani, zona 6 capitalina, con la participación de 65 adultos mayores.
- Acto sociocultural en el marco de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor.
- Capacitación a las integrantes del Voluntariado de Mayores para Mayores sobre la importancia de pertenecer al mismo.

Protección de los derechos humanos

De acuerdo con los derechos de las personas adultas mayores establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Ley de Protección de las Personas de la Tercera Edad, en la Ley del Programa del Adulto Mayor y en Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, esta Defensoría impulsó varias acciones a favor de adultos mayores que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Internas

- Se solicitó a la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la institución del PDH el apoyo para atender cuatro casos de personas adultas mayores que se encontraban recluidas en el IGSS y el Hospital General San Juan de Dios, con el fin de que en dichos centros se garantizara el respeto a sus derechos humanos.
- Al Área de Recepción y Calificación de denuncias se remitieron 23 denuncias para apertura de expedientes.
- A las Auxiliaturas Departamentales de Santa Rosa, Jalapa, Quetzaltenango, Izabal y Chimaltenango se remitieron denuncias y se solicitó apoyo para solicitar partidas de nacimiento de personas adultas mayores que por impedimentos físicos no podían hacer el trámite respectivo.
- Acompañamientos a adultos mayores para garantizarles el respeto de sus derechos en las siguientes instituciones: Banco de los Trabajadores, Citibank, Vacations Club, Empresa Eléctrica de Guatemala, Registro de la Propiedad, Bufete de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Bufete de la Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Jubilados del INDE.
- Coordinación con la Auxiliatura de Jalapa de acciones a favor de adulto mayor no vidente de esa jurisdicción.
- Se remitió a la Auxiliatura de Quiché caso de denuncia presentada a esta Defensoría de una adulta mayor residente en esa cabecera municipal, víctima de violación de sus derechos humanos.

Externas

- Siete coordinaciones con la Procuraduría General de la Nación, en las que se solicitó su intervención en casos de personas adultas mayores que se encontraban en situación de riesgo o vulnerabilidad, para que fueran ubicadas en hogares, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
- Requerimiento de información sobre 33 expedientes de adultos mayores ante el Programa de Aporte Económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de conocer el estado de los mismos, y así poder brindar una mejor orientación sobre el proceso en el que se encontraban.
- Al Programa Nacional del Adulto Mayor (PRONAM) de la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (SOSEP) se remitieron tres casos para que pudieran optar a la bolsa de víveres que dicho Programa entrega a las personas adultas mayores en extrema pobreza.
- Ante el IGSS se realizaron acciones en seis casos de personas adultas mayores, sobre problemas en la acreditación de planillas del patrono ante dicha institución, asimismo, por negación de pensión debido a falta de documentación, o por presentación de supervivencia de forma extemporánea.
- Se gestionó ante el CONAPROV el pronto análisis de la política pública y el protocolo de atención a adultos mayores en las unidades de salud.
- Se gestionó ante EMETRA para que se incluya en la capacitación de pilotos de taxis y de transporte urbano la temática de derechos humanos de las personas adultas mayores.
- Se planteó ante EMETRA que en la tarjeta prepago que está por implementarse para el transporte urbano se incluya la gratuidad del pasaje para adultos mayores, tal como lo establece la Ley.

- Reunión con CONAPROV para propiciar un acercamiento con la Mesa de Diálogo de Organizaciones de Pensionados y Jubilados y sin Cobertura Social.

Procuración y control administrativo

- Monitoreo al hogar San Vicente de Paúl, ubicado en la zona 5 de esta capital, para darle seguimiento a una denuncia presentada.
- Coordinación con la Unidad de Supervisión Administrativa para verificar denuncia relacionada con adulto mayor recluido en el centro de recuperación alcohólica Zoila Esperanza, en la zona 7.
- Supervisiones y monitoreos a hogares de atención a personas adultas mayores, ubicados en el departamento de Guatemala, con la participación del personal de la Defensoría del Adulto Mayor, cubriendo los siguientes hogares: San Vicente de Paúl, zona 5; Casa de Misericordia, Mixco; Casona de los Abuelos, Mixco; Padre Ramón, zona 7; La Sagrada Familia, zona 1; Santo Domingo, zona 1; De Mujeres San Vicente de Paúl, zona 1; La Tercera Edad, zona 11; El Sauce, zona 2; Santa Lucía, zona 1; Los Milagros, zona 1; Santa Luisa de Marillac, zona 2; Orden de Hermanos de Belén, zona 1; De la Tercera Edad Los Geranios, zona 1; De la Tercera Edad El Samaritano, zona 1; Amor, zona 1; San Lucas I, zona 2; Hospital de Ortopedia y Rehabilitación Vonn Ahn, zona 1; Shaloom, zona 1; y Mis Años Dorados, zona 1.
- En coordinados con el Área de Control Administrativo se supervisaron a los siguientes hogares: Emmanuel, zona 19; Tiempos Maravillosos, zona 7; Residencia Club de los Años Dorado, zona 11; Day & Night, zona 9; Hogar Rey David, zona 13; Villa Sol, zona 12; Residencia Tercera Edad Centro Médico Militar Monja Blanca, zona 16; San Vicente de Paúl, zona 18; Juan Pablo II, Mixco; y San Esteban, San Miguel Petapa.
- Con las Auxiliaturas Departamentales se supervisaron los siguientes hogares: De Ancianos Sor Herminia, Santa Cruz del Quiché; Joaquín Mendizábal, Salamá, Baja Verapaz; San Vicente de Paúl, Mazatenango, Suchitepéquez; San Francisco de Asís, Puerto Barrios, Izabal; San José, Quetzaltenango; El Amparo de San José, Huehuetenango; Fray Rodrigo de la Cruz, Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Santa Lucía, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; Santo Hermano Pedro, Casillas Nueva Santa Rosa, Santa Rosa; La Voz del Próximo, San José la Arada, Chiquimula; y Asilo Dulce Refugio, San Benito, Petén.

Asesoría y seguimiento de casos

- Cuatro asesorías a las asociaciones de y para adultos mayores, entre las que se encuentran: Asociación de Jubilados del INDE, Asociación de Militares Especialistas Retirados del Ejército de Guatemala y Asociación de Pensionados de Guatel.
- 39 asesorías a personas que se acercaron a esta Defensoría, sobre diferentes violaciones de sus derechos humanos, a quienes se les orientó sobre los procesos a seguir y en algunos casos se les proporcionó acompañamiento a instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Asesoría a grupo de vecinos de Tiquisate, Escuintla, sobre la creación de un hogar de atención para adultos mayores, en cuanto a requisitos y trámites.
- Asesoría a trabajador de la Universidad de San Carlos para la presentación de un proyecto dirigido a la creación de espacios para adultos mayores dentro de la Facultad de Psicología.
- Asesoría a estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos, quienes estaban realizando su EPS en el hogar Nuestra Señora de Guadalupe, sobre atención de casos y capacitaciones en la temática del adulto mayor.
- Asesoría a instancias gubernamentales en derechos y leyes de las personas adultas mayores, entre las que se encuentran: Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y Programa de Escuelas Abiertas de Mi familia Aprende, del municipio de Palencia.
- Asesoría a personal de la organización no gubernamental CAT, en el municipio de San Cristóbal, Alta Verapaz, con el fin de crear un centro de atención a la población adulta mayor en dicho municipio.
- Acompañamiento a cuatro personas adultas mayores para interponer un amparo verbal ante la Corte de Constitucionalidad.

- Acompañamiento a una persona adulta mayor al Hospital General San Juan de Dios, quien fue atendida.
- Acompañamiento a un señor de la tercer edad al Ministerio de Trabajo y la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, para verificar la situación de su proceso.

Incidencia social

Se han hecho gestiones en la búsqueda del reconocimiento en la sociedad guatemalteca de la población adulta mayor, entre las que se encuentran:

- Reuniones con seis asociaciones de jubilados, pensionados y sin cobertura social, con el fin de que las mismas pudieran integrarse al trabajo de la mesa de diálogo.
- Reunión con personal del Instituto de Previsión Militar, con la participación de la mesa de diálogo de organizaciones de y para adultos mayores, para conocer la situación de los jubilados especialistas retirados del ejército.
- Reunión con el Sacerdote de la iglesia Corpus Christi, para promover la creación de la Pastoral del Adulto Mayor dentro de la misma, con el fin de empoderar a la población de ese sector en la vigilancia de sus derechos humanos.
- Acercamiento con la iglesia evangélica Mi Refugio, con la que se coordinaron dos programas de televisión en los que se dieron a conocer las funciones, objetivos y programas de la Defensoría y los derechos de las personas adultas mayores
- Reuniones con la Mesa de Diálogo de Organizaciones de Pensionados, Jubilados y sin Cobertura Social.
- Reunión con autoridades de EMETRA, con el objetivo de verificar acciones a favor de la población adulta mayor usuaria del transporte urbano.
- Reunión con la Asociación de Adultos Mayores Notables (AMANO) con la finalidad de invitarlos a participar en la mesa de diálogo.
- Reunión con autoridades del INE para establecer la situación laboral de los adultos mayores que se encuentran actualmente prestando sus servicios en esa institución.

Incidencia política

La Defensoría del Adulto Mayor coordina la Mesa de Diálogo de y para adultos mayores, la cual está conformada por organizaciones de la sociedad civil de jubilados, pensionados y sin cobertura social; actualmente se analiza el Decreto 80-96, con el que se pretende generar una propuesta de reformas a la misma. También se realizó un análisis a la Propuesta de Política Pública, con el fin de que el Estado de Guatemala la valide y mejore las condiciones de vida de la población adulta mayor. Como seguimiento a estas acciones, se realizaron las siguientes gestiones:

- Reunión con la directora de Atención al Consumidor, a quien se le solicitó apoyo para coordinar acciones en la búsqueda del cumplimiento del Decreto 80-96, en relación con el descuento en los productos de la canasta básica.
- Reunión con la jefa de EMETRA, con el fin de dar seguimiento a las acciones emprendidas referentes al transporte urbano y el beneficio de la gratuidad para las personas adultas mayores, se llegó al acuerdo de coordinar capacitaciones dirigidas a los pilotos de taxi y del transporte urbano, en la temática.
- Reunión con el director de la consulta externa del Hospital San Juan de Dios, con el fin de conocer la implementación de la clínica de atención integral de la persona adulta mayor, la cual debe ser creada según el Acuerdo Ministerial 1096-2009.
- Reunión con personal del INGUAT, con el objetivo de promover la creación de políticas de turismo en beneficio de la población adulta mayor.
- Reunión con la gobernadora departamental de Alta Verapaz, para identificar el apoyo del aporte económico para la población de este departamento, así como conocer los municipios y cantidad de personas que han sido beneficiadas con dicho programa, además, conocer el proceso de entrega de carnés y la construcción de un asilo de ancianos en coordinación con la Municipalidad y la Asociación Casa Hogar del Anciano.

- Reunión con el alcalde municipal de San Cristóbal Verapaz, con el fin de conocer la situación de los adultos mayores en dicho municipio, y la construcción de un hogar en el mismo.

Incidencia legislativa

- Acompañamiento a la Coordinadora Nacional de Jubilados del Estado en marcha de protesta, quienes tenían el fin de apoyar la propuesta de reformas a la Ley de Clases Pasivas del Estado, Decreto No. 66-88, registro número 4121, control de iniciativas.
- Acompañamiento a grupo de personas adultas mayores beneficiarias del Programa Nacional del Adulto Mayor (PRONAM), quienes manifestaron su inconformidad por la suspensión del aporte consistente en una bolsa de víveres por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

PROYECCIONES PARA EL 2010

- Ampliación de la mesa de diálogo de organizaciones de y para adultos mayores en tres departamentos de la República, la cual se pretende esté conformada por organizaciones de pensionados, jubilados y personas sin cobertura social, para que se generen propuestas de políticas en beneficio de la población adulta mayor de cada departamento, así como la vigilancia y control de las instituciones que por ley deben promover beneficios hacia ellos.
- Ampliación del Voluntariado de Mayores para Mayores en dos municipios del departamento de Guatemala.
- Realización de dos conversatorios de relaciones intergeneracionales en dos municipios del departamento de Guatemala.
- Capacitación al personal médico y de enfermería de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt.
- Festival “Canto por los Derechos Humanos de los Años Dorados”.
- Formación de una mesa de diálogo de directores de centros de atención al adulto mayor.

Defensoría del Debido Proceso y Recluso



Defensoría del Debido Proceso y Recluso

Creada mediante el Acuerdo número 15-98 de fecha 18 de marzo de 1998 por el Procurador de los Derechos Humanos; inicialmente estaba dividida en dos: Defensoría del Debido Proceso y Defensoría del Recluso, pero hacia 1999 se fusionaron en una sola. Actualmente, la Defensoría del Debido Proceso y Recluso atiende el aspecto procesal y el relativo al sistema penitenciario, en donde se trabaja con personas que tienen sentencia firme debidamente ejecutoriadas o procesadas. El quehacer de la Defensoría se enmarca en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de los Derechos Humanos (Decretos 54-86 y 32-87) del Congreso de la República de Guatemala.

Organización

Está conformada por el defensor o jefe de la unidad, dos auxiliares de defensoría y una secretaria, y oficiales del debido proceso en algunas Auxiliaturas Departamentales.

Objetivo general

La Defensoría del Debido Proceso y Recluso pretende tutelar los derechos fundamentales de las personas sujetas a un proceso penal o en cumplimiento de pena de prisión, brindando apoyo irrestricto a víctimas del delito en sus demandas de justicia ante las instancias judiciales.

Objetivos específicos

El fin primordial de la Defensoría es la fiscalización de la administración pública y la observancia de los derechos inherentes a la persona humana, así como la protección de grupos vulnerables dependientes de la administración pública, a través de programas de capacitación inherentes al tema del debido proceso y recluso.

Funciones de la Defensoría

1. Proteger los derechos humanos de las personas sujetas a proceso penal o con sentencia firme. Canalizar a la unidad correspondiente las violaciones que le sean sometidas a su conocimiento.
2. Velar porque las autoridades, tanto judiciales como penitenciarias encargadas de cumplir la ley, observen y cumplan con su deber y se sujeten al ordenamiento nacional e internacional.
3. Realizar supervisiones constantes a instancias de gobierno con el objetivo de supervisar su actuar y hacer los pronunciamientos requeridos para el efecto.

Atribuciones

1. Velar por el cumplimiento de las normas prescritas en la Ley del Procurador de los Derechos Humanos en lo relativo al trabajo a desarrollar.
2. Aplicar, a través de la ley constitutiva de la institución, nuestra Constitución Política de la República en relación con los derechos contemplados en el Título 1, Capítulo Único, artículos 1 y 2, y Título II, Derechos Humanos, Capítulo 1, Derechos Individuales (artículos del 3 al 16).

Misión

Lograr la observancia y aplicación de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, esencialmente en las normas procesales y penitenciarias.

Visión

Permitir, a través del trabajo de la Defensoría, la sensibilización de la sociedad en lo concerniente al debido proceso y recluso en temas atinentes a su quehacer, aplicando conocimientos especializados sobre la materia.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Cobertura en el ámbito nacional

La Defensoría del Debido Proceso y Recluso tiene su sede en la ciudad capital, cubriendo el departamento de Guatemala, en donde están asentadas instituciones o instancias relacionadas con el quehacer de la Defensoría, entre ellas: el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario. A nivel departamental, el auxiliar representa al Procurador de los Derechos Humanos y los oficiales se ocupan de otras áreas como procuración, mujer, niñez y adolescencia, recluso y otros temas sensibles o de poblaciones vulnerables.

Problemática enfrentada

La problemática que se trabaja en lo concerniente al debido proceso de las personas privadas de libertad es: dilación en los procesos; agilizar, a través de gestiones verbales y escritas, la tramitación de los procesos o acompañar a las personas en sus peticiones, especialmente víctimas de delito. En relación con personas sujetas a proceso o sentenciadas que se encuentran en etapa de ejecución, se tramitan beneficios de carácter penitenciario y también se realizan monitoreos y fiscalizaciones para establecer condiciones de reclusión y respeto de derechos fundamentales.

Violencia

En el ámbito penal y penitenciario se ha detectado violencia desde el momento de la aprehensión por parte de algunas autoridades policíacas, castigándoseles por la vestimenta, principalmente jóvenes que ya tienen antecedentes o son reincidentes. Los procesados y condenados sufren violencia por parte de los encargados del sector o pabellón, específicamente si son de reciente ingreso, pues son despojados de sus pocas pertenencias o ultrajados, exigiéndoles dinero a cambio de no ser golpeados.

Abuso de poder

Éste se da por parte de algunas autoridades penitenciarias, ya que no se ha logrado retomar el poder en las cárceles del país en donde privados de libertad lo ostentan incondicionalmente. Aunado a esto, algunos alcaides o jefes de seguridad se relacionan con encargados de centros penales para lograr traslados injustificados de personas, muchas veces trabajadoras que pierden pequeños negocios o talleres de artesanías, con el agravante de que los traslados se efectúan sin orden de juez competente, quien es el último en enterarse de estos hechos; además, estas personas muchas veces son consignadas por aparentes hechos delictivos, que a la postre agravan su situación jurídica y generalmente no tienen abogado defensor, o no lo conocen por no tener comunicación con ellos.

Discriminación

Entre la población que atiende la Defensoría del Debido Proceso y Recluso también se da este fenómeno, tanto en instancias judiciales como en el propio Ministerio Público, y aún más en el Sistema Penitenciario, pues se considera a los privados de libertad como personas indeseables o marginados de la sociedad, y en las prisiones, por su condición de pobreza o por ser indígenas; y los que cometen delitos de índole sexual son cuestionados por sus mismos compañeros de reclusión.

Maltrato

Este fenómeno se comete durante las capturas policíacas y allanamientos, aún en presencia del Ministerio Público, dándose también estas situaciones en centros preventivos y de cumplimiento de condena, lo cual se conoce por denuncias de algunos privados de libertad. En octubre de 2009 se recibieron denuncias de maltrato verbal y corporal por parte de guardias de seguridad del Sistema Penitenciario en el Centro de

Máxima Seguridad Fraijanes II, quienes ocultan sus rostros con pasamontañas. También se da en sectores indígenas, que en su mayoría no hablan el castellano.

Exclusión

Afecta a las poblaciones de personas privadas de libertad, y aún en la vida cotidiana de la sociedad, ya que de todas las poblaciones que atiende la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), una de las que más sufre exclusión es la población reclusa, ya que por el hecho de ser recluso es un estigma o etiqueta; aún antes de ser presentados ante la autoridad competente para ser indagados, los medios de comunicación los presentan como posibles autores, contraviniendo lo preceptuado por artículo constitucional (13).

Arbitrariedad

Se realiza comúnmente por autoridades menores, encargados de sector carcelarios y alcaides, con privados de libertad que carecen de recursos económicos, pues quienes los poseen no tienen problemas ni de ubicación ni de permanencia, mucho menos sufren malos tratos.

Racismo

Este problema se da más en el interior de la República, principalmente con agricultores o campesinos y personas que sólo hablan idiomas mayas, lo que les imposibilita comunicarse. A estos grupos se les tilda de sucios o inferiores. Esto también se observa en la cárcel de mujeres denominada COF, que es un centro de cumplimiento de condena y en donde existen casos concretos entre una persona ladina y otra que no conoce el castellano.

Incumplimiento de las obligaciones estatales

Un grave problema que enfrentan la mayoría de personas sentenciadas lo constituye la falta del reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario (Decreto No. 33-2006), pues se han elaborado varios proyectos y en la actualidad se tiene otra que está siendo consensuada por autoridades penitenciarias y de gobernación, pero que no permite la implementación de la Ley, pues aún no se aprueba y prácticamente da lugar a arbitrariedades en las prisiones, ya que se debe operatizar la Ley del Régimen Penitenciario.

Resarcimiento

A pesar del precepto constitucional que permite indemnización por parte del Estado por daños ocasionados y aunque la Corte Suprema de Justicia ordene su inmediato cumplimiento, hasta el momento no se conoce de ninguna indemnización.

ACCIONES EMPRENDIDAS

Acompañamientos

- Once acompañamientos al Ministerio Público o a los tribunales de Justicia. En relación con el Ministerio Público, en audiencias conciliatorias para evitar su envío a los tribunales, es decir, lograr la desjudicialización de los casos; y a los Tribunales de Justicia, en audiencias de revisión de medidas de coerción, indagatorias o aperturas de juicio.

Monitoreos

- Dieciocho monitoreos a centros preventivos y de condena para constatar las condiciones de reclusión carcelaria, que incluyen situaciones de salud o de alimentación.

Supervisión

- Tres supervisiones (12, 13 y 16 de marzo): dos en la capital y la última en Quetzaltenango, enfocadas a la labor que desarrollan los Juzgados Primero y Segundo de Ejecución Penal en la capital, y Tercero en la ciudad de Quetzaltenango, para verificar el trabajo de oficiales y la aplicación de beneficios penitenciarios como libertades condicionales, libertad por buena conducta, perdones judiciales etcétera.
- Además, se verificó, en la última semana de octubre, la supervisión de los jueces de ejecución (1°. 2°. y 3°.) sobre temas de verificación de condiciones en centros penales (inspectores), el tema de la pena de muerte, privilegios, clasificación, libertad inmediata, trabajo, ayuda postpenitenciaria, y el apoyo a la Unidad Contra la Impunidad, relacionado con la situación jurídica en centros penales preventivos y de cumplimiento de condena que se verificaron en septiembre de 2009.
- Durante diciembre se efectuaron aproximadamente 30 entrevistas a privados de libertad en la Cárcel de Máxima Seguridad Fraijanes II, a fin de determinar las condiciones carcelarias de las personas ahí recluidas, ya que existen numerosas denuncias sobre malos tratos, amenazas, falta de utensilios para la higiene, así como ropa inadecuada al clima y, lo más grave, falta de medicamentos. En dicho centro se encuentran personas privadas de libertad por delitos de impacto, tales como secuestro, asesinato, violación, extorsión, etcétera. Además hay miembros de las pandillas MS y Mara 18.

Denuncias

Las denuncias se canalizan a través del Área de Recepción y Calificación de Denuncias, que es la vía para su ingreso o recepción, donde se levanta el acta correspondiente y posteriormente se pide el apoyo de la Defensoría del Debido Proceso y Recluso; además, a lo largo de cada mes se recibe en la unidad un promedio de más de diez denuncias.

Casos más importantes

Entre los casos que merecen ser expuestos por la Defensoría, destacan las acciones a favor de personas privadas de libertad enviadas al centro Fraijanes II constituido en cárcel de máxima seguridad, quienes se encuentran sufriendo tratos crueles o infamantes, como lo son violaciones a su dignidad e igualdad, pues hay restricciones a sus necesidades mínimas, prohibición de visitas, encomiendas y, lo más grave, prohibición de verificar las condiciones carcelarias, ya que ese recinto funciona tanto como centro preventivo como de condena, lo cual riñe con el artículo 10 constitucional que señala que las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinadas para el efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas. Las autoridades y sus agentes que violen lo dispuesto en el presente artículo, serán personalmente responsables.

Entre las acciones más importantes se encuentran la incorporación de la Defensoría a la mesa relativa al Acuerdo Nacional de Seguridad (dentro del cual se encuentra el eje penitenciario), conjuntamente con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, el Sistema Penitenciario. Actualmente se busca trabajar en la Comisión de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (CARP), para la discusión y formulación de propuestas encaminadas a buscar soluciones de la problemática penitenciaria.

ACCIONES EMPRENDIDAS

Promoción de los derechos humanos

- Dotación de material de apoyo a las Auxiliaturas Departamentales como trifoliales, *Observatorio de cárceles*, materiales sobre tortura, discos compactos, etcétera, con temática relativa al debido proceso y penitenciario.
- Participación en el primer curso propedéutico penitenciario en el tema de ejecución penal, donde se abordaron los derechos y deberes de los reclusos.

- Se iniciaron conversaciones con la Oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, dándole a conocer el trabajo de la Defensoría.
- Comunicación con la oficina de prensa, la cual concedió una entrevista que sería difundida en toda la República, en relación con el tema que se trabaja; asimismo, se realizó una entrevista para la revista Domingo en el tema penitenciario, en relación con la desigualdad en el juicio y el castigo que se le da a las personas de escasos recursos, las cuales muchas veces son castigadas por la pobreza y no por el delito.
- Trabajo sobre el tema penitenciario con la Defensoría del Pueblo de Panamá y Costa Rica, en relación con la atención a connacionales detenidos en esos países.
- Se dio a conocer el trabajo de la Defensoría en el ámbito centroamericano, abordando temas emblemáticos (caso Pavón) durante un evento celebrado en Panamá en julio, en el cual también participaron Belice, El Salvador y Costa Rica.
- Participación en el Congreso de la Salud con la ponencia “Derecho a la Salud en los centros penales”.

Protección de los derechos humanos

- Aunado al trabajo propio de la Defensoría, se han realizado cerca de 105 acciones, entre ellas acompañamientos, visitas, verificaciones, reuniones de trabajo, gestiones ante diferentes instancias, presencia, entrevista, mediaciones y monitoreos.
- Apoyo al Área de Recepción y Calificación de Denuncias, para velar por el respeto y protección de los derechos humanos de víctimas del delito ante las diferentes instancias y en los propios centros, tanto en el debido proceso como en el ámbito de poblaciones vulnerables, así como en la protección de menores que ingresan a recintos de adultos.
- Seguimiento al tema de sensibilización a víctimas del delito, coordinando actividades con la Unidad de Planificación, Auxiliaturas y Dirección de Defensorías.

Procuración y control administrativo

- Esta actividad se realiza semanalmente ante las instancias relacionadas con el quehacer de la Defensoría, como Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal (en el cual se participa en el Consejo con relación a las políticas del mismo) y Dirección General del Sistema Penitenciario; en temas puntuales como denuncias de posibles violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad, efectuando actividades de procuración ante denuncias remitidas por el Área de Recepción y Calificación de Denuncias y que forman parte de expedientes de investigación, los cuales en su momento darán lugar a recomendaciones o censuras por parte de la institución del PDH.

Control administrativo

- El control administrativo se refiere a temas de ejecución penal, específicamente falencias en el desarrollo del trabajo de los oficiales de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Ejecución Penal para determinar, a través de una boleta o encuesta, el control sobre cada una de sus mesas en relación con beneficios penitenciarios, como libertad anticipada, libertad condicional, libertad por buena conducta, trabajo extramuro, perdón judicial y, por otro lado, conmutas, penas suspendidas, etcétera.
- Monitoreo a los jueces de ejecución sobre el control de la pena que deben observar en las cárceles de cumplimiento de condena, así como temas de condenados a muerte, privilegios en prisión, la clasificación, los privilegios, temas de salud, entre otros.
- Durante este año la Defensoría del Debido Proceso apoyó a la Unidad Contra la Impunidad en el tema de situación jurídica, ya que en el desarrollo de dicha fiscalización se observó que muchos privados de libertad se encuentran ya ejecutoriados permaneciendo en centros preventivos, contraviniendo el artículo 10 de la Constitución Política de la República. Este tipo de fiscalizaciones permitirán subsanar varios problemas tanto en el Organismo Judicial como en el Sistema Penitenciario. Lo más importante es hacer conciencia en los oficiales y operadores de justicia de que deben desarrollar un trabajo eficaz y transparente en el trabajo que desempeñan y evitar la corrupción de muchos de sus elementos.

- Visitas a los juzgados Primero y Segundo de Ejecución Penal y Tribunales de Instancia, Corte de Apelaciones, Cámaras de Amparo de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad.
- Apersonamiento en las cárceles de mujeres, tanto preventivos como de condena, y cárceles de varones tales como Preventivo de Hombres de la zona 18, anexo “B”, Pavoncito, Pavón, Fraijanes I y II (máxima seguridad), habiéndose realizado también verificación en agencias del Ministerio Público, como la de Delitos Contra la Vida, y la agencia internacional que verifica asuntos en el extranjero, solicitando informes de expedientes.
- Apoyo al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en el llenado de boletas y entrevistas a privados de libertad en el trabajo del *Observatorio de Cárcenes 2009*, que proporciona datos importantes en relación con la actual situación penitenciaria, para determinar avances o retrocesos en dicho campo.

Acompañamiento

- Apoyo legal a dos ciudadanos ecuatorianos sindicados de lavado de dinero y se solicitó el apoyo del Consulado, brindándosele también ayuda durante su etapa de aislamiento.
- Apoyó a las unidades de Acuerdos de Paz y Trata de Personas durante las semanas de sensibilización respectivas. Con la primera unidad se trató el tema de reformas constitucionales, y con la segunda, derecho de las víctimas de trata de personas.

Actividades realizadas por la Defensoría

Actividad	Cantidad
Acompañamientos	11
Visitas	18
Verificaciones	21
Reuniones	12
Gestiones	9
Presencia	9
Entrevistas	16
Mediaciones	4
Monitoreos	5
Total	105

Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor



Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor

La Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor fue creada el 1 de junio de 2006, mediante el Acuerdo SG-49-2006, debido al grave deterioro ambiental y a la falta de organización de los sectores social de la población guatemalteca y el desconocimiento de sus derechos como consumidores y usuarios.

El contenido del acuerdo de formación de la Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor está basado en lo que establecen los artículos 13, 14, 18, 20 y 21 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, y sus reformas contenidas en los Decretos No. 54-86 y No. 32-87 del Congreso de la República; 5o, 6o, y 25, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos; y en las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor (en su versión ampliada de 1999). La Defensoría depende directamente del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) a través de la Dirección de Defensorías.

Misión

Dar cumplimiento al mandato constitucional y al acuerdo de creación de la Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor, contribuyendo al bienestar y buena calidad de vida de toda la población guatemalteca, propiciando un ambiente sano y libre de toda clase de contaminación.

Proteger los derechos de los consumidores y usuarios, facilitando la solución de conflictos en materia de consumo, acercando los servicios, profundizando la vigilancia de los proveedores, promoviendo la educación y la participación ciudadana y coordinando la acción conjunta con instituciones del Estado, manteniendo la supervisión, asesoría, control, acompañamiento y seguimiento a la administración pública, para contribuir a un mejor funcionamiento del mercado.

Visión

Propiciar en los guatemaltecos acciones precisas para lograr una sociedad en la que las personas tengan igual acceso a un ambiente sano, equilibrio ecológico, a la conservación de los recursos naturales, el respeto al patrimonio cultural y servicios seguros y sostenibles. Una sociedad en la que puedan ejercer sus derechos individuales como personas consumidoras y usuarias, y puedan defender sus intereses colectivos. Una sociedad donde el consumo pueda servir como elemento de integración social y coadyuve con el desarrollo personal y armónico de sus ciudadanos en el contexto de una sociedad de consumo más libre, justa y solidaria.

Objetivo general

Promover, fiscalizar, divulgar y proteger los derechos sociales relativos al medio ambiente y del consumidor y usuario contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.

Objetivos específicos

- Determinar el estado ambiental en el país, especialmente en los sectores más vulnerables.
- Incidir en la formulación e implementación de políticas, leyes y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que garanticen los derechos de las personas en los temas de medio ambiente y del consumidor y usuario.
- Realizar monitoreo y control administrativo a las instituciones gubernamentales y privadas que tienen bajo su responsabilidad la conservación del patrimonio cultural, del medio ambiente, del equilibrio ecológico y el buen uso de los recursos naturales, y garantizar al consumidor y usuario el libre acceso a los productos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica vital.

- Monitoreos a las instituciones gubernamentales y privadas que tienen bajo su responsabilidad la defensa y protección de los derechos del consumidor y usuario, capacitar a los miembros de organizaciones sociales y de pueblos indígenas, para su participación en la defensa de los derechos ambientales y del consumidor y usuario.

Funciones

- Analizar periódicamente la situación de los derechos de los grupos sociales específicos o de los temas correspondientes, para proponer al Procurador de los derechos Humanos políticas o estrategias de intervención prioritarias, para lo cual deberá recopilar información estadística y documental de diversas fuentes, incluyendo las que se refieren a las políticas públicas, de los organismos internacionales y de las denuncias que procesa la institución.
- Mantener interlocución permanente con las autoridades de las instituciones del Estado con el propósito de obtener información actualizada acerca de su funcionamiento, y que éstas adopten medidas y asignen recursos o legislen a favor del mejor cumplimiento de los derechos humanos específicos de los grupos sociales o de las áreas temáticas.
- Efectuar monitoreos o verificaciones de campo para detectar el grado de cumplimiento de los derechos humanos en problemas o situaciones específicas, para lo cual deberá coordinar con la Dirección de Estudios, Análisis e Investigación.
- Ser el medio de relación entre el Procurador de los Derechos Humanos y las organizaciones representantes de estos grupos poblacionales o con los actores involucrados en los temas, a efecto de coordinar acciones de promoción, incidencia, mediación o acompañamiento en sus reivindicaciones de derechos ante las instituciones del Estado.
- Desarrollar un programa permanente de sensibilización para que se examinen aspectos fundamentales de los derechos específicos que atienden, a través de talleres, seminarios, foros, informes y campañas divulgativas.
- Diseñar material educativo e insumos para ser utilizados por la Dirección de Educación y la Dirección de Comunicación Social, así como elaborar protocolos de atención para la Dirección de Procuración.
- Trasladar al Área de Recepción y Calificación de Denuncias, para el trámite respectivo, toda solicitud de investigación sobre violaciones de los derechos humanos de los grupos o temas específicos.

Atribuciones

- Promover la efectiva defensa de los derechos humanos en relación con la problemática ambiental y la relacionada con los consumidores y usuarios.
- Impulsar actividades de prevención, mediación, seguimiento y acompañamiento a las personas individuales y colectivas, a fin de evitar que sus derechos ambientales y de consumidor y usuario sean violados y que se pueda disfrutar de los mismos.
- Realizar diagnósticos, estudios e investigaciones referentes a los derechos ambientales y los referentes a los consumidores y usuarios y, en su caso, divulgarlos y presentarlos a las autoridades correspondientes.
- Velar porque las entidades gubernamentales encargadas de la gestión y protección ambiental y las relacionadas con los consumidores y usuarios cumplan con las atribuciones contenidas en sus leyes y reglamentos respectivos.
- Coordinar acciones con entidades gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito nacional e internacional, para la protección del ambiente y de los recursos naturales, asimismo, la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Cobertura en el ámbito nacional

La Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario tiene cobertura en todo el país, cuenta con un oficial de defensoría en cada una de las Auxiliaturas Departamentales, quien es el encargado de propiciar el respeto y cumplimiento de los temas de derechos humanos, derechos ambientales, derechos de consumidores y usuarios, de la mujer, de la niñez, etcétera.

Problemática enfrentada

Se han detectado problemas de contaminación ambiental y de violación de los derechos de consumidores y usuarios y se han realizado verificaciones de las cuales se ha rendido informes adonde corresponde pero se desconocen los resultados obtenidos, por falta de coordinación interinstitucional.

Las violaciones a las leyes y reglamentos ambientales y de consumidores y usuarios han quedado en total impunidad por parte de las autoridades competentes para actuar a pesar de las resoluciones emitidas por el Procurador de los Derechos Humanos y las recomendaciones de esta Defensoría. A ello se suma el desconocimiento de la población guatemalteca de sus derechos ambientales y de consumidores y usuarios, y la consecuente falta de denuncia de las violaciones cometidas.

La inexistencia de programas de capacitación para los grupos de la sociedad civil organizada, pueblos indígenas ni para centros educativos de la República, ocasiona que los derechos individuales y colectivos a vivir en un ambiente sano y acceso a la alimentación adecuada, obtención de servicios eficientes y a precios justos, sean vulnerados flagrantemente y con total impunidad.

ACCIONES EMPRENDIDAS

Ante el caso de las areneras El Carmen e Indaco, ubicadas en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, específicamente en Ciudad Peronia, aldeas el Calvario, La Selva, La Parroquia y Villa Lobos, se apertura el expediente EIO.GUA.1268-2009/DCP y acumulado EIO.GUA.1969-2009/DCP, y fue resuelto como violación al derecho humano a vivir en un ambiente sano, por deforestación, contaminación visual y autorización de actividades industriales y comerciales ambientalmente peligrosas, así como la destrucción del área boscosa del municipio de Villa Nueva.

Se reactivó el foro multisectorial encargado de velar por la defensa del consumidor y usuario, a instancias de la Liga de Defensa del Consumidor (LIDECON), donde tiene participación la institución del PDH a través de la Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario, siendo el objetivo fundamental del foro efectuar la revisión de las iniciativas de ley 3871 y 3888; y el de la Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario, cuyo objetivo es verificar que el proceso sea transparente y pueda aportar reformas a la misma, en beneficio de los consumidores y usuarios. Actualmente se encuentra en el seno de la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario del Congreso de la República, a la espera de que se produzca el dictamen respectivo y su retorno al pleno del Congreso.

Derivado de la problemática por la prolongación de la canícula y el fenómeno del Niño que afectó al país, se tuvo contacto con las autoridades del Ministerio de Economía, específicamente con la Dirección de Comercio Exterior y Contingentes Arancelarios, con el objeto de establecer la veracidad de las noticias de prensa relacionadas con la importación de contingentes arancelarios para subsanar el déficit de granos básicos y poderle dar seguimiento. Hasta septiembre el Gobierno no había importado ningún producto alimenticio, pero habían ingresado 32 toneladas métricas de granos básicos y leche procedentes de Venezuela, las cuales

serían distribuidas entre la población del Corredor Seco (Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, El Progreso y Baja Verapaz).

Se mantuvo constante comunicación con los miembros de la sociedad civil organizada cuya actividad se relaciona directamente con las funciones de esta Defensoría, tal el caso de la Liga del Consumidor (LIDECON), Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), Coordinadora Nacional de Consumidores (CONADECO), Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad, Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED), Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación (FUNDAECO), Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y Usuario (DIACO), Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

A requerimiento de la DIACO, se realizaron verificaciones en los centros educativos privados de las zonas 4, 1 y 13, dando acompañamiento a la actividad desplegada por la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Educación y la DIACO, durante las cuales se requirió a los establecimientos visitados el Contrato de Adhesión, el Libro de Quejas, los recibos de cobros de inscripciones y mensualidades, la Resolución Ministerial de funcionamiento del colegio, la Patente de Comercio, la Resolución SAT, documento que autorice la propiedad del establecimiento, la Representación Legal del Representante del establecimiento y facturas por venta de uniformes, libros y prestación del servicio de bus.

Supervisión a la DIACO, con el objetivo de verificar las actividades de la entidad, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y su Reglamento (Decreto No. 003-2006) en defensa del consumidor y usuario, a quienes debe brindar la asesoría y acompañamiento necesarios.

Se incidió en la Ley de Minería, junto con la Mesa de Organizaciones Ambientales, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, en donde las distintas organizaciones solicitaron al Presidente de la Comisión que se regrese el proyecto de iniciativa de Ley 3528 a la Comisión de Energía y Minas, la cual se encuentra pendiente de ser aprobada, para poder ser analizada y discutida, artículo por artículo, por una multisectorial integrada por ambientalistas, la institución del PDH y la Gremial de Mineros.

Monitoreo a albergues y asentamientos en las zonas 7, 12, 13 y 16, con el objetivo de verificar las condiciones en las que viven las personas que están situadas en asentamientos, y si cumplen con las medidas mínimas de seguridad al momento de algún acontecimiento.

Elaboración de trifolios con información sobre las funciones de la Defensoría y sobre el tema del calentamiento global.

Celebración del Día Mundial del Consumidor, con la participación de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, quienes expusieron los temas “Origen del Día Mundial del Consumidor” y “Derechos y obligaciones del consumidor”.

Celebración del Día Mundial de La Tierra, con la presentación de dos videos: “SOS Tierra” y “La tierra viva y la práctica hace al maestro”.

Celebración del Día del Árbol, con el tema “Los Árboles y su importancia en Guatemala”, impartida por un técnico del Instituto Nacional de Bosques (INAB), haciendo énfasis en la necesidad de sensibilizar a la sociedad para lograr detener el deterioro ambiental.

Realización de la semana de sensibilización, impartiendo capacitaciones sobre los derechos y obligaciones del consumidor y usuario hacia la sociedad civil, legislación ambiental, desechos sólidos, calentamiento global y una feria del consumidor y usuario.

En septiembre, la Defensoría pasó a formar parte del Consejo Científico de CONRED, conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el INSIVUMEH, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas, siendo la primera participación durante el establecimiento de los puntos de riesgo de las riberas del río las Vacas en su paso por los municipios de Chinautla y San Antonio las Flores. Durante el proceso se observaron los deslizamientos, corrimientos, corrugamientos y deslaves que se han producido, lo que dará motivo a la emisión de un dictamen técnico por parte de los geólogos que integran el Consejo Científico.

Participación en el foro “Solidaridad con el fortalecimiento de la protección al consumidor de Guatemala”, haciendo la presentación de los avances que ha tenido la creación de la Ley de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y Usuario y de la Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario, ante los representantes de las misiones de la región de Astilla de la Mancha, España, Panamá, Colombia, El Salvador y Honduras, a través de sus organizaciones representantes de los consumidores y usuarios, en apoyo al fortalecimiento de las leyes guatemaltecas, especialmente a la creación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y Usuario.

PROYECCIONES Y EXPECTATIVAS PARA 2010

- Dar seguimiento a la iniciativa de Ley de la creación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y Usuario, iniciativa 3871 y 3888, y a la iniciativa 3528, Ley de Minería.
- Seguimiento a las hidroeléctricas.
- Seguimiento al problema de las minerías.
- Seguimiento a los contingentes arancelarios.
- Verificación de denuncias.
- Seguimiento a los alimentos transgénicos.
- Se coordinarán capacitaciones con entidades clave en la defensa y protección de los derechos humanos, en relación con los temas de medio ambiente y consumidor y usuario.
- Jornadas de sensibilización en materia de medio ambiente y consumidor y usuario.
- Supervisiones y monitoreos a albergues y asentamientos, instituciones que velan por la protección del medio ambiente, comedores solidarios y a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y Usuario.

Defensoría del Trabajador



Defensoría del Trabajador

La Defensoría del Trabajador, desde su creación, ha tenido como finalidad contribuir a la tutela, defensa y promoción de los derechos humanos del trabajador, dentro del contexto económico-social imperante determinado por aspectos de orden político que responden a una realidad de orden estructural y coyuntural, tanto nacional como internacionalmente.

Por ejemplo, la recesión económica mundial de 2009 tuvo influencia directa en la posibilidad de inversiones y generación de empleos. El porcentaje oficial de desempleo abierto es aparentemente bajo con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA); según la Asociación de Investigación Económica y Social, seis de cada diez empresas encuestadas han reducido la producción debido a la crisis económica, recortando 29 mil empleos entre junio y julio. El Ministro de Trabajo comentó que la tasa de desempleo se ubica en 5.9% de la PEA, aunque este dato corresponde a lo que se hace llamar desempleo abierto, pues hay entre 75% y 77% de personas en el llamado sector de la economía informal, que son formas de desempleo invisible o encubierto.

En 2009 desde el primer trimestre el envío de remesas en dólares tuvo una caída significativa, lo cual, junto a otros factores, incidió en la escalada inflacionaria que vino a provocar pérdida en la capacidad adquisitiva de los trabajadores al elevarse los precios de la canasta básica. Por otro lado, el Estado tuvo una caída significativa de su capacidad de recaudación, la cual vino a afectar a algunas instituciones estatales en lo que respecta a su funcionamiento, teniendo que recurrir al endeudamiento como mecanismo de solución, a través de los llamados bonos que con una tasa de interés preferencial se colocaron en el mercado financiero nacional.

Es en este contexto que se desarrollan las acciones permanentes de supervisión y monitoreo del surgimiento o manifestación de conflictos laborales por parte de la Defensoría tanto en el ámbito individual como colectivo, cuya frecuencia, desarrollo e intensidad se ve influido en relación proporcionalmente directa con la capacidad institucional instalada para conducirlo, ejecutarlo y evaluarlo de manera efectiva.

En relación con las categorías de derechos violentados, primeramente se abordaron los datos proporcionados por la Subdirección de la Inspección General de Trabajo al mes de julio. La otra fuente es la cantidad de denuncias conocidas en el Área de Recepción de Denuncias de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), datos que sirvieron de base para la investigación realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en relación con los Ombudsmen y el acceso a la justicia laboral en Guatemala.

Derechos reclamados

Violaciones denunciadas	Total
Establecer violación al pacto colectivo de condiciones de trabajo	20
Ausencia de contrato de trabajo escritos	20
Violación a la libertad sindical y discriminación	17
Incumplimiento de pago de comisiones	17
Negativa a extender constancia de trabajo	16
Establecer situación laboral por cierre de empresa	15
Establecer responsabilidad patronal en el pago de subsidio por pre y post natal	15

Verificar si labora personal extranjero	15
Incumplimiento de pago de salario por vacaciones	14
Pago de prestaciones laborales por renuncia de menores de edad	14
Verificar denuncia sobre pruebas, como polígrafo y otras	14
Establecer si el personal extranjero cuenta con autorización vigente para laborar en el país	14
Establecer que la jornada extraordinaria sea la que establece la Ley	11
Despido habiendo suspensión de médico particular	10
Suspensión de contratos individuales de trabajo	10
Despido estando emplazada la entidad	10
Establecer la responsabilidad patronal por enfermedad del trabajador	9
Incumplimiento de pago de bono vacacional	9
Verificar si laboran menores de edad en lugares insalubres y peligrosos	9
Establecer denuncia de represalias, sindicalizados o no	8
Establecer solicitud de permiso para laborar en días de asueto	8
Despidos habiendo suspensión del IGSS	7
Verificar el cumplimiento del pago de bonificación anual	7
Despido en periodo de vacaciones	7
No le otorgan funciones (sindicalizados o no)	6
Retención del salario mensual	5
Otorgan permiso para asistir al IGSS y obligan a reponer ese tiempo	5
Notificar proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo	4
Constatar si se cumplió con permiso solicitado	4
No extienden carné del IGSS	4
Pago incompleto de comisiones	4
Verificar simulación de contratos, obligan a extender facturas	3
Pago incompleto de bonificación anual	3
No pagan salario del séptimo día	3
Obligan a realizar trabajos en lugares peligrosos e insalubres a niñas, niños y adolescentes	3
Obligan a realizar trabajos inadecuados durante embarazo	2
Notificar renuncia a sindicato	2
Verificar padrón de afiliados para el reconocimiento a través de la personalidad jurídica	2
Negativa a otorgar licencia sindical	2
Grupos étnicos	1
Negativa de permiso para asistencia al IGSS	1
Establecer contrato de aprendizaje para mayores y menores	1
Discriminación por estar enfermo de sida	1
Verificar despido indirecto	1
Total	4,502

La mayor cantidad de intervenciones realizadas por la sección visitadora de la Inspección General de Trabajo corresponde al sector privado, seguidamente el sector industrial, luego el de la maquila, después el sector comercio, el público estatal y con menor intervención, el agropecuario.

PROBLEMÁTICA ENFRENTADA

En Guatemala a diario se cometen violaciones de los derechos humanos laborales fundamentales, como el derecho al trabajo, la discriminación en el empleo, la figura de paro patronal injusto e ilegal que nace cuando el empleador comete actos maliciosos dirigidos a la limitación de los derechos de los trabajadores.

Violación del derecho al trabajo

El derecho al trabajo se encuentra regulado en diversos instrumentos en materia de derechos humanos, particularmente en la Constitución Política de la República. En el contexto nacional, el más castigado con esta forma de exclusión social es el sector de la economía informal, el cual, según estudios recientes, creció de 75 a 77% de la PEA. Esta economía de subsistencia constituye, en la mayoría de casos, una forma de desempleo encubierto, reflejando el incumplimiento del Estado en cuanto a garantizar el derecho humano al empleo. A pesar de ser uno de los factores que generan conflictividad social, el Estado no le ha puesto suficiente atención ni ha creado una política dirigida a articular soluciones, de corto, mediano y largo plazos.

Por otro lado, los trabajadores de la economía informal son víctimas de persecución permanente, lo cual se ha dado en la mayoría de casos vinculado al tema de libertad sindical en tanto que dichos trabajadores han constituido organizaciones sindicales para contar con reconocimiento legal y desarrollar capacidad de negociación, sin embargo no ha habido interés de las autoridades, por la vía del diálogo y la negociación, de buscar soluciones al problema.

Discriminación en el empleo

Este tema está vinculado a la prohibición que tienen los empleadores de tomar represalias en contra de los trabajadores por el ejercicio de sus derechos. En este ámbito, las relaciones laborales son de poder y el empleador no respeta el derecho ciudadano de petición ni las leyes de trabajo y previsión social e incurre en arbitrariedades.

En el sector público se atendieron diversas denuncias de los ministerios de Educación, Gobernación, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Trabajo y Previsión Social, y Público, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entre las formas de discriminación se encuentran la simulación o disfraz del contrato de trabajo, los despidos sin formular previamente cargos, en algunos casos estando emplazada la entidad, y sin solicitar autorización de juez competente en materia de trabajo; también se ha violentando el derecho de protección de inamovilidad por embarazo.

Violencia económica

Esta figura se encuentra tipificada en la Ley contra el Feminicidio, la cual regula la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, social y laboral; cuando una trabajadora es despojada de sus derechos laborales se incurre en esta figura delictiva, razón por la que en todo acto donde se tuvo conocimiento de atropellos a los derechos laborales de mujeres se le dio más que la debida importancia, y corresponde darle competencia al Ministerio Público.

Despidos estando emplazada la entidad estatal

Persistieron las denuncias de desacato a una resolución judicial que prohibía la terminación de contratos sin autorización de Juez de Trabajo y Previsión Social, con el agravante de que algunos altos funcionarios se han negado a cumplir con la orden de reinstalación, lo que constituye una doble violación a la Ley. Destaca un caso de una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que se tramita a instancias de la Comisión Presidencial.

Irrespeto a la garantía de inamovilidad por embarazo:

El derecho a la inamovilidad por embarazo sigue siendo violentado, no obstante existir ya fallos de la Corte de Constitucionalidad que indican que la protección la garantiza el Estado por estar embarazada y no por haber dado el aviso correspondiente. Entre los casos más recientes está el del Programa mi Familia Progres, para el que han tratado de disfrazar de diferentes maneras la relación laboral, no obstante que existe relación de dependencia y subordinación. Esta garantía se ve amenazada cuando los inspectores de Trabajo, en lugar de ejercer la tutelaridad, propician acuerdos dirigidos a la terminación de los contratos por mutuo consentimiento, desvirtuándose la garantía legal.

Irrespeto al derecho a la libertad sindical y derecho a huelga

Uno de los derechos reconocidos para alcanzar el fin de la negociación colectiva es el hecho de que los Estados garanticen el ejercicio del derecho a huelga. Este derecho es negado cuando no existe voluntad política de negociar; en el caso de la actual administración gubernamental se hizo circular una nota donde se llamaba a las distintas autoridades jerárquicas a propiciar la negociación colectiva, sin embargo, el número de pactos es escaso y las dificultades para que se organicen los trabajadores singuen siendo un impedimento.

Irrespeto al derecho a ascenso

Este tema fue de atención particular en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde algunas agrupaciones de trabajadores al parecer tienen importantes cuotas de poder, que les permiten manejar el sistema de ascenso desde el particular interés de los grupos que aglutinan en una clara discriminación a los demás trabajadores que no forman parte de su círculo organizado. Al respecto, el responsable de propiciar discriminaciones en el derecho a ascenso es el Estado de Guatemala, a través de su autoridad nominadora, por no garantizar el principio de igualdad y permitir la arbitrariedad.

Violencia y persecución contra sindicalistas; criminalización de la lucha sindical

Diversas organizaciones fueron objeto de ataques sistemáticos por parte de personas armadas con pasamontañas, siendo las organizaciones más afectadas la Confederación Central de Trabajadores de Guatemala, el Frente Nacional de Lucha, la Confederación de Unidad Sindical. Ante estos actos se solicitaron exhibiciones personales, el envío de las denuncias a la Fiscalía de Delitos Contra Sindicalistas, medidas de seguridad para los amenazados, particularmente para los sindicalistas de la CCGTG, a quienes se les acompañó a la Oficina Permanente de Atención a la Víctima del Ministerio Público, donde presentaron denuncia por abuso de autoridad contra la corporación municipal de Coatepeque, Quetzaltenango; asimismo, se logró que les recibieran denuncia por amenaza a la

libertad sindical en virtud de que las ejecuciones superaron las 12 personas, habiendo comenzado con la ejecución extrajudicial del licenciado Armando Sánchez y el secuestro, tortura y posterior liberación de un dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción.

Varias organizaciones denunciaron estar siendo acosadas por su empleador, a través de la instrumentalización del derecho penal para perseguirlos por acciones de las que no son responsables, de esa cuenta se le ha dado acompañamiento, seguimiento y, en algunos casos, asesoría a efecto de poder enfrentar esta táctica de instrumentalización y criminalización del derecho laboral.

Arbitrariedad y abuso de autoridad

Esta figura se refleja en los actos administrativos sin fundamento de ley. Como lo indicamos en el caso de los trabajadores del Estado, despedir existiendo prohibición de Juez se encuadra dentro de esta figura jurídica. Un ejemplo es el del ex Ministro de Salud Pública, quien despidió a tres dirigentes sindicales violentando su fuero sindical. Al iniciarse las acciones en la Defensoría del Trabajador el funcionario dio marcha atrás, emitiendo los acuerdos ministeriales que dejaron sin efecto dicha medida ilegal y arbitraria. Con respecto al mismo Ministerio, el despido indirecto de un médico en el departamento de Jalapa por denunciar el agravamiento del hambre en dicha región constituyó un acto arbitrario, pues se violentó el principio de estabilidad en el empleo y las prevenciones del Juez de Trabajo que conoce del conflicto colectivo planteado.

El nuevo Ministro de Salud Pública y Asistencia Social repitió los actos arbitrarios de su antecesor al despedir a altos funcionarios, aunque algunos ya tienen orden judicial de reinstalación pues la resolución judicial prohíbe toda terminación de contratos sin autorización de juez.

El Estado, desde la asignación presupuestaria que invisibiliza al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no promulgó una sola iniciativa dirigida a aumentar el presupuesto en materia de trabajo. Además, incumple las obligaciones contenidas en el Libro Blanco dirigidas a fortalecer el sector justicia; dichas barreras ya fueron abordadas en este informe y en el diagnóstico de obstáculos al acceso a la justicia auspiciado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, destacando que no han cumplido con devolver la capacidad sancionatoria a la Inspección General de Trabajo.

Negación a prestaciones por IVS por parte de autoridades del IGSS

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tiene un retraso significativo en la sistematización de los registros de pagos de cuotas de aproximadamente diez años, pues según denunciaron los propios trabajadores de la institución, es más fácil para ellos negar las solicitudes de beneficio de los programas de vejez e invalidez, que destinar recursos para corregir dicha omisión.

No obstante lo anterior, gasta miles de quetzales en el pago de asesoría jurídica para oponerse a los reclamos jurisdiccionales en materia de tales prestaciones. El Procurador de los Derechos Humanos ya sentó jurisprudencia en el sentido de que se debe garantizar el acceso a la seguridad social, pues es responsabilidad del IGSS no promover las acciones de cobro a los patronos; violentando su propio reglamento de recaudaciones, no toma ninguna medida administrativa al respecto, desencadenando una persecución sumarial contra los trabajadores de dicho departamento de inspecciones patronales. La Defensoría tiene a su cargo la dirección y procuración de las demandas de dos trabajadores del IGSS, el cual ha perdido todas las instancias en el primero de los casos, pero apeló la denegación de la Acción de Amparo; en el segundo caso un adulto mayor de 63 años sin medios de subsistencia, y

en total indefensión, ha ganado las dos únicas instancias, pese a que la Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Judicial garantizan que no hay más de dos instancias, pretendiendo retardar el goce de su derecho a gozar de pensión por vejez.

Negativa del Estado a capitalizar fondo de pensiones

La Asociación de Pensionados de Guatel (ASPEGUA) entabló demanda ordinaria laboral contra la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y el Estado de Guatemala, con responsabilidad solidaria de capitalizar dicho fondo. Dicha entidad de jubilados solicitó al PDH y a la jueza Octava de Trabajo y Prevención Social que emplazara como terceros al Defensor de los Trabajadores, de tal manera que se litiga, junto con el representante legal de ASPEGUA y sus abogados, vía el pronunciamiento del órgano jurisprudencial, capitalizar el régimen de pensiones que fue perjudicado por la privatización de dicha entidad estatal.

Negativa del Viceministro de Trabajo de permitir la supervisión de espacios tripartitos

El primer viceministro de Trabajo y Previsión Social, licenciado Mario Illezcas, denegó la solicitud que se le formulara por parte de la Defensoría de permitir, vía la observación sistemática, la supervisión del proceso de reuniones de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales en materia de trabajo. Dicha oposición evidencia la negativa institucional del Ministerio de Trabajo de permitir la fiscalización de políticas públicas en materia de trabajo y previsión social; además, es contradictoria a lo expresado por el licenciado Edgar Rodríguez, en reunión celebrada a instancias de la Fundación Friedrich Ebert, donde dicho funcionario manifestó su disposición a aceptarlo, sin que se concretara en la práctica.

Denuncia de actos maliciosos y conducta abiertamente inmoral del empleador

Establece el artículo 250 del Código de Trabajo que se considera paro patronal ilegal el que no cumple con los requisitos de ley, así como todo acto malicioso del patrono o su representante que imposibilite el normal desempeño de sus labores. La Inspección General de Trabajo no le da interpretación correcta a esta institución en materia de trabajo, que en el caso de actos masivos permitiría actuar judicialmente de manera oportuna. Los casos de acoso sexual denunciados pueden encuadrarse dentro de esta figura jurídica, juntamente con la Ley contra el Femicidio, pues se atendieron denuncias de víctimas de acoso sexual, acompañadas de violación de los derechos laborales de las trabajadoras.

Incumplimiento del pago del salario mínimo por autoridades municipales

La mala concepción de los alcances de la figura de autonomía ha llevado a diversas corporaciones municipales a incumplir con el pago del salario mínimo y las prestaciones laborales. Existen sentencias firmes contra las corporaciones municipales de Cuyotenango y Samayac al respecto, sin embargo, le corresponde a la Inspección General de Trabajo vigilar y garantizar el cumplimiento de estas normas mínimas irrenunciables. Otra corporación municipal denunciada por incumplir sus obligaciones laborales fue la del municipio de Mixco que, pese a firmar convenio de pago a instancia de autoridad administrativa, ha incumplido con sus obligaciones laborales.

Incumplimiento del Estado de fijar nuevo salario mínimo en espacio tripartito y ausencia de un funcional diálogo social

La fijación del salario debe ser periódica y permitir elevar el nivel de vida de los trabajadores para cumplir con los mínimos satisfactorios. En 2009 nuevamente no se llegó a acuerdo alguno al respecto, sin embargo, el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo establece que en caso de no haber posibilidad de consenso, el Gobierno, y en este caso el Ministerio de Trabajo, puede fijar dicho salario, pero no lo hizo y trasladó la responsabilidad al Ejecutivo. Ante ello, la Defensoría Social procedió a solicitar la apertura de un expediente en contra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por no cumplir con las obligaciones emanadas de los convenios internacionales ratificados ante la Organización Internacional del Trabajo.

Represalias por ejercer el derecho a denuncia de violación de sus derechos laborales

Los trabajadores son vulnerables a las represalias del patrono por el ejercicio de sus derechos, no obstante que la ley lo prohíbe, en la práctica un reclamo individual tiene como consecuencia el despido del trabajador, resultado de una cultura de confrontación que sigue prevaleciendo en el sector empleador.

Embargos de jubilaciones, amenazando supervivencia y el derecho a la alimentación

El empobrecimiento de la población adulta mayor y el insuficiente subsidio recibido vía pensiones por vejez, ha orillado a muchos jubilados a acudir con prestamistas y agiotistas que les hacen firmar documentos que no leen y que luego son instrumentalizados para falsear las sumas y embargarles lo poco que reciben. Esto afecta a un importante número de personas jubiladas que sólo saben que recibieron cantidades menores, que estaban pagando su deuda y que de pronto fueron embargados, estacándoles su mecanismo de sobrevivencia y alimentación. Al respecto solicitamos la apertura de varios expedientes

ACCIONES Y PROMOCIONES

Resolver de raíz los vicios reconocidos internacionalmente por el Estado de Guatemala en el Libro Blanco, primeramente en el ámbito administrativo de trabajo garantizando resolver recomendaciones emanadas del Congreso Nacional de Trabajo realizado por la institución del PDH, entre las que destacan:

- Garantizar la no politización de la Inspección General de Trabajo, a través de los nombramientos de inspectores de trabajo.
- Enfrentar y resolver los altos niveles de corrupción.
- Garantizar que los procesos de capacitación de los inspectores de trabajo tengan resultados y contribuyan al cambio de conductas institucionales, a efecto de que se recupere la función tutelar y protectora de la Inspección General de Trabajo.
- Tomar medidas urgentes para recuperar la credibilidad de la Inspección General de Trabajo, transparentando sus procesos y garantizando la protección y tutelaridad, implementando para el efecto mecanismos eficientes de auditoría social
- Garantizar que la Inspección de Trabajo pueda desarrollar sus mecanismos de acción con independencia de las directrices políticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

- La creación de una carrera de inspector de trabajo que garantice la existencia de expectativas de desarrollo y superación profesional y económica.
- La implementación de un sistema estricto de nombramiento y ascensos por oposición, sobre la base de la trayectoria laboral, méritos profesionales, antigüedad y conocimientos de la legislación nacional e internacional del trabajo, con participación tripartita (Estado-sindicatos-patronos) y fiscalizada por el PDH en los jurados de oposición, que abarque todos los puestos en la estructura jerárquica de la Inspección General de Trabajo, incluyendo los cargos de inspector general y subinspectores de trabajo.
- Estabilidad laboral para los inspectores que cumplan bien con su función y estén identificados con la función tutelar de las leyes de trabajo y previsión social, para impedir que éstos puedan ser despedidos de sus cargos sin causa justa.
- Crear un sistema de capacitación certificada y permanente sobre la base de los programas y contenidos establecidos tripartitamente por el Jurado de Oposición (podría integrarse cada dos años), debiéndose garantizar que se imparta de manera que evite manipulación de los contenidos de las mismas.
- Establecimiento de un sistema salarial atractivo y de incrementos por antigüedad y méritos profesionales, con independencia de los aumentos salariales que pudiesen obtenerse mediante la negociación colectiva.
- Garantizar que los inspectores de trabajo contarán con el equipo, asesoría técnica, suministros y capacidad para movilizarse para el ejercicio de sus funciones.
- La posibilidad del intercambio institucional de experiencias con las Inspecciones de Trabajo de otros países en mayor desarrollo.
- Garantizar un presupuesto adecuado para satisfacer todas las necesidades de una carrera con tales características.

Las acciones a tomar en relación con la comisión a la que se hace referencia en un inciso, con el objeto de resolver las deficiencias identificadas en los tribunales, emanadas del Congreso Nacional del Trabajo, que afecten la tutelaridad y acceso real a la justicia laboral en el ámbito jurisdiccional son, entre otras, las siguientes:

- Hacer recaer la carga de la prueba sobre el trabajador, sin tomar en cuenta que se trata de relaciones de trabajo y que es en el centro de trabajo donde se generan, y sobre el cual ejerce dominio absoluto el patrono. Esto lo vemos con mayor frecuencia cuando las reclamaciones se refieren a horas laboradas en jornada extraordinaria o reclamo del pago de ventajas económicas.
- Exigir los requisitos previo a darle trámite a un conflicto colectivo de carácter económico social bajo apercibimiento de que, si no los cumplen en determinado tiempo, se levantarán las prevenciones del emplazamiento, aún y cuando la ley no regula tales requisitos o establece mecanismos para ser subsanados de oficio.
- La negativa casi generalizada a otorgar medidas precautorias al darle trámite a la demanda, con lo cual liberan de presión al patrono y le permiten recurrir a estrategias dilatorias dentro del proceso, para al final evadir su efectividad.
- Autorizar más de 99% de las solicitudes de terminación de contratos de trabajo presentadas por los patronos dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social, sin que el patrono pruebe que el despido no es una represalia, careciéndose de causal alguna.
- Denegar a los trabajadores el acceso al conflicto colectivo de carácter económico social por violaciones a los pactos o convenios colectivos de trabajo, aún y cuando el artículo 242 del Código de Trabajo ubica tales conductas como causales de una huelga justa, declaratoria que no

puede obtenerse a través de un juicio ordinario laboral; esta interpretación arbitraria impide el ejercicio real del derecho a la negociación colectiva garantizado en el Convenio 98 de la OIT.

- La falta de cumplimiento de los mandatos legales por parte de los notificadores tanto para realizar las notificaciones como para diligenciar las ejecuciones; ello debilita la coercibilidad real de la norma jurídica, muchísimas demandas no tienen avance y la mayoría de sentencias se quedan sin cumplimiento debido a la fuga de los responsables.
- La omisión de los tribunales de trabajo y previsión social en dar valor a la prueba de exhibición de documentos cuando el patrono, una vez apercibido de los efectos legales de no presentar los documentos requeridos, omite presentarlos en la audiencia señalada para el efecto.
- La inexistencia de suficientes tribunales de trabajo y previsión social para atender pronta y oportunamente la demanda de justicia laboral, no garantiza para todos los casos la inmediación procesal y el principio de oralidad se sustituye por actos escritos.
- Continúan señalándose a menudo requisitos previos a la tramitación de los procesos que no encuentran sustento en la legislación aplicable.
- Existe un incumplimiento generalizado de los plazos para resolver y notificar.
- Las audiencias se señalan con períodos de tiempo muy largos, después de presentarse la demanda.
- La negativa, casi por regla general, de los tribunales a dictar medidas precautorias y la inexistencia en la legislación nacional de una condena por daños y perjuicios, en caso de declararse una violación a una garantía laboral, con lo que se favorece el abuso del derecho a la defensa a través de la utilización de tácticas dilatorias.
- La inexistencia en la práctica de un impulso de oficio a los procesos.
- La omisión de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social de subsanar de oficio los errores menores de las demandas (individuales o colectivas), a través de los procedimientos que establece la ley; ello, además de crear un sistema de justicia sumamente formalista, resta celeridad a la tramitación de los procesos.
- La admisión de recursos, incidentes o excepciones en contra de los conflictos colectivos de carácter económico social, aún y cuando la ley establece que son inadmisibles, con lo cual se obstruye la fluidez que debiera tener el ejercicio del derecho a la negociación colectiva.
- La suspensión del proceso en el caso de interposición de recursos, como el de nulidad que no posee efectos suspensivos; en los casos de interposición de amparo, aún y cuando no se ha otorgado el amparo provisional; y a través del señalamiento de audiencias conciliatorias, aún y cuando la etapa de conciliación del proceso ha prelucido.
- La exigencia, previo a darle trámite a la demanda, de requisitos no establecidos en el artículo 332 del Código de Trabajo.
- La exigencia, previo a darle trámite a un conflicto colectivo de carácter económico social, de requisitos no señalados en el artículo 381 del Código de Trabajo.
- La omisión de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social de poner en práctica, en caso de existir vicios subsanables en el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico social, el procedimiento que para subsanarlo de oficio establece el Código de Trabajo en su artículo 381.
- La exigencia de que en la etapa de liquidación, aún y cuando en la demanda se han aportado los datos necesarios para realizarla de oficio, los trabajadores presenten un proyecto de liquidación.
- La conducción por la vía incidental de la etapa de liquidación del proceso cuando los trabajadores han presentado un proyecto de liquidación, aún y cuando el artículo 426 del Código de Trabajo establece un procedimiento más ágil y sencillo.
- La admisión del recurso de rectificación en contra de la liquidación en un proceso por razones ajenas al alegato de errores aritméticos.

- La admisión de recursos de nulidad durante la etapa de ejecución de los procesos.
- La omisión de los tribunales de trabajo y previsión social a ejecutar de oficio las sentencias, esperando para ello la solicitud del trabajador o trabajadora.
- La omisión de los tribunales de trabajo y previsión social en los conflictos colectivos de carácter económico social de subsanar los errores menores en su planteamiento a través del procedimiento que señala el artículo 381 del Código de Trabajo.
- La omisión de los tribunales de Trabajo y Previsión Social en los conflictos colectivos de carácter económico social, de ordenar de oficio la reinstalación de trabajadores despedidos cuando éstos son alegados por la parte patronal como elementos en contra de la tramitación del conflicto colectivo de carácter económico social, violando el artículo 380 del Código de Trabajo.
- La omisión de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, en el caso de las reinstalaciones, de volver a ejecutar de oficio las órdenes ante la negativa del patrono de cumplirlas.
- En el caso de los conflictos colectivos de carácter económico social promovidos en contra del Estado de Guatemala, la emisión de recomendaciones que limitan el acceso a reivindicaciones laborales a la rigidez del presupuesto de la dependencia de que se trate, haciendo con ello que resulte prácticamente imposible la superación de las condiciones prevalecientes, toda vez que el Estado en el Presupuesto General de la Nación no prevé partida alguna para negociaciones colectivas con los trabajadores.
- La admisión de la desnaturalización de la relación laboral, admitiendo la preeminencia del instrumento a través de la cual se ha formalizado la relación evitando la consideración de las circunstancias y condiciones de hecho en las cuales se desarrolla.
- La autorización de la terminación de contratos de trabajo dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social en aplicación del artículo 380 del Código de Trabajo aún y cuando el artículo 7, literal d, del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) reconoce el derecho a la estabilidad laboral, norma obviamente más favorable al trabajador.

Con el objetivo de reforzar la administración de justicia laboral en Guatemala en lo relativo a las deficiencias cuantitativas en los tribunales, se recomienda:

- Crear suficientes Tribunales de Trabajo y Previsión Social para enfrentar la demanda de justicia laboral que reciben, haciendo posible el cumplimiento de una justicia pronta y oportuna.
- Adoptar una estructura de tribunales que no sea compatible con las posibilidades reales del Juez de presidir las audiencias orales, manteniendo una proporcionalidad adecuada; además, dotar a los tribunales de un taquimecanógrafo que deje constancia fiel de lo acontecido.
- Que exista una proporcionalidad entre las resoluciones de trámite, los procesos recibidos y las resoluciones de fondo; ello debido, entre otras razones, a que el juez, a efecto de salvar su responsabilidad ante la lentitud del proceso, señala requisitos innecesarios a la demanda para trasladar al usuario la responsabilidad por la lentitud del proceso.
- Que el Organismo Judicial de Guatemala cuente con jueces suplentes de Trabajo y Previsión Social para cubrir aquellos que por cualquier motivo se encuentren en suspensión, de tal forma que no se recargue el trabajo del juez suspendido en otro juez.
- Que se instale un centro especializado de notificaciones en los tribunales de la ciudad de Guatemala, que es donde se concentra la mayor actividad judicial, con el objeto de que dichas notificaciones se realicen ágil y eficientemente.
- Establecer un mecanismo que evite el abuso del derecho de defensa a través de la interposición de recursos frívolos, lo cual admite la dilación como estrategia de defensa de las partes.

Dos aspectos adicionales tienen que ver con la obligación que tiene el Estado de contribuir a la resolución conciliatoria de diferencias entre las organizaciones sindicales.

En el sector empleador pese a que el sector comercio tuvo divergencias con las otras cámaras empresariales, el manejo del diferendo ha tenido como característica una discusión de mayor altura, sin ventilarse pública e internacionalmente como sucede en el movimiento obrero guatemalteco. Un sector responsabiliza al Gobierno de las divisiones sufridas, sin embargo, en buena medida obedece a la falta de un sano y efectivo ejercicio de crítica y autocrítica a lo interno del movimiento sindical y el desarrollo impostergable de que se implementen mecanismos de mayor democracia sindical.

En lo que respecta al movimiento sindical, se encuentra articulado alrededor de dos espacios, y algunos grupos están fuera de estos espacios colectivos. Sin dejar de mencionar que para la discusión de conflictos relativos a trabajadores del Estado, se articuló un espacio conocido como Movimiento Sindical Estatal, en el cual, a través del mecanismo de la Unidad de Acción, consensuaron una agenda donde el tema de las reformas a la Ley de Servicio Civil fue prioritario; al respecto, el Ejecutivo, por intermedio del Presidente de la República, presentará una iniciativa de ley al Congreso.

Una las acciones principales que desarrolló el movimiento sindical, campesino e indígena fue responder conjuntamente a la memoria relacionada con la aplicación de convenios internacionales en materia de trabajo ante la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, pero también acudir a través de tres centrales representativas a la Conferencia Internacional del Trabajo, donde la situación de Guatemala nuevamente fue considerada una de las mas graves en el mundo.

Existe otro bloque de organizaciones sindicales conformado anteriormente: la Unión Guatemalteca de Trabajadores. Pese a que varias organizaciones de unidad y consenso sindical participan en la otra expresión, realizaron planteamientos para el cumplimiento y respeto de la libertad sindical de Guatemala, mostraron su oposición a la ratificación del Convenio 175 a tiempo parcial, participando en las comisiones paritarias para discusión del salario mínimo, espacio en donde no solamente no llegaron a consenso entre las delegaciones de trabajadores, sino que el Estado, al no haber acuerdo entre el sector empleador y el sindical, se abstuvo de fijar el salario mínimo, trasladando dicha responsabilidad.

Por otro lado, las propuestas para designaciones de representantes de los trabajadores en el Instituto de Capacitación, el IGSS y el Instituto para Recreación de Trabajadores aumentaron las diferencias en el seno del movimiento obrero; en este sentido, el Ministro de Trabajo debió equilibrar la representación, pues al sector que mantiene un mayor nivel de denuncias internacionales se le está castigando en su derecho a conducir dichos espacios tan importantes. Estas diferencias se suman a las ya existentes en relación con la integración de las delegaciones de trabajadores ante la Comisión Tripartita de asuntos internacionales en materia de trabajo, espacio al cual se ha negado la participación de la Defensoría como observador por parte del Viceministro de Trabajo.

LOGROS

Durante el presente año la Defensoría tuvo participación en actividades desarrolladas por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el tema de acceso a la justicia, espacio donde se retoma la

discusión relacionada con los obstáculos en el acceso a la justicia laboral. Destacó que, al momento de agotarse la vía de conciliación, los trabajadores no cuentan con mecanismos que aseguren su acceso a asesoría jurídica gratuita, en virtud de que se limita la participación de entes como los bufetes populares y el mismo servicio que ofrece el Ministerio de Trabajo.

Fueron creados ocho juzgados de trabajo más que, aunque no son suficientes, vienen a disminuir el congestionamiento de los juicios laborales en materia de trabajo y previsión social, aunque comparado con las instalaciones físicas que ofrece el Organismo Judicial de la cabecera departamental de Escuintla, estas instalaciones están demasiado ajustadas, y existen denuncias de que se nombraron jueces que han hecho carrera en el área civil, corriéndose el riesgo de que se mantenga la tendencia a imponer criterios de carácter civil en desmedro de las propias instituciones en materia de trabajo.

Se tuvo mayor acercamiento con las Comisiones de Trabajo y de la Mujer del Congreso de la República, así mismo con la Comisionada Presidencial en Materia de Derechos Humanos, con la Comisión de Trabajo y compartió información relacionada con la vigencia de los derechos laborales y la necesidad de articular una política de Estado en materia de empleo. Con ambas comisiones se participó en la discusión de posibles reformas al Código de Trabajo, desde la perspectiva de garantizar los derechos de la empleada de casa particular. Finalizado este proceso, el Ejecutivo anunció el acuerdo bilateral con el IGSS para dar cobertura a las empleadas de casa particular. Aun cuando es un paso importante, dicho acuerdo gubernativo carece de mecanismos reales de implementación, pues no está estructurado proporcionalmente al salario como con la generalidad de trabajadores, es decir, es un programa sin mecanismos reales de verificación, pues, en el seno del espacio de discusión, la Defensoría insistía en que deben garantizarse mecanismos efectivos para inspeccionar el trabajo doméstico.

Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz



Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz

Esta Unidad fue creada el 30 de enero de 2003, en el marco del proceso de reingeniería de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, por medio del Acuerdo Numero SG 004/2003, con el mandato de diseñar y ejecutar la estrategia institucional para el seguimiento, vigilancia e investigación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, así como apoyar y fortalecer el papel del Procurador de los Derechos Humanos en la nueva institucionalidad de la paz, promoviendo el avance de los compromisos y políticas establecidas en los Acuerdos de Paz, a través de informes públicos sobre la situación y avances de los mismos, pronunciamientos, resoluciones y propuestas que repercutan tanto en las instituciones del Estado como en las diversas instancias de la sociedad civil organizada.

Funciones

- Difundir por todos los medios posibles los Acuerdos de Paz entre todos los guatemaltecos.
- Instaurar talleres, seminarios y estudios en todos los niveles educativos, primario, secundario y en el ámbito universitario, para difundir el conocimiento, discusión y temas de conciencia de los Acuerdos de Paz.
- Impulsar las instancias necesarias para contribuir al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
- Enfatizar en los incumplimientos de los Acuerdos de Paz, dando seguimiento y verificando los compromisos sectoriales establecidos.
- Promover mayor participación y apropiación del seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Antecedentes

Desde la creación de la Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz (USAP), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) se dio a la tarea de dar seguimiento sistemáticamente al cumplimiento de los compromisos sustantivos de los Acuerdos de Paz, los cuales deberían asumirse como un conjunto de principios y criterios que deben ser posesionados plenamente por la sociedad guatemalteca, como parte de un ejercicio permanente de las instituciones del Estado. Al respecto, el Magistrado de Conciencia define, en relación con los Acuerdos de Paz, lo siguiente: *“Los Acuerdos de Paz, no pertenecen a un gobierno o sector en particular, sino que deben ser asumidos por la sociedad en su conjunto, con visión de Nación. En este sentido, el Procurador de los Derechos Humanos tiene el desafío de preparar y generar las condiciones que permitan velar por una eficaz verificación de los diversos procesos de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, procurando al mismo tiempo mayores espacios de participación social en apoyo a esta tarea”*.¹

La USAP ha venido desarrollando actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. En ese sentido, en el periodo comprendido de 2005 a 2007 se impulsaron dos proyectos de fortalecimiento institucional, lo cual permitió la publicación de dos informes de verificación del cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado de Guatemala: “Informe de Seguridad y Justicia” e “Informe de Desarrollo Humano”, los cuales han tenido gran demanda y fue posible divulgar y socializar ampliamente.

La edición de tres mil ejemplares del documento “Acuerdos de Paz: una herramienta para el cambio” fue distribuido en centros de estudio, universidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para llevar al público una visión del estado de cumplimiento de los Acuerdos de Paz. La elaboración de indicadores para la verificación del cumplimiento de estos Acuerdos se ha incorporado al quehacer de las Auxiliaturas y Defensorías, siendo este insumo una herramienta de gran utilidad en los casos en que lo han implementado. La creación de Redes de Observadores en cinco departamentos permitió verificar el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz, para lo cual se elaboraron dos documentos: *Manual conceptual para la observación de los Derechos Humanos* y *Manual metodológico para la observación de los Derechos Humanos*, los cuales fueron distribuidos en toda la República.

¹ Plan Marco de Trabajo 2002-2007 del Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Fernando Morales Alvarado. p. 24.

Se les ha brindado atención permanente, sobre todo a partir de la aprobación del Decreto Legislativo No. 52-2005, “Ley Marco de los Acuerdos de Paz”, a la participación del PDH en el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en calidad de observador, lo cual no limita la incidencia propositiva que desde la USAP, en cumplimiento de su mandato, realiza permanentemente en los espacios, comisiones y mesas de trabajo conformadas para el efecto por el Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

A pesar de las condiciones favorables que se crearon por parte de sectores importantes de Guatemala y de la comunidad internacional, el Estado no ha puesto empeño ni voluntad para la construcción de la paz. El incumplimiento de los Acuerdos de Paz representa una agudización de las condiciones políticas, económicas y sociales que compromete la gobernabilidad y reconciliación de la sociedad guatemalteca. La agenda del actual gobierno y los planes estratégicos de desarrollo plasmados en los programas asistenciales no arrojan indicadores que muestren que los problemas de Guatemala se resuelvan y, por el contrario, se agudizan.

El Programa Nacional de Resarcimiento ha sido sumamente cuestionado, ya que los compromisos contraídos por el actual gobierno no se ejecutan y no se ven avances en relación con otros años. El resarcimiento se ha realizado de manera anómala pero en estos momentos, tras un proceso de reorganización, se espera que se cumpla el resarcimiento de conformidad con las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH). Hasta ahora, en casos considerables se centra en el resarcimiento económico, olvidando la importancia y necesidad del resarcimiento integral.

Las conclusiones y recomendaciones de la CEH aún no se cumplen a cabalidad y los mayores obstáculos están en la falta de voluntad política, en los intereses de grupos de poder, en las prácticas de discriminación y exclusión que vive la mayoría de población indígena, sin que se asuma el compromiso de su participación en la toma de decisiones nacionales.

En el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA), las partes firmantes consideraron que la paz duradera debe cimentarse en un desarrollo socioeconómico orientado al bien común, que responda a las necesidades de la población, basado en la justicia social y con la capacidad de convocar a la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades. También expresaban que la aplicación del Acuerdo “... debe propiciar que todas las fuerzas sociales y políticas del país enfrenten en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra la pobreza, la discriminación y los privilegios, construyendo así una Guatemala unida, próspera y justa que permita una vida digna para el conjunto de su población.” Por ello, tanto éste como el conjunto de los acuerdos orientan a la generación de políticas sociales que tiendan a la transformación de la estructura y naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala.

Valoración de las políticas sociales en los Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz comprometen a la aplicación de políticas públicas en materia de educación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda, desarrollo rural y combate a la discriminación, orientadas hacia el respeto, promoción y garantía efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado de Guatemala es signatario. En ese sentido, el Gobierno de la República al suscribir compromisos en esta materia no hacía sino ratificar las obligaciones contraídas en dichos instrumentos y consignadas, además, en la Constitución Política de la República.

Según lo demuestran los informes de verificación y diferentes expresiones de la sociedad civil, el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas (AIDPI) es uno de los más atrasados en su implementación, a pesar de ser uno de los de mayor trascendencia e impacto en Guatemala. Esta valoración fue reiterada en varios balances efectuados con motivo del décimo aniversario de los Acuerdos de Paz.

La discriminación hacia la población indígena es uno de los problemas más graves de la estructura social, económica y política del país. Aun y cuando existen avances e intentos de legislar en contra de la discriminación y la creación de algunos instrumentos, éstos son limitados para los alcances que plantea el AIDPI.

Algunos aspectos concretos al respecto se reflejan en el caso de los lugares sagrados mayas, cuyo registro, administración y preservación implica la delimitación y reconocimiento, así como el establecimiento y adecuación de los regímenes de preservación con participación de los pueblos indígenas, y queda pendiente la redefinición del rol de las entidades del Estado, por lo que es necesario impulsar programas de sensibilización, difusión y educación, así como reconocer y respetar la institucionalidad de los guías espirituales y de sus organizaciones propias.

Otro tema derivado de los Acuerdos de Paz es la institucionalización de mecanismos obligados de consulta a los pueblos indígenas y de formas de participación individual y colectiva de los mismos en el proceso de toma de decisiones. Existe una serie de vacíos relativos a la participación política en la actual estructura del poder que no acaba de despuntar como una agenda nacional. Por ello, se requieren condiciones políticas que en otros regímenes democráticos ya han sido generadas.

Para el Estado es un desafío fundamental enfrentar los dramáticos niveles de pobreza en que vive la población. Si bien el ASESa no define una estrategia de reducción de la pobreza, es innegable que las políticas sociales a las que se refiere desempeñan un papel fundamental. Por ello, no pueden ser analizadas sin una referencia al contexto de pobreza extrema en que viven varios sectores de la población guatemalteca.

La situación de conflictividad agraria ha resultado un tema bastante difícil de incidir, al menos desde esta Unidad, ya que el problema es sumamente serio y requiere de una incidencia institucional en el ámbito nacional, aunado a esfuerzos de las diferentes áreas de la institución del PDH. En la coyuntura actual pocos son los avances, y las expectativas de muchos se ven truncadas ante los altos índices de inseguridad, violencia, crisis migratoria y aumento de la canasta básica frente a una cada vez más reducida capacidad adquisitiva. Hasta la fecha no se ha logrado definir e implementar de manera consensuada, como lo establece el ASESa, una política y una ley de desarrollo rural, derivada de dicho acuerdo.

Los Acuerdos son muy claros al decir que el tema de la tierra es fundamental para el desarrollo rural, sin embargo, está pendiente de abordar el tema agrario y la legislación correspondiente. Independientemente de que el sector agrícola contribuye cada día con menos porcentaje a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB) en el país, el tema agrario sigue siendo un tema pendiente de resolver en el mayor consenso posible. Tiene un peso social, económico y cultural.

Durante 2009 se dio seguimiento al tema de la educación, y en cuanto a los avances y perspectivas se concluyó que es necesario tomar las medidas necesarias para dar continuidad y acelerar el proceso de reforma educativa y promover el Proyecto de Ley de Reforma Educativa, lo cual deber ser llevado a la práctica por el Ministerio de Educación.

El esfuerzo que hizo el Gobierno para hacer accesible la educación pública a un mayor número de estudiantes de una forma completamente gratuita se enfrentó a la sobrepoblación estudiantil y la insuficiencia de recursos para atender a tantos estudiantes. El Programa Alternativo de Escuelas Abiertas proporcionó a la niñez y juventud guatemalteca que vive en áreas con altos índices de violencia, herramientas novedosas para su desarrollo integral así como alternativas viables a una situación de pobreza, violencia, delincuencia, falta de educación y oportunidades en general.

En cuanto a la calidad educativa, se debe partir de la premisa de que el ejercicio pleno del derecho a la educación consiste no sólo en asistir a un centro educativo, sino tener acceso a una educación de calidad, para

lo cual se requiere contar con maestros de calidad; esto implicaría reclutar a los candidatos más talentosos, formarlos de manera idónea e incentivar el buen desempeño de tal forma que se garantice la mejor educación posible. Por lo tanto, el financiamiento a las escuelas debe ser equitativo, para que todos los niños y niñas puedan gozar de una educación de calidad.

La vivienda es otro problema que afecta tanto al área rural como a los pobladores de áreas urbanas marginales: en la actualidad hay más de un millón de déficit de viviendas en el país, y esta cifra se incrementa cada año. La aplicación del 1.5% del presupuesto de ingresos tributarios, tal como lo establecen los Acuerdos de Paz en lo relativo a la vivienda popular, ha sido irregular y no aparece como una prioridad del Gobierno. Es importante tomar en cuenta los requerimientos de la población desarraigada, especialmente en el norte y en el occidente del país.

En agosto el Gobierno anunció la ejecución de un proyecto habitacional que requerirá de inversión pública y privada, para construir una ciudad de edificios con cinco mil apartamentos, en Barcenas, Villa Nueva, y otra de 10 mil viviendas populares en el municipio de San José del Golfo. Los terrenos de más de siete caballerías y que pertenecen al Ejército, serán comprados por el Estado a un costo aproximado de US\$35 millones. Con este proyecto se pretende beneficiar al 80% de empleados públicos que tengan un salario máximo de Q3,000.00 mensuales y a personas de escasos recursos.

En cuanto a los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud, red hospitalaria colapsada, desabastecimiento de medicamentos, falta de recurso humano y fondos insuficientes para atender la demanda creciente de los pobladores, se afrontó la emergencia que causó la influenza A H1N1, así como las complicaciones del dengue y la desnutrición aguda en el país. Los casos de desnutrición crónica y severa aumentaron 56% durante el año. El 90% corresponde a casos de desnutrición crónica y el restante 10% a desnutrición severa. Miles de guatemaltecos radicados en 4,059 comunidades en todo el país están en alto riesgo de padecer hambruna, como resultado de una caída de hasta 80 y 60% en sus cosechas de frijol y maíz, respectivamente. A principios de 2009, el PDH advirtió de la emergencia, pero sus recomendaciones no fueron atendidas.

Debido a los efectos de la crisis económica y la caída de la recaudación fiscal, el Ministerio de Salud tuvo un recorte de entre 10 y 15% en su presupuesto. Esta medida afectó los servicios hospitalarios en perjuicio de la población con menos recursos. Dirigentes del Sindicato de Médicos de Salud Pública manifestaron su rechazo por el recorte de Q375 millones al Ministerio. En septiembre la institución del PDH emitió una resolución sobre la violación del derecho a la salud, por las malas condiciones hospitalarias. Señaló falta de insumos básicos, medicamentos escasos y de mala calidad, hacinamiento, así como un aumento de denuncias de denegación de atención.

La falta de recursos en seguridad social afectará a los afiliados, sobre todo ahora que se le ha dado cobertura a las trabajadoras de casa. Para contrarrestar el déficit, el IGSS proyecta recuperar Q315 millones del monto que le adeudan el Estado, las municipalidades y las empresas privadas, luego de que aprobó la exoneración del cien por ciento de recargas, intereses por mora, multas por el atraso de pagos de las cuotas patronales y laborales. Esta deuda ascendía a Q15 mil 701 millones al 31 de marzo (*Prensa Libre*, 13 de julio de 2009).

Las estadísticas del IGSS reportan que el número de trabajadores afiliados se redujo en 6,764 en 2008, debido a las políticas de flexibilización laboral y los despidos que han afectado a algunos sectores debido a la crisis económica. Además, el Acuerdo 522 de la Junta Directiva del IGSS, emitido en 1972 en el marco constitucional anterior a la actual Carta Magna, excluye a altos funcionarios de cotizar en el seguro social; la PDH accionó ante la Corte de Constitucionalidad con respecto a dicho acuerdo que excluye de tributar a los funcionarios, lo cual no tiene fundamento legal y viola el principio de supremacía constitucional.

A las políticas laborales se les ha dado atención muy limitada, lo cual contrasta con la gravedad de los problemas de esta naturaleza. Esto se evidencia en el bajo volumen de los recursos humanos y materiales que

asigna el Estado a las políticas laborales y en la poca importancia que tienen estos asuntos en la agenda política de la actual administración. Igualmente se observa la debilidad de la Inspección Nacional de Trabajo en la contratación y sanción de las violaciones de las normas laborales. La fijación del salario mínimo es objeto de prácticas dilatorias por parte del sector empresarial, sin que el Gobierno aplique la función tutelar de las normas laborales, a pesar del evidente deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y el aumento de la inflación.

Al tema de seguridad y justicia, la USAP le ha dado seguimiento desde el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), observando el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Procurador de los Derechos Humanos en 2005, a través del informe *Seguridad y justicia en tiempos de Paz*, el cual da cuenta del cumplimiento e institucionalización de los compromisos contraídos por el Estado en la firma de los Acuerdos de Paz. Algunas de esas recomendaciones todavía no han sido observadas.

Recomendaciones al Organismo Ejecutivo

En relación con la recomendación dirigida al Organismo Ejecutivo de “Fortalecer el proceso de creación del Sistema Nacional de Seguridad, como punto de partida para articular la política estatal relativa a la materia, bajo la conducción y responsabilidad de instituciones estatales de naturaleza civil y con participación de la sociedad en su conjunto”, es necesario reconocer la aprobación del Decreto Legislativo 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que tuvo a bien sancionar el Ejecutivo. Sin embargo, la implementación del Sistema Nacional de Seguridad y buscar la solución a la problemática de la inseguridad no se ha desarrollado con la celeridad que se merecen los guatemaltecos.

En cuanto a la recomendación de “Promover la estabilidad jurídica, funcional y financiera del Consejo Asesor de Seguridad (CAS) y de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), mediante leyes orgánicas que eviten que su funcionamiento y las asignaciones presupuestarias que garantizan su existencia dependan de la discrecionalidad del gobernante de turno”, en el caso de la SAE, el Decreto Legislativo 18-2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad da soporte jurídico volviéndola Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, siendo la responsable de producir la inteligencia en los campos estratégicos, respetando el ámbito de competencia de las demás instituciones del sistema. Su naturaleza es civil y actúa bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República. El CAS no cuenta con la misma suerte, en tanto que no existe iniciativa alguna en el Congreso de la República y el Ejecutivo no ha emprendido esfuerzos para proveer sustento jurídico a esta institución, manteniendo su estatus inestable y sujeto a la discrecionalidad de los gobiernos de turno. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad excluye totalmente al CAS en cuanto a definir esfuerzos para crear los mecanismos operativos entre ministerios y otras autoridades para garantizar que toda decisión en materia de seguridad sea conocida y discutida por el CAS, a efecto de garantizar que coincida con la visión de seguridad integral de los Acuerdos de Paz, lo que excluye la militarización de la seguridad interna.

En las recomendación sobre “Iniciar la toma de decisiones administrativas y la planificación operativa del traslado de los registros de armas del DECAM al Ministerio de Gobernación, tomando en consideración que aunque un decreto legislativo no es condición para dar inicio al proceso, puede contribuir en la sustentabilidad del mismo”, el Decreto 15-2009 Ley de Armas y Municiones, si bien representa un avance en el cumplimiento de la agenda legislativa propuesta por los Acuerdos de Paz, el hecho que la Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- sea una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional es un retroceso en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Sobre la recomendación de “Proponer al Congreso de la República los anteproyectos de ley que sean necesarios para fortalecer la función del Programa Nacional de Resarcimiento, entre ellos una ley que reconozca el estatus jurídico de ausencia por desaparición forzada, una ley de exhumaciones y una ley que institucionalice dicho programa”, el Ejecutivo no ha puesto mayor atención a la iniciativa que se discutió y consensuó con las organizaciones de víctimas, si bien participó en las reuniones iniciales, dejó de asistir. En este momento la Iniciativa de Ley 3551 Ley del Programa Nacional de Resarcimiento se discute en el Pleno

del Congreso y el proceso está en segunda lectura. Diversas organizaciones de derechos humanos impulsaron la iniciativa 3590 Ley de la Comisión de Búsqueda de Personas, Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición, la cual contaba con dictamen favorable de la Comisión de Finanzas, sin embargo, el tiempo transcurrido sin que la conozca el pleno hace que pierda validez y se tenga que presentar una nueva iniciativa.

Acerca de la recomendación de “Realizar acciones concretas para afrontar el compromiso de desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y el impulso de controles estrictos para la prestación de los servicios privados de seguridad”, el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el 12 de diciembre de 2006, y se da su creación como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de un número limitado de casos delicados y difíciles, con la intención de probar el funcionamiento de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, y efectuar su desmantelamiento. El Acuerdo fue ratificado por el Congreso de la República por medio del Decreto Legislativo 35-2007, y en abril último se le dio una prórroga por dos años; de esa cuenta el mandato de la CICIG termina en septiembre de 2011. Entre el trabajo de la CICIG se encuentran ocho procesos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sin embargo, hasta el momento no hay sentencias en ningún caso. Los esfuerzos de control sobre las empresas de seguridad privada son muy escasos, ya que el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, da seguimiento al tema pero no tiene los recursos materiales ni humanos para desarrollar esta función, en relación con la legislación necesaria, tampoco hay esfuerzos suficientes para mejorar la normativa existente.

Recomendaciones al Organismo Legislativo

Sobre la recomendación “Poner énfasis en la aprobación de las iniciativas de ley que tiendan a la agilización de procesos dentro del sistema de justicia, entre las que se encuentran la Ley de Creación del Instituto Nacional de Ciencias e Investigaciones Forenses (INACIF) y las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”, el Organismo Legislativo aprobó el Decreto 32-2006 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, sin embargo, la asignación presupuestaria no ha sido la idónea. Sobre las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el Congreso de la República conoce la Iniciativa 3319, la cual está a la espera de dictamen.

Recomendaciones a las instituciones de justicia

Sobre la recomendación “Impulsar, a través de la CSJ o del Organismo Ejecutivo, la presentación de la iniciativa de Ley de Carrera Fiscal, a efecto de fortalecer al Ministerio Público”, varias organizaciones sociales especializadas en seguridad y justicia promovieron la discusión de una iniciativa para reformar el Decreto Legislativo 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público. En dichas reformas se pretende institucionalizar la carrera fiscal, la iniciativa fue presentada en agosto de 2009 al Congreso de la República por diputados pertenecientes a la Junta Directiva del Congreso y consensuada con el Ministerio Público y la sociedad civil; actualmente está pendiente de dictamen en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La institucionalización de los Acuerdos de Paz se da en el ámbito formal, sin embargo, en el ámbito real de dar solución a las diferentes problemáticas es poco lo avanzado; situaciones como el fortalecimiento a las instituciones de seguridad y justicia avanzan muy lento, ejemplo de esto lo vemos en una Policía Nacional Civil desgastada y sin credibilidad, el fortalecimiento a los procesos de formación profesional son escasos, la Academia de la PNC apenas da nueve meses de capacitación a los aspirantes a policía y todavía no existe una academia para oficiales. En el tema presupuestario, los Acuerdos de Paz proponían el fortalecimiento a la PNC en relación con el Ejército, no obstante en 2008 una ampliación presupuestaria que se dio a través del Decreto 51-2008 asignó más recursos de la siguiente manera: al Ministerio de Gobernación, Q10, 000,000; al Ministerio de la Defensa Nacional, Q26, 000,000; a la Seguridad Ciudadana (Fondo de Emergencia), Q5,000,000; y a los Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Q21,000,000.

Junto con la inobservancia de los Acuerdos de Paz en materia de asignación presupuestaria, los índices de homicidios aumentaron, según datos de la PNC en 2007, el número de homicidios fue de 5,781, para 2008 sucedieron 6,292 y hasta el 30 de septiembre de 2009, hubo 4,878 homicidios. Por otro lado, la sociedad civil, sobre todo las organizaciones especializadas en seguridad, han emitido infinidad de opiniones en contra de la utilización del Ejército en tareas de seguridad ciudadana, sin resultados positivos, ya que la institución castrense continúa participando en esa tarea, contraviniendo los Acuerdos de Paz. La normativa del ejército es un tema todavía pendiente en la agenda legislativa de la Paz, ya que los Acuerdos llaman a la revisión de dicha normativa para asignar exclusivamente el tema de la seguridad ciudadana a la Policía Nacional Civil.

Otros componente del sector de seguridad es el Sistema Penitenciario, el cual pareciera por momentos olvidado: la situación de hacinamiento y condiciones inadecuadas en las que permanecen todos los centros es una situación reiterativa, y es preocupante la forma en la que se organizan los centros de detención, ya que el Estado no tiene el control total de los centros carcelarios, además falta personal especializado, el cual tiene que ser totalmente de carácter civil para la atención de esos centros. Aquí el tema presupuestario es importante, ya que lo acontecido en las cárceles repercute en la seguridad de todos los guatemaltecos, sin embargo, tampoco hay avances reales en ese sentido ni en equipamiento para los agentes del sistema penitenciario, ni mejoras y mantenimiento de los centros carcelarios.

En el ámbito del sector justicia son plausibles los esfuerzos en el proceso de selección y elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, pero no todas las observaciones hechas por la CICIG y la sociedad civil fueron tomadas en cuenta por los diputados, reforzando el sentimiento de incredulidad en esa institución. En relación con la inclusión y reconocimiento del derecho consuetudinario, los esfuerzos aún son muy pocos y sin resultados positivos para la inclusión.

Como Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz de la institución del PDH nos preocupa el lento avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, sobre todo cuando es evidente que en la mayoría de casos se debe a la falta de voluntad política, por ello es necesario, desde la sociedad civil y la ciudadanía en general, la insistencia y exigencia del cumplimiento efectivo de los Acuerdos de Paz.

ACCIONES EMPRENDIDAS

Para la verificación del cumplimiento del Programa Nacional de Resarcimiento, se realizó una visita a las comunidades Estancia de la Virgen y Chuatulum, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, donde se pudo obtener, mediante entrevistas a la comunidad, su opinión con respecto a dicho programa. En cuanto al papel que el PNR está realizando, hay malestar y frustración generalizados, ya que no cumplen con el resarcimiento, mismo que consideran no ha sido justo y piden que se complete con proyectos de vivienda, los cuales fueron ofrecidos desde hace más de cuatro años. En la comunidad de Chuatulum están pendientes 60 solicitudes y en la Estancia de la Virgen, 94 solicitudes de viviendas, según el Resarcimiento del Proyecto de Viviendas. Uno de los problemas es la cantidad de requisitos para ser resarcidos, las personas se enfrentan a la dificultad de reunir toda la documentación necesaria y la inversión de tiempo y dinero para ello. Asimismo, todas las personas entrevistadas manifestaron que sólo han recibido resarcimiento económico, lo cual no llena sus expectativas.

Con la finalidad de presentar y discutir la Iniciativa de Ley N° 3551 del Programa Nacional de Resarcimiento, se participó en un taller en el municipio de Flores, Peten, con líderes de las víctimas del conflicto armado interno. En dicho taller se recomendó dar atención profesional y humana con calidad técnica a todos los casos de violaciones individuales y colectivas de los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Se tuvo acceso al monitoreo que PRODESSA realizó en La Libertad, Petén; Chisec, Alta Verapaz; Ixcán y San Bartolomé, Quiché; y Santa Lucía Utatlán, Sololá, para verificar los efectos inmediatos derivados de la

medida que el Gobierno implementó este año en cuanto al cumplimiento de la gratuidad en la educación pública.

LOGROS

- El Procurador de los Derechos Humanos, como único ente no gubernamental con reconocimiento y legitimidad para pronunciarse e iniciar acciones ante la difícil situación por la que atraviesan los derechos humanos en general, tiene la credibilidad de los guatemaltecos y lo posibilita para abanderar y hacer suyas las demandas de los diferentes sectores vulnerables.
- La presencia del PDH permitió que el Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz (CNAP) mantenga sobre la mesa de discusión los temas sustantivos de los Acuerdos de Paz, y la exigencia de que cumpla con el espíritu y razón de ser de esta instancia.
- La promoción y divulgación del contenido de los Acuerdos de Paz en los espacios en que se trabajó permitieron despertar el interés y el compromiso para exigir el cumplimiento de los mismos, tanto en la comunidad educativa como con las organizaciones de la sociedad civil.
- Se logró la iniciativa de Ley del PNR que actualmente se encuentra en el Congreso de la República pendiente de aprobación. En esta actividad fue destacado el papel de la USAP.

ACTIVIDADES

Promoción y divulgación de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos

Con el fin de divulgar el contenido de los Acuerdos de Paz y sensibilizar a la población en la importancia de su cumplimiento en la exigencia de su cumplimiento, se distribuyeron los siguientes documentos: Acuerdos de Paz: un compromiso para el cambio (413), Síntesis, antecedentes, contenidos y perspectivas de los Acuerdos de Paz (106), Desarrollo humano en tiempos de paz (627), Manual metodológico para la observación de los Derechos Humanos (726), Manual conceptual para la observación de los Derechos Humanos (431) e Indicadores (431).

Entre las diferentes actividades de promoción y divulgación de los Acuerdos de Paz están:

- Participación en las “Ferias Juveniles” de Quetzaltenango y la capital, organizadas por CONJUVE, dentro del marco de las “Jornadas Cívicas Constitucionales”, con el fin de promocionar la Constitución de la República, los Derechos Humanos y los Acuerdos de Paz.
- Con la finalidad de promover el contenido del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como despertar el interés por asumir un compromiso serio en la exigencia de su cumplimiento, se realizó el foro “Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”.
- Inauguración del programa “Jornadas Cívicas Constitucionales” el 24 de abril, junto con la Presidencia del Congreso de la República, la Asociación de Constituyentes y el Ministerio de Educación, con el objetivo de contribuir a la formación de estudiantes del nivel medio en el ejercicio de una ciudadanía plena y participativa que fortalezca la democracia y el Estado de Derecho. Se impartieron talleres en 40 establecimientos oficiales de diversificado, con la participación de aproximadamente 3,500 graduandos a quienes se les entregó, por parte de la PDH, un ejemplar de la Constitución de la República.
- A solicitud del Instituto Centro Estudiantil Tierra se realizó el video-foro “La verdad bajo la tierra”.
- Se realizó el foro “Ley de Idiomas Nacionales”, con el fin de dar a conocer los avances y perspectivas en cuanto a la oficialización de idiomas indígenas.
- Dentro de la jornada de sensibilización realizada por la USAP, se efectuaron las siguientes actividades:
 - ✓ Exposición didáctica y fotográfica del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
 - ✓ Conversatorio “Uso y tenencia de la Tierra”.
 - ✓ Foro “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria: avances y perspectivas”,
 - ✓ Tarde de música y poesía.

- Participación en el proyecto de formación ciudadana, en coordinación con el MINEDUC, Gobernación Departamental y Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
- Taller sobre Acuerdos de Paz en el Instituto por Cooperativa de Santa Catarina Pinula, en donde se pudo socializar el contenido de los Acuerdos de Paz con más de 185 estudiantes de dicho instituto.
- Con motivo del Día Nacional de la Juventud, se participó en la Feria de la Juventud en el Domo de la Zona 13, promoviendo los Acuerdos de Paz y se establecieron coordinaciones para procesos de capacitación en diferentes centros educativos.
- Un taller sobre Acuerdos de Paz en Huitán, Quetzaltenango, con el objetivo de retomar los antecedentes históricos y contexto en el que se desarrolló la suscripción de diferentes acuerdos, el contenido, avances e institucionalización de algunos compromisos y, por último, la agenda pendiente, lo correspondiente al Estado y la sociedad civil para lograr la Paz en toda su dimensión.
- Como miembros del Comité 17 de Octubre se conmemoró el Día Mundial del Rechazo a la Miseria, realizando las siguientes actividades: cambio de la Rosa de la paz, caminata y foro “Balance de la gratuidad en la educación”.

Incidencia política

Entre el trabajo de incidencia y seguimiento al proceso de cumplimiento e institucionalización de los Acuerdos de Paz, la USAP ha participado de manera proactiva en el seguimiento a la agenda legislativa que proponían dichos acuerdos, con el compromiso de recomendar y velar porque toda iniciativa discutida en el seno del CNAP contenga y privilegie el espíritu de pleno respeto a los derechos humanos, así como lo dispuesto en los Acuerdos de Paz.

Es por eso que la USAP ha participado en los diferentes procesos que el CNAP ha establecido para la revisión y discusión de la agenda legislativa de la paz, propuesta por los Acuerdos, desde donde se establecen diferentes esfuerzos para este proceso, siendo uno de ellos la implementación de mesas técnicas² para la discusión de las diferentes iniciativas y seguimiento a la implementación de las normativas ya existentes.

La USAP participa en las diferentes comisiones del CNAP, donde cada una da seguimiento a lo concerniente a cada comisión.

- En relación con la Comisión de Multiculturalidad e Interculturalidad los esfuerzos en materia de agenda legislativa fueron: iniciativa de Ley para los Lugares Sagrados, discusión sobre la Universidad Maya, reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales, Ley del Programa Nacional de Resarcimiento, Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas.
- En cuanto a la Comisión de Desarrollo Económico y Social, los esfuerzos en materia de agenda legislativa fueron: iniciativa de Ley para el Desarrollo Rural Integral, discusión sobre Reforma Tributaria, Ley de Inversión Social.
- En lo referente a la Comisión de Reformas al Estado, los esfuerzos en materia de agenda legislativa fueron: reformas a la Ley Orgánica de la PNC, Ley del Servicio Civil, Ley de Orden Público, Ley de Inversión Social, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley del Programa Nacional de Resarcimiento, reformas constitucionales.
- Los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia en materia de agenda legislativa fueron: Ley de Armas y Municiones, Ley de Empresas y Servicios de Seguridad Privada, reformas a la Ley de la PNC, Ley del Consejo Nacional de Seguridad, reformas a la Ley Constitutiva del Ejército, Ley del Consejo Asesor de Seguridad, seguimiento a la Ley de Acceso a la Información, Ley de Archivos, Ley de la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición.

² Las masas técnicas son espacios donde participan los diferentes sectores que integran el CNAP, además de la participación de un moderador experto en el tema, así como diferentes organizaciones sociales especializadas en la temática, la duración de las mesas técnicas varía, pero por lo general no dura menos de tres meses.

Otros espacios de incidencia fueron: IEPADES, UNICPAS, CNFSJ, Colectivo Alternativa Educativa, Comité 17 de Octubre, Asociación de Constituyentes de Guatemala, CONJUVE.

Los logros obtenidos están encaminados a impulsar el contenido de los Acuerdos de Paz, siendo muy importante la presencia de la institución del PDH en estos espacios de incidencia, en los que se toman en cuenta las observaciones del Magistrado de Conciencia o sus representantes.

PROYECCIONES Y EXPECTATIVAS PARA 2010

Para la USAP el mayor reto consiste en fortalecer esta instancia, que recobre el carácter prioritario para la institución, partiendo de un proceso de sensibilización interna que promueva el compromiso institucional en la promoción y exigencia de los compromisos sustantivos de los Acuerdos de Paz y, de esta manera, con el apoyo de las unidades y áreas de la institución del PDH, hacer llegar esa sensibilización y compromiso a toda la República.

Es determinante el protagonismo del Procurador de los Derechos Humanos en el cumplimiento del mandato constitucional y su papel como garante del cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz, ya que no hay otra institución en el Estado a la que le corresponda ser el ente fiscalizador de las políticas públicas de la administración gubernamental.

Fortalecer la USAP con el número de personal requerido para poder dar un óptimo cumplimiento a su mandato, pues en las condiciones que se encuentra actualmente no es posible desarrollar el protagonismo que le corresponde.

El escenario para los próximos años no es nada alentador, ya que al panorama actual de inseguridad pública y violencia se suma la ausencia de políticas públicas de carácter estructural para una transformación de fondo en los aspectos socioeconómicos.

La USAP fortalecida permitirá cabildar y presionar a las instancias encargadas de legislar y hacer cumplir la ley, no permitiendo que se favorezca a intereses de sectores particulares y que el PDH juegue un papel de absoluto liderazgo frente a la sociedad civil y de fiscalizador frente al poder público.

Desarrollar una campaña nacional para armonizar los compromisos de los Acuerdos de Paz, las Metas del Milenio y la visión del desarrollo humano integral.

Incidir, a través del CNAP, en la aprobación de la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral presentada por las organizaciones sociales, pues es la única que recoge los compromisos sustantivos derivados de los Acuerdos de Paz en materia de desarrollo rural, además, coincide con los planteamientos de los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Guatemala, como el Convenio 169 de la OIT, y con las Metas del Milenio de las Naciones Unidas.

Contribuir al cumplimiento de la Agenda de la Paz pendiente en sus aspectos sustantivos, así como mantener la observación de los avances en el cumplimiento de los compromisos que se atendieron en 2009, como: educación, salud, PNR y agenda legislativa.

Dirección de Educación y Promoción



Dirección de Educación y Promoción

Presentación

La educación en derechos humanos es fundamental para la construcción de una cultura de paz, siendo necesario que la familia, la escuela y la sociedad asuman un papel trascendental en la construcción de una conciencia individual y colectiva de la ciudadanía, actores fundamentales de la democracia y el desarrollo social.

Por esta razón, es deber del Estado darle direccionalidad a la educación de manera que se fortalezca el respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales para desarrollar plenamente la personalidad desde la niñez, promoviendo la comprensión, la tolerancia, la igualdad y el respeto a la diversidad humana para fomentar y mantener la paz.

En este sentido, al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) como defensor del pueblo, se le ha otorgado la atribución de salvaguardar y promover los derechos humanos, con la claridad de instrumentalizarlos como un medio para la construcción de una sociedad democrática que por sí misma procure un Estado de Derecho, en el cual toda la población guatemalteca logre su reconocimiento e incorporación a la nación.

Misión

La Dirección de Educación y Promoción es la instancia del Magistrado de conciencia, que a través de la educación en derechos humanos promueve e incide en la transformación social para la dignificación de la persona humana, la vigencia de los derechos fundamentales y la cultura de paz.

Visión

La Dirección de Educación y Promoción de la institución del PDH es el ente responsable de generar e implementar la política institucional de educación y promoción en derechos humanos, incidiendo en la transformación de la realidad a favor de la dignidad, la plena vigencia de los derechos humanos y la construcción de un estado justo, equitativo e intercultural.

Objetivo general

Promover por todos los medios idóneos, el conocimiento, la vivencia y la protección de los derechos humanos a través de diferentes actividades de educación y promoción, en coordinación con entidades y organismos gubernamentales y no gubernamentales, con el propósito de concienciar a la población acerca de los derechos humanos y a favor de su dignidad plena, incidiendo en la transformación de la realidad nacional para la construcción de un Estado justo, equitativo e intercultural.

Objetivos específicos

- Fomentar una cultura democrática, de diálogo y armonía por medio de la educación y promoción en derechos humanos.
- Ampliar la divulgación, promoción y difusión pública del quehacer de la institución del PDH a la mayoría de los sectores de la sociedad guatemalteca.
- Fortalecer el rol de la institución del PDH como instancia de supervisión de la incorporación de la educación en derechos humanos en el Sistema Educativo Nacional.
- Promover lineamientos de políticas públicas en materia de educación en derechos humanos.
- Propiciar los vínculos de coordinación entre las direcciones de Educación y Comunicación Social para la promoción, sensibilización e incidencia en los niveles de credibilidad y de posicionamiento de la institución del Ombudsman en la opinión pública, de manera eficiente y eficaz para alcanzar la visión y la misión del Procurador de los Derechos Humanos.

Fundamento legal

- Constitución Política de la República de Guatemala.
- Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala y del Procurador de los Derechos Humanos, Decretos No. 54-86 y 32-87.
- Procurador de los Derechos Humanos, Acuerdo No. 87-90, Capítulo XI, Institucionalización del Departamento de Promoción y Educación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
- Procurador de los Derechos Humanos Acuerdo SG-03/2000, Capítulo IV, Reestructuración Institucional: Área de Educación Formal, Educación No Formal, Biblioteca, Área de Publicaciones, Comunicación y Reproducción, artículos del 49 al 57 y 59.
- Acuerdo Número SG-010/2009, institución del Procurador de los Derechos Humanos, Reestructuración Institucional.
- Acuerdo Específico SG-020-2009, institución del Procurador de los Derechos Humanos, Reestructuración de la Dirección de Educación y Promoción.

Funciones y atribuciones

- Coordinar y dirigir la elaboración del Plan Estratégico de la Dirección generando lineamientos de trabajo para la elaboración del Plan Operativo Anual con base en el Plan Marco de trabajo del Procurador y la realidad local y nacional.
- Diseñar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de la educación y promoción de los derechos humanos.
- Coordinar con la Dirección de Auxiliaturas Departamentales, Dirección de Defensorías y otras unidades afines la inclusión de lineamientos de agenda nacional relativos al derecho a la educación académica y en derechos humanos.

Antecedentes

La Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Capítulo III, Artículo 18, contempla la creación del Departamento de Educación y Promoción.

En 1987 inicia su funcionamiento con dos áreas para la promoción y educación en derechos humanos, así como la Biblioteca y Centro de Documentación “Gonzalo Menéndez de la Riva”. El Área de Educación No Formal, con el objetivo de educar en derechos humanos a los sectores de la población, ajenos al sistema escolarizado (funcionarios y empleados públicos, líderes comunitarios, líderes sindicales, comadronas, dirigentes de CICODES) destacándose el programa de fortalecimiento a las organizaciones sociales y el fortalecimiento a la organización comunitaria. Mientras que el Área de Educación Formal se orientó a las acciones educativas en derechos humanos a docentes, padres y madres de familia, niñez y juventud en el Sistema Educativo Nacional, Academia de la Policía Nacional y el Ejército de Guatemala.

En 1990, se institucionaliza formalmente el Departamento de Promoción y Educación. En 2000 se hace una reestructuración institucional con la cual el Departamento de Educación queda conformado de la siguiente forma: Área de Educación Formal, Área de Educación No Formal, Biblioteca y Área de Publicaciones, Comunicación y Reproducción.

En 2008, en el Departamento de Promoción y Educación se da un proceso de reingeniería en el que se conforman las siguientes unidades: Unidad de Incidencia Educativa, Unidad de Promoción y Eventos, Unidad de Investigación Educativa, de Radio, de Televisión, de Biblioteca y Centro de Documentación “Gonzalo Menéndez de la Riva”.

A partir de 2009, con el Acuerdo Específico Número SG-020/2009, se inicia como Dirección de Educación y Promoción, con la estructura organizativa siguiente: Unidad de Incidencia Educativa, Unidad de Cultura de Derechos Humanos, de Producción Televisiva, de Producción de Radio, de Biblioteca y Centro de Documentación.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

- 1. Director/a**
 - 1.1. Asesor/a
 - 1.2. Asistente técnico
 - 1.3. Secretaria asistente
- 2. Unidad de Incidencia Educativa**
 - 2.1. Jefe/a
 - 2.2. Secretaria
 - 2.3. Educadores y educadoras
- 3. Unidad de Cultura de Derechos Humanos**
 - 3.1. Jefe/a
 - 3.2. Secretaria
 - 3.3. Educadores y educadoras
- 4. Unidad de Producción Televisiva**
 - 4.1. Jefe/a
 - 4.2. Editor/a camarógrafo/a
- 5. Unidad de Producción de Radio**
 - 5.1. Jefe/a
 - 5.2. Editor grabador
- 6. Unidad de Biblioteca y Centros de Documentación**
 - 6.1. Jefe/a
 - 6.2. Bibliotecario/a
 - 6.3. Asistente técnico
 - 6.4. Secretaria asistente

Unidad de Incidencia Educativa

La incidencia educativa se ha generado a través del acercamiento a autoridades ministeriales y el seguimiento a la implementación de la educación en derechos humanos; la misma ha sido atendida mediante el desarrollo de procesos formativos y atención a capacitaciones no planificadas con diferentes grupos objetivos, especialmente con docentes, estudiantes, padres de familia, fuerzas de seguridad y líderes comunitarios.

Objetivo de la Unidad

Fortalecer el rol de la institución del PDH como instancia de supervisión del derecho a la educación y la incorporación de la formación en Derechos Humanos en el Sistema Educativo Nacional.

Acción realizada	Logros	Productos
Diplomados en Derechos Humanos Dirigido a: <ul style="list-style-type: none"> maestros, activistas PRO-VIH/SIDA, Hospital Roosevelt 	Sensibilización y capacitación de grupos objetivo estratégicos.	210 personas graduadas 476 personas estudiantes de diplomado (a graduarse en 2010)
Procesos formativos en derechos humanos <ul style="list-style-type: none"> A personal de Casas del Niño Para padres usuarios de Casas del Niño. A docentes de la Escuela Estado de Israel. En desarrollo de liderazgo a estudiantes de Escuelas Normales. A docentes de escuela El Quintanal, zona 6. A funcionarios del Ministerio Público. A trabajadores del INFOM. Seis procesos formativos “Escuelas para Padres” en centros educativos de nivel primario: República de El Salvador, República de Argentina, Escuela “Adolfo Vides” y El Quintanal.	Sensibilización y capacitación de grupos objetivo estratégicos.	161 personas participantes 723 personas participantes 15 personas participantes 250 personas participantes 16 personas participante 30 personas participantes 25 personas participantes 600 personas
Total de actividades realizadas: 3 diplomados y 13 procesos formativos		2,506 personas participantes
Actividades realizadas por demanda directa (fuera de Plan Operativo Anual 2009):		
Acción realizada	Logros	Productos
Conferencias	Información sobre temas de derechos humanos	3,444 personas atendidas
Talleres de sensibilización referente a temas de derechos humanos	Sensibilización de grupos objetivos	

Unidad de Cultura de Derechos Humanos

La expresión artística es una forma concreta para fortalecer la manifestación de los sueños, alegrías y sufrimientos de las personas. Para tal efecto, el PDH, a través de la Unidad de Cultura de Derechos Humanos impulsa el festival “Expresemos Nuestros Derechos” en escuelas del nivel primario y el Certamen de Oratoria y Declamación con jóvenes del nivel básico, marco en el que también se inscribe la elección de Niño(a) Procurador(a) por un año, para promover e incidir en la niñez y juventud guatemalteca, la participación ciudadana y el liderazgo infantil y juvenil, promoviendo sus derechos humanos.

Objetivo de la Unidad

Ampliar la divulgación, promoción y difusión pública del quehacer de la institución del PDH a todos los sectores de la sociedad guatemalteca.

Acción realizada	Logros	Productos
43 elecciones sectoriales del Niño(a) Procurador(a) por un año en 11 municipios.	Sensibilización para conocer la realidad de los derechos de la niñez.	33 niños participando en su calidad de Niños(as) Procuradores y sus respectivos Procuradores Adjuntos.
Desarrollo de dos talleres de construcción de normas de actuación con los Niños(as) Procuradores(as) de 2008.	Participación de Niños y Niñas Procuradores y Procuradoras en actividades conmemorativas: Independencia y Día del Niño.	795 niños y niñas participando en las eliminatorias de Niño y Niña procurador. 265 escuelas participando en el proyecto. 66 padres de familia apoyando los procesos

Acción realizada	Logros	Productos
Taller “Comunicación eficaz” impartido por la Dirección de Comunicación Social	Coordinación efectiva con el MINEDUC a través de las Direcciones Departamentales. Promoción y educación de los Derechos Humanos. Intervención plena de actores directos de la comunidad educativa.	de los Niños(as) Procuradores(as) y Adjuntos.
Exposiciones de dibujos en diferentes sectores educativos	Participación artística de estudiantes de nivel primario con dibujos sobre la vivencia de sus derechos humanos.	4,000 dibujos realizados por estudiantes de nivel primario.
Eliminatorias sectoriales de declamación y oratoria Final del Concurso de Declamación y Oratoria	Participación estudiantil del nivel básico en los concursos de declamación y oratoria. Final departamental del Concurso de Declamación y Oratoria.	41 eliminatorias sectoriales de declamación y oratoria Exposición de los dibujos elaborados por los niños (Ciudad Quetzal) y Villa Canales. Final del Concurso de Declamación y Oratoria

Unidad de Producción Televisiva

Es la encargada de elaborar materiales para televisión, con el objetivo de dar a conocer a la población guatemalteca en general, la historia y proyección de las diferentes unidades que conforman la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Objetivo de la Unidad

Ampliar la divulgación, promoción y difusión pública, del quehacer de la PDH a todos los sectores de la sociedad guatemalteca.

Acción realizada	Logros	Productos	
“El Archivo” (45 minutos) Producción, marzo 2007	Relata el descubrimiento del Archivo de la Policía Nacional, deja constancia de los trabajos desarrollados en ese recinto e intenta proyectar las labores por realizar en el futuro en ese centro que contiene más de 80 millones de folios, lo cual hace que se le considere “el más grande de su tipo en América Latina”	Enero	6
		Febrero	12
		Marzo	6
		Abril	19
		Mayo	7
		Junio	1
		Julio	2
		Agosto	2
		Octubre	4
		Noviembre	2
		Diciembre	1
		Total	62
		<i>País</i>	
		EE.UU.	4
		España	10
		Colombia	8
		Total	22



“Emigrantes, con muchos sueños por cumplir” (30 minutos) Producción julio 2007	Presenta los padecimientos de ciudadanos guatemaltecos y centroamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro; las personas entrevistadas son indocumentadas, quienes durante su recorrido son víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales. La institución del PDH trabaja en la defensa de esos derechos y analiza las causas y efectos de la migración.	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Noviembre Diciembre Total <i>País</i> EE.UU. Guatemala Venezuela España México Chile Argentina Perú Alemania Canadá El Salvador Inglaterra Suiza Total	9 10 1 12 1 2 2 1 38 134 34 2 10 83 2 2 16 2 2 2 6 2 297
“20 años contra el abuso de poder” (10 minutos) Producción, agosto 2007	Resume las actividades desarrolladas por la institución del PDH durante 20 años de funcionamiento, y presenta algunos casos paradigmáticos atendidos desde su creación.		
“Solo quiero una oportunidad” (10 minutos) Producción, octubre 2007	Presenta la difícil situación económica que atraviesan algunas familias que viven en asentamientos de la ciudad capital; las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que viven les dificultan salir adelante, situación por la cual todo lo que piden es: tener una oportunidad.	Enero Marzo Agosto Noviembre Diciembre Total <i>País</i> EE.UU. Guatemala Venezuela España México Paraguay Chile Colombia Perú Brasil Total	3 3 1 2 1 10 24 31 1 5 8 1 1 1 3 1 76
“Recopilación de cuatro documentales” (60 minutos) Producción, marzo 2008	Contiene los audiovisuales • Emigrantes • 20 años contra el abuso de poder. • Derecho a la educación • Informe anual	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	15 10 9 4 9 12 5

		Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total	3 1 21 2 91
“Informe Anual Circunstanciado” (10 minutos) Producción, enero 2008	Resume la presentación hecha por el señor Procurador de los Derechos Humanos del Informe Anual Circunstanciado 2007, a los diputados al Congreso de la República.	<i>País</i> EE.UU. Guatemala Colombia Perú Total	1 9 1 1 12
“Derecho a la educación” (10 minutos) Producción, febrero 2008	Muestra la dificultad que afrontan algunas madres para inscribir a sus hijos e hijas en centros educativos públicos, la problemática es más sensible ante la obligación de dar contribuciones para diversas celebraciones, hasta llegar al extremo de prohibir el ingreso si los alumnos no portan uniforme, con lo cual se evidencia la violación del derecho a la educación.	I PARTE México Perú Costa Rica Colombia Ecuador Venezuela Argentina EE.UU. España Chile Francia Total	150 18 18 15 14 12 10 10 6 3 2 258
“Dónde quedó la justicia” (30 minutos) Producción, abril 2008 (Se cuenta con una versión de 15 minutos)	Saca a luz la crítica situación por la que atraviesan personas afectadas por la quiebra de los bancos del Comercio y del Café; documenta las violaciones a sus derechos y las acciones emprendidas desde la institución del PDH en defensa de los afectados.	Enero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Noviembre Diciembre Total	2 4 1 1 1 1 2 1 13
“No soy saludable, estoy triste” (30 minutos) Producción, julio 2008 (Se cuenta con la versión subtitulada a los idiomas inglés y alemán, además una versión de 15 minutos)	Presenta los padecimientos que afrontan familias afectadas por casos de desnutrición en seis departamentos de Guatemala. Las personas entrevistadas exponen los principales problemas que enfrentan para adquirir alimentos; expertos en la temática de nutrición y desnutrición analizan las causas y los efectos de esta problemática, que afecta a más del 50% de niños en el país.	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total <i>País</i> EE.UU. Guatemala Venezuela España México Francia Chile Argentina	15 12 7 21 21 14 31 11 3 40 2 1 178 404 366 3 20 37 2 2 2

		Colombia Perú Alemania Senegal Canadá El Salvador Uruguay Brasil Total	15 28 14 3 8 2 2 2 910
“Recopilación de 2 documentales” (60 minutos) Producción, agosto 2008	Contiene los audiovisuales <ul style="list-style-type: none"> • “¿Dónde quedó la justicia?” • “No soy saludable estoy triste” 	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Total	5 2 1 18 6 2 2 1 2 39
Obra de teatro “Un enemigo del Pueblo” (90 minutos) Producción, septiembre 2008	Basada en la obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, hace un llamado a la conciencia en los temas de medio ambiente y derecho a la salud.	Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Total	5 4 4 5 10 5 33
“Aún guardamos la esperanza” (20 minutos) Producción, febrero 2009	Resume la vida del dirigente sindical Edgar Fernando García, quien fue capturado el 18 de febrero de 1984 durante un operativo en el que participaron integrantes de la Policía Nacional; desde ese momento sus familiares le han buscado, pero a la fecha no tienen noticias de su paradero.	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total	22 523 40 10 4 1 4 134
“Derechos humanos, los grandes desafíos” (10 minutos) Producción, febrero 2009	Presenta los principales desafíos en materia de derechos humanos afrontados durante el año 2008 y proyecta las principales problemáticas que podrían afrontarse en 2009, las cuales derivan de los monitoreos hechos por la institución del PDH.	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total	6 28 2 2 1 21 1 61
“No tengo donde llevarle una flor” (14 minutos) Producción, marzo 2009	Narra la vida de la maestra Judith Marlene Gularte Paredes, quien desapareció el 5 de junio de 1981. Documenta las vivencias de familiares y ex compañeras de trabajo de la escuela Sara de la Hoz, colonia La Brigada, quienes aún claman por conocer su paradero.	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre Total	9 60 11 1 1 2 1 85
“El Derecho a Saber” (10 minutos) Producción, mayo 2009	Resume la presentación del informe de seguimiento a los trabajos desarrollados en el Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional.	Mayo Junio Julio Agosto Total	10 14 1 2 27
“Luchamos contra el olvido. Ellos lucharon por una sociedad más	Recuerda la vida de Irma Hicho, Héctor Interiano, Carlos Cuevas, Gustavo Castañón, Otto Estrada y	Mayo Junio	1 119

humana” (28 minutos) Producción, junio 2009	Amilcar Farfán, quienes desaparecieron en mayo de 1984 cuando formaban parte de la dirigencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Desde ese momento sus familiares los han buscado, pero a la fecha no tienen noticias de su paradero.	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total	3 17 2 33 3 1 179
Derechos humanos y el VIH en Guatemala” (25 minutos) Producción, noviembre 2009	Contiene el testimonio de niños, mujeres y hombres portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), quienes narran sus experiencias luego de haber adquirido el virus, destacando que la discriminación y estigma es lo que más les afecta. Educadores y expertos en la temática comparten sus sentimientos respecto al VIH y al SIDA.	Noviembre Diciembre Total	125 253 378
Los retos de la educación bilingüe” (19 minutos) Producción, octubre 2009	Contiene el relato de maestros, directores, supervisores y expertos en educación bilingüe e intercultural, sobre los avances y dificultades que existen en Guatemala para el desarrollo de la educación en idiomas mayas y con pertinencia cultural. Desde octubre de 2009 se cuenta con la versión preliminar.	Octubre Total	10 10
“Spot, prevención de invierno” pocomchi’ Producción, mayo 2008		Guatemala EE.UU. Países Bajos Total	3 2 1 6
“Spot prevención de invierno” kaqchiquel Producción, mayo 2008		EE.UU. Guatemala Total	3 1 4

Unidad de Producción de Radio

Es la Unidad encargada del desarrollo de tareas a favor de la promoción en derechos humanos en el ámbito radiofónico.

Acciones realizadas

- Se proyectó la realización del Programa Permanente de Formación en Comunicación dirigido a los oficiales de Comunicación y Eventos Institucionales de las Auxiliaturas Departamentales.
- En el apoyo a las actividades (eventos) que realizaron las diferentes Defensorías, Direcciones y Oficinas Específicas, se contempló la difusión radiofónica por medio de campañas y programas.
- En la difusión externa, se continuó con la transmisión del programa educativo “El Abc de los Derechos Humanos” en Radio Universidad (92.1 FM), en la red de radiodifusoras departamentales y las ubicadas en los mercados cantonales del municipio de Guatemala.

Logros

- En el Programa Permanente de Formación en Comunicación dirigido a los oficiales de Comunicación y Eventos, se contempla la distribución y monitoreo de materiales radiofónicos de divulgación, promoción y difusión pública del quehacer de la institución del PDH.
- Con respecto de las radiodifusoras que transmiten en circuito cerrado en los mercados cantonales del municipio de Guatemala, se logró conformar una red de diez emisoras que, desde mayo, transmiten dentro de su programación regular campañas educativas e informativas sobre las actividades de esta institución y también sobre la promoción y defensa de nuestros derechos fundamentales.

Proyecciones 2010

Realización externa

- En el Programa Permanente de Formación en Comunicación: realizar los talleres dirigidos a oficiales de Comunicación y Eventos para fortalecer a la red de radios departamentales que son sensibles a la difusión y promoción de los derechos humanos y las actividades de esta institución.
- Diversificar los programas radiofónicos, a través de la producción de un programa de entretenimiento con énfasis en la promoción de los derechos culturales, de la mujer, niñez y adolescencia, y medioambiente en un medio radiofónico de amplia cobertura.
- Realizar material multimedia para la educación en derechos humanos, para que forme parte de las herramientas para la promoción y formación en derechos humanos de la institución.

Realización interna

- En circuito cerrado: adquisición del equipo de cómputo para realizar transmisiones y extender las líneas de transmisión hacia las áreas de reciente creación y en proceso de construcción.
- En comunicación interna: promover el flujo constante de información hacia la Unidad desde las diferentes Direcciones, Defensorías y Oficinas Específicas y lograr hacer efectiva la comunicación e información de las actividades propias y externas de la institución.

Producción radiofónica “circuito cerrado”

Productos		Comentarios	
Programación Permanente Circuito Cerrado 164 transmisiones (enero-diciembre) <ul style="list-style-type: none">• Cuñas, avisos, entrevistas, noticias y/o campañas institucionales internas y externas.• Producción, grabación y edición de segmento “En Directo”.		<ul style="list-style-type: none">• 35 segmentos “Palabras de hoy”• 54 discos de programación (250 – 304)• 45 cuñas promocionales de actividades (talleres, foros, congresos, marchas, festivales, cursos, certámenes, etc.) coordinadas por la Unidad de Protocolo y Eventos, Defensorías, Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz, Dirección de Educación y Promoción, Unidad de Producción de Incidencia en Políticas Públicas y Resolución de Conflictos, Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia, Programa de Salud Alimentaria y Nutricional y Dirección de Auxiliaturas Departamentales.• 45 cuñas del proyecto de sensibilización a personal, promovidas por la Dirección de Recursos Humanos, la Unidad de Protocolo y Eventos y COOPEINSOL	
Campañas institucionales coordinadas con otras instancias externas			
Proyecto Programa Permanente de Formación en Comunicación (PPFC) 40 cuñas - 7 campañas institucionales Derechos de la Mujer, Medio ambiente, Derechos de la Niñez, del Trabajador, de los Pueblos Indígenas, Seguridad Alimentaria y Lactancia	Campaña institucional 1555 “Auxiliaturas Departamentales” 6 cuñas - 1 campaña A cada versión se le agregaron datos específicos para promocionar la dirección y teléfono de cada Auxiliatura Departamental	Campaña “PROJUSTICIA” 1 Cuña <ul style="list-style-type: none">• grabación en español e idiomas mayas (achi, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’)• cobertura departamental de acuerdo con el área lingüística• total: 5 cuñas	Cuatro campañas de eventos institucionales “Mercados cantonales” 16 cuñas <ul style="list-style-type: none">• grabación en español e idiomas mayas• total: 144 cuñas cobertura: mercados cantonales ubicados en el municipio de

Materna, Discapacidad, Mujer Rural, Certamen Fotográfico y V Gran Carrera por los Derechos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> • total: 156 cuñas • grabación en español • total: 6 cuñas • cobertura nacional • transmisión: junio a diciembre 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • producción y transmisión: agosto a septiembre 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • producción y transmisión: abril a diciembre 2009
<ul style="list-style-type: none"> • total: 1040 cuñas • grabación en español • Transmisión: marzo a diciembre 2009 • siete campañas mensuales que incluyen un total de 40 productos (cuñas, microprogramas y entrevistas) 			

Soporte a Unidades, Auxiliaturas y Defensorías de la institución del Procurador de los Derechos Humanos	
1 <i>Transfer</i> Se recibió una grabación de investigaciones/ testimonios a solicitud de las Unidades de Averiguaciones Especiales.	18 asistencias técnicas a eventos realizados dentro y fuera de la institución a: Dirección de Educación y Promoción, Unidad de Protocolo y Eventos, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Auxiliaturas Departamentales, Dirección de Comunicación Social y COOPEINSOL.
Nueve asistencias a la Dirección de Comunicación Social en grabación de audio para <i>spots</i> televisivos	Seis asistencias a la Unidad de Televisión, en grabación de audio para materiales audiovisuales.
Apoyo a organizaciones e instituciones externas (gubernamentales y no gubernamentales)	
Obras “Don Guanella”: <i>difusión</i> de <i>proyectos comunitarios en aldea Chapas</i> , Santa Rosa que benefician a la población con discapacidad.	Grupo de Apoyo Mutuo (GAM): <i>difusión</i> y cobertura del evento “Homenaje póstumo a la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC de 1984”.
Liceo en Computación CSS: <i>difusión</i> del proyecto de investigación “Acción” de los estudiantes de <i>bachillerato</i> en Computación, a través de dos programas transmitidos por Radio Universidad, en julio de 2009.	Projusticia: <i>creación</i> , producción y difusión de la campaña de apoyo a la elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia (se realizó en idioma español e idiomas mayas).
Grupo AMANUENSE – FILGUA 2009: <i>difusión</i> de la creación literaria para niños y niñas en el marco del derecho a la <i>educación</i> y reconocimiento a escritores nacionales.	

Unidad de Biblioteca y Centros de Documentación

Es la encargada de difundir los derechos humanos a través de las diferentes bibliotecas especializadas en derechos humanos y a la red de bibliotecas establecidas en todo el país, poniendo a la disposición del personal de la institución, investigadores, profesionales, estudiantes y público en general, toda la información actualizada y especializada en derechos humanos a través de diferentes formatos y presentaciones (biblioteca, hemeroteca, archivo vertical, medios audiovisuales, medios de comunicación electrónica, etc.).

Objetivo de la Unidad

Proporcionar a los usuarios internos y externos que regularmente acuden a las bibliotecas y a la Red de Bibliotecas Departamentales y Municipales de la institución del PDH, un servicio de información eficiente y eficaz, en el campo de los derechos fundamentales.

Acción realizada	Productos
Proporcionar un servicio eficiente y eficaz a todos los usuarios, tanto internos como externos, en la Red de Bibliotecas a nivel nacional	25,811 usuarios
Pronta e inmediata recuperación de la información en forma manual como automatizada.	14 bibliotecas automatizadas
Convenio de canje y donación con 100 instituciones afines a la nuestra.	Trimestralmente
Responder de manera precisa y oportuna a las necesidades de información de los usuarios respecto de los Acuerdos de Paz y todo su proceso.	2,500 libros proporcionados
Mantener el debido resguardo y conservación del material biblio-hemerográfico a nivel de toda la Red de Bibliotecas.	Dos inventarios realizados
Recopilación del Diario de Centro América.	12 tomos empastados
Análisis diario de decretos y acuerdos emitidos en el Diario de Centro América.	Una base de datos elaborada
Ingreso de datos al programa WINISIS.	4,307 ingresos
Organización, resguardo y conservación del archivo de expedientes de la institución del PDH.	9,000 expedientes recibidos, clasificados y archivados
Realización de inventario de expedientes sobre denuncias recibidas desde 1987 a la actualidad.	15,000 ingresos en el presente año
Procesamiento técnico de material biblio-hemerográfico para Red de Bibliotecas incluyendo Sede Central.	6,017 procesamientos
Comisión a las Auxiliaturas Departamentales para la elaboración de inventarios.	Cinco inventarios.
Elaboración de archivo vertical con la especialidad en derechos humanos y temas de coyuntura nacional.	600 archivos
Contribuir al resguardo y conservación del material bibliográfico existente tanto en Sede Central como en las Bibliotecas de Auxiliaturas Departamentales y Municipales.	413 solvencias
Implementar el fondo bibliográfico con información especializada en derechos humanos.	4,321 documentos de nuevo ingreso
Mantener organizada y supervisada la Red de Bibliotecas de Auxiliaturas Departamentales y Municipales.	Cinco inventarios en Bibliotecas Departamentales y Municipales.
Promoción y difusión de la información relacionada con la institución del Procurador de los Derechos Humanos a través de carteleras con recortes periodísticos, colocadas tanto en Sede Central como en los diferentes anexos de la institución.	12 carteleras.
Participación en la Comisión de Evaluación, Actualización y Mejora de la Intranet.	Actualización de Intranet concluida al 100%

Acción realizada	Productos
Promoción y difusión de la biblioteca de la Casa de la Cultura, zona 2, en establecimientos públicos y privados incluyendo educación preprimaria, primaria, secundaria y universitaria.	Cobertura en centros educativos de zonas 1 y 2 y todas las universidades existentes en el país.
Elaboración de inventarios para control de bibliografía existente tanto en Sede Central como en la Casa de la Cultura, zona 2.	4 inventarios anuales.

Gestión y apoyo de eventos

- Canto por los Derechos Humanos, Flores, Petén, 13 de marzo 2009. 10,650 publicaciones distribuidas.
- Participación en reconocimiento al Procurador de Derechos Humanos por parte de la Dirección Nacional de Procuración de la institución en el Claustro Mayor Rigoberta Menchú de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala, 16 de junio 2009. 500 publicaciones distribuidas.
- VII Conferencia Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala, 14 y 15 de octubre 2009. 8,000 publicaciones distribuidas.
- V Gran Carrera por los Derechos Humanos, en conmemoración al 61 Aniversario de su Declaración Universal, Obelisco y Avenida Reforma, zona 9, Guatemala, 6 de diciembre 2009. 5,000 publicaciones distribuidas.

Apoyo y trabajo cooperativo

A través de la coordinación con aproximadamente 100 instituciones afines, se ha logrado como apoyo y trabajo cooperativo lo siguiente:

- REDUC (Red Nacional de Centros de Documentación de Educación en Guatemala), coordinada por el Centro de Información sobre Educación en Guatemala CINDEG-URL.
- Actualización profesional respecto de los adelantos en la carrera de bibliotecología, incidiendo por lo tanto en mayor eficiencia y eficacia en la organización de las bibliotecas.
- Proyección externa hacia otras bibliotecas, centros de documentación e instituciones afines y, por consiguiente, en coordinación constante y adquisición de ayuda cuando se hace necesario.
- El compromiso de canje es realizado con diferentes centros de información, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones afines, enviándoles la bibliografía producida por la institución y recibiendo a cambio la que ellos realizan, siempre relacionada con derechos humanos y materiales afines; a raíz de esta forma de adquisición se han recibido en el presente año 4,000 libros y 543 publicaciones periódicas.
- Intercambio de bibliografía en la especialidad de derechos humanos y temas relacionados, logrando así la implementación y actualización de la información.

Logros

- Atención directa a usuarios externos (investigadores, docentes, profesionales, estudiantes de todos los niveles y otros), prestando diferentes servicios.
- Se atendieron las solicitudes específicas que personalmente, por teléfono o vía fax fueron recibidas de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.
- Búsqueda de información específica, fuera de las instalaciones de la unidad, para obtener documentos de temas que no se encuentran en ella, prestando dicho servicio mayoritariamente a los usuarios de la institución.
- A través de la Red de Bibliotecas departamentales y municipales, se logra el servicio a los usuarios con cobertura a nivel nacional.
- Donación de material bibliográfico a entidades afines por convenio de canje y solicitudes individuales (4,000 publicaciones).
- Promoción y difusión de la institución del PDH y la Biblioteca y Centro de Documentación a través de la distribución de material biblio-hemerográfico, festivales y otras actividades.
- Promoción y difusión a nivel nacional de la literatura que se publica en la institución del PDH.

- Participación activa en redes de información: Red del Pueblo y Red Nacional de Documentación Educativa de Guatemala.
- Renovación de convenio de canje y donación con instituciones incluyendo entre ellas: centros de documentación, bibliotecas, centros de información y afines (100 publicaciones).
- Diez asesorías a instituciones para la organización de sus centros de documentación.
- Cinco mil libros adquiridos en calidad de canje y donación.
- Apoyo bibliográfico a diez diferentes comunidades para la organización de sus centros de documentación con 3,917 libros.
- 7,017 análisis y procesamiento técnico de libros y otras publicaciones.
- Libros preparados físicamente a nivel nacional, para ponerlos al servicio del usuario (4,091).
- Implementación y actualización constante de la red de bibliotecas con bibliografía especializada en derechos humanos.
- Servicio de scanner y quemado de discos compactos con información especializada en derechos humanos y temas de coyuntura.
- Fortalecimiento de obras de referencia.
- Proceso de adquisición y conservación del archivo histórico de la institución del PDH.
- Organización, resguardo y conservación del archivo de expedientes de la institución del PDH.
- Base de datos para archivo de expedientes.
- Cinco mil seiscientos tres expedientes ingresados al libro y a la base de datos para su debido resguardo, conservación y archivo.
- Base de datos para el ingreso de inventarios.
- Elaboración de 88 inventarios para la Red de Bibliotecas Departamentales y Municipales.
- Cuatro comisiones a las Auxiliaturas departamentales para la elaboración de inventarios.
- Registros ingresados a la base de datos a través del sistema especializado en bibliotecología WINISIS para la inmediata recuperación de la información.
- Elaboración de archivo vertical con la especialidad en derechos humanos y temas de coyuntura nacional (600 archivos).
- Elaboración de inventario de expedientes.
- Automatización de la información para proporcionar un servicio eficiente en toda la Red de Bibliotecas (tanto a nivel departamental como municipal).

Proyecciones y expectativas para el año 2010

- Servicio de internet en la Biblioteca Especializada en Derechos Humanos, ubicada en Avenida Simeón Cañas, zona 2.
- Organización de la Casa de la Cultura en la Avenida Simeón Cañas zona 2.
- Digitalización del archivo de expedientes de la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Administración Central



1. Asesoría de Análisis Estratégico (AAE)

Creada por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en noviembre de 2004 como Asesoría de Análisis Estratégico, y por medio del Acuerdo de Creación SG No.10-2009, en consonancia con los ajustes estructurales introducidos al organigrama institucional y a tenor con la dinámica que su trabajo adquirió dentro de la institución del PDH. La AAE depende directamente del Despacho Superior y su creación obedece a la necesidad de preparar y ofrecer al PDH diversos productos por medio de los cuales cuente con una visión conjunta en relación con los acontecimientos y la situación nacional, en cuanto a su incidencia en la vigencia de los derechos humanos y el cumplimiento de los mandatos legales que le competen, con la finalidad de proporcionar, de forma oportuna y pertinente, insumos para la toma de decisiones adecuadas para la defensa de los derechos fundamentales de la población guatemalteca.

Esta oficina existe para dar respuesta a los requerimientos del PDH en cuanto a recopilación, procesamiento, interpretación, análisis y sistematización de información relevante, así como atender diversos asuntos que la dinámica institucional y nacional requieren en momentos precisos, o referente a procesos a los cuales debe darse atención específica, interactuando con otras dependencias y unidades de la institución, para apoyar el desarrollo de las actividades de éstas en el cumplimiento de requerimientos del Magistrado de Conciencia, con particularidad en la atención de problemas puntuales de la agenda estratégica y cotidiana del PDH.

De acuerdo con el Plan Operativo Anual correspondiente a 2009, los objetivos de la AAE son:

- Apoyar el trabajo del PDH con informes y análisis oportunos, pertinentes y objetivos, de manera que pueda intervenir eficientemente en la protección de los derechos humanos.
- Elaborar y revisar documentos realizados por otras oficinas de la institución en los cuales el Magistrado de conciencia fija posición pública sobre asuntos relacionados con la situación nacional y los derechos humanos, entre ellos discursos, ponencias, conferencias y desplegados de prensa.
- Efectuar la medición y análisis mensual de la presencia institucional en los medios de comunicación social como herramienta para la toma de decisiones del PDH y oficinas competentes de la institución en lo tocante a su actividad y la proyección de su imagen pública.
- Brindar al Despacho Superior y otras oficinas de la institución, asesorías oportunas respecto de temas específicos de la agenda nacional e institucional.
- Dar seguimiento a los problemas nacionales de seguridad pública y a su impacto en la vigencia de los derechos humanos, para que el Ombudsman cuente con información oportuna para su intervención en la materia.

Actividades, productos y logros

Apoyo al posicionamiento público del PDH

Se apoyó al Despacho Superior en la elaboración de 193 documentos de diversa índole (comunicados y desplegados de prensa, propuestas de discursos, conferencias, punteados para comparecencias públicas del PDH a nivel nacional o internacional) que conllevan el posicionamiento público del Procurador de los Derechos Humanos y su institución en temas como seguridad pública, salud, educación, seguridad alimentaria, Frente contra el Hambre, derechos humanos específicos, problemas ambientales, promoción de la cultura de paz, migrantes, trata de personas, entre otros.

Varios de estos documentos de apoyo al Procurador fueron utilizados como base para sus intervenciones y participación en actos públicos que tuvieron lugar tanto en Guatemala como en ciudades del extranjero.

La AAE también tuvo a su cargo la revisión, preparación o redacción final de 22 documentos para ser publicados, ya fuera como desplegados de prensa o comunicados a distribuirse en los medios de comunicación social; produjo otros 29 documentos de análisis e insumos de información procesada, que si bien no estaban destinados directamente al posicionamiento público institucional, formaron parte de los procesos de reflexión y toma de decisiones del PDH.

A ello se suman 84 documentos relativos al tema seguridad y justicia, dado el papel desempeñado en la gestación, aprobación y seguimiento del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, documentos que van desde borradores de los planteamientos conjuntos de la PDH, la Universidad de San Carlos, el Arzobispado Metropolitano y la Alianza Evangélica hasta informes específicos para el PDH y las otras tres instituciones integrantes del Grupo Garante, así como documentos para la Unidad de Seguimiento del Acuerdo Nacional.

Apoyo al desarrollo institucional

Desde la creación de la AAE, el responsable de ella ha participado con regularidad en los trabajos del Comité de Asesores y Directores de la institución, que apoya al PDH para el análisis y consideración colectiva de diversos asuntos de interés institucional y nacional. Se participó en iniciativas, propuestas y acciones dentro de dicho Comité, sumando esta oficina un aproximado de 70 reuniones de trabajo con el PDH y el referido Comité.

Mantuvo una estrecha relación de trabajo con la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, en el impulso de distintos momentos del proceso de planificación estratégica y operativa de la institución en consecuencia de las Líneas Estratégicas para el Quinquenio 2007-2012.

La AAE también continuó participando como parte de un grupo de funcionarios designados por el PDH en la preparación y revisión de una agenda institucional de supervisiones administrativas a entidades estatales.

Esta oficina tiene una coordinación con las asistentes del Despacho Superior y la Dirección de Comunicación Social; así también, trabaja de cerca con la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación, que facilita los datos estadísticos y otros insumos para el análisis de diferentes temas requeridos por el Procurador.

La AAE continuó su participación en las reuniones y actividades del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, y prestando apoyo al funcionamiento del Registro Unificado de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada.

Por medio del coordinador institucional del Frente contra el Hambre, la AAE ha participado en actividades del Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria con mayor intervención, en especial, en la formulación de propuestas, informes, análisis, documentos de trabajo y participación en actividades propias del Grupo SAN-PDH; entre ellos, la preparación del II Informe y su entrega al CONASAN y al Congreso de la República. También apoyó la gestión ante UNICEF para el financiamiento de un proyecto de capacitación para organizaciones de Santa Clara la Laguna, Sololá y Santa Lucía la Reforma, Totonicapán, enfocado a la seguridad alimentaria y lactancia materna, así como en la preparación y elaboración de los talleres, presentando resultados ante la Coordinación del Equipo Técnico de SAN.

En coordinación con la Unidad de Comunicación Alternativa, se dedicó a la conceptualización, diseño y organización de la revista teórica de la PDH y, a ese efecto, se constituyó el Consejo Editorial, encabezado por el PDH, y se estableció como espacio técnico a una Coordinación Editorial, de la que forma parte la AAE.

Seguimiento a asuntos relativos a la seguridad pública

Siguiendo directrices del PDH y atendiendo sus acuerdos con el Arzobispo Metropolitano, el Presidente de la Alianza Evangélica y el Rector de la Universidad de San Carlos, la AAE tuvo un papel activo en la formulación de las propuestas que el “Grupo de los Cuatro” (G-4) presentó al Presidente de la República, en enero de 2009. Dichas propuestas se transformaron en la base del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ). En la labor de preparación y discusión de los documentos que la institución del PDH aportó en este proceso, la AAE contó con el apoyo permanente de personal de la Unidad Contra la Impunidad y de la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación.

En el proceso de gestación, suscripción y seguimiento del ANASJ, el PDH sostuvo varias reuniones de trabajo con el Presidente de la República, en conjunto con los líderes de las otras tres instituciones integrantes del G-4. En todos los casos, la AAE tuvo un papel activo en la preparación de los documentos que guiaron las participaciones del Procurador, quien siempre estuvo acompañado por el coordinador de esta oficina. También se participó en reuniones de información, relacionadas con el tema de seguridad, con funcionarios del Ministerio de Gobernación, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Ministerio Público, entre otros.

En la gestación, aprobación y seguimiento del ANASJ, la AAE mantuvo a lo largo del año un trabajo constante de coordinación con las contrapartes técnicas de la Alianza Evangélica, el Arzobispado Metropolitano (a través de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado) y la Universidad de San Carlos (a través del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales), con quienes integró un sólido equipo técnico del G-4.

Con el propósito de disponer de información y opiniones actualizadas respecto de los asuntos de la seguridad pública, la AAE mantuvo vínculos de trabajo e intercambio de perspectivas con diversas instituciones o personas relacionadas con esta temática, como el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) y con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las integrantes del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS).

Se incluye en esta esfera la asistencia regular de personal de esta oficina a los talleres del proyecto “Aportes a la Reforma del Sector Seguridad en Guatemala”, la participación en el taller “Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos” y en varias actividades del Consejo Departamental de Seguridad, coordinado por la Gobernación Departamental de Guatemala.

La AAE representó a la institución del PDH en una Consulta Regional sobre Seguridad y Justicia convocada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, efectuada en San José, Costa Rica.

Se elaboraron análisis específicos sobre la situación de la seguridad pública en el país y su relación con los compromisos del ANASJ, los cuales sirvieron de base para la preparación de ponencias o conferencias dictadas acerca del tema, por el Procurador o el coordinador de la AAE como delegado del primero, entre las que cabe mencionar: Conferencia sobre Pobreza, Violencia y Derechos Humanos ante miembros del cursillo de Cristiandad, en el Seminario Teológico, presentación del ANASJ ante la Mesa Intermunicipal Plataforma Urbana, presentación del ANASJ ante la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia de la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz, conferencia referente al tema “Los Derechos Humanos y la Modernización Democrática en Guatemala”, dictada ante la XVII promoción del Diplomado del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales (ESTNA).

Análisis de la presencia institucional en medios escritos

Durante este año se cambió la dinámica de presentación del análisis sobre la presencia de la institución en los medios de comunicación social impresos, específicamente en siete diarios nacionales, de mensual a trimestral. El informe refleja el comportamiento de la cobertura que la institución del PDH recibe por parte de los diarios, lo que permite al Magistrado y las oficinas encargadas, medir penetración, frecuencia, calidad y eficacia de la labor de comunicación social realizada por la institución.

En promedio, se publicaron tres notas diarias en referencia a la PDH, es decir, a diario aparece en alguno de los medios impresos. En el período de 11 meses, sumaron 1,076 notas publicadas, frente a las 986 en el mismo lapso de 2008. Un indicador importante es que el 94% de estas publicaciones tuvo un tono neutral pese a que la institución constantemente interviene en asuntos que tienden a polarizar a la opinión pública nacional. En efecto, el monitoreo constante de los medios escritos permite confirmar que a mayor presencia institucional en coyunturas críticas, mayor es su exposición mediática y, en consecuencia, más alto es el número de publicaciones con sesgo negativo o de crítica a la institución. Éstas, sin embargo, se mantuvieron en un nivel inferior al 5%.

Logros

- La AAE tuvo un papel muy importante en la gestación, redacción y seguimiento del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, una de las iniciativas políticas más importantes emprendidas por el PDH en 2009.
- Consolidación en el nivel técnico-político, de la alianza interinstitucional de la PDH con la Universidad de San Carlos, el Arzobispado Metropolitano y la Alianza Evangélica de Guatemala.
- Aumento de la calidad y la cantidad de los documentos de análisis producidos, en términos cuantitativos, se logró un crecimiento de 30%.
- Se mantuvo y consolidó la relación de trabajo constructivo de la AAE con otras unidades de la institución, en especial con la Unidad Contra la Impunidad, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Defensorías, la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, y la Dirección de Análisis, Estudio e Investigación.

Proyecciones y expectativas 2010

- Continuar con el apoyo al PDH en las diferentes actividades y al posicionamiento institucional en temas específicos.
- Continuar con el trabajo en el Equipo Técnico del G-4 y en la Unidad de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia.
- Elaboración de informes trimestrales vinculados con la presencia mediática de la institución del PDH.
- Acompañamiento y apoyo en la elaboración de propuestas, revisión de informes y otros documentos.
- Brindar asistencia y soporte a las unidades que así lo requieran en cuanto a la participación en los grupos de trabajo y asesoría en la elaboración de documentos específicos.

2. Coordinadora Nacional del Voluntariado

La Coordinadora del Voluntariado de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) es la encargada de planificar, coordinar, con el Plan Estratégico Nacional 2008-2012, con el propósito de promover la participación ciudadana y con la convicción de que el voluntario juegue un papel protagónico en la defensa y protección de los derechos humanos sin distinción alguna, desde el nivel local, municipal, departamental y nacional.

Todas las personas, grupos u organizaciones sin importar edad, genero, raza, escolaridad o situación económica, destinados en las áreas urbana, rural, zonas marginales, departamentales, municipales, locales, quienes se constituirán en la Coordinadora Nacional de Voluntarios de la institución del PDH.

Misión

Fortalecer la participación ciudadana mediante la promoción, organización y capacitación del voluntariado para la prevención, defensa y protección de los derechos humanos.

Objetivo general

Disponer a nivel nacional de un voluntariado con visión de desarrollo integral, comprometido con la defensa y protección de los derechos humanos desde el nivel local, con manejo de conocimientos, actitudes y prácticas, que sea enlace entre la institución y la población, y que su presencia fortalezca la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Objetivos específicos

- Construir un marco consensuado de participación social con la articulación de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil para la implantación de políticas de bienestar social desde la base local.
- Crear el banco único de datos y registros estadísticos del voluntariado de la institución del PDH, desagregados por sexo, edad, ocupación y nivel formativo, que permita disponer de información objetiva del voluntariado, no sólo institucional sino de otras organizaciones que tienen vinculación con la promoción y defensa de los derechos humanos en Guatemala.
- Mejorar la gestión mediante la comunicación más abierta, transparente, eficaz, eficiente y democrática con todas las instancias internas y externas de la institución del PDH.
- Fortalecer su estructura organizativa y funcional, profesionalizar al personal, e implantar nuevos sistemas de gestión, evaluación, control y seguimiento de los proyectos que están vinculados con el voluntariado.

Funciones y atribuciones

- Implementar a nivel nacional una estructura organizativa y funcional del voluntariado de la institución del Magistrado de Conciencia.
- Impulsar la política de atención del PDH para la defensa y promoción de los derechos fundamentales.
- Consolidar la participación y coordinación entre las diferentes instancias de la institución del PDH y las organizaciones de la sociedad civil, que ponga en marcha políticas destinadas a mejorar el desarrollo funcional del voluntariado.
- Impulsar una política institucional del voluntariado basada en una “colaboración estratégica” entre los diferentes agentes cooperantes de la PDH y organizaciones sociales, fundándose no sólo en el apoyo económico sino, sobre todo, en una conexión institucional alrededor de los objetivos del Plan Estratégico Nacional del Voluntariado 2008-2012.
- Establecer nuevos sistemas de registro del voluntario y, de gestión, evaluación, control y seguimiento de los proyectos que están vinculados con éste.
- Reconceptualizar en todos los niveles de la sociedad civil el rol del voluntariado en las áreas de sensibilización, promoción, educación y protección de los derechos humanos de tal forma que se constituya en una práctica social visible (protagónica).
- Sistematizar los programas, proyectos y actividades que desarrolla el voluntariado, agrupándolas dentro de las líneas estratégicas en derechos humanos.
- Que el voluntariado sea un medio articulador del diálogo con la sociedad civil y la institución del PDH, facilitando la extensión de atención a la víctima y a la prevención de la violación de los derechos humanos.
- Mediante el accionar del voluntariado, sistematizar la comunicación permanente, vigilancia, presencia e intervención en situaciones de riesgo y desastres (“alerta temprana”).

- Desarrollar iniciativas y actividades que fomenten los conocimientos, valores y habilidades en materia de derechos humanos, para la construcción de una sociedad responsable y respetuosa de la dignidad humana.
- Establecer programas de formación de líderes voluntarios que incrementen la capacidad institucional para promover y difundir los derechos humanos en el interior del país; identificando y respetando los valores, motivaciones e intereses que poseen los ciudadanos frente al trabajo voluntario, partiendo de su propia cosmovisión individual y colectiva del dominio conceptual para la acción.
- Formar facilitadores departamentales, municipales y comunitarios capaces de manejar las herramientas básicas del trabajo en comunidad, que permitan el posicionamiento y el empoderamiento del voluntariado en los programas y proyectos de promoción, educación, organización y sensibilización para la defensa de los derechos humanos.
- Focalizar el rol del voluntario hacia el campo social, a través de acciones más puntuales y locales, con la importancia del encuentro cara a cara y las reivindicaciones o reconocimiento de la sociedad y del sector gubernamental de la importancia del voluntariado.
- El espíritu del Plan Estratégico Nacional del Voluntariado tiene un carácter preventivo, tendente a disminuir las futuras violaciones de los derechos humanos, fomentando una cultura de paz, de participación y valores democráticos, tanto en el sistema de educación formal como en los espacios informales de participación y educación social.

Estructura organizativa institucional

Coordinación general

- Articular el trabajo del voluntariado con las políticas generales de la institución con las diferentes unidades de la misma, con actores y sectores de la sociedad civil.
- Dirigir, coordinar y dar seguimiento a los planes, programas y procesos de transformación de las políticas y estrategias de promoción y organización de los voluntarios, proporcionarles apoyo y asesoría para el desempeño de las diferentes acciones, planes operativos, programas y proyectos con énfasis en la promoción y educación de los derechos humanos.
- Fortalecer, complementar y consolidar la estructura orgánica y funcional de la Coordinadora Nacional del Voluntariado en todo el país.

Coordinación y asistencia administrativa

- Crear y mantener sistemas estadísticos e informáticos que permitan disponer de datos para la toma de decisiones y fijación de las políticas de la institución.
- Ejecutar procesos de control y desarrollo administrativo, elaborar normas y procedimientos de implementación, evaluación y verificación de avance de los procesos de promoción y organización de los voluntarios.

Supervisión regional

- Fortalecer, complementar y consolidar la estructura orgánica y funcional de la Coordinadora en todo el país, además de proporcionar asistencia técnica, administrativa, de apoyo logístico y de acompañamiento a los facilitadores en los procesos de capacitación, organización, formación y promoción del voluntario en el nivel comunitario, municipal, departamental y nacional.

Facilitación del proceso

- Identificar, sensibilizar, organizar, promocionar y facilitar la gestión local del voluntario comunitario, municipal y departamental, dentro del marco del Plan Estratégico Nacional del Voluntariado.

Acciones emprendidas

- Elaboración del Manual de organización y funcionamientos de la Coordinadora Nacional del Voluntariado.
- Avance en el diseño del “Banco de datos del Voluntariado” que consolida el recurso humano activo e inactivo que colabora con la institución del PDH.
- Actualización de los mapas de ubicación de voluntarios de los 22 departamentos y del área metropolitana de Guatemala.
- Visitas a un 60% de las Auxiliaturas Departamentales con el propósito de coordinar diversas actividades, entre ellas: identificación de líderes, jornadas médicas y promoción del voluntariado.

- Realización de dos jornadas médicas en las aldeas El Cajón y San Andrés Osuna, Santa Lucía Cotzumalguapa y la aldea Buena Vista, Iztapa, Escuintla, brindando servicios médicos y medicamentos gratuitos, cubriendo una población de 1,433 personas entre niños y adultos de escasos recursos económicos.
- Conformación de alianzas estratégicas para lograr el objetivo de los programas con Plan Internacional, Orden de Malta, Laboratorios Farmacéuticos, Funcafé y Centro del Voluntariado Nacional.
- Formación de las Coordinadoras de Voluntarios del Área Metropolitana y municipios del departamento de Guatemala; seguimiento a las establecidas en los municipios de Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna y San Lucas Tolimán del departamento de Sololá.
- Identificación de 123 facilitadores comunitarios, quienes desarrollaron acciones de información y promoción para la defensa de los derechos humanos a un total de 3,911 personas de los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Sololá, San Marcos, Quetzaltenango, Zacapa, Santa Rosa, Jutiapa, Alta Verapaz, Quiché, Sacatepéquez y municipios del departamento de Guatemala.
- Organización de la Mesa de Atención de Crisis Alimentaria, en el departamento de Sololá, con la participación de voluntarios y representantes de las instituciones gubernamentales de la localidad.
- Celebración del Día de Solidaridad en el municipio de Escuintla y en el área metropolitana.
- Participación en la conformación de la Red de Atención a las Víctimas.

3. Dirección Administrativa

Objetivo estratégico

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución de actividades para el buen funcionamiento de la institución del PDH, acorde a las necesidades de actualización y desarrollo de la misma.

Objetivo del departamento

Garantizar el funcionamiento interno y desarrollar la infraestructura y los mecanismos para tales propósitos, de conformidad con los lineamientos y políticas emanadas de la superioridad, la sistematización de procedimientos y el cumplimiento de las disposiciones legales que correspondan.

Objetivos operativos

- Desarrollar un programa de apoyo a las actividades del PDH.
- Velar por la efectiva aplicación y desarrollo de las políticas administrativas de la institución del PDH.
- Desarrollar la cultura organizativa y operativa de la institución, aumentando la capacidad de cumplimiento de sus mandatos legales y de las directrices del Magistrado de Conciencia.
- Continuar los procesos de mejoramiento, renovación y ampliación de la infraestructura física y de los bienes muebles e inmuebles de la institución del PDH.
- Incrementar y mejorar las condiciones de infraestructura, logística, tecnología y de personal de las Auxiliaturas del PDH.
- Promover la modernización, ampliación, conservación y uso eficiente de los medios de transporte de la institución.
- Mantener y ampliar la capacidad institucional para captar recurso financieros, técnicos y materiales complementarios a las asignaciones presupuestarias.
- Dirigir e implementar las acciones necesarias para la buena administración de la institución.
- Evaluar las necesidades internas del personal de la sede central y las Auxiliaturas.
- Optimizar el servicio de la Unidad de Suministros a través de inventarios y almacén.
- Coordinar el mantenimiento de la infraestructura de los edificios a través de Servicios Generales, mantenimiento y electricistas.
- Coordinar, dirigir y controlar a la Unidad de Servicios Generales, en relación con el mantenimiento y distribución de vehículos para las comisiones que realiza el personal de la institución.
- Garantizar el servicio de seguridad para el personal y los edificios institucionales.
- Optimizar el servicio de audiovisuales.
- Coordinar de forma adecuada, el uso de los salones de mediación.

Acciones emprendidas

Apoyo institucional a todas las unidades de la sede central y Auxiliaturas en:

- Dotación de mobiliario, equipo y traslado de personal a comisiones, seminarios, foros, conferencias, capacitaciones, eventos especiales, monitoreos y otras actividades; dotación de suministros para equipo, papelería de oficinas y otros.
- Mantenimiento de vehículos: servicios menores y mayores, cambio de llantas, alineación y reparaciones mecánicas.

Mantenimiento y reparación a los edificios que son ocupados por las distintas oficinas de sede central:

- Mantenimiento de edificios, pintura y otros.
- Reparaciones varias (eléctricas, plomería, albañilería, telefónicas, redes, carpintería y otras).
- Remodelación del Área de Recepción y Calificación de Denuncias.
- Remodelación del área física y tecnológica de Informática.
- Construcción de un segundo nivel en casa Convento.
- Reubicación de oficinas dentro de la sede central.

Implementación de controles en área de seguridad:

- Todo el personal de la institución, en la actualidad, porta el gafete de identificación para poder ingresar y egresar a las diferentes instalaciones de la Sede Central.
- Controles de ingreso del personal y de visitantes en cada uno de los anexos y sede central.
- Programas de capacitación y profesionalización de los agentes de seguridad.

Unidad de audiovisuales:

- Cuenta con una mejor ubicación en el edificio de sede central.
- El personal conoce de la Unidad de Audiovisuales y hace uso del equipo con que cuenta para sus actividades.
- En el presente año se cuenta con más equipo.

Atención de los salones de mediación:

- 13,832 personas, en 1,565 sesiones con una duración de 2,096 horas.

4. Dirección de Comunicación Social

4.1 Unidad de Prensa y Promoción

Misión

Propone, coordina, ejecuta y evalúa las estrategias y acciones de comunicación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Su propósito es divulgar y promocionar las múltiples acciones que emprende la institución en los diferentes sectores de la sociedad, fundamentalmente aquellos ligados con la defensa del ser humano.

Objetivo general

Sistematizar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de comunicación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, en coordinación con todas las unidades, tendientes al mejoramiento de la imagen de la misma.

Objetivos específicos

- Presentar una imagen sólida de la institución a través de la coordinación de criterios informativos, de imagen, de relaciones públicas de todas las unidades, departamentos, áreas y Auxiliaturas departamentales.
- Presentar un frente integrado de comunicación ante los medios de información en armonía con los distintos grupos pro derechos humanos del país u otros actores sociales de importancia.
- Fortalecer los mensajes dirigidos a la sociedad civil para provocar acciones positivas hacia la imagen de la institución.

Acciones emprendidas

Gestión y apoyo de eventos

- Promoción V Carrera de Derechos Humanos.
- Promoción del III Certamen Fotográfico.

- Promoción Canto por los Derechos Humanos, Petén.
- Promoción campañas de sensibilización a través de afiches, *muppies*, vallas, cintillos, teatro, música (Orquesta Sin Fronteras de la PDH).
- Gestión de patrocinio para eventos con la iniciativa privada.

Productos

- Generación de convocatoria y comunicados a los medios de información de toda la República, tradicionales y alternativos.
- 35 comunicados de prensa enviados a las salas de redacción de los informativos (impresos, radiofónicos y televisivos).
- 21 convocatorias de prensa urgentes enviadas a los medios de comunicación (impresos, radiofónicos y televisivos).

Logros

- Cobertura periodística en las distintas Auxiliaturas para dar a conocer las acciones que realiza la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
- 12 periódicos impresos de “El Defensor del Pueblo”, medio por el cual se recopilan las acciones más relevantes ocurridas durante el mes en la institución, el cual se distribuye en todas las Auxiliaturas, embajadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, presentando desde enero de 2009 un nuevo diseño y diagramación, ampliándose de 8 a 12 páginas.
- Boletín informativo ¿Sabías qué? que divulga las actividades diarias que realiza la institución del PDH a través de carteleros e intranet.
- Un resumen noticioso, boletín informativo diario con el cual se logra mantener enterado al personal de los sucesos más relevante del día.
- Apertura de espacios en medios de comunicación a nivel nacional (impresos, televisivos, radiales y alternativos).
- Spots distribuidos en las Auxiliaturas para su colocación en los diferentes medios de comunicación regional.
- Dos capacitaciones impartidas por directores y jefes de información de los diferentes medios de comunicación social al personal de la institución.
- Divulgación y distribución de informes especiales.
- Elaboración de un documental institucional narrado en los cuatro idiomas mayas de más difusión, para la promoción de los derechos humanos.
- Promoción y divulgación de la campaña de la central de llamadas “1555” de la institución del PDH.
- Reconocimiento, distinciones y saludos al personal de los medios de comunicación social en las fechas de aniversario.
- Programación de espacios para entrevistas en los diferentes medios de comunicación para el Procurador de los Derechos Humanos.
- Reuniones periódicas con reporteros de medios de comunicación social para abordar temas de actualidad.
- Realización de un análisis mediático, con el objetivo de determinar la imagen del PDH y la institución en los medios impresos.

4.2 Unidad de Comunicación Alternativa

Objetivos

- Proporcionar los servicios de edición y corrección de estilo, así como el diseño y diagramación de investigaciones e informes, estudios, material promocional y todo tipo de publicaciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales de divulgación, capacitación, promoción, procuración, etc.
- Brindar asesoría editorial a las demás unidades de la institución, para apuntalar y culminar sus esfuerzos mediante la corrección y edición de documentos.
- Proporcionar los servicios de impresión y reproducción, así como todo lo relativo a los acabados finales de las publicaciones y otros materiales emanados de las distintas unidades, para el cumplimiento de los objetivos institucionales de divulgación, capacitación, promoción, procuración, etc.

Diseño, producción, edición y reproducción

- Segundo Informe “Seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de crisis”
- Segundo Informe “Seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de crisis”, resumen ejecutivo

- Cartilla de leyes para la protección de las personas adultas mayores
- Memoria Primer Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos “Por una mejor calidad de vida”
- Informe “El derecho de saber”
- Constitución Política de la República de Guatemala
- Redadas masivas contra migrantes Un año después: casos de migrantes guatemaltecos deportados por la redada de Postiville. Iowa, Estados Unidos
- Estándares internacionales sobre migrantes
- Agenda Nacional de Derechos Humanos
- Memoria VII Congreso Nacional de Escritores
- Segundo Informe Nacional de Cárceles
- Informe Anual Circunstanciado: Informe de labores, Informe de situación y Resumen ejecutivo.

Edición

- Actualización serie de Cartillas de Derechos Humanos
- Cartilla Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer
- Memoria Congreso de la Víctima
- Memoria Congreso del Trabajo
- Manual de violaciones a derechos civiles y políticos
- Manual de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales
- Manuales de violaciones de derechos específicos:

Trabajo cooperativo

- Desarrollo del proyecto de edición de la revista especializada en derechos humanos en coordinación con el área de Asesoría de Análisis Estratégico: definición de objetivos y criterios editoriales; integración del Consejo Editorial y la Coordinación Editorial; elaboración del Acuerdo de Creación.
- Recopilación de materiales para la Colección de Informes sobre Derechos Humanos 2007-2012, conformada por informes de supervisiones, monitoreos y análisis realizados por diversas áreas de la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Recopilación de la memoria histórica de la institución

Se continúa con segunda parte de la recopilación y análisis institucional, que recoge las acciones, denuncias, mediaciones e investigaciones de la segunda gestión del Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio Fernando Morales Alvarado (2007-2012). La publicación cuenta con el soporte de una comisión técnica que dirige, supervisa e impulsa el proyecto.

Taller de publicaciones

Reproducción de materiales durante 2009

Tipo de documento	Cantidad
Afiches	210
Bifolios	2,500
Diplomas	87,095
Informes	4,110
Cartillas	2,604
Invitaciones	1,710
Trifolios	4,000
Volantes	30,880
Archivo vertical y fichas	20,800
Material de apoyo	28,000
TOTAL	181,909



5. Dirección de Estudio, Análisis e Investigación (DEAI)

La Dirección de Estudio, Análisis e Investigación tiene como objetivo incidir en la toma de decisiones y en la generación de estrategias y líneas de acción del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y dependencias de la institución, a través de los análisis del marco situacional de los derechos humanos y del control a la gestión administrativa gubernamental en la materia, así como favorecer el espacio institucional en los mecanismos regionales e internacionales de protección y promoción de los derechos humanos

Objetivos

1. Convertir en conocimiento útil para el ejercicio de las atribuciones del PDH toda información relacionada con los derechos humanos proveniente de fuentes internas o externas, a través de la recopilación, sistematización y transformación de esa información en análisis, investigaciones e informes que fortalezcan las capacidades y eficacia a la institución y permitan al PDH la toma de decisiones y la generación de acciones estratégicas en el cumplimiento de su mandato constitucional.
2. Coordinar la fiscalización de la gestión administrativa gubernamental en cumplimiento de las facultades del PDH de supervisar la administración pública con el fin de promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos.
3. Fortalecer la institución del PDH en el conocimiento y aplicación de los instrumentos o estándares internacionales en derechos humanos y de sus mecanismos de supervisión o protección, para la mayor eficacia de sus acciones y consolidar la interlocución del PDH con los mecanismos internacionales o regionales de promoción y protección de los derechos fundamentales.

Funciones más importantes

- Orientar el trabajo específico de su competencia y objetivos de acuerdo con el plan estratégico de la institución, así como de las prioridades establecidas por el Magistrado de Conciencia y los propios planes desarrollados por cada unidad.
- Relacionar los procesos de trabajo de las unidades de la dirección bajo el principio de la complementariedad y el éxito de sus resultados en base a los planes de trabajo respectivos.
- Impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales del recurso humano a través de procesos de capacitación, discusión y análisis a lo interno de las unidades de la dirección.
- Presentar al PDH informes de análisis cuantitativos y cualitativos acerca de la situación de los derechos humanos, casos, supervisiones, temas específicos u otros a requerimiento del Despacho Superior.
- En el marco de los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República, dar seguimiento al cumplimiento del Estado de la normativa de los pactos y convenios ratificados y aceptados, así como de las decisiones de los mecanismos convencionales y no convencionales, internacionales o regionales en materia de derechos humanos.
- Desarrollar un directorio institucional de ámbito nacional e internacional que permita mejorar la coordinación en situaciones de emergencia, así como la difusión de asuntos de interés del PDH.

La DEAI según el acuerdo SG 010-2009 está conformada de la manera siguiente:

- Unidad de Supervisión Administrativa con tres áreas de trabajo: Control Administrativo; Control de Legalidad y Supervisión Hospitalaria.
- Unidad de Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos.
- Unidad de Investigaciones, compuesta por tres áreas de trabajo: Análisis Sociopolítico; Análisis Socioeconómico, y Recopilación y Sistematización de Información.

Los temas propios de la DEAI son: análisis de información para estudios cuantitativos y cualitativos, análisis socioeconómicos, análisis sociopolíticos, situación de los derechos humanos a nivel nacional, seguridad alimentaria y nutricional, formación y capacitación, supervisión administrativa, derechos específicos, poblaciones vulnerables, coordinación interinstitucional e intrainstitucional, y ejecución del proyecto de cooperación internacional. Esta gama de temas, que responde a los objetivos y acciones estratégicas establecidas institucionalmente, contribuye a fortalecer la institución a nivel interno y responden al mandato constitucional del PDH.

Acciones emprendidas

- Se cuenta con tres bases de datos: una hemerográfica, con temas relacionados con los derechos humanos; una acerca de las muertes violentas, derecho a la vida y libertades fundamentales; y una referente a derechos económicos,

sociales y culturales, que se actualizan permanentemente. Estas corresponden a medios de prensa escritos del país y archivos provenientes de las bases de datos de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Estos últimos representan información esencial para la sistematización y organización de los datos, creación de variables, valoración de información para la elaboración de cuadros y estudios estadísticos, que se emiten y analizan para cualquier informe de la institución.

- Se han elaborado a la fecha los siguientes informes cuantitativos: Mapas temáticos a nivel de municipios con temas de linchamientos 2004-2008 y tendencias de 2009; Estadísticas de linchamientos por municipio, con mayor tasa de casos por cada 100,000 habitantes; Base georeferencial con noticias hemerográficas, con énfasis en seguridad y muerte de pilotos; Estadísticas de homicidios generales 2009; Estadísticas de homicidios y lesiones; Estadísticas de distribución territorial de homicidios en población menor de edad; Estadísticas de tasa de homicidios en los municipios con mayor incidencia del país, años 2003-2008; Estadísticas de homicidios de mujeres 2009; Estadísticas de homicidios de mujeres a nivel municipal con mayor incidencia en el país, años 2003-2008; Estadísticas de homicidios de niñez y adolescencia 2009; Estadísticas, de homicidios por edad, con tablas dinámicas con identificación de zonas vulnerables de los homicidios ocurridos en los años 2003-2008; Estadísticas de delitos sexuales, niñez y adolescencia 2009; Estadísticas de detenidos por edad con identificación de zonas vulnerables de los detenidos 2008; Estadísticas de hechos delictivos en transporte urbano; Análisis estadístico de homicidios de diferentes fuentes de información, estudio de la relación de homicidios reportados por la PNC, y los reportados por los periódicos, y estimación de datos reales en base a los reportados y recopilados por la base del registro hemerográfico.
- Procesamiento de todas las estadísticas de las Auxiliaturas, Defensorías y sedes de la institución del PDH, para el informe circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos 2009.
- Se cuenta con los datos procesados por el CENADOJ en los cuales se elaboran estadísticas relacionadas con procesos al sistema de justicia en materia penal, familiar y niñez y adolescencia con énfasis en delitos contra la vida, violencia contra las mujeres, delitos sexuales, delitos contra la niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar y juicios orales de fijación de pensión alimenticia y denegaciones de asistencia económica.
- Informes temáticos: tres informes trimestrales de los análisis de perspectivas económicas y estado de situación de los DESC (enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre); Informe de monitoreo y gasto público del Gobierno durante el primer semestre; Crisis económica mundial y sus repercusiones en Guatemala en la operativización de los DESC; Informe de gasto social con énfasis en la educación, salud y servicios básicos; Informe para el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas acerca de las Desapariciones Forzadas; Informe para el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Abramovich, referente a la situación de los pueblos indígenas en Guatemala; Informe al Relator Especial de Naciones Unidas concerniente al “Derecho a la alimentación”, en su visita a Guatemala.
- Cuatro informes de situación nacional: Informe anual de situación de los derechos humanos en Guatemala 2008, anexo al Informe Circunstanciado del PDH, entregado al Congreso de la República en enero de 2009; Primer informe trimestral de situación de los derechos humanos en Guatemala (enero-marzo 2009); Informe semestral de la situación de los derechos humanos en Guatemala (enero a junio 2009); Segundo informe de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, entregado en marzo al CONASAN y en mayo al Congreso de la República de Guatemala.
- Nueve informes finales de supervisiones y monitoreos a la Supervisión de la administración pública: Informe sobre hospitales nacionales relacionado con la infraestructura, material quirúrgico, personal médico y paramédico, atención de pacientes y existencia de medicamentos; Informe de la Dirección del Consumidor, DIACO; Informe de la supervisión a los Juzgados primero, segundo y tercero de Ejecución Penal; Informe de la supervisión a los hospitales por la epidemia de la influenza A H1N1; Informe de supervisión institucional a los hospitales nacionales de ortopedia y rehabilitación Dr. Jorge Vonn-Ahn, Hospital Nacional de Salud Mental Dr. Federico Mora y Hospital de Rehabilitación del IGSS; Informe de supervisión al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); Informe supervisión sobre potabilidad del agua; Informe de supervisión a hogares y centros de protección y abrigo (2006-2008); Informe de supervisión referente al Maltrato Infantil.
- En el área estratégica del fortalecimiento y desarrollo institucional, se trabajaron las siguientes acciones con los resultados y productos siguientes:
 - ✓ Conformación y coordinación de la mesa intrainstitucional con las Direcciones de Recursos Humanos y Educación para la creación de la Escuela de los trabajadores/as de la institución del PDH, elaboración del plan y cronograma de trabajo, propuesta metodológica para el abordaje del diagnóstico de necesidades en formación y capacitación.
 - ✓ Revisión y aprobación del Manual de organización y funcionamiento de la DEAI con sus flujogramas.
 - ✓ Sondeo institucional para el conocimiento y manejo de los indicadores en materia de derechos humanos, con el fin de optimizar la información estadística que aportan las áreas de la institución.

- ✓ Construcción del formato digital (Excel) para la recopilación de los insumos del informe anual circunstanciado para el periodo 2009 del PDH.
- ✓ Construcción del programa para la elaboración del formato encuesta SSPRO, para elaborar los monitoreos y supervisiones institucionales.
- En el área estratégica de Educación en Derechos Humanos se cuenta con: bases de datos actualizadas permanentemente con distintos hechos relacionados con derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; con poblaciones vulnerables, para información estadística, con fuentes externas para este trabajo; informe del sondeo sobre el conocimiento de indicadores a nivel institucional, su uso y aplicación; capacitación en temas de elaboración de indicadores en materia de derechos humanos, para personal de la institución; acciones de coordinación con las unidades, defensorías, direcciones y auxilios de la institución.
- En el área de fortalecimiento institucional para la DEAI las acciones fueron: coordinación y gestión interna en la ejecución de proyectos de cooperación internacional (PRODER/DANIDA); dos informes de ejecución técnica a los cooperantes de DANIDA; informe final de proyecto ejecutado por la Asociación Española “María Plaza” de España en relación con “Muertes violentas de mujeres”; tres proyectos para agencias de cooperación para la DEAI; monitoreo del proceso de ejecución de los proyectos de la DEAI; 800 documentos con información diversa, misma que se entregó a distintos actores internos y externos.
- En el área estratégica de supervisión a la administración pública las acciones fueron: la revisión metodológica, técnica y sustantiva de los planes de supervisión e instrumentos de recolección de la información de supervisiones y monitoreos a distintas dependencias del Estado
- En el área estratégica de Fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil e instituciones del Estado: relaciones con algunas instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil que requieren información cuantitativa y cualitativa. La dirección recibe información para procesarla, analizarla y difundirla.

5.1 Unidad de Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos (UMII)

Objetivo general

Fortalecer a la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en el conocimiento y aplicación de los instrumentos o estándares internacionales en derechos humanos y de sus mecanismos de supervisión o protección, para la mayor eficacia de sus acciones y consolidar la interlocución del Procurador con los mecanismos internacionales o regionales de promoción y protección de los derechos fundamentales.

Objetivos específicos

- Lograr una promoción de la utilización de la normativa internacional en materia de derechos humanos.
- Utilizar los mecanismos subsidiarios de protección de los derechos humanos, en el marco del mandato constitucional del PDH.
- Promover e impulsar la creación de vínculos entre el PDH e instancias locales e internacionales en el ámbito de protección y promoción de los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales.

Competencia (facultades y atribuciones)

1. Colaborar en la elaboración de informes cuantitativos y cualitativos dirigidos a mecanismos internacionales o regionales de protección o supervisión de derechos humanos, intergubernamentales o no gubernamentales dedicados o interesados a la protección o promoción de los derechos humanos.
2. Brindar asistencia técnica a otras dependencias internas para la elaboración de informes o comunicaciones dirigidas a mecanismos internacionales.
3. Desarrollar herramientas de trabajo especialmente en formato digital sobre la temática de los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos destinados a funcionarios, oficiales y operadores en general de la institución o interesados externos.
4. Impulsar en la práctica cotidiana de la institución del Procurador, la sensibilización y el conocimiento acerca de la normativa internacional en materia de derechos humanos y contribuir a su aplicación como normativa vigente en el país.
5. Promover el desarrollo de mecanismos o procedimientos de cumplimiento de las recomendaciones o decisiones de los mecanismos internacionales o regionales de protección de los derechos humanos.
6. Promover el desarrollo y aplicación de estándares internacionales y su difusión en las dependencias de la institución; favoreciendo el desarrollo de indicadores de Derechos Humanos.

7. Desarrollar comunicaciones y peticiones, medidas cautelares, entre otros, ante los mecanismos internacionales o regionales para la promoción y protección de los derechos humanos, en situaciones o casos individuales o colectivos.
8. Contribuir al desarrollo de una política internacional de la institución, facilitando la interlocución del ombudsman con instituciones, entidades y personas interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos.
9. Facilitar la interlocución del Magistrado de conciencia con las autoridades de las instancias internacionales en el sistema de protección de los derechos humanos, tales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
10. Fortalecer la participación y presencia institucional en espacios nacionales e internacionales.
11. Crear y desarrollar vínculos, alianzas, convergencias o sinergias con organizaciones de sociedad civil dedicadas a la promoción o protección de los derechos humanos, en el ámbito internacional.

Acciones emprendidas

Legal/jurídico

- Labores de protección y defensa, a través de la atención de casos y la realización de comunicaciones al Sistema Interamericano de Protección; y también en la preparación y colaboración con otras dependencias para elaborar informes a órganos y mecanismos internacionales convencionales y especializados.
- Análisis de 34 casos para evaluar la presentación de comunicaciones ante mecanismos internacionales de protección. Seguimiento a la ejecución de medidas cautelares vigentes, así como nuevas gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la adopción de medidas cautelares.
- Ante situaciones urgentes, la UMII ha solicitado la intervención subsidiaria del Sistema Interamericano de Protección. Las solicitudes se han realizado en el marco de los criterios y normas de la CIDH para otorgar medidas cautelares de acuerdo con el artículo 25 de su reglamento.
- Se intercambiaron 67 comunicaciones con la CIDH relacionadas con 29 casos (diez de años anteriores y 19 casos del presente), de los cuales 14 consistieron en nuevas solicitudes de medidas cautelares; envió de comunicaciones a la Unidad Funcional de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH y a otros mecanismos de protección, como la Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya.
- De las 14 solicitudes de medidas cautelares presentadas por el PDH a la CIDH, dos fueron resueltas favorablemente, una de las cuales favoreció la protección de más de 600 personas; las restantes 12 solicitudes motivaron intercambio de información. En la práctica y para la mayoría de los casos, el intercambio de información con la CIDH implica la atención especial por parte de los órganos encargados del Estado de Guatemala en el asunto, lo que puede ser favorable para la disminución de las condiciones de riesgo en que se encuentran los posibles beneficiarios. A solicitud del Departamento de Procuración de la institución del PDH, adicionalmente se analizaron 17 casos para considerar la viabilidad de presentar comunicaciones internacionales.

Investigación y asistencia técnica

- La UMII ha brindado asistencia o apoyo técnico particularmente a la Unidad de Asesoría Jurídica; la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación; el Área de Recepción y Calificación de Denuncias; a la Unidad de Derechos Civiles y Políticos; y a las Defensorías y Auxiliaturas Departamentales.
- En coordinación con la DEAI, y la asistencia técnica de la Unidad de Comunicación Alternativa, se elaboró y publicó el documento “Estándares internacionales: los derechos para personas migrantes en condiciones de privación de libertad”.
- La UMII brindó aportes técnicos para la supervisión al Hospital de Salud Mental, y colaboró en la elaboración del informe respectivo.
- Elaboración de ocho opiniones técnicas en casos específicos como parte de la evaluación institucional de las acciones internacionales que podrían emprenderse para buscar la garantía, respeto y reparación de los derechos humanos.
- Comunicación y envío de aportes escritos a mecanismos especializados de Naciones Unidas:
 - ✓ Matriz de seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y colaboración para el informe institucional presentado a ese Grupo de Trabajo.
 - ✓ Se contribuyó con el trabajo del Comité internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, mediante el traslado de información utilizando el formato de un instrumento base, este aporte contribuyó con la elaboración del informe *Survey on National Human Rights Institutions*, publicado en julio de 2009 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual se integró con los aportes de las instituciones nacionales de todo el mundo, incluyendo nueve de América.

- ✓ Informe independiente para el señor Philip Alston, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, en el marco de la solicitud de observaciones e información dirigida al Estado sobre la implementación de las recomendaciones formuladas luego de su visita a Guatemala en 2006.
- ✓ La UMII colaboró con la elaboración del informe independiente del PDH de Guatemala preparado para la señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos, previo a la presentación del informe sobre la Misión a Guatemala de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Hina Jilani..
- ✓ En coordinación con la Defensoría de Personas con Discapacidad, envió, a través de la Representante del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales (CIC) en Ginebra, una comunicación en el marco de la Resolución 10/07 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre “Derechos Humanos de las personas con discapacidad: Marcos Nacionales para la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
- ✓ Intercambio de comunicaciones con Amnistía Internacional, Londres, por medio de su Equipo Centro América y, también, se han intercambiado comunicaciones y se han realizado reuniones con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional oficina para Mesoamérica (CEJIL); la relación con esas organizaciones internacionales propició una campaña de apoyo internacional en el marco de ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que realizan su labor desde la institución del PDH.
- ✓ Se entabló comunicación con la presidencia del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales –CIC- con el fin de contribuir al avance del proceso de consolidación, fortalecimiento y formalización de la estructura organizacional del CIC y consolidar la membresía de la institución del PDH.

Acciones externas de fortalecimiento institucional y de las relaciones internacionales

- En el marco del mandato del PDH, la UMII ha continuado participando en el proceso de creación, conformación y funcionamiento de la COGUADIIH adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, incorporándose a dos de los grupos de trabajo y participando en las reuniones realizadas.
- La UMII forma parte del Comité Técnico¹ del proceso de construcción del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), como aplicación y consecuencia de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en octubre de 2009 la propuesta base fue presentada ante el cuerpo de diplomáticos acreditados en Guatemala y ante diputados del Congreso de la República. Organizaciones miembros del Comité Técnico coordinaron el apoyo del Centro de Rehabilitación e Investigación para las Víctimas de la Tortura de Dinamarca.
- Se ha participado en actividades vinculadas con la temática de trabajo: Seminario Internacional “Verdad, 10 años después”; Taller de discusión y capacitación sobre legislación nacional en materia de Trata de Personas; Primer Congreso Nacional de Derecho Internacional Humanitario, “La Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Guatemala”; y el Seminario Internacional “Medidas de Reparación y sus Desafíos”, entre otros.
- Se ha mantenido comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tanto en Ginebra como su oficina en Guatemala.
- Se ha mantenido comunicación con mecanismos especializados de protección de derechos humanos (Relatores, Representantes del Secretario General y Grupos de Trabajo) y con el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
- En relación con casos ocurridos en Guatemala, la UMII ha sido el enlace entre la institución del PDH y el Equipo América Central de Amnistía Internacional, así como con el equipo para Guatemala del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Productos

- Con la Dirección de Procuración, para buscar mecanismos que permitieran fortalecer el seguimiento de las solicitudes de medidas de protección enviadas al Ministerio de Gobernación y Dirección General de la Policía Nacional Civil. Asimismo, se ha coordinado con entidades de la institución de acuerdo con el interés temático y para buscar mecanismos subsidiarios internacionales en casos específicos.
- Apoyo técnico a la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación para la recopilación y traslado de información sobre estándares internacionales en materia de derechos humanos para la elaboración de los instrumentos de supervisión administrativa.

¹ Conformado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, con el apoyo técnico de la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la facilitación del la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.

- Recopilación de información relacionada con relatores e instrumentos internacionales sobre defensores de derechos humanos y operadores de justicia para la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación y Asesoría Estratégica.
- Recopilación y traslado de información sobre indicadores internacionales en materia de derechos humanos sobre derecho al debido proceso y operadores de justicia.
- Revisión de boletas para supervisión administrativa desde la perspectiva de los estándares internacionales.
- Recopilación y traslado de insumos a la Unidad de Asesores vinculada con proceso de establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
- Recopilación y traslado de información sobre indicadores internacionales en materia de derechos humanos con énfasis en derechos económicos, sociales y culturales para la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación.
- Recopilación y sistematización de información sobre instrumentos internacionales ratificados por el Estado en el presente año.
- Traducción libre al idioma español del documento “Human Rights Education Training” de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, para la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación.
- Elaboración de respuestas en coordinación y apoyo técnico a la Defensoría de la Mujer para el cuestionario de la Federación Iberoamericana de Ombudsmen (FIO) sobre la situación de la mujer en Guatemala.
- Análisis y elaboración de la opinión técnica respecto del caso de posible denuncia ante el sistema interamericano por parte de ex trabajadoras de maquila.
- Recopilación y traslado de información de instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y la pobreza, para la Unidad de Asesores Jurídicos.
- Opinión técnica y propuesta de seguimiento institucional en casos relacionados con los derechos de la mujer vinculados con los artículos 210 y 221 del Decreto Ley 106 del Código Civil, coordinado con la Unidad de Asesores.
- Se analizaron 31 casos, y se emitieron ocho opiniones técnicas; con base en la información disponible se evaluó el riesgo, urgencia y viabilidad de ser presentados ante el sistema interamericano.

Logros

- Se finalizó la propuesta del proyecto de ley para el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en un proceso impulsado por un comité técnico en el cual, además de la institución del PDH, participa el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la facilitación de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. La propuesta ha sido presentada a los entes gubernamentales involucrados en la temática² que han formado una Mesa amplia de impulso al proceso; al cuerpo diplomático y a varios diputados del Congreso de la República. Se presentará al pleno para su aprobación con el procedimiento de ley.
- La institución del PDH continúa participando en el espacio multiinstitucional generado con la creación de la Comisión Guatemalteca para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (COGUADIH) y se ha integrado a las Comisiones de atención a personas víctimas de minas antipersonales y a la Comisión de seguimiento de las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en el tema de personas desaparecidas.
- Se elaboraron cinco informes independientes de la institución dirigidos a mecanismos especializados (incluidos en el apartado sobre investigación y asistencia técnica) y se colaboró en la elaboración de dos más (Informe al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas e Informe para la Federación Iberoamericana de Ombudsmen sobre la situación de la mujer).
- Se mantuvo comunicación y se atendieron comunicaciones de diversas organizaciones, dentro de las que se encuentran: la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el Comité de Desarrollo Campesino, Derechos en Acción, el Movimiento Pro Justicia de Nueva Linda y el Frente Nacional de Lucha.
- En el marco del sistema interamericano, además de las comunicaciones por casos urgentes
 - ✓ Se logró reactivar el proceso de reparación vinculado con el caso de José Miguel Mérida Escobar, comisario de la Policía Nacional encargado de la investigación de la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack Chang, ocurrida en 1990. El Comisario Mérida Escobar fue ejecutado extrajudicialmente el 5 de agosto de 1991; el caso fue resuelto mediante Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH; la intervención institucional fue solicitada por familiares debido a existir compromisos pendientes de cumplir.
 - ✓ Se continuó con la gestión ante la CIDH del caso presentado por la desaparición de los señores Gerson Estuardo Reyes Gómez y Jeremías Fuentes López ocurrida en Escuintla. La CIDH se encuentra analizando el caso.

² Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Gobernación, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y Procuraduría General de la Nación.

- ✓ En seguimiento al caso Nueva Linda, se sostuvo una reunión informativa con la hija del señor Héctor Reyes quien fue víctima de desaparición, y se ha planteado demanda contra el Estado de Guatemala. se realizó con el fin de conocer el avance del caso presentado ante la CIDH, la cual se encuentra analizando el caso.
- ✓ Se intercambiaron comunicaciones sobre casos específicos con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Mesoamérica, en San José de Costa Rica; Amnistía Internacional, en Londres, Reino Unido; el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por medio de su Sección especializada: No Impunidad; y Radio Francia Internacional.

5.2 Unidad de Supervisión Administrativa (USA)

La Unidad de Supervisión Administrativa está inscrita en el contexto de los objetivos de la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación y sus funciones y actividades, sustentadas en la Ley del Procurador, en el Plan Operativo Anual 2009 y las Líneas Estratégicas del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para el quinquenio 2007-2012, para las supervisiones a realizar durante el año, que por ley o por convenciones internacionales le competen a la institución del PDH, tanto aquellas planificadas anualmente como las que por situaciones de emergencia o carácter coyuntural urgente sean instruidas. También se realizan investigaciones de casos derivados de las supervisiones o a solicitud de las autoridades o las direcciones y unidades de la institución.

El trabajo de la Unidad de Supervisión Administrativa se materializa en diversas acciones y productos; durante el presenta año, como parte de dicha labor se realizaron: 20 planes de supervisión y 60 boletas de obtención de información; 15 informes preliminares y cuatro finales de las supervisiones; capacitación e inducción al personal de la institución del PDH respecto de los procesos de supervisión administrativa.

Investigación de casos

- Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por supuestas anomalías y atraso en la distribución de fertilizantes.
- Por la quema de un bus de transporte colectivo extraurbano y agresión física a pasajeros, en la aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez.
- Caso del aislamiento de pacientes en crisis en el Hospital de Salud Mental Dr. Carlos Federico Mora.
- Condiciones y trato a los pacientes internados en el Pabellón 4 (pacientes privados de libertad) del hospital de Salud Mental, Dr. Carlos Federico Mora por orden de juez competente.
- Supuesta violación a la Ley de Acceso a la Información en el Hospital General San Juan de Dios.
- De análisis de cargas virales (pacientes con VIH/SIDA) en el Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Investigación y seguimiento del cumplimiento de la resolución del PDH del expediente ORD.GUA.907-2008/DE, por supuesto maltrato a adolescentes en el Hogar de Protección y Abrigo “Elisa Martínez”.
- Por supuesto maltrato físico a una alumna de la Escuela Oficial Urbana Mixta Juana Mercedes Dardón, en Amatitlán.
- Investigación, por petición de la Junta Directiva del cuerpo de médicos del hospital Roosevelt, de las deficiencias en la atención a los pacientes, debido a la falta de equipo médico y del personal necesario.
- Referente a la atención de los casos de desnutrición, morbilidad y mortalidad en hospitales nacionales.
- Acerca de las condiciones laborales de los pilotos del servicio de transporte de carga pesada, por restricciones de ingreso a la ciudad capital según acuerdo municipal.
- Investigación de denuncia presentada por almacenamiento y comercio de juegos pirotécnicos en La Terminal.
- En Centros de Atención del IGSS, referente al cumplimiento del Amparo 48-2009 “obstaculización y retardo injustificado”, y la negativa de proveer medicamentos clasificados en el Nivel 4.
- Del colapso de los colectores, en la colonia Covías, zona 5, ciudad capital.
- De suspensión de los servicios de Consulta Externa en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, derivada de la falta de los pagos pendientes a los médicos residentes.
- Por supuesto caso de desnutrición severa de una menor recluida por orden de juez competente, en la Casa Hogar “El Destino”, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
- Investigación en el IGSS por demora en la entrega de la pensión correspondiente, por fallecimiento del conyugue de Elena Quej Caal, en Cobán, Alta Verapaz.
- Investigación en el IGSS por denegación de la pensión por vejez, al señor Raúl Zepeda López.

Supervisiones administrativas

- Supervisión acerca de extranjeros detenidos en albergue de Migración.
- Centros escolares: supervisión a condiciones de infraestructura y gratuidad de inscripción y educación.
- Supervisión a hospitales: infraestructura, material quirúrgico, personal médico y paramédico, atención a pacientes y existencia de medicamentos.
- Supervisión a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).
- Supervisión a centros y hogares de protección y abrigo, incluyendo guarderías de cuidado diario (estatales y municipales), en cumplimiento de la Ley del Procurador y de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Secretaría de Bienestar Social.
- Supervisión Administrativa de los Juzgados de Ejecución Penal.
- Supervisión referente a la potabilidad del agua y su control por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las Municipalidades.
- Supervisión al Instituto de Ciencias Forenses (INACIF).
- Supervisión a los hospitales por la pandemia de influenza A H1N1; verificación sobre capacidad para enfrentar la emergencia.
- Supervisión de las condiciones de acceso a las personas con discapacidad al servicio del Transmetro (centro-sur).
- Supervisión a centros que atienden a pacientes con VIH/SIDA.
- Supervisión de las condiciones higiénicas de los rastros municipales.
- Supervisión al Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Supervisión al Sanatorio Nacional Antituberculoso “San Vicente de Paul”.
- Supervisión respecto de la atención y planificación a asentamientos y albergues.
- Supervisión referente al respeto a la identidad cultural de estudiantes indígenas en centros educativos estatales a nivel nacional.
- Supervisión acerca de la implementación de la educación en derechos humanos en escuelas de nivel primario.
- Supervisión en relación con el maltrato infantil y abusos en el nivel primario de educación (escuelas y colegios).
- Supervisión en el Sistema Penitenciario: verificación en centros de privación de libertad sobre existencia de tortura.
- Supervisión a instituciones que por Ley les corresponde recibir, procesar e informar denuncias de violencia intrafamiliar y contra la mujer.
- Supervisión al Hospital de Salud Mental.
- Supervisión a hogares para el Adulto Mayor. Informe sobre abuso y maltrato a las personas de la tercera edad.
- Supervisión a sujetos obligados de Acceso a la Información.
- Supervisión al Organismo Judicial.
- Supervisión al Consejo Nacional de Adopciones.
- Supervisión a las instituciones que por ley autorizan y controlan la venta de materiales, producción, distribución y comercialización de juegos pirotécnicos.
- Supervisión a unidades de nutrición de hospitales nacionales.
- Supervisión a instituciones que velan por el cuidado y protección al medio ambiente..

Mediaciones

- Mediación entre manifestantes en pro y en contra de caso del abogado Rodrigo Rosenberg.

Otras actividades del personal de la Unidad

- Supervisión y entrega de equipo a investigadores de 11 Auxiliaturas.
- Cooperación con Defensorías para la realización de operativos de monitoreo.
- Recepción de informes y sesiones de coordinación con los investigadores de Auxiliaturas.
- Cuatro reuniones (trimestrales), con los integrantes de la Comisión de Supervisiones.

6. Dirección de Mediación, Resolución de Conflictos e Incidencia en Políticas Públicas (DIMERCIPP)

La DIMERCIPP es la encargada de impulsar y fortalecer la participación de la sociedad en la formulación de políticas públicas nacionales y locales; monitorear el comportamiento de la administración pública nacional, regional y local, con el propósito de asegurar el respeto y vigencia de los derechos humanos; e incidir oportunamente con acciones tendientes a la prevención, mediación y resolución de los conflictos sociales y el logro del desarrollo integral de las personas sobre la base del respeto, vigencia, promoción y defensa de sus derechos.

La DIMERCIPP está conformada por tres unidades: la Unidad de Incidencia en Políticas Públicas (UIPP), la Unidad de Análisis e Historia del Conflicto y Unidad de Atención Directa a la Víctima (UADV). Ésta se encarga de la atención de los casos en que se necesita la defensa de los derechos humanos en conflictos siguiendo el procedimiento según el triaje:

- Rojo: atención en 24 horas por peligro a la seguridad integral o física de las personas, en especial: mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidades.
- Amarillo: atención en 48 horas, el objetivo esencial es apoyar a resolver el problema.
- Verde: atención en 72 horas.

Ámbitos de atención y acciones emprendidas

- Derechos violados con mayor y menor frecuencia: un 27% de los 178 casos atendidos se refieren a situaciones de índole laboral, lo que evidencia tanto la inobservancia de lo que la ley determina como también la necesidad de realizar acciones de verificación e incidencia por parte de la institución del PDH. De los derechos menos violados existen ocho expresiones: integridad física, petición, de manifestación y expresión, de integración familiar, acceso a la información auditoria social, no discriminación y propiedad privada.
- Coordinación interinstitucional: la DIMERCIPP ha necesitado involucrar a diferentes instituciones del Estado, con quienes se ha tenido una serie de reuniones de trabajo en 155 mesas de dialogo. De estas mesas, las principales se desarrollaron por violaciones de derechos laborales (27%), del derecho al desarrollo económico (10%), del derecho al orden y seguridad (8%), del derecho al acceso a la tierra (7%), del derecho a la educación (6%), del derecho a la vivienda (5%) y del derecho a un ambiente sano y a la salud (4% cada una).
- Seguimiento de casos paradigmáticos: por el nivel de complejidad y el impacto que tienen, existen casos que han trascendido los años, como el caso de resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de Chixoy, el de vendedores del mercado de Coatepeque, el de la cementera de San Juan Sacatepéquez, el de las areneras El Carmen e Indaco, y las mesas de dialogo en Livingston y entre el CONIC y la Secretaría de Asuntos Agrarios, entre otros.

Mediación y resolución de conflictos

Atención por derecho vulnerado

Derecho vulnerado	Total	%
Integridad y seguridad	153	24.75
Vivienda	111	17.96
Propiedad privada	13	2.10
Libertad sindical o asociación	3	0.48
Servicios esenciales	23	3.72
Desarrollo económico	135	21.84
Trabajo	71	11.48
Educación	54	8.73
Consumidor y usuario	18	2.91
Alimentación	1	0.16
Salud	9	1.45
Libre locomoción	12	1.94
Políticos	4	0.64
Seguridad social	5	0.80
Medio ambiente	6	0.97
TOTAL	618	100.00

Expedientes de mediación

Con acuerdo	Sin acuerdo	Desistió o falta de interés	Expediente de competencia	Trámite	TOTAL
277	153	75	32	81	618
44.8%	24.7%	12.1%	5.1%	13.1%	100.0%

7. Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional (DIPLADI)

Misión

Promover el buen funcionamiento y agilización de la gestión del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) a través de la planificación de objetivos y acciones estratégicas, el seguimiento del cumplimiento de los mismos y el desarrollo institucional.

Objetivo

Desarrollar y fortalecer el proceso de planificación, coordinación y evaluación de la gestión de la institución del Procurador de los Derechos Humanos y de los proyectos de desarrollo institucional.

Principales atribuciones

- Diseñar las bases e instrumentos sobre las cuales se elabora el Plan Operativo Anual de la institución de la PDH.
- Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la institución, en coordinación con la Dirección Financiera.
- Planificación de supervisiones y monitoreos anuales en coordinación con las Direcciones y Unidades involucradas.
- Planificación de los eventos anuales con base en los insumos que proporcionan las Direcciones, Unidades, Defensorías y Auxiliaturas.
- Seguimiento a las acciones estratégicas planificadas por las Direcciones, Unidades, Defensorías y Auxiliaturas de la PDH (incluye supervisiones, monitoreos, actividades y eventos).
- Elaboración, seguimiento y actualización semanal de la agenda pública del PDH.
- Revisión, sugerencias y participación en el diseño y elaboración de instructivos, guías, rutas de acción y otro tipo de instrumentos que permitan dar continuidad y seguimiento a las supervisiones administrativas y demás actividades y eventos que ejecuta la PDH.
- Brindar asesoría técnica y capacitación a todas las Direcciones, Unidades, Defensorías y Auxiliaturas de la institución, en las áreas de competencia de la planificación institucional.
- Diseño participativo, retroalimentación y socialización de las áreas estratégicas con base en las políticas, misión y la visión del PDH.
- Revisión de planes de trabajo e informes de los mismos, conformados por el Despacho Superior y emisión de las sugerencias respectivas.
- Apoyo en el diseño y elaboración de manuales de organización y funcionamiento de las Direcciones, Unidades, Defensorías y Auxiliaturas de la PDH.
- Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo institucional.

Acciones emprendidas

Legal/jurídico

- Elaboró el Acuerdo SG-10-2009 que rige la estructura organizativa de la institución del PDH.

Investigación y asistencia técnica

- Se elaboró una propuesta de distribución de las unidades administrativas de la PDH en las ocho áreas estratégicas, con el fin de que la Dirección Financiera y la DIPLADI, utilicen la misma distribución para que el Presupuesto se elabore de manera coordinada con la Planificación.
- Se elaboró la metodología y se condujo un taller para realizar el análisis FODA de la Dirección de Educación.
- Análisis y comentarios del documento “Protocolo de atención de casos de Ley de Acceso a la Información Pública”, diseñado y elaborado por la Dirección Nacional de Procuración

- Fue analizada la propuesta de Acuerdo de Reclasificación del Departamento de Educación y Promoción, por Dirección de Educación y Promoción Y traslado para revisión, aprobación y emisión del acuerdo respectivo.
- Atención y respuesta a solicitudes de información relacionadas con la PDH, tal el caso de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
- Elaboración del instructivo para el llenado de la Matriz de Planificación Institucional 2010, el cual se distribuyó a todas las Direcciones, Unidades, Auxiliaturas, Defensorías y Programas Especiales de la PDH.

Administrativo-financiero

- Se elaboró una propuesta para un Plan de Austeridad, debido a la reducción presupuestaria a la institución.

Gestión y apoyo de eventos

- Se elaboró el Plan de Eventos 2009 y se actualizó semanalmente, elaborando los informes respectivos.

Publicaciones

- Planificación Anual 2009.
- Plan Operativo Anual 2010.

Tecnología

- Capacitación al personal de la DIPLADI para operación del Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN) del Sistema de Administración Financiera (SIAF).

Apoyo y trabajo cooperativo

- Revisión de áreas estratégicas, de manera participativa con todas las Direcciones y Unidades de la PDH.

Productos

- Manuales de Organización y Funcionamiento elaborados, con primera revisión; pendientes cambios necesarios y aprobación de los mismos.
- Propuesta de formato final para Manuales de Organización y Funcionamiento.
- Plan Operativo Anual 2010 con su respectivo presupuesto, elaborado, aprobado y entregado a las instituciones correspondientes: SEGEPLAN, Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección Técnica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas.
- Plan de Supervisiones 2010.
- Plan de Eventos 2009 elaborado y seguimiento semanal del mismo.
- Informes de seguimiento a las actividades planificadas para ejecutar en 2009, que incluye 52 informes de eventos, cuatro de supervisiones y monitoreos y 12 de actividades operativas.
- Agenda pública del PDH, actualizada semanalmente.
- Áreas Estratégicas de la Política del Procurador 2010-2012, revisadas y actualizadas.
- Documento “Justificación de Solicitud de Incremento a la Asignación Presupuestaria a la PDH para el 2010”.

8. Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)

Misión

Mantener una adecuada relación y coordinación con la comunidad internacional que permita un mayor respaldo moral y político a las resoluciones y gestiones del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y hacerles copartícipes de los avances y resultados de su gestión, y una adecuada armonización entre las políticas de la cooperación internacional y la ejecución de acciones estratégicas en el marco del plan de trabajo del PDH.

Objetivo general

Que el Procurador de los Derechos Humanos cuente con el apoyo y respaldo de la comunidad internacional en el desarrollo de las gestiones y resoluciones que realiza en la procuración de los derechos fundamentales, así como en las acciones de promoción, educación y divulgación de los mismos. A estas tareas fundamentales se suma la obtención de cooperación técnica y financiera para el fortalecimiento de la institución y efectivo desempeño de sus atribuciones.

Funciones

1. Mantener comunicación y relación permanente con países amigos, organismos, agencias, y organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, para lograr el apoyo a la gestión del PDH, promoviendo la consulta, cooperación e intercambio de información.
2. Mantener una efectiva interlocución al exterior del país, en materia de derechos humanos, a través de la organización y participación en eventos internacionales.
3. Impulsar y dirigir la captación de cooperación técnica y financiera para el apoyo de programas y proyectos, mediante la formulación de los mismos y preparación de la información necesaria, identificando las fuentes de cooperación, manteniendo un registro actualizado, y dándoles el seguimiento correspondiente;
4. Identificar necesidades de cooperación técnica y financiera en coordinación con las distintas unidades de la institución, en apoyo a lograr el cumplimiento de sus objetivos.
5. Evaluar, monitorear, dar seguimiento y ejecutar, cuando corresponda, programas y proyectos vinculados al fortalecimiento institucional y a la promoción, defensa, protección y vigencia de los derechos humanos, con el apoyo de la cooperación técnica y financiera internacional.
6. Promover en coordinación con las unidades de la institución, la atención de comunicaciones provenientes del exterior que requieran la opinión del PDH.
7. Atender a las diferentes misiones internacionales que visiten la institución o el país y que requieran información de los programas y proyectos que impulsa el PDH.
8. Supervisar la correcta ejecución de los recursos provenientes de cooperación internacional, con el objetivo de presentar informes financieros y de auditorías de acuerdo con lo requerido por las fuentes de cooperación.
9. Abrir canales de comunicación, internos y externos, con las organizaciones e instituciones de control en derechos humanos.

Acciones emprendidas

Gestión política de apoyo internacional

En 2009, la Dirección contribuyó con las relaciones internacionales a través de la coordinación a nivel internacional, asistencia técnica, constante comunicación con la comunidad internacional, cuerpo diplomático y con instituciones y funcionarios a nivel internacional, relacionados con los derechos humanos. Se atendieron misiones de funcionarios de la comunidad internacional y de otras instituciones de derechos humanos de varios países que apoyan la gestión del PDH. Asimismo, se proporcionó apoyo logístico para que el Magistrado de Conciencia y funcionarios de la institución tuvieran una presencia activa en eventos a nivel internacional relacionados con la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, participando en las siguientes reuniones:

Viajes gestionados, realizados durante 2009

No.	Lugar	Descripción	Fecha
1	México	Visita con la delegación del Gobierno al Instituto Federal de Acceso a la Información de México.	Del 20 al 30 de enero
2	Washington, EUA	Visita al Museo del Holocausto. Visita al Departamento de Justicia. Programa de Capacitación de la Policía de EUA. Conferencia en la Universidad Americana de Washington. Entrevista con medios de comunicación.	Del 4 al 6 de Febrero
3	Houston, EUA	Entrevista con medios de comunicación y conferencia en la Universidad de Houston.	Del 8 al 10 de febrero
4	El Salvador	Observatorio Internacional de los Comicios en El Salvador.	Del 13 al 15 de mayo
5	Ginebra, Suiza	22ª. Reunión del Comité Internacional Coordinación de Instituciones Nacionales para la promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC).	Del 23 al 27 de marzo
6	Ginebra, Suiza	Conferencia de Durban	Del 20 al 24 de abril
7	La India	Reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la India. Visita oficial.	Del 27 al 1 de mayo
10	Panamá	Observar las elecciones presidenciales en Panamá.	Del 1 al 3 de mayo
11	Panamá	XLI Reunión del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH).	Del 4 al 5 de mayo

12	Miami, USA	Reunión con Organizaciones de Migrantes.	Finales de julio
13	Costa Rica, PNUD	Reunión Técnica sobre el Proyecto “ El Teatro Ibsen y la Consolidación de los Derechos Humanos” para lograr continuar con la ejecución del mismo	21 de octubre

Gestión de proyectos

La DRI continuó durante el presente año con su labor de identificar y gestionar recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional que complementen los programas y proyectos que desarrolla la institución del PDH, con recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

La cooperación internacional ha respondido al llamado, como un complemento al esfuerzo interno del PDH para desarrollar las acciones, programas y proyectos definidos en su Plan Marco de Trabajo 2008-2012, correspondiente al segundo período de su gestión, en tanto que la asignación de recursos provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación resulta insuficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionalmente asignadas, así como las que le confieren otras leyes relacionadas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la población guatemalteca.

Adicionalmente, se han realizado gestiones para poder continuar con la ejecución de proyectos financiados por la cooperación internacional, así como con nuevas propuestas de cooperación en temas prioritarios para la institución. Entre las gestiones de continuación se puede mencionar, la cooperación con la Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA), que apoyó en el presente año a la Dirección de Estudio, Análisis e Investigaciones y a la Dirección de Relaciones Internacionales. Adicionalmente, se realizaron gestiones ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para apoyar el Registro Unificado de Desaparición Forzada (RUDFOR), la Unidad de Averiguaciones Especiales y el Centro de la Memoria Histórica. También se están llevando a cabo gestiones con la Asociación para la Defensa, Aplicación y Realización de los Derechos Fundamentales (DAR), de Madrid, España, para continuar con el financiamiento de la segunda fase del programa “Violencia de género en Guatemala” y la posibilidad de obtener financiamiento para otros proyectos prioritarios para la institución.

En cuanto a los proyectos que se han presentado ante las distintas fuentes cooperantes para obtener financiamiento se pueden mencionar las siguientes:

Proyectos en gestión

Nombre del proyecto	Monto (miles de US\$)	Fuente donante
Registro de autoridades indígenas	558.7	Suecia y Suiza
Fortalecer la calidad educativa de los maestros de niveles primario, básico y diversificado, en materia de derechos humanos	128.6	OEA
Programa de Convivencia Escolar y Prevención de Violencia	Por definir	KFW y BIRF
Programa de Averiguaciones Especiales	430.0	PNUD
Unidad de Registro Unificado de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición (RUDFOR)	273.0	PNUD
Recuperación del Centro de la Memoria Histórica	800.0	PNUD
Fortalecimiento a la comunicación social del Procurador de los Derechos Humanos, para la atención de la justicia, seguridad y gobernabilidad	156.6	Canadá
Proyecto de fortalecimiento institucional para el abordaje del tema de trata de personas y su nexo con el tráfico ilícito de migrantes, dirigido al personal de la institución.	144.4	UNICEF
Fortalecimiento de la Unidad de Estudio, Análisis e Investigación y de la Unidad de Relaciones Internacionales de la institución del PDH.	211.3	DED y Canadá
Implementación y acciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información del Procurador de los Derechos Humanos	195.2	Taiwán
Fortalecimiento de la Coordinación de Defensorías	541.0	España y Canadá

Programa para mejorar la eficiencia de los derechos humanos	149.9	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Programa de fortalecimiento a la institución del Procurador de los Derechos Humanos	150.0	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Estudio sobre la violencia contra las mujeres en Guatemala	30.0	Asociación para Defensa, Aplicación y Realización de los Derechos Fundamentales, Madrid, España.
TOTAL	3,768.7	

La gestión de la cooperación internacional mencionada en el cuadro anterior se ha llevado a cabo de conformidad con las prioridades estratégicas definidas por el PDH para el período 2007-2012. Esta cooperación internacional se ha solicitado para el financiamiento de programas y proyectos que persiguen objetivos orientados a fortalecer la institución en términos generales y a incrementar la capacidad técnica y profesional del recurso humano, asimismo, hacer posible la aplicación de políticas estratégicas por medio de investigaciones y estudios relacionados con temas de derechos humanos, seguridad y justicia, en el ámbito político, social y económico, en especial, de la población más vulnerable.

Otro aspecto que se relaciona con la gestión de proyectos, dentro del accionar de la DRI, lo constituye el tema de la gestión de capacitación tanto a nivel nacional como internacional, orientada a funcionarios de la institución para participar en becas, pasantías y actividades institucionales financiadas por las fuentes cooperantes, y con fondos otorgados por la DANIDA, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación y de la Dirección de Relaciones Internacionales”, para poder cubrir el pago de algunos boletos aéreos en becas que no son totales. En este sentido, la DRI gestionó a nivel internacional 16 becas, de las cuales se logró la aprobación de diez y una pasantía para funcionarios de la institución, entre las cuales se pueden mencionar:

- Beca de Desarrollo Regional Integrado, en Israel, del 11 de mayo al 7 de abril de 2009, boletos financiados por DANIDA. Participó la licenciada Karin Irene Linares Robles, auxiliar departamental de Totonicapán.
- Licenciatura en Psicología, realizada en Rusia de octubre 2009 a octubre 2010, boletos financiados por DANIDA. Participó Emerson Amílcar Morales Paz, de la Oficina de Voluntariado.
- I Seminario Euro-Iberoamericano de Protección de Datos “La Protección de los Menores”, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, del 26 al 28 de mayo de 2009. Boletos financiados por DANIDA y la institución del PDH. Participó la licenciada Nidia Aguilar del Cid, Defensora de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
- XX Curso de Observadores para Misiones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, realizado en Madrid, España, del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2009, boletos financiados por DANIDA. Participó Orlando Francisco Pamal Rodríguez, jefe de seguridad.
- Curso acerca de la Transversalidad de Género, realizado en Dinamarca, del 11 al 27 de noviembre de 2009, financiado por DANIDA. Participó la licenciada María del Socorro Quezada Fernández, asesora.
- Taller Contra el Olvido, Memoria Histórica y Cultura de Paz, realizado en InWent, Alemania. Participaron Francisco García Morales, auxiliar departamental de Suchitepéquez, y Mayra Roxana Sandoval, auxiliar departamental de El Progreso.
- Pasantía aprobada sobre el tema “Fortalecimiento Técnico de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala” en México-CNDH.
- Curso-taller “Liderazgo y Motivación al Logro”, realizado por el INAP y el ICAP, de Costa Rica. Impartido en el INAP de Guatemala, del 9 al 13 de noviembre. Participaron Rafael Estuardo Rodríguez Escobar y Elizabeth Toledo Morales, educadores en derechos humanos de la Dirección de Educación.
- Beca aprobada, postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, a realizarse del 1 de marzo al 23 de julio de 2010.

Seguimiento a la ejecución de proyectos

La DRI ha velado por el debido cumplimiento de los objetivos y compromisos de cada uno de los proyectos en ejecución, de conformidad con lo estipulado en los respectivos convenios de cooperación internacional que respaldan su financiamiento, para lo cual ha realizado visitas *in situ* al interior del país y reuniones en la sede central. En paralelo, proporcionó asesoría técnica al PDH y a las unidades ejecutoras, en la elaboración de los informes requeridos por cada cooperante en el marco de los convenios suscritos. La cartera de proyectos en ejecución financiados durante 2009 con recursos de la cooperación internacional fue de seis, de los cuales se ejecutó un monto de Q3,616,940.80.

El cuadro siguiente da una visión de los proyectos en ejecución, las principales fuentes cooperantes y las unidades que, dentro de la PDH, ejecutaron los proyectos con cooperación internacional durante 2009.

No.	Fuente	Nombre del proyecto	Unidad ejecutora
1	Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA)	Fortalecimiento de la Unidad de Estudio y Análisis, de la Unidad Científica de Investigación Social y de la Dirección de Relaciones Internacionales de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Fase II	Dirección de Estudio, Análisis e Investigaciones y Dirección de Relaciones Internacionales
2	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Programa para mejorar la eficiencia de la procuraduría de los derechos humanos de Guatemala, Cooperación Técnica ATN/SF-9107-GU.	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección de Relaciones Internacionales
3	Plan Internacional	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Comunidad dentro del Marco Municipal en Jalapa	Auxiliatura Departamental de Jalapa
4	Plan Internacional	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Comunidad dentro del Marco Municipal en Jalapa.	Auxiliatura Departamental de Jalapa
5	Plan Internacional	Fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad dentro del marco municipal en Baja Verapaz, para las Unidades de Programa de Salamá y Rabinal	Auxiliaturas Departamentales de Salamá y Rabinal
6	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)	Aumento de las capacidades de la Defensoría de la Niñez en la defensa y protección de los derechos humanos, PDH	Defensoría de la Niñez y la Adolescencia

9. Dirección de Tecnología e Informática (DTI)

Esta dirección se enfoca a potenciar los esfuerzos que en materia de tecnología e informática se desarrollen en la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) con el fin de contribuir a la eficiencia y efectividad de la misma, así como impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad institucional en este sector.

Misión

Gestionar en forma eficiente el desarrollo tecnológico integral de la institución del PDH, facilitando políticas institucionales en el ámbito informático, para propiciar y mantener una organización activa, integrada y segura, a través de tecnologías de la información de vanguardia que contribuyan a maximizar el uso de recursos en forma eficiente bajo los principios de: trabajo en equipo, orientado a resultados y el desarrollo de habilidades, competitividad y alto desempeño de sus funcionarios, alineado con los objetivos institucionales y las normas de gestión tecnológica vigentes, para brindar servicios de información oportunos, dentro de un marco estratégico de calidad de los procesos de la institución.

Objetivo general

La DTI es el único ente rector y responsable en relación con la tecnología de la información y es la única instancia dentro de la institución para realizar todas las acciones concernientes a la disposición y acceso de las infraestructuras de la tecnología de la información y la comunicación de manera eficiente y eficaz para alcanzar la visión y la misión del PDH.

Objetivos específicos

- Desarrollar e implementar sistemas de apoyo técnico-administrativos de informática para la institución.
- Desarrollar y actualizar servicios y medios de comunicación electrónicos para apoyar el desarrollo de las funciones la institución del PDH y la atención de los usuarios.

- Dirección, coordinación y evaluación de los programas de automatización de la PDH.
- Planificación y mantenimiento de la tecnología informática de la PDH.
- Seguimiento de actividades de cooperación con otras oficinas de la institución del PDH y con entidades externas de acuerdo con asignación del PDH.
- Diseño y presentación de proyectos informáticos para la búsqueda de recursos de cooperación.
- Programación y asistencia técnica en los procedimientos de adquisición y mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones informáticas.
- Diseño de las estrategias de tecnología de la información para soportar las actividades sustantivas y administrativas de la institución del PDH.
- Diseño y desarrollo de programas de capacitación en informática para el personal de la institución del PDH.

Atribuciones y funciones

- a) Dirigir la planeación, administración y promoción del uso y desarrollo de las tecnologías de la información, comunicaciones y telecomunicaciones en la institución del PDH.
- b) Elaborar, establecer y controlar el cumplimiento de principios metodológicos únicos para la confección de sistemas de tecnología e información, de manera que se garanticen su elaboración e introducción en forma técnica y económica fundamentadas en la institución.
- c) Controlar el equipo institucional de procesamiento y transmisión de datos instalados en todo el país.
- d) Controlar aquellos movimientos de equipos, programas y datos que sean necesarios para responder a situaciones de emergencia en la institución en situaciones que se requiera.
- e) Dictar las normas, metodología y procedimientos que garanticen la organización, administración y el servicio a usuarios internos y externos.
- f) Establecer, en coordinación con las áreas competentes, los procedimientos necesarios relativos a la compra de bienes de tecnología e informática.
- g) Establecer, en coordinación con las áreas competentes, los procedimientos necesarios relativos a la actividad comercial con las empresas proveedoras de bienes y servicios de tecnología e informática.
- h) Apoyar en la elaboración de los diferentes contratos a celebrarse entre la institución y las empresas proveedoras de bienes y servicios de tecnología e informática, que sean necesarios para el establecimiento y operaciones de los sistemas de información.
- i) Dictaminar sobre los estudios de prefactibilidad y factibilidad que obligatoriamente deberán realizar y presentar las diferentes áreas de la institución, a la consideración de la DTI, respecto de la adquisición, renta, ampliación y modificación de equipos, instalaciones, sistemas de programación de computadoras y demás servicios de tecnología e informática.
- j) Aprobar la selección, contratación y suspensión de servicios y equipos de computación, utilizados por las diferentes áreas de la institución.
- k) Elaborar, en coordinación con las áreas competentes, los requerimientos mínimos cualitativos y cuantitativos en la formación y capacitación de recurso humano en informática, así como llevar inventario de los mismos.
- l) Apoyar a las unidades administrativas de la institución del PDH en el desarrollo de nuevos sistemas de información y mantenimiento de los equipos y sistemas en operación, ya sea con recursos propios o dando seguimiento a servicios proporcionados por proveedores externos.
- m) Asesorar a todas las unidades de la institución para el desarrollo de eventos, encuestas y monitoreos, captura de altos volúmenes de información y diseño de instrumentos de captación de información.

Acciones emprendidas

- Emisión e impresión de 2,073 constancias de antecedentes en derechos humanos, incluyendo las solicitadas por la Comisión de Postulaciones de Magistrados del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia.
- Integración y coordinación entre la Oficina de Antecedentes, la Unidad de Información y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, para dar respuesta a solicitudes.
- Digitación de 4,810 boletas, que corresponden a 82 boletas diseñadas en el área de Procesos de la DTI, para 18 supervisiones administrativas.
- Diseño del formato para el Manual de Organización y Funcionamiento de la institución, con sus respectivos manuales de llenado y utilización de diagramas de flujo de procedimientos.
- Renovación de las licencias de los dispositivos de seguridad informática, tipo Appliance.
- Migración de *firewall*, dispositivo de seguridad informática (hardware o software utilizado en redes de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas).

- Mantenimiento de servicios de tecnología e informática a toda la institución del PDH (redes, correo electrónico, internet, telefonía, página Web, intranet, sistemas, bases de datos, soporte técnico, digitación, entre otros).
- Integración de Comité de Mejoramiento para la Intranet, Comisión de Acceso a la Información, Comité de Supervisiones y Monitoreos, con el propósito de integrar esfuerzos y procesos, apoyados en la tecnología.

Logros

Organización, estructuración y procesos

- Remodelación del área física, alcanzando y cumpliendo estándares de seguridad informática.
- Implementación de estándar ISO (Organización Internacional para la Estandarización) para flujogramas de procesos y procedimientos.
- Fortalecimiento a la Oficina de Antecedentes, con la definición, automatización y modificación de procesos.
- Establecimiento del proceso administrativo y canal de comunicación para la coordinación de servicios y requerimientos de la institución a Telgua (proveedor de servicios de acceso a internet para Auxiliaturas).

Sistemas y aplicaciones

- Implementación y funcionamiento de la segunda etapa de la primera fase del Sistema de Gestión de Denuncias (SGD).
- Desarrollo e implementación del sistema de la Unidad de Información.
- Diseño del registro para la carga de la base de datos del sistema de Voluntariado.
- Mejoras al sistema de Antecedentes en Derechos Humanos.
- Mejoras en búsquedas del sistema RUDFOR (Registro Unificado de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición).
- Migración del sistema de digitación.

Redes y servicios Web

- Mejoras en los dispositivos de seguridad informática.
- Interconexión por VPNs (Virtual Private Network o Red Privada Virtual) a 26 de 30 Auxiliaturas, para utilización de correo institucional y acceso a servicios diversos por medio de la intranet.
- Implementación de la fase piloto para utilización de telefonía VoIP (por sus siglas en inglés se refiere a la tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet).
- Modificaciones y mejoras en la página Web de la institución del PDH.
- Modificaciones y mejoras en la intranet, en conjunto con el Comité creado en 2008 para fortalecer esta herramienta como canal interno de comunicación.
- Accesos específicos a URL a través de páginas seguras, con el protocolo https (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto).
- Portal de Información o página Web, en el marco de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, dentro del sitio Web de la institución del PDH.

Soporte técnico

- Formateo de equipo y modificación de configuraciones, para la eliminación y prevención de un virus tipo gusano, que saturó el protocolo de comunicación y conexión de la red interna de la institución.
- Migración del paquete de servicios 2 al paquete de servicios 3 del sistema operativo Windows XP de todas las estaciones de trabajo de la institución.
- Instalación de antivirus a todas las estaciones de trabajo de la institución.
- Se atendieron 1,854 solicitudes de servicio de soporte técnico en 2009.

10. Dirección Financiera

La Dirección Financiera es uno de los pilares de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en virtud de que fortalece financieramente los distintos programas del Plan Estratégico. La misma se integra por las Unidades de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Compras y de Contabilidad de Fondos Externos, las cuales tienen a su cargo el control, manejo y ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la institución del PDH.

Plan Estratégico

- Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
- Defensa y Protección a los Derechos Humanos
- Promoción y Educación en Derechos Humanos
- Supervisión de la Administración Pública
- Promoción de la gobernabilidad Democrática y Consolidación de la Paz
- Relaciones Internacionales

Este Plan Estratégico está integrado a la estructura programática del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, de la institución del PDH, dentro de los programas siguientes:

- 01 Actividades centrales,
- 11 Promoción y educación en derechos humanos y
- 12 Defensa y protección de los derechos humanos.

Logros e inversiones

- Durante este período se adquirió regular cantidad de mobiliario, como: escritorios, archivos, sillas, librerías, credenzas, gabinetes, sillones, mesas para centro y mesas para reuniones.
- También se adquirió equipo como: computadoras, scanners, impresoras, ups y servidores.
- Se inició la construcción de la Casa Convento, lográndose construir, en este año, 329 metros en el primer nivel.

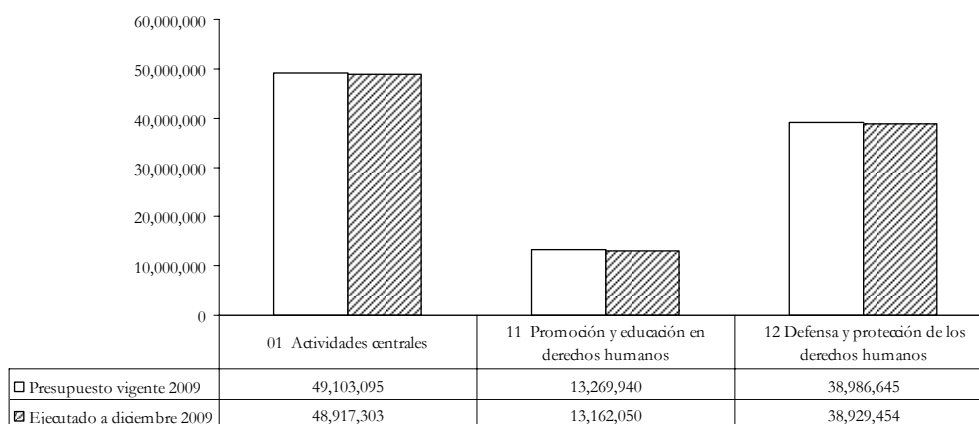
Proyecciones para 2010, 2011 y 2012

- Para 2010, la construcción del segundo nivel de la Casa Convento.
- Para el período 2010 y 2012 se solicitará financiamiento para mejorar el parque vehicular y para la adquisición de un terreno destinado a la construcción de un edificio moderno y funcional para la sede central y la construcción de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.

Ejecución presupuestaria (1 de enero al 31 de diciembre de 2009)

Fuente 11 – Ingresos corrientes
Por programa

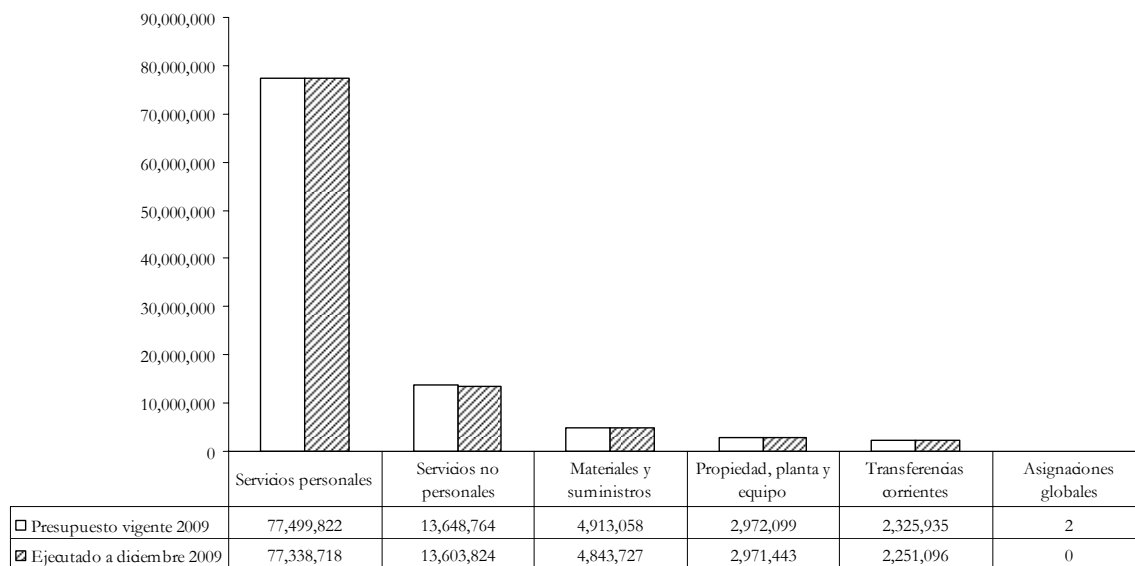
Programa	PGR	Presupuesto vigente 2009	Ejecutado a diciembre 2009	% de ejecución
01 Actividades centrales	1	49,103,095	48,917,303	99.62
11 Promoción y educación en derechos humanos	11	13,269,940	13,162,050	99.19
12 Defensa y protección de los derechos humanos	12	38,986,645	38,929,454	99.85
TOTALES		101,359,680	101,008,807	99.65



Ejecución presupuestaria (1 de enero al 31 de diciembre de 2009)

Fuente 11 – Ingresos corrientes Por grupo de gasto

Grupo de gasto	Presupuesto vigente 2009	Ejecutado a diciembre 2009	% de ejecución
Servicios personales	77,499,822	77,338,718	99.79
Servicios no personales	13,648,764	13,603,824	99.67
Materiales y suministros	4,913,058	4,843,727	98.59
Propiedad, planta y equipo	2,972,099	2,971,443	99.98
Transferencias corrientes	2,325,935	2,251,096	96.78
Asignaciones globales	2	0	-
TOTALES	101,359,680	101,008,807	99.65



11. Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia

El Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia tiene como propósito contribuir a la formación de tutores, docentes y supervisores de nivel primario y secundario, dotándolos de innovaciones educativas con enfoque en valores, para su aplicación en el aula, mejorando la convivencia escolar y previniendo la violencia a nivel nacional. Ofrece las herramientas psicopedagógicas que son fundamentales para inhibir la violencia dentro y fuera de la escuela tales como: aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos y lucha contra la exclusión, los principales modelos de este tipo de aprendizaje; evaluación a través de procedimientos sociométricos, evaluación del razonamiento, contenido u orientación moral y métodos de negociación y mediación de conflictos, de manera que se desarrollen las habilidades vitales básicas y sociales para lograr la convivencia pacífica.

Otro propósito de este Programa es que los egresados del diplomado sean propositivos a las soluciones viables de la problemática de la violencia dentro y fuera de la escuela, con conocimientos en derechos humanos y valores democráticos, comprometidos y responsables en la transformación personal y de los estudiantes del nivel primario y secundario, en cambios de actitud, reconociendo y practicando el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos dentro y fuera de la escuela, así como, adecuar, optimizar y aplicar las herramientas (métodos, técnicas y procedimientos) psicopedagógicas que se proporcionan durante el diplomado, en el proceso enseñanza aprendizaje, mejorando la calidad del rendimiento, autoestima y la cohesión integral en contextos heterogéneos a través de la práctica

con los estudiantes, así como la incorporación del proceso de aprendizaje a distancia, facilitado por el uso de internet, y las implicaciones sociológicas que conlleva este proceso.

Objetivo general

Implementar un nuevo modelo educativo en derechos humanos en el sistema escolar por medio de la capacitación de docentes a través del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia, así como la preparación de tutores que den acompañamiento al proceso, involucrando a las instituciones estatales responsables, la comunidad educativa y los diversos sectores de la sociedad guatemalteca, contando a su vez, con la asistencia y cooperación internacional.

Objetivos específicos

- Dotar a docentes del sistema escolar, público y privado de una herramienta psicopedagógica que les permita aplicar la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos, a través del abordaje de un centro de interés común a todos los actores de la comunidad educativa y sociedad en general.
- A través del tratamiento constructivo del tema de la convivencia escolar y la prevención de la violencia, que los maestros y la comunidad educativa apliquen en la praxis los contenidos del área de educación en valores y formación ciudadana del nuevo currículo nacional base.
- Que los maestros conozcan formas democráticas de recuperar el liderazgo en las aulas, a través de nuevas actitudes y prácticas interactivas para la enseñanza de valores y el aprendizaje cooperativo en las diversas materias de los planes de estudio.
- Que los maestros comprendan los nuevos contextos en que se desenvuelve la niñez y la juventud, impactados por las tecnologías de la información y las comunicaciones, además de las incertidumbres generadas por los procesos de globalización, emigración poblacional y nuevas exclusiones.
- Que los maestros aprendan a detectar conductas de riesgo en el alumnado, para que en interacción con los padres y resto de la comunidad educativa puedan prevenir la violencia y otras formas de conducta disociadoras.
- Que la niñez y juventud aprenda valores y compromisos, normas y disciplina, derechos y obligaciones que les permita una convivencia escolar sana, los ayude a resolver conflictos de forma pacífica, los aleje de riesgos de violencia y que todo ello redunde en el desarrollo de una ciudadanía crítica y constructiva.

Funciones

- Articulación de los esfuerzos dispersos en educación en derechos humanos por parte del Estado, y convocar a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales a sumarse a un esfuerzo nacional que permita la coordinación de esos sectores con este centro de interés.
- Diseñar estrategias y planes innovadores para los cambios sociales del país a través de la educación en derechos humanos y prevención de la violencia.
- Gestionar las acciones pertinentes para el desarrollo del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos virtuales a nivel nacional, para docentes y estudiantes de educación primaria y secundaria del país, en la proposición de técnicas educativas en derechos humanos y formas de prevención de la violencia.
- Brindar técnicas y herramientas innovadoras a docentes y alumnos para la educación en derechos humanos y prevención de la violencia.

Acciones emprendidas

- Utilización del texto base de la Dra. Maria José Díaz Aguado, con su respectiva autorización, para el seguimiento de la construcción y tratamiento de los módulos del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Gestiones para contratación de personal para complementar el equipo pedagógico, de investigación y de infografía, diseñadores gráficos, equipo de tutores del centro tutorial, para el fortalecimiento, desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos del programa.
- Capacitación del equipo de tutores para el centro tutorial del diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia a nivel nacional.
- Gestiones en diversos procesos técnicos, necesidades institucionales y consultas pertinentes a otros entes y universidades que realizan educación a distancia para el fortalecimiento del diplomado en la página Web de la institución del PDH.
- Reuniones de trabajo semanales y mensuales con el equipo que conforma el Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia, con el objetivo de coordinar, socializar, evaluar y retroalimentar los procesos de

construcción de los módulos del diplomado, así como dar las instrucciones pertinentes de seguimiento de procesos por parte del director y subdirectora del Programa.

- Evaluaciones de las etapas del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Ejecución del diplomado en línea.
- Seguimiento del proceso y avance de capacitación de tutores del diplomado.
- Planificación y seguimiento del proceso para la incorporación del diplomado en CD y DVD.
- Evaluaciones semanales, quincenales, mensuales y trimestrales del proceso del diplomado.

Para el conocimiento, promoción y búsqueda de apoyo político y financiero se realizaron varias presentaciones:

- A personal de cooperación internacional, directores, supervisores, y maestros, para coordinar acciones en la gestión de cooperación en proyectos educativos del Programa.
- Presentación del Diplomado de Convivencia Escolar en actividades programadas y solicitadas por Defensorías y otras unidades de la institución del PDH.
- Presentación del Diplomado de Convivencia Escolar a funcionarios del Ministerio de Educación (MINEDUC) y programación de nuevas presentaciones según planificación del Programa.
- Presentación del Diplomado a funcionarios de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE).

Gestión y eventos

- Acciones coordinadas con el MINEDUC y otras organizaciones educativas, para la promoción e implementación y seguimiento del Diplomado, con la participación de todo el equipo multidisciplinario del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Planificación de eventos y presentaciones del Diplomado, coordinados con el MINEDUC y otras organizaciones e instituciones educativas, para promoción e implementación del mismo.
- Presentaciones del Diplomado en eventos programados por otras áreas de la institución, cuando son solicitadas.

Logros

- Implementación del diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Proceso de validación del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia finalizado en la primera etapa del mismo.
- Reuniones de coordinación con el MINEDUC e INAP para las gestiones pertinentes del Programa.
- Planificación y seguimiento en gestiones, investigación y diseño del curso en línea, en discos compactos y en texto, con el apoyo financiero de la institución del PDH, como segunda etapa del Diplomado.
- Presentaciones permanentes del proceso y avance del Programa a supervisores y dirigentes magisteriales, para su conocimiento y promoción.
- Proceso de incorporación del diplomado en línea, con equipo de infografía y apoyo de la Dirección de Informática de la institución.
- Elaboración de diagnósticos de situación de la educación en derechos humanos, como base para implementar el Diplomado, sobre los derechos de los pueblos indígenas, derechos de la mujer y sobre mediación y resolución de conflictos.
- Gestiones para nuevas presentaciones del proceso, avance y resultados del Diplomado a representantes de las agencias donantes internacionales, a la Dirección Departamental del MINEDUC y a la Asamblea Nacional del Magisterio, directores de colegios y escuelas, para que se involucren en el proceso.
- Elaboración de informes y planificación de eventos y actividades con la participación del PDH y otras unidades de la institución.
- Planificación y ejecución de eventos especiales relacionados con los temas del Programa en los que tiene participación el PDH.
- Seguimiento de gestiones a las instancias correspondientes para la instalación del *Hosting*, para mejorar el desarrollo de las actividades del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Elaboración de la página Web del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Selección, investigación, mediación pedagógica y diseño de infografía para la producción y tratamiento de los módulos del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia, y de los diplomados que se tienen planificados para el futuro.
- Capacitación permanente de tutores del Diplomado con las modalidades en línea y de forma presencial.

Productos

- Instalación del Centro Tutorial en línea
- Capacitación de tutores en línea, distribuidos en tres etapas durante 2009, desarrollándose un efecto cascada para la cobertura a nivel nacional.
- Evaluaciones de la primera y la segunda etapa del Diplomado de Convivencia Escolar.
- Gestiones en proyectos de cooperación internacional para el fortalecimiento del Diplomado.

12. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

La seguridad alimentaria y nutricional, según el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) “es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.”

El Decreto 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el Artículo 15, inciso j, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), entre sus atribuciones, deberá “Conocer, analizar y proponer correctivos a las políticas y estrategias en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), sobre la base de las recomendaciones que anualmente emitirá el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en relación con el respeto, protección y realización progresiva del derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional”. A través del acuerdo SG-007-2006 el PDH crea el Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (GTSAN), el cual es fortalecido con las modificaciones establecidas en los acuerdos SG-016-2009 y SG-021-2009.

El GTSAN tiene las siguientes atribuciones

- Monitorear el desempeño de las dependencias gubernamentales encargadas de hacer efectivo el derecho a la alimentación.
- Elaborar diagnósticos, análisis y estudios sobre la situación alimentaria del país.
- Rendir informes periódicos sobre el funcionamiento de la gestión administrativa en materia de seguridad alimentaria.
- Formular recomendaciones que tiendan a promover el buen funcionamiento de las entidades gubernamentales para garantizar el derecho a la alimentación.
- Velar porque el Gobierno adopte las medidas tendientes a que se respeten, protejan y apliquen las normas legales que garantizan el derecho a la alimentación.
- Organizar eventos a nivel nacional como foros, conversatorios, y otros de similar naturaleza respecto de la seguridad alimentaria y nutricional.
- Preparar, de forma periódica, capacitaciones en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, así como del procedimiento de investigación, dirigido a personal encargado de expedientes y recepción de denuncias.
- En coordinación con la Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, promover la gestión de apoyo internacional para programas y proyectos relacionados con el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional.
- Preparar el informe anual que el Magistrado de Conciencia deber presentar al CONASAN.

En cumplimiento de este mandato y los que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y los decretos 54-86, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos y 32-87, que la modifica, se han realizado dos informes con sus debidas recomendaciones. En el segundo informe, presentado al CONASAN en marzo de 2009, se reiteran algunas de las recomendaciones del primer informe y se hace énfasis en la debilidad institucional del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), se recomienda su fortalecimiento y la aplicación y ejecución de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el cumplimiento de la Ley, retomar el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) y la ejecución de los planes operativos.

Acciones emprendidas

Resolución

La institución del PDH acumuló expedientes que dieron motivo, el 20 de marzo de 2009, a la Resolución ACUMULADOS AL REF.EXP.EIO.GUA.208-2007/DESC, del Procurador de los Derechos Humanos, en la cual

declara la violación al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca por el gobierno de Guatemala al no garantizar el acceso económico a los productos de la canasta básica ni dar seguimiento a la reglamentación relativa al uso de sustancias adicionadas a productos alimenticios que puedan perjudicar la salud. Declara que existen indicios de responsabilidad por parte del ex ministro de Economía, licenciado Rómulo Alfredo Caballeros Otero, por no ejercer control efectivo dentro de dicho Ministerio, ni velar por la aplicación de políticas claras que beneficien a la población general.

Solicitud de Amparo

El 19 de agosto de 2009, el PDH promovió Acción Constitucional de Amparo contra el CONASAN y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Consejo componente de la estructura orgánica prevista en la Ley, es una entidad impugnada; se establece que las autoridades impugnadas, en pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo en el país en relación con el hambre y la falta de atención médica apropiada, no han cumplido con el mandato constitucional ni legal para el que han sido creadas, violando la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de los Derechos del Niño. En el contexto dado, las entidades estatales impugnadas también ignoraron la Observación General “12” del Comité DESC, sobre el derecho a una alimentación adecuada; y la misma Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, también su reglamento, e incurrieron en falta de cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y del PESAN.

El Frente contra el Hambre

El Frente contra el Hambre, nacido el 28 de agosto de este año, como un movimiento desde la sociedad civil guatemalteca que propone soluciones ante la actual crisis alimentaria y nutricional, cuenta con el apoyo del PDH, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y diversas organizaciones sociales, cívicas y gremiales, instituciones del Estado, empresas, iglesias de distintas denominaciones, consejos de desarrollo y otras entidades dispuestas a unir esfuerzos para dar respuesta conjunta a la situación de emergencia que atraviesa el país. El Frente contribuirá a establecer un proceso sostenible de manera institucional en el marco del ordenamiento jurídico nacional que lleve a la transformación de Guatemala en un país libre del hambre y la desnutrición. Entre las acciones, iniciales realizadas por el Frente contra el Hambre:

- Atención inmediata a la crisis. A través de la coordinación de la Auxiliatura Departamental de Jalapa se organizó la red de atención a la crisis como plataforma cívico-social e institucional con todas las instancias integradas al Frente, con el fin de identificar los casos de desnutrición aguda y garantizar su inmediata atención; monitorear el abastecimiento del sistema de salud en torno al perfil epidemiológico del lugar que puede afectar a la población desnutrida como grupo vulnerable a tipos de morbilidad y mortalidad afines a la desnutrición; y promover estrategias de abastecimiento de alimentos con valor nutricional a las zonas y familias más afectadas y en riesgo, de manera pertinente para su impacto.
- Iniciar un proceso de instalación técnica de un Sistema de Notificación de Emergencias, así como el establecimiento de una red de informantes que se vinculan de manera electrónica con las organizaciones participantes del Frente por medio del *call center* de la institución del PDH para la recepción de denuncias entorno a la seguridad alimentaria y nutricional, y de aquí se derive la información que debe llegar a todas las instancias que competen de conformidad a la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para su debido conocimiento y acción correspondiente.
- Levantamiento de datos situacionales, con información de fuentes secundarias a nivel nacional, para identificar el escenario real de la mortalidad y morbilidad por causas directas y adyacentes a la desnutrición, con la finalidad de tener una mayor objetividad, eficacia y eficiencia en la direccionalidad de la atención.
- Constitución de una comisión específica para el análisis del presupuesto 2010 en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional, conformada con técnicos de la sociedad civil, Universidad de San Carlos, Colegios de Profesionales y de la institución del Magistrado de conciencia.
- En la actualidad se sigue una agenda específica y estratégica para la atención a la crisis, que no sólo va dirigida a la atención de casos, sino trasciende a promover y contribuir al fortalecimiento de la capacidad instalada a nivel local y se estructuran, de manera apropiada, los mecanismos que sistematicen los procesos de atención de manera sostenible, en el marco del SINASAN; otras acciones como la observancia a la dirección y calidad del gasto, y la corresponsabilidad institucional presente. También, contribuir a la reinstitucionalización de los procesos en la atención a la SAN, promoviendo el fortalecimiento del CONASAN, SESAN, INCOPAS y establecimiento del Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA) que en la actualidad no existe. El Frente contra el Hambre propicia la implementación a la Política de SAN y el funcionamiento del SINASAN desde los niveles locales, visualizando como

necesaria la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de SAN, fortalecido, consensado y apoyado por todos. Con el fin de conciliar criterios entre las instancias del Frente y el Gobierno, se tuvo una reunión con el Presidente de la República con la finalidad de compartir las inquietudes y la buena intención de cooperar de manera articulada con las instancias de Gobierno en el marco de la Ley del SINASAN.

Creación de verificadores de seguridad alimentaria y nutricional desde el enfoque victimológico

El Relator Especial considera que debería celebrarse el papel tan activo que ha desempeñado el Procurador de los Derechos Humanos en este sentido y se congratula por el hecho de que la institución del Magistrado de Conciencia haya estado aumentando de manera considerable sus esfuerzos por contribuir a la realización del derecho a la alimentación, con algo tan importante como el desarrollo del uso de indicadores como un medio para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas. El abordaje de los Derechos Humanos desde una visión victimológica presupone el conocimiento preciso de las necesidades tanto sentidas como estudiadas con antelación del sujeto individual o colectivo que está siendo víctima de la conculcación de sus derechos fundamentales. Esto permite partir de hechos sensibles que puedan ser convertidos en indicadores que brinden el camino a la evaluación de las políticas públicas que el aparato estatal debe formular para la búsqueda de la satisfacción o en su defecto, la reparación de la necesidad vulnerada; esto se ve en el establecimiento y cumplimiento de servicios públicos que responden a políticas establecidas por el Estado, el cual al ser coherente con dichas medidas deberá establecer la inversión social y gasto necesario para su mantenimiento.

13. Programa para la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/Sida y grupos vulnerables

Misión

Desarrollar acciones de defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y Sida, fortaleciendo las capacidades y mecanismos institucionales que permitan dar una respuesta viable y sostenible a la pandemia del Sida.

Objetivo general

Proteger, supervisar, divulgar y promover el respeto a las garantías individuales de las personas afectadas por el VIH/SIDA, a través del diseño y aplicación de cursos y talleres de capacitación; vinculación con organismos civiles defensores de los derechos de estas personas; investigación y elaboración de diagnóstico sobre estigma, discriminación y VIH/Sida; así como la elaboración de campañas informativas para la prevención de la discriminación y la promoción de una cultura del respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH en Guatemala.

Objetivos específicos

1. Promoción y educación en derechos humanos de las personas que viven con VIH.
2. Defensa de los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH.
3. Fortalecimiento institucional e interinstitucional en el tema de derechos humanos y VIH/Sida.
4. Contribución al análisis, prevención, mediación, transformación y solución de conflictos en el tema.
5. Sida, promoviendo una respuesta sólida y duradera a la pandemia.
6. Procuración, vigilancia y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente el derecho a la salud y la vigilancia del buen funcionamiento de la atención en esta materia y calidad de vida de las personas que viven con VIH.
7. Procuración, vigilancia y promoción de los derechos de solidaridad de manera fundamental, a minorías sexuales y la discriminación a personas seropositivas.
8. Atención, recepción e investigación de denuncias interpuestas por personas que viven con VIH ante la violación de sus derechos humanos.
9. Relaciones interinstitucionales y políticas: fortalecimiento de las relaciones con instituciones del Estado, instancias de la sociedad civil y de la comunidad internacional, teniendo como prioridad el involucramiento de todos los sectores para dar una respuesta con enfoque de derechos humanos al VIH/Sida.

Funciones y atribuciones

1. Representar al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en las actividades y comisiones delegadas por él, en la temática de VIH y Sida.
2. Asesorar al Magistrado de Conciencia en materia de derechos humanos y VIH/Sida.

3. Elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos de las personas que viven con VIH o Sida y grupos vulnerables en Guatemala.
4. Supervisión del cumplimiento de funciones de las autoridades, servidoras y servidores del Estado en lo relacionado a la prestación de servicios a personas que viven con VIH y Sida.
5. Supervisión del acceso de atención integral a las personas que viven con VIH/Sida y grupos vulnerables, enmarcado en el respeto de los derechos humanos.
6. Supervisión y monitoreo del buen funcionamiento de la atención en materia de salud y calidad de vida de las personas que viven con VIH.
7. Desarrollo de acciones de sensibilización hacia personas líderes de las comunidades por medio del trabajo coordinado con los auxiliares departamentales, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que trabajan la temática de derechos humanos y VIH a nivel regional.
8. Dirigir y coordinar actividades institucionales tanto en sede central como Auxiliaturas departamentales, que tengan relación directa o estén directamente vinculadas al tema.
9. Coordinar y participar en acciones y actividades interinstitucionales e internacionales en la temática de derechos humanos y VIH/Sida.

Acciones emprendidas

Legal/jurídico

- Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el Magistrado de Conciencia, el 9 de octubre de 2009, otorgada de forma provisional por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil constituido en tribunal de amparo, ordenando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social proporcionar periódica y constantemente el acceso y abastecimiento a pruebas de carga viral plasmática, así como los medicamentos y tratamientos para enfermedades oportunistas derivadas del VIH y Sida.
- Resolución de violación al derecho humano a la salud por falta de previsión para asegurar la atención médica integral de las personas que viven con VIH o Sida, emitida el 1 de diciembre del 2009 por el PDH.
- Seguimiento de los expedientes de violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y Sida y grupos vulnerables.
- Seguimiento del traslado de usuarios de clínica “Yaloc” de Fundación Marco Antonio a las Unidades de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y dado los resultados de la inspección, se remitió informe de la situación de dichas clínicas al Congreso de la República de Guatemala para solicitar su intervención en la crisis de las mismas, las que recibirán a los usuarios el próximo 18 de enero del 2010, con el objeto de prevenir se ponga en riesgo la vida de 642 personas que viven con VIH y Sida.

Investigación y asistencia técnica

- Investigación a las Unidades de Atención Integral de Personas que viven con VIH o Sida del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Planificación y ejecución de investigación en Unidades de Atención Integral de VIH y Sida del MSPAS en los hospitales nacionales, con el objetivo de verificar atención y prestación de servicios médicos a las personas que viven con VIH o Sida, tanto en la calidad como cantidad adecuada. La investigación se llevó a cabo en las clínicas que fueron reportadas con problemas que perjudican el acceso al derecho humano a la salud por parte de la red regional y su observatorio en derechos humanos y VIH. Los lugares supervisados fueron: Clínica 17 del Hospital Roosevelt, Clínica Yaloc de la Fundación Marco Antonio, Clínica Luis Ángel García y Encamamiento del Hospital General San Juan de Dios, Servicio de Infectología “La Verbena” del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Clínica de VIH y Sida del Hospital San Juan de Dios Quetzaltenango, Clínica de VIH y Sida del Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango, Clínica 12 del Hospital Juan José Ortega de Coatepeque, Clínica de atención integral del VIH y Sida del Hospital regional Doctor Antonio Penados del Barrio de San Benito Petén, Clínica de atención integral de enfermedades infecciosas del Hospital regional de Zacapa y Clínica de atención integral de enfermedades infecciosas del Hospital Nacional de Izabal, Amistad Guatemala-Japón.
- Investigación y seguimiento del traslado de usuarios de Clínica Yaloc de Fundación Marco Antonio a las Unidades de Atención Integral del MSPAS. Las inspecciones se llevaron a cabo en los hospitales regionales de las siguientes localidades: Antigua Guatemala, San Juan Sacatepéquez; Cobán, Alta Verapaz; Cuilapa, Santa Rosa; Escuintla, Quetzaltenango, Petén, Puerto Barrios, Izabal, Zacapa y en la ciudad de Guatemala, en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.
- Se realizaron seis supervisiones generales a los diferentes hospitales nacionales que atienden a personas que viven con VIH y Sida.
- Doce monitoreos de unidades de atención integral a nivel nacional (uno por mes).

- Elaboración de informes de monitoreo y evaluación de las unidades de atención integral a personas que viven con VIH y Sida.
- Intervención ante el Ministerio de Gobernación para solicitar se recomiende a las autoridades de la Policía Nacional Civil velar y respetar el derecho de la libre circulación de las personas que viven con VIH y Sida.

Gestión y apoyo de eventos

- Planificación, organización y ejecución del foro nacional: “La importancia de los derechos humanos como pieza fundamental para detener el SIDA” en alusión al día mundial de la respuesta al Sida. El evento contó con la participación de la red regional y su observatorio en derechos humanos VIH y Sida, personal del MSPAS, Consejo Nacional Empresarial de Prevención del VIH y Sida (CONEVIH), ONUSIDA, OPS, y organizaciones e instituciones que trabajan el tema a nivel nacional.
- Diplomado “Derechos Humanos de las personas que viven con VIH” PDH-USAC, impartido a personal auxiliar de enfermería del hospital Roosevelt, con el objetivo de proporcionar conocimientos acerca de los derechos humanos y sensibilizar al personal respecto del VIH y Sida.
- Participación e intervención en 11 talleres regionales tocantes a derechos humanos y VIH/Sida coordinados por la Red Regional y su Observatorio en Derechos Humanos VIH y Sida con apoyo de Fundación Fernando Iturbide.
- Inicio el 6to. Diplomado en Atención Integral del VIH, Cultura de Paz y Derechos Humanos, en alianza de la institución del PDH, el CONEVIH y la Universidad Rafael Landívar, a través del Departamento de Responsabilidad Social Universitaria.
- Participación e intervención en el foro en políticas públicas de VIH y derechos humanos, dirigido a delegadas de la oficina nacional de la mujer de las diferentes municipalidades del país, en conjunto con Fundación Fernando Iturbide.
- Se llevaron a cabo diez reuniones con la red regional y su observatorio en derechos humanos VIH y Sida, organizadas y dirigidas por el Programa de la institución del PDH, con el objetivo de fortalecer a las personas que viven con VIH y Sida en una cultura de respeto a los derechos humanos.

Publicaciones

- Documento: “VIH y Derechos Humanos en Guatemala”. Informe y presentación de la prevalencia del VIH y Sida en el país y detalles sobre la violación de los derechos de la población afectada.
- Documental: “Derechos humanos, VIH y Sida”, dirigido y planificado por el Programa de defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH o Sida y grupos vulnerables, bajo la dirección y producción de la Unidad de Televisión, ambos entes de la institución del PDH.
- Participación en el documental respecto del VIH y Sida elaborado por ONUSIDA Guatemala.

Apoyo y trabajo cooperativo

- Institucional. Se estableció un trabajo conjunto en el tema de VIH y Sida con diferentes direcciones y jefaturas a nivel interno, lo cual permitió una institucionalización del tema de derechos humanos y VIH/Sida.
- Interinstitucional. Se han coordinado actividades con: defensorías y procuradurías de derechos humanos de América Latina; Red Regional Centroamericana de Derechos Humanos VIH y Sida (REDCA); Red Regional y su observatorio en Derechos Humanos VIH y Sida; Consejo Nacional Empresarial de Prevención del VIH (CONEVIH); OPS y OMS; ONUSIDA; Universidad de San Carlos de Guatemala; Universidad Rafael Landívar; Clínica Luis Ángel García, Hospital San Juan de Dios; Hospicio San José; OTRANS; Red de la Diversidad Sexual; y Fundación Fernando Iturbide.

14. Programa de Atención a Desastres

El Programa de Atención a Desastres de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en 2008 inició sus acciones, dentro del marco de la observación, prevención, atención, verificación y protección de los derechos fundamentales de las víctimas de desastres.

Misión

Fortalecer el programa a través de un plan de acción basado en la observación, verificación, acompañamiento, monitoreo, atención y defensa de los derechos humanos, para el resarcimiento de las personas vulnerables al riesgo;

asimismo, apoyar y consolidar un sistema funcional de coordinaciones interinstitucionales con actores de incidencia y organizaciones de la sociedad civil.

Objetivo general

Vigilar, prevenir, orientar, mediar, coordinar, y exigir la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de desastres, en base al mandato constitucional del PDH.

Objetivos específicos

1. Desde la política dictada por el PDH, observar las situaciones de desastres, para prevenir, vigilar, orientar, mediar, coordinar, y exigir la protección de los derechos humanos de las víctimas de desastres.
2. Establecimiento de instrumentos, mecanismos y estrategias que permitan que el Estado garantice una atención integral en correspondencia con las necesidades de las poblaciones en riesgo de desastres.
3. Incidir y proponer el establecimiento, desde la sociedad civil, de una política pública para lograr que las instancias de competencia del Estado garanticen la dignidad y el respeto a los derechos humanos de la población en riesgo.
4. Desarrollar actividades de vigilancia y fiscalización a las actuaciones del Estado para el cumplimiento de los derechos humanos de la población vulnerable a desastres.
5. Fortalecer a la población vulnerable para el establecimiento de su organización y participación en actividades de prevención y resarcimiento.

Acciones emprendidas

- Elaboración de seis instrumentos para clasificación de riesgos existentes y desastres: Instrumento de observación de las denuncias, para la organización y apoyo a la población vulnerable, para levantamiento de diagnóstico situacional en seis asentamientos de la ciudad capital, elaboración de archivo vertical, verificación de denuncias en los municipios de San José Pinula, Mixco (zona 2 y 8), verificación en 25 puntos de desastres de los municipios de Chinautla y Santa Lucía Milpas Altas, así como los departamentos de Zacapa, Alta Verapaz, Santa Rosa y Escuintla, lo que ha permitido identificar causas de desastres y elaborar perfiles psico-sociales de la población en riesgo.
- Se desarrolló un diagnóstico situacional, tomando una muestra de seis asentamientos de alto riesgo en las zonas 5, 6, 13, 14, 17 y 18 de la capital; además el municipios de San José Pinula, zona 2 y 8 de Mixco, 25 puntos de desastres del municipio de Chinautla, comunidades de Las Cañas, Zorzoyá II, del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, así como los departamentos de Zacapa, Cobán, Chiquimula, y Escuintla. De las 301 viviendas censadas en los asentamientos, todas se encuentran en alto riesgo debido a que están en laderas de barrancos, y por falta de prevención y asesoría técnica, se construyen en un perímetro con inclinación de 40°, aunado a ello los muros de contención son elaborados de forma empírica. El 65 % de estas viviendas carecen de servicios mínimos, en especial de agua potable, drenajes y luz. Del análisis se pudo establecer que un 80% de los desastres se le atribuye a la negligencia institucional, a la corrupción de algunos funcionarios de alcaldías municipales e instituciones del Estado en materia de desastres.
- En los asentamientos Lo de Reyes y la Lagunilla de San Pedro Ayampuc, el seguimiento y acompañamiento fue necesario en vista de que las instituciones de competencia se desinteresaron en relación con los compromisos adquiridos ante los pobladores víctimas de desastres; dicha intervención permitió que las instituciones estatales retomaran sus compromisos y asumieran otra actitud, después de un período sistemático de reuniones.
- Investigación y asistencia técnica. El levantamiento de diagnóstico situacional sobre condiciones actuales en que están los habitantes de los asentamientos, aportó información para la caracterización de los mismos.
- Se fortaleció la organización para la prevención de desastres en ocho comunidades del municipio de Milpas Altas, San Pedro Ayampuc y zona 13 de la ciudad capital.

Logros

- Perspectiva de solución de problemas enfrentados por los habitantes de los Condominios del Tesoro y Bambi, zona 2 de Mixco, por intervención de este programa ante el alcalde municipal de Mixco.
- Se logró, después de un proceso sistemático de fiscalización, asesoría y mediación, el traslado provisional de los habitantes del asentamiento El Durazno, municipio de Chinautla hacia la Lagunilla, en San Pedro Ayampuc, y luego, que se les otorgara terreno e insumos para 1,000 viviendas dignas.
- Coordinación y organización con más de 25 asentamientos en lugares de alto riesgo, para hacer propuestas desde sus organizaciones y elaborar proyectos.
- Levantamiento del diagnóstico situacional en asentamientos de alto riesgo a desastres y vulnerabilidad de la ciudad capital y algunos municipios, permitiendo la elaboración del perfil de la población en riesgo.
- Identificación de tres centros de apoyo para la atención de niños desnutridos en Zacapa y Jutiapa.

- Apoyo (atención psicosocial, entrega de donaciones gestionadas por el programa) a siete comunidades de la población damnificada y en alto riesgo del cerro de los Chorros en San Cristóbal Alta Verapaz.
- Se participó en las reuniones de alto nivel para el monitoreo de las acciones del Estado en relación con las poblaciones en alto riesgo de desastres.
- Mediación en el conflicto de Los Olivos, zona 18.
- Visitas de coordinación con Bomberos Municipales y voluntarios para la capacitación y coordinación en la atención a las víctimas.

15. Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información (SECAI)

El 23 de septiembre de 2008, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto No. 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, la que entró en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en el Diario de Centroamérica. De acuerdo con lo establecido en el título tercero de la ley (artículos 46, 47, 48 y 49) y la regulado en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el PDH es la persona encargada de proteger y garantizar el derecho humano al acceso a la información pública.

El 19 de enero de 2009, el Magistrado de Conciencia emitió el acuerdo SG-002-2009, publicado en el Diario de Centroamérica el 12 de febrero de 2009, con el cual se creó y designó a las unidades responsables de implementar y velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, siendo éstas: la Comisión de Acceso a la Información, que coadyuva y da seguimiento a las acciones tomadas por la autoridad reguladora; el Comité Asesor, que brinda asesoría jurídica, administrativa y política a la Comisión de Acceso a la Información; y la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano executor que cumplir las resoluciones de la Comisión de Acceso a la Información.

Objetivo general

Garantizar el derecho humano al acceso a la información pública y la protección de datos personales en el Estado de Guatemala, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Acceso a la Información y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del PDH.

Objetivos específicos

- Implementar la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Desarrollar mecanismos de interrelación con los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Defender el derecho humano al acceso a la información pública.
- Supervisar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública.
- Promover una cultura de transparencia y máxima publicidad en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Funciones y atribuciones

- Ejecutar y hacer cumplir las resoluciones del Magistrado de Conciencia y la Comisión de Acceso a la Información.
- Ser el órgano de comunicación con los sujetos obligados y cualquier otra entidad pública o privada.
- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Acceso a la Información.
- Por instrucciones del Presidente de la Comisión, preparar el proyecto de agenda y levantar las actas respectivas de cada sesión de Comisión.
- Rendir informes, preparar estudios, elaborar planes de trabajos o realizar cualquier otra actividad que encomiende la Comisión de Acceso a la Información.
- Cualquier otra función asignada por la Comisión que no estuviere comprendida en los incisos anteriores en materia de acceso a la información pública.

Acciones emprendidas

Promoción del derecho humano al acceso a la información pública

- Capacitación de directores, funcionarios y servidores de la institución del PDH; y a auxiliares, oficiales de comunicación social y educadores de las Auxiliaturas departamentales.
- Capacitación de los miembros del Concejo Nacional de Personas con Discapacidad.
- Capacitación, en la ciudad capital, al personal de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

- Capacitación, en el departamento de Petén, de alcaldes, síndicos, concejales, tesoreros y funcionarios municipales, en un evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer y el PROMUDEL.
- Capacitación de los miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
- Capacitación de funcionarios y servidores de la Municipalidad de Amatitlán, Guatemala.
- Capacitación de miembros del Ministerio de Educación en una actividad organizada por los miembros de la Junta Calificadora del Personal de ese Ministerio.
- Capacitación de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Educación.
- Desarrollo de cinco talleres de la Ley de Acceso a la Información Pública organizados por la agencia de cooperación internacional GTZ y el Programa de Municipios para el Desarrollo Local (PROMUDEL) dirigidos a funcionarios y servidores de las municipalidades del país, en los cuales la institución del PDH participó como panelista.
- Participación en la reunión mensual de la Red de Seguridad Democrática.
- Participación, como panelista, en el foro público “Ley de Acceso a la Información Pública, a tres meses de su vigencia” organizado por el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP).

Denuncia, asesoría y seguimiento de casos

La Secretaría Ejecutiva solicitó a la Dirección de Auxiliaturas y a la Dirección Procuración que se iniciara expediente por la presunta violación al derecho humano al acceso a la información pública en los siguientes casos:

- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: por restricción del acceso a la información pública al establecer que sólo la Unidad de Información Pública de la sede central del Ministerio puede atender cualquier solicitud de información y dar la misma.
- Municipalidad de Malacatancito, Huehuetenango: por solicitar, como parte de los requisitos indispensables para obtener información pública, boleto de ornato, contraviniendo lo estipulado en la Ley.
- Municipalidades de San Gabriel, Suchitepéquez; y de Cuilco, Huehuetenango: por no contar con Unidad de Acceso a la Información.
- Municipalidad de San José del Golfo, Guatemala: haber vencido el plazo para la entrega de información relativa a salarios, dietas, viáticos, etc., no obstante dicha información es pública de oficio para los sujetos obligados.
- Municipalidad de Santa Catarina Palopó, Sololá: clasificó como información reservada el directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo número de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados, incluyendo: salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos; y los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas, conforme a los períodos de revisión correspondientes.

Por otra parte se rindió dictamen en varias denuncias que recibió la institución por violación al derecho humano al acceso a la información pública.

Supervisión administrativa

Los días 12 y 13 de noviembre de 2009 se supervisó a 27 sujetos obligados que pertenecen a distintos grupos institucionales y se recolectó información del Organismo Ejecutivo a través de cinco ministerios y cuatro secretarías; del Organismo Legislativo, del Organismo Judicial, de seis entidades autónomas y descentralizadas y de diez municipalidades. De la información recabada se evaluó el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en dos aspectos, el primero relacionado con la conformación y funcionamiento de las Unidades de Información Pública y el segundo, la puesta a disposición de la información pública de oficio.

Informe anual, autoridad reguladora

En el mes de noviembre, el PDH dirigió a 407 sujetos obligados un cuestionario con preguntas relacionadas con la implementación y cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y el formato del informe anual que se debe presentar a esta institución. El cuadro siguiente detalla los resultados obtenidos.

Sujeto obligado	Solicitudes recibidas	Respuesta				Impugnaciones recibidas
		Positiva	Negativa	Desechadas	Pendientes	
MINISTERIOS						
Ministerio de Energía y Minas	366	354	0	0	12	0
Ministerio de Gobernación	424	342	46	34		2
Ministerio de Trabajo	96	95	1	0	0	0
Ministerio de la Defensa Nacional	139	105	21	3	7	3
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	145	139	1	0	5	0

Ministerio de Cultura y Deportes	249	244	3	1	1	0
Ministerio de Relaciones Exteriores	115	89	16	6	4	0
Ministerio de Economía	676	587	0	89	0	0
Ministerio de Finanzas Públicas	394	340	10	33	11	0
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	522	492	7	12	2	9
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	69	34	2	23	10	0
SECRETARÍAS						
Secretaría de Salud Alimentaria y Nutricional (SESAN)	109	109	0	0	0	0
Secretaría de Planificación de la Presidencia.	204	191	1	10	2	0
Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas	1	1	0	0	0	0
Secretaría General de la Presidencia	9	6	2	1	0	0
Secretaría Privada de la Presidencia	1	1	0	0	0	0
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia	53	45	0	5	3	0
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado	3	2	1	0	0	0
GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES						
Izabal	19	19	0	0	0	0
Baja Verapaz	1	1	0	0	0	0
Retalhuleu	3	3	0	0	0	0
Santa Rosa	0	0	0	0	0	0
Jutiapa	1	1	0	0	0	0
Escuintla	1	1	0	0	0	0
SECTOR PÚBLICO						
Corte de Constitucionalidad	73	63	7	1	2	0
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)	22	9	6	3	4	0
Registro Nacional de las Personas (RENAP)	151	111	25	13	2	0
Contraloría General de Cuentas	227	211	16	0	0	0
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)	40	39	0	0	1	0
Instituto de Previsión Militar (IPM)	50	39	11	0	0	0
Instituto Nacional de Estadística (INE)	26	26	0	0	0	0
Instituto de la Defensa Pública Penal	3	1	0	2	0	0
Procurador de los Derechos Humanos	146	109	18	18	1	0
MUNICIPALDADES						
Guatemala	230	182	40	0	1	7
Fraijanes, Guatemala	29	23	2	2	2	0
Villa Nueva, Guatemala	83	83	0	0	0	0
Palencia, Guatemala	8	8	0	0	0	0
Sumpango, Sacatepéquez	2	1	0	1	0	0
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez	0	0	0	0	0	0

Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	7	7	0	0	0	0
Tecpán, Chimaltenango	7	4	3	0	0	0
El Tejar, Chimaltenango	0	0	0	0	0	0
Patzicía, Chimaltenango	3	3	0	0	0	0
Guastatoya, El Progreso	2	2	0	0	0	0
El Jícaro, El Progreso	6	3	3	0	0	0
Barberena, Santa Rosa	13	13	0	0	0	0
Casillas, Santa Rosa	1	0	0	0	0	0
Mataquescuintla, Jalapa	0	0	0	0	0	0
Municipalidad de San Luis Jilotepeque, Jalapa	12	12	0	0	0	0
Departamento de Jutiapa						
Pasaco, Jutiapa	3	2	1	0	0	0
Estanzuela, Zacapa	2	2	0	0	0	0
Camotán, Chiquimula	20	19	1	0	0	0
San Jacinto, Chiquimula	10	10	0	0	0	0
Esquipulas, Chiquimula	10	10	0	0	0	0
Raxruhá, Alta Verapaz	2	2	0	0	0	0
San Pedro Carchá, Alta Verapaz	16	16	0	0	0	0
Tactic, Alta Verapaz	1	1	0	0	0	0
Salamá, Baja Verapaz	48	35	12	0	1	0
San Jerónimo Baja Verapaz	8	8	0	0	0	0
Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz	12	12	0	0	0	0
Morales, Izabal	13	13	0	0	0	0
Puerto Barrios, Izabal	7	6			1	0
Santa Elena, Peten	2	2	0	0	0	0
Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango	3	3	0	0	0	0
Costa Cuca, Quetzaltenango	1	1	0	0	0	0
Salcá, Quetzaltenango	38	36	2	0	0	0
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	1	1	0	0	0	0
Quetzal, San Marcos	3	3	0	0	0	0
El Rodeo, San Marcos	4	3			1	0
Sipacapa, San Marcos	0	0	0	0	0	0
San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	39	39	0	0	0	0
San Pablo La Laguna, Sololá	6	6	0	0	0	0
San Pedro la Laguna, Sololá	0	0	0	0	0	0
Santa María Visitación, Sololá	0	0	0	0	0	0
San Antonio Palopó, Sololá	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz Muluá, Retalhuleu	3	3	0	0	0	0
Samayac, Suchitepéquez	5	4			1	0
Santa Bárbara, Suchitepéquez	1	1	0	0	0	0
Chicacao, Suchitepéquez	16	14			2	0
San Juan Bautista, Suchitepéquez	0	0	0	0	0	0
Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez	12	7		4	1	1
Canillá, El Quiché	3	3	0	0	0	0
Unión Cantinil, Huehuetenango	0	0	0	0	0	0
Chiantla, Huehuetenango	7	7	0	0	0	0
Totoncapán	10	10	0	0	0	0
TOTAL	5,047	4,429	258	261	77	22

Informe anual, autoridad reguladora – resumen

Respuesta a solicitudes recibidas por sujetos obligados	Cantidad	Porcentaje
Positivas	4,429	87.76
Negativas	258	5.11
Desechadas	261	5.17
Pendientes	77	1.53
Recurso de revisión	22	0.44
Total solicitudes recibidas	5,047	100.00

Comisión de Acceso a la Información

La Comisión de Acceso a la Información sesionó 21 veces durante 2009 dando lugar a igual número de actas, en cada una de las cuales obran las deliberaciones y decisiones sometidas a conocimiento de dicho cuerpo colegiado. A esta instancia le fue puesta a su discusión y aprobación cada una de las acciones que la SECAI ejecutó durante este año.

Productos

- La SECAI impulsó el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública a partir de la adecuada implementación de la misma en la propia institución del PDH, con lo cual se desarrollaron varios documentos con los procedimientos de las acciones que deben realizar las distintas direcciones y unidades de la institución al momento de recibir una solicitud de información pública, de acceso, modificación o rectificación de datos personales. Los documentos elaborados son los siguientes: Guía de procedimiento y diagrama de flujo para: solicitud de acceso a la información; ampliación de plazo de tiempo de respuesta; Auxiliaturas Departamentales, Municipales, Regionales y Móviles; de Archivos de Datos Personales; de Recurso de Revisión.
- Junto con la Unidad de Información Pública y la Dirección de Tecnología e Informática se desarrolló un programa que permite, de forma automatizada, desarrollar el proceso, dar seguimiento y controlar el estado de cada una de las solicitudes de información que se presentan a la institución.
- Se diseñó el formato único para la rendición del informe anual por parte de los sujetos obligados, el cual, como se indicó con anterioridad, se entregó a 410 sujetos obligados.
- Se elaboró una “Matriz de Evaluación” del cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública en la cual se examinaron dos aspectos: conformación y funcionamiento de las unidades de información pública y la información pública de oficio, en ambos casos a partir de la enumeración de doce aspectos a evaluar.
- Diseño de dos cuestionarios: el primero se estructuró para analizar y determinar la designación y funcionamiento de las Unidades de Información Pública, generándose para ser contestado por el titular de la misma. El segundo, para determinar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de poner a disposición la información pública de oficio a través de su portal electrónico, el cual se efectuó con la verificación de cada uno de los portales electrónicos de los sujetos obligados.

16. Unidad Contra la Impunidad

La Unidad Contra la Impunidad en la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) supervisa y ejerce control administrativo en las instituciones del sector justicia, para conocer, evaluar, tutelar y dar seguimiento a los casos de alto impacto relacionados institucionalmente al fenómeno de la impunidad. Tiene incidencia en todo el territorio de la República y mantiene estrecha coordinación con las distintas direcciones, defensorías, unidades y demás dependencias de la institución y se sustenta en el enfoque victimológico.

Objetivo general

Ejercer control administrativo sobre los funcionarios y autoridades que operan el sistema de administración de justicia, garantizando el respeto al debido proceso con pertinencia cultural, acciones legales cuando corresponda, en apoyo a las víctimas de delitos, cuyos casos no han sido tratados o resueltos con justicia y equidad, por las instituciones del Estado responsables y, a la vez, coadyuvar en la realización de campañas de prevención y divulgación contra el delito, a fin de prevenir, reducir y erradicar la impunidad y garantizar el respeto a los derechos humanos, teniendo a la víctima como sujeto fundamental.

Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento del respeto al debido proceso.
- Contribuir al fortalecimiento y respeto del Estado de Derecho.
- Coordinar y articular acciones en temas de alto impacto relacionados a la impunidad.
- Contribuir a que la población guatemalteca en general tenga acceso y aplicación de la justicia.

Acciones emprendidas

- Seguimiento y acompañamiento a varios casos en el Ministerio Público, Organismo Judicial en coordinación con la Dirección de Procuración y otras unidades para obtener resultados, varios de los cuales han finalizado en favor de las víctimas.
- Supervisión Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): estudio, análisis, elaboración de boletas y seguimiento en la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación del plan de supervisión y boletas, elaboración del plan operativo, inducción a los entrevistadores. Entrega de informes preliminares de observación y boletas de la supervisión realizada a nivel nacional y revisión del informe final; elaboración de análisis estadístico, preparación de inventario de documentación existente en esa entidad.
- Supervisión sobre femicidio, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar (): estudio, análisis, elaboración de boletas y seguimiento del plan de supervisión, elaboración del plan operativo, inducción a los entrevistadores de la supervisión al Organismo Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, coordinación con la Unidad de Control Administrativo para la realización de la supervisión a las tres entidades anteriormente mencionadas; coordinación con la Dirección de Tecnología e Informática, la Defensoría de la Mujer, el departamento de Notificaciones y la Dirección de Auxiliaturas. La Supervisión se realizó en una muestra de 10 departamentos y 11 municipios, el objetivo de la selección de esta muestra tiene como referente el nivel de frecuencia con que se han desarrollado las muertes de mujeres, en el entendido que la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar es un fenómeno que se da con recurrencia en dichos municipios. Entrega de informes preliminares de observación, boletas y toda la documentación recopilada de la supervisión realizada a la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación para elaboración del informe final.
- Supervisión administrativa realizada al Organismo Judicial con énfasis en la independencia judicial y la lucha contra la impunidad y corrupción.
- Análisis estadístico administrativo sobre el rendimiento, en 2008, de juzgados, tribunales y salas de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial.
- Se contribuyó al proceso de elaboración de la propuesta, con cuatro instituciones más, a los tres poderes del Estado en el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia-ANSJ-, así como el seguimiento a esfuerzos interinstitucionales en el grupo técnico Grupo Garante “G-4” por parte de la institución del PDH, en el análisis del cumplimiento y desarrollo de dicho acuerdo.
- Implementación del convenio entre el Ministerio Público y la institución del PDH, en cinco áreas de trabajo: capacitación, casos paradigmáticos, atención a la víctima, protección y perfil de testigos, y reformas legislativas, las cuales se han ido ejecutando en un 50%.
- Estudio y análisis en relación con la iniciativa de Ley Número 3590, “Comisión de búsqueda de personas, víctimas de la desaparición forzada y otras formas de desaparición”.

Coordinación interinstitucional

- Convenio de Cooperación PDH-MP. Suscrito con el objeto de “adoptar planes, programas y disposiciones orientadas a garantizar la protección efectiva de los derechos de las víctimas de violación de los derechos humanos, de las víctimas de hechos ilícitos y de las personas afectadas por la falta de acceso a la justicia”. De enero a julio de 2009, se celebraron 17 sesiones distribuidas así: seis sesiones en el Ministerio Público para tratar problemas de la Oficina de Protección de Testigos, once sesiones en la institución del PDH para elaborar un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual, con participación del Ministerio Público, el INACIF, los directores de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt y la institución del PDH. Los derechos humanos protegidos con el protocolo son: a la salud, a la vida, dignidad e integridad de las personas, al pudor, a la indemnidad sexual y el interés superior de la niñez. Solicitud de datos estadísticos sobre femicidio y violencia contra la mujer al Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), al Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP), al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Policía Nacional Civil, para hacer el informe final de la supervisión y un estudio sobre el tema.

Coordinación con organizaciones sociales (nacionales o internacionales).

- Se llevaron a cabo varias entrevistas a representantes de organizaciones y entidades gubernamentales sobre el tema de femicidio, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, con el objeto de obtener información de dichos entes para coadyuvar a la elaboración del Informe final de la supervisión realizada, Las organizaciones entrevistadas son: Sobrevivientes, Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI), Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Tierra Viva, Coordinadora Nacional para la atención legal gratuita de casos de violencia contra la mujer y sus familiares y DPP.

17. Unidad de Auditoría Interna

Está integrada por una auditora interna, un subje, una asistente, dos Auxiliares y una secretaria, los cuales tienen a su cargo la continua revisión de todas las operaciones efectuadas por la Dirección Financiera, así como la realización de auditorías financieras, administrativas y de gestión a todas las unidades, direcciones y departamentos que integran la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Objetivo general

Apoyar al Procurador de los Derechos Humanos y a los diferentes niveles jerárquicos de la institución, para promover una rendición de cuentas oportuna y transparente, por medio de la evaluación permanente e imparcial de la estructura de control interno y las operaciones de esta entidad, comunicando oportunamente los resultados obtenidos y proponiendo las alternativas tendientes a fortalecer estos controles.

Objetivos específicos

- a. Evaluar la conveniencia, oportunidad, eficacia y eficiencia en la ejecución de los programas, proyectos, procesos u operaciones realizadas por la institución en la prestación de los servicios que constituyen su actividad sustantiva.
- b. Verificar la correcta aplicación y cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos de control interno, leyes y regulaciones concernientes a la institución y sus operaciones, como medio para asegurar el logro de sus objetivos.
- c. Evaluar la oportunidad, utilidad y calidad de la información financiera y administrativa que se centraliza en la Dirección Financiera y otras unidades.

Funciones

- Realizar auditorías financieras, administrativas, de presupuesto, arcos de caja, intervención en las entregas de cargos y auditorías especiales.
- Revisar los documentos de ingresos y egresos tales como: cheques, nóminas, conciliaciones bancarias, reporte de egresos, caja fiscal, liquidaciones de viáticos y liquidaciones de cajas chicas de la sede central.
- Revisar los informes financieros y administrativos de proyectos de cooperación internacional.
- Revisar y comprobar las operaciones efectuadas por la Dirección Financiera.
- Verificar los procesos administrativos de las diferentes unidades.
- Evaluar el control interno institucional.

Acciones emprendidas

- Revisión y validación del Manual de Puestos y Salarios de la institución del PDH.
- Evaluación de los departamentos y unidades de la institución en los siguientes aspectos:
 - ✓ Verificación de los procesos de compras y contrataciones inmersos en los pagos a proveedores.
 - ✓ Realización de auditorías administrativas.
 - ✓ Apoyo a las diferentes unidades en relación con eventos de cotización y licitación pública.
 - ✓ Verificación y evaluación del inventario de los activos fijos.
 - ✓ Apoyo a la Sección de Inventarios en el proceso de baja de activos fijos.
 - ✓ Apoyo a las diferentes unidades de la institución en consultas de aspectos administrativos, financieros y legales.
- Evaluación de las operaciones de la Dirección Financiera
- Evaluación de los fondos de cooperación internacional
- Elaboración del manual de funcionamiento y procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna.

Productos

- Revisión de validación del Manual de Puestos y Salarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
- Once auditorías administrativas realizadas.
- Tres apoyos en relación con eventos de cotización.
- Una verificación y evaluación de Inventarios de los activos fijos.
- Un curso impartido de inducción al personal de nuevo ingreso en relación con la UDAI y la CGC.
- 36 revisiones de nóminas 011, 022 y 029.
- 5,576 revisiones de cheques de pago a proveedores y a trabajadores
- 492 revisiones de fondos de cajas chicas, gastos varios, combustible y viáticos.
- 492 revisiones de liquidaciones de cajas chicas de gastos varios y combustible.
- Diez realizaciones de auditorías financieras de ingresos y egresos en la sede central y Auxiliaturas.
- 48 revisiones de cálculos de prestaciones laborales.
- 12 revisiones de cajas fiscales y conciliaciones bancarias, así como un estado financiero.
- 186 revisiones de *voucher* de pago a proveedores por cooperación internacional.
- 413 revisiones de honorarios del personal contratado con fondos de cooperación internacional.
- Once revisiones de informes financieros y administrativos de los proyectos de cooperación internacional.

18. Unidad de Asesores Jurídicos

La Unidad de Asesores, es una dependencia de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) creada con el objetivo de propiciar opiniones legales y asesoría en materia de la función esencial de la institución, contando con amplias atribuciones dentro de la misma. La unidad se caracteriza por brindar auxilio profesional en defensa de las víctimas, en especial, al tratarse de personas discapacitadas, menores de edad, con escasa instrucción o personas adultas mayores; asimismo, promueve acciones jurídicas ante los tribunales, en toda la República, para la defensa de los derechos humanos.

Desde la visión del desarrollo y defensa institucional, la unidad de asesores, también tiene participación a partir del momento en que le son requeridas sus opiniones por cualquiera de las dependencias que forman la institución del Procurador de los Derechos Humanos; asimismo, la unidad, propicia un espacio para la defensa institucional mediante el auxilio técnico cuando se promueven acciones de cualquier naturaleza contra la institución, todo ello, a nivel nacional.

Objetivos

- Promover apoyo técnico al PDH para el cumplimiento de su gestión, a través del análisis de aspectos específicos y la ejecución de estudios diversos, a efecto de proporcionar elementos de juicio, información o documentos para la toma de decisiones.
- Realizar diversas acciones que tiendan al cumplimiento de las funciones del PDH.
- Actuar con la asesoría jurídica debida, en la defensa y protección de los derechos humanos, a través de promover acciones constitucionales como el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad, y emitir opiniones en los asuntos en que sea requerido y que sea materia y atribución de la institución.

Funciones

- Proporcionar asesoría técnica al PDH en diversas materias, para determinar opciones de solución que coadyuven a la toma de decisiones.
- Auxiliar a los Procuradores Adjuntos en el análisis de expedientes y asuntos de competencia de los mismos, para apoyar el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de términos y disposiciones legales en la materia.
- Realizar estudios técnicos diversos de conformidad con instrucciones del PDH a efecto de atender situaciones prioritarias en materia orgánico-funcional de la institución.
- Examinar y coordinar el proceso de análisis de los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, a efecto de promover su aplicación y cumplimiento en las áreas de competencia del Ombudsman.
- Emitir opinión referente a tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos o coordinar acciones de análisis de las mismas, que permitan suministrar criterios y elementos de juicio por intermedio del PDH a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.

Acciones legales

- Inconstitucionalidad General Parcial Nueva, en contra del inciso d) del artículo 5 de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Decreto 46-2007 del Congreso de la República. Este artículo se impugnó por violar los artículos 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales establecen las atribuciones del PDH. Dicho proceso ya cuenta con sentencia favorable para el Magistrado de conciencia. Dicho proceso se tramitó ante la Corte de Constitucionalidad.
- Inconstitucionalidad General Parcial del inciso b) del artículo 23 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto 129-07 del Congreso de la República de Guatemala. Dicho artículo se impugnó por violar los artículos 274, 275, 5, 152, 154, 155, 44, 175 y 204 de la Constitución de la República de Guatemala. Dicho proceso se está tramitando ante la Corte de Constitucionalidad.
- Amparo interpuesto a favor de los pacientes que padecen de insuficiencia renal y trasplante renal, en contra de la Junta Directiva del IGSS por la violación al derecho a la salud, a la vida y la integridad física de dichos pacientes, quienes requerían con urgencia medicamento en la calidad y cantidad necesaria para poder sobrevivir, el cual les era negado por dicha institución. En este caso ya existe sentencia favorable para los pacientes mencionados.
- Amparo interpuesto contra la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, por la falta de atención a sus programas, tal es el caso del Programa de Familia Sustituta, Programas de Niños de la Calle, Unidad contra la Trata de Personas y la Unidad del Migrante, cuyas sedes se encontraban cerradas. Dicho proceso ya cuenta con sentencia favorable, de primera instancia y pende de resolución definitiva por la Corte de Constitucionalidad.
- Amparo interpuesto contra la Entidad Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, por la suspensión del servicio de energía eléctrica al Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, acto que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes, así como los insumos médicos que deben permanecer constantemente en lugares que necesitan electricidad. Dicho proceso cuenta con amparo provisional y continúa en trámite.
- Amparo interpuesto contra el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, por la violación del derecho a la salud y peligro grave e inminente de las personas que no habían sido tratadas quirúrgicamente, debido a que el Ministerio no había proporcionado médicos especialistas al departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Roosevelt. Se otorgó amparo provisional y según informe circunstanciado rendido por la autoridad impugnada, los pacientes fueron atendidos con posterioridad a la fecha en que se otorgó dicha medida cautelar.
- Amparo interpuesto contra el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, por la falta de atención inmediata y urgente a la crisis alimentaria y nutricional, específicamente con la niñez de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, decretándose amparo provisional.
- Amparo interpuesto contra el director del Programa Nacional del Sida, por no propiciar ni mantener periódica y de forma constante, el acceso y abastecimiento de las pruebas de carga viral plasmática y recuento de linfocitos CD4, así como el medicamento y tratamiento para enfermedades oportunistas derivadas del Sida, en todas las clínicas y hospitales de atención integral de personas con sida, y que forman parte de la Comisión Multisectorial creada por el Decreto 27-2000 del Congreso de la República de Guatemala, decretándose amparo provisional.
- Amparo promovido a favor de los pacientes que padecen o han sido diagnosticados con enfermedades catastróficas, crónicas y degenerativas, tales como cáncer, padecimientos renales crónicos, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea refractaria, Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), metástasis de pulmón, adenocarcinoma de colon, etc.; en contra del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por la emisión del Acuerdo 09/2009 del 24 de marzo del 2009 y que entró en vigor el 1 de abril, el cual contiene Normativo para el Manejo y Control de Recetas del IGSS, que contiene violaciones relacionadas con la seguridad jurídica, social, supremacía constitucional y principio de legalidad, libertad de acción, la salud, bienestar físico, psicológico e igualdad y dignidad de las personas; por lo que se otorgó Amparo Provisional a favor de las personas afectadas por dicho Acuerdo.

Investigación y asistencia técnica

Se han emitido 670 dictámenes o estudios jurídicos, dentro de los cuales se realizaron cinco opiniones de anteproyectos de Ley, dos opiniones de convenios, siete opiniones de reglamentos, una opinión de un acuerdo, dos opiniones de reformas de Ley, dos opiniones de Protocolos y estudios jurídicos de los expedientes tramitados en esta institución.

Anteproyectos de ley

- Opinión sobre la iniciativa de Ley de Lugares Sagrados.
- Opinión sobre la iniciativa de Ley que dispone declarar el año 2010 como Año Nacional para la Prevención de la Violencia Juvenil.

- Opinión sobre nuevo cambio de la iniciativa de ley que dispone declarar el año 2010 como Año Nacional para la Prevención de la Violencia Juvenil.
- Opinión sobre la iniciativa de ley 4090 que crea la Ley de Protección de Datos Personales.
- Opinión sobre la iniciativa de ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanas o Degradantes.
- Opinión sobre la iniciativa de Ley Nacional de Migración.

Reformas de Ley

- Opinión referente a la reforma a la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, propuestas por la CICIG.
- Opinión acerca de la reforma a la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante.

Acuerdos

- Revisión de Acuerdo de Reclasificación del Departamento de Educación.

Convenios

- Opinión referente al Convenio entre InWent-Internationale y la institución del PDH.
- Opinión en relación con el Convenio de Cooperación entre el PDH, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) y la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR).

Reglamentos

- Opinión acerca de cuatro reglamentos emitidos por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República que norman el régimen disciplinario a aplicarse en los centros juveniles.
- Opinión concerniente al Proyecto de Reglamento del Consejo Asesor del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA).
- Opinión pertinente al Reglamento del CONAMIGUA.

Protocolos

- Opinión referente al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Opinión conexas al Protocolo Interinstitucional de Actuación, a suscribirse entre los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, el Ministerio Público, el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala y la institución del PDH, en la atención de víctimas de violación sexual y maltrato.

19. Unidad de Información

La Unidad surge por la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto No. 57-2008, del Congreso de la República, la cual tiene como objetivo garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley, así como conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales y de las actualizaciones de los mismos.

Objetivo general

Dar cumplimiento a todas las acciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública, así como coordinar el cumplimiento en tiempo y calidad del procedimiento de acceso a la información con el apoyo y colaboración de todas las dependencias del PDH.

Objetivos específicos

- Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información de la institución del PDH.
- Coordinar y supervisar las diferentes direcciones y unidades de la institución, para la actualización de la información pública, de manera que se cumpla con lo ordenado en el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Planificar y coordinar las actividades archivísticas para la clasificación, almacenamiento, digitalización, catalogación, conservación, restauración, preservación y resguardo de los archivos, documentos y datos de la institución, relacionadas con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Funciones

- Proponer e implantar, de conformidad con la ley, los instrumentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- Proponer las fases del trámite interno que se desarrollará para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información.
- Facilitar y garantizar a los sujetos activos, en los términos del Decreto No. 57-2008, la disponibilidad y acceso eficaz a la información pública.
- Coordinar las labores y actividades correspondientes de las unidades de enlace.
- Mantener y actualizar la información pública que de conformidad con el artículo 10 podrá ser consultada en el portal electrónico de la institución.
- Coordinar y supervisar a las diferentes direcciones y unidades de la institución, para la actualización de la información pública, de manera que se cumpla con lo ordenado en el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Organización funcionamiento de los espacios físicos para la consulta de información pública.
- Garantizar que exista efectivo, eficaz y expedito acceso a los archivos de la institución, ajustándose siempre a las reservas contenidas en los artículos 21, 22 y 23 del Decreto No. 57-2008.
- Crear mecanismos y procedimientos para la expedición de copias simples o certificadas de información al ser solicitadas por los sujetos activos.
- Determinar cuando fuere necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto No. 57-2008, el cobro por reproducción de la información solicitada por los sujetos activos.
- Formular el modelo de solicitud de información atendiendo el principio de sencillez y celeridad.
- Proponer e implementar las formas, medios y técnicas legales a utilizar para las notificaciones correspondientes.
- Elaborar y trasladar a la unidad responsable de la institución el informe escrito a que se refiere el artículo 48 del Decreto No. 57-2008.
- Las demás que le asigne el Procurador de los Derechos Humanos.

Acciones emprendidas

Se recibieron, tramitaron y resolvieron 133 solicitudes de acceso a la información pública de la institución del PDH, las cuales se detallan a continuación:

Solicitudes tramitadas en el sistema de acceso a la información

Solicitudes recibidas	Cantidad	%
Resoluciones con lugar	112	84.22
Resoluciones sin lugar	17	12.78
Resoluciones parcialmente con lugar	2	1.50
En proceso	2	1.50
Total	133	100.00

Solicitudes eliminadas del sistema de acceso a la información

- Diez solicitudes desechadas por ser duplicadas con otras solicitudes o por corresponder a denuncias las cuales se trasladaron a donde corresponde.
- Ocho pruebas o errores en el sistema informático.

Tiempo de respuesta en las solicitudes de acceso a la información

Solicitudes sin prórroga	
Tiempo total en días utilizados	522
Cantidad de solicitudes sin ampliación del plazo	90
Tiempo promedio en días para dar resolución sin prórroga	5
Solicitudes con prórroga	
Tiempo total en días utilizados	653
Cantidad de solicitudes con ampliación del plazo	42
Tiempo promedio en días para dar resolución con prórroga	16
Solicitudes con y sin prórroga	
Tiempo total en días utilizados en las resoluciones	1,185
Cantidad de solicitudes	128
Tiempo promedio en días para dar resolución	9

Logros

- Implementación de la Unidad de Información.
- Elaboración del Reglamento Interno de la Unidad de Información.
- Creación de los Manuales de Organización y Funcionamiento de la Unidad de Información
- Se recabó información general de oficio de la institución del PDH, establecida en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, misma que fue cargada a la página Web de la institución.
- Se utilizó, probó y corrigió el sistema informático para acceso a la información pública.
- Se recibieron, tramitaron y resolvieron 133 solicitudes de acceso a la información pública de la institución del PDH.

20. Unidad de Protocolo y Eventos

La Unidad de Protocolo y Eventos tiene como tarea fundamental, fortalecer la labor institucional en la planificación, organización y montaje de actividades para fomentar, divulgar, capacitar y promover los derechos humanos. Siendo el objetivo principal crear un enlace de forma directa entre las Auxiliaturas Departamentales, y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, unificando esfuerzos en beneficio de la población guatemalteca, contribuyendo a un mejor conocimiento de la labor que realiza la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), esta Unidad brindó asesoramiento, apoyo logístico y protocolario a diversos eventos (internos y externos) realizados por las dependencias de la institución del PDH, en conjunto con organizaciones e instituciones afines, siendo de varios tipos: promocionales, educativos, culturales, conmemorativos, informativos, cívico-políticos y sociales entre otros; así como el diseño y trámite para la impresión y reproducción de material promocional, informativo y de uso para los mismos.

Adicional a esto, se contó con la creación, en la unidad, de la orquesta institucional “Sin Fronteras Dr. Cesar Darce”, con el objetivo primordial de apoyar y resaltar el arte y la cultura musical, llevando así un mensaje innovador dentro del marco institucional de la defensa de los derechos humanos a estudiantes y población en general.

Eventos relevantes en 2009

- Entrega del Informe Anual Circunstanciado 2008.
- 34 presentaciones de la obra teatral “Un enemigo del pueblo”.
- Presentación del Informe del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional *El derecho a saber*.
- Inauguración del monumento del Centro para la Memoria “La Rosaleda”.
- Reunión del Consejo Consultivo Internacional del Archivo Histórico de la PN.
- Acompañamiento protocolario a Embajadores, Representantes de organizaciones internacionales, Alto Comisionado y funcionarios públicos.
- Presentación de la campaña “Prevención de muerte materna”.
- Visita de Voluntariado “Línea de la Ternura” al *call center*.
- Inauguración del Diplomado en Derechos Humanos, Cultura de Paz e infección por el VIH/Sida.
- Canto por los Derechos Humanos, realizado en el departamento de Petén.
- Homenaje público a los integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de 1984 de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por cumplirse 25 años de su desaparición forzada.
- Presentación de la Orquesta Sin Fronteras en Centro Comercial Fonta Bella y en el Teatro Nacional, para el Cuerpo Diplomático y funcionarios de la institución del PDH, ciudad de Guatemala; en Antigua Guatemala, en Retalhuleu.
- Reconocimiento al Dr. Sergio Morales por premio recibido en la India.
- Despedida de la Coordinadora de DANIDA.
- Reconocimiento a Cristy Turlington, embajadora de Care, por su apoyo a la campaña “Prevención de muerte materna”.
- Presentación del informe *Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de sus derechos*.
- Conmemoración del Día Nacional Contra la Desaparición Forzada y presentación del documental “Luchemos contra el olvido”.

- Visita del Sr. Américo Incalcaterra, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- 22 aniversario de la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
- Reconocimiento al Sr. Ricardo Gómez-Agnoli por su trayectoria laboral.
- Entrega de vehículo por Danida a nuestra institución.
- Taller de validación de la Matriz de Desempeño 2010.
- Elección y condecoración de Niños Procuradores.
- Seminario-taller “El voto y la representación de los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero” llevado a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Bazar de la cooperativa Coopeinsol.
- Eliminatória del Concurso de Declamación y Oratoria.
- Celebración del Día de la No Violencia Contra la Mujer.
- Clínicas Deportivas.
- Encuentros Deportivos.
- Convivio institucional.
- Montaje de un *stand* y entrega de material con información institucional para estudiantes de nivel primario y secundario en el Rally del Buen Ciudadano organizado por la SAT.
- Reconocimiento al Dr. Sergio Fernando Morales por parte de deportistas discapacitados de AG DEPDIS.
- 52 eventos realizados por las defensorías.
- I Congreso Nacional del Derecho Humano a la Salud.
- 16 Conciertos de la Orquesta Sin Fronteras.
- Coordinación en 62 eventos con Auxiliaturas Departamentales.
- Reservación y montaje del Auditorium Carlos García Bauer, para 224 eventos realizados durante el año.
- Conmemoración del Día Internacional contra el VIH/Sida con el Foro “Los derechos humanos como pieza fundamental para detener el VIH/Sida”.
- V Gran Carrera por los Derechos Humanos.
- Certamen Fotográfico “Generación en Generación”.
- 10 desayunos-conferencias con periodistas.
- 10 desayunos-reunión y una cena-reunión del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- 10 reconocimientos al Dr. Sergio Morales Alvarado.
- Acto de graduación del Diplomado de DDHH, Cultura de Paz y la infección del VIH/Sida.
- Entrega de tamales al Hogar de Ancianos Cabecitas de Algodón, al Hospicio San José y al Hogar de Ancianos San Vicente de Paul.
- Minimaratón de juguetes.
- Entrega de juguetes a las Pediatrías de Unicar e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) zona 9.

21. Unidad del Registro Unificado y Atención de Casos de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición (RUDFOR)

Hasta la presente fecha miles de personas desaparecidas durante la guerra interna siguen desaparecidas y aunque muchas organizaciones de derechos humanos en el país han realizado búsquedas, aún no se sabe con exactitud cuántas personas sufrieron este fenómeno ni su ulterior paradero. Por esta razón, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) creó el Registro Unificado y Atención de Casos de Desaparición Forzada (RUDFOR), para formar una base de datos que especifique nombres de las víctimas, circunstancias de los hechos y cualquier otra información de interés que coadyuve a facilitar posteriores investigaciones de cada caso.

Misión

RUDFOR recopila y sistematiza información de las desapariciones forzadas, que coadyuve en procesos encaminados a la búsqueda de justicia para las víctimas de este tipo de violaciones, y que aporte elementos que, a su vez permitan, dar con el paradero de las mismas. Este proceso se realiza en colaboración con todas las organizaciones y entidades que trabajan en el tema de desapariciones forzadas, para poner al alcance de familiares de víctimas, entidades gubernamentales,

organizaciones no gubernamentales, investigadores y entes interesados, la mayor cantidad de información confiable para los mismos. Todo lo cual contribuye a que las familias de las víctimas puedan recibir una reparación adecuada, así como diseñar medidas para que la práctica de la desaparición forzada no se repita.

Objetivo general

Diseñar e implementar políticas de registro, atención y seguimiento de los casos de desaparición forzada y otras formas de desaparición ocurridas durante la guerra interna en Guatemala.

Objetivo específico

Procesar, analizar, registrar, depurar, actualizar y sistematizar los casos de desaparición forzada de diferentes fuentes de información y denuncias presentadas ante la institución del PDH (validación e implementación de la metodología y mecanismos de búsqueda a nivel rural y urbano); así como diseñar una estrategia de preservación y conservación de los mismos casos, incluyendo las garantías de los registros nominativos, según los estándares internacionales.

Funciones

- Realizar el tratamiento informatizado de los datos de los expedientes institucionales sobre desaparición forzada y otras formas de desaparición tanto de la sede central como de las Auxiliaturas del PDH.
- Procesar la información de las organizaciones sociales, entidades internacionales e instituciones estatales sobre casos de desaparición forzada, así como de cualquier otra fuente.
- Solicitar acceso a la información y a los archivos de las organizaciones del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas, o semiautónomas y entidades privadas según los procedimientos legales correspondientes.
- Solicitar la colaboración de otros Estados u organismos internacionales así como de entidades o personas relacionadas con el tema de la desaparición forzada y otras formas de desaparición, a través de los canales pertinentes.
- Implementar las medidas técnicas y administrativas necesarias para asegurar la adecuada protección de los archivos, e impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación.
- Desarrollar e implementar mecanismos de acceso a la información del registro con las pertinentes reservas de confidencialidad, por razones de protección a la integridad personal y resguardo a la intimidad de los testigos, familiares de las víctimas o cualquier otra persona denunciante.
- Colaborar con las otras dependencias y unidades administrativas de la institución del PDH, en relación con el tratamiento de casos de desaparición forzada y otras formas de desaparición.
- Coordinar con la Dirección de Procuración, el acompañamiento de nuevas denuncias sobre desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado interno, para ser ingresadas a la base de datos.
- Otras que le sean asignadas por el PDH.

Acciones emprendidas

Investigación hemerográfica

- Se inició investigación hemerográfica para complementar la información al respecto de desapariciones forzadas desde otra fuente documental, que aporta nuevos elementos a la información que RUDFOR ha recopilado. Dicha investigación se inició con el diseño del proceso, la elaboración de herramientas de trabajo, la validación de éstas y la discusión de todo el procedimiento.
- El proceso de la investigación consiste en la recopilación de informaciones hemerográficas relacionadas con desapariciones forzadas o que puedan derivar en las mismas, la sistematización y análisis de la información recopilada y la elaboración de informes periódicos acerca de los avances y alcances de la misma. Toda la información recabada tiene un respaldo digital a través de fotografías de cada nota periodística recopilada y fichada.
- Como productos concretos de la investigación, se ha trabajado en un período de tres años y ocho meses (enero de 1981 a agosto de 1984), elaborando 2,308 fichas hemerográficas, cada una correspondiente a notas periodísticas diferentes, con sus respectivos respaldos digitales (fotografías). Además, se ha implementado una base de datos que contiene el registro de todas las fichas elaboradas, con los elementos más importantes de la información, así como del medio. La información recabada alimentará la base de datos del RUDFOR, proporcionando informaciones adicionales a los casos ya registrados en esta unidad, lo cual pretende crear mejores condiciones para futuras investigaciones encaminadas a dar con el paradero de los desaparecidos y ha permitido aclarar la situación de varios casos que mantenían el estatus de desaparición forzada, cuyas víctimas, según las fuentes hemerográficas, fueron en algunos casos liberadas, en otros aparecieron en distintas circunstancias y algunos otros, fueron localizados los cadáveres.

Resultado de la investigación hemerográfica

- Hechos que pueden constituir una desaparición forzada o derivar en ella: secuestros, 1,418 víctimas; desapariciones, 1,043; capturas, 83; en total, 2,544 víctimas.
- Otros hechos relacionados con posibles desapariciones forzadas: cadáveres localizados, 2,523 víctimas; identificados en morgues o exhumaciones, 57; personas que aparecieron vivas en diversas circunstancias o fueron liberadas, 144; siendo 2,724 casos en suma.
- Personas registradas en la base de datos de RUDFOR como desapariciones forzadas y cuya situación, según los medios de prensa, se aclara bajo distintas circunstancias: personas liberadas, 17; que aparecieron vivas, 17; cadáveres localizados, 33; consignados a tribunales de Fuero Especial, 6; contabilizándose 73 casos por todo.

Datos estadísticos de los casos ingresados a la Base de Datos

Fuente	Casos registrados*	%	Inicio ingreso	Final ingreso
Famdegua	233	4.54	Nov-06	Feb-07
Diario Militar	164	3.20	Dic-06	Mar-07
Programa Nacional de Resarcimiento	449	8.76	Ago-07	Sep-07
Organismo Judicial	17	0.33	Sep-07	Oct-07
Fundación Guillermo Toriello	312	6.08	Oct-07	Dic-07
Procurador de los Derechos Humanos	505	9.84	Ago-06	Nov-09
Expedientes sede central (301)				
Expedientes de Auxiliaturas (188)				
COPREDEH	2,001	39.04	Oct-07	Nov-08
Comisión para el Esclarecimiento Histórico	1,446	28.21	Dic-06	Oct-09
Total	5,127	100.00		

*Cada caso puede comprender una o más víctimas

Tipo de hecho	Cantidad	%
Desaparición forzada individual	4,197	80.88
Desaparición forzada colectiva	942	18.15
Otro tipo de desaparición	50	0.96
Total	5,189	100.00

Víctimas registradas	Cantidad	%
Femenino	816	11.25
Masculino	6,351	87.59
NS/NR	84	1.16
Total	7,251	100.00

Gestión y apoyo de eventos

- En conmemoración a las mujeres víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado se organizó un homenaje llamado “La Rosaleda”, dentro de las instalaciones del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, en la cual se presentó un documental de la vida de Judith Marlene Gularte Paredes, titulado “No tengo donde llevarle una flor”. Para dicha actividad se contó con la participación de autoridades de gobierno, organizaciones relacionadas con el tema y familiares de las víctimas de desaparición.
- La Unidad RUDFOR organizó, en el auditorium “Carlos García Bauer” de la institución del PDH, la “Conmemoración del Día Nacional Contra la Desaparición Forzada” llevándose a cabo varias charlas al respecto, referente a su perspectiva desde los Acuerdos de Paz, el tema de sanación para los familiares de desaparecidos, y

presentación del documental “Luchemos contra el olvido”, con la participación de funcionarios de la institución del PDH y familiares de las víctimas.

Apoyo y trabajo cooperativo

- Respuesta a 33 oficios, solicitando información referente al tema de desapariciones forzadas, de las siguientes instituciones: Ministerio Público, 24 oficios; Fundación de Antropología Forense de Guatemala, 4 oficios; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 2; Cuerpo Voluntario de Bomberos, 1; Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), 1 y Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), 1.
- Los logros más importantes durante el año 2009 se centran en el trabajo desarrollado por la investigación hemerográfica, la realizada en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la alimentación de la base de datos, digitalizando 1,301 nuevos casos sobre desaparición forzada, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Datos estadísticos diciembre 2009



Denuncias atendidas – diciembre 2009

AUXILIATURAS	EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN			ACCIONES ESPECÍFICAS										TOT
	Civiles y Políticos	DESC	Específicos	Orientación	Prevención	Observación	Mediación	Conciliación	Operativo	Acompañamiento	Atención a la víctima	Verificación	Intervención inmediata	
Alta Verapaz	4	1	1	3	13		1							23
Baja Verapaz				3	17		3	2		1			3	29
Chimaltenango	2			8	9		4						1	24
Chiquimula	1			2	7									10
El Progreso	2	1		7	7		2	3		1	6		1	30
Escuintla	2	2		1	28		1							34
Guatemala	20	37	33	23	203		70							386
Guate - móvil 1					33		1				35		1	70
Guate - móvil 2	1			9	13					4				27
Huehuetenango	4	6	2	4	4								4	24
Huehue - móvil	4	6	2		4								4	20
Huehue - Nentón				1			1							2
Izabal	3		1	12	20		1							37
Jalapa	4	1		9	15	1	2		1				2	35
Jutiapa	8	2		2	2		1							15
Petén	3				8	1	2		2	34			4	54
Petén - Poptún				3		2	1						1	7
Petén - El Naranjo					2		3							5
Quetzaltenango	1		1	2	11		1		1				10	27
Quetz - Coatepeque				6	2	5	1							14
Quiché				16	8		1						25	50
Quiché - Ixcán					4		6						1	11
Quiché - Nebaj				8	2		1							11
Retalhuleu	1				9								8	18
Sacatepéquez		3		5		1			2	1		1	3	16
San Marcos													4	4
Santa Rosa				12	2								1	15
S.R. - Chiquimulilla				7	1	1							2	11
Sololá	4	1	1	16	7	3	2		2	7	3		2	48
Sololá – San. Atitlán	1			5	1		1			7	14			29
Suchitepéquez	8	6		5	4	7	2	6		6	12		64	120
Totonicapán				1	9	2	27		9	36	39			123
Zacapa	1	1		1	19								1	23
TOTAL	74	67	41	171	464	23	135	11	17	97	109	1	142	1,352

Denuncias atendidas – enero a diciembre de 2009

TIPO DE EXPEDIENTE		Enero a noviembre	Diciembre	Subtotales	%	Total	%
Expedientes de investigación	Derechos individuales	1,156	74	1,230	4.76	3,484	13.48
	Derechos sociales, económicos y culturales	1,505	67	1,572	6.08		
	Derechos específicos	641	41	682	2.64		
	Subtotales	3,302	182				
Acciones específicas	Orientación	4,593	171	4,764	18.43	22,369	86.52
	Previsión	5,535	464	5,999	23.20		
	Observación	639	23	662	2.56		
	Mediación	1,809	135	1,944	7.52		
	Conciliación	219	11	230	0.89		
	Operativo	394	17	411	1.59		
	Acompañamiento	1,727	97	1,824	7.06		
	Atención a la víctima	3,022	109	3,131	12.11		
	Intervención inmediata	3,150	142	3,292	12.73		
	Seguimiento	10		10	0.04		
	Verificación	11	1	12	0.05		
	Exhibición personal	90		90	0.35		
	Sub-totales	21,199	1170				
GRAN TOTAL						25,853	100.00
Llamadas al 1555		Efectivas		15,257			
		Se cortó la comunicación		35,389			
		Colgadas o "por molestar"		190,664			
		TOTAL		241,310			

Atención en defensorías Enero a diciembre de 2009

Defensoría	Atención de casos
Mujer	270
Niñez y Adolescencia	1,488
Población Desarraigada y Migrante	41
Discapacidad	30
Adulto Mayor	176
Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario	15
Pueblos indígenas	79
TOTAL	2,099

Informe Anual Circunstanciado

Resumen ejecutivo 2009

**Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procurador de los Derechos Humanos**



Guatemala, enero 2010

DIRECTORIO

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos

Licda. María Eugenia de Sierra
Procuradora Adjunta I

Licda. Dunia Tobar de Leal
Procuradora Adjunta II

Lic. Pedro Edmundo Asencio
Secretario General

12.02.01.14

G918 Guatemala. Procurador de los Derechos Humanos
Informe Anual Circunstanciado: Resumen ejecutivo del
Informe Anual Circunstanciado al Congreso de la República
de las actividades y de la situación de los derechos humanos
en Guatemala durante el 2009 / Procurador de los Derechos
Humanos. -- Guatemala : PDH, 2009
124 p. ; 28 cm.

1. INFORME ANUAL 2. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS 3. DERECHOS HUMANOS 4. GUATEMALA I.t.

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

12 avenida 12-72, zona 1, Guatemala, Centro América
PBX: (502) 2424-1717
Denuncias 1555
www.pdh.org.gt

Impreso en los talleres de reproducción de materiales
de la institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala
Tiraje de 2,500 ejemplares

Informe Anual Circunstanciado

Resumen ejecutivo 2009



presentado por el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procurador de los Derechos Humanos

INDÍCE

PRESENTACIÓN	7
PRIMERA PARTE	
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA DURANTE 2009	9
Recomendaciones	23
SEGUNDA PARTE	
MEMORIA DE LABORES	25
Auxiliaturas	27
Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz	27
Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz	28
Auxiliatura Departamental de Chimaltenango	28
Auxiliatura Departamental de Chiquimula	29
Auxiliatura Departamental de El Progreso	30
Auxiliatura Departamental de Escuintla	30
Auxiliatura Departamental de Guatemala	31
Auxiliatura Móvil de Guatemala – Región I	32
Auxiliatura Móvil de Guatemala – Región II	33
Auxiliatura Departamental de Huehuetenango	34
Auxiliatura Móvil de Huehuetenango	34
Auxiliatura Municipal de Nentón	35
Auxiliatura Departamental de Izabal	36
Auxiliatura Departamental de Jalapa	36
Auxiliatura Departamental de Jutiapa	37
Auxiliatura Departamental de Petén	38
Auxiliatura Regional de Poptún, Petén	39
Auxiliatura Municipal de El Naranjo, Petén	39
Auxiliatura Departamental de Quetzaltenango	40
Auxiliatura Regional de Coatepeque, Quetzaltenango	41
Auxiliatura Departamental de Quiché	41
Auxiliatura Municipal de Ixcán, Quiché	42
Auxiliatura Municipal de Santa María Nebaj, Quiché	42
Auxiliatura Departamental de Retalhuleu	43
Auxiliatura Departamental de Sacatepéquez	44
Auxiliatura de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	44
Auxiliatura Departamental de San Marcos	45
Auxiliatura Departamental de Santa Rosa	46
Auxiliatura Municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa	46
Auxiliatura Departamental de Sololá	47
Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlán, Sololá	48
Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez	48
Auxiliatura Departamental de Totonicapán	49
Auxiliatura Departamental de Zacapa	50

Defensorías	
Defensoría de la Mujer	51
Defensoría de la Niñez y Adolescencia	52
Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante	53
Defensoría de las Personas con Discapacidad	55
Defensoría de los Pueblos Indígenas	56
Defensoría del Adulto Mayor	56
Defensoría del Debido Proceso y Recluso	58
Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario	59
Defensoría del Trabajador	60
Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz	60
Dirección de Educación y Promoción	61
Administración Central	
1. Asesoría en Análisis Estratégico	64
2. Coordinadora Nacional de Voluntariado	65
3. Dirección Administrativa	65
4. Dirección de Comunicación Social	65
Unidad de Prensa y Promoción	65
Unidad de Comunicación Alternativa	66
5. Dirección de Estudio, Análisis e Investigación	66
Unidad de Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos	68
Unidad de Supervisión Administrativa	70
6. Dirección de Mediación y Resolución de Conflictos e Incidencia en Políticas Públicas	72
7. Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	73
8. Dirección de Relaciones Internacionales	74
9. Dirección de Tecnología e Informática	76
10. Dirección Financiera	77
11. Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia	78
12. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	79
13. Programa para la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA y grupos vulnerables	81
14. Programa de Prevención y Atención de Desastres	82
15. Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información	83
16. Unidad contra la Impunidad	87
17. Unidad de Auditoría Interna	88
18. Unidad de Asesores Jurídicos	89
19. Unidad de Información	91
20. Unidad de Protocolo y Eventos	91
21. Unidad de Registro Unificado y atención de casos de desaparición forzada y otras formas de desaparición (RUDFOR)	92
DATOS ESTADÍSTICOS	
Enero-diciembre 2009	95

**Informe Anual Circunstanciado al honorable Congreso de la República de Guatemala,
sobre la situación de los derechos humanos en el país durante 2009, presentado por el
doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, Procurador de los Derechos Humanos**

Presentación

Cuando los Constituyentes de 1985 decidieron crear la figura del Procurador de los Derechos Humanos tuvieron en mente que éste debiese reunir entre sus cualidades sustantivas la capacidad de apreciar con objetividad la situación del país, desde una perspectiva de derechos humanos, y de convertirse en la conciencia crítica de la nación para decir, con responsabilidad pero sin limitaciones, su diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de las garantías individuales y colectivas definidas por la Constitución Política de la República de Guatemala.

Al desarrollar los postulados constitucionales relativos a la institución del Procurador de los Derechos Humanos en la ley específica, el Congreso de la República especificó que el Magistrado de Conciencia debería también informar circunstanciadamente sobre el trabajo desplegado frente a aquella situación diagnosticada.

En efecto, el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos señala que “el Procurador deberá presentar al Congreso de la República durante la segunda quincena del mes de enero de cada año, por conducto de la Comisión respectiva, informe circunstanciado de sus actividades y de la situación de los derechos humanos, durante el año anterior”.

De este modo, el informe anual que el Procurador de los Derechos Humanos debe rendir al Congreso de la República, y a través de él a la nación entera, se desdobra en dos informes referidos a dos aspectos de una misma realidad: la situación actual de los derechos humanos y los trabajos realizados para modificar positivamente esa situación.

El informe anual del Procurador de los Derechos Humanos se presenta, pues, en dos volúmenes:

uno de ellos es el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala y el otro es el Informe circunstanciado de labores institucional.

Se trata, como ya se dijo, de documentos complementarios entre sí, cuya lectura cruzada puede resultar fructífera para quien tenga interés en hacer un ejercicio de comprensión integral de los asuntos relativos a los derechos humanos en Guatemala.

Téngase en cuenta que la acción del Procurador, ya sea como protector o promotor, es consustancial a la situación de los derechos humanos, si bien la responsabilidad en los avances o retrocesos en esta materia recae en el conjunto de la institucionalidad estatal.

No es casual, por ello, que el texto del informe de situación tenga como referencia (no exclusiva) las intervenciones institucionales y los casos conocidos directamente a través de las denuncias recibidas y expedientes iniciados por la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Dicho de otra manera, el conocimiento que el Procurador tiene de la situación de los derechos humanos es, de inicio, resultado de su contacto diario con la sociedad guatemalteca, con los problemas de las y los habitantes, quienes buscan a la institución para encontrar respuestas a un entorno marcado por el irrespeto a las garantías constitucionales, el abuso, la arbitrariedad, la injusticia, la desigualdad y la discriminación.

Es, pues, un conocimiento nacido de la práctica de la defensa y la promoción de los derechos humanos, que se sobrepone al riesgo del empirismo con el adecuado, oportuno y sistemático estudio de la realidad nacional, a cargo tanto de unidades especializadas, como de las y los funcionarios responsables de la

atención a las personas que cotidianamente acuden a la institución en busca de apoyo.

El conocimiento de la situación de los derechos humanos nace también del contacto directo con los actores de los procesos sociales.

Nos referimos, fundamentalmente, a las y los ciudadanos, ya sea que actúen individual o colectivamente, espontánea u organizadamente; personas con sueños y aspiraciones legítimas, deseosas de vivir con tranquilidad y en las mejores condiciones posibles. Pero también hablamos de las y los funcionarios del Estado, quienes usualmente ocupan el lugar de los sindicatos de incurrir en violaciones a las garantías constitucionales.

Tampoco quedan excluidos, en la formación de este conocimiento, los actores internacionales, tanto aquellos radicados dentro del país, como quienes desde el extranjero realizan una observación permanente de la evolución de los acontecimientos nacionales y el grado de respeto de los derechos humanos en Guatemala.

A trece años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el informe anual del Procurador de los Derechos Humanos hace especial mención del papel de todos aquellos protagonistas de la vida social, política, económica y cultural comprometidos con la búsqueda de la paz y la reconciliación

La cultura de paz se constituye como eje primordial y transversal dentro del presente informe, con el cual el Procurador de los Derechos Humanos desea dejar constancia de su reconocimiento a quienes, muchas veces en el anonimato del trabajo diario, en especial en instituciones como la nuestra, hacen un aporte sustancial al esfuerzo por superar las secuelas, todavía muy fuertes, de la intolerancia, la violencia y la impunidad.

La finalidad es que el informe, a la vez que signifique reconocimiento a las iniciativas, acciones y actitudes loables y respetuosas de los derechos humanos, también sirva como oportunidad para la realización de un balance de lo hecho y de lo omitido, de los problemas que deben ser resueltos, de los logros y avances, para construir planes, propósitos y objetivos principalmente de reparación en cuanto a aquellos daños que hubieren sido causados y las garantías de no repetición.

El Procurador de los Derechos Humanos rinde ante el Congreso de la República este informe, pero también ante las y los habitantes del país, para que sirva como instrumento para la construcción de un mejor país, sin violencia e impunidad, un país en el que se pueda consolidar una cultura de paz, entendida ésta como un proceso de aprendizaje, lento y a veces doloroso pero insoslayable.

Con ese propósito está comprometida nuestra institución, que se reconoce protagonista en la edificación de una realidad nacional distinta. De eso da cuenta el informe anual, en cuyas líneas podrá apreciarse a una institución fuerte, formada por mujeres y hombres que llevan con orgullo el honroso título de defensoras y defensores de los derechos humanos. Ésa es la institución que mira de frente al futuro, dispuesta a encarar con hidalguía los desafíos con que llega la nueva década.

Al entregar al juicio crítico de las y los guatemaltecos los dos volúmenes que forman el informe anual del Procurador, confiamos en que su lectura atenta contagie a muchos de este espíritu de adhesión al sueño de una vida mejor, marcada por el signo de la fraternidad y la convivencia respetuosa de todas y todos, en un país forjado en la riqueza de su diversidad humana.

Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos

PRIMERA PARTE

Situación de los derechos humanos en Guatemala durante 2009

El Procurador de los Derechos Humanos, en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, rinde el informe de Situación de los derechos humanos en Guatemala y su Informe Circunstanciado de Labores, ante el Honorable Congreso de la República, tal como, según su visión, experiencia y conciencia ocurrió durante 2009.

La acción del Magistrado de Conciencia es consustancial a la situación de los derechos Humanos, ya sea en la defensa o su promoción. El texto del informe presenta y tiene como referencia importante, las iniciativas y casos conocidos directamente a través de las denuncias recibidas y expedientes iniciados por la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El informe *Situación de los Derechos Humanos en Guatemala* pretende abarcar y abordar de una manera objetiva y condensada, pero al mismo tiempo exhaustiva, los hechos relacionados con cada uno de los derechos humanos, tanto los económicos, sociales y culturales, como los civiles y políticos y los derechos de tercera generación, teniendo siempre presente la interrelación e integralidad de éstos.

La situación de los derechos humanos ha estado profundamente marcada por elementos externos de particular relevancia, como la crisis del petróleo, la crisis económica y financiera de los Estados Unidos y la consecuente deportación de connacionales.

Entre los aspectos internos figuran la crisis alimentaria, el escaso nivel de lluvias en algunas regiones, que provocó sequía y pérdida de cosechas de alimentos y granos básicos, la caída del envío de remesas de guatemaltecos radicados en el exterior, la inseguridad y el fortalecimiento de las diversas redes del crimen organizado y el narcotráfico.

A los elementos históricos y estructurales, tales como la desigualdad económica y la concentración de la tierra, se suman nuevas formas de conflictividad, dinámicas económicas y el acaparamiento de tierras por parte de los narcotraficantes.

Estas causas y factores han incidido en el deterioro en la calidad de vida, la falta de acceso a servicios básicos, la persistencia y el aumento de las desigualdades sociales, situaciones de desempleo o empleo por debajo de las condiciones legales mínimas; casos de migraciones bajo engaños de víctimas de trata; el contexto de la permanente inseguridad e impunidad y las cada vez más frecuentes extorsiones.

El orden en que se incluyen los capítulos y sus componentes no implican importancia jerárquica, sino que pretende ofrecer una presentación que ayude al lector a comprender la situación descrita, con muestras de la relación entre causas y efectos, aunque no de manera absoluta.

Como abordaje de las violencias que en 2009 han hecho sufrir a tantos habitantes del país, sin distinción de sexo ni edad, la situación de las violaciones del derecho a la vida, a la dignidad y la integridad física se presenta en el primer capítulo. El segundo se refiere a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la crisis económica; y en el capítulo tercero la situación de los sectores especialmente vulnerados en sus derechos. El cuarto capítulo se ocupa de la situación social y defensa de los derechos humanos; el último capítulo se concentra en ofrecer una breve síntesis y el panorama de los avances observados durante el año.

Entre las violaciones del derecho a la vida y la integridad física, el informe de situación agrupa los indicadores para medir el avance o rezago en torno a la normativa y el fortalecimiento institucional, el contexto de la violencia, adolescencia, juventud y pandillas y la violencia dirigida especialmente a grupos por su condición de edad, género y trabajo,

tales como la muerte violenta de mujeres, adultos mayores, adolescentes y menores víctimas de secuestro y violencia sexual. Se agrega como agravantes y deterioros ocurridos durante el año, fenómenos acaecidos en torno a la tortura, linchamientos y la trata de personas.

El deterioro, la debilidad institucional y la falta de capacidad del Estado para asegurar las condiciones que ofrezcan la construcción y consolidación democráticas, han sido las características predominantes y sistemáticas en las violaciones del derecho a la vida.

Durante 2009 la inseguridad y la violencia adquirieron diversos matices. Unos en materia de avance institucional, como la aprobación de leyes, esfuerzos democráticos institucionales, y otros que por omisión o aquiescencia del Estado han fomentado y tolerado la impunidad, permitiendo la progresión, reagrupación y readecuación del crimen organizado y de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

El Estado (sus acciones, políticas e iniciativas), en el continuo de los años avanza lentamente; el peso de la impunidad, el crimen organizado nacional y transnacional y el afianzamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad se asientan en pequeños feudos desde donde declaran el dominio y poder sobre la propia institucionalidad, la justicia, prevención y punibilidad en las acciones criminales.

Transcurridos más de ocho meses desde que se suscribieron los compromisos del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, en 2009 el balance de resultados no es el mejor y no es coherente con la grave situación de seguridad que afecta a la población.

Los avances son más bien limitados y aislados, sin pasos decisivos en asuntos fundamentales como la reforma policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, de un eficaz y depurado ente de investigación criminal, en la definición de una política criminal del Estado, sin que la prioridad atribuida a la seguridad y la justicia se reflejen en las correspondientes asignaciones presupuestarias, y sin una coherente estrategia de comunicación y

participación social para la difusión e impulso del acuerdo, entre otras deficiencias constatadas.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos insiste en la necesidad de impulsar con decisión y visión estratégica los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional, sin lo cual será muy difícil superar la crítica situación de inseguridad que afecta a la sociedad guatemalteca.

La violencia mantiene una espiral creciente. En menos de diez años se duplicó la tasa de violencia en el país. Las cifras podrían alcanzar 49 muertes por cada 100,000 habitantes en el ámbito nacional. En los últimos cinco años, 16 municipios, que albergan el 27% de la población, pertenecientes a ocho departamentos, concentran el 50.44% de los homicidios del país.

El número de muertes de enero a diciembre fue de 6,498, es decir, 717 más que en 2007 y 206 más que en 2008.¹ Durante los últimos tres años (de 2007 a 2009) han fallecido de manera violenta 18,571 personas. El promedio ha aumentado en una muerte diaria. En 2007 la cifra era de 16 decesos, para 2008, de 17 y, finalmente, a octubre de 2009 era de 18.

Se señala en el informe también que la violencia tiende a manifestarse con mayor ímpetu en las zonas urbanas de cada uno de los municipios.

Los homicidios y la violencia se concentraron para 2009 predominantemente en siete departamentos del país, siendo el más violento el de Guatemala, con 41.06% de homicidios de todo el país. Para octubre se contabilizaron 1,061 fallecimientos, la mayor parte en cuatro zonas (18, 6, 7 y 12) que concentran el 53.54% de casos de muerte violenta.

Las principales causas de muerte violenta continúan siendo por arma de fuego. El dato más sobresaliente en las diferencias de homicidios se encuentra en el fenómeno del linchamiento; de enero a diciembre

¹ En el informe se analizan datos hasta el 31 de octubre, la situación y la tendencia observada no varió en absoluto hasta finalizar el año; en algunos pasajes se encontrarán cifras actualizadas, y en el mejor de los casos, para consulta, en el Anexo II se encuentran las tablas completas con datos registrados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

de 2009 se presentaron 106 casos, tanto en áreas urbanas como rurales.

Por el creciente número de homicidios, señales de tortura e incremento de la muerte violenta de mujeres, la violencia y el terror se han constituido en las expresiones más inequívocas de muerte violenta y de mayor impacto en la sociedad. Se han convertido en indicadores que ejemplifican la condición de violencia estructural en que se encuentra el país.

En el caso de muerte violenta de mujeres, de 2003 a 2008 las cifras han aumentado hasta en un 179%; para noviembre de 2009 se registraban 657 mujeres asesinadas y 899 heridas.

A finales de 2009, incluido diciembre, la cifra ascendió a 720 mujeres asesinadas, elevando a 60 el promedio mensual y a 2 por día.

Respecto al número y proporción de homicidios en general y de muerte violenta de mujeres, 2009 se convirtió en el año más violento, lo cual se manifestó de forma indiscriminada y sin importar la edad de la mujer. La cifra más alta se ubica entre las féminas entre 23 y 27 años, con 101 muertes. Casi la mitad de mujeres son asesinadas en la etapa de mayor reproductividad.

La proporción de actos de tortura cometidos en contra de hombres y mujeres registra que ellas los sufren en mayor magnitud que sus pares hombres. Existe una escasa prioridad en el esclarecimiento de los asesinatos cometidos en su contra. En el imaginario social se manifiesta la misoginia, simplemente por subestimación a su condición de género.

El crimen organizado refleja un comportamiento y constante evolución sobre los niveles de violencia y ha impedido el fortalecimiento de la institucionalidad, sirviéndose de ésta para fomentar la impunidad, el poder político y ampliar la zona de influencia en la esfera delictiva; se encuentra interconectado y es capaz de influir en las decisiones políticas.

Adicionalmente, ha desarrollado un control territorial y cuenta con la capacidad y logística de alterar la gobernabilidad a través de la utilización de la violencia, el miedo y el terror. Cuenta con una flexi-

bilidad reactiva capaz de reconducir su ámbito de acción ante las acciones que realiza el Estado.

La fuerza del crimen organizado ha erosionado, a través de la violencia simbólica, el ámbito comunitario y ha organizado redes de relaciones socio-políticas, económicas e institucionales. Ha abarcado más territorios, convirtiendo a la adolescencia y juventud en sujetos de criminalidad, siendo las pandillas un apéndice constitutivo. Existe un continuo crecimiento de estos grupos, en los cuales los menores de edad y adolescentes son herramientas que perpetúan y extienden el dominio y redes del crimen organizado.

Un gran número de adolescentes y jóvenes son reclutados por las pandillas en zonas de la capital, y utilizados por su posición de indefensión, situación económica y falta de oportunidades. La zona 18 y el municipio de Mixco ejemplifican la pérdida territorial e incapacidad de influencia y despliegue policial.

El caso de los adultos mayores no ha sido ajeno a la problemática de inseguridad y de violaciones sistemáticas del derecho a la vida. Durante 2009 el Estado no cumplió con garantizar la seguridad pública ni pudo contener la ola de criminalidad común que cobró la vida de 204 hombres y mujeres de la tercera edad, cantidad mayor a la que se reportó durante 2008 (193 víctimas). Las estadísticas demuestran que los ataques en contra de las personas adultas mayores, lejos de disminuir, registran un aumento y no hay signos de que esta situación cambie.

Además de las condiciones estructurales del país, la falta de políticas públicas específicas, la no aplicación de la ley, la impunidad y las condiciones de violencia, propician un entorno de abusos y atropellos que afecta a los adultos mayores, los margina y les impide mantener un contexto de vida digna, segura y de calidad.

En lo referente a los derechos de la niñez y adolescencia víctima de la problemática de la violencia criminal, el informe de situación ha recabado hechos que comprometen la vigencia de derechos y libertades elementales, la eficiencia del

Estado para garantizar la vida y su seguridad como seres humanos.

Aunque existe la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, y la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, es poco o nada lo que se implementa para proteger a la niñez del país de los abusos y violencia a la que es sometida.

En el ámbito internacional, pese a que el Estado de Guatemala fue uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, los ataques mortales y las agresiones violentas en contra de la población infantil continúan ocurriendo, en menoscabo del derecho de la niñez a una vida libre de abusos y de violencia. En estos casos, el Estado de Guatemala es responsable de violar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y de favorecer la impunidad, evitando el castigo y la sanción penal a quienes son responsables de los ataques mortales.

La vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes los expone a riesgos mayores, tal el caso de los delitos sexuales cometidos en su contra. De enero a octubre de 2009 se registraron 306 ataques sexuales (abusos deshonestos y violaciones) en su contra, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC). La mayoría de los ataques (95%) ocurrió contra víctimas del sexo femenino.

La situación en cuanto a violencia intrafamiliar presenta problemáticas diversas. Por un lado, aunque se encuentran estadísticas en el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial, hay una serie de subregistros sobre los casos de violencia intrafamiliar, hecho que, sin duda, reside en el mismo carácter de la agresión, la situación de indefensión y falta de información para las víctimas.

De esa forma persisten hogares donde la violencia no se denuncia, viviéndose la agresión con actitudes o formas *normales* de convivencia en el hogar. El miedo, necesidad, dependencia económica y afectiva, el mantenimiento del *status* ante la sociedad,

dogmas, creencias y prejuicios, entre otros, hace de la violencia intrafamiliar un flagelo cotidiano y normativo de las relaciones sociales. Además, en muchos casos las víctimas no denuncian al agresor por temor a represalias o por la falta de aplicación de la justicia.

En cuanto a la acción criminal manifestada en el secuestro de menores de edad de ambos sexos, durante 2009 esta dolorosa realidad conmovió a varias familias guatemaltecas, dejando secuelas y daños colaterales psicológicos, físicos y morales en las pequeñas víctimas y su entorno familiar. La situación es más grave cuando la víctima es ejecutada o fallece durante el operativo de rescate. Pese a la vigencia de un marco legal que persigue y castiga estos delitos, son escasos los logros y resultados en los que supuestos responsables han sido identificados, capturados y sometidos a juicio.

Denuncias y percepciones descritas en el informe muestran un escenario social violento y brutal, manifestado por el recurrente uso de métodos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que deja al descubierto la debilidad del Estado, el cual, por acción u omisión, ha sido incapaz de prevenir y erradicar la conducta de quienes, mediante el uso de métodos brutales, desprecian e irrespetan la vida y dignidad de otros seres humanos.

Finalmente, dos fenómenos que se vuelven a registrar con mayor contundencia y que presentan señales de recrudecimiento son los linchamientos y la tortura. La escasa institucionalidad o presencia del Estado se pone de manifiesto en la desprotección en que se encuentra la población frente a los elevados índices de delitos, corrupción y abusos de funcionarios públicos o la lentitud e insatisfacción sobre determinados procesos judiciales.

Las características generales de los linchamientos describen la falta de castigo, prevención de los delitos o situaciones de violencia. Aunado a ello, se presentan escenarios de impunidad creciente, indefensión, lentitud y corrupción en los procesos judiciales que presionan los niveles de tolerancia de la población, haciendo que tomen en sus manos la incapacidad punitiva del Estado.

El fenómeno, como se hace evidente en el transcurso de 2008 y 2009, tiende a agravarse cuando involucra a autoridades estatales, como alcaldes o miembros de autoridades comunitarias, implicados directa o indirectamente, ya sea para estimular o como sujetos acusados en las acciones u omisiones del linchamiento.

Considerado como una forma contemporánea de esclavitud y uno de los ultrajes más graves contra la esencia de los derechos humanos, la integridad, la dignidad y la vida de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres víctimas, la trata de personas es un fenómeno que ha despertado preocupación por la magnitud de su crecimiento. Tiende a agravarse por la ubicación geográfica de Guatemala, en cuanto país de origen, tránsito y destino.

El Estado asumió compromisos internacionalmente y ha dado pasos encaminados a combatir este delito, pero los avances deben fortalecerse y mantenerse. Debe existir una planificación adecuada en la atención, prevención, sanción y erradicación del fenómeno, así como la implementación de la política pública y el plan nacional para el combate de la trata de personas a través de un presupuesto adecuado. Además, debe existir una inclusión permanente, constante, dinámica y de consenso de los diversos actores sociales que están comprometidos con la erradicación del fenómeno.

Institucionalmente debe fortalecerse como ente responsable a la Secretaría de la Violencia Sexual y Trata de Personas. El Estado debe asumir el compromiso de proveer recursos humanos y técnicos que permitan su funcionalidad y operatividad. En la vía de contar con información fiable y actualizada, a las instancias encargadas del monitoreo y seguimiento de casos les corresponde la recopilación de datos estadísticos desagregados y tener variables que den resultados apegados a la realidad.

El Estado debe trabajar coordinadamente con otras instituciones que tienen a su cargo la puesta en marcha de políticas específicas de poblaciones vulnerables como la Política de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2002-2015); la Política de Equidad y Oportunidad de las Mujeres Guatemaltecas y la Coordinadora Nacional para la

Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI), en armonía con el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (PLANNOVI 2004-2014).

La parte relativa a los derechos económicos sociales y culturales incluye un exhaustivo análisis de la pobreza, el contexto económico y la crisis financiera internacional como elementos determinantes que intervienen en el desarrollo, cumplimiento y avances de estos derechos. Se incluyen, dentro de este apartado, la ejecución presupuestaria, gasto social y derechos humanos, los derechos laborales, el derecho a la alimentación, la educación, la cultura, la salud, la seguridad y la asistencia social, a una vivienda adecuada, a un ambiente sano y los derechos de los pueblos indígenas. Además, se hace un análisis del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como ejes transversales que complementan el fortalecimiento de todos estos derechos.

El sector real de la economía se vio afectado, sobre todo en el primer semestre, por la contracción de algunos sectores en la producción agrícola, industrial y de servicios, juntamente con la reducción de las exportaciones, el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa y otras variables económicas. El panorama económico, social y político de Guatemala en este año fue inestable, con acontecimientos que agravaron aún más la situación socioeconómica de sus habitantes.

El 2009 no fue positivo para avanzar en la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población guatemalteca. La situación se vuelve más compleja y las carencias en la satisfacción y posibilidad de hacer efectivos los derechos se hacen más notorias. La capacidad del Estado, por ende, se vuelve mucho más frágil y con menores posibilidades de cumplir con las funciones básicas de bienestar y calidad de vida.

En el transcurso del año, la baja recaudación obligó a recortes presupuestarios por falta de financiamiento. Ante las difíciles condiciones para el impulso de la modernización fiscal, distintas instituciones de gobierno y municipalidades sufrieron mermas en sus ingresos. Los municipios con mayor índice

de pobreza han sido los más afectados con los recortes presupuestarios. En definitiva, la reducción de la recaudación fiscal durante 2009 implica la disminución del gasto social (salud, educación, entre otros), lo que a su vez significa condiciones adversas para la reducción de la pobreza y pobreza extrema.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, gasto social y derechos humanos, los acontecimientos relevantes durante los primeros once meses de 2009 que se relacionan con el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, se encuentran vinculados al gasto público, ante la insuficiencia de recursos provocada por una abrupta caída de la recaudación tributaria, la no aprobación de la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2010, las controversias suscitadas por la iniciativa que dispone aprobar disposiciones de apoyo financiero a gobiernos municipales, educación, salud, desarrollo rural y seguridad ciudadana.

El Presupuesto General de la Nación registró una ejecución promedio a noviembre del 81%. Los ministerios que presentan menor ejecución fueron el de Cultura y Deportes, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación, así como las Secretarías y la Presidencia. El sector público se caracterizó durante el último semestre por la reducción del gasto público, que mermó la acción gubernamental y el cumplimiento de los derechos humanos de la población.

Los indicadores del gasto social muestran con mayor certeza y claridad el nivel de protección y cumplimiento de los derechos humanos. Ante esta perspectiva, los derechos más vulnerados y que registran menores avances por la falta de eficacia y eficiencia estatal para la ejecución presupuestaria son el derecho a la vida, la salud y asistencia social, a la seguridad, la alimentación, la cultura y a un ambiente sano. Además, presentan un desarrollo bajo e inadecuado, el derecho a un trabajo digno, a la vivienda adecuada y a la educación.

Durante 2009 se creó una serie de fondos que conforman los programas de Cohesión Social.

Desaparecieron el Fondo de Inversión Social y el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. Si bien los programas de Cohesión Social tienen como finalidad reducir la brecha entre los sectores más vulnerables, así como la pobreza y extrema pobreza, son susceptibles de mejoras que deben suscitarse a partir de la institucionalización e integración de la legislación nacional para alcanzar una mayor sostenibilidad.

La inversión social realizada por el total de los fondos en comparación con 2008 tuvo una reducción de 16%. El Fondo de Tierras y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano redujeron drásticamente la inversión social en 2009, en un 83% y 25% respectivamente en comparación con 2008. Similar situación sucedió con la reducción de la inversión social realizada por el Fondo Nacional para la Paz, el Fondo Nacional para la Modernización y Reactivación de la Actividad Agropecuaria, el Fondo Guatemalteco para la Vivienda y el Fondo de Desarrollo Indígena.

Desde la perspectiva de los derechos a la seguridad alimentaria y nutricional y las responsabilidades que corresponden al Estado, se observó que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) no han cumplido con el mandato constitucional ni legal para el que han sido creadas. Las debilidades se han manifestado en la atención inmediata y urgente para responder con efectividad y darle solución a la crisis alimentaria y nutricional del país, en particular con los casos de niños y niñas de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa.

El incremento en la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en el Corredor Seco y en todo el país originó que el Procurador de los Derechos Humanos, junto con autoridades de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras entidades sociales establecieran un Frente contra el Hambre, para considerar y establecer acciones que faciliten la atención de niños y niñas con este padecimiento.

Se logró incidencia ante autoridades locales, gubernamentales y sociedad civil, y lograr diversos

apoyos para la organización del censo nutricional, la elaboración de instrumentos consolidados e informes sobre el trabajo de campo realizado. Se establecieron los casos, número de niños y niñas afectadas por departamento, comunidad y edades entre 0 y 5 años. Finalmente, fueron remitidos 556 casos de niños con desnutrición aguda para su atención en hospitales nacionales y centros de recuperación nutricional.

En lo referente al derecho al trabajo, no se ejecutaron políticas eficaces para generar mayores fuentes de empleo; ni para disminuir el daño causado al empleo por la crisis económica que atraviesa el país. Los resultados recopilados por el Informe de Situación indican no solo el mantenimiento, sino el aumento de la pobreza. La reducción del empleo significa menos ingresos para las familias. Se restringe el consumo y disminuye la demanda interna. Esta es una de las mayores amenazas que se cierne sobre la economía nacional a partir de la crisis económica que golpea el ámbito mundial.

No existe un número de empresas o fuentes de empleo que satisfaga la demanda laboral, situación que obliga a miles de personas a emigrar a la capital o a países del norte como los Estados Unidos. Algunos indicadores muestran un alza de la informalidad en el trabajo, debilitamiento del empleo con protección social y una contracción laboral de jornada completa.

A pesar de que la legislación laboral prohíbe la discriminación en el empleo, las mujeres que trabajan en las empresas maquiladoras son frecuentemente discriminadas e irrespetadas en sus derechos. Además, en un país como Guatemala, donde el 30% de la población la conforman personas entre 15 y 30 años, miles de jóvenes, algunos que han concluido su carrera de diversificado no cuentan con un empleo directo ni con esperanzas de que en un futuro cercano esa realidad se modifique.

La situación del derecho a la alimentación se agravó durante 2009. Los indicadores sociales sobre la inseguridad alimentaria y nutricional mostraron que la misma afecta no sólo a los departamentos ubicados en el Corredor Seco del oriente, sino también a otros departamentos del país.

En el derecho a la educación, hay deficiencias del Estado con respecto al cumplimiento del mandato constitucional para garantizar la educación gratuita de todos los niños y niñas en edad escolar. Existen brechas de exclusión para lograr el desarrollo pleno del derecho a la educación, especialmente en las mujeres, pueblos indígenas y discapacitados.

El gasto público en educación es insuficiente, se ha estancado en menos del 1.5% del PIB, cifra que se encuentra muy debajo del promedio latinoamericano. Los recursos no garantizan la existencia de escuelas y programas de enseñanza en cantidad suficiente y a disposición de todos los niños y niñas, así como de la infraestructura adecuada y disposición de docentes.

Existen deficiencias para facilitar el acceso de la población discapacitada en edad escolar a la educación. Aún no se reconoce la necesidad de que niños y niñas con deficiencias auditivas puedan tener acceso a la educación con maestros capacitados para trasladar el conocimiento por medio del lenguaje de señas, además los maestros no cuentan con el equipo ni la instrucción necesaria para que las personas con discapacidades puedan alcanzar el mismo nivel de educación que las demás.

En la legislación interna, el derecho a la cultura en Guatemala se ha establecido como garantía constitucional y se ha creado una gran gama de leyes, instituciones y políticas que garantizan ese derecho, sin embargo, su implementación en los planes y políticas públicas, así como en los programas y proyectos, no responde a la prioridad requerida.

La escasez de recopilación estadística, especialmente en el área rural, limita el análisis sobre la situación del acceso a la cultura. No obstante la situación del acceso a la cultura de las comunidades lejanas es restringida, en mayor medida en las poblaciones pobres e indígenas.

Para la realización del derecho a la cultura y la cultura de paz, se invocan una reconstrucción y valorización entre individuos, la edificación de valores, comportamientos, actitudes y modos de relacionarse que favorezca la no violencia y el respeto de los derechos humanos en sus múltiples manifestaciones e interdependencias.

Es necesario que el Estado adopte una política pública integral, especializada y permanente. Debe implantarse una estrategia que promueva y genere conciencia entre la población y fomente la participación ciudadana en actividades relacionadas con la preservación y valorización de nuestro patrimonio cultural.

Dentro del derecho a la salud y seguridad social, resaltan los recortes presupuestarios de varios programas. Los más afectados fueron los del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Al finalizar marzo, las partidas con mayores modificaciones presupuestarias fueron las de apoyo a la promoción, prevención y atención a la salud reproductiva y emergencia de hospitalización y subprogramas como la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales.

Al término del primer semestre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentaba un recorte de Q375 millones. Hay que tomar en cuenta que eran meses críticos en el tema de salud, al presentarse la pandemia de la fiebre A H1N1 y los primeros casos de dengue hemorrágico en el interior del país. A finales de noviembre se contabilizaban 18 víctimas mortales y 1092 casos confirmados en el país.

El derecho a la vivienda adecuada, a pesar de contar con una estructura legal, política e institucional, no responde ni garantiza el cumplimiento efectivo de este derecho. Continuamente se ve afectado por el aumento de la pobreza y el crecimiento demográfico. Se evidencia primordialmente en zonas caracterizadas por la macrocefalia urbana, proliferando los asentamientos humanos, poniendo en riesgo a sus residentes por los desastres naturales.

Este derecho es constantemente vulnerado debido a la falta de aplicación por parte del Estado de una política integral para equilibrar la propiedad de la tierra, garantizando la seguridad jurídica, acceso a la tierra, protección contra los desalojos, así como la eficiente ejecución de los recursos gubernamentales destinados a subvencionar espacios habitacionales.

Con respecto al derecho a un ambiente sano por parte de los guatemaltecos, se viene asistiendo a un proceso de deterioro acelerado de los recursos

ambientales del país, agudizado no solo por la presión sobre la tierra, sino que también por los efectos del cambio climático.

La violación de los derechos ambientales está íntimamente vinculada a otros. Se han registrado problemas en cuanto a la deforestación acelerada, contaminación y falta de potabilización del agua, uso excesivo del agua para cultivos de exportación, incendios forestales, depredación de áreas protegidas, efectos ambientales negativos producidos por la explotación minera y petrolera, manejo inadecuado de desechos sólidos y la proliferación de basureros clandestinos.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos realizó una supervisión administrativa sobre la potabilidad del agua en el país con hallazgos negativos para la salud y el derecho a un ambiente sano de los habitantes del país.

Pese a que las áreas protegidas son prácticamente la única cubierta boscosa que queda en el país, los recursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) son insuficientes para garantizar su conservación y las amenazas que enfrentan son múltiples. Además, en Izabal ha surgido la tala inmoderada de las áreas boscosas, siendo utilizadas para la ganadería y cultivos de grandes extensiones.

La mayoría de ríos y lagos del país están contaminados, tanto por la falta de plantas de tratamiento como por la disposición inadecuada de los desechos sólidos y el uso de fertilizantes químicos. Uno de los casos más graves y emblemáticos ocurridos durante el año fue la contaminación y presencia de la cianobacteria en el lago de Atitlán, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas concretas para revertir el proceso.

Los fenómenos naturales no son necesariamente equivalentes a desastres, ya que en éstos interviene también la vulnerabilidad de una región o país. Guatemala, por su posición geográfica y topografía, está expuesta a terremotos, deslizamientos de tierra, huracanes, inundaciones y sequías. Por otro lado, la frecuencia de los desastres y daños colaterales forman parte de una tendencia mundial ocasionada por los efectos del cambio climático.

En Guatemala no se han aplicado políticas que reflejen una comprensión de la vulnerabilidad y que contengan medidas para corregirla. El ordenamiento territorial y los códigos de construcción siguen siendo inadecuados o no se aplican estrictamente en la mayoría de las áreas expuestas a amenazas naturales. El paradigma predominante para hacer frente a los desastres ha estado orientado hacia la elaboración de planes de reacción a situaciones de emergencia que inevitablemente se dirigen a los efectos de los fenómenos, y no a sus causas. Asimismo, durante la tarea de reconstrucción, en muchos casos no se han tomado medidas para reducir el riesgo futuro.

La crisis alimentaria en el Corredor Seco fue uno de los mayores desastres de origen natural del país en 2009. En otras partes del país se produjeron inundaciones y derrumbes por fuertes lluvias y condiciones generadas por el deterioro ambiental. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reportó 108 personas fallecidas durante el año debido a desastres naturales; sin embargo, el número de habitantes en riesgo excede los 100,000.

En lo que se refiere a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de los diferentes indicadores sociales, Guatemala se está alejando de las Metas del Milenio. Para alcanzarlas se requiere la implementación de políticas públicas en diferentes rubros y encaminarlas a lograr el crecimiento económico así como la redistribución del ingreso. Si se mantiene una tasa de crecimiento de la economía menor al 3%, juntamente con la ausencia de medidas de redistribución del ingreso, se mantienen las reducciones en el gasto social y la ineficacia en la ejecución del presupuesto del Estado, la brecha tenderá a profundizarse en los próximos años.

Finalmente, con respecto a los pueblos indígenas, a pesar de que varios de sus derechos se encuentran establecidos como garantías constitucionales, éstos son vulnerados, como el derecho a la salud y la educación; además, enfrentan una deficiente aplicación de las políticas lingüísticas, tanto en el sector judicial como en el uso de prácticas sensibles a la diversidad cultural en el sistema de administración de justicia.

Existen contradicciones y falta de flexibilidad en la Ley Electoral para garantizar la participación de las comunidades indígenas, tanto en el acceso a puestos de participación e incidencia como la falta de efectos judiciales de las consultas populares, especialmente en las relativas a la minería a cielo abierto.

En 2009 los pueblos indígenas enfrentaron diferentes situaciones que exponen su vulnerabilidad en diferentes aspectos, profundizando la exclusión social.

En Guatemala la estructura de la tenencia de la tierra se ha caracterizado históricamente por un alto grado de concentración. A esta desigualdad se han ido agregando otros procesos y situaciones que incrementan las contradicciones y conflictividad agrarias, el aumento de la pobreza y retroceso en los indicadores de los derechos económicos y sociales de la población.

La política agraria asumida por el Estado ha sido guiada por un sistema de dotación de tierras regulado por el mercado. Esto no ha traído consecuencias del todo positivas, sino que han aflorado nuevos problemas como el endeudamiento de las economías campesinas, la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, la reconcentración de la propiedad agraria.

La institucionalidad agraria ha sido rebasada por la magnitud y complejidad de la problemática a resolver. Aunado a la falta de políticas consistentes y eficaces de parte del Estado para promover el desarrollo rural integral, se agregan los efectos del cambio climático.

En este contexto, durante 2009 las organizaciones campesinas protagonizaron marchas y tomas de tramos carreteros, acompañadas de comunicados y planteamientos con demandas específicas. Se produjeron desalojos violentos y asesinatos de líderes campesinos. Las organizaciones han denunciado a cuerpos armados privados como principales responsables de estos hechos.

Como resultado hubo varias reuniones de alto nivel entre representantes campesinos y del Ejecutivo

y un proceso de diálogo que culminó con la formulación de una Política de Desarrollo Rural Integral, promulgada por el Organismo Ejecutivo. Sin embargo, el proceso de aprobación de la ley correspondiente quedó pendiente en el Congreso de la República.

Asimismo, se han dado pasos en torno al acceso a la información pública, no solo como datos relevantes de la administración, manejo y transparencia de fondos, sino en los hechos que han trascendido y configurado nuestra realidad en la historia reciente del país. La imperiosa necesidad de conocer la verdad y acabar con la impunidad ha dado resultados de carácter histórico.

Durante 2009 se implementó la Ley de Acceso a la Información Pública, lo cual representa un avance en lo referente al acceso y difusión del progreso científico, la ciencia y la cultura, ya que el objetivo de la misma es garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la ley. Lamentablemente no se ha cumplido con una parte fundamental de la ley.

La Procuraduría de Derechos Humanos ha realizado grandes esfuerzos por reorientar recursos que sustenten financieramente las actividades de las unidades encargadas de cumplir con el mandato que la ley le asigna como entidad reguladora.

Se observó un cumplimiento formal a la ley cuando se determinó que la mayoría de los sujetos evaluados hizo efectivo lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública al haber designado al servidor público, empleado u órgano interno que funge como Unidad de Información Pública; sin embargo, algunas municipalidades aún no la tienen en funciones; en estas no existe la divulgación de la información pública a través de los portales electrónicos de oficio y hay una notoria ausencia de Unidades de Información que atiendan y orienten a los interesados.

Entre los sectores de población especialmente vulnerados en sus derechos está el de la mujer, la niñez y adolescencia, de las personas con discapacidad y

retos especiales, del adulto mayor, de la población que vive con VIH-SIDA, de las minorías sexuales, de la población detenida o reclusa y de la población migrante y desarraigada.

Las mujeres guatemaltecas enfrentan grandes carencias y debilidades estructurales e históricas del país. Si bien las instituciones y las luchas de organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres han logrado avances importantes, su situación, lejos de mejorar se ha visto inmersa en espirales de violencia.

Según los datos recabados de 2003 a 2008, han perdido la vida 3,139 mujeres. En ese marco se lanzó la campaña latinoamericana de poner fin a la violencia contra las mujeres, inaugurada en Guatemala el 25 de noviembre de 2009 y que se hará extensiva hasta 2015, en el marco del cumplimiento de los objetivos del milenio para poder trabajar en erradicar un flagelo que impide el adelanto de las mujeres en las sociedades. El derecho de las mujeres a gozar de los servicios de salud debe valorarse y darse desde los criterios de calidad, calidez e integralidad.

El derecho a la educación de las mujeres no se limita a la educación primaria y secundaria. Debe estar enfocada a los cambios de paradigmas de la sociedad en su conjunto, tanto en el acceso como en la disponibilidad y gratuidad de la educación diversificada y universitaria, para propiciar condiciones de igualdad.

Las mujeres deben gozar de la misma oportunidad para acceder a puestos de trabajo que los hombres. Debe permitirles una vida digna y en condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, sociales, culturales, educativas, emocionales y espirituales.

En la ejecución de su mandato, el Procurador de los Derechos Humanos, registra avances en materia del derecho a elegir, así como de la conciencia desarrollada en el sector femenino sobre la necesidad de ejercer el derecho al sufragio y desempeñar un rol de progreso en la organización y participación de la vida nacional.

El 2009 finalizó en medio de la crisis económica, con incremento de la violencia generalizada, inseguridad

constante, elevados índices de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, explotación, tráfico y trata de menores, aumento del narcotráfico y mayor despliegue del crimen organizado.

En ese contexto la juventud se convierte en objeto vulnerable y en actor débil en el conflictivo conglomerado social. En este período se ha acrecentado la inserción y utilización de niños, niñas y adolescentes en pandillas o grupos denominados “maras”; encontrando en ellos alguna respuesta a sus necesidades afectivas, de poder, económicas, de aceptación y revalorización de ser sujetos de atención y comprensión.

En materia de derechos de la población infantil se pueden mencionar los avances registrados en torno a la la gratuidad de la educación y la disminución de la mortalidad infantil. En materia jurídica, se hizo efectiva la vigencia del Convenio de la Haya relativo a niñez y cooperación en materia de adopciones y la entrada en vigencia de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Sin embargo, en muchas ocasiones la vida de niños y niñas se ven expuestas a diversas situaciones.

La mortalidad infantil continúa cobrando vidas. La muerte de menores de cinco años se debe, en parte, a la falta de atención y de prevención que recibe la madre del neonato y niño, incidiendo en su calidad de vida. En algunas ocasiones los menores pierden la vida por falta de condiciones mínimas como: agua entubada, techo de lámina, piso de cemento y los requerimientos básicos de una ingesta de proteínas, vitaminas y calorías que permita a la madre amamantarlo en su primer año de vida.

La institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de supervisiones administrativas realizadas en 2009, verificó la necesidad de una nueva política educativa tendiente a superar la mala infraestructura de los centros de enseñanza a nivel nacional, la falta de equipo y mobiliario adecuado. A ello se suman las carencia de docentes, el permanente atraso en el desembolso del Ministerio de Educación para la refacción escolar, los utensilios de limpieza, la entrega tardía de la bolsa de útiles; la falta de previsión ante el incremento y sobrepoblación estudiantil, los abusos, el maltrato

y actos de discriminación por parte de personal de algunos centros educativos.

Con respecto a la situación de los derechos de las personas con discapacidad y retos especiales, la realidad verificada en 2009 no ha supuesto un cambio sustancial y significativo en los últimos años. A pesar de que Guatemala ha ratificado instrumentos internacionales y existe un marco normativo amplio para garantizar la protección de los derechos humanos, el Estado no ha sido congruente con implementar una estrategia que permita a la población con discapacidad ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.

La Procuraduría de los Derechos Humanos ha constatado los frecuentes despidos cuando una persona, desempeñando algún trabajo, adquiere alguna discapacidad (por enfermedad o por accidente). También son comunes los malos tratos de parte de empleadores, responsables de recursos humanos e incluso de los propios compañeros de trabajo que le asignan a las personas con discapacidad tareas inadecuadas para su condición física, sobrecarga laboral con jornadas de trabajo más largas y discriminación por su condición de discapacidad.

La situación de los adultos mayores es igual de preocupante. Durante 2009 se han dado múltiples formas de maltrato físico, psicológico y social. Hay una recurrencia en el descuido y abandono de las personas adultas mayores. También se verifican carencias institucionales puestas de manifiesto a través de políticas, planes y programas que privilegian el asistencialismo sobre el respeto a los derechos y la ausencia de aseguramiento de recursos primordiales para una vida digna, tales como la educación, salud, seguridad social, trabajo, protección, cultura y recreación.

Según la descripción de las denuncias, se infiere que los sujetos violadores, por acción u omisión, son el Estado y sus entidades gubernamentales y los actores sociales, que en muchos casos figuran como miembros de la propia familia. La poca capacidad para generar ingresos propios, la insuficiente cobertura de los programas de seguridad social, los

bajos montos de las pensiones de jubilación y otras limitaciones contribuyen a mantener las condiciones desfavorables de vida que ahora tiene la mayor parte de adultos mayores.

En el caso de las personas que viven con VIH-SIDA, a pesar de los esfuerzos interinstitucionales por promover la defensa de los derechos humanos, se continúa dando una serie de atropellos que van en contra de su dignidad y que violentan los derechos laborales, educativos y de acceso a los servicios de salud y de seguridad social de esa población.

Muchas violaciones no son denunciadas por los afectados debido a que continúan dentro del anonimato. Seguir con el proceso legal que les permita la reparación del daño causado, obliga en un momento dado a revelar que son portadores. La secretividad da paso a la intolerancia, haciéndolos vulnerables y objeto de una mayor discriminación por el estigma que sufren a nivel social.

La discriminación es una práctica presente en temas étnicos, económicos, de salud y de preferencia sexual, entre otros. Las acciones del Procurador de los Derechos Humanos han estado enfocadas en propiciar y mantener periódica y constantemente el acceso y abastecimiento de las pruebas de carga viral plasmática y recuento de linfocitos CD4, así como del medicamento y tratamiento para enfermedades derivadas del VIH-SIDA, en todas las clínicas y hospitales de atención integral que forman parte de la Comisión Multisectorial. A su vez, se han implementado acciones de monitoreo para prevenir y evitar el desabastecimiento de medicamentos en todas las clínicas y hospitales de atención integral para estas personas.

Las prácticas de discriminación también se reproducen en las personas que pertenecen a minorías sexuales. Son objeto de violencia, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios. Surge como consecuencia, entre otros, la pérdida del sentido de pertenencia a su comunidad y el ocultamiento por temor o como mecanismo de protección de su identidad. En muchos casos se ven forzados a vivir en la invisibilidad. Esta situación implica la limitación del acceso a la salud y el disfrute del derecho a la salud primaria y sexual, a la educación e incluso a mejores oportunidades de trabajo.

En relación con las acciones por parte del Estado concernientes al debido proceso, existen esfuerzos encaminados a su mejoramiento en las instancias encargadas de la administración de justicia. El funcionamiento de los juzgados de turno ha permitido que las personas sean consignadas en los plazos constitucionales y los recursos puedan ser evaluados en la temporalidad correspondiente, dando pie a las transformaciones necesarias que garanticen el pleno derecho de defensa y debido proceso.

A la fecha se han abierto cinco juzgados de turno en la capital, Villa Nueva, Escuintla, Mixco y recientemente en Sacatepéquez. Existe el proyecto de ampliar su cobertura a otros departamentos con altos índices de violencia. Asimismo, primordialmente en la capital, se ha implementado un mayor número de tribunales y centros de justicia en departamentos con gran criminalidad y juzgados móviles.

Otro avance lo constituye la creación de los tribunales de alto impacto con competencia ampliada que conocerán delitos graves tales como masacres, asesinatos y plagios. El problema que se enfrenta en la actualidad se refiere a la falta de infraestructura, instalaciones, seguridad para los juzgadores, vehículos, personal de apoyo y la carencia de un seguro de vida.

Además, dentro del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia se dio la inclusión de temas relativos a la infraestructura carcelaria, diseño e implementación de centros, el reglamento de la ley del régimen, realización del censo penitenciario, la inspección de cárceles, el impulso de un proceso de depuración del personal, implementación de salas o recintos ubicados en los centros penales para evitar gastos, extorsiones y posibles fugas, además de la colocación de antenas bloqueadoras de señales telefónicas.

Entre los casos conocidos por la Procuraduría de Derechos Humanos, los derechos que se violan con más frecuencia son la igualdad, particularmente en el caso de las personas de escasos recursos, cuya defensa se encuentra a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal, entidad que debe hacer frente a un gran volumen de trabajo de defensa pública y que en la mayoría de ocasiones supera sus recursos disponibles. También ha sido vulnerado el

derecho a la presunción de inocencia, pues se realizan traslados de personas procesadas a sitios o centros de cumplimiento, poniendo en riesgo su integridad.

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos presta especial atención a los derechos de la población migrante en puntos fronterizos, enfocándose en los derechos humanos vinculados con el fenómeno migratorio desde tres planos: el ámbito local, con respecto a los derechos de los migrantes en tránsito; el ámbito internacional, atendiendo la situación de migrantes guatemaltecos en el extranjero; y con respecto a la situación de las personas migrantes guatemaltecas que retornan luego de ser deportadas.

Es tarea prioritaria para el Magistrado de Conciencia, dentro del marco del respeto de los derechos humanos y la agilización de la gestión administrativa, la vigilancia de las acciones y omisiones en que incurrir el Estado de Guatemala y los funcionarios públicos. En sucesivos informes al honorable Congreso de la República, el Procurador ha expresado su preocupación por el grave deterioro de la seguridad pública, el derecho humano a la vida y la manera significativa en que interfiere en el ejercicio de los otros derechos fundamentales de la población.

El último capítulo detalla la información referente a la situación social y defensa de los derechos humanos. Se incluyen las variables sobre situación y ataques cometidos en contra de operadores de justicia, defensoras y defensores de derechos humanos ejemplificados por algunos casos ilustrativos, la situación de los derechos humanos ante mecanismos internacionales de monitoreo y supervisión. Finalmente se incluye la justicia transicional que ocupa el derecho a conocer la verdad en Guatemala.

Durante 2009 la sociedad guatemalteca enfrentó diversidad de conflictos prácticamente en todas las zonas del país, generados por situaciones que no han sido tratados de forma adecuada y en las que ha habido una intervención insuficiente de las autoridades responsables. Aunque en algunos espacios se ha desarrollado un diálogo entre los actores sociales y el gobierno y las partes involucradas, la lista de conflictos es numerosa y con tendencia a la agudización.

Al no atacar las causas y raíces de la conflictividad social, se crean condiciones propicias para la confrontación y se reduce la ya precaria gobernabilidad del país. La debilidad de la política de seguridad ciudadana aumenta la intensidad de la conflictividad, con un incremento de todas las tasas de homicidio y de delitos contra la integridad de la persona, como se pone de manifiesto en este informe.

Con respecto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, inclusive periodistas y operadores de justicia, 2009 se caracterizó por ataques, una aguda violencia por el ejercicio y defensa de sus labores, inseguridad e impunidad.

Las agresiones traslucen una situación que muestra un deterioro constante. La investigación criminal de los ataques a cargo del Ministerio Público no ha dado resultados alentadores. La investigación deficiente y la ausencia de castigo a los autores de los ataques y hostigamientos permanecen constantes. Esta situación se mantiene inmutable desde años anteriores; tal como fue constatado e informado por el Procurador de los Derechos Humanos en el informe de situación de 2008.

El 2009 terminó con 24 tipos de acciones mediante las cuales se agrede a defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en 13 temáticas. Las acciones identificadas se concentran en amenazas personales de muerte, mensajes de texto por teléfonos móviles, con papeles escritos, llamadas telefónicas o correos electrónicos. El control, seguimiento e intimidación se ha puesto de manifiesto a través de la puesta en marcha de las amenazas.

También se han identificado amenazas o presiones por parte de funcionarios públicos; así como mediante acciones legales que en algunos casos pueden convertirse en una criminalización de la defensa de los derechos humanos. Hubo casos donde se detectaron desalojos violentos, difamación, agresiones físicas y verbales, robos, extorsiones, allanamientos de sede o de vivienda y, en los casos más graves, ataques con arma de fuego y asesinatos. En otros casos, las amenazas también se hicieron extensivas hacia la familia de la defensora o defensor.

La información basada en denuncias a la Procuraduría de los Derechos Humanos, según información de

las áreas de recepción y calificación de denuncias de la Dirección de Procuración en la sede central, indica que se iniciaron expedientes de investigación en 81 casos por ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

La incidencia de los órganos internacionales del sistema regional interamericano o del sistema universal de las Naciones Unidas en la situación de los derechos humanos en Guatemala durante el 2009 ha sido relevante, no solo por parte de casos de los mecanismos de supervisión y control que tienen su sede al interno de las Naciones Unidas, Nueva York o Ginebra, sino también en otros casos a partir de la acción *in situ* de organismos que desempeñan su mandato en el país.

Es el caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se ha constituido en una nueva experiencia global en la forma de cooperación entre los Estados y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El acuerdo de creación estableció un mandato por dos años para la CICIG, el plazo fue prorrogado por el Congreso de la República a partir del 4 de septiembre de 2009.

El cumplimiento del mandato de la CICIG abordó la problemática de justicia en el país, reforzando a las entidades nacionales encargadas de la seguridad, persecución penal y aplicación de justicia, en temas como la implementación de mecanismos legales para la investigación penal, las escuchas telefónicas con autorización judicial; la posibilidad de declaraciones por medio de videoconferencias y la mejora del programa de protección de testigos y promoción de la acción legislativa.

Dos de los tratados que el Estado ratificó en 2009, uno en el tema de la discapacidad y el otro para la prevención de la tortura contemplan la creación de mecanismos nacionales de prevención de violaciones de los derechos humanos.

En lo que atañe a los mecanismos nacionales contenidos en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad, el gobierno designó al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADI). El Estado se encuentra pendiente de designar el mecanismo que funcionará como marco independiente para fomentar, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. En relación con el mecanismo nacional de prevención de la tortura, se inició un proceso interinstitucional en 2008 que ha continuado en 2009, con el resultado de la propuesta del proyecto de Ley para el establecimiento del mecanismo nacional de prevención de la tortura para ser presentado ante el honorable Congreso de la República en 2010.

Por su parte, la justicia transicional ha dado pasos importantes en la consolidación de la justicia en Guatemala; 2009 se caracteriza por ser un año de avances en varios casos históricos dentro del contexto de la justicia y procesos en tribunales que sentarán precedentes normativos e históricos en la aplicación de justicia, en particular aquellas con carácter vinculante por medidas emanadas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Las condenas y fallos históricos sobre desaparición forzada, ocurridas en la aldea Choatulum, municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, y la aldea El Jute, Chiquimula, son sentencias paradigmáticas en los casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.

Los fallos realizados por la Corte Suprema de Justicia en la investigación del crimen contra el periodista y político Jorge Carpio Nicolle y sus acompañantes, así como también los casos conocidos con el nombre de “niños de la calle (Villagrán Morales y otros)” y el de la “Panel Blanca”, representan hechos inéditos en la historia reciente del país porque se reconoce que Guatemala forma parte del sistema interamericano de derechos humanos y la jurisdicción que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano de justicia. Con esto, el sistema de justicia allana el camino para el cumplimiento de las sentencias emanadas por dicho órgano del sistema interamericano, y fortalece el Estado de Derecho en Guatemala.

Recomendaciones

Para superar los rezagos en la situación de los derechos humanos de 2009, el Procurador de los Derechos Humanos hace a los depositarios de los diferentes poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y toda entidad de carácter público de acuerdo con su mandato y atribuciones, las siguientes recomendaciones:

1. El cumplimiento de los compromisos suscritos alrededor del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, siendo éstos la oportunidad para reencauzar la institucionalidad y devolver al país la seguridad y la justicia perdidas; en particular, el desarrollo y ejecución de una política criminal de Estado que fortalezca a las instituciones responsables de accionar contra la delincuencia y que permita coherencia en la actuación.
2. El apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para la continuidad y fortalecimiento de sus actuaciones en la ejecución de su mandato.
3. El fortalecimiento del presupuesto a las instituciones con funciones estratégicas en la situación actual del país, como el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, dependencias del Organismo Judicial y las dedicadas a la ejecución del gasto social, dentro de esto, aumentar al 4% del PIB en los rubros de educación y salud.
4. La investigación y castigo del delito, proteger a la población frente a los elevados índices de corrupción y abusos de funcionarios públicos, así como celeridad en los procesos judiciales, como medidas generales de prevención efectiva de los linchamientos.
5. El fortalecimiento del ente rector en el Organismo Judicial, para la recopilación exhaustiva de las estadísticas para que se pueda conocer con exactitud la dimensión del fenómeno de la violencia intrafamiliar, para eliminar el subregistro existente en las cifras y, de esa manera, contar con una herramienta importante que contribuya a las decisiones necesarias para eliminar ese flagelo cuyas víctimas de mayor fragilidad son la niñez y las mujeres.
6. Sensibilizar a los operadores de justicia sobre la perspectiva de género para el adecuado tratamiento de los casos de femicidio y que de esa forma se facilite la aplicación de la ley en la investigación, juicio y condena de los presuntos responsables.
7. Para la eficaz aplicación y exitosos resultados de la Ley de Acceso a la Información Pública, como una oportunidad para progresar en lo referente al acceso y difusión de la ciencia y la cultura, así como en los procedimientos políticos de participación democrática, la fiscalización social y la transparencia, se hace necesario un mayor seguimiento y capacitación a las Municipalidades ya que éstas reflejan la mayor violación a los artículos de la mencionada Ley. Asimismo se hace necesaria la asignación de la partida financiera específica adicional en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información.
8. Ejecutar de manera eficaz la política pública y el plan para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, delito de lesa humanidad que se intensifica.
9. Eliminar o reducir a su mínima expresión las transferencias y los recortes presupuestarios con el fin de no afectar las acciones, políticas públicas y planes dedicados a los derechos e intereses de los segmentos especialmente vulnerables de la población, en los ámbitos del derecho a la salud y asistencia social, a la seguridad pública, a la alimentación, a la educación y a un medio ambiente sano.
10. Reformar la institucionalidad ejecutando la política de desarrollo agrario como ha sido consensuada, para hacer frente a la magnitud y complejidad de la problemática, disminuyendo las contradicciones y la conflictividad en esa área estratégica de la economía nacional.
11. El diseño y ejecución de una política eficaz para generar mayores fuentes de empleo y disminuir el daño causado a éste por la crisis económica que atraviesa el país.

12. El fortalecimiento estructural e institucional de los departamentos ubicados en el corredor seco de oriente, y en otras regiones de riesgo en el país, con el fin de disminuir y a la postre eliminar los indicadores sociales de la inseguridad alimentaria y nutricional relacionados con la pobreza y extrema pobreza.
13. Ampliar y fortalecer la política pública de cumplimiento del mandato constitucional sobre la educación gratuita de todos los niños y niñas en edad escolar. Garantizar los recursos para la existencia de escuelas y programas de enseñanza en cantidad suficiente, en todos los rincones del país, así como la infraestructura adecuada y disposición de docentes.
14. Cumplir con la responsabilidad de crear y ejecutar políticas integrales, dotación de recursos y también la coordinación y acuerdos con el sector privado de la construcción, para cubrir de manera satisfactoria la demanda existente de la vivienda adecuada.
15. Frente a la agudización de los efectos del cambio climático, disponer y ejecutar las políticas adecuadas y los recursos correspondientes para detener el deterioro acelerado de los recursos ambientales del país.
16. Para que la cultura de la paz pueda imponerse positivamente a la situación de intolerancia y violencia, es imprescindible invocar y ejecutar una reconstrucción y valorización de las relaciones entre individuos, la edificación de valores, comportamientos, actitudes y modos de relacionarse que favorezca la no violencia y el respeto a los derechos humanos en sus múltiples manifestaciones e interdependencias.
17. El estudio y aprobación de las diversas propuestas de ley relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran en el Congreso de la República a fin de reducir y eliminar su vulnerabilidad en los ámbitos del racismo, la desigualdad, la exclusión e inequidad social.
18. La elaboración de una estrategia de implementación adecuada y la ejecución correspondiente de la política pública de niñez y adolescencia 2002-2015, que redunde en el cambio de la situación caracterizada por altos niveles de mortalidad infantil por desnutrición, falta de oportunidades, inseguridad alimentaria, nutricional y sanitaria, violencia social y familiar.
19. Para promover la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad, fortalecer las políticas, la infraestructura adecuada y los recursos destinados a las instituciones encargadas de la elaboración, coordinación y ejecución de las políticas que tengan el fin de eliminar los prejuicios, rechazo e invisibilización de la cual es objeto dicho sector de población.
20. Garantizar la educación, derechos laborales, el acceso a los servicios de salud y de seguridad social a las personas que viven con el VIH/ SIDA.
21. La implementación adecuada del Decreto 25-2009, ley que reforma el Decreto 85-2005 del Congreso de la República, para dar una atención real, efectiva, integral, diferenciada, ordenada y coordinada en el sector de salud pública, a las personas adultas mayores en el país.
22. El Estado debe visibilizar e identificar las necesidades de la población que pertenecen a minorías sexuales y garantizar la eliminación de la violencia, discriminación, exclusión y prejuicios de los que este grupo poblacional actualmente es objeto.
23. Introducir y realizar las reformas necesarias con el fin de dar cumplimiento a los estándares que establece la normativa internacional y nacional en relación con los derechos de las personas migrantes y, de igual forma, velar por los intereses y derechos de los connacionales migrantes en el extranjero.
24. Realizar todos los esfuerzos, de manera suficiente y efectiva para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, investigando y castigando los delitos que signifiquen ataques y amenazas hacia las defensoras y defensores que trabajan en los diferentes ámbitos de promoción o protección de derechos humanos.

**Informe Anual Circunstanciado al honorable Congreso de la República de Guatemala,
presentado por el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado,
Procurador de los Derechos Humanos**

SEGUNDA PARTE
Memoria de Labores

Introducción

El Procurador de los Derechos Humanos rinde la presente memoria de labores de 2009 al Congreso de la República en cumplimiento de lo establecido en el artículo 274 de la Constitución Política de la República y el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos.

A partir de dicho marco normativo, el Magistrado de Conciencia realiza sus labores en consideración también de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Código Municipal, Ley general de descentralización, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, así como de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, leyes que le atañen directamente en la ejecución de su mandato.

Además, según el proceso de reforma, modernización y el desarrollo del marco legal guatemalteco, que ha asignado al Procurador de los Derechos Humanos nuevas atribuciones, por ejemplo aquellas contenidas en la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, Ley del programa de aporte económico para el adulto mayor sin cobertura, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala y la Ley de Acceso a la Información Pública.

Con la vigencia de esta última, a partir de abril de 2009, la institución del Procurador ha desarrollado acciones para cumplir con su responsabilidad de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y brindar asistencia técnica frente a resoluciones que afecten este

derecho. El artículo 44 de esa misma ley designa al Procurador como la autoridad reguladora con sus correspondientes atribuciones.

En este marco, a raíz de la vigencia de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, el Procurador conformó el Grupo de Trabajo para el abordaje interinstitucional en el que participan ocho defensorías, la Dirección de Auxiliaturas departamentales y la Dirección de Procuración para promover, fortalecer, ampliar y desarrollar las capacidades institucionales, identificar casos y visibilizar el tema.

La segunda fuente rectora de las labores de la institución es su planificación estratégica y operativa, la cual se basa en el documento de formulación de las líneas estratégicas de la institución del Procurador. En éste se definen los tres principios rectores permanentes: a) Acercar la institución del PDH a las y los habitantes; b) el centro de la atención institucional es la víctima; y c) la institución del Procurador de los Derechos Humanos debe cultivar su credibilidad, prestigio y autoridad moral como valores principales para cumplir su misión.

El mismo documento de formulación define también las áreas estratégicas de labor institucional:

- 1) Fortalecimiento y desarrollo institucional
- 2) Defensa y protección de los derechos humanos
- 3) Promoción y educación en derechos humanos
- 4) Supervisión de la administración pública
- 5) Fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil e instituciones del Estado
- 6) Promoción de la gobernabilidad democrática y consolidación de la paz

- 7) Fortalecimiento de las relaciones internacionales y de la cooperación
- 8) Derecho humano de acceso a la información pública.

En este contexto, el Plan Operativo Anual (POA) 2009 cuenta con una serie de objetivos estratégicos para cada una de las áreas antes referidas, que significaron tanto las actuaciones independientes de las distintas defensorías, direcciones, unidades y programas de la sede central como de las Auxiliaturas departamentales, municipales, regionales y móviles que conforman la institución como la coordinación entre éstas, como un medio para alcanzar los mandatos constitucionales relativos al actuar del Procurador de los Derechos Humanos.

Las metas y volúmenes consignados en el POA 2009 han sido revisadas, modificadas y adecuadas a las reducciones presupuestarias derivadas de la correspondiente disminución de los fondos asignados a la institución, sin por ello afectar la atención y protección de las víctimas, así como su labor de educación y promoción y demás definidas en los objetivos anteriores.

El presente informe refleja las labores desde la perspectiva de la prevención y de la respuesta inmediata a situaciones puntuales que afectan y vulneran los derechos humanos; también refleja los principales componentes que han caracterizado la situación nacional en el marco específico de los derechos humanos. A las condiciones históricas estructurales del país, que definen el quehacer del Estado y sus instituciones, su diseño y sus funciones, se suma el impacto en las condiciones sociales y económicas derivados de factores externos como la crisis financiera y económica que ha afectado las principales economías del mundo. Desde inicio de año se perfilaron sus efectos en el país y durante el mismo se fueron concretando en aspectos vinculados a repatriaciones, reducción de remesas, presión sobre el empleo, aumento de la actividad informal y disminución de la recaudación tributaria. También es de agregar el impacto de la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático y los desastres naturales relacionados con éstos.

Uno de los principales fenómenos que conllevó graves vulneraciones a los derechos humanos fue la

violencia, con sus distintas expresiones, que afectó a la totalidad de los departamentos de Guatemala. Ello significó una constante labor desde diversos ámbitos de actuación de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar la seguridad, la vida, la integridad y la dignidad de las personas afectadas. Al mismo tiempo, para constatar el cumplimiento de las normativas legales de reparación y aplicación de la justicia a las cuales el Estado y sus dependencias están obligados.

Estas condiciones han tenido impacto en los procesos migratorios que se incrementan a pesar de las medidas de blindaje de las fronteras de los países de destino, en particular los Estados Unidos.

La seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación son derechos de todos los guatemaltecos, subsanando sus necesidades nutricionales y sociales, condición fundamental para el logro del desarrollo integral de la persona y la sociedad en su conjunto. La crisis alimentaria de 2001 puso de manifiesto la necesidad ineludible de mejorar las condiciones para superar la inseguridad alimentaria y nutricional en que se encuentra la población guatemalteca. La crisis alimentaria de 2009 atribuida a condiciones derivadas de la sequía volvió a poner en evidencia que aún en situaciones de seguridad alimentaria, miles de guatemaltecos radicados en 4,059 comunidades en territorio nacional están en alto riesgo de padecer hambruna. El Procurador de los Derechos Humanos impulsó actividades en atención a la crisis y para cooperar de manera articulada con distintas instancias sociales y gubernamentales, a través de la creación del Frente contra el Hambre, en sus objetivos de lucha contra el hambre y la desnutrición, propiciando la realización de acciones coordinadas y complementarias para resolver la situación de emergencia y hacer sostenible la labor de erradicar de nuestro país ambos flagelos.

En términos de seguridad ciudadana, se dio seguimiento como parte del Grupo Garante al Acuerdo Nacional de Seguridad presentado a los tres poderes del Estado, y a la Hoja de Ruta que la institución del Procurador acompaña bajo reserva. Mientras las cifras oficiales y la percepción ciudadana reflejan un agravamiento de las condiciones que afectan

el derecho a la seguridad y a la vida, el G-4 emite opinión sobre las acciones institucionales orientadas a la creación de un sistema nacional de seguridad.

Éstos son los principales ámbitos en los cuales la institución del Procurador de los Derechos Humanos volcó sus esfuerzos, mismos que son detallados en las páginas siguientes; así también, se describen los procesos y actividades que, en continuidad a la integralidad de los derechos humanos implican un trabajo conjunto y coordinado de las distintas áreas de la institución, mismas que son presentadas de acuerdo con su caracterización funcional.

En el primer apartado reportan las Auxiliaturas departamentales, municipales, regionales y móviles,

cuya información permite establecer la realidad de cada región atendida, la cual es descrita tanto por datos cualitativos como cuantitativos. Al final de éste se incluyen datos estadísticos consolidados hasta noviembre de las violaciones a los derechos humanos conocidas en cada una de ellas. Las actividades de las defensorías y unidades especializadas en la atención de las poblaciones vulnerables específicas conforman el segundo apartado. El tercer apartado, denominado Administración Central, presenta de manera resumida el quehacer y las actividades emprendidas por las unidades cuya base de acción se encuentra en la sede central. Al final se incluyen los datos estadísticos de las violaciones denunciadas en las Auxiliaturas en diciembre.

Auxiliaturas

Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes
- Abusos contractuales – contratos leoninos
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación
- Maltrato infantil y juvenil

Acciones

- Otorgamiento en propiedad, por los dueños, de un área de terreno a campesinos de las comunidades de Cantutú y La Esperanza, del municipio de San Fernando Chahal.
- Mesa de diálogo en conflicto de otorgamiento de derecho de paso de carretera nacional entre San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz; y en conflicto entre las comunidades de Paraíso Privado y Santa María Samilha.
- Mediación en conflicto de la comunidad Cubilguitz y la entidad Desarrollos Agropecuarios del Norte por disputas labores y derechos sobre la tenencia de la tierra.
- Participación en mediación y sensibilización en las comunidades afectadas por el deslave del cerro Los Chorros en San Cristóbal Verapaz, así como supervisión de las acciones del COE departamental.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	51	4	55
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	38	1	39
Derechos Específicos	13	1	14
TOTAL	102	6	108
Acciones específicas			
Orientación	180	3	183
Prevención	146	13	159
Mediación	59	1	60
Exhibiciones personales	10		10
Intervención inmediata	15		15
TOTAL	410	17	423

Auxiliatura Departamental de Baja Verapaz

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Detención ilegal
- Mala atención en centro de salud
- Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera.
- Inseguridad alimentaria
- Maltrato infantil y juvenil
- Acoso sexual
- Detenido o recluso / Acciones que atentan contra su dignidad

Acciones

- Verificación de familias en riesgo a causa de la lluvia y pérdida de cosechas.
- Mesas de diálogo, mediación y resolución de conflictos: en disputa entre vecinos y la Municipalidad de San Miguel Chicaj por dilatoria en la derogación de impuestos; en problema limítrofe entre San Miguel Chicaj y San Gabriel Pantzuj, en conflicto social e intermunicipal provocado por alcaldía de Salamá por la falta de basurero municipal; en el rechazo intermunicipal de Granados, Cubulco y Rabinal en contra del INAB por autorización de aprovechamiento forestal en zona de recarga hídrica del cerro Tunkaj; en oposición intermunicipal y la sociedad civil ante proyectos mineros e hidroeléctricos en Purulhá, Rabinal, San Miguel Chicaj y Cubulco.
- Monitoreos en rastros municipales; acerca de cobros en escuelas públicas; por situación de la PNC; por brote de la gripe H1N1 en todo el departamento; a hospital (incidencia en la compra de nuevo equipo de lavandería); por el alza de pasaje en transporte extraurbano en la zona sur de Baja Verapaz.
- Doce talleres con Juntas Municipales de Protección de la Niñez.
- Participación y acompañamiento para incidir en la inclusión de la formación ciudadana en el pensum escolar, en la Comisión Departamental de Educación, adscrita al CODEDE.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	22		22
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	17		17
Derechos Específicos	11		11
TOTAL	50		50
Acciones específicas			
Orientación	44	3	47
Prevención	214	17	231
Mediación	36	3	39
Conciliación	25	2	27
Acompañamiento	1	1	2
Intervención inmediata	3	3	6
Exhibiciones personales	3		3
TOTAL	326	29	355

Auxiliatura Departamental de Chimaltenango

Temas de las denuncias

- Muerte o ejecución extralegal o arbitraria
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Restringir el derecho a ser informado: información negligente
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita
- Arrojar residuos a las aguas de los ríos, riachuelos, manantiales y lagos
- Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven

Acciones

- Integración de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el municipio de Patzún.
- Representación en las reuniones mensuales de los COMUDES de los municipios de Patzún y Tecpán.

- Trabajo de coordinación con la Red de Lucha Contra el VIH-SIDA y las ETS.
- Apoyo y asesoría para la elaboración de un reglamento de uso del agua potable de la comunidad Santa Isabel, Chimaltenango.
- Talleres con 185 líderes juveniles representantes de las aldeas, caseríos y parajes del municipio de San Martín Jilotepeque, para fortalecer su protagonismo a través del conocimiento y defensa de sus derechos.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	9	2	11
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	7		7
Derechos Específicos	1		1
TOTAL	17	2	19
Acciones específicas			
Orientación	78	8	86
Prevención	267	9	276
Mediación	45	4	49
Acompañamiento	2		2
Conciliación	7		7
Intervención inmediata	14	1	15
Seguimiento	10		10
TOTAL	423	22	445

Auxiliatura Departamental de Chiquimula

Temas de las denuncias

- Muerte violenta
- Trato cruel, inhumano o degradante
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Detención ilegal
- Omisión de brindar seguridad preventiva o personal
- Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación
- Insuficiente cobertura social a beneficiarios

Acciones

- Observaciones e intervenciones en conflicto de campesinos de Plataforma Agraria en Chiquimula, que obstaculizaron la Carretera Interamericana en San Esteban Chiquimula, por el incumplimiento de los deberes del Estado para con los pueblos indígenas. Y en las manifestaciones pacíficas de docentes ante falta de pago de salarios y prestaciones.
- Intervenciones y mediaciones: en retención del Concejo Municipal por trabajadores ediles por salarios atrasados; por límites territoriales en las comunidades Tisipe y Brasilar de Jocotán.
- Reuniones con la Mesa de Concertación de Chiquimula por alza de precios de la energía eléctrica y abuso de autoridad de DEORSA.
- Verificación constante de casos de muertes maternas en el departamento de Chiquimula: municipios de Jocotán, Camotán y Chiquimula.
- Conformación del Frente contra el Hambre en Chiquimula.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	17	1	18
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	19		19
TOTAL	36	1	37

Acciones específicas			
Orientación	68	2	70
Prevención	166	7	173
Mediación	2		2
Conciliación	1		1
Intervención inmediata	1		1
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	240	9	249

Auxiliatura Departamental de El Progreso

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Amenazas, coacción
- Detención ilegal
- Discontinuidad y lentitud procesal
- Hambruna
- Falta de atención o asistencia médica
- Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones
- Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza.

Acciones

- Conformación de la Junta Municipal de Protección de la Niñez y Adolescencia, en Morazán.
- Acompañamiento de verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en instancias del Estado, entre ellas: Ministerio de Gobernación, PNC, Ministerio de Educación, MSPAS, municipalidades.
- Problema de malnutrición: repunte de casos de niños y niñas menores de 15 años con problemas nutricionales, en especial los menores de cinco años.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	17	2	19
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	10	1	11
Derechos Específicos	5		5
TOTAL	32	3	35
Acciones específicas			
Orientación	82	7	89
Prevención	110	7	117
Mediación	5	2	7
Operativo	21		21
Acompañamiento	28	1	29
Conciliación	45	3	48
Intervención inmediata	42	1	43
Atención a la víctima	100	6	106
Exhibiciones personales	1		1
TOTAL	434	27	461

Auxiliatura Departamental de Escuintla

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial
- Corrupción
- Amenazas, coacción
- Detención ilegal
- Discontinuidad y lentitud procesal

- Denegación de la libertad social
- Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo
- Mala práctica médica
- Omisión de políticas de Estado en materia laboral
- Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Falta de pago de las prestaciones laborales
- Despido injusto
- Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria
- Inseguridad jurídica de la tenencia
- Insuficiente cobertura social a beneficiarios
- Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social
- Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera
- Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos
- Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos

Acciones

- Organización de la sala situacional de municipios de alto riesgo conforme al diagnóstico situacional realizado.
- Monitoreos sobre: desalojos, contaminación de ríos, basureros clandestinos, bloqueos o manifestaciones en carreteras, alza de los costos de la canasta básica familiar, inundaciones y desastres ocasionados por las intensas lluvias.
- Realización del mapeo de conflictividad para organizar las distintas mesas para tratar cada uno de los problemas y buscarles algún tipo de solución.
- Asesoramiento y vigilancia en la aplicación de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a las Municipalidades del departamento en la conformación y registro de los COCODES.
- Fortalecimiento de las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Juventud de Santa Lucía Cotzumalguapa, Puerto de San José, La Democracia y Tiquisate.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	26	2	28
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	68	2	70
Derechos Específicos	16		16
TOTAL	110	4	114
Acciones específicas			
Orientación	86	1	87
Prevención	429	28	457
Mediación	69	1	70
Intervención inmediata	144		144
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	730	30	760

Auxiliatura Departamental de Guatemala

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Amenazas, coacción
- Discontinuidad y lentitud procesal
- No permitir su defensa
- Restringir el derecho a ser informado: Información negligente
- Violación del derecho a la intimidad: violación al secreto de las comunicaciones
- Alzas inmoderadas de precios y tarifas
- Hambruna
- Falta de atención o asistencia médica
- Negación o falta de medicamentos
- Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones
- Despido ilegal o injusto
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación
- Negación de pensión por invalidez o sobrevivencia
- Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera
- Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas
- Deforestación



Acciones

- Se inició expediente por violación del derecho al ambiente sano, deforestación, contaminación visual y autorización de actividades industriales y comerciales ambientalmente peligrosas y destrucción del área boscosa en jurisdicción de Villa Nueva, contra el Estado de Guatemala, por autorización otorgada para la extracción de arena y otros minerales a las empresas El Carmen e INDACO, S.A.
- Monitoreos para verificar el estado de los diferentes servicios y unidades de los hospitales nacionales y las condiciones de los servicios de salud; se supervisó la existencia de insumos, personal, equipo e infraestructura.
- Monitoreo en los mercados Central, Colón, Sur II y La Parroquia, y en los hospitales nacionales para verificar los estándares de atención a niños con desnutrición y establecer la procedencia de los mismos, así como investigación en panaderías y molinos para harina de trigo, verificando el uso de bromato de potasio de acuerdo con el Reglamento Técnico Centroamericano.
- Inspecciones en hospitales regionales de Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Escuintla, Quetzaltenango, Petén, Izabal, Zacapa, y en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios de Guatemala. A partir de lo anterior se estableció que las unidades para la atención de las personas (personas adultas y menores de edad) que viven con VIH y SIDA no cuentan con los insumos básicos para brindar una atención integral (antirretrovirales necesarios, pruebas de carga viral plasmática y recuento de linfocitos CD4), suficiente personal médico, protocolos de atención integral, ni acciones orientadas al tratamiento de la población infantil, entre otros.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	231	20	251
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	693	37	730
Derechos Específicos	399	33	432
TOTAL	1,323	90	1,413
Acciones específicas			
Mediación	586	70	656
Orientación	649	23	672
Prevención		203	203
TOTAL	1,235	296	1,531

Auxiliatura Móvil I de Guatemala – Región I

Temas de las denuncias

- Muerte violenta
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- No presunción de inocencia
- Desabastecimiento
- Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)
- Vivienda inadecuada
- Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera
- Maltrato infantil y juvenil
- Violencia física o psicológica hacia la mujer
- Violencia sexual

Acciones

- Resolución de conflictos de transporte y agua potable.
- Desarrollo de la actividad “Valores para la Familia”, en coordinación con la Universidad de San Carlos de Guatemala, ejecutada en octubre, con los temas: proyección de la tolerancia, respeto, honestidad, autoestima, responsabilidad, empatía y dignidad.
- Actividad para la red social en contra de la violencia contra el menor de edad, la mujer y el adulto mayor.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	13		13
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	23		23
Derechos Específicos	10		10
TOTAL	46		46
Acciones específicas			
Orientación	45		45
Prevención	949	33	982
Mediación	13	1	14
Operativo	3		3
Acompañamiento	4		4
Conciliación	1		1
Atención a la víctima		35	35
Intervención inmediata	18	1	19
Exhibiciones personales	18		18
TOTAL	1,051	70	1,121

Auxiliatura Móvil de Guatemala – Región II

Temas de las denuncias

- Amenazas o intimidaciones
- Tratos o penas inhumanas o degradantes
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Amenazas, coacción
- Linchamientos
- Restricciones al derecho a la propiedad
- Alzas inmoderadas de precios y tarifas
- Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Inseguridad jurídica en la tenencia de vivienda
- Falta de reconocimiento familiar y de alimentos (alimentación, vestuario, vivienda)
- Violencia física o psicológica
- Ejecución de proyectos sin consulta y sin evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente.
- Desabastecimiento de productos

Acciones

- Informe de muertes violentas: afectando principalmente a los municipios de San Juan Sacatepéquez y San José Pínula, y los menos, San José del Golfo y Fraijanes.
- Ocho monitoreos en los centros de salud de los municipios que cubre esta Auxiliatura para verificar cantidad de Tamiflu para atender a personas infectadas con la gripe A H1N1.
- Se solicitó presencia de la institución del PDH, por parte de la alcaldesa municipal de San Juan Sacatepéquez, en las elecciones convocadas debido a que, por la división que existe entre los miembros de las comunidades de San Juan Sacatepéquez por la implementación de la planta de Cementos Progreso en el lugar, ya que no hay autoridades locales reconocidas por la comunidad.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	48	1	49
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	50		50
Derechos Específicos	40		40
TOTAL	138	1	139
Acciones específicas			
Orientación	155	9	164
Prevención	288	13	301
Operativo	3		3
Acompañamiento	16	4	20
Intervención inmediata	12		12
Exhibiciones personales	7		7
TOTAL	481	26	507

Auxiliatura Departamental de Huehuetenango

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Detención ilegal
- Restringir el derecho a ser informado: Información negligente
- Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)
- Falta de atención o asistencia médica
- Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones
- Omisión administrativa (comisiones paritarias)
- Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria
- No ser tratado con justicia
- Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas
- Discriminación cultural, social, económica, política
- No tomar en consideración el derecho indígena.

Acciones

- 24 intervenciones en incidencia en políticas públicas en diferentes conflictos.
- 71 actividades educativas de proyección social: “Abuelos por siempre”, en escuelas del municipio de Malacatancito; “Expresemos nuestros derechos”, con estudiantes de primaria de escuelas de Chiantla; “Proyecto Niño o Niña Procurador o Procuradora por un año”, capacitación, elección y visita al PDH en sede central.
- Capacitación a 32 miembros del COMUDE en el municipio de San Rafael Petzal sobre el tema “Acuerdos de Paz, Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria”.
- Continuidad en la verificación y monitoreo en las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, en relación con la atención a los casos presentados por la población.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	21	4	25
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	46	6	52
Derechos Específicos	4	2	8
TOTAL	71	12	83
Acciones específicas			
Orientación	30	4	34
Prevención	65	4	69
Intervención inmediata	60	4	64
Exhibiciones personales	1		1
TOTAL	156	12	168

Auxiliatura Móvil de Huehuetenango

Temas de las denuncias

- Restringir la libertad de expresión.
- Omisión de políticas de Estado en materia laboral
- Falta de pago de las prestaciones laborales
- Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven

Acciones

- Integración de la coordinadora interinstitucional del municipio de Colotenango, con la que se realizó el diagnóstico del plan estratégico de desarrollo municipal para el período 2009-2019.
- Doce monitoreos: Hospital Nacional de San Pedro Necta sobre la fiebre AH1N1 y sobre seguridad alimentaria y nutricional: Centros de Atención Permanente de San Gaspar Ixchil y de La Democracia sobre la fiebre AH1N1; 9 a Centros de Atención Permanente de San Ildefonso Ixtahuacán, Colotenango, San Gaspar Ixchil, Tectitán, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango, La Democracia, La Libertad, el Hospital Nacional de San Pedro Necta y el Centro de Atención Materno Infantil de Cuilco, sobre potabilidad del agua.

- Tres talleres de capacitación sobre auditoría social dirigido a los integrantes de la Comisión de Auditoría Social, líderes y lideresas de diferentes comunidades de Santiago Chimaltenango.
- Foro sobre derechos humanos dirigido a líderes, lideresas y vecinos de algunas de las comunidades de San Ildefonso Ixtahuacán, con el objeto de dar a conocer las funciones que realizan las personas que trabajan para la defensa y protección de los derechos humanos.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	2	4	6
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	3	6	9
Derechos Específicos	1	2	3
TOTAL	6	12	18
Acciones específicas			
Orientación	255		255
Prevención	52	4	56
Observación	13		13
Mediación	16		16
Acompañamiento	44		44
Intervención inmediata	39	4	43
Atención a la víctima	12		12
Exhibiciones personales	5		5
TOTAL	436	8	444

Auxiliatura Municipal de Nentón, Huehuetenango

Temas de las denuncias

- Corrupción
- Detención ilegal
- Falta de pago de las prestaciones laborales

Acciones

- Prevención de conflictos, propiciando la solución pacífica a través de mesas de diálogo, entre ellos el caso del conflicto entre el alcalde municipal de Jacaltenango y pobladores de la comunidad San Andrés Huista.
- Incidencia realizada a operadores de justicia, jefes de Centros de Salud, Educación y Seguridad, para lograr una sensibilización y reducir los niveles de violaciones de los derechos humanos, a través de reuniones, visitas y la participación en las redes de paternidad y maternidad responsable.
- Presencia y participación en reuniones de los COMUDES para fortalecer la Comisión de Derechos Humanos.
- Fiscalización de las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz para garantizar el acceso a la tierra y la certeza jurídica, el Programa Nacional de Resarcimiento y coordinación con instancias que atienden dicha problemática.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	5		5
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	2		2
Derechos Específicos			
TOTAL	7		7
Acciones específicas			
Orientación	39	1	40
Mediación		1	1
Prevención	4		4
Operativo	3		3
Acompañamiento	1		1
Intervención inmediata	21		21
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	70	2	72

Auxiliatura Departamental de Izabal

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes
- No ser juzgado en un proceso justo e imparcial
- Injusticia tributaria
- Desnutrición y sus consecuencias
- Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)
- Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones
- Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social
- Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos
- Maltrato infantil y juvenil
- Falta de políticas sociales que permitan el nacimiento y el desarrollo sano y armonioso
- Pueblos indígenas: falta de oportunidades de decidir su propio modelo de desarrollo

Acciones

- Coordinaciones con 80 redes infantiles, 80 juveniles, 80 de líderes adultos en los municipios de Morales y Los Amates para la observancia y protección de los derechos de la niñez y juventud.
- Monitoreo para verificar el cumplimiento de la gratuidad en las inscripciones, entrega de refacción escolar y dotación de útiles escolares en las escuelas primarias de Izabal.
- Monitoreo en los Centros de Salud de Izabal y las municipalidades respectivas para verificar cloración del agua para consumo humano.
- Monitoreo por los casos detectados de desnutrición infantil crónica y aguda en Izabal.
- Incidencia con Gobernación Departamental, Área de Salud, Migración, PNC, Municipalidad Puerto Barrios y propietarios de cantinas y prostíbulos, para tratar lo concerniente a la situación migratoria de las personas que laboran en los mismos, los requisitos para operar dichos centros y los supuestos abusos cometidos por la PNC durante los operativos realizados.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	19	3	22
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	27		27
Derechos Específicos	9	1	10
TOTAL	55	4	59
Acciones específicas			
Orientación	184	12	196
Prevención	547	20	567
Mediación	7	1	8
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	740	33	773

Auxiliatura Departamental de Jalapa

Temas de las denuncias

- Amenazas o intimidaciones
- Tratos o penas inhumanas o degradantes
- Falta de atención pública
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Corrupción
- Debido proceso: no permitir la utilización de todos los recursos
- Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de movimiento o circulación
- Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo
- Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)
- Despido ilegal o injusto
- Falta de pago de las prestaciones laborales
- Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación
- Insuficiente cobertura social a beneficiarios
- Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas

Acciones

- Intervención en el conflicto entre la sociedad civil y la comuna de San Carlos Alzatate por inversión millonaria para la construcción de obras municipales, que creó incertidumbre por el endeudamiento del municipio con una institución bancaria.
- Intervención ante la escasez de alimentos; se forma el Frente contra el Hambre, integrado por la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Universidad de San Carlos de Guatemala y la institución del PDH.
- Acompañamientos en manifestaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y otras como la Iglesia Católica y las Brigadas de Paz: manifestaciones en contra de la minería, en contra del aumento de la energía eléctrica.
- Seis monitoreos: uno al presupuesto adjudicado a la salud en este departamento, uno al Hospital Nacional de Jalapa, por la falta de insumos; uno en los centros de educación pública, por la gratuidad de la educación; uno por la seguridad alimentaria; uno sobre educación en derechos humanos y discriminación en los centros de educación básica; otro sobre capacidad para la atención de menores con desnutrición en el departamento.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	93	4	97
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	70	1	71
Derechos Específicos	21		21
TOTAL	184	5	189
Acciones específicas			
Orientación	212	9	221
Prevención	166	15	181
Observación	33	1	34
Mediación	6	2	8
Operativo	22	1	23
Intervención inmediata	38	2	40
TOTAL	477	30	507

Auxiliatura Departamental de Jutiapa

Temas de las denuncias

- Amenazas o intimidaciones
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial
- No ser juzgado en un proceso justo e imparcial
- Restringir el derecho a ser informado: Información negligente
- Alzas inmoderadas de precios y tarifas
- Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud
- Medidas inadecuadas para la rehabilitación
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Despido injusto
- Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita
- Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas

Acciones

- Mesas de resolución de conflictos del medio ambiente vinculadas a la problemática de las antenas de telecomunicaciones.
- Mesa de atención al consumidor y al usuario por problemática con DEORSA: múltiples abusos para con los usuarios del servicio.
- Reuniones del Frente contra el Hambre, además del trabajo de campo en municipios priorizados por casos de desnutrición infantil.
- Siete Festivales Expresemos Nuestros Derechos, en las escuelas: Las Uvas, Júcaro Grande, Las Tunas, El Aguacate, Panalvia, El Coco y El Barrial.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	96	8	104
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	57	2	59
Derechos Específicos	10		10
TOTAL	163	10	173
Acciones específicas			
Orientación	127	2	129
Prevención	78	2	80
Mediación	11	1	12
Intervención inmediata	18		18
Exhibiciones personales	1		1
TOTAL	235	5	240

Auxiliatura Departamental de Petén

Temas de las denuncias

- Muerte violenta
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Amenazas, coacción
- No ser juzgado en un proceso justo e imparcial
- Restringir el derecho a ser informado
- Alzas inmoderadas de precios y tarifas
- Negligencia medica
- Falta de pago de las prestaciones laborales
- Insuficiente cobertura social a beneficiarios

Acciones

- Observatorio en salud sexual y reproductiva por instituciones estatales y de sociedad civil.
- Seguimiento a la implementación de la Clínica de Atención Integral para VIH/SIDA en el Hospital de San Benito, Petén.
- Participación en las reuniones de la Mesa de Diálogo del Parque Nacional Laguna del Tigre.
- Seis monitoreos o supervisiones a instituciones estatales u organizaciones que prestan servicios sociales.
- Informes sobre mortalidad materna y muerte violenta de mujeres durante 2008 y los primeros cuatro meses de 2009 en Petén.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	41	3	44
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	26		26
Derechos Específicos	6		6
TOTAL	73	3	76
Acciones específicas			
Orientación	12		12
Prevención	106	8	114
Observación	119	1	120
Mediación	103	2	105
Operativo	11	2	13
Acompañamiento	202	34	236
Conciliación	1		1
Intervención inmediata	31	4	35
Exhibiciones personales	1		1
TOTAL	586	51	637

Auxiliatura Regional de Poptún, Petén

Temas de las denuncias

- Violación sexual
- Muerte o ejecución extralegal o arbitraria
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Detención arbitraria
- Alzas inmoderadas de precios y tarifas
- Negligencia médica
- Inexistente cobertura social

Acciones

- Se participa en el COCODE y el Comité de Operaciones de Emergencia ante problemas como tormentas, epidemias de AH1N1 y dengue.
- Se integró el Frente contra el Hambre.
- Verificación y acompañamiento en casos de intervención inmediata, especialmente los que implican el derecho a la salud y seguridad: servicios del Hospital y la PNC.
- Reuniones de evaluación del Proyecto y Verificación al Cambio de Juntas Directivas del Comité de Mujeres y reuniones de conciliación y mediación cuando ha existido algún conflicto. Las comunidades atendidas fueron San Antonio Chunacté, Arroyo El Delegado y Quebrada Seca.
- Vecinos de la aldea Santa Cruz, San Luis, cercanos a la Zona de Adyacencia entre Guatemala y Belice, denuncian su inconformidad por la construcción del Destacamento Militar de las Fuerzas de Defensa de Belice en la Zona de Adyacencia, argumentando que constituye un peligro o riesgo para los pobladores del lugar por posibles hechos de violencia. Como parte de la investigación se solicitó intervención de la Oficina de la Organización de Estados Americanos, en la Zona de Adyacencia.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	24		24
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	12		12
Derechos Específicos			
TOTAL	36		36
Acciones específicas			
Orientación	46	3	49
Prevención	3		3
Observación	8	2	10
Mediación	21	1	22
Conciliación	41		41
Intervención inmediata	16	1	17
TOTAL	135	7	142

Auxiliatura Municipal de El Naranjo, Petén

Temas de las denuncias

- Deforestación
- Maltrato infantil y juvenil
- Prostitución juvenil
- Muerte

Acciones

- Cuatro talleres de capacitación en materia de derechos humanos, cultura de paz, Ley de Protección Integral de la Niñez, derechos de la mujer, derechos del adulto mayor y derechos de los pueblos indígenas.
- Trece monitoreos: tres en puestos de salud y diez en centro de educación.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	10		10
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1		1
Derechos Específicos	4		4
TOTAL	15		15

Acciones específicas			
Orientación	20		20
Prevención	43	2	45
Observación	1		1
Mediación	88	3	91
Operativo	15		15
Acompañamiento	2		2
Conciliación	1		1
Intervención inmediata	2		2
TOTAL	172	5	177

Auxiliatura Departamental de Quetzaltenango

Temas de las denuncias

- Amenazas o intimidaciones
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial
- Desabastecimiento
- Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)
- Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado
- Omisión de políticas de Estado en materia laboral
- Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación
- Falta de insumos y material didáctico
- Insuficiente cobertura social de riesgos
- Falta de garantías procesales
- Discriminación racial
- No permitir o facilitar el aprendizaje y el ejercicio de la identidad cultural (formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización, traje indígena, idiomas o variantes dialectales, instituciones propias)

Acciones

- Monitoreo al Hospital Regional de Occidente, por emergencia de epidemia de gripe A H1N1, inspección en farmacia, emergencia y área de aislamiento, e implementación y existencia de mascarillas y medicamentos.
- Monitoreo a Hospital Regional de Occidente, Jefatura del Área de Salud y Hospital Rodolfo Robles sobre casos de desnutrición, comunidades en riesgo, planes de contingencia.
- Instauración del Frente contra el Hambre en Quetzaltenango, en coordinación con Arzobispado de Quetzaltenango, Confraternidad de Iglesias Evangélicas, Universidad de San Carlos y PDH; instauración de Mesa de Crisis Alimentaria en Gobernación Departamental
- Coordinación con la sociedad civil para respaldar la petición de promover el cumplimiento de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	46	1	47
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	41		41
Derechos Específicos	4	1	5
TOTAL	91	2	93
Acciones específicas			
Orientación	77	2	79
Prevención	335	11	346
Mediación	38	1	39
Operativo	18	1	19
Intervención inmediata	156	10	166
Exhibiciones personales	5		5
TOTAL	629	25	654

Auxiliatura Regional de Coatepeque, Quetzaltenango

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Amenazas, coacción
- Detención ilegal
- Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud
- Educación: falta de infraestructura
- Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas
- Discriminación cultural, social, económica, política

Acciones

- Incidencia e intervención en problemática y controversias entre la Municipalidad de Coatepeque y los comerciantes informales de dicha ciudad.
- Proceso de acercamiento, entendimiento y diálogo entre el alcalde municipal de Flores Costa Cuca y pobladores del lugar, por el cambio ilegal del nombre de dicho municipio.
- Rescate de niñez con alto grado de desnutrición en El Quetzal y La Reforma, San Marcos.
- Monitoreo en el Hospital Regional Juan José Ortega, Coatepeque, respecto del abastecimiento de medicamentos a Clínica de Atención a Pacientes con Enfermedades Infectocontagiosas, conocida como "Clínica 12".

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	23		23
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	14		14
Derechos Específicos	1		1
TOTAL	38		38
Acciones específicas			
Orientación	87	6	93
Prevención	127	2	129
Observación	25	5	30
Mediación	15	1	16
Intervención inmediata	34		34
Exhibiciones personales	8		8
TOTAL	296	14	310

Auxiliatura Departamental de Quiché

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Agua contaminada
- Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)
- Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera
- Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes

Acciones

- Investigación sobre situación de los derechos humanos para incidencia y negociación: 14 diálogos situacionales de los derechos humanos, 80 mapeos de conflictividad social.
- Monitoreos: a rastros municipales, por cloración de agua, a escuelas por refacción escolar, a instalaciones y personal de la PNC, por seguridad alimentaria, por atención y servicio al PNR, a Municipalidades en verificación de la Oficina de Libre Acceso a la Información, a Juzgados de Instancia Penal, Narcotráfico y Delitos.
- Dos jornadas médicas integrales en los municipios de San Antonio Ilotenango y Joyabaj, en coordinación con el Consejo de Protección a la Niñez y Adolescencia trabajadora del Quiché, el Área de Salud y el Ministerio de Cultura y Deportes.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	3		3
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	16		16
Derechos Específicos			
TOTAL	19		19
Acciones específicas			
Orientación	270	16	286
Prevención	74	8	82
Observación	9		9
Mediación	49	1	50
Operativo	63		63
Acompañamiento	132		132
Conciliación	11		11
Intervención inmediata	401	25	426
Atención a la víctima	1009		1009
TOTAL	2018	50	2068

Auxiliatura Municipal de Ixcán, Quiché

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Discontinuidad y lentitud procesal

Acciones

- Siete actividades con alcaldes comunitarios y miembros de los COCODE, relacionadas con sus derechos y obligaciones, realizadas en las siete microrregiones, atendiendo a 176 comunidades.
- Intervención relacionada con la detención de tres personas, entre ellos una mujer, sindicados de ser asaltantes, quienes fueron rescatados por la PNC de la población que pretendía lincharlos.
- Incidencia en las comisiones de COMRED, Comisión de la Mujer, Comisión Educativa, de Aplicación de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad Ciudadana, Foro de Tierra.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	2		2
Derechos Económicos, Sociales y Culturales			
Derechos Específicos			
TOTAL	2		2
Acciones específicas			
Orientación	26		26
Prevención	32	4	36
Mediación	166	6	172
Acompañamiento	2		2
Intervención inmediata	25	1	26
Exhibiciones personales	1		1
TOTAL	252	11	263

Auxiliatura Municipal de Santa María Nebaj, Quiché

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad/poder administrativo
- Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación
- Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud
- Inseguridad alimentaria

Acciones

- Monitoreos a salud, educación y de seguridad alimentaria.
- Ocho talleres de capacitación sobre medio ambiente, violencia intrafamiliar, aplicación de la Ley contra el Femicidio, violación de los derechos de la niñez, secuelas de la violencia y fortalecimiento de la organización comunitaria.
- Tres programas radiales y televisivos: dos sobre derechos humanos y uno enfocado a los derechos de los pueblos indígenas en Radio Ixil.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	2		2
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	5		5
Derechos Específicos	1		1
TOTAL	8		8
Acciones específicas			
Orientación	347	8	355
Prevención	26	2	28
Mediación	14	1	15
Acompañamiento	4		4
Conciliación	1		1
Intervención inmediata	5		5
Exhibiciones personales	1		1
TOTAL	398	11	409

Auxiliatura Departamental de Retalhuleu

Temas de las denuncias

- Trato cruel, inhumano o degradante
- Desigualdad jurídica
- Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes
- Ausencia de condiciones de salubridad
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Falta de oportunidades de participación en la toma de decisiones en situaciones reales
- Falta de servicios, materiales e infraestructura

Acciones

- Acompañamientos individuales y colectivos a DEOCSA, a municipalidades de San Sebastián, San Carlos, Champerico y Ministerio de Trabajo, a fin de evitar la violación de derechos humanos y restaurar el goce de los mismos.
- 42 alertas tempranas, coordinadas con sociedad civil, PNC, Gobernación Departamental y CONRED, en la prevención de conflictos.
- Dos verificaciones en el Hospital Nacional y el IGSS acerca del inventario de medicina para tratar enfermos con VIH/SIDA, y medicina general.
- 17 cabildos efectuados en la gestión de proyectos locales que viabilicen la gobernabilidad.
- Organización del Frente contra el Hambre en Retalhuleu.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	41	1	42
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	10		10
Derechos Específicos			
TOTAL	51	1	52
Acciones específicas			
Orientación	143		143
Prevención	209	9	218
Intervención inmediata	500	8	508
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	854	17	871

Auxiliatura Departamental de Sacatepéquez

Temas de las denuncias

- Secuestro
- Muerte violenta
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Limitar el derecho de acción o de petición
- Restringir la libertad de expresión: falta de acceso
- Libre determinación: barreras comerciales
- Mala práctica médica
- Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones
- Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria
- Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas
- Maltrato infantil y juvenil
- Trabajo infantil peligroso

Acciones

- Se reorganizaron las comisiones de la Red contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Niñez y Adolescencia de Sacatepéquez.
- Se incidió en la liberación de ocho personas que habían sido tomadas como rehenes por residentes de la aldea Santiago Zamora, San Antonio Aguas Calientes, que reclamaban la prestación y distribución eficiente del agua potable.
- Operativo en escuelas de preprimaria, primaria y diversificado de los municipios de Santa Lucía Milpas Altas y Jocotenango, en relación con la identidad indígena y la utilización del traje típico en los establecimientos educativos.
- Taller y diplomado sobre Acceso a la Información Pública, en el cual se trató sobre los antecedentes de la ley, su base constitucional y legal, y el fortalecimiento para la aplicación de la misma y la transparencia gubernamental y municipal.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	14		14
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	24	3	27
Derechos Específicos	47		47
TOTAL	85	3	88
Acciones específicas			
Orientación	159	5	164
Observación	5	1	6
Mediación	12		12
Operativo	17	2	19
Acompañamiento	27	1	28
Intervención inmediata	31	3	34
Verificación	11	1	12
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	264	13	277

Auxiliatura Municipal de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez

Temas de las denuncias

- La personalidad: derechos y obligaciones
- Agua contaminada
- Ausencia de condiciones de salubridad
- Falta de pago de las prestaciones laborales
- Incrementos de cuotas de estudio
- Vivienda: inseguridad jurídica de la tenencia
- Violencia intrafamiliar
- Abandono

Acciones

- Talleres de derechos humanos en distintos centros estudiantiles de Santa Lucía y Magdalena Milpas Altas.
- Reuniones solicitadas por el Puesto de Salud de Santa Lucía y Magdalena, en la cual se planteó la problemática que presentan las Municipalidades al no acatar las sugerencias que hacen los puestos de salud debido a la falta de cloración y contaminación de pozos y nacimientos de agua. Se realizaron cuatro monitoreos que comprobaron los hechos planteados.

- Charlas sobre derechos humanos solicitadas por los directores de las tres escuelas principales de Magdalena y Santa Lucía Milpas Altas.
- Participación de las doce escuelas en el Segundo Festival de la No Violencia, en teatro, canto y baile, organizado por esta Auxiliatura.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	1		1
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	11		11
Derechos Específicos	4		4
TOTAL	16		16
Acciones específicas			
Orientación	3		3
Prevención	2		2
Observación	6		6
Acompañamiento	4		4
Intervención inmediata	1		1
TOTAL	16		16

Auxiliatura Departamental de San Marcos

Temas de las denuncias

- Trato cruel, inhumano o degradante
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Insuficiente cobertura social a beneficiarios
- Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)

Acciones

- Participación en la Red de Paternidad y Maternidad Responsable.
- Taller sobre defensa legal indígena y principales problemas que afectan el comportamiento de la familia y la sociedad, organizado por CODISRA.
- Capacitaciones en las oficinas centrales de la institución referente a historia de conflictos y mapa de conflictividad social para encontrar los indicadores del incremento de la problemática social: a) contaminación ambiental; b) desastres; c) narcotráfico; d) falta de medicamentos; e) problemas de tierra; f) maltrato infantil; g) problemas de agua; h) transporte urbano y extraurbano; violencia intrafamiliar; i) violencia e inseguridad.
- Participación en caminatas contra la violencia, especialmente en rechazo a los secuestros y robos en todos los municipios de San Marcos.
- Acompañamiento a los abastecedores de carne bovina y porcina, verificando la contaminación del destace de las reses, en los municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, Comitancillo, San Rafael Pie de la Cuesta, Malacatán, Concepción Tutuapa y Tacaná.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	6		6
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	7		7
Derechos Específicos			
TOTAL	13		13
Acciones específicas			
Orientación	64		64
Prevención	77		77
Mediación	10		10
Operativo	45		45
Acompañamiento	351		351
Conciliación	8		8
Intervención inmediata	150	4	154
Atención a la víctima	351		351
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	1,058	4	1,062

Auxiliatura Departamental de Santa Rosa

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Detención ilegal
- Restringir el derecho a ser informado:
- Mala práctica médica
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Maltrato infantil y juvenil
- Adulto mayor: falta de acceso a la seguridad social
- Violencia física o psicológica
- Abusos deshonestos

Acciones

- 28 reuniones: seis con la Comisión Departamental de Medio Ambiente, seis con la Comisión de Prevención del SIDA, ocho con el Consejo Departamental de Desarrollo de Santa Rosa, cinco con Consejos Municipales de Desarrollo, una con la Coordinadora Departamental de CODRED sobre el Sistema de CONRED y principales amenazas, y dos con diferentes instituciones para tratar el tema de seguridad alimentaria.
- Incidencias por bloqueo de carretera en el kilómetro 65, por campesinos de la plataforma agraria de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa; y otro por el Sindicato de Salud.
- Seis visitas a la Cárcel de Máxima Seguridad El Boquerón, cinco para durante requisas realizadas y una por disturbios.
- Dos monitoreos en Barberena por la venta de bebidas alcohólicas cerca de establecimientos educativos.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	21		21
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	8		8
Derechos Específicos	7		7
TOTAL	36		36
Acciones específicas			
Orientación	221	12	233
Prevención	107	2	109
Mediación	3		3
Conciliación	5		5
Intervención inmediata	47	1	48
Atención a la víctima	1		1
Exhibiciones personales	3		3
TOTAL	387	15	402

Auxiliatura Municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa

Temas de las denuncias

- Falta de atención pública
- No ser juzgado en un proceso justo e imparcial
- Mala práctica médica

Acciones

- Acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil por costos del alumbrado público.
- Cuatro conferencias: Colegio Proyecto Iglesia de Dios, por aniversario de la convención de los derechos del niño; la Asociación Campesina Xinca Las Lomas; en la Escuela Departamental de Educación Física de Guazacapán, y durante la actividad con red de jóvenes del nivel regional, en coordinación con APROFAM.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	2		2
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1		1
Derechos Específicos			
TOTAL	3		3
Acciones específicas			
Orientación	40	7	47
Prevención	43	1	44
Observación	14	1	15
Mediación	6		6
Operativo	1		1
Intervención inmediata	15	2	17
TOTAL	119	11	130

Auxiliatura Departamental de Sololá

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Limitar el derecho de acción o de petición
- Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)
- Despedido ilegal o injusto
- Educación: falta de infraestructura
- Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligroso
- Discriminación racial

Acciones

- 15 monitoreos a distintas instituciones del Estado y municipalidades sobre: útiles y refacción escolar, calidad de la atención médica y tratamiento e intervenciones a pacientes en el Hospital Nacional, potabilidad del agua para el consumo humano, condiciones higiénico-sanitarias de los rastros municipales y seguridad alimentaria.
- Taller de capacitación sobre violaciones de las garantías constitucionales durante el conflicto armado interno, con líderes y lideresas, en coordinación con ASO-SEPRODI, en Santa Catarina Ixtahuacán.
- Conferencia sobre la Ley de Acceso a la Información, con miembros de la Asamblea Ordinaria del COMUDE de San Andrés Semetabaj.
- Acompañamiento para la revisión del Reglamento Interno para estudiantes de la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO), con la participación de autoridades educativas de la Dirección Departamental de Educación, coordinadores técnicos administrativos, autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de Santa Lucía Utatlán.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	51	4	55
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	11	1	12
Derechos Específicos	6	1	7
TOTAL	68	6	74
Acciones específicas			
Orientación	292	16	308
Prevención	157	7	164
Observación	38	3	41
Mediación	94	2	96
Operativo	19	2	21
Acompañamiento	218	7	225
Conciliación	35		35
Intervención inmediata	52	2	54
Atención a la víctima	129	3	132
Exhibiciones personales	2		2
TOTAL	1,036	42	1,078

Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlán, Sololá

Temas de las denuncias

- Tratos o penas inhumanas o degradantes
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Limitar el derecho de acción o de petición
- Debido proceso: no presumir inocencia
- Negación o falta de medicamentos
- Inexistente cobertura seguridad social
- Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos

Acciones

- Talleres sobre los derechos de los pueblos indígenas dirigidos a grupos organizados de sacerdotes mayas, curanderos, guías espirituales y ancianos de Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna, San Juan la Laguna y San Pablo la Laguna.
- Talleres relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia, dirigidos principalmente a padres de familia de la aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán.
- Monitoreo en los municipios de San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna y San Juan la Laguna para verificar la existencia de personas con discapacidad y de los centros estatales y de organizaciones no gubernamentales que atienden a este grupo.
- Verificación del cumplimiento del Acuerdo Ministerial, para garantizar la educación sea impartida de manera gratuita.

Denuncias	Enero-noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	18	1	19
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	10		10
Derechos Específicos			
TOTAL	28	1	29
Acciones específicas			
Orientación	62	5	67
Prevención	38	1	39
Mediación	34	1	35
Operativo	8		8
Acompañamiento	93	7	100
Intervención inmediata	3		3
Atención a la víctima	227	14	241
Exhibiciones personales	4		4
TOTAL	469	28	497

Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez

Temas de las denuncias

- Amenazas o intimidaciones
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Detención ilegal
- Linchamientos
- No ser juzgado en un proceso justo e imparcial
- No ser informado de sus derechos
- Fraude
- Alzas inmoderadas de precios y tarifas
- Ausencia de condiciones de salubridad
- Omisión de políticas de Estado en materia laboral
- Vivienda: inseguridad jurídica de la tenencia
- Inaccesibilidad a centros de empleo, servicios de salud, guarderías, escuela, etc.
- Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social
- Insuficiente cobertura social de riesgos
- No facilitar el disfrute del derecho a la recreación y al deporte
- Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos

Acciones

- Acompañamientos a manifestaciones pacíficas de diferentes organizaciones: a) magisterio; b) Frente de Lucha (CODECA y CONIC) ante el alza en las tarifas de energía eléctrica de DEOCSA; c) vecinos mazatecos denunciando los índices de violencia en el país y en el departamento, a raíz del secuestro y muerte de Carlos Saravia.

- Capacitaciones a líderes comunitarios de los municipios de Santo Tomás La Unión, Zunilito, Pueblo Nuevo, Santa Bárbara y San Juan Bautista.
- Concertaciones de mesas de diálogo para mediación de diferentes conflictos: entre transportistas de Mazatenango, Santo Domingo y Cuyotenango y auto-

ridades de la Dirección General de Transporte, por inconformidad en el alza de las tarifas de transporte urbano; y entre vendedores de la Avenida Lincoln y la municipalidad de Mazatenango, por su traslado a la nueva terminal de buses, entre otras.

Denuncias	Enero a noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	137	8	145
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	108	6	114
Derechos Específicos	11		11
TOTAL	256	14	270
Acciones específicas			
Orientación	186	5	191
Prevención	192	4	196
Observación	312	7	319
Mediación	19	2	21
Operativo	39		39
Acompañamiento	111	6	117
Conciliación	30	6	36
Intervención inmediata	1,239	64	1,303
Atención a la víctima	520	12	532
Exhibiciones personales	4		4
TOTAL	2,652	106	2,758

Auxiliatura Departamental de Totonicapán

Temas de las denuncias

- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes
- Desnutrición y sus consecuencias
- Negación de atención médica
- Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos

Acciones

- Participación en el COMUDE del municipio de Santa María Chiquimula para habilitar espacios de diálogo en incidencia en políticas públicas.
- Observación en el proceso de coordinación para la prevención de desastres en San Cristóbal.
- Verificación en Pasuc, Momostenango, sobre riesgo por posibles grietas en la tierra.
- Participación con el Consejo Municipal para la verificación y el manejo de los fondos públicos.
- Mediación en la manifestación pacífica suscitada en Cuatro Caminos, del municipio de San Cristóbal
- Totonicapán, acerca de los programas del INAB para su asignación presupuestaria.
- Diálogos con representantes de CONRED y SESAN sobre seguridad en caso de desastres naturales y seguridad alimentaria en el departamento.
- Monitoreos a las distintas instituciones del Estado (Red Hospitalaria, Comisaría No. 44 de la PNC, Unidad de Adscripción del IGSS) para verificar la dotación de medicamentos, atención a los pacientes, abusos de autoridad y el trato a los reclusos.

Denuncias	Enero a noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	5		5
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	9		9
Derechos Específicos			
TOTAL	14		14

Acciones específicas			
Orientación	167	1	168
Prevención	202	9	211
Observación	52	2	54
Mediación	281	27	308
Operativo	74	9	83
Acompañamiento	483	36	519
Atención a la víctima	650	39	689
Exhibiciones personales	1		1
TOTAL	1,910	123	2,033

Auxiliatura Departamental de Zacapa

Temas de las denuncias

- Amenazas o intimidaciones
- Discriminación – racismo
- Abuso de autoridad / poder administrativo
- Amenazas, coacción
- No ser juzgado en un proceso justo e imparcial
- Discontinuidad y lentitud procesal
- Restringir el derecho a ser informado: información negligente
- Inexistencia de medidas que permitan que los consumidores obtengan compensación
- Ausencia de condiciones de salubridad
- Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo
- Insuficiente cobertura social a beneficiarios
- Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas

Acciones

- Acompañamientos en las mesas de Resolución de Conflictos entre la Asociación para la Protección de la Montaña de Las Granadillas y autoridades de Gobierno; Resolución de Conflictos de Carácter Agrario y autoridades involucradas en el tema (SAA-PDH).
- Monitoreos y operativos a los centros y puestos de salud y el Hospital Regional de Zacapa en sus diferentes unidades de atención médica, para investigar los casos de gripe tipo AH1N1
- Mesas de diálogo en el conflicto generado por el bloqueo de la Asociación para la Protección de la Montaña de Las Granadillas.
- Instalación del Frente Departamental contra el Hambre (Alianza Multisectorial contra el Hambre, de Zacapa).
- Procesos de capacitación y formación al Movimiento Social y Popular de Zacapa; con estudiantes de básico de La Unión, enfocado en derechos humanos; con maestros de educación básica de La Unión, enfocado a la propuesta pedagógica “Educando para el nunca más”; y con trabajadores de la Fundación Defensores de la Naturaleza en Río Hondo.

Denuncias	Enero a noviembre	Diciembre	TOTAL
Expedientes de investigación			
Derechos Civiles y Políticos	39	1	40
Derechos Económicos, Sociales y Culturales	61	1	62
Derechos Específicos	10		10
TOTAL	110	2	112
Acciones específicas			
Orientación	137	1	138
Prevención	281	19	300
Observación	4		4
Mediación	1		1
Operativo	32		32
Acompañamiento	2		2
Conciliación	7		7
Intervención inmediata	17	1	18
Atención a la víctima	23		23
TOTAL	504	21	525

Defensorías

Defensoría de la mujer

Acciones emprendidas

- Se crearon ocho nuevas redes de paternidad y maternidad responsable.
- En coordinación con la Dirección de Defensorías y el Centro de Salud Reproductiva del Hospital San Juan de Dios se elaboró y presentó públicamente el “Protocolo para la prevención de la mortalidad materna”.
- Participación en la Red de Organizaciones e Instituciones del Estado y Sociedad Civil, que elaboró la propuesta de iniciativa de Ley que plantea reformar el Código de Trabajo y Previsión Social para incluir los derechos de las mujeres trabajadoras de casa particular.
- Se atendió a 227 mujeres brindándoles asesoría y orientación, quienes presentaron su denuncia en la Unidad de Recepción y Calificación de Denuncias de la institución.
- 76 acompañamientos a mujeres sobrevivientes de violencia a las diferentes instancias del Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública, lo cual se traduce en por lo menos siete sentencias.
- Se investigan los casos de las mujeres sobrevivientes de violencia cuando los procesos ante los órganos de justicia no dan una respuesta pronta y efectiva.
- Verificación y monitoreo a los servicios prestados por instituciones del Estado, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Preventivo de mujeres privadas de libertad.
- Monitoreo de la problemática de las mujeres afectadas por la trata de personas, en coordinación con la Asociación de Salud Integral (ASI), dando pie al taller para conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niños y Adolescentes.
- El tema de las trabajadoras de casa particular se coordina con la Asociación de las Trabajadoras de Casa Particular; se ha dado el seguimiento a violaciones laborales, y en algunos casos se han solucionado en coordinación con la Unidad de la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Supervisión en toda la República, a las instituciones operadoras de Justicia, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil y Ministerio Público, en coordinación con la Unidad Contra la Impunidad, para verificar el avance en el cumplimiento de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la aplicación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
- Supervisión en materia de avances en el acceso de la mujer a la justicia, con resultados positivos que permitirán fortalecer la atención del tema de la mujer.

Actividades

- 25 talleres de sensibilización sobre derechos de la mujer y violencia intrafamiliar y contra la mujer, género, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, paternidad y maternidad responsable, salud reproductiva, explotación sexual y trata de personas y participación política
- Tres conferencias de prensa: la primera dio a conocer el protocolo de atención que plantea la reducción de la muerte materna; la segunda, en coordinación con la Defensoría de Pueblos Indígenas, para denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres de las maquilas, juntamente con la Defensoría del Trabajador; y la última, para conmemorar el Día internacional de la explotación sexual y trata de personas. Se tuvo cobertura de trece medios escritos, televisivos y radiales. Se participó en el programa de 60 minutos en radio Sonora, para abordar el mismo tema, alternando con la Asociación de Salud Integral y UNICEF.
- En el marco del cumplimiento del convenio PDH-Ministerio Público, se elaboró un protocolo que permitirá que la institución monitoree y verifique el cumplimiento del instrumento de apoyo a las víctimas de violencia

sexual; en el proceso participan no sólo las instituciones firmantes, sino también los hospitales nacionales, San Juan de Dios y Roosevelt, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

- Acompañamiento de varios procesos en los juzgados de justicia, entre éstos, uno donde el victimario es un policía sentenciado a 17 años; otro en el proceso en el cual se aplica la primera sentencia sobre violencia contra la mujer. Con las acciones de la Defem se logró que en uno de los casos que se ha acompañado desde el 2007, se aprobara apertura a debate para 2010.
- Supervisión a las instituciones operadoras de justicia, Organismo Judicial, PNC y Ministerio Público, en coordinación con la Unidad Contra la Impunidad, Control Administrativo y las Auxiliaturas Departamentales para verificar el avance en el cumplimiento de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la aplicación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.
- Participación y coordinación con la Comisión Multisectorial, para la vida y la seguridad de

las mujeres, que funciona en el Ministerio de Gobernación, con la participación de la institucionalidad de la mujer, la sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

- Se ha participado en la ejecución del convenio firmado entre PDH y CONAPREVI, que genera acciones conjuntas para la prevención de la violencia contra la mujer.
- Elaboración del informe sobre indicadores de violencia contra la mujer, como parte del requerimiento de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
- Participación en la Comisión Interinstitucional que tiene como objetivo institucionalizar las Oficinas Municipales de la Mujer, al incorporar estas instancias al Código Municipal; a la fecha se han organizado 241 oficinas.
- Se planteó, junto con las instituciones del Estado, la reforma a la Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la cual reforma el artículo 264 del Código Procesal Penal y el artículo 7 de esta ley.

Defensoría de la Niñez y Juventud

Acciones emprendidas

- En el tema de denuncias, la Defensoría ha trasladado 36 a la Dirección de Procuración, ha realizado 47 medidas urgentes e intervenido en 47 mediaciones, a fin de no acudir a los juzgados de menores.
- Dentro de la planificación estratégica que la institución establece para este año, se han apoyado y coordinado 52 monitoreos institucionales de impacto y estratégicos; se han articulado 162 actividades de diverso tipo con instancias de la PDH, desde el apoyo a todas las defensorías y unidades en las semanas de sensibilización, actividades de tipo educativo de incidencia, etcétera.
- Acompañamiento a redes contra el maltrato y la explotación sexual, a los foros de niñez en situación de calle y por explotación laboral infantil.
- 57 acompañamientos, 45 accesorias, seguimiento de 36 casos específicos, 40 monitoreos de de-

defensorías especializadas en temas de impacto, 63 orientaciones, 34 medidas legales y 183 articulaciones con organizaciones sociales. Éstas se dan en su mayoría por solicitud o invitación de acompañamiento a la institución del PDH y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

- Incidencia en medios de comunicación: la Defensoría no sólo se ha convertido en un espacio que facilita el flujo de información, sino que también es un centro que por el monitoreo de medios de comunicación ha logrado posicionarse en el escenario nacional a través de su proyección en los medios escritos, radiales y televisivos.
- A la fecha se han otorgado 107 entrevistas con medios de comunicación. Con un promedio de 3 a 4 notas semanales con el tema de niñez y juventud, destacando los temas de violencia, adopciones, maltrato infantil, desnutrición y sobre la situación de los derechos del niño.

- Incidencia en medios de comunicación: la Defensoría no sólo se ha convertido en un espacio que facilita el flujo de información, sino que también es un centro que por el monitoreo

de medios de comunicación ha logrado posicionarse en el escenario nacional a través de su proyección en los medios escritos, radiales y televisivos.

Logros

- Orientaciones telefónicas, traslado de denuncias a la Dirección de Procuración, entrega de material de apoyo a las Juntas Municipales de Protección, reuniones regionales de coordinación y capacitación, invitaciones a capacitaciones y reuniones de trabajo.
- Se ha participado de forma directa e indirecta en capacitaciones de la Ley de Protección Integral de la Niñez o se ha asistido a diversas capa-

citaciones de temas en general vinculados a la problemática de la niñez y adolescencia.

- Se han fortalecido los lazos de coordinación coyuntural con diversas expresiones de la sociedad civil, mediante actividades de incidencia política y legislativa entre la Defensoría y el movimiento por los derechos de la niñez en general.

Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante

La Defensoría considera como el logro más importante la conformación del primer comité de deportados de los EUA en Guatemala, denominado Comité Pro-Mejoramiento de Vida de los deportados de Estados Unidos originarios de Chimaltenango y Sacatepéquez, ubicado en la aldea San José Calderas, del municipio de San Andrés Itzapa, de Chimaltenango, el cual brinda orientación

y apoyo en las diferentes solicitudes ante instancias del Estado, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acciones emprendidas

- Se realizaron ocho acompañamientos en diversos casos: a una menor de edad que a partir de la redada masiva de Potsville, el 12 de mayo de 2008, se vio obligada a regresar a Guatemala; a miembros del Comité Pro Mejoramiento de Vida de los Deportados de Estados Unidos, originarios de Chimaltenango y Sacatepéquez al Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala; a estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala quienes, dirigidos por su catedrático, entregaron víveres y levantaron información sobre la situación de la comunidad de San José Calderas, y a los deportados de los EUA con el objetivo de apoyarlos; a la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) a la Pastoral de Movilidad Humana, al Centro de Desarrollo Municipal y Comunitario (CEDMUC), a familiares de migrantes del municipio de Morazán y de

Quetzaltenango, al “plantón” que se hizo frente a la Embajada de los EUA un día antes de la toma de posesión del nuevo Presidente de ese país. Las organizaciones entregaron una carta donde se pide el cese de las deportaciones y la aprobación de una Ley Migratoria Integral.

- Once monitoreos al albergue de la Dirección General de Migración, con 59 entrevistas a migrantes de diferentes nacionalidades interceptados en territorio nacional y que, por carecer de documentos o permisos de trabajo, son llevados al albergue para ser deportados. Estos monitoreos se efectúan con el fin de proteger los derechos humanos de los migrantes y verificar las condiciones del lugar.
- Cinco monitoreos en el Aeropuerto Internacional La Aurora con el fin de verificar las instalaciones, espacios para personas que no ingresan a territorio guatemalteco, para deter-

minar si hubo violación de derechos humanos de los detenidos y para realizar entrevistas a las personas a quienes no se les permitió el ingreso al país y que están pendientes de su repatriación.

- De los 39 casos que la Defensoría recibió, se aperturaron los siguientes expedientes: ORD. GUA.421-2009/DE, PREV.EIO.GUA.740-2009/US, EIO.GUA.1014-2009/DE, EIO. GUA.1365-2009/US, ORD.GUA.1153-2009/DE, PREV.EIO.GUA.6774-08/US, EIO. GUA.1230-2009/DE, EIO.GUA.2652-2009/US, ORD.GUA.6380-2009/DE. De los 39 casos, 16 están concluidos.
- Cuatro talleres regionales dirigidos a auxiliares y oficiales de Defensoría de 21 Auxiliaturas Departamentales, 5 Móviles, 4 Municipales y 2 Regionales, así como a representantes de la sociedad civil, en los que se abordó el tema de “Migración y su nexa con la trata de personas” y la campaña “Tus derechos viajan contigo”.
- Se realizaron tres talleres con oficiales y cuadros medios de la Policía Nacional Civil y tres con estudiantes de la Escuela de la Policía, sobre los derechos de los migrantes y la campaña “Tus derechos viajan contigo”.
- Se participó durante todo el año en las asambleas ordinarias de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala. Asimismo, se han coordinado acciones de denuncia, de promoción e incidencia legislativa.
- Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el año se coordinó con la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios para la investigación de denuncias presentadas en la Defensoría y en los monitoreos a la Fuerza Aérea Guatemalteca. También, se coordinaron las actividades del seminario-taller “El voto en el extranjero”, organizado por la institución del PDH.
- Consulados de Centroamérica, Colombia, Ecuador y Guatemala en Atlanta, EUA. Durante el año se tuvo comunicación constante con personal de los consulados señalados, el cual ha proporcionado información de casos y ha facilitado la documentación de los migrantes que la solicitan por intermedio de la Defensoría.
- Dirección General de Migración, Se realizaron dos reuniones, una con cada director-interventor de los dos que tuvo este año esa institución, abordando los temas de recepción y atención a migrantes. Al nuevo interventor se le entregó un oficio sobre algunas de las violaciones que han sufrido los migrantes asegurados en el albergue, como abuso de autoridad y maltrato.
- Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil. Se sostuvieron reuniones de coordinación en las cuales solicitaron a la Defensoría capacitar a oficiales y cuadros medios, así como a estudiantes de la Academia de la PNC. Asimismo, se coordinó la recepción de denuncias en contra de elementos de esa institución.
- En coordinación con la MENAMIG, a comienzos de año se hizo cabildeo en el Congreso de la República para dar a conocer la propuesta de reformas a la Ley de Migración. A mediados de año se presentó dicho proyecto a la Comisión del Migrante del Congreso. Esta Comisión recibió tres propuestas de reformas, de MENAMIG, la Universidad Rafael Landívar y la Dirección General de Migración. Para buscar consenso y generar una sola propuesta, la Comisión del Migrante realizó tres seminarios, durante los cuales se trabajaron las diferentes posturas. La Comisión se comprometió a llevar la propuesta a primera lectura antes de finalizar el año.

Defensoría de las Personas con Discapacidad

Acciones emprendidas

- Tres supervisiones administrativas: al Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn, al Hospital Nacional de Salud Mental y al Hospital de Rehabilitación del IGSS. Los tres operativos fueron planificados y ejecutados en coordinación con la Unidad de Supervisión Administrativa, siguiendo el procedimiento aprobado y establecido en la guía para la ejecución de operativos de supervisión administrativa. Los procesos incluyeron la elaboración de planes de supervisión, de instrumentos de recolección de información, de planes de los operativos y de informes preliminares y finales de supervisión.
- De la supervisión realizada al Hospital Nacional de Salud Mental hubo hallazgos importantes que indican la posibilidad de graves violaciones de los derechos de los pacientes internos en él. Como seguimiento, se han aperturado dos expedientes de competencia: (1) por la existencia de locales utilizados como salas de aislamiento para pacientes en estados de crisis de agresividad, los cuales no llenan requerimientos mínimos de higiene, seguridad, personal ni dignidad, atentando contra la integridad física y mental, e incluso la vida de quienes son internados; y (2) el internamiento indefinido de pacientes con medidas de seguridad, pese a que han sido dados de alta médica. Los dos casos han generado la necesidad de realizar monitoreos de seguimiento, tanto para verificar las situaciones mencionadas como para dialogar con las autoridades del hospital.
- Monitoreo al Transmetro, en coordinación con representantes de las organizaciones de personas con discapacidad y un asesor técnico experto en accesibilidad a los espacios físicos y a los medios de transporte, con el objetivo de verificar los avances en el cumplimiento del Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, en su Capítulo VII, referido a la accesibilidad al espacio físico y los medios de transporte, y en la sentencia emitida por la Sala Tercera de Apelaciones a favor del amparo interpuesto por organizaciones de personas con discapacidad, que ordena la adaptación de todo el sistema del Transmetro, presente y a futuro, a modo de garantizar la accesibilidad a todas las personas con discapacidad y con movilidad reducida.
- Se coordinaron acciones de promoción con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el CONADI. En particular, se realizaron actividades de promoción y capacitación sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
- Bajo la coordinación de la Dirección de Defensorías, agosto se constituyó en el mes institucional dedicado a los derechos de las personas con discapacidad. La Defensoría distribuyó material promocional y de capacitación, incluyendo manuales para promotores de derechos de las personas con discapacidad, a todas las Auxiliaturas del PDH.
- La Defensoría ha sido invitada a varios eventos internacionales sobre derechos de personas con discapacidad, en donde se ha asistido como conferencistas o ponentes (Encuentro de Organizaciones Beneficiarias del *Disability Rights Fund* en Perú, XII Foro Interamericano de Alcaldes, II Conferencia de Estados parte a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, II Foro Centroamericano sobre VIH/SIDA y discapacidad, foro internacional “El quehacer de la discapacidad visual y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”).
- Iniciativa de ley No. 3932 relativa a la oficialización de la lengua de señas guatemaltecas.
- Acompañamiento a organizaciones de personas con discapacidad en el seguimiento de la implementación de las nuevas rutas del Transmetro. Tanto el monitoreo realizado a este sistema de transporte como otras acciones se han desarrollado en coordinación con las organizaciones dentro de la alianza de la Comisión Política de Accesibilidad al Transmetro y otros Espacios Físicos (CPAT).



Cumplimiento de atribuciones del PDH según la ley

- Por disposiciones del Decreto Legislativo No. 135-96, artículo 24, el PDH integra el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI). en coordinación con CONADI, se han realizado capacitaciones en derechos humanos y sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; foros y el II Congreso Nacional del CONADI titulado “Desafíos para el cumplimiento de la

CDPD”. La Comisión de Políticas e Incidencia también coordina acciones de incidencia política, y como uno de sus resultados se está considerando la integración del CONADI como parte de la Comisión de Alto Nivel de Derechos Humanos que coordina el Viceministro de Relaciones Exteriores, y donde también participa la PDH.

Defensoría de los Pueblos Indígenas

Acciones emprendidas

- Asesoría legal, acompañamientos y diligenciamiento a 79 casos de vulneración de diferentes derechos fundamentales a los indígenas, quienes por su condición son objeto de trato desigual, retardo en la atención, engaños y trato despectivo; lo que demanda una mejor conciencia social y medidas administrativas efectivas para contrarrestar este tipo de situación.
- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se transmitieron spots publicitarios en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché y la ciudad capital, así como televisión Maya, Radio Universidad y el canal de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Se atendió a 8,258 personas mediante los procesos más extendidos: seminarios, talleres, foros, congresos, a través de exposiciones y presentaciones de la Defensoría, en coordinación con otras instituciones.
- Se capacitó a un aproximado de 11 mil personas, en forma directa e indirectamente, desde las Auxiliaturas Departamentales. Entre los principales temas abordados se citan: racismo y discriminación racial, epigrafía maya, Acuerdo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley de Idiomas Nacionales, sistema de protección de sitios sagrados, significado del 13 B’aqtun, alcances de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ejercicio de la autoridad indígena, discusión sobre el proyecto de Ley sobre Jurisdicción Indígena del Congreso de la República, derecho indígena como sistema jurídico, derechos de los pueblos indígenas, y derechos de la mujer indígena, avances y desafíos.

Defensoría del Adulto Mayor

Logros

- La institución del PDH, a través de la Defensoría del Adulto Mayor, coordinó con el Ministerio de Educación para que el programa “Abuelos y Abuelas por Siempre” se implementara dentro del área de Formación Ciudadana del Currículo Nacional Base, en los niveles de preprimaria y primaria, para lo cual se estableció en la agenda escolar, en julio, la Semana de Abuelas y Abuelos por Siempre, en los centros educativos públicos y privados de toda la República. El Congreso de la República, mediante el Decreto 25-2009, declaró el 15 de noviembre Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Actividades

- Diez conversatorios de relaciones intergeneracionales, con el objetivo de sensibilizar a adolescentes y jóvenes de nivel básico y diversificado, en centros educativos públicos y privados en el área metropolitana, contando con la participación de 1,605 estudiantes.
- Capacitación y sensibilización a directores y personal que labora en hogares de atención para adultos mayores de toda la República, en coordinación con PRONAM.
- Dos capacitaciones en EPS, dirigidas a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social y de Psicología de la Universidad de San Carlos. Información sobre los derechos del adulto mayor y mecanismos de protección a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar.
- Se concedieron entrevistas a los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, como *Nuestro Diario*, *La Hora*, *Siglo XXI*, *El Periódico*, *Prensa Libre*, *Diario de Centro América*, Emisoras Unidas, Radio Universidad y Noticiero Maya Cable de Cobán, programa de la Escuela de Trabajo Social en la Radio Universidad, Tele Centro 13, Telediarío, Guatevisión; así como participación en programa de televisión del canal 84.
- Se solicitó a la Unidad de Supervisión Hospitalaria de la institución del PDH el apoyo para atender cuatro casos de personas adultas mayores que se encontraban recluidas en el IGSS y el Hospital General San Juan de Dios, con el fin de que en dichos centros se garantizara el respeto a sus derechos humanos.
- A las Auxiliaturas Departamentales de Santa Rosa, Jalapa, Quetzaltenango, Izabal y Chimaltenango se remitieron denuncias y se solicitó apoyo para solicitar partidas de nacimiento de personas adultas mayores que por impedimentos físicos no podían hacer el trámite respectivo.
- Requerimiento de información sobre 33 expedientes de adultos mayores ante el Programa de Aporte Económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de conocer el estado de los mismos, y así poder brindar una mejor orientación sobre el proceso en el que se encontraban.
- Se gestionó ante EMETRA para que se incluya en la capacitación de pilotos de taxis y de transporte urbano la temática de derechos humanos de las personas adultas mayores.
- Se planteó ante EMETRA que en la tarjeta prepago que está por implementarse para el transporte urbano se incluya la gratuidad del pasaje para adultos mayores, tal como lo establece la Ley.

Procuración y control administrativo

- Monitoreo al hogar San Vicente de Paúl, ubicado en la zona 5 de esta capital, para darle seguimiento a una denuncia presentada.
- Supervisiones y monitoreos a hogares de atención a personas adultas mayores, ubicados en el departamento de Guatemala, con la participación del personal de la Defensoría del Adulto Mayor.
- Cuatro asesorías a las asociaciones de y para adultos mayores, entre las que se encuentran: Asociación de Jubilados del INDE, Asociación de Militares Especialistas Retirados del Ejército de Guatemala y Asociación de Pensionados de Guatel.
- 39 asesorías a personas que se acercaron a esta Defensoría, sobre diferentes violaciones de sus derechos humanos, a quienes se les orientó sobre los procesos a seguir y en algunos casos se les proporcionó acompañamiento a instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Asesoría a instancias gubernamentales en derechos y leyes de las personas adultas mayores, entre las que se encuentran: Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y Programa de Escuelas Abiertas de Mi familia Aprende, del municipio de Palencia.
- Acompañamiento a cuatro personas adultas mayores para interponer un amparo verbal ante la Corte de Constitucionalidad.
- Acompañamiento a un señor de la tercer edad al Ministerio de Trabajo y la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, para verificar la situación de su proceso.

Incidencia social

- Reuniones con seis asociaciones de jubilados, pensionados y sin cobertura social, con el fin de que las mismas pudieran integrarse al trabajo de la mesa de diálogo.
- Reuniones con la Mesa de Diálogo de Organizaciones de Pensionados, Jubilados y sin Cobertura Social.
- Reunión con autoridades del INE para establecer la situación laboral de los adultos mayores que se encuentran actualmente prestando sus servicios en esa institución.

Incidencia política

- Reunión con la directora de Atención al Consumidor, a quien se le solicitó apoyo para coordinar acciones en la búsqueda del cumplimiento del Decreto 80-96, en relación con el descuento en los productos de la canasta básica.
- Reunión con personal del INGUAT, con el objetivo de promover la creación de políticas de turismo en beneficio de la población adulta mayor.

Incidencia legislativa

- Acompañamiento a grupo de personas adultas mayores beneficiarias del Programa Nacional del Adulto Mayor (PRONAM), quienes manifestaron su inconformidad por la suspensión del aporte consistente en una bolsa de víveres por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

Defensoría del Debido Proceso y Recluso

Acompañamientos, monitoreos y supervisión

- Once acompañamientos al Ministerio Público o a los tribunales de Justicia. En relación con el Ministerio Público, en audiencias conciliatorias para evitar su envío a los tribunales, es decir, lograr la desjudicialización de los casos; y a los Tribunales de Justicia, en audiencias de revisión de medidas de coerción, indagatorias o aperturas de juicio.
- Dieciocho monitoreos a centros preventivos y de condena para constatar las condiciones de reclusión carcelaria, que incluyen situaciones de salud o de alimentación.
- Se efectuaron aproximadamente 30 entrevistas a privados de libertad en la Cárcel de Máxima Seguridad Fraijanes II, a fin de determinar las condiciones carcelarias de las personas ahí reclusas, ya que existen numerosas denuncias sobre malos tratos, amenazas, falta de utensilios para la higiene, así como ropa inadecuada al clima y, lo más grave, falta de medicamentos. En dicho centro se encuentran personas privadas de libertad por delitos de impacto, tales como secuestro, asesinato, violación, extorsión, etc. Además hay miembros de las pandillas MS y Mara 18.

Promoción de los derechos humanos

- Participación en el primer curso propedéutico penitenciario en el tema de ejecución penal, donde se abordaron los derechos y deberes de los reclusos.
- Se iniciaron conversaciones con la Oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, dándole a conocer el trabajo de la Defensoría.
- Trabajo sobre el tema penitenciario con la Defensoría del Pueblo de Panamá y Costa Rica, en relación con la atención a connacionales detenidos en esos países.
- Apoyo a las unidades de Acuerdos de Paz y Trata de Personas durante las semanas de sensibilización respectivas. Con la primera se trató el tema de reformas constitucionales, y con la segunda, derecho de las víctimas de trata de personas.
- Participación en el Congreso de la Salud con la ponencia “Derecho a la Salud en los centros penales”.

Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor

Acciones emprendidas

- Ante el caso de las areneras El Carmen e Indaco, ubicadas en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, específicamente en Ciudad Peronia, aldeas el Calvario, La Selva, La Parroquia y Villa Lobos, se apertura el expediente EIO. GUA.1268-2009/DCP y acumulado EIO. GUA.1969-2009/DCP, y fue resuelto como violación al derecho humano a vivir en un ambiente sano, por deforestación, contaminación visual y autorización de actividades industriales y comerciales ambientalmente peligrosas, así como la destrucción del área boscosa del municipio de Villa Nueva.
- Se reactivó el foro multisectorial encargado de velar por la defensa del consumidor y usuario, a instancias de la Liga de Defensa del Consumidor (LIDECON), donde tiene participación la institución del PDH a través de la Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario, siendo el objetivo fundamental del foro efectuar la revisión de las iniciativas de ley 3871 y 3888; y el de la Defensoría del Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario, cuyo objetivo es verificar que el proceso sea transparente y pueda aportar reformas a la misma, en beneficio de los consumidores y usuarios. Actualmente se encuentra en el seno de la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario del Congreso de la República, a la espera de que se produzca el dictamen respectivo y su retorno al pleno del Congreso.
- Contacto con las autoridades del Ministerio de Economía, específicamente con la Dirección de Comercio Exterior y Contingentes Arancelarios, con el objeto de establecer la veracidad de las noticias de prensa relacionadas con la importación de contingentes arancelarios para subsanar el déficit de granos básicos.
- A requerimiento de la DIACO, se realizaron verificaciones en los centros educativos privados de las zonas 4, 1 y 13, dando acompañamiento a la actividad desplegada por la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Educación y la DIACO, durante las cuales se requirió a los establecimientos visitados el Contrato de Adhesión, el Libro de Quejas, los recibos de cobros de inscripciones y mensualidades, la Resolución Ministerial de funcionamiento del colegio, la Patente de Comercio, la Resolución SAT, documento que autorice la propiedad del establecimiento, la Representación Legal del Representante del establecimiento y facturas por venta de uniformes, libros y prestación del servicio de bus.
- Supervisión a la DIACO, con el objetivo de verificar las actividades de la entidad, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y su Reglamento (Decreto No. 003-2006) en defensa del consumidor y usuario, a quienes debe brindar la asesoría y acompañamiento necesarios.
- Monitoreo a albergues y asentamientos en las zonas 7, 12, 13 y 16, con el objetivo de verificar las condiciones en las que viven las personas que están situadas en asentamientos, y si cumplen con las medidas mínimas de seguridad al momento de algún acontecimiento.
- Celebración del Día Mundial del Consumidor, con la participación de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, quienes expusieron los temas “Origen del Día Mundial del Consumidor” y “Derechos y obligaciones del consumidor”.
- En septiembre, la Defensoría pasó a formar parte del Consejo Científico de CONRED, conformado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el INSIVUMEH, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas, siendo la primera participación durante el establecimiento de los puntos de riesgo de las riberas del río las Vacas en su paso por los municipios de Chinautla y San Antonio las Flores. Durante el proceso se observaron los deslizamientos, corrimientos, corrugamientos y deslaves que se han producido, lo que dará motivo a la emisión de un dictamen técnico por parte de los geólogos que integran el Consejo Científico.



Defensoría del Trabajador

Logros

- Durante el presente año la Defensoría tuvo participación en actividades desarrolladas por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el tema de acceso a la justicia, espacio donde se retoma la discusión relacionada con los obstáculos en el acceso a la justicia laboral. Destacó que, al momento de agotarse la vía de conciliación, los trabajadores no cuentan con mecanismos que aseguren su acceso a asesoría jurídica gratuita, en virtud de que se limita la participación de entes como los bufetes populares y el mismo servicio que ofrece el Ministerio de Trabajo.
- Fueron creados ocho juzgados de trabajo más que, aunque no son suficientes, vienen a disminuir el congestionamiento de los juicios laborales en materia de trabajo y previsión social, aunque comparado con las instalaciones físicas que ofrece el Organismo Judicial de la cabecera departamental de Escuintla, estas instalaciones están demasiado ajustadas, y existen denuncias de que se nombraron jueces que han hecho carrera en el área civil, corriéndose el riesgo de que se mantenga la tendencia a imponer criterios de carácter civil en desmedro de las propias instituciones en materia de trabajo.
- Mayor acercamiento con las Comisiones de Trabajo y de la Mujer del Congreso de la República, así mismo con la Comisionada Presidencial en Materia de Derechos Humanos, con la Comisión de Trabajo y compartió información relacionada con la vigencia de los derechos laborales y la necesidad de articular una política de Estado en materia de empleo.

Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz

Acciones emprendidas

- Para la verificación del cumplimiento del Programa Nacional de Resarcimiento, se realizó una visita a las comunidades Estancia de la Virgen y Chuatulum, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, donde se pudo obtener, mediante entrevistas a la comunidad, su opinión con respecto a dicho programa.
- Con la finalidad de presentar y discutir la Iniciativa de Ley N° 3551 del Programa Nacional de Resarcimiento, se participó en un taller en el municipio de Flores, Peten, con líderes de las víctimas del conflicto armado interno. En dicho taller se recomendó dar atención profesional y humana con calidad técnica a todos los casos de violaciones individuales y colectivas de los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Logros

- La presencia del PDH permitió que el Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz (CNAP) mantenga sobre la mesa de discusión los temas sustantivos de los Acuerdos de Paz, y la exigencia de que cumpla con el espíritu y razón de ser de esta instancia.
- Se logró la iniciativa de Ley del PNR que actualmente se encuentra en el Congreso de la República pendiente de aprobación. En esta actividad fue destacado el papel de la USAP.

Promoción y divulgación de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos

- Se distribuyeron los siguientes documentos: Acuerdos de Paz: un compromiso para el cambio (413), Síntesis, antecedentes, contenidos y perspectivas de los Acuerdos de Paz (106), Desarrollo humano en tiempos de paz (627), Manual metodológico para la observación de los Derechos Humanos (726), Manual conceptual para la observación de los Derechos Humanos (431) e Indicadores (431).

- Participación en las “Ferias Juveniles” de Quetzaltenango y la capital, organizadas por CONJUVE, dentro del marco de las “Jornadas Cívicas Constitucionales”, con el fin de promocionar la Constitución de la República, los Derechos Humanos y los Acuerdos de Paz.
- Inauguración del programa “Jornadas Cívicas Constitucionales” el 24 de abril, junto con la Presidencia del Congreso de la República, la Asociación de Constituyentes y el Ministerio de Educación, con el objetivo de contribuir a la formación de estudiantes del nivel medio en el ejercicio de una ciudadanía plena y participativa que fortalezca la democracia y el Estado de Derecho. Se impartieron talleres en 40 establecimientos oficiales de diversificado, con la participación de aproximadamente 3,500 graduandos a quienes se les entregó, por parte de la PDH, un ejemplar de la Constitución de la República.
- Se realizó el foro “Ley de Idiomas Nacionales”, con el fin de dar a conocer los avances y perspectivas en cuanto a la oficialización de idiomas indígenas.
- Taller sobre Acuerdos de Paz en el Instituto por Cooperativa de Santa Catarina Pinula, en donde se pudo socializar el contenido de los Acuerdos de Paz con más de 185 estudiantes de dicho instituto.
- Como miembros del Comité 17 de Octubre se conmemoró el Día Mundial del Rechazo a la Miseria, realizando las siguientes actividades: cambio de la Rosa de la paz, caminata y foro “Balance de la gratuidad en la educación”.

Incidencia política

- Entre el trabajo de incidencia y seguimiento al proceso de cumplimiento e institucionalización de los Acuerdos de Paz, la USAP ha participado de manera proactiva en el seguimiento a la agenda legislativa que proponían dichos acuerdos, con el compromiso de recomendar y velar porque toda iniciativa discutida en el seno del CNAP contenga y privilegie el espíritu de pleno respeto a los derechos humanos, así como lo dispuesto en los Acuerdos de Paz.
- Otros espacios de incidencia fueron: IEPADES, UNICPAS, CNFSJ, Colectivo Alternativa Educativa, Comité 17 de Octubre, Asociación de Constituyentes de Guatemala, CONJUVE.

Dirección de Educación y Promoción

Acciones realizadas

- Se proyectó la realización del Programa Permanente de Formación en Comunicación dirigido a los oficiales de Comunicación y Eventos Institucionales de las Auxiliaturas Departamentales.
- En el apoyo a las actividades (eventos) que realizaron las diferentes Defensorías, Direcciones y Oficinas Específicas, se contempló la difusión radiofónica por medio de campañas y programas.
- En la difusión externa, se continuó con la transmisión del programa educativo “El Abc de los Derechos Humanos” en Radio Universidad (92.1 FM), en la red de radiodifusoras departamentales y las ubicadas en los mercados cantonales del municipio de Guatemala.

Logros

- En el Programa Permanente de Formación en Comunicación dirigido a los oficiales de Comunicación y Eventos, se contempla la distribución y monitoreo de materiales radiofónicos de divulgación, promoción y difusión pública del quehacer de la institución del PDH.
- Con las radiodifusoras que transmiten en circuito cerrado en los mercados cantonales del municipio de Guatemala, se conformó una red de diez emisoras que transmiten campañas educativas e informativas sobre las actividades de la PDH y la promoción y defensa de los derechos fundamentales.

Acción realizada	Logros	Productos
Diplomados en Derechos Humanos Dirigido a: <ul style="list-style-type: none"> maestros, activistas PRO-VIH/SIDA, Hospital Roosevelt 	Sensibilización y capacitación de grupos objetivo estratégicos.	210 personas graduadas 476 personas estudiantes de diplomado (a graduarse en 2010)
Procesos formativos en derechos humanos <ul style="list-style-type: none"> A personal de Casas del Niño Para padres usuarios de Casas del Niño. A docentes de la Escuela Estado de Israel. En desarrollo de liderazgo a estudiantes de Escuelas Normales. A docentes de escuela El Quintanal, zona 6. A funcionarios del Ministerio Público. A trabajadores del INFOM. Seis procesos formativos “Escuelas para Padres” en centros educativos de nivel primario: República de El Salvador, República de Argentina, Escuela “Adolfo Vides” y El Quintanal.	Sensibilización y capacitación de grupos objetivo estratégicos.	161 personas participantes 723 personas participantes 15 personas participantes 250 personas participantes 16 personas participante 30 personas participantes 25 personas participantes 600 personas
Total de actividades realizadas: 3 diplomados y 13 procesos formativos		2,506 personas participantes

Unidad de Biblioteca y Centros de Documentación

- Participación en reconocimiento al Procurador de Derechos Humanos por parte de la Dirección Nacional de Procuración de la institución en el Claustro Mayor Rigoberta Menchú de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala, 16 de junio 2009. 500 publicaciones distribuidas.
- VII Conferencia Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala, 14 y 15 de octubre 2009. 8,000 publicaciones distribuidas.
- V Gran Carrera por los Derechos Humanos, en conmemoración al 61 Aniversario de su Declaración Universal, Obelisco y Avenida Reforma, zona 9, Guatemala, 6 de diciembre 2009. 5,000 publicaciones distribuidas.

A través de la coordinación con aproximadamente 100 instituciones afines, se ha logrado como apoyo y trabajo cooperativo lo siguiente:

- Actualización profesional respecto de los adelantos en la carrera de bibliotecología, incidiendo por lo tanto en mayor eficiencia y eficacia en la organización de las bibliotecas.
- Proyección externa hacia otras bibliotecas, centros de documentación e instituciones afines y, por consiguiente, en coordinación constante y adquisición de ayuda cuando se hace necesario.
- Intercambio de bibliografía en la especialidad de derechos humanos y temas relacionados, logrando así la implementación y actualización de la información.

Logros

- Atención directa a usuarios externos (investigadores, docentes, profesionales, estudiantes de todos los niveles y otros), prestando diferentes servicios.
- Búsqueda de información específica, fuera de las instalaciones de la unidad, para obtener documentos de temas que no se encuentran en ella, prestando dicho servicio mayoritariamente a los usuarios de la institución.
- Donación de material bibliográfico a entidades afines por convenio de canje y solicitudes individuales (4,000 publicaciones).
- Promoción y difusión de la institución del PDH y la Biblioteca y Centro de Documentación a través de la distribución de material bibliohemerográfico, festivales y otras actividades.
- Participación activa en redes de información: Red del Pueblo y Red Nacional de Documentación Educativa de Guatemala.
- Diez asesorías a instituciones para la organización de sus centros de documentación.
- Cinco mil libros adquiridos en calidad de canje y donación.
- Apoyo bibliográfico a diez diferentes comunidades para la organización de sus centros de documentación con 3,917 libros.
- 7,017 análisis y procesamiento técnico de libros y otras publicaciones.
- Proceso de adquisición y conservación del archivo histórico de la institución del PDH.
- Elaboración de 88 inventarios para la Red de Bibliotecas Departamentales y Municipales.
- Registros ingresados a la base de datos a través del sistema especializado en bibliotecología WINISIS para la inmediata recuperación de la información.
- Elaboración de archivo vertical con la especialidad en derechos humanos y temas de coyuntura nacional (600 archivos).

Administración central

1. Asesoría de Análisis Estratégico (AAE)

Actividades, productos y logros

- Elaboración de 193 documentos de diversa índole (comunicados y desplegados de prensa, propuestas de discursos, conferencias, punteados para comparecencias públicas del PDH a nivel nacional o internacional) que conllevan el posicionamiento público del Procurador de los Derechos Humanos y su institución en temas como seguridad pública, salud, educación, seguridad alimentaria, Frente contra el Hambre, derechos humanos específicos, problemas ambientales, promoción de la cultura de paz, migrantes, trata de personas, entre otros.
- Revisión, preparación o redacción final de 22 documentos para ser publicados, ya fuera como desplegados de prensa o comunicados a distribuirse en los medios de comunicación social; produjo otros 29 documentos de análisis e insumos de información procesada, que si bien no estaban destinados directamente al posicionamiento público institucional, formaron parte de los procesos de reflexión y toma de decisiones del PDH.
- 84 documentos relativos al tema seguridad y justicia, dado el papel desempeñado en la gestación, aprobación y seguimiento del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, documentos que van desde borradores de los planteamientos conjuntos de la PDH, la Universidad de San Carlos, el Arzobispado Metropolitano y la Alianza Evangélica hasta informes específicos para el PDH y las otras tres instituciones integrantes del Grupo Garante, así como documentos para la Unidad de Seguimiento del Acuerdo Nacional.

Apoyo al desarrollo institucional

- Participación regular en los trabajos del Comité de Asesores y Directores de la institución, que apoya al PDH para el análisis y consideración colectiva de diversos asuntos de interés institucional y nacional. Se participó en iniciativas, propuestas y acciones dentro de dicho Comité, sumando esta oficina un aproximado de 70 reuniones de trabajo con el PDH y el referido Comité.
- Estrecha relación de trabajo con la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, en el impulso de distintos momentos del proceso de planificación estratégica y operativa de la institución en consecuencia de las Líneas Estratégicas para el Quinquenio 2007-2012.
- Participación en las reuniones y actividades del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, y prestando apoyo al funcionamiento del Registro Unificado de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada.
- Por medio del coordinador institucional del Frente contra el Hambre, la AAE ha participado en actividades del Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria con mayor intervención, en especial, en la formulación de propuestas, informes, análisis, documentos de trabajo y participación en actividades propias del Grupo SAN-PDH; entre ellos, la preparación del II Informe y su entrega al CONASAN y al Congreso de la República.

Seguimiento a asuntos relativos a la seguridad pública

- Papel activo en la formulación de las propuestas que el “Grupo de los Cuatro” (G-4) presentó al Presidente de la República, en enero de 2009. Dichas propuestas se transformaron en la base del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ). En la labor de preparación y discusión de los documentos que la institución del PDH aportó en este proceso, la AAE contó con el apoyo permanente de personal de la Unidad Contra la Impunidad y de la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación.
- Reuniones de información, relacionadas con el tema de seguridad, con funcionarios del Ministerio de Gobernación, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Ministerio Público, entre otros.
- Se mantuvo a lo largo del año un trabajo constante de coordinación con las contrapartes técnicas de la Alianza Evangélica, el Arzobispado Metropolitano (a través de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado) y la Universidad de San Carlos (a través del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales), con quienes integró un sólido equipo técnico del G-4.
- Se representó a la institución del PDH en una Consulta Regional sobre Seguridad y Justicia convocada por

el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, efectuada en San José, Costa Rica.

- Se elaboraron análisis específicos sobre la situación de la seguridad pública en el país y su relación con los compromisos del ANASJ, los cuales sirvieron de base para la preparación de ponencias o conferencias dictadas acerca del tema, por el Procurador o el coordinador de la AAE como delegado del primero.

- Se publicaron tres notas diarias en referencia a la PDH, es decir, a diario aparece en alguno de los medios impresos. En el período de 11 meses, sumaron 1,076 notas publicadas, frente a las 986 en el mismo lapso de 2008. Un indicador importante es que el 94% de estas publicaciones tuvo un tono neutral pese a que la institución constantemente interviene en asuntos que tienden a polarizar a la opinión pública nacional.

2. Coordinadora Nacional del Voluntariado

Acciones emprendidas

- Elaboración del Manual de organización y funcionamiento de la Coordinadora Nacional del Voluntariado.
- Avance en el diseño del “Banco de datos del Voluntariado” que consolida el recurso humano activo e inactivo que colabora con la PDH.
- Actualización de los mapas de ubicación de voluntarios de los 22 departamentos y del área metropolitana de Guatemala.
- Formación de las Coordinadoras de Voluntarios del Área Metropolitana y municipios del departamento de Guatemala; seguimiento a las establecidas en los municipios de Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna y San Lucas Tolimán del departamento de Sololá.
- Organización de la Mesa de Atención de Crisis Alimentaria, en el departamento de Sololá, con la participación de voluntarios y representantes de las instituciones gubernamentales de la localidad.
- Participación en la conformación de la Red de Atención a las Víctimas.

3. Dirección Administrativa

Acciones emprendidas

- Apoyo institucional a todas las unidades de la sede central y Auxiliaturas en dotación de mobiliario, equipo y traslado de personal.
- Mantenimiento y reparación a los edificios que son ocupados por las distintas oficinas de sede central.
- Implementación de controles en área de seguridad.

4. Dirección de Comunicación Social

4.1 Unidad de Prensa y Promoción

- Promoción V Carrera de Derechos Humanos.
- Promoción del III Certamen Fotográfico.
- 35 comunicados de prensa enviados a las salas de redacción de los informativos (impresos, radiofónicos y televisivos).
- 21 convocatorias de prensa urgentes enviadas a los medios de comunicación (impresos, radiofónicos y televisivos).
- Cobertura periodística en las distintas Auxiliaturas para dar a conocer las acciones que realiza la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
- 12 periódicos impresos de “El Defensor del Pueblo”, medio por el cual se recopilan las acciones más relevantes ocurridas durante el mes en la institución, el cual se distribuye en todas las Auxiliaturas, embajadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, presentando desde enero de 2009 un nuevo diseño y diagramación, ampliándose de 8 a 12 páginas.
- Divulgación y distribución de informes especiales.
- Programación de espacios para entrevistas en los diferentes medios de comunicación para el Procurador de los Derechos Humanos.
- Realización de un análisis mediático, con el objetivo de determinar la imagen del PDH y la institución en los medios impresos.

4.2 Unidad de Comunicación Alternativa

Diseño, producción, edición y reproducción

- Segundo Informe “Seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de crisis”
- Segundo Informe “Seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de crisis”, resumen ejecutivo
- Cartilla de leyes para la protección de las personas adultas mayores
- Memoria Primer Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos “Por una mejor calidad de vida”
- Informe “El derecho de saber”
- Constitución Política de la República de Guatemala
- Redadas masivas contra migrantes Un año después: casos de migrantes guatemaltecos deportados por la redada de Postville. Iowa, Estados Unidos
- Estándares internacionales sobre migrantes
- Agenda Nacional de Derechos Humanos
- Memoria VII Congreso Nacional de Escritores
- Segundo Informe Nacional de Cárceles
- Informe Anual Circunstanciado: Informe de labores, Informe de situación y Resumen ejecutivo.

Edición

- Actualización serie de Cartillas de Derechos Humanos
- Cartilla Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer
- Memoria Congreso de la Víctima
- Memoria Congreso del Trabajo
- Manual de violaciones a derechos civiles y políticos
- Manual de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales
- Manuales de violaciones de derechos específicos:

Trabajo cooperativo

- Desarrollo del proyecto de edición de la revista especializada en derechos humanos en coordinación con el área de Asesoría de Análisis Estratégico: definición de objetivos y criterios editoriales; integración del Consejo Editorial y la Coordinación Editorial; elaboración del Acuerdo de Creación.
- Recopilación de materiales para la Colección de Informes sobre Derechos Humanos 2007-2012, conformada por informes de supervisiones, monitoreos y análisis realizados por diversas áreas de la institución del Procurador de los Derechos Humanos.

Recopilación de la memoria histórica de la institución

Se continúa con segunda parte de la recopilación y análisis institucional, que recoge las acciones, denuncias, mediaciones e investigaciones de la segunda gestión del Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio

Fernando Morales Alvarado (2007-2012). La publicación cuenta con el soporte de una comisión técnica que dirige, supervisa e impulsa el proyecto.

5. Dirección de Estudio, Análisis e Investigación (DEAI)

Acciones emprendidas

- Se cuenta con tres bases de datos: una hemerográfica, con temas relacionados con los derechos humanos; una acerca de las muertes violentas, derecho a la vida y libertades fundamentales; y una referente a derechos económicos, sociales y culturales, que se actualizan permanentemente. Estas corresponden a medios de prensa escritos del país y archivos provenientes de las bases de datos de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Estos últimos representan información esencial para la sistematización y organización de los datos, creación de variables, valoración de información para la elaboración de cuadros y estudios estadísticos, que se emiten y analizan para cualquier informe de la institución.
- Se han elaborado a la fecha los siguientes informes cuantitativos: Mapas temáticos a nivel de municipios con temas de linchamientos 2004-2008 y tendencias de 2009; Estadísticas de linchamientos por municipio, con mayor tasa de casos por cada 100,000 habitantes; Base georeferencial con noticias hemerográficas, con énfasis en seguridad y muerte de pilotos; Estadísticas de homicidios generales 2009; Estadísticas de homicidios y lesiones; Estadísticas de distribución territorial de homicidios en población menor de

edad; Estadísticas de tasa de homicidios en los municipios con mayor incidencia del país, años 2003-2008; Estadísticas de homicidios de mujeres 2009; Estadísticas de homicidios de mujeres a nivel municipal con mayor incidencia en el país, años 2003-2008; Estadísticas de homicidios de niñez y adolescencia 2009; Estadísticas, de homicidios por edad, con tablas dinámicas con identificación de zonas vulnerables de los homicidios ocurridos en los años 2003-2008; Estadísticas de delitos sexuales, niñez y adolescencia 2009; Estadísticas de detenidos por edad con identificación de zonas vulnerables de los detenidos 2008; Estadísticas de hechos delictivos en transporte urbano; Análisis estadístico de homicidios de diferentes fuentes de información, estudio de la relación de homicidios reportados por la PNC, y los reportados por los periódicos, y estimación de datos reales en base a los reportados y recopilados por la base del registro hemerográfico.

- Procesamiento de todas las estadísticas de las Auxiliaturas, Defensorías y sedes de la institución del PDH, para el informe circunstanciado del Procurador de los Derechos Humanos 2009.
- Se cuenta con los datos procesados por el CENADOJ en los cuales se elaboran estadísticas relacionadas con procesos al sistema de justicia en materia penal, familiar y niñez y adolescencia con énfasis en delitos contra la vida, violencia contra las mujeres, delitos sexuales, delitos contra la niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar y juicios orales de fijación de pensión alimenticia y denegaciones de asistencia económica.
- Informes temáticos: tres informes trimestrales de los análisis de perspectivas económicas y estado de situación de los DESC (enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre); Informe de monitoreo y gasto público del Gobierno durante el primer semestre; Crisis económica mundial y sus repercusiones en Guatemala en la operativización de los DESC; Informe de gasto social con énfasis en la educación, salud y servicios básicos; Informe para el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas acerca de las Desapariciones Forzadas; Informe para el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Abramovich, referente a la situación de los pueblos indígenas en Guatemala; Informe al Relator Especial de Naciones Unidas concerniente al “Derecho a la alimentación”, en su visita a Guatemala.
- Cuatro informes de situación nacional: Informe anual de situación de los derechos humanos en Guatemala 2008, anexo al Informe Circunstanciado del PDH, entregado al Congreso de la República en enero de 2009; Primer informe trimestral de situación

de los derechos humanos en Guatemala (enero-marzo 2009); Informe semestral de la situación de los derechos humanos en Guatemala (enero a junio 2009); Segundo informe de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, entregado en marzo al CONASAN y en mayo al Congreso de la República de Guatemala.

- Nueve informes finales de supervisiones y monitoreos a la Supervisión de la administración pública: Informe sobre hospitales nacionales relacionado con la infraestructura, material quirúrgico, personal médico y paramédico, atención de pacientes y existencia de medicamentos; Informe de la Dirección del Consumidor, DIACO; Informe de la supervisión a los Juzgados primero, segundo y tercero de Ejecución Penal; Informe de la supervisión a los hospitales por la epidemia de la influenza A H1N1; Informe de supervisión institucional a los hospitales nacionales de ortopedia y rehabilitación Dr. Jorge Vonn-Ahn, Hospital Nacional de Salud Mental Dr. Federico Mora y Hospital de Rehabilitación del IGSS; Informe de supervisión al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); Informe supervisión sobre potabilidad del agua; Informe de supervisión a hogares y centros de protección y abrigo (2006-2008); Informe de supervisión referente al Maltrato Infantil.
- En el área estratégica del fortalecimiento y desarrollo institucional, se trabajaron las siguientes acciones con los resultados y productos siguientes:
 - Conformación y coordinación de la mesa intra-institucional con las direcciones de Recursos Humanos y Educación para la creación de la Escuela de los trabajadores/as de la PDH, elaboración del plan y cronograma de trabajo, propuesta metodológica para el abordaje del diagnóstico de necesidades en formación y capacitación.
 - Sondeo institucional para el conocimiento y manejo de los indicadores en materia de derechos humanos, con el fin de optimizar la información estadística que aportan las áreas de la institución.
 - Construcción del formato digital (Excel) para la recopilación de los insumos del informe anual circunstanciado para el periodo 2009 del PDH.
 - Construcción del programa para la elaboración del formato encuesta SSPRO, para elaborar los monitoreos y supervisiones institucionales.
- En el área estratégica de Educación en Derechos Humanos se cuenta con: bases de datos actualizadas permanentemente con distintos hechos relacionados con derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; con poblaciones vulnerables, para información estadística, con fuentes externas para este

trabajo; informe del sondeo sobre el conocimiento de indicadores a nivel institucional, su uso y aplicación; capacitación en temas de elaboración de indicadores en materia de derechos humanos, para personal de la institución; acciones de coordinación con las unidades, defensorías, direcciones y auxiliaturas de la institución.

- En el área de fortalecimiento institucional para la DEAI las acciones fueron: coordinación y gestión interna en la ejecución de proyectos de cooperación internacional (PRODER/DANIDA); dos informes de ejecución técnica a los cooperantes de DANIDA; informe final de proyecto ejecutado por la Asociación Española “María Plaza” de España en relación con “Muertes violentas de mujeres”; tres proyectos para agencias de cooperación para la DEAI; monitoreo del

proceso de ejecución de los proyectos de la DEAI; 800 documentos con información diversa, misma que se entregó a distintos actores internos y externos.

- En el área estratégica de supervisión a la administración pública las acciones fueron: la revisión metodológica, técnica y sustantiva de los planes de supervisión e instrumentos de recolección de la información de supervisiones y monitoreos a distintas dependencias del Estado.
- En el área estratégica de Fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil e instituciones del Estado: relaciones con algunas instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil que requieren información cuantitativa y cualitativa. La dirección recibe información para procesarla, analizarla y difundirla.

5.1 Unidad de Mecanismos e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos (UMII)

Acciones emprendidas

Legal/jurídico

- Labores de protección y defensa, a través de la atención de casos y la realización de comunicaciones al Sistema Interamericano de Protección; y también en la preparación y colaboración con otras dependencias para elaborar informes a órganos y mecanismos internacionales convencionales y especializados.
- Análisis de 34 casos para evaluar la presentación de comunicaciones ante mecanismos internacionales de protección. Seguimiento a la ejecución de medidas cautelares vigentes, así como nuevas gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la adopción de medidas cautelares.
- Ante situaciones urgentes, la UMII ha solicitado la intervención subsidiaria del Sistema Interamericano de Protección. Las solicitudes se han realizado en el marco de los criterios y normas de la CIDH para otorgar medidas cautelares de acuerdo con el artículo 25 de su reglamento.
- Se intercambiaron 67 comunicaciones con la CIDH relacionadas con 29 casos (diez de años anteriores y 19 casos del presente), de los cuales 14 consistieron en nuevas solicitudes de medidas cautelares; envió de comunicaciones a la Unidad Funcional de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH y a otros mecanismos de protección, como la Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya.
- De las 14 solicitudes de medidas cautelares presentadas por el PDH a la CIDH, dos fueron resueltas favorablemente, una de las cuales favoreció la protección de más de 600 personas; las restantes 12

solicitudes motivaron intercambio de información. En la práctica y para la mayoría de los casos, el intercambio de información con la CIDH implica la atención especial por parte de los órganos encargados del Estado de Guatemala en el asunto, lo que puede ser favorable para la disminución de las condiciones de riesgo en que se encuentran los posibles beneficiarios. A solicitud del Departamento de Procuración de la institución del PDH, adicionalmente se analizaron 17 casos para considerar la viabilidad de presentar comunicaciones internacionales.

Investigación y asistencia técnica

- La UMII ha brindado asistencia o apoyo técnico particularmente a la Unidad de Asesoría Jurídica; la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación; el Área de Recepción y Calificación de Denuncias; a la Unidad de Derechos Civiles y Políticos; y a las Defensorías y Auxiliaturas Departamentales.
- En coordinación con la DEAI, y la asistencia técnica de la Unidad de Comunicación Alternativa, se elaboró y publicó el documento “Estándares internacionales: los derechos para personas migrantes en condiciones de privación de libertad”.
- La UMII brindó aportes técnicos para la supervisión al Hospital de Salud Mental, y colaboró en la elaboración del informe respectivo.
- Elaboración de ocho opiniones técnicas en casos específicos como parte de la evaluación institucional de las acciones internacionales que podrían emprenderse para buscar la garantía, respeto y reparación de los derechos humanos.

- Comunicación y envío de aportes escritos a mecanismos especializados de Naciones Unidas:
 - Matriz de seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y colaboración para el informe institucional presentado a ese Grupo de Trabajo.
 - Se contribuyó con el trabajo del Comité internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, mediante el traslado de información utilizando el formato de un instrumento base, que contribuyó a la elaboración del informe *Survey on National Human Rights Institutions*, publicado en julio de 2009 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el cual se integró con los aportes de las instituciones nacionales de todo el mundo, incluyendo nueve de América.
 - Informe independiente para el señor Philip Alston, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, en el marco de la solicitud de observaciones e información dirigida al Estado sobre la implementación de las recomendaciones formuladas luego de su visita a Guatemala en 2006.
 - La UMII colaboró con la elaboración del informe independiente del PDH de Guatemala preparado para la señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos, previo a la presentación del informe sobre la Misión a Guatemala de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, Hina Jilani.
 - En coordinación con la Defensoría de Personas con Discapacidad, envió, a través de la Representante del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales (CIC) en Ginebra, una comunicación en el marco de la Resolución 10/07 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre “Derechos Humanos de las personas con discapacidad: Marcos Nacionales para la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
 - Intercambio de comunicaciones con Amnistía Internacional, Londres, por medio de su Equipo Centro América y, también, se han intercambiado comunicaciones y se han realizado reuniones con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional oficina para Mesoamérica (CEJIL); la relación con esas organizaciones internacionales propició una campaña de apoyo internacional en el marco de ataques en contra de defensores y defensoras

de derechos humanos que realizan su labor desde la institución del PDH.

- Se entabló comunicación con la presidencia del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales (CIC) con el fin de contribuir al avance del proceso de consolidación, fortalecimiento y formalización de la estructura organizacional del CIC y consolidar la membresía de la institución del PDH.

Acciones externas de fortalecimiento institucional y de las relaciones internacionales

- En el marco del mandato del PDH, la UMII ha continuado participando en el proceso de creación, conformación y funcionamiento de la COGUADIIH adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, incorporándose a dos de los grupos de trabajo y participando en las reuniones realizadas.
- La UMII forma parte del Comité Técnico del proceso de construcción del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), como aplicación y consecuencia de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en octubre de 2009 la propuesta base fue presentada ante el cuerpo de diplomáticos acreditados en Guatemala y diputados del Congreso de la República. Organizaciones miembros del Comité Técnico coordinaron el apoyo del Centro de Rehabilitación e Investigación para las Víctimas de la Tortura de Dinamarca.
- Se ha participado en actividades vinculadas con la temática de trabajo: Seminario Internacional “Verdad, 10 años después”; Taller de discusión y capacitación sobre legislación nacional en materia de Trata de Personas; Primer Congreso Nacional de Derecho Internacional Humanitario, “La Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Guatemala”; y el Seminario Internacional “Medidas de Reparación y sus Desafíos”, entre otros.
- Se ha mantenido comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tanto en Ginebra como su oficina en Guatemala.
- Se ha mantenido comunicación con mecanismos especializados de protección de derechos humanos (Relatores, Representantes del Secretario General y Grupos de Trabajo) y con el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
- En relación con casos ocurridos en Guatemala, la UMII ha sido el enlace entre la institución del PDH y el Equipo América Central de Amnistía Internacional, así como con el equipo para Guatemala del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Logros

- Se finalizó la propuesta del proyecto de ley para el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en un proceso impulsado por un comité técnico en el cual, además de la institución del PDH, participa el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la facilitación de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. La propuesta ha sido presentada a los entes gubernamentales involucrados en la temática que han formado una Mesa amplia de impulso al proceso; al cuerpo diplomático y a varios diputados del Congreso de la República. Se presentará al pleno para su aprobación con el procedimiento de ley.
- La institución del PDH continúa participando en el espacio multiinstitucional generado con la creación de la Comisión Guatemalteca para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (COGUADIH) y se ha integrado a las Comisiones de atención a personas víctimas de minas antipersonales y a la Comisión de seguimiento de las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en el tema de personas desaparecidas.
- Se elaboraron cinco informes independientes de la institución dirigidos a mecanismos especializados (incluidos en el apartado sobre investigación y asistencia técnica) y se colaboró en la elaboración de dos más (Informe al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas e Informe para la Federación Iberoamericana de Ombudsmen sobre la situación de la mujer).
- Se mantuvo comunicación y se atendieron comunicaciones de diversas organizaciones, dentro de las que se encuentran: la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, el Comité de Desarrollo Campesino, Derechos en Acción, el Movimiento Pro Justicia de Nueva Linda y el Frente Nacional de Lucha.
- En el marco del sistema interamericano, además de las comunicaciones por casos urgentes:
 - Se logró reactivar el proceso de reparación vinculado con el caso de José Miguel Mérida Escobar, comisario de la PN encargado de la investigación de la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack Chang, ocurrida en 1990. El Comisario Mérida fue ejecutado extrajudicialmente el 5 de agosto de 1991; el caso fue resuelto mediante Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH; la intervención institucional fue solicitada por familiares debido a existir compromisos pendientes de cumplir.
 - Se continuó con la gestión ante la CIDH del caso presentado por la desaparición de los señores Gerson Estuardo Reyes Gómez y Jeremías Fuentes López ocurrida en Escuintla. La CIDH se encuentra analizando el caso.
 - En seguimiento al caso Nueva Linda, se sostuvo una reunión informativa con la hija del señor Héctor Reyes, víctima de desaparición, y se ha planteado demanda contra el Estado de Guatemala. La CIDH se encuentra analizando el caso.
 - Comunicaciones sobre casos específicos con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Mesoamérica, en San José de Costa Rica; Amnistía Internacional, en Londres, Reino Unido; el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por medio de su Sección especializada: No Impunidad; y Radio Francia Internacional.

5.2 Unidad de Supervisión Administrativa (USA)

Investigación de casos

- Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por supuestas anomalías y atraso en la distribución de fertilizantes.
- Por la quema de un bus de transporte colectivo extraurbano y agresión física a pasajeros, en la aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez.
- Caso del aislamiento de pacientes en crisis en el Hospital de Salud Mental Dr. Carlos Federico Mora.
- Condiciones y trato a los pacientes internados en el Pabellón 4 (pacientes privados de libertad) del hospital de Salud Mental, Dr. Carlos Federico Mora por orden de juez competente.
- Supuesta violación a la Ley de Acceso a la Información en el Hospital General San Juan de Dios.
- De análisis de cargas virales (pacientes con VIH/SIDA) en el Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Investigación y seguimiento del cumplimiento de la resolución del PDH del expediente ORD.GUA.907-2008/DE, por supuesto maltrato a adolescentes en el Hogar de Protección y Abrigo “Elisa Martínez”.
- Por supuesto maltrato físico a una alumna de la Escuela Oficial Urbana Mixta Juana Mercedes Dardón, en Amatitlán.

- Investigación, por petición de la Junta Directiva del cuerpo de médicos del hospital Roosevelt, de las deficiencias en la atención a los pacientes, debido a la falta de equipo médico y del personal necesario.
- Referente a la atención de los casos de desnutrición, morbilidad y mortalidad en hospitales nacionales.
- Acerca de las condiciones laborales de los pilotos del servicio de transporte de carga pesada, por restricciones de ingreso a la ciudad capital según acuerdo municipal.
- Investigación de denuncia presentada por almacenamiento y comercio de juegos pirotécnicos en La Terminal.
- En Centros de Atención del IGSS, referente al cumplimiento del Amparo 48-2009 “obstaculización y retardo injustificado”, y la negativa de proveer medicamentos clasificados en el Nivel 4.
- Del colapso de los colectores, en la colonia Covias, zona 5, ciudad capital.
- De suspensión de los servicios de Consulta Externa en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, derivada de la falta de los pagos pendientes a los médicos residentes.
- Por supuesto caso de desnutrición severa de una menor recluida por orden de juez competente, en la Casa Hogar “El Destino”, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
- Investigación en el IGSS por demora en la entrega de la pensión correspondiente, por fallecimiento del conyuge de Elena Quej Caal, en Cobán, Alta Verapaz.
- Investigación en el IGSS por denegación de la pensión por vejez, al señor Raúl Zepeda López.

Supervisiones administrativas

- Acerca de extranjeros detenidos en albergue de Migración.
- A hospitales: infraestructura, material quirúrgico, personal médico y paramédico, atención a pacientes y existencia de medicamentos.
- A la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).
- A centros y hogares de protección y abrigo, incluyendo guarderías de cuidado diario (estatales y municipales), en cumplimiento de la Ley del Procurador y de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Secretaría de Bienestar Social.
- Supervisión Administrativa de los Juzgados de Ejecución Penal.
- Supervisión referente a la potabilidad del agua y su control por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las Municipalidades.
- Al Instituto de Ciencias Forenses (INACIF).
- A los hospitales por la pandemia de influenza A H1N1; verificación sobre capacidad para enfrentar la emergencia.
- De las condiciones de acceso a las personas con discapacidad al servicio del Transmetro (centro-sur).
- A centros que atienden a pacientes con VIH/SIDA.
- De las condiciones higiénicas de los rastros municipales.
- Al Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- Al Sanatorio Nacional Antituberculoso “San Vicente de Paul”.
- Supervisión respecto de la atención y planificación a asentamientos y albergues.
- Supervisión referente al respeto a la identidad cultural de estudiantes indígenas en centros educativos estatales a nivel nacional.
- Supervisión acerca de la implementación de la educación en derechos humanos en escuelas de nivel primario.
- Supervisión en relación con el maltrato infantil y abusos en el nivel primario de educación.
- En el Sistema Penitenciario: verificación en centros de privación de libertad sobre existencia de tortura.
- A instituciones que por Ley les corresponde recibir, procesar e informar denuncias de violencia intrafamiliar y contra la mujer.
- Al Hospital de Salud Mental.
- A hogares para el Adulto Mayor. Informe sobre abuso y maltrato a las personas de la tercera edad.
- A sujetos obligados de Acceso a la Información.
- Al Organismo Judicial.
- Al Consejo Nacional de Adopciones.
- A las instituciones que autorizan y controlan la producción, distribución y comercialización de juegos pirotécnicos.
- A unidades de nutrición de hospitales nacionales.
- Supervisión a instituciones que velan por el cuidado y protección al medio ambiente.

Mediaciones

- Mediación entre manifestantes en pro y en contra de caso del abogado Rodrigo Rosenberg.

6. Dirección de Mediación, Resolución de Conflictos e Incidencia en Políticas Públicas (DIMERCIPP)

Ámbitos de atención y acciones emprendidas

- Derechos violados con mayor y menor frecuencia: un 27% de los 178 casos atendidos se refieren a situaciones de índole laboral, lo que evidencia tanto la inobservancia de lo que la ley determina como también la necesidad de realizar acciones de verificación e incidencia por parte de la institución del PDH. De los derechos menos violados existen ocho expresiones: integridad física, petición, de manifestación y expresión, de integración familiar, acceso a la información auditoria social, no discriminación y propiedad privada.
- Coordinación interinstitucional: la DIMERCIPP ha necesitado involucrar a diferentes instituciones del Estado, con quienes se ha tenido una serie de reuniones de trabajo en 155 mesas de dialogo. De estas mesas, las principales se desarrollaron por violaciones de derechos laborales (27%), del derecho al desarrollo económico (10%), del derecho al orden y seguridad (8%), del derecho al acceso a la tierra (7%), del derecho a la educación (6%), del derecho a la vivienda (5%) y del derecho a un ambiente sano y a la salud (4% cada una).
- Seguimiento de casos paradigmáticos: por el nivel de complejidad y el impacto que tienen, existen casos que han trascendido los años, como el caso de resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de Chixoy, el de vendedores del mercado de Coatepeque, el de la cementera de San Juan Sacatepéquez, el de las areneras El Carmen e Indaco, y las mesas de dialogo en Livingston y entre el CONIC y la Secretaría de Asuntos Agrarios, entre otros.

Mediación y resolución de conflictos Atención por derecho vulnerado

Derecho vulnerado	Total	%
Integridad y seguridad	153	24.75
Vivienda	111	17.96
Propiedad privada	13	2.10
Libertad sindical o asociación	3	0.48
Servicios esenciales	23	3.72
Desarrollo económico	135	21.84
Trabajo	71	11.48
Educación	54	8.73
Consumidor y usuario	18	2.91
Alimentación	1	0.16
Salud	9	1.45
Libre locomoción	12	1.94
Políticos	4	0.64
Seguridad social	5	0.80
Medio ambiente	6	0.97
TOTAL	618	100.00

Expedientes de mediación

Con acuerdo	Sin acuerdo	Desistió o falta de interés	Expediente de competencia	Trámite	TOTAL
277	153	75	32	81	618
44.8%	24.7%	12.1%	5.1%	13.1%	100.0%

7. Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional (DIPLADI)

Legal/jurídico

- Elaboración del Acuerdo SG-10-2009 que rige la estructura organizativa de la institución del PDH.

Investigación y asistencia técnica

- Se elaboró una propuesta de distribución de las unidades administrativas de la PDH en las ocho áreas estratégicas, con el fin de que la Dirección Financiera y la DIPLADI, utilicen la misma distribución para que el Presupuesto se elabore de manera coordinada con la Planificación.
- Se elaboró la metodología y se condujo un taller para realizar el análisis FODA de la Dirección de Educación.
- Análisis y comentarios del documento “Protocolo de atención de casos de Ley de Acceso a la Información Pública”, diseñado y elaborado por la Dirección Nacional de Procuración
- Fue analizada la propuesta de Acuerdo de Reclasificación del Departamento de Educación y Promoción, por Dirección de Educación y Promoción y traslado para revisión, aprobación y emisión del acuerdo respectivo.
- Atención y respuesta a solicitudes de información relacionadas con la PDH, tal el caso de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
- Elaboración del instructivo para el llenado de la Matriz de Planificación Institucional 2010, el cual se distribuyó a todas las Direcciones, Unidades, Auxiliaturas, Defensorías y Programas Especiales de la PDH.

Administrativo-financiero

- Se elaboró una propuesta para un Plan de Austeridad, debido a la reducción presupuestaria a la institución.

Gestión y apoyo de eventos

- Se elaboró el Plan de Eventos 2009 y se actualizó semanalmente, elaborando los informes respectivos.

Publicaciones

- Planificación Anual 2009.
- Plan Operativo Anual 2010.

Tecnología

- Capacitación al personal de la DIPLADI para operación del Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN) del Sistema de Administración Financiera (SIAF).

Apoyo y trabajo cooperativo

- Revisión de áreas estratégicas, de manera participativa con todas las Direcciones y Unidades de la PDH.

Productos

- Manuales de Organización y Funcionamiento elaborados, con primera revisión; pendientes cambios necesarios y aprobación de los mismos.
- Propuesta de formato final para Manuales de Organización y Funcionamiento.
- Plan Operativo Anual 2010 con su respectivo presupuesto, elaborado, aprobado y entregado a las instituciones correspondientes: SEGEPLAN, Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección Técnica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas.
- Plan de Supervisiones 2010.
- Plan de Eventos 2009 elaborado y seguimiento semanal del mismo.
- Informes de seguimiento a las actividades planificadas para ejecutar en 2009, que incluye 52 informes de eventos, cuatro de supervisiones y monitoreos y 12 de actividades operativas.
- Agenda pública del PDH, actualizada semanalmente.
- Áreas Estratégicas de la Política del Procurador 2010-2012, revisadas y actualizadas.
- Documento “Justificación de Solicitud de Incremento a la Asignación Presupuestaria a la PDH para el 2010”.

8. Dirección de Relaciones Internacionales (DRI)

Gestión política de apoyo internacional

- En 2009, la Dirección contribuyó con las relaciones internacionales a través de la coordinación a nivel internacional, asistencia técnica, constante comunicación con la comunidad internacional, cuerpo diplomático y con instituciones y funcionarios a nivel internacional, relacionados con los derechos humanos. Se atendieron misiones de funcionarios de la comunidad internacional y de otras instituciones

de derechos humanos de varios países que apoyan la gestión del PDH. Asimismo, se proporcionó apoyo logístico para que el Magistrado de Conciencia y funcionarios de la institución tuvieran una presencia activa en eventos a nivel internacional relacionados con la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, participando en las siguientes reuniones:

Viajes gestionados, realizados durante 2009

No.	Lugar	Descripción	Fecha
1	México	Visita con la delegación del Gobierno al Instituto Federal de Acceso a la Información de México.	Del 20 al 30 de enero
2	Washington, EUA	Visita al Museo del Holocausto. Visita al Departamento de Justicia. Programa de Capacitación de la Policía de EUA. Conferencia en la Universidad Americana de Washington. Entrevista con medios de comunicación. o	Del 4 al 6 de febrero
3	Houston, EUA	Entrevista con medios de comunicación y conferencia en la Universidad de Houston.	Del 8 al 10 de febrero
4	El Salvador	Observatorio Internacional de los Comicios en El Salvador.	Del 13 al 15 de mayo
5	Ginebra, Suiza	22ª. Reunión del Comité Internacional Coordinación de Instituciones Nacionales para la promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC).	Del 23 al 27 de marzo
6	Ginebra, Suiza	Conferencia de Durban	Del 20 al 24 de abril
7	La India	Reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la India. Visita oficial.	Del 27 al 1 de mayo
10	Panamá	Observar las elecciones presidenciales en Panamá.	Del 1 al 3 de mayo
11	Panamá	XLI Reunión del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH).	Del 4 al 5 de mayo
12	Miami, USA	Reunión con Organizaciones de Migrantes.	Finales de julio
13	Costa Rica, PNUD	Reunión Técnica sobre el Proyecto “ El Teatro Ibsen y la Consolidación de los Derechos Humanos” para lograr continuar con la ejecución del mismo	21 de octubre

Gestión de proyectos

- La DRI continuó durante el presente año con su labor de identificar y gestionar recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional que complementen los programas y proyectos que desarrolla la institución del PDH, con recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. La cooperación internacional ha respondido al llamado, como un complemento al esfuerzo interno del PDH para desarrollar las acciones, programas y proyectos definidos en su Plan Marco de Trabajo 2008-2012, correspondiente al segundo período de su gestión, en tanto que la asignación de recursos provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación resulta insuficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionalmente asignadas, así como las que le confieren otras leyes

- relacionadas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la población guatemalteca.
- Adicionalmente, se han realizado gestiones para poder continuar con la ejecución de proyectos financiados por la cooperación internacional, así como con nuevas propuestas de cooperación en temas prioritarios para la institución. Entre las gestiones de continuación se puede mencionar, la cooperación con la Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA), que apoyó en el presente año a la Dirección de Estudio, Análisis e Investigaciones y a la Dirección de Relaciones Internacionales. Adicionalmente, se realizaron gestiones ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para apoyar el Registro Unificado de Desaparición Forzada (RUDFOR), la Unidad de Averiguaciones Especiales y el Cen-

tro de la Memoria Histórica. También se están llevando a cabo gestiones con la Asociación para la Defensa, Aplicación y Realización de los Derechos Fundamentales (DAR), de Madrid, España, para continuar con el financiamiento de la segunda fase del programa “Violencia de género en Guatemala” y

la posibilidad de obtener financiamiento para otros proyectos prioritarios para la institución.

- En cuanto a los proyectos que se han presentado ante las distintas fuentes cooperantes para obtener financiamiento se pueden mencionar las siguientes:

Proyectos en gestión

Nombre del proyecto	Monto (miles de US\$)	Fuente donante
Registro de autoridades indígenas	558.7	Suecia y Suiza
Fortalecer la calidad educativa de los maestros de niveles primario, básico y diversificado, en materia de derechos humanos	128.6	OEA
Programa de Convivencia Escolar y Prevención de Violencia	Por definir	KFW y BIRF
Programa de Averiguaciones Especiales	430.0	PNUD
Unidad de Registro Unificado de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición (RUDFOR)	273.0	PNUD
Recuperación del Centro de la Memoria Histórica	800.0	PNUD
Fortalecimiento a la comunicación social del Procurador de los Derechos Humanos, para la atención de la justicia, seguridad y gobernabilidad	156.6	Canadá
Proyecto de fortalecimiento institucional para el abordaje del tema de trata de personas y su nexos con el tráfico ilícito de migrantes, dirigido al personal de la institución.	144.4	UNICEF
Fortalecimiento de la Unidad de Estudio, Análisis e Investigación y de la Unidad de Relaciones Internacionales de la institución del PDH.	211.3	DED y Canadá
Implementación y acciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información del Procurador de los Derechos Humanos	195.2	Taiwán
Fortalecimiento de la Coordinación de Defensorías	541.0	España y Canadá
Programa para mejorar la eficiencia de los derechos humanos	149.9	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Programa de fortalecimiento a la institución del Procurador de los Derechos Humanos	150.0	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Estudio sobre la violencia contra las mujeres en Guatemala	30.0	Asociación para Defensa, Aplicación y Realización de los Derechos Fundamentales, Madrid, España.
TOTAL	3,768.7	

Seguimiento a la ejecución de proyectos

La DRI ha velado por el debido cumplimiento de los objetivos y compromisos de cada uno de los proyectos en ejecución, de conformidad con lo estipulado en los respectivos convenios de cooperación internacional que respaldan su financiamiento, para lo cual ha realizado visitas *in situ* al interior del país y reuniones en la sede central. En paralelo, proporcionó asesoría técnica al

PDH y a las unidades ejecutoras, en la elaboración de los informes requeridos por cada cooperante en el marco de los convenios suscritos. La cartera de proyectos en ejecución financiados durante 2009 con recursos de la cooperación internacional fue de seis, de los cuales se ejecutó un monto de Q3,616,940.80.

No.	Fuente	Nombre del proyecto	Unidad ejecutora
1	Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA)	Fortalecimiento de la Unidad de Estudio y Análisis, de la Unidad Científica de Investigación Social y de la Dirección de Relaciones Internacionales de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Fase II	Dirección de Estudio, Análisis e Investigaciones y Dirección de Relaciones Internacionales
2	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Programa para mejorar la eficiencia de la procuraduría de los derechos humanos de Guatemala, Cooperación Técnica ATN/SF-9107-GU.	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección de Relaciones Internacionales
3	Plan Internacional	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Comunidad dentro del Marco Municipal en Jalapa	Auxiliatura Departamental de Jalapa
4	Plan Internacional	Fortalecimiento de las Organizaciones de la Comunidad dentro del Marco Municipal en Jalapa.	Auxiliatura Departamental de Jalapa
5	Plan Internacional	Fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad dentro del marco municipal en Baja Verapaz, para las Unidades de Programa de Salamá y Rabinal	Auxiliaturas Departamentales de Salamá y Rabinal
6	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)	Aumento de las capacidades de la Defensoría de la Niñez en la defensa y protección de los derechos humanos, PDH	Defensoría de la Niñez y la Adolescencia

9. Dirección de Tecnología e Informática (DTI)

Acciones emprendidas

- Emisión e impresión de 2,073 constancias de antecedentes en derechos humanos, incluyendo las solicitadas por la Comisión de Postulaciones de Magistrados del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia.
- Integración y coordinación entre la Oficina de Antecedentes, la Unidad de Información y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, para dar respuesta a solicitudes.
- Digitación de 4,810 boletas, que corresponden a 82 boletas diseñadas en el área de Procesos de la DTI, para 18 supervisiones administrativas.
- Diseño del formato para el Manual de Organización y Funcionamiento de la institución, con sus respectivos manuales de llenado y utilización de diagramas de flujo de procedimientos.
- Renovación de las licencias de los dispositivos de seguridad informática, tipo Appliance.
- Migración de *firewall*, dispositivo de seguridad informática (hardware o software utilizado en redes de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas).
- Mantenimiento de servicios de tecnología e informática a toda la institución del PDH (redes, correo electrónico, internet, telefonía, página Web, intranet, sistemas, bases de datos, soporte técnico, digitación, entre otros).
- Integración de Comité de Mejoramiento para la Intranet, Comisión de Acceso a la Información, Comité de Supervisiones y Monitoreos, con el propósito de integrar esfuerzos y procesos, apoyados en la tecnología.

Logros

Organización, estructuración y procesos

- Remodelación del área física, alcanzando y cumpliendo estándares de seguridad informática.
- Implementación de estándar ISO (Organización Internacional para la Estandarización) para flujogramas de procesos y procedimientos.
- Fortalecimiento a la Oficina de Antecedentes: definición, automatización y modificación de procesos.
- Establecimiento del proceso administrativo y canal de comunicación para la coordinación de servicios y requerimientos de la institución a Telgua (proveedor de servicios de acceso a internet para Auxiliaturas).

Sistemas y aplicaciones

- Implementación y funcionamiento de la segunda etapa de la primera fase del Sistema de Gestión de Denuncias (SGD).
- Desarrollo e implementación del sistema de la Unidad de Información.
- Diseño del registro para la carga de la base de datos del sistema de Voluntariado.
- Mejoras al sistema de Antecedentes en Derechos Humanos.
- Mejoras en búsquedas del sistema RUDFOR (Registro Unificado de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición).
- Migración del sistema de digitación.

Redes y servicios Web

- Mejoras en los dispositivos de seguridad informática.
- Interconexión por VPNs (Virtual Private Network o Red Privada Virtual) a 26 de 30 Auxiliaturas, para utilización de correo institucional y acceso a servicios diversos por medio de la intranet.
- Implementación de la fase piloto para utilización de telefonía VoIP (por sus siglas en inglés se refiere a la tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet).

- Modificaciones y mejoras en la página Web de la institución del PDH.
- Modificaciones y mejoras en la intranet, en conjunto con el Comité creado en 2008 para fortalecer esta herramienta como canal interno de comunicación.
- Accesos específicos a URL a través de páginas seguras, con el protocolo https (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto).
- Portal de Información o página Web, en el marco de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, dentro del sitio Web de la institución del PDH.

Soporte técnico

- Formateo de equipo y modificación de configuraciones, para la eliminación y prevención de un virus tipo gusano, que saturó el protocolo de comunicación y conexión de la red interna de la institución.
- Migración del paquete de servicios 2 al paquete de servicios 3 del sistema operativo Windows XP de todas las estaciones de trabajo de la institución.
- Instalación de antivirus a todas las estaciones de trabajo de la institución.
- Se atendieron 1,854 solicitudes de servicio de soporte técnico en 2009.

10. Dirección Financiera

Logros e inversiones

- Durante este período se adquirió regular cantidad de mobiliario, como: escritorios, archivos, sillas, librerías, credenzas, gabinetes, sillones, mesas para centro y mesas para reuniones.
- También se adquirió equipo como: computadoras, scanners, impresoras, ups y servidores.
- Se inició la construcción de la Casa Convento, lográndose construir 329 metros en el primer nivel.

Proyecciones para 2010, 2011 y 2012

- Para 2010, la construcción del segundo nivel de la Casa Convento.
- Para el período 2010 y 2012 se solicitará financiamiento para mejorar el parque vehicular y para la adquisición de un terreno destinado a la construcción de un edificio moderno y funcional para la sede central y la construcción de las Auxiliaturas Departamentales y Municipales.

Ejecución presupuestaria (1 de enero al 31 de diciembre de 2009)

Fuente 11 – Ingresos corrientes

Por programa

Programa	PGR	Presupuesto vigente 2009	Ejecutado a diciembre 2009	% de ejecución
01 Actividades centrales	1	49,103,095	48,917,303	99.62
11 Promoción y educación en derechos humanos	11	13,269,940	13,162,050	99.19
12 Defensa y protección de los derechos humanos	12	38,986,645	38,929,454	99.85
TOTALES		101,359,680	101,008,807	99.65



Fuente 11 – Ingresos corrientes

Por grupo de gasto

Grupo de gasto	Presupuesto vigente 2009	Ejecutado a diciembre 2009	% de ejecución
Servicios personales	77,499,822	77,338,718	99.79
Servicios no personales	13,648,764	13,603,824	99.67
Materiales y suministros	4,913,058	4,843,727	98.59
Propiedad, planta y equipo	2,972,099	2,971,443	99.98
Transferencias corrientes	2,325,935	2,251,096	96.78
Asignaciones globales	2	0	-
TOTALES	101,359,680	101,008,807	99.65

11. Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia

Acciones emprendidas

- Utilización del texto base de la Dra. Maria José Díaz Aguado, con su respectiva autorización, para el seguimiento de la construcción y tratamiento de los módulos del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Gestiones para contratación de personal para complementar el equipo pedagógico, de investigación y de infografía, diseñadores gráficos, equipo de tutores del centro tutorial, para el fortalecimiento, desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos del programa.
- Capacitación del equipo de tutores para el centro tutorial del diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia a nivel nacional.
- Gestiones en diversos procesos técnicos, necesidades institucionales y consultas pertinentes a otros entes y universidades que realizan educación a distancia para el fortalecimiento del diplomado en la página Web de la institución del PDH.
- Reuniones de trabajo semanales y mensuales con el equipo que conforma el Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia, con el objetivo de coordinar, socializar, evaluar y retroalimentar los procesos de construcción de los módulos del diplomado, así como dar las instrucciones pertinentes de seguimiento de procesos por parte del director y subdirectora del Programa.
- Evaluaciones de las etapas del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Ejecución del diplomado en línea.
- Seguimiento del proceso y avance de capacitación de tutores del diplomado.
- Planificación y seguimiento del proceso para la incorporación del diplomado en CD y DVD.
- Evaluaciones semanales, quincenales, mensuales y trimestrales del proceso del diplomado.

Para el conocimiento, promoción y búsqueda de apoyo político y financiero se realizaron varias presentaciones:

- A personal de cooperación internacional, directores, supervisores, y maestros, para coordinar acciones en la gestión de cooperación en proyectos educativos del Programa.
- Presentación del Diplomado de Convivencia Escolar en actividades programadas y solicitadas por Defensorías y otras unidades de la institución del PDH.
- Presentación del Diplomado de Convivencia Escolar a funcionarios del Ministerio de Educación y programación de nuevas presentaciones según planificación del Programa.
- Presentación del Diplomado a funcionarios de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE).

Gestión y eventos

- Acciones coordinadas con el MINEDUC y otras organizaciones educativas, para la promoción e implementación y seguimiento del Diplomado, con la participación de todo el equipo multidisciplinario del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Planificación de eventos y presentaciones del Diplomado, coordinados con el MINEDUC y otras organizaciones e instituciones educativas, para promoción e implementación del mismo.
- Presentaciones del Diplomado en eventos programados por otras áreas de la institución, cuando son solicitadas.

Logros

- Implementación del diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Proceso de validación del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia finalizado en la primera etapa del mismo.
- Reuniones de coordinación con el MINEDUC e INAP para las gestiones pertinentes del Programa.
- Planificación y seguimiento en gestiones, investigación y diseño del curso en línea, en discos compactos y en texto, con el apoyo financiero de la institución del PDH, como segunda etapa del Diplomado.
- Presentaciones permanentes del proceso y avance del Programa a supervisores y dirigentes magisteriales, para su conocimiento y promoción.
- Proceso de incorporación del diplomado en línea, con equipo de infografía y apoyo de la Dirección de Informática de la institución.
- Elaboración de diagnósticos de situación de la educación en derechos humanos, como base para implementar el Diplomado, sobre los derechos de los pueblos indígenas, derechos de la mujer y sobre mediación y resolución de conflictos.
- Gestiones para nuevas presentaciones del proceso, avance y resultados del Diplomado a representantes de las agencias donantes internacionales, a la Dirección Departamental del MINEDUC y a la Asamblea Nacional del Magisterio, directores de colegios y escuelas, para que se involucren en el proceso.
- Elaboración de informes y planificación de eventos y actividades con la participación del PDH y otras unidades de la institución.
- Planificación y ejecución de eventos especiales relacionados con los temas del Programa en los que tiene participación el PDH.
- Seguimiento de gestiones a las instancias correspondientes para la instalación del *Hosting*, para mejorar el desarrollo de las actividades del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Elaboración de la página Web del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- Selección, investigación, mediación pedagógica y diseño de infografía para la producción y tratamiento de los módulos del Diplomado de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia, y de los diplomados que se tienen planificados para el futuro.
- Capacitación permanente de tutores del Diplomado con las modalidades en línea y de forma presencial.

Productos

- Instalación del Centro Tutorial en línea
- Capacitación de tutores en línea, distribuidos en tres etapas durante 2009, desarrollándose un efecto cascada para la cobertura a nivel nacional.
- Evaluaciones de la primera y la segunda etapa del Diplomado de Convivencia Escolar.
- Gestiones en proyectos de cooperación internacional para el fortalecimiento del Diplomado.

12. Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Acciones emprendidas

Resolución

La institución del PDH acumuló expedientes que dieron motivo, el 20 de marzo de 2009, a la Resolución ACUMULADOS AL REFEXPEIO.GUA.208-2007/DESC, del Procurador de los Derechos Humanos, en la cual declara la violación al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca por el gobierno de Guatemala al no garantizar el acceso económico a los productos de la canasta básica ni dar seguimiento a la reglamentación relativa al uso de sustancias adicionadas a productos alimenticios que puedan perjudicar la salud. Declara que existen indicios de responsabilidad por parte del ex ministro de Economía, licenciado Rómulo Alfredo Caballeros Otero, por no ejercer control efectivo dentro de dicho Ministerio, ni velar por la aplicación de políticas claras que beneficien a la población general.

Solicitud de Amparo

El 19 de agosto de 2009, el PDH promovió Acción Constitucional de Amparo contra el CONASAN y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Consejo componente de la estructura orgánica prevista en la Ley, es una entidad impugnada; se establece que las autoridades impugnadas, en pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo en el país en relación con el hambre y la falta de atención médica apropiada, no han cumplido con el mandato constitucional ni legal para el que han sido creadas, violando la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de los Derechos del Niño. En el contexto dado, las entidades

estatales impugnadas también ignoraron la Observación General “12” del Comité DESC, sobre el derecho a una alimentación adecuada; y la misma Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, también su reglamento, e incurrieron en falta de cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y del PESAN.

El Frente contra el Hambre

El Frente contra el Hambre, nacido el 28 de agosto de este año, como un movimiento desde la sociedad civil guatemalteca que propone soluciones ante la actual crisis alimentaria y nutricional, cuenta con el apoyo del PDH, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y diversas organizaciones sociales, cívicas y gremiales, instituciones del Estado, empresas, iglesias de distintas denominaciones, consejos de desarrollo y otras entidades dispuestas a unir esfuerzos para dar respuesta conjunta a la situación de emergencia que atraviesa el país. El Frente contribuirá a establecer un proceso sostenible de manera institucional en el marco del ordenamiento jurídico nacional que lleve a la transformación de Guatemala en un país libre del hambre y la desnutrición. Entre las acciones, iniciales realizadas por el Frente contra el Hambre:

- Atención inmediata a la crisis. A través de la coordinación de la Auxiliatura Departamental de Jalapa se organizó la red de atención a la crisis como plataforma cívico-social e institucional con todas las instancias integradas al Frente, con el fin de identificar los casos de desnutrición aguda y garantizar su inmediata atención; monitorear el abastecimiento del sistema de salud en torno al perfil epidemiológico del lugar que puede afectar a la población desnutrida como grupo vulnerable a tipos de morbilidad y mortalidad afines a la desnutrición; y promover estrategias de abastecimiento de alimentos con valor nutricional a las zonas y familias más afectadas y en riesgo, de manera pertinente para su impacto.
- Iniciar un proceso de instalación técnica de un Sistema de Notificación de Emergencias, así como el establecimiento de una red de informantes que se vinculan de manera electrónica con las organizaciones participantes del Frente por medio del *call center* de la institución del PDH para la recepción de denuncias entorno a la seguridad alimentaria y nutricional, y de aquí se derive la información que debe llegar a todas las instancia que competen de conformidad a la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para su debido conocimiento y acción correspondiente.
- Levantamiento de datos situacionales, con información de fuentes secundarias a nivel nacional,

para identificar el escenario real de la mortalidad y morbilidad por causas directas y adyacentes a la desnutrición, con la finalidad de tener una mayor objetividad, eficacia y eficiencia en la direccionalidad de la atención.

- Constitución de una comisión específica para el análisis del presupuesto 2010 en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional, conformada con técnicos de la sociedad civil, Universidad de San Carlos, Colegios de Profesionales y de la institución del Magistrado de conciencia.
- En la actualidad se sigue una agenda específica y estratégica para la atención a la crisis, que no sólo va dirigida a la atención de casos, sino trasciende a promover y contribuir al fortalecimiento de la capacidad instalada a nivel local y se estructuren, de manera apropiada, los mecanismos que sistematicen los procesos de atención de manera sostenible, en el marco del SINASAN; otras acciones como la observancia a la dirección y calidad del gasto, y la corresponsabilidad institucional presente. También, contribuir a la reinstitucionalización de los procesos en la atención a la SAN, promoviendo el fortalecimiento del CONASAN, SESAN, INCOPAS y establecimiento del Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA) que en la actualidad no existe. El Frente contra el Hambre propicia la implementación a la Política de SAN y el funcionamiento del SINASAN desde los niveles locales, visualizando como necesaria la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de SAN, fortalecido, consensuado y apoyado por todos. Con el fin de conciliar criterios entre las instancias del Frente y el Gobierno, se tuvo una reunión con el Presidente de la República con la finalidad de compartir las inquietudes y la buena intención de cooperar de manera articulada con las instancias de Gobierno en el marco de la Ley del SINASAN.

Creación de verificadores de seguridad alimentaria y nutricional desde el enfoque victimológico

El Relator Especial considera que debería celebrarse el papel tan activo que ha desempeñado el Procurador de los Derechos Humanos en este sentido y se congratula por el hecho de que la institución del Magistrado de Conciencia haya estado aumentando de manera considerable sus esfuerzos por contribuir a la realización del derecho a la alimentación, con algo tan importante como el desarrollo del uso de indicadores como un medio para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas. El abordaje de los Derechos Humanos desde una visión victimológica presupone el conocimiento preciso de las necesidades tanto sentidas como estudiadas con antelación del sujeto individual o colectivo que está siendo víctima de la conculcación de sus derechos fundamentales. Esto

permite partir de hechos sensibles que puedan ser convertidos en indicadores que brinden el camino a la evaluación de las políticas públicas que el aparato estatal debe formular para la búsqueda de la satisfacción o en su defecto, la reparación de la necesidad vulnerada; esto

se ve en el establecimiento y cumplimiento de servicios públicos que responden a políticas establecidas por el Estado, el cual al ser coherente con dichas medidas deberá establecer la inversión social y gasto necesario para su mantenimiento.

13. Programa para la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/Sida y grupos vulnerables

Acciones emprendidas

Legal/jurídico

- Acción Constitucional de Amparo, interpuesta por el Magistrado de Conciencia, el 9 de octubre de 2009, otorgada de forma provisional por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil constituido en tribunal de amparo, ordenando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social proporcionar periódica y constantemente el acceso y abastecimiento a pruebas de carga viral plasmática, así como los medicamentos y tratamientos para enfermedades oportunistas derivadas del VIH y Sida.
- Resolución de violación al derecho humano a la salud por falta de previsión para asegurar la atención médica integral de las personas que viven con VIH o Sida, emitida el 1 de diciembre del 2009 por el PDH.
- Seguimiento de los expedientes de violación a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y Sida y grupos vulnerables.
- Seguimiento del traslado de usuarios de clínica “Yaloc” de Fundación Marco Antonio a las Unidades de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y dado los resultados de la inspección, se remitió informe de la situación de dichas clínicas al Congreso de la República de Guatemala para solicitar su intervención en la crisis de las mismas, las que recibirán a los usuarios el próximo 18 de enero del 2010, con el objeto de prevenir se ponga en riesgo la vida de 642 personas que viven con VIH y Sida.

Investigación y asistencia técnica

- Investigación a las Unidades de Atención Integral de Personas que viven con VIH o Sida del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Planificación y ejecución de investigación en Unidades de Atención Integral de VIH y Sida del MSPAS en los hospitales nacionales, con el objetivo de verificar atención y prestación de servicios médicos a las personas que viven con VIH o Sida, tanto en la calidad como cantidad adecuada. La investigación se llevó a cabo en las clínicas que fueron reportadas con problemas que perjudican el acceso al derecho humano a la salud por parte de la red regional y su observatorio en derechos

humanos y VIH. Los lugares supervisados fueron: Clínica 17 del Hospital Roosevelt, Clínica Yaloc de la Fundación Marco Antonio, Clínica Luis Ángel García y Encamamiento del Hospital General San Juan de Dios, Servicio de Infectología “La Verbena” del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Clínica de VIH y Sida del Hospital San Juan de Dios Quetzaltenango, Clínica de VIH y Sida del Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango, Clínica 12 del Hospital Juan José Ortega de Coatepeque, Clínica de atención integral del VIH y Sida del Hospital regional Dr. Antonio Penados del Barrio de San Benito Petén, Clínica de atención integral de enfermedades infecciosas del Hospital regional de Zacapa y Clínica de atención integral de enfermedades infecciosas del Hospital Nacional de Izabal, Amistad Guatemala-Japón.

- Investigación y seguimiento del traslado de usuarios de Clínica Yaloc de Fundación Marco Antonio a las Unidades de Atención Integral del MSPAS. Las inspecciones se llevaron a cabo en los hospitales regionales de las siguientes localidades: Antigua Guatemala, San Juan Sacatepéquez; Cobán, Alta Verapaz; Cuilapa, Santa Rosa; Escuintla, Quetzaltenango, Petén, Puerto Barrios, Izabal, Zacapa y en la ciudad de Guatemala, en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.
- Se realizaron seis supervisiones generales a los diferentes hospitales nacionales que atienden a personas que viven con VIH y Sida.
- Doce monitoreos de unidades de atención integral a nivel nacional (uno por mes).
- Elaboración de informes de monitoreo y evaluación de las unidades de atención integral a personas que viven con VIH y Sida.
- Intervención ante el Ministerio de Gobernación para solicitar se recomiende a las autoridades de la PNC velar y respetar el derecho de la libre circulación de las personas que viven con VIH y Sida.

Gestión y apoyo de eventos

- Planificación, organización y ejecución del foro nacional: “La importancia de los derechos humanos como pieza fundamental para detener el SIDA” en alusión al día mundial de la respuesta al Sida. El

evento contó con la participación de la red regional y su observatorio en derechos humanos VIH y Sida, personal del MSPAS, Consejo Nacional Empresarial de Prevención del VIH y Sida (CONEVIH), ONUSIDA, OPS, y organizaciones e instituciones que trabajan el tema a nivel nacional.

- Diplomado “Derechos Humanos de las personas que viven con VIH” PDH-USAC, impartido a personal auxiliar de enfermería del hospital Roosevelt, con el objetivo de proporcionar conocimientos acerca de los derechos humanos y sensibilizar al personal respecto del VIH y Sida.
- Participación e intervención en 11 talleres regionales tocantes a derechos humanos y VIH/Sida coordinados por la Red Regional y su Observatorio en Derechos Humanos VIH y Sida con apoyo de Fundación Fernando Iturbide.

Publicaciones

- Documento: “VIH y Derechos Humanos en Guatemala”. Informe y presentación de la prevalencia del VIH y Sida en el país y detalles sobre la violación de los derechos de la población afectada.
- Documental: “Derechos humanos, VIH y Sida”, dirigido y planificado por el Programa de defensa y

- Inicio el 6to. Diplomado en Atención Integral del VIH, Cultura de Paz y Derechos Humanos, en alianza de la institución del PDH, el CONEVIH y la Universidad Rafael Landívar, a través del Departamento de Responsabilidad Social Universitaria.
- Participación e intervención en el foro en políticas públicas de VIH y derechos humanos, dirigido a delegadas de la oficina nacional de la mujer de las diferentes municipalidades del país, en conjunto con Fundación Fernando Iturbide.
- Se llevaron a cabo diez reuniones con la red regional y su observatorio en derechos humanos VIH y Sida, organizadas y dirigidas por el Programa de la institución del PDH, con el objetivo de fortalecer a las personas que viven con VIH y Sida en una cultura de respeto a los derechos humanos.

promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH o Sida y grupos vulnerables, bajo la dirección y producción de la Unidad de Televisión, ambos entes de la institución del PDH.

- Participación en el documental respecto del VIH y Sida elaborado por ONUSIDA Guatemala.

Apoyo y trabajo cooperativo

- Institucional. Se estableció un trabajo conjunto en el tema de VIH y Sida con diferentes direcciones y jefaturas a nivel interno, lo cual permitió una institucionalización del tema de derechos humanos y VIH/Sida.
- Interinstitucional. Se han coordinado actividades con: defensorías y procuradurías de derechos humanos de América Latina; Red Regional Centroamericana de Derechos Humanos VIH y Sida (REDCA); Red

Regional y su observatorio en Derechos Humanos VIH y Sida; Consejo Nacional Empresarial de Prevención del VIH (CONEVIH); OPS y OMS; ONUSIDA; Universidad de San Carlos de Guatemala; Universidad Rafael Landívar; Clínica Luis Ángel García, Hospital San Juan de Dios; Hospicio San José; OTRANS; Red de la Diversidad Sexual; y Fundación Fernando Iturbide.

14. Programa de Atención a Desastres

Acciones emprendidas

- Elaboración de seis instrumentos para clasificación de riesgos existentes y desastres: Instrumento de observación de las denuncias, para la organización y apoyo a la población vulnerable, para levantamiento de diagnóstico situacional en seis asentamientos de la ciudad capital, elaboración de archivo vertical, verificación de denuncias en los municipios de San José Pinula, Mixco (zona 2 y 8), verificación en 25 puntos de desastres de los municipios de Chinautla y Santa Lucía Milpas Altas, así como Zacapa, Alta Verapaz, Santa Rosa y Escuintla, lo que ha permitido identificar causas de desastres y elaborar perfiles psico-sociales de la población en riesgo.
- Se desarrolló un diagnóstico situacional, tomando una muestra de seis asentamientos de alto riesgo en las zonas 5, 6, 13, 14, 17 y 18 de la capital; además el municipios de San José Pinula, zona 2 y 8 de Mixco, 25 puntos de desastres del municipio de Chinautla, comunidades de Las Cañas, Zorzoyá II, del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, así como los departamentos de Zacapa, Cobán, Chiquimula, y Escuintla. De las 301 viviendas censadas en los asentamientos, todas se encuentran en alto riesgo debido a que están en laderas de barrancos, y por falta de prevención y asesoría técnica, se construyen en un perímetro con inclinación de 40°, aunado a

ello los muros de contención son elaborados de forma empírica. El 65 % de estas viviendas carecen de servicios mínimos, en especial de agua potable, drenajes y luz. Del análisis se pudo establecer que un 80% de los desastres se le atribuye a la negligencia institucional, a la corrupción de algunos funcionarios de alcaldías municipales e instituciones del Estado en materia de desastres.

- En los asentamientos Lo de Reyes y la Lagunilla de San Pedro Ayampuc, en vista de que las instituciones

de competencia se desinteresaron en relación con los compromisos adquiridos ante los pobladores víctimas de desastres; las instituciones estatales retomaron sus compromisos y asumieran otra actitud, después de un período sistemático de reuniones.

- Investigación y asistencia técnica. El levantamiento de diagnóstico situacional sobre condiciones actuales en que están los habitantes de los asentamientos, aportó información para la caracterización de los mismos.

Logros

- Perspectiva de solución de problemas enfrentados por los habitantes de los Condominios del Tesoro y Bambi, zona 2 de Mixco, por intervención de este programa ante el alcalde municipal de Mixco.
- Se logró, después de un proceso sistemático de fiscalización, asesoría y mediación, el traslado provisional de los habitantes del asentamiento El Durazno, municipio de Chinautla hacia la Lagunilla, en San Pedro Ayampuc, y luego, que se les otorgara terreno e insumos para 1,000 viviendas dignas.
- Coordinación y organización con más de 25 asentamientos en lugares de alto riesgo, para hacer propuestas desde sus organizaciones y elaborar proyectos.
- Levantamiento del diagnóstico situacional en asentamientos de alto riesgo a desastres y vulnerabilidad de

la ciudad capital y algunos municipios, permitiendo la elaboración del perfil de la población en riesgo.

- Identificación de tres centros de apoyo para la atención de niños desnutridos en Zacapa y Jutiapa.
- Apoyo (atención psicosocial, entrega de donaciones gestionadas por el programa) a siete comunidades de la población damnificada y en alto riesgo del cerro de los Chorros en San Cristóbal Alta Verapaz.
- Se participó en las reuniones de alto nivel para el monitoreo de las acciones del Estado en relación con las poblaciones en alto riesgo de desastres.
- Mediación en el conflicto de Los Olivos, zona 18.
- Visitas de coordinación con Bomberos Municipales y voluntarios para la capacitación y coordinación en la atención a las víctimas.

15. Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información (SECAI)

Acciones emprendidas

Promoción del derecho humano al acceso a la información pública

- Capacitación de directores, funcionarios y servidores de la institución del PDH; y a auxiliares, oficiales de comunicación social y educadores de las Auxiliaturas departamentales.
- Capacitación de los miembros del Concejo Nacional de Personas con Discapacidad.
- Capacitación, en la ciudad capital, al personal de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Capacitación, en el departamento de Petén, de alcaldes, síndicos, concejales, tesoreros y funcionarios municipales, en un evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer y el PROMUDEL.
- Capacitación de los miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
- Capacitación de funcionarios y servidores de la Municipalidad de Amatitlán, Guatemala.

- Capacitación de miembros del Ministerio de Educación en una actividad organizada por los miembros de la Junta Calificadora del Personal de ese Ministerio.
- Capacitación de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Educación.
- Desarrollo de cinco talleres de la Ley de Acceso a la Información Pública organizados por la agencia de cooperación internacional GTZ y el Programa de Municipios para el Desarrollo Local (PROMUDEL) dirigidos a funcionarios y servidores de las municipalidades del país, en los cuales la PDH participó como panelista.
- Participación en la reunión mensual de la Red de Seguridad Democrática.
- Participación, como panelista, en el foro público “Ley de Acceso a la Información Pública, a tres meses de su vigencia” organizado por el CNAP.

Denuncia, asesoría y seguimiento de casos

La Secretaría Ejecutiva solicitó a la Dirección de Auxiliaturas y a la Dirección Procuración que se iniciara expediente por la presunta violación al derecho humano al acceso a la información pública en los siguientes casos:

- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: por restricción del acceso a la información pública al establecer que sólo la Unidad de Información Pública de la sede central del Ministerio puede atender cualquier solicitud de información y dar la misma.
- Municipalidad de Malacatancito, Huehuetenango: por solicitar, como parte de los requisitos indispensables para obtener información pública, boleto de ornato, contraviniendo lo estipulado en la Ley.
- Municipalidades de San Gabriel, Suchitepéquez; y de Cuilco, Huehuetenango: por no contar con Unidad de Acceso a la Información.

- Municipalidad de San José del Golfo, Guatemala: haber vencido el plazo para la entrega de información relativa a salarios, dietas, viáticos, etc., no obstante dicha información es pública de oficio para los sujetos obligados.
- Municipalidad de Santa Catarina Palopó, Sololá: clasificó como información reservada el directorio de empleados y servidores públicos, incluyendo número de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no privados, incluyendo: salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos; y los informes finales de las auditorías gubernamentales o privadas, conforme a los períodos de revisión correspondientes.

Por otra parte se rindió dictamen en varias denuncias que recibió la institución por violación al derecho humano al acceso a la información pública.

Supervisión administrativa

Los días 12 y 13 de noviembre de 2009 se supervisó a 27 sujetos obligados que pertenecen a distintos grupos institucionales y se recolectó información del Organismo Ejecutivo a través de cinco ministerios y cuatro secretarías; del Organismo Legislativo, del Organismo Judicial, de seis entidades autónomas y descentralizadas y de diez

municipalidades. De la información recabada se evaluó el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en dos aspectos, el primero relacionado con la conformación y funcionamiento de las Unidades de Información Pública y el segundo, la puesta a disposición de la información pública de oficio.

Informe anual, autoridad reguladora

En el mes de noviembre, el PDH dirigió a 407 sujetos obligados un cuestionario con preguntas relacionadas con la implementación y cumplimiento de la Ley de

Acceso a la Información Pública y el formato del informe anual que se debe presentar a esta institución. El cuadro siguiente detalla los resultados obtenidos.

Sujeto obligado	Solicitudes recibidas	Respuesta				Impugnaciones recibidas
		Positiva	Negativa	Desechadas	Pendientes	
MINISTERIOS						
Ministerio de Energía y Minas	366	354	0	0	12	0
Ministerio de Gobernación	424	342	46	34		2
Ministerio de Trabajo	96	95	1	0	0	0
Ministerio de la Defensa Nacional	139	105	21	3	7	3
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	145	139	1	0	5	0
Ministerio de Cultura y Deportes	249	244	3	1	1	0
Ministerio de Relaciones Exteriores	115	89	16	6	4	0
Ministerio de Economía	676	587	0	89	0	0
Ministerio de Finanzas Públicas	394	340	10	33	11	0
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	522	492	7	12	2	9
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	69	34	2	23	10	0
SECRETARÍAS						
Secretaría de Salud Alimentaria y Nutricional (SESAN)	109	109	0	0	0	0
Secretaría de Planificación de la Presidencia	204	191	1	10	2	0
Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas	1	1	0	0	0	0

Secretaría General de la Presidencia	9	6	2	1	0	0
Secretaría Privada de la Presidencia	1	1	0	0	0	0
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia	53	45	0	5	3	0
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado	3	2	1	0	0	0
GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES						
Izabal	19	19	0	0	0	0
Baja Verapaz	1	1	0	0	0	0
Retalhuleu	3	3	0	0	0	0
Santa Rosa	0	0	0	0	0	0
Jutiapa	1	1	0	0	0	0
Escuintla	1	1	0	0	0	0
SECTOR PÚBLICO						
Corte de Constitucionalidad	73	63	7	1	2	0
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)	22	9	6	3	4	0
Registro Nacional de las Personas (RENAP)	151	111	25	13	2	0
Contraloría General de Cuentas	227	211	16	0	0	0
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)	40	39	0	0	1	0
Instituto de Previsión Militar (IPM)	50	39	11	0	0	0
Instituto Nacional de Estadística (INE)	26	26	0	0	0	0
Instituto de la Defensa Pública Penal	3	1	0	2	0	0
Procurador de los Derechos Humanos	146	109	18	18	1	0
MUNICIPALIDADES						
Guatemala	230	182	40	0	1	7
Fraijanes, Guatemala	29	23	2	2	2	0
Villa Nueva, Guatemala	83	83	0	0	0	0
Palencia, Guatemala	8	8	0	0	0	0
Sumpango, Sacatepéquez	2	1	0	1	0	0
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez	0	0	0	0	0	0
Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez	7	7	0	0	0	0
Tecpán, Chimaltenango	7	4	3	0	0	0
El Tejar, Chimaltenango	0	0	0	0	0	0
Patzicía, Chimaltenango	3	3	0	0	0	0
Guastatoya, El Progreso	2	2	0	0	0	0
El Jícaro, El Progreso	6	3	3	0	0	0
Barberena, Santa Rosa	13	13	0	0	0	0
Casillas, Santa Rosa	1	0	0	0	0	0
Mataquescuintla, Jalapa	0	0	0	0	0	0
Municipalidad de San Luis Jilotepeque, Jalapa	12	12	0	0	0	0
Departamento de Jutiapa						
Pasaco, Jutiapa	3	2	1	0	0	0
Estanzuela, Zacapa	2	2	0	0	0	0
Camotán, Chiquimula	20	19	1	0	0	0
San Jacinto, Chiquimula	10	10	0	0	0	0
Esquipulas, Chiquimula	10	10	0	0	0	0
Raxruhá, Alta Verapaz	2	2	0	0	0	0
San Pedro Carchá, Alta Verapaz	16	16	0	0	0	0
Tactic, Alta Verapaz	1	1	0	0	0	0

Salamá, Baja Verapaz	48	35	12	0	1	0
San Jerónimo Baja Verapaz	8	8	0	0	0	0
Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz	12	12	0	0	0	0
Morales, Izabal	13	13	0	0	0	0
Puerto Barrios, Izabal	7	6			1	0
Santa Elena, Peten	2	2	0	0	0	0
Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango	3	3	0	0	0	0
Costa Cuca, Quetzaltenango	1	1	0	0	0	0
Salcajá, Quetzaltenango	38	36	2	0	0	0
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	1	1	0	0	0	0
Quetzal, San Marcos	3	3	0	0	0	0
El Rodeo, San Marcos	4	3			1	0
Sipacapa, San Marcos	0	0	0	0	0	0
San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	39	39	0	0	0	0
San Pablo La Laguna, Sololá	6	6	0	0	0	0
San Pedro la Laguna, Sololá	0	0	0	0	0	0
Santa María Visitación, Sololá	0	0	0	0	0	0
San Antonio Palopó, Sololá	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz Muluá, Retalhuleu	3	3	0	0	0	0
Samayac, Suchitepéquez	5	4			1	0
Santa Bárbara, Suchitepéquez	1	1	0	0	0	0
Chicacao, Suchitepéquez	16	14			2	0
San Juan Bautista, Suchitepéquez	0	0	0	0	0	0
Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez	12	7		4	1	1
Canillá, El Quiché	3	3	0	0	0	0
Unión Cantinil, Huehuetenango	0	0	0	0	0	0
Chiantla, Huehuetenango	7	7	0	0	0	0
Totonicapán	10	10	0	0	0	0
TOTAL	5,047	4,429	258	261	77	22

Informe anual, autoridad reguladora – resumen

Respuesta a solicitudes recibidas por sujetos obligados	Cantidad	Porcentaje
Positivas	4,429	87.76
Negativas	258	5.11
Desechadas	261	5.17
Pendientes	77	1.53
Recurso de revisión	22	0.44
Total solicitudes recibidas	5,047	100.00

Comisión de Acceso a la Información

La Comisión de Acceso a la Información sesionó 21 veces durante 2009 dando lugar a igual número de actas, en cada una de la cuales obran las deliberaciones y decisiones sometidas a conocimiento de dicho cuerpo

colegiado. A esta instancia le fue puesta a su discusión y aprobación cada una de las acciones que la SECAI ejecutó durante este año.

Productos

- La SECAI impulsó el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública a partir de la adecuada implementación de la misma en la propia institución del PDH, con lo cual se desarrollaron varios documentos con los procedimientos de las

acciones que deben realizar las distintas direcciones y unidades de la institución al momento de recibir una solicitud de información pública, de acceso, modificación o rectificación de datos personales. Los documentos elaborados son los siguientes: Guía de

procedimiento y diagrama de flujo para: solicitud de acceso a la información; ampliación de plazo de tiempo de respuesta; Auxiliaturas Departamentales, Municipales, Regionales y Móviles; de Archivos de Datos Personales; de Recurso de Revisión.

- Junto con la Unidad de Información Pública y la Dirección de Tecnología e Informática se desarrolló un programa que permite, de forma automatizada, desarrollar el proceso, dar seguimiento y controlar el estado de cada una de las solicitudes de información que se presentan a la institución.
- Se diseñó el formato único para la rendición del informe anual por parte de los sujetos obligados, el cual, como se indicó con anterioridad, se entregó a 410 sujetos obligados.
- Se elaboró una “Matriz de Evaluación” del cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la Ley

de Acceso a la Información Pública en la cual se examinaron dos aspectos: conformación y funcionamiento de las unidades de información pública y la información pública de oficio, en ambos casos a partir de la enumeración de doce aspectos a evaluar.

- Diseño de dos cuestionarios: el primero se estructuró para analizar y determinar la designación y funcionamiento de las Unidades de Información Pública, generándose para ser contestado por el titular de la misma. El segundo, para determinar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de poner a disposición la información pública de oficio a través de su portal electrónico, el cual se efectuó con la verificación de cada uno de los portales electrónicos de los sujetos obligados.

16. Unidad Contra la Impunidad

Acciones emprendidas

- Seguimiento y acompañamiento a varios casos en el Ministerio Público, Organismo Judicial en coordinación con la Dirección de Procuración y otras unidades para obtener resultados, varios de los cuales han finalizado en favor de las víctimas.
- Supervisión Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): estudio, análisis, elaboración de boletas y seguimiento en la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación del plan de supervisión y boletas, elaboración del plan operativo, inducción a los entrevistadores. Entrega de informes preliminares de observación y boletas de la supervisión realizada a nivel nacional y revisión del informe final; elaboración de análisis estadístico, preparación de inventario de documentación existente en esa entidad.
- Supervisión sobre femicidio, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar: estudio, análisis, elaboración de boletas y seguimiento del plan de supervisión, elaboración del plan operativo, inducción a los entrevistadores de la supervisión al Organismo Judicial, Ministerio Público y PNC, coordinación con la Unidad de Control Administrativo para la realización de la supervisión a las tres entidades anteriormente mencionadas; coordinación con la Dirección de Tecnología e Informática, la Defensoría de la Mujer, el departamento de Notificaciones y la Dirección de Auxiliaturas. La Supervisión se realizó en una muestra de 10 departamentos y 11 municipios, el objetivo de la selección de esta muestra tiene como referente el nivel de frecuencia con que se han desarrollado las muertes de mujeres, en el entendido que la violencia

contra las mujeres y la violencia intrafamiliar es un fenómeno que se da con recurrencia en dichos municipios. Entrega de informes preliminares de observación, boletas y toda la documentación recopilada de la supervisión realizada a la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación para elaboración del informe final.

- Supervisión administrativa realizada al Organismo Judicial con énfasis en la independencia judicial y la lucha contra la impunidad y corrupción.
- Análisis estadístico administrativo sobre el rendimiento, en 2008, de juzgados, tribunales y salas de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial.
- Se contribuyó al proceso de elaboración de la propuesta, con cuatro instituciones más, a los tres poderes del Estado en el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia-ANSJ-, así como el seguimiento a esfuerzos interinstitucionales en el grupo técnico Grupo Garante “G-4” por parte de la institución del PDH, en el análisis del cumplimiento y desarrollo de dicho acuerdo.
- Implementación del convenio entre el Ministerio Público y la institución del PDH, en cinco áreas de trabajo: capacitación, casos paradigmáticos, atención a la víctima, protección y perfil de testigos, y reformas legislativas, las cuales se han ido ejecutando en un 50%.
- Estudio y análisis en relación con la iniciativa de Ley Número 3590, “Comisión de búsqueda de personas, víctimas de la desaparición forzada y otras formas de desaparición”.

Coordinación interinstitucional

- Convenio de Cooperación PDH-MP. Suscrito con el objeto de “adoptar planes, programas y disposiciones orientadas a garantizar la protección efectiva de los derechos de las víctimas de violación de los derechos humanos, de las víctimas de hechos ilícitos y de las personas afectadas por la falta de acceso a la justicia”. De enero a julio de 2009, se celebraron 17 sesiones distribuidas así: seis sesiones en el Ministerio Público para tratar problemas de la Oficina de Protección de Testigos, once sesiones en la institución del PDH para elaborar un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual, con participación del Ministerio Público, el INACIF, los directores de los hospitales

San Juan de Dios y Roosevelt y la institución del PDH. Los derechos humanos protegidos con el protocolo son: a la salud, a la vida, dignidad e integridad de las personas, al pudor, a la indemnidad sexual y el interés superior de la niñez. Solicitud de datos estadísticos sobre femicidio y violencia contra la mujer al Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), al Sistema Informático de Control de Casos del Ministerio Público (SICOMP), al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Policía Nacional Civil, para hacer el informe final de la supervisión y un estudio sobre el tema.

Coordinación con organizaciones sociales (nacionales o internacionales)

- Se llevaron a cabo varias entrevistas a representantes de organizaciones y entidades gubernamentales sobre el tema de femicidio, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, con el objeto de obtener información de dichos entes para coadyuvar a la elaboración del informe final de la supervisión realizada. Las organizaciones entrevistadas son: Sobrevivientes,

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia intrafamiliar y Contra las Mujeres (CONAPREVI), Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Tierra Viva, Coordinadora Nacional para la atención legal gratuita de casos de violencia contra la mujer y sus familiares y DPP.

17. Unidad de Auditoría Interna

Acciones emprendidas

- Revisión y validación del Manual de Puestos y Salarios de la institución del PDH.
- Evaluación de los departamentos y unidades de la institución en los siguientes aspectos:
 - ✓ Verificación de procesos de compras y contrataciones inmersos en los pagos a proveedores.
 - ✓ Realización de auditorías administrativas.
 - ✓ Apoyo a las diferentes unidades en relación con eventos de cotización y licitación pública.
 - ✓ Verificación y evaluación del inventario de los activos fijos.
- ✓ Apoyo a la Sección de Inventarios en el proceso de baja de activos fijos.
- ✓ Apoyo a las diferentes unidades en consultas de aspectos administrativos, financieros y legales.
- Evaluación de las operaciones de la Dirección Financiera
- Evaluación de fondos de cooperación internacional
- Elaboración del manual de funcionamiento y procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna.

Productos

- Revisión de validación del Manual de Puestos y Salarios de la PDH.
- Once auditorías administrativas realizadas.
- Tres apoyos en relación con eventos de cotización.
- Una verificación y evaluación de Inventarios de los activos fijos.
- Un curso impartido de inducción al personal de nuevo ingreso en relación con la UDAI y la CGC.
- 36 revisiones de nóminas 011, 022 y 029.
- 5,576 revisiones de cheques de pago a proveedores y a trabajadores
- 492 revisiones de fondos de cajas chicas, gastos varios, combustible y viáticos.
- 492 revisiones de liquidaciones de cajas chicas de gastos varios y combustible.
- Diez realizaciones de auditorías financieras de ingresos y egresos en la sede central y Auxiliaturas.
- 48 revisiones de cálculos de prestaciones laborales.
- 12 revisiones de cajas fiscales y conciliaciones bancarias, así como un estado financiero.
- 186 revisiones de *voucher* de pago a proveedores por cooperación internacional.
- 413 revisiones de honorarios del personal contratado con fondos de cooperación internacional.
- Once revisiones de informes financieros y administrativos de proyectos de cooperación internacional.

18. Unidad de Asesores Jurídicos

Acciones legales

- Inconstitucionalidad General Parcial Nueva, en contra del inciso d) del artículo 5 de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Decreto 46-2007 del Congreso de la Republica. Este artículo se impugnó por violar los artículos 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales establecen las atribuciones del PDH. Dicho proceso ya cuenta con sentencia favorable para el Magistrado de conciencia. Dicho proceso se tramitó ante la Corte de Constitucionalidad.
- Inconstitucionalidad General Parcial del inciso b) del artículo 23 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto 129-07 del Congreso de la República de Guatemala. Dicho artículo se impugnó por violar los artículos 274, 275, 5, 152, 154, 155, 44, 175 y 204 de la Constitución de la República de Guatemala. Dicho proceso se está tramitando ante la Corte de Constitucionalidad.
- Amparo interpuesto a favor de los pacientes que padecen de insuficiencia renal y trasplante renal, en contra de la Junta Directiva del IGSS por la violación al derecho a la salud, a la vida y la integridad física de dichos pacientes, quienes requerían con urgencia medicamento en la calidad y cantidad necesaria para poder sobrevivir, el cual les era negado por dicha institución. En este caso ya existe sentencia favorable para los pacientes mencionados.
- Amparo interpuesto contra la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, por la falta de atención a sus programas, tal es el caso del Programa de Familia Sustituta, Programas de Niños de la Calle, Unidad contra la Trata de Personas y la Unidad del Migrante, cuyas sedes se encontraban cerradas. Dicho proceso ya cuenta con sentencia favorable, de primera instancia y pende de resolución definitiva por la Corte de Constitucionalidad.
- Amparo interpuesto contra la Entidad Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, por la suspensión del servicio de energía eléctrica al Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, acto que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes, así como los insumos médicos que deben permanecer constantemente en lugares que necesitan electricidad. Dicho proceso cuenta con amparo provisional y continúa en trámite.
- Amparo interpuesto contra el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, por la violación del derecho a la salud y peligro grave e inminente de las personas que no habían sido tratadas quirúrgicamente, debido a que el Ministerio no había proporcionado médicos especialistas al departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Roosevelt. Se otorgó amparo provisional y según informe circunstanciado rendido por la autoridad impugnada, los pacientes fueron atendidos con posterioridad a la fecha en que se otorgó dicha medida cautelar.
- Amparo interpuesto contra el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, por la falta de atención inmediata y urgente a la crisis alimentaria y nutricional, específicamente con la niñez de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, decretándose amparo provisional.
- Amparo interpuesto contra el director del Programa Nacional del Sida, por no propiciar ni mantener periódica y de forma constante, el acceso y abastecimiento de las pruebas de carga viral plasmática y recuento de linfocitos CD4, así como el medicamento y tratamiento para enfermedades oportunistas derivadas del Sida, en todas las clínicas y hospitales de atención integral de personas con sida, y que forman parte de la Comisión Multisectorial creada por el Decreto 27-2000 del Congreso de la República de Guatemala, decretándose amparo provisional.
- Amparo promovido a favor de los pacientes que padecen o han sido diagnosticados con enfermedades catastróficas, crónicas y degenerativas, tales como cáncer, padecimientos renales crónicos, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea refractaria, Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), metástasis de pulmón, adenocarcinoma de colon, etc.; en contra del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por la emisión del Acuerdo 09/2009 del 24 de marzo del 2009 y que entró en vigor el 1 de abril, el cual contiene Normativo para el Manejo y Control de Recetas del IGSS, que contiene violaciones relacionadas con la seguridad jurídica, social, supremacía constitucional y principio de legalidad, libertad de acción, la salud, bienestar físico, psicológico e igualdad y dignidad de las personas; por lo que se otorgó Amparo Provisional a favor de las personas afectadas por dicho Acuerdo.

Investigación y asistencia técnica

- Se han emitido 670 dictámenes o estudios jurídicos, dentro de los cuales se realizaron cinco opiniones de anteproyectos de Ley, dos opiniones de convenios, siete opiniones de reglamentos, una opinión de un

acuerdo, dos opiniones de reformas de Ley, dos opiniones de Protocolos y estudios jurídicos de los expedientes tramitados en esta institución.

Anteproyectos de ley

- Opinión sobre la iniciativa de Ley de Lugares Sagrados.
- Opinión sobre la iniciativa de Ley que dispone declarar el año 2010 como Año Nacional para la Prevención de la Violencia Juvenil.
- Opinión sobre nuevo cambio de la iniciativa de ley que dispone declarar el año 2010 como Año Nacional para la Prevención de la Violencia Juvenil.
- Opinión sobre la iniciativa de ley 4090 que crea la Ley de Protección de Datos Personales.
- Opinión sobre la iniciativa de ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanas o Degradantes.
- Opinión sobre la iniciativa de Ley Nacional de Migración.

Reformas de Ley

- Opinión referente a la reforma a la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, propuestas por la CICIG.
- Opinión acerca de la reforma a la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante.

Acuerdos

- Revisión de Acuerdo de Reclasificación del Departamento de Educación.

Convenios

- Opinión referente al Convenio entre InWent-Internationale y la institución del PDH.
- Opinión en relación con el Convenio de Cooperación entre el PDH, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) y la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR).

Reglamentos

- Opinión acerca de cuatro reglamentos emitidos por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República que norman el régimen disciplinario a aplicarse en los centros juveniles.
- Opinión concerniente al Proyecto de Reglamento del Consejo Asesor del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA).
- Opinión pertinente al Reglamento del CONAMIGUA.

Protocolos

- Opinión referente al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Opinión conexas al Protocolo Interinstitucional de Actuación, a suscribirse entre los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, el Ministerio Público, el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala y la institución del PDH, en la atención de víctimas de violación sexual y maltrato.

19. Unidad de Información

Acciones emprendidas

Se recibieron, tramitaron y resolvieron 133 solicitudes de acceso a la información pública de la institución del PDH, las cuales se detallan a continuación: con lugar, 112; sin lugar, 17; parcialmente con lugar, 2; en proceso, 2.

Solicitudes eliminadas del sistema de acceso a la información

- Diez solicitudes desechadas por ser duplicadas con otras solicitudes o por corresponder a denuncias las cuales se trasladaron a donde corresponde.
- Ocho pruebas o errores en el sistema informático.

Tiempo de respuesta en las solicitudes de acceso a la información

Solicitudes sin prórroga	
Tiempo total en días utilizados	522
Cantidad de solicitudes sin ampliación del plazo	90
Tiempo promedio en días para dar resolución sin prórroga	5
Solicitudes con prórroga	
Tiempo total en días utilizados	653
Cantidad de solicitudes con ampliación del plazo	42
Tiempo promedio en días para dar resolución con prórroga	16
Solicitudes con y sin prórroga	
Tiempo total en días utilizados en las resoluciones	1,185
Cantidad de solicitudes	128
Tiempo promedio en días para dar resolución	9

20. Unidad de Protocolo y Eventos

Eventos relevantes en 2009

- Entrega del Informe Anual Circunstanciado 2008.
- 34 presentaciones de la obra teatral “Un enemigo del pueblo”.
- Presentación del Informe del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional *El derecho a saber*.
- Inauguración del monumento del Centro para la Memoria “La Rosaleda”.
- Reunión del Consejo Consultivo Internacional del Archivo Histórico de la PN.
- Acompañamiento protocolario a Embajadores, Representantes de organizaciones internacionales, Alto Comisionado y funcionarios públicos.
- Presentación de la campaña “Prevención de muerte materna”.
- Visita de Voluntariado “Línea de la Ternura” al *call center*.
- Inauguración del Diplomado en Derechos Humanos, Cultura de Paz e infección por el VIH/Sida.
- Canto por los Derechos Humanos, realizado en el departamento de Petén.
- Homenaje público a los integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de 1984 de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por cumplirse 25 años de su desaparición forzada.
- Presentación de la Orquesta Sin Fronteras en Centro Comercial Fonta Bella y en el Teatro Nacional, para el Cuerpo Diplomático y funcionarios de la institución del PDH, ciudad de Guatemala; en Antigua Guatemala, en Retalhuleu.
- Reconocimiento al Dr. Sergio Morales por premio recibido en la India.
- Despedida de la Coordinadora de DANIDA.
- Reconocimiento a Cristy Turlington, embajadora de Care, por su apoyo a la campaña “Prevención de muerte materna”.
- Presentación del informe *Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en el pleno disfrute de sus derechos*.
- Conmemoración del Día Nacional Contra la Desaparición Forzada y presentación del documental “Luchemos contra el olvido”.
- Visita del Sr. Américo Incalcatera, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- 22 aniversario de la institución del Procurador de los Derechos Humanos.
- Reconocimiento al Sr. Ricardo Gómez-Agnoli por su trayectoria laboral.
- Entrega de vehículo por Danida a nuestra institución.

- Taller de validación de la Matriz de Desempeño 2010.
- Elección y condecoración de Niños Procuradores.
- Seminario-taller “El voto y la representación de los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero” llevado a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Bazar de la cooperativa Coopeinsol.
- Eliminatória del Concurso de Declamación y Oratoria.
- Celebración del Día de la No Violencia Contra la Mujer.
- Clínicas Deportivas.
- Encuentros Deportivos.
- Convivio institucional.
- Montaje de un *stand* y entrega de material con información institucional para estudiantes de nivel primario y secundario en el Rally del Buen Ciudadano organizado por la SAT.
- Reconocimiento al Dr. Sergio Fernando Morales por parte de deportistas discapacitados de AG DEPDIS.
- 52 eventos realizados por las defensorías.
- I Congreso Nacional del Derecho Humano a la Salud.
- 16 conciertos de la Orquesta Sin Fronteras.
- Coordinación en 62 eventos con Auxiliaturas Departamentales.
- Reservación y montaje del Auditorium Carlos García Bauer, para 224 eventos realizados durante el año.
- Conmemoración del Día Internacional contra el VIH/Sida con el Foro “Los derechos humanos como pieza fundamental para detener el VIH/Sida”.
- V Gran Carrera por los Derechos Humanos.
- Certamen Fotográfico “Generación en Generación”.
- 10 desayunos-conferencias con periodistas.
- 10 desayunos-reunión y una cena-reunión del Programa de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia.
- 10 reconocimientos al Dr. Sergio Morales Alvarado.
- Acto de graduación del Diplomado de DDHH, Cultura de Paz y la infección del VIH/Sida.
- Entrega de tamales al Hogar de Ancianos Cabecitas de Algodón, al Hospicio San José y al Hogar de Ancianos San Vicente de Paul.
- Minimaratón de juguetes.
- Entrega de juguetes a las Pediatrías de Unicar e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) zona 9.

21. Unidad del Registro Unificado y Atención de Casos de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición (RUDFOR)

Acciones emprendidas

Investigación hemerográfica

- Se inició investigación hemerográfica para complementar la información al respecto de desapariciones forzadas desde otra fuente documental, que aporta nuevos elementos a la información que RUDFOR ha recopilado. Dicha investigación se inició con el diseño del proceso, la elaboración de herramientas de trabajo, la validación de éstas y la discusión de todo el procedimiento.
- El proceso de la investigación consiste en la recopilación de informaciones hemerográficas relacionadas con desapariciones forzadas o que puedan derivar en las mismas, la sistematización y análisis de la información recopilada y la elaboración de informes periódicos acerca de los avances y alcances de la misma. Toda la información recabada tiene un respaldo digital a través de fotografías de cada nota periodística recopilada y fichada.
- Como productos concretos de la investigación, se ha trabajado en un período de tres años y ocho meses (enero de 1981 a agosto de 1984), elaborando 2,308 fichas hemerográficas, cada una correspondiente a notas periodísticas diferentes, con sus respectivos respaldos digitales (fotografías). Además, se ha imple-

mentado una base de datos que contiene el registro de todas las fichas elaboradas, con los elementos más importantes de la información, así como del medio. La información recabada alimentará la base de datos del RUDFOR, proporcionando informaciones adicionales a los casos ya registrados en esta unidad, lo cual pretende crear mejores condiciones para futuras investigaciones encaminadas a dar con el paradero de los desaparecidos y ha permitido aclarar la situación de varios casos que mantenían el estatus de desaparición forzada, cuyas víctimas, según las fuentes hemerográficas, fueron en algunos casos liberadas, en otros aparecieron en distintas circunstancias y algunos otros, fueron localizados los cadáveres.

Resultado de la investigación hemerográfica

- Hechos que pueden constituir una desaparición forzada o derivar en ella: secuestros, 1,418 víctimas; desapariciones, 1,043; capturas, 83; en total, 2,544 víctimas.
- Otros hechos relacionados con posibles desapariciones forzadas: cadáveres localizados, 2,523 víctimas; identificados en morgues o exhumaciones, 57; personas que aparecieron vivas en diversas

circunstancias o fueron liberadas, 144; siendo 2,724 casos en suma.

- Personas registradas en la base de datos de RUDFOR como desapariciones forzadas y cuya situación, según los medios de prensa, se aclara bajo distintas

circunstancias: personas liberadas, 17; que aparecieron vivas, 17; cadáveres localizados, 33; consignados a tribunales de Fuero Especial, 6; contabilizándose 73 casos por todo.

Datos estadísticos de los casos ingresados a la Base de Datos

Fuente	Casos registrados*	%	Inicio ingreso	Final ingreso
Famdegua	233	4.54	Nov-06	Feb-07
Diario Militar	164	3.20	Dic-06	Mar-07
Programa Nacional de Resarcimiento	449	8.76	Ago-07	Sep-07
Organismo Judicial	17	0.33	Sep-07	Oct-07
Fundación Guillermo Toriello	312	6.08	Oct-07	Dic-07
Procurador de los Derechos Humanos	505	9.84	Ago-06	Nov-09
Expedientes sede central (301)				
Expedientes de Auxiliaturas (188)				
COPREDEH	2,001	39.04	Oct-07	Nov-08
Comisión para el Esclarecimiento Histórico	1,446	28.21	Dic-06	Oct-09
Total	5,127	100.00		

*Cada caso puede comprender una o más víctimas.

Tipo de hecho	Cantidad	%
Desaparición forzada individual	4,197	80.88
Desaparición forzada colectiva	942	18.15
Otro tipo de desaparición	50	0.96
Total	5,189	100.00

Víctimas registradas	Cantidad	%
Femenino	816	11.25
Masculino	6,351	87.59
NS/NR	84	1.16
Total	7,251	100.00

Gestión y apoyo de eventos

- En conmemoración a las mujeres víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado se organizó un homenaje llamado “La Rosaleda”, dentro de las instalaciones del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, en la cual se presentó un documental de la vida de Judith Marlene Gulate Paredes, titulado “No tengo donde llevarle una flor”. Para dicha actividad se contó con la participación de autoridades de gobierno, organizaciones relacionadas con el tema y familiares de las víctimas de desaparición.
- La Unidad RUDFOR organizó, en el auditorium “Carlos García Bauer” de la institución del PDH, la “Conmemoración del Día Nacional Contra la Desaparición Forzada” llevándose a cabo varias charlas al respecto, referente a su perspectiva desde los Acuerdos de Paz, el tema de sanación para los familiares de desaparecidos, y presentación del documental “Luchemos contra el olvido”, con la participación de funcionarios de la institución del PDH y familiares de las víctimas.

Apoyo y trabajo cooperativo

- Respuesta a 33 oficios, solicitando información referente al tema de desapariciones forzadas, de las siguientes instituciones: Ministerio Público, 24 oficios; Fundación de Antropología Forense de Guatemala, 4 oficios; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 2; Cuerpo Voluntario de Bomberos, 1; Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), 1 y Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), 1.
- Los logros más importantes durante el año 2009 se centran en el trabajo desarrollado por la investigación hemerográfica, la realizada en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la alimentación de la base de datos, digitalizando 1,301 nuevos casos sobre desaparición forzada, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Datos estadísticos

Enero-diciembre 2009



Cuadro 1 – DATOS CONSOLIDADOS
Enero a noviembre 2009

AUXILIATURAS	Expedientes de investigación			Acciones específicas														OTROS
	Civiles y Políticos	DESC	Específicos	Orientación	Prevención	Observación	Mediación	Conciliación	Operativo	Acompañamiento	Atención a la Víctima	Intervención inmediata	Seguimiento	Verificación	Exhibiciones personales	TOTAL	%	Llamadas al 1555
Alta Verapaz	51	38	13	180	146		59					15			10	512	2.09	
Baja Verapaz	22	17	11	44	214		36	25		1		3			3	376	1.53	
Chimaltenango	9	7	1	78	267		45	7		2		14	10			440	1.80	
Chiquimula	17	19		68	166		2	1				1			2	276	1.13	
El Progreso	17	10	5	82	110		5	45	21	28	100	42			1	466	1.90	
Escuintla	26	68	16	86	429		69					144			2	840	3.43	
Guatemala	231	693	399	649			586									2,558	10.44	15,257
Guate-móvil I	13	23	10	45	949		13	1	3	4		18			18	1,097	4.48	
Guate-móvil II	48	50	40	155	288				3	16		12			7	619	2.53	
Huehuetenango	21	46	4	30	65							60			1	227	0.93	
Huehue-móvil	2	3	1	255	52	13	16			44	12	39			5	442	1.80	
Huehue-Nentón	5	2		39	4				3	1		21			2	77	0.31	
Izabal	19	27	9	184	547		7								2	795	3.24	
Jalapa	93	70	21	212	166	33	6		22			38				661	2.70	
Jutiapa	96	57	10	127	78		11					18			1	398	1.62	
Petén	41	26	6	12	106	119	103	1	11	202		31			1	659	2.69	
Petén-Poptún	24	12		46	3	8	21	41				16				171	0.70	
El Naranjo	10	1	4	20	43	1	88	1	15	2		2				187	0.76	
Quetzaltenango	46	41	4	77	335		38		18			156			5	720	2.94	
Coatepeque	23	14	1	87	127	25	15					34			8	334	1.36	
Quiché	3	16		270	74	9	49	11	63	132	1,009	401				2,037	8.31	
Quiché-Ixcán	2			26	32		166			2		25			1	254	1.04	
Quiché-Nebaj	2	5	1	347	26		14	1		4		5			1	406	1.66	
Retalhuleu	41	10		143	209							500			2	905	3.69	
Sacatepéquez	14	24	47	159		5	12		17	27		31		11	2	349	1.42	
Sta. Lucía Milpas Altas	1	11	4	3	2	6				4		1				32	0.13	
San Marcos	6	7		64	77		10	8	45	351	351	150			2	1,071	4.37	
Santa Rosa	21	8	7	221	107		3	5			1	47			3	423	1.73	
Chiquimulilla	2	1		40	43	14	6		1			15				122	0.50	
Sololá	51	11	6	292	157	38	94	35	19	218	129	52			2	1,104	4.51	
Santiago Atitlán	18	10		62	38		34		8	93	227	3			4	497	2.03	
Suchitepéquez	137	108	11	186	192	312	19	30	39	111	520	1,239			4	2,908	11.87	
Totonicapán	5	9		167	202	52	281		74	483	650				1	1,924	7.85	
Zacapa	39	61	10	137	281	4	1	7	32	2	23	17				614	2.51	
TOTAL	1,156	1,505	641	4,593	5,535	639	1,809	219	394	1,727	3,022	3,150	10	11	90	24,501	100.00	
%	4.72	6.14	2.62	18.75	22.59	2.61	7.38	0.89	1.61	7.05	12.33	12.86	0.04	0.04	0.37	100.00		

Cuadro 2 (parte 1 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
1	DIGNIDAD															
2	Secuestro									1						
3	Violación sexual															
4	Trato cruel, inhumano o degradante	2			1				1	1					1	
5	Amenazas o intimidaciones	3						3		8					9	3
6	INTEGRIDAD PERSONAL															
7	Tortura	2														
8	Tratos o penas inhumanas o degradantes									3					4	
9	Desaparición forzada							6								
10	Muerte o ejecución extralegal o arbitraria			1												
11	Muerte violenta			1	4			7	2						2	2
12	LA IGUALDAD															
13	Discriminación – racismo		1													
14	Discriminación - nacionalismo									1						
15	Desigualdad jurídica	1			1										1	
16	Falta de atención pública	2													7	
17	LA PERSONALIDAD															
18	Derechos y obligaciones															
19	EL NOMBRE															
20	La falta de registro													1		
21	NACIONALIDAD															
22	Privación arbitraria de nacionalidad									1						
23	LA TOLERANCIA															
24	Represión				1					1						
25	ORDEN Y SEGURIDAD															
26	Falta de asistencia social									1						
27	Abuso de autoridad / poder administrativo	18	17	6	5	8	6	55	3	10	7			10	54	34
28	Uso excesivo de la fuerza						1							1	1	
29	Omisión del funcionario o empleado público en el cumplimiento de sus deberes / discreción administrativa /discreción judicial	17				1	2	9	1	1	4			1	3	34
30	Corrupción				1		4						1		2	9
31	Amenazas, coacción	3	1			2	2	52	1	12				1	1	2
32	Detención ilegal		2		1	2	2	3		1	4		4	1		
33	Detención arbitraria															
34	Omisión de los requisitos de la detención legal							2								
35	Omisión de brindar seguridad preventiva o personal				1		1			1				1		1

Cuadro 2 (parte 1 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	Total	%
1																					
2			1							1										3	0.3
3		3																		3	0.3
4		3							4	2		3								18	1.6
5				1					1								7		2	37	3.2
6																					
7																				2	0.2
8																2				9	0.8
9	2																			8	0.7
10		1																		2	0.2
11	2				1				1	1									1	24	2.1
12																					
13																			1	2	0.2
14																				1	0.1
15									1											4	0.3
16		1												1					1	12	1.0
17																					
18											1									1	0.1
19																					
20																	8		1	10	0.9
21																					
22																				1	0.1
23																					
24																				2	0.2
25																					
26				1																2	0.2
27	18	11	9	22	13	3	1	2	20	5		3	2		29	10	39	3	13	436	37.7
28																				3	0.3
29	1	2		17	4				11				1		16	2	13	2	3	145	12.5
30					1				3								5			26	2.2
31	4	1		3	2					2					1		8		6	104	9.0
32	3				2								2				5			32	2.8
33		1																		1	0.1
34																				2	0.2
35	1			1						1			1							9	0.8

Cuadro 2 (parte 2 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
36	Limitar el derecho de acción o de petición	2								1					1	
37	Linchamientos									2						
38	Impunidad															1
39	Cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos					1				1						
40	DERECHOS POLÍTICOS															
41	Denegación de la libre participación							1								
42	Falta de acceso a la función política															
43	DEBIDO PROCESO															
44	Acceso restringido a tribunales y dependencias del Estado	1														1
45	No presumir su inocencia								2	1						
46	No ser citado y oído en juicio															
47	No ser informado de sus derechos															
48	No contar con el auxilio de un abogado							1								
49	No permitir su defensa							3								1
50	No permitir la utilización de todos los recursos														2	
51	No ser juzgado en un proceso justo e imparcial							1		1	1			3	1	3
52	No permitirle interrogar o hacer interrogar a testigos de cargo y a obtener comparecencia de testigos de descargo que sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo															
53	No tener acceso a instancias plurales (apelaciones)															
54	Discontinuidad y lentitud procesal		1		1	3	6	15	1		1				1	1
55	Incumplimiento del Estado de su deber de prevenir, investigar, sancionar a los responsables de delitos o crímenes										1					3
56	LIBERTAD															
57	Restringir la libertad de expresión: Censura							2								
58	Restringir la libertad de expresión: Falta de acceso										2					
59	Restringir el derecho a ser informado: Falsedad														1	
60	Restringir el derecho a ser informado: Información inexacta				1											
61	Restringir el derecho a ser informado: Información negligente			1		1		13			2					1
62	Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de cátedra								1							
63	Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de reunión								1							
64	Denegación de la libertad social: Restricción a la libertad de movimiento o circulación						1	7			1				2	
65	Violación del derecho a la intimidad: Violación al secreto de las comunicaciones							51								
66	TOTAL MENSUAL	51	22	9	17	17	26	231	13	48	21	2	5	19	93	96
67	%	4.4	1.9	0.8	1.5	1.5	2.2	20.0	1.1	4.2	1.8	0.2	0.4	1.6	8.0	8.3

Cuadro 2 (parte 2 de 2)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	Total	%
36										1					4	1	24			34	2.9
37				1													1			4	0.3
38																				1	0.1
39																				2	0.2
40																					
41																				1	0.1
42																	1			1	0.1
43																					
44																				2	0.2
45																1				4	0.3
46																	1			1	0.1
47																	5			5	0.4
48																	1		1	3	0.3
49		1														1	1		1	8	0.7
50																	1			3	0.3
51	3													1			12		1	27	2.3
52																			1	1	0.1
53																1				1	0.1
54	4						1								1		5		1	42	3.6
55																				4	0.3
56																					
57																				2	0.2
58										1										3	0.3
59																				1	0.1
60	2												15						3	21	1.8
61																			3	21	1.8
62																				1	0.1
63	1																			2	0.2
64																				11	1.0
65																				51	4.4
66	41	24	10	46	23	3	2	2	41	14	1	6	21	2	51	18	137	5	39	1156	100.0
67	3.5	2.1	0.9	4.0	2.0	0.3	0.2	0.2	3.5	1.2	0.1	0.5	1.8	0.2	4.4	1.6	11.9	0.4	3.4	100.0	

Cuadro 3
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS –
Resumen expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa	Petén
1	Dignidad	5			1			3	1	10					10	3	
2	Integridad personal	2		2	4			13	2	3					6	2	4
3	La igualdad	3	1		1					1					8		
4	La personalidad																
5	El nombre													1			
6	Nacionalidad									1							
7	La tolerancia				1					1							
8	Orden y seguridad	40	20	6	8	13	19	121	5	30	15		5	15	62	81	27
9	Derechos políticos							1									
10	Debido proceso	1	1		1	3	6	20	3	2	3			3	4	9	7
11	Libertad			1	1	1	1	73	2		3	2			3	1	3
12	TOTAL	51	22	9	17	17	26	231	13	48	21	2	5	19	93	96	41
13	%	4.4	1.9	0.8	1.5	1.5	2.2	20.0	1.1	4.2	1.8	0.2	0.4	1.6	8.0	8.3	3.5

Cuadro 3
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS –
Resumen expedientes de investigación iniciados

	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	Total	%
1	6	1	1					5	3		3					7		2	61	5.3
2	1			1				1	1						2			1	45	3.9
3	1							1					1					2	19	1.6
4										1									1	0.1
5																8		1	10	0.9
6																			1	0.1
7																			2	0.2
8	15	9	45	22	3	1	2	34	9		3	6		50	13	95	5	22	801	69.3
9																1			2	0.2
10	1					1							1	1	3	26		5	101	8.7
11									1			15						6	113	9.8
12	24	10	46	23	3	2	2	41	14	1	6	21	2	51	18	137	5	39	1,156	100.0
13	2.1	0.9	4.0	2.0	0.3	0.2	0.2	3.5	1.2	0.1	0.5	1.8	0.2	4.4	1.6	11.9	0.4	3.4	100.0	

**Cuadro 4 (parte 1 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
1	LIBRE DETERMINACIÓN														
2	Barreras comerciales														
3	Restricciones al derecho a la propiedad									4					
4	Injusticia tributaria													1	
5	CONSUMIDOR Y USUARIO														
6	Fraude	1								1					
7	Negación o insuficiencia de información sobre todos los aspectos de productos de consumo							2							
8	Falta de advertencia sobre uso y riesgo en el uso de productos						1	1							
9	Agua contaminada									1					
10	Abusos contractuales – contratos leoninos	3	1							1					1
11	Desabastecimiento						1	10	8	4					
12	Alzas inmoderadas de precios y tarifas							50	1	3				1	2
13	Incumplimiento de normas de seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo						1	5			1				5
14	Inexistencia de medidas que permitan que los consumidores obtengan compensación							1							
15	Ausencia de políticas públicas a favor del consumidor							2		1					1
16	Precios inaccesibles de medicamentos y servicios			1											
17	ALIMENTACIÓN														
18	Hambruna					1		20							
19	Inseguridad alimentaria		1					2							
20	Desnutrición y sus consecuencias (problemas del crecimiento, dificultades motrices, en el funcionamiento de los sistemas inmunológicos y de reproducción, diarrea, reducción de nivel de juego y actividades, limitación del desarrollo y cognoscitivo, malformaciones como médula bífida, ceguera, raquitismo)							3						1	
21	Servicios públicos										1				
22	SALUD														
23	Epidemia (cólera morbus, enfermedades diarreicas agudas, dengue, malaria, rabia, sida, meningitis)								3		3			2	2
24	Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental (aire, agua, alimentos)				1			1		1					
25	Ausencia de condiciones de salubridad (medio ambiente, alimentación y nutrición adecuadas, vivienda digna)							2		7					6
26	Cierre o cobertura insuficiente de hospitales y centros de salud		1					6							2
27	Insuficiente personal sanitario					1									
28	Insuficiente cobertura de inmunización														
29	Contaminación hospitalaria														
30	Mala práctica médica		1				3	9			1			1	
31	Cobros ilegales				1	1		3			2				
32	Falta de atención o asistencia médica				1	2	1	48			1			2	2
33	Mala atención en centro de salud		2		1		1							1	
34	Negligencia médica					1		8			2			2	

**Cuadro 4 (parte 1 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
1																						
2											1										1	0.1
3																					4	0.3
4																					1	0.1
5																						
6	1	1												1				3			8	0.5
7																					2	0.1
8			1																		3	0.2
9							3					1									5	0.3
10																					6	0.4
11	1	1			2						5							4		1	37	2.5
12	7	3	2		1											1		9			80	5.3
13							1											7			20	1.3
14																				1	2	0.1
15																				1	5	0.3
16																					1	0.1
17																						
18					1													1			23	1.5
19	1								1												5	0.3
20																			6		10	0.7
21																					1	0.1
22																						
23																					10	0.7
24					2							1	2			2					10	0.7
25							8			3		3				1		12		2	44	2.9
26	2				1	2			1					1						1	17	1.1
27																					1	0.1
28	1																			1	2	0.1
29			1																		1	0.1
30					1						1			2	1				1		21	1.4
31		1																		1	9	0.6
32		1					1		2											6	67	4.5
33	1						1					1								3	11	0.7
34	1	3	2																	2	21	1.4

**Cuadro 4 (parte 2 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
35	Medidas inadecuadas para la rehabilitación.				1			2							
36	Falta de equipo médico o equipo médico inadecuado							3							2
37	Negación de atención médica				1			14							2
38	Negación o falta de medicamentos							51							
39	Cobros en consulta externa y emergencias														
40	TRABAJO														
41	Omisión de políticas de Estado en materia laboral	1					4	3				1			
42	Persecución y violencia contra el trabajador y sus organizaciones	2	1		2	1	2	88			5			3	1
43	No evolución del salario		1					4			1				
44	Subempleo		1					1							
45	Renumeración desigual (rural, mujer, niños)									1					
46	Falta de negociación						1	4		1					
47	Despido ilegal o injusto	1	1		2			27		1	3				5
48	Omisión de fiscalización por parte del Estado		1												
49	Omisión administrativa (comisiones paritarias)							1		1	4				3
50	Falta de cumplimiento de condiciones de trabajo	9		1	3	1	4	66	1	3	1			2	2
51	Falta de pago de las prestaciones laborales				1		2	34	1	1	1	1	2		5
52	Despido injusto	1				1	3	14	1	1	1				
53	Restricciones a la libertad sindical							8			2				
54	EDUCACIÓN														
55	Acceso insuficiente a la formación profesional							16							
56	Acceso insuficiente a la educación primaria gratuita	2		1			1	1	1	1	2				
57	Acceso insuficiente a la enseñanza secundaria	2					2	2			2	1			
58	Desigualdad en el acceso a oportunidades de educación	3			2			21	1	1					4
59	Deserción escolar														
60	Educación NO orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de la dignidad	1						11							
61	Falta de capacitación para participar efectivamente en sociedad							1							
62	Falta de educación en la comprensión, tolerancia y amistad						1			1					
63	No ser capacitado para lograr una subsistencia digna, el mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad								1						
64	Imponer a los padres el tipo de enseñanza para sus hijos								1						
65	No ser escuchado														3
66	Falta de oportunidades de participación en la toma de decisiones en situaciones reales		1												1
67	No ser tratado con justicia						3	1		1	3			1	2
68	No ser informado / formado acerca de las consecuencias de sus decisiones y de los actos derivados de ellas													1	
69	No ser respetado			1			2				1				
70	Falta de insumos y material didáctico		1				1	1							2

**Cuadro 4 (parte 2 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
35	3																				6	0.4
36					2											1				2	10	0.7
37		1	1		1							1							1		22	1.5
38					1												1			4	57	3.8
39																				1	1	0.1
40																						
41	1	1			2													4			17	1.1
42					7	1					2							1			116	7.7
43	1																				7	0.5
44																					2	0.1
45																		1			2	0.1
46	2				2	1								1			1				13	0.9
47																2				2	44	2.9
48	1																				2	0.1
49	10		1		3																23	1.5
50	2				1					2	1			2				2		9	112	7.4
51	1	3	1									1						1		2	57	3.8
52	4	1										1								1	29	1.9
53																					10	0.7
54																						
55																					16	1.1
56	1										1		1								12	0.8
57	1										2										12	0.8
58	1				3				1									1			38	2.5
59		1																			1	0.1
60																					12	0.8
61																					1	0.1
62											1										3	0.2
63																					1	0.1
64																					1	0.1
65	1																	1		1	6	0.4
66										1											3	0.2
67	1	1			1	1							1				1	3		1	21	1.4
68																					1	0.1
69	1				6	2					1							3			17	1.1
70					1					1			1			1					9	0.6

**Cuadro 4 (parte 3 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
71	Falta de infraestructura						1	3			1				1
72	Incrementos de cuotas de estudio							3		2					
73	VIVIENDA														
74	Vivienda inadecuada							4	1		1				
75	Inseguridad jurídica de la tenencia	2					3	8		4	1				
76	Falta de servicios, materiales e infraestructura	1			1			2	1	1					
77	Inasequibilidad de la vivienda (precios, créditos)							1							
78	Inaccesibilidad a centros de empleo, servicios de salud, guarderías, escuela, etc.							1							
79	DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL														
80	Inexistente cobertura social	2													3
81	Insuficiente cobertura social de riesgos	2		1			2								
82	Insuficiente cobertura social a beneficiarios				2		2							1	3
83	Discriminación en el acceso a los beneficios de la cobertura social	1					10	3						2	2
84	Negación y retiro del derecho a gozar a la seguridad social						1	13						1	
85	Negación de pensión por invalidez o sobrevivencia						2	46							2
86	DERECHO A LA CULTURA Y LA CIENCIA														
87	No apoyar la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura							1							
88	No respetar el patrimonio natural y cultural	1													
89	No facilitar el disfrute del derecho a la recreación y al deporte														1
90	DERECHO AL DESARROLLO														
91	Modelo económico que propicia la desigual distribución de la riqueza					1	2	4	1	1					
92	Ausencia de políticas de productividad, educación, empleo, etcétera		2				4	23	1					1	
93	DERECHO A LA PAZ														
94	Agresión			1											
95	MEDIO AMBIENTE SANO														
96	Contaminar, degradar o dañar el aire por emanaciones tóxicas							8		1	6				
97	Contaminación visual						1								
98	Contaminación sonora							18		1					
99	Contaminación del agua por desechos tóxicos o peligrosos	1	1				3							2	
100	Distribuir agua contaminada	1													
101	Deforestación							3						1	2
102	Manejo inadecuado de residuos peligrosos o tóxicos		1				2	2							
103	Desviar o detener de su curso normal el agua									1					
104	Arrojar residuos a las aguas de los ríos, riachuelos, manantiales y lagos			1						1					
105	Descargar aguas servidas en los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes						1			2					1
106	Realizar, permitir o autorizar actividades industriales o comerciales ambientalmente peligrosas	1						2							1
107	Cortar, recolectar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora o fauna silvestre sin contar con licencia							1							

**Cuadro 4 (parte 3 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
71					4					1						2	1			3	17	1.1
72												1								2	8	0.5
73																						
74																		2			8	0.5
75		1									1	1						8		1	30	2.0
76					1					2								3			12	0.8
77																					1	0.1
78																		1			2	0.1
79																						
80			2			1											3	4			15	1.0
81			1		2								1					6			15	1.0
82	3	5				1							1					3		6	27	1.8
83																		22			40	2.7
84																				2	17	1.1
85																					50	3.3
86																						
87																					1	0.1
88											1									1	3	0.2
89																		1			2	0.1
90																						
91																					9	0.6
92		1					1													2	35	2.3
93																						
94																					1	0.1
95																						
96	1					1					4									1	22	1.5
97																					1	0.1
98											2							1			22	1.5
99																1	3	3			14	0.9
100																		1			2	0.1
101				1							1										8	0.5
102														1					1		7	0.5
103																					1	0.1
104																					2	0.1
105	1						1													1	7	0.5
106	6																				10	0.7
107																					1	0.1

**Cuadro 4 (parte 4 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
108	Promover, facilitar o invadir tierras ubicadas dentro de áreas protegidas con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito														
109	Transportar, intercambiar, comercializar o explotar ejemplares vivos o muertos o derivados de flora o fauna silvestre amenazadas en extinción, así como de las endémicas y especies consideradas dentro de listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicadas por CONAP													1	
110	Destrucción de los Recursos No Renovables														1
111	TOTAL MENSUAL	38	17	7	19	10	68	693	23	50	46	3	2	27	70
112	%	2.5	1.1	0.5	1.3	0.7	4.5	46.0	1.5	3.3	3.1	0.2	0.1	1.8	4.7

**Cuadro 5 – Resumen expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
1	Libre determinación								4				1			
2	Consumidor y usuario	4	1	1		3	71	9	11	1			1	9	9	
3	Alimentación		1			1	25			1			1		1	
4	Salud		4		6	5	5	147	3	8	9		8	16	8	
5	Trabajo	14	5	1	8	3	16	250	3	9	18	2	2	5	16	22
6	Educación	8	2	2	2		11	60	4	6	9	1		2	13	6
7	Vivienda	3			1		3	16	2	5	2					
8	Derecho a la seguridad social	5		1	2		17	62					4	10	3	
9	Derecho a la cultura y la ciencia	1						1						1		
10	Derecho al desarrollo		2			1	6	27	2	1			1			
11	Derecho a la paz			1												
12	Medio ambiente sano	3	2	1			7	34		6	6		4	5	8	
13	TOTAL	38	17	7	19	10	68	693	23	50	46	3	2	27	70	57
14	%	2.5	1.1	0.5	1.3	0.7	4.5	46.0	1.5	3.3	3.1	0.2	0.1	1.8	4.7	3.8

**Cuadro 4 (parte 4 de 4) – Expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
108		1																			1	0.1
109																					1	0.1
110																					1	0.1
111	57	26	12	1	41	14	16	0	5	10	24	11	7	8	1	11	10	108	9	61	1505	100.0
112	3.8	1.7	0.8	0.1	2.7	0.9	1.1	0.0	0.3	0.7	1.6	0.7	0.5	0.5	0.1	0.7	0.7	7.2	0.6	4.1	100.0	

**Cuadro 5 – Resumen expedientes de investigación iniciados
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
1										1										6	0.4
2	5	3		3		4				5	1		1		1		23		3	169	11.2
3				1				1									1	6		39	2.6
4	6	4		8	2	10		3	3	1	6	2	3	1	4	1	12	2	23	310	20.6
5	5	2		15	2				2	3	2		3		2	1	9		14	434	28.8
6	2			11	7			1	3	5	1	3			3	2	8		7	179	11.9
7	1			1					2	1	1						14		1	53	3.5
8	5	3		2	2							2				3	35		8	164	10.9
9										1							1		1	6	0.4
10	1																		2	43	2.9
11						1														2	0.1
12	1		1		1	1				7			1		1	3	5	1	2	100	6.6
13	26	12	1	41	14	16	0	5	10	24	11	7	8	1	11	10	108	9	61	1,505	100.0
14	1.7	0.8	0.1	2.7	0.9	1.1	0.0	0.3	0.7	1.6	0.7	0.5	0.5	0.1	0.7	0.7	7.2	0.6	4.1	100.0	

Cuadro 6 (parte 1 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
1	NIÑEZ Y LA JUVENTUD														
2	Maltrato infantil y juvenil	4	3				4	54	3	7				3	9
3	Violencia intrafamiliar														
4	Falta de acceso a la salud							10		5					
5	Falta de reconocimiento familiar y de alimentos (alimentación, vestuario, vivienda)								1						
6	La separación de los niños, niñas y jóvenes de sus familias, salvo circunstancias especiales definidas en la Ley							5							
7	La adopción ilegal							1							
8	La adopción por motivos económicos														
9	Políticas o decisiones que afecten el desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social del niño, niña y joven			1				7				1		1	1
10	Abandono														
11	Abuso físico o mental							1		1					
12	Abuso sexual							2						1	
13	Descuidos o tratos negligentes	2				1		2		1					1
14	Prostitución infantil							1							
15	Prostitución juvenil														
16	Acoso sexual	1						1							1
17	Falta de políticas sociales que permitan el nacimiento y el desarrollo sano y armonioso													1	
18	Falta de atención médica adecuada							6							
19	Trabajo infantil peligroso														
20	Falta de acceso a la educación							9							
21	Muerte							1							
22	ADULTO MAYOR														
23	Discriminación cultural, social, económica, política		1				2	7							2
24	Violencia física o psicológica							3		1					
25	Exclusión							4							
26	Maltrato							11		1					
27	Falta de acceso a servicios de salud							25							
28	Falta de acceso a la seguridad social							120	1						
29	Falta de acceso a la justicia							2							
30	Derecho a la libre locomoción							1							
31	DISCAPACITADOS Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES														
32	Discriminación cultural, social, económica, política	1						3			1				
33	Violencia física o psicológica							2							
34	Maltrato							9							
35	Falta de acceso a servicios de salud							7							
36	Falta de acceso a servicios educativos							1							
37	Falta de acceso a la seguridad social							21							

Cuadro 6 (parte 1 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Jutiapa	Peñén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
1																						
2	2			2							15			1		1		2			110	17.2
3												1									1	0.2
4																					15	2.3
5																					1	0.2
6											1										6	0.9
7																					1	0.2
8												1									1	0.2
9		1														2				2	16	2.5
10												1									1	0.2
11	2	1			1											1					7	1.1
12	1										1					1					6	0.9
13											3	1								2	13	2.0
14																					1	0.2
15				1																	1	0.2
16											1						2				6	0.9
17																					1	0.2
18																					6	0.9
19											1										1	0.2
20																					9	1.4
21				1																	2	0.3
22																						
23																	3				15	2.3
24																					4	0.6
25																					4	0.6
26																					12	1.9
27	1																				26	4.1
28														2							123	19.2
29																					2	0.3
30																					1	0.2
31																						
32						1															6	0.9
33	1																				3	0.5
34																					9	1.4
35																					7	1.1
36																					1	0.2
37																					21	3.3

Cuadro 6 (parte 2 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
38	MUJER														
39	Discriminación cultural, social, económica, política		1					4	1	4					3
40	Violencia física o psicológica					1		3	3	6					
41	Maltrato		1					3		3					
42	Abusos deshonestos														
43	Violencia sexual	1							1						
44	Acoso sexual	1	2					9			1				
45	Acoso laboral hacia mujeres embarazadas							6							
46	Falta de acceso a la salud							2							
47	Falta de acceso a la seguridad social		1					1							
48	POBLACION DESARRAIGADA Y MIGRANTE														
49	Persecución														
50	Impedir el retorno														
51	Repatriación involuntaria							1							
52	Expulsión							2							
53	Violencia física o psicológica							2							
54	Falta de acceso a los servicios de salud							1							
55	Abuso de autoridad							3							
56	Falta de acceso a la justicia							2							
57	DETENIDO O RECLUSO														
58	Alimentación inadecuada e insuficiente o en mal estado														1
59	Acciones que atentan contra su dignidad	1	2				2	4		3					3
60	Acciones que atentan contra su integridad						4	5			1			1	
61	Ambiente y prácticas insalubres	1													
62	Maltrato					2	1	3		1					
63	Traslados inadecuados o peligrosos					1		4		1					
64	No conceder la visita conyugal en los centros femeninos						1								
65	No permitir el acceso a beneficios penitenciarios						1	1							
66	Acciones que atentan contra la salud							7							
67	No permitir visita						1			2				1	
68	Falta de garantías procesales														
69	Falta de acceso a la justicia							2							
70	PUEBLOS INDÍGENAS														
71	Discriminación racial							3							
72	No permitir o facilitar el aprendizaje y el ejercicio de la identidad cultural (formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización, traje indígena, idiomas o variantes dialectales, instituciones propias)	1													
73	Falta de seguridad							1							
74	Falta de oportunidades de decidir su propio modelo de desarrollo													1	
75	Inexistencia de políticas y acciones afirmativas									1					

Cuadro 6 (parte 2 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas Altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
38																						
39														1							14	2.2
40	2										1			2							18	2.8
41											24										31	4.8
42														1							1	0.2
43																					2	0.3
44																					13	2.0
45																					6	0.9
46																					2	0.3
47																					2	0.3
48																						
49		1																			1	0.2
50		1																			1	0.2
51																					1	0.2
52																					2	0.3
53																					2	0.3
54																					1	0.2
55																					3	0.5
56																					2	0.3
57																						
58	1																			1	3	0.5
59																		1			16	2.5
60																				1	12	1.9
61																					1	0.2
62																		1		2	10	1.6
63																				2	8	1.2
64																					1	0.2
65																					2	0.3
66																		2			9	1.4
67																					4	0.6
68					1																1	0.2
69																					2	0.3
70																						
71		2			1											1					7	1.1
72					1																2	0.3
73																					1	0.2
74																					1	0.2
75																					1	0.2

Cuadro 6 (parte 3 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Violaciones denunciadas	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa
76	Ejecución de proyectos sin consulta y sin evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente)							1		3					
77	No tomar en consideración el derecho indígena							1			1				
78	Falta de acceso a la justicia							1							
79	Otros														
80	POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO														
81	Trato desigual y excluyente hacia familiares de personas desaparecidas							1							
82	Falte de resarcimiento							1							
83	Falta de atención a demandas de las comunidades afectadas por el Conflicto Armado Interno							4							
84	POBLACION CON VIH-SIDA														
85	Falta de acceso a la salud							3							
86	Denegación del derecho al trabajo por ser portador de VIH-SIDA							1							
87	POBLACION CON ORIENTACION SEXUAL DIFERENTE														
88	Discriminación y exclusión							1							
89	TOTAL MENSUAL	13	11	1	0	5	16	399	10	40	4	1	0	9	21
90	%	2.0	1.7	0.2	0.0	0.8	2.5	62.2	1.6	6.2	0.6	0.2	0.0	1.4	3.3

Cuadro 7
DERECHOS ESPECÍFICOS – Resumen expedientes de investigación iniciados

Derechos específicos	Alta Verapaz	Baja Verapaz	Chimaltenango	Chiquimula	El Progreso	Escuintla	Guatemala	Guatemala, Móvil I	Guatemala, Móvil II	Huehuetenango	Huehuetenango móvil	Nentón, Huehuetenango	Izabal	Jalapa	Jutiapa
Niñez y la juventud	7	3	1		1	4	100	4	14		1		6	12	5
Adulto mayor		1				2	173	1	2					2	1
Discapacitados y personas con retos especiales	1						43			1					1
Mujer	2	5			1		28	5	13	1				3	2
Población desarraigada y migrante							11								
Detenido o recluso	2	2			3	10	26		7	1			2	4	1
Pueblos indígenas	1						7		4	1			1		
Población víctima del conflicto armado interno							6								
Población con VIH-SIDA							4								
Población con orientación sexual diferente							1								
TOTAL	13	11	1	0	5	16	399	10	40	4	1	0	9	21	10
%	2.0	1.7	0.2	0.0	0.8	2.5	62.2	1.6	6.2	0.6	0.2	0.0	1.4	3.3	1.6

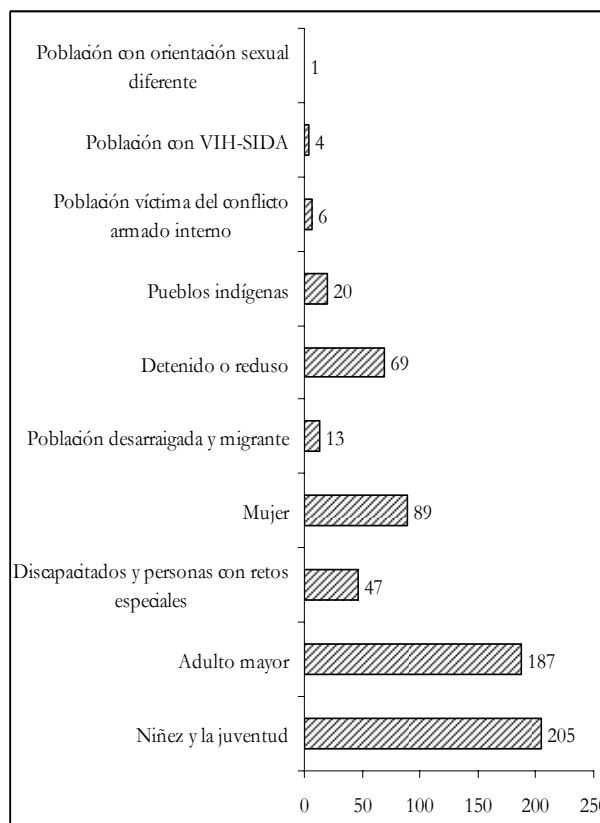
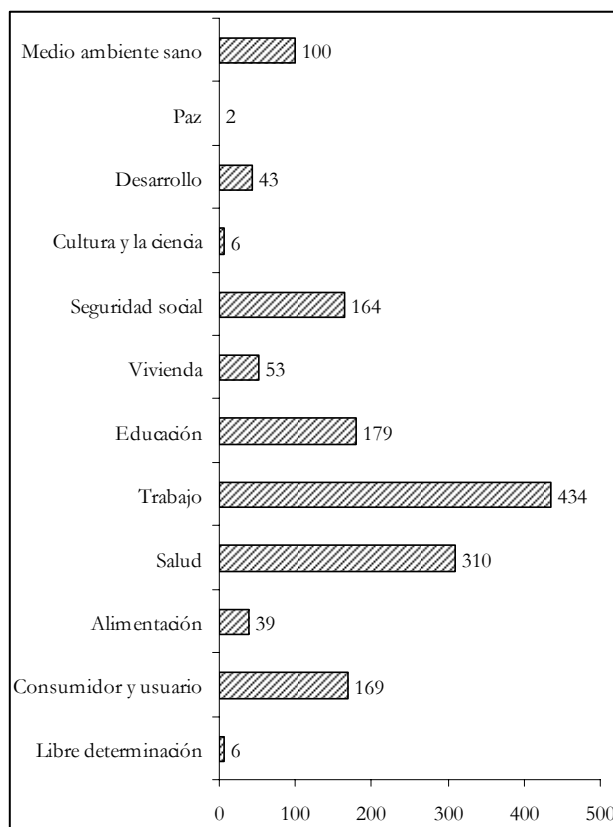
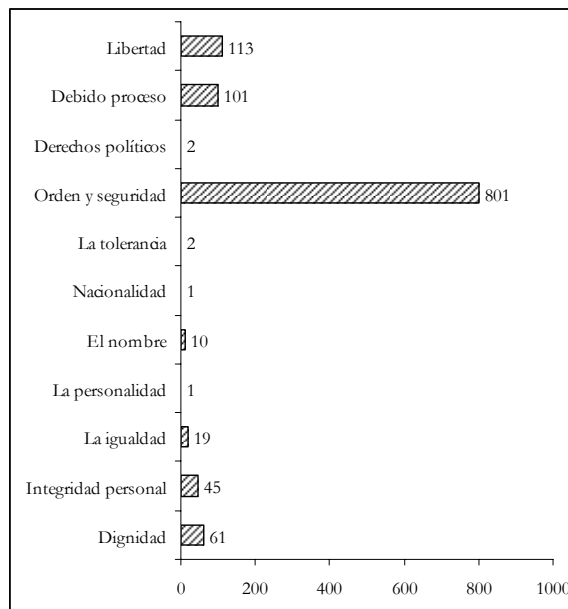
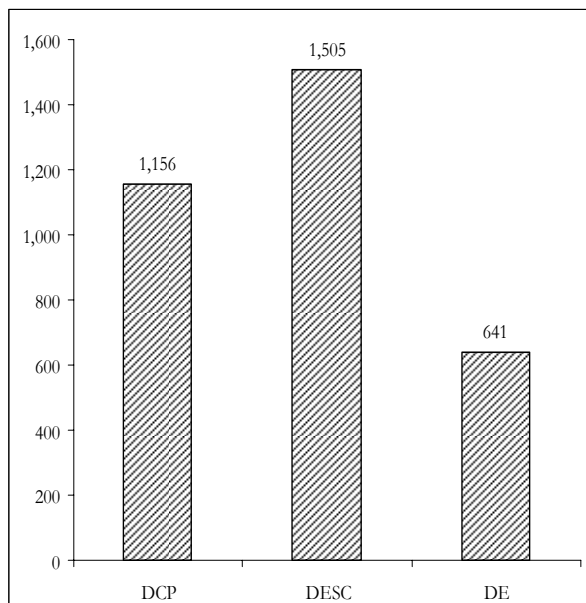
Cuadro 6 (parte 3 de 3)
DERECHOS ESPECÍFICOS – Expedientes de investigación iniciados

	Jutiapa	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
76																					4	0.6
77																					2	0.3
78																					1	0.2
79									1												1	0.2
80																						
81																					1	0.2
82																					1	0.2
83																					4	0.6
84																						
85																					3	0.5
86																					1	0.2
87																						
88																					1	0.2
89	10	6	0	4	4	1	0	0	1	0	47	4	0	7	0	6	0	11	0	10	641	100.0
90	1.6	0.9	0.0	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	7.3	0.6	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	1.6	100.0	

Cuadro 7
DERECHOS ESPECÍFICOS – Resumen expedientes de investigación iniciados

	Petén	Poptún, Petén	Naranjo, Petén	Quetzaltenango	Coatepeque, Quetzaltenango	Quiché	Ixcán, Quiché	Nebaj, Quiché	Retalhuleu	Sacatepéquez	Milpas altas, Sacatepéquez	San Marcos	Santa Rosa	Chiquimulilla	Sololá	Santiago Atitlán, Sololá	Suchitepéquez	Totonicapán	Zacapa	TOTAL	%
2		4	1							22	4		1		5		4		4	205	32.0
													2				3			187	29.2
				1																47	7.3
									25				4							89	13.9
2																				13	2.0
			1														4		6	69	10.8
2			2					1							1					20	3.1
																				6	0.9
																				4	0.6
																				1	0.2
6	0	4	4	1	0	0	1	0	47	4	0	7	0	6	0	11	0	10		641	100.0
0.9	0.0	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	7.3	0.6	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	1.6		100.0	

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS Enero a noviembre 2009



Cuadro 8
INICIO DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN

AUXILIATURAS	INICIADOS DE OFICIO (EIO)	INICIADOS POR DENUNCIA (ORD)	TOTAL
Alta Verapaz	13	89	102
Baja Verapaz	3	47	50
Chimaltenango	9	8	17
Chiquimula	6	30	36
El Progreso	8	24	32
Escuintla	19	91	110
Guatemala	37	194	231
Guate - móvil I	10	36	46
Guate - móvil II	11	127	138
Huehuetenango	18	53	71
Huehue - móvil	2	4	6
Huehue - Nentón	1	6	7
Izabal	17	39	56
Jalapa	42	142	184
Jutiapa	19	144	163
Petén	5	68	73
Petén - Poptún	7	29	36
Petén - El Naranjo	11	4	15
Quetzaltenango	18	73	91
Coatepeque	9	29	38
Quiché	14	5	19
Quiché - Ixcán		2	2
Quiché - Nebaj	1	7	8
Retalhuleu	16	35	51
Sacatepéquez	8	77	85
Santa Lucía Milpas Altas	10	6	16
San Marcos	3	10	13
Santa Rosa	24	12	36
SR - Chiquimulilla	1	2	3
Sololá	7	61	68
Santiago Atitlán	6	22	28
Suchitepéquez	35	221	256
Totonicapán	9	5	14
Zacapa	36	74	110
TOTAL	435	1,776	2,211

Cuadro 9
ORGANISMOS Y ENTIDADES DENUNCIADOS

AUXILIATURAS	Organismo Ejecutivo	Organismo Judicial	Organismo Legislativo	Entidades autónomas o descentralizadas	Empresas privadas o personas particulares	TOTAL	%
Alta Verapaz	66	1	1	26		94	2.22
Baja Verapaz	43	2		13		58	1.37
Chimaltenango	7			10		17	0.40
Chiquimula	28	1		16	2	47	1.11
El Progreso	23	3		17		43	1.02
Escuintla	63	2		40	5	110	2.60
Guatemala	51	9		26	71	157	3.71
Guate - móvil 1	100	45		96	838	1079	25.47
Guate - móvil 2	56			76	6	138	3.26
Huehuetenango	81	75		62	8	226	5.34
Huehue - móvil sur	3			8	22	33	0.78
Huehue - Nentón	2	6		26		34	0.80
Izabal	29	1		22	4	56	1.32
Jalapa	125	10		45	2	182	4.30
Jutiapa	68	4		38	4	114	2.69
Petén	87	7		54	299	447	10.55
Petén - Poptún	36			35	1	72	1.70
El Naranjo		5		2		7	0.17
Quetzaltenango	39	13	2	22	2	78	1.84
Coatepeque	23	1		9	1	34	0.80
Quiché	7			12		19	0.45
Quiché - Ixcán	6	25		37	2	70	1.65
Quiché - Nebaj	8			8		16	0.38
Retalhuleu	31	2		112	196	341	8.05
Sacatepéquez	16	32		22	9	79	1.86
Santa Lucía Milpas Altas						0	0.00
San Marcos	8			5		13	0.31
Santa Rosa	13	1		20	2	36	0.85
Chiquimulilla	12	1		24	92	129	3.05
Sololá	32	4		27	5	68	1.61
Santiago Atitlán	10	2		12		24	0.57
Suchitepéquez	121	19		192	12	344	8.12
Totonicapán	12	1			1	14	0.33
Zacapa	18	3		34	2	57	1.35
TOTAL	1,224	275	3	1,148	1,586	4,236	100.00
%	28.90	6.49	0.07	27.10	37.44	100.00	

Denuncias atendidas – diciembre 2009

AUXILIATURAS	EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN			ACCIONES ESPECÍFICAS										TOT
	Civiles y Políticos	DESC	Específicos	Orientación	Prevención	Observación	Mediación	Conciliación	Operativo	Acompañamiento	Atención a la víctima	Verificación	Intervención inmediata	
Alta Verapaz	4	1	1	3	13		1							23
Baja Verapaz				3	17		3	2		1			3	29
Chimaltenango	2			8	9		4						1	24
Chiquimula	1			2	7									10
El Progreso	2	1		7	7		2	3		1	6		1	30
Escuintla	2	2		1	28		1							34
Guatemala	20	37	33	23	203		70							386
Guate - móvil 1					33		1				35		1	70
Guate - móvil 2	1			9	13					4				27
Huehuetenango	4	6	2	4	4								4	24
Huehue - móvil	4	6	2		4								4	20
Huehue - Nentón				1			1							2
Izabal	3		1	12	20		1							37
Jalapa	4	1		9	15	1	2		1				2	35
Jutiapa	8	2		2	2		1							15
Petén	3				8	1	2		2	34			4	54
Petén - Poptún				3		2	1						1	7
Petén - El Naranjo					2		3							5
Quetzaltenango	1		1	2	11		1		1				10	27
Quetz - Coatepeque				6	2	5	1							14
Quiché				16	8		1						25	50
Quiché - Ixcán					4		6						1	11
Quiché - Nebaj				8	2		1							11
Retalhuleu	1				9								8	18
Sacatepéquez		3		5		1			2	1		1	3	16
San Marcos													4	4
Santa Rosa				12	2								1	15
S.R. - Chiquimulilla				7	1	1							2	11
Sololá	4	1	1	16	7	3	2		2	7	3		2	48
Sololá – San. Atitlán	1			5	1		1			7	14			29
Suchitepéquez	8	6		5	4	7	2	6		6	12		64	120
Totonicapán				1	9	2	27		9	36	39			123
Zacapa	1	1		1	19								1	23
TOTAL	74	67	41	171	464	23	135	11	17	97	109	1	142	1,352

Denuncias atendidas – enero a diciembre de 2009

TIPO DE EXPEDIENTE		Enero a noviembre	Diciembre	Subtotales	%	Total	%
Expedientes de investigación	Derechos individuales	1,156	74	1,230	4.76	3,484	13.48
	Derechos sociales, económicos y culturales	1,505	67	1,572	6.08		
	Derechos específicos	641	41	682	2.64		
	Subtotales	3,302	182				
Acciones específicas	Orientación	4,593	171	4,764	18.43	22,369	86.52
	Preensión	5,535	464	5,999	23.20		
	Observación	639	23	662	2.56		
	Mediación	1,809	135	1,944	7.52		
	Conciliación	219	11	230	0.89		
	Operativo	394	17	411	1.59		
	Acompañamiento	1,727	97	1,824	7.06		
	Atención a la víctima	3,022	109	3,131	12.11		
	Intervención inmediata	3,150	142	3,292	12.73		
	Seguimiento	10		10	0.04		
	Verificación	11	1	12	0.05		
	Exhibición personal	90		90	0.35		
	Sub-totales	21,199	1170				
GRAN TOTAL						25,853	100.00
Llamadas al 1555		Efectivas		15,257			
		Se cortó la comunicación		35,389			
		Colgadas o "por molestar"		190,664			
		TOTAL		241,310			

Atención en defensorías Enero a diciembre de 2009

Defensoría	Atención de casos
Mujer	270
Niñez y Adolescencia	1,488
Población Desarraigada y Migrante	41
Discapacidad	30
Adulto Mayor	176
Medio Ambiente y del Consumidor y Usuario	15
Pueblos indígenas	79
TOTAL	2,099